CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1996

DR. ARTURO HOYOS
PRESIDENTE

SALA PRIMERA (CIVIL)

LICDO. RAFAEL A. GONZÁLEZ
PRESIDENTE

LICDO. ROGELIO FÁBREGA Z. LICDO. ELIGIO SALAS

LICDA. SONIA F. DE CASTROVERDE
SECRETARIA

SALA SEGUNDA (PENAL)

LICDO. JOSÉ MANUEL FAÚNDES
PRESIDENTE

DRA. AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ DR. FABIÁN ECHEVERS

LICDO. MARIANO HERRERA
SECRETARIO

SALA TERCERA (CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Y LABORAL)

DR. ARTURO HOYOS
PRESIDENTE

LICDA. MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA DR. EDGARDO MOLINO MOLA

LICDA. JANINA SMALL
SECRETARIA

SALA CUARTA (NEGOCIOS GENERALES)

DR. ARTURO HOYOS
PRESIDENTE

LICDO. JOSÉ MANUEL FAÚNDES LICDO. RAFAEL A. GONZÁLEZ

DR. CARLOS H. CUESTAS G.
SECRETARIO GENERAL

LA PRETENSIÓN RESARCITORIA

Por: Aura E. Guerra de Villalaz

INTRODUCCIÓN

Al abordar el tema de la pretensión resarcitoria, ligado a la responsabilidad civil derivada del delito, lo hacemos con el propósito de retomar en alguna medida, el derecho de las víctimas a recibir la reparación del daño causado a sus bienes jurídicos como consecuencia directa o indirecta del delito cometido en su perjuicio.

El concepto de víctima no sólo se limita al sujeto pasivo del hecho delictivo, sino que es mucho más abarcador, ya que en la reunión interregional del VII Congreso de Naciones Unidas se adoptó como definición la siguiente "víctima es una persona que ha sufrido una lesión física o mental, daño o pérdida material, o cualquier otra desventaja social como resultado de una conducta o un hecho delictivo, sea en violación de las normas penales nacionales, o un crimen bajo las leyes internacionales en infracción de reconocidos derechos humanos sobre la protección de la vida, la libertad y la seguridad personal o en cualquiera de los otros supuestos que signifique abuso de poder, sean políticos, económicos o sociales, ya se trate de servidores públicos, agentes o empleados del Estado o de entidades corporativas que están fuera del alcance de la ley.

El término víctima incluye a cualquier persona que ha sido victimizada, con independencia de que esa persona lo haya sido en forma individual o como un miembro de una colectividad"[1]

Concepto de pretensión. Según Carnelutti "... la pretensión es un acto, no un poder, algo que alguien hace, no que alguien tiene" [2]. Por ser la pretensión un acto, deviene en una manifestación de voluntad.

Devis Echandía sostiene que la pretensión es el fin concreto que el demandante persigue, es decir, las declaraciones que pretende se hagan en la sentencia; esa pretensión es el petitum de la demanda, lo que se pide en ella sea reconocido o declarado en la sentencia a favor del demandante"[3]. Concretamente define la pretensión como "... el efecto jurídico concreto que el demandante (en los procesos civiles, laborales y contencioso administrativos) o el querellante o denunciante y el Estado a través del Juez (en los procesos penales) persiguen con el proceso, efecto al cual se quiere vincular al demandado (si lo hay) o al imputado".

Clariá Olmedo dice que "... la pretensión consiste en un estado o posición que se muestra en la exigencia de subordinación jurídico-material de otro individuo, singular o colectivo, al interés que se aspira hacer prevalecer; esto aún cuando el fundamento afirmado puede ser aceptado o rechazado en la decisión jurisdiccional sobre el fondo"[4].

La pretensión puede ser enfocada en 3 sentidos:

1. En un sentido general: como lo que se pretende, lo que se pide, reclama o quiere.

2. En su sentido material: cuando en ejercicio de un derecho subjetivo se reclama directamente de otro el cumplimiento de una prestación.

---

[1] Victimology and International Journal. 1979-1980.

[2] Carnelutti, Francisco. Instituciones del Proceso Civil. Barcelona, Edit. Bosch, 1952, p.28

[3] Devis Echandía, Hernando. Compendio de Derecho Procesal Civil, Bogotá 1978, p. 189

[4] Olmedo Clariá, El Proceso Penal, 2ª ed. Depalma 1994, p. 7 y 297

3. En su sentido procesal: cuando se ejerce a través de una demanda judicial.

Couture dice que "... la pretensión es la afirmación de un sujeto de derecho de merecer la tutela jurídica y, por supuesto, la aspiración concreta de que esta se haga efectiva. En otras palabras: la autoatribución de un derecho por parte de un sujeto que invocándolo pide que se haga efectiva a su respecto la tutela jurídica"[5].

PRETENSIÓN PUNITIVA Y PRETENSIÓN RESARCITORIA

En el proceso penal se puede distinguir la pretensión punitiva que ejerce el Estado a través de la acción penal y la resarcitoria que generalmente la presenta la víctima, el sujeto pasivo o el ofendido por el delito, bien a través de la denuncia, querella o acusación, o bien a través de una acción ante la jurisdicción civil con fundamento a la responsabilidad civil derivada del delito.

El delito como acción típica, antijurídica y culpable no sólo da origen a la aplicación de la pena, sino que trae consigo otras consecuencias legales dentro del orden normativo que pueden ser políticas, administrativas, laborales, civiles, etc. Entre las consecuencias más importantes, además de las penales propiamente tales, se encuentran las civiles. Así lo preceptúa el artículo 119 del Código Penal patrio cuando dice "De todo delito emana responsabilidad civil para las personas que resulten culpables del mismo" y el 1986 del Código Judicial que establece "... de todo delito nace también acción civil para la restitución de la cosa y la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por el hecho punible, contra los autores o partícipes del mismo y en su caso contra el civilmente responsable"...

En otras legislaciones han incluido como parte de la responsabilidad, las costas procesales, a pesar de tener características y naturaleza distintas.

Orígenes: Según lo exponen Mazeud y Tunc en su magistral obra "Tratado Teórico y Práctico de la responsabilidad Civil, Delictual y Contractual" desde la época más remota, el Derecho Romano distinguió dos categorías de daños: los que surgen de un delito público y los que nacen de un delito privado, pero al igual que el antiguo Derecho Francés mantuvo el criterio de que tanto la responsabilidad penal como la civil eran una sola cosa[6].

Posteriormente se consideró que en materia de delitos y cuasidelitos era necesario la existencia de una culpa para exigir la responsabilidad civil.

Elementos: Los elementos de la responsabilidad civil derivada del delito se pueden enumerar así:

1. La existencia de una conducta tipificada en la ley penal: En nuestra legislación todas las conductas que el legislador ha erigido en delitos, si se comprueba que tales comportamientos se subsumen en un tipo penal, generan responsabilidad penal y responsabilidad civil.

No hay excepciones en estos enunciados, puesto que la regla general indica que de todo delito emana responsabilidad civil para las personas que resulten culpables del mismo.

2. La existencia de culpa en su sentido genérico. O sea, que la persona resulte culpable bien a título de dolo como de culpa, que haya obrado queriendo la realización del hecho típicamente descrito o que haya realizado el hecho legalmente descrito por razón de inobservancia del deber de cuidado que le incumbe según las circunstancias y sus condiciones personales.

3. El daño como parte integrante de la responsabilidad delictual. Los

---

[5] Couture, Eduardo. Fundamentos del Derecho Procesal Civil 3ª ed. Depalma, 1958 p. 53

[6] Mazeud y Tunc. Tratado Teórico y Práctico de la Responsabilidad Civil Delictual y Contractual". Tomo I

autores que tratan el tema distinguen aquellos delitos cuya causación genera un daño o perjuicio a la víctima, de aquellos que por su propia naturaleza no los causan, tales como las tentativas de delitos y otras como la sedición y la perturbación del ejercicio de un culto, etc.

Maggiore, señala que el daño puede ser patrimonial o no y lo define como "... una disminución efectiva del patrimonio (daño emergente) o un aumento no realizado (lucro cesante). Comprende todo detrimento que sufra el patrimonio como consecuencia de un acto ilícito, aunque no esté dirigido a disminuir el patrimonio"[7]. Respecto al daño no patrimonial se caracteriza porque disminuye la personalidad psíquica y ética, como sucede con el dolor, el pesar, la angustia, el temor, la frustración.

EXTENSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL

Generalmente se han distinguido 3 formas de responsabilidad civil que corresponde a quien resulta culpable del hecho punible, a saber:

1. La restitución de la cosa
2. La reparación del daño causado
3. La indemnización del daño material y moral, denominado también indemnización de perjuicios.

Nuestra legislación invierte el orden de la extensión de la responsabilidad civil y en el artículo 120 del Código Penal el numeral 1° señala que en la misma sentencia que decide el juicio penal el juez puede ordenar la indemnización del daño material y moral causado a la víctima, su familia o un tercero y en el 2° alude a la restitución de la cosa obtenida por razón del delito o en su defecto el respectivo valor.

Se considera que la restitución sólo es posible en ciertos delitos, especialmente los que atentan contra el patrimonio. La restitución debe hacerse con la devolución o entrega del objeto material mismo, en cuanto sea posible, incluyendo además el abono por los deterioros o menoscabos causados, según lo estime el Tribunal.

La reparación se aplica a los casos en que el objeto material se ha destruido, consumido, deteriorado y se refiere al valor de la cosa y a la entidad del daño causado. Algunos delitos, por su propia naturaleza, requieren una estimación pericial.

La indemnización del daño material y moral comprende tanto los directamente causados al agraviado por razón del delito cometido y puede extenderse a la familia o un tercero. Abarca el daño emergente, el lucro cesante y la compensación de los perjuicios morales.

LAS PERSONAS CIVILMENTE RESPONSABLES

En primer término, toda persona responsable penalmente de un delito lo es también civilmente, por ello no sólo debe recibir la sanción correspondiente, sino que está obligado a reparar los daños causados por la infracción de la ley.

Si se tratare de coautores, los tribunales deben fijar la cuota que cada uno debe asumir. Si estamos ante una participación criminal (cómplices primarios y secundarios e instigadores) el Código Penal en su artículo 125 los hace solidariamente responsables.

Cabe aclarar que la responsabilidad civil solidaria también alcanza a:

1. Personas naturales o jurídicas, dueñas de empresas de transporte por delitos cometidos por sus trabajadores en el desempeño de sus cargos.
2. Las personas jurídicas cuyos gerentes, administradores o representantes

---

[7] Maggiore, Giuseppe. Derecho Penal, Edit. Temis, 1956

legales, resulten responsables de hechos punibles.
3. Las personas naturales o jurídicas dueñas de establecimiento, de cualquier naturaleza, en el que se cometiere un hecho punible por trabajadores a su servicio.
4. Las personas que a título lucrativo hayan participado de los efectos del delito, en el monto en que se hayan beneficiado.
5. Los que señalen leyes especiales (artículo 125 del Código Penal).

A las dos clases de responsabilidad civil mencionadas (principal y solidaria), se añade la responsabilidad subsidiaria o de tercero obligado civilmente. En esta categoría cabe mencionar los casos registrados por los artículos 121 y 126 del Código punitivo y que se refieren a los padres, tutores, curadores y guardadores en relación con los actos de los incapaces y al Estado, instituciones públicas autónomas, semiautónomas o descentralizadas y municipios, por los hechos delictivos cometidos por sus servidores con motivo del ejercicio de sus cargos.

La ley hace una salvedad en cuanto a los incapaces, al exigir la responsabilidad civil subsidiaria solamente en aquellos casos en que los tutores o guardadores hubieren podido evitar el daño o cuando se compruebe que han descuidado los deberes propios de sus cargos.

El Estado no sólo responde subsidiariamente conforme lo prevé el artículo 126 del Código Penal, al igual que las instituciones autónomas, semiautónomas o los municipios por el monto de los daños y perjuicios causados por el personal a su servicio durante el tiempo de ejercicio de sus funciones, sino también en los casos en que la persona privada de libertad por una medida cautelar personal por más de un año, resulte favorecida en la fase intermedia del proceso con un sobreseimiento definitivo.

En otros países, como sucede en Finlandia y Dinamarca, el Estado ha creado un fondo especial para cubrir su responsabilidad subsidiaria y aquellos casos de abuso de poder político.

EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD CIVIL DELICTUAL

Basados en el principio que la responsabilidad civil derivada del delito emerge cuando se acredite la existencia de un hecho punible y la consiguiente responsabilidad penal de una persona determinada; cabe deducir que aquellos supuestos donde no existe responsabilidad criminal por estar amparado por una excluyente de antijuridicidad o de inculpabilidad, tampoco surge responsabilidad civil delictual. Sin embargo, en la doctrina y en la legislación las causales de exención de responsabilidad no siempre conllevan el mismo efecto en lo civil.

Así, en nuestra legislación los hechos amparados por una causa de justificación se les exime a sus autores de responsabilidad civil, salvo en el caso de estado de necesidad justificante (artículo 20 del Código Penal) cuando afecta bienes patrimoniales.

En los casos de obediencia debida el inferior se beneficia con una excluyente de culpabilidad, pero el Superior que impartió la orden de la ejecución del ilícito debe responder civilmente con sus bienes, tal cual lo dispone el artículo 123 del Código Penal.

A su vez, hay que considerar el texto del artículo 101 de la excerta citada, que de manera diáfana prevé que la extinción de la acción penal y de la pena no extingue la responsabilidad civil delictual. Esto se reitera en el artículo 130 cuando establece que las causas de extinción de la responsabilidad civil sólo se rigen por la normativa del Código Civil, razón por la cual las causas de extinción de la acción y la pena en el área penal no se extienden en forma alguna a las obligaciones civiles derivadas del delito.

REGLAS DE PROCEDIMIENTO

El Capítulo II° del Título I del Libro III del Código Judicial contiene las

disposiciones generales sobre la acción civil.

Cabe señalar que nuestra legislación en esta materia sigue un sistema unificado respecto al reclamo directo al ofensor y un sistema separado o bilateral cuando se trata del civilmente responsable.

La pretensión resarcitoria para reclamar la indemnización del daño material o moral, conforme lo establece el artículo 1989 del Código de Procedimiento debe presentarse a través de una incidencia al Juez penal de la causa en la fase plenaria; la cual debe señalar con precisión la cuantía y acompañar a la demanda todas las pruebas que acrediten lo pedido.

Cuando se trata de la pretensión civil de resarcimiento, ésta debe promoverse antes de la dictación de la sentencia penal correspondiente.

Tal como se anotó antes, el hecho de que el procesado sea absuelto de los cargos formulados en el auto encausatorio, no libera al Tribunal de la causa de pronunciarse sobre la pretensión resarcitoria en la sentencia.

La normativa vigente distingue las distintas posibilidades que pueden generarse con relación a las cosas retenidas durante el transcurso del proceso. 1- Si las mismas no fueren objeto de comiso, restitución o embargo deben ser devueltas a las personas a quienes se las ocuparon. 2- En el supuesto de que se suscite controversia por la propiedad de las cosas, el reclamo debe entablarse haciendo uso de la vía civil. 3- En caso de que la controversia sólo se refiera a la restitución, el juzgador dispondrá que la misma se dilucide por incidente.

Las cosas que han sido retenidas dada su vinculación con el hecho punible o en calidad de evidencias, se les aplicará lo dispuesto en el artículo 55 del Código Penal respecto al comiso. Si transcurre más de un año después de cerrado el proceso, la ley prevé que las cosas que no han sido reclamadas se deben poner a disposición del Ministerio de Hacienda y Tesoro. Si las mismas son de lícito comercio y tienen un valor económico, serán vendidas, mientras que los que no representen un valor económico o sean de carácter ilícito, serán inutilizadas o destruidas.

El debido cumplimiento de la responsabilidad civil delictual en materia penal tiene trascendencia a otras instituciones, ya que es una condición indispensable para que se confiera la suspensión condicional de la pena (artículo 78 del Código Penal); igualmente es pre-requisito en la suspensión condicional del proceso (Ley 1 de 1995) y en la terminación extraordinaria del proceso (artículo 1984 del Código Judicial).

Si atendemos el texto del artículo 120 del Código Penal, corresponde al Juez penal dictar la sentencia a que se hace acreedor el autor o partícipes del delito, y en la misma ordenar la indemnización del daño material o moral, al igual que la restitución de la cosa, si procediere.

En algunos casos el Juez Penal condena civilmente en abstracto, lo que genera la necesidad de acudir a la vía civil para establecer el monto de la reparación del daño o la indemnización.

Los países donde el sistema penitenciario está mejor reglamentado y estructurado que el nuestro, el reo dentro del tratamiento laboral recibe un pago por su trabajo y del monto total se le asigna un porcentaje para cubrir el daño civil causado por el delito. En México, por ejemplo, desde la reforma penitenciaria de fines de los sesenta, en todos los centros penitenciarios los reos realizan trabajo remunerado del cual se le descuenta para un fondo de ahorros, para su familia y para abonar al resarcimiento del daño causado por el hecho delictivo cometido.

EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN CIVIL DERIVADA DEL DELITO

Como principio general hay que tener en cuenta lo previsto en el segundo párrafo del artículo 130 del Código Penal, cuando expresa: "Las causas de

extinción de la acción penal y de la pena no se extienden a las obligaciones civiles derivadas del delito", ya que en esta materia hay que remitirse al Código Civil. Así, en cuanto a los delitos contra el honor y los delitos culposos, el artículo 1706 del Código Civil establece el lapso de un año para la prescripción de acción para exigir la responsabilidad civil, contado a partir de la fecha de ejecutoria de la sentencia penal.

Esto nos indica que la extinción de la responsabilidad civil se sujeta a las disposiciones especiales del Código Civil referentes a las obligaciones civiles (pago, transacción, confusión, novación, prescripción), que son distintas a las que se registran en materia penal.

Es importante señalar que el artículo 1996 del Código Judicial establece seis situaciones en las que no habrá lugar a la acción civil para la indemnización del daño causado, las cuales son:

> **"1996**. No habrá lugar a la acción civil para la indemnización del daño causado cuando, de la resolución definitiva dictada en el proceso penal, resulte:
>
> 1. Que el imputado actuó en el ejercicio de legítima defensa o en estado de necesidad, conforme a las prescripciones del Código Penal que define los casos de eximencia de responsabilidad;
>
> 2. Que el daño se causó con ocasión de un acto ejecutado sin dolo o imprudencia alguna, y, por lo tanto, por mero accidente o caso fortuito;
>
> 3. Que el imputado actuó en virtud de obediencia debida o en el ejercicio de su derecho, autoridad, oficio o cargo;
>
> 4. Que incurrió en la omisión constitutiva del delito, en virtud de hallarse impedido por causa legítima e insuperable;
>
> 5. Que no tuvo participación alguna en el delito motivador del juicio; y,
>
> 6. Que es falso el hecho atribuido".

Paralelo entre la responsabilidad penal y la civil

Penal	
1. Se aplica al condenado por el delito cometido.	9. Es intransmisible.
2. Afecta los bienes del procecesado (libertad, patrimonio).	10. La pena discrimina entre la pluralidad de agentes.
3. Medida de interés público.	11. La pena depende de la magnitud de la culpabilidad. Difiere en los delitos culposos.
4. Comportamiento pasivo del condenado.	
5. Tiene fines de enmienda y corrección al autor del delito.	
6. Es obligación del delincuente frente al Estado.	
7. Prevención especial (futura) para evitar la reincidencia.	
8. Carácter personalísimo.	

Civil

1. Se impone al condenado para resarcir víctima.

2. Afecta esencialmente al patrimonio del procesado o del que está obligado a responder.

3. Tutela del interés privado.

4. Impone una actividad al obligado.

5. Ayuda al perjudicado cubriendo parte del daño causado por el delito.

6. Reparación al ciudadano afectado por el delito.

7. Reparación del daño causado (pasado).

8. Puede recaer sobre terceros.

9. Es transmisible.

10. Es igual y solidaria para todos los que participaron en delito.

11. Es idéntica trátese de delitos dolosos o culposos.

En la actualidad, los países de América Latina que inician un proceso de reformas al Código Judicial, están incorporando en el procedimiento penal un mayor protagonismo de las víctimas, al considerar que por siglos ha resultado el sujeto procesal marginado ya que todos los esfuerzos se han encaminado al delincuente.

ÍNDICE

PLENO 1

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 2

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL LICENCIADO JOSÉ A. HENRÍQUEZ S., EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE JORGE LEONIDAS DELGADO Y ZOBEIDA YADIRA DE DELGADO, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 027-R. A. 95 DE 5 DE MAYO DE 1995, DICTADA POR LA GOBERNACIÓN DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, OCHO (8) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 2

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RAÚL A. CÁRDENAS V. EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE CIRO LUIS URRIOLA VELASCO CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DE 14 DE DICIEMBRE DE 1995 DICTADA POR LA FISCALÍA PRIMERA SUPERIOR DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, DIEZ (10) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 3

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR LA FIRMA DE ABOGADOS PEREIRA & PEREIRA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ROSA CHITRIT DE BERNAL, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DE 26 DE DICIEMBRE DE 1995, DICTADA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, BAJO LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA ELVIA M. BATISTA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO SALAS. PANAMÁ, DOCE (12) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 4

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ENOCH A. RODRÍGUEZ, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ENRIQUE BEER, EN SU CONDICIÓN DE PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE BEER LIMITED, S. A., CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 15 DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1995, PROFERIDA POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 11. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOCE (12) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 6

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICDO. MANUEL AROSEMENA SANTANA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE JUAN CHIRU, EN SU CONDICIÓN DE SECRETARIO GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ALIMENTACIÓN, BEBIDAS, HOTELES Y CONEXOS DE PANAMÁ, (SITABEHCOP), CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° D. M. 39/95 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 1995, PROFERIDA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, QUINCE (15) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 7

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR LA FIRMA DE ABOGADOS C. GONZÁLEZ Y ASOCIADOS EN REPRESENTACIÓN DE JUAN FRANCISCO KIENER EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA PRODUCTOS KIENER, S. A., Y EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1995 PROFERIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, QUINCE (15) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 10

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROMOVIDO POR EL LICENCIADO ALCIBIADES BALLESTEROS J., EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE NESTOR MIRONES CONTRA EL TRIBUNAL DE APELACIONES Y CONSULTAS DE LA PROVINCIA DE HERRERA. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, QUINCE (15) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 16

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL LICENCIADO HÉCTOR A. MORÁN R. EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE MARGARITO RODRÍGUEZ MENA, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL AUTO N° 649 DE 17 DE JULIO DE 1993, DICTADA POR EL JUZGADO PRIMERO DE CIRCUITO DE VERAGUAS, RAMO PENAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, QUINCE (15) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 17

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR LOS LCDOS. ANÍBAL E. WATSON R. Y LUIS ALBERTO ROMERO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE RÓMULO CABALLERO E ISRAEL ENRIQUE CABALLERO ARAÚZ, RESPECTIVAMENTE, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA PROVIDENCIA DE 12 DE OCTUBRE DE 1995, PROFERIDA POR LA JUEZ SEGUNDO DE CIRCUITO DE CHIRIQUÍ, RAMO CIVIL, DENTRO DEL PROCESO DE CONCURSO DE ACREEDORES PROPUESTO POR MARÍA EMÉRITA VALDÉS ARAÚZ CONTRA RÓMULO CABALLERO BATISTA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO SALAS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . . 19

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICDO. JUAN CARLOS HENRIQUEZ CANO, EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR GRANVIL RAY KINCAID, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL AUTO N° 752 DE 17 DE MAYO DE 1995, DICTADO POR EL JUZGADO QUINTO DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 20

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO BORIS B. VERGARA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE BOSCO ANTONIO ESCOBAR C., CONTRA LA ORDEN DE NO HACER CONTENIDA EN EL AUTO N° 2530 DE 16 DE NOVIEMBRE DE 1995, EXPEDIDA POR EL JUEZ PRIMERO DE CIRCUITO DE PANAMÁ, RAMO CIVIL, MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 22

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, INTERPUESTA POR LA FIRMA CHAVARRÍA, RODRÍGUEZ Y SÁNCHEZ, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE MULTIBLOCK, S. A., CONTRA LA ORDEN DE HACER VERBAL EXPEDIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO, ENCARGADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL, LCDO. ANTONIO VARGAS, DENTRO DEL PLIEGO DE PETICIONES FORMULADO POR EL SINDICATO ÚNICO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN Y SIMILARES (SUNTRACS). MAGISTRADO PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 24

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL DR. ULISES PITTÍ G, EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR MANUEL A. BURILLO CONSTANTINO, CONTRA LA ORDEN DE NO HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 2 R. C. DE 18 DE DICIEMBRE DE 1995, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MENORES, PRESIDIDO POR EL MAGISTRADO ROGELIO MARÍA CARRILLO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . . 25

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JORGE ALBERTO BARLETTA A. EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD ENGINNERING DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION, REPRESENTADA POR EL SEÑOR CRISTÓBAL RANGEL MÁRQUEZ, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA PUBLICACIÓN DE CONCURSO DE PRECIOS N° CSJ-03-95 EMITIDA POR EL ÓRGANO JUDICIAL, DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO SECCIONAL DE MENORES DE LA PROVINCIA. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 26

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR TRONCOSO, LACAYO Y PORRAS, EN REPRESENTACIÓN DEL BANCO EXTERIOR, S. A. CONTRA LA ORDEN DE NO HACER CONTENIDA EN EL AUTO DE 10 DE OCTUBRE

DE 1995, DICTADO POR EL JUZGADO SEXTO DE CIRCUITO DE PANAMÁ, RAMO CIVIL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 27

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICDO. EDUARDO E. RÍOS MOLINAR, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE NILKA TOVAR ORTIZA, CONTRA LA ORDEN DE NO HACER CONTENIDA EN LA SENTENCIA DE 13 DE OCTUBRE DE 1995 PROFERIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 28

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO HÉCTOR E. ZAVALA EN REPRESENTACIÓN DE ALEXIS GONZÁLEZ CASTILLO CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL AUTO DE 31 DE OCTUBRE DE 1995 PROFERIDA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 29

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LCDO. HIPÓLITO M. CONSUEGRA PALMA EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR LUIS SAEZ MORENO CONTRA LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 12 HERRERA Y LOS SANTOS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 35

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EDUARDO RÍOS MOLINAR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LUIS GUERRA, EN SU CONDICIÓN DE SECRETARIO GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN DE TRABAJADORES DE LA CORPORACIÓN PANAMEÑA DE RADIODIFUSIÓN CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 24/DGT/95 DE 2 DE NOVIEMBRE DE 1995, DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 36

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LIC. HÉCTOR IVÁN HERRERA LAMB, EN REPRESENTACIÓN DE ARACELLY SOTILLO DE WILLBURN, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 184-95, PROFERIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARRENDAMIENTO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 36

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL LICENCIADO DARÍO EUGENIO CARRILLO GOMILA, EN SU PROPIO NOMBRE Y CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA NOTA DE 15 DE ENERO DE 1996, EMITIDA POR EL SECRETARIO DEL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 37

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL LICENCIADO MARTÍN WILSON CHEN EN REPRESENTACIÓN DE BLANCA ESTELA SOLÍS CASTILLO CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA SENTENCIA DE 23 DE AGOSTO DE 1995 PROFERIDA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 38

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL LICENCIADO COSME ODRYS MORENO EN REPRESENTACIÓN DE JOSÉ SALVADOR RODRÍGUEZ MUÑOZ, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL DECRETO N° 564 DE 2 DE NOVIEMBRE DE 1994, EMITIDO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS

NOVENTA Y SEIS (1996). 47

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR LA FIRMA MORGAN & MORGAN, EN REPRESENTACIÓN DE WILD PALMS, INC., CONTRA LAS ÓRDENES DE HACER CONTENIDAS EN LA RESOLUCIÓN DE 2 DE OCTUBRE DE 1995, DICTADA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, BAJO LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA ELITZA A. CEDEÑO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 48

ACLARACIÓN DE SENTENCIA DENTRO DE LA ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EDUARDO E. RÍOS MOLINAR, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE JOSÉ DEL ROSARIO MUÑOZ R., CONTRA LA ORDEN DE NO HACER CONTENIDA EN LA SENTENCIA DE 30 DE MAYO DE 1995, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, EN EL PROCESO LABORAL PROMOVIDO POR JOSÉ DEL ROSARIO MUÑOZ R. CONTRA PARTES Y SERVICIOS TOYOPAN, MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 51

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS G. QUIROS A. EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LUIS ALBERTO MONTOYA LLANTEN CONTRA LA ORDEN VERBAL EMITIDA POR EL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 53

RECURSO DE HABEAS CORPUS 53

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MARIXENIA VILLARREAL DE MIRANDA CONTRA EL FISCAL SEGUNDO SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, OCHO (8) DE ENERO DE MI NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 53

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE DANILO NEWTON BAILEY CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, ONCE (11) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 55

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE SILKIA SELIDETH SALAMANDRA MORENO CONTRA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, ONCE (11) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 56

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ALEXANDER ALEXIS DE LA CRUZ Y JAVIER ENRIQUE DE LA CRUZ SANTANA CONTRA EL FISCAL DUODÉCIMO DE CIRCUITO DE LA CHORRERA, MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DOCE (12) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 58

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EVELIO MORENO RODRÍGUEZ CONTRA EL FISCAL DELEGADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO SALAS. PANAMÁ, DOCE (12) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996) 59

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE GARY GABRIEL ROBLES POLO CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA NACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DOCE (12) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 61

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE VÍCTOR MANUEL LEAL SEGURA CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DOCE (12) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 62

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ALEX ANÍBAL GÓMEZ DE LEÓN, CONTRA EL JUEZ SEGUNDO DE CIRCUITO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, QUINCE (15) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . . . 63

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JORGE DE LEÓN, CONTRA EL SEÑOR FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, QUINCE (15) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 64

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LOS SEÑORES JORGE WALKER LICH, JOSÉ HURTADO RIVERA Y JOSÉ QUINTERO, CONTRA EL FISCAL SEGUNDO DELEGADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, QUINCE (15) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 65

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA A FAVOR DE JAVIER ARMANDO PORTE CONTRA LA JUEZ SEGUNDA SECCIONAL DE MENORES DE PANAMÁ, MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, QUINCE (15) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 65

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MARICELA JUDITH ZORRILLA FUENTES CONTRA EL FISCAL CUARTO DEL CIRCUITO DE COLÓN. APELACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 67

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS PREVENTIVO A FAVOR DE MIHAELA STEGARU MIRESCU CONTRA LA JUEZ SEGUNDA SECCIONAL DE MENORES DE PANAMÁ, LICDA. DELIA CEDEÑO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . . . 68

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA A FAVOR DE FRANKLIN NODIER GONZÁLEZ CONTRA EL MAGISTRADO ASUNCIÓN CASTILLO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, QUINCE (15) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 70

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CARLOS ALBERTO NAVARRO RODRÍGUEZ CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE CORRECCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, (15) QUINCE DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 71

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS PREVENTIVO A FAVOR DE JOSÉ LUIS ALBERTE NAVARRO CONTRA EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, QUINCE (15) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . . . 73

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE VALENTÍN CHÁVEZ CORTEZ CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, QUINCE (15) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 74

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JASED AROSEMENA BETESH CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, QUINCE (15) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 76

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE PABLO CÓRDOBA HERRERA CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, QUINCE (15) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 77

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE SHANG KAM FAN Y YAU SEN PEN CONTRA EL FISCAL DUODÉCIMO DEL CIRCUITO DE PANAMÁ, CON SEDE EN

CHORRERA. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, QUINCE (15) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 77

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE NELVA ANTONIA SALINAS MARTÍNEZ CONTRA EL FISCAL SEGUNDO DELEGADO DE LA PROCURADURÍA DE LA NACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, QUINCE (15) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 79

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LUIS CARLOS SALAZAR CENTENO CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADO CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZALEZ. PANAMÁ, QUINCE (15) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 79

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MANUEL LINARES MUÑOZ CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 81

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JOSÉ EVERARDO GUIZADO MONROY, LUZ MARINA MONROY Y RODRIGO ANTONIO SEPÚLVEDA VÉLEZ CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 81

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE TOMÁS FERNÁNDEZ BROWN CONTRA EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 82

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE RUBÉN URRIAGA, RODRIGO GÓMEZ Y ROBINSON LOZANO GUZMÁN CONTRA EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN POLICIAL DE LA POLICÍA NACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 83

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CRISTÓBAL JESÚS PÉREZ CORTEZ CONTRA EL FISCAL SUPERIOR DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 84

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ARSENIO DOMÍNGUEZ CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO (1996). 87

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MAURICIO HERNÁNDEZ Y GABRIEL JAIME VÁSQUEZ ESCOBAR CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 87

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JORGE ANTONIO HERBERT TUÑON CONTRA EL ADMINISTRADOR REGIONAL DE ADUANAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . . 91

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA A FAVOR DE RUFINO ANTONIO CAMARGO ALABARCA CONTRA EL FISCAL PRIMERO SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 92

HABEAS CORPUS A FAVOR DE RIGOBERTO FRÍAS CALDERÓN EN CONTRA DEL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE ENERO DE MIL

NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 94

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE HERBERT ONODERA RODRÍGUEZ CONTRA EL JUEZ SEGUNDO DE CIRCUITO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 97

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ELIZABETH CÓRDOBA VÁSQUEZ CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . . 98

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EMILI SMITH MATHEWS CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 99

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR MANUEL ANTONIO SIMANCA CONTRA EL ADMINISTRADOR REGIONAL DE ADUANAS, ZONA ORIENTAL, JOSÉ LUIS NAVARRO GUEVARA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 100

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE HASSAN HUSSEIN AHMAD CONTRA EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 103

HABEAS CORPUS A FAVOR DE JORGE AYARZA DELGADO EN CONTRA DEL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 104

HABEAS CORPUS PREVENTIVO A FAVOR DE JOSEF MORDOK EN CONTRA DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 105

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EDUARDO HERRERA CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA NACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 106

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE DALYS IBETH GARCÍA CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FÁBREGA ZARAK. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 107

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ROBERTO CEBALLOS CASTILLO, ROLANDO PELEGRÍN SANTAMARÍA, HUMBERTO DE LA ESPADA Y SIMEÓN DE LA ESPADA, CONTRA EL FISCAL PRIMERO DEL CIRCUITO DE COLÓN. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 109

DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA A FAVOR DE NEFTALI PORFIRIO CÁRDENAS GUTIÉRREZ, CONTRA LA FISCAL SEGUNDA SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS E. MUÑOZ POPE. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 113

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE BORIS JESÚS FOGUEL SUENGAS CONTRA EL FISCAL PRIMERO SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS E. MUÑOZ POPE. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 113

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LUIS ALBERTO CHACÓN DE LEÓN CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 115

HABEAS CORPUS A FAVOR DE LEONARDO FABIO DUQUE EN CONTRA DEL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 117

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE RODOLFO BEST LISPSITT CONTRA EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 120

HABEAS CORPUS A FAVOR DE MARCELA HOMSANY EN CONTRA DEL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 121

RECURSO DE HABEAS CORPUS INTERPUESTO A FAVOR DE CÉSAR HERRERA CORREA CONTRA EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 126

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EVELIA RODRÍGUEZ CONTRA EL FISCAL SUPERIOR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 127

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JOSÉ ARÍSTIDES SOTO Y JOSÉ ALBERTO SÁNCHEZ SOTO CONTRA LA SECRETARÍA DE DROGAS DE COCLÉ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 128

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ÁNGEL ANTONIO AZCARATE CONTRA EL FISCAL SUPERIOR ESPECIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 129

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CRISTIAN ALFONSO MUÑOZ CONTRA LA FISCALÍA SUPERIOR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL (SECRETARIA DE DROGAS). MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZALEZ. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 130

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE PEDRO PASCUAL MORALES, CONTRA EL FISCAL PRIMERO DEL CIRCUITO DE VERAGUAS, MAGISTRADO PONENTE: CARLOS E. MUÑOZ POPE. PANAMÁ, TREINTA (30) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 131

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JORGE ENRIQUE DÍAZ PANEZO CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 134

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ANTONIO DE JESÚS HOQUEE MORALES CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA NACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS E. MUÑOZ POPE. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 135

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA A FAVOR DE ANTONIO DE JESÚS HOQUEE MORALES, JAIRO JACOB ORTEGA POVEDA Y CRISTINO MARTÍNEZ GONZÁLEZ Y EN CONTRA DEL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS E. MUÑOZ POPE. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO

DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 136

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JORGE ENRIQUE DÍAZ PANEZO, CRISTINO MARTÍNEZ GONZÁLEZ Y JAIRO JACOB ORTEGA POVEDA CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA NACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS E. MUÑOZ POPE. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 136

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CARLOS ANTONIO LAVAL ROUSE, CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE CORRECCIÓN (ACUMULADO CON EL EXPEDIENTE N° 082-96, ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO JUDICIAL). MAGISTRADO PONENTE: CARLOS E. MUÑOZ POPE. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 137

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE YOLANDA CONCEPCIÓN GABRIEL GONZÁLEZ CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 138

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MARTÍN GONZÁLEZ PALMA CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 140

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 144

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA LICENCIADA MARIBLANCA STAFF EN CONTRA DEL ARTÍCULO 218 DEL CÓDIGO DE LA FAMILIA. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 144

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LCDO. LEONEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ EN REPRESENTACIÓN DE TOMÁS ENRIQUE PEREIRA RUIZ CONTRA LOS ARTÍCULOS 124 Y 125 DEL REGLAMENTO DE TRÁNSITO EXPEDIDO MEDIANTE DECRETO N° 160 DE 7 DE JUNIO DE 1993. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 149

TRIBUNAL DE INSTANCIA 151

SUMARIAS INSTRUIDAS AL LEGISLADOR FRANZ OLMEDO WEBER ZALDIVAR POR EL PRESUNTO DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA EN PERJUICIO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CONDUCTORES DE TAXI (FENACOTA). MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, QUINCE (15) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 151

QUERELLA POR SUPUESTO DELITO DE CALUMNIA PRESENTADA POR LCDO. JUAN MATERNO VÁSQUEZ EN REPRESENTACIÓN DE MAYÍN CORREA DELGADO CONTRA EL DR. GUILLERMO MÁRQUEZ AMADO, MAGISTRADO DEL TRIBUNAL ELECTORAL. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 152

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE HENRY J. FAARUP M. CONTRA EL JUEZ PRIMERO DE CIRCUITO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. (CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO). MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 154

SALA PRIMERA DE LO CIVIL 156

ACLARACIÓN DE SENTENCIA 157

ACLARACIÓN DE SENTENCIA EN EL PROCESO QUE RODUSA CORPORATION, S. A. Y BOLÍVAR ARIEL CARRERA PITTÍ RECURREN EN CASACIÓN EN LA EXCEPCIÓN DE PAGO PRESENTADA EN EL PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO QUE EL GRUPO

DE INVERSIONES EL TRÉBOL, S. A. LE SIGUE A RODUSA CORPORATION, S. A. Y ARIEL BOLÍVAR CARRETA PITTÍ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 157

RECURSO DE CASACIÓN CIVIL 157

DIOGENES SANTAMARÍA ARAUZ RECURRE EN CASACIÓN EN EL INCIDENTE DE LEVANTAMIENTO DE SECUESTRO PROMOVIDO POR BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO DENTRO DE LA ACCIÓN DE SECUESTRO INCOADA POR DIOGENES SANTAMARÍA ARAUZ CONTRA JOSÉ ÁNGEL GUERRA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO SALAS. PANAMÁ, ONCE (11) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 158

EL ESTADO RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A CORPORACIÓN DE DESARROLLO HOTELERO, S.A. MAGISTRADO PONENETE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ ONCE (11) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996) 158

ENVASES DEL ISTMO, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE COCA COLA DE PANAMÁ (CÍA. EMBOTELLADORA), S. A. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ ONCE (11) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 159

HILDA AURA BARAHONA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DE OPOSICIÓN A TITULO NACIONAL QUE LE SIGUE SAMUEL BARAHONA. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, ONCE (11) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 159

SANTIAGO SALDAÑA DEL CID Y EDGAR ELÍAS SALDAÑA PALMA RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUEN A JULIO CESAR OLIVEIRA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DOCE (12) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 160

PATRICIO LEZCANO GANTES, MOLINO LEZCANO, S. A. Y BIENES RAÍCES LEZCANO, S. A. RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUEN A GENEROSO MORALES MUÑOZ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, QUINCE (15) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 161

ROBBIN FRANKLIN MITCHELL RODRÍGUEZ Y JEANNETTE MARY MITCHELL RODRÍGUEZ RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE FILIACIÓN POST-MORTEM INCOADO POR DEBORA GARCÍA DE CARUSONE CONTRA EARL FRANKLIN MITCHELL (Q. E. P. D.) MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . 161

ANDRÉS ÁVILA MORENO RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DE OPOSICIÓN QUE LE SIGUE A SIMÓN CAMARGO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 163

BRINK S PANAMÁ, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A FERRARI INTERNACIONAL (SOCIEDAD EXTRANJERA). MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FÁBREGA ZARAK. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 164

ALBERTO SÁNCHEZ, EFRAÍN ALCIDES CORREA Y JOSÉ A. ISAZA, RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO PROPUESTO POR AGROGANADERÍA SANTA FE, S. A. CONTRA EL MUNICIPIO DE TABOGA, ALBERTO SÁNCHEZ, EFRAÍN ALCIDES CORREA Y JOSÉ A. ISAZA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 165

BANCO DE COLOMBIA, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A LIONEL QUIEL Y BERTA A. DE QUIEL. MAGISTRADO PONENTE:

RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 165

MANUEL DE JESÚS QUINTERO RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO INCOADO POR MARÍA TERESA RÍOS HERNÁNDEZ, MARÍA DE LAS MERCEDES RÍOS HERNÁNDEZ Y MARÍA ELVIA O MARÍA ELVIA RÍOS HERNÁNDEZ A MANUEL DE JESÚS QUINTERO, ALBINO GÓMEZ GÓMEZ, RAMÓN GÓMEZ GÓMEZ, ALFONSO GÓMEZ GÓMEZ, ESPERANZA GÓMEZ GÓMEZ Y AURA GÓMEZ GÓMEZ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO SALAS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 171

JAIME BISHOP RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE CARLOS A. PATTERSON. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 172

ASOCIACIÓN NACIONAL DE AHORRO Y PRÉSTAMO PARA LA VIVIENDA (A. N. A. P.), BANCO GENERAL, S. A. Y PRIMER BANCO DE AHORROS, S. A. RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO INCOADO POR ASSICURAZIONI GENERALLI, S. P. A. CONTRA BANQUE SUDAMERIS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 175

DENNIS LAWRENCE GILL, MARÍA DEL CARMEN VANZILLOTA DE GONZÁLEZ Y OSCAR ALEJANDRO GONZÁLEZ RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DECLARATIVO QUE LE SIGUE DENNIS LAWRENCE GILL A MARÍA DEL CARMEN VANZILLOTA DE GONZÁLEZ Y OSCAR ALEJANDRO GONZÁLEZ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 176

HOTEL ISLA GRANDE, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO QUE LE SIGUE A MARÍA LOUISA CARTER Y GLEN THOMÁS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 177

ANTONIO FLORES RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE ABEL PITTÍ CONCEPCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 178

HUGO ARJONA ARJONA Y REBECA BERAHA RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE DIVORCIO QUE HUGO ARJONA ARJONA QUE LE SIGUE REBECA BARAHA. MAGISTRADO PONENTE. ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 179

ELSA ROVIRA DE WADE RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO POR MUTUO CONSENTIMIENTO INCOADO POR ELSA ROVIRA WADE E HILARIO JORGE WADE. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 179

BANCO CENTRAL RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE INVERSIONES SATURNO, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 181

COMPAÑÍA DE SEGUROS LA PREVISORA, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO QUE LE SIGUE INMOBILIARIA ERGO, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 189

RAFAEL BARDAYAN VERGARA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE DIVORCIO QUE LE SIGUE MARISABEL MENDOZA TAYLOR. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, TREINTA (30) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 195

VALAR INT, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO EJECUTIVO QUE LE SIGUE COLONIAS DE PANAMÁ, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 196

LUIS ROBERTO GONZÁLEZ PELLITERO RECURRE EN CASACIÓN EN LA MEDIDA PRECAUTORIA PRESENTADA DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO DECLARATIVO INCOADO POR LUIS ROBERTO GONZÁLEZ PELLITERO CONTRA EUROPUSH INTERNACIONAL, S. A., ALFREDO PRIETO BOUZAS, PEDRO ERASMO ORTEGA, HECTOR PÉREZ Y NICOLÁS RUIZ. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 197

CONFLICTO DE COMPETENCIA 198

CONFLICTO DE COMPETENCIA SUSCITADO ENTRE EL JUZGADO QUINTO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, RAMO CIVIL Y EL JUZGADO PRIMERO SECCIONAL DE FAMILIA DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ EN EL PROCESO DE DIVORCIO INSTAURADO POR BOBY BUD TURMAN CONTRA EDILSA ATENCIO JIMÉNEZ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO SALAS. PANAMÁ, ONCE (11) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 198

IMPEDIMENTO 199

CONSTRUCTORA DOS MARES, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE ROBERTO ANTONIO BERASTEGUI. (MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO). MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, DOCE (12) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 199

INCIDENTE 200

INCIDENTE DE RECUSACIÓN INTERPUESTO POR ROBERTO ANTONIO BERASTEGUI, MEDIANTE APODERADO JUDICIAL, CON AUDIENCIA DEL HONORABLE MAGISTRADO ROGELIO FÁBREGA ZARAK EN EL RECURSO DE CASACIÓN INCOADO POR CONSTRUCTORA DOS MARES, S. A. DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE ROBERTO ANTONIO BERASTEGUI. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 200

RECURSO DE HECHO 201

MARIANELA WONG LEE (TIPY COPY) INTERPONE RECURSO DE HECHO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 1995, DICTADA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL PROCESO ORDINARIO INCOADO POR MARIANELA WONG LEE (TIPY COPY) CONTRA AGENCIAS ANCHOR, S. A. Y NATIONAL UNIÓN FIRE INSURANCE COMPANY OF PITTSBURG, P. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 201

EL LICENCIADO SANTANDER TRISTÁN DONOSO INTERPONE RECURSO DE HECHO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 1995, DICTADA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL PROCESO SUMARIO DE INTERDICTO POSESORIO DE PERTURBACIÓN INTERPUESTO POR COLÓN INTERNACIONAL, S. A. CONTRA JORGE ALLEN, TOMÁS ROWE, BALTAZAR BETEGON Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 203

LA FIRMA FORENSE BERRIOS Y BERRIOS INTERPONEN RECURSO DE HECHO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 1995 PROFERIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL EN EL PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO INCOADO POR BANCO EXTERIOR, S. A. CONTRA ONDA TROPICAL, S. A. Y AURELIO DOPESO CARREIRO. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, TREINTA (30) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 204

RECURSO DE REVISIÓN 205

JORGE JOSÉ DUQUE FRANCESCHI INTERPONE RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LAS RESOLUCIONES DE 23 DE JUNIO DE 1993 Y SIGUIENTES; Y DE 29 DE AGOSTO DE 1994 Y SIGUIENTES, DICTADAS DENTRO DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS INCOADO POR INDUSTRIA PANAMEÑA DE COCOA, S. A. CONTRA JORGE JOSÉ DUQUE FRANCESCHI. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DOCE (12) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . . . 206

ARCILLAS DE CHITRÉ, S. A. INTERPONE RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE 12 DE NOVIEMBRE DE 1993, PROFERIDA POR EL JUZGADO PRIMERO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, RAMO CIVIL DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO DECLARATIVO INCOADO POR CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL (COFINA) CONTRA TIERRAS E INVERSIONES, S. A. ARCITEC, S. A. Y ARCILLAS DE CHITRÉ, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO SALAS. PANAMÁ, DOCE (12) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 207

SALA SEGUNDA DE LO PENAL 208

ACLARACIÓN DE SENTENCIA 209

SOLICITUD DE CORRECCIÓN DEL AUTO DE 12 DE DICIEMBRE DE 1995, PRESENTADA DENTRO DE LAS SUMARIAS SEGUIDAS A ROBERTO A. PINZÓN DÍAZ Y JACINTO J. MACDONALD SINDICADOS POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE BETZY MARLENE MENDIZÁBAL Y JORGE ENRIQUE FALCONETT. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, CINCO (5) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 209

AUTO APELADO 209

RECURSO DE APELACIÓN CONTRA AUTO QUE NIEGA LA PETICIÓN DE FIANZA EXCARCELARIA EN FAVOR DE RODOLFO RAMÓN CHAN SALCEDO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 209

AUTO DE ENJUICIAMIENTO APELADO 211

AUTO DE PROCEDER APELADO EN EL PROCESO SEGUIDO A DONATO GIL QUINTERO, FÉLIX MORALES, PEDRO MARTÍNEZ CERRUD Y OTROS, SINDICADOS POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE ELIO JOSÉ RODRÍGUEZ. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS E. MUÑOZ POPE. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 211

APELACIÓN DEL AUTO DE PROCEDER DICTADO CONTRA ALBERTO SITTÓN VEGA, EN EL PROCESO POR DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE MILAGROS DEL CARMEN AYALA CUBILLA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 214

RECURSO DE CASACIÓN PENAL 219

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN PROMOVIDO A FAVOR DE CECILIO VALENCIA GONZÁLEZ POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, CUATRO (4) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 219

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A FELIPE CAMARGO AMAYA, SINDICADO POR EL DELITO CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL EN PERJUICIO DE ERNESTO GIL VEGA KENNEDY. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 222

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A SAMY GOZAINE, SINDICADO POR EL DELITO DE EXPEDICIÓN DE CHEQUES SIN SUFICIENTE PROVISIÓN DE FONDOS EN PERJUICIO DE MARCIAL ENRIQUE SÁNCHEZ. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 223

CONFLICTO DE COMPETENCIA 224

CONFLICTO DE COMPETENCIA ENTRE EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL Y EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL, EN LAS SUMARIAS EN AVERIGUACIÓN POR DELITO CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL EN PERJUICIO DE SEGUNDO GONZÁLEZ. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DOS (2) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 224

INCIDENTE 225

INCIDENTE DE RECUSACIÓN CONTRA EL MAGISTRADO SUPLENTE DR. CARLOS H. CUESTAS DENTRO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR FORMULADA POR AIDELENA PEREIRA CONTRA OMAYRA GARCÍA DE BERBEY POR EL SUPUESTO DELITO DE TENTATIVA DE HOMICIDIO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 225

INCIDENTE DE OBJECIONES CONTRA EL PROCESO DE EXTRADICIÓN DE ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ, SOLICITADA POR EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 226

RECURSO DE REVISIÓN PENAL 228

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A JESÚS ROBINSON MORENO VEGA, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS E. MUÑOZ POPE. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 228

RECURSO DE REVISIÓN PRESENTADO POR CRISTÍN ESPINOSA RÍOS, EN EL PROCESO SEGUIDO POR DELITO DE HOMICIDIO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 229

RECURSO DE REVISIÓN INCOADO POR NELSON GÁLVEZ AMANIOS, REO DEL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE EVELIO VEGA GIL. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 230

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A SALVADOR VÁSQUEZ GÓMEZ, POR EL DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, (23) VEINTITRÉS DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 230

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A JOSÉ MARÍA INFANSÓN CASTRO, SINDICADO POR EL DELITO DE ROBO CALIFICADO EN PERJUICIO DE HUMBERTO BRID BOCANEGRA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 231

RECURSO DE REVISIÓN SOLICITADO POR JORGE MIGUEL VITAL, SINDICADO POR EL DELITO DE VIOLACIÓN CARNAL. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 232

SENTENCIA APELADA 233

JUICIO SEGUIDO A ADONES MANUEL PINTO HERNÁNDEZ, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO COMETIDO EN PERJUICIO DE JOSÉ LUIS JUAN TUÑÓN. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, CUATRO (4) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 233

RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA QUE CONDENA A GERMÁN GONZÁLEZ PITTÍ Y LUIS ANTONIO CÓRDOBA MORALES POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE EDWIN HEREDIO AMAYA AMAYA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, ONCE (11) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 234

APELACIÓN DE SENTENCIA CONDENATORIA, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A JHONY BONY HERNÁNDEZ LUQUE POR DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE ROSA ELVIRA DE HERNÁNDEZ. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS E. MUÑOZ POPE. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 237

APELACIÓN DE SENTENCIA CONDENATORIA DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A MANUEL ANTONIO NORIEGA MORENO, HERÁCLIDES SUCRE MEDINA Y OTROS POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE MOISÉS GIROLDI VERA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 238

JUICIO SEGUIDO A NG CHIU MING CHONG SHUM, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE PAPIAS CASTRO NÚÑEZ. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 241

SENTENCIA CONDENATORIA APELADA DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A JAVIER CÁCERES GUERRERO, SINDICADO POR DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE MANUEL BARRANTE CASTILLO. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS E. MUÑOZ POPE. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 242

SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN 244

SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN A FAVOR DE AGRIPINA HERRERA DE TORRES, SINDICADA POR EL SUPUESTO DELITO DE TENTATIVA DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE CRISTINA NAVARRO CORRALES. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS E. MUÑOZ POPE. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 244

SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN A FAVOR DE GILBERTO ENRIQUE AROSEMENA RUIZ, POR EL SUPUESTO DELITO DE LESIONES PERSONALES Y TENTATIVA DE HOMICIDIO EN DETRIMENTO DE EDILTA ACEVEDO DE AROSEMENA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 245

SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN DENTRO DEL PROCESO DE EXTRADICIÓN QUE SE LE SIGUE AL SEÑOR FERNANDO HERNÁNDEZ ARIAS. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 246

SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN A FAVOR DE RONALDO ALEXIS GUEVARA TORRES, SINDICADO POR EL DELITO DE CONCUSIÓN. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 247

SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN A FAVOR DE LUIS ANTONIO NAYA VARGAS, SINDICADO POR EL SUPUESTO DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE ALEJANDRO VÁSQUEZ. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, TREINTA (30) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 248

SALA TERCERA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 251

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN 252

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JORGE ENRIQUE SÁNCHEZ, EN REPRESENTACIÓN DE LUIS ALBERTO MITIL A., PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO DE PERSONAL N° 57 DE 14 DE MARZO DE 1995, DICTADO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TRES (3) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 252

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA MORGAN Y MORGAN, EN REPRESENTACIÓN DE TECNOLOGÍA APLICADA, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN N° GG-25-95 DE 16 DE AGOSTO DE 1995, EMITIDA POR LA GERENCIA GENERAL DEL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, CINCO (5) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 252

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA GALINDO, ARIAS Y LÓPEZ, EN REPRESENTACIÓN DE ROYAL REGATTA, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 87-95 DE 31 DE JULIO DE 1995, EMITIDA POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, CINCO (5) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . . . 255

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA TROYANO, VISUETTI Y VILLALAZ, EN REPRESENTACIÓN DE ISAAC DANIEL SERRANO ESPINOSA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 33-94 DE 18 DE MAYO DE 1994, DICTADA POR EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIEZ (10) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 256

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. ERIC A. HOWARD, EN REPRESENTACIÓN DEL JUEZ QUINTO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, LCDO. ROGELIO G. GÁLVEZ F., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN DE 10 DE JUNIO DE 1994, PROFERIDA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIEZ (10) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 257

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. MIGUEL A. CÁRDENAS, EN REPRESENTACIÓN DE EUMELIA ESTHER VERGARA DE BALLESTEROS, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO DE PERSONAL N° 204 DE 14 DE AGOSTO DE 1995, EMITIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIEZ (10) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 261

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICDO. EMILIO DE LEÓN LOKEE, EN REPRESENTACIÓN DE DELIA MARÍA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL RESUELTO N° 020 DE 17 DE OCTUBRE DE 1994, EXPEDIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA DE PANAMÁ (IDIAP), Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DOCE (12) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 262

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. CARLOS AYALA, EN REPRESENTACIÓN DE TAMARA RODRÍGUEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO DE PERSONAL N° 187 DE 25 DE JULIO DE 1995, PROFERIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 264

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. SALVADOR SÁNCHEZ GONZÁLEZ, EN REPRESENTACIÓN DE ÁNGEL VALERO DOMENECH, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 3269 DE 27 DE MAYO DE 1992, EMITIDA POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 267

DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE TAPIA, LINARES Y ALFARO, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE PLÁSTICOS INTERNACIONALES, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULAS, POR ILEGALES, LA RESOLUCIÓN N° 8547-93-JD, DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1993 Y LA RESOLUCIÓN DE 1° DE JULIO DE 1994, EXPEDIDAS AMBAS POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 269

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA, EN REPRESENTACIÓN DE LUISA DE DEGRACIA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA N° 2220-71-95 DE 12 DE ENERO DE 1995, DICTADA POR EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 273

DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE VÁSQUEZ Y VÁSQUEZ, EN REPRESENTACIÓN DE PLASTIC WORLD, INC., PARA QUE SE DECLARE NULA LA RESOLUCIÓN N° 166 DE 11 DE DICIEMBRE DE 1991 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE COMERCIO INTERIOR DEL MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 275

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA ARROCHA, BLANDÓN, CASTRO & YOUNG EN REPRESENTACIÓN DE ROGELIO MORENO. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 281

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO GENARINO ROSAS EN REPRESENTACIÓN DE ANTONIO GORDÓN LÓPEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO DE PERSONAL N° 138 DE 14 DE MARZO DE 1994, EXPEDIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 283

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO AGAPITO GUERRERO VEGA, EN

REPRESENTACIÓN DE CRISTOBALINA PEÑA RODRÍGUEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL EL DECRETO N° 99 DE 11 DE OCTUBRE DE 1994, PROFERIDO POR EL ALCALDE DEL DISTRITO DE COLON, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 287

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL DR. SIMEÓN EMILIO GONZÁLEZ HENRIQUEZ, EN REPRESENTACIÓN DE YODALIS THAMARA AROSEMENA KING, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO DE PERSONAL N° 380 DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 1994, EMITIDO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 289

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. JORGE LUIS PULIDO RITTER, EN REPRESENTACIÓN DE EDNA BENDIBURG, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO EJECUTIVO N° 419 DE 5 DE OCTUBRE DE 1994, EMITIDA POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 292

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. MIGUEL GONZÁLEZ, EN REPRESENTACIÓN DE EURIBIADES HERRERA, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO DE GABINETE N° 10 DE 6 DE FEBRERO DE 1995, EMITIDO POR EL MINISTRO DE EDUCACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 295

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LCDA. SELENIA CANTO DE RUIZ, EN REPRESENTACIÓN DE GRISELDA ÁVILA JARAMILLO, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL,EL MEMORANDO N° 65 DE 18 DE AGOSTO DE 1994, EMITIDO POR EL DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DEL ÓRGANO JUDICIAL, LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO AL NO CONTESTAR EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 298

INCIDENTE DE TACHA Y RECUSACIÓN DE PERITOS, INCOADOS POR EL LCDO. JOSÉ MENA BARRÍA DE LEÓN, DENTRO DE LA DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA EN REPRESENTACIÓN DE LA CHIRIQUÍ LAND COMPANY, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 264-92 DE 13 DE OCTUBRE DE 1992, EMITIDA POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, ACTO CONFIRMATORIO PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 301

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA SHIRLEY Y DÍAZ, EN REPRESENTACIÓN DE ENGINEERING DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION CORPORATION, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL RESUELTO N° 144 DE 16 DE JUNIO DE 1994, EMITIDO POR EL MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 303

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. JORGE ENRIQUE SÁNCHEZ, EN REPRESENTACIÓN DE JAIME NELSON CARRANZA, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL

DECRETO EJECUTIVO N° 57 DE 14 DE MARZO DE 1995, EMITIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 308

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO GENARINO ROSAS, EN REPRESENTACIÓN DE ALBERTO JAVIER APONTE BARSALLO, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO DE PERSONAL N° 738 DE 21 DE DICIEMBRE DE 1994, EMITIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 308

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE ESTUDIO CORPORATIVO TRIBUTARIO, EN REPRESENTACIÓN DE SISTEMAS ESTRUCTURALES MODERNOS, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 4617-93 DE 14 DE MAYO DE 1993, PROFERIDA POR LA SUBDIRECTORA GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 309

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ALBERTO LÁZARO RAMOS, EN REPRESENTACIÓN DE LEEMAN EDWARD DAVIS GRAHAM LEEMAN, PARA QUE SE DECLARE NULOS POR ILEGALES, LA RESOLUCIÓN N° 21-95 DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 1995, DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARRENDAMIENTOS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 313

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. LUIS A. STANZIOLA, EN REPRESENTACIÓN DE TRANSMARINE INVESTMENT CORPORATION, S. A. PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 1995, EMITIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 314

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL DR. ROLANDO MURGAS TORRAZA, EN REPRESENTACIÓN DE ZOILA VICTORIA DE LA ROSA DE KAM, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 3883-93-DNP, DE 15 DE JULIO DE 1993, DICTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 314

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR PEDRESCHI Y PEDRESCHI, EN REPRESENTACIÓN DE APLICACIONES QUÍMICAS, S. A. PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN N° 39 DE 18 DE MARZO DE 1994, DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 318

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD 320

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA FIRMA ENDARA Y MARRÉ, EN REPRESENTACIÓN DE AGENCIAS ESCOFFERY, S. A. PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 14 DE 15 DE FEBRERO DE 1993, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 320

DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE PATTON, MORENO & ASVAT PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL AUTO DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 1995, PROFERIDO POR EL FISCAL CUARTO SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 323

DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR LOS LICENCIADOS CELIO GUTIÉRREZ Y FRANCISCO PULICE COSSÚ PARA QUE SE DECLARE NULOS, POR ILEGALES, LOS DECRETOS ALCALDICIOS N° 11 DEL 7 DE JULIO DE 1994 Y N° 12 DEL 12 DE JULIO DE 1994, EXPEDIDOS POR EL ALCALDE DEL DISTRITO DE LA CHORRERA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 323

DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE BUFETE VALDÉS, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE MINERA REMANCE, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACUERDO MUNICIPAL N° 11 DEL 30 DE OCTUBRE DE 1995, EXPEDIDO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE VERAGUAS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 326

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO HÉCTOR CASTILLO RÍOS, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 21, DE 5 DE NOVIEMBRE DE 1991, DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 327

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA FIRMA SOUSA, DE SOUSA Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE CARLOS E. PITTY, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA DECISIÓN DE 3 DE AGOSTO DE 1993, DE LA COMISIÓN DE AUTORIZACIÓN PREVIA DE CUOTAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 331

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LCDO. DAGOBERTO FRANCO, EN REPRESENTACIÓN PROPIA, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO ALCALDICIO N° 2 DE 7 DE FEBRERO DE 1994, EXPEDIDO POR EL ALCALDE DE SAN MIGUELITO. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 334

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE LOS DERECHOS HUMANOS 337

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RIGOBERTO VERGARA, EN REPRESENTACIÓN DE MARITZA GISELA MONTENEGRO, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 104 DE 30 DE OCTUBRE DE 1995, EMITIDA POR EL DIRECTOR NACIONAL DEL INSTITUTO DE DEFENSORES DE OFICIO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 338

PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, INTERPUESTO POR LA LICENCIADA LINA VEGA ABAD, EN REPRESENTACIÓN PROPIA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 005-95 DE 30 DE JUNIO DE 1995, EMITIDA POR EL INSTITUTO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES , Y LA ORDEN DE PROCEDER N° DM-78 DE 30 DE JUNIO DE 1995, EMITIDA POR EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. MAGISTRADA PONENTE DE LA APELACIÓN: MIRTZA ANGÉLICA

FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 339

IMPEDIMENTO 340

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EUSEBIO R. MARCHOSKY, EN REPRESENTACIÓN DE ALVIN WEEDEN GAMBOA, PARA QUE SE DECLARE NULOS POR ILEGALES, LOS ARTÍCULOS 1 Y 2 DEL DECRETO EJECUTIVO N° 334 DE 13 DE JULIO DE 1995, EMITIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOCE (12) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 341

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. RAÚL ADAMES FRANCESCHI, EN REPRESENTACIÓN DE JESÚS L. ROSAS, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ARTÍCULO 2 DEL DECRETO EJECUTIVO N° 413 DE 1° DE AGOSTO DE 1995, EMITIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 342

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA MORENO Y FÁBREGA, EN REPRESENTACIÓN DE CONSTRUCTORA URBANA, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA NEGATIVA TÁCITA DEL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, A ACCEDER AL PAGO DE LOS GASTOS INCURRIDOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL ENSANCHE ARRAIJÁN-PUENTE DE LAS AMÉRICAS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 343

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO AURELIO ANTONIO ROBLES, EN REPRESENTACIÓN DE AUGUSTO CESAR RODRÍGUEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ARTÍCULO 9 DEL REGLAMENTO DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL ÓRGANO JUDICIAL, APROBADO MEDIANTE ACUERDO N° 9 DE 12 DE AGOSTO DE 1992, POR LA SALA DE NEGOCIOS GENERALES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 344

SOLICITUD DE IMPEDIMENTO, INCOADO POR EL MAGISTRADO CARLOS M. ARZE, PARA QUE SE LE SEPARE DEL CONOCIMIENTO DEL PROCESO QUE POR POSIBLE LESIÓN PATRIMONIAL LE SIGUE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL A CELSO CARRIZO MEDRANO Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 345

INCIDENTE DE NULIDAD, INTERPUESTO POR EL LCDO. RODOLFO AGUILERA FRANCESCHI, EN REPRESENTACIÓN DE LIBRERÍA RUBYL, S. A., DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL-CHIRIQUÍ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 346

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA RAMÍREZ Y CIGARRUISTA, EN REPRESENTACIÓN DE JUAN ÁNGEL CHAVARRÍA GONZÁLEZ, PARA QUE SE DECLAREN NULOS POR ILEGALES, LOS ARTÍCULOS 4 Y 6 DEL DECRETO EJECUTIVO N° 413 DE 1° DE AGOSTO DE 1995, EMITIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 347

SOLICITUD DE IMPEDIMENTO, INCOADA POR EL MAGISTRADO OSCAR VARGAS VELARDE, PARA QUE LA SALA LO SEPARE DEL CONOCIMIENTO DEL PROCESO PARA ESTABLECER Y DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR USO DE FONDOS PÚBLICOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA MULTIAGENCIAL DE LEGISLADORES, DE PARTE DE LOS LEGISLADORES DEL PERÍODO 1984-1989, SEÑORES EBEN CHÍ Y OTROS, QUE LES SIGUE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL (D. R. P.). MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 348

JURISDICCIÓN COACTIVA 348

EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN INTERPUESTA POR EL LICDO. ISAAC LADRÓN DE GUEVARA ADAMES, EN REPRESENTACIÓN DE ANAYANSI ACOSTA, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL MUNICIPIO DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, CINCO (5) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 349

EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO LUIS HUMBERTO ARIAS CARRILLO, EN REPRESENTACIÓN DE RAFAEL CORNEJO AMORES, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, Y A LA EMPRESA TSACONICA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DOCE (12) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 351

EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN DE PAGO, INTERPUESTA POR EL LCDO. DOMINGO CALDERÓN VITERI, EN REPRESENTACIÓN DE OSVALDO LAU CAMPOS, OSVALDO ENRIQUE HERNÁNDEZ, MARCIA JIMÉNEZ DE HERNÁNDEZ Y LUIS ALBERTO DELGADO, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LES SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ A REPRESENTACIONES MÉDICAS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DOCE (12) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 353

INCIDENTE DE LEVANTAMIENTO DE SECUESTRO, INTERPUESTO POR LA FIRMA CEDEÑO Y MÉNDEZ, EN REPRESENTACIÓN DE COPRUFIN, S. A., DENTRO DEL PROCESO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL MUNICIPIO DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, QUINCE (15) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 356

INCIDENTE DE NULIDAD, INTERPUESTO POR EL LCDO. GILBERTO BÓSQUEZ, EN REPRESENTACIÓN DE OMAR SILLEROS VÁSQUEZ Y OTROS, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL MUNICIPIO DE PANAMÁ, CONTRA EL GRUPO PAPARUCCHI Y/O RESTAURANTE Y PIZZERÍA PAPARUCCHI S, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 357

EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA MAYRA PÉREZ CASTILLERO, EN REPRESENTACIÓN DE JALADO, S. A., DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL MUNICIPIO DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . 359

EXCEPCIÓN DE PAGO PARCIAL, INTERPUESTA POR EL DR. CARLOS EDUARDO RUBIO, EN REPRESENTACIÓN DE AGRÍCOLA Y GANADERA BAYANO, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO A JAIME CEDEÑO Y OTRO. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 360

INCIDENTE DE NULIDAD INTERPUESTO POR EL LICDO. MARCELO DE LEÓN PEÑALBA, EN REPRESENTACIÓN DE JORGE LEÓN DE ELLIS GONZÁLEZ Y NINA DE ELLIS, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE LA CAJA DE AHORROS. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 363

INCIDENTE DE RESCISIÓN DE EMBARGO, INTERPUESTO POR LA LICENCIADA VIENA ESPERANZA DE LOS MILAGROS ALONSO A., EN REPRESENTACIÓN DEL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO QUE EL BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO LE SIGUE A CARLOS AUGUSTO GUTIÉRREZ Y ARNULFO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 364

RECURSO DE APELACIÓN, INTERPUESTO POR LE FIRMA MORENO Y FÁBREGA EN REPRESENTACIÓN DE POSTENLOSA, S. A., DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 366

EXCEPCIÓN DE INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, PRESCRIPCIÓN Y FALSEDAD DE LA OBLIGACIÓN QUE SE DEMANDA, INTERPUESTA POR EL LCDO. EDGAR VARGAS T. EN REPRESENTACIÓN DE ERIC ELMER PÉREZ RODRÍGUEZ DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 368

TERCERÍA COADYUVANTE, INTERPUESTA POR LA LCDA. IVIS LINETTE BOTELLO, EN REPRESENTACIÓN DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, CASA MATRIZ, A CENTRO DE INFORMÁTICA APLICADA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 371

EXCEPCIONES INTERPUESTAS POR EL LICDO JULIO CÉSAR MORALES EN REPRESENTACIÓN DE IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S. A., DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL MUNICIPIO DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 372

INCIDENTE DE NULIDAD, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO ABDIEL GONZÁLEZ EN REPRESENTACIÓN DE OSCAR MARTÍNEZ DÍAZ, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE LA CAJA DE AHORROS CONTRA CARLOS AUGUSTO CASTILLO MADRID Y ELODIA YIZETH ABADIA DE CASTILLO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 378

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL 379

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LCDO. CÉSAR DÍAZ, EN REPRESENTACIÓN DEL I. R. H. E., CONTRA EL AUTO DE 29 DE AGOSTO DE 1994, EMITIDO POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: EDUARDO A. JIMÉNEZ VS I. R. H. E. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, CUATRO (4) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO (1995). 379

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL INTERPUESTO POR EL LCDO. JORGE LUIS LOMBARDO, EN REPRESENTACIÓN DE MANUEL JORGE GAVRILIDIS, CONTRA LA SENTENCIA DE 26 DE OCTUBRE DE 1995, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: MANUEL JORGE GAVRILIDIS -VS- PENSIÓN MARÍA ISABEL Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 380

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICDO. GUSTAVO ADOLFO RUSSO, EN REPRESENTACIÓN DE MANUEL DE JESÚS QUINTERO CONTRA LA SENTENCIA DE 31 DE OCTUBRE DE 1995, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: ALFREDO CASTILLO -

VS- MANUEL DE JESÚS QUINTERO Y/O FINCA SANTA CRUZ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 382

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL DOCTOR CARLOS DEL CID, EN REPRESENTACIÓN DE FERMÍN ALBERTO LARA, CONTRA LA SENTENCIA DE 2 DE JUNIO DE 1995, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: FERMÍN ALBERTO LARA -VS- CARINTHIA, S. A. (FINCA FLORENTINA). MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 383

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTA POR EL LCDO. NELSON CARREYÓ, EN REPRESENTACIÓN DE JOSÉ MORENO, CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 9 DE OCTUBRE DE 1995, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: JOSÉ MORENO VS SISTEMAS DE INYECCIÓN, S. A. Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 386

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LCDO. PABLO R. HERNÁNDEZ LASSO, EN REPRESENTACIÓN DE GLORIA JANFAN, CONTRA LA SENTENCIA DE 15 DE DICIEMBRE DE 1995, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: GLORIA JANFAN VS MAXIM S ZONA LIBRE, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 387

SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES 389

EJECUCIÓN DE SENTENCIA EXTRANJERA 390

EUGENIO ALEJANDRO ANTHINEY FERRER O EUGENIO ALEJANDRO ANTHONY FERRER, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE DIVORCIO PROFERIDO POR EL TRIBUNAL MUNICIPAL POPULAR DE LA HABANA, CUBA, EN VIRTUD DE LA CUAL SE DISOLVIÓ EL MATRIMONIO QUE LO UNÍA CON LOURDES CARIDAD PRIETO VALDÉS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, OCHO (8) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 390

FRANCISCO ANTONIO ROZAS ARISTY, SOLICITA LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EXTRANJERA DICTADA EN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN. DISTRITO NACIONAL, CAPITAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, QUINCE (15) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 391

MIGUEL ÁNGEL PRESTAN A. O MIGUEL PRESTAN, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE DIVORCIO DICTADA POR TRIBUNAL COMPETENTE DEL ESTADO DE NUEVA JERSEY, DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, MEDIANTE LA CUAL SE DECRETÓ LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL QUE UNÍA A MIGUEL ÁNGEL PRESTAN A. Y LELIS EDITH MONTENEGRO SERRANO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . 394

AIDA MARITZA FON DE DESORMEAUX, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EXTRANJERA PROFERIDA POR LA DECIMOCUARTA CORTE JUDICIAL DISTRITAL DEL ESTADO DE LOUSIANA QUE ORDENA LA ADOPCIÓN DE EDRICH ELÍAS ECHEVERS FONG. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 395

VIOLETA VALENCIA MENA, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EXTRANJERA PROFERIDA POR EL JUEZ DE CIRCUITO, DEL CONDADO DE HENDRY, ESTADO DE LA FLORIDA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, DICTADA EN EL JUICIO DE DIVORCIO DE ROY E. BURGESS JR. CONTRA VIOLETA V. BURGES. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES.

PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 397

JAVIER PARIENTE TEJADA, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE DIVORCIO EMITIDA POR EL JUZGADO VIGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL DE GUAYAQUIL, PROVINCIA DE GUAYAS, REPÚBLICA DE ECUADOR DE FECHA 29 DE JUNIO DE 1993, MEDIANTE LA CUAL SE DECRETÓ LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL QUE UNÍA A JAVIER PARIENTE TEJADA Y JACKELINE BOWEN RAMÍREZ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . . 398

AMALIA ASTRID VÁSQUEZ DE HERNÁNDEZ, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO DE LAS SENTENCIAS EXTRANJERAS: SENTENCIA CIVIL N° 4969 DE 5 DE DICIEMBRE DE 1990, DICTADA POR LA CÁMARA CIVIL Y COMERCIAL Y DE TRABAJO DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTIAGO, REPÚBLICA DOMINICANA Y LA SENTENCIA DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 1991, DICTADA POR EL SECRETARIO DEL JUZGADO DE PAZ DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO REPÚBLICA DOMINICANA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, TREINTA (30) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 400

EXHORTOS 402

EXHORTO DE NOTIFICACIÓN LIBRADO POR EL TRIBUNAL DE DISTRITO DE ZURICH, SUIZA EN LA DEMANDA CIVIL INTERPUESTA POR NALIN INDUSTRIES SND BHD EN UNA LIQUIDACIÓN CONTRA BEHR, INC. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, ONCE (11) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 402

TRIBUNAL DE INSTANCIA 404

RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA LICDA. LUCILA ANGÉLICA SAMUDIO BATISTA, ANTE LA COMISIÓN DE PERSONAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 59-95 DE FECHA DE VEINTINUEVE (29) DE AGOSTO DE 1995. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 404

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN CON APELACIÓN EN SUBSIDIO INTERPUESTO POR TEÓFILO SAMUDIO ESTRIBÍ, CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 182-95 DE FECHA TRES (3) DE AGOSTO DE 1995, EMITIDA POR LA COMISIÓN DE PERSONAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ, RAMO CIVIL. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 406

ACUERDO N° 6
DE 15 DE ENERO DEL AÑO DE 1996 409

ACUERDO N° 137 411

SALA DE ACUERDO
TRIBUNAL SUPERIOR DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL
LISTADO DE JURADOS DE CONCIENCIA 429

FE DE ERRATA 454

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR LA FIRMA ARIAS, ALEMÁN Y MORA, EN REPRESENTACIÓN DE ASTILLEROS BRASWELL INTERNATIONAL, S. A., CONTRA LA SENTENCIA DE 24 DE MAYO DE 1995, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: HENRY KOURANY -VS- ASTILLEROS BRASWELL INTERNATIONAL, S. A. Y/O ASTILLEROS BALBOA, S. A. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 454

DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE ICAZA, GONZÁLEZ-RUIZ & ALEMÁN, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE IMPORTADORA DE PLOMERÍA, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 213-4059 DEL 1° DE NOVIEMBRE DE 1993, DICTADA POR EL ADMINISTRADOR REGIONAL DE INGRESOS DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 455

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PLENO

ENERO 1996

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL LICENCIADO JOSÉ A. HENRÍQUEZ S., EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE JORGE LEONIDAS DELGADO Y ZOBEIDA YADIRA DE DELGADO, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 027-R. A. 95 DE 5 DE MAYO DE 1995, DICTADA POR LA GOBERNACIÓN DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, OCHO (8) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación ha ingresado al Pleno de la Corte Suprema de Justicia acción de amparo de derechos fundamentales interpuesta por el licenciado José A. Henríquez, en representación de JORGE LEONIDAS DELGADO y ZOBEIDA YADIRA DE DELGADO, con el objeto de enervar la "Resolución N° 027-R. A. 95 de 5 de mayo de 1995, dictada por la Gobernación de la provincia (sic) de panamá (sic), mediante la cual ORDENA EL LANZAMIENTO de RUBÉN ALVARADO CARRILLO Y OTROS, de la finca N° 27.606, inscrita al Folio 426, Tomo 664, Sección de la propiedad, provincia (sic) de panamá (sic), del Registro público (sic), propiedad del señor Luis Eduardo Maruri Wedemeyer" (F. 2).

La alzada se dirige contra sentencia de 5 de diciembre del año en curso, por medio de la cual el Primer Tribunal Superior decidió declarar no viable la presente iniciativa procesal constitucional.

Observa la Corte que el recurrente no utilizó el derecho de sustentación que le reconoce el artículo 2616 del Código Judicial, por lo que se procede ha exponer la fundamentación del tribunal a-quo.

RAZONES DEL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR

Mediante sentencia de 5 de diciembre de 1995, el Primer Tribunal Superior de Justicia declaró no viable esta demanda de amparo, por considerar que con anterioridad ya se había pronunciado sobre el fondo de la controversia, mediante sentencia de 19 de junio de 1995, que fuera confirmada por el Pleno de la Corte Suprema en sentencia de 20 de julio del año que decurre, en la oportunidad de iniciativa idéntica de Rubén Alvarado Carrillo, persona afectada por el acto atacado.

DECISIÓN DE LA CORTE

Considera la Corte que le asiste razón al tribunal de instancia en esta materia. A fojas 99 y siguientes del expediente aparecen copias debidamente autenticadas de las sentencias de 19 de junio y de 20 de julio de 1995, mediante las cuales se decidió denegar la acción de amparo de derechos fundamentales presentada anteriormente contra el mismo acto que ahora se pretende revocar.

Aun cuando en esos procesos figuran distintos actores, el proceder del segundo demandante constituye una actuación que la ley reprueba en el ejercicio de esta acción extraordinaria, bajo la denominación de **amparo sucesivo**, prohibida claramente por el artículo 2621 del Código Judicial, según el cual "Tampoco se podrán proponer ni admitir demandas de amparo sucesivas contra el mismo funcionario y contra la misma orden dictada por él, aunque se propongan ante Tribunales competentes distintos" (Subraya la Corte).

A lo anterior se agrega que la demanda fue presentada el 20 de noviembre de 1995, esto es, poco más de seis meses luego de dictado el acto jurisdiccional atacado, lo que demuestra que los demandantes pasan por alto la especial naturaleza de la acción de amparo de derechos fundamentales. Este instituto constitucional es de carácter ***extraordinario*** y se encuentra instituido en salvaguarda de los asociados que enfrentan menoscabo de sus derechos constitucionales, cuando la orden que los amenaza reviste características de **gravedad** e **inminencia**, por lo que se requiere su revocación inmediata, toda vez

que el derecho fundamental que se estima vulnerado requiere la tutela jurisdiccional urgente y efectiva (a. 2606 Código Judicial), lo que a todas luces no es el caso del proceso que ahora nos ocupa.

Por las anteriores consideraciones, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de 5 de diciembre de 1995, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, mediante la cual declara no viable acción de amparo de derechos fundamentales interpuesta por el licenciado José A. Henríquez, en representación de Jorge Leonidas Delgado y Zobeida Yadira de Delgado.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RAÚL A. CÁRDENAS V. EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE CIRO LUIS URRIOLA VELASCO CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DE 14 DE DICIEMBRE DE 1995 DICTADA POR LA FISCALÍA PRIMERA SUPERIOR DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, DIEZ (10) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Raúl A. Cárdenas V. ha interpuesto acción de amparo de garantías constitucionales, en nombre y representación del señor **CIRO LUIS URRIOLA VELASCO**, contra la resolución de 14 de diciembre de 1995, proferida por la Fiscalía Primera Superior del Cuarto Distrito Judicial.

La resolución impugnada fue dictada dentro del proceso penal que se le sigue a los señores ERIDES JESÚS BARRIOS CEDEÑO y CRISTÓBAL JESÚS PÉREZ CORTES, que ordena lo siguiente:

> "1. El cierre provisional de la Cantina Oriental, con Licencia Comercial número 19398, propiedad de CIRO LUIS URRIOLA VELASCO, ubicadas en Avenida Belisario Porras, Número 2740, Las Tablas y su puesta fuera del comercio y a órdenes de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, hasta tanto sea decidida en forma definitiva la presente causa.
>
> 2. El inventario de los bienes muebles y efectos que la Cantina Oriental posea y su entrega al administrador o propietario del mismo.
>
> 3. Recibirle Declaración Indagatoria al señor ARISTIDES MONTENEGRO, Administrador de la Cantina Oriental, por los cargos que la Fiscalía le formulará con respecto a su vinculación en delitos que tipifica la Ley de Drogas.
>
> 4. Se comisiona al Licenciado MARKEL IVAN MORA BONILLA, Secretario de Drogas, para que en "Funciones de Agente Especial" intervenga y asegure el cumplimiento de la presente resolución, así como para todos los efectos de la misma.
>
> 5. Háganse las comunicaciones respectivas." (Fojas 3 y 4).

Encontrándose el caso en la etapa procesal en la cual hay que decidir la admisibilidad de la acción, a ello se procede, previas las siguientes consideraciones.

El estudio de las constancias procesales pone de manifiesto que la orden atacada fue proferida por la Fiscalía Primera Superior del Cuarto Distrito Judicial, lo que implica la existencia de un conflicto entre el funcionario de instrucción y una de las partes; situación que puede ser resuelta mediante incidente de controversia, contemplado en el artículo 2009 del Código Judicial, que a la letra dice:

> **"ARTÍCULO 2009**. Las actuaciones de los agentes del Ministerio Público podrán ser objetadas por las partes mediante incidente de controversia, el que será resuelto por el Tribunal competente para conocer del proceso. Exceptúase la orden de detención preventiva, en los casos en que la medida se hubiere hecho efectiva.
>
> Tales incidentes se tramitarán como los de previo y especial pronunciamiento, sin interrumpir el curso del sumario ni la ejecución de la diligencia objetada.
>
> La apelación de la resolución que resuelva el incidente se concederá en el efecto diferido y se remitirán los autos al superior, quien decidirá sin más actuación."

El Licenciado Raúl A. Cárdenas sostiene que su poderdante, señor Ciro Luis Urriola Velasco, no es parte en este proceso. En efecto, no lo es, pues la acción penal que se ejerce no es contra él. El cierre de la cantina, pese a la redacción del último párrafo del artículo 262 del Código Penal, modificado por la Ley 13 de 1994, que habla de sanción, es una medida directamente aplicada a "locales o centros de diversión ... utilizados reiteradamente para la realización de delitos contemplados en esta Ley (drogas)". Expresamente se indica "aun cuando los dueños o administradores no hayan participado en la comisión de estos delitos."

No obstante la medida afecta o puede afectar los intereses patrimoniales del señor Urriola Velasco. Por esta consideración, su posición en el proceso penal es la de tercero incidental, definido por el artículo 2057 A del Código Judicial como "toda persona, natural o jurídica que ... sin estar obligada a responder patrimonialmente por razón del hecho punible, tenga un derecho económico afectado dentro del proceso".

Su calidad de tal lo faculta ampliamente para incidentar, conforme al artículo 2009 del Código Judicial, a pesar de no ser parte.

De lo anteriormente señalado se concluye que la resolución atacada mediante el presente amparo es susceptible de impugnación por la vía ordinaria, razón por la cual resulta manifiestamente improcedente y no debe ser admitido.

En consecuencia, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la acción de amparo de garantías constitucionales presentada por el Licenciado Raúl A. Cárdenas V., en representación del señor CIRO LUIS URRIOLA VELASCO.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR LA FIRMA DE ABOGADOS PEREIRA & PEREIRA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ROSA CHITRIT DE BERNAL, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DE 26 DE DICIEMBRE DE 1995, DICTADA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, BAJO LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA ELVIA M. BATISTA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO SALAS. PANAMÁ, DOCE (12) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma forense PEREIRA & PEREIRA en ejercicio del poder conferido por ROSA CHITRIT DE BERNAL ha interpuesto acción de Amparo de Garantías Constitucionales a favor de JORGE ELIECER BERNAL contra la orden de hacer contenida en la resolución de 26 de diciembre de 1995 proferida por la Magistrada ELVIA M. BATISTA del Segundo Tribunal Superior, en su calidad de sustanciadora del proceso penal seguido al amparista y otros.

Sostiene el accionante que mediante la resolución atacada, dictada por el Segundo Tribunal Superior, se ordena la celebración de la audiencia oral a JORGE ELIECER BERNAL "a pesar que en favor de éste existe un sobreseimiento definitivo, dictado por el mismo Segundo Tribunal Superior de Justicia mediante resolución de seis (6) de julio de mil novecientos ochenta y ocho (1988)".

Por cumplir con las exigencias formales preceptuadas por la ley la demanda de amparo fue admitida, por lo que se solicitó a la autoridad demandada el envío de actuación o, en su defecto, un informe acerca de los hechos materia del recurso.

El Segundo Tribunal Superior remitió a esta Superioridad, mediante Oficio N° 11 L. A. de 11 de enero de 1995, el informe que a continuación se transcribe:

> "PRIMERO: En efecto, mediante resolución de fecha seis (6) de julio de 1988, el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de la República de Panamá, procedió a sobreseer de manera definitiva al ciudadano JORGE ELIECER BERNAL GUZMÁN, dentro del proceso arriba descrito (ver fs. 821-851);
>
> SEGUNDO: Mediante memorial de fecha 15 de febrero de 1991, la Fiscalía Tercera Superior solicitó o recomendó a este Tribunal elevar el proceso ante nuestra máxima Corporación de Justicia, en grado de consulta, con la finalidad única de definir la situación jurídica de JORGE ELIECER BERNAL, en razón de lo normado en el artículo 2481 del Código Judicial, toda vez que éste guardaba en ese entonces la calidad de servidor público (fs. 1084- 1085);
>
> TERCERO: Mediante resolución del cinco de (5) de abril de 1991, este Tribunal Colegiado procedió a elevar a consulta la causa, con fundamento en la norma citada, a fin de que esa Superioridad resolviera lo de lugar (fs. 1087-1089);
>
> CUARTO: Fue así como mediante resolución de fecha 24 de febrero de 1992, y bajo la ponencia del Honorable Magistrado José Manuel Faúndes, que la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, resolvió finalmente modificar parcialmente la resolución elevada a consulta, revocando el sobreseimiento definitivo proferido en favor de JORGE ELIECER BERNAL, y lo encausándolo criminalmente por el delito de HOMICIDIO en detrimento de MANUEL VÁSQUEZ LÓPEZ (Q. E. P. D.), considerando que existían los méritos suficientes para ello (fs. 1100-1111);
>
> QUINTO: Para finalizar, queremos señalar que el artículo 1211 del Código Judicial señala, en referencia a la controversia planteada, que LA RESOLUCIÓN QUE DEBA SER CONSULTADA, NO SE EJECUTORIARA MIENTRAS SE SURTA LA CONSULTA."

Del informe citado se colige, como en efecto señala el amparista, que el Segundo Tribunal Superior declaró sobreseimiento definitivo a favor de JORGE ELIECER BERNAL. Sin embargo, por recomendación del Ministerio Público el proceso se elevó en grado de Consulta a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en virtud de lo normado por el artículo 2481 del Código Judicial en concordancia con lo dispuesto por el artículo 1211 de ese mismo cuerpo de leyes. En ese sentido, la Corte resolvió, en resolución de 24 de febrero de 1992, REVOCAR el sobreseimiento definitivo declarado a favor de JORGE ELIECER BERNAL, abriendo causa criminal en su contra por el delito de HOMICIDIO en perjuicio de MANUEL VÁSQUEZ LÓPEZ.

Resulta evidente, entonces, que la Sala Segunda de la Corte determinó que la resolución donde se decretó inicialmente el sobreseimiento definitivo no quedaba ejecutoriada, hasta tanto no se surtiese la consulta contemplada por el artículo 2481 del Código Judicial. Por esa razón, la actual realidad procesal consiste en que la resolución en firme es la posterior, es decir, aquella mediante la cual se resolvió llamar a juicio al amparista.

Aunado a lo expuesto cabe señalar que la resolución impugnada no contiene una orden de hacer pues, como es sabido, una vez que se constituye el llamamiento a juicio, por lo general, el resto del procedimiento, previo a la celebración de la audiencia, es de mero trámite. Observa la Corte, por otro lado, que lo dispuesto por la Honorable Magistrada del Segundo Tribunal Superior de Justicia, en cuanto a la celebración de la audiencia oral en este caso, no encierra una orden arbitraria o abusiva de esas que, por su propia naturaleza y características, configuran en sí mismas una violación de las garantías constitucionales cuyo remedio se encuentra en la utilización del recurso extraordinario de amparo. Al contrario, la funcionaria demandada por el amparista estaba forzada, según lo ordena expresamente la ley, a actuar conforme lo hizo y mal puede, entonces, demandársele por supuestas inobservancia a la legalidad o por violación de las garantías constitucionales.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO VIABLE la acción de amparo de garantías constitucionales propuesto a favor de JORGE ELIECER BERNAL contra la resolución de 26 de diciembre de 1995 dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) ELIGIO SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ENOCH A. RODRÍGUEZ, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ENRIQUE BEER, EN SU CONDICIÓN DE PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE BEER LIMITED, S. A., CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 15 DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 1995, PROFERIDA POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 11. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOCE (12) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Enoch A. Rodríguez, actuando en nombre y representación de ENRIQUE BEER, en su condición de presidente y representante legal de la empresa Beer Limited, S. A., ha interpuesto demanda de Amparo de Garantías Constitu-

cionales contra la orden de hacer contenida en la Resolución N° 15 de 14 de septiembre de 1995, proferida por la Junta de Conciliación y Decisión N° 11.

Para admitir la presente demanda de amparo de garantías constitucionales es necesario examinarla a fin de comprobar si está debidamente formulada porque reúne los requisitos de toda demanda, los requisitos señalados en el artículo 2610 del Código Judicial, y además si no es manifiestamente improcedente.

En el presente caso la demanda carece de uno de los requisitos exigidos por el ordinal 4 del artículo 2610 del Código Judicial, puesto que en la misma se indica que la orden de hacer impugnada viola el artículo 32 de la Constitución Nacional, pero no se señala ni se explica el concepto de la infracción de la norma constitucional que se estima infringida. Esta omisión la hace inadmisible por establecerlo expresamente el artículo 2611 del Código Judicial.

El Pleno de esta Corporación de Justicia ha manifestado reiteradamente que el amparista debe expresar en la demanda los motivos por los cuales se ha producido la violación del orden constitucional por la orden impugnada, razones que servirán de base al Tribunal de Amparo para hacer la confrontación de la orden impugnada con la norma constitucional invocada como violada.

Como ejemplo citamos dos fallos:

> "La lectura del libelo permite establecer que el demandante no precisa el **concepto en que se produce la infracción** de tal principio. En cuanto al artículo 32, se da la particularidad de que la no determinación de la orden atacada, hecho sumado a la insuficiencia de la explicación del concepto que se brinda, no permite al tribunal de amparo disponer los elementos de juicio jurídicos necesarios para el juzgamiento de la pretensión." (Resolución de 17 de febrero de 1993, dictada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en el Amparo de Garantías Constitucionales promovido por Manuel Salvador González contra el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial).
>
> "Como concepto de la alegada infracción de la norma superior en cita, el demandante se limita a expresar únicamente, como fuera de contexto (f. 9), "Por cuantía tanto la Fiscalía del Circuito de Coclé, como el Juzgado Segundo del Circuito de Coclé y el Segundo Tribunal Superior de Justicia", redacción escueta que visiblemente no cumple la finalidad de explicar el concepto de la violación que se alega, y que, por su insuficiencia, impide al Tribunal de amparo tomar conocimiento de la razones jurídicas que pudieran acreditar la violación de "los derechos y garantías que la Constitución consagra" en favor del amparista." (Resolución de 7 de diciembre de 1993, dictada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en el Amparo de Garantías Constitucionales promovido por Franklin Lezcano Concepción en contra del Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial).

De consiguiente, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la acción de amparo de garantías constitucionales propuesta por el licenciado Enoch A. Rodríguez, en nombre y representación de ENRIQUE BEER, en su condición de presidente y representante legal de BEER LIMITED, S. A., contra la orden de hacer contenida en la resolución N° 15 de 14 de septiembre de 1995, proferida por la Junta de Conciliación y Decisión N° 11.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICDO. MANUEL AROSEMENA SANTANA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE JUAN CHIRU, EN SU CONDICIÓN DE SECRETARIO GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ALIMENTACIÓN, BEBIDAS, HOTELES Y CONEXOS DE PANAMÁ, (SITABEHCOP), CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° D. M. 39/95 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 1995, PROFERIDA POR EL MINISTERIO DE TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, QUINCE (15) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **Manuel Arosemena Santana** en nombre y representación de **JUAN CHIRU**, Secretario General y Representante Legal del Sindicato de Trabajadores de la Alimentación, Bebidas, Hoteles y Conexos de Panamá (SITABEHCOP), ha interpuesto acción de amparo de garantías constitucionales contra la orden de hacer contenida en la Resolución N° D. M. 39-95 de 17 de noviembre de 1995, proferida por el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social.

La orden de hacer a que hemos hecho referencia, trata de un recurso de apelación resuelto por el Ministro de Trabajo, en razón de un conflicto surgido entre dos sindicatos, como lo son el Sindicato de Trabajadores de la Alimentación, Bebidas, Hoteles, y Conexos de Panamá (SITABEHCOP) y el Sindicato Industrial de Trabajadores de Comida Rápida (SITCRA), para la negociación de una convención colectiva con la empresa Herserv, S. A.

CONSIDERACIONES DEL AMPARISTA

Señala la parte actora que la Resolución N° D. M. 39-95 de 17 de noviembre de 1995, proferida por el Ministro de Trabajo y Bienestar Social, viola los artículos 17, 18, 32, y 73 de la Constitución Política de la República de Panamá.

Las razones que sustentan la apreciación del amparista apuntan a que el Sindicato de Trabajadores de la Alimentación, Bebidas, Hoteles y Conexos de Panamá (SITABEHCOP) y la empresa Servicios Pollo Frito, S. A. (ahora Hersev, S. A.) celebraron una convención colectiva de trabajo por vía directa, cuya vigencia y validez era hasta el 15 de marzo de 1995, situación ésta determinada por el Pleno de la Corte Suprema en Sentencia de 10 de mayo de 1991. La Máxima Corporación de Justicia en aquel entonces, señaló que aunque el registro en el Ministerio de Trabajo de la convención colectiva celebrada de manera directa no se haya verificado, es válida y produce todos los efectos que de ella emanan. En este caso el registro de la convención colectiva sólo produce los efectos de publicidad, por lo que no se requiere el procedimiento de homologación.

Sigue comentando la parte afectada, que el Sindicato Industrial de Trabajadores de Comida Rápida (SITCRA), presentó pliego el 19 de diciembre de 1994, para la celebración de otra convención colectiva con la empresa Hersev, S. A. (antes Servicios Pollo Frito, S. A.) en el Departamento de Relaciones de Trabajo, mientras se encontraba vigente la Convención Colectiva de Trabajo celebrada entre el Sindicato de Trabajadores de la Alimentación, Bebidas, Hoteles y Conexos de Panamá y la empresa mencionada. En este sentido señala que a pesar de que el artículo 15 de la Ley 8 de 1981 prevé que no se admitirán pliegos de peticiones que tengan por objeto introducir modificaciones directas o indirectas, o cláusulas nuevas a la Convención Colectiva, el Director General de Trabajo, ordenó, por medio de la Nota N° 19 de diciembre de 1994, a la empresa Hersev, S. A. diera contestación al pliego presentado por el SITCRA, lo que claramente contraviene la norma citada. A raíz de esto último, la empresa Hersev, S. A., interpuso un amparo de garantías constitucionales contra la Nota de 19 de diciembre de 1994 y la Corte al pronunciarse en Sentencia de 27 de enero de 1995, expresó que ambos Sindicatos (SITABEHCOP y SITCRA) debían solicitar al Director General de Trabajo la celebración de la Convención Colectiva, con el objeto de que se resolviera el conflicto de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 402 del

Código de Trabajo, es decir en atención al gremio que tuviera la mayoría de los trabajadores afiliados dentro de la empresa.

Según el recurrente, la Dirección General de Trabajo bajo el pretexto de que se estaba cumpliendo con lo ordenado por la Corte, solicitó al Departamento de Organizaciones Sociales la expedición de una certificación que estableciera cual era entre los dos sindicatos el que tenía la mayoría de los afiliados dentro de la empresa. Que dicho funcionario apoyado por la Certificación N° 363. DOS. 95 de 20 de abril de 20 de abril de 1995 del Departamento de Organizaciones Sociales, decidió mediante Resolución N° 1-95 de 16 de junio de 1995, declarar al Sindicato Industrial de Trabajadores de Comida Rápida (SITCRA) como el mayoritario y a quien le asistía el derecho de negociar la Convención Colectiva con las empresas Hersev, S. A., además de que se ordenó se iniciara el proceso de negociación.

Continúa exponiendo el demandante, que el Director General de Trabajo interpretó y aplicó erradamente la Sentencia de 27 de enero de 1995 proferida por la Corte Suprema, ya que a pesar de que la empresa no demostró que existía una convención, la Dirección General de Trabajo omitió informar este hecho, lo que le correspondía a ese Despacho aplicar el correctivo y en consecuencia rechazar la pretensión del Sindicato Industrial de Trabajadores de Comida Rápida (SITCRA).

Contra la Resolución N° 1-95 de 16 de junio de 1995 se interpuso recurso de apelación, y además el 8 de noviembre del mismo año se presentó un incidente de recusación contra el licenciado Hipólito Martínez, en razón de que las dos secretarias de la Secretaría General del Despacho Superior del Ministerio de Trabajo, informaron a la parte actora que dicha persona era el Asesor Legal Encargado y era el responsable del expediente, cuando este funcionario es el Secretario Judicial Titular de la Dirección General de Trabajo quien intervino junto con el Director General en el manejo del expediente en primera instancia.

Por último, indica el aquejado que la situación se agrava más cuando la Resolución de primera instancia es confirmada por el Ministro de Trabajo, apoyándose en la certificación expedida por el Departamento de Organizaciones Sociales, que no es más que el resultado de una orden de la propia Dirección General de Trabajo. Que también se pretende de un plumillazo desconocer instituciones fundamentales del derecho social del trabajo como lo es la Convención Colectiva de Trabajo ya que se anula una Convención Colectiva negociada por vía directa entre los legitimados para ello.

INFORME DE CONDUCTA DEL MINISTRO DE TRABAJO

El Ministro de Trabajo y Bienestar Social rindió informe de conducta, por medio de la Nota de 21 de diciembre de 1995, y en el cual señala que la decisión contra la cual se recurre fue producto del trámite administrativo legal para determinar el sindicato mayoritario que puede celebrar una Convención Colectiva en el evento de la existencia de varios sindicatos en una empresa, como se dio en el presente caso. Que esto se hizo en cumplimiento de la Sentencia de 27 de enero de 1995 en razón de otro amparo propuesto por en esta misma causa, lo que indica la dualidad de amparo en un mismo proceso.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

De acuerdo a los antecedentes de este amparo de garantías constitucionales, este Tribunal Colegiado hace la aclaración que sólo se entrará a conocer lo referente a si procede o no conocer la recusación en contra del licenciado Hipólito Martínez, ya que en lo concerniente a la pretensión del amparista de que se anule de la Convención Colectiva, no procede resolver esta situación. Y decimos que no es procedente ya que en primer lugar, parte del contenido de la Resolución N° D. M. 39-95 de 17 de noviembre de 1995, proferida por el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, confirma una decisión de primera instancia, Resolución N° 1-95 de 16 de junio de 1995, que en todo caso debió ser esta última la atacada por medio del amparo.

En un número plural de ocasiones este Máximo Tribunal ha recalcado que en

estos casos la acción siempre debe ser dirigida contra el **funcionario que expide la orden** y no contra el funcionario que simplemente confirma una decisión asumida (art. 2608 del Código Judicial). Esta exigencia se desprende de un enjuiciamiento lógico-jurídico de la situación, puesto que al solicitar el amparista que se suspenda la orden impugnada, ningún efecto se conseguiría con dicha suspensión, ya que la resolución que la confirma es de la misma índole. Esta posición ha venido siendo expuesta jurisprudencialmente en casos similares a los que nos ocupan: v.g. sentencia de 5 de diciembre de 1990; sentencia de 9 de noviembre de 1990; sentencia de 27 de agosto de 1990; sentencia de 30 de diciembre de 1993; y sentencia de 25 de febrero de 1993, entre otros casos.

En segundo término, afirma el Ministro de Trabajo que la Resolución objeto de la acción constitucional trata materia administrativa, lo que nos obliga a manifestar, que nos encontramos frente a la impugnación mediante la acción extraordinaria de Amparo de Garantías Constitucionales, de un acto típicamente administrativo, que pudo ser objeto de revisión por parte del Tribunal competente para examinar la legalidad de los actos administrativos, como lo es la Sala Tercera de la Corte.

El Pleno de esta Corporación Judicial ha venido sosteniendo de manera reiterada, que en los casos en que la acción de amparo recaiga sobre un acto de naturaleza administrativa susceptible de ser impugnado mediante alguno de los Procesos Contencioso-Administrativos, resulta imprescindible agotar este medio procesal, antes de presentar la acción de Amparo de Garantías, conforme a lo dispuesto en el artículo 2606 del Código Judicial, y toda vez que en aquella instancia pueden practicarse las pruebas pertinentes, y examinar con mayor profundidad la alegada violación. Sobre el particular son consultables las sentencias de Amparo de 20 de abril de 1990; 21 de febrero de 1992; 27 de enero de 1993; y de 13 de enero de 1994, entre otras.

Entrando en materia, la recusación propuesta por el actor contra el licenciado Hipólito Martínez, descansa en el hecho de que este señor intervino en primera instancia como Secretario Judicial de la Dirección General de Trabajo junto con el Director General de Trabajo, en el manejo del expediente contentivo de la controversia sindical objeto de este amparo, y que como asesor del Ministro de Trabajo también tomó parte del mismo, al momento de que esta última autoridad dictara la Resolución atacada.

Observa el Pleno, que el Ministro de Trabajo al referirse a la recusación incoada ante su Despacho manifiesta lo siguiente:

> **"ARTÍCULO PRIMERO: RECHAZAR por improcedente el incidente de Recusación presentado en contra del licenciado Hipólito Martínez C, por el Sindicato de Trabajadores de la Alimentación, Bebidas, Hoteles y Conexos de Panamá (SITABEHCOP)."**

Salta a la vista, que lo indicado por el Ministro de Trabajo, que ha constituido una de las razones de la inconformidad del demandante, no es materia que pueda ser objeto de un amparo de garantías constitucionales, debido a que esto no es una orden de hacer o no hacer, tal como lo exige las normas Constitucionales y del Código Judicial.

La Corte se ha manifestado en situaciones análogas **(ver Sentencia de 22 de octubre de 1993)** a la presente y ha negado que este tipo de decisiones pueda revestir la forma de una orden de no hacer.

Desde el punto de vista doctrinal, la acción de amparo de derechos fundamentales ha sido instituida para enervar órdenes de hacer o de no hacer que contengan una amenaza o una violación efectiva de derechos subjetivos de naturaleza Constitucional.

En ese orden de ideas, estamos en presencia de una orden de hacer si un acto administrativo o jurisdiccional contiene en su parte dispositiva o resolutiva un mandato imperativo dirigido al afectado o que deba cumplir o ejecutar alguna autoridad pública y de ese acto positivo se deriva un virtual o

actual desconocimiento de derechos fundamentales subjetivos del amparista.

De otra parte, estaríamos ante una orden de no hacer si un acto administrativo o jurisdiccional contiene en su parte dispositiva o resolutiva una prohibición o una abstención dirigida al afectado o a determinada autoridad pública y de ese acto negativo se irroguen graves amenazas o violaciones de derechos fundamentales inherentes al titular de la acción de amparo.

Retomando la pretensión del demandante, estamos ante una decisión del Ministro de Trabajo y Bienestar Social, en la cual rechaza por improcedente un incidente de recusación promovido contra el licenciado Hipólito Martínez, del cual a claras luces no se desprende una orden imperativa, ni una prohibición, ni abstención, simplemente no se aceptó el incidente, ya que como explicara el alto funcionario, aquel no tiene mando ni jurisdicción.

El Pleno de la Corte concluye, que de acuerdo a todo lo planteado no es procedente entrar al fondo de esta acción constitucional.

Por las anteriores consideraciones, los Magistrados en Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN NO VIABLE la acción de amparo de garantías constitucionales propuesto por el licenciado Manuel Arosemena Santana en nombre y representación de JUAN CHIRU, Secretario General y Representante Legal del Sindicato de Trabajadores de la Alimentación, Bebidas, Hoteles y Conexos de Panamá (SITABEHCOP).

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR LA FIRMA DE ABOGADOS C. GONZÁLEZ Y ASOCIADOS EN REPRESENTACIÓN DE JUAN FRANCISCO KIENER EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA PRODUCTOS KIENER, S. A., Y EN CONTRA DE LA SENTENCIA DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1995 PROFERIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, QUINCE (15) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma forense **C. GONZÁLEZ Y ASOCIADOS**, actuando en su calidad de apoderada judicial de **JUAN FRANCISCO KIENER**, quien ostenta la representación legal de la sociedad **PRODUCTOS KIENER, S. A.**, ha interpuesto acción de amparo de garantías constitucionales contra la orden de hacer contenida en la sentencia de 6 de noviembre de 1995 expedida por el Tribunal Superior de Trabajo.

En la referida resolución judicial se revoca la sentencia PJ-6 N° 19 de 10 de julio de 1995 expedida por la Junta de Conciliación y Decisión N° 6 que declaró justificado el despido sufrido por el señor **RAFAEL MEDINA**. En su lugar, se declara injustificado el despido y se ordena el reintegro del trabajador con pago de salarios caídos.

Las razones invocadas por el amparista para fundamentar la supuesta conculcación de las garantías constitucionales a la empresa **PRODUCTOS KIENER, S. A.**, se centran de manera medular en el argumento de que el despido del trabajador **MEDINA** se produce como consecuencia de haber operado silencio administrativo en

relación a una solicitud de autorización de despido presentada ante la Dirección General de Trabajo el día 12 de enero de 1994. Ante la falta de pronunciamiento expreso de la autoridad administrativa de trabajo, y una vez transcurrido el término al que hace alusión el artículo 215 del Código de Trabajo, la empresa procedió a comunicar al señor **MEDINA** su despido. Este fue impugnado ante la Junta de Conciliación y Decisión, instancia que declaró justificado el despido, decisión que fue posteriormente revocada por el Tribunal Superior de Trabajo que no reconoce la existencia de silencio positivo en este caso. Estima la parte actora que esta última actuación vulnera la garantía constitucional del debido proceso legal.

Acogida la demanda, se corrió traslado al funcionario responsable del acto acusado, quien mediante Nota N° 1452 de 5 de diciembre de 1995 rinde un informe explicativo de su actuación en los siguientes términos:

> "Con respecto al Amparo de Garantías Constitucionales y luego de examinar el escrito suscrito por C. GONZÁLEZ & ASOCIADOS, formalizando la demanda y en especial los supuestos fundamentos de hechos en que se funda la pretensión, las garantías constitucionales infringidas y el concepto en que lo ha sido, considera que el Tribunal Superior de Trabajo, como órgano jurisdiccional colegiado se segunda instancia, que al dictar la resolución judicial, objeto del Amparo, no ha incurrido en violación de disposición alguna de la Constitución Política de la República y muy por el contrario, en la misma se ha guardado estricto respeto a las normas legales y constitucionales.
>
> En efecto, el Tribunal Superior de Trabajo consistente en su propia jurisprudencia laboral, incluso la proferida por la Corte Suprema de Justicia, la Sala Tercera, consideró de lugar revocar la Sentencia de la Junta de Conciliación y Decisión N° 6, habida cuenta de que no era posible reconocer la existencia del silencio administrativo positivo invocado por el recurrente, en el presente caso laboral, tal como se expresó en la resolución afectada."

Una vez esbozados de manera sucinta los argumentos de las partes en el proceso, procede el Pleno de la Corte a repasar íntegramente los hechos que dieron origen a la controversia constitucional planteada, en vías de deslindar las circunstancias que acontecen en el negocio sub-júdice.

ANTECEDENTES

El día 11 de noviembre de 1993 **PRODUCTOS KIENER, S. A.** presentó ante la Dirección General de Trabajo una solicitud de autorización de despido de 40 trabajadores con base a lo establecido en el artículo 213 literal c del Código de Trabajo. Esta solicitud fue rechazada mediante resolución de 21 de diciembre de 1993 al considerarse, entre otros puntos, que no se habían aportado los elementos de convicción necesarios para acreditar la existencia real de la causal económica para despedir, y por la falta de información detallada sobre a qué empresas o grupos de empresas de **PRODUCTOS KIENER, S. A.** pertenecían los trabajadores de la solicitud de despido.

En suma, la Dirección General de Trabajo consideró que solicitud presentada adolecía de dos vicios concretos: la ausencia de información financiera completa que demostrase la existencia de la causal económica para despedir, y el informe consolidado de si se trataba de empresas que conformaban una unidad económica con un listado detallado de trabajadores **por empresa**, categoría, tiempo de servicio en atención al orden de prelación.

Sin embargo, dicha resolución fue apelada por la empresa, y el Despacho Superior del Ministerio de Trabajo consideró, en auto para mejor proveer de 13 de enero de 1994 con vista a resolver la apelación, que el informe financiero practicado por el departamento de Auditoría de ese Ministerio debía ser ampliado para tener una mejor evaluación de la realidad económica de las empresas, puesto que se trataba de un estudio preliminar y poco profundo.

Ampliado el informe y tomándolo como base, el Despacho Superior revoca lo decidido el 21 de diciembre de 1993 y ordena admitir y resolver la solicitud de autorización de despido.

Sin embargo, antes de que se dictase el auto para mejor proveer del Ministro de Trabajo, la empresa **PRODUCTOS KIENER, S. A.** presenta el día 12 de enero de 1994 una nueva solicitud de despido de un grupo detallado de 40 trabajadores, listados por nombre, empresa, categoría, número de años de servicio etc., fundamentando la misma en la gravedad de la situación financiera de las empresas que estaban operando con un capital de trabajo negativo, y que por ende no tenían capacidad para hacerle frente a sus compromisos corrientes, a tal punto que se ponía en peligro la continuación de las operaciones por parte de éstas, con el consiguiente cierre total de operaciones y la pérdida del trabajo para los otros 200 trabajadores permanentes y eventuales.

Esta solicitud, tal como se desprende de la certificación visible a foja 63 del expediente laboral **no recibió ningún trámite**, esto es, **que no fue ni admitida ni rechazada**, y la Dirección General de Trabajo permaneció en completa y absoluta inactividad en relación a la misma.

Como se observa, pese a que el 12 de enero de 1994 se formaliza una nueva solicitud de autorización de despido, el día 13 de enero el Despacho Superior dictaba auto para mejor proveer con relación a la otra solicitud de 11 de noviembre de 1993, para que posteriormente en una resolución de 6 de abril de 1994, la Dirección General de Trabajo fallara resolviendo esa misma autorización de despido, concediéndola en lo que respecta a 20 trabajadores.

Para tal fecha habían transcurrido ampliamente y en exceso los 60 días calendarios para que la Dirección General se pronunciara en cuanto a la otra solicitud de despido de 40 trabajadores presentada el 12 de enero, sin que mediara pronunciamiento alguno. Y dado que la resolución de 6 de abril de 1994 también fue apelada, esta vez por el Sindicato Unión de Empleados de Comercio de Panamá, el Despacho Superior mediante resolución de 16 de mayo de 1994 confirma la autorización de despido de 20 trabajadores, listándolos por nombre propio, ya que no se había adjuntando en la dicha solicitud los nombres de los trabajadores.

En cuanto a la segunda solicitud de autorización de despido presentada el 12 de enero de 1994, en reiteradas ocasiones (14 de marzo de 1994; 16 de marzo de 1994; 21 de marzo de 1994) la empresa **PRODUCTOS KIENER** le solicitó a la Dirección General de Trabajo que se certificase si había recaído o no pronunciamiento en relación a la misma, sin obtener respuesta alguna. La empresa consideró en consecuencia, una vez transcurrido el término de ley, que se había producido la autorización, al operar el silencio administrativo con efectos afirmativos o positivos.

Recordemos que el artículo 215 del Código de Trabajo recoge la presunción legal del silencio de la administración con efectos positivos en los casos en que la solicitud de autorización de despido se basa en una causal económica, y la misma no se resuelve en el término de 60 días calendarios, lo que hace que dicha causal de presuma plenamente justificada, y puede el empleador efectuar el despido. El acto presunto se convierte en la autorización para dar por terminada la rela-ción de trabajo **de manera justificada**. De consiguiente, la empresa consideró que la autorización de despido de los 40 trabajadores plenamente identificados y distribuidos en las diferentes entidades empleadoras entre los que se incluyó el señor **RAFAEL MEDINA** (folios 67-68 del expediente laboral) había sido extendida.

Para el día en que se presenta la última solicitud de certificación de si existía o no pronunciamiento, aún no se había procedido al despido del señor **RAFAEL MEDINA**. Reposa a foja 3 del expediente laboral remitido por la Junta de Conciliación N° 6 la carta de comunicación del despido del trabajador **RAFAEL MEDINA** quien fungía como Aseador Nocturno para **PRODUCTOS KIENER, S. A.** fechada 7 de abril de 1994 que se haría efectiva a partir del día siguiente. La justificación del despido, tal como se desprende del mismo texto, es que se había producido la autorización de despido por causas económicas al operar el silencio

administrativo positivo.

El día 12 de abril de 1994, el señor **RAFAEL MEDINA** presentó ante las Juntas de Conciliación y Decisión, una demanda por despido injustificado contra la empresa **PRODUCTOS KIENER, S. A.** La demanda en comento quedó posteriormente radicada en la Junta de Conciliación y Decisión N° 6.

Si bien la Junta de Conciliación consideró que debía declinar competencia en el negocio en la Dirección General de Trabajo por tratarse de una autorización de despido con base al artículo 215 del Código de Trabajo (cfr. foja 5) dicha instancia administrativa consideró que no era competente para conocer del asunto al indicar que sólo compete a dicha instancia la tramitación de las solicitudes de autorizaciones de despido, verificación el pago de la indemnización de acuerdo al artículo 225 del Código de Trabajo y el estricto cumplimiento del orden de prelación, y que compete a las Juntas de Conciliación el reconocimiento de los despidos donde se dice cumplida la autorización para despedir (expresamente o por silencio administrativo).

Creado el conflicto de competencia, correspondió al Tribunal Superior de Trabajo determinar qué instancia era competente para examinar la demanda por despido injustificado, y en sentencia de 9 de septiembre de 1994 señala que le corresponderá el conocimiento a la Junta de Conciliación y Decisión.

La Junta, en audiencia realizada el día 20 de junio de 1995 emite fallo oral y desestima la pretensión del demandante, arribando a la conclusión de que el despido del trabajador **RAFAEL MEDINA** era justificado. (Cfr. foja 42 del expediente).

Esta decisión se explica con detalle en la sentencia de 10 de julio de 1995, cuando la Junta de Conciliación y Decisión N° 6, en un examen exhaustivo de las situaciones que convergen en el expediente señala que por una parte, si bien existía una solicitud de autorización de despido pendiente de resolución en firme desde el día 11 de noviembre de 1993, en la dicha solicitud no se incluía el nombre específico de **RAFAEL MEDINA** (los apoderados de la empresa han sostenido y reafirmado que la segunda solicitud era distinta a la presentada el noviembre de 1993) lo que sí se planteaba de manera expresa en la segunda solicitud, y que si la Dirección de Trabajo consideraba que existía una situación procesal de **litispendencia** así debió pronunciarse desde el momento de presentada la solicitud de 12 de enero de 1994, lo cual evidentemente no se realizó y así lo acepta la autoridad administrativa de manera clara cuando a folio 63 indica que dicha solicitud no fue tramitada, aunque hace mención de manera vaga e imprecisa en el párrafo anterior a la circunstancia de que existía una solicitud anterior de autorización de despido.

Cabe resaltar que esta admisión está contenida dentro de una certificación requerida por la propia empresa **PRODUCTOS KIENER, S. A.** para que se les informase sobre cuál había sido la suerte de la solicitud de autorización de despido, que tiene fecha de 29 de julio de 1994 (6 meses después de presentada la segunda solicitud y 3 meses después de que se despidiera al señor **MEDINA**).

La Junta de Conciliación y Decisión N° 6, bajo la coordinación de FERNANDO ARJONA fue enfática en este punto al indicar:

> "Si la Dirección General de Trabajo hubiese considerado que la solicitud de autorización de despido que presentara la demandada en una nueva versión el día 12 de enero de 1994, era en esencia la misma que ya se había presentado el 11 de noviembre de 1993 y que estaba recibiendo la sustanciación correspondiente debió entonces rechazarla de plano, pues existía un pleito pendiente. Recibirla y no admitirla, ni pronunciarse a favor o en contra mientras transcurrían los 60 días calendario, daba inequívocamente a lugar a que se configurar el silencio administrativo del que trata el artículo 215 del Código de Trabajo, que obviamente al concluir al término de ley hacía posible el despido del trabajador Medina, cuyo despido en concreto sí buscaba esta segunda solicitud."

Pese a que quedan ampliamente explicadas las razones que motivaron la decisión de la Junta al considerar que el despido de **RAFAEL MEDINA** era justificado al cristalizarse la autorización tácita de despido por causa económica, el Tribunal Superior de Trabajo, en grado de apelación, mediante resolución de 6 de noviembre de 1995 que contó con un Salvamento de Voto, revoca la sentencia y en su lugar declara injustificado el despido, con fundamento en dos puntos medulares:

1. que la solicitud de 11 de noviembre de 1993 y de 12 de enero de 1994 no son solicitudes distintas como afirma el amparista; y

2. que no puede reconocerse en este caso la existencia de silencio positivo de conformidad con lo expresado por la Sala Tercera de la Corte Suprema en sentencia de Casación Laboral de 22 de mayo de 1995. Esta fundamentación se reitera en el informe de conducta transcrito en párrafos anteriores.

GARANTÍAS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN INFRINGIDAS

Considera el recurrente que el acto acusado resulta violatorio del artículos 32 de la Constitución Nacional contentivo de la garantía del debido proceso legal.

Reproducimos a continuación el texto constitucional referido:

> "Artículo 32. Nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, ni más de una vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria."

La violación acusada se sustenta con el contenido del artículo 215 del Código de Trabajo, cuyo tenor literal se enuncia:

> "Artículo 215. Cuando el despido tuviese como causa una de las señaladas en el acápite c) del artículo 213, el empleador deberá comprobar la causa respectiva ante las autoridades administrativas de trabajo.
>
> En los casos de que trata este artículo, el despido sin el cumplimiento de los requisitos señalados en el inciso anterior, se consideran de pleno derecho injustificado. Sin embargo, si al vencimiento de plazo de sesenta días calendarios, la autoridad administrativa de trabajo no ha resuelto la solicitud, el empleador podrá proceder al despido, el cual se considerará plenamente justificado quedando obligado al pago de la indemnización que establece el artículo 225".

Estima el amparista que se ha violado el debido proceso legal en este caso, con fundamento en el hecho de que el Tribunal Superior de Trabajo revoca una sentencia de primera instancia, desconociendo que el despido del trabajador con base en el 215 era justificado, utilizando como soporte legal una sentencia expedida por la Sala Tercera de la Corte que no recoge ni resuelve de manera directa ni indirecta la situación debatida en el caso del despido del trabajador **RAFAEL MEDINA**.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Esta Superioridad, una vez examinadas las circunstancias que acontecen en el negocio debe externar lo siguiente:

En primer término, las garantías objetivas del debido proceso han sido claramente delimitadas por jurisprudencia reiterada de esta Superioridad. En este sentido, de acuerdo con el principio de **estricta legalidad procesal**, la administración de justicia debe ejercitarse conforme a los trámites establecidos en la Ley. Ello implica, el acatamiento de las **formalidades básicas o esenciales que rigen la actividad jurisdiccional: asegurarse a las partes en todo proceso legalmente establecido la oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal**

competente, de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso, de contradecir las aportadas por la contraparte, y de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por la ley contra resoluciones judiciales, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos.

Este mismo Tribunal ha sido enfático al indicar que la finalidad de las acciones de amparo no es la de erigirse en una tercera instancia que valore el juicio crítico externado por un tribunal jurisdiccional o instancia administrativa, en lo relativo a la evaluación y valoración probatoria, dado que el debate de fondo de aquella materia es ajena a la acción de amparo, por no tener la categoría de cuestión constitucional.

Fue necesario examinar de manera integral los antecedentes remitidos, realizar una sinopsis de los hechos que se registran en este caso (que sirven como marco referencial para delimitar las incidencias de esta controversia) y la acción de Amparo propuesta, para concluir que en este negocio el punto materia de conflicto no es la norma constitucional cuya violación se alega (artículo 32) y que no se plantea el desconocimiento o pretermisión de un trámite o formalidad esencial del proceso laboral, sino que ha sido formulada con el fin de enervar el juicio apreciativo externado por el Tribunal Superior de Trabajo, que al conocer en segunda instancia del Proceso Laboral incoado por el señor **RAFAEL MEDINA** decidió revocar la sentencia proferida por la Junta de Conciliación y Decisión N° 6, y en su lugar declaró injustificado el despido del prenombrado, con fundamento en un estudio de las constancias procesales existentes según las reglas de la sana crítica del que concluyó que no había operado el silencio positivo que permitiera el despido justificado del trabajador por causa económica.

Es preciso enfatizar que el Amparo es una acción independiente, que tiende a **reparar violaciones directas** a los derechos constitucionales infringidos, razón por la cual, pese a que no existe otra vía procesal para que la empresa **PRODUCTOS KIENER, S. A.** pueda impugnar la sentencia expedida, por muy atendible que fuese la inconformidad del recurrente, el Amparo no puede convertirse en una instancia más para valorar circunstancias propias de la apreciación del Juzgador al ponderar las pruebas y elementos que se allegaron al proceso, y que fueron evaluadas conforme a la sana razón y al conocimiento experimental de las situaciones que rodeaban el negocio.

A la Corte no le es dable en consecuencia, contrariar por vía extraordinaria del Amparo de Garantías Constitucionales la evaluación objetiva de las pruebas efectuada por el Tribunal Superior de Trabajo, y dado que éste era el punto medular invocado, la acción presentada, pese a que inicialmente fue admitida en aplicación del principio in dubio pro libertate, no puede recibir una decisión de mérito.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO VIABLE el Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por la firma forense C. GONZÁLEZ & ASOCIADOS, en representación de la empresa PRODUCTOS KIENER, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(SALVAMENTO DE VOTO)
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

Disiento de la decisión que antecede por las siguientes razones: 1°

Considero que se trata de un asunto propio de un amparo de garantías constitucionales; 2° Estamos ante una orden de hacer que lesiona derechos reconocidos a las personas que someten sus conflictos a la decisión de la justicia laboral. 3° En el presente caso se ha comprobado plenamente la existencia de un silencio administrativo positivo y que fue utilizado por la parte a la que favorece dicho silencio. 4° Al someter el uso de ese derecho a un nuevo proceso laboral ignorando las prescripciones de la ley, se está violando el artículo 32 constitucional que obliga a los Tribunales de Justicia al acatamiento de los trámites y procedimientos establecidos y a respetar la seguridad jurídica que emana de una decisión o del perfeccionamiento de una situación jurídica, aún de aquellas en donde opera el silencio administrativo positivo como el que se registra en el presente caso.

No puede perderse de vista el hecho de que el silencio administrativo positivo en materia laboral es una sanción a la negligencia o ineficiencia de los Tribunales o instituciones administrativas y la presente decisión a contrario sensu, crea un mecanismo de premiar la negligencia y abrir la posibilidad de que todas las personas afectadas presenten iguales acciones como la del demandante Medina y se burle el texto de la ley vigente.

Considero, además, que la decisión no se aproxima al valor de justicia al que aspira el ejercicio jurisdiccional de las instituciones de garantía, con el respeto a la opinión de los demás, salvo mi voto.

Fecha ut supra.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROMOVIDO POR EL LICENCIADO ALCIBIADES BALLESTEROS J., EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE NESTOR MIRONES CONTRA EL TRIBUNAL DE APELACIONES Y CONSULTAS DE LA PROVINCIA DE HERRERA. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, QUINCE (15) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Alcibíades Ballesteros J., actuando en nombre y representación de **NESTOR MIRONES**, promovió y sustentó recurso de apelación contra la resolución dictada por el Tribunal Superior de Justicia del Cuarto Distrito Judicial, de 19 de octubre de 1995, por la cual se DECLARA NO VIABLE la demanda de amparo de garantías constitucionales promovida contra la orden de hacer contenida en la Resolución de 18 de agosto de 1995, dictada por Tribunal de Apelaciones y Consultas del Circuito de Herrera, mediante la cual se revoca la Resolución de 24 de marzo de 1995, dictada por el Juzgado Municipal del Distrito de Ocú.

La apelación fue interpuesta con fundamento en el artículo 2616 del Código Judicial, tal como consta a foja 29 del expediente de amparo, y la misma no fue sustentada por el amparista, por lo que esta Superioridad procede a resolver la alzada.

El Tribunal Superior de Justicia del Cuarto Distrito Judicial declaró no viable la acción de amparo de garantías constitucionales promovida, contra la orden de hacer contenida en la Resolución de 18 de agosto de 1995, porque no se interpuso Recurso de Reconsideración, y por tanto no se agotaron los trámites procesales prescritos en el artículo 1114 del Código Judicial. (Fs. 27).

De acuerdo a las constancias procesales, la presente acción de amparo de garantías constitucionales, ha sido dirigida contra la orden de hacer contenida

en el auto de 18 de agosto de 1995, que revoca la Resolución de primera instancia de 24 de marzo de 1995 y ordena la entrega del vehículo marca Toyota DINA, con placa N° 6C-1727 de 1993, al señor Héctor Arjona, dictada por el Tribunal de Apelaciones y Consultas del Distrito de Herrera.

El artículo 1114 del Código Judicial preceptúa que, los autos expedidos por un Tribunal Colegiado admiten reconsideración cuando en dicha resolución se revoca, reforma, decreta prestaciones o se hacen nuevas declaraciones no discutidas por las partes. En el proceso que nos ocupa fue revocada la resolución de primera instancia, por lo que la parte afectada podía interponer recurso de reconsideración ante el Tribunal de Apelaciones y Consultas del Circuito de Herrera. No obstante, consta a foja 10 del expediente que contra esta resolución no se interpuso recurso alguno.

A juicio del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, lo indicado por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial se ajusta a derecho, toda vez que el artículo 2606 ordinal 2 del Código Judicial, reformado por el artículo 1° del Decreto de Gabinete N° 50 de 20 de febrero de 1990, señala que sólo procede la acción de amparo cuando se hayan agotado los medios y trámites previstos en la ley para la impugnación de la resolución judicial de que trate, y en el caso que nos ocupa el amparista no acreditó haber cumplido con este requisito previsto en la Ley para la impugnación de la resolución objeto de este recurso.

Como lo expuso el Pleno de la Corte en resolución de 6 de julio de 1992 dictada en la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales propuesta por MODATON, S. A. contra el Juez Tercero del Circuito de Colón, Ramo Penal (apelación), no se han admitido numerosas demandas de amparo de garantías constitucionales, porque se ha "estimado que éstas proceden, sólo cuando se han agotado los remedios ordinarios contra la orden que se impugna y ello no sólo cuando se trata de decisiones jurisdiccionales, como en el negocio en estado, sino cuando se impugna otra clase de actos. A juicio del Pleno de la Corte, la naturaleza de la acción de amparo se desvirtúa si se promueve contra resoluciones judiciales que no han sido oportunamente recurridas o cuando los recursos interpuestos no han sido debidamente formalizados, ya que esta acción extraordinaria no es un remedio contra las resoluciones que se ejecutoriaron sin oposición de la parte a quien le son adversas".

Por lo expuesto, la demanda de amparo es manifiestamente improcedente y la Resolución del Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial debe confirmarse.

De consiguiente, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, CONFIRMA la Resolución de 19 de octubre de 1995, dictada por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, en la acción de amparo promovida por el licenciado Alcibiades Ballesteros J., en nombre y representación de NESTOR MIRONES contra el Tribunal de Apelaciones y Consultas de la Provincia de Herrera.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS MUÑOZ POPE (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL LICENCIADO HÉCTOR A. MORÁN R. EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE MARGARITO RODRÍGUEZ MENA, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL AUTO N° 649 DE 17 DE JULIO DE 1993, DICTADA POR EL JUZGADO PRIMERO DE CIRCUITO DE VERAGUAS, RAMO PENAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, QUINCE (15) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Héctor A. Morán R., en su condición de apoderado especial de MARGARITO RODRÍGUEZ MENA, ha interpuesto recurso de apelación contra la Resolución dictada por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial el 29 de noviembre de 1995, por la cual no admitió la demanda de amparo de garantías constitucionales propuesta por Margarito Rodríguez Mena en contra del auto de enjuiciamiento N° 649 dictado por el Juez Primero del Circuito de Veraguas, Ramo Penal, el 17 de julio de 1995.

Mediante la orden de hacer impugnada por el amparista Margarito Rodríguez Mena, se abrió causa criminal en su contra como presunto infractor de las disposiciones legales contenidas en el Capítulo I, Título IV, Libro II del Código Penal, relativas al delito genérico contra el Patrimonio (hurto); y el Capítulo I, Título VIII, Libro II del Código Penal, relativas al delito de falsificación, y se decretó la detención preventiva del imputado de conformidad con lo establecido en el artículo 2148 del Código Judicial, Ley 3 de 1991, en relación con el artículo 265 del Código Penal.

Considera el apoderado del demandante que dicha resolución viola el artículo 32 de la Constitución Nacional.

En la resolución impugnada el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial expresó que "el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en reiterados fallos ha establecido en forma clara y diáfana que la acción de amparo de garantías consituticionales no procede contra el auto de enjuiciamiento, debido que en el mismo el Juzgador no determina la inocencia o culpabilidad del imputado, sino que mediante ese acto se da inicio a la fase plenaria del proceso, por lo que el sujeto activo conserva a su favor la presunción de inocencia consagrada en la Constitución Nacional. Y es que el Juzgador, al decretar un auto de enjuiciamiento, debe verificar si efectivamente en el proceso bajo estudio se encuentran los requisitos establecidos en el artículo 2222 del Código Judicial, para entonces dictaminarlo." (Fs. 16).

El apoderado judicial del amparista alegó en su escrito de apelación lo siguiente:

> "No estamos de acuerdo con la resolución que impugnamos toda vez que no se ajusta a lo establecido en el artículo 2611 del Código Judicial, ya que el Tribunal debió admitirla, ya que está formulada en debida forma, es decir que no tiene defectos en cuanto a su formulación.
>
> La única manera en que el Tribunal no la acepte, es que la demanda esté mal formulada, lo que no es el caso.
>
> El Tribunal entró a fallar el fondo sin haber ni siquiera oído al funcionario demandado, cosa que viola el procedimiento del recurso." (Fs. 20).

A juicio del Pleno el auto impugnado, tal como lo señala el Tribunal a quo y según constante jurisprudencia de esta Corporación de Justicia, no es una orden de hacer susceptible de impugnación por la vía extraordinaria del amparo, ya que su naturaleza es meramente interlocutoria y tiene simplemente por objeto asegurar la secuela del proceso; por lo cual no encaja dentro del concepto de acto u "orden de hacer" requerido por la institución del amparo de garantías, reservado a aquellos casos que, "por la gravedad e inminencia del daño que representan requieren de una revocación inmediata". (Sentencia del Pleno de 9 de noviembre de 1995, dictada dentro del amparo de garantías constitucionales propuesto por Ezra Homsany Abadi en contra de la orden de hacer dictada por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial).

El Pleno de esta Corporación de Justicia debe ratificar lo resuelto por el

Tribunal a quo, ya que para admitir un amparo no sólo debe examinarse si la demanda cumple con los aspectos formales, sino también es preciso examinar el acto impugnado para constatar si la acción es manifiestamente improcedente, como en el presente caso, en que se ha interpuesto contra un acto jurisdiccional interlocutorio, que no constituye una orden de hacer o de no hacer susceptible de ser atacada mediante un amparo de garantías constitucionales.

El Pleno de esta Corporación de Justicia interpretó el artículo 2611 del Código Judicial en la Resolución dictada el 3 de junio de 1994 para resolver una solicitud de aclaración de sentencia presentada por la sociedad amparista en la acción de amparo promovida por K. M. R. G., S. A. en contra de una orden de no hacer expedida por el Director General de Aduanas. En esta decisión la Corte expresó:

> "... con fines de docencia, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia estima conveniente referirse al texto del artículo 2611 del Código Judicial, el cual preceptúa que el Tribunal a quien se dirija la demanda de amparo de garantías constitucionales debe examinarla para comprobar si está "debidamente formulada", o sea, si reúne los requisitos comunes a todas las demandas y los indicados en el artículo 2610 del mismo Código, y además para determinar si no es "manifiestamente improcedente".
>
> En cumplimiento de esta norma el Pleno de la Corte Suprema de Justicia al estudiar las demandas de amparo con el fin de determinar si son o no admisibles examina si ha sido formulada debidamente y si es procedente la acción de amparo de garantías constitucionales, para lo cual es necesario:
>
> a) que se interponga contra órdenes de hacer o no hacer;
>
> b) que por la gravedad e inminencia del daño que representan estas órdenes se requiera una revocación inmediata;
>
> c) que la revocatoria de estas órdenes no pueda obtenerse por otra vía, porque no existen otros medios de impugnación, o porque éstos se han agotado; y
>
> d) que tratándose de resoluciones judiciales la acción se interponga con sujeción a las reglas establecidas en los ordinales 1, 2 y 3 del artículo 2606 del Código Judicial.
>
> Es decir, que para admitir la demanda de amparo de garantías constitucionales debe examinarse no sólo los aspectos formales de la misma, sino también el acto impugnado." (Registro Judicial de junio de 1994, página 4).

Por tanto como la presente demanda de amparo es manifiestamente improcedente, no debe admitirse en cumplimiento de lo establecido en el artículo 2611 del Código Judicial, y la resolución de primera instancia debe confirmarse.

En mérito de lo expuesto, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución dictada por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial el 29 de noviembre de 1995, dentro de la acción de amparo de garantías constitucionales promovida por el licenciado Héctor A. Morán, en nombre y representación de Margarito Rodríguez Mena, contra la orden de hacer contenida en el Auto N° 649 de 17 de julio de 1995, dictada por el Juzgado Primero de Circuito de Veraguas, Ramo Penal.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) ELIGIO SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR LOS LCDOS. ANÍBAL E. WATSON R. Y LUIS ALBERTO ROMERO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE RÓMULO CABALLERO E ISRAEL ENRIQUE CABALLERO ARAÚZ, RESPECTIVAMENTE, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA PROVIDENCIA DE 12 DE OCTUBRE DE 1995, PROFERIDA POR LA JUEZ SEGUNDO DE CIRCUITO DE CHIRIQUÍ, RAMO CIVIL, DENTRO DEL PROCESO DE CONCURSO DE ACREEDORES PROPUESTO POR MARÍA EMÉRITA VALDÉS ARAÚZ CONTRA RÓMULO CABALLERO BATISTA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO SALAS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de APELACIÓN ha ingresado a esta máxima Corporación de Justicia, la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales que los señores **RÓMULO CABALLERO GUERRERO** e **ISRAEL ENRIQUE CABALLERO ARAÚZ**, mediante poder otorgado a los Lcdos. **ANÍBAL E. WATSON R. y LUIS ALBERTO ROMERO ARAÚZ**, respectivamente, interpusieron contra la ORDEN DE HACER contenida en la Providencia de 12 de octubre de 1995 proferida por la Juez Segundo del Circuito de Chiriquí, de lo Civil, en el Proceso de Concurso de Acreedores propuesto por MARÍA EMÉRITA VALDÉS ARAÚZ contra RÓMULO CABALLERO BATISTA, mediante la cual se ordena se inventaríen los bienes del concursado RÓMULO CABALLERO BATISTA.

Los autos relacionados a la actuación del referido proceso de amparo constitucional que conoce el Pleno, en grado de apelación, ilustran que el Tribunal a-quo, en sentencia de 7 de diciembre de 1995, que corre de fojas 37 a 43 **"DECLARA no viable la acción de Amparo de Garantías Constitucionales impetrado por Israel Enrique Caballero Araúz y Rómulo Caballero Guerrero, contra la Juez Segunda del Circuito de Chiriquí, dentro del Proceso de Concurso de Acreedores incoado por María Emérita Valdés Araúz contra Rómulo Caballero Batista"**.

El Pleno de la Corte ha podido observar que las consideraciones expuestas por la resolución impugnada, para arribar a la no viabilidad de la acción de amparo, fundamentalmente radican en que la vía del amparo no es la idónea para impugnar la actuación de la Juez, pues la parte afectada contaba con otro remedio legal ordinario contra la misma que no fue agotado (Art. 1840 del Código Judicial). Conviene insistir en llamar la atención acerca de lo ya indicado por el Tribunal A-quo, en el sentido de que la ley procesal señala expresamente el trámite a utilizarse cuando se presentare un reclamo cuyo propósito sea el excluir del inventario algún o algunos de los bienes que formen parte del mismo. De manera que si el artículo 1840 del Código Judicial indica que tales reclamos **"serán resueltos por el Juez de la causa, con intervención del Curador"**, no parece existir razón alguna que justifique el uso de la vía extraordinaria del Amparo de Garantías Constitucionales para procurar remediar un supuesto agravio, el cual, en cualquier caso, puede ser reparado utilizando los medios comunes y ordinarios que dentro del proceso de Concurso de Acreedores está debidamente previsto.

Además del razonamiento previamente citado, que a juicio de la Corte resultaba suficiente para desestimar la acción, el a-quo entró al fondo del negocio al analizar las garantías constitucionales que el amparista expresó como vulneradas.

El Pleno estima que la acción de Amparo propuesta en este caso es a todas luces improcedente. Ello es así, pues resulta evidente que el acto contra el cual se interpone, o sea una Providencia, no es susceptible de impugnación mediante este extraordinario remedio constitucional.

En tal sentido, existen varias razones para considerar la MANIFIESTA IMPROCEDENCIA de la presente acción de Amparo:

Conforme al criterio del a-quo y a lo establecido por el numeral 2 del artículo 2606 del Código Judicial, para que el amparo pueda ejercerse contra una resolución judicial es imperativo que se hayan agotado los trámites y medios previstos en la ley para su impugnación; requerimiento que no ha sido cumplido en este caso.

Según consta en el expediente, la resolución atacada es una Providencia, cuyo contenido textual es el siguiente: "... En atención al informe Secretarial visto a foja 117, de(sic) Ordena Practicar el Inventario ordenado en este proceso de Concurso de Acreedores. ..." (Fs. 8).

Las Providencias son resoluciones judiciales que "se limitan a disponer sobre el trámite de la actuación", tal como lo preceptúa el artículo 974 del Código Judicial, por lo que no revisten la forma de órdenes o un mandato contra el amparista, sino de actuaciones de mero trámite.

La jurisprudencia de la Corte ha sido constante en señalar que, cuando el acto o la resolución impugnada no constituye ni contiene una orden para concluir la acción de amparo es **manifiestamente improcedente**, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 2611 del Código Judicial.

Finalmente, vale recordar que según lo dispuesto en la Constitución y la ley, el Amparo de Garantías Constitucionales puede ejercerse contra toda clase de actos violatorios de derechos fundamentales que **revistan la forma de una orden de hacer o no hacer**, y éstos son actos imperativos en los que la autoridad impone al gobernado la obligación de hacer o de no hacer algo.

En el caso que nos ocupa no se cumple la condición antes anotada ya que la resolución judicial atacada es una providencia, que no se encuentra incluida entre los actos materia de amparo al no contener una orden con carácter concreto, sino que dispone el trámite pertinente dentro de la actuación.

Por lo expresado, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución de 7 de diciembre de 1995, dictada por el Tribunal Superior de Justicia del Tercer Distrito Judicial, dentro de la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales interpuesta contra la Providencia de 12 de octubre de 1995 proferida por la Juez Segundo de Circuito de Chiriquí, Ramo Civil.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICDO. JUAN CARLOS HENRIQUEZ CANO, EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR GRANVIL RAY KINCAID, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL AUTO N° 752 DE 17 DE MAYO DE 1995, DICTADO POR EL JUZGADO QUINTO DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Juan Carlos Henríquez Cano, actuando en representación del señor Granvil Ray Kincaid, ha presentado recurso de apelación ante esta Corporación, contra la Resolución de 11 de diciembre de 1995, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia mediante la cual no se acoge la demanda de amparo de garantías constitucionales promovida por el señor Granvil Ray Kincaid contra el Juez Quinto del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil.

El recurrente basa su inconformidad con la resolución recurrida, expresando en sus partes más sobresalientes que, si bien es cierto, el recurso de apelación procedía contra el auto impugnado, "el mismo no fue interpuesto en tiempo oportuno por el anterior apoderado judicial de nuestro representado, y ya la Corte Suprema (Sala Civil) se ha manifestado sobre la posible Colusión con que obró en el proceso."

Agrega el recurrente que, al no admitirse el "Recurso Constitucional, se dejaría en un absoluto desamparo a nuestro representado por la indebida actuación del Juzgado Quinto de Circuito Civil, y la participación extraña de los abogados participantes en el Proceso Ordinario llevado a cabo en aquel juzgado."

El Primer Tribunal Superior de Justicia, basó su decisión de no acoger el amparo de garantías constitucionales promovido por el señor Granvil Ray Kincaid contra el Juez Quinto del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, en el hecho que, a juicio de dicho tribunal, "el amparista no acreditó haber agotado los recursos ordinarios". Agrega el Tribunal que, no se puede considerar al amparo como el medio idóneo para revisar la conducta de un apoderado judicial, ni tampoco "es el medio idóneo para exigir la responsabilidad civil a un apoderado judicial que ha actuado por colusión".

En este mismo orden de ideas, señaló el Tribunal Superior que no acoge el amparo de garantías constitucionales, pues al no utilizar el recurso de apelación, el amparista no cumplió con el requisito de agotar los medios y trámites previstos en la ley para la impugnación de la resolución judicial que se trata en la demanda.

El Pleno comparte los razonamientos expuestos por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, puesto que, tal como se ha manifestado en diversas ocasiones, es necesario agotar los medios y trámites de impugnación previstos en la ley, para poder utilizar la acción de amparo, según lo establece el numeral 2 del artículo 2606 del Código Judicial. En el presente caso, la única vía de impugnación establecida por ley era la apelación, y la defensa al permitir que precluyera el término para su interposición, queda imposibilitada para acudir a la acción de amparo, por lo que, el Tribunal Superior actuó conforme a derecho al rechazar el amparo de garantías constitucionales interpuesto por la parte actora.

Por todo lo anteriormente expuesto, y en vista que, el Primer Tribunal Superior de Justicia actúo conforme a derecho, lo procedente es, pues, confirmar la resolución apelada.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Resolución de 11 de diciembre de 1995, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, en la demanda de amparo promovida a favor del señor GRANVIL RAY KINCAID.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE

(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO BORIS B. VERGARA, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE BOSCO ANTONIO ESCOBAR C., CONTRA LA ORDEN DE NO HACER CONTENIDA EN EL AUTO N° 2530 DE 16 DE NOVIEMBRE DE 1995, EXPEDIDA POR EL JUEZ PRIMERO DE CIRCUITO DE PANAMÁ, RAMO CIVIL, MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado BORIS B. VERGARA en nombre y representación de **BOSCO A. ESCOBAR C.** ha interpuesto Recurso de **Apelación** contra la resolución de 19 de diciembre de 1995, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia, que resolvió **NO ADMITIR** la demanda de **Amparo de Garantías Constitucionales** propuesta por el apelante contra la Orden de No Hacer contenida en el Auto N° 2530 de 16 de noviembre de 1995 emitido por el Juez Primero de Circuito de Panamá, Ramo Civil.

El Pleno de la Corte procede a decidir lo de lugar, previas las siguientes consideraciones:

En términos generales, la resolución impugnada expresó que, a pesar de cumplir la demanda con los requisitos formales mínimos para su admisión, determinados por el artículo 2610 del Código Judicial, no debería admitirse en virtud de la aplicación de lo dispuesto, a contrario sensu, en el artículo 2611 del mismo Código, que preceptúa el supuesto de su manifiesta improcedencia, por las razones que se exponen a continuación:

La resolución objeto de amparo no implica una Orden de No Hacer, puesto que "no conlleva una prohibición para el amparista, ni constituye una grave amenaza a sus derechos fundamentales"; y menos "cuando en el proceso que se tramita ante el Juez Tercero del Circuito y en el que él es parte, puede presentar todos los recursos ordinarios pertinentes a fin de hacer valer sus derechos".

Así, al analizar la denominada orden de no hacer señala, que a través de la misma el Juez demandado ordena comunicar a otro Juez el destino de un bien secuestrado en un proceso que se tramita en el tribunal a cargo de éste último.

La resolución que califica el amparista como "orden de no hacer" es del tenor siguiente:

> "Por tanto el que suscribe **JUEZ PRIMERO DE CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ**, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **ORDENA** se oficie al señor **JUEZ TERCERO DEL CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ**, informándole que la PÓLIZA N° 0471-04.7065 de la COMPAÑÍA AFIANZADORA DE PANAMÁ constituida para garantizar la resultas del Juicio seguido por **JUAN HERNÁNDEZ** contra **RIGASERVICE, S. A.** (Proceso Ordinario de Mayor Cuantía), fue adjudicada por este Juzgado a favor de **JUAN HERNÁNDEZ;** y que por ese motivo no tiene efectividad el secuestro elevado a embargo, que dicho Juez Tercero nos comunicó mediante Oficios N° 1165 del 17 de Julio de 1995 y N° 1380 del 24 de agosto de 1995, librados dentro del Juicio Ejecutivo seguido por **BOSCO ANTONIO ESCOBAR CANDANEDO** contra **RIGASERVICE, S. A.** CÚMPLASE."

Finalmente, el a-quo cita la sentencia de 22 de octubre de 1993 dictada por esta Corporación de Justicia en la acción de amparo propuesta por Rubén Arosemena Guardia contra el Juez Séptimo de Circuito en la que se alude a lo que se entiende por orden de no hacer.

DECISIÓN DE LA CORTE:

Esta Superioridad coincide con lo expresado por el Tribunal Superior en el fallo apelado, al considerar que la resolución atacada no constituye ni contiene una orden de no hacer susceptible de amparo. Como se ha podido apreciar de su contenido lo que, en todo caso, estaría ordenando el Juez Primero a un subalterno es que se oficie al Juez Tercero, para informarle que la Póliza constituida como fianza en un determinado proceso ordinario seguido en su despacho, se adjudicó a favor del demandante y, en consecuencia no tiene efectividad el secuestro elevado a embargo que, sobre la misma póliza, fueron librados en proceso ejecutivo instaurado en dicho Juzgado Tercero.

Es evidente que lo expresado en la parte resolutiva del auto citado no implica una prohibición o abstención de un hacer dirigido al amparista, sino más bien constituye un acto positivo por el cual se manda a comunicar o informar a una determinada autoridad jurisdiccional las consecuencias o efectos legales de la decisión de un proceso que en este caso tuvo como consecuencia la entrega al demandante de la caución constituida en el mismo como garantía.

En otras palabras, lo que se impugna no se puede considerar como una ORDEN para efectos de la acción de amparo de conformidad con nuestro ordenamiento jurídico, pues no constituye un mandato proveniente de la voluntad abusiva y arbitraria del juez y, menos aún, impone al amparista o alguna autoridad la ejecución o no ejecución de un acto que viole algún derecho fundamental. Ello es suficiente razón para declarar improcedente la utilización del aludido remedio constitucional en el presente caso.

A pesar de la no admisión de esta acción de amparo, la Corte estima necesario aclarar ciertos aspectos relativos a la pretensión del amparista, quien considera que tiene derecho a una caución, consistente en una fianza representada por una póliza, que se constituyó para garantizar el pago del capital y las costas del demandante en un juicio ordinario.

A juicio de esta Corporación lo planteado por el amparista-ejecutante es a todas luces improcedente, pues como señaló el Juez Primero de Circuito en la parte dispositiva de la resolución objeto de amparo (fs. 9), originalmente el demando (RIGASERVICE, S. A.) consignó la aludida fianza en su despacho por razón del proceso ordinario que le seguía JUAN HERNÁNDEZ y por tal motivo sólo sería procedente su devolución a la parte demandada (que es la misma del proceso ejecutivo radicado en el Juzgado Tercero de Circuito) en caso de que no se accediera a las pretensiones del actor. De modo que el otorgamiento o ejecución de dicho bien en un segundo proceso (el ejecutivo), seguido contra la misma demandada en otro Juzgado, estaba condicionado al resultado del primer proceso en que previamente se había consignado como garantía.

No es posible acceder, bajo ningún punto de vista, a la pretensión del amparista-ejecutante, ya que de hacerlo así se desvirtuaría la naturaleza de la caución constituida conforme la ley por una de las partes en un juicio determinado, pues la finalidad de la misma es garantizar y asegurar, a quien se le haya declarado vencedor en el litigio, las resultas del juicio y el resarcimiento de los daños y perjuicios que se le puedan haber causado. Se debe recalcar que las cauciones son medidas cautelares que previenen los efectos dañosos de ciertos actos procesales. Por tanto, si se llegara a utilizar el objeto de la caución ya consignado en un proceso para responder por los efectos de otro antes de que se decida en forma definitiva el primero, el propósito de la caución quedaría por completo desvirtuado y se introduciría una peligrosa incertidumbre jurídica entre los litigantes.

Cabe observar, además, que una caución constituida mediante una garantía emanada de una compañía afianzadora (Afianzadora de Panamá, S. A.) especialmente librada para un propósito determinado -en este caso para asegurar solamente las resultas del juicio que se ventilaba en Juzgado Primero de Circuito- mal podría extender su cobertura a los posibles resultados de otros procesos distintos, pues el compromiso de la compañía afianzadora nada tendría que ver con otras consecuencias procesales que se originen en juicios diferentes contra la parte demandada.

Las cauciones constituyen una especie de tutela jurídica de las consecuencias del proceso, por tanto se les califica como medios para lograr el objetivo perseguido en ese específico proceso.

En consecuencia la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la resolución de 19 de diciembre de 1995 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia dentro de la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales que BOSCO ESCOBAR C. interpuso contra el Auto N° 2530 de 16 de noviembre de 1995, proferido por el Juzgado Primero de Circuito de Panamá, Ramo Civil.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, INTERPUESTA POR LA FIRMA CHAVARRÍA, RODRÍGUEZ Y SÁNCHEZ, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE MULTIBLOCK, S. A., CONTRA LA ORDEN DE HACER VERBAL EXPEDIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE TRABAJO, ENCARGADO, DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL, LCDO. ANTONIO VARGAS, DENTRO DEL PLIEGO DE PETICIONES FORMULADO POR EL SINDICATO ÚNICO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCIÓN Y SIMILARES (SUNTRACS). MAGISTRADO PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma Chavarría, Rodríguez y Sánchez, en representación de MULTIBLOCK, S. A., ha interpuesto acción de Amparo de Garantías Constitucionales contra la orden de hacer verbal expedida por el Director General de Trabajo, encargado, del Ministerio de Trabajo Bienestar Social, dentro del Pliego de Peticiones formulado por el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS).

El presente amparo de garantías constitucionales se promueve contra una orden de hacer verbal proferida por el Director General de Trabajo, encargado, del Ministerio de Trabajo y Bienentar Social, para ordenar y someter a Multiblock, S. A., a los trámites y procedimientos de Conciliación a consecuencia de la presentación de un pliego de peticiones por parte del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS).

El Pleno estima necesario examinar la demanda presentada para comprobar si la misma reúne los requisitos de toda demanda, los requisitos especiales de una demanda de amparo de garantías constitucionales señalados en el artículo 2610 del Código Judicial y además, si no es "manifiestamente improcedente".

La parte actora indicó en el libelo de la demanda el nombre del funcionario demandado, los hechos en los que funda su demanda, las garantías constitucionales que estima infringidas, e indicó que no adjuntó la orden de hacer impugnada con la demanda "por cuanto no se nos ha entregado escrito alguno donde conste la misma." (Fs. 12).

Al respecto el Pleno de la Corte Suprema de Justicia ha señalado lo siguiente:

"En efecto, se aprecia en primer término, que el amparo en relación

> con la orden verbal atacada, y sin precisar fecha de expedición, en manera alguna cumple con el requisito de presentar "mención expresa de la orden impugnada", que exige el numeral 1 del artículo 2610 del Código Judicial. Este Máximo Tribunal de Justicia ha reiterado en ocasiones similares a la que nos ocupa, que en los casos en que no hay constancia escrita de la orden, por haber sido ésta dictada verbalmente, el interesado o perjudicado deberá presentar en abono de la demanda, dos testimonios hábiles, de acuerdo con la aplicación que por analogía debe hacerse del artículo 48 de la Ley 135 de 1943, dado que ésta sería la única manera en que la orden de hacer impugnada, por ser verbal, adquiere materialidad y certeza." (Sentencia de 25 de marzo de 1994, en la acción de amparo de garantías promovida por la sociedad Corporación Istmeña de Ensamblaje, S. A. en contra de la orden verbal de no hacer dictada por el Director General de Aduanas).

En la presente acción de amparo, en contra de lo estipulado en el ordinal 1 y en el párrafo final del artículo 2610 del Código Judicial, el amparista no mencionó expresamente la orden impugnada, no la identificó plenamente, ya que no señaló la fecha en que fue emitida, y tratándose de una orden verbal no presentó el testimonio de dos testigos hábiles para probar la existencia de la orden impugnada y la fecha en la cual fue emitida.

Por las razones expuestas, el Pleno de la Corte estima que la acción de amparo de garantías constitucionales promovida no debe ser admitida por ser manifiestamente improcedente, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 2611 del Código Judicial.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la acción de amparo de garantías constitucionales propuesta por la firma Chavarría, Rodríguez y Sánchez, en nombre y representación de Multiblock, S. A., contra la orden de hacer verbal expedida por el Director General de Trabajo, encargado, del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, licenciado Antonio Vargas, dentro del pliego de peticiones formulado por el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS).

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) CARLOS MUÑOZ POPE
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL DR. ULISES PITTÍ G, EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR MANUEL A. BURILLO CONSTANTINO, CONTRA LA ORDEN DE NO HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 2 R. C. DE 18 DE DICIEMBRE DE 1995, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MENORES, PRESIDIDO POR EL MAGISTRADO ROGELIO MARÍA CARRILLO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado ULISES PITTÍ G. ha promovido Amparo de Garantías Constitucionales, en su calidad de apoderado judicial de MANUEL A. BURILLO CONSTANTINO y en contra de la Resolución N° 2 R. H. C. del día 18 de diciembre de 1995 dictada por el Tribunal Superior de Menores. Corresponde al Pleno determinar si la demanda reúne los requisitos a que se refiere el artículo 2610

del Código Judicial. Sabido es que el Amparo de Garantías Constitucionales es el recurso que se utiliza cuando un servidor público expida o ejecute una orden de hacer o no hacer que viole los derechos y garantías que la Constitución consagra a favor de una persona para que sea revocada.

El amparista ubica la violación del derecho fundamental consignado por el último párrafo del artículo 21, al pretender la orden impugnada imponer pena de privación de la libertad por la omisión en el cumplimiento de la obligación de alimentos decretada (obligación meramente civil, a juicio del amparista), no obstante que la medida conminatoria constituye un mecanismo que el ordenamiento jurídico procesal le asigna a los Tribunales para que sus sentencias sean cumplidas, pretensión de eficacia de la sentencia que quedaría sin sustento si quedase al arbitrio del afectado con la misma su cumplimiento. Esta pretensión de eficacia de las sentencias se encuentra integrada dentro de la tutela judicial efectiva. A este respecto, se refiere Francisco Chamorro Bernal, cuando afirma:

> "El cumplimiento de las Sentencias y Resoluciones judiciales firmes forma parte del complejo contenido del derecho a la tutela judicial efectiva de los Jueces y Tribunales contenido en el art. 24.1 CE ya que es un corolario obligado de la misma. De nada serviría haber tenido acceso a la jurisdicción, al proceso y a una resolución fundada en Derecho si luego ésta quedara sin cumplir" ("La tutela judicial efectiva", pág. 303, Editorial Bosch, 1994, Barcelona, España).

Las sanciones conminatorias para asegurar el cumplimiento de las sentencias viene otorgada a los Tribunales, en general por el artículo 1956 del Código Judicial y, en materia de alimentos, por el artículo 1318 del Código Judicial, citado por el amparista, y por el artículo 811 del Código de la Familia. No obstante, a poco que se aprecie resulta evidente que la finalidad de este amparo no es recabar la protección jurisdiccional contra la privación de un derecho fundamental, como el que se encuentra contenido en el último párrafo del artículo 21 de la Constitución Nacional sino, por el contrario, evitar que se le prive de la libertad en caso de incumplimiento de la sentencia que ordena la obligación de brindar alimentos, lo que constituye un mecanismo que priva el acceso al recurso de amparo, toda vez que el remedio constitucional para evitar la privación de la libertad o la obtención de su libertad en caso de detenciones arbitrarias lo constituye el habeas corpus, regulado en el Título II del Libro IV del Código Judicial, que reglamenta el derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, y que constituye la vía que debió utilizar el amparista.

Por las consideraciones que anteceden, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el Amparo de Garantías Constitucionales interpuesto por ULISES PITTÍ G. en nombre y representación del señor MANUEL A. BURILLO CONSTANTINO, contra la Resolución N° 2 R. C. de 18 de diciembre de 1995, proferida por el Tribunal Superior de Menores.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) CARLOS MUÑOZ POPE
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JORGE ALBERTO BARLETTA A. EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD ENGINNERING DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION, REPRESENTADA POR EL SEÑOR CRISTÓBAL RANGEL MÁRQUEZ, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA PUBLICACIÓN DE CONCURSO DE PRECIOS N°

CSJ-03-95 EMITIDA POR EL ÓRGANO JUDICIAL, DIRECCION DE ABASTECIMIENTOS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL JUZGADO SECCIONAL DE MENORES DE LA PROVINCIA. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **JORGE ALBERTO BARLETTA A.** actuando en su calidad de apoderado judicial de la empresa **ENGINNERING DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION**, ha presentado ante esta Superioridad, acción de Amparo de Garantías Constitucionales contra la Publicación del Aviso para la celebración del Concurso de Precios N° CSJ-03-95 emitida por el Órgano Judicial.

Como se desprende del libelo, la supuesta orden de hacer impugnada recae en la publicación de un **Aviso** para la celebración de un Concurso de Precios para la construcción de un juzgado seccional de menores en la Provincia de Herrera.

El Pleno de esta Máxima Corporación de Justicia procede en primer término al examen del libelo presentado, en vías de determinar si el mismo ha cumplido con los requisitos de admisión exigibles para estos procesos.

En este punto se percata el Tribunal que la acción presentada adolece de varios defectos formales que impiden darle curso legal a la misma, tales como el haber sido dirigida de manera global a los Magistrados de la Corte Suprema y no al Presidente de este Máximo Tribunal de Justicia, y la falta de designación expresa del funcionario demandado.

Por otro lado es de advertir, que la parte actora no acompaña copia autenticada del acto impugnado, adjuntando en su defecto, copia simple, apenas legible, del Aviso para la celebración del Concurso de Precios N° CSJ-03-95 (cfr. foja 2 del expediente).

El Pleno de la Corte ha sido reiterativo y categórico, en el sentido de que con la acción de amparo de garantías debe acompañarse copia autenticada del acto impugnado, y en aquellos casos en que se invoque la imposibilidad de acompañar dicho documento, este Tribunal ha sostenido que no basta esgrimir una dificultad, excusa o explicación para no acompañar copia de la orden impugnada, siendo menester que se adjunte prueba de la gestión realizada o de la solicitud de autenticación que no fue atendida por el funcionario correspondiente.

Pese a los defectos señalados, que son suficientes para negarle curso legal a la acción presentada, esta Superioridad debe indicar que existe una razón más fundamental que patentiza la **manifiesta improcedencia** de la misma, y que dice relación con la **naturaleza del acto impugnado.**

En efecto, recordemos que el amparo de garantías constitucionales es una acción extraordinaria de la que puede hacer uso cualquier persona contra la cual se expida o se ejecute, por cualquier servidor público, una orden de hacer o de no hacer, que viole los derechos y garantías que la Constitución consagra. El fin de la acción es en consecuencia, que la orden específica, arbitrariamente expedida, sea revocada.

Teniendo como soporte jurídico lo anteriormente expuesto, esta Corporación Judicial ha venido señalando que el **Aviso** o Convocatoria para la realización de Actos Públicos como Licitaciones o Concurso de Precios, no constituyen una orden de hacer o no hacer que vulnere garantías constitucionales.

Del contenido de la publicación del Aviso para la celebración del Concurso de Precios N° CSJ-03-95, se aprecia de manera diáfana que éste **no constituye una orden de hacer o de no hacer dirigida contra alguna persona en particular**. Se trata **de un aviso dirigido al público en general**, con el objetivo de que las empresas que estén interesadas, presenten propuestas para la Construcción de un Juzgado en la Provincia de Herrera.

Se desprende, en consecuencia, que en estricto sentido jurídico el acto en cuestión no constituye un mandato imperativo dirigido al amparista para que haga o deje de hacer alguna cosa. Al respecto, cabe acotar que la propia Sala Tercera de la Corte ha venido indicando que tales actos tienen incluso un carácter **preparatorio** con vías a la celebración de un acto Público, por lo que no son siquiera susceptibles de ser demandados por acciones contencioso administrativas. (cfr. resolución de la Sala Tercera de 5 de octubre de 1994)

De todo lo expuesto se colige que la acción presentada contra el Aviso de Concurso de Precio N° CSJ-03-95 resulta manifiestamente improcedente, por lo que no puede ser admitida, a tenor de lo previsto en el artículo 2611 del Código Judicial.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la acción de Amparo de Garantías Constitucionales presentada por el licenciado JORGE ALBERTO BARLETTA A. actuando en su calidad de apoderado judicial de la empresa ENGINNERING DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE (fdo.) JORGE FÁBREGA PONCE
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR TRONCOSO, LACAYO Y PORRAS, EN REPRESENTACIÓN DEL BANCO EXTERIOR, S. A. CONTRA LA ORDEN DE NO HACER CONTENIDA EN EL AUTO DE 10 DE OCTUBRE DE 1995, DICTADO POR EL JUZGADO SEXTO DE CIRCUITO DE PANAMÁ, RAMO CIVIL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El firma forense Troncoso, Lacayo y Porras, actuando en representación del Banco Exterior, S. A., ha presentado recurso de apelación ante esta Corporación, contra la Resolución de 18 de diciembre de 1995 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia mediante la cual no se acoge la demanda de amparo de garantías constitucionales promovido por la mencionada firma forense contra el Juez Sexto del Circuito de Panamá, Ramo Civil.

El recurrente señala como infringido el artículo 32 de la Constitución Nacional, sustentado por el artículo 753 del Código Judicial.

La parte demandante promovió proceso de amparo de garantías constitucionales ante el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial y lo fundamentó en el hecho que considera que no se ha "efectuado un análisis detenido de la acción de amparo de garantías en contra de una decisión adoptada por el Juez Sexto del Circuito que constituía una violación del debido proceso legal establecido en el artículo 32 de la Constitución."

El artículo 32 de la Constitución Nacional hace referencia a la garantía constitucional, que ninguna persona puede ser juzgada, "sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, ni más de una vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria."

Alega el recurrente que, se ha violado la garantía fundamental establecida en el artículo 32 de la Constitución Nacional, toda vez que, "se desconoce el

derecho de interponer un incidente de recusación en contra del Juez Quinto del Circuito de lo Civil, pues rechazó de plano nuestra demanda, advirtiendo que había un pronunciamiento sobre el caso, lo cual implica una violación clara de los artículos 753 y 763 del Código Judicial."

El Primer Tribunal Superior de Justicia, basó su decisión de denegar el amparo de garantías constitucionales promovido por el Banco Exterior, S. A., contra el Juzgado Sexto del Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, en el hecho que, a juicio de dicho tribunal, "el juzgador adecuó su actuación a las reglas establecidas en el artículo 754 del Código Judicial, sin infracción alguna al procedimiento, por lo que la resolución N° 1890 de 10 de octubre de 1995, no infringe el debido proceso como lo alega el amparista."

El Pleno de esta Corporación, comparte los razonamientos expuestos por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, en cuanto a que, no se ha configurado la violación a la garantía del debido proceso, consagrada en el artículo 32 de la Constitución Nacional, puesto que, como se desprende del análisis del expediente, el Juez Sexto del Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, consideró que no existían pruebas suficientes para separar al funcionario recusado del proceso, ya que, consideró que no puede incluirse la queja presentada por la firma forense, dentro de los supuestos establecidos por el numeral 11 del artículo 749 del Código Judicial, por lo que, a todas luces, su actuación se ajusta a lo que establece el artículo 754 del Código Judicial, tal como lo señaló el Tribunal Superior.

Por todo lo anteriormente expuesto, y en vista que, el Primer Tribunal Superior de Justicia actúo conforme a derecho, lo procedente es, pues, confirmar la resolución apelada.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Resolución de 18 de diciembre de 1995, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, en la demanda de amparo promovida por la firma forense Troncoso, Lacayo y Porras, en representación del Banco Exterior, S. A.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICDO. EDUARDO E. RÍOS MOLINAR, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE NILKA TOVAR ORTIZA, CONTRA LA ORDEN DE NO HACER CONTENIDA EN LA SENTENCIA DE 13 DE OCTUBRE DE 1995 PROFERIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Eduardo E. Ríos Molinar, actuando en representación de **NILKA TOVAR ORTIZ**, ha presentado demanda de amparo de garantías constitucionales contra la orden de no hacer contenida en la Sentencia de 13 de octubre de 1995, proferida por el Tribunal Superior de Trabajo.

En dicha demanda se formula pretensión consistente en que la Corte Suprema de Justicia, revoque la orden expedida por el Tribunal Superior de Trabajo, contenida en la Sentencia de 13 de octubre de 1995, mediante la cual se negó el

derecho de la señora Nilka Tovar Ortiz, a "que se le pagaran salarios caídos por el despido injustificado del que fué (sic) objeto por parte de la empresa UNIFOT PANAMÁ S. A., a fin de que dicha orden sea revocada."

El apoderado judicial de la parte demandante alega que se ha violado de manera directa el artículo 32 de la Constitución Nacional, que consagra la garantía del debido proceso, puesto que, se "ha sentenciado PRESCRIPCIÓN, y negado los salarios caídos a mi representada al margen de los términos legales."

Observa el Pleno, que la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Trabajo, resuelve en segunda y última instancia, la pretensión de la trabajadora Nilka Tovar Ortiz, consistente en declarar injustificado el despido y condenar a Unifot Panamá, S. A., a pagar la indemnización y los salarios caídos desde la fecha del despido.

Esta Corporación, ha sido constante en sostener que, como regla general, las sentencias del Tribunal Superior de Trabajo, que resuelven recursos de apelación dentro de los procesos laborales por despidos injustificados no pueden revisarse en procesos de amparo, ya que, éstos no constituyen una tercera instancia. Las infracciones que aquí se esbozan, fueron ya consideradas por el Tribunal Superior de Trabajo al resolver el recurso de apelación que interpuso la empresa demandada en el proceso laboral, y ahora se pretende replantear los mismos argumentos en el plano constitucional. Por estas razones, la demanda resulta manifiestamente improcedente.

En consecuencia, el PLENO de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda de amparo de garantías constitucionales presentada por el Licenciado Eduardo E. Ríos Molinar, actuando en representación de NILKA TOVAR ORTIZ, contra la orden de no hacer contenida en la Sentencia de 13 de octubre de 1995, proferida por el Tribunal Superior de Trabajo.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretario General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO HÉCTOR E. ZAVALA EN REPRESENTACIÓN DE ALEXIS GONZÁLEZ CASTILLO CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL AUTO DE 31 DE OCTUBRE DE 1995 PROFERIDA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **HÉCTOR ZAVALA**, actuando en su calidad de apoderado judicial de **ALEXIS GONZÁLEZ CASTILLO**, ha presentado ante esta Superioridad, acción de amparo de garantías constitucionales contra la orden de hacer contenida en el auto de 31 de octubre de 1995 expedido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial.

En la referida resolución judicial se revocan los autos N° 92 y 103 de 27 de junio y 7 de julio de 1994 respectivamente, expedidos por el Juzgado Décimo Quinto de Circuito Penal de Panamá que había admitido una Acusación Particular instaurada por la empresa **STANDART CO. LTD.** contra la empresa TRADEX MERCANTILE CORP. Y OTROS por delitos contra el patrimonio, contra la fe pública, contra la

administración de justicia y contra la seguridad colectiva.

En la parte resolutiva de la resolución judicial impugnada, el Segundo Tribunal Superior de Justicia no sólo revoca los autos en mención, sino que concede el término de 60 días a fin de que el acusador particular subsanara los siguientes puntos:

1° que el acusador se comprometiera a probar la verdad de su relato y continuar con la acusación.

2° se acreditase con la certificación del Registro Público la existencia y representación de cada una de las sociedades acusadas.

Es precisamente la concesión del término antes enunciado para que la parte acusadora diligenciara los dos puntos transcritos, lo que se erige como punto medular de la disconformidad del amparista, al considerar que dicha actuación vulnera la garantía constitucional del debido proceso legal, así como los artículos 17 y 19 de la Constitución Nacional.

Acogida la demanda, se corrió traslado al funcionario responsable del acto acusado, quien mediante Oficio N° 10-I de 10 de enero de 1995 remite a esta Corporación Judicial los siete tomos del expediente penal contentivo de la acusación propuesta por la **CÍA. STANDART CO. LTD.**

Ante la ausencia de un informe de conducta que permita al Tribunal examinar tanto el elemento fáctico, como el fundamento de la actuación del Segundo Tribunal Superior de Justicia en este caso, procedemos a repasar los hechos que dieron origen a la controversia constitucional planteada.

ANTECEDENTES

Según consta en autos, el día 6 de junio de 1994 fue propuesta ante la esfera circuital del ramo penal, por parte de la empresa **STANDART CO. LTD.** una acusación particular por la supuesta comisión de delitos de estafa, falsificación de documentos públicos y privados, asociación ilícita para delinquir y encubrimiento contra una serie de personas naturales y jurídicas (cfr. foja 3 del cuaderno de Amparo).

Mediante la expedición de los Autos N° 92 de 27 de junio de 1994 (f. 51 del cuaderno de Amparo) y 103 de 7 de julio de 1994 (f. 53 ibidem) el Juzgado Décimo Quinto de Circuito Penal admite la Acusación Particular presentada contra las siguientes personas: TRADEX MERCANTILE CORPORATION; TWO OCEANS CARGO CORPORATION; PACÍFICA DODWELL; ROQUE ALBERTO PÉREZ; MIRIAM LARISSA PÉREZ T.; MARCELA ROJAS DE PÉREZ; AUDINO ALBERTO CABALLERO; MARCOS ANTONIO GUERRERO VALENCIA o MARCOS ANTONIO GUERRERO; JAIME ALFONSO GUZMÁN; ALEXIS RAÚL GONZÁLEZ; THIERRY GUTIÉRREZ; STEVE ROBIN; ANTOINE DOMINIQUE BERNETTE; GUILLERMO ESPINOSA VALENCIA; JEAN PIERRE DELANNES (A) ALAIN PIERRE BULLARA; CHARLES AMAR; ALAIN PIERRE BULLERA; RENE CACHARNEAU; JOSEPH HUERTAS; ALI OULAD KAID; SERGE RIGAUD; CORPORATION FINANCIERA DEL NORTE, S. A.; MULTITEK INTERNATIONAL, S. A.; I. L. MADURO J.R. ZONA LIBRE, S. A.; FÉLIX B. MADURO, S. A.; MIZRATEX, S. A.; AUDIO FOTO INTERNATIONAL, S. A.; VENFAX INTERNATIONAL, S. A.; OCEAN SHIPPING COMPANY CO., S. A.; XEROX DE PANAMÁ, S. A.; JOSÉ OVADIA; ISAAC MIZRACHI RUSSO O ISAAC DAVID MIZRACHI RUSSO; DAVID MIZRACHI; ALBERTO BTESH; JUAN BARRERA; CARLOS ENRIQUE HERNÁNDEZ; FRANCISCO HERNÁNDEZ CONCEPCIÓN, por los delitos contra el patrimonio, la fe pública. la administración de justicia y contra la seguridad colectiva. Posteriormente la parte acusadora desistió de la acusación contra alguna de las empresas y personas naturales incluidas en la demanda original.

Cabe advertir que en estas resoluciones judiciales la Juzgadora motivó la admisión de la acusación presentada, señalando que la misma había cumplido con las exigencias previstas en el artículo 2013 del Código Judicial.

Sin embargo, contra tales resoluciones fue incoado recurso de apelación por la mayoría de los acusados (entre ellos el amparista), misma que en términos generales tenía como sustento la supuesta falta de legitimidad del actor para

comparecer al proceso, que devenía del documento que fue aportado como prueba para acreditar la existencia de la compañía **STANDART CO. LTD.**

La Fiscalía Tercera de Circuito, por su parte, al recibir traslado del recurso de apelación se opuso al mismo, solicitando la confirmación de los autos impugnados, conceptuando que la acusación encausada cumplía con las formalidades legales que hacían viable la admisión de la misma.

Al conocer del asunto penal como Tribunal de Segunda instancia, el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, bajo la ponencia de la Magistrada Sandra de Icaza, decide revocar, mediante resolución de 31 de octubre de 1995, los autos de admisión previamente expedidos por la Juez Décimo Quinta de Circuito.

Según indicara el Tribunal Ad-quem, la mayoría de los postulantes de la alzada habían coincidido en censurar la legitimidad del acusador, la no presentación del poder ante el Tribunal competente, la falta de autenticidad del documento traducido, el no comprometerse el acusador particular a continuar la acusación y a probar la verdad de su relato.

El Tribunal desestimó la mayoría de los puntos acusados, mas reconoció que le asistía razón a los apelantes, en el sentido de que el acusador particular no había otorgado la facultad de comprometer, lo que hubiese salvado que sus apoderados judiciales pudiesen obligarse a nombre de su mandante, y en cuanto a que no se habían acompañado las pruebas sobre la personería jurídica de quienes se acusaba, a fin de establecer sus representantes legales.

El Segundo Tribunal Superior manifestó que los vicios apuntados producían indefectiblemente la revocatoria de los autos apelados, pero que tales defectos podrían perfectamente ser subsanados en un término prudencial.

Esa posibilidad de **subsanar** los defectos en un **término prudencial** se tradujo en los incisos finales de la parte resolutiva de la sentencia de 31 de octubre de 1995, que concede el término de 60 días para que el acusador se comprometiera a probar la verdad de su relato y acreditar la exigencia de cada una de las sociedades acusadas, actuación que el amparista considera violatoria de las garantías del debido proceso legal por las razones que se detallan a continuación.

GARANTÍAS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN INFRINGIDAS

Considera el recurrente que el acto acusado resulta violatorio de los artículos 32; 17 y 19 de la Constitución Nacional.

Reproducimos a continuación los textos constitucionales referidos:

> "Artículo 32. Nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, ni más de una vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria."
>
> "Artículo 17. Las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales dondequiera se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción; asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley."
>
> "Artículo 19. No habrá fueros ni privilegios personales ni discriminación por razón de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas."

Este Tribunal debe indicar en principio, que el contenido programático del artículo 17 de la Constitución Nacional ha sido reconocido por la Corte Suprema de Justicia en numerosas oportunidades (v. g. sentencias de 22 de septiembre de 1992 y de 22 de noviembre de 1994) resaltando su carácter de **generalidad** y el **valor jurídico declarativo** que encierra, sin que precise un derecho de inmediata

exigencia cuyo incumplimiento pueda sancionarse jurídicamente de manera personal o subjetiva, por lo que sólo pudiese alegarse su vulneración si la supuesta conculcación se presenta asociada con otras disposiciones constitucionales que sí contengan derechos susceptibles de ser vulnerados.

Esta circunstancia no ha sido planteada por el amparista, quien se limita a señalar que al concederse un término de 60 días para subsanar los defectos de la acusación particular el Tribunal Ad-quem se excedió en sus funciones, por lo que se descarta el cargo planteado.

En relación a la supuesta violación del artículo 19 de la Constitución Nacional, aduce el amparista que la transgresión se produce en este caso en la medida en que se ha otorgado graciosamente un término de 60 días calendario a la empresa proponente de la acusación particular, plazo que constituye un privilegio y que favorece de manera evidente a la acusadora dado la amplitud del término, pese a que según el actor, el Código Judicial no contempla plazos tan amplios, ni existen razones para la práctica del saneamiento de la apelación, por lo que según el amparista, la actuación del Tribunal al ordenar la corrección del libelo en estas circunstancias, es improcedente. Este cargo se encuentra directamente vinculado con la alegada violación al debido proceso legal, razón por la cual procedemos a examinar ambos cargos, de seguido.

La conculcación a la garantía procesal del debido proceso se configura, según el amparista, por dos razones básicas:

1. que el Tribunal que dictó la resolución atacada obvió la circunstancia de que se trataba de la segunda instancia del proceso iniciado con la admisión de la Acusación Particular, por lo que no estaba facultado legalmente para ordenar la corrección del libelo de acusación;

2. que el plazo de 60 días concedidos a la parte acusadora no existe en el Código Judicial para estos fines, por lo que resulta ilegal el establecimiento de tal término.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Al examinar los cargos presentados por el amparista y confrontarlos con los textos constitucionales que se aducen infringidos, esta Superioridad debe externar lo siguiente:

En primer término, esta Corporación Judicial debe indicar, que en el negocio sub-júdice el punto medular se circunscribe a determinar:

1° si el Segundo Tribunal Superior de Justicia como Tribunal de alzada, vulneró el debido proceso legal al revocar la admisión de la acusación particular propuesta por la empresa **STANDART CO. LTD.**, y conceder a la parte acusadora un término para subsanar los defectos señalados en el auto de 31 de octubre de 1995; y

2° cuál es el perjuicio grave e inminente que se inflige al amparista con tal actuación y si se producen las violaciones constitucionales que el amparista acusa.

Debe examinarse por ende, si se encuentra vedada tal actividad procesal entre las facultades conferidas al juzgador de segunda instancia, con base a las normas establecidas en el Libro Tercero del Código Judicial, y en lo que no resultaren contrarias, las normas del Libro Segundo de Procedimiento Civil alusivas a la materia.

El artículo 2428 del Código Judicial preceptúa que presentado alguno de los recursos establecidos como medio de impugnación de una resolución judicial, si este fuera legalmente concedido, ello atribuirá al Tribunal de alzada el conocimiento del proceso sobre los puntos de la resolución a que se refiera el recurrente.

El Pleno de la Corte advierte que los recurrentes vieron atendida su pretensión de manera íntegra y congruente, al centrarse ésta en la revocatoria de los autos que habían admitido la acusación particular por existir vicios que impedían su admisión.

Así, la resolución de 31 de octubre de 1995, tal como lo solicitaron, revocó la admisión de la acusación particular, por las razones antes enunciadas.

Sin embargo, el Tribunal de alzada, en un evidente propósito de contribuir y aplicar el principio de economía procesal, aceptó en la parte motiva del auto en comento, que los defectos que presentaba la acusación eran subsanables, y le concede a la parte acusadora un término para presentar debidamente en forma, la acusación.

Tal actuación conlleva de manera implícita la corrección de la acusación. Ello es el verdadero sentido de la parte final de la resolución de 31 de octubre de 1995, en vista de que concede un término para que se subsanaran las omisiones incurridas en la acusación particular presentada el día 6 de junio de 1995 por la sociedad **STANDART CO. LTD.**

Siguiendo este orden de ideas, abordemos por un momento la posibilidad de corrección de una acusación particular.

La acusación particular debe ser rechazada por el tribunal de la causa, si carece de algún requisito formal en su presentación. Sin embargo, si el requisito omitido es subsanable, nada impide volverla a presentar, máxime cuando el ejercicio de la acusación en los delitos perseguibles de oficio sólo se extingue cuando la misma es declarada desierta o desistida, conforme a lo previsto en el artículo 2021 del Código Judicial.

En el negocio bajo examen se confrontaba la posible existencia de delitos perseguibles de oficio, por lo que el Segundo Tribunal Superior en la misma resolución censurada, giró la instrucción al funcionario del Ministerio Público competente para que ejecutara la acción penal. En estos casos, la iniciativa de la acusación particular es coadyuvar a la función instructora, para participar en el ejercicio de la acción penal.

Resulta en este punto importante destacar, que la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia ha indicado que si bien la Sección III, Capítulo 3°, Libro Tercero del Código Judicial concerniente a la figura del acusador no establece expresamente la posibilidad de corrección del libelo de acusación, **tampoco ha establecido su prohibición.**

En sentencia de 14 de octubre de 1994, ese Tribunal Colegiado señaló:

> **"No cabe duda entonces que en ausencia de un criterio restrictivo y en aras del principio de Economía Procesal, bien puede utilizarse el procedimiento de la corrección que establece el artículo 675 del Código Judicial, perfectamente aplicable al procedimiento de la acusación por remisión del artículo 1971 del Libro de procedimiento penal."** (El resaltado es nuestro).

En este mismo sentido la Corte no puede soslayar que las normas de alzada no restringen al Tribunal Ad-quem de la posibilidad de que una vez detectados los vicios del libelo originalmente admitido, éstos se señalen con la posibilidad de que sean subsanados, si ello fuere posible, en aras del principio de Economía Procesal.

Esta Superioridad reitera el énfasis en la evidente intención del Segundo Tribunal Superior de Justicia de contribuir con la economía procesal en este caso, toda vez que conforme a la normativa procedimental que regula la acusación particular, y al pronunciamiento jurisprudencial citado, la parte acusadora podía perfectamente (aunque no se le indicara de manera expresa) presentar nuevamente la acusación particular, e incluso, el Juez Décimo Quinto de Circuito, si hubiese percibido la existencia de los defectos formales indicados, estaba facultado para

ordenar la corrección del libelo.

Otro principio penal que se pone de manifiesto con esta actuación es el de protección al supuesto ofendido, garantizándole que la actividad jurisdiccional no se vea restringida por la existencia de defectos que son subsanables, ofreciendo a las presuntas víctimas una justicia más expedita.

Estas situaciones nos remiten a confrontar la acción presentada con la finalidad de las Acciones de Garantías Constitucionales, para de tal examen concluir que el artículo 2606 del Código Judicial establece como condicionamiento para la presentación de la estas acciones de naturaleza constitucional, que se haya expedido una orden actual o inminente que supone una afectación grave o creación de un perjuicio irreparable para el amparista.

Tal condicionamiento no se presenta en el negocio bajo examen, puesto que, por una parte, la actividad del Segundo Tribunal Superior no pugna con la normativa legal, y dado que no se ha probado la existencia de un perjuicio directo para el amparista en este caso que emane o se derive de la orden contenida en la resolución judicial de 31 de octubre de 1995, en vista de que la parte acusadora, aunque así no se contemplara en la resolución en comento, podía presentar nuevamente la acusación particular, subsanados los defectos formales que presentaba el libelo.

La necesidad de revocación inmediata tampoco parece acontecer en el negocio, toda vez que el auto impugnado está calendado 31 de octubre, y no es sino hasta en el mes de enero en que se interpone la acción que nos ocupa.

En cuanto al término de 60 días concedidos para tal fin, el Pleno no puede soslayar que tanto el domicilio de la empresa **STANDART CO. LTD.** como el de su representante legal se encuentra en el extranjero (Federación Rusa), y en vista de que éste deberá otorgar a los apoderados legales de la empresa nuevas facultades a través de poder legalmente constituido, evidentemente el trámite requerirá de un término con mayor amplitud del que se hubiese otorgado si se encontrase el representante legal establecido dentro del territorio nacional.

El Segundo Tribunal Superior aplicó a la situación, de manera análoga, el plazo que se otorga para la práctica de pruebas fuera de la jurisdicción de la República, atendiendo a la distancia del lugar (artículo 794 del Código Judicial).

Por ende, este Tribunal considera que el Segundo Tribunal Superior de Justicia no incurrió en violación alguna de las normas que regentan la materia y por ende no presenta violación al principio objetivo del debido proceso legal.

Cabe destacar que tampoco se crea una situación de privilegio de la parte acusadora en detrimento de la parte acusada. El artículo 19 de la Constitución Nacional, cuya transgresión acusa el amparista, es una garantía fundamental que no se ve vulnerada por la actuación judicial acusada, debido a que la resolución censurada no establece un fuero o privilegio **personal** ni discrimina por razón de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas, ni distingue entre nacionales o extranjeros.

Este Tribunal Colegiado de manera inveterada ha venido determinando el significado **razonable, positivo y la esencia** de la norma en estudio, indicando que la misma está dirigida **a la prohibición de fueros y privilegios personales y distingos por razón de condiciones en ellos señaladas**, es decir, la creación de situaciones injustas de favor o exención en beneficio de determinadas personas, o de limitaciones o restricciones injustas o injuriosas que entrañen un trato desfavorable o favorable para quienes en principio se encuentren en la misma situación que otras por razón de nacimiento, condición social, raza etc.

En síntesis, el principio de igualdad que se desprende de la estructura y carácter mismo de la Constitución Nacional consiste en que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de lo que se concede a otros en iguales circunstancias, y en el negocio sub-júdice se desprende palmariamente que

la resolución de 31 de octubre de 1995, en su parte acusada, no establece un privilegio o distingo que contravenga lo dispuesto en el artículos 19 de la Constitución Nacional.

Al concederse un término para que se subsanen defectos formales en la acusación, lo que hubiese podido perfectamente realizarse aún si el Tribunal de alzada no lo hubiese concedido, no establece, de manera alguna, un fuero que conlleve un tratamiento distinto para situaciones iguales, circunstancia ésta que sí hubiese fundamentado una transgresión constitucional.

Por otra parte, los Tribunales que conocen de esta materia, con base al pronunciamiento jurisprudencial de la Sala Penal previamente comentado, cuando a ello hay lugar, vienen ordenando la corrección del libelo de acusación al advertir defectos formales subsanables, en vías de contribuir con la Economía Procesal y con una administración de justicia más expedita, en defensa de los bienes jurídicos tutelados de los asociados.

Se concluye por consiguiente, que la actuación del Segundo Tribunal Superior de Justicia, en su parte censurada, no vulnera garantía constitucional alguna en perjuicio del señor **ALEXIS GONZÁLEZ CASTILLO.**

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DENIEGA el amparo de Garantías Constitucionales impetrado, contra la parte final de la resolución de 31 de octubre de 1995 expedida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS MUÑOZ POPE (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LCDO. HIPÓLITO M. CONSUEGRA PALMA EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR LUIS SAEZ MORENO CONTRA LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 12 HERRERA Y LOS SANTOS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado HIPÓLITO MANUEL CONSUEGRA PALMA, en su condición de apoderado especial de LUIS SAEZ MORENO, ha interpuesto acción de Amparo de Garantías Constitucionales contra la Orden de Hacer contenida en la Resolución de 5 de octubre de 1995, emitida por el Coordinador de la Junta de Conciliación y Decisión N° 12 de la Provincia de Herrera.

A fin de decidir la admisibilidad de la demanda de amparo interpuesta, el Pleno de la Corte considera:

Al examinar el libelo contentivo de este amparo, sin entrar a considerar el cumplimiento de los requerimientos formales, resulta evidente su manifiesta improcedencia, pues se está utilizando o vinculando esta acción constitucional a circunstancias ajenas a su naturaleza.

Según el amparista la ORDEN DE HACER, cuya revocatoria solicita, está contenida en la Resolución de 5 de octubre de 1995, "que contiene el ACTA DE AUDIENCIA" proferida por el Coordinador de la Junta de Conciliación y Decisión

N° 12, dentro del proceso laboral que le sigue Elvis Rodrigo Robles.

De fojas 2 a 13 de este expediente consta, en efecto, el documento contentivo de la aludida Acta de la Audiencia laboral que dirigió la Corporación laboral demandada, que en primer lugar no es una resolución como sostiene el accionante, no constituye ni contiene una ORDEN, pues no implica un mandato que obligue al amparista a realizar algo, y, no fue dictada por el funcionario acusado, sino suscrita por éste y las partes.

El documento impugnado en amparo no resuelve el conflicto de trabajo, es más bien la constancia de las diversas fases realizadas en el procedimiento laboral que se verificó en la entidad conciliadora.

En consecuencia, el documento en que consta la realización de esta Audiencia no implica o reviste la forma de una orden de hacer o no hacer expedida o ejecutada contra el amparista (parte en el proceso laboral) por un servidor público, o sea, no reviste algunas de la características importantes de esta Institución de Garantía, establecidas en el artículo 50 de la Constitución y 2606 del Código Judicial.

Por las consideraciones expuestas la Corte Suprema, PLENO, administrando Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el Amparo de Garantías Constitucionales interpuesto por el Lcdo. HIPÓLITO MANUEL CONSUEGRA en representación del señor LUIS SAEZ MORENO contra la Junta de Conciliación y Decisión N° 12 Herrera y Los Santos.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EDUARDO RÍOS MOLINAR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LUIS GUERRA, EN SU CONDICIÓN DE SECRETARIO GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN DE TRABAJADORES DE LA CORPORACIÓN PANAMEÑA DE RADIODIFUSIÓN CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 24/DGT/95 DE 2 DE NOVIEMBRE DE 1995, DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado EDUARDO E. RÍOS MOLINAR, actuando en representación de la UNIÓN DE TRABAJADORES DE LA CORPORACIÓN PANAMEÑA DE RADIODIFUSIÓN, ha presentado demanda de Amparo de Garantías Constitucionales contra la Orden de Hacer contenida en la Resolución N° 24-DGT-95, de 2 de noviembre de 1995, emitida por la Dirección General de Trabajo, tal como fue modificada por el Ministro de Trabajo y Bienestar Social, mediante Resolución N. D. M. 38/95 de 7 de noviembre de 1995.

La demanda fue admitida, por lo que se solicitó a la autoridad demandada el envío de la actuación o, en su defecto, de un informe acerca de los hechos materia de la acción.

El demandante nos indica que la orden que fue impartida por el Ministro de Trabajo y Bienestar Social y contra la cual se recurre, contenida en la Resolución N. D. M. 38/95, fue MODIFICADA por ese Ministerio al resolver el

recurso de apelación que interpuso oportunamente contra la Autorización de Despido expedida por el Director General de Trabajo a favor de la empresa CORPORACIÓN PANAMEÑA DE RADIODIFUSIÓN, S. A.

El Pleno advierte la importancia que reviste, para la debida consideración del recurso de amparo, al analizar el concepto en que la violación a una norma constitucional, tal como lo estima el recurrente, se ha violado, para determinar que estamos frente a materia constitucional y no legal. No obstante, aprecia el Pleno que en análisis lógico racional del concepto de la infracción constitucional, no se ha detenido a analizar en qué consisten las violaciones al debido proceso, cuyo contenido ha precisado en innumerables sentencias este Pleno, sino a alegar como violadas disposiciones de rango legal. Así, el recurrente, luego de transcribir el artículo 32, censura la decisión ministerial por haber violado los artículos del Código de Trabajo que se señalan a continuación: 581; 370; 942; 210, numeral 1; 735; 975 y, finalmente el artículo 213, en su literal C), que es precisamente el fundamento bajo el cual se autorizó el despido (Veáse fs. 41, 42 y 43). Se trata por lo tanto de cargos de ilegalidad que se le atribuyen a la decisión ministerial, los cuales no pueden ser combatidos por medio del amparo.

En razón de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DENIEGA la acción de Amparo de Garantías Constitucionales propuesta por el Licenciado EDUARDO E. RÍOS MOLINAR, contra el Ministro de Trabajo y Bienestar Social.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) CARLOS MUÑOZ POPE
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LIC. HÉCTOR IVÁN HERRERA LAMB, EN REPRESENTACIÓN DE ARACELLY SOTILLO DE WILLBURN, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 184-95, PROFERIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARRENDAMIENTO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Héctor Iván Herrera Lamb ha interpuesto acción de amparo de garantías constitucionales, en representación de la señora **ARACELLY SOTILLO DE WILBURN**, contra la orden contenida en la Resolución N° 184-95 de 27 de noviembre de 1995, expedida por la Dirección General de Arrendamientos del Ministerio de Vivienda.

El Pleno procede a examinar si la presente demanda cumple con los presupuestos procesales necesarios para su admisibilidad.

En primer lugar, se advierte que la acción se ha enderezado contra la resolución que confirma la orden contenida en la Resolución N° 72-95 de 8 de septiembre de 1995, proferida por la Comisión de Vivienda N° 2, que decretó justificado el lanzamiento de la señora ARACELLY SOTILLO DE WILBURN y la condenó al pago de la indemnización correspondiente.

Al respecto, la Corte ha manifestado en reiteradas ocasiones, que el amparo debe dirigirse contra la resolución que contiene el acto originario que genera

la violación que se acusa y no contra el acto que la confirma, como ha hecho el recurrente en el presente caso.

En segundo lugar, es preciso señalar que la resolución atacada entraña un acto administrativo. Si bien es cierto que la recurrente apeló del mismo, agotando así la vía gubernativa, aún es susceptible de impugnación ante la jurisdicción contencioso administrativa.

Consecuentemente, el presente amparo no debe ser admitido, en vista de que no se han agotado los medios ordinarios que la ley contempla para impugnar la resolución acusada.

En mérito de lo expuesto, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la acción de amparo de garantías constitucionales presentada por el Licenciado Héctor Iván Herrera Lamb, en representación de la señora ARACELLY SOTILLO DE WILLBURN, contra la Dirección General de Arrendamientos del Ministerio de Vivienda.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL LICENCIADO DARÍO EUGENIO CARRILLO GOMILA, EN SU PROPIO NOMBRE Y CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA NOTA DE 15 DE ENERO DE 1996, EMITIDA POR EL SECRETARIO DEL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Darío Eugenio Carrillo Gomila, en su propio nombre y representación, ha interpuesto acción de Amparo de Garantías Constitucionales contra la orden de hacer contenida en la Nota de 15 de enero de 1996, por la cual el Secretario del Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial hizo constar que recibió "a insistencia del presentador" (artículo 476 del Código Judicial), el memorial de incidente de recusación del Honorable Magistrado Andrés Antonio Almendral Cruz presentado por el amparista, dentro del Recurso de Habeas Corpus a favor de Moisés David Mizrachi e Ida Esperanza Domínguez de Castillo.

Considera el demandante que dicha actuación viola el artículo 32 de la Constitución Nacional.

El artículo 2611 del Código Judicial preceptúa que el Tribunal a quien se dirija la demanda de amparo de garantías constitucionales debe examinarla para comprobar si reúne los requisitos comunes a todas las demandas y los indicados en el artículo 2610 del mismo Código, y además para determinar si no es "manifiestamente improcedente". Estos requisitos son los siguientes:

a) **que se interponga contra órdenes de hacer o no hacer**;

b) que por la gravedad e inminencia del daño que representan estas órdenes se requiera una revocación inmediata;

c) que la revocatoria de estas órdenes no pueda obtenerse por otra vía,

porque no existen otros medios de impugnación, o porque éstos se han agotado; y

d) que tratándose de resoluciones judiciales la acción se interponga con sujeción a las reglas establecidas en los ordinales 1, 2 y 3 del artículo 2606 del Código Judicial.

Es decir, que para admitir la demanda de amparo de garantías constitucionales debe examinarse no sólo los aspectos formales de la misma, sino también el acto impugnado.

La acción de amparo procede contra órdenes de hacer o de no hacer expedidas o ejecutadas por servidores públicos. En el caso en estudio el acto impugnado no constituye una orden de hacer o de no hacer. Esto es así porque, de conformidad con el artículo 476 del Código Judicial, la anotación secretarial de que el escrito ha sido recibido por insistencia no resuelve si a ese documento se le dará el curso correspondiente o si se declarará extemporáneo y no se le dará valor. Tomar cualquiera de estas dos decisiones compete al tribunal de conocimiento y no al secretario que ha recibido un escrito por insistencia.

Como la presente acción es manifiestamente improcedente, ya que no va dirigida contra una orden de hacer o no hacer, no debe admitirse en cumplimiento del artículo 2611 del Código Judicial.

De consiguiente, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la acción de amparo de garantías constitucionales promovida por el licenciado Darío Eugenio Carrillo Gomila, en su propio nombre y representación, contra la orden de hacer contenida en la nota de 15 de enero de 1996, emitida por el Secretario del Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) CARLOS MUÑOZ POPE
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL LICENCIADO MARTÍN WILSON CHEN EN REPRESENTACIÓN DE BLANCA ESTELA SOLÍS CASTILLO CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA SENTENCIA DE 23 DE AGOSTO DE 1995 PROFERIDA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **MARTÍN WILSON CHEN**, actuando en su calidad de apoderado judicial de **BLANCA ESTELA SOLÍS CASTILLO**, ha interpuesto acción de amparo de garantías constitucionales contra la orden de hacer contenida en la sentencia de 23 de agosto de 1995 expedida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial.

En la referida resolución judicial se reforma la sentencia de 5 de octubre de 1994, expedida por el Juzgado Segundo de Circuito Penal, que denegó la solicitud de indemnización por daños y perjuicios presentada por el licenciado Jaime Vega contra la señora **SOLÍS CASTILLO**, y en su lugar ordenó a la prenombrada el pago de la indemnización, que debería ser cuantificada en la vía correspondiente. Además, se confirma en todos los demás puntos la sentencia de

primera instancia, que declaró justiciable a **BLANCA SOLÍS** y la condenó por el delito de estafa contra el Banco Comercial de Panamá, a la pena de dos años de prisión, cincuenta días multa y la inhabilita para el ejercicio de funciones públicas por dos años.

Las razones invocadas por el amparista para fundamentar la supuesta conculcación de las garantías constitucionales a la señora **SOLÍS** se centran de manera medular en el argumento de que los Tribunales A-quo y Ad-quem en la causa penal condenaron a la señora **BLANCA SOLÍS** por el delito de Estafa, cuando el delito supuestamente cometido fue el de apropiación indebida, y en la circunstancia de que el delito imputado de manera errada: **Estafa**, tampoco es del conocimiento de un Juez de categoría circuital, sino municipal, por lo que a juicio de la parte actora la señora **SOLÍS** fue condenada por un Tribunal que carecía de competencia para decidir la causa penal. Estima la parte actora que esta actuación vulnera la garantía constitucional del debido proceso legal, así como el artículo 31 de la Constitución Nacional.

Acogida la demanda, se corrió traslado al funcionario responsable del acto acusado, quien mediante Oficio N° 430-I de 14 de diciembre de 1995 remite a esta Corporación Judicial el expediente penal contentivo del proceso seguido a **BLANCA ESTELA SOLÍS CASTILLO.**

Ante la ausencia de un informe de conducta que permita al Tribunal examinar tanto el elemento fáctico, como el fundamento de la actuación del Segundo Tribunal Superior de Justicia en este caso, procedemos a repasar íntegramente los hechos que dieron origen a la controversia constitucional planteada.

ANTECEDENTES

El día 3 de junio de 1993 el Juzgado Segundo de Circuito penal abrió causa criminal contra **BLANCA ESTELA SOLÍS**, ordenando su inmediata detención preventiva, por considerar que existían méritos suficientes para llamarla a responder por la denuncia que por Estafa había suscrito el Banco Comercial de Panamá en su contra.

La denuncia tenía como base el hecho alegado de que la señora **SOLÍS** se había aprovechado de la buena fe de la entidad de crédito, que había acordado con ella el levantamiento de la garantía hipotecaria que recaía sobre su vehículo (en virtud de contrato de préstamo suscrito entre ésta y BANCOMER) para que el gravamen recayera de inmediato sobre otro bien mueble (otro vehículo de su propiedad), con la particularidad de que antes de prestar la nueva garantía hipotecaria la señora **SOLÍS** había traspasado el bien, burlando a al entidad crediticia que no contaba con un bien que garantizara la obligación contraída previamente.

El Juzgado Segundo de Circuito Penal, en sentencia de 5 de octubre de 1994 condenó a la señora **SOLÍS**, por considerar que se confrontaba una conducta típica, antijurídica y culpable, por el hecho de aprovechar la señora **SOLÍS** el levantamiento de la hipoteca para traspasar el nuevo vehículo que ella misma había ofrecido en garantía para honrar su obligación crediticia, lo que constituía una actitud dolosa y engañosa con la entidad bancaria, que le causaba además un cuantioso perjuicio patrimonial.

Sin embargo, antes de ser condenada, específicamente al momento de abrirse la causa criminal, se ordenó la detención de la señora **SOLÍS**. Contra este acto judicial se presentó acción de habeas corpus, misma que fuere resuelta por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial en sentencia de 31 de enero de 1995, que declaró ilegal de detención preventiva, con apoyo en dos circunstancias medulares:

1. Que el delito que se imputaba a la señora **SOLÍS**, contemplado en el artículo 190 del Código penal conllevaba una sanción de prisión que no excede los dos años, razón por la cual la competencia era de un Juez Municipal, según lo previsto en el artículo 174 del Código Judicial;

2. Porque al tratarse de una pena mínima inferior a los dos años de prisión, no

es aplicable la medida cautelar personal de detención preventiva, a tenor de lo dispuesto en el artículo 2148 del Código Judicial.

Finalmente, el Tribunal de Habeas Corpus externó algunos juicios concernientes a la calificación legal del delito que se imputaba a la señora **SOLÍS**, manifestando que, pese a que la conducta reprochable podía ser encausada dentro del tipo penal de apropiación indebida y no de estafa, el error en la tipificación delictiva no podía ser enmendado después de un enjuiciamiento ejecutoriado por estafa.

Es precisamente con fundamento en estos juicios esbozados por el Tribunal de Habeas Corpus que se plantea la violación constitucional del debido proceso legal por parte de la sentencia penal expedida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, dado que, pese a tratarse del mismo Cuerpo Colegiado que manifestó, aunque dentro de la Acción de Habeas Corpus, la falta de competencia del Juzgado Circuital para conocer de la encuesta penal, al conocer del asunto penal como Tribunal de Segunda instancia, confirmó la sentencia que condena por estafa a **BLANCA SOLÍS**, y en consecuencia convalidó la actuación del Juez Segundo de Circuito.

GARANTÍAS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN INFRINGIDAS

Considera el recurrente que el acto acusado resulta violatorio de los artículos 31 y 32 de la Constitución Nacional.

Reproducimos a continuación los textos constitucionales referidos:

> "Artículo 31. Sólo serán penados los hechos declarados punibles por Ley anterior a su perpetración y exactamente aplicable al acto imputado."

> "Artículo 32. Nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, ni más de una vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria."

Estima el amparista que se ha violado el debido proceso legal en este caso, dado que pese a la aludida incompetencia del Juez de Circuito para conocer de la causa penal, se confirma la actuación y sentencia expedida por un Tribunal sin competencia, contraviniendo directamente el primer postulado del artículo 32 de la Constitución Nacional, en el sentido de que "nadie será juzgado sino por autoridad competente"

En cuanto a la alegada violación del artículo 31 de la Constitución Nacional, la transgresión constitucional se sustenta en los siguientes términos:

> "Este artículo ha sido violado en forma directa tanto por el Juzgado Segundo del Circuito, como por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, al condenar a **BLANCA ESTELA SOLÍS CASTILLO** por el delito de **ESTAFA**, cuando el delito supuestamente cometido fue el de **APROPIACIÓN INDEBIDA AGRAVADA**, tipificado en el Artículo 195B del Código Penal."

DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Esta Superioridad, al examinar los cargos presentados por el amparista y confrontarlos con los textos constitucionales que se aducen infringidos, debe externar lo siguiente:

En primer término, esta Corporación Judicial ha venido señalando en copiosos pronunciamientos que la Acción de Habeas Corpus es una institución de garantía que tutela de manera específica la libertad corporal, de forma tal que una persona no se vea sometida a restricción ambulatoria alguna, si tal medida no se encuentra fundada en la Ley, y con el pleno sometimiento a las formalidades constitucionales y legales establecidas.

En este contexto, la Corte advierte que la Acción de Habeas Corpus decidida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia en resolución de 31 de enero de 1995, no se limitó a deslindar la legalidad o no de la detención preventiva de la señora **BLANCA ESTELA SOLÍS**, sino que además se adentra en el terreno de la calificación legal del delito que se imputaba a la prenombrada, y por el cual estaba siendo llamada a juicio.

Aunque no es ésta la resolución judicial impugnada, es preciso reparar en las situaciones creadas por la sentencia aludida, toda vez que es con base en tal pronunciamiento jurisdiccional que el amparista ha entablado la acción de naturaleza constitucional que nos ocupa.

En efecto, el Segundo Tribunal Superior de Justicia, en funciones de Tribunal de Habeas Corpus, indicó de manera enfática que el delito que se confrontaba por razón de la conducta de la señora **SOLÍS** era el de apropiación indebida y no el de estafa. Otros de los puntos que se destacan en la aludida sentencia, es que denuncia un aspecto que no había sido siquiera señalado por la parte afectada, esto es, la falta de competencia del Juez Circuital que conocía del asunto penal, puntualizando lo siguiente:

> "Con respecto a la estafa debemos tener presente que está tipificada en el artículo 190 del Código P. y contempla sanción de 6 meses a 2 años de prisión y de 50 a 150 días multa, por tanto la competencia para el conocimiento por los delitos de estafa le corresponde a los jueces municipales de la jurisdicción donde fue cometido el hecho punible, de conformidad con lo previsto en el artículo 174, literal A ordinal 2 del Código Penal (sic), porque la excerta legal citada exige dos requisitos que a saber son los siguientes:
>
> A. La cuantía del delito contra la propiedad debe ser menor de mil balboas (B/.1,000.00);
>
> b: La pena de prisión no debe exceder de dos años y,
>
> Para la estafa la pena de prisión, en los casos del artículo 190 del Código Penal, nunca excede de dos años, por consiguiente, aún cuando la cuantía le corresponde fuese mayor de mil balboas (B/.1,000.00) la competencia le corresponde a los juzgados municipales, porque debe tomarse en consideración la pena de prisión, pues los delitos cuya pena de prisión exceden de dos años, son los que le corresponde conocer a los juzgados de circuito.
>
> Lo anterior significa que en el caso de los delitos de estafa existe contradicción en la norma porque establece un requisito referente a la cuantía y el otro en cuanto a la pena de prisión, en consecuencia, ante esa contradicción debe resolverse la controversia con respecto a la pena de prisión y en cuanto a lo más favorable, y en este caso sería la del conocimiento de un juzgado municipal."

Pese a los conceptos vertidos en la sentencia de 31 de enero de 1995, el mismo Tribunal Superior, en funciones de Tribunal de Segunda Instancia dentro del proceso penal por estafa seguido a **BLANCA SOLÍS**, en sentencia de 23 de agosto de 1995 confirmó la condena de dos años de prisión dictada por el Juzgado Segundo de Circuito por el delito de estafa. Existe por tanto, una aparente contradicción entre las dos sentencias expedidas por el mismo Tribunal, contradicción a la que hace alusión el amparista para fundamentar la acción presentada, en el sentido de que si la sentencia de habeas corpus fue enfática en el sentido de que la calificación del delito era otra distinta a la estafa, y que el Juzgado Circuital no era el competente para conocer de la causa penal, mal podía en sentencia de segunda instancia, confirmar todo lo actuado.

En cuanto al primer punto denunciado: la calificación del hecho punible, debemos destacar que no era el Tribunal de Habeas Corpus la instancia competente para calificar el ilícito investigado. Esta Superioridad así lo ha reiterado en múltiples ocasiones, v. g. sentencia de 22 de abril de 1994 en que el Pleno de

la Corte de manera clara señaló: **"Esbozamos las ideas anteriores para indicar, que sin entrar en consideraciones sobre la calificación del delito, que serían por demás completamente impropias y ajenas a la competencia del Tribunal de Habeas Corpus, que sólo examina la legitimidad formal de la medida adoptada."**

Más recientemente, en sentencia de 7 de diciembre de 1995, esta Superioridad señaló: **"Nada impide sin embargo, que en transcurso de la investigación sumarial surjan nuevos elementos que hagan variar la situación procesal del imputado, pero tal calificación corresponderá al Tribunal de la causa, toda vez que en esta instancia sólo corresponde a esta Superioridad examinar si la detención preventiva se ajusta a las formalidades legales establecidas ..."**

Como queda expuesto, la calificación que del delito realizó el Segundo Tribunal Superior de Justicia dentro de la sentencia de habeas corpus resultaba ajena a la finalidad de la acción.

Sin embargo, como Tribunal Ad-quem de la causa penal, acepta lo actuado por el Juez Segundo de Circuito, sin adelantar comentario alguno con respecto a la calificación del delito, y lo que es más importante, la competencia del Juzgador.

Como lo que respecta a la calificación legal tal asunto no puede ser dirimido dentro de la Acción de Amparo de Garantías, por tratarse de un aspecto legal, que no conculca garantía constitucional alguna, siendo que este mismo Tribunal ha sido reiterativo al indicar que la finalidad de las acciones de amparo no es la de erigirse en una tercera instancia que valore el juicio crítico externado por un tribunal jurisdiccional, y como la calificación del Tribunal de Habeas Corpus en esta materia no resulta conducente, debemos descartar el cargo propuesto contra el artículo 31 del la Constitución Nacional, pero es preciso examinar el aspecto procesal de la competencia del juez segundo de circuito para conocer del asunto, porque el mismo guarda relación con el debido proceso legal.

En efecto, las garantías objetivas del debido proceso han sido claramente delimitadas por jurisprudencia reiterada de esta Superioridad. En este sentido, de acuerdo al principio de estricta legalidad procesal, la administración de justicia debe ejercitarse conforme a los trámites establecidos en la Ley. Ello implica el **acatamiento de las formalidades básicas que rigen la actividad jurisdiccional**, entre ellas: **asegurar a las partes en todo proceso legalmente establecido la oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente,** para decidir la materia en conflicto.

El punto en controversia resulta en este caso, si la competencia establecida en el Código Judicial para los delitos de estafa atiende la cuantía del negocio (perjuicio patrimonial sufrido) o la sanción punitiva aplicable, o a ambas, de manera simultánea. Sólo tal determinación permitirá al Tribunal establecer si el Juzgado Segundo de Circuito Penal tenía o no competencia para conocer del negocio.

Conforme a la doctrina más aceptada, la competencia es la medida de la jurisdicción asignada por la ley al ente jurisdiccional; la determinación genérica de los asuntos sobre los cuales es llamado a conocer y decidir.

Al examinar el artículo 174, literal A, ordinal 2, del Código Judicial se advierte que la distribución de competencia que hace la ley en materia de delitos contra el patrimonio (entre ellos el de estafa) para asignar su conocimiento a los jueces de la esfera municipal está determinada por dos aspectos: a) cuantía que no rebase los mil balboas y b) pena de prisión que no debe exceder los dos años.

En el negocio que nos ocupa nos encontramos frente a un hecho declarado punible que involucra un perjuicio patrimonial superior a los mil balboas, pero cuya sanción punitiva no excede los dos años de prisión.

En este contexto, cabe indicar que el artículo 159 en su numeral 15, lista una serie de procesos penales que son del conocimiento de los jueces de circuito, señalando en su párrafo final que le corresponderá a esta categoría de

funcionarios el conocimiento de cualquier delito que tenga en la Ley señalada pena mayor de dos años de prisión. En este aspecto parece existir coincidencia y congruencia con lo establecido en el artículo 174 del Código Judicial. Sin embargo, el ordinal **a** del artículo 159 también ha establecido que los procesos cuya cuantía sea superior a mil balboas serán de competencia de los Jueces de Circuito.

El Tribunal se encuentra pues en la disyuntiva de determinar si la asignación de competencia y sustanciación de la causa penal por el delito de estafa contra **BLANCA ESTELA SOLÍS** por parte del Juez Segundo de Circuito Penal resulta contraria al debido proceso legal.

Y en este punto advierte que, en puridad de verdad, debido a la cuantía del negocio que supera los mil balboas de perjuicio patrimonial, el Juez Segundo de Circuito consideró que era el **Juez natural** para sustanciar la causa. No resulta de todo infalible, por ende, la interpretación que sobre el particular adelantara el Segundo Tribunal Superior de Justicia con sujeción al artículo 159 del Código Judicial, cuando indicó que el único criterio atendible para fijar la competencia era el de la pena aplicable al imputado. Así, el mismo artículo 159 señala que todo proceso cuya cuantía supere los mil balboas será de conocimiento de los Jueces de Circuito.

En estas circunstancias, el Pleno de la Corte considera que en estricto sentido jurídico el Juez Circuital no pretendió conculcar las garantías del debido proceso en este negocio, pues el Juzgador de Primera instancia actuó según su leal saber y entender, asumiendo el conocimiento de la litis puesto que no se cumplía uno de los presupuestos que asignaba el conocimiento del negocio a los Jueces Municipales, esto es, la cuantía del negocio.

Sin embargo, y debido a que es preciso deslindar de manera definitiva quién es el Juez natural en estos casos, la Corte considera atendible el criterio externado por el Tribunal Superior de Justicia en la sentencia de 31 de enero de 1995, que indica que la competencia en estos procesos debe ser asignada de manera exclusiva a los Jueces de la esfera municipal. Para ello, debe tenerse en consideración que el numeral 15 del artículo 159 del Código Judicial enumera una serie de procesos penales que serán del conocimiento de los jueces circuitales (hurto, peculado, competencia desleal etc.), entre los que no se encuentra la estafa, apropiación indebida u otros fraudes, más termina indicando que aquellos no listados, pero cuya pena supere los dos años de prisión, serán de su competencia.

Se advierte que la estafa ni se contempla en el listado del numeral 15 del artículo que asigna negocios a la competencia de los jueces de circuito, ni tiene prevista sanción que excede los dos años de prisión. Mientras que el artículo 174 que establece la competencia de los Jueces Municipales pareciera llenar el vacío de aquellos negocios que no le fueron atribuidos a los Jueces de Circuito de manera expresa, cuando se trata de delitos contra el patrimonio cuya pena no excede los dos años de prisión.

En estos términos, pese a que la situación no se presenta del todo clara, tal como lo expresara el Segundo Tribunal Superior de Justicia, el conjunto normativo examinado tiende a determinar que la sanción o pena aplicable sí es un factor determinante de la competencia en este caso, y hasta cierto punto excluye a los otros factores de competencia.

Acotamos, finalmente, que esta interpretación encierra además un principio de utilidad judicial, toda vez que a los jueces circuitales les está asignado un gran cúmulo de negocios, incluyendo particularmente aquellos que por ley no están atribuidos de manera expresa a otra autoridad, por lo que mal podría continuar recargándose la labor de estos servidores judiciales, cuando el texto del artículo 174 del Código Judicial le asigna competencia a los jueces municipales para conocer de aquellos delitos cuya pena no exceda los dos años de prisión.

El Segundo Tribunal Superior de Justicia al momento de sustanciar la apelación, podía subsanar o sanear la situación denunciada por ese mismo Tribunal

Colegiado, relativa a la falta de competencia del Juzgado de Circuito para conocer del negocio penal. Sin embargo no lo hace, pese a que ello era perfectamente posible a tenor de lo previsto en los artículos 1136 y 2301 del Código Judicial.

En efecto, una de las causales de nulidad del proceso penal es la falta de jurisdicción o competencia del Tribunal que actúa, según lo dispuesto en el artículo 2297 del Libro Tercero del Código Judicial. El artículo 2300 ibídem por su parte preceptúa:

> "Artículo 2300. Cuando en el curso del proceso, el Juez que conoce del mismo, advierta que se ha incurrido en algunas de las causales expresadas en el artículo 2297, ordenará la reposición del proceso para que se subsane el defecto, si a ello hubiere lugar."

Por su parte, el artículo 2301 del mismo cuerpo legal ha dispuesto:

> "Artículo 2301. Siempre que un proceso se halle en un Tribunal de segunda instancia por razón de recurso o consulta, el superior debe examinar si se ha incurrido en alguna irregularidad por la cual haya de ordenarse la reposición del proceso."

Como queda expuesto, el Segundo Tribunal Superior de Justicia no hizo uso del instituto de saneamiento en la apelación, lo que hubiese permitido enmendar la situación creada por el Juzgado de Circuito al asumir el conocimiento del negocio. Como se advierte, nos encontramos frente a una causal de nulidad que anula el proceso desde su génesis misma, por la falta de competencia del Juzgador de la causa penal.

Se verifica pues, la existencia de un vicio de nulidad que ha vulnerado el debido proceso legal en este caso, razón por la cual el alcance de la reparación del derecho subjetivo conculcado debe acceder hasta el inicio de la sustanciación de la encuesta penal, esta vez por el Juzgador competente para conocer de la misma, como lo es un Juez de la esfera municipal.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONCEDE el amparo de Garantías Constitucionales impetrado, REVOCA la sentencia de 23 de agosto de 1995 expedida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, así como las actuaciones que llevaron a la expedición de la sentencia de 5 de octubre de 1994, dictada por el Juez Segundo de Circuito y ORDENA que la denuncia penal instaurada contra la señora BLANCA ESTELA SOLÍS CASTILLO por el delito de estafa en perjuicio del BANCO COMERCIAL DE PANAMÁ, sea remitida a un Juzgado Municipal para que se le dé el trámite de rigor.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) ELIGIO A. SALAS — (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. — (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA — (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE — CON SALVAMENTO DE VOTO
(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO RAFAEL A. GONZÁLEZ

Discrepo de la mayoría, con el mayor respeto, en ocasión de este amparo de garantías constitucionales, que resuelve revocando una sentencia por falta de competencia, en las circunstancias que se explicitan a continuación.

Luego de dictada sentencia de segunda instancia por el Segundo Tribunal Superior de Justicia (en que se confirma la condena a BLANCA ESTELA SOLÍS CASTILLO a dos (2) años de prisión y cincuenta (50) días multa por el delito de

estafa), la sancionada interpuso el recurso de amparo de garantías constitucionales que nos ocupa.

El recurso de amparo se funda en que se "condena a BLANCA ESTELA SOLÍS CASTILLO por un delito distinto a el (sic) cometido, violándose el debido proceso". No obstante, es honesto registrar que al señalar las disposiciones constitucionales infringidas, alude a la falta de competencia.

Se indica lo anterior para evidenciar que aún el 11 de diciembre de 1995 cuando se interpone el amparo (la sentencia impugnada tiene fecha 23 de agosto de 1995), no se considera como cuestión destacada el que haya intervenido un tribunal incompetente, pues, en los hechos del amparo se habla de "condenar por un delito distinto al cometido", y no se hace referencia (en los hechos) a la falta de competencia.

No hay evidencias, en efecto, de que se haya planteado debate en el proceso penal en el cual se dictó la sentencia impugnada, acerca de la falta de competencia. Esto significa que tanto los tribunales como la imputada, en el quehacer práctico que el proceso representa, toman como evidente que aquellos son competentes.

Por otra parte el PLENO en la decisión con la que difiero viene a plantear ahora, después de terminado el juicio penal, la cuestión de la competencia de ese juicio ya terminado. Y lo hace no a trasluz de vulneración o lesiones de derechos o garantías fundamentales que consagra la Constitución, sino en el plano meramente legal, ajeno a los propósitos del recurso de garantías constitucionales.

Para demostrarlo transcribo los argumentos del Pleno:

> "El punto en controversia resulta en este caso, si la competencia establecida en el Código Judicial para los delitos de estafa atiende la cuantía del negocio (perjuicio patrimonial sufrido) o la sanción punitiva aplicable, o a ambas, de manera simultánea. Sólo tal determinación permitirá al Tribunal establecer si el Juzgado Segundo de Circuito Penal tenía o no competencia para conocer del negocio.
>
> Conforme a la doctrina más aceptada, la competencia es la medida de la jurisdicción asignada por la ley al ente jurisdiccional; la determinación genérica de los asuntos sobre los cuales es llamado a conocer y decidir.
>
> Al examinar el artículo 174, literal A, ordinal 2, del Código Judicial se advierte que la distribución de competencia que hace la ley en materia de delitos contra el patrimonio (entre ellos el de estafa) para asignar su conocimiento a los jueces de la esfera municipal está determinada por dos aspectos: a) cuantía que no rebase los mil balboas y b) pena de prisión que no debe exceder los dos años.
>
> En el negocio que nos ocupa nos encontramos frente a un hecho declarado punible que involucra un perjuicio patrimonial superior a los mil balboas, pero cuya sanción punitiva no excede los dos años de prisión.
>
> En este contexto, cabe indicar que el artículo 159 en su numeral 15, lista una serie de procesos penales que son del conocimiento de los jueces de circuito, señalando en su párrafo final que le corresponderá a esta categoría de funcionarios el conocimiento de cualquier delito que tenga en la ley señalada pena mayor de dos años de prisión. En este aspecto parece existir coincidencia y congruencia con lo establecido en el artículo 174 del Código Judicial. Sin embargo, el ordinal a del artículo 159 también ha establecido que los procesos cuya cuantía sea superior a mil balboas serán de competencia de los Jueces de Circuito.

El Tribunal se encuentra pues en la disyuntiva de determinar si la asignación de competencia y sustanciación de la causa penal por el delito de estafa contra **BLANCA ESTELA SOLÍS** por parte del Juez Segundo de Circuito Penal resulta contraria al debido proceso legal.

Y en este punto advierte que, en puridad de verdad, debido a la cuantía del negocio que supera los mil balboas de perjuicio patrimonial, el Juez Segundo de Circuito consideró que era el **Juez Natural** para sustanciar la causa. No resulta de todo infalible, por ende, la interpretación que sobre el particular adelantara el Segundo Tribunal Superior de Justicia con sujeción al artículo 159 del Código Judicial, cuando indicó que el único criterio entendible para fijar la competencia era el de la pena aplicable al imputado. Así, el mismo artículo 159 señala que todo proceso cuya cuantía supere los mil balboas será de conocimiento de los Jueces de Circuito.

En estas circunstancias, el Pleno de la Corte considera que en estricto sentido jurídico el Juez Circuital no pretendió conculcar las garantías del debido proceso en este negocio, pues el Juzgador de Primera Instancia actuó según su leal saber y entender, asumiendo el conocimiento de la litis puesto que no se cumplía uno de los presupuestos que asignaba el conocimiento del negocio a los Jueces Municipales, esto es, la cuantía del negocio.

Sin embargo, y debido a que es preciso deslindar de manera definitiva quién es el Juez natural en estos casos, la Corte considera atendible el criterio externado por el Tribunal Superior de Justicia en la sentencia de 31 de enero de 1995, que indica que la competencia en estos procesos debe ser asignada de manera exclusiva a los Jueces de la esfera municipal. Para ello, debe tenerse en consideración que el numeral 15 del artículo 159 del Código Judicial enumera una serie de procesos penales que serán del conocimiento de los jueces circuitales (hurto, peculado, competencia desleal, etc.), entre los que no se encuentra la estafa, apropiación indebida u otros fraudes, más termina indicando que aquellos no listados, pero cuya pena supere los dos años de prisión, serán de su competencia.

Se advierte que la estafa ni se contempla en el listado del numeral 15 del artículo que asigna negocios a la competencia de los jueces de circuito, ni tiene prevista sanción que excede los dos años de prisión. Mientras que el artículo 174 que establece la competencia de los Jueces Municipales pareciera llenar el vacío de aquellos negocios que no le fueron atribuidos a los Jueces de Circuito de manera expresa, cuando se trata de delitos contra el patrimonio cuya pena no excede los dos años de prisión.

En estos términos, pese a que la situación no se presenta del todo clara, tal como lo expresara el Segundo Tribunal Superior de Justicia, el conjunto normativo examinado tiende a determinar que la sanción o pena aplicable sí es un factor determinante de la competencia en este caso, y hasta cierto punto excluye a los otros factores de competencia.

Acotamos, finalmente, que esta interpretación encierra además un principio de utilidad judicial, toda vez que a los jueces circuitales les está asignado un gran cúmulo de negocios, incluyendo particularmente aquellos que por ley no están atribuidos de manera expresa a otra autoridad, por lo que mal podría continuar recargándose la labor de estos servidores judiciales, cuando el texto del artículo 174 del Código Judicial le asigna competencia a los Jueces Municipales para conocer de aquellos delitos cuya pena no exceda los dos años de prisión" (Fs. 10-13).

Nada hay constitucional en tan larga exposición.

No es ésta la falta de competencia que se debe discutir en los amparos. Hacerlo redundará en perjuicio de la administración de justicia, como es fácil prever, cuando se afecta la estabilidad de las decisiones judiciales por el desconocimiento de la institución de la cosa juzgada.

Estamos frente a un proceso que presenta todos los visos de seriedad. En que actúan tribunales ordinarios, con oportunidad para el imputado de plantear la falta de competencia, y que sin embargo nunca lo hizo. A posteriori, sólo después de sentencia de segundo grado condenatoria y mediante amparo en que la competencia viene de soslayo, se viene a discutir la competencia, y no en la esfera constitucional.

Cuando el artículo 32 de la Constitución habla de tribunales competentes no pretende entrar en las minucias de debates sobre cuál sería el mejor criterio, sino a cuestiones que revelen palmariamente falta de competencia para conocer del caso, y que marginan el debido proceso. Más que a la falta de competencia, la disposición constitucional apunta a la falta de jurisdicción. ("... si (un juez) no tiene jurisdicción para el caso, menos le corresponde la competencia"). Hernando Devis Echandía, Compendio de Derecho Procesal, Editorial ABC, Bogotá, 1983, Pág. 136).

Considero en este sentido que lo planteado en el recurso de amparo carece de rango constitucional.

Por otra parte, ya se ha podido observar que la sentencia es de fecha 23 de agosto de 1995 y el amparo se interpuso el 11 de diciembre. Al decidir como se ha hecho se está prescindiendo del criterio reiterado de que el amparo es para conjurar un peligro inminente, condición que se le niega a una situación constituida desde relativamente largo tiempo. Mucho se ha insistido en lo que expresa el artículo 2606 del Código Judicial que se refiere a que el amparo es contra actos 1) que vulneren garantías fundamentales; 2) cuando por la gravedad e inminencia del daño que representan requieren de una revocación inmediata.

Las sentencias del Pleno de 30 de septiembre de 1993, 15 de abril de 1994 y 13 de enero de 1996 son consultables.

¿Cómo dejar de lado que para interponer amparo de garantías constitucionales se requiere agotar las vías ordinarias? Repito, no aparece que en la dilatación del proceso penal hasta la sentencia de segunda instancia, el imputado haya planteado la falta de competencia de los tribunales.

Veo con preocupación que la Corte intervenga excesivamente, a través del amparo, en procesos de toda naturaleza, sin que se trate de actos que vulneren o lesionen los derechos o garantías fundamentales que consagra la Constitución.

Estas razones o sentimientos me mueven a disentir lo que hago con el mayor respeto.

Fecha ut supra.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL LICENCIADO COSME ODRYS MORENO EN REPRESENTACIÓN DE JOSÉ SALVADOR RODRÍGUEZ MUÑOZ, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL DECRETO N° 564 DE 2 DE NOVIEMBRE DE 1994, EMITIDO POR EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Cosme Odrys Moreno, en representación de José Salvador Rodríguez Muñoz, ha interpuesto acción de Amparo de Garantías Constitucionales contra la orden de hacer contenida en el Decreto N° 564 de 2 de noviembre de 1994, emitido por el señor Presidente de la República.

Considera el apoderado judicial del demandante que dicha orden viola los artículos 17 y 32 de la Constitución Nacional.

Al resolver sobre la admisibilidad de la demanda presentada, el Pleno de la Corte observa que el amparista señala en el libelo de la demanda, al Señor Presidente de la República como el funcionario responsable del acto atacado (fs. 42), por lo cual no es posible admitir la acción instaurada ya que, de acuerdo con el artículo 186 de la Constitución, el Presidente de la República sólo es responsable de los casos taxativamente considerados en esa norma, que son los siguientes:

1° Por extralimitación de sus funciones constitucionales;

2° Por actos de violencia o coacción en el curso del proceso electoral; por impedir reunión de la Asamblea Legislativa; por obstaculizar el ejercicio de las funciones de ésta o de los demás organismos o autoridades públicas que establece la Constitución;

3° Por delitos contra la personalidad internacional del Estado o contra la administración pública. (Cfr. resolución de 11 de mayo de 1994, dictada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en el Amparo de Garantías Constitucionales promovido por BENJAMÍN SOLÍS contra la orden de hacer dictada por el señor Presidente de la República y la resolución de 30 de agosto de 1990, dictada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en el Amparo de Garantías Constitucionales promovido por ITZA BROCE DE SPENCE contra la orden de hacer dictada por el señor Presidente de la República y el señor Ministro de Relaciones Exteriores).

Como la orden impugnada mediante el presente amparo es una acción de personal firmada por el Señor Presidente de la República y el Ministro de Gobierno y Justicia, es este último funcionario quien debió ser demandado, ya que según el artículo 181 de la Constitución Nacional, los actos que dicta el Presidente de la República y refrenda el Ministro de Estado son de exclusiva responsabilidad del Ministro respectivo.

Siendo esta la situación, la demanda es manifiestamente improcedente y no debe admitirse en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 2611 del Código Judicial.

De consiguiente, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la acción de amparo de garantías constitucionales promovida por el licenciado Cosme Odrys Moreno en representación de José Salvador Rodríguez Muñoz contra la orden de hacer contenida en el Decreto N° 564 de 2 de noviembre de 1994, dictada por el señor Presidente de la República.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) CARLOS MUÑOZ POPE
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR LA FIRMA MORGAN & MORGAN, EN REPRESENTACIÓN DE WILD PALMS, INC., CONTRA LAS ÓRDENES DE HACER CONTENIDAS EN LA RESOLUCIÓN DE 2 DE OCTUBRE DE 1995, DICTADA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, BAJO LA PONENCIA DE LA MAGISTRADA ELITZA A. CEDEÑO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma Morgan & Morgan, en su condición de apoderada especial de WILD PALMS, INC., ha interpuesto acción de amparo de garantías constitucionales contra las órdenes de hacer contenidas en la Resolución fechada el 2 de octubre de 1995, mediante la cual el Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial **REVOCÓ** en todas sus partes el Auto N° 1673, de 4 de julio de 1995, proferido por el Juzgado Segundo del Circuito de lo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá, y **DECLARO** no probado el incidente de nulidad incoado por LILLIAM SOMOZA DE SEVILLA SACASA dentro del proceso ordinario interpuesto por la REPÚBLICA DE NICARAGUA contra la incidentista, la sociedad panameña WILD PALMS, INC., y otros.

El Auto N° 1673 de 4 de julio de 1995, dictado por el Juzgado Segundo del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá señaló lo siguiente:

> "El incidentista pretende que se declare la nulidad de lo actuado por carencia de competencia e ilegitimidad de personería del demandado.
>
> El artículo 64 del Código Civil, señala lo siguiente:
>
> "Artículo 64. Son personas jurídicas:
> 1. Las entidades políticas creadas por la Constitución o por la ley;
>
> 2. Las iglesias, congregaciones, comunidades o asociaciones religiosas;
>
> 3. Las corporaciones o fundaciones de interés público creadas o reconocidas por ley especial;
>
> 4. Las asociaciones de interés público reconocidas por el Poder Ejecutivo;
>
> 5. Las asociaciones de interés privado sin fines lucrativos que sean reconocidas por el Poder Ejecutivo; y
>
> 6. Las asociaciones civiles o comerciales a que la ley conceda personalidad propia independiente de la de cada uno de sus asociados."
>
> De la norma jurídica trascrita se desprende quiénes son personas jurídicas. Claro es de observar que en ningún momento considera a los Estados como personas jurídicas para los efectos de esta norma transcrita. El artículo 1668 y 1669 de la misma excerta legal citada, señala lo siguiente:
>
> "Artículo 1668. Por la prescripción se adquieren, de la manera y con las condiciones determinadas en la ley, el dominio y demás derechos reales.
>
> También se extinguen del propio modo por la prescripción los derechos y las acciones, de cualquier clase que sean.
>
> Artículo 1669. Pueden adquirir bienes o derechos por medio de la prescripción las personas capaces para adquirirlos por los demás modos legítimos."

Si bien es cierto que el artículo 31 del Código de Bustamante que cita el demandado como la norma pertinente para que se pueda dar la acción interpuesta por él, debemos entenderla en forma restrictiva, pues la misma no puede estar por encima de la Constitución Nacional, para los efectos de la adquisición del dominio, cuando en su artículo 285 señala lo siguiente:

"Artículo 285. Ningún gobierno extranjero ni entidad o institución oficial o semioficial extranjera podrán adquirir el dominio sobre alguna parte del territorio nacional, salvo cuando se trate de las sedes de embajadas de conformidad con lo que disponga la ley."

No cabe duda que existe en esta norma una prohibición expresa para que gobiernos extranjeros puedan adquirir dominio sobre parte del territorio nacional, con la salvedad que la misma norma expone, cuya reglamentación está contemplada debidamente en la Ley 15 del 5 de abril de 1989.

Debemos entonces concluir con las pretensiones del incidentista de que la República de Nicaragua carece de legitimidad sustantiva para adquirir por prescripción adquisitiva territorio de la República de Panamá, es decir, como bien lo afirma el incidentista, hay ilegitimidad de personería sustantiva del demandante y en razón de ello debemos decretar la nulidad de lo actuado." (Fs. 29 a 31).

El Tribunal Superior de Justicia, mediante la resolución impugnada con la presente acción de amparo, revocó el Auto N° 1673 de 4 de julio de 1995 y manifestó lo siguiente:

"Se tiene así entonces que el Código de Bustamante, ratificado por las Repúblicas de Nicaragua y de Panamá, reconoce la capacidad a los Estados contratantes, como personas jurídicas, para acceder a la adquisición de derechos u obligaciones en los demás países contratantes y conforme al derecho local; lo que examinado, no excluye los modos de adquirir aceptados por el Código Civil.

... se tiene que a fojas 3 del cuadernillo de la medida cautelar reposa documentación mediante la cual el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Director General del Ceremonial del Estado y Protocolo, certifica la debida acreditación del Embajador Extraordinario Plenipotenciario de la República de Nicaragua.

Con lo anterior y dada la capacidad pública de comprometer al Estado que representa, así como también para llevar a cabo el giro de la administración de la sede (ius gestiones) y por constituir la misma una extensión territorial la representación del agregado diplomático para pretender, a nombre de la República que representa, la adquisición que ensaya sobre el bien inmueble en donde se ubica la sede de la embajada.
...
En cuanto a la competencia de los tribunales panameños para conocer de proceso en donde participe una nación extranjera, vale destacar que los Estados contratantes pueden acceder a un pronunciamiento jurisdiccional en la medida en que se sometan a la competencia de los mismos, tal y como se señala expresamente en los artículos 318 y 322 del Código de Bustamante.
...
Por otro lado, y para los efectos de este incidente, reconocida la capacidad de la República de Nicaragua para constituirse en parte dentro del proceso ordinario de prescripción adquisitiva de dominio, la sola cuantía de B/.300,000.00 fijada al negocio de marras se encargaría de adjudicar la competencia al tribunal del conocimiento (art. 234 C. J.)." (Fs. 4 a 7).

Considera el apoderado judicial del amparista que las autoridades

demandadas no ejercieron adecuadamente sus funciones públicas judiciales, violando en forma directa, por omisión, el artículo 17 de la Constitución Política, a pesar de que el Pleno de la Corte Suprema ha sostenido reiteradamente que esta norma es de carácter programático.

También estima que la resolución recurrida en el presente amparo ha violado en forma directa, por omisión el artículo 32 de la Constitución Política, el cual consagra el principio del debido proceso, ya que toda persona natural o jurídica que sea parte en litigios judiciales, tiene derecho a gozar de igualdad procesal con su contraparte, y en el proceso en el que son parte el Gobierno de Nicaragua y el amparista "es sencillamente imposible que el juez de la causa, en el caso que nos ocupa, pueda siquiera practicar una inspección judicial, o acción exhibitoria, o diligencias parecidas, sin el consentimiento del litigante afectado. Vale decir, se dejaría al arbitrio de una de las partes, que no al criterio del juzgador, la evacuación de una prueba o acto procesal, que en un momento dado, pueda ser de vital trascendencia para el proceso", al igual que sin el pleno consentimiento y aceptación del estado o nación afectado, sería imposible hacer valer una decisión jurisdiccional.

Estima además que el artículo 314 del Código de Bustamante preceptúa que la Ley de cada Estado Contratante determina la competencia de los Tribunales, así como su organización, las formas de enjuiciamiento y de ejecución de las sentencias y los recursos contra sus decisiones; por lo que las disposiciones legales del derecho positivo panameño, aplicables a la competencia, claramente impiden a un juez de circuito aprehender una causa en la que sea parte interesada un gobierno extranjero.

Finalmente señala que la resolución del Tribunal Superior de Justicia desconoció el principio de la legitimación procesal al admitir el poder otorgado por el señor Embajador de la República de Nicaragua, en representación de su gobierno, porque las funciones de un Embajador se refieren a la representación del gobierno de un estado frente al gobierno de otro estado, para los fines de las relaciones diplomáticas e internacionales de estado a estado, y no se refieren a la representación legal general para reclamaciones patrimoniales civiles contra particulares a través del ejercicio de derecho privado y también porque el gobierno panameño no ha otorgado autorización previa exigida por la ley, para que se reconozca el derecho de dominio sobre parte del territorio nacional panameño tal como lo dispone la ley 15 de 1989, que desarrolla el artículo 285 de la Constitución Nacional.

Para resolver el Pleno de la Corte Suprema de Justicia debe en primer lugar tener en cuenta que el Código de Derecho Internacional Privado o Código de Bustamante aprobado por la República de Panamá mediante la Ley 15 de 1928, en el artículo 31 perteneciente a la Sección II, De las personas Jurídicas, preceptúa lo siguiente:

> "Artículo 31. Cada Estado contratante, en su carácter de persona jurídica, tiene capacidad para adquirir y ejercitar derechos civiles y contraer obligaciones de igual clase en el territorio de los demás, sin otras restricciones que las establecidas expresamente por el derecho local."

Esta norma establece claramente que los Estados contratantes, en su calidad de personas jurídicas, pueden ejercitar derechos civiles dentro del territorio de otro Estado, en la forma que lo determine la ley de este último, por lo cual la República de Nicaragua puede ejercitar acciones ante los tribunales de justicia panameños, conforme a las leyes de la República de Panamá.

El artículo 333 de la ley 15 de 1928, que aprobó el Código Bustamante de derecho internacional privado, preceptúa que los tribunales y jueces de cada Estado contratante "serán incompetentes para conocer de los asuntos civiles o mercantiles en que sean parte demandada los demás Estados contratantes o sus Jefes, si se ejercita una acción personal, salvo el caso de sumisión expresa o de demandas reconvencionales". El artículo 334 idem establece que también serán incompetentes los tribunales de cada Estado "cuando se ejerciten acciones reales,

si el Estado contratante o su Jefe ha actuado en el asunto como tales y en su carácter público, debiendo aplicarse lo dispuesto en el último párrafo del artículo 318", el cual prohíbe la sumisión "para las acciones reales o mixtas sobre bienes inmuebles, si la prohíbe la ley de su situación".

El artículo 285 de la Constitución Política de la República de Panamá, como regla general, prohíbe a los gobiernos extranjeros y a las entidades o instituciones oficiales o semioficiales extranjeras adquirir el dominio "sobre ninguna parte del territorio nacional". Esa misma norma constitucional consagra una excepción al establecer que cuando se trate de las sedes de las embajadas, los gobiernos extranjeros podrán adquirir terrenos "de conformidad con lo que disponga la Ley".

La Ley 15 de 1989, que desarrolla la norma constitucional citada preceptúa en su artículo número uno que los Estados con los cuales mantenga relaciones diplomáticas la República de Panamá pueden adquirir bienes inmuebles en el territorio nacional para sede de sus embajadas "previo acuerdo concertado por la vía diplomática, mediante canje de notas que satisfaga las exigencias de la presente ley", reservándose la República de Panamá la facultad de negar esta adquisición por razones de seguridad, interés nacional o público.

El previo acuerdo a que se refiere el artículo uno de la Ley N° 15 comentada debe celebrarse en base a "estricta reciprocidad" y en el mismo deberá estipularse, entre otros asuntos, los relativos a la exoneración de los impuestos o gravámenes que pesan sobre el inmueble, su uso exclusivo como embajada o residencia del embajador y las obligaciones que contrae con la República de Panamá el Estado que ha de adquirir el inmueble.

De conformidad con el artículo número cinco de la mencionada Ley debe protocolizarse ante Notario Público el canje de notas "junto con la escritura pública en que conste la adquisición del dominio del inmueble o inmuebles por parte del Estado extranjero, para sede de su embajada".

De los preceptos legales examinados se infiere que los Estados extranjeros no pueden adquirir el dominio de bienes inmuebles en el territorio de la República de Panamá mediante el ejercicio de una acción judicial, porque ese modo de adquirir es incompatible con el procedimiento descrito que deben seguir los Estados para adquirir inmuebles en el país.

Nos encontramos entonces, ante un caso de falta de competencia de los jueces y Tribunales de la República para conocer de la acción civil mediante la cual un Estado extranjero pretende adquirir parte del territorio nacional, sin cumplir la ley 15 de 1989 que reglamenta la norma constitucional que prohíbe a los gobiernos extranjeros, como regla general, adquirir el dominio "sobre ninguna parte del territorio nacional".

Uno de los derechos que consagra la garantía constitucional del debido proceso en el artículo 32 de nuestra Constitución Política es la de ser juzgado por autoridad competente. Como mediante la resolución judicial impugnada un juez sin competencia conocerá de un proceso, el cargo de inconstitucionalidad que se le hace a esa resolución judicial debe estimarse probado.

A juicio del Pleno de esta Corporación de Justicia, probada la violación del debido proceso por la resolución atacada, es intrascendente el examen de los otros cargos de violación de la Constitución que se hace a la misma.

De consiguiente, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONCEDE el amparo de garantías constitucionales propuesto por la sociedad WILD PALMS, S. A. y REVOCA la resolución dictada por el Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial fechada el 2 de octubre de 1995 en el incidente de nulidad promovido por Liliam Somoza de Sevilla Sacasa en el proceso ordinario promovido por la República de Nicaragua contra Liliam Somoza de Sevilla Sacasa, Wild Palms, Inc., y otros.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) CARLOS MUÑOZ POPE
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACLARACIÓN DE SENTENCIA DENTRO DE LA ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EDUARDO E. RÍOS MOLINAR, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE JOSÉ DEL ROSARIO MUÑOZ R., CONTRA LA ORDEN DE NO HACER CONTENIDA EN LA SENTENCIA DE 30 DE MAYO DE 1995, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, EN EL PROCESO LABORAL PROMOVIDO POR JOSÉ DEL ROSARIO MUÑOZ R. CONTRA PARTES Y SERVICIOS TOYOPAN, MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado EDUARDO E. RÍOS MOLINAR ha elevado escrito ante esta Corporación de Justicia, solicitando la aclaración de la resolución dictada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual NO SE ADMITIÓ el amparo de garantías constitucionales interpuesto por JOSÉ DEL ROSARIO MUÑOZ contra la orden de no hacer contenida en la sentencia del 30 de mayo de 1995, dictada por el Primer Tribunal Superior de Trabajo, por estimar que la parte resolutiva admite su aclaración.

En el escrito de aclaratoria observa el Pleno que existe una confusión por parte del recurrente, por lo que procederemos a analizar, en el orden que en aparecen, lo que ha denominado como PUNTO OSCURO. Veamos:

"PUNTO OSCURO NUMERO UNO": Llamamos la atención del accionante, en el sentido de que no basta que una demanda esté debidamente formalizada, para que ello genere la obligatoriedad de su admisión. Si el amparo no contiene temas o materias de rango constitucional sino legal, dicho amparo aún cuando formalmente llene los requisitos pertinentes, no puede ser admitido.

"PUNTO OSCURO NUMERO DOS": Es cierto que la Corte Suprema de Justicia, es competente para conocer las acciones de amparo de garantías constitucionales en las ordenes dictadas por el Tribunal Superior de Trabajo, ya que este ente tiene mando y jurisdicción en toda la República, pero, no es aceptable el criterio erróneo expresado por el accionante en este punto, al considerar que solamente la incompetencia del Tribunal puede generar la inadmisibilidad.

"PUNTO OSCURO NUMERO TRES": No existe ningún punto oscuro. Más bien se pretende que la Corte revise pruebas, lo que no es la función de esta Superioridad, como guardiana de la Constitución.

"PUNTO OSCURO NUMERO CUATRO": Es obvio el desconocimiento por parte del accionante con respecto a la finalidad de la acción de amparo de garantías, y no debe ampararse en una "supuesta aclaración de sentencia", la cual no tiene asidero legal, atentando contra el principio de la economía procesal.

En el presente negocio, reitera el Pleno de esta Corporación de Justicia, que la demanda era manifiestamente improcedente, dado que, de la lectura de los hechos en que se fundamentaba la impugnación, se desprendía claramente que los cargos imputados se dirigen a demostrar que la evaluación realizada por el Tribunal Superior sobre el material probatorio es errónea. Asimismo, señaló la Corte, que las violaciones interpretativas de las pruebas no son de orden constitucional, por tal motivo no pueden ser recurridas en Amparo de Garantías

Constitucionales.

En fallos reiterados, esta Superioridad ha mantenido que la vía de amparo no puede ser considerada una tercera instancia, ya que se persigue con esta acción la revocatoria de ordenes de hacer o no hacer, cuando las mismas violenten los derechos y garantías consagradas en nuestra Carta Magna.

Por último, la parte resolutiva de la sentencia, que es la única susceptible de aclaración, no contiene ningún punto oscuro que aclarar, tal como lo ordena el artículo 986 del Código Judicial, ya que la misma se ha limitado a no admitir la acción de amparo de garantías constitucionales, por razón de su improcedencia.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RECHAZA DE PLANO la solicitud de aclaración de resolución dictada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia el dos (2) de diciembre de mil novecientos noventa y cinco (1995), formulada por el Licenciado EDUARDO E. RÍOS MOLINAR.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) CARLOS MUÑOZ POPE
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS G. QUIROS A. EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LUIS ALBERTO MONTOYA LLANTEN CONTRA LA ORDEN VERBAL EMITIDA POR EL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Carlos G. Quirós A., en representación del señor **LUIS ALBERTO MONTOYA LLANTEN**, ha presentado acción de amparo de garantías constitucionales contra el Ministro de Desarrollo Agropecuario.

La orden impugnada "es verbal en la que la Jefa de Recursos Humanos recibe instrucciones del Ministerio de Desarrollo Agropecuario de dejar insubsistente al señor LUIS ALBERTO MONTOYA LLANTEN, de su cargo como funcionario del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, a partir del 12 de enero de 1996." (Foja 5) Como argumento fundamental el recurrente en amparo señala que se le ha violado la garantía del debido proceso, en vista de que se le ha declarado insubsistente del cargo público que ocupaba, sin que exista resolución que así lo ordene.

A foja 1 se encuentra copia de nota fechada 12 de enero de 1996, suscrita por la Jefa del Departamento de Recursos Humanos del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, que a la letra dice:

> "Siguiendo instrucciones del Despacho Ministerial, informo a usted que a partir de la fecha se le declara Insubsistente del cargo que ocupa en este Ministerio, por violar el Reglamento Disciplinario en su Capítulo XIII, Artículo IX, Acápite 9, "Cometer Abandono del Cargo al faltar 72 horas consecutivas a sus labores regulares o al lugar al que fuere trasladado; sin causa justificada."

Del texto transcrito y de las constancias procesales se colige que el acto

que se pretende impugnar es un acto administrativo, consistente en la destitución del señor LUIS ALBERTO MONTOYA LLANTEN. Como tal, es susceptible de impugnación a través de la vía gubernativa y agotada ésta, ante la jurisdicción contencioso administrativa. Consecuentemente, el presente amparo resulta manifiestamente improcedente y no puede ser admitido, al tenor de lo dispuesto por el artículo 2611 del Código Judicial.

En consecuencia, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el amparo de garantías constitucionales propuesto por el apoderado judicial del señor LUIS ALBERTO MONTOYA LLANTEN, contra el Ministro de Desarrollo Agropecuario.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MARIXENIA VILLARREAL DE MIRANDA CONTRA EL FISCAL SEGUNDO SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, OCHO (8) DE ENERO DE MI NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Mediante escrito presentado a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, el licenciado **JUAN B. IBARRA**, en representación de **MARIXENIA VILLARREAL DE MIRANDA**, promovió acción de habeas corpus a su favor y contra el Fiscal Segundo Superior del Tercer Distrito Judicial, con sede en la ciudad de David, provincia de Chiriquí, con motivo de la privación de libertad ordenada en la investigación que se adelanta por la muerte de **FRANCISCO JAVIER IGLESIAS RIVERA.**

Al librar el mandamiento de habeas corpus correspondiente, el Fiscal Segundo Superior rindió el informe que aparece a folios 11 del expediente, en el cual acepta que ordenó la detención de la señora VILLARREAL DE MIRANDA, mediante providencia motivada que aparece en el tomo I del expediente, a fojas 386-388. Expresa que los motivos de la detención se apoyan en las declaraciones juradas de los señores MANUEL RENÉ CIANCA, ERICK ENRIQUE CIANCA VALDÉS Y CHRISTIAN YARIEL RISCO PALMA, quienes manifestaron que ellos durante la riña tumultuaria que se escenificó en el Jardín 3 Estrellas de Dolega, el 19 de agosto de 1995, se percataron cuando la señora MARIXENIA le entregaba un arma blanca al señor ABELARDO NORIEL MIRANDA ACOSTA, la que fue utilizada posteriormente para herir al hoy occiso, FRANCISCO JAVIER IGLESIAS RIVERA.

De acuerdo con el escrito presentado por el licenciado Ibarra, la acción de habeas corpus se fundamenta en el hecho de que en las diligencias de reconstrucción practicadas por el Fiscal instructor, se incorporan elementos de juicio que describen el desarrollo de una riña tumultuaria en un lugar de diversión, con la participación de muchas personas y con escasa visibilidad, de manera tal que las imputaciones hechas a su defendida perdieron la fuerza probatoria incriminadora y dado el tiempo transcurrido, desde la fecha en que se ordenó su detención preventiva, no hay méritos suficientes para mantenerla privada de libertad, especialmente en este caso en que se han detenido a 3 personas más que fueron identificadas como participantes, en algún grado, en los actos que dieron como resultado la muerte de IGLESIAS RIVERA.

A la fecha en que se presenta la acción de habeas corpus, el expediente que se adelanta tiene 2 tomos y 788 páginas útiles, en las que aparecen diferentes diligencias, unas por iniciativa del Ministerio Público y otras aportadas por los defensores de los sindicados y la acusación particular. Entre ellas, solamente la declaración de ERICK ENRIQUE CIANCA VALDÉS mantiene su incriminación contra la señora MARIXENIA VILLARREAL MIRANDA, en el sentido de señalarla como la persona que le suministró un cuchillo al joven ABELARDO MIRANDA, con el cual resultaron lesionadas varias personas.

La Corte no pierde de vista la naturaleza jurídica del hecho que se examina, especialmente por tratarse de una riña tumultuaria, en la que no sólo se esgrimió el intercambio de golpes, lanzamiento de botellas, sillas y el uso de arma blanca, sino también las enemistades que existían entre algunos de los participantes y los propósitos de venganza por hechos anteriores, que se describen en distintas declaraciones que recoge el expediente. En tales condiciones, la participación de la señora VILLARREAL DE MIRANDA y su situación procesal en este caso, más bien se ubica en la adopción de una medida cautelar distinta a la de la privación de libertad, ya que en autos consta que se trata de una madre de familia, con niños pequeños y que la noche en que ocurrieron los hechos, si bien es cierto que portaba una cartera, quienes estaban al lado de ella la describen como un monedero pequeño de color oscuro, en el cual no se podía guardar un cuchillo de las dimensiones del que fue utilizado en los hechos motivo de esta investigación penal.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA ILEGAL la detención de la señora MARIXENIA VILLARREAL DE MIRANDA y ORDENA su inmediata libertad, si no existe otra causa penal en su contra.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) JORGE FÁBREGA PONCE (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE DANILO NEWTON BAILEY CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, ONCE (11) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Lcdo. Jorge Eliécer Guerra Fuentes ha interpuesto ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, acción de habeas corpus a favor de Danilo Newton Bailey y contra del Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas.

Librado el mandamiento de habeas corpus contra el Fiscal Especial en Delitos Relacionados el mismo dio respuesta mediante el Oficio N° 10186 de 13 de diciembre de 1995, en los siguientes términos:

> "A- La orden de detención preventiva del señor DANILO NEWTON BAILEY, fue decretada por este despacho el 3 de agosto de mil novecientos noventa y cinco (1995).
>
> B- Los fundamentos de hecho para ordenar la detención preventiva de DANILO NEWTON BAILEY, se centran en que el día 2 de agosto, a la altura de Vía La Pulida, frente al bar parrillada BUNKER,

visualizaron al prenombrado en una bicicleta, el cual al ver la ronda policial se observó que el mismo arrojó algo al suelo, procediendo inmediatamente a su retención y a recoger lo que había lanzado, resultando ser una bolsa plástica transparente, que en interior contenía una sustancia en forma de Hierva Seca, que se presume sea MARIHUANA.

La sustancia en cuestión al ser analizada por el laboratorio técnico Especializado en Drogas, resultó ser Marihuana en la cantidad de 4.83 gramos.

Al rendir declaración indagatoria el señor DANILO NEWTON BAILEY, el mismo aceptó que la sustancia ilícita era de su propiedad y para su consumo, ya que él se dedicaba al consumo y no a la venta.

Por otra parte, en el sumario existen los señalamientos directos de los agentes captores los cuales ligan al señor Bailey, con el hecho ilícito investigado, siendo estos confirmados por el mismo prenombrado en su declaración indagatoria, cuando acepta dicho vínculo.

El fundamento de derecho para ordenar y mantener la detención preventiva del señor DANILO NEWTON BAILEY, se encuentra consagrado en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

C- Actualmente el señor DANILO NEWTON BAILEY se encuentra detenido y filiado a nuestras órdenes y el cual inmediatamente es puesto a órdenes de esa alta corporación."

Por su parte, el Lcdo. Jorge Eliécer Guerra Fuentes sostiene en su escrito, que al momento de la detención de su representado, éste estaba solo y no se le encontró dinero ni se le vio realizando transacción alguna. Afirma el Lcdo. Guerra, que el señor Danilo Bailey es consumidor de marihuana, situación que declara ante los agentes de policía y reafirma en su declaración indagatoria. Finalmente, a juicio del representante legal de la parte actora, la norma legal que podría haber infringido el señor Bailey lo sería el párrafo tercero del artículo 255 del Código Penal que sanciona la tenencia de droga para uso personal, no obstante ésta sólo prevé una pena de 1 a 3 años de prisión y de 200 a 365 días multas, lo que impide que en estos casos pueda haber detención preventiva según lo dispuesto en el artículo 2148 del Código Judicial.

Se trata de un proceso iniciado de oficio, por cuanto al señor DANILO NEWTON BAILEY se le imputa delito contra la salud pública relacionado con drogas.

La Corte observa a foja 2 de las sumarias, el informe de novedad de fecha 2 de agosto de 1995, suscrito por el Subteniente 1312 C. Ríos y el Cabo 2° 15039 A. Ayarza en el cual se informan las circunstancias que culminaron con la detención del ciudadano DANILO NEWTON BAILEY.

Igualmente, consta en las sumarias las declaraciones rendidas por el Subteniente Catalino Ríos Montes y el cabo Albertino Ayarza donde se destaca que la detención se debió a la actitud sospechosa del señor Bailey, pues, al momento que él los divisó soltó algo que llevaba en la mano izquierda, que después resultó ser un envoltorio plástico contentivo de la sustancia ilícita conocida como marihuana.

El Pleno observa a fojas 11 y 12 de las sumarias, la resolución expedida por el Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas mediante la cual se ordenó la detención preventiva del señor Danilo Newton Bailey.

Consta igualmente, a foja 20 de las sumarias, el informe de laboratorio que certifica que, efectivamente, la sustancia incautada es la droga conocida como MARIHUANA en la cantidad de 4.83 gramos.

Del estudio de las sumarias, el Pleno estima que el informe de novedad, las

declaraciones de los agentes Albertino Ayarza Murillo y Catalino Ríos Montes, miembros de la Policía Nacional, y el informe de laboratorio constituyen indicios suficientes que vinculan al señor Danilo Newton Bailey con los hechos a él imputados. Lo anterior, aunado al hecho de que el mismo fue detenido **in fraganti** dado que en ese momento soltó de su mano izquierda la droga, justifica la aplicación de la medida cautelar de la detención preventiva decretada por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, por cuanto el artículo 2148 del Código Judicial es claro en señalar que la misma sólo procede por delitos que tengan señalados pena mínima de dos años de prisión, o cuando el autor o partícipe ha sido sorprendido en flagrante delito.

En consecuencia, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva del señor DANILO NEWTON BAILEY, y por lo tanto, DISPONE que el detenido sea puesto nuevamente a órdenes del Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE SILKIA SELIDETH SALAMANDRA MORENO CONTRA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, ONCE (11) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ingresó al Pleno de la Corte Suprema de Justicia la acción de habeas corpus interpuesta por el licenciado **Miguel Deen Rodríguez**, contra el **FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS**, a favor de **SILKIA SELIDETH SALAMANDRA MORENO**, detenida en el Centro Femenino de Rehabilitación, por delito contra la Salud Pública.

Acogida la acción de habeas corpus, se libró el mandamiento correspondiente contra el **FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS**, Licenciado **ROSENDO MIRANDA**, quien mediante Oficio N° 239 de 4 de enero de 1996, rinde el siguiente informe:

> "PRIMERO: La señora SILKIA SELIDETH SALAMANDRA fue detenida por orden escrita de esta Fiscalía fechada veintiocho (28) de septiembre del presente año.
>
> SEGUNDO: Los fundamentos de hecho que motivan la detención de la sindicada, tienen inicio el día veintisiete (27) de septiembre del presente año, cuando este Despacho en asocio con unidades de la Policía Técnica Judicial, realizan diligencia de allanamiento en el cuarto N° 8, de la casa N° 145, calle N° 14. Mediante dicha diligencia, se logra la captura de los hermanos KEVIN y ELIZABETH RÍOS, quienes mantenían dentro de su boca, cierta cantidad de sustancia que al ser sometida a la prueba de campo para la determinación de COCAÍNA, arrojaron resultados positivos. De igual manera, se detecta en diferentes partes del cuarto la presencia de fragmentos semisólidos de este polvo blanco, con las mismas características ilícitas antes anotadas. A los pocos minutos de

detectada esta irregularidad, se insta a los prenombrados a que escupieran lo que mantenían en la boca y tuvieron que ser trasladados al Hospital Santo Tomás por enfrentar los serios efectos que estas sustancias producen. Así, se tuvo que terminar la diligencia de allanamiento, en presencia de la señora SALAMANDRA, quien dijo no vender drogas, pero que sí conocía las actividades irregulares a que se dedicaban los otros dos sujetos. Adicional se encuentra en este cuarto la cantidad de ciento dos balboas con veinticinco centésimos (B/.102.25), fraccionados en billetes y monedas de baja denominación, una (1) caja de bicarbonato de sodio, un (1) rollo de papel de aluminio y una (1) caja de bolsas de plástico transparente.

TERCERO: Por tal motivo es sometida a los rigores de la indagatoria, donde la señora SALAMANDRA niega toda vinculación con la sustancia en comento, afirmando desconocer si los hermanos RÍOS se dedicaran a la venta de sustancias ilícitas en esa casa.

CUARTO: Por su parte, el Laboratorio Técnico Especializado de la Policía Técnica Judicial, remite a nosotros el análisis de la sustancia incautada, la cual resultó positiva para la determinación de COCAÍNA en la cantidad de 5.94 Gramos. ...". (Fs. 8-9).

Adjunto al informe consta copia autenticada del respectivo sumario.

El recurrente en la parte medular de su escrito plantea lo siguiente:

"La ciudadana SILKIA SELIDETH SALAMANDRA; fue detenida el día 27 de septiembre de 1995, al encontrarse visitando a su hijo en la casa de su suegra, ubicada en el Corregimiento de Santa Ana, casa T145, calle 14, cuarto #8; cuando se efectuó un allanamiento por unidades de la Policía Técnica Judicial encontrándose en dicho allanamiento sustancia ilícita y quedadndo (sic) establecido como presuntos autores los señores ELIZABETH RÍOS y KELVIN RÍOS, quienes fueron bajados del altillo; comprobándose que los mismos habían ingerido parte de sustancia compacta conocida como CRACK, por lo cual fueron trasladados al Hospital Santo Tomás. Sin embargo, en lo concerniente a mi representada a la misma no se le encontró sustancia ilícita alguna, pues se le trata de vincular por vía del indicio de presencia y por otro lado no está ella obligada a declarar o dar información que vincule a la familia Ríos, con los cuales como consta en autos le une vínculos de afinidad.

En lo concerniente al indicio de presencia no puede ser negado el hecho que SILKIA SELIDETH SALAMANDRA esta (sic) obligada a visitar dicha residencia por las razones ya expuestas. ...". (Fs. 2-3).

En Nota de 27 de septiembre de 1995 dirigida al FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS (f. 1 del expediente), el Jefe de la División de Estupefacientes, Inspector III RAMIRO G. JARVIS I. solicita autorización para realizar una diligencia de allanamiento en el sector de Santa Ana, calle 14, casa #145, cuarto #8, lugar como punto de distribución, venta y consumo de sustancias ilícitas.

En vista de lo anterior, la Fiscalía Especializada en delitos relacionados con drogas, mediante Providencia de 27 de septiembre de 1995 (f. 2 del expediente), dispone practicar la diligencia de allanamiento solicitada.

En el caso en comento, el dictamen pericial del Laboratorio Especializado en Drogas (f. 58 del expediente), certifica que la sustancia decomisada corresponde a cocaína, en la cantidad de 5.94 gramos, de lo cual se desprende que la cantidad de droga encontrada rebasa la medida posológica limitada a una dosis en la droga mencionada, y el hecho de que se encontraran en el lugar ciento dos balboas con veinticinco centésimos (B/.102.25), fraccionados en billetes y monedas de baja denominación; una (1) caja de bicarbonato de sodio; un (1) rollo

de papel de aluminio; y una (1) caja de bolsas de plástico transparente, sugieren la intención de comercializar con drogas. Sin embargo, acorde con lo alegado por el licenciado **Deen Rodríguez** en el escrito de habeas corpus (fs. 1 a 5), la vinculación directa de **SILKIA SELIDETH SALAMANDRA MORENO**, no ha podido comprobarse ya que su presencia en la residencia allanada fue circunstancial, lo cual se desprende de las declaraciones rendidas en el presente proceso por los hermanos KEVIN y ELIZABETH RÍOS -quienes fueron trasladados al Hospital Santo Tomás por intoxicación con la sustancia incautada-, los cuales coinciden en que su cuñada **SILKIA SELIDETH SALAMANDRA**, no conocía de la existencia de la droga en la casa, y sólo se encontraba visitando a su hijo. Aunado a lo anterior, el hecho de que a **SILKIA SELIDETH SALAMANDRA** no se le encontró en posesión de sustancia ilícita alguna, al realizarse la respectiva diligencia de allanamiento.

Por lo expuesto a juicio de la Corte no hay vinculación causal de la señora **SILKIA SELIDETH SALAMANDRA** con el delito imputado, ya que su presencia en el lugar fue circunstancial.

El artículo 2147-A del Código Judicial establece que "Nadie será sometido a medidas cautelares si no existen graves indicios de responsabilidad en su contra". En tales circunstancias, advierte la Corte que, no existen elementos suficientes que vinculen a la señora **SALAMANDRA** con el delito investigado, por lo que la falta de elementos probatorios se traduce en una detención ilegal según lo establecido por el numeral 3 del artículo 2159 del Código Judicial.

En virtud de lo anterior, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ILEGAL la detención preventiva decretada contra SILKIA SELIDETH SALAMANDRA MORENO; y por consiguiente, ORDENA que sea puesta en inmediata libertad, siempre y cuando no tenga otra causa pendiente por la cual deba permanecer detenida.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ALEXANDER ALEXIS DE LA CRUZ Y JAVIER ENRIQUE DE LA CRUZ SANTANA CONTRA EL FISCAL DUODÉCIMO DE CIRCUITO DE LA CHORRERA, MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DOCE (12) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Mediante Oficio N° 4355-S de 22 de diciembre de 1995, la Secretaría del Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, remitió a la Corte Suprema de Justicia, en grado de apelación, el expediente que contiene la acción de Habeas Corpus propuesta por los señores **ALEXANDER ALEXIS DE LA CRUZ SÁNCHEZ y JAVIER ENRIQUE DE LA CRUZ SANTANA**, y contra el **FISCAL DUODÉCIMO DE CIRCUITO DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ**.

Al cuadernillo antes descrito se le adjuntan el expediente de las sumarias instruidas relacionadas con el caso, que suman 114 fojas.

El fallo apelado fue proferido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia el 14 de diciembre de 1995 y en el mismo consideró lo siguiente:

"Las pruebas examinadas demuestran la existencia de un concurso

material delictivo, consistente en Tentativa de Violación Carnal en perjuicio de la señora DRUCILA RODRÍGUEZ ROJAS y Robo en detrimento del señor ROLANDO HIDALGO SÁNCHEZ.

Tanto el delito de robo como el de tentativa de violación carnal, permiten la aplicación de la detención preventiva, porque la pena mínima no es menor de 2 años de prisión, además en el proceso constan graves indicios contra los imputados ALEXANDER ALEXIS DE LA CRUZ SÁNCHEZ y JAVIER DE LA CRUZ SANTANA e incluso ellos aceptan que estaban en el lugar de los hechos y pretenden ensayar como coartada una confrontación física con el denunciante, porque uno de ellos le dijo un piropo a la mujer de éste, sin embargo, las pruebas demuestran lo contrario, nos referimos a los testimonios tanto del denunciante como de su esposa Drucila Rodríguez Rojas, Eliécer Moreno Navas, José Luis Muñoz Lasso y Erika Yasmín Pérez Santana."

En el escrito de sustentación de la alzada (f. 24 y 24 vta.), los señores DE LA CRUZ SÁNCHEZ y DE LA CRUZ SANTANA, exponen siete (7) motivos que tratan de explicar lo sucedido, pero que sólo alcanzan la categoría de argumentos a su favor, pues la realidad procesal recabada hasta este momento difiere de sus afirmaciones, como lo demuestran las declaraciones del denunciante, su esposa la señora Rodríguez Rojas y las declaraciones juradas de los señores Moreno Navas, Muñoz Lasso y la joven Pérez Santana. A esto se agrega el hecho de que los accionantes estaban presentes en el lugar y en sus declaraciones señalan que se enfrentaron al denunciante después de faltarle el respeto a su acompañante, quien resultó ser su esposa.

El funcionario de instrucción que aplicó la medida cautelar personal de detención preventiva contra los señores DE LA CRUZ SÁNCHEZ y DE LA CRUZ SANTANA, la decretó mediante diligencia razonada, como lo establece el artículo 2159 del Código Judicial (fs. 24-26), los delitos imputados (robo y tentativa de violación) contemplan pena mínima de prisión superior a dos años y en el expediente constan graves indicios que vinculan a los imputados en la realización de los hechos que motivaron la investigación penal mencionada.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo apelado.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EVELIO MORENO RODRÍGUEZ CONTRA EL FISCAL DELEGADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO SALAS. PANAMÁ, DOCE (12) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor EVELIO MORENO RODRÍGUEZ, ha interpuesto acción de habeas corpus a su favor contra el Fiscal Delegado de la Procuraduría General de la Nación, por considerar que se encuentra detenido por un hecho que no cometió.

Librado el respectivo mandamiento de habeas corpus, la autoridad demandada, mediante informe visible a fojas 20 a 21, explica lo siguiente:

"...

El suscrito, Daniel R. Batista, actuando en mi condición de Fiscal Segundo Delegado de la Procuraduría General de la Nación, comparezco por este medio ante esta digna Corporación de Justicia para presentar, como en efecto lo hago, el informe requerido por ese Tribunal en ocasión al trámite del Recurso de habeas Corpus interpuesto por el señor Evelio Moreno Rodríguez, tal como fue requerido mediante providencia de quince (15) de diciembre de mil novecientos noventa y cinco (1995), firmado por el magistrado ponente.

Absuelvo el interrogatorio consignado en el artículo 3582 del Código Judicial, que fuera transcrito en la providencia antes mencionada, de la siguiente manera:

A. Nuestro Despacho no ha ordenado la detención preventiva del Señor Evelio Moreno Rodríguez. Esa detención fue ordenada por el Personero Municipal del Distrito de San Félix mediante Resolución de fecha quince (15) de noviembre de mil novecientos noventa y cinco (1995) dentro del proceso que se le sigue al Señor Evelio Moreno Rodríguez por la supuesta comisión de delitos contra el patrimonio en perjuicio de la Escuela Primaria de Hato Pilón -Distrito de San Félix, Provincia de Chiriquí.

B. En la Resolución de quince (15) de noviembre de mil novecientos noventa y cinco (1995) el Personero Municipal del Distrito de San Félix consigna detalladamente los motivos y consideraciones fácticas así como las de derecho que tomó en consideración para girar la orden de detención contra el imputado, que en este oportunidad utiliza la vía de habeas corpus para solicitar su libertad.

C. El día once (11) de diciembre de mil novecientos noventa y cinco (1995) la Personera Encargada de la Personería Municipal del Distrito de San Félix remitió las sumarias seguidas al señor Evelio Moreno Rodríguez a la Procuraduría General de la Nación, tomando en consideración que se trataba de un delito que implica la afectación de bienes del Estado, cuya competencia esta asignada a las Fiscalías Delegadas. En adición a ello, envió el telegrama 151, dirigido al Señor Eduardo Gómez, director de la Cárcel Pública de la ciudad de David mediante la cual puso a órdenes de la Fiscalía Delegada al señor EVELIO MORENO RODRÍGUEZ.

Concluyendo la jornada del día de ayer, la Procuraduría General de la Nación comisionó a nuestro Despacho para continuar la tramitación de este negocio, razón por la cual asumimos la responsabilidad de presentar este informe a la Honorable Corte Suprema de Justicia. Debo informarle igualmente que mediante telegrama N° 55 nuestro Despacho ha puesto al Señor EVELIO MORENO RODRÍGUEZ a órdenes de la Corte Suprema de Justicia.

Para mayor ilustración de los Honorables Magistrados le remito copia íntegra del expediente recibido en nuestro despacho en el día de ayer.

Atentamente,
(fdo) Lcdo. Daniel R. Batista
Fiscal Segundo Delegado de
la Procuraduría General de la Nación"

El caso se encuentra, por tanto, en estado de decidir sobre la legalidad de la detención preventiva del sumariado a lo que se procede seguidamente.

Destacamos que el funcionario de instrucción, con el informe arriba transcrito, remitió además el expediente contentivo de las sumarias seguidas al señor EVELIO MORENO RODRÍGUEZ por el supuesto delito contra el Patrimonio, constante de 63 fojas útiles. Así, de la lectura de las constancias que aparecen en el referido expediente contentivo de las sumarias, se desprende:

La investigación penal se origina de la denuncia presentada el 8 de noviembre de 1995, por el señor MARTÍN RODRÍGUEZ RUIZ en representación de la Escuela de Hato Pilón, debido a una serie de hurtos ocurridos en dicho plantel. Sobre los posibles autores, señaló: "En realidad no le podría decir, pero en el último hurto que se dio en la escuela, se han escuchado ciertos rumores de unos estudiantes de la escuela que se llaman GABRIEL y RICARDO MONTEZUMA, los cuales dicen tener sospechas de la personas que cometieron este ilícito". (Fs. 2-3).

A fojas 37 de los antecedentes adjuntos al expediente contentivo de esta acción de habeas corpus, se encuentra la resolución que decreta la orden de detención de EVELIO MORENO RODRÍGUEZ, suscrita por el Personero Municipal del Distrito de San Félix, estableciendo como hecho punible el delito de HURTO con penetración en perjuicio de la Escuela Primaria de Hato Pilón Distrito de San Félix, Provincia de Chiriquí, debido a la sustracción de productos alimenticios, donados por el Fondo de Emergencia Social. Se configura así, uno de los delitos contra el Patrimonio, contenidos en el Título IV, Capítulo I, Libro II del Código Penal, que según señala, conlleva pena de 30 meses de prisión, por lo que se llena la exigencia del artículo 2148 del Código Judicial.

En la aludida resolución, de fecha 15 de noviembre de 1995, se expresan como elementos probatorios allegados para la comprobación del hecho punible: la denuncia del hurto previamente mencionada, documentos sobre el recibo por parte de la escuela de los productos alimenticios (fs. 5), declaración jurada del Director de la Escuela sobre la propiedad preexistencia de los mismos (fs. 8-9) y, diligencia de inspección ocular, avalúo y depósito en el plantel (fs. 24-27). Respecto a los elementos probatorios contra el sindicado destaca:

> "a. La declaración jurada rendida por el señor ARISTIDES MONTEZUMA RODRÍGUEZ, quien manifiesta que vio a EVELIO MORENO y su hermano menor cuando se llevaban hacia su casa seis sacos de arroz (Fojas 10-11).
>
> b. La declaración jurada de ISABEL QUINTERO BLANCO, vecina de la escuela quien también vio a EVELIO MORENO la noche del Hurto, afirmando que ella había mandado a su hijo RICARDO MONTEZUMA y a GABRIEL MONTEZUMA a vigilar la escuela por instrucciones del director (Foja. 13-14).
>
> c. Las Deposiciones juradas de los menores RICARDO MONTEZUMA y GABRIEL MONTEZUMA PINZÓN (F. 15-16 y 19-20) además de la declaración del señor DEMETRIO FLORES RODRÍGUEZ el cual manifestó que camino a la casa de EVELIO, encontró una botella de aceite y un hilo de la bandera (fojas. 17-18). También se cuenta con la declaración jurada de su hermano ROLANDO MORENO RODRÍGUEZ (f. 31-32) y la propia indagatoria en la cual manifiesta haber sido encontrado por el señor ARISTIDES MONTEZUMA, la noche del hurto."

Como se ha podido apreciar, las consideraciones que expresa el funcionario de instrucción como fundamentos de hecho y de derecho para decretar la detención preventiva, se ajustan a los requerimientos exigidos por los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, en concordancia con la penalidad dispuesta por el artículo 184 del Código Penal (prisión de 30 meses a 6 años) para el tipo de hurto, que hasta el momento, parece configurarse en este caso.

Por las consideraciones que anteceden, la Corte considera que existe mérito para mantener la detención del favorecido con esta acción de habeas corpus.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva de EVELIO MORENO RODRÍGUEZ y, ORDENA que sea puesto nuevamente a órdenes de la autoridad competente.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ELIGIO SALAS

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE GARY GABRIEL ROBLES POLO CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA NACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DOCE (12) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Daniel Ramírez Lasso interpuso ante la Corte Suprema de Justicia acción de habeas corpus preventivo a favor de GARY GABRIEL ROBLES POLO y contra el Director General de la Policía Nacional.

Admitida la iniciativa constitucional, se libró el mandamiento de habeas corpus respectivo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2582 del Código Judicial. El funcionario demandado, mediante oficio DAL-1312-95 de 26 de diciembre del año en curso, contestó en los siguientes términos:

> "A) No es cierto que haya ordenado la detención del recurrente; ni por escrito ni verbalmente.
>
> B) Queda explicado en el literal anterior.
>
> C) No tengo bajo mi custodia al Señor GARY GABRIEL ROBLES POLO". (F. 6).

El instituto de habeas corpus es una garantía constitucional cuyo objeto es amparar la libertad corporal de los individuos cuando se encuentre menoscabada, aun por una simple amenaza, con violación de la tutela que a tales efectos establecen la Carta Fundamental y la ley.

En esta causa se está en presencia de un habeas corpus de carácter preventivo, instituido jurisprudencialmente para la tutela de las personas que enfrentan amenazas comprobadas contra su libertad corporal, por lo que constituye requisito esencial la comprobación de la existencia de un peligro que pesa sobre la libertad de locomoción del beneficiario. Lo que en este caso se pretende es que "las **supuestas** órdenes de detención preventiva que los mismos han pretendido hacer efectivas en contra de mi representado" sean declaradas ilegales por "que no ha sido dictada, según hemos podido comprobar, por funcionario judicial ni de instrucción alguno" (F. 1).

Claramente se deduce que se persigue la declaratoria de ilegalidad de un acto sobre cuya existencia no se tiene certeza alguna, toda vez que la orden de privación de libertad no ha sido aportada, de conformidad con el mandato del artículo 2574 del Código Judicial, que requiere que a la acción de habeas corpus se acompañe la orden de detención.

Por otra parte, de conformidad con el informe recibido, el Director General de la Policía Nacional no ha impartido la orden acusada, todo lo cual conduce a la conclusión lógica de que Gary Gabriel Robles Polo no se encuentra en situación que requiera de la tutela constitucional y que esta iniciativa procesal se encuentra totalmente desprovista de fundamento fáctico.

En razón de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE la presente demanda de habeas corpus preventivo presentada a favor de Gary Gabriel Robles Polo.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE VÍCTOR MANUEL LEAL SEGURA CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DOCE (12) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada Teresa Ibáñez interpuso ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia acción de habeas corpus a favor de VÍCTOR MANUEL LEAL SEGURA, quien se encuentra detenido a órdenes del Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.

Por acogida la presente iniciativa constitucional, se libró el respectivo mandamiento de habeas corpus. El funcionario demandado contestó mediante oficio N° 10625 de 13 de noviembre de 1995. En su informe el agente del Ministerio Público admite haber decretado la detención preventiva de Leal Segura, mediante resolución calendada 15 de septiembre del año en curso, y suministra los fundamentos de hecho y de derecho de la medida acusada.

De conformidad con la diligencia que ordena la detención preventiva de Leal Segura, la medida cautelar decretada tiene origen en la supuesta comisión de delito contra la salud pública, relacionado con drogas.

Como elemento probatorio allegado a la actuación para comprobar la existencia del hecho punible, aparece la incautación de un cartucho plástico de color blanco contentivo de 15 pedazos de una sustancia cremosa, la que, sometida al análisis de laboratorio, resultó positiva para la determinación de **COCAÍNA CRACK)**, en la cantidad de **2.57 gramos** (f. 21 del cuaderno de antecedentes).

Respecto a los elementos de prueba que figuran en las sumarias contra Leal, consta el informe de novedad los agentes captores, quienes dan cuenta de que la droga fue encontrada en posesión del imputado (f. 2, antecedentes). El contenido del informe de novedad fue debidamente ratificado por los miembros de la Fuerza Pública responsables de la incautación de la sustancia ilícita. En efecto, a fojas 26 y siguientes de las sumarias reposa declaración jurada rendida por el agente Isaías Moreno Estribí, quien acepta haber sido quien encontró la droga. Seguidamente, se tiene la declaración jurada del Cabo Segundo Enrique Wood en la que expresa que estuvo presente cuando se le efectuó el registro al sindicado Leal Segura, y que éste "manifestó que la droga era de él y que lo ayudáramos, tratándonos de sobornar" (f. 29-31, sumarias).

Observa la Corte que la cantidad de **cocaína (crack)** encontrada (2.57 gramos) sobrepasa la dosis mínima de consumo que establece el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, lo que hace suponer que no se trata de un caso de posesión para consumo.

Así las cosas, se tiene que la orden de detención preventiva, dictada mediante resolución razonada de 15 de septiembre de 1995, cumple plenamente con lo preceptuado por los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, por lo que corresponde resolver de conformidad.

Por las consideraciones anteriores, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva decretada contra Víctor Manuel Leal Segura y, en consecuencia, ORDENA que el detenido sea puesto nuevamente a órdenes del Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ALEX ANÍBAL GÓMEZ DE LEÓN, CONTRA EL JUEZ SEGUNDO DE CIRCUITO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, QUINCE (15) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Con motivo del recurso de apelación anunciado y sustentado por la firma forense **PÉREZ, CARRERA & CO.**, en su calidad de apoderados de **ALEX ANÍBAL GÓMEZ DE LEÓN**, contra el fallo de primera instancia, expedido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, en la acción de Habeas Corpus presentada a favor de GÓMEZ DE LEÓN, ingresa al Pleno de la Corte Suprema de Justicia el expediente contentivo del caso para resolver la alzada.

La resolución impugnada, en su parte motiva señala que el estado procesal de este caso demuestra que se encuentra agotada la fase intermedia de calificación del sumario y está pendiente de la fijación de fecha de audiencia. Se trata de un caso en el que ya se dictó auto de vocación a juicio por infracción de las disposiciones contenidas en el Capítulo I, Título X, Libro II del Código Penal, el cual se encuentra debidamente ejecutoriado y que por mandato legal el juzgador no entra a especificar el tipo penal infringido, pues esto corresponde hacerlo en otra etapa procesal.

Por razón de lo antes señalado, los argumentos esgrimidos por la firma forense en primera instancia fueron desestimados, pues no hay asidero fáctico ni jurídico que permita afirmar que el señor ALEX ANÍBAL GÓMEZ DE LEÓN, mediante diez meses de detención preventiva, ha cumplido en exceso la pena que pudiera imponérsele, en el supuesto de resultar culpable de los cargos que se le formulan a título de peculado, en su forma genérica.

En el escrito de sustentación, el recurrente anota que hay que tomar en cuenta los principios rectores consagrados en los artículos 1966, 1968 y 1972 del Código Judicial que obligan a interpretar y aplicar restrictivamente toda medida que limite la libertad de los asociados, además de referirse a otras normas que pueden favorecer a su defendido, hace mención sobre precedentes dictados por la Corte, en los que se pondera el valor que representa la tutela de la libertad ambulatoria en todos aquellos casos en que no se justifica prolongar la medida cautelar de privación de libertad provisional de una persona.

Al examinar los cuatro (4) volúmenes que integran los antecedentes de este caso (1315 folios), se advierte de inmediato la pluralidad de acciones, recursos e incidentes que se han presentado durante todo el curso del proceso, por distintos abogados, que son un claro indicador de que no gravita un mayor interés por impulsar los trámites y procedimientos para alcanzar etapas conclusivas de este negocio penal. La orden de detención se expidió en 1993 y fue diferida con base al fuero electoral del sindicado hasta comienzos del año 1995. En la

normativa sustancial y adjetiva penal vigente, no hay sustento jurídico que, por la vía del habeas corpus, declare que la detención de GÓMEZ DE LEÓN es ilegal, o que no fue proferida por la autoridad jurisdiccional competente o que el hecho punible imputado no permite la adopción de la medida cautelar personal, tampoco es posible señalar que el término de privación de libertad acumulado hasta el presente, rebasa el intervalo penal asignado por el legislador al hecho delictivo que se le imputa.

Lo que se impone es el desarrollo de la etapa plenaria a la mayor brevedad posible, que permita establecer, si en efecto, la subsunción de la conducta imputada a GÓMEZ DE LEÓN conlleva una sentencia condenatoria y en tal supuesto, si el abono a pena sufrido por el accionante excede la sanción aplicable, conforme la ley. El Habeas Corpus carece de idoneidad para alcanzar la pretensión del recurrente.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo apelado.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JORGE DE LEÓN, CONTRA EL SEÑOR FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, QUINCE (15) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor **JORGE DE LEÓN** interpuso acción de Habeas Corpus en su propio nombre, y contra el **FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA**.

Una vez librado el correspondiente mandamiento ejecutivo contra la autoridad acusada quien, mediante Oficio N° 0486 de 11 de enero de 1996 (f. 6), manifestó que el sumario seguido al señor **JORGE DE LEÓN**, se encuentra radicado el la Corregiduría de Ancón, situación que varía la competencia del tribunal que debe conocer de la acción interpuesta.

En consecuencia la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLINA el conocimiento de esta acción ante el Juzgado Municipal de Ancón y ORDENA, su inmediata remisión.

BASE LEGAL: artículos 2588 y 2602 del Código Judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LOS SEÑORES JORGE WALKER LICH, JOSÉ HURTADO RIVERA Y JOSÉ QUINTERO, CONTRA EL FISCAL SEGUNDO DELEGADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, QUINCE (15) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Manuel de Jesús González C., presentó el 4 de enero de 1996 ante la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, acción de Habeas Corpus a favor de los señores **JORGE WALKER LINCH, JOSÉ HURTADO y JOSÉ QUINTERO, y contra el FISCAL SEGUNDO DELEGADO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.**

Cumplidos los trámites del reparto, se libró mandamiento de Habeas Corpus contra la autoridad acusada quien, mediante escrito de 5 de enero de 1996 (f. 6-8), manifestó que su Despacho no ordenó la detención preventiva de los señores **WALKER LINCH, HURTADO y QUINTERO**, si no que fueron puestos a órdenes de ellos mediante Oficio PGN-SG-015-96 de fecha 3 de enero de 1996, pero al leer el expediente comprobó que no existía orden de detención o medida cautelar contra los sindicados y constató que fueron aprehendidos desde el 28 de diciembre de 1995, excediéndose el término de 24 horas que tienen las autoridades de instrucción para definir el estatus de las personas investigadas, procediendo a darles libertad mediante Oficio F2D-0022 de 4 de enero de 1996 (fs. 9-10).

Como quiera que la acción de Habeas Corpus está destinada procesalmente a tutelar la libertad ambulatoria de los ciudadanos, contra cualquier orden que no reúna las exigencia que la ley señala y en el presente caso las personas a favor de quienes se promovió la acción correspondiente se encuentran gozando de libertad; no procede la continuidad procesal de la acción interpuesta.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECRETA EL CESE de procedimiento en el presente caso y ORDENA el archivo del mismo.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA.
(fdo.) ELIGIO SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA A FAVOR DE JAVIER ARMANDO PORTE CONTRA LA JUEZ SEGUNDA SECCIONAL DE MENORES DE PANAMÁ, MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, QUINCE (15) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ingresa a esta alta corporación de justicia el cuadernillo de Acción de Habeas Corpus interpuesta a favor de **JAVIER ARMANDO PORTE** contra la Juez Seccional de Menores de Panamá, que contiene la resolución N° 03 H. C. R. del 26 de noviembre de 1995 emitida por el Tribunal Superior de Menores que declara Legal el Internamiento del menor Porte Quirós en el Centro de Observación.

Esa decisión jurisdiccional fue apelada por la sra. Nivia C. Quirós -madre del menor- al momento de notificarse de la misma (f. 12vt); y en su representación, el Licenciado Jaime E. Olmos Díaz, miembro del Consultorio de

Asistencia Legal de la Universidad de Panamá, sustenta el recurso anunciado (fs. 14-16).

DISCONFORMIDAD DEL IMPUGNANTE

El licenciado Olmos Díaz, en su escrito respectivo, solicita previa revocatoria de la resolución apelada, se ordene al Tribunal de Menores que dé cabal cumplimiento a los artículos 532, 533, 535, 539, 540 del Código de la Familia en beneficio del interés superior del menor.

Considera que no se decretó la medida de internamiento mediante resolución oportuna, sino que fue primero aprehendido el menor Porte Quirós el 4 de diciembre de 1995 y es después el 26 de ese mismo mes cuando se decretó dicha medida por la jurisdicción de Menores.

Señala, que el menor Porte Quirós fue privado de su libertad con base al señalamiento de la agente policial Anayansi Zambrano, siendo que el artículo 533 del Código de la Familia establece que contra el menor de edad no podrá librarse orden de captura, sin que previamente se dicte la resolución judicial de orden de conducción del menor, que la debe ejecutar por medio de sus padres. Además, que en materia procesal penal no basta el simple señalamiento del presunto ofendido para aplicar una medida privativa de libertad, se requiere previamente una resolución motivada donde se señalen los elementos probatorios allegados a la encuesta para la comprobación del hecho punible y las pruebas que vinculen al imputado con ese hecho (fs. 15-16).

ANÁLISIS DE FONDO

El tribunal ad-quo, luego de reseñar lo acontecido, concluyó que existen suficientes indicios de participación del menor Porte Quirós en el robo denunciado por Anayansi Zambrano. En la parte medular de la resolución determina lo siguiente:

> "La demanda de habeas corpus se fundamenta en que debió existir, antes de realizar la detención, una orden de conducción; no obstante, debe reconocerse que durante la investigación de estos delitos, los agentes pueden retener a aquellos sospechosos que guardan similitud física con la descripción dada por la víctima. Sólo así es posible encontrar al responsable de quien, hasta ese momento, se desconocía su identidad. Su captura queda, pues formalizada con el debido reconocimiento de la persona ofendida, tal como ocurrió en este caso. Al ponérsele de presente al menor JAVIER ARMANDO PORTE, la denunciante Anayansi Zambrano, lo reconoció como su agresor. Este elemento de prueba es suficiente para justificar su internamiento. Esta medida fue dictada por escrito por la autoridad competente y cumplió con todas las formalidades de la ley".

Examinadas las constancias existentes, se advierte que la detención del menor Porte Quirós no se debió a la denuncia por robo suscrita por la detective Anayansi Zambrano Cerdeño el día 3 de diciembre de 1995 (f. 4-5vt); sino, por el robo a mano armada que consta en denuncia N° 2A-446-95 suscrita por Eduardo Escartín González, tal como se afirma en el informe de comisión signado por los detectives Cristóbal Delgado, Edgar Umaña, Miguel Váldez y Arnoldo Bloise. En el mismo señalan que se dirigieron al lugar donde era localizable el menor Porte Quirós -calle 19 Chorrillo- y al visualizarlo, el menor trató de darse a la fuga. Es así, que al ser llevado a la Policía Técnica Judicial, textualmente el referido informe dice: "**estando en esta división se presentó la compañera de trabajo ZAMBRANO ANAYANSI, la misma informó que este menor detenido fue la persona que le robo su bolso que en su interior contenía su placa de la PTJ y su carnet**".

En informativo rendido por el menor Porte Quirós niega haber participado en el robo investigado, afirmando que estaba en su casa (fs. 13-14). Al ampliar el mismo, señala que a su hermanito Ronald Josehp Porte, le dijeron que el ilícito investigado fue cometido por Memín y Nazareno Caicedo, y que el primero

está detenido en Tocumen por otro caso (f. 20-vt). La madre del menor Porte Quirós, señora Nivia Cecilia Quirós De León, en declaración rendida confirma lo anterior (fs. 21-vt).

Ahora bien, las constancias procesales son indicativas que contra el menor Porte Quirós existen graves indicios que lo vinculan con un acto contrario a la ley penal; y la medida de internamiento cumple con las formalidades legales. Por lo que merece se confirme la resolución apelada.

Con respecto al reproche hecho por el apelante en el sentido que no se debe estigmatizar a su defendido dentro de la categoría de "Riesgo Social" por el solo hecho de no asistir a una institución de enseñanza, lo cual se debe a la situación económica de su familia, pero que el menor Porte Quirós aprovecha su tiempo útilmente trabajando como ayudante del señor Jorge Luis Algandona -su tío- quien es contratista, tal versión es negada por su hoja de trámite procesal (f. 1) que refleja una conducta contraria.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución apelada.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MARICELA JUDITH ZORRILLA FUENTES CONTRA EL FISCAL CUARTO DEL CIRCUITO DE COLÓN. APELACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación ha ingresado a la Corte Suprema de Justicia acción de habeas corpus interpuesta por el licenciado Alfonso Ábrego Reyes a favor de MARICELA JUDITH ZORRILLA FUENTES, quien se encuentra recluida en la Cárcel Pública de Colón sindicada por delito contra la salud pública, a órdenes del Fiscal Cuarto del Circuito de Colón.

El Segundo Tribunal Superior, mediante sentencia de 21 de diciembre de 1995, declaró legal la detención de la prenombrada Zorrilla Fuentes por considerar que existen suficientes elementos de convicción como para mantener la medida cautelar atacada.

DECISIÓN DE LA CORTE

Procede la Corte a determinar si la medida cautelar de carácter personal aplicada cumple efectivamente con los requisitos que al efecto establecen la Constitución y la ley.

De conformidad con las constancias procesales, la orden de detención contra Zorrilla Fuentes fue decretada mediante resolución de 13 de julio de 1995. La medida cautelar se fundamenta en la presunta comisión de delitos contra la salud pública.

Como elemento de prueba allegado a las sumarias para la comprobación del hecho punible se tiene la diligencia de inspección ocular y registro realizada en la residencia N° 29, ubicada en la Barriada del Maestro, "El Redondel", ciudad

de Colón, lugar donde se encontró un maletín color chocolate que contenía 3 paquetes forrados con cinta adhesiva contentivos de un polvo blanco (fs. 20-21, sumarias). Sometida la evidencia anterior a las pruebas técnicas de rigor, arrojó resultados positivos para la determinación de COCAÍNA con un peso total de 2,745.0 gramos (Cf. Dictamen Pericial de la Policía Técnica Judicial a foja 133 de las sumarias).

En lo referente a los elementos de prueba que figuran en el proceso contra la prenombrada Zorrilla Fuentes, en el acta de allanamiento se deja establecido que el maletín contentivo de la droga fue encontrado en la ciudad de Colón, Barriada del Maestro, casa N° 29, lugar donde reside la inculpada, por lo que sobre la misma pesan graves circunstancias de presencia y oportunidad, como indicios de naturaleza a justificar la medida cautelar tomada en su contra.

Por las anteriores consideraciones, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de 21 de diciembre de 1995, proferida por el Segundo Tribunal Superior, mediante la cual se declara legal la detención de Maricela Judith Zorrilla Fuentes.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRASCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS PREVENTIVO A FAVOR DE MIHAELA STEGARU MIRESCU CONTRA LA JUEZ SEGUNDA SECCIONAL DE MENORES DE PANAMÁ, LICDA. DELIA CEDEÑO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación ha ingresado al Pleno de la Corte Suprema de Justicia acción de habeas corpus preventivo propuesta por el licenciado Rogelio Cruz Ríos a favor de MIHAELA STEGARU MIRESCU y contra la Juez Segunda Seccional de Menores de Panamá.

El Tribunal Superior de Menores, mediante sentencia de 14 de noviembre del año que decurre, declaró legal "la orden de apremio corporal" decretada contra la prenombrada Stegaru, mediante resolución N° 184 de 9 de junio de 1995, dentro del proceso de guarda, crianza, educación y reglamentación de visitas que interpuso contra Plinio Giovanni Barroso.

BREVES ANTECEDENTES DEL CASO

Mihaela Stegaru Mirescu interpuso ante el Tribunal Tutelar de Menores demanda de guarda, crianza, educación y reglamentación de visitas, causa en la que Plinio Giovanni Barroso figura como contraparte. Dentro del referido proceso, el demandado solicitó la declaratoria de desacato de Stegaru por incumplimiento de la resolución N° 1057 de 16 de noviembre de 1994, que le concedió un plazo hasta el 10 de diciembre de 1994 para que regresara al país a sus menores hijos y los presentara ante el Tribunal.

Por comprobado el incumplimiento, el tribunal de la causa declaró el desacato, mediante resolución N° 184 de 9 de junio del año que decurre, decisión que fue apelada por la apoderada judicial de Stegaru y concedido el recurso en

el efecto devolutivo, por lo que posteriormente se ordenó el apremio corporal de la demandante, mediante resolución de 12 de septiembre de 1995, medida que ahora se ataca con esta iniciativa procesal constitucional.

DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

El a-quo, mediante sentencia de 14 de noviembre de 1995, declaró legal la orden de apremio corporal decretada contra Stegaru, por considerar que se cumplió "con el debido proceso y con las garantías que consagran las (sic) Constitución y la Ley" (f. 42, cuaderno de habeas corpus). Al respecto manifestó el tribunal:

> "En consecuencia, y siendo que el recurso impetrado lo fue el de apelación únicamente y siendo que el mismo se produce en el efecto devolutivo, el cual de acuerdo al artículo 1123, Ordinal 2 del Código Judicial, no suspende el trámite, es claro, entonces, que al momento en que se profiere la providencia de fecha 12 de septiembre de 1995, a través de la cual se procede a ordenar el apremio corporal de la señora Stegaru y la cual sirvió de sustento al oficio N° 591 de la misma fecha, el mismo no se produjo en contravención de la ley, ya que las disposiciones procesales disponen que se continúe el trámite de apelación, pero también que este no suspende el cumplimientode (sic) la resolución apelada, en este casola (sic) resolución N° 184 del 9 de junio de1995 (sic), emanada del Juzgado Segundo Seccional de Menores de Panamá" (f. 46, cuaderno de habeas corpus).

DECISIÓN DE LA CORTE

Como viene visto, la orden de apremio corporal fue proferida por el Juzgado Segundo Seccional de Menores, mediante resolución de 12 de septiembre de 1995. La medida obedeció a que la agraviada fue declarada responsable de desacato por haber incumplido lo que ordenara la resolución N° 1057 de 16 de noviembre de 1994, en el sentido de "Conceder hasta el diez (10) de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), para que la señora MIHAELA STEGARU regrese a la República de Panamá a los menores MILENA Y GIOVANNI MIRCEA BARROSO STEGARU y presentarlos ante este Tribunal antes de la referida fecha" (fs. 89 y 90, antecedentes).

Esta decisión fue atacada mediante recurso de apelación, medio de impugnación claramente autorizado por artículo 1962 del Código Judicial, el que fuera concedido **en el efecto devolutivo**, con lo que se dejaba abierto el camino a la continuación del proceso y por tanto a la consecuencia práctica del desacato decretado.

Es conveniente llamar la atención sobre el hecho de que, mediante resolución N° 815 S. C. de 19 de agosto de 1994, el tribunal de menores negó solicitud de permiso de salida del país presentada por Stegaru, con el objeto de que sus menores hijos viajaran a Rumania, lugar de origen de la madre, y, en su lugar, decretó el impedimento de salida de los menores del país. A folios 127 y siguientes del expediente reposa certificación expedida el 6 de junio de 1995 por la Dirección Nacional de Migración y Naturalización, en la que consta que los menores salieron, conjuntamente con su madre, con destino a Holanda el 14 de agosto de 1994, esto es, **5 días antes de que se decidiera la solicitud de autorización de salida del país**, lo que comprueba, a todas luces, una conducta de franco irrespeto a las autoridades judiciales del país. Por la manifestación que se hace en el escrito de sustentación de la alzada, ahora se sabe que actualmente "los dos menores están atendiendo sus clases normales en Rumania" (f. 49, cuaderno de habeas corpus).

No se advierte, entonces, que durante la actuación hubieren sido conculcados derechos constitucionales de la recurrente, quien resulta encontrarse en franca rebeldía ante autoridades jurisdiccionales del país.

Por las consideraciones anteriores, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la

sentencia de 14 de noviembre de 1995, proferida por el Tribunal Superior de Menores, mediante la cual se declaró legal la orden de apremio corporal decretada contra Mihaela Stegaru Mirescu.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA A FAVOR DE FRANKLIN NODIER GONZÁLEZ CONTRA EL MAGISTRADO ASUNCIÓN CASTILLO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, QUINCE (15) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

Ingresó al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la acción de habeas corpus interpuesta por el licenciado **Federico Ponce**, contra el **MAGISTRADO ASUNCIÓN CASTILLO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL**, a favor de **FRANKLIN NODIER GONZÁLEZ FLORES**, detenido en la Cárcel Pública de David.

Acogido el presente recurso se libró mandamiento de habeas corpus contra el **MAGISTRADO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL**, Licenciado **ASUNCIÓN CASTILLO**, quien mediante Oficio N° 2638 de 26 de diciembre de 1995, niega haber ordenado la detención preventiva de **FRANKLIN NODIER GONZÁLEZ FLORES** y, expresa lo siguiente:

"...
Actualmente el señor González Flores se encuentra formalmente a disposición de este Tribunal Superior para que el mismo sea trasladado al Hospital Psiquiátrico de Los Santos.

Es pertinente informar a Usted que en contra del señor Franklin Nodier González Flores, se instruyeron sendos sumarios por los delitos de homicidio en perjuicio de José Félix Bandini Cubilla y Ernesto Pineda Rudas. Mediante auto del 22 de mayo de 1991, esta Colegiatura ordenó la acumulación de ambas causas sumariales.

En resolución de 25 de julio de 1991, este Tribunal declaró inimputable al sumariado Franklin Nodier González Flores, lo sobreseyó definitivamente y ordenó 'el internamiento del prenombrado en un hospital psiquiátrico para que sea sometido a medidas de seguridad de naturaleza curativa y reciba asistencia médica y se le brinden los cuidados mínimos correspondientes a su peligrosidad derivada del estado patológico que padece, mientras así lo determinen los facultativos médicos'.

Una vez que el justiciable fue trasladado al Hospital Regional de Azuero, el Director de esa institución comunicó que aquél se había fugado de dicho centro hospitalario (14 de octubre de 1991).

En proveído de 18 de febrero de 1993, el suscrito solicitó la captura de González Flores, quien se encontraba nuevamente evadido. Según oficio 351 del 4 de octubre último (1995), el señor González Flores es puesto a órdenes de este Tribunal por el Director de la Zona de Policía de Chiriquí. Seguidamente se procede a oficiar a la Dirección del Instituto de Medicina Legal a fin de que se practique una evaluación médico-psiquiátrica al prenombrado justiciable.

> En proveído del 23 de noviembre pasado se dispuso trasladar a González Flores al Hospital Psiquiátrico de Azuero a objeto de que los facultativos de ese Centro Médico determinen su actual estado de salud psíquica o mental, para lo cual se ofició al Jefe de la Dirección Policial de Chiriquí, al Jefe de la Zona Policial de Los Santos, al Director de la Cárcel Pública de David, y al Señor Director Médico del Hospital Regional de Azuero. ...". (Fs. 4 a 11).

Adjunto al informe se remite el expediente del caso seguido a **FRANKLIN NODIER GONZÁLEZ FLORES.**

Consta en autos, Proveído de 23 de noviembre de 1995 (f. 256 del expediente), proferido por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, bajo la ponencia del Magistrado **ASUNCIÓN CASTILLO**, mediante el cual se dispone:

> "-TRASLADAR a FRANKLIN NODIER GONZÁLEZ FLORES al centro hospitalario donde se encontraba antes de evadirse, a fin de que los facultativos médicos determinen su estado psiquiátrico. ...". (F. 256).

Tanto del informe rendido por el Magistrado acusado como del estudio de las sumarias del caso podemos colegir que, **FRANKLIN NODIER GONZÁLEZ FLORES** se fugó del Hospital Regional de Azuero donde se encontraba cumpliendo lo ordenado en el Auto de 25 de julio de 1991 (fs. 223 a 233 del expediente), proferido por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, mediante el cual se le declara inimputable, se le sobresee definitivamente, y se ordena su internamiento en un Hospital Psiquiátrico, para que sea sometido a medidas de seguridad de naturaleza curativa.

Según se desprende de los Oficios N° 2424 (f. 257); 2426 (f. 258); 2384 (f. 259); y 2425 (f. 260), de 23 de noviembre de 1995, dirigidos al Mayor de la Zona de Policía de la Provincia de Chiriquí; al Mayor de la Zona de Policía de la Provincia de Los Santos; al Director de la Cárcel Pública de David; al Director Médico del Hospital Regional de Azuero de la Provincia de Los Santos, respectivamente, **FRANKLIN NODIER GONZÁLEZ FLORES** se encuentra en la Cárcel Pública de David para posteriormente ser trasladado al Hospital Regional de Azuero de la Provincia de Los Santos, con el objeto de que sea sometido a medidas de seguridad de naturaleza curativa y reciba asistencia médica correspondiente a su peligrosidad derivada del estado patológico que padece, mientras así lo determinen los facultativos médicos.

En virtud de lo expuesto, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención de FRANKLIN NODIER GONZÁLEZ FLORES y, por consiguiente, ORDENA que sea filiado nuevamente en la Cárcel Pública de David, a órdenes del Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, para su posterior trasladado al respectivo Centro Hospitalario.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CARLOS ALBERTO NAVARRO RODRÍGUEZ CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE CORRECCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, (15) QUINCE DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante la Resolución de 5 de diciembre de 1995 (fs. 42 a 44), se abstiene de conocer la demanda de habeas corpus promovida por el señor **CARLOS ALBERTO NAVARRO RODRÍGUEZ,** porque se encuentra a órdenes de la Dirección Nacional de Corrección del Ministerio de Gobierno y Justicia, y ordena remitir el negocio ante el Pleno de la Honorable Corte Suprema de Justicia, luego de hacer las siguientes consideraciones:

> "Por medio de resolución con fecha de 2 de junio de 1992, registrada de fojas 261 a 270, este Tribunal confirma la sentencia de 7 de agosto de 1991, proferida por el Juzgado Décimo de Circuito de lo Penal, del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, registrada de fojas 222 a 234, que declara penalmente responsables a los señores **CARLOS ALBERTO MORENO NAVARRO** y WILSON ERNESTO PALACIOS PEREA, condenados a la pena de siete (7) años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por igual período al cumplir la pena principal, por el delito de Robo Calificado cometido en perjuicio del ALMACÉN COREMUSA.
>
> Consta a fojas 282 que mediante Oficio N° 1161 de 21 de septiembre de 1992, la Lcda. Mitzi Mc Geachy Gough, Juez Décima de Circuito de lo Penal, del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, remitió a la Dirección Nacional de Corrección el informe individual y copias autenticadas de la sentencia dictada contra los señores WILSON ERNESTO PALACIOS PEREA y **CARLOS ALBERTO MORENO NAVARRO**, por consiguiente, esos señores se encuentran en período de ejecución de pena a órdenes de la Dirección Nacional de Corrección. ...". (F. 43).

Acogido el presente recurso de habeas corpus, se libró el mandamiento correspondiente contra la JUEZ DÉCIMA DEL CIRCUITO PENAL DE PANAMÁ, Licenciada MITZI Mc GEACHY GOUGH, quien remite su informe de conducta de 24 de noviembre de 1995, en los términos siguientes:

> "En este despacho, se recibió telegrama enviado por el Director de la Cárcel Pública de David filiando al detenido Carlos Alberto Navarro Rodríguez a órdenes nuestras.
>
> Al examinar nuestro registro de procesos penales, no encontramos causa alguna seguida al prenombrado. Constan solamente, proceso penal seguido a Carlos Iván Navarro por Lesiones Culposas, dicho proceso ingresó en grado de apelación procedente del Juzgado Segundo Municipal Penal del Distrito de Panamá, el mismo fue remitido una vez resuelta la alzada para ante el Juzgado Segundo Municipal Penal del Distrito de Panamá, el mismo fue remitido una vez resuelta la alzada para ante el Juzgado de origen, mediante oficio N° 784 de 17 de junio de 1994; y proceso, actualmente archivado, que se siguió a Carlos Alberto Moreno Navarro, por haberse ejecutoriado la sentencia que lo declaro (sic) penalmente responsable de delito de Robo el 12 de mayo de 1992. La filiación respectiva a órdenes de la Dirección Nacional de Corrección, se ofició el día 21 de septiembre de 1992.
> ...
> 1° No es cierto que hayamos ordenado la detención preventiva de CARLOS ALBERTO NAVARRO RODRÍGUEZ imputado supuestamente por delito CONTRA EL PATRIMONIO, robo a Mano Armada.
>
> 2° No existe en este despacho proceso penal alguno seguido contra dicho ciudadano.
>
> 3° Se encuentra actualmente a nuestras órdenes, en virtud de telegrama fechado 16 de noviembre de 1995 enviado por la Cárcel Pública de David, toda vez que el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial les informó que dicho sujeto tenía pendiente

causas de Homicidio y de Robo a mano armada y que dicha información la recibieron de la Isla Penal de Coiba.

4° No puedo enviar copia autenticada de orden de detención escrita, dictada por este despacho por no contar con proceso penal seguido a este. ..." (Fs. 33-34).

El Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, mediante la Resolución de 17 de noviembre de 1995 (fs. 26 a 28), se abstiene de conocer de la acción de habeas corpus interpuesta en su propio nombre por **CARLOS ALBERTO NAVARRO RODRÍGUEZ** y EDGARDO E. CAMPOS RIVERA o JAVIER ORLANDO CANTORAL y remite los autos a la Corte Suprema de Justicia para que se decida lo atinente a la detención de **NAVARRO RODRÍGUEZ** dispuesta por el Segundo Tribunal Superior de Justicia y fotocopia debidamente autenticada al Segundo Tribunal Superior de Justicia para que se resuelva lo concerniente a la situación de los detenidos en relación con el Juzgado Décimo Penal y la Fiscalía Primera del Circuito de Panamá.

De los informes secretariales de los días 6, 7, 13 y 15 de noviembre de 1995 (fs. 6, 9, 10 y 12, respectivamente), se desprende EDGARDO CAMPO RIVERA y **CARLOS ALBERTO NAVARRO RODRÍGUEZ** que fueron capturados en un operativo de la Policía Nacional, por ser prófugos de la Isla Penal de Coiba; este último hecho es corroborado por el Cabo II 14322 JOEL VALDÉS A. de la Policía Nacional, de servicio en la Isla Penal de Coiba, según consta en el Acta de Reconocimiento (f. 21).

De los informes secretariales de 15 (f. 19) y 29 de noviembre de 1995, y del Oficio N° 1287SJ-95 de 15 de noviembre de 1995 (f. 22), suscrito este último por el Director de la Cárcel Pública de David, se desprende que:

"El prenombrado Navarro se encontraba prófugo de la Isla Penal de Coiba desde el día 10-9-1995 y mantenía caso de HOMICIDIO Y ROBO A MANO ARMADA a órdenes del Segundo Tribunal Superior de Panamá y del Juzgado Décimo de Panamá, el mismo se evadió del Campamento de Playa Blanco, según informe Secretarial del Tribunal Superior de Justicia de Chiriquí" (f. 22). (Lo subrayado es de la Corte).

Luego, acogido el presente recurso de habeas corpus, se libró el mandamiento correspondiente contra el **DIRECTOR NACIONAL DE CORRECCIÓN**, Licenciado **ENRIQUE MON PINZÓN**, quien mediante la Nota N° 4408-DNC de 20 de diciembre de 1995, rinde su informe de conducta en los términos siguientes:

"A. En ningún momento el suscrito ha ordenado la detención del señor CARLOS ALBERTO MORENO NAVARRO, ni verbalmente, ni por escrito.

B. No podemos hacer referencia a motivos o fundamentos de la detención en referencia porque no la hemos ordenado.

C. El recurrente ha sido puesto a órdenes del Departamento Nacional de Corrección por las siguientes causas:

PRIMER CASO:

Robo en perjuicio de la Mueblería Coremusa, condenado a 7 años de prisión, mediante sentencia proferida el 7 de agosto de 1991 por el Juzgado Décimo de Circuito de Panamá.

SEGUNDO CASO:

Homicidio en perjuicio de Félix Antonio Tenton Mckay hecho ocurrido el 25 de julio de 1986. Por este delito fue condenado a cumplir la pena de 12 años de prisión, mediante sentencia proferida el 30 de abril de 1993.

TERCER CASO:

> Robo en perjuicio de Carmelo Spadafora González, condenado a 5 años de prisión, mediante sentencia del 11 de junio de 1993, proferida por el Juzgado Undécimo de Circuito Penal.
>
> Cabe anotar que debido a que el caso de homicidio ocurrió en 1986, por el momento no podemos certificar cuando inició el cumplimiento de éstas (sic) condenas, toda vez que en nuestros archivos no existen documentación alguna anterior al 20-12-89, fecha en que fueron destruidos a causa de los hechos ocurridos en esa fecha. Sin embargo, hemos solicitado al segundo tribunal superior que nos certifique la fecha de detención preventiva de modo que podamos efectuarle el cómputo de las penas que le fueron impuestas" (Fs. 48-49).

De lo expuesto hasta el momento, se desprende que **CARLOS ALBERTO NAVARRO RODRÍGUEZ** se encuentra en período de ejecución de pena a órdenes de la Dirección Nacional de Corrección, por tres casos de sentencias ejecutoriadas pendientes, y corresponde a dicha Institución efectuar el cómputo de las penas correspondientes a **CARLOS ALBERTO NAVARRO RODRÍGUEZ**, quien debe permanecer detenido.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención de CARLOS ALBERTO NAVARRO RODRÍGUEZ y, por consiguiente, ORDENA que sea filiado nuevamente en el respectivo Centro Penitenciario, a órdenes de la Dirección Nacional de Corrección, a fin de que se efectúe el correspondiente cómputo de las penas.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS PREVENTIVO A FAVOR DE JOSÉ LUIS ALBERTE NAVARRO CONTRA EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, QUINCE (15) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Roberto Enrique Fuentes ha interpuesto recurso de Habeas Corpus Preventivo a favor de JOSÉ LUIS ALBERTE NAVARRO, y contra el Director de la Policía Técnica Judicial.

Manifiesta la parte actora en lo medular, que el día 6 de octubre de 1995 recibió en su empresa (SECHAP, S. A) una llamada telefónica de un agente del Tránsito, el cual solicitaba sus servicios de remolque para un automóvil, marca Daihatsu, color celeste, placa N° 081091, accidentado contra un objeto fijo, en Calle K, Corregimiento de Santa Ana. Agrega también, que dicho automóvil estuvo estacionado en su taller durante un año sin que persona alguna reclamara su propiedad, ni pagara los gastos del remolque y depósito.

Por lo anterior, el señor JOSÉ LUIS ALBERTE ordenó a sus empleados que sacaran las piezas útiles del vehículo accidentado para utilizarlas en la reparación de otro auto de idénticas características. Continúa expresando la parte actora, que según informes de la Policía Técnica Judicial el vehículo

estacionado durante un año en su taller, y del cual se habían extraído piezas para reparar otro igual, había sido hurtado, y por lo tanto, agentes de la PTJ procedieron a cautelar el vehículo reparado y se le tomó declaración al señor ALBERTE. Sin embargo, el martes 5 de diciembre de 1995, un agente de la Policía Técnica Judicial informó telefónicamente al señor JOSÉ LUIS ALBERTE, que éste tenía que presentarse a las oficinas del Ministerio Público, sin explicarle los motivos de esta segunda citación, por lo que, la parte actora temerosa de su suerte ha interpuesto la presente acción de habeas corpus preventivo con la finalidad de evitar una detención preventiva ilegal y arbitraria en su contra.

Mediante auto de 7 de diciembre de 1995 se libró mandamiento de habeas corpus correspondiente y se le requirió al funcionario demandado que informara si había ordenado la detención del señor JOSÉ LUIS ALBERTE NAVARRO, los motivos y fundamentos de hecho y de derecho que tuvo para ello y si el mismo está detenido a sus órdenes o a órdenes de otra autoridad.

El funcionario demandado contestó el mandamiento de habeas corpus librado mediante nota AL-1701-95 de 12 de diciembre de 1995, en la cual informó lo siguiente:

> "1. No es cierto que hemos ordenado la detención del señor JOSÉ LUIS ALBERTE NAVARRO.
> 2. No tiene razón de ser en base al punto anterior.
> 3. No tenemos bajo custodia ni a nuestras órdenes al señor JOSÉ LUIS ALBERTE NAVARRO". (fs. 7).

La acción de habeas corpus puede ser preventiva o reparadora. En ambas acciones es presupuesto procesal necesario la existencia de una orden de detención. De acuerdo con los elementos probatorios allegados al proceso, en el presente caso no se ha emitido ninguna orden de detención y siendo esto así, no existe uno de los presupuestos que da vida a la acción y el proceso debe cesar.

De consiguiente, el PLENO de la Corte Suprema, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA EL CESE del procedimiento en la acción de habeas corpus promovida por el licenciado Roberto Enrique Fuentes, en representación de JOSÉ LUIS ALBERTE NAVARRO, y contra el Director de la Policía Técnica Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE VALENTÍN CHÁVEZ CORTEZ CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, QUINCE (15) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Edilberto Vásquez Atencio, ha promovido ante esta Corporación de Justicia acción de habeas corpus, contra el Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas y a favor de VALENTÍN CHÁVEZ CORTEZ.

Manifiesta la parte actora que el señor Chávez fue detenido por miembros del orden público en el sector de Juan Díaz y que al momento de requisarlo se

encontró en su poder un envoltorio que en su interior contiene una cantidad ínfima de una hierba seca que se presume sea marihuana.

Dictado el mandamiento de habeas corpus correspondiente se solicitó un informe al señor Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, quien lo rindió en los siguientes términos:

"A. FUNDAMENTO DE HECHO:

Los hechos se dieron el día 22 de Noviembre del año en curso, a las 14:20 Hrs, cuando Unidades de la Policía Nacional del Área "F", SUB-DIIP, encontrándose de recorrido por los alrededores de San Pedro N° 1, visualizaron a un (1) sujeto en actitud sospechosa, los Agentes lo detuvieron y procedieron a solicitarle su cédula de identidad personal y al afectuarle el registro de rigor, se le encontró en el bolsillo derecho de la parte delantera, un (1) envoltorio de hoja de propaganda que en su interior contiene una cierta cantidad de hierba seca que se presume sea Droga conocida como **MARIHUANA**.

El ciudadano, responde al nombre de **VALENTÍN CHÁVEZ CORTEZ**, de 21 años de edad, reside en el Corregimiento de Juan Díaz, Barriada San Pedro N° 2, Casa N° I-4.

B. FUNDAMENTO DE DERECHO:

En las presentes Sumarias el hecho punible que se investiga, el cual constituye un Delito CONTRA LA SALUD PUBLICA, Relacionado con Drogas, se encuentra plenamente acreditado en los siguientes puntos:

PRIMERO: La fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, procedió a enviar al Laboratorio Técnico Especializado de la Policía Técnica Judicial (P. T. J) las sustancias ilícitas encontradas en poder del sindicado, para su análisis y peso, EN ESPERA DEL RESULTADO DE LA MISMA.

SEGUNDO: Al rendir Declaración Indagatoria, el ciudadano VALENTÍN CHÁVEZ CORTEZ, sostuvo que dichas sustancias ilícitas encontradas en su poder es de un Norteamericano que el conoció en la Base de Clayton.

Con todos estos elementos expuestos se dan los presupuestos legales que establece el Artículo 2148 y 2159 de nuestro Código Judicial a efecto de que éste Despacho haya adoptado la decisión jurisdiccional de ordenar la detención del prenombrado". (fs. 34-35).

Tal como lo afirma el funcionario instructor, mediante Providencia fechada de 22 de noviembre de 1995 dispuso recibirle declaración indagatoria a VALENTÍN CHÁVEZ CORTEZ, diligencia en la cual el imputado aceptó la posesión de la sustancia ilícita pero agregó que tenía la droga en su poder porque estando él en su casa llegó un americano que conocía y le dijo "que le hiciera un favor de recogerle un paquete cerca de la basura" y que a cambio le daría dinero. (fs 6 a 8 del sumario).

El Pleno de esta Corporación de Justicia observa también que, a fojas 38 del cuaderno de habeas corpus se lee el Dictamen Pericial del Laboratorio Técnico Especializado en Drogas del Departamento de Criminalística de la Policía Técnica Judicial, en el cual consta que la muestra incautada es **MARIHUANA** cuyo peso es 6.87 gramos.

Los hechos investigados vinculan al señor VALENTÍN CHÁVEZ CORTEZ con el delito contra la Salud Pública, configurado en el párrafo segundo del artículo 260 del Código Penal, sancionado con pena de 5 a 10 años de prisión. Esto es así porque la cantidad de droga incautada, a juicio del Pleno, demuestra que lo que se pretende es su traspaso para consumo ilegal. Esta afirmación se hace en esta etapa incipiente de la investigación sin perjuicio de que sea posteriormente

desvirtuada con nuevas pruebas que se alleguen a los autos. Por lo expuesto estima el PLENO de la Corte Suprema de Justicia que la orden de detención decretada en contra del señor CHÁVEZ CORTEZ no viola las normas constitucionales que garantizan la libertad ambulatoria y se ajusta a lo preceptuado en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

En mérito de lo expuesto, el PLENO de la Corte Suprema, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención del señor VALENTÍN CHÁVEZ CORTEZ, ordenada por el señor Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas mediante diligencia fechada el 22 de noviembre de 1995 por el Delito contra la Salud Pública, y ORDENA que se puesto nuevamente a órdenes de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JASED AROSEMENA BETESH CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, QUINCE (15) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Adolfo Alberto Beneddetti Evers, ha promovido acción de habeas corpus a favor de JASED AROSEMENA BETESH, contra el Director de la Policía Técnica Judicial.

Mediante auto de 18 de diciembre de 1995 se libró mandamiento de habeas corpus y se le requirió al funcionario demandado, que en el término de ley rindiera, un informe en relación con la detención del señor JASED AROSEMENA BETESH.

El funcionario demandado contestó el mandamiento de habeas corpus librado, mediante la Nota A. L. 1746-95 de 19 de diciembre de 1995, y manifestó que el señor Arosemena Betesh se encuentra en custodia de la Policía Técnica Judicial, pero a órdenes de la Fiscalía Auxiliar de la República.

Se libró nuevamente mandamiento de habeas corpus, esta vez contra el Fiscal Auxiliar de la República, quien contestó mediante Oficio N° 7582 de 22 de diciembre de 1995.

Estando el presente proceso listo para resolver el señor JASED AROSEMENA BETESH, mediante escrito presentado en la Secretaría General de la Corte Suprema el 22 de diciembre de 1995, desistió de la presente acción por haber recuperado su libertad.

Como quiera que conforme lo establece el primer párrafo del artículo 1073 del Código Judicial, "toda persona que haya entablado demanda, promovido incidente o interpuesto un recurso, puede desistir expresa o tácitamente", esta Corporación considera que debe acoger el desistimiento presentado.

De consiguiente, la Corte Suprema, PLENO, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE EL DESISTIMIENTO presentado por el señor JASED AROSEMENA BETESH, y ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE PABLO CÓRDOBA HERRERA CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, QUINCE (15) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha ingresado al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la acción de habeas corpus presentada a favor del señor **PABLO CÓRDOBA HERRERA**, contra el Fiscal Auxiliar de la República.

Acogido el recurso, se libró mandamiento contra la autoridad acusada, quien, mediante Oficio N° 0198 de 4 de enero de 1996, manifestó lo siguiente:

> "Con relación de darle respuesta a mandamiento de Habeas Corpus librado en contra del suscrito y en favor de PABLO CÓRDOBA HERRERA, informo a usted, que el expediente fue enviado a la Fiscalía Segunda, Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante Oficio N° 6545, el día 9 de junio de 1994. El traspaso del detenido a la Cárcel Modelo es el número 680 de la misma fecha que la anterior." (Foja 4).

Del texto transcrito se concluye que el señor PABLO CÓRDOBA HERRERA se encuentra a órdenes de una Fiscalía de Circuito, por lo que la Corte no tiene competencia para resolver la presente acción, conforme a lo establecido en el artículo 2602 del Código Judicial.

En mérito de lo expuesto, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLINA el conocimiento de la acción de habeas corpus presentada a favor del señor PABLO CÓRDOBA HERRERA, en el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, para los fines legales correspondientes.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA ELIGIO SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE SHANG KAM FAN Y YAU SEN PEN CONTRA EL FISCAL DUODÉCIMO DEL CIRCUITO DE PANAMÁ, CON SEDE EN CHORRERA. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, QUINCE (15) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha ingresado al conocimiento del Pleno de la Corte Suprema, en grado de apelación, la acción de habeas corpus presentada por el señor Hermenegildo Samaniego González, a favor de los señores **ZHANG KAM FAN y YAU SEN PEN**, contra el Fiscal Duodécimo del Circuito de Panamá.

El recurrente alega que los prenombrados señores se encuentran ilegalmente detenidos, "sin la existencia de una orden de detención escrita emanada de autoridad competente".

El Segundo Tribunal Superior de Justicia, quien decidió esta demanda en primera instancia mediante resolución de 13 de diciembre de 1995, declaró legal la detención preventiva de los señores ZHANG KAM FAN y YAU SEN PEN, por considerar que dicha detención fue decretada en atención a los requisitos exigidos por la ley.

Dicha decisión fue apelada; razón por la cual esta corporación judicial debe decidir el mérito de esa apelación.

De acuerdo con el informe rendido por la Fiscalía Duodécima del Tercer Circuito Judicial de Panamá, consultable a fojas 9 y 10 del cuadernillo de habeas corpus, los hechos que fundamentan la detención preventiva de los recurrentes, son los siguientes:

> **"SEGUNDO:** Dicha detención fue ordenada por el suscrito en virtud de las siguientes consideraciones:
>
> El día 14 de noviembre del presente año, el señor WAN YIN KEO, presentó formal denuncia ante la Policía Técnica Judicial, Agencia de Vacamonte, donde indicó que en la madrugada de ese día fue interceptado por otros "paisanos" que haciendo uso de un arma de fuego le despojaron de su billetera, la cual contenía la suma de B/.200.00 y de la llave de su vehículo, procediendo a introducirlo en el mismo e indicándole que se lo llevarían para Panamá, siendo golpeado ante las protestas de éste, que al observar a miembros del orden público, entró en lucha con éstos y logrando que el vehículo se chocara con un muro, lográndose la captura de los dos sujetos que iban en los otros vehículos, detención que narran los hechos acaecidos en las inmediaciones del puente de Las Américas.
>
> El hecho punible se encuentra debidamente acreditado con la documentación aportada por el denunciante (fs. 7 a 10), con la declaración jurada de LUIS ANTONIO NÚÑEZ NÚÑEZ y con el testimonio del propio denunciante. En cuanto a la vinculación de los encartados con el hecho punible tenemos el señalamiento que les hace el denunciante y los indicios de presencia y oportunidad que militan contra los mismos, por lo que se encuentran debidamente satisfechas las exigencias del artículo 2148 del Código Judicial, máxime cuando los sujetos fueron detenidos en flagrante delito.
>
> Debemos acotar que si bien es cierto existe una declaración de desistimiento de pretensión punitiva, es evidente que nos encontramos en presencia de un delito de SECUESTRO el cual de conformidad con el artículo 1984 no es susceptible de desistimiento."

En primer lugar, el Pleno advierte que efectivamente, a foja 26 del cuaderno que contiene las sumarias que se adelantan contra los recurrentes, aparece providencia fechada 14 de noviembre de 1995, por medio de la cual se ordenó la detención preventiva de los señores ZHANG KAM FAN y SEN PEN YAU y se dispone tomarles declaración indagatoria.

En segundo lugar, del informe arriba transcrito y de las constancias procesales se colige que existen elementos que vinculan a los detenidos con el

hecho punible. Así, existe la denuncia suscrita por la víctima del mismo, señor WAN YIN KEO, realizada ante la Policía Técnica Judicial, Sub Agencia de Vacamonte, el 13 de noviembre de 1995. Además, el denunciante presentó la prueba documental consultable de foja 7 a 10 del cuaderno principal. Por último, a foja 28 de ese mismo expediente se encuentra el informe rendido por el médico forense, en el que certifica que el denunciante fue examinado el 14 de noviembre de 1995 y describe las lesiones que presentaba en diferentes partes del cuerpo.

En tercer lugar, cabe destacar que el ilícito perpetrado se encuentra tipificado en el artículo 188 del Código Judicial, con una sanción de 5 a 7 años de prisión.

De todo lo anteriormente expuesto se concluye que la detención preventiva de los recurrentes es legal, ya que cumple a cabalidad con los requisitos exigidos por los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, por lo cual debe confirmarse la decisión proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, ya que la misma se ajusta a derecho.

Por último, se advierte que durante la tramitación del presente negocio, el apoderado judicial de los recurrentes, Licenciado Carlos M. Herrera Morán, presentó escrito de impulso procesal en el que manifestaba que habían transcurrido casi veinte días sin que el Pleno se hubiera pronunciado. Sin embargo, es preciso aclarar que aun cuando la apelación fue anunciada el 18 de diciembre de 1995, la misma ingresó a la Corte el 26 de diciembre de 1995, tal como consta en autos.

Por tanto, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia el 13 de diciembre de 1995, por medio de la cual se declaró legal la detención preventiva de los señores ZHANG KAM FAN y YAU SEN PEN.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ A. MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE NELVA ANTONIA SALINAS MARTÍNEZ CONTRA EL FISCAL SEGUNDO DELEGADO DE LA PROCURADURÍA DE LA NACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, QUINCE (15) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Emilio Eduardo Batista Miranda ha presentado acción de habeas corpus a favor de la señora **NELVA ANTONIA SALINAS MARTÍNEZ**, contra el Fiscal Segundo Delegado de la Procuraduría General de la Nación.

Acogido el recurso, se libró mandamiento de habeas corpus contra la autoridad acusada. Encontrándose el negocio pendiente de recibir el informe correspondiente, el apoderado judicial de la recurrente adjuntó escrito en el que manifiesta que desiste de la presente acción de habeas corpus, "ya que mi representada Señora NELVA ANTONIA SALINAS MARTÍNEZ, fue puesta en libertad."

Consecuentemente, debe ordenarse el cese del presente procedimiento de habeas corpus, al tenor de lo dispuesto por el artículo 2572 del Código Judicial.

En mérito de lo expuesto, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA el cese del procedimiento y el archivo del expediente.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=9¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LUIS CARLOS SALAZAR CENTENO CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADO CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZALEZ. PANAMÁ, QUINCE (15) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La Licenciada Teresa Ibáñez ha interpuesto acción de habeas corpus a favor del señor **LUIS CARLOS SALAZAR CENTENO**, contra el Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas.

La apoderada judicial del recurrente alega que la detención preventiva del señor SALAZAR CENTENO es ilegal, en vista de que la cantidad de droga que le fue incautada configura, únicamente, el delito de posesión, cuya sanción privativa de libertad es inferior a los dos años.

Cumplidos los trámites legales correspondientes, el Magistrado Sustanciador libró mandamiento de habeas corpus contra la autoridad acusada, quien respondió mediante Oficio N° 10267 de 14 de diciembre de 1995, consultable a fojas 6 y 7, en el que manifiesta lo siguiente:

> **"PRIMERO:** Sí es cierto que ordenamos la detención del señor **LUIS CARLOS SALAZAR CENTENO**. Dicha decisión fue emitida mediante Resolución de fecha 18 de octubre de 1995, la cual se encuentra acopiada a foja 14 y 15 del Sumario.
>
> **SEGUNDO:** Los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron la actuación atacada, los exponemos a continuación.
>
> A. FUNDAMENTOS DE HECHO
>
> Los hechos se dieron el día 17 de octubre del año en curso, según lo señala el informe de novedad, cuando los agentes captores se encontraban de recorrido por el Sector de el Chorrillo, a la altura del Edificio Bugavilea, entre la calle 25 y 26 del referido corregimiento, cuando visualizaron a un sujeto con camisa manga corta a cuadros y pantaloncito corto celeste, que al percatarse de la presencia de los agentes policiales intentó darse a la fuga, hacia la parte superior del edificio Buganvilea, por lo cual se le dio persecución al mismo, siendo capturado posteriormente, momento éste que aprovechó para arrojar del balcón del segundo piso, un envoltorio, el mismo fue recogido en la parte de abajo del edificio, y al verificarlo contenía la cantidad de **once (11)** carrizos transparentes, que en su interior contenía una sustancia en forma de polvo blanco que se presume sea **Cocaína**. Adicional a esto al sujeto antes mención, (sic) se le efectuó un registro por parte del Cabo 2do. Blanquicett, donde se le encontró en su poder o sea en el bolsillo izquierdo de la camisa que llevaba puesta, una bolsita de

plástico transparente conteniendo la cantidad de **siete (7) carrizos** transparentes, que en su interior contenía una sustancia en forma de polvo color blanco que se presume sea **Cocaína**, haciendo un total de **dieciocho (18) carrizos**."

La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas remitió, igualmente, copia del expediente que contiene las sumarias que se adelantan contra el recurrente, por delito contra la salud pública.

Del análisis de dicho cuaderno se colige, en primer lugar, que a fojas 14 y 15 es consultable la providencia que ordenó la detención preventiva del señor LUIS CARLOS CENTENO SALAZAR, proferida por el Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas, el 18 de octubre de 1995.

En segundo lugar, existen elementos que vinculan al detenido con el ilícito investigado. Así, a foja 2 se encuentra el informe de novedad suscrito por los agentes que realizaron la detención del recurrente, en el que corroboran los hechos narrados por el Fiscal Especial en el mandamiento de habeas corpus arriba transcrito. Además, a foja 24 aparece el dictamen pericial realizado por la sección de sustancias controladas de la Policía Técnica Judicial, en el que se certifica que "las muestras analizadas resultaron POSITIVAS, para la determinación de COCAÍNA, en la cantidad de 7.31 Gramos".

De lo anteriormente expuesto se concluye que la detención preventiva del señor LUIS CARLOS SALAZAR CENTENO fue decretada por autoridad competente y cumple con los requisitos que exigen los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

En consecuencia, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva del señor LUIS CARLOS SALAZAR CENTENO y ORDENA que sea puesto, nuevamente, a órdenes del Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MANUEL LINARES MUÑOZ CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **ENRIQUE DOMÍNGUEZ HURTADO** ha presentado ante esta Superioridad, acción de Habeas Corpus a favor de **MANUEL LINARES MUÑOZ** contra el Fiscal Auxiliar de la República, por considerar que la privación de libertad que sufre el señor **LINARES**, es ilegal.

Una vez acogido el recurso en mención, mediante providencia fechada 2 de enero de 1996 se libró el mandamiento de Habeas Corpus respectivo, que fue contestado por el señor Fiscal Auxiliar de la República mediante Oficio N° 0194 de 4 de enero de los corrientes, recibido en la Secretaría General de la Corte Suprema en horas de la tarde del día 5 de enero de 1996, indicando que el expediente del señor **MANUEL LINARES** había sido enviado a la Fiscalía Sexta del Primer Circuito de Panamá, tal como se colige a folio 9 del cuaderno de Habeas Corpus, en el que destacó:

"Con relación al Habeas Corpus librado en contra del suscrito y en favor de MANUEL LINARES MUÑOZ, informo a usted, que el expediente fue enviado a la Fiscalía Sexta del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante oficio N° 7702, el día 29 de diciembre del año pasado. El traspaso del detenido a la Cárcel Modelo es el número 7700 de la misma fecha que lo anterior."

En vista de que, según el informe transcrito remitido por el funcionario demandado, el expediente que se le instruye al señor **LINARES** se encuentra radicado en la Fiscalía Sexta del Primer Circuito Judicial de Panamá, agencia del Ministerio Público a cuyas órdenes se encuentra el prenombrado señor **LINARES**, procede enviar el recurso de Habeas Corpus presentado al Tribunal Competente para conocer de la acción, de conformidad con lo preceptuado en el numeral 3° del artículo 2602 del Código Judicial.

En consecuencia, la Corte Suprema Pleno, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLINA en el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, la acción de Habeas Corpus presentada a favor de MANUEL LINARES MUÑOZ.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JOSÉ EVERARDO GUIZADO MONROY, LUZ MARINA MONROY Y RODRIGO ANTONIO SEPÚLVEDA VÉLEZ CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

JOSÉ EVERARDO GUIZADO MONROY, ha interpuesto ante esta Superioridad, acción de Habeas Corpus a su favor contra el Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas por considerar que la privación de libertad que sufre es ilegal.

Una vez acogido el recurso en mención mediante providencia fechada 26 de diciembre de 1995, se libró el mandamiento de Habeas Corpus respectivo, que fue contestado por el Fiscal Especial en Delitos Relacionado con Drogas mediante Oficio N° 11317 de 29 de diciembre de los corrientes, en donde indica, que el señor JOSÉ EVERARDO GUIZADO MONROY, se encontraba a órdenes del Juzgado Cuarto del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Penal, tal como se observa a foja 8 del expediente.

En vista de que las sumarias que se instruyen al señor JOSÉ EVERARDO GUIZADO MONROY se encuentran radicadas en el Juzgado Cuarto del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Penal, a cuyas órdenes está el precitado, procede enviar la presente acción de Habeas Corpus al Tribunal competente para conocer de la misma, de conformidad con lo preceptuado en el numeral 3° del artículo 2602 del Código Judicial.

En consecuencia, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLINA en el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, la acción de Habeas Corpus presentada a favor de JOSÉ EVERARDO GUIZADO MONROY.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE TOMÁS FERNÁNDEZ BROWN CONTRA EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor Cesar Eliecer Morán, presentó recurso de habeas corpus a favor del señor Tomás Fernández Brown quien está supuestamente involucrado en un delito contra el patrimonio y falsificación y en contra del Director de la Policía Técnica Judicial.

Librado de inmediato el mandamiento de habeas corpus el referido Director de la Policía Técnica Judicial, mediante Nota A. L.-0016-96 de cinco (5) de enero de 1996, rindió el siguiente informe:

> "Respetuosamente me dirijo a Usted para dar contestación a mandamiento de Habeas Corpus Preventivo presentado a favor del señor **TOMÁS FERNÁNDEZ BROWN** en contra del suscrito señor Director de la Policía Técnica Judicial.
>
> 1. No es cierto que hemos ordenado la detención del señor **TOMÁS FERNÁNDEZ BROWN.**
>
> 2. No tiene razón de ser en base al punto anterior.
>
> 3. No tenemos bajo custodia ni a nuestras órdenes al señor **TOMÁS FERNÁNDEZ BROWN.**"

Dado que del informe presentado por el Director de la Policía Técnica Judicial se colige claramente que el ciudadano a favor del cual se ha presentado este recurso de habeas corpus, señor Tomás Fernández Brown, no se encuentra privado de su libertad, debe procederse entonces de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2572 del Código Judicial.

Por todo lo antes expuesto, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA el cese de los trámites del recurso de habeas corpus interpuesta en este caso a favor del señor Tomás Fernández Brown y DISPONE el archivo del expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE RUBÉN URRIAGA, RODRIGO GÓMEZ Y ROBINSON LOZANO GUZMÁN CONTRA EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN E INVESTIGACIÓN POLICIAL DE LA POLICÍA NACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Silverio Rodríguez H. presentó ante el Juzgado Noveno de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, acción de Habeas Corpus, en representación de los señores Rubén Urriaga, Rodrigo Gómez y Robinson Lozano Guzmán, contra el Director del Departamento de Investigación Policial de la Policía Nacional. Dicho despacho judicial mediante resolución de 18 de diciembre de 1995, se inhibió del conocimiento de dicha acción de habeas corpus por falta de competencia, al ser la Dirección de Información e Investigación de la Policía Nacional una autoridad con mando y jurisdicción en toda la República y por medio del oficio N° 2827 la misma fue remitida ante el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, para su correspondiente reparto.

Seguidamente se libró el mandamiento de Habeas Corpus contra el Director del Departamento de Información e Investigación de la Policía Nacional y dicho funcionario contestó mediante oficio N° DAL-1302-95 de 21 de diciembre de 1995, en los siguientes términos:

> "A). No es cierto que haya ordenado la detención del recurrente, ni por escrito ni verbalmente.
>
> B). Queda explicado en el literal anterior.
>
> C). No tengo bajo mi custodia a los recurrentes. Su aprehensión se dio por unidades de la Dirección de Información y Investigación (sic) Policial (D. I. I. P.) de la Zona de Policía de San Miguelito el día 15 de diciembre cuando se les encontró en actitud sospechosa en un Sector de alto nivel delincuencial incautándosele un arma de fuego (revólver) y municiones sin el permiso correspondiente y con las visas vencidas.
>
> Los mismos fueron remitidos a la Gobernación de Panamá el día 18 de diciembre de 1995, y luego de ser sancionados se remitieron a la Dirección General de Migración ..."

Dado el informe presentado por el Director de Información e Investigación de la Policía Nacional se libró mandamiento de habeas corpus contra el Director Nacional de Migración y Naturalización, quién contestó por medio de Nota N° DNMYN-418-95 de 26 de diciembre de 1995 lo siguiente:

> "A. No es cierto que ordenamos la detención de los recurrentes RUBÉN URRIAGA, RODRIGO GÓMEZ y ROBINSON LOZANO GUZMÁN.
>
> B. No existen al momento, motivos, fundamentos de hecho ni de derecho para la detención de los señores RUBÉN URRIAGA, RODRIGO GÓMEZ y ROBINSON LOZANO GUZMÁN.
>
> C. No tenemos bajo nuestra custodia ni a nuestras órdenes a el (sic) los señores RUBÉN URRIAGA, RODRIGO GÓMEZ y ROBINSON LOZANO GUZMÁN".

Del informe presentado por el Director Nacional de Migración y Naturalización, se colige claramente que los señores RUBÉN URRIAGA, RODRIGO GÓMEZ y ROBINSON LOZANO GUZMÁN han recuperado su libertad debe procederse entonces con lo dispuesto en el artículo 2572 del Código Judicial.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA EL CESE del procedimiento en vista de que no existe fundamento legal para continuar con los trámites de la

acción de Habeas Corpus interpuesta en este caso a favor de los ciudadanos RUBÉN URRIAGA, RODRIGO GÓMEZ y ROBINSON LOZANO GUZMÁN, y dispone el archivo del expediente.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE
(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CRISTÓBAL JESÚS PÉREZ CORTEZ CONTRA EL FISCAL SUPERIOR DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Julio Lu Osorio ha interpuesto ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, recurso de Habeas Corpus a favor del señor Cristóbal Jesús Pérez Cortez y en contra del Fiscal Superior del Cuarto Distrito Judicial.

Librado el mandamiento de Habeas Corpus contra el Fiscal Superior del Cuarto Distrito Judicial, el mismo dio respuesta mediante el Oficio N° 1080 de 29 de diciembre de 1995, en los siguientes términos:

> "A. No ordené la detención preventiva del señor CRISTÓBAL JESÚS PÉREZ CORTEZ, fue ordenada por la Licenciada Nedelka Díaz de Castillo, mediante providencia motivada y razonada de fecha 6 del presente mes y año, ya que dicho sujeto se encuentra vinculado con el delito relacionado con Droga.
>
> B. Los motivos de hecho y de derecho que fundamentaron la medida cautelar de carácter personal son los siguientes:
>
> Producto de una operación encubierta de compra controlada de droga, esta Agencia del Ministerio Público tomando en consideración la diligencia de allanamiento de fojas 22 a 24 y las pruebas de campo que dieron resultado positivos para cocaína, de páginas 17 y 28, ordenó la detención preventiva del señor ERIDES ALBERTO BARRIOS CEDEÑO (A) NANO.
>
> Al ser sometido a sendas ampliaciones de su declaración indagatoria, específicamente la que corre a fojas 98 y 99 del presente proceso, el precitado Barrios Cedeño, señaló al señor Cristóbal Pérez como la persona que le vendiese la droga que es el objeto de la presente investigación, situación ésta que fue ratificada en la declaración jurada de folio 100 del proceso.
>
> Aunado a lo anterior existe documentación proveniente de la Sub Dirección de Información e Investigación Policial de la Policía de Herrera y de la Sub Dirección de Información e Investigación Policial de la Policía de Los Santos, así como de la Policía Técnica Judicial de Las Tabla (sic) en donde se vincula de manera directa al señor CRISTÓBAL JESÚS PÉREZ CORTEZ con el trasiego de sustancias ilícitas (drogas), tanto en la provincia de Herrera como en la provincia de Los Santos. (Véase fojas 126 a 136; 170 a 177 y 228 del proceso).

Todo este caudal probatorio llevó y nos lleva al ánimo de la Fiscalía a considerar que estamos presente (sic) ante la conducta del tráfico de drogas que tipifica y sanciona el Texto Único Refundido de las Leyes 23 de 30 de diciembre de 1986 y 13 de 27 de julio de 1994 para mantener el estado privativo de la libertad del señor CRISTÓBAL JESÚS PÉREZ CORTEZ, según lo indican los artículos 2147, 2148 y 2159 del Código Judicial;

C. En efecto el señor CRISTÓBAL JESÚS PÉREZ se encuentra recluido por razones de seguridad en la Cárcel Pública de Chitré a nuestras órdenes; pero de manera inmediata se pone a disposición de la Honorable Corte Suprema de Justicia en virtud de la presente Acción Constitucional."

Por su parte, el licenciado Julio Lu Osorio, manifiesta en su escrito que:

"BREVES CONSIDERACIONES DE LA ILEGALIDAD DE LA DETENCIÓN.

Mediante compra simulada de droga, se detiene al señor **ERIDES ALBERTO BARRIOS CEDEÑO (a) NANO**, en la cantina Oriental de la ciudad de Las Tablas, el día 24 de Noviembre de 1995. De hecho el sindicado vendió la suma de diez balboas en sustancia ilícita (Cocaína); por lo que se ordenó su inmediata detención. El día 27 del mes y año antes señalado el sindicado **BARRIOS CEDEÑO**, rinde su declaración indagatoria y señala como vendedores y proveedores a los señores **ROBERTO TAWARI**, de la Pacheca de Guararé, a un sujeto conocido como **PATA DE GALLO**, y a un tal **RODRIGO** de la ciudad de Panamá (Fojas 52-56).

El sumariado **ERIDES ALBERTO BARRIOS CEDEÑO (a) NANO**, amplía su declaración indagatoria el día 30 de noviembre del año que decurre, sin hacer incriminaciones a terceras personas. El día 6 del mes cursante y por tercera vez amplía su indagatoria y manifiesta entre otras cosas que compró de 20 a 25 gramos de Cocaína a mi representado **CRISTÓBAL PÉREZ**, y que parte de la droga por él le hizo al prenombrado **PÉREZ CORTEZ**. En virtud de ello se decretó la detención preventiva de mi apoderado judicial **CRISTÓBAL JESÚS PÉREZ CORTEZ**, el día 7 de diciembre del año en curso a las cinco cuarenta y cinco de la mañana (5:45 a. m.); día y hora en que se allana su residencia, arrojando dicha diligencia resultados negativos, sin embargo se detiene a **CRISTÓBAL JESÚS PÉREZ CORTEZ**, sin haberle encontrado evidencia alguna que lo relacione al ilícito investigado. El sindicado **BARRIOS CEDEÑO**, por cuarta ocasión amplía su indagatoria y en lo medular expresa que él compró la droga a **PÉREZ CORTEZ** el día 18 de noviembre de 1995 a eso de las once de la mañana (11:00 a. m.), en una calle de Chitré que él no conoce, ampliación recibida el día 11 de diciembre del año que transcurre. Ese mismo día, violándose las garantías procesales y toda norma de ética que encierra el cargo, mantienen en una misma celda de la cárcel pública de la ciudad de Las Tablas a ERIDES ALBERTO BARRIOS CEDEÑO y CRISTÓBAL JESÚS PÉREZ CORTEZ, sin que uno conociera al otro, luego se realiza una diligencia de Reconocimiento de Rueda de Detenidos, para que el primero reconociera a éste último, diligencia que mi cliente se negó a firmar por motivos evidentes. De aquí en adelante se acopian misteriosamente una serie de informes temerarios e infundados de las sub-direcciones de información e investigación policial D. I. I. P. de las provincias de Herrera y Los Santos, donde supuestamente se le venía dando seguimiento a **CRISTÓBAL JESÚS PÉREZ CORTEZ**, por dedicarse a la venta de Drogas.

ILEGALIDAD DE LA MEDIDA

1) Mediante el Allanamiento a la residencia de mi representado no se encontró nada que lo vincule con la actividad de venta de drogas.

> 2) Las incriminaciones del sindicado **ERIDES ALBERTO BARRIOS CEDEÑO (a) NANO**, en contra de mi cliente carecen de consistencia, por cuanto mencionó a varias personas primero como sus proveedores, que el Ministerio Público, ni siquiera se ha tomado el trabajo de investigar, sin embargo a contrario sensu haciéndo (sic) una interpretación extensiva de la ley, de manera apresurada ordena y hace efectiva la detención preventiva de **CRISTÓBAL JESÚS PÉREZ CORTEZ**, en abierto desafío a lo normado en el artículo 1972 del Código Judicial, que señala que las normas que limiten la libertad personal del sujeto deben interpretarse restrictivamente.
>
> 3) De hecho al señor **BARRIOS CEDEÑO (a) NANO**, antes de haber sido detenido no conocía, ni tenía relación alguna con mi cliente, toda vez que si hubiese existido, no había necesidad de realizar DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE RUEDA DE DETENIDO, a todas luces ilegal.
>
> 4) La versión ofrecida por el sindicado **ERIDES ALBERTO BARRIOS CEDEÑO (a) NANO**, es poco confiable, dado que es reincidente en el delito por el cuál se le procesa, y declaró de esta manera como una forma de buscar rebaja de pena.
>
> 5) Finalmente lo más grave es que a la fecha mi cliente no ha sido llamado a rendir declaración indagatoria a que tiene derecho, considerando que ésta es un medio de defensa para pedir que se practiquen las pruebas favorables."

En este momento, corresponde determinar si la medida cautelar de carácter personal atacada cumple con los requisitos que al efecto establecen los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

De conformidad con la diligencia que ordena la detención preventiva del señor Pérez Cortez, la medida se fundamenta en la supuesta comisión de delitos contra la salud pública, concretamente el tráfico de drogas.

En las sumarias consta como elemento que comprueba la existencia del hecho punible, la diligencia de allanamiento realizada a la Cantina Oriental ubicada en Las Tablas, en la que se efectúo el registro del señor Erides Alberto Barrios Cedeño (a) Nano, "al cual se le había realizado una operación encubierta de compra simulada de drogas." De la mencionada diligencia, se encontraron nueve (9) carrizos plásticos transparentes que en su interior contenían cierta cantidad de polvo blanco. Sometida la evidencia a la prueba de campo, ésta, resultó positiva para la determinación de COCAÍNA. Luego, se aprecia a foja 98 de las sumarias, la Indagatoria rendida por el señor Erides Alberto Barrios Cedeño (a) Nano, en la que señala que el señor CRISTÓBAL PÉREZ le vendió entre 20 a 25 gramos de droga y que los carrizos que se encontraron en el allanamiento son parte de esa droga.

Con fundamento en lo anterior, la Fiscalía Primera Superior del Cuarto Distrito Judicial, ordena la detención preventiva del señor CRISTÓBAL JESÚS PÉREZ CORTEZ, por considerar que existían suficientes pruebas que lo involucraban en delitos relacionados con drogas. En este sentido, señala ese despacho:

> "... el señor BARRIOS CEDEÑO (A) NANO Que él le compró de veinte (20) a veinticinco (25) gramos por un valor aproximado de cien (B/.100.00) balboas de droga al señor CRISTÓBAL PÉREZ, del cual según información que maneja este Despacho de manera confidencial el mismo se dedica al trasiego de drogas y su nombre completo es CRISTÓBAL JESÚS PÉREZ CORTEZ, con cédula de identidad personal 6-69-635, y es del alías `TOBITA ." (El subrayado es nuestro).

Del estudio del expediente, el Pleno de esta Corporación estima que la declaración indagatoria del señor Erides Alberto Barrios Cedeño (a) Nano (fojas 98-99), donde se señala directamente al señor CRISTÓBAL PÉREZ CORTEZ, como el vendedor de la droga, más los informes recabados por la Zona de Policía de

Herrera, que obran a fojas 126 y 127 de las sumarias y, en los que se señala específicamente que el señor Pérez (a) Tobita, era considerado una "mula" en la venta de droga, aunado al reconocimiento de éste, por el señor Erides Barrios Cedeño, dentro de la rueda de detenidos como el sujeto que le vende la droga, constituyen fuertes indicios que lo vinculan con los hechos a él imputados.

En virtud de lo antes expuesto, el Pleno de esta Corporación estima que, la detención preventiva del señor CRISTÓBAL JESÚS PÉREZ CORTEZ no ha infringido el debido proceso establecido en la Constitución Nacional y en las leyes de la República, ni tampoco las normas jurídicas que regulan la detención preventiva y por lo tanto, es procedente declarar legal dicha detención.

En consecuencia, el PLENO de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención del señor Cristóbal Jesús Pérez Cortez, y por lo tanto, dispone que el detenido sea puesto a órdenes de la Fiscalía Superior del Cuarto Distrito Judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ARSENIO DOMÍNGUEZ CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor **Carlos Caldito**, mientras se surtía el trámite correspondiente de la acción de habeas corpus por él interpuesta, a favor de **ARSENIO RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ** -la cual, para enderezar el mandamiento de habeas corpus contra el **FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA**, fue remitida por el Juzgado Tercero Municipal del Distrito de Panamá, Ramo Penal al Pleno de la Corte Suprema, mediante Resolución de 10 de enero de 1996 (fs. 11-12), por razones de competencia-, presentó en la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia escrito en el cual manifiesta su intención de desistir, "toda vez la misma se ha convertido en una situación dilatoria y que perjudica a mi familiar quien se encuentra detenido." (Ver f. 14).

Así, pues, la Corte ha sostenido que en materia de habeas corpus es factible el desistimiento, siempre y cuando quien lo manifieste sea el detenido, su defensor o la persona que interpuso la acción.

Como quiera que en el presente negocio la expresión de desistimiento proviene de la persona que interpuso la acción, el señor **Carlos Caldito**, la Corte nada tiene que objetar; y en consecuencia, procede admitir el desistimiento.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el desistimiento presentado por Carlos Caldito, dentro de la acción de habeas corpus por él interpuesta, a favor de ARSENIO RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, contra el FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA; y, en razón de esto, ORDENA el CESE del procedimiento y DISPONE el ARCHIVO del expediente.

Notifíquese, Cúmplase y Archívese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MAURICIO HERNÁNDEZ Y GABRIEL JAIME VÁSQUEZ ESCOBAR CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ingresó al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la acción de habeas corpus interpuesta por el licenciado **Mauro Octavio Pérez**, contra el **FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS**, a favor de **MAURICIO HERNÁNDEZ** y **JAIME VÁSQUEZ ESCOBAR**, detenidos en las instalaciones de la Policía Técnica Judicial.

Acogido el presente recurso se libró mandamiento de habeas corpus contra el **FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS**, Licenciado **ROSENDO MIRANDA**, quien mediante Oficio N° 10291-95 de 13 de diciembre de 1995, remite el siguiente informe:

> "A. Sí es cierto que los sindicados MAURICIO HERNÁNDEZ y GABRIEL JAIME VÁSQUEZ ESCOBAR, fueron detenido (sic) por esta agencia de instrucción y la detención se ordenó por escrito, mediante resolución de fecha 1° de noviembre de 1995.
>
> B. FUNDAMENTOS DE HECHO:
>
> Los sindicados MAURICIO HERNÁNDEZ y GABRIEL JAIME VÁSQUEZ ESCOBAR, fueron detenidos, por su presunta vinculación con un ilícito enmarcado en el Código Penal, en el Capítulo V, Título VII, del Libro II, es decir, por un delito CONTRA LA SALUD PUBLICA, relacionado con drogas, ya que la División de Narcóticos de la Policía Técnica Judicial, con el aval de esta Agencia de Instrucción, inician desde el mes de julio una investigación que se fundamenta en una serie de vigilancias y seguimientos a cierto número de personas, nacionales y extranjeros, de los que se tenía información que indicaba que los mismos, pertenecían a una organización criminal, dedicada al tráfico ilícito de sustancias narcóticas que eran trasegadas desde las costas colombianas hacia los puertos y muelles en las ciudades de Panamá y Colón, incluyendo el Club de Yates de Balboa y Cristóbal, la Isla Contadora y el Puerto pesquero de Vacamonte, para posteriormente desde estos puntos del país, enviar la sustancia ilícita hacía (sic) Estados Unidos y Europa, a través de veleros tipo 'CATAMARAN'. La información que obra en autos destaca que MAURICIO HERNÁNDEZ (a) LUCHO trabaja en asocio de EDNA CONSTANZA POLONIA (a) JUANITA, y que son miembros de una célula del Cartel de Cali ubicada en Panamá y GABRIEL JAIME VÁSQUEZ ESCOBAR, es identificado por la misma fuente como el especialista en hacer 'caletos' donde se ocultarían los alijos de sustancia ilícita. Entre las embarcaciones utilizadas se destacan S/V MARÍA DEL MAR, S/V MICHAEL ANGELO, S/V ORIENT EXPRESS y CHAMPAN. Con el desarrollo del seguimiento y vigilancia efectuado por la División de Estupefacientes de la P. T. J. a las personas antes mencionadas se demuestra que efectivamente, los prenombrados HERNÁNDEZ y VÁSQUEZ están relacionados con las embarcaciones antes

mencionadas, de lo cual hay constancias en autos, tales como fotografías y videofilmaciones, que destacan los trabajos que realizaban los sindicados dentro de las embarcaciones MARÍA DEL MAR y MICHAEL ANGELO.

Cabe destacar, que tal y como obra a fojas 11-14, con fecha de 25 de julio, obra informe de inteligencia que refiere que MAURICIO HERNÁNDEZ (a) LUCHO, trabaja en conjunto con EDNA CONSTANZA RODRÍGUEZ ESCOBAR, y su trabajo consiste en la contratación de personal encargado de la reparación y confección de los dobles fondos en las embarcaciones y GABRIEL JAIME VÁSQUEZ ESCOBAR (a) GABY es identificado como especialista en la confección de los 'caletos' en las embarcaciones utilizadas para el tráfico de drogas. A fojas 34-36 del sumario obra el informe de vigilancia de fecha 5 de septiembre de 1995, que refiere que GABRIEL JAIME VÁSQUEZ ESCOBAR, (a) GABI, es observado realizando trabajos en la embarcación ORIENT EXPRESS, lo mismo sucede al día siguiente, tal y como obra a fojas 36-37, en el que es observado en la misma tarea, en compañía de "JUANITA" y ALFREDO, ambos sindicados en la presente encuesta penal. Como evidencia adicional obra en autos las vistas fotográficas visibles a fojas 41 a 54 del sumario. A fojas 67-68 obra informe de vigilancia que refiere los vínculos de MAURICIO HERNÁNDEZ con el velero MARÍA DEL MAR, de ello existen vistas fotográficas que se aprecian a fojas 78-89 del sumario.

A fojas 100-101 obra el informe de vigilancia de fecha 30 de septiembre de 1995, en el que ya se refiere la existencia del catamaran MICHAEL ANGELO, y a fojas 102-103, con fecha de 11 de octubre de 1995, se refiere al seguimiento que se le hace a MAURICIO HERNÁNDEZ, (a) LUCHO, quien conduce un vehículo con rumbo al aeropuerto MARCOS A. GELABERT, de Paitilla, llegando a Aeroperlas, donde adquiere un boleto para el día 12 de octubre, a nombre de un sujeto de apellido HANSENBERGER. El 13 de octubre de 1995, conforme a informe de vigilancia visible a foja 104-105, del sumario, se indica que MAURICIO HERNÁNDEZ, llega al aeropuerto (sic) MARCOS A. GELABERT, en compañía de un sujeto rubio, de aspecto europeo, quienes en compañía de ALFREDO SILVA, viajan a la Isla Contadora, llevando consigo una caja de cartón forrado con cinta adhesiva. Refiere el informe en comento que 'LUCHO', MAURICIO HERNÁNDEZ y ALFREDO SILVA se dirigen al catamaran MICHAEL ANGELO.

A fojas 121-122, del sumario, se aprecia el informe de vigilancia de fecha 16 de octubre en el que se indica que el día en referencia fueron observados, en el MICHAEL ANGELO, a ALFREDO HERNÁNDEZ y una joven, acompañado por el sujeto identificado como HANSENBERGER, luego de lo cual son vistos de regreso solo ALFREDO SILVA y la joven, no así el se facciones europeas. Mas (sic) tarde son observados MAURICIO HERNÁNDEZ , (a) LUCHO, conjuntamente con ALFREDO SILVA, cuando regresaban al catamarán donde se les ve subir víveres e igualmente se les ve subir un saco de lona que aparente (sic) tener mucho peso ya que es levantado entre SILVA, HERNÁNDEZ y HANSENBERGER y colocado en dirección de los camarotes, luego de lo cual se observa que el catamarán sale con rumbo hacia el mar abierto.

Posteriormente a fojas 124-125 obra el informe de vigilancia de 19 de octubre del año en curso, que refiere los trabajos efectuados en el catamarán MICHAEL ANGELO, por GABRIEL JAIME VÁSQUEZ ESCOBAR, (a) GABY, MAURICIO HERNÁNDEZ (a) LUCHO y ALFREDO SILVA, y la salida de esta embarcación con rumbo de la isla Contadora.

En este trabajo coordinado entre este despacho y la Policía Técnica Judicial, basadas en los informes de vigilancia y seguimiento, que indicaban que el velero Tipo CATAMARAN 'MICHAEL ANGELO', con el que los sindicados VÁSQUEZ, HERNÁNDEZ y Otros, habían tenido contacto,

> había salido de aguas territoriales presumiblemente con sustancias ilícita (sic). Ello motiva a que el Ministerio Público, solicitara apoyo de la marina de los Estado Unidos, el día 25 de octubre de 1995, con el fin de abordar, la mencionada embarcación, dentro de la que se detuvo a dos ciudadanos de origen austríacos (sic) y se incautó unos dos mil (2,000) paquetes forrados con cinta adhesiva de diferentes colores, las cuales contenían en su interior una sustancia en forma de polvo de color blanco, que al efectuarle la prueba de campo, dio (sic) positivo para la determinación de COCAÍNA, los cuales estaban ocultos en 'caletos', ubicados dentro de la embarcación. Sustancia que al ser analizada por el Laboratorio Técnico Especializado en Drogas, ha certificado que dieron positivas para la determinación de COCAÍNA, en la cantidad de 2,186,445.0 Gramos.
>
> Obra en autos, la declaración indagatoria rendida por ALFREDO SILVA, quien señala que el (sic) trabajaba para MARÍA CONSTANZA RODRÍGUEZ POLONIA (a) JUANITA y MAURICIO HERNÁNDEZ, en la embarcación MARÍA DEL MAR, ORIENT EXPRESS y MICHAEL ANGELO, y que a este último GABRIEL JAIME VÁSQUEZ ESCOBAR le hizo reparaciones en la Isla Contadora, mientras que el regresaba con HERNÁNDEZ, en busca de una bomba de agua. De acuerdo a esta declaración, es el sindicado HERNÁNDEZ quien recoge a los sujetos ROGLER y JANSENBERGER quienes serían los encargados de tripular la motonave MICHAEL ANGELO. ..." (Fs. 8 a 10).

Por su parte el recurrente, Licenciado **Mauro Octavio Pérez**, argumenta que "Los señores **MAURICIO HERNÁNDEZ y GABRIEL JAIME VÁSQUEZ ESCOBAR**, se encuentran ilegalmente detenidos en la Cárcel Modelo ..." (f. 1), y señala que sus defendidos, primero fueron puestos a órdenes de la Fiscalía Auxiliar de la República por delito contra la Fe Pública, por la falsificación de unos sellos franceses, lo cual, según el recurrente, no es delito en nuestro país, y continúa señalando que el apartamento donde se encontraron los mismos es de propiedad de EDNA CONSTANZA RODRÍGUEZ POLAMBA (a) JUANITA.

Mediante el Oficio N° A. I. T-0808-95 de 23 de octubre de 1995 (fs. 341-342 del expediente), es remitido el Informe de aprehensión, suscrito por la Inspectora Gisela T. Merón, Jefe de la Agencia de Tocumen, del cual se desprende que una fuente informó que los colombianos **MAURICIO HERNÁNDEZ** y **GABRIEL JAIME VÁSQUEZ ESCOBAR** intentarían salir del país con pasaportes falsos; así, pues, éstos en actitud sospechosa llegaron juntos al aeropuerto a bordo de un vehículo Mitsubishi, color verde oscuro, matrícula N° 120751, y una vez adentro se separaron; luego fueron detenidos individualmente cuando pasaron por el control migratorio, por miembros de la Policía Técnica Judicial.

Consta en autos la transcripción del Acta de la diligencia de registro y allanamiento realizada en Punta Paitilla, Edificio Toledo, apartamento N° 11-B, ocupado por el señor de nacionalidad colombiana **MAURICIO HERNÁNDEZ** donde se encontraron los siguientes artículos:

> "1. Un pasaporte de la República de Colombia AD-008323 a nombre de MAURICIO OLEA PALLARES.
> 2. Documentos varios (Papel fax con historial de llamadas y un mensaje, y un recibo de CONAVI N° 0011049).
> 3. Un boleto usado de avión de la línea aérea AVIANCA a nombre de MAURICIO OLEA, N° 134-6284756593-4).
> 4. Un papel de color amarillo visible el número de teléfono 236-0883, y los nombres NELSON RUIZ ó ILKA DE CORDOBA.
> 5. Catorce (14) tarjetas de computadoras similares a las utilizadas en navegación marítima.
> 6. Papelería del Hotel Europa y documentos varios.
> 7. Una caja de cartón, color chocolate con las letras SILVER RED-SR-750, contentiva de documentos varios de equipo de navegación marítima.
> 8. Una tarjeta de visitante al Yacht Club de Balboa, yate MARINA DEL

MAR.
9. Una fotocopia ó carné de la delegación de Ecología de Sedue Q. Rod, a nombre de JOSÉ ENCALADA G.
10. Un cartucho de color negro, contentivo en su interior de Mapas y Cartas cartográficas para navegación." (F. 345 del expediente).

Posteriormente, de fojas 361 a 368, consta el informe de comisión de 26 de octubre de 1995, en relación con los sellos incautados en el allanamiento en el Edificio Toledo, apartamento 11-B, ocupado por **MAURICIO HERNÁNDEZ**, del cual se desprende que agentes de la P. T. J. fueron atendidos por el Cónsul de la Embajada de Francia, JEAN LOUIS VALLET, quien les detalló la función de cada sello en su país, y "... estaba extrañado del mismo ya que estos sellos no deberían estar en Panamá, ya que estos sellos son completamente restrigidos (sic) y solo lo pueden usar o tener la Dirección General de Aduanas de Francia" (f. 361-362). De la información proporcionada por el agente consular, se desprende, además, que dichos sellos se utilizan en puertos donde pasan veleros y yates, y el sello se le pone a las cargas que han pasado legalmente por la aduana, luego de verificado éste; también, pueden utilizarse para traficar motores fuera de borda ó drogas (sustancias ilícitas).

Por otro lado, sostiene el recurrente que, **MAURICIO HERNÁNDEZ** y **GABRIEL JAIME VÁSQUEZ** "... en ningún momento participaron de la preparación ni de la introducción de la droga incautada, ya que para esta fecha, tanto **MAURICIO HERNÁNDEZ** como **GABRIEL JAIME VÁSQUEZ**, se encontraban detenidos a órdenes de la Fiscalía Auxiliar de la República por una supuesta investigación contra la Fe Pública" (fs. 3-4).

En este sentido, podemos decir que si bien los colombianos **HERNÁNDEZ** y **VÁSQUEZ** se encontraban detenidos a órdenes de la Fiscalía Auxiliar de la República al momento de incautarse el cargamento dentro de la nave MICHAEL ANGELO, esto no disminuye su participación dentro de la organización criminal dedicada a actividades de narcotráfico, como se ha dejado claramente acreditado en autos. Y, por lo tanto, los señores colombianos **MAURICIO HERNÁNDEZ** y **GABRIEL JAIME VÁSQUEZ** se encuentran detenidos por su vinculación con delito contra la Salud Pública relacionado con drogas, contemplado en el Capítulo V, Título VII del Libro II del Código Penal.

En virtud de lo expuesto, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGALES las detenciones preventivas decretadas contra MAURICIO HERNÁNDEZ y GABRIEL JAIME VÁSQUEZ, ambos de nacionalidad colombiana; y, por consiguiente, ORDENA que sean filiados en el respectivo Centro Penitenciario, a órdenes de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JORGE ANTONIO HERBERT TUÑON CONTRA EL ADMINISTRADOR REGIONAL DE ADUANAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado TOMÁS A CRUZ M., actuando en representación del Sr. JORGE ANTONIO HERBERT TUÑON, ha presentado recurso de apelación contra la sentencia del Segundo Tribunal, que declara legal la detención preventiva del señor JORGE ANTONIO HERBERT TUÑON.

Recibida la acción y encontrándose el presente negocio en la etapa de resolver, se recibió escrito de DESISTIMIENTO del recurso de apelación del Habeas Corpus en la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia el día 5 de enero de 1996, y cuyo tenor es el siguiente:

"HONORABLE MAGISTRADO SUSTANCIADOR DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. E. S. D.

> Con nuestro habitual respeto y facultado para este acto, concurrimos a vuestro despacho, a fin de manifestarle que **"DESISTIMOS"** del Recurso de Apelación, formulado contra la sentencia del Segundo Tribunal, que declara legal la detención preventiva del señor JORGE ANTONIO HERBERT TUÑON.
> Desde ya solicitamos con todo respeto, que el procesado sea filiado a órdenes del Departamento de Fiscalización Aduanera, toda vez que se tramita Fianza Excarcelaria en su favor. ..."

De conformidad con el artículo 1073 del Código Judicial, si el desistimiento cumple con las formalidades de la ley, el juez debe admitirlo y dar por terminado el proceso.

> "ARTÍCULO 1073. Toda persona que haya entablado una demanda, promovido un incidente o interpuesto un recurso, puede desistir expresa o tácitamente.
>
> El desistimiento, una vez presentado al Juez es irrevocable.
>
> El demandado puede también desistir de la oposición a la demanda, caso en el cual en el cual se hace responsable a tenor de la misma, conforme ha derecho.
>
> Todo desistimiento se entiende hecho simplemente y sin condición. Si el desistimiento es condicional, han de aceptarlo todas las partes expresamente por medio de memorial".

Cumplidos con los requisitos de la ley, procede acceder a petición de desistimiento formulada.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE EL DESISTIMIENTO del recurso de Apelación presentado en representación del Señor JORGE ANTONIO HERBERT TUÑON y ordena que el mismo sea puesto a órdenes del Administrador Regional de Aduanas, Zona Oriental.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA A FAVOR DE RUFINO ANTONIO CAMARGO ALABARCA CONTRA EL FISCAL PRIMERO SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor Samuel H. Mathews, ha interpuesto acción de habeas corpus a favor del señor RUFINO ANTONIO CAMARGO ALABARCA y en contra del Fiscal Primero Superior de Panamá.

Librado el mandamiento de habeas corpus contra el Fiscal Primero Superior de Panamá mediante providencia de 4 de enero de 1996, dicho funcionario dio respuesta al mismo mediante nota fechada el 4 de enero de 1996, en los siguientes términos:

> "A. No es cierto que esta Agencia de Instrucción, ordenó la detención del señor RUFINO CAMARGO ALABARCA, la cual fue ordenada por la Fiscalía Tercera del Circuito de Colón, Área de Cristóbal, en dos resoluciones, de las cuales la primera de ellas consta a fojas 14 del cuaderno, por el delito contra la Vida e Integridad Personal (lesiones personales) la cual se encuentra calendada 27 de noviembre de 1994 y la segunda visible a fojas 27 del infolio, en la cual se decreta mantiene su detención por el delito Contra la Vida e Integridad Personal e Integridad Personal (Lesiones Personales), en perjuicio de HERBERTO CÉSAR AYARZA BOCARANDA, la cual se encuentra fechada primero (1) de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
>
> B. En la segunda resolución calendada primero (1) de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), en la cual se mantiene la detención del señor RUFINO CAMARGO ALABARCA, por el delito CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL (Lesiones Personales) está fundamentada en los siguientes hechos:
>
> "Contra el ciudadano RUFINO ANTONIO CAMARGO ALABARCA (A) LUPI, existen elementos que lo incriminan en el hecho que se investiga en el sumario que se le sigue por el supuesto delito "CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL" (LESIONES PERSONALES) toda vez que es señalado directamente por el ofendido (HERBERTO CÉSAR AYARZA BOCARANDA) como una de las personas que le hizo dos disparos cuando se encontraba herido en el suelo, después de que un sujeto apodado PABITO, lo hiriera en una de sus piernas cuando se encontraba desapartando una pelea en el cuadro de Futbol de Villa Luzmila."
>
> A su vez, ambas resoluciones, se encuentran fundamentadas legalmete en los artículos 2148 y 2159 del Libro III del Código Judicial.
>
> C. El señor RUFINO ANTONIO CAMARGO ALABARCA, se encuentra filiado a órdenes del Juzgado Tercero del Circuito de Colón, toda vez que nunca ha sido puesto a órdenes nuestras.
>
> Por lo anterior, no ha podido ser puesto por nosotros a órdenes de ninguna otra autoridad."

Por su parte, el señor Samuel H. Mathews, estima que la detención preventiva de la cual es objeto el señor RUFINO ANTONIO CAMARGO ALABARCA es ilegal, dado que no existen suficientes elementos de prueba en base al artículo 2159 del Código Judicial, aunado al hecho de que el mismo afectado manifestó quién fue la persona que le lesionara y no existe la prueba del médico forense para determinar la gravedad de la lesión.

Para resolver, el Pleno deja sentado que es competente para conocer de la presente acción de habeas corpus, toda vez que, si bien es cierto fue la Fiscalía Tercera del Circuito de Colón quien decretó la detención preventiva del señor RUFINO CAMARGO y éste se encontraba filiado a órdenes del Juzgado Tercero del Circuito de Colón, no es menos que al momento de la interposición de la presente acción, el expediente reposaba en la Fiscalía Primera Superior del Primer

Distrito Judicial que entró a conocer una solicitud de sustitución de medida cautelar presentada por el Licdo. Gaspar de Puy Barranco a favor del señor Camargo, la cual fue negada mediante resolución de 26 de diciembre de 1995.

Se trata de un proceso iniciado en virtud de una denuncia por lesiones personales interpuesta por la señora MAYRA BOCARANDA DE RIASCO que reposa de foja 3 a 5 de las sumarias. En dicha denuncia la señora Bocaranda de Riasco sostiene que su hijo, HEBERTO C. AYARZA de 15 años de edad, fue herido con arma de fuego por dos sujetos conocidos como PABITO y LUPI. Los hechos antes denunciados son corroborados por el ofendido Herberto C. Ayarza, en la declaración jurada que rindiera ante la Policía Técnica Judicial el día 27 de noviembre de 1994 que reposa de fojas 6 a 8 de las sumarias, no obstante, en ella destaca, "PABITO, me hirió ya que como su primo hera (Sic) el que estaba peleando o sea BALA, éste pensó que lo agarré para que le pegaran, cosa que no fue así, ya que sólo quería desapartar la pelea, entonces como PABITO, LUPI Y JAIME AVILA, todos estaban juntos me agredieron por el hecho de desapartar la pelea". (Subrayado de la Corte).

Observa igualmente el Pleno, que mediante resolución de 27 de noviembre de 1994, la Fiscalía Tercera del Circuito de Colón comisiona a la Oficial Mayor de su despacho para actúe en funciones de agente especial y ordena la practicara de una diligencia de allanamiento en la Barriada La Verbena N° 1, casa ubicada detrás de la Junta Comunal en la casa de la familia Camargo. La Oficial Mayor en función de Agente Especial, conjuntamente con los testigos actuarios, rindieron el informe de allanamiento, inspección ocular y decomiso, visible a foja 20 de las sumarias que es del tenor siguiente:

> "En la ciudad de Colón, siendo las nueve y quince de la mañana (9:15 a. m.) del día de hoy, domingo veintisiete (27) de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), la suscrita oficial mayor CRISTINA MODELO VEGA, actuando en función de agente especial, tal como lo dispone el artículo 394 del Código Judicial, tal como fue nombrada en compañía de la Oficial escribiente MARITZA DE MARTÍNEZ como secretaria ad-hoc, nos trasladamos a la Barriada La Verbena sector N° 1, casa A19, con la finalidad de realizar Diligencia de Inspección Ocular, allanamiento y decomiso mediante proveído dictado en esta misma fecha, donde fuimos recibidos por la señora ANTONIA ALABARCA VIUDA DE CAMARGO, dueña de la residencia, a quien le explicamos el motivo de nuestra presencia, accediendo la misma a que se practicara dicha diligencia, quien nos explicó que vive en esa casa con sus cuatro hijos, al revisar la casa no encontramos objetos de dudosa procedencia, pero se encontraban los jóvenes FÉLIX CAMARGO ALABARCA (A) JUNIER, RUFINO ANTONIO CAMARGO ALABARCA (A) LUPI, PATROCINIO CAMARGO ALABARCA (A) PATRO, hijos de la señora dueña de la casa, además del joven JAIME AVILA, quienes fueron conducidos a la PTJ para investigación, ya que supuestamente guarda relación con una denuncia presentada en la PTJ. Como testigos actuarios se encuentran los detectives JOHN NASSUN con placa 1084 y MAURICIO HUNTE con placa N° 11207 ..."

Consta en las sumarias una orden de detención escrita fechada el 27 de noviembre de 1994 que es visible a foja 14 y es expedida por autoridad competente como lo es el Fiscal Tercero del Circuito Judicial de Colón. Igualmente aparece a foja 27 del mismo infolio, la resolución fechada el 1 de diciembre de 1994 en la que se decreta que se mantiene la detención por el delito Contra la Vida e Integridad Personal (Lesiones Personales) en perjuicio de HERBERTO CESAR AYARZA BOCARANDA.

Aunado a lo anterior, también observa el Pleno que a foja 41 del expediente, aparece el informe médico legal fechado el 13 de diciembre de 1994, en el que se certifica que el joven Herbeto C. Ayarza presenta "cicatriz redonda, de más o menos 1cm. de diámetro, en cara interna del tercio proximal del muslo izquierdo y se palpa proyectil en cara externa un poco más abajo. No obstante lo anterior, dicho informe señala que la incapacidad a consecuencia de las heridas producidas es de 18 días a partir de la fecha del incidente.

Del estudio del expediente, el Pleno de esta Corporación de Justicia arriba a la conclusión que la detención preventiva de la cual es objeto el señor Rufino Antonio Camargo Alabarca es ilegal. Lo anterior es así, pues, del informe médico legal se infiere que la incapacidad otorgada al joven Herberto Ayarza fue de 18 días, y en relación a ello, observa el Pleno, que el Código Penal en caso de lesiones personales en general, siempre que no causen la muerte de una persona, no prevé pena mínima dos años de prisión. Finalmente, en cuanto a la tentativa de homicidio, estima el Pleno que no estamos en presencia de ella, toda vez que como se dejó anotado en líneas anteriores, la situación que se ventila fue producto de una riña tumultuaria, y no se evidencia dentro del expediente, una intención real y directa por parte del agente de segarle la vida al ofendido HEBERTO AYARZA.

En virtud de lo anterior, estima el Pleno que la detención preventiva de la cual es objeto el señor Rufino Camargo es ilegal, dado que no se ajusta con lo previsto en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA ILEGAL la detención preventiva de la cual es objeto el señor RUFINO ANTONIO CAMARGO ALABARCA y, por tanto ORDENA SU LIBERTAD si no existe otra causa penal en su contra.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DE RIGOBERTO FRÍAS CALDERÓN EN CONTRA DEL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor **WALDO SUÁREZ R.** ha presentado ante esta Superioridad, acción de habeas corpus a favor de **RIGOBERTO FRÍAS CALDERÓN**, contra la Agencia Regional de Drogas de Herrera y Los Santos, por considerar que la privación de libertad que sufre el prenombrado, es ilegal.

Una vez acogida la acción mediante providencia fechada 27 de diciembre de 1995, se libró el mandamiento de Habeas Corpus respectivo, el cual fue contestado por el señor Fiscal Primero Superior Encargado del Cuarto Distrito Judicial mediante oficio N° 1079 de 29 de diciembre de 1995, cuyos párrafos pertinentes reproducimos a continuación:

> "Los motivos de hecho que originaron la detención del precitado FRÍAS CALDERÓN, tiene su génesis en el operativo llevado a cabo por unidades de la Dirección de Fiscalización Aduanera del Ministerio de Hacienda y Tesoro (Dirección General de Aduanas), en el lugar conocido como la "Y" de Divisa, en donde se logró ocupar en el microbús con matrícula 946917, número 23 de la ruta Aguadulce-Santiago, cuatro (4) carrizos plásticos trasparentes los cuales en la prueba de campo dio resultado positivo para la presencia de droga (cocaína).
>
> Al iniciar la investigación correspondiente se le recibió declaración indagatoria al señor FELIPE RAMOS ARENAS, quien de manera

directa formuló cargos contra el señor RIGOBERTO FRÍAS como la persona que pusiera en el bus requisado la droga arriba indicada.

Posteriormente se le tomó declaración indagatoria y ampliación de la misma a la joven YAMILETH MARLENE HERNÁNDEZ LUNA, quien de igual forma formuló cargos en contra del señor RIGOBERTO FRÍAS como la persona que mandara a poner la droga encontrada en el microbús número 23 ya señalado.

En vista de tal situación y tomando en consideración que nos encontramos ante el delito de tráfico de drogas ya que la misma era transportada en un vehículo de transporte colectivo y el lugar donde fue detenido es un lugar de tránsito público, nos llevó en base a lo indicado en el Texto Único refundido de las leyes 23 de 30 de diciembre de 1986 y 13 de 27 de julio de 1994 así como los Artículos 2147, 2148 y 2159 del Código Judicial a decretar la inmediata privación preventiva de la libertad del señor FRÍAS CALDERÓN."

ANTECEDENTES

Esta Superioridad procede al análisis de las constancias procesales contenidas en el cuadernillo de instrucción remitido por el Ministerio Público, en vías de determinar si la medida cautelar personal aplicada al señor **RIGOBERTO FRÍAS** se ha dado con la pretermisión de los requisitos constitucionales y legales establecidos para la detención preventiva, o si por el contrario, la misma se ajusta enteramente a las exigencias legales correspondientes.

La encuesta penal que mantiene privado de libertad al ciudadano **RIGOBERTO FRÍAS** tiene su origen en la resolución fechada 23 de diciembre de 1995 (visible a folio 7 del sumario), mediante la cual la fiscalía Primera Superior del Cuarto Distrito Judicial aprehende el conocimiento de las sumarias por supuesto delito contra la salud pública, en el que se encontraba presuntamente implicado, entre otros, el señor **FRÍAS CALDERÓN.**

Según se desprende de los elementos que reposan en autos, el día en comento fue recibida en la Agencia de Aduanas de la Zona Central y Azuero información confidencial en el sentido de que cierto autobús de transporte colectivo cuya ruta comprende las ciudades de Aguadulce-Santiago que circularía en esa fecha, transportaba sustancias ilícitas, mismas que serían distribuidas en un Centro Universitario de la Provincia de Veraguas.

En la fecha referida, miembros de la Policía Nacional, departamento de Tránsito de Divisa, interceptaron un microbús con matrícula N° 946917, siendo que al procederse al registro del mismo se detecta en la parte trasera del asiento del conductor la existencia de cuatro carrizos plásticos transparentes contentivos de cierta sustancia blanca que se presumió droga: COCAÍNA. La prueba de campo efectuada arrojó resultados positivos en el sentido de que las sustancias eran la droga conocida como Cocaína.

Al ser cuestionado sobre la procedencia de las sustancias, el conductor del vehículo señor FELIPE RAMOS, negó de manera categórica su vinculación con lo incautado. El prenombrado refirió que sólo dos pasajeros ocuparon el microbús en el trayecto recorrido; que una de esas personas era su acompañante YAMILETH HERNÁNDEZ y la otra fue un sujeto que había abordado y abandonado el autobús de manera sospechosa, conectándolo con la presencia de la droga en el mismo, pero señalando que el verdadero propietario de las sustancias era el señor **RIGOBERTO FRÍAS** quien las habría mandado a colocar en el vehículo con el fin expreso de perjudicar al conductor por problemas personales que se venían presentando en los días que antecedieron a los hechos. La señorita YAMILETH HERNÁNDEZ, podría servir como testigo de estas circunstancias.

Las tres personas antes mencionadas fueron llamadas a rendir declaración indagatoria, diligencia en que el señor **RAMOS**, tal como queda expuesto, vincula de manera directa a **RIGOBERTO FRÍAS CALDERÓN** con las sustancias incautadas, declaración que ratifica íntegramente con posterioridad. (Cfr. folios 10-15 de

las sumarias).

Al ser llamado a rendir indagatoria, **RIGOBERTO FRÍAS CALDERÓN** niega su vinculación con el ilícito, manifestando en lo medular que no tenía razones personales para involucrar a FELIPE RAMOS ni a YAMILETH HERNÁNDEZ con sustancias ilícitas, y que no es responsable por las mismas (fs. 17-223).

Por su parte, YAMILETH HERNÁNDEZ rinde indagatoria que obra a fojas 26-32 del cuaderno de instrucción, y en su deposición contradice la declaración de **RIGOBERTO FRÍAS**, manifestando que éste venía acosándola desde hace cierto tiempo, le había robado dinero, perseguido, golpeado, e incluso abusado sexualmente. De igual forma señala que este señor había amenazado la vida de FELIPE RAMOS (el conductor del microbús) insistiendo en que ajustaría cuentas con éste y lograría que perdiera su trabajo de conductor.

En su extensa deposición YAMILETH HERNÁNDEZ señala que el día de los hechos un joven en actitud sospechosa insistió en abordar el autobús en que ella viajaba con el señor RAMOS, tomando asiento en el mismo sitio en que fue encontrada de manera sorpresiva la sustancia ilícita, para casi de inmediato descender del vehículo a una cortísma distancia del lugar en que lo abordara previamente, lo que les pareció sospechoso. Indica además que cuando los agentes policiales detuvieron el microbús para proceder a su revisión, el señor RAMOS en ningún momento obstaculizó la labor de la Policía, permitiendo el completo y libre acceso al vehículo, en actitud que no denotaba ningún temor.

En la ampliación de esta indagatoria, la señora YAMILETH vincula nuevamente a **RIGOBERTO FRÍAS CALDERÓN** con las sustancias ilícitas ocupadas, manifestando que ella fue testigo de las amenazas proferidas por **RIGOBERTO FRÍAS** contra FELIPE RAMOS, por lo que es evidente el interés que tenía de perjudicarlo, y bien pudo arreglar la colocación de las mismas en el vehículo de transporte colectivo.

No fueron aportados mayores detalles sobre la sustancias ilícitas que se ocuparan en el microbús en refrencia. La vinculación indiciaria de FELIPE RAMOS y YAMILETH HERNÁNDEZ surge a raíz de su presencia en el lugar en que se incauta la droga, mientras que la vinculación de **RIGOBERTO FRÍAS CALDERÓN** con el hecho delictivo investigado se origina de los cargos directos que en su contra formulara el conductor del vehículo y la señora HERNÁNDEZ, por las razones antes expuestas.

En estas circunstancias, mediante resolución de 23 de diciembre de 1995 expedida por la Fiscalía Primera Superior del Cuarto Distrito Judicial, se ordenó la detención preventiva, entre otros, de **RIGOBERTO FRÍAS CALDERÓN.**

DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE HABEAS CORPUS

Este Tribunal Colegiado considera que si bien de las piezas probatorias que reposan en el expediente se desprenden ciertos indicios que vinculan al señor **RIGOBERTO FRÍAS** con el ilícito bajo investigación, los mismos no justifican, al menos en esta etapa, la detención preventiva del favorecido por la acción de habeas corpus presentada.

Así, la disconformidad de la parte actora se centra precisamente en la supuesta ausencia de pruebas que vinculen a **RIGOBERTO FRÍAS** con el ilícito investigado.

La Corte debe recalcar que aunque sobre el imputado pesan los señalamientos de dos personas (también vinculadas al ilícito), quienes según las declaraciones que reposan en autos le conectan de manera directa, por razones de índole personal cuyos detalles se adelantaron en párrafos anteriores, con la presencia de sustancias ilícitas en el vehículo, el señor **RIGOBERTO FRÍAS** no se encontraba presente en el lugar de los hechos.

Por otra parte, si bien el detenido admite haber proferido amenazas contra la integridad personal del conductor del microbús y el deseo de perjudicarlo en su trabajo, en la indagatoria rendida niega su vinculación con la droga incauta-

da, y con excepción de los dos principales implicados, no existe evidencia objetiva o subjetiva que conecte a **FRÍAS** con el hecho punible.

Esta Superioridad, al concluir el examen de la piezas procesales también debe advertir, que la investigación del ilícito se encuentra en una fase incipiente, razón por la cual no se han incorporado a la instrucción elementos de convicción importantes que permitirían al Juzgador contar con mayores y mejores elementos de juicio en este negocio. Así, no existe referencia alguna en el sumario sobre la eventual comparecencia del sujeto que abordara el autobús, y quien según las declaraciones de RAMOS y HERNÁNDEZ colocó las sustancias ilícitas dentro del mismo, por encargo de **RIGOBERTO FRÍAS CALDERÓN**. La confirmación por parte de este sujeto de que efectivamente había colocado sustancias narcóticas en el vehículo por mandato o solicitud de **RIGOBERTO FRÍAS** sí hubiese constituido un elemento importante contra el imputado.

Sin embargo, ante el escaso caudal probatorio existente, el Pleno considera que no se justifica la medida cautelar personal ordenada, y aunque la misma fue realizada en debida forma, mediante resolución motivada y por autoridad competente, el artículo 2159 del Código Judicial contiene la exigencia de que se alleguen al expediente elementos probatorios que apunten hacia la comisión del hecho punible por parte de la persona cuya detención se ordena.

Ello no se verifica en este caso, en la medida de que si bien existen dos personas que inculpan y señalan a **RIGOBERTO FRÍAS** como responsable de las sustancias ilícitas, se trata de los otros implicados: RAMOS y HERNÁNDEZ, que fueron detenidos en el lugar de los hechos y contra quienes pesan indicios de presencia y oportunidad que no acontecen con el señor **FRÍAS**, detenido posteriormente y en área distinta al lugar en que se incauta la sustancia ilícita, quien además no se encontraba en posesión de sustancias narcóticas, dinero fraccionado u otro elemento que pudiera vincularlo con el hecho punible.

En estas circunstancias, ante la ausencia de material probatorio, la detención preventiva del imputado debe ser declarada ilegal, a lo que en efecto procede el Tribunal.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ILEGAL la detención preventiva de RIGOBERTO FRÍAS CALDERÓN y dispone que sea puesto en Iinmediata libertad de no mediar otra causa pendiente.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS MUÑOZ POPE (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) YANIXA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE HERBERT ONODERA RODRÍGUEZ CONTRA EL JUEZ SEGUNDO DE CIRCUITO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación ha sido acogido por la Corte Suprema de Justicia el Recurso de Habeas Corpus interpuesto por el Abogado RENÉ ALBERTO RODRÍGUEZ G. en representación de HERBERT ONODERA RODRÍGUEZ, contra quien se procede penalmente por la supuesta comisión de Delito contra la Salud Pública, relacionado con el

tráfico de drogas.

El Segundo Tribunal Superior de Justicia profirió sentencia fechada 21 de diciembre de 1995, mediante la cual se DECLARA LEGAL la detención de ONODERA RODRÍGUEZ y dispuso que el detenido sea puesto a órdenes de la autoridad competente.

Contra esa decisión argumenta el apelante que la privación de la libertad física de su representado, se dispuso con merma de las garantías procesales previstas en el artículo 22 de la Constitución Nacional, razón por la cual la Corte ha estimado conveniente examinar los elementos de prueba que se han incorporado a las sumarias avanzadas con el objeto de establecer la comprobación del hecho punible atribuido a ONODERA RODRÍGUEZ y la conexión que con el mismo pudiese haber tenido el sindicado.

Consta en la causa penal instruida contra ONODERA RODRÍGUEZ que su detención fue ordenada por la Fiscalía Especializada con Delitos Relacionados con Drogas y que el Juez Primero del Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá estimó que existen razones de hecho y de derecho para mantener dicha detención, en virtud de los resultados arrojados por un allanamiento legalmente practicado que condujo al hallazgo de una apreciable cantidad de sustancia, luego identificada científicamente como COCAÍNA. Las investigaciones llevadas a cabo han permitido establecer el vínculo de HERBERT ONODERA RODRÍGUEZ con parte sustancial de la droga encontrada por las autoridades, sobre todo a partir de las declaraciones rendidas por LOURDES SÁENZ CRUZ y EDELMIRA CRUZ, quienes señalan al encausado como propietario de la droga encontrada.

El Juzgado Segundo del Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, dictó auto de enjuiciamiento contra HERBERT CARLOS ONODERA RODRÍGUEZ decidiendo, en ese Auto, mantener la detención preventiva del encausado.

DECISIÓN DE LA CORTE.

Considera el Pleno de la Corte que contra HERBERT CARLOS ONODERA RODRÍGUEZ han sido acumulados elementos probatorios suficientes que justifican la orden de detención que lo mantiene privado de su libertad. Esas piezas de convicción no sólo parecen identificarlo como propietario de la droga, sino que además parecen implicarlo seriamente en la venta de esa clase de sustancia prohibida.

En cuanto a la actuación irregular que el recurrente pretende imputarle a la actuación del Juez Primero y del Juez Segundo del Circuito Penal del Primer Circuito Judicial, la Corte también coincide con la decisión del Segundo Tribunal Superior de Justicia, en el sentido de que esa conducta no es materia que debe ventilarse a través de un Recurso de Habeas Corpus, y que, en cualquier caso, no llega a configurar los supuestos que convertirían en ilegal la detención del recurrente, a la luz de lo dispuesto por el artículo 22 de la Constitución y por el artículo 2566 del Código Judicial, entre otras cosas, porque no es cierto que quien ordenara la detención (Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas) careciera de facultad para hacerlo.

Por las anteriores consideraciones, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de 21 de diciembre de 1995, dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, que declara LEGAL la detención del señor HERBERT CARLOS ONODERA RODRÍGUEZ.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ELIGIO SALAS

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ELIZABETH CÓRDOBA VÁSQUEZ CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Héctor Emilio Rodríguez Ureña interpueso acción de habeas corpus a favor de ELIZABETH CÓRDOBA VÁSQUEZ, y contra el señor Juez Décimo Segundo de Circuito Penal del Primer Distrito Judicial de Panamá. Como la detenida no está a órdenes del Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, mediante auto de 21 de diciembre de 1995, el Segundo Tribunal Superior de Justicia se declaró inhibido para conocer de la presente acción por falta de competencia, de conformidad con el artículo 2602 del Código Judicial.

Una vez ingresado el negocio al despacho de esta Superioridad, se libró el mandamiento de habeas corpus correspondiente, para que el funcionario demandado rindiera informe de conducta acerca de la orden de detención preventiva en el cual señala, que se ordenó la detención preventiva dictada contra la señora Córdoba Vásquez mediante providencia de 3 de mayo de 1995, por estar la imputada relacionada con la comisión de delito contra la Salud Pública.

En el sumario consta como elemento de prueba para la comprobación de la comisión del hecho punible la incautación de una bolsita plástica que contiene fragmentos de una sustancia compacta color crema, la cual fue arrojada, al inodoro de la residencia allanada, por la señora ELIZABETH CÓRDOBA VÁSQUEZ. Dicha sustancia fue examinada por peritos del Departamento de Criminalística del Laboratorio Técnico Especializado en Drogas de la Policía Técnica Judicial, en el cual resultó **positiva** para la determinación de **COCAÍNA (CRACK)**, en la cantidad de **25.01 gramos**. (Fs. 133 del sumario)

Entre los elementos probatorios que obran en el proceso contra la señora Córdoba Vásquez está el informe policial fechado 27 de abril de 1995 (fs. 4 del sumario), en el cual se señala que la sindicada fue reconocida por el cabo Sebastián Puertas como la persona que arrojó al inodoro de la residencia allanada la sustancia ilícita, que pesó 25.01 gramos y resultó ser cocaína (crack).

Como en el sumario instruido se investiga la comisión de un delito contra la Salud Pública, el cual está tipificado en el segundo del artículo 260 del Código Penal y es sancionado con pena de prisión de 5 a 10 años, y los elementos probatorios hasta ahora allegados al sumario vinculan a la detenida ELIZABETH CÓRDOBA VÁSQUEZ con la comisión de este delito, el Pleno considera que la detención preventiva decretada en su contra, mediante la providencia dictada el 3 de mayo de 1995, no viola en ningún modo las normas constitucionales sobre la materia y se ajusta a lo preceptuado en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

En mérito de lo expuesto, el PLENO de la Corte Suprema, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva de la señora ELIZABETH CÓRDOBA VÁSQUEZ decretada por el señor Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas mediante providencia de 3 de mayo de 1995 por el delito contra la Salud Pública que se investiga, y ORDENA que la misma sea puesta nuevamente a órdenes de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) CARLOS MUÑOZ POPE
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EMILI SMITH MATHEWS CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor Emilio Smith Mathews a interpuesto a su favor ante esta Corporación de Justicia, acción de habeas corpus contra el señor Fiscal Auxiliar de la República.

Acogido el recurso y librado el mandamiento de Habeas Corpus, el funcionario demandado rindió el informe que se le solicitó por medio del Oficio No. 0492 de 11 de enero de 1995. En el mencionado informe el licenciado Carlos Augusto Herrera, Fiscal Auxiliar de la República de Panamá, expresó lo siguiente:

> "Con relación de darle respuesta a mandamiento de Habeas Corpus librado en contra del suscrito y en favor de EMILIO SMITH MATHEWS, informo a usted, que el expediente fue enviado a la Fiscalía Segunda del Circuito de Panamá, mediante el Oficio N° 3253, el 8 de septiembre de 1995"

Como el detenido ha sido puesto a órdenes de la Fiscalía Segunda del Circuito de Panamá, tal como consta en el informe anterior, el Pleno de la Corte Suprema carece de competencia para conocer del presente proceso de habeas corpus y debe declinar su conocimiento al Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, de conformidad con los artículos 2602, numeral 2 y 2588 del Código Judicial.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLINA el conocimiento de la presente acción de Habeas Corpus en el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR MANUEL ANTONIO SIMANCA CONTRA EL ADMINISTRADOR REGIONAL DE ADUANAS, ZONA ORIENTAL, JOSÉ LUIS NAVARRO GUEVARA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

EL licenciado RAÚL CASTILLO SANJUR, presentó acción de Habeas Corpus a favor del señor MANUEL ANTONIO SIMANCA DELGADO, por considerar que la detención de su patrocinado es ilegal.

Acogida la acción de Habeas Corpus, el Administrador Regional de Aduana, Zona Oriental, contestó el mandamiento de la siguiente manera:

"...

Honorable Magistrado:

Con todo respeto y de acuerdo al Proveído fechado 10 de enero de 1996, emitido por esa superioridad, por medio del cual se acoge el Recurso de Habeas Corpus interpuesto a favor de MANUEL ANTONIO SIMANCA contra el Administrador Regional de Aduanas, Zona Oriental, JOSÉ LUIS NAVARRO GUEVARA y solicita que se rinda un informe a partir de la notificación de dicho Proveído.

Al respecto, tenemos a bien indicarle lo siguiente de acuerdo al cuestionario adjunto:

A. Si es cierto que se ordenó la detención de MANUEL ANTONIO SIMANCA. Dicha orden fue expedida por el Administrador Regional de Aduanas, Zona Oriental, mediante Providencia N° Al-ARA-060 de fecha 28 de diciembre de 1995.

B. En cuanto a los motivos y fundamentos de hecho y de derecho que se tuvo para ello; veamos:

Inicia la diligencia de investigación el Acta de Proceso N° 0407 de 26 de diciembre de 1995 sobre el Formulario de Ley 26 N° 1539544 del 5 de diciembre de 1995 y el Manifiesto de Carga N° 484 de 5 de diciembre de 1995 de la Sociedad TERAGLIA, S. A., se ampara así cierta cantidad de mercancía variada con valor según factura de B/.13,175.20.

Que dicha mercancía fue transportada en el camión marca Mack, año 1984, con Placa N° 661464 de Transporte Yoli el cual era conducido por Manuel Simanca, cedulado N° 3-53-950, quien no llevó la carga al Recinto de llegada, en este caso, Carga-Tocumen, ya que el formulario del Recinto de llegada no aparece, ni fue recibido por ningún Inspector de Aduana.

Según el Formulario de Transporte de Mercancía no Nacionalizada, la responsabilidad de la carga aludida es la Compañía TERAGLIA, S. A. Que la carga salió de France Field, Colón y luego de varias investigaciones se estableció que ésta nunca llegó a su destino final, presumiéndose por tanto que la mercadería se encuentra el territorio fiscal sin haber pagado los impuestos correspondientes.

Por otro lado, el Gerente General de la empresa Servicios y Trámites de Carga, S. A. (SETRACASA), según documentación del 11 de diciembre de 1995, informa que la carga de 114 bultos consignados a Martha Muñoz, con destino final Guayaquil, Ecuador que debió ser entregada en su bodega el día 5 de diciembre de 1995 no fue recibida por ningún personal de la empresa. Que según la declaración de movimiento comercial, la misma no detalla número de guía aérea, sólo establece que debió ser transportada por Transporte Yoli. O sea, que la Compañía SETRACASA certificó que dicha carga no llegó a la bodega que le maneja la carga a la Compañía aérea.

Es saludable, Honorable Magistrado Sustanciador, dejarle consignado en esta oportunidad, que la empresa denominada TERAGLIA, S. A. responsable de la carga bajo investigación es la misma compañía o empresa que mantiene otro sumario sobre otra carga en el Departamento de Fiscalización Aduanera de esta Dirección General de Aduanas. Y que así mismo la empresa denominada ILEGAL INTERNACIONAL, S. A. mantiene otro sumario en el mismo Departamento de Fiscalización Aduanera en los cuales el detenido MANUEL ANTONIO SIMANCA tiene participación o ingerencia con la carga de esas compañías.

Los apoderados Judiciales del detenido SIMANCA presentaron ante el Director General de Aduanas, solicitud sobre la libertad, mientras se aportan los documentos pertinentes en su defecto una medida cautelar distinta a la detención preventiva. Al respecto, es importante señalar que en base al Artículo 45 de la Ley 30 de 1984 se ordenó la detención preventiva del sindicado por exigir graves indicios en su contra.

En cuanto a los motivos de derecho que se tuvo para la detención preventiva de MANUEL ANTONIO SIMANCA, tenemos la Ley 16 de 29 de agosto de 1979 en sus artículos 9 y 16; Decreto Ejecutivo N° 42 del 24 de noviembre de 1983 en sus Artículos 16 y 19 y fundamentalmente en lo que establecen los Artículos 37 y 45 de la Ley 30 de 8 de noviembre de 1984 que trata sobre contrabando y defraudación aduanera.

C. Conforme a la Providencia N° AL-ARA-060 de 28 de diciembre de 1995, el sindicado MANUEL ANTONIO SIMANCA se encuentra a órdenes del Administrador Regional de Aduanas, Zona Oriental, hasta tanto consigne Fianza para obtener su libertad provisional o varíe su situación procesal que amerite dejar sin efecto la medida. Según Nota N° 710-01-699-ARAZO de 28 de diciembre de 1995, dirigida al Director General de la Cárcel Modelo, el sindicado MANUEL ANTONIO SIMANCA se encuentra detenido en ese Centro Carcelario a órdenes del suscrito.

A fecha de hoy, la instrucción sumarial se surte en el departamento de Fiscalización Aduanera, Zona Oriental, a fin de determinar el grado de responsabilidad del o los imputados.

En consecuencia, el detenido queda a órdenes de la Corte Suprema de Justicia.

Finalmente tengo a bien remitir a usted, el expediente que contiene el sumario incoado contra MARTHA MUÑOZ y MANUEL SIMANCA.

Obsérvace que el Poder Especial otorgado por el detenido Simanca, no está suscrito por los Apoderados Legales.

Del Honorable señor Magistrado,
Atentamente,

LIC. JOSÉ LUIS NAVARRO GUEVARA
Administrador Regional de
Aduanas, Zona Oriental."

El apoderado judicial del beneficiado con esta acción de habeas corpus, considera que la ilegalidad de la detención tiene lugar, entre otras cosas, porque no se ha determinado de manera precisa la comisión de un delito; y, que pese a que la resolución atacada expresa que existen graves indicios contra su defendido, no existen méritos para la medida cautelar personal, tal como lo exige el artículo 21 de nuestra Carta Magna y el cual se encuentra desarrollado en el artículo 2159 del Código Judicial. Más adelante señala que:

"...

C. La sanción no se corresponde con la medida que es impuesta.

La conducta que es investigada y tal como lo expresa la resolución recurrida puede enmarcarse dentro del delito de contrabando. De ser así según lo dispone el Artículo 24 de la Ley N° 30 de 8 de noviembre de 1984 es sancionado únicamente con una multa que asciende de una (1) a cinco (5) veces el valor de la mercancía objeto del ilícito, siempre que el valor no exceda a cien mil balboas (B/.100.000.00) que el caso sub-júdice como se estableció el valor de la mercancía apenas alcanza el valor de TRECE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON VEINTE (B/.13,175.20).

> Siendo que el único supuesto que admite una sanción de prisión en materia de contrabando se da en los casos de reincidencia, cuando además exceda de lo cien MIL BALBOAS (B/.100.000.00), lo que hace inaplicable al caso la medida impuesta de conformidad con los requerimientos del Artículos 1329 del Código Fiscal. Lo que desprende que como fuera el delito investigado no acarrea pena de prisión, mal puede sostenerse la legalidad de la Resolución impugnada.
> ..."

Encontrándose el expediente para resolver, se recibió otra solicitud de habeas corpus a favor de la misma persona y contra el mismo funcionario acusado, por lo que procede la acumulación.

Una vez analizadas las constancias procesales, la Corte advierte que se pretende con esta acción la declaratoria de ilegalidad del imputado, a quien se le vincula como el conductor del vehículo Mack en el cual se transportó gran cantidad de mercancía, con un valor declarado, según factura, de TRECE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO BALBOAS CON VEINTE CENTÉSIMOS (B/.13,175.20). Consta también en la denominada "Acta de Proceso", de la Dirección General de Aduanas, Administración Regional de Aduana N° 1, el manifiesto de carga N° 484 del 5 de diciembre de 1995 de la COMPAÑÍA TERAGLIA, S. A., que amparaba la mercancía antes indicada, no fue llevada por el imputado al recinto de llegada, en este caso, CARGA TOCUMEN, (foja 2). También se desprende de la lectura del expediente, que el destino final de la carga era a nombre de MARTHA MUÑOZ de Guayaquil, Ecuador. Como consecuencia de ello, la referida mercancía se encuentra en el territorio nacional, sin pagar los impuestos correspondientes, por tanto, procede la investigación por parte de esa institución, a fin de deslindar responsabilidad.

El caso en estudio, el delito que se persigue es el de contrabando, por tanto, es importante transcribir el artículo 24 de la Ley 30 de 1984 que regula esta materia:

> "ARTÍCULO 24. Los responsables del contrabando o defraudación aduanera serán sancionados:
>
> 1) Con multa de una (1) a cinco (5) veces el valor de la mercancía objeto del ilícito, siempre que su valor no exceda de Cien Mil Balboas.
>
> 2) Con multa de dos (2) a cinco (5) veces el valor de la mercancía objeto del ilícito si el valor de la mercancía excediese de los cien mil balboas y, además, prisión de un (1) a tres (39 años, si fuere reincidente.
>
> PARAGRAFO: Cuando el valor de la mercancía resulte inferior al valor de los impuestos de importación dejados de pagar, la multa se calculará en esos casos en base a los impuestos de importación".

Por su parte, el artículo 2148 del Código Judicial establece que:

> "ARTÍCULO 2148. Cuando se proceda por delito que tenga señalada pena mínima de dos años de prisión, o cuando el autor o partícipe ha sido sorprendido en flagrante delito, se podrá decretar su detención preventiva previo cumplimiento de las formalidades previstas en este Código ..."

Para el caso en estudio la pena de prisión se aplica para los casos de contrabando de mercancía con un valor superior a los CIEN MIL BALBOAS (B/.100.000.00). Con respecto a ello, consta en los documentos aportados al proceso que el valor de la mercancía lo constituye la suma de TRECE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO BALBOAS CON VEINTE CENTÉSIMOS (B/.13,175.20). Por otra parte, no existe constancia de que el señor SIMANCA DELGADO sea reincidente en la comisión del delito de contrabando.

En fallo proferido por esta Corporación de Justicia se mantuvo, que:

"..., la pena de prisión se aplica, en tanto que agravante punitiva, únicamente 1° en los casos de contrabando de mercancía fuere reincidente. A los fines de traer luz sobre este asunto es útil señalar que en este caso concreto a la mercancía le fue asignado un valor C. I. F. de B/.9,461.63 balboas (fs. 30 de las sumarias), mientras que en su declaración indagatoria (fs. 23-25) Carlos Eliécer Ayala, dueño de la carga y principal imputado, se refiere a la comisión de este delito afirmando que "era la primera vez", afirmación que no ha sido desvirtuada, todo lo cual excluye de manera categórica la posibilidad de que los inculpados pudieren resultar sancionados con pena de prisión o, a la luz de la interpretación manifestada en el salvamento de voto, ser objeto, precisamente, de la medida cautelar de naturaleza personal más grave, como lo es la detención preventiva ...". (Sentencia de 17 de noviembre de 1994. Ponente: Fabián A. Echevers. Registro Judicial, Noviembre, 1994, pág. 40.)

Siendo la realidad que informan, tanto el cuaderno que contiene las sumarias, así como el informe del funcionario acusado, no puede mantenerse la detención preventiva del imputado.

Por las razones expuestas, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA ILEGAL la detención preventiva del señor MANUEL ANTONIO SIMANCA DELGADO y ORDENA su inmediata libertad, de no existir otra causa penal en su contra.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE HASSAN HUSSEIN AHMAD CONTRA EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Lcdo. Félix Antinori Nieto ha interpuesto ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, acción de habeas corpus a favor del señor HASSAN HUSSEIN AHMAD contra el Director de la Policía Técnica Judicial.

Acogida la acción mediante auto de 10 de enero de 1996, se libró mandamiento de habeas corpus a cargo del Director de la Policía Técnica Judicial, a fin de que se pusiera al detenido a órdenes de esta Corporación y rindiera el informe sobre la materia a que se refiere el artículo 2582 del Código Judicial. Por su parte, Director de la Policía Técnica Judicial rindió su informe en los siguientes términos:

"1. No es cierto que hemos ordenado la detención del señor HASSAN HUSSEIN AHMAD.
2. No tiene razón de ser en base al punto anterior.
3. Tenemos bajo custodia pero a órdenes de la Fiscalía Auxiliar de la República al señor HASSAN HUSSEIN AHMAD."

Como consecuencia de lo anterior, se libró nuevamente madamiento de habeas corpus mediante providencia de 15 de enero de 1996 contra el Fiscal Auxiliar de la República, dicho funcionario rindió el informe que se solicita mediante Oficio N° 0782 de 16 de enero de 1996, en el que se señala lo siguiente:

> "Con relación de darle respuesta a mandamiento de Habeas Corpus librado en contra del suscrito y en favor de HASSAN HUSSEIN AHMAD, informo a usted que el expediente fue enviado a la Fiscalía Segunda del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante el Oficio N° 0429 el 12 de enero de 1996. El traspaso del detenido a la Modelo fue con el Oficio N° 0428, el 12 de enero de 1996."

Frente a esta situación planteada, se deduce que en el negocio sometido a consideración en esta oportunidad, la Corte Suprema carece de competencia para conocer del mismo, como quiera que según lo establece el numeral 2 del artículo 2602 del Código Judicial, los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, son competentes para conocer de la acción de habeas corpus por actos que procedan de autoridades o funcionarios con mando y jurisdicción en una provincia, lo cual es aplicable a la acción de habeas corpus que se examina, ya que según lo expresa el Fiscal Auxiliar de la República el señor HASSAN HUSSEIN AHMAD el expediente fue remitido a la Fiscalía Segunda del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Procede entonces, declinar el conocimiento de la presente acción de habeas corpus ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2588 del Código Judicial, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, SE INHIBE del conocimiento de la acción de habeas corpus presentada por el Lcdo. Félix Humberto Antinori Nieto en representación de HASSAN HUSSEIN AHMAD y DECLINA su conocimiento en el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, para que se le dé el trámite que la ley establece.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DE JORGE AYARZA DELGADO EN CONTRA DEL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **CARLOS AMEGLIO M.** se apersonó a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia con el fin de presenta de manera verbal, acción de habeas corpus a favor del señor **JORGE AYARZA DELGADO** contra el Fiscal Auxiliar de la República, por considerar que la privación de libertad que sufre el prenombrado, es ilegal.

Una vez acogida la acción mediante providencia calendada 11 de enero de 1996, se libró el mandamiento de Habeas Corpus respectivo, mismo que fue contestado por el funcionario acusado mediante Oficio N° 0578 de 12 de enero de los corrientes, en los siguientes términos:

> "No es cierto que hayamos ordenado la detención del recurrente.
> ...
> No tenemos bajo nuestra custodia u órdenes al señor **JORGE AYARZA DELGADO**, ya que mediante proveído calendado doce (12) de enero de 1996, se dispuso dejar sin efecto la aprehensión del recurrente."

Junto a la contestación pretranscrita, el Fiscal Auxiliar acompaña copia del Oficio N° 0570 de 12 de enero en el que se giran instrucciones para que se deje sin efectos la aprehensión del señor **JORGE AYARZA**. (Cfr. folio 5 del cuaderno de habeas corpus).

Como se colige de lo antes expuesto, en la actualidad, la persona en cuyo favor se ha promovido el presente habeas corpus no se encuentra privada de su libertad corporal, por lo que no tiene objeto continuar con este procedimiento.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA EL CESE DE PROCEDIMIENTO en el presente negocio y ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) YANIXA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS PREVENTIVO A FAVOR DE JOSEF MORDOK EN CONTRA DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **CÉSAR GUARDIA GONZÁLEZ** ha presentado ante esta Superioridad, acción de habeas corpus preventivo a favor de **JOSEF MORDOK** contra el Procurador General de la Nación, por considerar que la orden de privación de libertad supuestamente expedida por dicho funcionario contra el señor **MORDOK**, es ilegal.

Una vez acogida la acción y librado el mandamiento de Habeas Corpus en fecha de 4 de enero de 1996, el Procurador General de la Nación contestó el libramiento mediante memorial de 5 de enero de 1996 recibido en esa misma fecha en la Secretaría General de la Corte Suprema, en el cual señaló lo siguiente:

> "En atención al Mandamiento de Habeas Corpus librado por vuestra Honorable Corporación de Justicia, dentro del Recurso interpuesto por el licenciado César Guardia González, a favor de JOSEF MORDOK, me permito manifestarle que este despacho no ha ordenado hasta el momento la detención del prenombrado JOSEF MORDOK."

Por su parte, el proponente de la acción de habeas corpus acompaña como prueba de la existencia de la supuesta orden de detención girada contra el señor **MORDOK**, un ejemplar de un diario de circulación nacional del día 30 de diciembre de 1995, en que se hace alusión a la eventual detención de **JOSEF MORDOK**. Sin embargo, en ningún momento se señala de manera expresa que tal orden detención exista o haya sido girada por el Señor Procurador General de la Nación, mientras que el funcionario demandado, al contestar el libramiento (cfr. informe ut supra), ha negado de manera rotunda que ese despacho haya expedido orden de privación de libertad contra **JOSEF MORDOK**.

En estas circunstancias cabe advertir por tratarse de un habeas corpus preventivo, que conforme a la jurisprudencia sentada por este Tribunal en seguimiento a la Constitución y la Ley, esta acción preventiva tiene la finalidad concreta de proteger a los individuos contra amenazas comprobadas a la libertad corporal, requiriéndose por tanto que el peticionario haga constar con certeza, la existencia de un temor fundado y actual, sobre la inminente afectación a su libertad personal.

En este contexto, la Corte ha venido reiterando que la esencia del Habeas Corpus preventivo descansa:

1. la existencia de una amenaza efectiva contra la libertad corporal, **la que por su naturaleza debe constar en un mandato que ordene una detención preventiva**; y

2. que tal mandato no se haya hecho efectivo.

En el informe de conducta antes transcrito, el señor Procurador General de la Nación ha expresado de manera categórica que contra el señor **JOSEF MORDOK** no ha girado orden de detención alguna, y el actor no ha acreditado que tal orden efectivamente exista. Es al promotor de la acción preventiva a quien corresponde suministrar al Juzgador la comprobación de la existencia de la orden privativa o restrictiva de libertad, y así lo ha expresado en resoluciones de 18 de noviembre de 1991; 24 de junio de 1992; 28 de agosto de 1992; 4 de enero de 1994.

Esta exigencia se justifica en la medida de que esta acción de naturaleza constitucional, como medio defensivo, supone la existencia de una medida que efectivamente se ha dictado y que amenaza la libertad corporal de una persona, y **tal amenaza debe ser cierta**, **no presuntiva**.

En vista de lo anterior, resulta evidente la no viabilidad de la acción presentada, ante la ausencia de uno de los elementos esenciales que deben revestir la figura del Habeas Corpus preventivo.

En consecuencia, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO VIABLE la acción de Habeas Corpus Preventiva presentada en favor de JOSEF MORDOK.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EDUARDO HERRERA CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA NACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado EDILBERTO VÁSQUEZ ATENCIO, presentó demanda de habeas corpus a favor del señor EDUARDO HERRERA y en contra una orden de detención emitida por el Director de la Policía Nacional.

Observa el Pleno que en el margen superior del escrito, aparece la petición de habeas corpus a favor de otra persona, pero procedemos a darle el trámite que indica del artículo 471 del Código Judicial, dado que se desprende del contenido del mismo, que hubo equivocación por parte del accionante.

Librado el mandamiento de habeas corpus contra el Director de la Policía Nacional, dicho funcionario contestó mediante nota DAL-0048-96 del 16 de enero de 1995, lo siguiente:

"Honorable Señor Magistrado:

El que suscribe, JOSÉ LUIS SOSA, varón, panameño, con cédula de identidad personal N° 14-193, en mi condición de Director General de la Policía Nacional, con todo respeto acudo ante su digno despacho, rindiéndole el informe solicitado en atención a mandamiento de Habeas Corpus librado en mi contra, y a favor del Señor EDUARDO HERRERA.
Absuelvo el cuestionario solicitado en los términos siguientes:
A) No es cierto que haya ordenado la detención del recurrente; ni por escrito ni verbalmente.
B) Queda explicado en el literal anterior.
C) No tengo bajo mi custodia al señor EDUARDO HERRERA.
Sin más que agregar, se despide del Señor Magistrado,

Atentamente,

(fdo.) JOSÉ L. SOSA
Director General de la Policía Nacional".

No habiéndose emitido ninguna orden contra el beneficiado con el habeas corpus, y no existiendo ninguna prueba, aparte de la manifestación del amparado con el mandamiento, que autoridad alguna pretenda detenerlo, procede finalizar el procedimiento de este negocio.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA EL CESE de la acción de habeas corpus promovida por el Licenciado EDILBERTO VÁSQUEZ ATENCIO, en representación del señor EDUARDO HERRERA y en contra del Director de la Policía Nacional.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE DALYS IBETH GARCÍA CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO FÁBREGA ZARAK. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado EDILBERTO VÁSQUEZ ATENCIO, ha interpuesto acción de habeas corpus a favor DALYS IBETH GARCÍA y en contra el Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, acusada de la comisión de delito contra la salud pública.

Acogida esta acción, se libró mandamiento de habeas corpus contra el funcionario demandado, quien rindió el informe de conducta en los siguientes términos:

"...
A. La orden de detención preventiva de la señora DALYS IBETH GARCÍA,

fue decretada por este despacho el 2 de enero de mil novecientos noventa y cinco (sic) (1996).

B. Los fundamentos de hecho para ordenar la detención preventiva de DALYS IBETH GARCÍA, se centran en que el día 30 de diciembre de 1995, se ordena por este despacho allanamiento en el Corregimiento de Alcalde Díaz, sector N° 2 de la Esperanza, a quien se le había mantenido vigilancia, seguimiento revelando su vinculación con hechos ilícitos relacionados con drogas y con bandas portadoras de armas.

Al llegar a la residencia la misma estaba cerrada con una puerta de hierro, con un candado grande en la que los agentes, pudieron observar a una señora en avanzado estado de gravidez, que se dirigió a la derecha de la casa, y recogió un envoltorio entre sus dos manos y se dirigió hacía el baño, de igual forma sigue diciendo el informe de los cabos OTERO Y ÁVILA, que se pudo observar cuando la misma señora le traspasa algo de entre sus manos a un joven y el mismo se introduce hacía el interior de la casa, observándolo luego transportar vasijas llenas de agua. Se procedió a irrumpir a la fuerza, por la puerta principal ya que la prenombrada señora, se negaba a abrir la misma, siendo de todas formas la labor infructuosa, lo que motivó a irrumpir por la puerta del anexo derecho que lleva al área de la lavandería. Una vez dentro de la residencia se observó gran cantidad de agua en el piso del baño, al igual que se pudo detectar algunos cartuchitos de plástico transparente vacíos en el mismo piso. Prosiguiendo con el registro se pudo detectar en el área de la lavandería, dentro de una tubería una bolsita plástica transparente, conteniendo una gran cantidad de bolsitas de similares características dentro de ella, y en el mismo lugar se logra encontrar dos (2) ceniceros o coladores de plástico pequeños.

Acto seguido se procede a vaciar agua en la tubería del baño, lo que resultó que empujara hacía el tanque séptico seis (6) sobrecitos de plástico transparente contentivo en su interior de una sustancia en forma de polvo color blanco, un poco húmeda que se presume sea COCAÍNA. Se procedió a revisar de igual forma al menor MARCO ANTONIO CABALLERO SANTAMARÍA, de 17 años, y se le pudo detectar dentro de sus bolsillos la cantidad de dieciocho (18) dólares en billetes de un dolar ($1.00).

Cabe mencionar quea (sic) la señora DALYS GARCÍA, se le trasladó del Centro de Rehabilitación Femenino, al Centro Hospitalario del Santo Tomás, donde debió permanecer, dado su estado de gravidez, dando a luz, el día 1° de enero a un varón.

A la sustancia en cuestión se le efectuó prueba de campo resultando positivo para la sustancia ilícita llamada COCAÍNA.

Por otra parte, en el sumario existen los señalamientos directos de los agentes captores, que ligan a la prenombrada DALYS GARCÍA, con la comisión del hecho ilícito aquí investigado, además de información que se posee de que en el mismo lugar se han hecho allanamientos anteriores y se ha logrado desaparecer la sustancia ilícita, debido a la demora en entrar al lugar.

El fundamento de derecho para ordenar y mantener la detención preventiva de la señora DALIS GARCÍA, se encuentra consagrado en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

C. Actualmente a la señora DALIS GARCÍA, se encuentra en el Hospital Santo Tomás, Sala de Maternidad a nuestras órdenes, y la cual inmediatamente es puesto a órdenes de esa alta corporación.

Adjunto al presente informe le remito copias debidamente autenticadas de las sumarias debidamente autenticadas de las sumarias respectivas constantes de treinta y tres (33) fojas útiles.

De los Honorables Magistrados,
(fdo.) Licdo. ROSENDO MIRANDA
Fiscal Especial en Delitos
Relacionados con Drogas".

Es preciso indicar que, antes de entrar a resolver si la orden impugnada ha sido proferida de conformidad con las exigencias legales, el Magistrado Sustanciador, por intermedio de la Secretaría General de esta Corporación de Justicia, mediante Nota SGP-071-96 del 12 de enero de 1996, solicitó al funcionario demandado una certificación del Laboratorio Técnico Especializado, a fin de determinar la cantidad de sustancia incautada a la señora DALYS IBETH GARCÍA. En el día de hoy, 16 de enero del año en curso, la Secretaría de Drogas, informó telefónicamente a este Despacho que el peso de la droga incautada (Cocaína), era de 0.48 gramos.

En la demanda se mantiene el criterio que la detención preventiva de la señora GARCÍA es ilegal, en virtud de que la sindicada al momento de ser detenida se encontraba en estado de embarazo avanzado (8 meses), y que la misma está amparada en lo que preceptúa el artículo 2147-D del Código Judicial.

Del estudio que se hace a las constancias procesales se comprueba que la aprehensión realizada por los funcionarios de policía, se hizo dentro de los parámetros que señala el artículo 2149 del Código Judicial, al encontrarse en la residencia allanada la cantidad de seis sobrecitos plásticos transparentes, contentivo en su interior de cierta cantidad de polvo color blanco, los cuales una vez realizada la diligencia de Prueba de Campo, de fecha 2 de enero de 1996, resultó ser COCAÍNA. Posteriormente se nos informó telefónicamente que la cantidad es de 0.48 gramos, Así también consta en el informe remitido por el Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, que la señora dio a luz un niño el 1° de enero de 1996 (f. 17).

En reiterados fallos esta Superioridad ha manifestado que la acción de habeas corpus garantiza el derecho constitucional a la libertad corporal de toda persona y es procedente contra el acto de privación de libertad cuando esta emana de autoridad competente o no tiene asidero legal en las normas legales y constitucionales.

Por su parte, el artículo 2148 de la citada excerta legal, señala que la detención preventiva es procedente cuando se está frente a delitos cuya pena mínima es de dos (2) años de prisión. Por otro lado, en el primer párrafo del artículo 260 del Código Penal, se configura el delito de posesión ilícita de drogas, en el cual se señala que será sancionado con prisión de 1 a 3 años y de 50 a 250 días multa.

Del estudio de las sumarias que se le instruyen a la beneficiada con esta acción de habeas corpus, no consta que la sindicada haya sido sorprendida dedicándose a la venta de droga. Por otra parte, la cantidad de droga incautada es de 0.48 gramos. Con respecto al peso de la droga, la Corte Suprema en reiterados fallos ha mantenido que, una vez comprobado la cantidad de droga incautada sea mínima, no es legal la detención. Con respecto a ello, el apoderado judicial de la señora GARCÍA, ha aportado a la solicitud de habeas corpus los fallos del 1° de junio de 1995, bajo la ponencia del Magistrado ARTURO HOYOS; fallo del 2 de junio de 1995, bajo la ponencia de la Magistrado MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA y el fallo de 13 de junio de 1995, bajo la ponencia del Magistrado EDGARDO MOLINO MOLA, Ante tales evidencias se debe concluir que el hecho punible se ubica en el párrafo primero del artículo 260 del Código Penal, con pena de prisión de 1 a 3 años y de 50 a 250 días multa. Es obvio, pues, que la persona favorecida con la presente acción, no se encuadra dentro de los presupuestos del artículo 2148 del Código Judicial que permiten decretar la detención preventiva.

Por las razones expuestas, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA ILEGAL la detención preventiva de la señora DALYS IBETH GARCÍA y ORDENA que sea puesta inmediatamente en libertad, sino existe otra causa penal en su contra.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) CARLOS MUÑOZ POPE
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ROBERTO CEBALLOS CASTILLO, ROLANDO PELEGRÍN SANTAMARÍA, HUMBERTO DE LA ESPADA Y SIMEÓN DE LA ESPADA, CONTRA EL FISCAL PRIMERO DEL CIRCUITO DE COLÓN. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de Apelación ha ingresado a esta Corporación el expediente contentivo de la acción de habeas corpus propuesta a favor de **ROBERTO CEBALLOS CASTILLO, ROLANDO PELEGRÍN SANTAMARÍA, HUMBERTO DE LA ESPADA y SIMEÓN DE LA ESPADA** contra el Fiscal Primero de Circuito de Colón.

El Segundo Tribunal Superior mediante resolución de 27 de noviembre de 1995 (fs. 9 a 12) resolvió declarar LEGAL la detención preventiva dictada contra de los prenombrados sindicados, en base a los siguientes razonamientos:

"...
Del examen de las constancias sumariales respectivas se colige con claridad que la situación de los beneficiarios de esta demanda es la siguiente: Unidades de la Policía tuvieron conocimiento el día 24 de septiembre en horas de la mañana, que varios sujetos torturaban e intentaban secuestrar a un sujeto de nombre ALCIBIADES GONZÁLEZ, quien aparentemente se había encontrado un cargamento de varios kilos de cocaína en los montes de la comunidad de Piña, en la Costa Atlántica de Colón, con la intención manifiesta de hacerse de la droga en mención.

Al dar la voz de alerta un hermano del sujeto que intentaban hacer hablar o secuestrar, los imputados se dieron a la fuga, siendo interceptados por la Policía a la altura de un puente, procediendo estos sujetos a lanzar al agua varias armas de fuego y admitiendo, en ese instante, que pensaban despojar de la droga a GONZÁLEZ para comercializarla y resolver así algunos apuros económicos.

Con esta información, varias unidades de la Policía se internaron en la selva, en compañía de dos de los detenidos, logrando encontrar la cantidad de 75 kilos de cocaína.

RICARDO GONZÁLEZ ROBLES y ALCIBIADES GONZÁLEZ ROBLES admitieron haber encontrado la droga, por causalidad, señalando que luego de esto fueron atacados por dos grupos de personas distintos, los cuales trataban de hacerse con la droga encontrada.

Se desprende con claridad meridiana, según lo recopilado en autos hasta el momento, que los beneficiarios de esta acción constitucional se encuentran dentro del último grupo de sujetos arriba mencionados, los cuales fueron capturados en plena faena,

cuando trataban de apropiarse del cargamento de la sustancia ilícita, y no precisamente para destruirla.

Se trata de más de dos personas que se pusieron de acuerdo para tal finalidad, por lo que esta Magistratura es del criterio que, mientras no se incorporen en autos nuevos elementos de juicio que indiquen lo contrario, estamos hasta el momento en presencia de una asociación ilícita para delinquir en delitos relacionados con drogas, ya que su intención única era hacerse del cargamento ilícito para su posterior comercialización.

En lo que refiere a formalidades legales, obsérvese que la detención preventiva que guardan actualmente los señores CEBALLOS CASTILLO, PELEGRÍN SANTAMARÍA, HUMBERTO Y SIMEÓN DE LA ESPADA, fue dispuesta por autoridad competente mediante resolución escrita y motivada, con fundamento en razones de hecho y Derecho, ya explicados, por lo que ajustándose tal detención a las formalidades legales prescritas en la Constitución y la ley, procede proclamar la legalidad de tal medida, por ser acorde a Derecho y a la realidad que aflora de autos. ..." (Fs. 10 11).

Los argumentos que fundamentan la disconformidad de los apelantes con el fallo previamente citado, en síntesis, consisten (Fs. 22 a 24):

"BASAMOS NUESTRA APELACIÓN EN LOS SIGUIENTES HECHOS Y CONSIDERACIONES:

PRIMERO: Queremos notificarles honorables magistrados que componen la primera Corte Suprema de Lujo en nuestro país, con sobrada solvencia moral, honestidad y capacidad intelectual en el dominio del derecho, que fuimos detenidos sin existir motivo alguno, violándose así las garantías fundamentales que consagra nuestra Carta Magna en los artículos siguientes:

ARTÍCULO 17; fue violado directamente en vista de que no se protegieron nuestras vidas y honras, ya que fuimos cruelmente maltratados por miembros del D. I. I. P., ni se aseguraron con efectividad nuestros derechos;

ARTÍCULO 21; Este también fue violado en forma directa, ya que fuimos privado de nuestra libertad sin existir mandamiento escrito de autoridad competente;

ARTÍCULO 22; Este artículo también fue violado, ya que no se nos informó las razones de nuestra detención, ni de nuestros derechos constitucionales y legales correspondientes;

SEGUNDO: Que nos encontramos actualmente detenidos en la Cárcel Pública de Colón, a órdenes del Segundo Tribunal Superior de Justicia, desde el día 24 de septiembre de 1995, sin fundamentos legales que lo ameriten.

TERCERO: Que como se puede ver en el expediente, nosotros en ningún momento hemos aceptado ni ser dueño de la droga, mucho menos torturar e intentar secuestrar a una persona, como también es falso que formáramos una asociación ilícita para delinquir en delitos relacionados con drogas.

CUARTO: Como puede verse en foja 97 y foja 142 del expediente, se encuentran la confesión de los hermanos ALCIBIADES y RICARDO GONZÁLEZ, de ser los dueños de la droga, manifiestan posteriormente que cabeza el que era dirigente del Modesco, podría buscarle venta a la droga, al que le entregaron 5 paquetes o sea 5 kilos de cocaína para vender. En foja 143 nos encontramos que cuando al señor ALCIBIADES GONZÁLEZ, se le preguntó si reconoce la foto o la persona

que aparece en ella o sea la que aparecen en el permiso de portar arma, contestó si reconozco esa foto, la persona que aparece en esa foto es uno de los sujetos que llegaron a mi casa identificándose como policía, el tenía un chaleco que decía DIIP adelante y policía atrás, el fue uno de los sujetos que se llevo los cuatro (4) sacos que contenían veinte (20) paquetes cada uno, el tenía un arma grande, pero estoy seguro que la persona de la foto que me muestra en estos momentos corresponde a una de las personas que se llevaron los cuatro (4) sacos y que me apuntaron con sus armas, resulta que la foto que se le mostró corresponde al permiso de portar arma a nombre de RAFAEL FERNÁNDEZ ARGUDO. De las declaraciones de los hermanos GONZÁLEZ, salen a la luz varios puntos fundamentales como son los siguientes:

1. Ellos se declaran confeso de ser los dueños de la droga;

2. Que le dieron 5 (cinco) paquetes de la droga a CABEZA, para la venta;

3. Que cuando al señor ALCIBIADES, se le mostró la foto, identificó a la persona como una de las personas que llegó a su casa y se llevaron los 4 sacos;

4. Que usaban chaleco del DIIP;

5. Que las personas que los maltrataron tenían acento colombiano.

Como puede verse en las declaraciones de los hermanos GONZÁLEZ, no nos señalaban a ninguno de nosotros como partícipe de este ilícito y al momento de ser interceptados por la policía no se nos encontró ni chaleco del DIIP, ni ninguna cantidad de droga en el auto, estas declaraciones de los hermanos GONZÁLEZ nos libera de toda responsabilidad como partícipe en el caso que nos ocupa.

QUINTO: Con relación al criterio del Segundo Tribunal Superior de Justicia de declarar legal la detención preventiva para todos nosotros, no podemos admitir sus fundamentos cuando manifiesta que fuimos capturados en plena faena, cuando tratábamos de apropiarnos del cargamento de la sustancia ilícita, cosa que no es cierta, más adelante manifiesta que estamos hasta el momento en presencia de una asociación ilícita para delinquir en delitos relacionados con droga, ya que nuestra intención única era hacernos del cargamento ilícito para su posterior comercialización y termina el Honorable Tribunal su criterio manifestando que la detención preventiva que guardamos actualmente fue dispuesta por autoridad competente mediante resolución escrita y motivada, con fundamento en razones de hecho, de derecho y procede proclamar la legalidad de tal medida, por ser acorde a Derecho y a realidad que aplora(sic) en autos.

Haciendo un examen minucioso del pronunciamiento del Segundo Tribunal Superior de Justicia en su resolución del 27 de noviembre de 1995, llegamos a la conclusión que su decisión se baso en aspecto puramente subjetivo, razón por la cual no deben de tomarse en consideración, ya que no son admisible en el mundo Jurídico, por no tener fuerza probatoria."

Sostienen los recurrentes que, contrario a lo afirmado por el Tribunal de Primera Instancia, fueron privados de su libertad sin existir mandamiento escrito de autoridad competente; que no se les informó los fundamentos de su detención y que aún permanecen detenidos sin fundamento legal.

Alegan que el pronunciamiento del Tribunal Superior declarando legal la detención preventiva de todos ellos se basó en aspectos subjetivos, puesto que no fueron capturados "en plena faena", es decir, tratando de apropiarse del cargamento de drogas, y que al ser interceptados por la policía no tenían en el

auto ninguna cantidad de drogas, además, de que las declaraciones de los hermanos ALCIBIADES y RICARDO GONZÁLEZ, quienes confesaron ser los dueños de la droga, "nos liberan de toda participación en el caso que nos ocupa".

Respecto a las declaraciones de los GONZÁLEZ (fs. 97 a 143), los recurrentes destacan algunos puntos que consideran fundamentales, a saber: que se declararon confesos de ser los dueños de la droga; que le entregaron cinco paquetes (con 5 kilos) de cocaína a FELIPE ERNESTO CABEZA DIXON para la venta; que al mostrarse una foto de un permiso de portar armas a nombre de RAFAEL HERNÁNDEZ ARGUDO, se le identificó como una de las personas que llegó a su casa, con chalecos del DIIP, lo apuntó con un arma y se llevó cuatro sacos (que contenían 20 paquetes cada uno) de drogas; y, que quienes los maltrataron tenían acento colombiano.

PARA RESOLVER LA CORTE CONSIDERA:

En primer término, cabe recordar lo establecido por nuestra Carta Política en sus artículos 21, 22 y 23 ; es decir que nadie puede ser detenido sino existe motivo previamente establecido en la ley, en virtud de mandamiento escrito que cumpla con las formalidades legales expedidas por autoridad competente; además de que toda persona acusada de un delito, "tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad en juicio público".

De conformidad a lo antes señalado sobre la finalidad y procedencia de la acción de habeas corpus, el Pleno de esta Corporación estima que, contrario a lo que alegan los favorecidos con esta acción, se han cumplido los presupuestos constitucionales y legales que permiten decretar la detención preventiva contra los recurrentes. Han alegado los recurrentes argumentos que sirven de fundamento para desestimar el pronunciamiento del Segundo Tribunal Superior sobre la procedencia de la detención, tampoco es cierto que ésta se fundamente en aspectos subjetivos, sino en lo que hasta el momento consta en autos contra los imputados.

La Corte ha podido verificar, en las sumarias adjuntas al expediente contentivo de esta acción, los diferentes elementos probatorios que vinculan a HUMBERTO y SIMEÓN DE LA ESPADA, ROBERTO CEBALLOS CASTILLO, ROLANDO PELEGRÍN SANTAMARÍA con el delito imputado (contra la SALUD PÚBLICA) que se investiga. Entre éstos se resalta, en primer lugar, el informe de novedad de los agentes captores en que señalan cómo capturaron uno de los vehículos en el que, según informes, viajaban "varios sujetos que torturaron físicamente e intentaron secuestrar" a un morador de la población de Piña en Colón, a su mujer y a sus dos hijos, con la finalidad de que les entregara gran cantidad de droga (COCAÍNA) que él mantenía oculta. En ese vehículo se encontraron, entre otras cosas, armas, municiones, cinta adhesiva color negro y, siendo sus ocupantes precisamente los favorecidos con la presente acción de habeas corpus.

Conforme a lo expresado por el a-quo de fojas 79 a 84 de los antecedentes se encuentra la resolución motivada, suscrita por autoridad competente que decreta la detención preventiva de los apelantes, y esta cuenta con los elementos descritos por el artículo 2159 del Código de Procedimiento Penal, en concordancia con el artículo 2148 del mismo Código.

La Corte como tribunal de habeas corpus, en virtud de recurso de apelación, al limitarse a verificar si la orden de detención está entre "los casos y la forma que prescriben la Constitución y la Ley", ha de concluir que en este caso es así, por tanto la detención es procedente.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la resolución de 27 de noviembre de 1995 dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, que DECLARA LEGAL la detención preventiva ordenada por la Fiscal Primera del Circuito Judicial de Colón contra ROBERTO CEBALLOS CASTILLO, ROLANDO PELEGRÍN SANTAMARÍA, HUMBERTO y SIMEÓN DE LA ESPADA.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA A FAVOR DE NEFTALI PORFIRIO CÁRDENAS GUTIÉRREZ, CONTRA LA FISCAL SEGUNDA SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS E. MUÑOZ POPE. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado José del C. Murgas A. en nombre y representación de **NEFTALI PORFIRIO CÁRDENAS GUTIÉRREZ**, interpuso acción de Habeas Corpus contra la **FISCAL SEGUNDA SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL**, el día 29 de diciembre de 1995.

Encontrándose el expediente para la firma, la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, recibió el 18 de enero de 1996, escrito de desistimiento de la Acción de Habeas Corpus presentada por el licenciado José del C. Murgas A. (F. 12).

La Corte en reiterados pronunciamientos ha sostenido que es viable el desistimiento de la acción, siempre y cuando lo expresen el detenido o su apoderado legal, como es el caso que nos ocupa, es por ello que esta Corporación Judicial no tiene nada que objetar en cuanto al escrito de desistimiento presentado.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE EL DESISTIMIENTO presentado por el licenciado José del C. Murgas A., en la acción de Habeas Corpus promovida a favor del señor NEFTALI **PORFIRIO CÁRDENAS GUTIÉRREZ**.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE BORIS JESÚS FOGUEL SUENGAS CONTRA EL FISCAL PRIMERO SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS E. MUÑOZ POPE. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El 21 de diciembre de 1995, el licenciado **VICTOR JAVIER ALMENGOR**, presentó a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, acción de habeas corpus preventivo a favor de **BORIS JESÚS FOGUEL SUENGAS** y contra el Fiscal Primero Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, quien el 15 de agosto de 1995, expidió una orden de detención preventiva contra su representado.

Librado el mandamiento de habeas corpus, el Fiscal Primero Superior anotó que si bien su despacho no había ordenado la privación de libertad de BORIS FOGUEL SUENGAS, las dos resoluciones expedidas por la Fiscalía Auxiliar de la República, la primera el 15 de agosto y la segunda el 24 de agosto de 1995, se encuentran debidamente fundamentadas en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

Como quiera que el Pleno de la Corte ha tenido la oportunidad de conocer de varias acciones de habeas corpus presentadas por los distintos sindicados en el proceso penal que se instruye con motivo del secuestro y homicidio de JUAN ANTONIO BARLETTA y LORENA ANGUIZOLA DE BARLETTA, se dispuso solicitar el expediente que se levanta en su fase instructoria, a fin de analizar otros elementos de juicio que se hubiesen incorporado a partir del 8 de septiembre de 1995, fecha en la que se resolvió otro habeas corpus preventivo presentado a favor de BORIS FOGUEL SUENGAS.

Los antecedentes se recibieron el 4 de enero de 1996 y constan de cuatro tomos y 1242 folios.

Según el accionante las dos órdenes de detención de su representado son ilegales porque en autos no consta la vinculación causal de la conducta de FOGUEL SUENGAS con los delitos de secuestro, robo, asociación ilícita y homicidio, a los que se refiere la Fiscalía Auxiliar y ello es así porque durante el secuestro, robo y homicidio de los esposos BARLETTA, ni siquiera se encontraba en el país, pues él salió de Panamá con su esposa desde el 4 de agosto de 1995 con destino a Cuba y tal aserto se encuentra debidamente sustentado con las pruebas documentales de la Dirección de Migración y del Consulado de Panamá en La Habana (fs. 558-562 y 938-948).

La extensa investigación realizada hasta el presente, demuestra que otras declaraciones distintas a la de la madre de JUAN ANTONIO BARLETTA, como son las de TERESA ISABEL HERNÁNDEZ (fs. 89) quien es la dueña de la vivienda en la cual se alojaban los esposos BARLETTA antes del secuestro, JOSÉ DEL CARMEN SAAVEDRA (fs. 471-479) detenido con otras personas más, a raíz del secuestro de los esposos BARLETTA, no identifican a FOGUEL SUENGAS como partícipe en los hechos que se le imputan.

La imputación que hace la señora MARÍA TERESA MARTÍNEZ DE BARLETTA contra FOGUEL SUENGAS (fs. 161) consiste en "que era la única persona que sabía donde se encontraba" su hijo con su señora. Sin embargo, había una persona que les llevaba alimentos y según la dueña de la vivienda también los frecuentaban otras dos personas que no coinciden con la identificación de FOGUEL SUENGAS. En autos consta que una hermana de FOGUEL es la ex esposa de BARLETTA y que ambos eran amigos y se frecuentaban social y comercialmente.

La lectura de los 1242 folios que sirven de antecedente a esta acción, demuestran que se trata de un sumario de alta complejidad y que los funcionarios de instrucción además de la investigación del secuestro y homicidio de los esposos BARLETTA, también han incluido una variedad de asuntos que deben reposar en otros expedientes sobre casos de drogas, falsedad de papel moneda, hurto de automóviles entre otros. Se trata de una investigación con pluralidad de agentes y pluralidad de hechos delictivos, en los cuales FOGUEL no está vinculado ni al robo, ni al secuestro y homicidio de JUAN y LORENA BARLETTA. Lo que sí aparece en este sumario es la referencia que se hace sobre un caso de embarque de escobas con cocaína a Europa a través del taller de Chapistería denominado Taller Edward Garage y la expedición de unos cheques por varios miles de balboas que le hiciera PAUL WACHTER.

Hasta el presente BORIS JESÚS FOGUEL SUENGAS no ha comparecido a ninguna agencia del Ministerio Público y por tanto, tal como expusimos en nuestra sentencia de 8 de septiembre de 1995, se desconoce su versión directa sobre los hechos, salvo los documentos que se han aportado a través de su defensa.

Los cargos que se le hacen en las resoluciones de la Fiscalía Auxiliar consisten en que él conocía el lugar donde se encontraban secuestrados los

esposos BARLETTA y se negó a decirlo y ese silencio contribuyó al desenlace fatal. En autos consta que los señores JUAN y LORENA BARLETTA alquilaron un cuarto por el sector de Villalobos para ocultarse y evadir una orden de comparecencia ante las autoridades. Ese lugar lo conocían varias personas, entre ellas, BORIS FOGUEL. De allí, en la madrugada del 10 de agosto, fueron secuestrados y conducidos a una mansión en la barriada del nuevo Club de Golf, lugar donde aparecieron ejecutados, amordazados, con esposas en las manos y grilletes en las piernas, en estado de putrefacción avanzada. A esa fecha, FOGUEL se encontraba en La Habana, Cuba, por lo que no pudo participar materialmente en el secuestro y el homicidio. No obstante, está claramente establecido que conocía el lugar que les servía de escondite para evadir a las autoridades que los investigaban por delitos relacionados con drogas y esa conducta la tipifica el artículo 263 A del Código Penal, lo que permite sustentar la medida cautelar personal de detención preventiva.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva decretada en este caso.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE LUIS ALBERTO CHACÓN DE LEÓN CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Raúl J. Ossa interpuso ante la Corte Suprema de Justicia acción de habeas corpus a favor de LUIS ALBERTO CHACÓN DE LEÓN, quien se encuentra recluido en la Cárcel Modelo, contra el Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas.

Por admitida la presente iniciativa constitucional, se libró el mandamiento de habeas corpus contra la autoridad demandada. El funcionario de instrucción contestó mediante oficio N° 394-96 de 10 de enero del año en curso, en el que acepta haber ordenado la detención de Chacón mediante resolución de 27 de noviembre de 1995, y señala las circunstancias de hecho y de derecho que dieron lugar a la detención.

En este momento procesal corresponde determinar si la medida cautelar de carácter personal atacada cumple con los requisitos que al efecto establecen la Constitución y la ley.

La resolución de 27 de noviembre de 1995, mediante la cual se ordenó la detención de Chacón, proferida por el Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas, fundamenta la medida en el hecho de que el imputado, como custodio de la Dirección Nacional de Migración y Naturalización, coadyuvó a la evasión de los ciudadanos colombianos Eduardo Alberto Jaramillo Torres y José Guillermo López Gómez, sindicados por la comisión de delitos relacionados con drogas. Se desprende de la resolución atacada que la conducta que se le imputa a Chacón es la consagrada en el artículo 263-G del Código Penal, que a la letra dice:

> "ARTÍCULO 263 G. *El servidor público* que tenga a su cargo la investigación, juzgamiento o custodia de las personas vinculadas con los delitos tipificados en esta Ley y que oculte, altere, sustraiga o destruya rastros, pruebas o instrumentos del delito, o *procure la evasión de la persona capturada, detenida o condenada*, será sancionado de 3 a 6 años de prisión e inhabilitación para ocupar cargos públicos hasta por 20 años" (cursivas de la Corte).

La lectura de la resolución que ordena la detención permite comprobar que no cumple con la formalidad exigida por el numeral tercero del artículo 2159 del Código Judicial, el que requiere se indiquen los elementos de prueba que figuran en el proceso contra el imputado. Las comprobaciones hasta ahora hechas durante las sumarias indican más bien todo lo contrario.

La investigación en curso tiene por objeto determinar durante qué turno del día 11 de noviembre de 1995 ocurrió la evasión de Jaramillo Torres y López Gómez. Por lo que hasta ahora informan las sumarias, fue durante el turno que corría de 3:00 p. m. a 11:00 p. m., cuando el custodio Luis Paz dejó en libertad a los detenidos. Así lo afirma en su declaración indagatoria, y en la ampliación que de ella hiciera, **el inspector Arnolfo Landero Alvarado** (fs. 166-169, 170-180 respectivamente), en los siguientes términos:

> "**PREGUNTADO:** Diga el declarante en que turno se dio la libertad y quiénes estaban loborando (sic) en el turno. **CONTESTÓ:** Señor Fiscal, **en el turno de tres a once (3.00 p. m. a 11:00. p. m.)**, y laboraban mi persona, y el señor Luis Paz. ... aquí fue que me di cuenta lo sucedido (sic) a eso de las tres (3) de la tarde del día domingo y **la libertad la dio el señor LUIS PAZ, sin una autorización escrita de nadie**" (fs. 174 y 175, sumarias).

Aunado a lo anterior, aparece en las sumarias declaración jurada de Dilcia del Socorro Soto Tejada, (fs. 239 a 241), quien también se encontraba recluida en las instalaciones de la Dirección Nacional de Migración y Naturalización el día de los hechos, en la que se compromete directamente a Luis Paz como responsable de la evasión. Manifiesta esta declarante:

> "También pude apreciar que el día sábado once (11), estos sujetos **mantenían una conversación con el señor PAZ**, quien trabaja en Migración, acerca de un permiso de dos (2) horas, para que fuesen a hacer una diligencia en la calle. Recuerdo que al lugar llegó su abogado y cuando faltaban pocos minutos para las ocho (8:00) de la noche, **se les concedió el permiso**" (F. 239).

En el mismo sentido corren las declaraciones rendidas por los inspectores José María Villanueva (fs. 221-229) y Edwin Ranger Weeks (fs. 274-278), compañeros de turno de Chacón, quienes dan cuenta de que la evasión se produjo durante el turno anterior y se refieren a las circunstancias de la anotación que debía practicarse en el cierre de turno correspondiente a la evasión. Al ser preguntado Villanueva sobre el ilícito investigado manifestó:

> "cuando Yo llege (sic) a trabajar ellos no se encontraban, la lista decía que habían diez (10), procedo a contar y me doi (sic) cuenta que dentro de la celda solamente habían ocho (8), **le pregunto al inspector LUIS PAZ, que estaba de turno** por los otros dos (2) detenidos y me comunica que el señor **ORDONEL HERNÁNDEZ**, que es jefe de nosotros, le comunico (sic) que si se presentaba alguien a buscarlos **que podía entregarlos**" (Fs. 222 y 223).

El inspector Ranger también corrobora la desaparición de los colombianos durante el turno anterior:

> "al momento de Yo llegar estaba en la sala el compañero CHACÓN, al verificar el libro de novedades me percate (sic) de que el señor **CAHACON** (sic) **no había recibido el turno**, por tal razón Yo le

> pregunte (sic) porque el no había recibido el turno, **respondiendome (sic) que en la celda faltaban dos (2) detenidos** ... le pregunte (sic) al señor CHACÓN, porque el turno del señor PAZ estaba cerrado y esa anomalía no se había puesto, **el señor CHACÓN me informó que el (sic) no recibiría el turno hasta que el señor PAZ no pusiera esa anomalía en el turno de este**" (F. 275).

A foja 115 del infolio reposa la hoja de asignación de turnos, en la que consta que el día de los hechos Chacón de León tenía asignado el turno del Grupo A, de 11:00 p. m. a 7:00 a. m.

Todas estas probanzas confirman la versión suministrada por el propio Chacón, quien afirma que el día 11 de noviembre, al llegar a su lugar de trabajo, se dirigió directamente a la celda, contó los detenidos y verificó el listado de los mismos que reposa en la sala de guardia, percatándose de la ausencia de los ciudadanos colombianos, por lo que procedió a pedir explicaciones a sus compañeros de turno (f. 234 de las sumarias) negándose a recibir el turno hasta tanto se dejara constancia de la anomalía en el libro de registro de novedades.

Todos estos elementos autorizan a concluir que Chacón no se encontraba de turno ni presente cuando ocurrió el hecho ilícito, por lo que carece de fundamento el aserto de que sobre él pesan "serios indicios de presencia y oportunidad", como aparece en el informe de conducta de la autoridad demandada (f. 16, cuaderno de habeas corpus).

Por las consideraciones anteriores, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA ILEGAL la detención de Luis Alberto Chacón de León y, en consecuencia, ORDENA que el detenido sea puesto inmediatamente en libertad, si contra él no pesa ninguna otra medida de la misma índole.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO SALAS
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DE LEONARDO FABIO DUQUE EN CONTRA DEL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Procedente del Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial ingresa a esta Superioridad la acción de habeas corpus presentada por el señor **LEONARDO FABIO DUQUE** a su favor, contra del Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas, por considerar que la privación de libertad que sufre es ilegal.

Una vez acogida la acción mediante providencia fechada 10 de enero de 1996, se libró el mandamiento de Habeas Corpus respectivo, el cual fue contestado por el señor Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas mediante oficio N° 440, cuyos párrafos pertinentes reproducimos a continuación:

> "Sí es cierto que se ordenó la detención preventiva del señor LEONARDO FABIO DUQUE, la misma fue decretada mediante providencia razonada de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, calendada 30 de octubre de 1995.

Los fundamentos de hecho que tuvimos para ordenar la detención preventiva del señor LEONARDO FABIO DUQUE, se basa en el Informe de Novedad suscrito por el Sargento 2° 1477 Laureano Montero y el Sargento 2° 1276 Taurino Pinto, de la Unidad de Control de Multitudes de la Policía Nacional, en donde explican que el día 25 de abril de 1995, a la altura de calle 26 y Avenida Nacional, visualizaron a un taxi de color blanco, marca Lada, con matrícula 1790, conducido por el señor Luis Carlos Trejos Bonilla, quien forcejaba con un joven. Explican que al apersonarse al lugar, el señor Trejos les informó que a los jóvenes los había recogido por la Panadería de Curundú, pero que al observarlos por el retrovisor pasándose algo en actitud sospechosa, detuvo el vehículo, momento en que observó que los mismos arrojaban un envoltorio entre ellos, para luego arrojarlo a un herbazal. Por último refieren que se realizó una búsqueda en el lugar donde había caído el referido envoltorio, encontrando un bulto de papel periódico con 140 sustancias en forma rocosa de diferentes tamaños que presumieron se trataba de droga y que los sujetos capturados respondían a los nombres de JUAN CARLOS TORAL y LEONARDO F. DUQUE.

Para la comprobación del hecho punible investigado, tomamos como fundamento la prueba de campo practicada a las sustancias que le fueron incautadas a los sospechosos, los cuales arrojaron resultados positivos para la determinación de la droga conocida como CRACK, sin embargo, por lo confuso de la investigación y la falta de pruebas vinculantes, se dispuso tomarle declaración jurada a los sospechosos. En ese sentido rindió declaración jurada el menor Juan Carlos Toral Sánchez, quien negó tener vinculación con la sustancia incautada, al señalar que no había tirado nada.

LEONARDO FABIO DUQUE CÁCERES rindió declaración jurada indicando que lo habían detenido lejos del lugar en donde se encontró la droga y que al momento de su detención estaba solo, pero que sí estaba con su compañero.

Los agentes captores Laureano Montero Mesa y Taurino Equicio Pinto Ortega se ratificaron de su Informe de Comisión, agregando que el día de los hechos, los sospechosos negaron ser propietarios de la evidencia, pero sí existían señalamientos directos del taxista en contra de los mismos.

A la sustancia incautada se le realizó la experticia legal de rigor por parte del Laboratorio Técnico Especializado en Drogas, arrojando un peso de 50.53 gramos y resultados positivos para la determinación de Cocaína (Crack)

Finalmente, se logra ubicar al taxista Luis Carlos Trejos Bonilla, quien nos brinda luces a la investigación refiriendo que el día de los hechos, pudo observar cuando uno de los pasajeros le daba al otro un cartucho blanco y pensó que lo iban a asaltar, razón por la que detuvo el auto y se bajó apresuradamente.

Sostiene que los pasajeros se trataron de dar a la fuga, tirando un paquete a un monte, pero habían sido detenidos por miembros de la Policía, quienes lograron recuperar el paquete que contenía más de cien sustancias en forma de piedrita.

Después de aclarado el posible grado de vinculación dentro de la presente causa, se dispuso entonces detener al señor LEONARDO FABIO DUQUE, a fin de someterlo a los rigores de la indagatoria y deslindar el grado de responsabilidad que pueda tener con la sustancia ilícita incautada."

ANTECEDENTES

Esta Superioridad procede al análisis de las constancias procesales contenidas en el cuadernillo de instrucción remitido por el Ministerio Público, en vías de determinar si la medida cautelar personal aplicada al señor **LEONARDO DUQUE** se ha dado con la pretermisión de los requisitos constitucionales y legales establecidos para la detención preventiva.

Tal como se desprende del informe de actuación que antecede, la encuesta penal que mantiene privado de libertad al prenombrado ciudadano, tiene su origen en el Informe de Novedad suscrito por dos miembros de la Unidad de Control de Multitudes de la Policía Nacional, visible a folios 3-4 del cuaderno sumarial, en el cual se deja constancia de los hechos acaecidos el día 25 de abril de 1995, en momentos en que se encontraban las unidades policiales en su ronda de patrullaje, percatándose que en el interior de un vehículo de transporte colectivo (taxi) se desarrollaba un forcejeo entre conductor y el ocupante del auto, por lo que al acercarse al automóvil el conductor les manifestó que el joven que se encontraba en el interior del taxi, junto con otro que se había dado a la fuga, habían intentado sustraerle dinero, y que habían abordado el auto con un paquete contentivo de un material sospechoso, razón por la cual el conductor quiso detener el vehículo. Se señala además que el sujeto que se dio a la fuga había arrojado a un herbazal cercano el paquete en cuestión. El joven que fue capturado en ese momento dentro del vehículo, era el menor de edad JUAN TORAL.

Las unidades policiales lograron prontamente la aprehensión del segundo sujeto, identificándolo como **LEONARDO FABIO DUQUE.** Al revisar el lugar indicado por el transportista como el sitio en que se acababa de arrojar el paquete sospechoso, ubicaron un envoltorio contentivo de 140 sustancias de color amarillo, que se presumió sustancia ilícita.

La prueba de campo efectuada a la sustancia incautada, visible a folio 7 de las sumarias, resultó positiva para la determinación de la sustancia ilícita conocida como Cocaína (CRACK).

En estas circunstancias, la Fiscalía Especializada en Delitos relacionados con Drogas dispone el inicio la instrucción sumarial por tratarse de un presunto ilícito contra la salud pública (cfr. folio 6 del legajo sumarial), siendo llamados a rendir declaración jurada tanto el joven TORAL como **LEONARDO DUQUE.** En dicha diligencia, el prenombrado niega su vinculación con las sustancias incautadas, así como haber intentado asaltar al conductor del taxi que ocupaban, señalando que tal acusación había sido formulada por el taxista de manera falsa.

Reposan en el legajo sumarial las declaraciones juradas rendidas por los agentes policiales que efectuaron la detención, mismas que han ratificado en su totalidad el contenido del informe de novedad suscrito al momento de realizar la aprehensión, tal como se aprecia a fojas 10-11, 15-20 del sumario.

Por otra parte, a foja 22 del cuaderno sumarial reposa el resultado del examen pericial de la sustancia incautada efectuado por el Laboratorio Técnico Especializado en Drogas de la Policía Técnica Judicial, mismo que arrojó un resultado positivo en cuanto a que las muestras analizadas: **140 sustancias compactas de color crema** resultaron positivas para la determinación de COCAÍNA (CRACK) en la cantidad de **50.53 gramos**.

El señor LUIS CARLOS TREJOS, conductor del taxi que transportaba a los jóvenes TORAL y **LEONARDO DUQUE** ha rendido declaración jurada (f. 24-26), manifestando que el informe de novedad suscrito por los miembros de la Policía Nacional, que recoge los hechos que acontecieron el día 25 de abril de 1995, se ajusta a la verdad, en el sentido de que en tal fecha dos sujetos (identificados como TREJOS y **LEONARDO DUQUE**) abordaron su auto transportando un paquete de manera sospechosa, lo que lo llevó a abandonar el vehículo precipitadamente con el temor de ser asaltado, y pudo observar cuando el sujeto **DUQUE** arrojaba el paquete al herbazal. Continua relatando que fue gracias al auxilio de los miembros de la Policía Nacional que se encontraban en el lugar de los hechos, que ambas personas fueron detenidas y ubicado de inmediato el paquete en cuestión que resultó contentivo de gran cantidad de sustancias en forma de piedras, que se presumió en el acto, sustancia ilícita.

En vista de estas circunstancias, el Fiscal Especial en Delitos relacionados con Drogas profirió la resolución de 30 de octubre de 1995, en la cual ordena la detención preventiva de **LEONARDO FABIO DUQUE,** manifestando que de acuerdo a las piezas probatorias que reposan en la instrucción existe vinculación entre el prenombrado, y el hecho punible que se investiga. La aprehensión del señor **DUQUE** se produce el día 2 de enero de 1996 en la provincia de Chiriquí.

DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE HABEAS CORPUS

Esta Máxima Corporación Judicial una vez realizada una minuciosa disquisición de las piezas que componen esta encuesta penal, y de las circunstancias jurídicas y fácticas que rodean la detención preventiva del señor **LEONARDO DUQUE,** considera que la misma se verificó con ajuste a las formalidades contenidas en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, puesto que constan en las sumarias, elementos indiciarios que apuntan hacia la persona del señor **DUQUE** como uno de los responsables por las sustancias incautadas**: COCAÍNA** (CRACK) en la cantidad de **50,53 gramos,** distribuidos en **140 piezas o fragmentos.**

Por ende, existen en la instrucción, las piezas que legitiman la medida cautelar adoptada, al haberse comprobado:

1. **la existencia del hecho punible:** hallazgo de 140 fragmentos de cocaína (crack) arrojando un total global de 50,53 gramos de sustancia ilícita, que permite deslindar, tal como el Pleno de la Corte ha señalado en ocasiones anteriores dentro de negocios que revisten características similares al que nos ocupa, (cfr. sentencias de 2 de agosto de 1994 y de 24 de agosto de 1994, 30 de septiembre de 1994 entre otras) que el destino de la sustancia no es el consumo, por razón de la **presentación y distribución de las sustancias,** como por el hecho de que la dosis posológica de Cocaína, de conformidad con lo expresado por el Médico Forense General del Instituto de medicina Legal oscila entre los **0.2** y **0.4 gramos.**

De ello puede inferirse que la pretensión del imputado era la de suministrar en venta dichas sustancias, situación que se adecúa al segundo párrafo del tipo penal descrito en el artículo 260 del Código Penal para calificar el delito de Posesión de Drogas con fines de tráfico (venta o traspaso a cualquier título para consumo ilegal), y cuya punibilidad oscila entre 5 y 10 años de prisión;

2. **la vinculación del imputado con el hecho punible:** los informes policiales identifican positivamente a **LEONARDO FABIO DUQUE** como la persona que abandonara el taxi rápidamente, dejando en su interior al joven TORAL y al conductor del mismo, dándose a la fuga, para ser posteriormente aprehendido. También reposa en el sumario la declaración jurada del conductor del taxi, quien ha identificado a **LEONARDO DUQUE** como la persona que arrojó al herbazal el paquete contentivo de las sustancias ilícitas.

Cabe acotar que tanto el menor TORAL como **DUQUE,** al rendir declaración jurada aceptan haber abordado el vehículo, y haberlo abandonado de manera súbita. Tal actuación es explicada por **LEONARDO DUQUE,** quien efectivamente pretendió darse a la fuga, manifestando que tal reacción obedeció a que el conductor del taxi indicaba que iba a ser asaltado por ellos. Pese a que niegan su vinculación con las sustancias incautadas, los presuntos implicados se contradicen en sus declaraciones cuando son cuestionados en lo referente a de dónde venían, a dónde se dirigían y con qué fines.

Los indicios de presencia y oportunidad se presentan en este negocio de manera irrefutable, por lo que se cumple con lo previsto en el artículo 2159 del Código Judicial, en lo atinente a que la detención preventiva se sustente con la existencia de elementos probatorios que apunten hacia la comisión del hecho punible por parte de la persona cuya detención se ordena.

Es de advertir, que pese a que los hechos se suscitaron el día 25 de abril de 1995, no fue sino hasta el día 30 de octubre de ese año en que se ordenó la detención preventiva del señor **DUQUE.** Ello obedece a que la agencia instructora trató de allegar al sumario los elementos probatorios que indicaren una

vinculación más concluyente entre el señor **DUQUE** y el hecho investigado, lo que se materializó con la ratificación de los agentes captores y la declaración jurada del conductor del automóvil que transportaba a TORAL y a **LEONARDO FABIO DUQUE.**

Todo lo expuesto permite concluir que en la detención que se ataca de ilegal se encuentran claramente establecidos los elementos procesales que la legitiman: fue ordenada mediante resolución motivada, por autoridad competente, y conforme a lo previsto en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, por lo que la detención preventiva se ajusta a las exigencias constitucionales y legales correspondientes.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva del señor LEONARDO FABIO DUQUE, y ordena que el mismo sea nuevamente puesto a órdenes del Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE RODOLFO BEST LISPSITT CONTRA EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Sheila Gordón ha propuesto recurso de Habeas Corpus a favor de **RODOLFO BEST LISPSITT** quien se encuentra detenido por el supuesto delito contra la salud pública, y contra el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Una vez acogida la acción bajo estudio, el Magistrado Sustanciador libró mandamiento de habeas corpus contra el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.

El Magistrado Joaquín Ortega contestó el mandamiento en comento y señaló lo siguiente:

"A. No ordenamos la detención preventiva de **RODOLFO BEST LISPSITT.**

B. El día 5 de diciembre de 1995 el ciudadano Samuel Mathews concurrió a la Secretaría de esta Corporación de Justicia y, por escrito, interpuso acción de Habeas Corpus a favor del referido Best y contra la Juez Segunda del Circuito de Colón, Ramo Penal. Esta acción fue sustanciada por nosotros y mediante resolución de 14 de diciembre de 1995 se declaró legal la detención protestada. Igualmente se ordenó filiar el detenido a órdenes de la funcionaria acusada, lo cual se hizo mediante oficio N° 4-O. V. de 4 de enero de este año; por esta razón, el detenido Best en estos momentos no está a disposición nuestra.

Para mayor ilustración remitimos a este máximo tribunal copia autenticada de lo actuado en el Habeas Corpus arriba mencionado."

Se desprende de lo transcrito que el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial no ordenó detención alguna, sino que confirmó la legalidad de la aprehensión del señor **RODOLFO BEST LISPSITT** por parte de la Juez Segunda del Circuito de Colón, Ramo Penal, en virtud de un Habeas Corpus propuesto ante ese Tribunal enmarcado dentro de su competencia, de acuerdo al numeral 2 del artículo 2602 del Código Judicial.

Como puede observarse la parte interesada equivocó la vía judicial para que se conociese la detención de **RODOLFO BEST LISPSITT**, ya que si la parte afectada estaba inconforme con la decisión del Segundo Tribunal debió interponer recurso de apelación ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, y no presentar directamente y de manera independiente una acción de Habeas Corpus.

El artículo 2599 ibídem confirma lo que hemos señalado en líneas anteriores, por lo que transcribimos su contenido:

> "Contra la sentencia que dicte el Tribunal de Habeas Corpus, sólo cabe el recurso de apelación en el efecto suspensivo, en el caso de que se declare procedente la detención. Este recurso debe interponerse dentro de la hora siguiente a su notificación que se hará por edicto.
>
> Una vez conocida la apelación, el Tribunal de la causa enviará la alzada dentro del día siguiente a la desfijación del edicto que notifica a los interesados el ingreso del caso al superior. La autoridad o funcionario contra el cual se interpuso el recurso puede alegar dentro de este mismo plazo.
>
> El Tribunal de la alzada fallará el caso dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes con vista de los autos."

Por las anteriores consideraciones el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE la Acción de Habeas Corpus propuesta por Sheila Gordón a favor de RODOLFO BEST LISPSITT.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DE MARCELA HOMSANY EN CONTRA DEL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **RUBÉN MONCADA LUNA**, ha presentado ante esta Superioridad, acción de habeas corpus preventivo a favor de **MARCELA HOMSANY ABADI**, contra el Director de la Policía Técnica Judicial, por considerar que la orden de privación de libertad supuestamente expedida por dicho funcionario contra la prenombrada es ilegal.

Una vez acogida la acción y librado el mandamiento de Habeas Corpus en fecha de 24 de noviembre de 1995, se contestó el libramiento mediante memorial N° A. L.-1641-95 de 27 de noviembre de 1995, recibido en la Secretaría General

de la Corte Suprema el día 29 de noviembre de los corrientes, en el cual se señala lo siguiente:

> "No es cierto que hemos ordenado la detención de la señora **MARCELA HOMSANY ABADI.**
> ...
> No tenemos bajo su custodia, ni a nuestras órdenes a la señora **MARCELA HOMSANY ABADI."**

Por su parte, el promotor de la acción presentó un escrito de adición al habeas corpus, adjuntando una copia del Oficio N° 5442 firmado por el Fiscal Auxiliar de la República dirigido al Director de la Policía Técnica Judicial, en el que hacía alusión a un allanamiento efectuado el día 30 de octubre de 1995, para detener, entre otros, a **MARCELA HOMSANY.** En este oficio se hacía referencia directa a una Nota DG-4770 aparentemente suscrita por el Director de la Policía Técnica Judicial, por lo que parecía colegirse que el allanamiento había sido realizado por disposición del citado funcionario, para obtener la detención de la señora **HOMSANY.**

En estas circunstancias, y en vías de deslindar la situación que se presentaba en este negocio, esta Superioridad a través del Magistrado Sustanciador, consideró pertinente solicitar al Director de la Policía Técnica Judicial que explicara al Tribunal si efectivamente había expedido la Nota DG-4770 que aparentemente guardaba relación con la detención de **MARCELA HOMSANY**, y en caso afirmativo debería adjuntar copia de la misma y explicar las razones en que se fundaba tal actuación.

La contestación del Señor Director de la Policía Técnica Judicial se materializa a través de la Nota N° DG-208-95, cuyo texto reproducimos a continuación:

> "En respuesta a su Nota SGP-1771-95 de fecha 30 de noviembre del presente año, de acuerdo a la Providencia emitida por el Magistrado Sustanciador JUAN A. TEJADA MORA, dentro del Recurso de Habeas Corpus Preventivo, interpuesto a favor de la señora MARCELA HOMSANY, le informamos que efectivamente la Nota N° DG-4770 fue remitida a la Fiscalía Auxiliar, suscrita por el Lcdo. ANÍBAL RAMOS, Secretario General de esta Institución, cuya copia le adjuntamos.
>
> La solicitud de un Secretario, se le hizo al Señor Fiscal Auxiliar de la República, para una posible diligencia de allanamiento en el caso Homsany, en virtud de comunicación recibida del Señor Procurador General de la Nación, Licenciado JOSÉ ANTONIO SOSSA, a través del Oficio N° DPG-1675-95 de fecha 30 de noviembre (sic) de 1995, mediante el cual nos remitió el fallo del Segundo Tribunal Superior de Justicia, Resolución que ordena la detención de miembros de la familia HOMSANY ABADI."

Copia del Oficio DG-4770 de 30 de octubre de 1995 se adjunta al expediente, tal como se aprecia a folio 42 del mismo.

Posteriormente, el señor Secretario General de la Policía Técnica Judicial remite al Tribunal la Nota N° SG-222/95 de 15 de diciembre de 1995, con la cual acompaña el Oficio N° 1675-95 de 30 de octubre de 1995 suscrito por el señor Procurador General de la Nación. En este Oficio, el señor Procurador ponía en conocimiento de la Policía Técnica Judicial la expedición del fallo de 27 de octubre de 1995 del Segundo Tribunal Superior de Justicia, que ordenaba la detención de miembros de la familia Homsany, adjuntándole copia de la referida resolución judicial.

Es de advertir que este Tribunal en fecha reciente (resolución de 6 de diciembre de 1995) admitió el desistimiento presentado por el licenciado **MONCADA** dentro de una acción de habeas corpus preventiva propuesta en favor de la señora **MARCELA HOMSANY**, encausada en aquella oportunidad contra el Oficio de 30 de octubre de 1995 suscrito por el Procurador General de la Nación y dirigido al

Director de la Policía Técnica Judicial. Sin embargo, al librarse el mandamiento de habeas corpus, la autoridad demandada fue enfática al indicar que no había expedido orden de detención alguna contra la señora **MARCELA HOMSANY**, y que si bien existía una medida restrictiva de libertad contra la prenombrada que aún no se había ejecutado, la medida cautelar había sido **ordenada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial** en auto del 27 de octubre de 1995, al revocar una resolución de sobreseimiento definitivo en favor de **MARCELA HOMSANY Y OTROS** expedida por el Juzgado Cuarto de Circuito Penal dentro de las sumarias que se les siguen por los Delitos de Asociación Ilícita para Delinquir y Peculado Doloso en contra del Banco Nacional de Panamá. En esta etapa del proceso, la parte actora desistió del mismo.

La acción es incoada en esta segunda oportunidad, directamente contra el Director de la Policía Técnica Judicial quien supuestamente ordenó al Departamento de Captura, sin mandato de autoridad competente, que fuese arrestada y detenida preventivamente la señora **HOMSANY.**

Sin embargo, tal como se desprende de la documentación aportada por el propio Director de la Policía Técnica Judicial, fue el Secretario General de la institución quien el 30 de octubre de 1995 solicitó a la Fiscalía Auxiliar de la República, los servicios de un secretario para la posible realización de una diligencia de allanamiento por razón del caso HOMSANY cuyo expediente se encontraba en la Fiscalía Primera Delegada.

De la contestación remitida por el Director General de la Policía Técnica Judicial Dr. GABRIEL CASTRO se infiere que la previsión de solicitar el auxilio de un secretario obedecía a que se había proyectado, a través de la Procuraduría General de la República, la realización de un allanamiento, en vista de que el Segundo Tribunal Superior de Justicia en el fallo antes comentado había ordenado la detención de la señora **MARCELA HOMSANY.**

Del último documento adjuntado por el Secretario de la Policía Técnica Judicial visible a folios 43-44 se desprende sin embargo, que el Procurador General de la República tampoco ordenó la detención de la señora **HOMSANY**, tal lo expresó este mismo funcionario de manera enfática en la contestación del libramiento de habeas corpus anterior.

Se constata en esta segunda acción de habeas corpus que tampoco fue el Director de la Policía Técnica Judicial quien ordenó la detención preventiva de **MARCELA HOMSANY**, dado que las pruebas que se adjuntaron y las que el propio Tribunal de Habeas Corpus allegó al expediente consistente en los diversos oficios girados, sólo hacen alusión a la posible práctica de un allanamiento, mas en ningún momento disponen la detención preventiva de la ciudadana antes mencionada. Las autoridades de la Procuraduría General de la Nación, Fiscalía Auxiliar y Policía Técnica Judicial han actuado en todo caso, como auxiliares en la ejecución de lo dispuesto por el Tribunal que dispuso la detención preventiva, pero no ordenaron la medida cautelar.

Esta Corporación Judicial arriba a la conclusión, en atención a los elementos que reposan en autos, que la única orden de detención preventiva que se ha girado contra **MARCELA HOMSANY** es la que proviene del auto de enjuiciamiento dictado por el Segundo Tribunal Superior en grado de apelación, y que el propio actor acompaña a folios 1-25 del expediente.

En consecuencia, se procedió a librar mandamiento de habeas corpus contra el citado Tribunal de Justicia, que mediante Oficio N° 9-SF contesta el libramiento de habeas corpus.

Las partes más importantes del oficio en mención se reproducen de seguido:

> "Mediante resolución con fecha 27 de octubre de 1995, proferida por este Tribunal Superior, en la Sala que integran los Magistrados Wilfredo Saénz F., Andrés A. Almendral C. y Elvia M. Batista S. fue revocada la resolución proferida por el Juzgado Cuarto de Circuito, Ramo Penal, del primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá

y, en su defecto, se toman, entre otras medidas procesales, las siguientes:

A.1. Abrir causa criminal contra el señor RAFAEL AROSEMENA ALVARADO, como presunto infractor de las disposiciones legales contenidas en el Capítulo II, Título VIII, Libro Segundo del Código Penal, es decir, por los delitos genéricos de Asociación Ilícita para Delinquir y Peculado Doloso en detrimento del Banco Nacional de Panamá. Mantiene su detención preventiva y ordena la reiteración de los trámites diplomáticos necesarios a través de la Cancillería Panameña, para lograr su extradición;

A.2. Abre causa criminal contra los señores EZRA HOMSANY ABADI, **MARCELA HOMSANY ABADI**, Y SALOMÓN HOMSANY ABADI, como presuntos infractores de las disposiciones legales contenidas en el Capítulo II, Título VII, Libro II del Código penal, es decir, por los delitos de Asociación Ilícita para Delinquir y Peculado Doloso en detrimento del Banco Nacional de Panamá. Ordena la detención preventiva de ellos e impedimento de salida del país sin autorización judicial.

B. Se ordenó la detención preventiva de la Lcda. MARCELA HOMSANY, porque las piezas probatorias la vinculan como posible cómplice del delito de Peculado Doloso cometido en detrimento del Banco Nacional de Panamá. El delito de Peculado (Artículo 322 del Código Penal) permite la detención preventiva, porque la pena mínima contemplada en la norma penal que lo tipifica, no es menor de dos años de prisión y, ese tipo penal sólo exige calificación de servidor público para el sujeto activo, por tanto las otras modalidades de participación delictiva (cómplice primario o secundario, auxiliar u otras) no requiren la condición de servidor público, además concurrieron los presupuestos legales previstos en el artículo 2159 del Código Judicial para esa finalidad."

DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Esta Superioridad procede al análisis de las constancias procesales en vías de determinar si la medida cautelar personal ordenada contra la señora **MARCELA HOMSANY ABADI** se ha dado con la pretermisión de los requisitos constitucionales y legales establecidos para la detención preventiva, o si por el contrario, la misma se ajusta enteramente a las exigencias correspondientes.

La encuesta penal que se sigue a la favorecida por la acción que nos ocupa se origina en una denuncia presentada ante la Procuraduría General de la Nación por el Gerente General del Banco Nacional de Panamá, por delitos que se hubiesen cometido en perjuicio de la citada entidad bancaria por la administración anterior, con motivo de 43 facilidades crediticias concedidas a 38 compañías integrantes el Grupo **HOMSANY**, violando los procedimientos de créditos, normas de control interno y la ley orgánica de la institución. El denunciante adjuntó un informe de auditoría del Departamento de Auditoría de Crédito del Banco Nacional, que registraba como monto real de la pérdida sufrida por el banco, la suma de B/.7,012,142.95, acompañándose copias de los documentos que sustentaban la denuncia.

Las pruebas en comento planteaban la situación de que se habían aprobado sobregiros y autorizado desembolsos que rebasaban los límites de crédito permitidos por las fuentes de derecho del Gerente General del Banco Nacional para la época, señor RAFAEL AROSEMENA, utilizando como codeudores a los trabajores de las empresas de los señores **HOMSANY**, a las cuales les otorgaban los créditos, pese a ser económicamente insolventes para afrontar las elevadas sumas de esos compromisos.

La resolución que ordena la detención de **MARCELA HOMSANY ABADI** (auto de enjuiciamiento de 27 de octubre de 1995) se encuentra acopiada a folios 1-25 del cuaderno de habeas corpus. En la misma, el Segundo Tribunal Superior de Justicia, en lo referente a comprobación de la existencia de los hechos punibles

denunciados y la participación de **MARCELA HOMSANY ABADI** ha señalado:

"...
Veamos ahora, luego de este planteamiento, si en efecto fue demostrada la existencia del hecho punible a través de los medios probatorios idóneos permitidos por el artículo 2073 del Código Judicial:

Las pruebas nos indican (informes de auditoría) que a través de sobregiros aprobados a cuentas corrientes de diferentes empresas, bajo la propiedad y responsabilidad de los imputados HOMSANY, lograron sustraerle al Banco Nacional de Panamá la suma de B/.7.012.142.95 y se pretendió también ensayar la coartada de que las empresas fueron objeto de circunstancias de fuerza mayor, lo cual impidió cumplimiento de la obligación para, a su vez, comprobar que eran solventes, pero esas causa de excepción las convirtieron en imposibilitadas económicas para asumir el compromiso y, ese extremo también ha sido desestimado a través de fallos de la Sala Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, debidamente citados en el primer epígrafe de la presente decisión jurisdiccional.

Entonces tenemos que más de tres personas están vinculadas con una serie de actos sucesivos llevados a cabo en determinado tiempo, los cuales representan acuerdos previos, porque no se trata de un asunto meramente casual o momentáneo y ello configura el delito de Asociación Ilícita para Delinquir, previsto en el artículo 242 del Código Penal, contemplado en el Capítulo III, Título VII, Libro Segundo del texto legal citado y constan suficientes indicios de responsabilidad penal para vincular con este hecho punible a los señores RAFAEL AROSEMENA, quien para ese momento surgía como Gerente General del Banco Nacional, EZRA HOMSSANY ABADI, MARCELA HOMSANY ABADI Y SALOMÓN HOMSANY ABADI, porque el uno aprobaba los sobregiros en forma ilícita sin tener capacidad legal para ello, pues había una prohibición y limitación ya explicada y los otros beneficiarios de esa actividad, quienes a través de sus trabajadores, por medios de cheques girados contra cuentas corrientes con sobregiros ilícitos retiraban los fondos del banco.

Dentro de otro contexto se contempla el delito de Peculado, porque ésta es una conducta humana llevada a cabo con previsión, al menos momentánea, intención, voluntad y desarrollo de los actos idóneos, aprovechándose de la condición de servidor público con facultades de administración, percepción o custodia de los fondos del Estado para apoderarse de dineros, valores, bienes u otros objetos y, esta conducta esta tipificada en el Capítulo I, Título X, Libro Segundo del Código Penal, para referirse a la modalidad dolosa del Peculado, por consiguiente, esa es la condición del señor RAFAEL AROSEMENA, porque la prueba indiciaria indica en forma elemental que no es posible autorizar el desembolso de tanto dinero en forma ilegal sin tener un interés directo y previsión de tal conducta.

Ciertamente que el peculado exige la calidad de servidor público para cualquier concurso eventual, nos referimos a otros participantes en calidad de autores mediatos o inmediatos, pero para la condición de cómplices, no es necesario la calidad de servidor público y éstas son las personas que ofrecen un aporte a la comisión de un hecho punible de tal significado o importancia, cuando son primarios, que de no ejecutarlos no hubiese sido posible la realización del delito y ésta es la situación del los señores EZRA HOMSANY ABADI, MARCELA HOMSANY ABADI y SALOMÓN HOMSANY, con respecto a la conducta llevada a cabo por el señor AROSEMENA.
...
Debe ordenarse la detención preventiva de ... MARCELA HOMSANY ABADI ... porque concurren los presupuestos legales previstos en el artículo 2159 del Código Judicial para esa finalidad."

Como se desprende de lo transcrito, el Tribunal de la causa consideró que estaba en presencia de un número plural de transacciones realizadas entre el Gerente General con los miembros del GRUPO **HOMSANY**, en contravención de las normas que reglamentan esa entidad estatal, por la forma como fueron hechas a través de personas jurídicas insolventes, cuyos directores y dignatarios eran los empleados de **HOMSANY**, sin garantías y sin la autorización legal requerida.

Esta Corporación Judicial ha indicado que el auto de llamamiento a juicio surge como consecuencia de la valoración que el Juzgador o Tribunal realiza del sumario. Conforme al texto del artículo 2222 del Código Judicial, cuando un Tribunal recibe las diligencias o cualquier medio probatorio que ofrezca serios motivos de credibilidad conforme a las reglas de la sana crítica, y considera que hay plena prueba de la existencia del hecho punible y graves indicios contra alguna persona, declarará que hay lugar a seguimiento de causa contra ésta.

En el negocio que nos ocupa, el auto en el que se dispone el enjuiciamiento así como la detención preventiva de la señora **MARCELA HOMSANY**, ha sido dictado con fundamento en la consideración hecha por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, de la existencia del hecho punible y de la participación de la señora **HOMSANY ABADI** en los delitos de Asociación Ilícita para Delinquir y Peculado Doloso en contra del Banco Nacional de Panamá, considerando que existen elementos probatorios suficientes que demuestran su vinculación en los delitos investigados, con base en los puntos antes transcritos.

Por tratarse de infracción de normas penales sancionadas con prisión mínima que excede a los dos (2) años, el Tribunal de la causa ordenó la detención preventiva de la señora **HOMSANY**, medida cautelar que a la fecha, aún pende de ejecución.

Se colige en consecuencia, que la detención preventiva ha sido dictada de conformidad con las formalidades constitucionales y legales que regentan la materia, en resolución debidamente motivada y por un Tribunal competente.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva ordenada contra MARCELA HOMSANY ABADI por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, impugnada a través de Habeas Corpus Preventivo presentado por el licenciado RUBÉN MONCADA LUNA.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS INTERPUESTO A FAVOR DE CÉSAR HERRERA CORREA CONTRA EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Alcides Peña ha presentado acción de habeas corpus preventivo a favor de César Herrera Correa, contra el Segundo Tribunal Superior de Justicia, "quien mediante Resolución de 11 de octubre de 1995, deniega el beneficio de Libertad Caucionada, la cual fuera solicitada a favor de César Herrera Correa y para No ser Detenido" (F. 1).

Por la forma como se presenta la acción, resalta de inmediato su improcedencia. Si se sigue el señalamiento de que se trata de un habeas corpus de naturaleza preventiva, es del caso advertir que en el libelo de la acción el licenciado Peña no hace referencia a la existencia de una orden de detención decretada contra Herrera Correa, orden que, por inexistente, no puede ser acompañada, como en estos casos lo reclama la jurisprudencia sobre la materia.

En cuanto al hecho de la denegación del beneficio de libertad caucionada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, resalta igualmente la improcedencia de la vía escogida, toda vez que lo que procede en ese caso es el ejercicio del recurso de apelación, como medio ordinario de impugnación contra las resoluciones judiciales que lo admiten.

Por las consideraciones expuestas, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE la acción de habeas corpus presentada en favor de César Herrera Correa.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANSCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EVELIA RODRÍGUEZ CONTRA EL FISCAL SUPERIOR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Félix Enrique Troya Torres ha interpuesto recurso de Habeas Corpus a favor de la señora EVELIA RODRÍGUEZ y contra la Fiscal Segunda de Circuito de Veraguas.

Mediante auto de 27 de diciembre de 1995 el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial libró mandamiento de habeas corpus contra la funcionaria demandada, manifestando dicha funcionaria que la señora Evelia Rodríguez está detenida a órdenes de la Fiscalía Superior del Segundo Distrito Judicial. Por lo anterior, el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial (con sede en Penonomé), mediante providencia de 28 de diciembre de 1995 se inhibió de conocer del presente recurso de habeas corpus y remitió el proceso a esta Corporación de Justicia.

Por medio de providencia fechada el 11 de enero de 1996 se libró mandamiento de habeas corpus contra la Fiscalía Superior del Segundo Distrito Judicial y este funcionario contestó el mandamiento de habeas corpus librado mediante escrito fechado el 12 de enero de 1996, en el cual informó lo siguiente:

> "C. Queremos hacer de conocimiento de esa Superioridad que la señora EVELIA RODRIGUE, fue puesta en libertad por éste Despacho, luego de analizar las constancias procesales existentes en el expediente luego que surgiesen elementos vinculativos sobre la propiedad de las sustancias ilícitas encontradas en la persona de AMADO MUÑOZ (a) REY, quien se declaró confeso del delito investigado en su calidad de autor. Dicha libertad fue comunicada mediante telegrama No. 11 (sic) dirigido al Jefe de la Zona de Policía de Santiago Mayor PORFIRIO VELÁZQUEZ". (Fs. 24).

El Pleno observa que a foja 26 se lee el Telegrama Oficial N° 17, de 12 de enero de 1996, en el cual consta que la Fiscalía Superior del Segundo Distrito Judicial de Panamá, ordenó la libertad provisional de los señores **EVELIA RODRÍGUEZ Y CRISTIAN ALFONSO MUÑOZ**, quienes estaban detenidos a órdenes de dicho despacho.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia estima que debe ordenarse el cese de procedimiento de conformidad con el artículo 2572 del Código Judicial, ya que se ha puesto en libertad a la persona a cuyo favor se promovió la acción.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA EL CESE del procedimiento en la acción de habeas corpus promovida a favor de la señora EVELIA RODRÍGUEZ y ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JOSÉ ARÍSTIDES SOTO Y JOSÉ ALBERTO SÁNCHEZ SOTO CONTRA LA SECRETARÍA DE DROGAS DE COCLÉ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La señora Bona Soto de la Cruz interpuso acción de habeas corpus a favor de los señores JOSÉ ARÍSTIDES SÁNCHEZ SOTO y JNSÉ ALBERTO SÁNCHEZ SOTO, y contra la Secretaría de Drogas de Coclé.

Se libró el mandamiento de habeas corpus correspondiente, para que el funcionario demandado rindiera informe de conducta según lo estipulado en el artículo 2582 del Código Judicial. En su informe el funcionario demandado señaló que se ordenó la detención preventiva de los señores José Alberto Sánchez Soto y José Arístides Sánchez Soto mediante providencia de 25 de diciembre de 1995, por estar vinculados con la comisión de delito contra la Salud Pública.

En el sumario instruido contra los señores Sánchez Soto consta como elemento de prueba para la comprobación de la comisión del hecho punible la droga incautada en poder de los señores Elvis Samaniego y Sixto Coronado, el día 23 de diciembre de 1995, quienes declararon que la droga provenía de José Arístides Sánchez Soto, quien se las había entregado en presencia de su hermano José Alberto Sánchez Soto. Posteriormente en diligencia de allanamiento practicada el día 24 de diciembre de 1995 en la residencia de los señores José Arístides Sánchez Soto y José Alberto Sánchez Soto, se logró incautar "sobre la cama una agenda de JOSÉ ARISTIDES SÁNCHEZ, debajo del polifón un envoltorio en papel manila contentivo de polvo blanco, en el mismo cuarto en un hueco en la pared un papel conteniendo 34 carricitos cortados y confeccionados para su elaboración, (bosidos), un sobre de polvo de hornear, un zapato negro N° 7 de tacón marca ANDREA CA/RROSINA del pie derecho conteniendo en su interior residuo de polvo blanco, una cajeta de basido. Por las condiciones de oscuridad se solicitó el apoyo a un perro el cual anduvo toda la casa, no se encontró mas nada, luego pasamos al cuarto independiente, del cual el joven JOSÉ ALBERTO SÁNCHEZ SOTO, forzó la puerta para entrar, se encontró sobre una repisa un sobre de polvo de

hornear marca royal, y carrizos basidos (sic) y otros cortados para la elaboración. Se deja constancia que en el último cuarto se encontró una cajeta de carrizo abierta casi llena, la que se decomisa al igual, que el zapato, el polvo blanco, el polvo de hornear la agenda para la investigación". (fs. 30 del sumario).

De fojas 71 a 74 se lee el acta de la diligencia de prueba de campo practicada con las sustancias incautadas a los señores Elvis Samaniego y Sixto Coronado y con las sustancias incautadas en el allanamiento. Los resultados de esta prueba de campo se determinó que la droga incautada a Elvis Samaniego y Sixto Coronado es **COCAÍNA** y parte de las sustancias incautadas en la residencia de los hermanos Sánchez Soto también es **COCAÍNA**. (cfr. fojas 73 y 74 del sumario).

Entre los elementos probatorios que obran en el proceso contra los imputados están los informes de novedad N° 614 y 617 de 23 de diciembre de 1995, en los cuales se explica la forma en que fueron detenidos los señores Elvis Samaniego y Sixto Coronado en posesión de sustancia ilícita; la diligencia de allanamiento de la residencia permanente de los señores José Arístides Sánchez Soto y José Alberto Sánchez Soto donde se encontró sustancias ilícitas. Además, en sus declaraciones indagatorias rendidas los señores Elvis Samaniego y Sixto Coronado vinculan directamente a los sindicados con la comisión del hecho punible investigado.

Como en el sumario instruido se investiga la comisión de un delito contra la Salud Pública, tipificado en el segundo párrafo del artículo 260 del Código Penal y sancionado con pena de prisión de 5 a 10 años, y los elementos probatorios hasta ahora allegados al sumario vinculan a los detenidos José Arístides Sánchez Soto y José Alberto Sánchez Soto con la comisión de este delito, el Pleno considera que la detención preventiva decretada en contra de los imputados, mediante providencia de 25 de diciembre de 1995, no viola en ningún modo las normas constitucionales sobre la materia y se ajusta a lo preceptuado en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

En mérito de lo expuesto, el PLENO de la Corte Suprema, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención de los señores JOSÉ ARÍSTIDES SÁNCHEZ SOTO Y JOSÉ ALBERTO SÁNCHEZ SOTO decretada por el señor Fiscal Superior del Segundo Distrito Judicial de Panamá mediante providencia de 25 de diciembre de 1995 por el delito contra la Salud Pública que se investiga, y ORDENA que los mismos sean puestos nuevamente a órdenes de la Fiscalía Superior del Segundo Distrito Judicial de Panamá.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ÁNGEL ANTONIO AZCARATE CONTRA EL FISCAL SUPERIOR ESPECIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El señor Ángel Antonio Azcárate, actuando en su nombre y representación ha interpuesto ante esta Corporación de Justicia recurso de habeas corpus a su favor, y contra el señor Fiscal Superior Especial.

El actor motiva su pretensión alegando que se le involucra en el sumario instruído con motivo de la muerte violenta de Diómedes Abrego, ocurrido el 20 de agosto de 1994, por las declaraciones falsas que brinda el señor Lorenzo González en su contra. Señala también el imputado que el señor González se retractó posteriormente de sus afirmaciones manifestando que fue coaccionado por un miembro de la Policía Técnica Judicial para involucrar al sindicado Azcárate en el homicidio de Diómedes Abrego; ya que esta retractación demuestra claramente su desvinculación del homicidio que motivó la investigación.

Una vez ingresado el negocio al despacho de esta Superioridad, se libró el mandamiento de habeas corpus correspondiente, y se ordenó al funcionario demandado rindiera un informe acerca de la orden de detención dictada, contra el señor Ángel Antonio Azcárate, por su vinculación con la comisión del delito de homicidio en perjucio de Diómedes Abrego. La Fiscalía Superior Especial mediante oficio No. 1491 de 29 de diciembre de 1995, manifestó que ordenó la detención del señór Azcárate por medio de providencia fechada el 25 de agosto de 1994, pero que el sindicado está a órdenes del Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá.

Una vez librado el mandamiento de habeas corpus contra el Segundo Tribunal Superior de Justifcia, esta autoridad manifestó "que las razones de hecho y de derecho en que se basó dicha agencia de instrucción para disponer tal detención, se fundamento en el señalamiento directo sostenido en contra del ciudadano AZCÁRATE CUMMINGS por el señor LORENZO GONZÁLEZ RÍOS, el cual lo vinculó directamente al hecho de sangre." (fs. 13)

En el sumario consta como elemento de pruebas de fojas 83 a 96, la declaración jurada rendida al inicio de la investigación por el señor Lorenzo González Ríos, quien señala directamente al sindicado Azcárate alias "TOÑO" como la persona que lo contrató para localizar y luego asesinar al señor Diómedes Abrego. Además este testigo afirma que puso los hechos a que se refiere en su declaración en conocimiento del ofendido Diómedes Abrego en presencia de otra persona que resultó ser JOHN MADURO. Consta en autos que Diómedes Abrego, el día antes de ser asesinado puso en concocimiento de la Policía Técnica Judicial que había tenido una entrevista con un sujeto que le aseguró que había sido contratado para asesinarlo. También se recibió declaración jurada a John Maduro, quien confirma que estuvo presente cuando un sujeto le informó a Diómedes Abrego había sido contratado para localizarlo y después matarlo. Estas declaraciones corroboran el conocimiento que tenía el testigo Lorenzo González Ríos de los hechos que relata en su primera declaración legible de fojas 83 a 86 del sumario.

Además, "el día y hora de los hechos, AZCÁRATE CUMMINGS es visto y reconocido en las inmediaciones del lugar, ubicándose su persona en la escena del crimen sin que hasta el momento haya brindado una explicación pausible sobre esta coincidencia". (fs. 1952 y 1926)

Como en el sumario instruído se investiga la comisión de un delito contra la Vida y la Integridad Personal en perjuicio de Diómdedes Abrego Barcenas, tipificado en el artículo 131 del Código Penal y sancionado con pena de prisión de 5 a 12 años, y los elementos probatorios hasta ahora allegados al sumario vinculan al detenido ÁNGEL ANTONIO AZCÁRATE con la comisión de este delito, el Pleno considera que la detención preventiva decretada en su contra y mantenida por el Segundo Tribunal Supeiro de Justicia (cfr. foja 1925 y 1926), no viola en ningún modo las normas constitucionales sobre la materia y se ajusta a lo preceptuado en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

En mérito de lo expuesto, el PLENO de la Corte Suprema, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva del señor ÁNGEL ANTONIO AZCARATE, y ORDENA que el mismo sea puesto nuevamente a órdenes del Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CRISTIAN ALFONSO MUÑOZ CONTRA LA FISCALÍA SUPERIOR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL (SECRETARIA DE DROGAS). MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZALEZ. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Félix Enrique Troya ha presentado acción de habeas corpus a favor del señor **CRISTIAN ALFONSO MUÑOZ RODRÍGUEZ**, contra la Fiscalía Superior del Segundo Distrito Judicial.

Cumplidas las ritualidades procesales correspondientes, se libró mandamiento de habeas corpus contra la autoridad acusada. Mediante Oficio fechado 12 de enero de 1996, dicha autoridad informó lo siguiente:

> "Queremos hacer de conocimiento de esa Superioridad que el señor CRISTIAN ALFONSO MUÑOZ, fue puesto en libertad por este Despacho, luego de analizar las constancias procesales existentes en el expediente luego que surgiesen elementos vinculantes sobre la propiedad de las sustancias ilícitas encontradas en la persona de AMADO MUÑOZ (A) REY ... quien se declaró confeso del delito investigativo (sic) en su calidad de autor. Dicha libertad fue comunicada mediante telegrama N° 11, dirigido al Jefe de la Zona Policial de Santiago, Mayor PORFIRIO VELÁZQUEZ." (Foja 22).

En vista de que el detenido fue puesto en libertad, debe ordenarse el cese del presente procedimiento de habeas corpus, en atención a lo dispuesto por el artículo 2572 del Código Judicial.

Por tanto, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA el cese del procedimiento de la acción de habeas corpus presentada a favor del señor CRISTIAN ALFONSO MUÑOZ RODRÍGUEZ.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE PEDRO PASCUAL MORALES, CONTRA EL FISCAL PRIMERO DEL CIRCUITO DE VERAGUAS, MAGISTRADO PONENTE: CARLOS E. MUÑOZ POPE. PANAMÁ, TREINTA (30) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ingresa a esta Corporación de Justicia, en grado de apelación el

cuadernillo de la acción de Habeas Corpus presentada por la licenciada **MARÍA ESTENIA DE GRACIA MORALES**, Defensora de Oficio, contra el Fiscal Primero del Circuito Judicial de Veraguas, a favor de **PEDRO PASCUAL MORALES**, que contiene la resolución de fecha 29 de diciembre de 1995 en la cual el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial decretó legal la detención de PASCUAL MORALES por el delito de violación carnal en grado de tentativa en detrimento de **LISBETH RAQUEL DE GRACIA GONZÁLEZ.**

Esa decisión jurisdiccional fue apelada por la licenciada De Gracia Morales (f. 20) y al ser concedido el recurso de conformidad con lo normado en el artículo 2599 del Código Judicial, posibilita el examen de la medida censurada por el Pleno de esta Corporación.

DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

El tribunal de primera instancia, concluyó que hasta el momento existen indicios de que la conducta del imputado encaja en el tipo que describe el delito de violación carnal en grado de tentativa, por lo que al tener este delito pena de prisión de 3 a 10 años (art. 216 del C. P.) y de conformidad con el artículo 60 del código punitivo, que se refiere a la tentativa, debe aplicarse en forma favorable al imputado, tomando en consideración lo normado en el artículo 1972 del Código Judicial.

No obstante señala, que en virtud de que el imputado fue sorprendido en flagrante delito, dado que el señor Jorge Antonio Vega Atencio se vio en la necesidad de forzar la puerta del cuarto en que se encontraban las partes, debido a los gritos de la ofendida y los encontró en la cama, desnudos, logrando ver las lesiones sufridas por la sujeto pasivo; y el imputado fue aprehendido por miembros de la Policía Técnica Judicial en el lugar de los hechos por la denuncia suscrita en su contra por la ofendida, tal situación que constituye flagrancia según lo señala el artículo 2149 del Código Judicial, lo que significa que la detención decretada se ajusta a las formalidades legales vigentes (fs. 12-17).

FUNDAMENTACIÓN DEL PLENO

De las pruebas allegadas al expediente principal, se estima hay que tener en cuenta lo siguiente:

La señora Lisbeth Raquel De Gracia González aceptó la proposición hecha por un desconocido, en horas de la madrugada del 4 de diciembre de 1995, en el sentido de tener relaciones sexuales a cambio de dinero y por ello accedió a trasladarse con ese sujeto a una pensión.

Sin embargo, se desprende de la querella que presentó, que al llegar a la habitación, ella pidió el pago adelantado por sus servicios, pero Pascual Morales le dijo que después. Señala que éste la obligó a quitarse la ropa y luego ella accedió a practicarle el sexo oral porque él la amenazó con golpearla; que ella le dijo que en las condiciones en que se encontraba **bajo los efectos del licor** no iba lograr satisfacerse y efectivamente, ello ocurrió. Ante esa situación, Pascual Morales le exigió tener relaciones sexuales por la vía anal y al resistirse a ello, se dio un forcejeo y es así que afirma:

> **"él trató de levantarse para virarme, pero yo no lo dejé levantar, ya que yo sabía que él me iba a matar y me tiró una trompada en el pómulo entonces yo procedí y lo agarré por el cuello y le puse la mano en la boca para tirarlo para atrás para tratar de que no se levantara, en ese instante, él en el forcejeo me mordió en el muslo izquierdo y también el brazo izquierdo, al igual que en el dedo como dije anteriormente ... cuando estábamos en el forcejeo yo pedí auxilio y yo decía por favor ayúdenme y se presentó el muchacho que trabaja en la pensión, el cual no le sé el nombre, él entró al cuarto y le dijo al señor que me dejara ..."** (Fs. 2-5).

Al realizarse diligencia de careo entre el imputado Pascual Morales y la Sra. De Gracia González, ésta vuelve a manifestar que el imputado el día de los

hechos estaba "medio en fuego" y que no le llegó a pagar. No obstante, contrario a lo manifestado en la querella, da a entender que no sostuvo una relación sexual en forma oral y es así que dice: **"yo le dije que yo no quería y de ahí él se molestó, él dejó eso"**. Luego señala que Pascual Morales le solicitó tener relaciones vía anal, pero ella se negó; que aquel empezó a tomar licor de una botellita que tenía y luego volvió a insistir en su proposición, a la cual ella no accedió. Afirma que al ella tratar de bajar el vidrio de la ventana, él se molestó y le dio un golpe por el lado izquierdo de la cara, que él insistía en su propósito inicial, que ella se puso a llorar, que él la amenazaba con golpearla, secuestrarla, matarla, que él estaba furioso y le pedía a ella que lo dejara parar, pero ella no lo dejó, él trató de virarla, forcejaron y señala: **"entonces yo lo que hice fue agarrarlo por el cuello, ahí cuando yo lo tenía presionado, entonces él nuevamente me dijo que él se iba a levantar para matarme y me puso la mano en el cuello, entonces fue cuando yo lo mordí en su mano. Luego yo pedí auxilio"**. (Fs. 71-75).

Por su parte el imputado **Pascual Morales** al rendir indagatoria y en la diligencia de careo niega lo afirmado en su contra por la señora De Gracia Morales. Señala que le entregó el dinero pactado antes de tener relaciones sexuales con ella; que al estar la joven colocada encima de él, empezó a gritar y lo agarró por el cuello; que trató de quitársela de encima pero se trataba de una joven bastante fuerte y gorda; que estaba oscuro y él la agarró por la boca y es cuando ella le mordió el dedo pulgar de la mano izquierda; que la joven le gritaba que encendiera la luz pero él no podía quitársela de encima; que él le gritó al recepcionista que abriera la puerta o que la rompiera; que al entrar éste los encontró a ambos desnudos y a la joven encima de él. Niega haberle mordido el muslo izquierdo (fs. 45-51 y 71- 75).

Al rendir declaración jurada **Jorge Antonio Vega Atencio**, recepcionista de la pensión San José, único testigo de los hechos, manifiesta que Pascual Morales se había hospedado en la pensión desde el día 14 de septiembre de 1995, que se ausentó por unos días para someterse a una operación y regresó el 21 de ese mes hasta la fecha del incidente.

Narra que como a las 11:30 p. m. del día lunes 4 de diciembre de 1995, Pascual Morales entró a su habitación con una señora, luego se retiraron y como a las 2:00 a. m. regresó con otra joven bajita y gordita; que notó que Pascual Morales estaba ebrio; que como a la media hora la mujer empezó a gritar **"auxilio me tienes encerrada"**,que preocupado se tocó la puerta del cuarto pero que seguían discutiendo, que los dos gritaban, que buscó la llave de la puerta pero tenía seguro por dentro, que al forzarla y abrirla los encontró a los dos desnudos, acostados en la cama, que al verlo la joven tomó su ropa y salió del cuarto y se metió al depósito y Pascual Morales se quedó en la cama acostado.

Afirma que la joven botaba sangre por un dedo de la mano izquierda y le vio como un moretón como de mordedura en la parte de abajo del muslo izquierdo; que la joven le comentó que el hombre se había enojado porque quería tener sexo oral y ella se negó a ello. Agrega que aproximadamente una hora después dos agentes de la Policía Nacional llegaron preguntando por Pascual Morales y al conducirlos a la habitación, lo encontraron acostado en el piso del servicio (fs. 10-12).

A solicitud de la defensa técnica del imputado se le amplió la declaración a Vega Atencio. Señaló que ambos gritaban; que al entrar había claridad en la habitación porque la luz del baño al igual que la del pasillo estaban encendidas; que encontró a la joven encima de Pascual Morales, que luego ésta se bajo de la cama, salió desnuda de la habitación y se dirigió al depósito, donde se vistió. Agrega que desde el 14 de septiembre que llegó a hospedarse Pascual Morales jamás presentó problemas de esa clase (66-68).

Al analizar lo expuesto, bajo las reglas del correcto entendimiento humano, nos lleva a concluir, sin obviar la certificación del Dr. Rodolfo Gordón, Médico Forense del Instituto de Medicina Legal de Veraguas, donde se describe las lesiones encontradas en el cuerpo de la señora Lisbeth Raquel De Gracia González, incapacitándola por cinco días; que la versión de ésta **que es contradictoria** evidencia que hay un trasfondo que no se relaciona con haber sido víctima de un

delito de tipo sexual sino que se le negó el pago convenido por sus servicios, lo que motivó que agrediera a Pascual Morales y éste respondiera a ese ataque.

El testigo Vega Atencio notó que el hoy imputado estaba ebrio, lo cual no ha sido negado por la señora De Gracia González, quien suministra una explicación detallada de las condiciones físicas en que se encontraba Pascual Morales; lo cual es evidente, cuando éste no tenía la fuerza suficiente para quitársela de encima; además de encontrarse tendido en el piso del baño al momento que llegó la Policía Nacional.

Luego entonces, la experiencia y la lógica nos permiten concluir que estamos en presencia de un recriminable comercio sexual que es atípico en nuestro ordenamiento penal, por lo que no se justifica la detención preventiva que sufre el ciudadano Pedro Pascual Morales con los elementos allegados hasta el momento por el Fiscal al sumario en cuestión, pues a la querellante lo único que le interesa es que se le pague la incapacidad (f. 75) que sufrió pues, tácitamente, reconoció no ser víctima de abuso sexual en su contra.

PARTE RESOLUTIVA

En consecuencia la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA el auto apelado y en su defecto DECLARA ILEGAL la detención de PEDRO PASCUAL MORALES y ORDENA su libertad.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(Salvamento de Voto)

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO RAFAEL A. GONZÁLEZ

No concuerdo con las razones que se expresan para fundar la decisión de la cual disiento.

A partir de los mismos hechos que en la resolución se exponen, en mi opinión no se debe concluir:

> "Luego entonces, la experiencia y la lógica nos permiten concluir que estamos en presencia de un recriminable comercio sexual que es atípico en nuestro ordenamiento penal, por lo que no se justifica la detención preventiva que sufre el ciudadano Pedro Pascual Morales".

Si se pretende acceder a la relación sexual mediante el uso de la fuerza, aun cuando ello ocurra en circunstancias del ejercicio de la prostitución, se está en presencia del delito de violación.

En otras palabras, nada autoriza a actuar a la fuerza aún en el contexto de una relación deshonesta.

Pero, se trata de tentativa de violación. La pena mínima de prisión de conformidad con los artículos 60 del Código Penal y 2148 del Código Judicial, es inferior a los dos años. No obstante que la detención fue originalmente legal en consideración de la flagrancia, ahora debe ponderarse si se cumple con el requisito de que la pena mínima sea de dos años.

Por no serlo debe declararse ilegal la detención.

Fecha ut supra.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JORGE ENRIQUE DÍAZ PANEZO CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **DANIEL RAMÍREZ LASSO** ha interpuesto acción de HABEAS CORPUS a favor de **JORGE ENRIQUE DÍAZ PANEZO** contra el **Fiscal Auxiliar de la República "a fin de que se deje sin efecto, por ilegal, la orden de detención, de hecho, ordenada por el funcionario de instrucción impugnado en contra de mi representado"**.

Librado el respectivo mandamiento de habeas corpus, el funcionario demandado envió a esta Corporación el informe de rigor (fs. 5) en que señala:

"a) **No es cierto que este despacho ordenó la detención preventiva del señor JORGE ENRIQUE DÍAZ PANEZO.**

b) **En razón de lo anterior no existen motivos de hecho o de Derecho.**

c) **No está bajo custodia, ni se ha transferido a la persona en ningún momento y menos por ninguna causa."**

Aunado a lo anterior, expresa que en su despacho se tramita sumario por el delito de Robo a Mano Armada, en virtud de denuncia suscrita por Aristides Arnoldo Arroyo Villaverde, hecho ocurrido el 28 de diciembre de 1995.

Se incorporaron al expediente informes suscritos por los Inspectores Jiménez y Arosemena de la Policía Técnica Judicial, que indican que tuvieron conocimiento, a través de un **"INFORMANTE"**, de la posible participación de JORGE ENRIQUE DÍAZ PANEZO (a) QUICO, en el ilícito investigado.

Para confirmar la información aludida y por razón que los afectados en sus declaraciones sostienen que pueden reconocer a sus atacantes, ese despacho dictó providencia de 10 de enero de 1995, con fundamento en el artículo 2135, del Código Judicial, que dispone llevar a cabo un reconocimiento fotográfico, el cual no se ha podido realizar por la negativa del licenciado Daniel Ramírez en notificarse de esa resolución.

Concluye sosteniendo, que **JORGE DÍAZ PANEZO** hasta el momento no se encuentra como sindicado dentro del sumario pues **"sólo existe un señalamiento por una información que hasta el momento no ha sido confirmada"**.

Para decidir lo de lugar, la Corte considera:

La acción de habeas corpus otorga el derecho, a todo individuo, de acudir a la autoridad judicial cuando considera que ha sido detenido, fuera de los casos y la forma que prescribe la Constitución y la Ley, por acto de funcionario público, a efecto de ser oído y que se resuelva si es fundada su detención o prisión.

A pesar que en nuestro sistema, esta acción constitucional sólo procedía en el supuesto que se hubiere llevado a cabo la privación o detención corporal de la persona la jurisprudencia la ha extendido a los casos en que existiendo una orden de detención contra la persona, (considerada sin fundamento legal), esta no se hubiese cumplido, encontrándose el individuo aún en libertad. A este último remedio se le ha denominado HABEAS CORPUS PREVENTIVO, a diferencia del primero que es el tradicional HABEAS CORPUS REPARADOR.

La utilización de habeas corpus en cualquiera de los supuestos descritos, precisa que la solicitud del mandamiento se acompañe con la orden original de detención, o en su defecto una copia, a menos que el demandante exprese que por algunos motivos no pudo exigir la copia o que la exigió y fue rehusada. (Art. 2574 C. J.).

En el presente caso, que ocupa al Pleno de la Corte, se ha podido comprobar que el favorecido con esta acción no se encuentra detenido; el demandante sostiene que el funcionario del Ministerio Público emitió una orden de detención pero de naturaleza verbal, aunque admite que al revisar el expediente comprobó que, hasta ese momento, dicho funcionario no había realizado diligencia, ni dictado providencia que ordenase tomar declaración indagatoria o detener previamente a su representado **JORGE ENRIQUE DÍAZ PANEZO**. (hecho quinto, f. 2).

Este reconocimiento por parte del recurrente sobre la ausencia de orden de detención emitida por el Fiscal Auxiliar, lo ratifica el susodicho agente de instrucción en el informe que envió por razón de este habeas corpus.

Al no existir ni haberse acreditado la posible detención de la persona, a través de la orden escrita proferida por la autoridad o funcionario demandado, no resulta viable la acción de habeas corpus pues carece de materia, o sea, del acto por el cual se intente el confinamiento de la persona, cuya ilegalidad o fundamento legal tendría que determinar esta Superioridad, como tribunal de habeas corpus.

La jurisprudencia de la Corte ha sido constante en sostener la necesidad de la existencia de la orden de detención para la procedencia del Habeas Corpus preventivo.

En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO VIABLE la acción de Habeas Corpus interpuesta a favor de JORGE ENRIQUE DÍAZ PANEZO.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ANTONIO DE JESÚS HOQUEE MORALES CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA NACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS E. MUÑOZ POPE. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **EDILBERTO VÁSQUEZ ATENCIO** interpuso ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia demanda de habeas corpus en favor del señor **ANTONIO DE JESÚS HOQUEE MORALES** y contra el Director de la Policía Nacional.

Librado el correspondiente mandamiento de habeas corpus el Director de la Policía Nacional informó mediante oficio N° DAL-0074, de 23 de enero de 1996, que no ordenó la detención de la persona antes mencionada y que la misma no está detenida bajo su custodia (fs. 6).

Anterior a esta demanda, el licenciado VÁSQUEZ ATENCIO interpuso otra acción de habeas corpus contra el Fiscal Auxiliar de la República, tramitada a través del expediente N° 050-96, a favor de los señores ANTONIO DE JESÚS HOQUEE

MORALES, JORGE ENRIQUE DÍAZ PANEZO y JAIRO JACOB ORTEGA POVEDA, en el cual la autoridad demandada, en este caso el Fiscal Auxiliar de la República, informó que no ordenó la detención de los señores arriba mencionados.

Aunque la persona mencionada ha sido vinculada por delito de robo (fs. 111-113 de las copias remitidas por el Fiscal Auxiliar en el expediente N° 050-96), no existe orden escrita del funcionario de instrucción que implique la privación de libertad que se puede impugnar mediante la acción de habeas corpus y por ello debe cesar la actuación pues la persona no está privada de su libertad ni existe orden en tal sentido.

Por todo lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA EL CESE de la actuación y el archivo del expediente.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS INTERPUESTA A FAVOR DE ANTONIO DE JESÚS HOQUEE MORALES, JAIRO JACOB ORTEGA POVEDA Y CRISTINO MARTÍNEZ GONZÁLEZ Y EN CONTRA DEL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS E. MUÑOZ POPE. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **EDILBERTO VÁSQUEZ ATENCIO** interpuso ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia demanda de habeas corpus en favor de los señores **ANTONIO DE JESÚS HOQUEE MORALES y JAIRO JACOB ORTEGA POVEDA** y contra el Fiscal Auxiliar de la República.

Librado el correspondiente mandamiento de habeas corpus el Fiscal Auxiliar informó que no ordenó la detención de las personas antes mencionadas y que las mismas no están detenidas bajo su custodia.

Antes de resolver por Secretaría se solicitó copia del sumario correspondiente, lo que permite observar que las personas antes mencionadas se encuentran mencionadas en el expediente iniciado por razón del delito de robo que fue denunciado oportunamente por el señor **ARISTIDES ARROYO VILLAVERDE**, sin que exista en el mismo orden escrita del Fiscal Auxiliar para la detención preventiva de las mismas.

Aunque algunas de las personas mencionadas han sido vinculadas al robo antes mencionado (fs. 111-113 de las copias remitidas por el Fiscal Auxiliar), no existe orden escrita del funcionario de instrucción que implique la privación de libertad que se puede impugnar mediante la acción de habeas corpus y por ello debe cesar la actuación pues las personas no están privadas de su libertad ni existe orden en tal sentido.

Por todo lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA EL CESE de la actuación y el archivo del expediente.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JORGE ENRIQUE DÍAZ PANEZO, CRISTINO MARTÍNEZ GONZÁLEZ Y JAIRO JACOB ORTEGA POVEDA CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA NACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS E. MUÑOZ POPE. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **DANIEL RAMÍREZ LASSO** interpuso ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia demanda de habeas corpus en favor del señor **CRISTINO MARTÍNEZ GONZÁLEZ** y contra el Director de la Policía Nacional.

Librado el correspondiente mandamiento de habeas corpus el Director de la Policía Nacional informó mediante Oficio N° DAL-0076, de 23 de enero de 1996, que no ordenó la detención de la persona antes mencionada y que la misma no está detenida bajo su custodia (fs. 7).

Como quiera que la acción de habeas corpus está destinada procesalmente a tutelar la libertad ambulatoria de los ciudadanos contra cualquier orden que no reúna las exigencias que la ley señala, y en el presente caso la persona a favor de quien se promovió la acción correspondiente se encuentra gozando de libertad, procede ordenar el cese de todo procedimiento.

Por todo lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA EL CESE de la actuación y el archivo del expediente.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CARLOS ANTONIO LAVAL ROUSE, CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE CORRECCIÓN (ACUMULADO CON EL EXPEDIENTE N° 082-96, ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO JUDICIAL). MAGISTRADO PONENTE: CARLOS E. MUÑOZ POPE. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor **CARLOS ANTONIO LAVAL ROSE**, en su propio nombre y representación interpuso acción de Habeas Corpus a su favor, y contra el **DIRECTOR NACIONAL DE CORRECCIÓN**.

Cumplidos los trámites del reparto, se libró mandamiento de habeas corpus contra la autoridad acusada quien, mediante Nota N° 315-DNC de 24 de enero de

1996 (f. 9), manifestó que no había ordenado en forma verbal o escrita la detención del señor **LAVAL ROSE**; agrega que el recurrente fue puesto a órdenes de la Dirección Nacional de Corrección por la comisión del delito de estafa desde el 11 de enero de 1993, pero, a la fecha, el señor **LAVAL ROSE** cumplió la totalidad de la pena impuesta, y en consecuencia la Dirección a su cargo ordenó su libertad.

La acción de habeas corpus está destinada constitucionalmente a preservar la libertad ambulatoria de los ciudadanos, contra cualquier orden de detención que no reúna las exigencias que la ley señala y en el presente caso la persona quien promovió la acción correspondiente se encuentra en libertad; no procede la continuidad procesal de la acción interpuesta.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECRETA EL CESE de procedimiento en el presente caso y ORDENA el archivo del mismo.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE YOLANDA CONCEPCIÓN GABRIEL GONZÁLEZ CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado EDWIN H. LEÓN RODRÍGUEZ, ha interpuesto demanda de habeas corpus a favor de la señora YOLANDA CONCEPCIÓN GABRIEL GONZÁLEZ y en contra del Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.

Acogida la acción de habeas corpus se libró mandamiento contra el Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas y dicho funcionario contestó, mediante Oficio N° 423 del 15 de enero de 1996, lo siguiente:

"Señor Magistrado:

En virtud de que la Ley N° 13 de 27 de julio de 1994, por la cual se reforma el artículo 40 de la Ley N° 23 de 30 de diciembre de 1986 y se adiciona el artículo 40-A, señalando que los sumarios relacionados con delitos de drogas son de conocimiento de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas y que la misma quedó constituida a partir del 2 de septiembre de 1994, razón por la cual pasamos a resolver el presente Recurso de Habeas Corpus.

La Corte Suprema de Justicia, nos ha corrido traslado en esta oportunidad de la demanda de Habeas Corpus presentada por el Licenciado EDWIN H. LEÓN en favor de YOLANDA CONCEPCIÓN GABRIEL GONZÁLEZ y en contra del suscrito, por lo que de inmediato, procedemos a presentar nuestro informe escrito, tal como lo establece el artículo 2582 del Código Judicial.

PRIMERO: La señora GABRIEL fue detenida por orden escrita de esta Fiscalía fechada veintisiete (27) de octubre de mil novecientos

noventa y cinco (1995).

SEGUNDO: Los fundamentos de hecho que motivan la detención de la sindicada, tienen inicio el día 26 de octubre del año pasado, cuando unidades de la Policía Nacional, en asocio con la Corregiduría de Pacora, verifican diligencia de allanamiento en la residencia N° 122, de la barriada 24 de diciembre, del corregimiento de Pacora. A su llegada al lugar, las autoridades visualizan a la señora GABRIEL cuando arrojaba algo de una carterita al fregador, por lo que es neutralizada inmediatamente. Al inspeccionar el contenido de esta cartera, encuentran diez (10) sustancias compactas color crema, las cuales fueron presumidas como droga. Por tal motivo, se ordena desarmar la tubería de este fregador, encontrando ocho (8) sustancias similares.

TERCERO: Por tal motivo es conducida a este Despacho, para que rinda su respectiva declaración indagatoria, donde acepta la propiedad sobre la sustancia en comento, aduciendo que la misma le había sido recetada por un brujo, como remedio a sus dolencias de asma.

CUARTO: Por su parte, el Laboratorio Técnico Especializado de la Policía Técnica Judicial, remite a nosotros el análisis practicado sobre las dieciocho (18) sustancias compactas color crema incautadas en poder de la sindicada, el cual arrojó resultados positivos para la determinación de COCAÍNA (CRACK) en la cantidad de 3.38 Gramos.

QUINTO: Previa citación comparece uno de sus agentes captores, quien en la ratificación de su informe de novedad, narra los hechos que terminaron con la detención de la prenombrada; por tal motivo es preguntado de la siguiente manera:

PREGUNTADO: Diga el declarante, si ustedes tenían sospechas de que en esa residencia se estuviesen dedicando a la venta de sustancia ilícitas o si por el contrario, sólo tenían sospechas de esta señora? CONTESTO: Señor Fiscal, sólo teníamos una información de que en la casa se dedicaban a esta venta, pero no sabíamos quién era.

El fundamento de Derecho que nos obliga a ordenar y mantener la detención preventiva de la señora YOLANDA GABRIEL, se encuentra contemplado en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial. Actualmente la prenombrada se encuentra detenida y filiada a vuestras órdenes, por este Despacho haberlo ordenado así mediante oficio N° 422 de esta misma fecha, dirigido a la directora del Centro Femenino de Rehabilitación, tal como lo exige el artículo 2580 del Código Judicial.

Adjunto al presente informe le remitimos copias autenticadas del expediente que contiene las sumarias respectivas, constantes de treinta y seis (36) fojas útiles".

Se trata de un proceso iniciado de oficio por delito contra la salud pública, por cuanto a la señora YOLANDA CONCEPCIÓN GABRIEL GONZÁLEZ se le imputa supuesto delito contra la salud pública relacionado con drogas. El recurrente considera que la detención preventiva de su representada es ilegal porque la misma aceptó libre y espontáneamente que dicha sustancia es para su consumo personal porque padece de asma. Señala también que el médico forense, doctor JOSÉ A. CALDERÓN al realizar las experticia de rigor manifestó que la beneficiada con esta acción es usuaria de estimulantes del tipo de cocaína.

Consta en el expediente contentivo de las sumarias el informe de novedad expedido por el Agente 11932 TOMÁS CAMARGO, del Servicio en el DIIP. del Área "E" Tocumen, en el cual señala lo siguiente:

"...

Siendo aproximadamente las 15:50 horas del día jueves 26 de octubre del corriente año, en compañía de la señora Corregidora de Pacora,

> Licda. Desne Tejada y unidades de la SDIIP. Tocumen y el suscrito, procedimos con una diligencia de allanamiento a la residencia N° 122, ubicada en la Bda. 24 de diciembre, Corregimiento de Pacora, propiedad del señor JORGE BERNAL, varón, sin documentos, al llegar a dicha residencia, la cual está cercada con alambre de ciclón, se encontraba la ciudadana YOLANDA CONCEPCIÓN GABRIEL, mujer, sin documentos, la cual fue sorprendida por el suscrito, cuando arrojaba de una carterita de cuero color chocolate al fregador una sustancias, procedí a quitarles de las manos la carterita antes descrita, que en su interior contiene diez (10) trocitos de sustancias sólidas, que se presume sea droga (Crack).
>
> El cabo 2° 14392 JAN ICAZA, desarmó la tubería del fregador de la cocina, encontrando en dicha tubería la cantidad de (8) ocho trocitos de sustancias sólidas, que se presume sea droga (Crack). A esta ciudadana le fueron leídos sus derechos constitucionales y fue trasladada a la Base de Tocumen, para remitirla a la Sección de Narcóticos de la P. T. J. de Ancón".

Consta también a foja 25 del expediente, el informe del Laboratorio Técnico Especializado de Drogas, en el cual se certifica que los dieciocho (18) sustancias compactas color crema resultaron positivas para la determinación de Cocaína (CRACK), en la cantidad de 3.38 gramos.

Por otro lado, la Corte observa una orden de detención preventiva, visible de fojas 15 a 16 del expediente que contiene las sumarias, expedida por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, fechada el 27 de octubre de 1995.

Concluye esta Corporación de Justicia, que el informe de novedad y el informe de laboratorio constituyen hechos probatorios suficientes para vincular a la señora YOLANDA CONCEPCIÓN GABRIEL GONZÁLEZ, con los hechos a ella imputados. Lo anterior, aunado al hecho de que la misma fue detenida in fraganti, dado que tenía al momento de su detención, la droga dentro de una carterita de cuero en sus manos, justifica la medida cautelar de la detención preventiva decretada por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, por cuanto el artículo 2148 del Código Judicial es claro al señalar que la misma sólo procede por delito que tenga señalada pena mínima de dos (2) años de prisión, o cuando el autor o partícipe ha sido sorprendido en flagrante delito. Todo lo antes expuesto, justifican, a juicio de esta Superioridad, la detención preventiva de la señora YOLANDA CONCEPCIÓN GABRIEL GONZÁLEZ.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención de la señora YOLANDA CONCEPCIÓN GABRIEL GONZÁLEZ y ORDENA que la detenida sea puesta nuevamente a órdenes de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MARTÍN GONZÁLEZ PALMA CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ingresó al Pleno de la Corte Suprema de Justicia la acción de habeas corpus interpuesta por el licenciado **Diógenes Aníbal Arosemena Grimaldo**, contra el **FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA**, a favor de **MARTÍN GONZÁLEZ PALMA**, detenido en la Cárcel Modelo, por delitos de peculado y asociación ilícita para delinquir.

Luego de enderezar la acción de habeas corpus, se libró el mandamiento correspondiente contra la **FISCAL PRIMERA DELEGADA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, quien mediante Oficio N° 0081-FPD de 18 de enero de 1996, rinde su informe de conducta, cuyo contenido se transcribe a continuación:

> "**PRIMERO:** No fue este Despacho quien ordenó la detención de **MARTÍN GONZÁLEZ PALMA**, sino la Fiscalía Auxiliar de la República tal y como se desprende del documento fechado 11 de enro (sic) de 1995, obrante a fojas 114 y ss. del sumario.
>
> **SEGUNDO:** Los motivos y fundamentos de hechos y de derecho que tuvo el Fiscal Auxiliar de la República fueron explicados en la providencia antes citada, de la que se deduce que el señor GONZÁLEZ PALMA, Director de la Oficna (sic) del Instituto Panameño de Turismos en la Provincia de Chiriquí, recibió sugerencias y realizó gestiones para hacer efectivo el cheque N° 36551 de 6 de junio de 1995 del Fondo rotativo de Operaciones del Ministerio de la Presidencia, según se desprende de la declaración jurada rendida por Omar Ponce (fojas 58) y Guillermo Tatis Grimaldo en su declaración indagatoria (fojas 109).
>
> **TERCERO:** A la fecha sí mantengo a nuestra disposición al precitado **MARTÍN GONZÁLEZ PALMA**, tal cual consta a folios 173 del sumario y a partir de este momento ha sido filiado a su orden". (fs. 18-19).

La Fiscalía Auxiliar de la República, mediante Providencia de 11 de enero de 1996, (fs. 114 a 126 del expediente), ordena la detención preventiva y la suspensión del cargo de JUAN BAUTISTA SALAS TEJEIRA, **MARTÍN GONZÁLEZ PALMA**, GUILLERMO TATIS GRIMALDO y HARMODIO ARAUZ GRIMALDO; en dicha Providencia, se plasman los antecedentes del caso de la siguiente manera:

> "El día 9 de enero de 1996, esta Agencia del Ministerio Público recibió solicitud de allanamiento por parte de la Dirección de Información e Investigación Policial (DIIP) de la Policía Nacional.
>
> Tal allanamiento sería en la residencia N° 5181-A, ubicada en calle Parson en Diablo High, Corregimiento de Ancón, con la finalidad de localizar al señor JUAN BAUTISTA SALAS, toda vez que de acuerdo a investigaciones por ellos realizadas el mismo se encuentra involucrado en la sustracción de cheques del Estado.
>
> Ante esta información y urgencia notoria respecto a la recuperación del cheque en cuestión para evitar que esta prueba fuera eliminada, se llevó a cabo la diligencia de allanamiento a la residencia en mención, al llegar el señor JUAN BAUTISTA SALAS, a quien se le hizo requerimiento del cheque, y sin objetar lo solicitado, hizo entrega del mismo distinguido con el N° 36551, fechado 6 de junio de 1995, girado contra la cuenta N° 04-90-0004-9 del Fondo Rotativo de Operaciones Financieras del Ministerio de la Presidencia, por la suma de B/.38,940.69 a la orden del tesoro (sic) Nacional.
>
> Consta en el expediente Informe de Investigación suscrito por el Subdirector de la Policía Técnica Judicial, RAMIRO JARVIS, en donde señala que el señor SALAS en forma voluntaria confesó haber sustraído el cheque cuando laboraba en la Contraloría asignado al Ministerio de la Presidencia, que lo había hurtado hace aproximadamente 3 a 4 meses de su oficina y en dicho lugar se lo había entregado al señor HARMODIO ARAUZ para que tratara de

cambiarlo. Igualmente señaló que el señor ARAUZ es el Gobernador de la Provincia de Coclé.

Se ha incorporado al sumario Informe suscrito por el Inspector II HERIBERTO CEDEÑO A., Jefe Provincial de la Policía Técnica Judicial de Chiriquí, señalando que a las Oficinas de Ingreso de David, se presentó el señor MARTÍN GONZÁLEZ PALMA, Jefe Provincial del Instituto Panameño de Turismo en Chiriquí, tratando de cambiar el cheque de marras, por lo que inmediatamente se iniciaron las averiguaciones pertinentes.

Siendo estas las primeras averiguaciones respecto al manejo irregular del cheque N° 36551, mediante resolución dictada el día de ayer se dispuso indagar a JUAN BAUTISTA SALAS, con (sic) supuesto infractor de disposiciones contenidas en el Libro II, Título X, delitos CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA.

Así en tal diligencia, JUAN BAUTISTA SALAS TEJEIRA, manifestó que fungio (sic) como Auditor de la Contraloría asignado al Ministerio de la Presidencia, desde finales de diciembre de 1991 hasta el 31 de octubre de 1995, devengando un salario de B/.965.00.

Al referirse al cheque N° 36551, manifiesta que llegó a su poder porque inicialmente el Banco Nacional había regresado un cheque por igual suma ya que presentaba diferencia en la protección y letra, entonces se corrigió por el cheque de marras que fue firmado por la Directora Administrativa y posteriormente se lo mandaron a él para firmarlo. Indica que como eso no era de apuro, lo dejó sobre su escritorio, para luego firmarlo y mandarlo como es costumbre, y así se le quedó y no lo mandó a reintegrar.
...
VINCULACIÓN.
Vistas las pruebas procesales alegadas al sumario, tenemos que no solo la participación de SALAS en cuanto al manejo irregular del cheque, sino que vemos la participación de MARTÍN GONZÁLEZ PALMA, Jefe del IPAT en Chiriqui (sic), quien gestiona ante el Director de Ingresos de David, a fin de hacer efectivo el mismo. HARMODIO ARAUZ, Gobernador de la Provincia de Coclé, quien conjuntamente con SALAS idean dar un destino diferente al cheque girado a favor del TESORO, y así se apoderan del mismo, de manera ilícita. GUILLERMO TATIS GRIMALDO, Jefe del IPAT en Coclé, quien igualmente gestiona a fin de conseguir el efectivo del cheque y en poder de quién (sic) se encontraba el cheque origina (sic), según MARTÍN GONZÁLEZ en conversación sostenida con PONCE. ...". (Fs. 114 a 126 del sumario).

A continuación mencionaremos las pruebas que relacionan a **MARTÍN GONZÁLEZ PALMA** con los hechos investigados.

Mediante Oficio N° 061-95, se remite informe sobre las averiguaciones realizadas en el caso de emisión de cheque del Fondo Rotativo de Operaciones Financieras del Ministerio de la Presidencia, suscrito por el Inspector II HERIBERTO A. CEDEÑO A., Jefe de la P. T. J. de Chiriquí, del cual se desprende que el señor **MARTÍN GONZÁLEZ PALMA**, Jefe del IPAT de Chiriquí, se presentó a las Oficinas de Ingresos de David, y le consultó al Jefe de dicho Departamento, OMAR ELIECER PONCE VEGA si con el dinero de las recaudaciones que allí se hacen, le podía hacer efectivo un cheque por al suma de B/.38.940.69, de una chequera del Fondo Rotativo de Operaciones Financieras del Ministerio de la Presidencia de la República, y le entregó una copia del mismo (f. 13 del expediente). También, según el informe en mención, el señor **MARTÍN GONZÁLEZ PALMA** manifestó que la copia del cheque se la dio el Director del IPAT de Coclé, GUILLERMO TATIS GRIMALDO, y que éste le enviaría el cheque original el martes en la mañana -9 de enero de 1996-, para que tratara de hacerlo efectivo en la Oficina de Ingresos de Chiriquí. Posteriormente, **GONZÁLEZ PALMA** manifiesta que el Jefe del IPAT en Coclé, le informó que ya había negociado el cheque con una empresa licorera de Coclé; pero, el 11 de enero de 1996, viajaría a Panamá y posiblemente TATIS

GRIMALDO le entregaría otro cheque similar. Dicho informe concuerda con lo manifestado por OMAR ELIECER PONCE VEGA, Administrador Regional de Ingresos en David, Ministerio de Hacienda y Tesoro, en declaración jurada (fs. 58 a 61 del expediente). Lo anterior, es corroborado también, por el Jefe Provincial de la P. T. J. de David, Chiriquí, HERIBERTO ANTONIO CEDEÑO AGUILAR, al rendir declaración jurada (fs. 62 a 64 del expediente).

Consta en autos, informe de entrevista suscrita por el Inspector RAMIRO JARVIS, donde informa que a la 1:30 p. m. del 11 de enero de 1996, realizó entrevista a **MARTÍN GONZÁLEZ PALMA**, Director Regional del IPAT, en Chiriquí; dicho informe coincide con lo manifestado por **MARTÍN GONZÁLEZ PALMA** en declaración indagatoria (fs. 100 a 104 del expediente), donde dice que antes de Navidad GUILLERMO TATIS GRIMALDO fue a su oficina en David y le dijo que quería hablar un asunto personal con él; fue entonces cuando le habló del cheque, le preguntó que si podía cambiarlo en Chiriquí ya que la cantidad era muy alta para cambiarlo en Coclé, también le dijo que ese cheque se lo había dado un amigo suyo que era Auditor de la Presidencia, y que una vez cambiado el cheque, éste lo taparía. Le preguntó que si tenía algún amigo en alguna empresa grande o banco que lo pudiera cambiar, que recibiría B/.2000.00. Por último le dijo que hablara con el señor PONCE de la Oficina de Ingresos, por lo que ambos fueron donde dicho señor. El señor PONCE dijo que eso era sumamente delicado y que no se comprometía a nada. También, **GONZÁLEZ PALMA** manifiesta que luego habló con PONCE y acordaron olvidarse del asunto, y que días después, el señor TATIS lo llamó a su casa temprano y le dijo que no se preocupara, que él había arreglado el asunto y que no los iba a necesitar, y no habló más con él hasta el seminario taller en el IPAT, donde los detuvieron.

En declaración jurada (f. 105 del expediente), **GONZÁLEZ PALMA** se afirma y ratifica de los cargos que surjan de su declaración indagatoria.

Por su parte, GUILLERMO TATIS GRIMALDO, al rendir declaración indagatoria (fs. 106 a 111 del expediente) manifiesta que no intentó cambiar el cheque, sino que le propuso a **PALMA** para que más adelante lo cambiara con "el de HACIENDA" -OMAR PONCE- o el BANCO NACIONAL. Y que después, rectificó y le dijo a **PALMA** que no hiciera más gestión, con el pretexto de que ya había cambiado el mismo, y le devolvió el cheque a la persona que se lo había entregado, es decir, a su primo JOSÉ HARMODIO ARAUZ, Gobernador de Coclé.

Del Informe secretarial de 16 de enero de 1996 (f. 160 del expediente), se desprende que en la mañana de ese día se recibió llamada de la licenciada SARA SÁNCHEZ del IPAT para informar que en uno de los escritorios en las oficinas del IPAT de Chiriquí, se encontraba fotocopia del mencionado cheque, la cual se entregó a la P. T. J. de David.

Por otro lado, el recurrente argumenta en su escrito que:

> "el señor **MARTÍN GONZÁLEZ PALMA** sólo tuvo en sus manos una fotocopia del cheque respecto del cual, supuestamente existía interés en hacerlo efectivo cuando se trataba de una devolución de viáticos del ex-Presidente Endara. En otras palabras no tuvo el cheque, si es que lo hubo, no lo firmó, no lo cambió y, en consecuencia, no ha habido ni pudo haber jamás apropiación de dineros, ni de valores, ni de bienes u otros objetos por cuanto jamás le correspondió tener en sus manos los primeros o administrar los últimos o tener la custodia o la percepción de unos y otros porque se le hubieren confiado en razón de su cargo. ... . (F. 3).

Además, según el licenciado **Arosemena**, en el caso en comento no existe la asociación ilícita para delinquir del artículo 242 del Código Penal, toda vez que nunca ha existido acuerdo o pacto entre el señor **MARTÍN GONZÁLEZ PALMA** y el resto de los imputados.

Al rendir indagatoria **GONZÁLEZ PALMA** declara a su favor que:

> "... si bien es cierto que fuimos tentados para hacer esta

> transacción, no pasó de ser un anteproyecto y jamás tuvimos ni el señor PONCE ni yo acceso al cheque original ya que el señor TATIS lo único que nos mostró y dejó fue una fotocopia de este cheque. ... no hubo intento de parte nuestra de cambiar el cheque por el apremio que teníamos a involucrarnos en problemas. ... . Por no querer comprometernos en realidad no hicimos (sic) nada, ningún intentó (sic) por cambiarlo. Nosotros recibimos la solicitud de parte de TATIS, fue negativo y hasta allí nada más, ... en momento alguno tuve el cheque en mi poder como jamás intenté en parte alguna cambiarlo, ...". (Fs. 102 a 104 del expediente).

Según se desprende de las constancias procesales recabadas hasta el momento y la declaración indagatoria del beneficiario del presente recurso de habeas corpus, existen suficientes elementos de juicio para considerar que la detención preventiva del señor **MARTÍN GONZÁLEZ PALMA** no carece de fundamento legal.

En la etapa de investigación ha quedado comprobado que de la Presidencia de la República se sustrajo maliciosamente un cheque girado a favor del Tesoro Nacional, por la suma de B/.38,940.69. La intención era hacerlo efectivo burlando los intereses del beneficiario de dicho documento. Quien actuó de esa manera es funcionario público y tuvo acceso al documento por razón de su cargo. Para los efectos de cobrar el cheque entró en relación con otras personas, conscientes igualmente del propósito que se cumplía.

Entre esas otras personas está el señor **MARTÍN GONZÁLEZ PALMA**, cuya es la expresión "es cierto que fuimos tentados"; quien actuó en el sentido indicado, gestionando ante el Administrador Regional de Ingresos en David, señor **OMAR ELIECER PONCE VEGA.**

De tal manera, obran en autos elementos probatorios que hacen suponer en forma ahincada que se está en presencia de un delito. Así mismo, las pruebas allegadas demuestran la vinculación del beneficiario del habeas corpus con los hechos.

Ha de concluirse, en consecuencia, que la detención preventiva en el presente caso es fundada.

En virtud de lo anterior, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva del señor MARTÍN GONZÁLEZ PALMA; y ORDENA que sea puesto de inmediato a órdenes de la Fiscal Primera Delegada de la Procuraduría General de la Nación.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
SALVAMENTO DE VOTO
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO MAGISTRADO JOSÉ MANUEL FAÚNDES

Mi disidencia con el fallo aprobado en este habeas corpus, donde se declara legal la detención de **MARTÍN GONZÁLEZ PALMA** radica en que la norma que faculta para decretar la privación de libertad preventiva de una persona preceptúa que la misma no procede en delito que tenga señalada pena mínima inferior a dos (2) años de prisión, y cuando procede, es del caso cumplir con las formalidades previstas en el Código Judicial.

En este orden de ideas, si bien es cierto que en la etapa de la investigación existen elementos probatorios que hacen suponer que se está en

presencia de un delito, toda vez que ha quedado comprobada la conducta ilícita llevada acabo por un funcionario público que sustrajo un cheque girado a favor del Tesoro Nacional, por la suma de B/.38.940.69, con la intención de hacerlo efectivo, y es también cierto que, para cobrar el cheque y no así para sustraerlo, entró en relación con otras personas, que si bien eran conscientes del delito que se había cometido, no puede afirmarse que formaba parte de una asociación ilícita para delinquir, toda vez que, no hubo un acuerdo programado con el concurso necesario de tres o más personas para llevar acabo el hecho punible investigado.

Por otro lado, en el caso en particular de **MARTÍN GONZÁLEZ PALMA**, las pruebas allegadas demuestran la vinculación del beneficiario del habeas corpus con una supuesta conducta que si bien es posterior, no guarda relación directa con el delito investigado, y que de haberse realizado, configuraría una conducta distinta descrita en el tipo penal, en cuyo caso, por la cuantía de la pena, no procede la detención preventiva.

Sin embargo, en el caso del beneficiario del presente recurso de habeas corpus, se ha dicho que realizó gestiones ante el Administrador de Ingresos de David, señor OMAR ELIECER PONCE, gestiones éstas que a nuestro juicio, no podrían calificarse como idóneas para los efectos de cambiar el cheque, debido a que el cheque original nunca estuvo en poder de **GONZÁLEZ PALMA** y las supuestas gestiones fueron realizadas con una fotocopia (fax) del mismo, por lo tanto, somos de la opinión de que sólo se ha podido comprobar que se llegó hasta lo que la doctrina denomina la fase intermedia del intercrimen, es decir, la fase psíquica de la resolución manifestada, que es cuando el sujeto exterioriza sus intenciones de llevar acabo una acción, y en razón de ella, no puede calificarse a **MARTÍN GONZÁLEZ PALMA** como el autor material de una conducta descrita en el tipo como punible.

En tal sentido, pienso que el funcionario instructor, antes de decretar la detención preventiva, debió valorar el acervo probatorio del caso a fin de dar estricto cumplimiento a lo normado en el artículo 2159 del Código Judicial sobre la existencia del hecho punible.

Considero finalmente y como cuestión primordial insoslayable, que la detención del recurrido debió declararse ilegal. Amen de que el supuesto delito de peculado no fue realizado, en ningún momento, lo que está claro en el expediente.

Fecha Ut Supra.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR LA LICENCIADA MARIBLANCA STAFF EN CONTRA DEL ARTÍCULO 218 DEL CÓDIGO DE LA FAMILIA. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada **MARIBLANCA STAFF**, actuando en su propio nombre, presentó el 18 de enero de 1995 Acción de Inconstitucionalidad contra el artículo 218 del Código de Familia.

Después de admitida la demanda, esta fue sometida a la tramitación establecida en el Libro IV del Código Judicial y se encuentra en estado de ser

fallada en el fondo.

ARGUMENTOS DE LA PARTE ACTORA

Considera la demandante que la norma acusada viola los artículos 19, 20, y 53 de la Constitución Nacional Vigente y principios universales de derechos humanos.

El texto del artículo 218 del Código de Familia es del tenor siguiente:

> "Artículo 218. En los casos previstos en los numerales 9 y 10 del Artículo 212, el Juez solamente podrá decretar el divorcio cuando en el proceso esté acreditado que se encuentra resuelto lo concerniente a la guarda, régimen de comunicación y de visita y los alimentos de los hijos o hijas que tengan derecho a ellos.
>
> En cualquier fase del proceso, una o ambas partes podrán acreditar estas circunstancias."

Los hechos en que descansa la referida acción están fundamentados en que el artículo 218 del Código de familia establece un privilegio personal en favor de las parejas que invocan las causales 1 al 8 del artículo 212 para divorciarse. Esto provoca que se discrimine a las parejas que invocan las causales 9 y 10 del mismo artículo. Que el artículo 218 del Código de Familia establece una desigualdad jurídica al establecer condiciones distintas para regular la misma situación jurídica, esto es, atenta contra el principio constitucional de igualdad de derechos que deben disfrutar las parejas tanto durante el matrimonio, como al momento de su disolución.

De la acción de inconstitucionalidad se le corrió traslado al Procurador de la Administración quien se encontraba en turno para emitir concepto.

CRITERIO DEL PROCURADOR DE LA ADMINISTRACIÓN

Al poner en conocimiento de la demanda de inconstitucionalidad propuesta por la licenciada **MARIBLANCA STAFF** a la Procuradora de la Administración, ésta se declaró impedida para emitir concepto en razón de que había participado en las Comisión Codificadora del Proyecto del Código de la Familia y de Menores, impedimento éste que fue admitido por el Pleno mediante Auto de 22 de febrero de 1995, e inmediatamente se designó al Primer Suplente para que procediera con lo pertinente.

Efectivamente, mediante Vista N° 165 de 24 de abril de 1995, el Primer Suplente de la Procuradora de la Administración se opuso a la alegada inconstitucionalidad del artículo 218 del Código de Familia, por varias razones, a saber:

En primer lugar, indica que la norma acusada de inconstitucionalidad no vulnera el artículo 19 de la Constitución, dado que en aquella no se está estableciendo un fuero, ni privilegio personal, ni una discriminación en razón de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas.

En lo que concierne a la violación del artículo 20 de la Ley Fundamental, señala el funcionario que tampoco se verifica tal transgresión, ya que esta disposición al referirse a la igualdad de los panameños y de los extranjeros ante la ley, la misma hace alusión a las personas y no a situaciones de hecho. En este sentido, cualquier panameño o extranjero casado, sin limitación de ninguna naturaleza, puede invocar la causal de divorcio que considere pertinente; esto es que los numerales 9 y 10 del artículo 212 del Código de Familia no están reservados a ninguna persona o grupo de personas en particular.

En lo referente al artículo 53 de la Carta Magna, que de igual manera señala el petente que ha sido violentado, según el Suplente de la Procuradora de la Administración, esta norma tampoco resulta vulnerada por el artículo 218 del Código de Familia, dado que la norma se refiere, sino a los hechos contenidos en

los numerales 9 y 10 del artículo 212 del Código de Familia, y no al hombre o a la mujer.

Por último al referirse a la supuesta violación del artículo 17, numeral 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, su parecer al respecto es que Panamá sigue la Teoría Monista Moderada y que la norma acusada se encamina a situaciones de hecho, definidas como causales de divorcio y no a personas. Sigue manifestando el Suplente, que el artículo 4 de la Constitución Nacional preceptúa que la República de Panamá acata las normas del derecho internacional, y que en reiterados fallos la Corte ha manifestado que si una disposición de derecho patrio choca con normas de derecho internacional, en estos casos prima esta última, con el compromiso de que el órgano competente modifique o derogue la disposición nacional. Además, de que todos los cónyuges pueden invocar la causal que estimen conveniente al plantear la demanda de divorcio.

DECISIÓN DEL PLENO DE LA CORTE

Tal y como se indicara en líneas anteriores, la parte interesada sostiene que el artículo 218 del Código de Familia violenta lo preceptuado en los artículos 19, 20, y 53 de la Constitución Nacional, además del artículo 17, numeral 4 de la Convención de los Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica".

La primera norma que se estima infringida es el artículo 19 de la Constitución, que dice:

> "ARTÍCULO 19. No habrá fueros o privilegios personales ni discriminación por razón de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas."

El argumento expresado para sustentar la transgresión alegada, consiste en que el artículo acusado establece un privilegio personal a favor de las parejas que se divorcian, y quienes alegan las causales del 1 al 8 del artículo 212 del Código de Familia. Según la actora, estos numerales no exigen, para decretar el divorcio, que se acredite lo referente a la guarda, régimen de comunicación y visita y los alimentos de los hijos e hijas que tengan derecho a ello, como sí lo exige para las causales de divorcio contenida en los numerales 9 y 10 ibídem, lo cual constituye una discriminación.

Contrario al razonamiento expresado, el Primer Suplente de la Procuradora de la Administración, señaló que la Corte Suprema de Justicia había sido reiterativa en sostener que la Constitución permite los fueros y privilegios, siempre y cuando favorezca a un sector de la población, sin establecer favoritismo en beneficio de una persona, es decir fueros y privilegios personales. En este sentido sigue indicando, que una serie de leyes que consagran fueros o privilegios han sido declaradas constitucionales, y que ejemplo de esto puede mencionarse la ley que trata de la jubilación de las mujeres a los 57 años y el de los hombres a los 62; la ley que concierne a la jubilación de algunos funcionarios públicos con el último salario; la ley que prevé descuentos para los pensionados y jubilados; las exoneraciones que se conceden a favor de los industriales; y la ley que le permite a los empresarios de Zona Libre pagar el impuesto sobre la renta en base a una escala inferior en comparación con el resto de los panameños.

Después de un examen de los argumentos expuestos, la Corte llega a la conclusión de que no le asiste razón a la demandante. Una confrontación del artículo impugnado con la normas constitucional que se estima infringida no revela la alegada colisión a que se refiere la proponente. Esto es, que efectivamente y retomando el argumento del Primer Suplente de la Procuradora de la Administración, esta Superioridad ha sostenido que el artículo 19 de la Constitución Nacional no debe ser interpretado de manera restrictiva tal y como lo quiere entender la demandante, en virtud de que esta disposición es clara al establecer "no habrá fueros y privilegios personales"...

Creemos conveniente, para mayor ilustración y comprensión, transcribir el

artículo 212 tan comentado, cuyo contenido es del tenor siguiente:

"Artículo 212. Son causales de divorcio:

1. El atentado de uno de los cónyuges contra la vida del otro, o de sus hijos, hijas, hijastros o hijastras;

2. El trato cruel físico o psíquico si con él se hace imposible la paz y el sosiego doméstico;

3. La relación sexual extramarital;

4. La propuesta de uno de los cónyuges para prostituir al otro;

5. El conato del marido o de la mujer para corromper o prostituir a sus hijos, hijas, hijastros o hijastras, o la connivencia en su corrupción o prostitución;

6. El abandono absoluto por parte del marido de sus deberes de esposo o de padre, y por parte de la mujer, de sus deberes de esposa o de madre, si al presentar la demanda de divorcio han transcurrido por lo menos seis (6) meses, contados desde el día en que se originó la causal, salvo que se trate del abandono de mujer embarazada, en cuyo caso el término será de tres (3) meses;

7. El uso habitual e injustificado de drogas o sustancias psicotrópicas;

8. La embriaguez habitual;

9. La separación de hecho por más de dos años, aun cuando vivan bajo el mismo techo;

10. El mutuo consentimiento de los cónyuges"...

El artículo 218 del Código de Familia no establece un privilegio para las parejas que deseen divorciarse de acuerdo a los fundamentos enumerados del 1 al 8 en el artículo 212 del Código de Familia, puesto que la naturaleza de estos son disímiles a los contenidos en las causales 9 y 10, los cuales se refieren al mutuo consentimiento y a la separación de hecho por más de dos años. **El primer grupo supone un proceso eminentemente contencioso y el segundo, un proceso voluntario, lo que hace manifiesto que el tratamiento de estas causales para disolver la unión matrimonial no será igual.**

El precepto constitucional contiene una prohibición de fueros y privilegios personales y distingos por razón de condiciones en ellos señaladas, es decir, la creación de situaciones injustas de favor o excención en beneficio de determinadas personas, o de limitaciones o restricciones injustas o injuriosas que entrañen un trato desfavorable o favorable para quienes en principio se encuentren en la misma situación que otras por razón de nacimiento, condición social, raza, etc.

Consideramos que se evidencia que los presupuestos para decretar el divorcio, esto es que se acredite lo referente a la guarda, régimen de comunicación y visita y los alimentos de los hijos e hijas que tengan derecho a ello, contenidos en el artículo 218 del Código de Familia, es una condición aplicable a **cualquier pareja unida por el vínculo matrimonial** que desee divorciarse por las causales 9 y 10 del Artículo 212 ibídem. Es por todo estos comentarios que no prospera la violación alegada.

Otra disposición constitucional, que según la parte afectada ha sido violentada por el artículo 218 del Código de Familia, es el artículo 20 de la Constitución Nacional, que dice:

"Artículo. 20. Los panameños y los extranjeros son iguales ante la

> Ley, pero ésta podrá, por razones de trabajo, de salubridad, moralidad, seguridad pública y economía nacional, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinadas actividades a los extranjeros en general. Podrán, asimismo, la Ley o las autoridades, según las circunstancias, tomar medidas que afecten exclusivamente a los nacionales de determinados países en caso de guerra o de conformidad con lo que se establezca en tratados internacionales."

La parte demandante explica el quebrantamiento constitucional, arguyendo que la excerta legal establece una desigualdad jurídica en perjuicio de las parejas que hacen uso de las causales de disolución matrimonial contenidas en los numerales 9 y 10 del artículo 212 del Código de Familia, dado que sino se cumple tal exigencia, el divorcio no puede ser decretado. Según la recurrente, esta excepciones infringen el principio constitucional de igualdad de todos los seres humanos ante la ley, ya que se establece un tratamiento distinto para las parejas que utilicen las otras causales de divorcio. Reafirma la licenciada **STAFF**, que el principio de igualdad debe ser entendido en un sentido real y razonable, de que todas las personas que se encuentren en idénticas circunstancias jurídicas, deben recibir el mismo tratamiento jurídico.

El Suplente de la Procuradora de la Administración frente al criterio de la actora expone, que el artículo 20 de la Carta Magna garantiza la igualdad de los panameños y extranjeros ante la ley, pero se refiere a situaciones de hecho y no a personas determinadas, tal como se señalara en párrafos anteriores, y que cualquier panameño o extranjero si está casado, puede invocar la causal de divorcio que considere pertinente. En este sentido sigue comentando el funcionario, que los numerales 9 y 10 del artículo 212 del Código de Familia no están reservados a ninguna persona o grupo de personas en particular, es decir, que todos los panameños y extranjeros pueden invocar las causales de mutuo consentimiento y separación de hecho por más de dos años, como cualquier otra causal contenida en el mismo artículo, para plantear su demanda de divorcio, por lo que considera que las condiciones estableciadas en el artículo 218 ibídem, a propósito de las dos causales de divorcio a que se ha hecho referencia, no pugna con la Constitución Política.

Coincidimos con las apreciaciones expuestas por el Suplente del Procurador de la Administración, en virtud de que es totalmente cierto que el artículo 218 del Código de familia no establece desigualdad alguna entre las parejas. En este orden de ideas la igualdad extrema a que hace referencia la parte actora, que según, es el contenido de la norma constitucional transcrita, no es el objetivo de la misma. La igualdad contenida en la disposición en comento, alude a situaciones individuales, personales y no a situaciones de grupo o a condición determinada.

Conceptuamos que no se violenta la norma constitucional, ya que las causales de divorcio enmarcadas en el artículo 212 del Código de Familia prevén situaciones distintas para deshacer el vínculo matrimonial; un grupo tiene un procedimiento básicamente contenciosos, y el otro un procedimiento voluntario o no contencioso, tal como ya lo dijéramos en un inicio. Toda pareja que quiera deshacer el vínculo matrimonial en razón de las causales 9 y 10 del artículo 212 del Código de Familia, se le exigirá que cumpla con los presupuestos contenidos en el artículo 218 del mismo cuerpo legal, y estas exigencias no desvirtúa el principio de igualdad de los seres humanos ante la ley.

Insistimos que el tratamiento preceptuado en el artículo 218 del Código de familia, aplicado a las causales de divorcio contenidas en los numerales 9 y 10 del artículo 212 del mismo Código, que exige que para que el divorcio sea decretado, debe acreditarse en el proceso que la pareja ha resuelto todo lo relacionado a la guarda, régimen de comunicación y de visita y los alimentos de los hijos o hijas que tengan derecho a ellos, no desvirtúa lo previsto en la norma constitucional. Incluso nada obsta a que en el proceso de divorcio por las causales contenidas en los numerales 9 y 10 del Código de la Familia, las partes presenten un escrito donde dejen constancia de este acuerdo. Por tanto no prospera el cargo impetrado.

Otra disposición que se estima conculcada es el artículo 53 de la Constitución Nacional, cuyo contenido es el siguiente:

> "Artículo 53. El matrimonio es el fundamento legal de la familia, descansa en la igualdad de derechos de los cónyuges y puede ser disuelto de acuerdo con la Ley."

El argumento esgrimido por la demandante, consiste en que al condicionarse las parejas que utilizan las causales 9 y 10 del artículo 212 del Código de la Familia al cumplimiento de la exigencia contemplada en el artículo impugnado, aún cuando hayan cumplido con los requisitos exigidos por la ley para su disolución, se está creando un privilegio personal en favor de las parejas que hacen uso de las otras causales, lo que infringe la igualdad de derechos de los cónyuges para disolver el matrimonio de conformidad con la ley.

Por otro lado el Suplente del Procurador de la Administración considera que no existe la mínima posibilidad de que la norma acusada atente contra los derechos de los cónyuges, ya que la norma no se refiere al hombre o a la mujer, sino a las situaciones previstas en el artículo 212, numerales 9 y 10.

No compartimos el criterio expuesto por la proponente, en virtud de que el artículo 218 no prevé una desigualdad como se quiere hacer ver, el mismo sólo establece una serie de requisitos para que se disuelva el vínculo matrimonial cuando la causal esté fundamentada en mutuo acuerdo o separación de hecho por más de dos años. Estas causales pueden ser invocadas por cualquiera de los cónyuges y los presupuestos son aplicados a ambos por igual, y ambos pueden presentar en el curso del proceso de divorcio, antes de la sentencia, el Acuerdo de Reglamentación a que se refiere el artículo 218 del Código de la Familia.

No es cierto que se esté creando un privilegio personal en favor de algunas parejas, al contrario sólo se está condicionando la disolución del vínculo matrimonial cuyo fundamento descansen en las dos causales tantas veces mencionada, en razón de su naturaleza que es eminentemente voluntaria. Es por esto que tampoco prospera la acusación incoada.

Por último, en lo que respecta a la violación del artículo 17, numeral 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), le aplicamos el mismo criterio externado en líneas anteriores a propósito de la alegada inconstitucionalidad del artículo 218 en relación al artículo 53 de la Constitución Política.

Por todo lo expuesto, los Magistrados del Pleno de la Corte Suprema administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley DECLARAN QUE NO ES INCONSTITUCIONAL el artículo 218 del Código de Familia.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS MUÑOZ POPE (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LCDO. LEONEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ EN REPRESENTACIÓN DE TOMÁS ENRIQUE PEREIRA RUIZ CONTRA LOS ARTÍCULOS 124 Y 125 DEL REGLAMENTO DE TRÁNSITO EXPEDIDO MEDIANTE DECRETO N° 160 DE 7 DE JUNIO DE 1993. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La Alcaldesa del Distrito de Panamá ha elevado al Pleno de esta Máxima Corporación Judicial la advertencia de inconstitucionalidad que contra los artículos 124 y 125 del Reglamento de Tránsito expedido mediante Decreto N° 160 de 7 de junio de 1993 formulara el licenciado **Leonel Rodríguez Rodríguez** en nombre y representación de **TOMÁS ENRIQUE PEREIRA RUIZ** dentro del proceso de tránsito que se encuentra en grado de apelación ante la Alcaldía del Distrito Capital.

Esta incidencia reposa en escrito que se presentó ante el Despacho de la señora Alcaldesa, en virtud de recurso de apelación presentado por el advirtiente contra la decisión del Juzgado Segundo de Tránsito, mediante el cual se condena a **TOMÁS PEREIRA RUIZ** a pagar la suma de quince balboas (B/.15.00) por colisión y además a pagar los daños causados al auto operado por Angélica María Campos Jiménez.

Esta Superioridad procede en primer término, al análisis del escrito contentivo de la advertencia presentada, en vías de determinar si el mismo cumple con los requerimientos formales exigidos por el Tribunal, que condicionan la viabilidad de la misma.

En este punto se percata el Tribunal que los artículos 124 y 125 del Reglamento de Tránsito expedido mediante Decreto N° 160 de 7 de junio de 1993 el mismo no serán estudiados dado que las normas ya han sido aplicadas. Tal y como lo reiteró el Procurador de la Nación, al emitir concepto, el artículo 203 de la Constitución dispone que cuando en un proceso se advirtiere, ya sea por parte del funcionario público encargado de impartir justicia o por las partes del proceso, que una norma legal o reglamentaria aplicable es inconstitucional, someterá el asunto al conocimiento del Pleno de la Corte. Esto confirma el hecho de que la disposición no puede haber sido aplicada para que procediera por parte de este Tribunal el cotejo de dichos artículos con la Constitución.

A la conclusión a que ha arribado el Pleno, y que en líneas anteriores ha externado, tiene su fundamento en que el contenido de los artículos 124 y 125 del Decreto N° 160 de 7 de junio de 1993 está dirigido a regular el recurso de apelación que se interpongan en los juicios de tránsito. Estas normas son del tenor siguiente:

> "Artículo 124. La resolución de primera instancia proferida por el Juez de tránsito admite recurso de apelación en los siguientes casos:
>
> a) Cuando la pena sea de arresto o de multa mayor de B/.15.00"
>
> "Artículo 125. El recurso de apelación deberá ser interpuesto al momento de la notificación, expresando la palabra APELO o mediante escrito presentado dentro de las 24 horas siguientes a la notificación y deberá ser sustentado mediante apoderado Judicial."

De acuerdo a lo anterior, es factible proponer el recurso de alzada cuando, entre otros casos, la multa sea mayor de B/.15.00. Si observamos en foja 8, se ha aportado copia del Edicto N° 3124 de 26 de junio de 1995, en la que consta claramente que el recurso de apelación incoado por el advirtiente, fue acogido por la Alcaldía, aplicándose lo preceptuado en la norma mencionada.

En segundo término el artículo 125, también transcrito, fue aplicado desde el momento en que se le dice a la parte que ha apelado, que tiene un término para sustentar su alzada, y que de igual manera ha sido consignado en el Edicto antes citado. Este término fue utilizado en tiempo oportuno por el apoderado judicial de **TOMÁS PEREIRA RUIZ** (ver de foja 11 a 15), lo que nos indica que el contenido de dicha excerta legal fue utilizado tanto por el advirtiente, como por la Alcaldesa del Municipio de Panamá.

Creemos conveniente transcribir el Edicto para que se observe con más

claridad lo que hemos señalado en los párrafos precedentes:

"EDICTO N° 3124

LA SUSCRITA SECRETARIA JUDICIAL DE LA ALCALDÍA DE LA CIUDAD DE PANAMÁ:

HACE SABER:

Que en el expediente que contiene las diligencias seguidas a **TOMÁS E. PEREIRA RUIZ Y ANGÉLICA MARÍA CAMPOS**, por proceso de Tránsito, se ha dictado la siguiente Providencia:

ALCALDÍA DE LA CIUDAD DE PANAMÁ: veintiséis (26) de junio de mil novecientos noventa y cinco (1995) ...

En virtud que las actuaciones administrativas deben surtirse con arreglo a normas de economía procesal, celeridad y eficacia; reduciendo al mínimo los trámites burocráticos sin lesionar los derechos de los interesados y el libre ejercicio de la abogacía, la Suscrita Alcaldesa del Distrito de Panamá, **DISPONE** proveer lo necesario para la simplificación y racionalización de los expedientes administrativos.

En consecuencia, Asúmase el conocimiento del presente proceso procedente del Juzgado de Tránsito, en donde son partes TOMAS **ANGÉLICA MARÍA CAMPOS**, el cual ha sido remitido a este Despacho en virtud del Recurso de Apelación interpuesto contra la Resolución N° 2822 de 22 de mayo de 1995.

En consecuencia, practíquense cuantas diligencias sean necesarias para el completo esclarecimiento de los hechos investigados.

Concédase en primer lugar al **APELANTE**, el término de tres (3) días hábiles, siguientes a la notificación de la presente providencia para que **SUSTENTE** su recurso y aduzca en su libelo los medios de pruebas pertinentes, y en caso de solicitar la reconstrucción de los hechos y la prueba pericial, indique el (los) punto (s) sobre el cual recaerá esta última, y designe expresamente el nombre de la persona (s) que desempeñará el cargo (s).

Vencido el término anterior, se concede a la contraparte el término de tres (3) días hábiles, para **OPONERSE** al recurso promovido, con las mismas cargas y deberes procesales que al **APELANTE**.

A la parte que solicita la práctica de una prueba, le corresponderá sufragar previamente los gastos que ella implique de conformidad con los artículos 782, 786, 951 del Código Judicial.

El recurso de apelación deberá ser sustentado mediante apoderado judicial (Artículo 125 del Decreto Ejecutivo N° 160 del 7 de junio de 1993).

Delégase a la Directora o Sub-Directora de Legal y Justicia, la facultad de firmar las resoluciones de mero trámite e impulso procesal hasta colocar el negocio en estado de decidir, caso en el cual debería remitirse a esta Superioridad la resolución final para su respectiva firma. Fundamento de Derecho: Artículos 1122 del Código Judicial y Artículos 113 y 125 del Decreto Ejecutivo N° 160 de 7 de junio de 1993. Notifíquese y Cúmplase;

La Alcaldesa, (fdo.) MAYIN CORREA.

Secretaria Judicial (fdo.) LICDA. LINDA A. LEUDO R. LALR/Enelda C.

Y para que sirva de formal notificación a las partes, se fija el presente **EDICTO**, en lugar visible de esta Alcaldía hoy, 5 de julio de 1995, a las tres de la tarde y por el término de veinticuatro (24) horas.

LICDA. LINDA A. LEUDO R.
Secretaria Judicial."

(Lo subrayado es nuestro).

En estas circunstancias, y en virtud de todo lo expuesto, esta Corporación Judicial debe negarle curso legal a la advertencia de inconstitucionalidad presentada.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la advertencia presentada por el licenciado Leonel Rodríguez Rodríguez en nombre y representación de TOMÁS ENRIQUE PEREIRA RUIZ.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TRIBUNAL DE INSTANCIA

SUMARIAS INSTRUIDAS AL LEGISLADOR FRANZ OLMEDO WEBER ZALDIVAR POR EL PRESUNTO DELITO CONTRA LA FE PÚBLICA EN PERJUICIO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE CONDUCTORES DE TAXI (FENACOTA). MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, QUINCE (15) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El 31 de octubre de 1995, ingresó a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, el expediente que contiene las copias compulsadas del sumario instruido al señor **FRANZ OLMEDO WEBER ZALDIVAR**, actual legislador de la República, por delito contra la fe pública en perjuicio de la **FEDERACIÓN NACIONAL DE CONDUCTORES DE TAXI (FENACOTA)**.

Las copias arriba mencionadas, fueron remitidas por la Juez Municipal del Distrito de Chitré, al darle cumplimiento al auto calendado el 23 de octubre de 1995 (fs. 470) fundado en lo dispuesto por el artículo 87 del Código Judicial, que le atribuye al Pleno de la Corte Suprema de Justicia el conocimiento de las causas por delitos comunes cometidos por los miembros de la Asamblea Legislativa.

Mediante providencia de 2 de noviembre (fs. 476), se corrió traslado del presente expediente al Procurador General de la Nación, quien a través de su Vista N° 52 de 27 de diciembre de 1995, contestó el traslado informando que por conducto de la Personera del Distrito de Chitré, había recibido copias auténticas del mismo expediente, por lo que dispuso enviar todo lo concerniente al caso en estudio a la Asamblea Legislativa, para así dar cumplimiento a lo preceptuado por el numeral 2 del artículo 154 de la Constitución y el 203 del Reglamento Interno. Esa diligencia, añade el Procurador, la llevó a cabo a través de su Oficio N° DPG-1427-95 de 8 de septiembre de 1995 y a la fecha aún espera que el Órgano Legislativo se pronuncie al respecto, autorizando o no la investigación penal de uno de sus actuales miembros.

Como quiera que a la luz de los artículos 154, numeral 2° de la Constitución, 203 de la Ley 49 de 1984 reformada por la Ley 7 de 1992 y el numeral 2 del artículo 87 del Código Judicial, corresponde a la Asamblea Legislativa conocer de las acusaciones y denuncias que se presenten contra alguno de sus miembros, a fin de determinar si hay lugar a la apertura o formación de causa, el Pleno debe remitir el expediente a esa Corporación Legislativa, sin perjuicio del envío hecho por el Procurador General de la Nación el 8 de septiembre de 1995, con relación al mismo caso.

Cabe anotar que la fase instructora de este negocio penal se inició por denuncia presentada en noviembre de 1992, contra el señor Weber y otras personas, cuando aquél aún no estaba investido de inmunidad parlamentaria.

En consecuencia, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DISPONE remitir el presente expediente a la Asamblea Legislativa para que proceda conforme a lo establecido en los artículos 204 y concordantes de su Reglamento Interno.

Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

QUERELLA POR SUPUESTO DELITO DE CALUMNIA PRESENTADA POR LCDO. JUAN MATERNO VÁSQUEZ EN REPRESENTACIÓN DE MAYÍN CORREA DELGADO CONTRA EL DR. GUILLERMO MÁRQUEZ AMADO, MAGISTRADO DEL TRIBUNAL ELECTORAL. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Juan Materno Vásquez, actuando en representación de OMAIRA CORREA DELGADO, interpuso ante la Procuraduría General de la Nación querella contra GUILLERMO MÁRQUEZ AMADO, magistrado del Tribunal Electoral, "para que sea procesado, juzgado y condenado como responsable del delito de calumnia cometido contra la honra de nuestra poderdante" (sic).

La querella fue presentada el 16 de noviembre de 1993, cuando Márquez Amado fungía como magistrado sustanciador en proceso penal electoral que se le siguió a la querellante.

Según los términos del libelo de la querella, "el Magistrado Sustanciador, Dr. GUILLERMO MÁRQUEZ AMADO, cada vez que es abordado por los representantes de la prensa escrita y hablada, le imputa a la Ex-Alcaldesa el delito específico de 'USO DE FONDOS PÚBLICOS EN POLÍTICA PARTIDISTA'. Y esta imputación es calumniosa, ya que ni ha sido denunciada por ese delito electoral, ni ha sido investigada por el mismo, ni del sumario queda establecida la existencia de ese hecho punible" (f. 3).

Agrega la querellante que en la edición de 6 de noviembre de 1993 del diario La Prensa aparece publicada información referente al llamamiento a juicio dictado por el Tribunal Electoral, "en la que se atribuye al Magistrado Sustanciador, Dr. GUILLERMO MÁRQUEZ AMADO, la manifestación, en el sentido de que:

> "Los Magistrados del Tribunal Electoral confirmaron ayer el llamamiento a juicio contra la ex-alcaldesa del Distrito Capital

> Mayín Correa, por el presunto delito electoral tipificado en el Código Electoral, respecto al uso de fondos públicos (sic) en política partidista". (Las subrayas son mías).

Esa imputación es falsa. De ser cierta constituiría delito doloso, tanto electoral como de peculado. Pero es falsa, por tanto, calumniosa" (f. 4).

A la querella se acompañan como pruebas: un ejemplar del diario La Prensa, edición del sábado 6 de noviembre de 1993; dos grabaciones magnetofónicas con declaraciones del magistrado Márquez Amado y se solicita se le reciba declaración jurada a la periodista Lastenia Murillo Muñoz.

Mediante auto cabeza de proceso de 22 de noviembre de 1993, la Procuraduría General de la Nación dispuso iniciar la instrucción sumarial correspondiente, procediendo a la transcripción de las cintas magnetofónicas y a la recepción del testimonio de Lastenia María Murillo Muñoz. De igual modo, mediante resolución de 15 de diciembre de 1993, la Procuraduría dispuso enviar copias autenticadas de las piezas pertinentes de la actuación al magistrado Márquez Amado, con la solicitud de que rindiera declaración en los términos que establece el artículo 2129 Código Judicial, lo cual fue cumplido mediante nota de 12 de enero de 1994.

En su Vista N° 12 de 8 de marzo del año en curso, el agente de instrucción externó opinión en el sentido de que "el hecho que motiva la presente querella no se ha ejecutado, como bien se desprende de los elementos probatorios", por lo que solicitó a esta Corporación de Justicia la emisión de un sobreseimiento definitivo.

Tras practicar las diligencias de ampliación de las sumarias que fueran ordenadas por este tribunal mediante resolución de 4 de octubre de 1995 (fs. 47 y 48), en la Vista N° 50 de 19 de diciembre de 1995, visible a folios 65 y 66, el Procurador General reitera su solicitud en el sentido de que se dicte un sobreseimiento definitivo e impersonal en esta causa.

Como viene dicho, se le atribuye al magistrado Márquez Amado haberle imputado a la querellante, a través "de la prensa escrita y hablada" (sic), la comisión de un "delito doloso, tanto electoral como de peculado", consistente en el uso de fondos públicos en política partidista.

Además de la publicación aparecida en el diario La Prensa, y de las dos grabaciones contentivas de las entrevistas, también figuran en el expediente como material probatorio declaraciones rendidas por las periodistas Lastenia María Murillo (fs. 14-16), Carmen Villamonte Coronado (fs. 60-62) y Jenny Lee Martínez (fs. 63-64).

En cuanto a la prueba documental, la información del diario La Prensa aparece bajo el título: "**Confirman llamamiento a juicio a Mayín Correa**" (f. 7). La noticia da cuenta de declaraciones en las que se afirma que el llamamiento a juicio de Correa tiene lugar por "el presunto delito electoral tipificados (sic) en el Código Electoral, respecto al uso de fondos públicos en política partidista" (f. 7).

Las grabaciones contienen declaraciones rendidas por Márquez Amado a la estación de radio KW Continente. En la primera de ellas el declarante no se refiere al proceso seguido a Correa, por lo que carece de eficacia probatoria esta causa.

La lectura de la publicación aparecida en el diario La Prensa permite, con toda facilidad, tener como cierta la afirmación hecha por el querellado, en el sentido de que "la información aparecida (no) fue obtenida del suscrito" (f. 20), sino por la Secretaria General del Tribunal Electoral, tal como se desprende del párrafo segundo de la noticia, que se transcribe a continuación:

> "*La secretaria general del Tribunal, Melva D'Anello, informó* que, además de la ex alcaldesa Correa, se llamó a juicio a Alexis Morales y a Enrique Delgado Bolaños por el mismo delito" (f. 7, cursivas de

la Corte).

A idéntica conclusión se llega luego de la lectura del sexto párrafo de la publicación, que se transcribe seguidamente.

> "*D'Anello indicó* que en estos momentos la demanda está en proceso de notificación y una vez culminado este proceso, le corresponderá al magistrado ponente señalar fecha de audiencia" (f. 7, cursivas de la Corte).

La autora de la noticia, Lastenia Murillo M., al rendir declaración jurada, visible a fojas 14-16 de las sumarias, manifiesta no haber entrevistado al magistrado Márquez Amado. Para mayor claridad se transcribe parte de la referida declaración.

> "*La entrevista que yo efectué no fue al Magistrado Márquez, sino a la Secretaria General del Tribunal Electoral Melva D Anello*, y fue en una conferencia de prensa improvisada en el despacho de la Secretaria. PREGUNTADA: Diga la declarante si en algún momento la Secretaria General del Tribunal Electoral, licenciada Melva D Anello, manifestó hablar, en su conferencia de prensa, a nombre del Magistrado Márquez Amado. CONTESTO: No, para nada, *ella habló como Secretaria General del Tribunal Electoral*. PREGUNTADA: Diga la declarante si en algún momento de la conferencia de prensa, o antes o después de la misma tuvo usted acceso al Magistrado Márquez Amado en donde él se refiriera a la señora MAYÍN CORREA. CONTESTÓ: *No, ni antes ni después tuve acceso al Magistrado Márquez, solamente con la Secretaria General*" (f. 15, cursivas de la Corte).

A folios 58 y 59 aparece la transcripción de la entrevista que realizó la periodista Jenny Lee Martínez al magistrado Márquez Amado, el 16 de noviembre de 1993. En sus declaraciones, el inculpado hace referencia al proceso que se le siguió a Correa Delgado, explicando el estado en que se encontraba y los trámites a seguir, de conformidad con las normas del Código Electoral. En cuanto a la imputación de uso de fondos públicos para política partidista, que según el apoderado judicial de Correa configura el delito de calumnia, en su declaración Márquez sostiene lo siguiente:

> "Mire, **en el caso de ella nosotros estamos llamando por la utilización de recursos del Estado para la constitución de un partido político**; no a ella únicamente, sino a 4 personas y le pedimos al fiscal electoral que investigara a otras más que aparecían de las investigaciones ya hechas como que estaban comprometidas con el hecho" (negrillas de la Corte).

"De tal manera que mal pueden ser consideradas tales declaraciones como calumniosas cuando las mismas encuentran su fundamento en el Auto de Llamamiento a Juicio del Tribunal Electoral del 16 de septiembre y del Auto de 2 de noviembre de 1993, en el que se confirma la resolución anterior" (fs. 38-39), según la valoración que del mérito de las sumarias realiza el agente instructor de la causa, opinión que comparte este Tribunal Colegiado.

Del examen anterior emerge, entonces, la evidencia de que, tanto la prueba sumaria suministrada, así como los testimonios recabados durante la instrucción sumarial, son totalmente ineficaces para sustentar la pretensión de la querellante.

En mérito de lo expuesto, el PLENO de la CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECRETA SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO E IMPERSONAL en esta causa, con fundamento en el numeral 1° del artículo 2210 del Código Judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO SALAS

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE HENRY J. FAARUP M. CONTRA EL JUEZ PRIMERO DE CIRCUITO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. (CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO). MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Magistrado **CARLOS E. MUÑOZ POPE** ha solicitado que se le separe del conocimiento de la acción de habeas corpus presentada a favor del señor **HENRY J. FAARUP M.**, contra el Juez Primero de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá.

El Magistrado MUÑOZ POPE fundamenta su petición en lo siguiente:

"Debo declararme impedido en esta ocasión, ya que todos deben haber observado que suscribí la demanda en primera instancia, como socio de la firma MUÑOZ y ASOCIADOS.

Me considero, por tanto, incluido en la causal prevista en el artículo 749, numeral 5 del Código Judicial, pues soy el apoderado judicial del demandante."

En opinión de los suscritos, la situación descrita por el Magistrado MUÑOZ POPE corresponde a la norma invocada, por lo que debe ser separado del conocimiento de la presente acción de habeas corpus.

Por tanto, los suscritos Magistrados del PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARAN LEGAL el impedimento manifestado por el Magistrado CARLOS E. MUÑOZ POPE y, en su lugar, DISPONEN llamar al Magistrado Suplente que se escoja mediante sorteo.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA

(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PRIMERA DE LO CIVIL

ENERO 1996

ACLARACIÓN DE SENTENCIA

ACLARACIÓN DE SENTENCIA EN EL PROCESO QUE RODUSA CORPORATION, S. A. Y BOLÍVAR ARIEL CARRERA PITTÍ RECURREN EN CASACIÓN EN LA EXCEPCIÓN DE PAGO PRESENTADA EN EL PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO QUE EL GRUPO DE INVERSIONES EL TRÉBOL, S. A. LE SIGUE A RODUSA CORPORATION, S. A. Y ARIEL BOLÍVAR CARRETA PITTÍ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado CARLOS A. JONES, en su calidad de apoderado judicial de la empresa RODUSA CORPORATION, S. A. y ARIEL BOLÍVAR CARRERA PITTÍ, partes demandadas dentro del proceso ejecutivo hipotecario que les sigue GRUPO INVERSIONES EL TRÉBOL, S. A., solicita a esta Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, "ACLARACIÓN Y REFORMA DE SENTENCIA", sobre el fallo del 16 de noviembre de 1995, mediante el cual esta Corporación de Justicia NO CASA la sentencia dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial el 21 de diciembre de 1994.

En la solicitud de aclaración de la sentencia antes mencionada, se sostiene que:

"...

a) La sentencia no deja determinado el monto líquido por el cual debe mantenerse el mandamiento de pago; ya que, no existe constancia alguna en autos de que el Primer Banco de Ahorros, S. A., haya pagado la suma correspondiente a la promesa irrevocable de pago a favor de RODUSA, S. A. y Ariel Bolívar Pittí.

b) La condena en costas no procede en virtud de que la parte demandada ha actuado de buena fe; máxime que el representante legal de la sociedad demandada ha incurrido en los delitos de falsedad, de usura y de estafa como bien lo ha señalado el Segundo Tribunal Superior de Justicia al ordenar su indagatoria. En consecuencia solicitamos se aclare vuestra sentencia del 10 de noviembre del presente año y se indique a cuánto asciende el mandamiento de pago librado en contra de los demandados, y se reforme la mencionada sentencia en el sentido de eliminar la condena en costas impuesta a nuestros poderdantes.

DERECHO: Artículos 986 y siguientes, y 1057 y siguientes del código judicial".

Una vez analizado el presente negocio, la Corte considera que no procede la aclaración, toda vez que, como es evidente, la misma no recae en los presupuestos contenidos en el artículo 986 del Código Judicial.

Como es sabido, el precitado artículo del Código Judicial, sólo permite "aclarar las frases oscuras o de doble sentido", sin revocarse ni reformarse en los principal. En consecuencia, al no existir frases oscuras o de doble sentido en la parte resolutiva de la sentencia dictada por la Corte; y en la solicitud de aclaración tampoco se hace alusión a una situación de esa naturaleza, con respecto a la parte resolutiva del fallo comentado, es evidente que la aclaración solicitada es manifiestamente improcedente.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ACCEDE a la ACLARACIÓN solicitada.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Encargado

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN CIVIL

DIOGENES SANTAMARÍA ARAUZ RECURRE EN CASACIÓN EN EL INCIDENTE DE LEVANTAMIENTO DE SECUESTRO PROMOVIDO POR BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO DENTRO DE LA ACCIÓN DE SECUESTRO INCOADA POR DIOGENES SANTAMARÍA ARAUZ CONTRA JOSÉ ÁNGEL GUERRA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO SALAS. PANAMÁ, ONCE (11) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma de abogados **MORENO Y FÁBREGA** en su condición de abogados sustitutos del señor **DIOGENES SANTAMARÍA ARAUZ**, ha interpuesto recurso de casación contra el auto de 15 de junio de 1995, proferido por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial en el Incidente de Levantamiento de Secuestro promovido por el Banco de Desarrollo Agropecuario, dentro la acción de secuestro incoada por DIOGENES SANTAMARÍA ARAUZ contra JOSÉ ÁNGEL GUERRA JIMÉNEZ.

Cumplidas las reglas de reparto el negocio se fijó en lista a fin de que las partes alegaran en cuanto a la admisibilidad del recurso, lo que ninguna hizo.

Luego de realizar el examen de rigor del presente recurso de casación, consideramos que cumple a cabalidad con las exigencias que establece el artículo 1165 del Código Procesal, es decir que:

1. La resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley;

2. El recurso ha sido interpuesto en tiempo;

3. El escrito por medio del cual fue interpuesto reúne todos los requisitos ordenados por el artículo 1160; y,

4. La causal expresada es de las señaladas por la ley.

Por lo que se deja expuesto, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ADMISIBLE el recurso de casación presentado por DIOGENES SANTAMARÍA ARAUZ, dentro Incidente de Levantamiento de Secuestro promovido por el BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO dentro de la acción de Secuestro incoada por éste contra JOSÉ ÁNGEL GUERRA.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO SALAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EL ESTADO RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A CORPORACIÓN DE DESARROLLO HOTELERO, S.A. MAGISTRADO PONENETE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ ONCE (11) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Dentro del proceso ordinario instaurado por **EL ESTADO** contra **CORPORACIÓN DE DESARROLLO HOTELERO, S.A.**, el apoderado judicial de la parte demandante ha presentado recurso de reconsideración contra la resolución proferida por esta Sala Civil, el 27 de noviembre de 1995. Dicha decisión declaró inadmisible los recursos de casación interpuestos por la Fiscalía Segunda Superior del Primer Distrito Judicial y por El Estado, dentro del proceso antes mencionados.

Al respecto, es pertinente el contenido del artículo 1168 del Código Judicial, que a la letra dice:

> **"ARTÍCULO 1168.** Contra las resoluciones de la Corte sobre corrección o sobre admisibilidad no cabe recurso alguno."

Del texto transcrito se concluye que el recurso de reconsideradción solicitado es improcedente.

En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RECHAZA DE PLANO el recurso de reconsideración presentado por el Licenciado Roberto Enrique Fuentes, en representación del Estado.

Notifíquese

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) ELIGIO SALAS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) SONIA. F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ENVASES DEL ISTMO, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE COCA COLA DE PANAMÁ (CÍA. EMBOTELLADORA), S. A. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ ONCE (11) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense Ortega Durán y Asociados, actuando en nombre y representación de la sociedad **ENVASES DEL ISTMO, S. A.**, ha presentado recurso de casación contra la sentencia proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, el 15 de septiembre de 1995, dentro del proceso ordinario instaurado por **COCA COLA DE PANAMÁ (CÍA. EMBOTELLADORA), S. A.** contra la empresa recurrente.

Cumplidas las formalidades inherentes a esta clase de negocio, corresponde a la Sala decidir si el recurso interpuesto llena los requisitos exigidos por los artículos 1160 y 1165 del Código Judicial, para su admisibilidad.

Se advierte que la resolución cuya impugnación se solicita, es susceptible de este recurso extraordinario, por tratarse de una sentencia proferida en segunda instancia, dentro de un proceso ordinario con una cuantía superior a los cinco mil balboas.

Consta en autos que el recurso fue anunciado y formalizado en tiempo oportuno y por persona idónea para ello.

En relación con el libelo contentivo del recurso, la Corte observa que se trata de casación en el fondo, en la que se han invocado dos causales de las contempladas por el artículo 1154 del Código Judicial.

Los motivos que le sirven de fundamento a cada una de ellas, han sido planteados correctamente y son congruentes con dichas causales. En ambos casos, las disposiciones legales que se consideran infringidas y la explicación de dichas infracciones, cumplen con las formalidades legales exigidas.

Por tanto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de casación en el fondo, propuesto por la firma forense Ortega Durán y Asociados, en representación de ENVASES DEL ISTMO, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) ELIGIO SALAS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HILDA AURA BARAHONA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DE OPOSICIÓN A TITULO NACIONAL QUE LE SIGUE SAMUEL BARAHONA. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, ONCE (11) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Dentro del proceso ordinario de oposición a título de dominio instaurado por el señor **SAMUEL BARAHONA** contra la señora **HILDA BARAHONA**, el apoderado judicial de la parte demandante ha presentado recurso de casación contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, el 21 de septiembre de 1995.

Cumplidas las ritualidades procesales para esta clase de negocio, corresponde a la Sala determinar si el presente recurso cumple con las exigencias de la ley para su admisibilidad.

Se observa que la resolución cuya impugnación aquí se solicita es susceptible de recurso de casación, por tratarse de una sentencia proferida en segunda instancia, por un tribunal superior, dentro de un proceso de oposición a título de dominio.

Consta en autos que el recurso se anunció y presentó en tiempo oportuno y por persona hábil.

El escrito por medio del cual fue formalizado reúne, de manera general, todos los requisitos exigidos por el artículo 1160 del Código Judicial y la única causal de fondo invocada, es de las contempladas por el artículo 1154 del citado Código.

En consecuencia, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de casación presentado por el apoderado judicial del señor SAMUEL BARAHONA.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) ELIGIO SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala Civil

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SANTIAGO SALDAÑA DEL CID Y EDGAR ELÍAS SALDAÑA PALMA RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUEN A JULIO CESAR OLIVEIRA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DOCE (12) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Mediante resolución dictada por esta Sala, de fecha doce (12) de diciembre de mil novecientos noventa y cinco (1995), se ordenó la corrección del recurso de casación propuesto por SANTIAGO SALDAÑA DEL CID y EDGAR ELÍAS SALDAÑA PALMA, mediante apoderado judicial, dentro del proceso ordinario que le ha seguido a JULIO CÉSAR OLIVEIRA. La Secretaría de la Sala de lo Civil, ha remitido a este Despacho el recurso de casación corregido dentro del término que establece la ley, razón por la cual precisa ahora que la Sala se pronuncie sobre la admisibilidad del recurso presentado, tomando en cuenta para ello lo que establecen los artículos 1160 y 1165 del Código Judicial.

La resolución impugnada es susceptible del recurso de casación y el mismo fue interpuesto en tiempo oportuno. Sin embargo, se indicó la existencia de algunos defectos formales que deberían subsanarse.

La Sala observa que el casacionista cumplió con el mandato de corrección, por lo cual procede a aceptar este recurso y, en términos generales, reúne los requisitos que exige la ley.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA ADMISIBLE el recurso de casación, en el fondo, propuesto por SANTIAGO SALDAÑA DEL CID y EDGAR ELÍAS SALDAÑA PALMA, mediante apoderado judicial.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO SALAS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

PATRICIO LEZCANO GANTES, MOLINO LEZCANO, S. A. Y BIENES RAÍCES LEZCANO, S. A. RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUEN A GENEROSO MORALES MUÑOZ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, QUINCE (15) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado ANTONIO RÍOS RUIZ, en su carácter de apoderado judicial de PATRICIO LEZCANO, MOLINO LEZCANO, S. A. y BIENES RAÍCES LEZCANO, S. A. ha promovido recurso de casación contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial el día 14 de agosto de 1991 en el proceso ordinario que le sigue a GENEROSO MORALES MUÑOZ.

Recibido el expediente y luego de repartido, se fijó en lista durante seis (6) días para que dentro de los tres primeros la parte opositora alegara y en los restantes replicara el recurrente. Sólo presentó escrito la parte recurrente. Pasa la Sala a resolver acerca de la admisibilidad del recurso.

La resolución impugnada es de aquéllas contra las cuales procede recurrir en casación. Se trata de una sentencia dictada por un Tribunal Superior de Justicia en segunda instancia en un proceso de conocimiento en donde se ventilan intereses particulares con una cuantía mayor de CINCO MIL BALBOAS (B/.5,000.00).

La causal invocada es una de las contempladas en el artículo 1154 del Código Judicial. Los motivos son congruentes con la causal.

En cuanto a las normas infringidas han sido señaladas en el escrito y en forma aceptable se explica como se da su quebrantamiento.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA ADMISIBLE el recurso de casación, en el fondo, propuesto por ANTONIO RÍOS RUIZ, mediante apoderado judicial.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO SALAS
(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Encargado

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ROBBIN FRANKLIN MITCHELL RODRÍGUEZ Y JEANNETTE MARY MITCHELL RODRÍGUEZ RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE FILIACIÓN POST-MORTEM INCOADO POR DEBORA GARCÍA DE CARUSONE CONTRA EARL FRANKLIN MITCHELL (Q. E. P. D.) MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense **ICAZA, GONZÁLEZ-RUIZ & ALEMÁN**, en su condición de apoderados especiales de **ROBBIN FRANKLIN MITCHELL RODRÍGUEZ y JEANNETTE MARIE MITCHELL RODRÍGUEZ O JEANNETTE MARIE CHIARI RODRÍGUEZ**, han interpuesto recurso de casación contra la Sentencia de 30 de agosto de 1995, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, dentro del Proceso de Filiación que **DEBORA GARCÍA DE CARUSONE le sigue a EARL FRANKLIN MITCHELL (Q. E. P. D.).**

Cumplidas las reglas de reparto el negocio se fijó en lista para que las partes alegaran sobre la admisibilidad del recurso, término que ambos aprovecharon presentando sus respectivos escritos, visibles a fojas 155-158 (del opositor) y de 159-160 (del recurrente).

Por la naturaleza del proceso se corrió traslado del expediente al señor Procurador General de la Nación, con la finalidad que emitiera concepto sobre la admisibilidad del presente recurso extraordinario.

Sobre el particular, el Jefe del Ministerio Público se pronunció mediante Vista N° 27 de 11 de diciembre de 1995 estimando procedente que la Sala Civil ordene al recurrente enmendar el recurso, en el aspecto de citar normas sustantivas y explicar el concepto de su infracción, como consecuencia del error probatorio atribuido al fallo impugnado (fs. 162 a 163).

Seguidamente se procede al examen del recurso en atención a las exigencias que determina el artículo 1165 del Código de Procedimiento Civil:

> "1. La resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley;
> 2. El recurso ha sido interpuesto en tiempo;
> 3. El escrito por medio del cual fue interpuesto reúne todos los requisitos ordenados por el artículo 1160 y,
> 4. La causal expresada es de las señaladas por la ley".

Examinado el libelo de formalización del recurso, visible a fs. 144 a 148, a juicio de la Sala, concurren los requisitos primero, segundo y cuarto, antes citado.

En cuanto al tercero, se aprecia que no ha sido cumplido a cabalidad, pues se ha incurrido en una omisión respecto al contenido de dos de los presupuestos que determina el artículo 1160 ibídem.

En ese sentido, la referida norma establece los tres aspectos fundamentales

que debe contener el escrito de formalización del recurso de casación, que son:

1. Determinación de la causal o las causales que invoque;

2. Los motivos que sirven de fundamento a la causal; y,

3. La citación de las normas de derecho infringidas y explicación de cómo lo han sido.

Además de la determinación de dichos apartados, la doctrina y la jurisprudencia sobre este extraordinario recurso de casación han señalado el contenido que cada uno de ellos debe mantener, conforme a la técnica de casación.

En este caso la causal invocada es de aquellas que para el fondo señala el artículo 1154 del Código Judicial, y ha sido determinada según lo preceptúa la norma, es decir, se expresa la "Infracción de Normas Substantivas de Derecho, por Error de Derecho en la apreciación de la prueba, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia impugnada"

Los motivos que se establecen como fundamento de la causal, son congruentes con la misma, en cuanto al error de apreciación de la prueba que se endilga al sentenciador, sin embargo, no aluden a la violación de la ley sustancial que se produce por tal infracción probatoria, o sea, no se observa en los motivos el cargo que alude a la vulneración de derechos y obligaciones a consecuencia de la errada apreciación de la prueba.

La omisión anotada en los motivos sobre el cargo relativo a la violación sustancial, también se aprecia en el siguiente apartado del recurso, dedicado a la citación y explicación de las normas consideradas infringidas, ya que, no se alude a ninguna norma de carácter sustantivo o material, lo que es fundamental al alegar las causales de fondo, entre las que se incluye la invocada que se refiere al yerro probatorio; error este que apenas es un medio para llegar a la determinación de la violación de la ley sustantiva.

En relación al contenido de los diversos apartados del recurso de casación cuando se invoca alguna de las causales probatorias, el Profesor Jorge Fábrega P. en su obra "CASACIÓN CIVIL Y LABORAL" ha señalado:

"...

a) Debe invocarse expresamente la causal, debidamente individualizada.

b) Los cargos probatorios tienen las siguientes etapas:

1° Infracción de las normas probatorias, que conducen a 2° Infracción de normas substantivas.

2° Debe indicar el recurrente la prueba no apreciada como corresponde, o erróneamente apreciada, o no tomada en cuenta o dada por existente por la sentencia sin que existiere.

3° Citación de las normas de derecho infringidas y explicación de como lo han sido. Lo indicado pareciera que se cite primero las normas probatorias y después las de derecho tomada en cuenta o material.

c) El error probatorio debe incidir en la parte resolutiva;

d) Debe invocarse la norma probatoria violada. Si se trata de error de hecho, debe citarse la norma que consagra la existencia de la prueba; en caso de error de derecho, debe invocarse la norma que establece el valor de la prueba.

e) La operación probatoria debe incidir en normas de derecho sustancial, violada por el error de hecho o de derecho;

f) En ambos casos debe invocarse la norma substantiva infringida como consecuencia del error probatorio. Ello se debe a que la norma que regula el objeto litigioso es violado como resultado de la errónea operación probatoria." (Fs. 141).

En consecuencia, el recurrente debe incluir en el recurso los requerimientos aludidos pues la forma en que se encuentra presentado lo hace ininteligible, circunstancia que torna improcedente su admisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley ORDENA LA CORRECCIÓN del recurso de casación interpuesto por ROBBIN FRANKLIN MITCHELL RODRÍGUEZ y JEANNETTE MARY MITCHELL RODRÍGUEZ contra la Sentencia de 30 de agosto de 1995 dictada por el Primer Tribunal Superior, dentro del proceso de Filiación Post-Mortem instaurado por DEBORA GARCÍA DE CARUSONE contra EARL FRANKLIN MITCHELL (q. e. p. d).

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Encargado

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ANDRÉS ÁVILA MORENO RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DE OPOSICIÓN QUE LE SIGUE A SIMÓN CAMARGO. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Mediante resolución dictada el veintidós (22) de diciembre de mil novecientos noventa y cinco (1995), esta Sala ordenó la corrección del recurso extraordinario, en el fondo, propuesta por la representación judicial de el señor ANDRÉS ÁVILA MORENO dentro del proceso ordinario de oposición que le sigue a SIMÓN CAMARGO. Para tal fin, concedió el término de cinco (5) días conforme lo pauta el artículo 1166 del Código Judicial. Dicho término ha vencido, sin que se corrigiera el recurso, es decir, ha precluído el término.

La preclusión del término para la corrección trae consigo la declaración de inadmisibilidad del recurso con la consiguiente imposición de costas para la parte recurrente, tal como lo señala el artículo 1166 ibidem.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA INADMISIBLE el recurso de casación, en el fondo, propuesto por el señor ANDRÉS ÁVILA MORENO, mediante apoderado judicial.

Se condena en costas, a la parte recurrente, por la suma de Cincuenta Balboas (B/.50.00).

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO SALAS
(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Encargado

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

BRINK S PANAMÁ, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A FERRARI INTERNACIONAL (SOCIEDAD EXTRANJERA). MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO

FÁBREGA ZARAK. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense VÁSQUEZ, AZCARRAGA Y ASOCIADOS, en su condición de apoderados especiales del BRINK S PANAMÁ, S. A., oportunamente formalizaron recurso de casación contra la sentencia de 4 de septiembre de 1995, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia en el proceso ordinario que le sigue a la persona jurídica extranjera FERRARI INTERNACIONAL.

Fijado en término el negocio para alegar acerca de la admisibilidad, solamente el recurrente presentó escrito en donde solicitó se proceda a aceptar la impugnación a la sentencia. Procede el Tribunal de Casación a determinar tal como lo disponen los artículos 1165 y 1160 del Código Judicial si procede la admisibilidad.

La resolución que se impugna es de aquéllas permitidas por la ley y el recurso fue presentado oportunamente.

El recurso se presentó en el fondo y se alegaron dos causales.

En cuanto a la primera causal que es infracción de normas sustantivas de Derecho en el concepto de interpretación errónea, que influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo, está consagrada en el artículo 1154 del Código Judicial.

Los motivos en que se fundamenta la causal están debidamente señaladas.

No sucede lo mismo cuando menciona las normas de derecho infringidas y expone como han sido violadas. La técnica de casación señala que debe mencionarse la norma que se considere infringida y, a renglón seguido, se debe dar una explicación de cómo ha sido infringida esa norma. Posteriormente se debe señalar la otra norma infringida y la explicación de cómo ha sido quebrantada esa disposición. No esta permitido, como ha hecho el recurrente, mencionar en forma conjunta, en primer lugar los artículos infringidos y, en segundo lugar, la explicación de la violación esos artículos.

Debe corregirse el recurso respecto a esta anomalía.

En cuanto a la segunda causal de infracción de normas sustantivas de derecho en el concepto de Violación Directa, lo que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la Sentencia, es una de las consagradas en la ley.

En cuanto a los motivos que sirven de fundamento a la causal debe aclararse que los mismos tienen como finalidad señalar, en forma específica, los hechos o circunstancias de los cuales resulte la violación del derecho consagrado en la norma que se aplica o la norma que se deja de aplicar, sin adentrarse a otros aspectos ajenos a la causal. No corresponde en este momento realizar alegaciones que deben hacerse en el momento oportuno, luego de producirse la admisibilidad del recurso.

Vale recordar que es impropio señalar como fundamento de la causal de violación directa, como lo hace el casacionista en el motivo tercero, que el Tribunal aplicó "en forma exclusiva y bajo una interpretación errada, dos artículos del Código Judicial, ..." Todo ello debe corregirse en esta causal.

En cuanto a la explicación de la norma infringida no debe el recurrente hacer mención de la violación de otros artículos del Código Judicial distinto al que sostiene fue infringido.

No es técnicamente posible referirse a normas constitucionales dentro de la explicación de la infracción de las normas de derecho sustantivas que se dicen

violentadas.

Debe corregirse el recurso en estos términos.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA LA CORRECCIÓN del recurso de casación en el fondo, interpuesto por BRINK S PANAMÁ, S. A., mediante apoderado judicial, para lo cual se concede el término de cinco (5) días.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) ELIGIO SALAS
(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Encargado

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ALBERTO SÁNCHEZ, EFRAÍN ALCIDES CORREA Y JOSÉ A. ISAZA, RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO PROPUESTO POR AGROGANADERÍA SANTA FE, S. A. CONTRA EL MUNICIPIO DE TABOGA, ALBERTO SÁNCHEZ, EFRAÍN ALCIDES CORREA Y JOSÉ A. ISAZA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Mediante resolución de 16 de noviembre pasado, la Sala Civil ordenó la corrección del recurso de casación en el fondo propuesto por ALBERTO SÁNCHEZ, EFRAÍN ALCIDES CORREA y JOSÉ A. ISAZA dentro del proceso ordinario que AGROGANADERÍA SANTA FE, S. A. propuso contra ellos y MUNICIPIO DE TABOGA. La corrección fue presentada oportunamente por lo cual se pasa a decidir sobre ella.

Las formalidades ordenadas a corregir se referían a los motivos y la explicación dada a la infracción de las normas señaladas como violadas.

Se observa que los dos motivos son congruentes con la causal probatoria sobre el error de hecho en la apreciación de la prueba. Se señala en ellas cuales han sido las pruebas no valoradas en el fallo impugnado.

En cuanto a las disposiciones infringidas, en la corrección se explica de que manera han sido violados.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA ADMISIBLE el recurso de casación, en el fondo, propuesto por AGROGANADERÍA SANTA FE, S. A. contra MUNICIPIO DE TABOGA, ALBERTO SÁNCHEZ, EFRAÍN ALCIDES CORREA y JOSÉ A. ISAZA.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO SALAS
(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Encargado

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

BANCO DE COLOMBIA, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A LIONEL QUIEL Y BERTA A. DE QUIEL. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense BERRIOS Y BERRIOS en su condición de apoderados especiales del **BANCO DE COLOMBIA, S. A.** han interpuesto recurso de casación contra la resolución de 22 de septiembre de 1993, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia dentro del proceso ordinario seguido contra **LIONEL QUIEL Y BERTA A. DE QUIEL.**

Admitido el recurso de casación, se concedió a las partes el término de seis días para que alegaran en cuanto al fondo, por lo que ambas presentaron escritos visibles de fojas 155 a 157 y 158 a 159 respectivamente.

La Sala procede a decidir, previas las siguientes consideraciones:

ANTECEDENTES DEL CASO:

El licenciado Eric Sierra González en nombre y representación del **BANCO DE COLOMBIA, S. A.** presentó demanda ejecutiva con acción de secuestro contra **LIONEL QUIEL** y **BERTA A. DE QUIEL** al juzgado de turno el 11 de mayo de 1978, negocio repartido el 2 de junio de 1978 al Juzgado Tercero de Circuito, según consta de fojas 2 a 3.

Con fecha 11 de mayo de 1978 el Juzgado Tercero de Circuito de Panamá dicta las siguientes resoluciones: la que admite la demanda ejecutiva y señala la fianza (fs. 4); la diligencia de consignación del certificado de garantía (fs. 5); la que decreta el secuestro (fs. 6); y, el auto que libra mandamiento de pago (fs. 7).

No consta la notificación de esta última resolución a las partes.

El 9 de noviembre de 1981 el demandante presenta escrito de revocatoria de poder y denuncia nuevos bienes del demandante (15% del salario) (fs. 9). Con fecha 23 de noviembre de 1981 se dicta la resolución que decreta secuestro sobre lo anterior (fs. 10) y, se emite nota a la empresa en que labora el demandante (fs. 11).

No consta notificación o entrega de los antes referidos documentos.

El 11 de septiembre de 1984 el demandante presenta escrito en que denuncia otros bienes (fs. 12); el 25 de septiembre de 1984 el Juzgado decreta secuestro y remite nota al Director del Registro Público (fs. 13 a 15).

El 3 de junio de 1985 el juzgado tercero admite la demanda ejecutiva, libra la ejecución y ordena la notificación de los demandados (fs. 16).

Tampoco se realiza la notificación a las partes de la resolución previamente aludida.

El 3 de septiembre de 1987 el Banco demandante presenta escrito otorgando poder (fs. 17).

De fojas 19 a 24 constan las boletas de citación para la diligencia de reconocimiento de firma por parte del demandado, siendo que no pudo efectuarse.

El 25 de enero de 1988 los apoderados del demandante presentaron escrito por el que cambian la vía ejecutiva por la ordinaria. El juzgado ordena la corrección de la demanda (fs. 29), lo que cumple el proponente y, posteriormente es admitida mediante resolución de 24 de marzo de 1988, notificada a las partes en la dicha fecha (fs. 33 y 33 vlt).

El demandado otorgó poder (fs. 34), solicita la caducidad de la instancia (fs. 42); contesta la demanda (fs. 43); y, presenta Excepción de Prescripción (fs. 45).

El negocio fue resuelto en primera instancia mediante sentencia N° 64 de

16 de marzo de 1992 (fs. 82 a 93), que condena a los demandados a pagar a la entidad bancaria la suma de B/.22,280.57 en concepto de capital, más costas (B/.3,941.93), e intereses legales desde el 11 de mayo de 1978 hasta el 11 de marzo de 1992 por la suma de 18,381.39.

Por apelada la decisión, el Primer Tribunal Superior, por sentencia de 22 de septiembre de 1993, resolvió **REVOCAR** la resolución de a-quo y en su lugar "**DECLARA PROBADA** la excepción de prescripción de la acción cambiaria propuesta por la parte demandante, frente a la acción ensayada en su demanda por el **BANCO DE COLOMBIA, S. A.**, y en consecuencia **A B S U E L V E** a los señores **LIONEL QUIEL y BERTA A. DE QUIEL**, de la pretensión contenida en la demanda ordinaria ...".

Contra ésta última resolución los apoderados especiales del Banco de Colombia presentaron el recurso de casación que a continuación se sintetiza:

RECURSO DE CASACIÓN:

Como causal única de fondo se establece la "Infracción de las normas sustantivas de derecho por error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, lo cual ha influido de modo sustancial en lo dispositivo del fallo".

Esta causal ha sido fundamentada en cinco motivos, cuyo contenido textual es el siguiente:

> "1) El Juez del conocimiento en su sentencia del 16 de marzo de 1992, declaró no probada la Excepción de Prescripción de la Acción alegada por la parte demandada y accedió a la condena impetrada por la parte demandante, en su totalidad, al declarar probada la Excepción de Prescripción revocada por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer distrito Judicial, al no darle el valor correcto, según las reglas de valoración de las pruebas documentales allegadas a los autos y que dan cuenta que los demandados "estuvieron haciendo los abonos pactados".
>
> 2) La decisión de Segunda Instancia no valoró, según las reglas adjetivas vigentes, la confesión en cuanto a las obras efectuada y la prueba documental aportada a los autos y la cual da cuenta que en el proceso ordinario de mayor cuantía propuesto por el BANCO DE COLOMBIA. S. A. contra LIONEL QUIEL Y BERTA A. de QUIEL, no se ha producido la prescripción de la acción y que por lo tanto, proceda la condena en los términos impetrados y declarados en la sentencia proferida por el Juez de la causa.
>
> 3) La decisión de Segunda Instancia no valoró, correctamente, según las reglas adjetivas vigentes, la confesión de las obras efectuadas por los demandados y las pruebas documentales allegadas a la encuesta al tomar sólo las referentes a la fecha del pagaré número 33841, fechado el 27 de septiembre de 1973 y soslayó la valoración del resto del contenido de dicha prueba documental que da cuenta que, en el proceso sub-júdice, los demandados "daban" su consentimiento para cualquier prórroga u otro acto en relación con las obligaciones aquí contraídas ...
>
> 4) La decisión de Segunda Instancia no valoró, según las reglas adjetivas vigentes, la prueba documental allegada a los autos y consistente en el pagaré antes aludido y el que da cuenta de los términos y prórrogas aceptados por los demandados y que "no se considerará ni extinguida ni mermada esta obligación, por ningún acto u omisión del Banco acreedor ..." Esta frase releva al Banco de probar los abonos que interrumpieron la prescripción de la acción; ya que en todo caso, los demandados aceptaron la prórroga del título valor.
>
> 5) Las fallas valorativas del acervo probatorio, son imputables al Tribunal de la alzada, al dictar su sentencia impugnada por el

> presente recurso; fallas estas, que lógicamente han influido sustancialmente, sin duda alguna, en lo dispositivo del fallo cuestionado por este medio extraordinario de impugnación."

Las disposiciones legales que se expresan como infringidas son los artículos 770, 773, 848, 882, 883, 137 del Código Judicial; y, el artículo 184 de la Ley 52 de 1917.

RESOLUCIÓN RECURRIDA EN CASACIÓN:

Algunas consideraciones expresadas en la resolución dictada por el Primer Tribunal Superior que tienen relación con los cargos del citado recurso de casación, son las siguientes:

En primer lugar destaca que, en la contestación de la demanda la parte demandada reconoció haber recibido el préstamo por la suma de B/.21,568.78 que consta en el pagaré, aportado por el demandante, pero propuso la excepción de prescripción, en cuanto a la exigencia del pago de la obligación reclamada por considerar que habían transcurrido 5 años, 7 meses y 14 días.

La decisión de primera instancia desechó la excepción pues sostuvo que el término de prescripción se interrumpió con la presentación de la demanda, ya que debía computarse a partir del 27 de septiembre de 1973 y dicha presentación se realizó el 11 de mayo de 1978.

La sentencia impugnada comparte el criterio del inferior respecto a que es desde el 27 de septiembre de 1973, la fecha en que se debe comenzar a computar la prescripción, o sea, doce meses después de la fecha del documento. Sin embargo, aunque reconoce que el propio documento indica que la obligación es exigible a partir del momento en que se dejan de producir los abonos mensuales convenidos, tal como lo argumentó el demandado, señala la dificultad consistente en que "ninguna de las partes aportó pruebas fehacientes del momento específico en el que se dejó de consignar el pago acordado".

Así, en base a la aplicación del término ordinario de 5 años para la prescripción de acciones, establecido por el artículo 1650 del Código de Comercio, para este caso de acción originada por deuda contenida en pagaré, el sentenciador de instancia pasa a dilucidar si operó la prescripción o si el término fue interrumpido por la presentación de la demanda.

Señala la sentencia, que al observar la fecha a partir de la cual fue exigible la obligación o sea el 27 de septiembre de 1973 hasta el 11 de mayo de 1978 fecha de presentación de la demanda "no transcurren los cinco (5) años requeridos por la norma comentada en líneas anteriores", pero ello es así si se considera "como elemento de interrupción del término de prescripción, a la mera presentación del libelo de demanda", lo que procede a despejar.

En primer lugar se advierte que, durante el tiempo en que fue presentada la demanda, en materia de procedimiento era aplicable el derecho consignado en el Código Judicial derogado, siendo pertinente al punto controvertido el artículo 315, de dicho texto (art. 658 del Código vigente), que establece:

> "ARTÍCULO 315. Es efecto de la presentación de la demanda interrumpir el tiempo para la prescripción de cualquier acción que se intente, con tal que antes de vencerse el término de la prescripción de la demanda haya sido notificada a la parte demandada o se haya publicado en un periódico de la localidad o en la Gaceta Oficial un certificado del Secretario del Tribunal respectivo en el cual se haga constar dicha presentación."

Sostiene la sentencia impugnada, sobre la base del precepto citado, que si el término de 5 años para la prescripción de la acción venció el 27 de septiembre de 1978 y la demanda fue notificada a los demandados (LIONEL QUIEL y BERTA A. DE QUIEL) hasta abril de 1988, se entiende que la acción prescribió pues no se percibe del infolio que el demandante "hubiese ejercitado las previsiones

consignadas por la norma procesal citada". Es decir, que dentro del período de los cinco años (septiembre de 1973 a septiembre de 1978), si bien se presentó la demanda en mayo de 1978, antes de que se venciera dicho término no fueron notificados los demandados, ni se realizó publicación en que constara esa presentación.

Sobre el argumento de la demandante respecto a la interrupción del término de prescripción por los abonos o pagos al saldo de la obligación (artículo 1649 A, C. Com.), o sea el reconocimiento de la obligación efectuado en la contestación de la demanda, en la acusada sentencia el tribunal colegiado señaló que si bien la acreditación de los pagos (que interrumpirían la prescripción) correspondía al demandado, "lo cierto es que no presentó los medios de prueba dirigidos a comprobar tal aseveración" y al no probarse ello de alguna forma en el proceso, por cualquiera de las partes, "mal podría este Tribunal Ad-quem, conferirle validez a la argumentación proferida por la parte opositora".

Finalmente, otro de los elementos que analiza el fallo recurrido en casación, por haber el demandante cuestionado su consideración, fue la parte del texto del pagaré que expresa:

> "No se considerará ni extinguida ni mermada esta obligación por ningún acto u omisión del Banco acreedor, o si al hacer la presentación para el pago no lo obtuviere y dejare transcurrir el tiempo, pues los deudores solidarios expresamente renuncia a los avisos y notificaciones que le puedan corresponder ..."

Sobre ese particular se sostiene que, en este tipo de documentos es común que la parte deudora se adhiera a una serie de cláusulas pero no es admisible "la renuncia a la posibilidad y términos prescriptivos", ya que según el artículo 1106 del Código Civil "los contratantes no pueden establecer condiciones, pactos o cláusulas contrarias a la ley, a la moral y al orden público". Fundamentando la aplicación de la citada norma la jurisprudencia que reconoce como supletorio de la ley comercial al derecho civil, siempre que se presenten la condiciones del artículo 5° del Código de Comercio. "(Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Civil, sentencia de casación del 18 de marzo de 1993; Supreme Air/Freight de Panamá, S. A.; Foto Internacional Import, S. A.; Zonatex, Recurren en Casación en el Juicio Ordinario que aquellas le siguen a estas)".

EL EXAMEN DE LA CAUSAL Y SU FUNDAMENTO:

El examen de los cinco motivos, en los que se apoya la causal invocada, revelan que el recurrente plantea la errónea apreciación en que supuestamente incurrió el fallo impugnado respecto a las siguientes pruebas: "la confesión de las obras efectuadas por los demandados" contenida en la contestación de la demanda; y, "la prueba documental allegada a los autos y consistente en el pagaré".

La Sala procede al analizar los motivos en atención al orden en que se expresan y al énfasis que hacen sobre el respectivo medio probatorio.

Motivos Primero y Segundo:

Por lo que hace a la explicación del yerro probatorio planteado por el casacionista, considera que de la contestación de la demanda se infiere la CONFESIÓN de los demandados sobre los abonos convenidos que se efectuaron respecto a la obligación, lo que a su juicio interrumpe la prescripción de la acción.

En este sentido se argumenta que la sentencia cuestionada viola los artículos 770, 773, 848, 882 del Código Judicial puesto que "desconoce el hecho de que los demandados han aceptado que efectuaron los abonos convenidos", o sea la confesión hecha en la contestación de la demanda, lo que releva al banco de probar esos abonos; que "no tomó en cuenta que la prescripción alegada ha quedado desvirtuada con la confesión de los abonos ...". También se señala violado el 883 (párrafo primero) del mismo Código debido a que en la sentencia "se le exige al

demandante que pruebe que se dieron actos de reconocimiento de la obligación demandada por parte de los demandados al soslayar la confesión en que incurren al contestar la demanda".

A juicio de la Sala, los cargo aludidos no se justifican, pues como se ha podido observar, la resolución impugnada sí analizó el supuesto de la interrupción del término de prescripción de la acción, que consagra el artículo 1649 A del Código de Comercio, debido al reconocimiento de la obligación efectuado en la contestación de la demanda en que se expresó la realización de abonos a la deuda, pero consideró que eran necesarios otros medios de pruebas que acreditaran los pagos alegados por los demandados.

También reconoció que, a quien correspondía demostrar que se efectuaron dichos pagos, era a la parte demandada de acuerdo con la regla de la distribución de la carga de la prueba "Onus probandi". Sin embargo, el demandado no presentó las pruebas que pudieran corroborar su aseveración sobre los abonos, ni existía en el proceso forma alguna para su comprobación, por lo que no otorgó validez a esa argumentación.

En efecto, la Sala ha podido comprobar que en el documento de contestación de la demanda, visible a fojas 43, en el cual consta, según argumenta el casacionista, la confesión sobre los abonos a la deuda que producen la interrupción de la prescripción simplemente, lo que se expresa al respecto es lo siguiente: "... No es cierto la cuantía por la cual se interpone esta demanda, ya que los demandados estuvieron haciendo abonos pactados, por consiguiente negamos la cuantía estimada en la demanda".

En atención a lo expuesto el yerro probatorio que se atribuye al fallo respecto a la valoración de prueba descrita como la confesión de los abonos es improcedente, pues resulta patente que la misma no demuestra con certeza que los pagos se hayan hecho, menos aún la fecha en que, supuestamente, se efectuaron ni su monto. Por tanto, para acreditar el hecho relativo a que el deudor hizo abonos a la deuda contenida en el pagaré era necesario aportar otros medios pruebas en base a los cuales pudiera reputarse que tenía conocimiento del requerimiento de pago realizados por el actor, para considerar interrumpida la prescripción.

Por tanto, se justifica el rechazo de los cargos formulados en los motivos primero y segundo.

Motivos Tercero y Cuarto:

En estos motivos el recurrente plantea otro error que, a su juicio, cometió el Tribunal Superior al valorar el pagaré N° 33841 (fs. 1) pues de su contenido, sólo toma en cuenta que fue fechado el 27 de septiembre de 1973 y, soslaya la apreciación del resto del documento que da cuenta del consentimiento de los demandados respecto a términos y prórrogas en relación a la obligación y, que "no se considerará ni extinguida ni mermada esta obligación, por ningún acto u omisión del Banco acreedor ...". Lo que implica que el Banco está relevado de probar los abonos que interrumpieron la prescripción, "ya que en todo caso, los demandados aceptaron la prórroga del título valor".

Sobre el particular, el artículo 184 de la Ley 52 de 1917 ha sido considerado violado, pues según expresa la censura, "en la sentencia recurrida se desconoce el valor jurídico del título valor allegado a la encuesta y no se toma en cuenta el contenido de las declaraciones consignadas por los demandados en el documento desvalorizado en la decisión atacada".

A juicio de esta corporación el fallo recurrido en casación, ponderó en consideración de la totalidad del contenido del título valor contentivo de la obligación, que reposa a fojas 1.

Al evaluar el aspecto del cómputo del término de prescripción o la fecha de exigibilidad de la obligación, además de considerar el 27 de septiembre de 1973 "como fecha a partir de la cual deberá computarse el término ..." en virtud de lo inicialmente expresado por el pagaré ("nos obligamos a pagarle a dicha

Institución o a su orden dentro del término de 12 meses contados a partir de la fecha de este documento."), también se refiere a lo argumentado por el recurrente en los siguientes términos:

> "... el propio documento consigna que la obligación es exigible desde el momento en que se dejan de producir los abonos mensuales convenidos, disposición que ciertamente reposa en el texto del pagaré, pero al asumir dicho elemento como catalizador del inicio del término de prescripción, encontramos la dificultad expuesta por el expediente de la causa, en el que ninguna de las partes aportó pruebas fehacientes del momento específico en el que se dejó de consignar el pago acordado." (Fs. 121-122) (Subrayado es de la Corte).

Por tanto, es evidente que no se le restó valor jurídico al documento, pero como bien se explica en el fallo impugnado era imposible contar el término de prescripción de la acción desde que se realizaron los abonos, ya que no hay constancia de la fecha en que se hicieron.

Aunado a lo expuesto, esta Sala anteriormente hizo referencia a parte de la resolución impugnada donde el tribunal colegiado analizó y expresó su criterio, en forma especial, sobre las condiciones y cláusulas que se expresan en el pagaré, concluyendo que a pesar de la adhesión del deudor a las mismas "no resulta admisible la noción que implica la renuncia a la posibilidad y términos prescriptivos, en base a lo dispuesto por el artículo 1106.

La Sala comparte el criterio de la resolución impugnada, por lo que considera que el cargo no prospera y no se produce violación de la norma de derecho citada por el recurrente.

Por tanto la causal única de fondo no está justificada.

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia de 22 de septiembre de 1993 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia, dentro del proceso ordinario que BANCO DE COLOMBIA le sigue LIONEL QUIEL y BERTA A. DE QUIEL.

Las obligantes costas de casación se fijan en la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA BALBOAS con 00/100 (B/.250.00).

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) ELIGIO A. MARÍN
Secretario Encargado

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MANUEL DE JESÚS QUINTERO RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO INCOADO POR MARÍA TERESA RÍOS HERNÁNDEZ, MARÍA DE LAS MERCEDES RÍOS HERNÁNDEZ Y MARÍA ELVIA O MARÍA ELVIA RÍOS HERNÁNDEZ A MANUEL DE JESÚS QUINTERO, ALBINO GÓMEZ GÓMEZ, RAMÓN GÓMEZ GÓMEZ, ALFONSO GÓMEZ GÓMEZ, ESPERANZA GÓMEZ GÓMEZ Y AURA GÓMEZ GÓMEZ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO SALAS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado RICARDO ALVARADO TORRAZZA en representación del señor MANUEL DE JESÚS QUINTERO ha interpuesto recurso de casación contra la Resolución de 29 de agosto de 1995 dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, mediante la cual CONFIRMA la sentencia de Primera Instancia en la que se señala

el lindero Este, de una finca de las demandantes que afecta la finca 6237 de su representado.

Cumplidas las reglas de reparto, el negocio se fijó en lista para que las partes alegaran en cuanto a la admisibilidad, lo que no fue aprovechado por ninguna de las partes.

Procede la Sala a decidir acerca del recurso, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 1165 del Código Judicial, en concordancia con el 1160 y otros del mismo Código.

En este negocio se invocan dos causales, una de forma y otra de fondo.

La causal de forma es de las contenidas en el artículo 1155, en su numeral 7, acápite a, del Código Judicial, que expresa:

> "Artículo 1155: El recurso de casación en la forma tiene lugar en materia civil en los siguientes casos:
> ...
> 7. Por no estar la sentencia en consonancia con las pretensiones de la demanda o con las excepciones del demandado, porque:
>
> a. Se resuelve sobre punto que no ha sido objeto de la controversia.
> ..."

Al revisar el contenido de la citada causal en relación con las constancias de autos (v. g. recurso de apelación, fs. 283 a 290), se comprueba que la reparación de la aludida falta que se endilga a la sentencia, no se reclamó en la instancia en que supuestamente se cometió ni en la siguiente y, no consta algún impedimento para ello o la existencia de vicio que lo impidiera.

En este sentido el artículo 1179 del Código Judicial, es claro al señalar:

> "El recurso de casación en cuanto a la forma no será admisible si no se hubiere reclamado la reparación de la falta en la instancia en que se haya cometido y también en la siguiente, si se cometió en la primera, salvo si el reclamante hubiere estado legítimamente impedido para hacerlo o se tratare de un vicio insubsanable o no convalidable.
>
> Si la causa que motiva el recurso ha tenido lugar en la última instancia y no ha habido posibilidad de reclamar contra ella, se admitirá el recurso."

Por ello, el recurso de casación en cuanto a la forma no es admisible.

En relación a la casación en el fondo, se ha podido verificar el cumplimiento, a cabalidad, de las exigencias preceptuadas en el artículo 1165, antes citado, en concordancia con el 1160 ambos del Código Judicial.

En consecuencia, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de casación en cuanto a la forma y DECLARA ADMISIBLE el recurso de casación en cuanto al fondo, dentro del proceso ordinario propuesto por el recurrente.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Encargado

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JAIME BISHOP RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE CARLOS A.

PATTERSON. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La Corte declaró admisible el recurso de casación interpuesto por el licenciado **JOSÉ ALBERTO CASTILLO**, apoderado especial de JAIME BISHOP contra la sentencia de fecha ocho (8) de noviembre de 1994, emitida por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, que "CONFIRMA la sentencia N° 36 de fecha 29 de junio de 1994, dictada por el Juez Sexto del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá."

Admitido el recurso, se concedió el término de ley para que las partes alegaran sobre el fondo, lo que no fue aprovechado por ninguna.

Por consiguiente, la Sala procede a decidir lo de lugar, previas las siguientes consideraciones:

SÍNTESIS DE LOS ANTECEDENTES.

El 20 de abril de 1983, JAIME BISHOP, en calidad de arrendatario, y el Licenciado CARLOS ALBERTO PATTERSON, en calidad de arrendador, celebraron un contrato de arrendamiento distinguido con el N° 27886, del Ministerio de Vivienda, sobre un local de propiedad del arrendador y con un canon de B/.501.00 balboas mensuales.

El 6 de julio de 1993, el Lcdo. CARLOS ALBERTO PATTERSON, actuando en su propio nombre, interpuso demanda ordinaria en contra del señor JAIME BISHOP para que éste fuese condenado a pagarle la suma de B/.9,145.00 en concepto de alquileres vencidos y no pagados, más los intereses, gastos y costas del juicio, basándose en que la parte demandada desocupó el local arrendado el 30 de julio de 1990 con una morosidad en el pago del canon ascendente a B/.9,710.00, habiendo hecho desde entonces un abono por B/.565.00, por lo que quedó pendiente de pago la cantidad antes dicha de B/.9,145.00.

Surtido el traslado de la demanda y sin que el demandado diese contestación a la misma, abrióse el negocio a pruebas, período durante el cual sólo la parte actora adujo y presentó las correspondientes, a saber:

> "1. Contrato Original N° 27886 del 20 de abril de 1983 de Arrendamiento, del Ministerio de Vivienda, para comprobar los dos primeros hechos de la demanda.
>
> 2. Recibos de alquiler N° 1683 a 1699 y 1801 a 1803 desde diciembre 30 de 1988 a julio 30 de 1990 recibos no pagados, que ascienden a la suma de B/.9,710.00.
> 3. Carta del 9 de julio de 1990 dando aviso de desocupación del local arrendado de parte del demandado.
>
> 4. Compromiso de pago de parte del demandado por la suma de B/.9,710.00."

Encontrándose el juicio en la etapa de ser fallado, el Juez Sexto del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, dictó sentencia condenando a la parte demandada a pagar la suma de **"B/.9,145 correspondiente a los canones de arrendamiento vencidos no cancelados que van desde el mes de diciembre de 1988 al 30 de julio de 1990, sobre el local ubicado en Calle 36 Este N° 15, sobre la finca N° 807374, inscrita en el Registro Público al folio 124, Tomo 242, Sección de Propiedad, Provincia de Panamá; más los intereses legales que se cuantifican en Quinientos Tres Balboas (B/.503.00); y las costas que corresponden conforme al artículo 1057 del Código Judicial, misma que se fijan en Dos Mil Setenta y Nueve Balboas (B/.2,079.00)."**

Esta sentencia fue debidamente notificada a las partes y, contra ella, el apoderado del demandado interpuso recurso de apelación al cual no se le dio sustentación.

En esas condiciones, el Primer Tribunal Superior de Justicia decidió confirmar la sentencia decretada por el inferior, fundándose, sobre todo, en las siguientes consideraciones:

> "Esta Colegiatura luego de analizar pormenorizadamente los elementos de juicios aportados a los autos, tiene necesariamente que coincidir con el criterio exteriorizado por el Juez de la causa en la sentencia apelada, pues, ha quedado plenamente demostrada la existencia de la relación contractual de arriendo entre las partes de este proceso (ver documento público de foja 2) y de la cual se genera la obligación reclamada, consistente en la morosidad del señor Jaime Bishop en el pago de 20 meses de alquiler, lo cual aparece acreditado en los recibos legibles a fojas que van de la foja 8 a la 27, documentos privados estos que no fueron tachado(sic) ni redargüido de falso en su momento por el recurrente.
>
> Por otro lado, vale destacar, que la actividad procesal del demandado en el primer nivel jurisdiccional fue totalmente pasiva, ya que se limitó tan sólo a notificarse de la demanda, sin contestarla, lo que constituye, como bien recalca el Juez A-quo, un indicio grave en su contra (ver ordinal 6, artículo 1212 del Código Judicial); advirtiéndose la misma pasividad de parte del demandado en esta segunda instancia, pues, como se anotó en párrafos anteriores, pese haber apelado de la sentencia proferida por el Juez A-quo no presentó escrito de sustentación".

Contra esta última resolución fue interpuesto el recurso de casación que, a continuación, esta Sala Civil de la Corte pasa a examinar y decidir conforme a las disposiciones legales pertinentes.

La parte recurrente acusa a la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de haber incurrido en la "infracción de normas sustantivas de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba".

La causal alegada, única que se invoca, aparece fundada en dos motivos y en los mismos el impugnante acusa al Tribunal ad-quem en los siguientes términos:

> "**PRIMERO**: El tribunal (sic) Superior, al confirmar la sentencia de primera instancia, incurrió en error de apreciación al atribuir a los documentos privados consistentes en los recibos de alquiler supuestamente no pagados (fojas 8 a 27) y al compromiso de pago, aparentemente contraído (foja 28) un mérito probatorio del cual carecen y que en consecuencia determina la absolución de mi representado de los cargos de la demanda.
>
> **SEGUNDO:** Como consecuencia del error de apreciación en que incurrió el Tribunal Superior, resultaron violadas las normas sustantivas de derecho que obligan no sólo a absolver a mi representado de los cargos formulados en la demanda, sino a condenar a la parte actora en costas, todo ello influyendo sustantivamente en lo dispositivo del fallo impugnado y que constituyen los cargos que le formulamos a la sentencia recurrida".

Afirma el recurrente que, como consecuencia del error cometido, se infringió el artículo 849 del Código Judicial y los artículos 1100 y 1110 del Código Civil.

En relación a la primera de dichas normas (art. 849 del Código Judicial) dice el recurrente que fue infringido por la sentencia de segunda instancia debido a que se le dio valor a ciertos documentos no firmados por la parte demandada (concretamente a los recibos presentados por el demandante para

acreditar la supuesta falta de pago de los canones de arrendamiento), en condiciones en que los mismos no fueron reconocidos expresamente por la parte demandada.

La Sala desea llamar la atención sobre varios aspectos que deben ser tomados en cuenta para enjuiciar correctamente la censura formulada por el recurrente. En primer lugar, conviene tener presente que la sentencia impugnada no se basó única y exclusivamente en los documentos a que alude el casacionista mediante su recurso. En ese sentido es conveniente advertir que la sentencia del Tribunal Superior tomó en cuenta todos los elementos y piezas de convicción que, en calidad de pruebas, se allegaron al proceso, entre las que cabe destacar el documento que acredita la relación contractual de arriendo existente entre las partes (visible a fs. 2) y otros documentos privados que nunca fueron tachados ni redargüidos de falsos en el momento en que, conforme a la ley procesal, debió hacerlo el demandado si pretendía eliminarle los efectos que, por no haber tenido lugar a objeción ni tachas, irremediablemente se iban a producir en su contra.

Esto último no se produjo, particularmente, por la pasividad asumida en el juicio por el demandado, hecho que condujo a la correcta apreciación del Juzgador de Primera Instancia al consignar como un **"indicio en contra de la parte demandada que se configura dentro del término del traslado (art. 1212, num. 6), conducta procesal que ha persistido en toda la secuela del proceso, toda vez que se observa su falta de gestión en todo el trámite"**.

La Sala desea destacar, además, que el artículo 849 del Código Judicial indica que los documentos no firmados se deben analizar en concordancia con las otras pruebas y con sujeción a las reglas de la sana crítica, y eso fue precisamente lo que realizó el Primer Tribunal Superior de Justicia en este caso al apreciar las pruebas aportadas en su conjunto.

Prosigue el casacionista denunciando como violado el artículo 1100 del Código Civil; norma que nos remite al tema de la carga de la prueba. Por supuesto, la carga de la prueba de la existencia de las obligaciones o de su extinción recae sobre quien alega uno u otro extremo. Pero, a la Sala le resulta muy lógico arribar a la conclusión de que, en este juicio ordinario, la parte demandante produjo e incorporó al expediente las pruebas que provocan en el ánimo del juzgador la convicción de que la obligación demandada existe y no ha sido cumplida. A fojas 2, 28 y 29 del expediente reposan documentos adicionales a los recibos sin firma cuestionados que proyectan la certeza requerida para fallar en los términos en que lo hicieran los juzgadores de primera y de segunda instancia.

No comparte la Sala, por todo lo anterior, la censura que el casacionista le endilga a la sentencia cuando asegura que el artículo 1100 del Código Civil fue violado de manera directa por omisión.

Finalmente, sostiene el recurrente que el Primer Tribunal Superior de Justicia en la sentencia dictada violó el artículo 1110 del Código Civil al reconocerle valor probatorio al documento que milita a foja 29 del expediente, que fue aportado por la parte actora para probar el reconocimiento, por la demandada, de la deuda producto de la falta de pago de los alquileres reclamados. Afirma que se trata de un documento apócrifo y niega que su representado lo hubiese firmado e incluso solicita que la firma que allí aparece se compare con otros documentos firmados por el demandado y que forman parte del expediente.

Sobre esta materia conviene no olvidar lo que ha sido sistemáticamente mantenido por la jurisprudencia de la Sala Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia: El recurso de casación no constituye una tercera instancia. Si, como a estas alturas sostiene el recurrente, ese o cualquier otro medio de prueba utilizado por la contraparte no era auténtico, era falso o carecía de verdadero valor probatorio, dicho extremos debieron ser planteados y discutidos a la altura de la primera o de la segunda instancia del juicio; algo que, como se aprecia, no estuvo dentro de las iniciativas de la parte demandada por razones y motivos que no pueden ser atribuidos al Tribunal que dictó la sentencia atacada.

Por lo expuesto estima la Sala que no se ha infringido el artículo 1110 del Código Civil en su condición de norma sustantiva de derecho y, por lo tanto la alegada causal probatoria no está justificada.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia de 8 de noviembre de 1994, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

Las obligantes costas de casación a cargo de la parte demandante se fijan en la suma de (B/.200.00) DOSCIENTOS BALBOAS.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Encargado

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ASOCIACIÓN NACIONAL DE AHORRO Y PRÉSTAMO PARA LA VIVIENDA (A. N. A. P.), BANCO GENERAL, S. A. Y PRIMER BANCO DE AHORROS, S. A. RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO INCOADO POR ASSICURAZIONI GENERALLI, S. P. A. CONTRA BANQUE SUDAMERIS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Mediante resolución de fecha 1° de diciembre de 1995, esta Sala de lo Civil NO ADMITIÓ el recurso de casación propuesto por ASOCIACIÓN NACIONAL DE AHORRO Y PRÉSTAMO PARA LA VIVIENDA (A. N. A. P.) ORDENÓ LA CORRECCIÓN del recurso interpuesto por la firma GALINDO ARIAS Y LÓPEZ en representación del BANCO GENERAL y el presentado por la firma ALEMÁN, CORDERO, GALINDO & LEE en su condición de apoderados del PRIMER BANCO DE AHORROS, S. A. (PRIBANCO), propuestos ambos contra la Resolución de 4 de mayo de 1995, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia, dentro del proceso ordinario declarativo que ASSICURAZIONI GENERALLI, S. P. A. le sigue a BANQUE SUDAMERIS.

Cumplidas ambas correcciones dentro del trámite legal, la Sala procede al examen de los escritos para decidir en forma definitiva su admisión.

Veamos:

Con respecto al recurso de casación del Banco General se señalaron defectos en tres de las cuatro causales de fondo invocadas.

La Sala observa que la deficiencia que se indicó en cuanto a la segunda causal, o sea, la de Error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, no fue subsanada por el recurrente. Lo que se le señaló que debía determinar, tanto en los motivos como en la explicación del concepto de la norma que se refiere a los medios de prueba fue **"cuáles son las pruebas que, sin estar en el expediente, fueron consideradas por la sentencia"**, es decir, tenía que precisar o mencionar específicamente cuál prueba se incluyó **"erróneamente"**. (Fs. 818).

Sin embargo, como se colige de fojas 838 a 843, no se realiza la corrección indicada sino que se insiste en enfatizar que el error de hecho sobre la existencia de la prueba consiste en que el tribunal:

> "..., sin mencionar prueba alguna, y, precisamente, no mencionó prueba alguna para fundar ese aserto, por el hecho de que tal prueba o pruebas no existen. ..."

En vista de que el recurrente reitera dicho supuesto dentro de la causal de error de hecho, la Sala accede a su admisión por haberse considerado aceptable dicha eventualidad en jurisprudencia reciente sobre la materia. (Sentencia de 25 de julio de 1995, caso: **EZEQUIEL HERNÁNDEZ GONZALEZ recurre en casación en el Proceso Ordinario que le sigue a LU WEN TSUNG).**

Por tanto, la Sala estima que es procedente admitir esta segunda causal, a pesar que no se realizó la corrección ordenada.

Con respecto a la corrección ordenada en cuanto a las dos últimas causales de fondo (Fs. 819 a 820), se ha podido comprobar del examen del escrito, visible de fojas 843 a 885, que sólo fue hecha, según los señalamientos de la Corte, respecto a la Cuarta causal, que ahora se expresa como tercera, que consiste en la "Infracción de normas sustantivas de derecho por interpretación errónea de la ley sustantiva. ...". Ahora ésta sí resulta congruente con los motivos y las disposiciones legales que cita.

Sin embargo, a simple vista se infiere que en la cuarta causal que consta de fojas 845 a 857, continúan presentes los mismos defectos que fueron observados por la Sala e indicados al recurrente, por lo que no hay lugar a su admisión.

Así, únicamente resulta viable la admisión de la primera, segunda y tercera causales de fondo, en este recurso de casación propuesto por la firma GALINDO, ARIAS Y LÓPEZ.

En segundo lugar, la Corte ordenó (fs. 820 y 821) a la firma ALEMÁN, CORDERO, GALINDO & LEE, que actúan como apoderados del Primer Banco de Ahorros, S. A. que enmendara su recurso de casación en cuanto a la segunda causal de Error de Hecho en cuando a la existencia de la prueba, relativo a la determinación de cuáles son las pruebas que se consideran ignoradas, pues aludió a ellas en términos generales.

Según se aprecia de fs. 862 a 867, lo indicado fue cumplido, por lo que es admisible la causal.

Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECLARA QUE ADMITE el recurso de Casación propuesto por el Banco General en cuanto a las primera, segunda y tercera causales y NO ADMITE la cuarta. Sobre el recurso de casación presentado por EL PRIMER BANCO DE AHORROS, S. A. (PRIBANCO), DECLARA que LO ADMITE en su totalidad.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Encargado

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DENNIS LAWRENCE GILL, MARÍA DEL CARMEN VANZILLOTA DE GONZÁLEZ Y OSCAR ALEJANDRO GONZÁLEZ RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DECLARATIVO QUE LE SIGUE DENNIS LAWRENCE GILL A MARÍA DEL CARMEN VANZILLOTA DE GONZÁLEZ Y OSCAR ALEJANDRO GONZÁLEZ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Mediante resolución dictada el 12 de diciembre de 1995, esta Sala ordenó la corrección del recurso extraordinario de casación, en el fondo, propuesto por los señores DENNIS LAWRENCE GILL, MARÍA DEL CARMEN VANZILLOTA DE GONZÁLEZ y OSCAR ALEJANDRO GONZÁLEZ, mediante sus respectivos apoderados judiciales, dentro del

proceso ordinario declarativo que le sigue DENNIS LAWRENCE GILL a MARÍA DEL CARMEN VANZILLOTA DE GONZÁLEZ y OSCAR ALEJANDRO GONZÁLEZ. Para tal fin, se concedió el término de cinco (5) días hábiles, conforme lo pauta el artículo 1166 del Código Judicial.

Transcurrido el término para la corrección del recurso de casación se procede a determinar sobre la admisibilidad definitiva del mismo.

En cuanto al recurso de casación presentado por el Licenciado LUIS ARROCHA ROMERO, se ordenó la corrección de la primera causal, esta es: "Infracción de normas sustantivas de derecho en concepto de aplicación indebida de la norma de derecho, lo que ha influido sustancialmente el lo dispositivo del fallo".

La Sala observa que concluido el término para corregir el recurso de casación, dicho término se ha vencido sin que la parte recurrente corrigiera el recurso, por tanto, ha precluido el término.

El vencimiento del término para la corrección trae consigo la declaración de inadmisibilidad del recurso.

En cuanto al recurso de casación propuesto por el licenciado RICARDO VILLARREAL ARISPE, se ordenó la corrección de la primera causal de fondo, la misma fue debidamente corregida y en consecuencia se declara su admisibilidad.

Con respecto al recurso de casación presentado por el licenciado EMETERIO MILLER RAMÍREZ, la Sala observa que no cumplió con la corrección ordenada, por tanto, procede la declaratoria de inadmisibilidad.

En virtud de lo anterior, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA INADMISIBLE la causal de fondo del recurso de casación interpuesto por el licenciado LUIS ARROCHA ROMERO y, SE CONDENA en costas a la parte recurrente por la suma de SETENTA Y CINCO BALBOAS (B/.75.00). SE ADMITE la causal de fondo del recurso de casación presentado por el licenciado RICARDO VILLARREAL ARISPE; DECLARA INADMISIBLE la causal de fondo del recurso de casación interpuesto por el licenciado EMETERIO MILLER RAMÍREZ y, SE CONDENA en costas a la parte recurrente por la suma de SETENTA Y CINCO BALBOAS (B/.75.00).

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Encargado

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HOTEL ISLA GRANDE, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO QUE LE SIGUE A MARÍA LOUISA CARTER Y GLEN THOMÁS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La Secretaría de la Sala recibió de los licenciados RIGOBERTO ARMANDO VERGARA CERRUD, JULIO ESPINAL y SIXTO ÁBREGO CAMAÑO el siguiente escrito:

"...

HONORABLE SEÑOR PRESIDENTE DE LA SALA PRIMERA DE LO CIVIL, DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA:

Nosotros, RIGOBERTO ARMANDO VERGARA CERRUD, JULIO ESPINAL y SIXTO ABREGO CAMAÑO, en nuestra condición de apoderados judiciales de las partes demandante y demandadas respectivamente en el proceso que se enuncia al margen superior de este escrito, comparecemos por este

medio, a fin de manifestar lo siguiente:

PRIMERA: Declara la parte demandante que desiste del recurso de casación interpuesto contra la Resolución proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia de fecha 19 de junio de 1995, dentro del proceso que se enuncia al margen superior derecho de este escrito.

SEGUNDA: Declaran las partes demandadas que aceptan el desistimiento presentado por la parte demandante dentro de este.

TERCERA: Declaran las partes que no han causado perjuicio alguno entre ellos, a consecuencia del recurso desistido, por lo que no tienen reclamo alguno que hacerse por concepto de costas, gastos u otros rubros.

CUARTA: Ambas partes solicitan a la Sala que mediante resolución motivada se admita el desistimiento presentado.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 1073, siguientes y concordantes del Código Judicial.

Panamá, 20 de noviembre de 1995.

LIC. RIGOBERTO VERGARA C.
Cédula N° 7-88-1330

LIC. JULIO ESPINAL
Cédula N° 8-193-207

LIC. SIXTO ÁBREGO CAMAÑO
Cédula N° 9-82-460"

La firma de los apoderados judiciales, de los litigantes están debidamente autenticadas ante notario.

El desistimiento formulado por el apoderado de la parte que recurre en casación y la aceptación de las partes demandadas, es procedente y conforme con lo estipulado en los artículos 1073, 1075 y 1076 del Código Judicial, por lo cual el Tribunal de Casación no tienen objeción para admitirlo.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ACEPTA EL DESISTIMIENTO presentado del recurso de casación formulada por el HOTEL ISLA GRANDE, S. A. en los términos y condiciones allí establecidos.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO FÁBREGA ZARAK
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Encargado

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ANTONIO FLORES RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE ABEL PITTÍ CONCEPCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Dentro del proceso ordinario propuesto por ABEL PITTÍ CONCEPCIÓN contra ANTONIO FLORES, la parte demandada anunció y formalizó oportunamente, recurso de

casación, en la forma y en el fondo, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, el treinta (30) de agosto de mil novecientos noventa y cinco (1995).

Mediante auto de 30 de octubre de 1995 el Tribunal Superior, remitió a esta Corporación de Justicia, el negocio respectivo.

Recibido el negocio en la Secretaría de la Sala y, previo el reparto de rigor, se fijó en lista por el término que establece la ley, a objeto de que las partes alegaran sobre la admisibilidad del recurso formulado. Vencido el término, sin que ninguna de las partes presentaren escrito alguno, es deber de la Sala pronunciarse sobre la admisibilidad del mismo, al tenor de lo preceptuado en los artículos 1160, 1165 y 1166 del Código Judicial.

La resolución impugnada es susceptible del recurso de casación, dada la naturaleza del mismo. Consta en autos que el recurso fue interpuesto dentro del término que señala la ley.

La Sala observa que tanto las causales como los motivos se encuentran, en términos generales, formulados de manera clara y precisa, tal como lo establece la ley, al igual que la infracción de normas de derecho y la explicación de como lo han sido; por lo que esta Corporación accede a su admisibilidad.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA ADMISIBLE el recurso de casación, en la forma y en el fondo, propuesto por ANTONIO FLORES, mediante apoderado judicial.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Encargado

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HUGO ARJONA ARJONA Y REBECA BERAHA RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE DIVORCIO QUE HUGO ARJONA ARJONA QUE LE SIGUE REBECA BARAHA. MAGISTRADO PONENTE. ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Esta Sala de Casación Civil ordenó la corrección del recurso extraordinario de casación, en el fondo, propuesto por la señora REBECA BERAHA, en el proceso de divorcio que HUGO ARJONA ARJONA sigue en su contra. La corrección del recurso se efectuó en tiempo oportuno; por tal motivo se pasa a resolver la admisibilidad definitiva del mismo, tomando en cuenta para ello lo que establecen los artículos 1160 y 1165 del Código Judicial.

La resolución objeto del recurso es de aquéllas contra las cuales lo concede la ley.

El recurso se anunció y formalizó oportunamente por persona hábil.

El escrito por medio del cual se formalizó el recurso, reúne de manera general, los requisitos ordenados por el artículo 1160 y la causal invocada: "Infracción de normas sustantivas de derecho, en el concepto de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida", está consagrada en las causales de fondo que señala el artículo 1154 del Código de Procedimiento Civil.

Los motivos por los cuales se ordenó su corrección fueron subsanados debidamente por lo que se debe admitir dicho recurso.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA ADMISIBLE el recurso de casación instaurado por REBECA BERAHA, mediante apoderado judicial.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Encargado

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ELSA ROVIRA DE WADE RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO POR MUTUO CONSENTIMIENTO INCOADO POR ELSA ROVIRA WADE E HILARIO JORGE WADE. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Licenciado Carlos Rangel Castillo, actuando en nombre y representación de la señora **ELSA ROVIRA DE WADE**, ha presentado recurso de casación contra la sentencia proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, el 27 de julio de 1995, dentro del proceso de divorcio por mutuo consentimiento instaurado por **ELSA ROVIRA DE WADE e HILARIO JORGE WADE.**

Ingresado el negocio a la Sala Civil, previo reparto de rigor, se mandó a fijar en lista por el término que establece el artículo 1164 del Código Judicial, para que las partes presentaran sus alegaciones en relación con la admisibilidad del presente recurso.

Igualmente, por tratarse de un proceso de divorcio, se le corrió traslado al Procurador General de la Nación, quien emitió concepto mediante Vista N° 28 de 21 de diciembre de 1995, consultable de foja 54 a 57 del expediente.

Corresponde a la Corte determinar si el presente recurso cumple o no con las formalidades que la ley exige para su admisibilidad.

En primer lugar, se advierte que la resolución recurrida es susceptible de este medio impugnativo, por tratarse de una sentencia proferida en segunda instancia por un Tribunal Superior, dentro de un juicio de divorcio.

En segundo lugar, consta en autos que el recurso fue anunciado y formalizado en tiempo oportuno y por persona idónea.

En tercer lugar, debe revisarse si el escrito por medio del cual fue interpuesto, reúne todos los requisitos ordenados por el artículo 1160 del Código Judicial, que a la letra dice:

> **"ARTÍCULO 1160.** El recurso será formalizado por medio de escrito que contendrá:
>
> 1. Determinación de la causal o causales que se invoque;
>
> 2. Motivos que sirven de fundamento a la causal;
>
> 3. Citación de las normas de derecho infringidas y explicación de cómo lo han sido.

> Si se invocare casación en la forma y casación en el fondo, se expondrá en primer lugar y con la debida separación, pero en el mismo escrito, todo lo relativo a la casación en la forma y a continuación todo lo relativo a la casación en el fondo. ..."

De la norma transcrita se colige que son tres los elementos que componen el recurso de casación, los cuales se encuentran sistemáticamente unidos. Así, los motivos son los hechos; es decir, cualquier situación creada por la sentencia o por el proceso. De esos motivos, en otro apartado del libelo del recurso de casación, se señalará que implican una violación de una norma y la explicación de dicha infracción y que, como consecuencia de ella, se incurre en la causal de casación que se ha invocado.

Igualmente, señala que cuando se formaliza casación en la forma y en el fondo, debe presentarse en un solo escrito pero señalando para cada caso la causal o causales correspondientes, con los motivos que le sirven de fundamento y las respectivas normas de derecho que se consideran infringidas con la explicación debida.

Sin embargo, el estudio del libelo contentivo del presente recurso pone de manifiesto que el recurrente no cumplió con los requisitos que la ley exige.

Así, se observa que fundamenta la casación en la forma y en el fondo sin la debida separación que exige el artículo antes mencionado. Como consecuencia de ello, los motivos y las disposiciones legales que se consideran infringidas, al referirse tanto a la causal de forma como a la causal de fondo invocadas por el recurrente, no plantean una proposición jurídica completa. Esta situación hace ininteligible el recurso, ya que no existe congruencia entre los tres elementos que lo componen.

En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de casación presentado por el apoderado judicial de la señora ELSA ROVIRA DE WADE, dentro del proceso de divorcio por mutuo consentimiento instaurado por la recurrente y el señor HILARIO JORGE WADE.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) ELIGIO MARÍN C.
Secretario Encargado

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

BANCO CENTRAL RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE INVERSIONES SATURNO, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La sociedad **INVERSIONES SATURNO, S. A.**, (en liquidación), por conducto de su representante legal y mediante poder especial legalmente otorgado al licenciado ALVARO CABAL DUCASA, instauró proceso ordinario declarativo contra el BANCO CENTRAL, S. A., a fin de que se hicieran las siguientes declaraciones:

> "1. Que el Banco Central, S. A. incumplió contrato de depósito concertado con Inversiones Saturno, S. A. al cual accedía un contrato de Prenda;
>
> 2. Que es nulo el supuesto Contrato de Prenda suscrito por el Ingeniero Alvaro Cabal Miranda con cédula N° 8-103-3, fechado 31 de octubre de 1986, en formulario impreso, preparado y suministrado por

el Banco Central, S. A. y que en la parte pertinente dice textualmente:

"con el fin de garantizar las siguientes obligaciones contraídas con el Banco por Inmobiliaria Arlequín, S. A. o Regulo Ibañez Barraza, en concepto de avales, pagarés, aceptaciones, sobregiros, hasta una suma no mayor de Dólares $80,000.00".

3. Que el Banco Central, S. A., cobró indebidamente dineros depositados por Inversiones Saturno, S. A., disponiendo ilegalmente de US$83,082.31, el 20 de agosto de 1987 y de US$22,446.63, el 30 de octubre de 1987.

4. Que el Banco Central, S. A. debe restituir inmediatamente en su totalidad, los dineros cobrados indebidamente, tal como se especifica en la declaración próxima anterior, cantidades que ascienden a la suma de US$105,528.94.

5. Que el Banco Central, S. A. debe resarcir a INVERSIONES SATURNO, S. A. los perjuicios que le ha causado".

Correspondió al Juez Sexto del Circuito de Panamá, Ramo Civil, hoy Juez Sexto del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, el conocimiento de la referida demanda ordinaria, la cual, al corrérsele traslado a la parte demandada mediante poder especial otorgado a la firma MORGAN Y MORGAN aceptó unos hechos y negó otros.

Cumplidos los trámites del procedimiento de la primera instancia, el juzgador del conocimiento mediante sentencia de 29 de octubre de 1991 "... NIEGA las declaraciones solicitadas por INVERSIONES SATURNO, S. A. contra BANCO CENTRAL, S. A. así mismo, CONDENA a la parte actora a pagar las costas a favor de la parte demandada, las que se fijan en la suma de CINCO MIL BALBOAS (B/.5,000.00)". (Fs. 324-337).

La parte demandante contra la referida sentencia de primera instancia interpone recurso de apelación, ingresando de esa manera el negocio al Primer Tribunal Superior de Justicia.

El Tribunal Ad-quem al decidir la alzada mediante sentencia de 18 de agosto de 1993 "REFORMA la sentencia de fecha 29 de octubre de 1991 dictada por el Juez Sexto del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá en el sentido de que se CONDENA al BANCO CENTRAL, S. A. a pagar a INVERSIONES SATURNO, S. A. la suma de B/.16,859.33 en concepto de capital y B/.3,921.80 en concepto de costas de primera y segunda instancia y se CONFIRMA en todo lo demás". (Fs. 375-391).

Ambas partes interponen recurso de casación contra el fallo de segunda instancia, remitiéndose así a esta Sala de la Corte para que conozca de los mencionados recursos.

Así las cosas, al declarar la Corte admisible el recurso de casación interpuesto por el BANCO CENTRAL, S. A., y admitir igualmente el recurso de INVERSIONES SATURNO, S. A. pero sólo en cuanto a la primera causal de fondo alegada, los mismos se encuentran en estado de decidir a lo que se procede seguidamente, examinando y pronunciándose en primer lugar en cuanto al recurso interpuesto por la parte demandante. Veamos:

CASACIÓN DE LA PARTE DEMANDANTE

La Corte mediante resolución que corre a fojas 457 y 458 declaró admisible el recurso de casación en el fondo interpuesto por la parte demandante, pero sólo en cuanto a la primera causal de las dos invocadas por el recurrente.

Por ello, el examen del presente recurso debe centrarse en la primera causal alegada y los motivos que la fundamentan. En este sentido, el recurrente

invoca la causal de "violación de normas substantivas de derecho, en el concepto de violación directa, infracción que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la Sentencia recurrida en Casación", la cual aparece fundamenta en cuatro motivos a saber:

"MOTIVOS

1. La sentencia recurrida en Casación desconoce la obligación del Banco Central, S. A. surgida del incumplimiento de un contrato principal y de la nulidad e inexistencia de un contrato accesorio de prenda.

2. La Sentencia de la segunda instancia perjudica a la parte demandante con la inobservancia de la Ley.

3. La sentencia de segundo grado contra la cual se recurre en casación al dar validez al denominado "CONTRATO DE PRENDA" a fj. 194 del expediente, infringe en forma directa normas sustantivas de derecho, lo cual ha influido sustancialmente en el fallo recurrido.

4. La sentencia de la segunda instancia da plena eficacia jurídica a un poder general no inscrito en el Registro Público".

De esa manera la censura acusa a la sentencia recurrida de violar los artículos 976, 983, 999, 1107, 1109, 1113, 1112, 1728, 1776 y 1548 del Código Civil, así como los artículos 197 y 205, éstos últimos del Código de Comercio".

EXAMEN DE LA CAUSAL Y DE LOS MOTIVOS QUE LA FUNDAMENTAN

De los motivos anteriormente transcritos se advierte que en el primero se acusa a la sentencia del Tribunal Superior de desconocer la obligación del Banco Central, S. A., surgida del incumplimiento de un contrato principal y de la nulidad e inexistencia de un contrato accesorio de prenda.

Es cierto que la sentencia impugnada al reformar parcialmente la sentencia de 29 de octubre de 1991 dictada por el Juez Sexto del Circuito de Panamá, lo hizo fundándose en la constitución de un plazo fijo por la suma de B/.100.000.00 a favor de INVERSIONES SATURNO, S. A. en el BANCO CENTRAL, S. A., y en la validez del "contrato de prenda" suscrito por "dichas personas jurídicas". Esto, sin embargo, según la realidad procesal de los autos no significa que el fallo acusado hubiese violado directamente por omisión las normas substantivas de derecho citadas en el recurso; pues, es evidente que entre la sociedad demandante y el Banco demandado se dio inicialmente relación contractual al constituir la demandante el referido plazo fijo por la cantidad de B/.100.000.00, con la exclusiva finalidad de garantizar determinada obligación de Regulo R. Ibáñez con el Banco demandado; sin embargo, esa intención original de INVERSIONES SATURNO, S. A., como sostiene la sentencia impugnada, "... el mismo día en que constituyó el depósito a plazo fijo en el BANCO CENTRAL, S. A., o sea, el 31 de octubre de 1986, celebró contrato de prenda que afectaba su plazo fijo hasta por la suma de B/.80.000.00 para garantizar 'cualesquiera obligaciones contraídas con el Banco por INMOBILIARIA ARLEQUÍN, S. A. o REGULO IBAÑEZ BARRAZA, en concepto de avales, pagarés, aceptaciones o sobregiro' (ver fojas 194 del expediente)". (Fojas 386).

Por otro lado, también en relación con el supuesto cargo de injuricidad cabe destacar que de conformidad con la realidad procesal nada en el subjúdice revela la existencia del alegado "incumplimiento de un contrato principal y de la nulidad e inexistencia de un contrato accesorio de prenda", como sostiene la impugnación.

El cargo como viene formulado en casación, por tanto, no prospera.

En el motivo indicado con el número 2. si bien se acusa a la sentencia de segunda instancia de perjudicar a la parte demandante con la inobservancia de la Ley esta afirmación, así expuesta, no constituye propiamente cargo de injuricidad, toda vez que, en ese caso, la Sala de la Corte desconocería en qué

consiste la "inobservancia de la Ley" que se endilga a la sentencia recurrida en casación.

Por lo tanto, el cargo como viene formulado en casación se desecha.

En el motivo 3. se acusa a la sentencia de segundo grado de dar "... validez al denominado 'CONTRATO DE PRENDA' a fj. 194 del expediente ...". Es cierto que el sentenciador de la instancia superior según la cuestionada sentencia dio validez jurídica al mencionado "contrato de prenda de fojas 194", al sostener: "La intención primaria manifestada por el apoderado de la sociedad demandante ha de ser considerada por lo dicho, como una manifestación unilateral de voluntad que fue variada por acuerdo expreso de las partes del proceso al suscribir el contrato de prenda de fojas 194 (ver artículo 976 del Código Civil), el que, contrario a lo señalado por el apoderado legal del demandante, tiene pleno valor jurídico, ya que el Ingeniero ALVARO CABAL MIRANDA actuó en el mismo debidamente autorizado por la Junta de Accionistas de Inversiones Saturno, S. A., que el día 6 de octubre de 1986 aprobó por 'unanimidad la siguiente resolución: (...).".

No obstante ello, lo cierto es que el sentenciador al darle validez jurídica al "contrato de prenda", como se explica en los párrafos de la sentencia arriba transcritos, aplicó correctamente la norma sustancial correspondiente, razón por la cual no se ha producido la alegada violación directa por omisión del precitado precepto del Código Civil.

El cargo por tanto se desecha.

La censura en el recurso en estudio sostiene entonces que la sentencia de segundo grado viola en el concepto directo por omisión el artículo 983 del Código Civil, fundándose en el argumento de que el Tribunal Superior debió condenar al Banco Central, S. A. a restituir la totalidad de los dineros de Inversiones Saturno, S. A., "... ilegalmente apropiados por este en contravención del tenor de las instrucciones o condiciones contractuales expresas e irrevocables establecidas, amén que tampoco se decretó se deshiciera lo mal hecho". Sin embargo, del análisis de la sentencia sobre la exacta realidad procesal está visto que el Banco demandado se ciñó a las instrucciones dadas por el Ingeniero ALVARO CABAL MIRANDA.

En cuanto a la violación directa por omisión del artículo 999 del Código Civil, la Sala de la Corte estima que los argumentos sobre el concepto de la supuesta infracción esgrimidos por el recurrente tienden mas bien a que la Corte incursione en el aspecto probatorio relacionado con el documento de fecha 9 de octubre de 1986, contentivo de las instrucciones para la constitución del plazo fijo lo que daría lugar entonces a una causal distinta a la invocada por la censura.

No obstante, la Sala de la Corte no logra entender a cuáles acontecimientos se refiere el impugnante cuando expresa que la precitada norma del Código en cita fue violada en forma directa por omisión, porque la "Sentencia del Primer Tribunal Superior de Justicia, desconoció los acontecimientos que constituían las condiciones de la apertura del depósito a plazo fijo, es decir, omitió reconocer las condiciones establecidas en la carta de INVERSIONES SATURNO, S. A., fechada 9 de octubre de 1986, las que fueron ignoradas por el Banco Central, S. A. ...".

En relación con las supuestas infracciones de los artículos 1107, 1109 y 1113 ibídem, la Sala observa también, que la censura en el concepto de la violación repite los mismos argumentos sobre las condiciones establecidas en la mencionada carta de 9 de octubre de 1986.

Ha señalado el recurrente como infringido el numeral primero del artículo 1112 del Código Civil y afirma que el hecho de que el Banco Central, S. A. no hubiese firmado el Contrato de Prenda celebrado con Inversiones Saturno, S. A. constituye un elemento decisivo cuando se determina si el contrato llegó o no a perfeccionarse. Según la opinión del casacionista, por esa razón, al contrato le hizo falta uno de sus requisitos esenciales: el consentimiento de uno de los

contratantes.

No comparte la Sala ese criterio. Contrario a lo sostenido en la censura, la falta de la firma del acreedor prendario en el documento que contiene el contrato no es un hecho, por sí sólo, capaz de invalidarlo como viene asegurado por el recurrente. El contrato de prenda no es un contrato bilateral como bien lo aclara el profesor Dulio Arroyo en su obra Contratos Civiles, Segundo, pág. 481, sino un contrato unilateral, en virtud de que se perfecciona mediante la entrega de la cosa pignorada al acreedor prendario por parte del deudor. Esta postura doctrinal que la Sala comparte nos indica que basta, como ocurre en este caso, que el deudor prendario haya consignado por escrito su voluntad de celebrar el contrato y haya hecho entrega a la otra parte de la cosa pignorada, para concluir que se produjo el acuerdo de voluntades entre los contratantes y que el acto jurídico goza de plena existencia y validez, por lo cual debe producir todas sus consecuencias y efectos.

También con relación al artículo 1112 del código Civil, pero esta vez en lo atinente a su numeral segundo, el impugnante sostiene que se produjo una violación en la sentencia de segunda instancia, ya que el contrato de prenda requiere para su existencia de un **"objeto cierto"**, y en el presente caso, afirma, dicho objeto no existe, circunstancia no observada por el Primer Tribunal Superior de Justicia, razón por la que se considera violada la disposición legal en mención.

Sobre el particular la Sala observa que en el presente contrato la prenda se constituyó sobre un bien mueble, representado por B/.80,000.00 que eran parte integral del depósito a plazo fijo que Inversiones Saturno, S. A. (deudor prendario) tenía en el Banco Central, S. A. (acreedor prendario). Además, no hay dudas de que la suma de dinero pignorada era de propiedad de la persona que constituyó la prenda, produciéndose también la entrega de la cosa corporal: una suma de dinero que, aún cuando es cosa fungible, es perfectamente aceptable como objeto de esta clase de contratos, conforme lo establece el artículo 1555 del Código Civil. Estos hechos configuran el desplazamiento de la posesión de la cosa entregada en prenda. De allí que, por las razones apuntadas, no considera la Sala que se haya producido violación del artículo 1112, numeral 2 del Código Civil, en los términos pretendidos por el recurrente.

Se censura la sentencia dictada por el Tribunal de Segunda Instancia acusándola de haber dejado de aplicar el artículo 197 del Código de Comercio; concretamente en cuanto a aquello de que los contratos que deban constar por escrito **"serán firmados a mano por los contratantes"**.

Sobre si en el contrato de prenda comentado concurren o no los requisitos de los cuales depende su existencia y validez ya hemos vertido una opinión, concebida en términos de considerar su supuesta inexistencia e invalidez como algo no demostrado por la parte que la ha venido alegando. En consecuencia, no estima la Sala probado que el artículo 197 del Código de Comercio haya sido violado y no se admite la censura formulada en ese sentido por el recurrente.

Por último, debemos referirnos a la supuesta violación del artículo 1548, numeral 3, del Código Civil, invocado por el recurrente como infringido en forma directa por omisión; violación esta que hay que estudiarla ligándola con las infracciones que se aducen también en relación con los artículos 1776, numeral 7, y 1728 del Código Civil.

El análisis del recurrente en donde concluye que el Ingeniero ALVARO CABAL MIRANDA carecía de capacidad o no se encontraba legalmente facultado para disponer de los bienes pignorados en el contrato de prenda, porque el poder general que le otorgó la Junta General de Accionistas de Inversiones Saturno, S. A. no se inscribió en el Registro Público y no se formalizó mediante escritura pública otorgada ante Notario no es, en opinión de la Sala, una conclusión correcta. El propósito de la Ley al permitir la inscripción de los poderes generales en el Registro Público (Art. 1776, numeral 7) no puede concebirse como un requisito cuya ausencia produzca la ineficacia o la invalidez del mandato, las instrucciones, las órdenes o las capacidades que se le transmitan o transfieran

al apoderado. Lo mismo puede decirse sobre el hecho de que un acto de esa naturaleza (el otorgamiento del poder) no se haya hecho ante Notario y no conste en escritura pública. El artículo 1753 del Código Civil se encarga de precisar el objeto perseguido en relación con el otorgamiento de escritura pública y la inscripción en el Registro Público de los poderes generales. Ese propósito no tiene nada que ver con la validez o invalidez del acto celebrado, sino con la finalidad de establecer de una manera fehaciente, en qué consisten y cuál es el verdadero alcance del poder general, para dar mayores garantías y seguridades a los terceros que entren en relación con los apoderados. La falta de inscripción en el Registro Público del poder general otorgado por Inversiones Saturno, S. A., al Ingeniero Alvaro Cabal Miranda, no merma en absoluto la validez y la autenticidad del acto puesto que, ese requisito solamente cumpliría una formalidad por vía de publicidad, cuya ausencia no tiene porqué producir la nulidad del acto ni de las consecuencias jurídicas que, ligadas al mismo, pudiesen emanar para los interesados.

Cabe señalar, por otro lado, que si bien la interpretación de contratos es acusable en casación, como se plantea en el caso subjúdice, el recurrente, en el caso concreto, no cita como disposiciones substantivas supuestamente infringidas por el fallo atacado las contempladas en el Capítulo IV "DE LA INTERPRETACIÓN DE LOS CONTRATOS" del Código Civil; pues, como sostiene el tratadista Jorge Fábrega Ponce al abordar el tema de la Interpretación de Contratos, "... Al interpretar un negocio jurídico se aplican normas de derecho material las previstas en los Artículos 1132 y siguientes sobre interpretación de contrato, que evidentemente no son normas probatorias. Al interpretar el negocio se indaga la voluntad pero se le agrega algo: los efectos que la Ley le atribuye a esa voluntad. El efecto jurídico no se deriva meramente de la voluntad, sino de la Ley, la cual le atribuye eficacia (o modifica o enerva la voluntad). Entonces, qué causal invocar? Obviamente, no sería una cuestión probatoria, ya que no es la existencia o la eficacia del medio convicción lo que está en juego, sino la de establecer las consecuencias jurídicas del contrato. Estimamos que puede producirse la violación directa. Las normas contenidas en los artículos 1132-1140 del Código Civil sobre interpretación de contratos han sido desconocidas ..." (1. CASACIÓN CIVIL Y CASACIÓN LABORAL. Prof. Jorge Fábrega Ponce P., 2. CASACIÓN PENAL. Prof. Aura E. Guerra de Villaláz. Panamá, 1995, pág. 249-250).

De las consideraciones que anteceden se colige entonces, que la acusada sentencia del Tribunal Superior no infringe los artículos del Código Civil citados por la censura.

La causal única de fondo invocada en el recurso en estudio, en consecuencia, no está justificada, y por ende estima la Sala que no existe razón jurídica para invalidar el fallo impugnado.

CASACIÓN DE LA PARTE DEMANDADA

La parte demandada en el recurso interpuesto alega como única causal de fondo la de haber incurrido la sentencia impugnada en la "Infracción de normas substantivas de derecho, en el concepto de violación directa, lo cual tuvo influencia sustancial en lo dispositivo del fallo".

La transcrita causal viene fundamentada en cuatro motivos a saber:

> "MOTIVOS: PRIMERO: Al dictar un fallo que interpreto y determinó la eficacia jurídica obligacional de el Contrato de Prenda suscrito por INVERSIONES SATURNO, S. A., recogido en un documento cuya fuerza probatoria como instrumento privado reconocido en el proceso no ha sido objetada o menoscabada ni por las partes, ni por el Tribunal, la sentencia recurrida negó que la demandante tuviese obligación de responder de los compromisos contractuales adquiridos frente a BANCO CENTRAL, S. A. por Administración de Facilidades Deportivas, S. A. (US$16,859.33) y U. S. Pine International Corp. (US$402.56), con lo cual dicha decisión equivocadamente se abstuvo de reconocer y aceptar que estas obligaciones también quedaron garantizadas por el Contrato Prenda fechado al 31 de octubre de 1986, suscrito por la

referida INVERSIONES SATURNO, S. A.

SEGUNDO: En efecto, no reconoció el Tribunal Superior que en el referido Contrato de Prenda, Inversiones Saturno, S. A. garantizó "Cualesquiera obligaciones contraídas por el Banco por Inmobiliaria Arlequín, S. A. o Regulo Ibañez Barraza, en concepto de avales, pagarés, aceptaciones o sobregiros, hasta una suma no mayor de dólares US$80.000.00 y para garantizar también el cumplimiento de cualquier obligación que en el presente tenga (mos) y en el futuro contraiga (mos) con el Banco", cláusula cuyo inciso final -con subrayado nuestro- expresa con toda claridad que la garantía prendaria otorgada se extendía a otras obligaciones distintas a las expresamente indicadas en la primera parte del texto transcrito, sin que aquellas otras, no identificadas expresamente, estuvieran afectadas por limitación del quantum.

TERCERO: Al excluir del ámbito de la garantía las deudas de Administración de Facilidades Deportivas, S. A. y de U. S. Pine International Corp., garantizadas por Regulo Ibañez Barraza, con el argumento de que la cobertura de estas deudas excedía un supuesto límite atribuido a la prenda, no advirtió al Tribunal, al interpretar el Contrato de Prenda, que, además de lo indicado por el texto de la cláusula indicada en los motivos anteriores, la intención de los contratantes, no podía ser la de limitar la garantía a la suma de US$80.000.00, pues esta cifra quedaba absorbida por un Pagaré por la misma cantidad aceptado por Inmobiliaria Arlequín, S. A. de modo que las otras obligaciones garantizadas, no identificadas en el contrato, sólo podía ser cubierta por la fianza en la medida en que ésta se extendiera más allá de la cifra citada, como en efecto se pactó.

CUARTO: En consecuencia, el Tribunal Superior interpretó equivocadamente el Contrato de Prenda suscrito por Inversiones Saturno, S. A. y equivocó su eficacia obligaciones, con lo cual infringió, por desconocimiento de ellas, las normas sustantivas de derecho aplicables al caso del pleito, concernientes a dicha interpretación y eficacia obligacional de los contratos".

Según la censura, la acusada sentencia de segunda instancia viola en el concepto directo por omisión los artículos 976, 1109 y 1132 del Código Civil.

EXAMEN DE LA CAUSAL INVOCADA Y DE LOS MOTIVOS QUE LA FUNDAMENTAN

Salta a la vista que en los cuatro motivos que sirven de fundamento a la causal única de fondo alegada por el impugnante, anteriormente transcritos, se acusa a la sentencia de segunda instancia, de haber el Tribunal Superior interpretado equivocadamente, y "**equivocó su eficacia obligacional**", **el "Contrato de Prenda**" suscrito por la demandante para garantizar obligaciones contraídas con el Banco Central, S. A. por Inmobiliaria Arlequín, S. A. o Regulo Ibañez Barraza; al no reconocer que en el referido Contrato de Prenda, la demandante garantizó cualesquiera obligaciones contraídas con el Banco 'por Inmobiliaria Arlequín, S. A. o Regulo Ibañez Barraza, en concepto de avales, pagarés, aceptaciones o sobregiros, hasta una suma no mayor de dólares US$80.000.00 y para garantizar también el cumplimiento de cualquier obligación que en el presente tenga (mos) y en el futuro contraiga (mos) con el Banco'.

En ese sentido se arguye además, en los referidos motivos, que la sentencia al excluir del ámbito de la garantía las deudas de "Administración de Facilidades Deportivas, S. A. y de U. S. Pine International Corp., garantizadas por Regulo Ibáñez Barraza, con el argumento de que la cobertura de estas deudas excedía un supuesto límite atribuido a la prenda", el Tribunal Superior al interpretar el contrato de prenda, no advirtió que la intención de los contratantes no podía ser la de limitar la garantía a la suma de B/.80.000.00.

Por ello, según la censura, la alegada violación directa por omisión de los

artículos 976, 1109 y 1132 del Código Civil, que se endilga a la sentencia impugnada. Veamos:

De esa manera advierte la Sala que la censura en los examinados motivos acusa a la sentencia impugnada de infringir el artículo 976 del Código Civil, en el concepto directo por omisión, basándose en el argumento de que, en el caso del pleito, desconoció "la fuerza de Ley que tiene entre el Banco Central, S. A. e Inversiones Saturno, S. A., el Contrato de Prenda de 3l (sic) de 1986".

No obstante, si bien la citada norma substantiva del Código Civil en el mencionado artículo del Título de las Obligaciones dispone, que las "**las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos**"; es lo cierto también que, en el caso subjúdice, el Tribunal Superior en la sentencia cuestionada en casación, al dar por establecida la relación contractual entre las partes e interpretar el mencionado "contrato de prenda de fojas 194", en el análisis jurídico que consta a fojas 385 a 387, reconoce a dicho negocio jurídico "pleno valor jurídico" de conformidad con lo dispuesto por el comentado artículo 976 del Código en cita, por lo que dicha norma substantiva, contrario a lo que sostiene la censura, sí ha sido aplicada correctamente por la sentencia impugnada.

En cuanto a la alegada violación del artículo 1109 ibídem la Sala de la Corte observa que dicho precepto establece, que los "... contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conforme a la buena fe, al uso y a la ley". En este sentido la impugnación arguye que "si los contratos obligan al cumplimiento de lo expresamente pactado como allí se dice fue que Inversiones Saturno, S. A., garantizaba cualquier obligación presente o futura de Regulo Ibañez Barraza, sin que dicha garantía prendaria quedará limitada por una cuantía ...".

La sentencia de que se hace mérito en casación, sin embargo, con base en la realidad procesal de los autos a fojas 585-587, al referirse a la intención de la parte demandante sostiene que si bien en un principio fue la de constituir un depósito a plazo fijo en el BANCO CENTRAL, S. A., "con el fin exclusivo de garantizar en toda su extensión una obligación que adquiriría el Doctor REGULO R. IBAÑEZ B. relativa a un crédito que el Banco demandado le iba a extender para la compra de un bien inmueble propiedad de INMOBILIARIA ARLEQUÍN, S. A., descrito como finca N° 1348.", la misma "fue dejada de lado por la propia demandante, quien el mismo día en el que constituyó el depósito, o sea el 31 de octubre de 1986, celebró contrato de prenda que afectaba su plazo fijo hasta la suma de B/.80.000.00 para garantizar 'cualesquiera obligaciones contraídas con el Banco por Inmobiliaria Arlequín, S. A. o REGULO IBAÑEZ BARRAZA, en concepto de avales, pagarés, aceptaciones o sobregiros (ver fojas 194)'. De lo cual se infiere que se trata en todo caso de la interpretación del referido negocio jurídico, la cual si bien puede ser examinada en casación a través de la causal de violación directa, no significa que la impugnada sentencia hubiese violado la normativa del artículo 1109 del Código Civil referente al consentimiento de los contratos.

El impugnante, por último, acusa a la sentencia del Tribunal colegiado de infringir el artículo 1132 del Código Civil en el concepto directo por omisión, el cual establece la regla de interpretación de los contratos:

> "Si los términos de un contrato son claros y no dejan dudas sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de su cláusula.
>
> Si las palabras aparecieren contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá éstas sobre aquéllas."

Según el impugnante la norma substantiva arriba transcrita ha sido violada, por el acusado fallo de segunda instancia, en el concepto directo por omisión, toda vez que a su juicio a pesar del claro y expreso texto de la cláusula del Contrato de Prenda, la garante "prendaria garantizó cualquier obligación presente o futura de Regulo Ibañez o de Inmobiliaria Arlequín, sin limitación de cuantía,

la intención de los contratantes al aceptar el inciso final de la cláusula examinada, no podrá quedar limitada cuantitativamente, pues esto habría hecho que dicha estipulación resultase inócua, pues existiendo una deuda (Pagaré) de Inmobiliaria Arlequín, S. A. US$80.000.00, la extensión de la garantía prendaria a otras obligaciones no señaladas expresamente habría resultado inoperante pues la deuda antes mencionada de Inmobiliaria Arlequín, S. A. habría absorbido toda la caución prendaría, sin dejar nada 'cualquier que en el presente tenga (mos) o en el futuro contraiga (mos)' que aceptó Inversiones Saturno, S. A."

El argumento, sin embargo, visto el análisis jurídico que sobre la interpretación del referido "contrato de prenda" hizo el sentenciador colegiado en el caso concreto que ocupa a la Sala de casación civil de la Corte, demuestra que no le asiste razón al recurrente; pues, el Tribunal Superior en la sentencia impugnada, como se tiene antedicho al examinar la supuesta infracción de la primera de las normas substantivas citadas en el recurso, y basándose en el "contrato de prenda de fojas 194" suscrito por el Ing. Alvaro Cabal Miranda en su condición de apoderado legal de Inversiones Saturno, S. A., sostiene:

> "... esta Colegiatura ha de aclarar que no obstante que en el contrato de prenda de fojas 194 se hace mención a que el depósito de plazo fijo constituido por INVERSIONES SATURNO, S. A. con el BANCO CENTRAL, S. A. garantizaría sobregiros de INMOBILIARIA ARLEQUÍN, S. A. o REGULO IBAÑEZ BARRAZA, ello estaba supeditado al límite de la suma pignorada del plazo fijo, que como se dejó dicho en otra oportunidad fue fijado por INVERSIONES SATURNO, S. A. y el BANCO CENTRAL, S. A. en la suma de B/.80,000.00. Y siendo que dicho límite había sido cubierto en su totalidad por el pagaré N° 00873 (ver foja 196), la suma otorgada por el BANCO CENTRAL, S. A. en concepto de sobregiro a ADMINISTRACIÓN DE FACILIDADES DEPORTIVAS, S. A. que para octubre de 1987 alcanzaba B/.16,859.33 (ver foja 204) estaba excluida de la garantía del plazo fijo perteneciente a INVERSIONES SATURNO, S. A., razón por la cual, esta última persona jurídica no tenía que responder por el incumplimiento de ADMINISTRACIÓN DE FACILIDADES DEPORTIVAS, S. A. del plazo fijo propiedad de la sociedad demandante, cosa que, a pesar de lo expresado, llevó a cabo la parte demandada según se desprende del contenido de la norma de fecha 30 de octubre de 1987 que remitiera a INVERSIONES SATURNO, S. A. y que rola a fojas 118 y 199 del expediente. ..." (fs. 389-390).

Es evidente entonces que el referido "contrato de prenda de fojas 194" suscrito por el apoderado de la parte demandante, como sostiene el Tribunal Superior en el análisis jurídico sobre la interpretación de dicho negocio, arriba transcrito, fue fijado por Inversiones Saturno, S. A. en la suma de B/.80.000.00 para garantizar hasta este límite "... cualesquiera obligaciones contraídas con el Banco por Inmobiliaria Arlequín, S. A. o Regulo Ibañez Barraza, en concepto de avales, pagarés, aceptaciones o sobregiro". La extensión de la garantía prendaria se limitaba, a juicio de la Sala, a la suma pignorada dentro del plazo fijo, o sea a la cantidad de 80,000.00 balboas. Ese fue el bien pignorado y no ninguna otra cantidad adicional. Esa suma de dinero, concebida como una parte del depósito a plazo fijo, fue la garantía que se entregó en prenda. Por eso, si se dispuso de sumas adicionales para satisfacer el pago de otras obligaciones, este hecho debe ser entendido como un exceso en que incurrió el Banco Central, S. A., actuando al margen de los derechos que para él surgieron en virtud del contrato de prenda. Esto indica, contrario a lo que sostiene el impugnante, que el sentenciador en el caso subjúdice hizo una correcta interpretación del aludido contrato de prenda comercial, y, por ende la sentencia acusada no viola el artículo 1132 del Código Civil.

La causal invocada por la parte demandada recurrente en consecuencia tampoco está justificada en el recurso de casación interpuesto.

Del examen expuesto en relación con los recursos de casación interpuestos por las partes, se tiene que concluir que al no darse las alegadas violaciones a las normas substantivas citadas por los impugnantes, no existe motivo jurídico para invalidar el fallo acusado.

En consecuencia, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la Sentencia de 18 de agosto de 1993 dictada por el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA mediante la cual reforma la sentencia de fecha 29 de octubre de 1991 proferida por el Juez Sexto del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Las obligantes costas de casación se fijan en la suma de TRESCIENTOS BALBOAS CON 00/100 (B/.300.00) para cada una de las partes (demandante y demandado) como recurrentes.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE
Con Salvamento de Voto
(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Encargado

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO CARLOS E. MUÑOZ POPE

Lamento, muy respetuosamente, no estar de acuerdo con la decisión de la mayoría de la Sala en este caso.

Me parece que está probada la violación de normas sustantivas de derecho, en el concepto de violación directa, infracción que ha influido sustancialmente en el dispositivo de la sentencia impugnada.

Sin ahondar en mayores detalles, no puedo aceptar que el documento visible a foja 194 puede ser tenido como un contrato de prenda, pues dicho documento sólo está suscrito por una persona.

Están probados, por tanto, los motivos 1 y 3 de dicha causal, pues el contrato de prenda que fundamenta el actuar del Banco es "inexistente".

Debió, por tanto, conceder el recurso promovido por INVERSIONES SATURNO, S. A., persona jurídica a la que, incluso, se le cobró deudas que nunca aceptó garantizar (Administración de Facilidades Deportivas y U. S. Pine Inl. Corp).

Considero, que se debió corregir el error del juzgador y rectificar el proceder abusivo de la parte demandada.

Por todo lo expuesto, por no estar de acuerdo con la decisión de la mayoría, respetuosamente, SALVO MI VOTO.

Fecha ut supra.

(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE.
(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Encargado

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

COMPAÑÍA DE SEGUROS LA PREVISORA, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO QUE LE SIGUE INMOBILIARIA ERGO, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Licenciado **EMETERIO MILLER RAMÍREZ**, apoderado judicial de la Compañía de Seguros La Previsora, S. A., interpuso oportunamente este recurso extraordinario de casación en el fondo contra la Resolución Judicial dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 2 de septiembre de 1994, por medio de la cual se confirma el Auto N° 1256 de 9 de octubre de 1991 y el Auto N° 373 de

9 de abril de ese mismo año, ambos proferidos por el Juzgado Cuarto del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil.

La Corte admitió el recurso de casación en el fondo, luego, se fijó en lista por el término de seis días, ofreciéndoles a las partes la oportunidad de alegar, derecho que fue aprovechado por el recurrente y por el opositor, como se aprecia en los escritos que rolan de fojas 287 a 291 y de 292 a 304, respectivamente.

Fueron dos las causales de fondo las invocadas por el recurrente y, encontrándose la casación interpuesta en estado de decidir, se procede al examen de las mismas comenzando por hacer un recuento del caso desde sus fases iniciales.

El 27 de julio de 1989 la firma forense VÁSQUEZ Y VÁSQUEZ, actuando en representación de la persona jurídica denominada INMOBILIARIA ERGO, S. A., inicia proceso sumario de denuncia de obra nueva contra la COMPAÑÍA DE SEGUROS LA PREVISORA, S. A., a fin de que se ordene a esta última suspender y demoler parcialmente la obra de ampliación de la parte posterior de un edificio de su pertenencia que estaba siendo ejecutada por ella afectando a un inmueble de propiedad del demandante con el cual colinda. La petición formulada por la parte actora se hizo descansar en la afirmación de que la obra que se construía, consistente en una adición, no respetaba la exigencia contenida en la Resolución N° 150-83 de 28 de octubre de 1983, dictada por la Dirección de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda, por medio de la cual ha sido establecido que, en éstos casos, se debe guardar una distancia de cinco (5) metros de retiro posterior, norma de construcción también conocida con la designación de RM3.

El 17 de enero de 1990 el Juez de la causa dictó el Auto N° 37 denegando la denuncia de obra nueva demandada por INMOBILIARIA ERGO, S. A. Previamente se practicó, conforme lo indica el numeral 2 del artículo 1365 del Código Judicial, la inspección ocular con intervención de peritos en la obra denunciada como perjudicial. El Juez de la causa rechazó las pretensiones de la parte actora.

A continuación la parte actora interpuso recurso de apelación que fue debidamente sustentado, dando como resultado que, mediante resolución de 16 de marzo de 1990, el Primer Tribunal Superior de Justicia revocase el Auto cuestionado y en su reemplazo se le ordenó al inferior que ejecutara la suspensión de la obra que motivó el proceso y se surtieran las notificaciones de rigor.

Procedió el Juez A-quo de acuerdo a las instrucciones recibidas por el Superior y, mediante Auto N° 438 de 25 de abril de 1990, se le ordenó a la parte demandada la suspensión de la obra que, con carácter de adicional, se estaba construyendo sobre la finca 21189, colindante con la de INMOBILIARIA ERGO, S. A. Además se dispuso hacer la notificación al dueño de la obra en los términos contemplados en el numeral 4 del artículo 1365 del Código Judicial.

Más adelante, el Juez A-quo, con fecha 23 de julio de 1990, dictó el Auto N° 829 ordenando la práctica de una inspección judicial a la obra, con asistencia de peritos, cuyo propósito sería el de constatar si la adición que se construía le ocasionaba, en verdad, un grave mal a la parte demandante, para poder establecer si procedía o no dictar la orden de demolición de lo edificado, hasta que se cumpliese con el retiro posterior de cinco metros de distancia, como lo prescribe la resolución N° 150-83 de 28 de octubre de 1983 dictada por el Ministerio de Vivienda, con respecto a las áreas de Alta Densidad de la Ciudad de Panamá, también conocida, como se ha dejado dicho, con la designación de Reglamento RM3.

A continuación de la diligencia anterior el Juez A-quo dictó el Auto N° 373 de 9 de abril de 1991 ordenando la demolición de la obra denunciada. Contra este último, la parte demandada solicitó revocatoria, a lo que no se accedió, mediante el Auto N° 1256 de 9 de octubre de 1991, interponiéndose entonces recurso de apelación que, al no serle concedido, provocó la interposición de un Recurso de Hecho ante el Primer Tribunal Superior de Justicia el cual fue resuelto, por

medio de la Resolución de 31 de enero de 1992, en el sentido de admitirlo.

El estado procesal al cual se arribó, en virtud de los recursos utilizados por la parte demandada hasta esa etapa del juicio, le permitió al Primer Tribunal Superior de Justicia pronunciarse acerca del auto 373 de 9 de abril de 1991, dictado por el Juez de Primera Instancia y en el cual se ordena la demolición de las edificaciones adicionales y también con respecto del Auto N° 1256 de 9 de octubre de 1991, mediante el cual se rechaza, por improcedente, el recurso de Revocatoria al cual anteriormente se ha hecho referencia. El Tribunal materializa esta labor a través del auto del Primer Tribunal Superior, dictado el 2 de septiembre de 1994. Este último pronunciamiento confirmó las dos resoluciones dictadas por el Juez Cuarto del Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, lo cual lo convierte en el objeto del ataque del recurrente en casación.

Como queda dicho, el recurso de casación es en el fondo y se han invocado dos causales que corresponde a la Sala examinar, para lo cual ha de proceder por separado.

EXAMEN DE LA PRIMERA CAUSAL Y DE LOS MOTIVOS QUE LA FUNDAMENTAN

Como primera causal ha sido invocada la **"Infracción de normas sustantivas de derecho por error de hecho sobre la existencia de la prueba y que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia(sic) recurrida"**.

Los motivos que sirven de fundamento a la transcrita causal suman trece, prolijamente descritos, y que a continuación se reseñan de una manera sustancial.

Los motivos se centran, en primer término, en destacar que la resolución censurada no tomó en cuenta la presencia en autos de varias pruebas documentales, visibles a fs. 27, 28, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 y 137 del expediente.

El contenido de tales documentos es el que se pasa a describir a continuación:

1. Permiso de construcción N° 258, de 29 de septiembre de 1989, a nombre de CONSTRUCTORA DISCONSA para construir en el edificio de propiedad de la COMPAÑÍA DE SEGUROS LA PREVISORA, S. A., expedido por el Departamento de Obras y Construcciones Municipales (fs. 27).

2. Permiso de construcción N° 1167, de 23 de diciembre de 1986, a nombre del Arquitecto VICENTE E. WILLIAMS, para que pueda construir una adición al Edificio comercial existente en el terreno de propiedad de CÍA. DE SEGUROS LA PREVISORA, S. A. (fs. 130).

3. Certificado N° 299, de fecha 23 de febrero de 1987, de la inspección practicada por los Inspectores del Departamento de Ingeniería Municipal, donde se concede el permiso de ocupación. (Fs. 131).

4. Recibos expedidos por la Inspección Municipal de Servicios Eléctricos y por la Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos, respectivamente.

5. Certificado N° 183 de 29 de junio de 1990, expedido por el director de Obras y Construcciones Municipales, que concede el permiso de ocupación.

6. Nota del Arquitecto LUIS ALBERTO BUSTOS, Jefe del Departamento de Control, aclarando el contenido de la Notificación N° 40, en la que se aprueba la adición de un alto adosado a la línea de propiedad.

7. INFORME TÉCNICO N° 40, suscrito por la Ingeniera ORIS ALVARADO del Ministerio de Vivienda, en la que RECOMIENDA aprobar la adición sobre la losa existente.

8. NOTIFICACIÓN N° 40 de 4 de febrero de 1987 de la Dirección General de Desarrollo Urbano, del Ministerio de Vivienda en la que se RESUELVE APROBAR la adición solicitada, y se anota la observación de que se ha aprobado teniendo en cuenta la zonificación de alta densidad.

Estima el recurrente que, al emitir su fallo, el Tribunal Superior de Justicia no tomó en cuenta las pruebas documentales mencionadas; no las examinó, y no las valoró adecuadamente; lo que se tradujo en el error de hecho denunciado y en la consiguiente infracción de la norma sustantiva de derecho, influyendo esa omisión de manera sustancial en la parte dispositiva de la decisión recurrida.

Como normas legales infringidas, el recurrente enumeró las siguientes:

a). Los artículos 769 y 819 del Código Judicial, referentes a los medios de pruebas legalmente válidos, el primero, y a la definición de lo que debe entenderse por documentos, el segundo. El recurrente dice que ambos fueron violados directamente por omisión.

b). El artículo 7, literal a, de la Ley 9 de 25 de enero de 1973, por la cual se crea el Ministerio de Vivienda, donde se establece que corresponde a la Dirección General de Desarrollo Urbano proponer Normas y Reglamentaciones sobre Desarrollo Urbano y Viviendas y aplicar, además, las medidas necesarias para su cumplimiento. Según el recurrente dicha Dirección aprobó, de acuerdo con sus facultades, la construcción cuestionada por el demandante y, por tanto, la Resolución impugnada ha desconocido esa aprobación al ordenar la suspensión y demolición de la adición estructural construida. El recurrente estima que esta disposición fue violada directamente por omisión.

c). El artículo 15 de la Ley 9 de 25 de enero de 1973 en donde se confiere a las autoridades municipales competencia para otorgar permisos de construcción. Como quiera que la resolución ordena la suspensión y demolición de la obra que fue debidamente autorizada mediante la expedición del correspondiente permiso del Departamento de Obras y Construcciones Municipales del Municipio de Panamá, sostiene el casacionista que el fallo incurre en violación directa por omisión de esta norma.

d). El artículo 20 de la Ley N° 48 de 1943 que asigna a la oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos la responsabilidad de extender los certificados de aprobación, sin los cuales las autoridades de Policía no podrán expedir los permisos de ocupación de las construcciones destinadas a residencia. Como quiera que el correspondiente certificado de la oficina de Seguridad fue aportado al expediente, el recurrente considera que dicho documento al no ser valorado en debida forma por el Tribunal Superior provocó la violación directa por omisión de la norma anteriormente mencionada.

e). El artículo 1313 del Código Administrativo, que se estima violado directamente por omisión, en vista de que la misma contempla que la primera autoridad local de Policía será la encargada de otorgar los permisos de construcción, formalidad cumplida en este caso, como se desprende de la documentación que se incorporó como prueba por parte de la demandada.

Se entrará ahora a determinar si el cargo que se le hace al fallo dictado por el Tribunal Superior y que se impugna en casación tiene la virtualidad de producir los efectos buscados por el recurrente, a partir de la censura formulada a través de esta causal.

Estima la Sala que debe advertirse, desde el principio, que el fallo impugnado consiste en un auto que se dicta en un juicio sumario de denuncia de obra nueva el cual se surtió conforme a los trámites indicados por los artículos 1364 y 1365 del Código Judicial. En opinión de la Sala, no es dado examinar el recurso extraordinario interpuesto prescindiendo del estudio y del análisis de las dos normas citadas.

El artículo 1364 del Código Judicial le confiere al poseedor o tenedor de un inmueble, que se vea afectado por la edificación de una obra nueva, la facultad de promover por la vía sumaria un proceso que le permita impedir que aquellas actividades de construcción que le afectan continúen desarrollándose, a los fines de evitar un perjuicio. Entiende la Sala que si ello es así, el derecho que se le otorga al demandante para accionar procesalmente se genera al margen y con independencia de que se hayan o no cumplido con las formalidades y

requisitos que otras leyes o reglamentos determinen para que una persona pueda iniciar la construcción de una obra en determinadas condiciones. La norma se encarga de darle y ofrecerle a quien resulte o se considere afectado por la obra nueva la oportunidad de oponerse para evitar la producción de un daño o la ocurrencia de un perjuicio.

Por su parte, el artículo 1365 del Código Judicial se encarga de definir el trámite, o sea las reglas, a que deben ceñirse, tanto el demandante como el Juez, durante el desarrollo del juicio sumario, incluyendo dentro de esas reglas los procedimientos que han de observarse antes de mandar a suspender la obra o, si es preciso, mandarla a demoler, aún cuando el juicio sumario no haya terminado, siempre que se pudiese temer la provocación de un grave daño.

Como puede apreciarse, ambas disposiciones autorizan al juzgador a adoptar medidas, y al demandante a solicitarlas, al margen de que, quien sea el dueño de la obra nueva denunciada llene o haya llenado los requisitos que los reglamentos atinentes a la actividad de la construcción dispongan que deben ser obedecidos, en cuanto a permisos y autorizaciones se refiere. Basta que el afectado promueva la acción y se de cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 1365 para que al Juez le sea permitido adoptar las medidas que en esa norma se contemplan.

La Sala ha hecho las anteriores consideraciones porque estima que la primera causal invocada por el casacionista y que consiste en denunciar la "**infracción de normas sustantivas de derecho por error de hecho sobre la existencia de la prueba y que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia recurrida**", debe ser examinada tomando muy en cuenta la naturaleza del proceso sumario, lo cual está en la base de la decisión que se impugna mediante este recurso extraordinario.

El impugnante sostiene que el auto dictado por el Primer Tribunal Superior de Justicia es culpable de incurrir en error de hecho sobre la existencia de la prueba, porque dejó de valorar o valoró incorrectamente los documentos que la parte demandada hizo llegar al expediente con la finalidad de demostrar que la construcción de la obra estaba amparada por todos los permisos y autorizaciones que las autoridades administrativas nacionales y municipales deben extender en estos casos. Sin embargo, hay que observar que dichos documentos (visibles en fs. 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136 y 137) no son las únicas pruebas o medios de pruebas que han obrado en este proceso. Es más, el artículo 1365 del Código Judicial dispone de manera expresa que en esta clase de juicio sumario se debe practicar desde el principio una inspección ocular de la obra denunciada como perjudicial, con la participación de dos peritos nombrados por el Tribunal, cuyo resultado será determinante para que el Juez se convenza de si es fundada o no la pretensión, con las posibles consecuencias de poder ordenar la suspensión de la obra y, de considerarlo necesario, mandarla a demoler.

En el caso bajo estudio la inspección ocular practicada con la participación de los peritos designados por el Tribunal se encargó de revelar ciertos elementos fácticos, a la postre esenciales para el desenlace que se produjo mediante el auto dictado por el Primer Tribunal Superior de Justicia (16 de marzo de 1990). En efecto, se estableció que la obra nueva denunciada se construía dejando una distancia de retiro posterior de 85cm. (indica el perito Ingeniero José G. De Freitas) o de 75cm. (según el perito Ing. Jaime A. Jované C.), como se hace constar a fs. 22-23 y 49-51 del expediente. Esa realidad, constatada a través del medio de prueba en comento, permitió demostrar, a su vez, que se estaba levantando la obra denunciada en abierto desconocimiento de las exigencias que se contemplan en las Normas de Desarrollo Urbano para la Ciudad de Panamá, aprobadas por el Ministerio de Vivienda mediante la Resolución N° 150-83 de 26 de octubre de 1983, que señala en la Regla conocida como RM3 que la distancia de retiro posterior para esta clase de construcciones, en los lugares de alta densidad, tiene que ser, por lo menos, de cinco metros.

La Sala le ha dedicado atención a este aspecto del caso para resaltar que no le parece acertada la censura formulada por el recurrente en contra de la decisión del Ad-quem, en cuanto a la supuesta valoración incorrecta que le atribuye respecto a los medios probatorios y que, en su opinión, configuran la

infracción de las normas sustantivas de derecho debido al error de hecho sobre la existencia de la prueba.

En opinión de la Sala los documentos aludidos fueron debida y acertadamente analizados y valorados por el Tribunal Superior. Lo que sí es cierto es que a los mismos no se les atribuyó la condición de irrebatibles, por la sencilla razón de que, al ser confrontados con el contenido de la inspección ocular practicada con participación de peritos, la virtualidad que pudiesen haber tenido para respaldar el derecho alegado por la parte demandada se derrumbó ante la fuerza incontrastable de los hechos, puestos en evidencia por el resultado de la prueba ordenada desde el comienzo del juicio por el Tribunal. La obra nueva denunciada se construía sin respetar los cinco metros de retiro posterior exigidos por la Regla RM3, guardándose una distancia a lo sumo de 85cm. lo cual, a todas luces, implicaba una desobediencia de los reglamentos.

El mérito que hay que reconocerle a los resultados que arroje la inspección ocular con participación de peritos en esta clase de juicio sumario no puede ser menoscabado por el hecho de que hayan sido aportados los documentos en que la parte demandada apoya su impugnación. La inspección ocular en un caso como este debe ser estimada como el medio probatorio por excelencia y, salvo que otras pruebas, que no fueron precisamente las aportadas por la demandada, se encarguen de eliminarle su trascendencia, el Juzgador tendrá que meritarla siempre como corresponde. Por otro lado, la Sala no comparte el argumento utilizado por el casacionista cuando sostiene que las pruebas documentales aportadas validamente por la Compañía Aseguradora La Previsora, S. A. en este proceso son suficientes y bastan para otorgarle la razón. No hay dudas que esos documentos demuestran que provienen de las autoridades competentes para expedirlos. Eso nadie lo discute. Pero equivoca el rumbo el casacionista cuando pretende limitar el objeto y el propósito buscado en el proceso sumario instaurado en contra de su poderdante a los hechos reflejados en el contenido que poseen esos medios de prueba. Lo que ciertamente se tenía que resolver en el juicio era si la obra nueva denunciada se llevaba a cabo, en realidad, con apego a todas las leyes y reglamentos aplicables, además, de si dicha construcción ocasionaba daño a la parte actora en su condición de propietario colindante. La inspección ocular practicada por órdenes del Juez de Primera Instancia condujo a mermar, en forma sustancial, la fuerza probatoria que, en principio, pudiesen haber tenido los documentos aportados por la parte demandada.

No puede admitir la Sala el criterio de que, una vez probado que los permisos y autorizaciones necesarios para construir y ocupar una obra hayan sido expedidos por aquellas autoridades a quienes corresponde hacerlo, al Juez de la causa le está impedido decidir a favor del demandante, ya que una conclusión de esa naturaleza equivaldría a restarle mucho de su sentido y razón de existir a la denuncia de obra nueva, en su carácter de juicio sumario, tal como ese proceso se regula en los artículos 1364 y 1365 del Código Judicial.

Ocurre que los fundamentos probatorios sobre cuya existencia supuestamente se produce el error de hecho, de acuerdo con el recurrente, no son suficientes por ellos mismos para demostrar que, en efecto, la parte demandada hubiese edificado conforme las exigencias legales aplicables a la construcción de la obra nueva denunciada. En todo caso y a lo sumo, ellos sirven sólo para comprobar que hubo, de parte de la autoridad, aprobación para que se construyeran las mejoras que se pretendían incorporar al inmueble. Ahora bien, las pruebas documentales examinadas no constituyen una autorización otorgada para que la demandada construyera a su antojo y si fuera el caso que ellos autorizaban para construir en contravención de las estipulaciones legales, esa circunstancia no valida aquello que se hubiere autorizado en contra de la ley. Ciertamente, ninguna autoridad esta facultada para actuar fuera del marco de sus atribuciones legales. Si esto último se produjo o no, es decir, si la COMPAÑÍA ASEGURADORA LA PREVISORA, S. A., aprovechó esas autorizaciones en forma debida o indebida, es lo que a juicio de la Sala tenía que ser demostrado por conducto de los medios probatorios utilizados por las partes del proceso. Lamentablemente los documentos aportados por la demandada carecen, como se ha dicho, de la fuerza necesaria para el esclarecimiento de ese extremo, tanto en el sentido positivo como en el negativo, respecto a la versión de lo que pudo haber acontecido en la realidad.

En consecuencia, la causal invocada en el recurso en estudio no está justificada, y por ende, la Sala procede al examen de la siguiente causal.

EXAMEN DE LA SEGUNDA CAUSAL Y LOS MOTIVOS QUE LA FUNDAMENTAN

Aduciéndose como causal de fondo que el auto impugnado incurrió en error de derecho en la apreciación de la prueba, el recurrente expuso como motivos que la prueba pericial, visible de fojas 103 a 110 del expediente, no cumple los requisitos que le exige la Ley; que no es suficiente para probar los perjuicios causados por la parte demandada; que no alcanza para establecer las supuestas violaciones de **"los principios de edificación contenidos en las Normas de Desarrollo Urbano para la Ciudad de Panamá"**, por lo cual es incompleta; y que el Primer Tribunal Superior de Justicia incurrió en violación de las reglas de valoración contenidas en la Ley; todo lo cual se tradujo en la violación de normas sustantivas de derecho y en la equivocada decisión a la que arribó el Ad-quem en este caso.

Cita como infringido el artículo 967 del Código Judicial (referente a la fuerza que debe serle otorgada al dictamen pericial) y añade que el dictamen de los peritos, que aparece de fojas 101-110, carece de valor científico, ya que las personas que lo elaboraron no tienen preparación técnica y profesional para dictaminar el daño supuestamente causado. En otras palabras, dice el recurrente que los peritos no eran competentes.

También se denuncia la infracción del numeral 3 del artículo 1365 del Código Judicial que atañe a la facultad del Juez para ordenar la suspensión y la demolición de la obra en casos de juicios sumarios por denuncia de obra nueva y reitera el recurrente sus opiniones acerca de la incompetencia de los peritos para dictaminar con propiedad acerca de la gravedad del mal que se le pudo haber causado al inmueble de propiedad de la parte demandante.

La tercera infracción denunciada corresponde al artículo 7, literal a) de la Ley N° 9, de 25 de enero de 1973 que asigna a la Dirección General de Desarrollo Urbano la función de proponer **"normas y reglamentaciones sobre el Desarrollo Urbano y Vivienda y aplicar las medidas necesarias para su cumplimiento"**. La infracción se hace consistir en que la sentencia recurrida desconoce que la mencionada Dirección aprobó la construcción denunciada y que el Tribunal al ordenar la demolición de la obra está pasando por encima de esa aprobación.

Como cuarta infracción se menciona la del artículo 1313 del Código Administrativo que, como se sabe, se refiere a las autoridades locales que deben expedir los permisos de construcción. El recurrente censura al Tribunal Superior porque al ordenar la demolición de la obra desconoce que la misma se construyó luego de obtenidos los permisos correspondientes en la forma en que lo indica la disposición en referencia.

Para comenzar el examen de esta segunda causal invocada por el recurrente la Sala tiene que analizar la acusación que, en primer término, se le hace al auto impugnado en cuanto a que la prueba pericial no reúne los requisitos que se le asignan para que sirviese como base o fundamento de la orden de demolición de la obra tal como lo dispuso el Ad-quem.

Por supuesto, la fuerza del dictamen pericial debe ser valorada, teniendo en cuenta los principios científicos en que se funde, la relación con el material de hecho, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y la competencia de los peritos y sus opiniones, relacionándola con el resto de las pruebas que obran en el expediente, tal como lo indica el artículo 967 del Código Judicial. Conviene entonces analizar la prueba pericial practicada en este caso, que dio lugar a que el Tribunal Superior ordenase la demolición de la obra nueva denunciada, comenzando por observar si los peritos empleados eran o no competentes para desempeñar la encomienda que se les asignó. La competencia o incompetencia de los peritos en un caso determinado debe ser apreciada en relación directa con la materia sobre la cual éstos deban hacer un pronunciamiento y el grado de preparación o conocimientos que sobre dicha materia

puedan o no tener quienes practican la experticia. En el presente caso quienes intervinieron como peritos fueron los señores Jorge Enrique González y Javier Solanilla Suárez; el primero Maestro de Obras y el segundo Licenciado en Administración de Empresas y Contabilidad. Observa la Sala que la labor encomendada a esos peritos consistió en que, mediante el informe correspondiente, establecieran los perjuicios causados, por la obra nueva denunciada, a INMOBILIARIA ERGO, S. A. Ellos señalan que, en efecto, se le han causado al propietario colindante numerosas molestias, incomodidades y daños de consideración como resultado directo de que se construyó, "casi encima", sin respetar la distancia de cinco metros que debió guardarse en la línea de retiro posterior. Entre las consecuencias que destacan, mencionase, entre otras, la falta de iluminación natural (luz solar), la invasión del área de lavandería que, a raíz de las actividades de construcción, tuvieron que ser trasladadas a un sitio distinto de la residencia ocupada por el señor Herrera y Franco, los costos que implicaron la contratación de servicios profesionales de abogados e ingenieros para hacerle frente e impedir ante los Tribunales de Justicia la construcción de la obra nueva denunciada y la pérdida de algunos bienes muebles (pinturas) de propiedad del señor Guillermo Herrera y Franco que ocurrieron durante el tiempo en que se llevó a cabo la construcción y como consecuencia de esas actividades.

Estima la Sala que para poder establecer si este tipo de perjuicios llegaron o no a producirse no era necesario que los peritos poseyeran una particular y especializada preparación, pues se trata de las consecuencias que normalmente pueden llegar a desprenderse cada vez que, con abuso y sin respetar las reglas que para construir en las áreas densamente pobladas de la ciudad de Panamá, sufren aquellos vecinos del predio en que se construye una obra determinada. También observa la Sala que los peritos han presentado un informe en donde dictaminan con suficiente grado de certeza y exponen con la suficiente claridad los datos en que fundamentan el daño que condujo al Tribunal Superior a ordenar la demolición de la obra denunciada.

En cuanto a la supuesta característica de incompleta con que el impugnante califica a la prueba, no está de acuerdo la Sala con la valoración formulada por él. El peritaje reposa en datos fácticos correctos y, como ya se ha dejado dicho, está demostrado que la nueva edificación violó los principios de construcción contenidos en las Normas del Desarrollo Urbano para la Ciudad de Panamá; así como tampoco es cierto que los peritos no hayan afirmado que dicha edificación deje de producir un grave mal a la finca de propiedad de la parte demandada, pues en verdad ellos aseguran en su informe todo lo contrario. No existen, por tanto, motivos para fundamentar la censura que se le hace a la Resolución recurrida en cuanto a la supuesta infracción del artículo 967 y 1365 del Código Judicial ni del artículo 7, literal a) de la Ley N° 9 de 25 de enero de 1973.

La Sala, por último, tampoco encuentra que la resolución impugnada infrinja, como se alega dentro de esta segunda causal de fondo, lo dispuesto por el artículo 1313 del Código Administrativo. Como se dejó dicho al examinar la primera causal de fondo, el que la parte demandada haya edificado con permiso de la autoridad local no la exime de responder por el incumplimiento de normas objetivas de derecho (Reg. RM3) que deben respetarse y a las que tienen que someterse todos aquellos que decidan construir en la Ciudad de Panamá.

En consecuencia, al no prosperar el cargo formulado, la segunda causal tampoco está justificada.

Por todo lo anterior expuesto, la Corte Suprema, Sala Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la Resolución Judicial dictada por el Primer Tribunal Superior de Panamá, de fecha 2 de septiembre de 1994 en el Proceso Sumario de Denuncia de Obra Nueva que INMOBILIARIA ERGO, S. A. le sigue a la COMPAÑÍA DE SEGUROS LA PREVISORA, S. A.

Las costas a cargo de la parte recurrente se fijan en la suma de QUINIENTOS BALBOAS (B/.500.00).

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Encargado de

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RAFAEL BARDAYAN VERGARA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE DIVORCIO QUE LE SIGUE MARISABEL MENDOZA TAYLOR. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, TREINTA (30) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado NELSON ROVETTO, en su condición de apoderado especial del señor RAFAEL BARDAYAN, oportunamente formalizó recurso de casación contra la sentencia de 28 de julio de 1995, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia en el proceso de divorcio que le sigue MARISABEL MENDOZA TAYLOR.

Después de fijado el término para realizar los alegatos, se corrió traslado al Procurador General de la Nación para que emitiera concepto en cuanto a la admisibilidad del recurso. Procede el Tribunal de Casación a determinar tal como lo disponen los artículos 1165 y 1160 del Código Judicial si procede la admisibilidad.

La causal que se invoca es infracción de normas sustantivas de Derecho por error de derecho en la apreciación de la prueba que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida, la misma está consagrada en el artículo 1154 del Código Judicial.

Se observa que el recurso se interpuso oportunamente, por persona hábil.

Al analizar el recurso para determinar si llena las formalidades establecidas en el artículo 1160 del Código Judicial, encuentra la Sala que el mismo se aparta totalmente de la técnica exigida en estos casos. En los motivos que presenta el recurrente no establecen cuales son las pruebas que valoró mal el Tribunal Superior, por tantos estos motivos son incongruentes con la causal probatoria invocada.

En cuanto a las disposiciones legales infringidas y la explicación de como han sido, el recurrente no explica cómo han sido violadas dichas normas, no establece cuales son las normas sustantivas infringidas como consecuencia de la mala valoración.

El recurrente cae en el error de hacer referencia a la primera instancia, dado que este extraordinario recurso solamente examina errores en el fallo de segunda instancia. De igual manera la Sala reitera que tanto en la exposición de los motivos como en el señalamiento de normas infringidas el casacionista debe ser concreto, sin caer en alegaciones que no son propias de la técnica de este recurso.

En consecuencia, se den los presupuestos señalados en el artículo 1167 del Código Judicial, para declarar la inadmisibilidad del recurso por ser ininteligible.

Por todo lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA INADMISIBLE el recurso de casación, en el fondo, propuesto por RAFAEL BAYARDAN VERGARA contra la sentencia dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial el día 28 de julio de 1995.

Las obligantes costas, a cargo del recurrente, se fijan en la suma de SETENTA Y CINCO BALBOAS (B/.75.00).

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Encargado

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

VALAR INT, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO EJECUTIVO QUE LE SIGUE COLONIAS DE PANAMÁ, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense **"MORGAN Y MORGAN"** en su condición de apoderados especiales de VALAR INT, S. A., han formalizado el Recurso de Casación contra la Resolución fechada el 19 de Septiembre de 1995, emitida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, dentro del Proceso Ejecutivo de Mayor Cuantía que VALAR INT., S. A. le sigue a COLONIAS DE PANAMÁ, S. A.

Surtidas las reglas de reparto, se concedió a las partes el termino de ley para que alegaran en cuanto a la admisibilidad del recurso, lo que ambas hicieron según consta a fojas 116-119 (parte opositora) y 120-122 (parte recurrente).

Vencido de esa manera el término de lista, la Sala realizó el examen correspondiente del libelo de casación en atención a las exigencias del artículo 1165 del Código de Procedimiento Civil, concluyendo que cumple con todas ellas. Es decir, que en este caso:

1. La resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley;

2. El recurso ha sido interpuesto en tiempo;

3. El escrito por medio del cual fue interpuesto reúne todos los requisitos ordenados por el artículo 1160, y;

4. La causal invocada es de la que señala la ley.

En consecuencia, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de casación propuesto por VALAR INT., S. A. contra la Resolución fechada 19 de septiembre de 1995, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia en el Proceso Ejecutivo de Mayor Cuantía que le sigue a COLONIAS DE PANAMÁ, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Encargado

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

LUIS ROBERTO GONZÁLEZ PELLITERO RECURRE EN CASACIÓN EN LA MEDIDA PRECAUTORIA PRESENTADA DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO DECLARATIVO INCOADO POR LUIS ROBERTO GONZÁLEZ PELLITERO CONTRA EUROPUSH INTERNACIONAL, S. A., ALFREDO PRIETO BOUZAS, PEDRO ERASMO ORTEGA, HECTOR PÉREZ Y NICOLÁS RUIZ. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Licenciado Gilberto Bósquez Díaz, en representación del señor **LUIS ROBERTO GONZÁLEZ PELLITERO**, ha interpuesto recurso de casación contra la resolución proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 19 de septiembre de 1995, que decidió en segunda instancia la solicitud de medida precautoria presentada por el recurrente, dentro del proceso ordinario declarativo instaurado por él contra **EUROPUSH INTERNACIONAL, S. A., ALFREDO PRIETO BOUZAS, PEDRO ERASMO ORTEGA, HECTOR PÉREZ y NICOLÁS RUIZ.**

Cumplidos los trámites procesales correspondientes a esta clase de negocio, es tarea de la Sala determinar si el presente recurso de casación reúne los requisitos necesarios para su admisibilidad.

En primer lugar, se observa que la resolución impugnada es susceptible del recurso de casación, ya que se trata de un auto que decide en segunda instancia una medida cautelar. En relación con la cuantía, se advierte que si bien no fue establecida expresamente en el libelo de la demanda, existen elementos suficientes en el expediente que permiten concluir que es superior al mínimo que establece la ley.

En segundo lugar, el recurso fue anunciado y presentado en tiempo oportuno y por persona hábil.

En tercer lugar, en cuanto al escrito de formalización se observa que se trata de un recurso de casación en el fondo en el cual se ha invocado como única causal, "**INFRACCIÓN DE NORMAS SUSTANTIVAS DE DERECHO POR APLICACIÓN INDEBIDA**". Aún cuando el texto corresponde al del artículo 1154 del Código Judicial, es preciso señalar que el recurrente omitió indicar que dicha infracción influyó sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida.

En cuanto al primer motivo, es necesario indicar que en este apartado del recurso no se debe analizar la causal, como lo hace el recurrente. La relación entre éstos y la causal nace del contenido de unos y la otra. Además, se advierte que en el primer motivo se plantea un problema teórico -que puede ser cierto o no- lo cual no es propio del recurso de casación que se refiere a una situación concreta, a la cual debe aludir el recurrente.

El motivo segundo constituye también teorización que en los términos del recurrente categorizan, o sea, consideran grandes aspectos que según él constituyen diferencias esenciales que se dan entre las normas sustantivas y las medidas cautelares (adjetivas). Situación que se repite en los motivos tercero y cuarto.

La consecuencia de estos es que no se sabe en qué circunstancias se pronunció la sentencia de segundo grado contra la cual se recurre, ni cómo lo hizo, lo cual en el aspecto fáctico constituya los cargos que se le imputan. Por tanto, los motivos deben ser corregidos.

Las disposiciones legales que se consideran infringidas y el concepto de dichas infracciones, resultan adecuados, luego de un primer examen formal.

En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA LA CORRECCIÓN del recurso de casación presentado por el apoderado judicial del señor LUIS ROBERTO GONZÁLEZ PELLITERO, en los términos que establece la presente resolución, para lo cual concede el término establecido por el artículo 1166 del Código Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) ELIGIO MARÍN C.
Secretario Encargado

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

CONFLICTO DE COMPETENCIA

CONFLICTO DE COMPETENCIA SUSCITADO ENTRE EL JUZGADO QUINTO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, RAMO CIVIL Y EL JUZGADO PRIMERO SECCIONAL DE FAMILIA DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ EN EL PROCESO DE DIVORCIO INSTAURADO POR BOBY BUD TURMAN CONTRA EDILSA ATENCIO JIMÉNEZ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO SALAS. PANAMÁ, ONCE (11) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Procedente del Tribunal Superior de Familia ha llegado a la Sala Civil el **Conflicto de Competencia** suscitado entre los Juzgados Quinto del Circuito Civil del Primer Circuito y el Juzgado Primero Seccional de Familia del Primer Circuito Judicial de Panamá, por razón del proceso de divorcio interpuesto por **BOBBY BUD TURMAN** contra **EDILSA ATENCIO JIMÉNEZ**.

Corresponde a la Sala resolver el presente conflicto de competencia, previas las siguientes consideraciones:

En este caso, la demanda de divorcio fue presentada el 9 de agosto de 1995, ante el Juzgado Primero Seccional de Familia del Primer Circuito Judicial, quien mediante Auto N° 485 de 17 de agosto de 1995 decidió **DECLINAR** el conocimiento de dicho proceso al Juzgado Quinto Civil del Primer Circuito Judicial, al que considera competente por razón del domicilio conyugal, según lo establece el artículo 258 del Código Judicial, caso octavo.

El Juzgado Quinto de Circuito del lo Civil al recibir el negocio resolvió, en Auto N° 1896 de 29 de septiembre de 1995, que "**NO SE AVOCA al conocimiento** del proceso de divorcio ...", al considerar que la materia tratada en el artículo 1271 del Código Judicial "ahora la regula el Código de la Familia de recién vigencia, es decir, existe ya en nuestra Legislación Tribunales especialmente creados para el conocimiento de estos negocios de familia y del menor."

En reciente jurisprudencia sentada por esta Sala de la Corte, en que al igual que en este caso se cuestiona a quién corresponde el conocimiento en materia de familia (filiación, divorcio y otros), se ha señalado que "más que un conflicto de competencia, es un problema jurisdiccional". En este sentido, se ha explicado que:

> "...
> El Juzgado Quinto de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial fue creado mediante la Ley 22 de 1979 para el área de Ancón y si originalmente conoció de los procesos de adopción, de divorcios, entre otros casos de familia, actualmente ello ha desaparecido. ...
>
> Actualmente, a partir del 3 de enero de 1995, cuando las cuestiones de familia pertenecen a una jurisdicción distinta, tales consideraciones no son pertinentes por lo cual el Juzgado Quinto de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial carece de competencia para conocer de asuntos ajenos a su jurisdicción. En virtud de lo expuesto, el caso planteado ha de ventilarse ante los tribunales de familia, entre los cuales se fijará la competencia de acuerdo al procedimiento establecido en el Código de la Familia. No tiene, en consecuencia, el Juzgado Quinto de Circuito de lo Civil jurisdicción para administrar justicia en cuestiones de familia, correspondiéndole al Juzgado Octavo del Primer Circuito Judicial, hoy Juzgado Primero Seccional de Familia su competencia. ..." (Sentencia de 24 de noviembre de 1995, CONFLICTO DE COMPETENCIA).

En consecuencia al criterio jurisprudencial transcrito y a los artículos 3 y 838 del Código de Familia la Sala reitera que los asuntos controvertidos en

materia de familia y menores se atribuyen exclusivamente a la jurisdicción especial de familia, dentro de la cual se fijará la competencia a quien corresponda, siendo que en este negocio es propia del Juzgado Primero Seccional de Familia.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FIJA LA COMPETENCIA del proceso de divorcio instaurado por BOBBY BUD TURMAN contra EDILSA ATENCIO JIMÉNEZ en el Juzgado Primero Seccional de Familia del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ELIGIO SALAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

IMPEDIMENTO

CONSTRUCTORA DOS MARES, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE ROBERTO ANTONIO BERASTEGUI. (MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO). MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, DOCE (12) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Magistrado **ROGELIO A. FÁBREGA Z.** ha solicitado que se le separe del conocimiento del recurso de casación presentado por **CONSTRUCTORA DOS MARES, S. A.**, dentro del proceso ordinario que le sigue al señor **ROBERTO A. BERASTEGUI.**

Como fundamento de su petición señala lo siguiente:

> "Respetuosamente solicito a los Honorables Magistrados se me separe del conocimiento del presente negocio, contentivo del recurso de casación que CONSTRUCTORA DOS MARES, S. A. interpone contra la Resolución proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de fecha 23 de mayo de 1995 en el proceso ordinario que le sigue a ROBERTO A. BERASTEGUI.
>
> Esta petición la hago en virtud que antes de ser designado Magistrado de la Corte Suprema de Justicia ejercí el cargo de Ministro de Hacienda y Tesoro intervine en la denuncia que guarda relación con la Finca motivo del proceso lo que me imposibilita para conocer de este negocio, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 749 numeral 5 del Código Judicial ..."

La Sala concluye que la situación planteada por el Magistrado ROGELIO A. FÁBREGA Z., corresponde a lo dispuesto por el citado numeral del artículo 749 del Código Judicial y, consecuentemente, debe declararse legal el impedimento solicitado.

En mérito de lo expuesto, los suscritos Magistrados de la SALA CIVIL de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARAN LEGAL el impedimento manifestado por el Magistrado ROGELIO A. FÁBREGA Z. y, en su lugar, DISPONEN llamar al Magistrado de la Sala Penal que corresponda, para que conozca del recurso de casación presentado por CONSTRUCTORA DOS MARES, S. A., dentro del proceso ordinario que le sigue a ROBERTO A. BERASTEGUI.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ

(fdo.) ELIGIO SALAS

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala Civil

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE

INCIDENTE DE RECUSACIÓN INTERPUESTO POR ROBERTO ANTONIO BERASTEGUI, MEDIANTE APODERADO JUDICIAL, CON AUDIENCIA DEL HONORABLE MAGISTRADO ROGELIO FÁBREGA ZARAK EN EL RECURSO DE CASACIÓN INCOADO POR CONSTRUCTORA DOS MARES, S. A. DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE ROBERTO ANTONIO BERASTEGUI. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado José Domingo Fajardo Gómez, en su condición de apoderado judicial de **ROBERTO ANTONIO BERASTEGUI ha interpuesto INCIDENTE DE RECUSACIÓN** contra el Honorable Magistrado **ROGELIO A. FÁBREGA ZARAK,** con fundamento en los numerales quinto y décimo séptimo del artículo 749 del Código Judicial, por razón del recurso de casación propuesto por **CONSTRUCTORA DOS MARES, S. A.** dentro del Proceso Ordinario que le sigue **ROBERTO ANTONIO BERASTEGUI.**

Cumplidas las reglas de reparto, el expediente se llevó al Despacho Sustanciador para proveer, incluyendo a fojas 10 un informe Secretarial mediante el cual se comunicó que el **Magistrado Fábrega Zarak** manifestó impedimento para conocer del referido recurso de casación y, que el mismo se encontraba pendiente de su calificación en el despacho del Magistrado Rafael A. González.

Posteriormente, la Secretaría de la Sala informó que se declaró legal el impedimento del **Magistrado Fábrega Zarak**, mediante resolución calendada 12 de enero de 1995, cuya copia se adjuntó a este expediente para que continuara el procedimiento pendiente.

Como se ha podido apreciar de lo que se deja expuesto, el Incidente de Recusación propuesto en este caso, se refiere a un punto ya resuelto por esta Sala de la Corte, relativo a impedimento recaído en el Magistrado **Fábrega Zarak** para asumir el conocimiento del recurso de casación propuesto por **CONSTRUCTORA DOS MARES, S. A.** en base a los supuestos que prescribe el artículo 749 del Código Judicial.

Consecuentemente, el Incidente de Recusación debe ser **RECHAZADO DE PLANO,** al existir un procedimiento sobre lo pretendido en el mismo, situación que produce, en este caso, el fenómeno jurídico denominado **"SUSTRACCIÓN DE MATERIA".**

Por tanto, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RECHAZA DE PLANO el Incidente de Recusación propuesto por ROBERTO ANTONIO BERASTEGUI contra el Magistrado ROGELIO A. FÁBREGA ZARAK.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ

(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Encargado

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HECHO

MARIANELA WONG LEE (TIPY COPY) INTERPONE RECURSO DE HECHO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 1995, DICTADA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL PROCESO ORDINARIO INCOADO POR MARIANELA WONG LEE (TIPY COPY) CONTRA AGENCIAS ANCHOR, S. A. Y NATIONAL UNIÓN FIRE INSURANCE COMPANY OF PITTSBURG, P. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado JAVIER CARRILLO GONZÁLEZ, como apoderado judicial de la señora MARIANELA WONG LEE (TIPY COPY), dentro del proceso ordinario de mayor cuantía que le sigue a AGENCIAS ANCHOR, S. A. y/o NATIONAL UNIÓN FIRE INSURANCE, COMPANY OF PITTSBURGH P. A., ha recurrido de hecho ante esta Sala, con el propósito de que se revoque el auto de fecha 24 de octubre de 1995, dictado por el Primer Tribunal Superior de Justicia, mediante el cual ese Tribunal niega la concesión del término para la formalización del recurso de casación.

Dentro del término establecido en el párrafo tercero del artículo 1139 del Código Judicial, las partes en el proceso presentaron sus respectivos escritos de alegatos. Cumplida con la fase procesal, procede la Sala a resolver sobre la admisibilidad de la petición formulada ante esta Corporación de Justicia.

El recurrente sostiene que el recurso se interpuso, dentro del término legal, contra la sentencia proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia del 31 de agosto de 1995, la cual revoca la sentencia N° 62 del 27 de octubre de 1994 proferida por el Juzgado Cuarto del Circuito de lo Civil. Señala, además, que la notificación quedó suspendida en virtud de escrito formulado por los demandados, en cuanto a que la referida sentencia sea reformada, solamente con respecto a las costas.

Por su parte, la firma forense SHIRLEY & DÍAZ, apoderados judiciales de la parte demandada, formularon su escrito de oposición al Recurso de Hecho, tal como consta a fojas 54 y 55 del expediente.

La Sala observa de fojas 20 a 28, la resolución proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, de fecha 31 de agosto de 1995 y cuya parte resolutiva es del tenor siguiente:

"...

Por las consideraciones que se han dejado expuestas el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia N° 62 de fecha 27 de octubre de 1994, dictada por el Juzgado Cuarto del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, y, en su lugar, DECLARA NO PROBADA la EXCEPCIÓN DE CARENCIA DE ACCIÓN DIRECTA por parte de la demandante contra la NATIONAL UNIÓN FIRE INSURANCE COMPANY OF PITTSBURGH, P. A.; NIEGA las declaraciones solicitadas por la señora MARIANELA WONG LEE (TIPY COPY) por las razones expuestas en la parte de esta sentencia.

Sin condena en costas por considerarse la actuación de la demandante como de buena fe en los términos del artículo 1057 del Código Judicial, siendo de su cargo solamente los gastos del proceso, que serán liquidados por la Secretaría del Juzgado de origen".

La resolución antes indicada fue notificada mediante edicto fijado el 6 de septiembre de 1995 y desfijado el día siguiente, 7 de septiembre de 1995, quedando ejecutoriada la resolución, el 12 de septiembre de 1995.

El apoderado de la parte demandada, AGENCIAS ANCHOR, S. A., presentó escrito el día 8 de septiembre de 1995, a fin de que se reforme la sentencia dictada el 31 de agosto de 1995 "SOLO EN CUANTO A CONDENA DE COSTAS". Por su parte, el Licenciado RUBÉN ELÍAS RODRÍGUEZ AVILA, quien representa a la otra parte demandada, NATIONAL UNIÓN FIRE INSURANCE COMPANY OF PITTSBURGH, P. A.,

anunció casación, el 8 de septiembre de 1995 (foja 32).

Consta a foja 23 del expediente el escrito presentado por el Licenciado JAVIER CARRILLO GONZÁLEZ, quien representa los intereses de la parte actora en el proceso ordinario y en cuya marginal superior izquierda se lee: "NOTIFICA CAMBIO DE DOMICILIO, SE OPONE A SOLICITUD y SE ANUNCIA RECURSO DE CASACIÓN". Este escrito tiene fecha de presentación el 15 de septiembre de 1995.

Mediante auto de 4 de octubre de 1995, el Primer Tribunal Superior de Justicia, negó la solicitud de reforma de la sentencia de fecha 31 de agosto de 1995, impetrada por la apoderada judicial de AGENCIAS ANCHOR, S. A.

Por último, se lee a foja 40 del expediente, que el Tribunal ad-quem negó la concesión del término para la formalización del recurso de casación al apoderado judicial de la parte actora en el presente negocio, por haberse presentado extemporáneamente. La referida resolución señala, lo siguiente:

> "...
> Encontrándose el proceso en estado de conceder el término para la formalización del recurso de casación, el Tribunal se percata que el escrito mediante el cual se anuncia el recurso meritado fue presentado de manera extemporánea, tomando en consideración que el término señalado en el artículo 1158 del Código Judicial para ejercitar dicho medio de impugnación venció el día 12 de septiembre de 1995 (ver foja 421 vuelta) y no fue sino hasta el 15 de septiembre de 1995, cuando el apoderado judicial anuncia casación (ver foja 425), por tanto procede negar el mismo ...".

La Sala se manifiesta totalmente de acuerdo con lo expuesto en esta resolución. Ello es así porque efectivamente el recurso de casación sólo podría presentarse contra la resolución dictada el 31 de agosto de 1995 y que fue notificada mediante edicto y desfijado el 7 de septiembre de 1995. A partir de ese día tenía el apoderado de la parte que pretende recurrir en casación, el término de tres días para hacer el anuncio. Sin embargo, no se usó este término para hacer el anuncio, porque consideró, según su criterio, que la notificación se había suspendido por el escrito de aclaración formulado contra la sentencia de 31 de agosto de 1995, que estaba pendiente por resolver. Esta situación no está consagrada en la ley.

Con respecto a ello, en la obra de CASACIÓN, cuyos autores son el profesor JORGE FÁBREGA P. y la profesora AURA E. GUERRA DE VILLALAZ, página 66, se expresa que:

> "Si se trata de sentencia, y se solicita reforma, debe anunciarse de todos modos dentro del término de tres días después de notificada la sentencia. Como ha expresado la Corte: "La circunstancia de que con anterioridad a la manifestación de que se recurrirá en casación, se solicite reformas de la sentencia, no puede entenderse a efecto de que mientras se decide la solicitud de reforma no siga corriendo, por haberse prorrogado tácitamente, el término de tres días para hacer la referida manifestación. No existe razón para que así se entienda, ni esa interpretación encuentra apoyo en el texto legal" (Fábrega, Jurisprudencia 1940-1945, págs.98). La Corte ha sostenido análoga tesis respecto a la petición de aclaración de puntos obscuros (S. de 30 de diciembre de 1942, R. J. N° 12, pág. 1). Por otra parte, el anuncio de casación en contra de una sentencia no requiere que se reitere el anuncio en contra las aclaraciones que se pidan.
>
> El término de anuncio tiene las siguientes características: 1° Es un término fatal; 2° Opera como un término común ya que la sentencia de segunda instancia se notifica por edicto; 3° Es improrrogable. Como es un término legal, sólo podría prorrogarse si la Ley lo autoriza expresamente, y ésta no lo hace; 4° Es un plazo de días".

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de hecho presentado por el Doctor JAVIER CARRILLO GONZÁLEZ, en nombre y representación de MARIANELA WONG LEE (TIPY COPY), dentro del proceso ordinario de mayor cuantía que se promoviera contra AGENCIAS ANCHOR, S. A. y/o NATIONAL UNIÓN FIRE INSURANCE COMPANY OF PITTSBURGH, P. A.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Encargado

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EL LICENCIADO SANTANDER TRISTÁN DONOSO INTERPONE RECURSO DE HECHO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DE 1995, DICTADA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL PROCESO SUMARIO DE INTERDICTO POSESORIO DE PERTURBACIÓN INTERPUESTO POR COLÓN INTERNACIONAL, S. A. CONTRA JORGE ALLEN, TOMÁS ROWE, BALTAZAR BETEGON Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado **Santander Tristán Donoso** ha interpuesto Recurso de Hecho contra la Resolución de 22 de noviembre de 1995 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia, en el Proceso Sumario de Interdicto Posesorio de Perturbación interpuesto por **COLÓN INTERNACIONAL, S. A.** contra **JORGE ALLEN, TOMÁS ROWE, BALTAZAR BETEGON Y OTROS.**

Cumplidas las reglas de reparto, el negocio se fijó en lista para que las partes alegaran en el término de tres días, lo que ambas hicieron según consta de fojas 12-13 (Opositor) y 14 (recurrente).

Seguidamente, la Sala de la Corte procede a decidir si admite el recurso de hecho en atención al cumplimiento de los presupuestos que determina el artículo 1141 del Código Judicial, que a la letra dice:

> "Para admitir un recurso de hecho se necesita que la respectiva resolución sea recurrible, que el recurso se haya interpuesto oportunamente y lo haya negado expresa o tácitamente el Juez, que la copia se pida y retire en los términos señalados y se ocurra con ella ante el superior en la debida oportunidad."

El presente recurso de hecho ha sido interpuesto contra la resolución de 22 de noviembre de 1995, mediante la cual el Tribunal Superior **NIEGA** el término para la formalización del recurso de casación, por considerar que la respectiva resolución no es de las que determina el artículo 1149 como susceptibles de ese extraordinario medio de impugnación.

Por su parte, el recurrente alega que el recurso de casación es jurídicamente viable por razón de que el auto en cuestión es de los que describe el ordinal 2 del artículo 1149 ibídem. En ese sentido expresa que el Auto de 31 de octubre de 1995 proferido por el Primer Tribunal Superior "pone fin al proceso de interdicto posesorio de perturbación entrañando para BALTAZAR BETEGON el desalojo del terreno que solicita junto a su familia".

Con el recurso de hecho se aportaron copia de la resolución de 31 de octubre de 1995 que declaró desierto el recurso de apelación en el proceso de interdicto posesorio, en cuyo reverso se anunció casación (fs. 4-5) y, copia de la resolución que, posteriormente, negó el término para formalizar el recurso de casación (fs. 6-7).

A juicio de la Sala, el recurrente pudiera tener razón al sostener que el aludido pronunciamiento sobre la apelación es recurrible en casación por poner fin al proceso sumario. Ese efecto de finalizar el proceso lo tendría la resolución respectiva, pese a no haber resuelto el recurso de apelación en sí, en el evento de que la apelación se hubiese anunciado contra una sentencia, que en los procesos sumarios son las resoluciones que deciden las pretensiones de acuerdo al artículo 974 del Código Judicial.

En este caso se sabe, por lo que consta en el expediente, que la resolución contra la cual se anunció el recurso de apelación fue dictada por el Juzgado Segundo del Circuito de Colón, Ramo Civil el 26 de mayo de 1995 dentro del proceso sumario de interdicto de perturbación y que al momento de ser proferida DENEGÓ el Recurso de Revocatoria que interpuso uno de los demandados (fs. 4). Ello se colige de una de las copias que figuran en el expediente, que no es de la aludida resolución. Es decir, que a ciencia cierta no se sabe lo otro que resolvió además del recurso de revocatoria.

En este caso es importante tener la certeza del contenido de dicha resolución para determinar, según su naturaleza, si se trata de Sentencia o Auto. Ello es fundamental pues los efectos que cada una produce son diferentes y, en este caso en lo que respecta al recurso de apelación, si se anunció contra una sentencia (que hubiere decidido la pretensión principal) implicaría necesariamente un pronunciamiento de fondo sobre la impugnación aunque no se hubiera sustentado, lo que lógicamente repercute en la viabilidad del recurso de casación.

Por ello, a pesar que el Tribunal se refiere a que se trata de un Auto y aplicó el procedimiento que determina el artículo 1122 cuando no se sustenta la alzada, la Sala ha podido advertir que por imprecisiones terminológicas del Código de Procedimiento mucha veces se confunden las denominaciones de las resoluciones judiciales, lo que consiguientemente conduce a errores en el procedimiento.

Por lo que se deja expuesto, no resulta todavía claro si se cumple con el primer requisito del artículo 1141 antes citado, es decir, que "la respectiva resolución sea recurrible" en casación, ya que aún cuando declara desierto el recurso de apelación, podría tener el efecto subsidiario de inhibir la acción al punto de poner fin al proceso, si la resolución apelada tuviera el carácter de sentencia. Para verificar este último aspecto se requiere el expediente contentivo del proceso sumario, pues la información resulta incompleta.

Por tanto, en atención a lo preceptuado por los artículos 1138 y 1139 del Código Judicial, al requerirse más información para decidir la admisión del recurso de hecho, el despacho sustanciador dispone completar las copias mediante el envío del expediente.

Por lo expuesto, el Magistrado que suscribe, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley ORDENA la suspensión del procedimiento y DISPONE que se envíe el expediente contentivo del proceso sumario de interdicto posesorio de perturbación interpuesto por COLÓN INTERNACIONAL, S. A. contra JORGE ALLEN, TOMÁS ROWE, BALTAZAR BETEGON Y OTROS.

Cúmplase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Encargado

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

LA FIRMA FORENSE BERRIOS Y BERRIOS INTERPONEN RECURSO DE HECHO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE FECHA 13 DE NOVIEMBRE DE 1995 PROFERIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL EN EL PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO INCOADO POR BANCO EXTERIOR, S. A. CONTRA ONDA TROPICAL, S. A. Y AURELIO DOPESO CARREIRO. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, TREINTA (30) DE ENERO

DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense Berríos y Berríos, apoderada judicial de **ONDA TROPICAL, S. A. y AURELIO DOPESO CARREIRO**, ha presentado recurso de hecho contra la resolución proferida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial el 13 de noviembre de 1995, dentro del proceso ejecutivo hipotecario instaurado por **BANCO EXTERIOR, S. A.** contra la parte recurrente.

Corresponde a la Sala determinar si el presente recurso de hecho debe ser admitido, para lo cual se adelantan las siguientes consideraciones.

La resolución impugnada "**DECLARA LA NULIDAD** de la providencia de fojas 235 y **ORDENA** que la primera instancia reasuma el curso normal de este proceso". La providencia a la cual hace referencia dicha resolución, fue proferida por el Juzgado Primero del Circuito de Herrera, el 12 de septiembre de 1995, y por medio de ella se concedió recurso de apelación en el efecto suspensivo, contra el auto que dictó ese mismo Juzgado el 29 de agosto de 1995, cuya parte resolutiva es la siguiente:

> "Por lo anteriormente expuesto, el suscrito Juez Primero del Circuito de Herrera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **ADJUDICA** en forma definitiva a el (sic) Banco Exterior, S. A., **APROBANDO** en todas sus partes la diligencia de remate efectuada por este Tribunal el día 24 de agosto, por el valor ofrecido en el siguiente bien:
>
> CERTIFICADO N° 30 por 80 acciones; CERTIFICADO N° 195 por 24 acciones; CERTIFICADO N° 250 por 104 acciones; CERTIFICADO N° 318 por 318 acciones, las cuales mantiene el demandado AURELIO DOPESO en el Banco Exterior, S. A., por la suma de $ 6,500.00." (Foja 3)

El Tribunal Superior, al resolver la apelación contra el auto anteriormente transcrito, concluyó que la providencia que la había concedido violaba normas de competencia funcional, por razón de que el auto impugnado no es susceptible del recurso de apelación y, consecuentemente, debía declararse la nulidad de dicha providencia, con fundamento en el artículo 1136 del Código Judicial.

Contra esa decisión se ha interpuesto el presente recurso. Sin que el recurrente haya dado aviso de recurrir en casación la resolución impugnada, pues, no es recurrible de hecho.

Así, de acuerdo con el artículo 1163 del Código Judicial la parte interesada puede recurrir de hecho ante la Corte en los siguientes casos: 1) cuando el Tribunal Superior niegue la concesión del recurso de casación; 2) cuando el Tribunal Superior niegue el término para la formalización del mismo; y 3) cuando al haberse solicitado el recurso de casación, el Tribunal Superior ordene la devolución del expediente al juzgado de origen. Ello es así, porque el recurso de hecho se interpone ante esta corporación judicial con el objeto de viabilizar un recurso de casación.

El auto impugnado en esta ocasión no corresponde a ninguno de los supuestos que contempla la citada norma, ya que no guarda relación con la concesión del recurso de casación. Más bien pretende reformar el fondo de la decisión contenida en dicha resolución, lo cual no es propio del recurso de hecho. Consecuentemente, debe ser rechazado.

En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de hecho presentado por la firma forense Berríos y Berríos, en representación de ONDA TROPICAL, S. A. y AURELIO DOPESO CARREIRO, contra la resolución proferida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial el 13

de noviembre de 1995, dentro del proceso ejecutivo hipotecario instaurado por BANCO EXTERIOR, S. A. contra la parte recurrente.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) ELIGIO MARÍN C.
Secretario Encargado

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN

JORGE JOSÉ DUQUE FRANCESCHI INTERPONE RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LAS RESOLUCIONES DE 23 DE JUNIO DE 1993 Y SIGUIENTES; Y DE 29 DE AGOSTO DE 1994 Y SIGUIENTES, DICTADAS DENTRO DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS INCOADO POR INDUSTRIA PANAMEÑA DE COCOA, S. A. CONTRA JORGE JOSÉ DUQUE FRANCESCHI. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DOCE (12) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

JORGE JOSÉ DUQUE FRANCESCHI mediante poder especial legalmente otorgado a la licenciada FATIMA STELLA TUDISCO ha interpuesto recurso de revisión contra las Resoluciones de 23 de junio de 1993, dictada por la señora Juez Cuarto del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, por medio de la cual se concede en el efecto devolutivo el recurso de apelación interpuesto por la Licda. EYSA ESCOBAR DE HERRERA; Auto de fecha 29 de agosto de 1994, dictado por el Tribunal Superior de Justicia, por medio de la cual declara desierta la apelación interpuesta contra el auto N° 969 de 16 de agosto de 1991, dictado por el Juez Cuarto del Circuito Civil de Panamá; Auto N° 1933 de fecha 21 de noviembre de 1994, dictado por la Juez Cuarto del Circuito de lo Civil de Panamá, por medio del cual se fija fecha para el Remate de los bienes de mi representado; Auto N° 366 de 29 de marzo de 1995, dictado por la Juez Cuarto del Circuito de lo Civil de Panamá, por medio del cual Decreta el Remate de la Finca N° 73,290, inscrita al Folio 430, Tomo 1690 de la Sección de la Propiedad, provincia de Panamá.

El Magistrado Sustanciador, antes de decidir si era del caso acoger o no el Recurso de Revisión, fijó la suma de QUINIENTOS BALBOAS (B/.500.00), que el impugnante debía depositar en la Secretaría de la Sala a tenor de lo dispuesto en el artículo 1196 del Código Judicial.

Depositada la fianza requerida mediante la Diligencia de consignación de fojas 31, en la Secretaría de la Sala, el recurso de revisión interpuesto se encuentra en estado de decidir en cuanto a su admisibilidad, para lo cual la Corte considera antes:

El examen del escrito de formalización de la revisión revela que se ha presentado dentro del término legal; que la resolución impugnada está sujeta a revisión; la impugnación se funda en los hechos o motivos a que se refiere el artículo 1189 y se ha hecho el depósito requerido, razones por las cuales se estima que el recurso debe ser admitido de conformidad con lo preceptuado en el artículo 1199 ibídem.

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ADMISIBLE el Recurso de Revisión interpuesto por el señor JORGE JOSÉ DUQUE FRANCESCHI, y DISPONE:

a) Cítese personalmente a INDUSTRIA PANAMEÑA DE COCOA, S. A., persona jurídica, inscrita en el Registro Público en la Ficha 46371, rollo 2917, imagen 205, de la Sección de Micropelículas (Mercantil); representada en calidad de Presidente y Representante Legal, el señor MORDECHAY KRASELNICK, varón, panameño,

mayor de edad, comerciante, con cédula de identidad personal N° N-17-410. Dicha empresa está situada en el Edificio Vallarino, piso N° 10, calle Elvira Méndez y calle 52, ciudad de Panamá. Sin embargo, la misma está representada judicialmente por el licenciado DARÍO EUGENIO CARRILLO GOMILA, con oficinas en calle 38 Este, N° 5-54 de la ciudad de Panamá, para que, dentro del término de un mes, comparezca a sostener lo que convenga a sus derechos.

b) Adviértase igualmente que podrán intervenir en calidad de litis-consorte cualquier otra persona o entidad a quien pueda agraviar, beneficiar o afectar, en cualquier forma, la resolución que se dicte.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO SALAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ARCILLAS DE CHITRÉ, S. A. INTERPONE RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE 12 DE NOVIEMBRE DE 1993, PROFERIDA POR EL JUZGADO PRIMERO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, RAMO CIVIL DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO DECLARATIVO INCOADO POR CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL (COFINA) CONTRA TIERRAS E INVERSIONES, S. A. ARCITEC, S. A. Y ARCILLAS DE CHITRÉ, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO SALAS. PANAMÁ, DOCE (12) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Cumplidos los trámites inherentes a esta clase de recurso, la Secretaría de la Sala ha puesto en estado de resolver, si es del caso admitir, los siguientes recursos extraordinarios de revisión: a. **ARCILLAS DE CHITRÉ**, S. A. interpone recurso de revisión contra la sentencia de 12 de noviembre de 1993, proferida por el Juzgado Primero del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, dentro del proceso ordinario declarativo incoado por Corporación Financiera Nacional (COFINA) contra Tierras e Inversiones, S. A., Arcitec, S. A. y Arcillas de Chitré; y b. **ARCITEC**, S. A. interpone recurso de revisión contra la sentencia de 12 de noviembre de 1993, proferida por el Juzgado Primero del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil dentro del proceso ordinario declarativo incoado por Corporación Financiera Nacional (COFINA) contra Tierras e Inversiones, S. A., Arcitec, S. A. y Arcillas de Chitré.

La Sala observa, luego de un análisis de los recursos de revisión interpuestos, que ambos persiguen la "revisión y en consecuencia se declare nula la sentencia de 12 de noviembre de 1993, proferida por el Juzgado Primero del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, la cual fue confirmada luego de ser sometida a consulta por el Primer Tribunal Superior de Justicia". La aludida sentencia fue dictada dentro del proceso ordinario declarativo que incoara CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL (COFINA) contra las sociedades TIERRAS E INVERSIONES, S. A. inscrita en la ficha 187683, Rollo 20787, Imagen 228 de la Sección de Micropelículas Mercantil del Registro Público; ARCITEC, S. A.; sociedad inscrita a la Ficha 74331, Rollo 6425, Imagen 02 de la Sección de Micropelículas Mercantil del Registro Público; y ARCILLAS DE CHITRÉ, inscrita a la Ficha 4847, Rollo 197, Imagen 164.

Bajo esta óptica, encontrándose los recursos ante esta Sala de la Corte, es del caso hacer uso de la facultad que atribuye el artículo 709 del Código de Procedimiento, o sea, ordenar de oficio la acumulación; habida cuenta, que se trata de recursos con pretensiones idénticas.

Por otro lado, cabe advertir que la acumulación se hará al más antiguo; y, como fueron presentados en la misma fecha se tendrá como base al primero que la Secretaría le ha dado entrada, esto es, el recurso de revisión con entrada número

222.

Por todo lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECRETA LA ACUMULACIÓN de los recursos de revisión interpuestos por ARCILLAS DE CHITRÉ, S. A. y ARCITEC, S.A contra la sentencia de 12 de noviembre de 1993, proferida por el Juzgado Primero del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, dentro del Proceso ordinario declarativo incoado por CORPORACIÓN FINANCIERA NACIONAL (COFINA) contra TIERRAS e INVERSIONES, S. A., ARCITEC, S. A. y ARCILLAS DE CHITRÉ, S. A.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 709, 710 y 711 del Código Judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ELIGIO SALAS

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE

Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA SEGUNDA DE LO PENAL

ENERO 1996

ACLARACIÓN DE SENTENCIA

SOLICITUD DE CORRECCIÓN DEL AUTO DE 12 DE DICIEMBRE DE 1995, PRESENTADA DENTRO DE LAS SUMARIAS SEGUIDAS A ROBERTO A. PINZÓN DÍAZ Y JACINTO J. MACDONALD SINDICADOS POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE BETZY MARLENE MENDIZÁBAL Y JORGE ENRIQUE FALCONETT. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, CINCO (5) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Fiscal Superior del Segundo Distrito Judicial mediante escrito recibido en la Secretaría de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 4 de enero de 1996, con motivo de la incidencia de prescripción presentada por el licenciado Rubén Darío Moncada Luna y con base a lo dispuesto en el artículo 986, párrafo tercero del Código Judicial, ha elevado petición de corrección del texto del auto calendado el 12 de diciembre de 1995, dictado por esta Sala en el proceso penal seguido a Roberto Antonio Pinzón Díaz y Jacinto Jorge MacDonald por el delito de homicidio de Betzy Marlene Mendizábal y Jorge Enrique Falconett.

Al examinar el texto de la petición se advierte que la solicitud de aclaración y corrección de las resoluciones judiciales, ya sea que se trate de un error aritmético o de simple escritura o de cita, debe presentarse dentro de los tres días siguientes de su notificación. En el presente caso esta petición deviene en extemporánea, pues en autos consta que el Ministerio Fiscal que actúa en este caso fue notificado del auto de 12 de diciembre de 1995, semanas antes de la presentación de esta solicitud.

No obstante lo anterior, y tomando en consideración que estamos ante un proceso que se ha extendido por casi cuatro lustros y en el que se han reiterado varias diligencias en distintas fechas, cabe anotar que la frase referida en la página 22 del auto de 12 de diciembre de 1995 y que por un "lapsus calami" en vez de anotar el mes de enero de 1976, quedó impreso el mes de octubre de ese año, el resto del texto y las constancias procesales evidencian y permiten arribar a la conclusión lógica que se alude "al sábado 31 de enero de 1976 y no al sábado 31 de octubre de 1976".

Por las razones apuntadas, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, representada en la Suscrita Magistrada Sustanciadora y administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DESESTIMA la petición de corrección presentada, por ser extemporánea.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AUTO APELADO

RECURSO DE APELACIÓN CONTRA AUTO QUE NIEGA LA PETICIÓN DE FIANZA EXCARCELARIA EN FAVOR DE RODOLFO RAMÓN CHAN SALCEDO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado César H. Broce ha interpuesto recurso de apelación contra auto de 15 de noviembre de 1995, proferido por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que deniega el beneficio de fianza de excarcelación solicitada a favor de Rodolfo Ramón Chang Salcedo, sindicado por el delito de

homicidio cometido en perjuicio de Álvaro Agrazal Sánchez.

Sostiene el recurrente que el sumariado Chang Salcedo "no participó ni estuvo presente de manera alguna en los actos materiales que culminaron con la infortunada pérdida de la vida de ÁLVARO AGRAZAL" (f. 16). Otro argumento de letrado consiste en que su defendido no transportó a los otros imputados "con la intención de ultimar al hoy occiso ... sino con el propósito de ir en búsqueda de uno de los imputados a quien conocía (EVANGELISTO MOJICA), el cual había quedado mal herido y había salido en persecución de sus agresores ..." (f. 17).

El recurrente solicita que se revoque el auto censurado y que, en su defecto le sea concedido a Chang Salcedo el beneficio de libertad bajo caución "mientras dure la causa" (f. 19).

De acuerdo con las pruebas obrantes en autos, en la noche del 19 de enero de 1995, en la parte exterior de la Discoteca Rock Café, ubicada en el área de Marbella, ciudad de Panamá, se produjo una riña en la cual se vieron involucrados el finado Álvaro Agrazal Sánchez y su amigo José Del Carmen de la Oliva. En un momento dado estas dos personas deciden huir de la riña, pero fueron alcanzados en el área de los estacionamientos del Hospital Paitilla, donde Agrazal Sánchez resultó herido con un cuchillo por uno de los agresores, herida que le ocasionó la muerte. El protocolo de necropsia revela que Agrazal Sánchez "sufrió herida por arma blanca en la espalda que perforó un pulmón y produjo una hemorragia masiva". Según el informe médico legal la víctima murió por "A. HEMORRAGIA PULMONAR. B. HERIDA POR ARMA BLANCA PENETRANTE A TÓRAX" (f. 108).

Para una correcta decisión del recurso planteado, se requiere efectuar el examen de algunos elementos probatorios allegados al cuaderno penal.

Sostiene el imputado Rodolfo Ramón Chang Salcedo que, luego de ocurrida la riña, observó cuando dos individuos huyeron hacia el Hospital Paitilla, mientras que Mojica "se va en búsqueda de los dos sujetos que lo había mal herido ..." (f. 207). En otra parte de su declaración el imputado afirma que "al ver que no aparecía MOJICA ni lo veíamos y como sabia que estaba mal herido agarro el carro ... me llegan ORLANDO y los dos waiter ... y me dicen que iban conmigo ... Me estacione con el motor prendido en el Mc Donalds, y se bajaron ORLANDO y los dos waiter y se van por abajo del puente ... en el momento en que yo los dejé en Mc Donalds subí hacia la iglesia de Las Esclavas ..." (f. 20). Alega el imputado que, al escuchar una detonación, se dirigió a la altura del corredor que comunica los dos hospitales de Paitilla, donde observó al "... celador ... el señor MOJICA y los 2 weiter que venían en la parte de atrás del carro ... ORLANDO no estaba allí en ese momento, o sea no lo vi. Frente al hospital en el área de los estacionamientos vi tirado a una persona ... me pude dar cuenta que se trataba de la misma persona ... que había agredido al señor MOJICA" (f. 208-209).

Ahora bien, analicemos las declaraciones de los imputados Gil Rodríguez Luna y Eduardo González quienes viajaban en el vehículo de Chang Salcedo.

El imputado Gil Rodríguez Luna afirma que, luego de la riña, "Inmediatamente ORLANDO, YO, y EDUARDO GONZÁLEZ, nos montamos en un vehículo del señor RODOLFO quien labora al frente en la Panadería, para darle seguimiento a los sujetos ... le dimos alcance a los dos sujetos, pero ORLANDO RODRÍGUEZ nos llevó la delantera dirigiéndose al hoy occiso, propinándole puñaladas en la espalda ..." (f. 42). Agrega el imputado que cuando llegó el guardia de seguridad del hospital "fue en éste momento en que aprovechó ORLANDO para montarse al auto de RODOLFO, y se fué" (f. 43).

En igual sentido el imputado Eduardo González manifiesta que, cuando viajaban en el vehículo de Rodolfo Chang, "... ORLANDO le dice al muchacho del carro que detenga el carro, ORLANDO se bajó primero del carro, y yo vi al difunto y otro a su amigo que iba caminando. También nos bajamos del carro GIL Y YO, vimos cuando ORLANDO se abalanzaba hacia los dos muchachos ..." (f. 275).

Liberto Antonio Navarro Terán, quien la noche del hecho fungía como seguridad del Hospital Paitilla, declaró "vi a dos muchachos que venían

caminando, entonces se les acercó un carro ... de donde se bajó primeramente un sujeto de tez blanca y comenzó como a agredir a los dos muchachos con algo que tenía en la mano ... cuando se bajaron los otros dos y el que primeramente se había bajado se había retirado nuevamente al carro, los otros dos comenzaron a agredir los dos muchachos ..." (f. 160).

El imputado Evangelisto Mojica Sanjur, quien resultó golpeado en la cabeza durante la riña, observó cuando "el carro de un muchacho llamado RODOLFO, un carro ... crema, pasó por la calle, interceptó a los dos muchachos, se bajan del carro ORLANDO RODRÍGUEZ ... hubo un enfrentamiento entre ellos ... de repente cayó uno de los que estaba peleando ..." (f. 50).

Las anteriores comprobaciones revelan graves indicios que comprometen la responsabilidad del imputado Chang Salcedo en la comisión del delito, pues se desprende que fue la persona que facilitó el transporte para que el resto de los imputados en el presente caso interceptaran a Agrazal Sánchez y le ocasionaran una herida con arma blanca, la cual le produjo la muerte. Siendo esta la realidad de los hechos, de ellos emerge una evidente vinculación de Chang con el delito de homicidio que se investiga, situación procesal que, mientras no sea variada por otros elementos de convicción, sólo autoriza la decisión de prohijar la decisión recurrida.

Por lo antes expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la resolución calendada 15 de noviembre de 1995, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que deniega el beneficio de fianza de excarcelación solicitada a favor de Rodolfo Ramón Chang Salcedo, sindicado por el delito de homicidio cometido en perjuicio de Álvaro Agrazal Sánchez.

Devuélvase y Notifíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AUTO DE ENJUICIAMIENTO APELADO

AUTO DE PROCEDER APELADO EN EL PROCESO SEGUIDO A DONATO GIL QUINTERO, FÉLIX MORALES, PEDRO MARTÍNEZ CERRUD Y OTROS, SINDICADOS POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE ELIO JOSÉ RODRÍGUEZ. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS E. MUÑOZ POPE. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante resolución del 12 de enero de 1995, el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial abrió causa criminal contra **DONATO GIL QUINTERO (a) NATO** como presunto infractor de las disposiciones contenidas en el Capítulo I, Título I, Libro II del Código Penal, o sea por el delito de Homicidio en perjuicio de Elio Rodríguez Guevara; y contra PEDRO MARTÍNEZ y FÉLIX MORALES VÁSQUEZ por presuntos infractores de las disposiciones contenidas en el Capítulo IV, Título XI, Libro II del Código Penal. Además sobreseyó definitivamente a SATURNINO GIL SERRANO (hijo) y a SOTERO GIL SERRANO (a) SOTO de los cargos en su contra (fs. 594-610).

Al momento de notificarse de esa decisión jurisdiccional, el licenciado Humberto José Chang Matteo, apoderado judicial del imputado Donato Gil Quintero, apeló de la misma (f. 610 vt); pero al sustituir el poder conferido en la persona de los licenciados Fernando Bustos, como principal y Ricardo Corcho Díaz, como sustituto (f. 635), y es el primero quien -dentro del término de ley- sustenta el recurso anunciado.

DISCONFORMIDAD DEL APELANTE

El licenciado Fernando Bustos, hace mención de las pruebas existentes en el expediente, desde la denuncia interpuesta por la desaparición del joven Elio José Rodríguez y las diferentes declaraciones rendidas, que estima se contradicen, hasta el resultado del examen realizado por la Sección de Análisis Forense de Fibras y Pelos, de la Policía Técnica Judicial, que determinó que las muestras de tierra recogidas de la superficie donde se creyó fue enterrado Elio Rodríguez, no tienen la presencia de pelos (humanos o animal), fibras textiles, ni fluidos corporales.

Se refiere además, que no se ha logrado saber el paradero de Elio Rodríguez; que extra oficialmente se ha informado que por los lados de la provincia de Los Santos hay un hombre con sus características; que todas las personas que han declarado a excepción de Félix Morales, quien luego se retractó, han manifestado que no le conocen arma alguna a Donato Gil Quintero; que tampoco se ha encontrado el supuesto rifle o arma que se utilizó para matar a Elio Rodríguez; que la conclusión del tribunal a-quo de que existe un cadáver, no tiene fundamento porque no hay pruebas de tal afirmación.

Finalmente solicita, que al no existir elementos de prueba, indicios, indicios necesarios, huellas ni rastros de ninguna naturaleza, lógica o científica, deben ser favorecidos con un sobreseimiento definitivo los supuestos implicados, especialmente su patrocinado (fs. 683-691).

La representación fiscal dejó vencer el término 27 de noviembre de 1995 sin presentar escrito de oposición (f. 680 y 692).

FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA

Se refiere la presente investigación penal a la muerte violenta de Elio José Rodríguez de 37 años de edad, quien desapareció el día viernes 5 de febrero de 1993, de la comunidad de Centeno de La Colorada, en Santiago de Veraguas y quien fue visto por última vez por la comunidad de Suay -Manglar Oscuro-; vinculado con ese ilícito se tiene a Donato Gil Quintero (a) Nato.

FUNDAMENTO DEL AUTO APELADO

La disconformidad del impugnante se centra en considerar que no existe delito y en consecuencia su defendido debe ser sobreseído definitivamente.

El tribunal a-quo consideró que las pruebas allegadas al expediente determinan de manera consistente que Elio Rodríguez Guevara murió a causa de un disparo.

En primer lugar, señala aquellas pruebas que determinan la existencia y desaparición de Elio Rodríguez Guevara: el certificado de nacimiento (f. 454); la denuncia de su desaparición interpuesta por la Sra. Rupertina de Rodríguez, su madre (fs. 3-5); las declaraciones de sus hermanos Nelsón Leonardo Rodríguez Guevara, Harry Darvir Rodríguez y su padre Leonardo Rodríguez, quienes se refieren a la desaparición y búsqueda (fs. 10-14, 364 y 37-40); y las declaraciones de Eleuterio Núñez Mojica, Esteban Castro o Esteban Farragut, Alfredo Gómez Rivera, Ángel Vega Guerra, Bolívar Herrera Montes, Plinio Mojica Mojica quienes manifiestan haber conocido y saber de la desaparición (fs. 398, 403, 407, 413, 423 y 433).

Consideró como pruebas irrefutables que determinan cómo perdiera la vida Elio Rodríguez Guevara, la declaración indagatoria de Félix Morales Vásquez, quien relata la forma en que Donato Gil le causó la muerte y la participación de los demás imputados, para inhumar el cadáver.

Indica el tribunal a-quo la existencia de pruebas indiciarias que surgen de las deposiciones de personas que vieron al tal Mudo -Elio Rodríguez Guevara- cerca de la comunidad del Suay de Ponuga, específicamente en los terrenos de

Saturnino Gil, entre ellas: la declaración de Encarnación Mojica Pinto, Regidor de la comunidad de Suay, quien ayudó a la búsqueda del Mudo y fue informado que Félix Morales y Saturnino Gil lo habían visto y seguido (fs. 17-20); la afirmación que hace Bárbaro Marín Peralta en el sentido que Pedro Martínez le dijo en la cantina Don David, que Saturnino, Soto y Donato Gil, habían ocasionado la muerte a el Mudo de un disparo en la nuca y lo habían enterrado en Monte Oscuro o Manglar Oscuro y que Nato Gil lo había matado porque lo encontró robando sandías (fs. 71-80 y 515). Además, que Maximiliano Cruz y Héctor Ovidio Guevara Pérez indican que al estar arriando a una vaca, vieron una persona que estaba como perdida y le indicaron que tuviera cuidado que la vaca era brava, que por la dirección que llevaba iba hacia Manglar Oscuro, persona que coincide con el físico de Elio Gutiérrez Guevara (fs. 138 y 61).

Se menciona la diligencia de Inspección Ocular al lugar que según Félix Morales Vásquez habían enterrado al Mudo, terreno que tenía la característica de un fosa (fs. 240-242). Indica el tribunal de primera instancia que si bien no apareció el cuerpo de Rodríguez Guevara, existen elementos indiciarios indicativos que fue enterrado en la fosa cavada por los sumariados, en ese sentido se tiene las declaraciones de Bárbaro Marín Peralta (fs. 71-80) y Félix Morales Vásquez.

Textualmente el tribunal a-quo en cuanto a la comprobación del hecho punible, concluye lo siguiente:

> "que el corpus delicti" en el presente negocio, surge precisamente de las pruebas recabadas, naturalmente, porque los agentes activos pretendieron ocultarlo o desaparecerlo y es que debemos tener presente que el proceso penal pretende comprobar el hecho criminoso y sus responsables, quienes de una u otra forma tratan de ocultar su materialización.
>
> El delito por regla general huye de la prueba, pues son constantes los casos en que los jueces se encuentran frente al misterio y en que sólo se puede llegar a reconstruir los acontecimientos por medio de inferencias, por detalles que uniéndolos dan lugar a encontrar la verdad legal".

En cuanto a la imputación del hecho punible estimó el tribunal a-quo que existen graves indicios contra Donato Gil como autor de la muerte de Elio Rodríguez Guevara y la participación de Saturnino Gil (Hijo), Sotero Gil, Pedro Martínez y Félix Morales Vásquez para ocultar el delito.

Señala así, las declaraciones de Maximiliano Cruz Pinto y Héctor Ovidio Guerra Pérez quienes vieron a una persona por Manglar Oscuro, cuya descripción coincide con Rodríguez Guevara, que éste se metió al potrero de Joaquín Medrano, que las únicas residencias que hay en el sector es la de Saturnino Gil y la de su hijo Sotero Gil. Por su parte Pérez Guerra agrega que mandó a Nilce Pimentel a dejar una vaca en el Manglar Oscuro y a su regreso le comentó que había visto a Elio en el Manglar Oscuro por el camino Real. También informa que para la fecha Félix Morales Vásquez se encontraba trabajando en la finca de Saturnino que queda en el Manglar Oscuro (fs. 138-143).

Se menciona también la declaración de Nirie Pimentel Almanza quien afirma que iba a caballo cuando vio a una persona por Manglar Oscuro, pero no tiene seguridad que sea el ofendido (fs. 129-131), por lo que concluye que esas pruebas, determinan que el desaparecido Rodríguez Guevara se encontraba por la comunidad del Suay en el lugar conocido como Manglar Oscuro; que ello lo corrobora el padre del ofendido al afirmar que en la búsqueda de su hijo perdido se llegó a constatar que estaba por los lados del Suay.

Se menciona y transcribe parte de la confesión de Félix Morales Vásquez (fs. 245-249 y 261), al igual que su intervención en la diligencia de Inspección Ocular.

Sobre la mencionada diligencia que se dejó constancia que la tierra tenía

la apariencia de haber sido removida con anterioridad y que su color presentaba tonalidad diferente a la tierra de alrededor, penetrando la pala sin mayores dificultades.

Finalmente, el tribunal a-quo indica que Pedro Martínez Cerrud, en su declaración indagatoria afirma que Saturnino Gil le dijo que en compañía de Nato Gil y Soto habían matado al Mudo y lo enterraron en Manglar Oscuro (fs. 92-99).

ANÁLISIS DE LA SALA

El impugnante centra su disconformidad en cuanto a que no existe el cuerpo del delito, el arma homicida ni declaraciones serias que impliquen a su defendido en la suposición de los juzgadores primarios.

Estima la Sala luego de ponderar el caudal probatorio, que la decisión del tribunal a-quo **-contrario al criterio del postulante-** sí tiene sustento racional, porque valoró los medios probatorios existentes en el expediente, aplicando correctamente las reglas de la sana crítica.

En el presente caso se está ante la desaparición por dos años con once meses de Elio José Rodríguez, de 37 años de edad, quien según su madre es mudo **-pero entiende bien-**, cojo de la pierna izquierda y al caminar levanta un poco la mano derecha (f. 3).

Recientemente esta Sala señaló:

> "Sobre el fenómeno de las desapariciones, asimiladas a "homicidios sin corpus delicti", hay que tener en cuenta que las ciencias penales y criminológicas, admiten la posibilidad jurídica de la asimilación entre desaparición=homicidio, en aquellos casos en que se registran detenciones arbitrarias, secuestros, raptos, arrestos, custodias, guardas, tutorías o privaciones ilegales de libertad, o se presentan actos de persecución política o ideológica de cualquier naturaleza, que anteceden a la desaparición de las personas" (Corte Suprema de Justicia Sala de lo Penal. 12 de diciembre de 1995).

Si bien no existe semejanza del presente caso con las circunstancias de desapariciones aludidas, no menos es cierto, que se cuenta con la declaración rendida por Félix Morales Vásquez quien afirma que Donato Gil dio muerte a Elio Rodríguez e incluso que ayudó a enterrarlo; y lo señalado por Pedro Martínez Cerrud en el sentido que Saturnino Gil le dijo que habían matado al mudo. Además, que declaraciones allegadas al expediente son indicativas de que Elio Rodríguez se encontraba por la comunidad del Suay.

Del caudal probatorio surgen graves indicios contra Donato Gil Quintero como la persona que con arma de fuego -rifle- dio muerte a Elio Rodríguez Guevara. Siendo así, procede confirmar la apertura de causa criminal en su contra, y será en la etapa plenaria ante jurado de conciencia donde se discuta su responsabilidad.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución apelada sólo en los puntos objetados.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

APELACIÓN DEL AUTO DE PROCEDER DICTADO CONTRA ALBERTO SITTÓN VEGA, EN EL PROCESO POR DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE MILAGROS DEL CARMEN AYALA CUBILLA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Procedente del Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial ha ingresado a la Sala Penal de la Corte Suprema, en grado de apelación, el proceso penal seguido contra **ALBERTO SITTÓN VEGA** por la presunta comisión del delito de homicidio en perjuicio de **MILAGROS DEL CARMEN AYALA CUBILLA.**

Dicho Tribunal Superior consideró procedente el llamamiento a juicio, por considerar que el sindicado está vinculado a través de "graves indicios de responsabilidad por la consumación del hecho investigado, a pesar de que no se ha podido recibirle declaración indagatoria y que actualmente es de paradero desconocido."

Consideró el a-quo que la situación jurídico-procesal del sumariado no ha variado desde que ambas instancias le negaron la solicitud de fianza excarcelaria, ya que subsisten -a su parecer- graves indicios de presencia, oportunidad, actitud sospechosa y conducta evasiva (fs. 1022 y 1023).

Los antecedentes del caso revelan que el 16 de julio de 1993 la Sra. **ARGELIS REYES DE SITTÓN** -primero- y sus hijos -después- salieron para la escuela, alrededor de las 6:45 de la mañana; su esposo -el sindicado- que generalmente sale más tarde, salió entre 7:43 y 7:45 a. m. -según su declaración-; entonces su hija **MARICELA DEL CARMEN SITTÓN REYES** regresó de la escuela -a pie- a las 12:10 p. m. aproximadamente. Cuando se acercaba a la casa vio una carroza larga, blanca, que iba muy despacio al frente de la casa; cuando entró al lugar donde está el lavamanos, observo a la occisa tirada en el suelo boca abajo en la habitación de sus padres.

Al salir -por el garaje- a avisarle a alguien, vio que regresaban sus padres, a quienes informó lo sucedido; éstos, al entrar y percatarse de lo referido por ella, se preguntaron qué iban a hacer, decidiendo el Dr. **SITTÓN** llamar a su padre y luego a la PTJ, que llegó para iniciar los procedimientos de rigor para comenzar la instrucción del sumario.

El apelante, Licdo. Rodrigo Miranda, fundamenta su apelación en diversos aspectos de la decisión impugnada, como lo son:

La inexistencia de graves indicios de responsabilidad, ya que el protocolo de necropsia adolece de la deficiencia de fijar la hora de la muerte de la occisa entra las 5:00 a. m. y la 1:00 p. m., lo que -según él- equivale a afirmar que el deceso se produjo o varias horas antes o después del momento de la muerte; toda vez que "está fehacientemente acreditado" que **MILAGROS DEL C. AYALA** fue vista con vida, mientras iba de compras, entre las 8:30 a. m. y las 9:00 a. m., por lo que la "conjetura resulta gratuita y caprichosa" (f. 1076).

El testimonio de la testigo **YOLMA FELICIA PITTI DE LEZCANO**, quien la acompañó a la tienda de ida y vuelta, en vez de constituirse en indicio grave, "robustece la idea de su inocencia", toda vez que a la hora en que la joven **AYALA CUBILLA** fue asesinada, el sindicado estaba atendiendo a sus pacientes.

También señala el letrado que desde que el Dr. **SITTÓN** llegó a la Policlínica del Seguro Social por primera vez, o sea a las 7:45 a. m., no existe ninguna prueba de que haya estado en las cercanías de su residencia a la hora en que se cometió el ilícito.

Para fortalecer más su punto, el apelante expuso el itinerario de actividades del imputado ese día, tratando de demostrar la imposibilidad de que cometiera el ilícito por estar laborando en el hospital, tratando de demostrar

con ello que no puede haber indicio de presencia y oportunidad.

Considera el Licdo. Mirando que el "haber quedado a solas" es una frase con cierta malicia, toda vez que la rutina diaria de la casa imponía que por los respectivos horarios de actividades de todos, el Dr. **SITTÓN** saliera de último de su casa; pero la forma en que señala la circunstancia es con "aviesa finalidad."

El indicio móvil consistente en rechazadas pretensiones sexuales, ya que la ofendida tenía dos meses de trabajar en la residencia, tiempo muy corto para que se iniciara -a juicio del recurrente- una situación capaz de sugerir móviles pasionales que desencadenaran en semejante resultado. Por tanto, no existe prueba alguna que revele que el crimen tuvo como móvil una agresión sexual.

Las insinuaciones hechas por la madre y la hermana de la joven **AYALA** en el sentido de que el ofensor la enamoraba, "no constituyen sino declaraciones de mera referencia que aluden a supuestas confidencias que les hizo la occisa pero sin corroboración de parte de personas imparciales."

El "indicio de actividades sospechosas por parte del Dr. Sittón Vega en la mañana del hecho, es considerado por el letrado como "antojadiza", porque:

La hora del crimen -alrededor de las 9:00 a. m. por la declaración de **YOLMA FELICIA PITTI DE LEZCANO**- excluye la posibilidad de autoría del Dr. **SITTÓN**.

No es "sospechoso" el conjunto de actos realizados por el sumariado, sino que son "normales, rutinarios y desprovistos de malicia".

En cuanto al indicio de seguridad de la casa, carece de relevancia, porque -en primer lugar- como la finada no tenía llave para entrar a la casa, debió dejar la puerta "entornada" o ajustada para poder entrar, al regresar de la tienda, circunstancia que fue aprovechada por el agresor para entrar a la casa, aguardarla y, probablemente, al ser sorprendido por la fámula, agredirla brutalmente ...".

En otro sentido -en segundo lugar- una cerradura puede ser abierta con ganzúa, posibilidad que no debe descartarse en el campo de las especulaciones en que se desenvuelve la resolución recurrida, que se fundamenta en indicios.

En cuanto al indicio de que el delito debió cometerlo un médico o persona con conocimientos de anatomía, según el criterio de los médicos forenses Hugo Moreno y Julio Armando Moltó, el apelante se subsumió al criterio que sobre el particular esbozó el Mag. Luis Mario Carrasco en su Salvamento de Voto.

La citada autoridad manifestó -en síntesis- que hacer suposiciones sobre la identidad del homicida en base a la ubicación y efectividad fatal de las lesiones ocasionadas, induciría lógicamente al encausamiento penal de un médico o profesional afín cada vez que la lesión investigada afecte contundentemente un órgano vital, lo cual es inaceptable porque evidentemente en el caso en estudio no se ejercitó ninguna técnica fuera del alcance del común de la gente.

Finalmente, esgrime el apelante antecedentes del Dr. **SITTÓN**, como atenuantes en el presente caso, como lo son su limpia trayectoria profesional como médico, antecedentes familiares, historial policivo y penal limpio, su actitud cooperadora durante las investigaciones.

A contrario sensu, el Licdo. Luis Guillermo Zúñiga se opone al recurso de apelación interpuesto mediante un extenso escrito, manifestando -entre otras cosas- que el Licdo. Miranda trató de justificar la condición de prófugo del Dr. **SITTÓN** diciendo que la lentitud de la administración de justicia lo mantendría detenido por largos meses mientras se reconoce su inocencia.

Afirma que el apelante se refiere reiteradamente a la carencia de indicios contra su representado, pero no señala qué entiende por indicio, entendiendo el opositor como tal, "cualquiera señal o signo que nos vincula con la existencia de otra cosa."

Luego de exponer un cúmulo de definiciones de tratadistas sobre el indicio, el Licdo. Zúñiga afirma que contra el sindicado "existen todos y cada uno de los indicios graves" que fueron acogidos por la Corte Suprema, el Ministerio Público y confirmado por el Tribunal Superior. La sola existencia de los indicios señalados, conforme el artículo 2222 del Código Judicial, es suficiente -a su juicio- para llamar a juicio al Dr. **SITTÓN.**

Le llama la atención al acusador particular que el encartado se encuentre prófugo de la justicia, y que su abogado señale que está prófugo porque la justicia es lenta.

Vertidos los principales aspectos del presente negocio, la Sala se apresta a emitir su fallo, no sin antes adelantar las siguientes consideraciones.

Estima esta Corporación de Justicia que tiene lógica la aseveración del apelante cuando se refiere al protocolo de necropsia, que señaló que el deceso ocurrió entre las 5:00 a. m. y la 1:00 p. m., siendo que el supuesto victimario y la víctima quedaron solos de 6:45 ó 6:50 a. m. a 7:43 ó 7:45 a. m., lo que significa que la muerte se produjo varias horas antes o varias horas después del momento del deceso, porque se declara en el expediente que **MILAGROS AYALA** fue vista cuando iba y venía de la tienda entre 8:30 a. m. y 9:00 a. m.

Se concluye que dentro del margen otorgado por el protocolo de necropsia está el tiempo en que estuvieron solos la joven **MILAGROS** y su patrono; pero, aunque la víctima fue vista por la vecina **YOLMA FELICIA PITTI** después del lapso de tiempo en que el sumariado y ella quedaron solos en la casa, su declaración pierde eficacia debido a la ampliación que dio dicha testigo, como se verá más adelante.

También es cierto que no existe prueba de que el sumariado, desde que llegó a la Policlínica del Seguro Social las 7:45 a. m. hasta la hora en que salió a buscar a su esposa a la escuela donde trabaja, haya merodeado o entrado en su casa, máxime que ningún vecino ni nadie lo vio por las inmediaciones en el lapso citado, como tampoco vieron a otra persona. Pero ese argumento es válido solo si se establece claramente que el inculpado no cometió el ilícito en el tiempo que estuvo solo con la víctima, cosa que no ha sucedido.

Considera el Licdo. Miranda que el señalar que ambos "quedaron a solas" en la casa por un lapso de tiempo, fue con malicia; no concuerda el criterio de la Sala con la del letrado, porque es innegable que el solo hecho de que ambos quedaran solos en la residencia, por aproximadamente una hora, constituye, per se, un indicio de presencia y oportunidad, desde el punto de vista material.

Por tanto, no se le reconoce valor a esta alegación.

En cuanto al indicio que el recurrente denominó "rechazadas pretensiones sexuales" del Dr. **SITTÓN** hacia la joven **MILAGROS AYALA**, señala que el sujeto pasivo del delito llevaba dos meses de trabajar en la residencia de los Sittón como empleada doméstica, por lo que presume que solo una larga relación o una vida en común prolongada hubiese originado el fatal desenlace; es decir, que en dos meses no pudo surgir una relación que motivara la pasión capaz de fomentar el resultado producido.

No prospera el argumento expuesto, toda vez que no se requiere una relación sentimental, ni corta ni prolongada, para producir un acto que ocasione un delito sexual. La atracción física no puede ser ligada indefectiblemente al plano sentimental, como lo plantea el apelante al describir la personalidad de la víctima como de "modesta personalidad de la empleada doméstica", sino que en diversas situaciones se verifica la atracción física sin tener siquiera la intención de establecer una relación sentimental.

En otro sentido, el Licdo. Miranda señala una serie de hechos en beneficio de su defendido, tales como que la víctima no tenía sus ropas rasgadas ni en desorden; que la misma no presentaba señales, hematomas o golpes; se encontraba la víctima en su período menstrual y no presentaba señal de remoción de su toalla

sanitaria; y que -conforme a la autopsia-, conservaba su virginidad.

En ese sentido, en lo referente a que la víctima no tenía sus ropas rasgadas ni en desorden, observa esta Corporación de Justicia que, aunque ello es cierto, el protocolo de necropsia legible a foja 213, señala que las prendas de vestir no presentaron desgarro, pero que algunas sí presentaron manchas de material que "remeda sangre", es decir, que no prospera la afirmación del recurrente porque las prendas que vestía la ultimada sí tenían rasgos de violencia.

En cuanto a que la víctima no presentó señales, hematomas o golpes, advierte esta Colegiatura que la transcripción de la diligencia de asistencia a la necropsia -fs. 72 y 73 del infolio- revela una herida contusa de 2 cms. en el cuero cabelludo, región occipital; petequias en el rostro dos heridas en el cuello, una de 4.5 cms. x 1.5 cms., penetrante, ubicada en la región submandibular derecha; herida cortante en forma triangular de 3 cms. por cada lado, por delante de la herida cortante anterior.

También se observó una herida cortante de 3 cms. en el lobulillo de la oreja izquierda, petequias y hematomas en ambos hombros; esquimosis y eritema en el dorso de la mano derecha; en el seno izquierdo; por otro lado, en la parte superior del pantalón -donde van los botones- le hacían falta cuatro (4) botones de color negro. Al quitársele el pantie, se le apreciaron hematomas en la pelvis, lado derecho, mientras que en el tobillo del pie izquierdo se le vio un golpe, y al lado del mismo, un hematoma, así como esquimosis en los antebrazos superiores y ambas rodillas.

De lo expuesto se infiere que es falso lo afirmado por el Licdo. Miranda, en el sentido de que la víctima no presentaba señales, hematomas o golpes propios de intentos de violación carnal, porque sí hay pruebas al respecto en varias partes del cuerpo, como ya se ha evidenciado; no se explica la Sala la base estas afirmaciones de la defensa.

En cuanto a su aseveración sobre la no remoción de la toalla sanitaria de la occisa por encontrarse en período menstrual, sólo el protocolo de necropsia señala que la membrana himeneal tipo anular estaba íntegra en todos sus bordes, y que el esfínter anal estaba sin lesiones de ningún tipo, es decir, que conservaba su virginidad.

Ese aspecto solo favorece al imputado parcialmente, ya que pudo realizarse el acto violento que originó la muerte de la joven **AYALA**, sin que el agresor lograra la cópula, debido a la resistencia que ésta pudiera haber ofrecido. Es decir, que el deceso pudo producirse -o no- por intento de violación.

Por otro lado, en cuanto al indicio atinente a las insinuaciones tanto de la hermana como de la madre de la joven **MILAGROS**, en el sentido de que el Dr. **SITTÓN** la enamoraba y que le llegó a poner la mano en el hombro y en la cintura, el recurrente considera que la declaración es de mera referencia; sobre el particular, considera la Corte que dichas aserciones, no son confiables dado el lazo de parentesco que las unía con la desaparecida, y las condiciones en las que ocurrió el deceso.

En cuanto al indicio relacionado con las actividades sospechosas del sindicado en la mañana del hecho, considera el abogado defensor que está descartado que su defendido haya cometido el ilícito porque la testigo **YOLMA FELICIA PITTI** declaró que acompañó a la hoy occisa a la tienda aproximadamente desde las 8:30 hasta las 9:00 de la mañana, razón por la que el crimen tuvo que ser cometido después de esa hora.

Pero la lectura del expediente reveló que en la ampliación de su declaración jurada -f. 608 del infolio-, dijo la precitada que luego de conversar con su suegro y con Kerly, concluyó que no pudo estar en la tienda con la víctima en el período mencionado, sino que estuvo de 7:45 a 7:50 a. m.; pero aún eso fue después de haber llegado el Dr. **SITTÓN** a la Policlínica del Seguro Social; esa situación le resta eficacia y confiabilidad a la declaración, porque dicha

ampliación le confiere un cierto tono de inseguridad al testimonio original, por el cambio en la hora en que fueron a la tienda.

En cuanto a los actos calificados como "sospechosos" -por el a-quo-, considera la Sala que los mismos son indicios suficientes para revelar una posible coartada del encartado, porque es extrañamente casual que, precisamente ese día, el Dr. **SITTÓN** se atendiera la molestia que -decía- le aquejaba, y más si se fue a hacer los exámenes temprano, al llegar a la Policlínica.

En otro orden de cosas, considerando el indicio de la seguridad de la casa del sumariado, estima esta Corporación de Justicia que el argumento del Licdo. Miranda -de que la occisa dejó la puerta entre abierta para poder regresar de la tienda- no deja de ser una mera especulación sin una base real para tomarla en cuenta.

En cuanto al indicio referente a que ningún declarante vio entrar o salir al encuestado o a personas extrañas de la casa durante la mañana de ese día, considera la Sala que el mismo no es un indicio procedente, ya que existe un cúmulo de declaraciones de vecinos y personas que estuvieron cerca de la residencia de los Sittón, que coinciden en que no vieron entrar ni salir a nadie, lo que significa que no lo vieron salir a él durante la mañana; pero, a contrario sensu, sí representa un indicio en su contra, ya que limita la oportunidad de que otras personas pudieran estar vinculadas en el mismo, y fortalece el criterio del a-quo en el sentido de que pudiera haber cometido el homicidio durante el tiempo que estuvo solo con la joven **MILAGROS**.

En lo que se refiere al criterio vertido por doctores **HUGO MORENO** y **ARMANDO MOLTÓ ORDÓÑEZ**, en el sentido de que el crimen debió cometerlo un médico o persona con conocimientos especiales de anatomía, considera esta Colegiatura que pese a lo manifestado por el apelante, la opinión coincidente de dos profesionales de la medicina, constituyen un indicio muy fuerte e importante como para no tomarlos en consideración en esta causa, constituyendo uno de los elementos más categórico contra el encausado.

Por ello, no concuerda el criterio de esta Superioridad con el del apelante.

Pese a las atenuantes que esgrime el recurrente profesional intachable, padre de familia, etc. resalta la condición de prófugo del encartado, aunque sea porque "la lentitud de la administración de justicia lo mantendría sujeto al ultraje infamante de la cárcel por largos meses mientras se le reconoce su inocencia." f. 1080.

Dicho argumento en nada beneficia el trabajo del defensor, ni la posición jurídica del detenido, ya que -en el primer sentido- la excusa manifestada revela inseguridad en la eficiencia de nuestro sistema de justicia, dando a entender que no confía en la institución ante la cual está tramitando; por otro lado, sugiere un indicio contra el Dr. **SITTÓN**, ya que no se somete -desobedece- a la medida establecida por el juzgador, constituyéndose por ello en un fuerte indicio en contra del sumariado.

La Corte ha sostenido reiteradamente que basta la existencia de graves indicios -además de la plena prueba de la existencia del hecho punible-, para llamar a responder a juicio a la persona sumariada.

En fin, aunque algunos argumentos vertidos por el apelante tienen asidero lógico, no pasan de ser meras especulaciones, sin valor probatorio; pero los indicios contra el Dr. **ALBERTO SITTÓN VEGA** ya valorados, tienen la fuerza probatoria suficiente para cumplir los requerimientos del artículo 2222 del Código Judicial, que exige para llamar a juicio que haya medios probatorios que ofrezcan serios motivos de credibilidad, o graves indicios contra el encausado, razón por la que esta Corporación de Justicia considera que hay mérito suficiente para llamar a responder por responsabilidad criminal al sindicado.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, SALA PENAL, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el auto emitido el 30 de septiembre de 1994 por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial.

Devuélvase y Notifíquese

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN PENAL

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN PROMOVIDO A FAVOR DE CECILIO VALENCIA GONZÁLEZ POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, CUATRO (4) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

En tiempo procesal oportuno el licenciado EUGENIO CARRILLO GOMILA, apoderado judicial de **CECILIO VALENCIA GONZÁLEZ**, anuncia y formaliza recurso extraordinario de casación en el fondo contra la sentencia de fecha 16 de febrero de 1995, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, mediante la cual se confirmó la sentencia de primera instancia dictada por el juzgado del Circuito de la provincia de Darién en la que se condena a su representado a la pena de 38 meses de prisión e inhabilitación para ejercer funciones públicas por igual término (fs. 117-126) por delito contra la salud pública.

El recurso en comento fue admitido por esta Sala mediante resolución del 8 de septiembre de 1995 (fs. 136-137). Realizada la audiencia oral y pública el 13 de diciembre de 1995 (fs. 159-170) se procede a resolver el fondo del recurso.

OPINIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

En vista N° 73 del 13 de noviembre de 1995, la máxima representación del Ministerio Público, después de analizar el recurso presentado, solicita que no se case la sentencia de 16 de febrero de 1995 expedida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, al considerar que los vicios de injuridicidad endilgados a la sentencia recurrida, no se han producido, por lo que no ha logrado probarse la causal invocada (fs. 138-157).

FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA

El día 4 de junio de 1994 en el puesto de Control de la Policía Nacional en Cañazas, provincia de Darién, al efectuarse una requisa rutinaria a un autobús de la ruta Panamá-Darién, se encontró dentro de un saco de plátano **propiedad de Cecilio Valencia González** un paquete contentivo de una sustancia que al ser analizada por la Policía Técnica Judicial, departamento de Criminalística, Sección de Sustancias Controladas, resultó ser cocaína **bazuco** en la cantidad de 3,395.0 gramos.

FUNDAMENTACIÓN DE LA SALA

El casacionista invoca una sola causal: **Error de derecho en la apreciación de la prueba que implica infracción de la Ley sustancial, ello ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo recurrido.**

Los motivos en los que apoya la causal son los siguientes:

"**Primero**: El fallo de segunda instancia valora los testimonios de

GILBERTO CÓRDOBA (f. 14-15), ULPIANO CHIQUIDAMA (f. 16-17), FABIO VALOY CÓRDOBA en contra alas disposiciones valorativas que se citan como infringidas, al considerarlas como demostrativas de tráfico de drogas, cuando en su condición de agentes nunca vieron o detuvieron a CECILIO VALENCIA GONZÁLEZ con sustancia ilícita alguna.

SEGUNDO: Igualmente el Segundo Tribunal valoró el testimonio de EDY ALEXIS MONROY BATISTA (f. 24) quien no señala la posesión por percepción propia sino que todos los pasajeros lo sabían, adicional a ello no se incorporan las generales del testigo, violándose al momento de considerar ésta lo preceptuado en nuestro Código Judicial.

TERCERO: A folio 26 y 27 del expediente el fallo de segunda instancia al considerar el testimonio del señor ERIC FRANCISCO BATISTA PÉREZ, se omitió considerar que dicho testigo no tuvo contacto con el saco de marras, por lo que su deposición derivaba de la referencia dada por el secretario.

CUARTO: Al momento de la aprehensión del saco, donde se encontró la sustancia prohibida, nuestro representado no se encontraba en el lugar de los hechos, a pesar de estar sometido a la autoridad policial, manteniéndose separado del lugar del hallazgo, con lo que dicha diligencia es nula, contrario a ello se valoró e indiciariamente se señalo responsabilidad por el referido acto.

QUINTO: Por haberse apreciado los testimonios señalados específicamente en contra derecho se ha infringido la norma sustantiva aplicada al darse por probada la responsabilidad criminal cuando no existía el fundamento probatorio para ello".

Esta causal de error de derecho en la apreciación de la prueba al tenor de la doctrina y la jurisprudencia, **"se da cuando el juzgador le asigna a la prueba un valor que no le reconoce la Ley o cuando no le reconoce el que la Ley le señala o cuando admite un medio probatorio sin ajustarse a las prescripciones legales"** (Sala Segunda de lo Penal. Julio 17 de 1991).

Como quiera que se advierte la existencia de una convergencia en cuanto a los tres primeros motivos, la Sala se limitará a hacer un examen global de los mismos.

En cuanto a los testimonios de los agentes de la policía, si bien es cierto que no vieron ni detuvieron a Valencia González con sustancia alguna, no menos cierto es que en su declaración, el agente Gilberto Córdoba afirma que al proceder a tomar la muestra de sangre de las personas que se encontraban en el autobús **-como es rutinario en esa área-** Valencia González evadió someterse a ese examen, y regresó al autobús dentro del cual se colocó en el quinto puesto al lado derecho. Por esta razón, añade en su narración de los hechos, que le informó la situación al Sargento Chiquidama y procedió a preguntarle al conductor del transporte en qué lugar exacto había abordado el autobús Valencia González, teniendo como respuesta que en la Revecita. Inmediatamente le ordena a Valencia González que bajara su maletín y al registrarlo no se le encontró nada. Sin embargo, el agente Córdoba preguntó al conductor, al igual que al ayudante de éste si Valencia González tenía otro equipaje o pertenencia y ambos le respondieron que suyo era un saco que estaba al lado del quinto puesto.

Es así que textualmente al agente Córdoba señaló: **"procedí a bajar el saco completamente cerrado, lo lleve a donde se encontraba el señor Valencia tan pronto me vio con el saco me dijo que eso no era de él, mostrándose nervioso, procedí a abrir el saco, al levantar el saco notamos la presencia de un paquete que presumiblemente sea droga, ya que le realizamos una pequeña cortada con el cuchillo ..."** (fs. 14-15).

La versión anterior aparece en autos debidamente corroborada por el agente Ulpiano Chiquidama (fs. 16-17) y Favio Valoy Córdoba (fs. 22-23), ya que ellos

se encontraban en el puesto de Control de Policía en Cañazas, el día que ocurrieron los hechos que generan este proceso penal.

También avala lo ya manifestado, Edy Alexis Monroy Batista, quien contrario a lo afirmado por el casacionista, se refiere a la posesión del saco de plátanos por percepción propia, toda vez que en su declaración dice: "**este señor se subió en la Revecita con un maletín, dos piñas y un saco, que me dijo que lo subiera y se lo puse al lado de su puesto**" (fs. 24).

En el mismo acto citado, al preguntársele a Monroy Batista, por qué circunstancia especial recordaba las pertenencias de Valencia González, si en el bus suben muchas personas, respondió: **Señor Fiscal, lo recuerdo porque cuando subió él tenía su maletín y dos piñas de el lado del bus y me dijo que al otro lado estaba un saco y que lo subiera**" (fs. 24-25).

Por su parte, Eric Francisco Batista Pérez, conductor del autobús, según constancias de autos, confirmó lo anterior, indicando además, que la función de Monroy Batista **-secretario o ayudante-** es la de subir el equipaje, sean estos maletines, bultos o sacos y ayudarlo con las cosas propias del carro (fs. 26-27).

Respecto al cuarto motivo, en el cual el casacionista señala que el saco no era propiedad de su representado y pide se declare nulo el acto de aprehensión del saco contentivo de la sustancia ilícita, hay que considerar que el tribunal de segunda instancia, después de analizar las declaraciones ya señaladas, concluyó: "... **se cuenta con el indicio de presencia y mala justificación, pues éste señala en su indagatoria que no trabaja, empero se dirige a Yaviza a pasear sin indicar el sitio donde se hospedó y el nombre de las personas que residen en la misma a fin de acreditar dicha aseveración, además la requisa a sus pertenencias obedeció a su comportamiento dudoso, el cual despertó sospechas en las unidades encargadas de la revisión del autobús, sin que en las testificaciones de los captores se advierta que hayan querido faltar a la verdad o que tengan algún interés en el resultado del proceso, de manera que es acertada la decisión de culpabilidad**" (f. 103).

Sobre el último motivo expuesto por el postulante, se comparte el criterio del Procurador General de la Nación, en el sentido que carece de cargo de injuridicidad en concreto y más bien es un motivo que sustenta otra causal no invocada por el casacionista.

En cuanto a las normas que se dicen infringidas y a las cuales hace alusión el casacionista, la Sala considera lo siguiente:

El artículo 2144 del Código Judicial que se anota como violado por la sentencia impugnada, en forma directa por omisión, el mismo se refiere a que el testimonio debe apreciarse según las reglas de la sana crítica. Es precisamente bajo este sistema de valoración de la prueba **reglas del correcto entendimiento humano** que el tribunal ad-quem motivó su fallo condenatorio, al analizar lo afirmado por los testigos presenciales a través de la lógica, la psicología del testimonio y la experiencia judicial.

El artículo 904 del Código Judicial, se afirma fue violado en forma directa por comisión, en su texto se obliga igualmente al juzgador a apreciar las circunstancias y motivos que corroboren o disminuyan la fuerza de las declaraciones, pero tomando en consideración las reglas de la sana crítica. Observa este tribunal de casación que en autos, ni en la sentencia recurrida existe contradicción en las declaraciones de los agentes captores, como afirma el postulante, e incluso cabe anotar que el tribunal ad-quem advirtió al igual que la Sala, que no hay elementos de juicio que permiten deducir que existe motivo alguno para que los agentes de la Policía Nacional que rindieron declaraciones en este caso, estuvieran movidos por intereses particulares que los condujeran a desvirtuar la realidad. Tampoco se puede sustentar tal imputación respecto al conductor del autobús y su ayudante.

Sobre lo anterior, el casacionista no señala en que consiste la

contradicción alegada.

El artículo 907 del Código Judicial que se dice violado en forma directa por comisión, se refiere al valor del testimonio de oídas. En el caso que nos ocupa, aparece que las personas que rindieron declaración dentro del expediente bajo examen, estuvieron presente en el lugar de los hechos y percibieron sensorialmente la situación que se registró cuando se encontró la droga ilícita en el saco perteneciente al procesado Valencia González, por lo tanto, sus testimonios no son de referencia o de oídas, ya que ellos fueron espectadores o protagonistas en esa diligencia.

El artículo 909 del Código Judicial que estima violado el casacionista en forma directa por comisión, se refiere al dicho del testigo que no ha declarado de sus propias percepciones. Al señalar el concepto de la infracción, nuevamente el postulante omite indicar en qué consiste la disparidad de los testimonios de los agentes del orden público así como los del conductor y su ayudante.

Con respecto a los artículos 38 y 260 del Código Penal, los cuales se dicen fueron violados en forma directa por comisión, la jurisprudencia de la Corte como Tribunal de Casación en lo penal ha sido constante y uniforme en señalar que cuando se invoca la causal de error de derecho en la apreciación de la prueba y no se acredita la infracción de las normas adjetivas citadas, tampoco se da la violación de normas sustantivas, que serían el efecto consecuente.

PARTE RESOLUTIVA

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia recurrida.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A FELIPE CAMARGO AMAYA, SINDICADO POR EL DELITO CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL EN PERJUICIO DE ERNESTO GIL VEGA KENNEDY. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado Carlos Carrillo Gomila, apoderado judicial de Felipe Camargo Amaya, ha interpuesto recurso de casación en la forma y en el fondo contra la sentencia de 28 de agosto de 1995, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, confirmatoria de la sentencia dictada por el Juzgado Décimo Primero del Primer Distrito Judicial, que condena a Camargo Amaya a la pena de 3 años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones pública por el mismo período, como responsable de delito contra libertad individual cometido en perjuicio de Ernesto Gil Vega Kennedy.

El examen del libelo de casación, a los efectos de decidir sobre la admisibilidad del recurso, permite advertir que el recurrente invoca cuatro causales, a saber:

Primera causal: La falta de competencia del Tribunal (numeral 1, a. 2437, C. J.).

Segunda causal: Por ser la sentencia infractora de la ley

sustancial, en concepto de violación directa, por omisión (a. 2434, numeral 1).

Tercera causal: Cuando se sanciona un delito, no obstante existir alguna circunstancia eximente de responsabilidad (a. 2434, numeral 5).

Cuarta causal: Cuando se haya incurrido en error de derecho en la apreciación de la prueba (a. 2434, numeral 1).

Se observa que en los motivos relativos a la primera causal predomina el argumento de que la sentencia atacada "no se procedió a la ACUMULACIÓN de los procesos" en los cuales Camargo aparece imputado por la comisión de delitos (f. 294). Si ese es el cargo de injuridicidad que plantea el recurrente para apoyar la primera causal, la Corte considera que ese argumento no se compadece con la causal aducida, pues implica el reconocimiento de que el Tribunal Superior sí podía pronunciarse en esta causa. De allí que los motivos no alcancen a indicar con claridad porqué el Tribunal Superior no tenía competencia para conocer del presente proceso penal.

Para decidir sobre la formalización de los motivos relacionados con la segunda causal, resulta necesario recordar que la jurisprudencia de la Sala tiene manifestado que la causal "violación directa por omisión" ocurre "en aquellos casos en que el juzgador omite la aplicación del precepto que reclama en forma clara el caso concreto ..." (Sentencia de 19 de mayo de 1994. Registro Judicial, mayo de 1994, págs. 282-284). Ahora bien, en los motivos que apoyan la segunda causal puede apreciarse que el recurrente manifiesta en forma reiterada que "solicitamos la acumulación procesal de las causas seguidas en su contra ... " (f. 300); que "En todos los procesos, obra como elemento en común, la identidad de designio y la violación reiterada de una misma disposición penal" (f.300), y que "En todos los procesos que se han instruido en contra del señor FELIPE CAMARGO AMAYA, existe como característica que los supuestos hechos delictivos a él imputados fueron realizados durante el período de tiempo fijo ..." (f. 301). Como se puede apreciar, el recurrente no precisa con estas afirmaciones un cargo de injuridicidad concreto, dirigido a comprobar que la sentencia atacada omitió la aplicación de un precepto atinente y de aplicación obligada en la causa.

De otra parte, el libelo de casación permite apreciar en la tercera causal la manifestación del recurrente, en el sentido de que la sentencia ha infringido "en forma directa por omisión" los artículos 19 y 35 del Código Penal (fs. 309-310). Ahora bien, en la sentencia se afirma que "El hecho de alegarse que CAMARGO cumplía en aquel entonces una orden superior, es necesario acotar que cuando se trate de ordenes que entrañan delito, no es posible dentro del marco de nuestro derecho, aceptarla como excluyentes de responsabilidad, de manera que la conducta de Camargo, es antijurídica y culpable" (f. 278). Es lógica, entonces, la presunción de que la sentencia censurada, para llegar a la conclusión de que a Camargo no le es aplicable la eximente de culpabilidad alegada, debió analizar las normas penales que se refieren a la eximente que invoca el recurrente. Siendo ese el caso, mal puede afirmarse que la sentencia censurada omitió la aplicación de las disposiciones legales que el recurrente alega como infringidas.

En cuanto a la cuarta causal, la Corte considera procedente su admisión, por la pertinencia de los motivos, las disposiciones legales que se dicen infringidas y el concepto que lo ha sido, con la causal invocada, a diferencia de lo observado en relación con las otras causales invocadas. Valga recordar que la Corte tiene expresado que "si el recurso adolece de coherencia entre los motivos, la disposición legal que se dice infringida y la causal aducida, de nada sirve cumplir en el libelo con cada uno de los requisitos previstos en el artículo 2443 del Código Judicial, cuando el recurso carece en sí mismo de sustento lógico-jurídico" (Sentencia de 5 de mayo de 1994).

Ante la comprobación de que la cuarta causal aducida cumple con las formalidades que estipula el artículo 2443 del Código Judicial, es del caso admitir el recurso de casación sólo en lo concerniente a esta causal.

Por las anteriores consideraciones, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el recurso de casación interpuesto contra la sentencia de 28 de agosto de 1995, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, sólo en cuanto a la cuarta causal invocada, y DISPONE correrlo en traslado al Procurador General de la Nación, por el término de ley.

Notifíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A SAMY GOZAINE, SINDICADO POR EL DELITO DE EXPEDICIÓN DE CHEQUES SIN SUFICIENTE PROVISIÓN DE FONDOS EN PERJUICIO DE MARCIAL ENRIQUE SÁNCHEZ. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Vencido el término de 8 días establecido en el artículo 2443 del Código Judicial, se pasa a decidir sobre la admisibilidad del recurso de casación interpuesto por el licenciado RICARDO ALVARADO TORRAZZA, en su condición de abogado defensor, contra el auto de 22 de mayo de 1995 proferido por el Superior de Justicia del Tercer Distrito Judicial.

El recurso ha sido interpuesto por persona hábil en tiempo oportuno, pero estima la Sala que la resolución recurrida no admite este recurso extraordinario de casación.

En efecto, los únicos autos de segunda instancia que admiten el recurso de casación son aquellos a que se refiere el artículo 2453 del Código Judicial.

Para que proceda el recurso en cuestión, por lo tanto, debe tratarse de un auto que ponga fin al proceso, situación que no se da en esta ocasión, pues el auto recurrido negó la prescripción de la acción que se solicitó.

El auto que se impugnó, en consecuencia, no le pone término al proceso mediante sobreseimiento definitivo y ello es suficiente para no admitir el recurso promovido.

En mérito de lo expuesto, Sala Penal de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE que el recurso de casación presentado por el licenciado RICARDO ALVARADO TORRAZA en representación del señor SAMY GOZAINE.

Devuélvase y Notifíquese

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS.
(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CONFLICTO DE COMPETENCIA

CONFLICTO DE COMPETENCIA ENTRE EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL Y EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL, EN LAS SUMARIAS EN AVERIGUACIÓN POR DELITO CONTRA LA VIDA Y LA

INTEGRIDAD PERSONAL EN PERJUICIO DE SEGUNDO GONZÁLEZ. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DOS (2) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Segundo Tribunal Superior de Justicia, mediante resolución de 13 de septiembre de 1995, al llevar a cabo la evaluación jurídico-penal del sumario en averiguación de las causas del deceso del señor **SEGUNDO GONZÁLEZ**, consideró que se había planteado un conflicto de competencia que debía resolver la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia y por ello, remitió lo actuado con esa finalidad.

Por cumplidas las reglas de reparto y conforme lo dispone el artículo 2588 del Código Judicial, se corrió traslado del negocio penal al Señor Procurador General de la Nación para que emitiera concepto, quien se pronunció sobre el caso en su Vista N° 81 de 21 de diciembre de 1995, la cual obra de fojas 148 a 153.

LOS HECHOS

La presente investigación se inicia con la diligencia ordenada por la Fiscalía Auxiliar de la República, el 16 de agosto de 1994, cuando comisionó al Secretario del Despacho en funciones de "agente especial", para que practicara la diligencia de reconocimiento de un cadáver que se encontraba en la morgue del Hospital Santo Tomás. Se trataba de una persona del sexo masculino, de 64 años de edad, natural de Calobre, provincia de Veraguas, con cédula N° 9-31-151, identificado con el nombre de SEGUNDO GONZÁLEZ, quien según información dada por su hijo JULIO GONZÁLEZ DÍAZ (fs. 3-4), el 10 de mayo de 1994 sufrió una caída de un caballo, recibiendo un golpe en la cabeza, por lo que lo trasladaron al Hospital de Santiago, para su atención médica, posteriormente lo ingresaron al Hospital de Aguadulce, lo atendieron también en una clínica de Chitré y finalmente lo enviaron al Hospital Santo Tomás, donde lo operan de urgencia y muere por "herniación transtentorial, edema cerebral y trauma cráneo-encefálico".

La Fiscalía Auxiliar, después de recibir el protocolo de necropsia, dispuso remitir lo actuado al Fiscal de Circuito de Veraguas de turno, porque estimó que los hechos investigados ocurrieron en el Distrito de Calobre y por competencia territorial, les correspondía la instrucción sumarial.

El Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial en resolución de 19 de enero de 1995, se inhibió de conocer de esta causa y ordenó que fuera enviada al Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, basado en que el certificado de defunción que obra a fojas 46 indica que la muerte de SEGUNDO GONZÁLEZ se registró en la ciudad de Panamá y con fundamento en el artículo 1999 del Código Judicial, le corresponde el conocimiento del caso.

OPINIÓN DEL PROCURADOR

Con relación al conflicto de competencia planteado entre el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial y el Tribunal Superior de Justicia del Segundo Distrito Judicial, el Jefe del Ministerio Público considera que independientemente del hecho cierto del lugar en el que se produjo la muerte de SEGUNDO GONZÁLEZ, hay que tomar en cuenta que las constancias procesales informan que la lesión sufrida y de la cual se derivó la causa de su óbito, ocurrió en Calobre, Provincia de Veraguas, que forma parte del Segundo Distrito Judicial.

Cita las declaraciones de JULIO GONZÁLEZ DÍAZ (fs. 3), JUAN DE LA CRUZ MARTÍNEZ (fs. 29) y la de ISRAEL CASTILLO (fs. 34-35), para concluir que el señor SEGUNDO GONZÁLEZ fue encontrado en el suelo con un golpe en la cabeza, por la caída de un caballo y que después fue atendido en varios hospitales, el de Santiago, el de Aguadulce, de Chitré y finalmente fue internado en el Hospital Santo Tomás, lugar donde falleció, pero su muerte se debió a lesiones cerebrales previas.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Con relación a la forma, tiempo y lugar del hecho punible, el capítulo I del Título II del Libro I del Código Penal regula la materia y orienta al juzgador en la solución de los problemas sobre la validez temporal y espacial de la ley penal.

El artículo 18 de nuestro Código Punitivo, tal como lo han anotado los agentes del Ministerio Público y el Segundo Tribunal Superior de Justicia, establece con mucha precisión que en los delitos de resultado material, el tiempo y lugar de su realización, será aquél en el que se manifiesta o exterioriza la voluntad, sea ésta en sus formas de acción u omisión, a pesar de que el resultado se dé en otro momento u otro lugar.

En el caso de autos, no aparece con claridad que el hecho que generó el golpe sufrido por el señor SEGUNDO GONZÁLEZ, proviniera de una acción u omisión imputable a persona alguna, que permita señalar que se trata de una manifestación de voluntad de un ser humano cuyo resultado se produjo meses después en un lugar distinto. Todo indica que se trata de un caso fortuito, o sea, de la caída de un caballo. Sin embargo, estamos ante unas sumarias en averiguación de las causas de la muerte de una persona, que exige una valoración de la fase instructoria y que, por la forma en que ocurrieron los hechos, corresponde al Tribunal de la circunscripción territorial donde se realizó el hecho que lesionó la integridad corporal de SEGUNDO GONZÁLEZ.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DIRIME el conflicto de competencia suscitado en este caso, asignando al Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial con sede en la ciudad de Penonomé, el conocimiento del mismo.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE

INCIDENTE DE RECUSACIÓN CONTRA EL MAGISTRADO SUPLENTE DR. CARLOS H. CUESTAS DENTRO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR FORMULADA POR AIDELENA PEREIRA CONTRA OMAYRA GARCÍA DE BERBEY POR EL SUPUESTO DELITO DE TENTATIVA DE HOMICIDIO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Dentro del incidente de nulidad de lo actuado, por notificación testifical en violación al procedimiento, interpuesto por la licenciada OMAYRA GARCÍA DE BERBEY en el proceso penal que se instruye por razón de la acusación particular interpuesta por la licenciada AIDELENA PEREIRA en su contra, por delito de tentativa de homicidio, el licenciado **Virgilio Vásquez Pinto**, en nombre y representación de la licenciada **OMAYRA GARCÍA DE BERBEY**, ha promovido incidente de recusación para que se separe de su conocimiento al Magistrado Suplente **CARLOS H. CUESTAS**, a quien le fue repartido dicho negocio penal en el mes de diciembre de 1995.

El incidentista en la parte medular de su escrito, plantea que:

"El día 10 de octubre de 1995, ante la Asamblea Legislativa, OMAYRA GARCÍA DE BERBEY interpuso Acusación Particular contra el Magistrado

Suplente CARLOS CUESTAS y otros Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por la comisión de Delitos contra la Administración de Justicia y la Seguridad Colectiva".

Conforme se observa en el escrito contentivo del incidente de recusación, la razón fundamental que sustenta la pretensión consiste en el hecho de que el día 10 de octubre de 1995, ante la Asamblea Legislativa, **OMAYRA GARCÍA DE BERBEY** interpuso acusación particular contra el Magistrado Suplente **CARLOS CUESTAS** y otros Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por la comisión de delitos contra la Administración Pública, la Administración de Justicia y la Seguridad Colectiva. Se desprende de dicho escrito de recusación, que el proceso penal pendiente contra el Magistrado Suplente **CARLOS CUESTAS** y otros Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, fue interpuesto por **OMAYRA GARCÍA DE BERBEY** el día 10 de octubre de 1995; y posteriormente, el incidente de nulidad dentro de la causa penal contra la misma, fue repartido al Magistrado Suplente en el mes de diciembre de 1995, luego de que se separó del conocimiento de dicha causa penal al Honorable Magistrado **FABIÁN A. ECHEVERS**, por estar comprendido dentro de la causal de impedimento a que se refiere el ordinal 11 del artículo 749 del Código Judicial; pese a ello, el citado funcionario judicial no ha manifestado impedimento para seguir conociendo del presente proceso.

También, el licenciado **Virgilio Vásquez Pinto** argumenta que el Magistrado **CUESTAS** no ha conocido hasta el presente de la causa penal que se le sigue a **OMAYRA GARCÍA DE BERBEY** ni ésta ha hecho gestión alguna en dicho proceso que haya sido de conocimiento del Magistrado recusado; por lo que no son aplicables los artículos 751, ordinal 3, y 755, párrafo segundo, del Código Judicial.

En cumplimiento del trámite establecido en el artículo 758 del Código Judicial, del escrito de recusación interpuesto por el licenciado Virgilio Vásquez Pinto, en nombre y representación de la licenciada OMAYRA GARCÍA DE BERBEY, SE CORRE TRASLADO al Magistrado Suplente CARLOS H. CUESTAS, por el término de tres (3) días, a fin de que informe sobre la verdad de los hechos en que se funda la recusación.

Notifíquese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE DE OBJECIONES CONTRA EL PROCESO DE EXTRADICIÓN DE ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ, SOLICITADA POR EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Conoce la Sala Penal del incidente de objeciones interpuesto por la licenciada Emma Alba Tejada, en su condición de apoderada judicial de Alfredo López Rodríguez, contra la nota A. J. N° 514, calendada 6 de julio de 1995, proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la que se ordena a la Procuraduría General de la Nación proceder a la detención preventiva de López Rodríguez, quien es requerido por el gobierno de los Estados Unidos por la comisión de delito relacionado con drogas.

Explica la incidentista que el 3 de julio de 1995, la embajada de los Estados Unidos de América anunció al Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá su intención de formalizar solicitud de extradición del ciudadano de ese país Alfredo López Rodríguez (f. 3). Como consecuencia de ese anuncio, el Ministerio, mediante nota A. J. N° 514, de 6 de julio de 1995, solicitó al Procurador General de la Nación que ordenara la detención preventiva de López.

Mediante providencia de 6 de julio de 1995, el funcionario de instrucción cumplió con ordenar la detención solicitada, poniendo al detenido a disposición del Ministerio de Relaciones Exteriores por el término de 60 días (fs. 3-4). Sigue exponiendo la letrada que el Estado Requiriente no cumplió, dentro del término fijado por la ley, con la formalización de la solicitud de extradición, lo que hizo el 5 de septiembre de 1995, es decir cuando habían transcurrido "sesenta y dos (62) días desde que se produjera la detención" (f. 4). Por tal motivo la incidentista considera que la detención que aun sufre su defendido es ilegal, ya que se le mantiene detenido "en un período mayor de sesenta (60) días" (f. 4).

Por otra parte, reclama también que los documentos que sirven de fundamento a la solicitud de extradición "se encuentran escritos en otra lengua que no es el español, no se presentan traducidos ... con lo cual no cumplen con los requisitos que en ese sentido establece el Código Judicial" (f. 5).

Finalmente, la incidentista solicita a la Sala que "niegue lo actuado" en el proceso de extradición contra López Rodríguez y, en consecuencia, "se proceda ... a ordenar la libertad ..." de su defendido (f. 15).

OPINIÓN DEL PROCURADOR

Al contestar el traslado que le fuera corrido en este negocio, el Procurador General de la Nación externa opinión en el sentido de que el incidente de objeciones es "extemporáneo", toda vez que debió presentarse dentro de los quince días siguientes a la notificación de la providencia que ordena la detención preventiva de López Rodríguez (f. 300).

Por otra parte, el jefe del Ministerio Público considera que el incidente de objeciones no debe ser admitido por cuanto que "el Ejecutivo mediante Resolución N° 11 de 6 de octubre de 1995, concede al gobierno de los Estados Unidos de América, la extradición del ciudadano naturalizado americano, ALFREDO LÓPEZ RODRÍGUEZ ..." (f. 300).

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

Para resolver sobre las objeciones formuladas por la defensa técnica de López Rodríguez, se hace necesario determinar si el incidente que ahora se considera ha sido interpuesto de conformidad con el mandato del artículo 2510 del Código Judicial. Esta norma requiere el cumplimiento de formalidades para la proposición del incidente de objeciones, el cual debe ser interpuesto *dentro del plazo de 15 días*, **a contar desde la fecha en que fue notificada la resolución** que decida la solicitud interponga contra una resolución dictada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y notificada a la persona reclamada, en la cual se decida que es "procedente la solicitud de extradición".

Ahora bien, la apoderada judicial de López Rodríguez interpuso el incidente de objeciones "contra ... la Nota A. J. N° 514 de 6 de Julio de 1995, proferida por el Ministro Encargado de Relaciones Exteriores de Panamá ... la cual le envía al Procurador General de la Nación ... para que se trámite (sic) la solicitud de formal extradición presentada por el Gobierno de los Estados Unidos de América contra mi poderdante ..." (f. 1). Es decir, el incidente de objeciones fue interpuesto, como bien lo señala el Procurador General (f. 302), contra un acto administrativo que no lo admite, como lo es la "Nota" antes indicada.

En la parte medular de esa nota, se observa que el Ministerio de Relaciones Exteriores solicita al Procurador General de Nación, "la detención preventiva con fines de extradición del ciudadano americano naturalizado ALFREDO T. LÓPEZ-RODRÍGUEZ ... ciudadano americano que es requerido para comparecer a juicio por violación federal de narcóticos ... en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur del Estado de la Florida, Fort Launderdale ..." (f. 33, cuaderno de extradición).

Ello quiere decir que la Nota A. J. N° 514 de 6 de Julio de 1995 no es el acto procesal administrativo que "decide" la solicitud de extradición, de donde resulta la ineficacia, por carencia de objeto idóneo, de la iniciativa emprendida

por la incidentista.

Finalmente es necesario advertir a la defensa técnica de López Rodríguez que el incidente de objeciones es, en este caso, un mecanismo de impugnación que se utiliza para comprobar que la solicitud de extradición es contraria a las disposiciones legales de la República de Panamá. No es, por lo tanto, la vía idónea para dirimir una controversia sobre la detención de un individuo, supuestamente fuera de los casos y la forma que prescriben la Constitución y la ley. Si en ello radica la disconformidad de la letrada, en el sentido que su defendido era objeto de detención ilegal, es pertinente recordar que ya el Pleno de la Corte Suprema, mediante sentencia de 26 de septiembre de 1995, había declarado **LEGAL** la detención de López Rodríguez, precisamente dentro de este proceso de extradición. En aquella oportunidad el Pleno de la Corte manifestó que la detención de López cumple con "los procedimientos que regulan la extradición, sin merma de las garantías constitucionales del detenido". Siendo esa la situación, resulta incomprensible porqué la incidentista introduce nuevamente, a título de "objeciones", su concepto sobre la ilegalidad de la detención de su mandante.

Queda claro, entonces, que el incidente de objeciones interpuesto contra la nota A. J. N° 514, calendada 6 de julio de 1995, proferida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, debe ser desestimado, puesto que, como queda comprobado, no ha sido formalizado con el cumplimiento de las exigencias de nuestra normativa procedimental penal a los efectos de examinar la extradición de aquellas personas reclamadas por la comisión de delitos relacionados con drogas.

Por lo antes expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO FUNDADO el incidente de objeciones interpuesto por la licenciada Emma Alba Tejada contra la nota A. J. N° 514, calendada 6 de julio de 1995, del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Notifíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN PENAL

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A JESÚS ROBINSON MORENO VEGA, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS E. MUÑOZ POPE. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El 16 de noviembre de 1995 ingresó a este Despacho el expediente que contiene el recurso de revisión interpuesto dentro del proceso seguido a **JESÚS ROBINSON MORENO VEGA** sentenciado por los delitos de homicidio y robo, a fin de resolver su admisibilidad.

Al observar que el escrito contentivo del recurso de revisión lo interponía el mismo reo, desde la Cárcel Modelo, se dictó la providencia que aparece a folio 5 de este expediente, mediante la cual se corrió traslado del negocio al licenciado GABRIEL FERNÁNDEZ, en su calidad de defensor de oficio, por el término de 15 días, para que asistiera al recurrente, examinara su caso y si registraba causa legal que lo fundamente, se hicieran las enmiendas correspondientes presentando un escrito de conformidad a las exigencias de la ley.

Vencido el término de traslado sin que el abogado defensor presentara escrito alguno, el señor Robinson Moreno aportó una nueva documentación que obra de folio 6 al 15 de este cuaderno y en la que el Presidente del Comité Evangélico de Apoyo a las Cárceles recomienda al recurrente por haberse incorporado al programa de rehabilitación y resocialización que se dicta en la Cárcel Modelo.

Como es sabido, el recurso de revisión, es un medio de impugnación extraordinario que debe cumplir ciertas formalidades y basarse en alguna de las causales previstas por el artículo 2458 del Código Judicial. Como se dijo antes, el recurso fue presentado por el propio reo y el defensor de oficio asignado no presentó escrito alguno de asistencia, de manera tal que a la Sala Segunda no le es posible considerar la petición presentada, menos aún, cuando la sentencia cuya revisión se pide es consecuencia directa de un veredicto de culpabilidad, por homicidio y robo, dado por un jurado de conciencia que conoció del caso.

En consecuencia, la SALA SEGUNDA DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de revisión interpuesto por JESÚS ROBINSON MORENO VEGA en el presente negocio.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN PRESENTADO POR CRISTÍN ESPINOSA RÍOS, EN EL PROCESO SEGUIDO POR DELITO DE HOMICIDIO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DR LO PENAL.

VISTOS:

El señor **CRISTÍN ESPINOSA RÍOS**, condenado por delito genérico de homicidio, interpuso en su propio nombre Recurso de Revisión contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Chiriquí, para que se revise la sentencia que lo condenó a 24 años de cárcel, de los cuales lleva ocho (8) cumplidos.

Examinando la solicitud impetrada, observa la Sala que la misma adolece de defecto de forma, por cuanto el petente invoca como causal del Recurso el artículo 2458, numeral 5°, que establece:

> "5. Cuando después de la condenación se descubran nuevos hechos que, por sí mismo o combinados con las pruebas anteriores, puedan dar lugar a la absolución del acusado o a una condena menos rigurosa, por la aplicación de una disposición penal menos severa;"

Es decir, que **ESPINOSA RÍOS** sostiene que después que se dictó sentencia, se descubrieron nuevos hechos que justifican la reducción de la pena a él impuesta.

Sin embargo, él mismo señala en foja 2 del cuadernillo que consta dentro del expediente que él reveló la identidad del autor del ilícito, al hacer "confeso y responsable del homicidio; aporté los indicios suficientes para el enjuiciamiento a que fui sometido, dándose a la postre condena de 24 años para mi persona."

O sea que el justiciado manifiesta que no se valoraron debidamente su confesión y responsabilidad en el ilícito, ni de los indicios aportados por él, para su enjuiciamiento.

Opina la Corte, que estas probanzas procesales se practicaron durante el desarrollo de la investigación y no después de dictada la sentencia, por lo que no compagina el artículo invocado con la actuación procesal aducida por el sentenciado.

En otro orden de cosas, observa esta Instancia que el señor **ESPINOSA RÍOS** no señala adecuadamente la sentencia que lo condenó, es decir, la fecha y número de sentencia, siendo esta otra razón formal para no admitir el presente Recurso.

Por todo lo anterior, la Corte Suprema, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el Recurso de Revisión interpuesto por CRISTÍN ESPINOSA RÍOS.

Notifíquese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN INCOADO POR NELSON GÁLVEZ AMANIOS, REO DEL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE EVELIO VEGA GIL. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado **LUIS CARLOS AROSEMENA RAMOS** ha presentado ante la Secretaría de la Sala Segunda de lo Penal desistimiento del Recurso de Revisión interpuesto contra la sentencia de 22 de octubre de 1993 dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia que condenó al señor NELSON GÁLVEZ AMANIOS a la pena de 20 años de prisión, la que posteriormente fue reformada mediante resolución de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia fechada de 13 de septiembre de 1994 que le redujo la pena en 18 años de prisión.

El recurrente, en su escrito de desistimiento, manifiesta que "... lo advertido por el aludido procesado no encuadra con alguno de los siete ordinales del artículo 2458 del Código Judicial, que determina cuando habrá lugar a la revisión de una sentencia ejecutoriada, es por lo que no podré formalizar el recurso solicitado por el señor **NELSON GÁLVEZ AMANIOS**, por no existir causa legal que lo fundamente".

Pues bien, el desistimiento es uno de los medios excepcionales de terminación del proceso regulado en el Capítulo II, Título X, del Libro II del Código Judicial. Particularmente el artículo 1073, ibidem, dispone: "toda persona que haya entablado una demanda, promovido un incidente o interpuesto un recurso, puede desistir expresa o tácitamente."

Frente a tal realidad y atendiendo a que el desistimiento manifestado sólo afecta a quien lo interpone, la Corte nada tiene que objetarle por lo que lo atinente es admitir el desistimiento presentado.

Por ello, la Corte Suprema, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el desistimiento del Recurso de Revisión presentado a favor de NELSON GÁLVEZ AMANIOS.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) CARLOS MUÑOZ POPE
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A SALVADOR VÁSQUEZ GÓMEZ, POR EL DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, (23) VEINTITRÉS DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la licenciada **MICAELA MORALES MIRANDA**, Defensora de Oficio, manifiesta impedimento para conocer del recurso de revisión promovido por el señor SALVADOR VÁSQUEZ GÓMEZ (Ver fs. 13-14).

La licenciada **MICAELA MORALES M.** sustenta su manifestación de impedimento para actuar como defensora en el presente recurso de revisión, en el hecho de que, en Sentencia # 3 de 19 de enero de 1996, en la cual se condenó al señor SALVADOR VÁSQUEZ GÓMEZ, por delito contra la Salud Pública; y se absolvió a la señora IDALIDES FRAGO DE APARICIO,

> "La suscrita fungió como Defensora de IDALIDES FRAGO DE APARICIO, quien en su declaración indagatoria hace señalamientos contra SALVADOR VÁSQUEZ GÓMEZ, como presunto vendedor de drogas.
>
> En la audiencia, celebrada el 2 de diciembre de 1993, el Ministerio Público solicitó careo entre mi cliente y el Sr. Salvador Vásquez Gómez (sic). En dicha diligencia, mi cliente le mantuvo los cargos al Sr. Vásquez. ...". (f. 13).

En este sentido, la licenciada **MORALES MIRANDA**, considera que "... existe Conflicto de Intereses, para una adecuada defensa de los derechos del Sr. VÁSQUEZ GÓMEZ, quien fue representado en su momento por la Licda. NEREIDA HORNA QUIROZ, ..." (f. 14), de conformidad con lo señalado en el artículo 417, literal a), del Código Judicial, que es del siguiente tenor:

> "ARTÍCULO 417. La representación asignada al Defensor de Oficio es de forzosa aceptación, sin embargo, éste podrá excusarse en cualquiera de los siguientes supuestos:
>
> a. Conflictos de intereses con las partes; ...".

Por lo tanto, considera la Sala que se justifica la separación de la licenciada **MICAELA MORALES MIRANDA** para actuar como Defensora de Oficio del señor SALVADOR VÁSQUEZ GÓMEZ en el presente negocio y, en razón de esto, existe motivo justificado para hacer una nueva designación del Defensor de Oficio en este caso.

En virtud de lo anterior, la Corte Suprema, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL el impedimento manifestado por la licenciada MICAELA MORALES MIRANDA, Sub-Directora Distrital del Instituto de Defensoría de Oficio del Tercer Distrito Judicial y, en consecuencia, la declara IMPEDIDA y la separa de actuar como Defensora de Oficio en el presente negocio; y, ORDENA que se corra traslado de este negocio a la Dirección del Instituto de Defensoría de Oficio para que designe el nuevo Defensor que represente al señor SALVADOR VÁSQUEZ GÓMEZ y lo asista en cuanto a la correcta formalización del recurso de revisión interpuesto, si se registra causal legal que lo fundamente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FIANZAS
(fdo.) MARIANO E. HERRARA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A JOSÉ MARÍA INFANSÓN CASTRO, SINDICADO POR EL DELITO DE ROBO CALIFICADO EN PERJUICIO DE HUMBERTO BRID BOCANEGRA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado Maximino Mejía Ortega, actuando en representación de José María Infansón Castro, ha interpuesto recurso de revisión contra la sentencia N° SC-73 de 27 de junio de 1994, proferida por el Juzgado Noveno del Primer Circuito Judicial de Panamá, que condena a Infansón Castro a la pena de 5 años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual período, como responsable del delito de robo calificado en perjuicio de Humberto Brid Bocanegra.

Al examinar el libelo de revisión, a los efectos de decidir sobre su admisibilidad, se advierte que el recurrente no especifica cual de los casos a que se refiere el artículo 2458 del Código Judicial es la que sirve de apoyo al recurso. De igual manera, se observa que el memorial de revisión no viene acompañado de pruebas que apoyen los diecinueve hechos que sirven de fundamento al recurso, lo que evidencia que el recurrente incumple con la formalización del medio impugnativo extraordinario conforme lo que dispone el artículo 2459 del Código Judicial.

Por comprobado que el libelo de revisión no cumple con los requisitos estipulados en los artículos 2458 y 2459 del Código Judicial se hace improcedente el medio impugnativo extraordinario que ocupa a la Sala lo que en consecuencia indica que no es posible admitir el recurso de revisión contra la sentencia censurada.

Por las anteriores consideraciones LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de revisión contra la sentencia N° SC-73 de 27 de junio de 1994, proferida por el Juzgado Noveno del Primer Circuito Judicial de Panamá, que condena a José María Infansón Castro a la pena de 5 años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual período, como responsable del delito de robo calificado en perjuicio de Humberto Brid Bocanegra.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS

(fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES (fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE

(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN SOLICITADO POR JORGE MIGUEL VITAL, SINDICADO POR EL DELITO DE VIOLACIÓN CARNAL. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Jorge Miguel Vital, quien se encuentra detenido en el Centro Penitenciario de Coiba, hizo llegar a la Sala Segunda de la Corte Suprema libelo por el cual solicita la revisión de la sentencia N° 94 de 31 de diciembre de 1992, proferida por el Juzgado Segundo del Tercer Circuito Judicial de Panamá, que lo condena a la pena de 40 meses de prisión por la comisión del delito de violación carnal.

A juicio del solicitante, la sentencia atacada amerita ser revisada por cuanto que en la Dirección Nacional de Corrección del Ministerio de Gobierno y Justicia aparece que debe cumplir 60 meses de prisión por la comisión del mismo delito, por el cual el Juzgado Segundo del Tercer Circuito Judicial ya lo había sancionado. Según expresa, es esa circunstancia lo que lo motiva a solicitar que "esta falla acministrativa (sic) sea coregida (sic) tan pronto sea posible ... y ... puedan decidir cual de las dos penas es la que tengo que cumplir" (f. 1 vlta.).

Como quiera que el recurso de revisión es un medio extraordinario de impugnación sometido a requisitos de ineludible cumplimiento, se designó al licenciado Julián García Trejos, en su condición de defensor de oficio, para que asistiera al condenado "en cuanto a la correcta formalización del recurso interpuesto" (f. 3).

El 17 de enero de 1996 el licenciado Trejos remitió a la Sala un informe, en el que indica que, "por error involuntario del Tribunal de la causa se habían confeccionado dos ... `ESTADÍSTICA JUDICIAL-PENAL- INFORME INDIVIDUAL DEL SINDICADO con el nombre de JORGE MIGUEL VITAL ... cada uno con una pena ... diferente, 40 meses y cinco años ... Razón por la cual él aparecía en la Dirección Nacional de Corrección pendiente de cumplir dos penas" (f. 16). Concluye el defensor de oficio señalando que no es necesaria la formalización del recurso de revisión, ya que el Tribunal de la causa ha corregido el error denunciado por el sentenciado (f. 17).

En efecto, la Corte observa que mediante oficio N° 106 de 17 de enero de 1996, el licenciado Ricardo Mazza Moreno, Juez Segundo de Circuito de lo Penal del Tercer Circuito Judicial (f. 13), corrobora que el Tribunal que preside, al llenar el documento pre-elaborado de la Contraloría General de la Nación sobre el informe individual del sindicado, incurrió en "error involuntario" al establecer que Vital debía cumplir 5 años de prisión, cuando "debía ser cuarenta (40) meses", error que manifiesta ha sido "debidamente subsanado" (f. 13).

Luego de apreciar el informe del defensor de oficio y la explicación suministrada por el juez de la causa al Director Nacional de Corrección, se debe tener por enmendado el error denunciado por el condenado Vital, lo evidencia la ineficacia del trámite de revisión que se pide. De allí que la Sala comparta el criterio del defensor de oficio, quien manifiesta que no es necesaria la formalización del recurso de revisión solicitado por el reo, ya que no emerge la "causa legal que fundamente ... la ... formalización del recurso interpuesto", además de que la vía indicada no era la idónea para la corrección de un asunto de naturaleza meramente administrativa (f. 17).

Por las anteriores consideraciones, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de revisión anunciado por Jorge Miguel Vital contra sentencia N° 94 de 31 de diciembre de 1992, proferida por el Juzgado Segundo del Tercer Circuito Judicial de Panamá.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SENTENCIA APELADA

JUICIO SEGUIDO A ADONES MANUEL PINTO HERNÁNDEZ, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO COMETIDO EN PERJUICIO DE JOSÉ LUIS JUAN TUÑÓN. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, CUATRO (4) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante sentencia calendada 15 de junio de 1995, condenó a Adones Manuel Pinto Hernández a la pena principal de 10 años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual período, como responsable del delito de homicidio cometido en perjuicio de José Luis Juan Tuñón. Contra esta decisión jurisdiccional el sentenciado anunció recurso de apelación que, en su oportunidad, fue sustentado por su apoderado judicial, licenciado Rafael Rodríguez.

El recurrente plantea que su inconformidad con la sentencia condenatoria apelada consiste en que, "si bien es cierto hubo un sin número de declaraciones las cuales afirman las circunstancias por las cuales se llevaron a cabo los hechos ... consideramos que hay en igual cantidad de circunstancias que han debido ser evaluadas al momento de establecer la pena ..." (fs. 270-271). En tal sentido, explica el defensor técnico que no se tomó en consideración que su defendido, al ver su integridad física en peligro, "procedió a defenderse, además ... se han debido tomar en cuenta las condiciones personales de la víctima, es decir que anteriormente hubo una rencilla entre mi poderdante y la víctima donde saliera lesionado el señor ADONES PINTO" (f. 272). En síntesis, a su juicio la sentencia impugnada "no ha sido dictada acorde con las respectivas atenuantes que se consideran al momento de fijar una pena" (f. 272).

Concluye el recurrente sosteniendo que "lo único que hizo mi representado fue defenderse, ya que probablemente hoy día el muerto hubiese sido él, debido a que en el expediente reposan declaraciones que el occiso intentó sacar un arma según versión de un testigo presencial del hecho y, el otro establece claramente que vio un arma blanca de manos del occiso" (f. 273), en razón de lo cual solicita se "realice una revisión pormenorizada del caso en mención ... se revoque la sentencia impugnada y se profiera una resolución más cónsona con la realidad procesal de mi defendido ..." (f. 273).

La Sala pasa a decidir el recurso formulado exclusivamente sobre los puntos de la resolución a que se refiere el recurrente, cumpliendo el mandato del artículo 2428 del Código Judicial.

La piezas procesales permiten determinar que el deceso de José Luis Juan Tuñón ocurrió en la noche del 18 de mayo de 1993, en el interior de un autobús colectivo de la ruta Tumba Muerto-Ciudad Bolívar, a la altura de la Plaza 5 de mayo, cuando Adones Manuel Pinto Hernández le ocasionó a Tuñón una herida con arma de fuego en la región torácica superior derecha. El dictamen médico-legal consignó como causa de la muerte "CHOQUE HEMORRÁGICO POR PROYECTIL BALÍSTICO PENETRANTE Y SALIENTE DEL TÓRAX" (f. 73).

Cabe resaltar que la culpabilidad del sentenciado fue declarada por jurados de conciencia, conforme lo establece el artículo 2320 del Código Judicial, decisión visible a folio 224, por lo que no es materia de discusión.

Con relación al reclamado reconocimiento de "las respectivas atenuantes que se consideran al momento de fijar una pena" (f. 272), resulta conveniente destacar que el artículo 56 del Código Penal enumera los factores que el juzgador debe tomar tener presentes al momento de cuantificar la pena de prisión a imponer.

De allí que los presupuestos punitivos establecidos en dicha norma no puedan ser considerados como circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal: a) porque su reconocimiento está reservado a la discreción del juzgador y, b) porque nuestra legislación no los contempla en el catálogo de atenuantes comunes consagradas en el artículo 66 del Código Penal.

Siendo esa la situación, debe desestimarse la censura hecha por el recurrente a este respecto, ya que el tribunal a-quo consignó, en forma expresa,

el criterio seguido en la aplicación del artículo 56 del Código Penal (f. 243), para la fijación de la pena líquida (10 años), siguiendo los parámetros que establece el artículo 131 del Código Penal (de 5 a 12 años de prisión).

Por otra parte, la defensa técnica introduce en este momento procesal una causa de justificación, sosteniendo que "lo único que hizo mi representado fue defenderse, ya que probablemente hoy día el muerto hubiese sido él" (f. 273). La Sala considera que este argumento carece de sustento jurídico, pues tiene como propósito probar la inocencia de Pinto Hernández, asunto que ya fue decidido por jurados de conciencia, de modo que no puede ser objeto de consideración dentro de esta alzada.

En vista de que no se encuentran fundados los reparos hechos por el recurrente, la Corte estima que en este negocio el intervalo penal para la fijación del quántum de la pena (10 años) se encuadró correctamente, por lo que es del caso mantener la medida decretada por el a-quo.

Por lo antes expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de 15 de junio de 1995 emitida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que condena a la pena de 10 años de prisión a Adones Manuel Pinto Hernández por el homicidio de José Luis Juan Tuñón.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES (fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA QUE CONDENA A GERMÁN GONZÁLEZ PITTÍ Y LUIS ANTONIO CÓRDOBA MORALES POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE EDWIN HEREDIO AMAYA AMAYA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, ONCE (11) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, mediante sentencia de 28 de julio de 1992, condenó a Germán González Pittí y a Luis Antonio Córdoba Morales a la pena de 20 años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual término, como responsables del delito de homicidio cometido en perjuicio de Edwin Heredio Amaya Amaya. La meritada decisión jurisdiccional fue recurrida en apelación por los licenciados Serafín Quiel Jaramillo, quien actúa como apoderado judicial de Córdoba Morales, y Rafael Alberto Santamaría, en su condición de defensor de oficio de González Pittí, quienes sustentaron el recurso judicial en tiempo oportuno.

La defensa técnica de Córdoba Morales discrepa de la sentencia atacada por considerar que se sirve de "meras especulaciones y presunciones, indicios de mala justificación ... no ... comprobados en la causa penal ..." para sancionar a su defendido, con base en el artículo 132 del Código Penal (fs. 1643-1644).

Finalmente el recurrente sostiene que su defendido no tiene la calidad de instigador, toda vez que ese grado de autoría "jamás fue probada, ni por el Ministerio Público, ni por la Acusación Particular" (f. 1644).

Por su parte el defensor de oficio de González Pittí afirma que a su patrocinado se le ha impuesto una pena de prisión "exagerada", sin que se haya atendido el hecho de que es "un hombre que por primera vez es condenado por un Tribunal de la República, además de que las pruebas existentes en el expediente no lo señalan como autor o ejecutor directo del hecho de haberle causado la

muerte a EDWIN HEREIDO (sic) AMAYA" (f. 1647). Concluye el defensor de oficio solicitando que su defendido sea castigado "con una pena menor" (f. 1647).

Conocidos los argumentos de los recurrentes, la Corte pasa a decidir sobre los recursos interpuestos, conforme lo estipula el artículo 2428 del Código Judicial. Es necesario advertir que el examen de la sentencia condenatoria se encuentra limitado a la consideración de la pena recaída sobre el autor de la conducta ilícita, toda vez que la culpabilidad de los sentenciados fue declarada por un jurado de conciencia (cfr. 988-989).

El cuaderno penal da cuenta de que en la tarde del 18 de mayo de 1984, miembros de la extintas Fuerzas de Defensa aprehendieron a Edwin Heredio Amaya Amaya en la finca que pertenece a Faustino Gómez localizada en la comunidad de Breñón, Distrito de Renacimiento, provincia de Chiriquí. Ese mismo día los captores trasladaron al detenido hasta el cuartel militar de Breñón y a la mañana siguiente unidades castrenses lo hicieron subir a un vehículo que tomó dirección a la vía que conduce al poblado de Río Sereno, sin que hasta el momento se haya podido determinar el destino de Amaya Amaya.

a) Situación jurídica de Córdoba Morales:

Para decidir si Córdoba Morales actuó con premeditación en la comisión del delito por el cual fue declarado culpable, la Sala pasa a examinar los elementos probatorios allegados al cuaderno penal. En tal sentido se aprecia la deposición de José Isabel Cedeño, quien afirma que el 18 de mayo de 1984 se presentaron al Cuartel de Breñón "... un grupo de la compañía de los diablos rojos ..." (f. 282), supervisados por Germán González Pittí quien le ordenó que condujera a tres unidades a la finca de Faustino Gómez, ya que en esa finca"... había una persona que había que detener, que era sospechosa ... que había llegado un día antes ..." (f. 282). También es importante destacar la declaración de Raúl Gómez Gallardo, quien manifiesta que las personas que detuvieron a Amaya en la casa de Faustino Gómez "... se fueron directamente donde estaba Edwin y le dijeron `párate , le dieron la media vuelta, le pusieron las esposas y se lo llevaron" (f. 276).

Finalmente, resulta conveniente examinar el testimonio de Manuel Enrique Cedeño Martínez, quien afirma que dos miembros de las antiguas Fuerzas de Defensa lo contrataron para que transportara en su pick-up a "doce unidades de las antiguas Fuerzas de Defensa, ya que todos iban uniformados ..." en dirección a los Planes de Renacimiento (f. 411-412).

Del examen de los anteriores elementos probatorios se desprende la persistencia de la acción criminal por parte de Córdoba Morales, en el sentido de servirse de unidades militares pertenecientes a la compañía "Diablos Rojos", cuyos componentes estaban adiestrados para el combate regular, con el objeto de realizar tareas de inteligencia dirigidas a localizar a Amaya en la provincia de Chiriquí, capturarlo y hacer desaparecer su cuerpo.

Es evidente entonces que los acontecimientos que trajeron como consecuencia la desaparición de Edwin Amaya se ejecutaron a través de un operativo militar planificado, en el que Córdoba Morales, como jefe de la extinguida Quinta Zona militar de la provincia de Chiriquí, tuvo plena intervención.

Otro reclamo formulado por la defensa técnica de Córdoba Morales consiste en que su patrocinado no actuó como instigador en la comisión del delito por el cual fue declarado culpable por el jurado de conciencia. Sobre el particular esta Sala ha dejado sentado que "La acción del instigador es de naturaleza psicológica, sus actos recaen sobre la esfera subjetiva del autor, y por ello su contribución al hecho delictivo es en esencia intelectual. La contribución moral o psíquica del instigador o la acción que ejerce ante el instigado aparece representada de varias formas, a través de un mandato, de una orden, de la coacción o de un consejo... además... entre el instigador y el instigado debe existir una relación personal, en virtud de la cual aquél logra determinar a este último para la comisión del delito" (Sentencia de 10 de junio de 1992. Registro Judicial. Junio de 1992. págs. 17-18).

Ahora bien, el acta de la audiencia pública realizada en este caso permite apreciar la declaración del testigo José Isabel Cedeño, quien manifiesta que en mayo de 1984, Germán González Pittí "estaba de servicio en la tercera compañía Diablos Rojos de la Quinta Zona Militar", la cual tenía su asiento "en la base del cuartel de David" (f. 1026). Agrega este testigo que esa compañía de combate estaba "... subordinada por un jefe que siempre ha habido en la zona militar para ese entonces ..." (f. 1012). Finalmente, el deponente indicó que el reglamento interno de la extinguida institución armada establecía que "cualquier rango superior al de otro es suficiente para darle una orden y el subalterno tener que cumplirla ..." (f. 1012).

Los anteriores elementos de convicción permiten acreditar plenamente la responsabilidad criminal de Córdoba Morales, en el sentido que éste, basándose en la investidura militar que ostentaba con ocasión de ser en aquel entonces jefe de la Quinta Zona Militar, permitió que González Pittí, quien era su subordinado, actuara con libertad para la comisión del hecho punible. No está demás destacar que la contribución intelectual de Córdoba Morales llegó al extremo de negar, en forma escrita, que "el Teniente de apellido PITTY , de facción en ésta zona militar, no ha estado a cargo de algún operativo ... por la región de Breñón" (f. 156).

b) Situación jurídica de Germán González Pittí:

El Tribunal de la causa consideró que la conducta de González Pittí, al igual que la de Córdoba Morales, encuentra adecuación típica en el ordinal 2, artículo 132 del Código Penal. En lo concerniente a la tasación de la pena, según la norma en cita el delito de homicidio con premeditación acarrea privación de libertad que va de 12 a 20 años de prisión. El a-quo, haciendo mérito de los factores que contempla el artículo 56 del Código Penal, le impuso a González Pittí la pena de 18 años de prisión como pena base por el homicidio calificado. Luego de establecida la pena base y del reconocimiento de dos circunstancias agravantes, el a-quo aumentó en una sexta parte la pena base, quedando en 20 años de prisión la pena aplicable a González Pittí (fs. 1610-1611).

Ahora bien, en cuanto al reclamo que formula el defensor de oficio de González Pittí, en el sentido de que el a-quo no valoró la delincuencia primaria de su defendido, la Corte advierte que ese factor ha sido apreciado por el Tribunal de la causa, toda vez que, para fijar la pena dentro de los parámetros señalados para cada delito, debe aplicar el numeral 6 del artículo 56 del Código Penal, que trata sobre "la conducta del agente, anterior, simultánea o posterior al hecho punible".

De otra parte, sostiene el defensor de oficio que la actuación de González Pittí no se adecúa a la figura de "autor o ejecutor directo del hecho de haberle causado la muerte a EDWIN HEREIDO (sic) AMAYA" (f.1647). Para dar respuesta a esta censura, se advierte que José Isabel Cedeño Aguilar manifestó que los captores entregaron a Edwin Heredio Amaya "... Germán González ..." (f. 287) y que Franklin Guillén es conteste en afirmar que en el jeep camuflajeado que tomó la ruta hacia Río Sereno "iba GERMÁN GONZÁLEZ PITTÍ y el detenido EDWIN HEREDIO AMAYA AMAYA" (f. 399). Es evidente, entonces, que existen suficientes elementos de prueba que indican de manera irrefutable que Germán González Pittí fue el autor material de la comisión del hecho punible, toda vez que no sólo fue la persona encargada de aprehender y custodiar a la víctima en el Cuartel de Breñón, sino que también la transportó **personalmente** e hizo desaparecer su cuerpo.

Finalmente, el defensor de oficio solicita que Germán González Pittí sea castigado "con una pena menor". La Corte considera que la pena impuesta por el a-quo es cónsona con el reproche que merece la conducta ilícita que le ha sido atribuida al condenado en perjuicio de Edwin Heredio Amaya quien, como lo afirma Eduardo González del Cid (fs. 63-65), fue una persona trabajadora a quien no se le conoció antecedente que denotara conducta antisocial. Ese reproche adquiere mayor énfasis cuando el propio González Pittí, tal como advierte Córdoba Morales (f. 999), negó a al señora Mélida Amaya de Palacios, hermana de la víctima, que lo hubiere detenido (f. 229). Los actos incriminados, aunados al hecho de que González coaccionara a José Isabel Cedeño (f. 1011) para que alterara sus

declaraciones ante el funcionario de instrucción, lo hacen merecedor de un castigo ejemplar, pues ponen en evidencia la indolencia e indiferencia cuando de la vida de otra persona se trata.

En conclusión, la Corte considera que el tribunal de la causa fijó la pena siguiendo las formalidades que señala la ley, por lo que, en consecuencia, González Pittí no es merecedor de "una pena menor", como lo plantea el defensor de oficio a cargo de su causa.

En vista que los apoderados judiciales de Córdoba Morales y González Pittí no han comprobado sus alegaciones, es del caso confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial.

Por lo antes expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENA administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de 28 de julio de 1995 proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, por la que se impone a Luis Antonio Córdoba Morales y Germán González Pittí la pena de 20 años de prisión, como responsables del delito de homicidio calificado cometido en perjuicio de Edwin Heredio Amaya Amaya.

Devuélvase y Notifíquese.

FABIÁN A. ECHEVERS

(fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

APELACIÓN DE SENTENCIA CONDENATORIA, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A JHONY BONY HERNÁNDEZ LUQUE POR DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE ROSA ELVIRA DE HERNÁNDEZ. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS E. MUÑOZ POPE. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Procedente del Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, ingresa a la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en grado de apelación, el expediente que contiene el proceso seguido a JHONY HERNÁNDEZ LUQUE, por razón del homicidio cometido por este en perjuicio de su madre, la señora ROSA ELVIRA LUQUE DE HERNÁNDEZ.

El Tribunal Superior al resolver en derecho la causa resolvió decretar la condena del procesado e imponerle la pena de veinte (20) años de prisión e igual término de inhabilitación para ejercer funciones públicas, decisión que fue impugnada por el defensor del sancionado.

Sustentado oportunamente el recurso de apelación, corresponde a la Sala examinar los argumentos aducidos por la defensa y que aparecen a fojas 430-433 del expediente.

En lo esencial el recurrente afirma que su patrocinado no debe ser objeto de condena penal, toda vez que es un sujeto inimputable que está sometido a diversas medidas de seguridad de carácter curativo, por lo que no procede la condena que justifica esta actuación de la Sala.

En su escrito de apelación el recurrente de manera categórica y vehemente alude a diversas medidas de seguridad impuestas a su representado por el Juez Primero de Veraguas, Ramo Penal el 12 de julio de 1993 y por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial el 19 de agosto de 1993.

Siendo estos los hechos, se observa que el sancionado fue sometido a medidas de seguridad por razón de su estado mental en razón de su constante

ingestión de sustancias ilícitas, es decir, droga, por lo que se colige que mientras estaba sometido a las medidas de seguridad curativas cometió el hecho delictivo cuya actuación nos ocupa.

Resulta, por tanto, extraño que el sujeto sancionado a medidas de seguridad de naturaleza curativa en virtud de inimputabilidad reconocida por médicos forenses en 1993 sea, en este proceso, iniciado por razón del delito cometido unos meses después pueda ser considerado plenamente imputable y capaz de ser sancionado por la muerte de su madre.

La Sala considera imprescindible antes de resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa determinar la situación mental del sancionado, pues existe duda sobre su situación mental. En tal sentido, se considera necesario ordenar al Instituto de Medicina Legal la práctica de un examen pericial al sentenciado a fin de determinar si ha cesado el estado mental que justificó las medidas de seguridad impuestas por los tribunales antes mencionados y si el sujeto actualmente tiene capacidad para responder por sus actos.

Por todo lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, representada por el suscrito Magistrado Sustanciador, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA el examen psiquiátrico del sentenciado por dos miembros del Instituto de Medicina Legal en los términos antes expresados.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 27 del Código Penal

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

APELACIÓN DE SENTENCIA CONDENATORIA DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A MANUEL ANTONIO NORIEGA MORENO, HERÁCLIDES SUCRE MEDINA Y OTROS POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE MOISÉS GIROLDI VERA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, mediante sentencia calendada 4 de octubre de 1994, condenó a Manuel Antonio Noriega Moreno y Heráclides Sucre Medina a la pena principal de veinte (20) años de prisión y a la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el término de diez (10) años, en calidad de instigador y autor material, respectivamente, del homicidio cometido en perjuicio de Moisés Giroldi Vera. Esta decisión jurisdiccional fue apelada por el procesado Noriega Moreno, por su defensor y por el licenciado Gabriel Fernández, abogado de Sucre Medina. De las apelaciones anunciadas sólo fue sustentada la correspondiente a la defensa técnica de Noriega Moreno.

Durante el acto de notificación de la mencionada resolución judicial, el imputado Noriega Moreno designó como abogado principal al licenciado Rubén Moncada Luna, y como representante sustituto al licenciado José Ramiro Fonseca.

Según el recurrente, la "única relación de participación del Ex-General MANUEL ANTONIO NORIEGA en los acontecimientos del día 3 de octubre de 1989, con relación al occiso MOISÉS GIROLDI VERA (Q. E. P. D.), fue la de haber ordenado su arresto ... no existe prueba alguna de que esa orden de detención fuese cambiada por el propio Ex-General MANUEL ANTONIO NORIEGA, por una contraorden para quitarle la vida al Mayor Giroldi" (fs. 3861-3862).

En la misma línea de pensamiento, afirma que "No basta sugerir que por el hecho de que el Mayor MOISÉS GIROLDI VERA (Q. E. P. D.) tratara de defenestrar al Ex-General NORIEGA, esto por sí pueda deducir, mediante aplicación subjetiva, que existió por parte de éste la instigación ..." (f. 3866). A su juicio, el manuscrito elaborado por el Mayor Giroldi antes de ser ejecutado permite deducir "el verdadero motivo del acallamiento o ejecución para silenciar las conversaciones que posteriormente pudieran realizarse entre NORIEGA y GIROLDI, cuando éste le contara la realidad del complot" (f. 3870). Aunado a lo anterior, sostiene el apelante que en la encuesta penal existen testimonios, como el de Efraín Gonzalo Vernaza, que evidencian que "momentos después ... de la confección de este manuscrito, se procedió a la ejecución de GIROLDI, sin que hubiese habido a esas horas de la madrugada, ninguna conversación con el Ex-General MANUEL ANTONIO NORIEGA" (f. 3871). A su juicio, "Otra ... puede ser la conducta del Ex-General MANUEL ANTONIO NORIEGA en el presente proceso ..." (f. 3873).

Este recurrente censura que se hubiere reconocido contra su representado la premeditación como agravante del delito de homicidio, por considerar que esa decisión "no encaja dentro del concepto de Premeditación Jurídica, porque confunde la acción de pensar el hecho que se va a realizar, con el propio concepto psicológico que de la PREMEDITACIÓN conocemos de las fuentes de Derecho" (f. 3873). En ese mismo sentido, sostiene que "La Premeditación es un concepto psicológico y no un concepto material. Y es indudable que en el presente caso, de haber existido prueba fehaciente de una orden de Matar, se suscite todo lo contrario a la Premeditación, esto es, que el autor material realizó el acto por compulsión y no por impulsión" (f. 3875).

El Representante del Ministerio Público, al contestar el traslado que le fuera corrido del escrito de apelación, considera no viables los argumentos expuestos por el recurrente, destinados a demostrar que su patrocinado no actuó en calidad de instigador, ya que "el veredicto condenatorio de por sí, lo hace sujeto de sanción penal frente a los cargos esbozados en el auto de proceder. En cuanto al reclamo atinente la presencia o no de premeditación consideramos que en la resolución impugnada se hace un análisis detallado de las circunstancias que fundamentan la pena impuesta y el cual se basa en hechos plenamente acreditados en el expediente" (f. 3879), por lo que solicita se confirme la sentencia condenatoria impugnada.

Valga resaltar que la culpabilidad de los sentenciados fue declarada por un tribunal de jurados de conciencia, conforme lo establecido en el artículo 2320 del Código Judicial, decisión que aparece registrada a folio 3840 del proceso.

En este momento procesal corresponde a la Sala decidir, exclusivamente, sobre los puntos de la resolución que han sido objetados por el apelante, conforme lo dispone el artículo 2428 del Código Judicial, a lo que procede.

En relación con el primer reclamo que formula el recurrente, la Corte estima conveniente recordar que en las causas penales que se sustancian con intervención de jurados de conciencia, corresponde a éstos últimos emitir el veredicto sobre la culpabilidad o inocencia del procesado, mientras que corresponde a la justicia ordinaria decidir sobre "la apreciación legal de las pruebas y la determinación de los hechos y circunstancias que de ellas deban deducirse para la imposición de la pena" (Registro Judicial, agosto de 1993, pág. 151-152).

En cuanto al veredicto que emiten los ciudadanos que conforman el "jurado de conciencia", su decisión, bien sea de culpabilidad o de absolución, se deriva de un **convencimiento íntimo**, que prescinde de toda forma de justificación normativa, que se caracteriza por ser definitivo y obligatorio, y, consecuentemente, irrevocable. En tanto que la función de la justicia ordinaria se circunscribe a determinar, según las reglas de la sana crítica o libre apreciación, a) el grado de participación del culpable en la conducta ilícita imputada; b) el tipo penal infringido; c) la posible concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes y d) la sanción penal correspondiente.

De allí que la argumención, en esta oportunidad, de que la "única relación

de participación del Ex-General MANUEL ANTONIO NORIEGA en los acontecimientos del día 3 de octubre de 1989, con relación al occiso MOISÉS GIROLDI VERA (Q. E. P. D.), fue la de haber ordenado su arresto ..." (f. 3861), carece de eficacia jurídica, toda vez que está dirigida a replantear la ya agotada alegación de la defensa técnica sobre la presunta inocencia de Noriega Moreno, consideración que, como se dejó explicado en párrafos precedentes, no puede ser atendida en este momento procesal.

Ahora bien, en cuanto a la participación de Noriega Moreno en el ilícito, en el grado de "instigador", es útil recordar que la instigación es una forma de participación criminal en la que, según lo establece el artículo 41 del Código Penal, se sitúa a los que "intencionalmente determinen a otros a realizar el hecho punible". En las sumarias aparece el testimonio de Luis Antonio Córdoba, quien sostuvo que la orden de trasladar a Giroldi Vera al cuartel de Tinajitas fue "porque posteriormente el GENERAL NORIEGA mandaría a buscar al mayor Giroldi para conversar con él referente a los hechos del 3 de octubre de 1989" (f. 210). Asimismo señaló que "Cuando llegamos al Cuartel Central informé que ya habíamos dejado al mayor GIROLDI en el Cuartel de Tinajita y fue directamente informado al **GENERAL NORIEGA**" (f. 211). Posteriormente, tal como lo manifiesta Ramón Díaz De León: "NORIEGA me manifestó de que íbamos a interrogar al Mayor MOISÉS GIROLDI o sea que esa orden nos la dio a Sucre y a mi ..." (f. 160). Según declara Camilo Vega Rivera, al momento en que Heráclides Sucre y Ramón Díaz de León se apersonaron al Cuartel de Tinajitas "le pregunté que cual era el motivo ... me dijo que el (Sucre) tenía una misión que cumplir con RAMÓN DÍAZ ... a clara se notaba que era una orden del Comandante en Jefe GENERAL MANUEL ANTONIO NORIEGA" (fs. 10 y 12). Este mismo testigo también manifestó que no elaboró el reporte de rigor sobre la ejecución de Giroldi Vera, "ya que comprendía que la ejecucción (sic) era ordenada por EL GENERAL MANUEL ANTONIO NORIEGA ..." (fs. 12-13).

Las pruebas testimoniales en cita, permiten comprobar que el Mayor Giroldi Vera fue trasladado al Cuartel de Tinajitas y recluido en una de sus celdas por orden del General Noriega Moreno, quien además envió al Capitán Sucre Medina junto con el Capitán Díaz De León a las instalaciones del Cuartel, con el pretexto de interrogar al militar golpista. No hay duda, entonces, que Noriega, reinstalado en el control de la situación castrense, decidió todas las acciones a realizar, lo que, como usualmente ocurría, inhibía categóricamente las eventuales iniciativas de sus inferiores en la cadena de mando, sobre todo en asunto tan delicado institucionalmente como era decidir en cuanto a la situación del Mayor Giroldi Vera. Es precisamente a esto a lo que se refiere Vega Rivera (f. 13), cuando manifiesta que se abstuvo de elaborar el reporte sobre la ejecución de Giroldi por entender que la presencia de Sucre Medina en el Cuartel de Tinajitas se debía a que la misión encomendada por el General Noriega era la de ejecutarlo; conducta que, en los términos de nuestra legislación penal, constituye el grado de participación conocido como **instigación**. Por otra parte, se trata de materia ya resuelta en otros momentos procesales de esta causa, lo que conduce a la desestimación del cargo. Como se expresa en la sentencia:

> "La participación de los procesados en el acto delictivo imputado fue, como se indicó antes, establecida o determinada en el auto de proceder o encausatorio proferido por este tribunal y luego confirmado por la Sala Segunda de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia. **Así se especificó que MANUEL ANTONIO NORIEGA MORENO actuó como instigador**, que según el artículo 41 de nuestra excerta penal es la persona que induce o incita, dolosamente, con el fin de que se cometa el hecho punible ..." (f. 3846).

De otra parte, la Sala debe manifestar que la censura atinente a la estimación del a-quo en el sentido de que el delito de homicidio perpetrado por los sentenciados se cometió con premeditación (f.3846), se propone de manera francamente confusa y de difícil comprensión, lo que, sin embargo, no le impide considerar el cargo.

Ya la Sala se ha pronunciado anteriormente en el sentido de que "La premeditación, como elemento constitutivo del delito de homicidio agravado, consiste en el propósito firme, reflexivo y bien meditado tendiente a la

ejecución de la prohibición penal. Tal propósito se caracteriza por mantenerse persistente durante el lapso que sea necesario hasta realizar todos los actos encaminados a procurar el resultado criminal" (Registro Judicial, junio de 1995, pág. 334).

Con el objeto de determinar si el proceder de Noriega Moreno involucró un acto premeditado, es preciso recordar que en autos aparece comprobada una serie de actos ocurridos con anterioridad al hecho de sangre, como lo son: a) el traslado de Giroldi desde la Fuerza Aérea de Tocumen al Cuartel de Tinajitas, b) su confinamiento en una celda aislada, ubicada cerca del área mecánica del Cuartel, y c) el llamado hecho a los militares acantonados en ese Cuartel, con el objeto de evitar cualquier reacción cuando fueran escuchadas las detonaciones, según se desprende de las declaraciones de Clovis Sinisterra Frías: "mi Capitán Vega se dirigio (sic) a la sala de guardia y me dijo que se iban a probar unas armas y que las unidades o tropas no entraran en reacción ... que al escuchar disparos no pensaran que habían problemas" (f. 17) y Efraín Gonzalo Vernaza: "hubo una orden que los soldados de Tinajita no se levantaran que había una práctica de armas" (f. 23).

Estos actos preparatorios de la acción ilícita, realizados durante un prolongado lapso de tiempo, que se extiende desde horas de la tarde del 3 de octubre hasta horas de la madrugada del 4 de octubre de 1989, son elementos que ponen de manifiesto la voluntad anticipada de ejecutar el ilícito y denotan la **persistencia de la resolución criminal**, conducta que a todas luces acredita claramente la ejecución de un acto producto de fía premeditación.

Por la anteriores consideraciones, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley CONFIRMA la sentencia de 4 de octubre de 1994, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, mediante la cual condenó a Manuel Antonio Noriega Moreno y Heráclides Sucre Medina a la pena principal de veinte (20) años de prisión y a la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el término de diez (10) años, como responsables de delito de homicido calificado cometido en perjuicio de Moisés Giroldi Vera.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS

(fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES (fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE

(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JUICIO SEGUIDO A NG CHIU MING CHONG SHUM, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE PAPIAS CASTRO NÚÑEZ. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante sentencia de 27 de enero de 1995, condenó a Ng Chiu Ming Chong Shum a la pena de 6 años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de dos años a partir del cumplimiento de la pena principal, como responsable del delito de homicidio cometido en perjuicio de Papias Castro Núñez. En el acto de notificación de la mencionada resolución, el Fiscal Cuarto Superior del Primer Distrito Judicial anunció recurso de apelación, el que fuera sustentado en tiempo oportuno.

MOTIVOS DE LA APELACIÓN

El Representante del Ministerio Público plantea que el tribunal a-quo fijó la pena base (9 años) sin considerar que "el procesado actuó sin ningún motivo

que justificara al menos parcialmente su actuación, que disparó con un arma de fuego a un individuo desarmado y a pesar de las voces de los vecinos que le manifestaban que el hoy occiso no había efectuado ningún acto en su contra" (f. 251). A su juicio, "debió partirse de la pena máxima de doce (12) años" (f. 251).

Otra censura que formula el agente instructor consiste en que la circunstancia atenuante de escaso grado de escolaridad, reconocida por el juzgador de instancia con fundamento en el ordinal 8 del artículo 66 del Código Penal, "no es aplicable en este caso pues el hecho de no haber tenido determinado grado de escolaridad no justifica que se mate a otra persona ..." (f. 252).

En cumplimiento del principio procesal de la doble instancia, procede la Sala a resolver la alzada, según los términos descritos en el artículo 2428 del Código Judicial, es decir, sólo sobre los puntos de la resolución que han sido objetados por el recurrente.

HISTORIA DEL CASO

Las piezas procesales permiten determinar que en horas de la mañana del 23 de enero de 1988, Papias Castro Núñez recibió varios impactos de bala ocasionados por Ng Chiu Ming Chong Shum. El hecho de sangre ocurrió en el sector de Buenos Aires, corregimiento de Chilibre, Provincia de Panamá. Según las consideraciones médico legales consignadas en el protocolo de necropsia, "Se trata de un hombre joven que sufre cuatro heridas por proyectil de arma de fuego" (f. 45). Concluye el informe forense que la muerte fue producida por "A) CHOQUE HEMORRÁGICO. B) HERIDA POR PROYECTIL DE ARMA DE FUEGO PENETRANTE A TÓRAX" (f. 45).

Cabe destacar que la culpabilidad del sentenciado fue declarada por un tribunal de jurados de conciencia, conforme lo dispone el artículo 2320 del Código Judicial, decisión que aparece a foja 192 del proceso, por lo que el examen de la sentencia debe ceñirse a considerar sólo la pena impuesta.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

El tribunal a-quo determinó que la conducta desplegada por Ng Chiu Ming Chong Shum encuentra adecuación típica en la figura del homicidio simple, descrito en el artículo 131 del Código Penal, tras comprobar que en "la actuación del procesado no ha concurrido ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 132 del mismo cuerpo de leyes, para considerarla como un homicidio calificado, agravado o circunstanciado" (f. 233).

En cuanto a la censura formulada a la pena base impuesta, la Sala advierte que nuestro ordenamiento jurídico le asigna al juzgador **discrecionalidad** para fijar el quántum de la pena base, atendiendo los factores o características de cada hecho punible que señala el artículo 56 del Código Penal. Así, se observa que con fundamento y siguiendo las indicaciones de esta disposición legal, el a-quo hace referencia a que el sentenciado "no tiene antecedentes penales, es imputable, no padecía de trastornos mentales" (f. 233), y fija la pena base en 9 años de prisión, todo ello haciendo uso de las facultades que la ley le otorga, por lo que el reparo hecho a este respecto carece de asidero legal.

De otra parte, en cuanto a la circunstancia atenuante cuyo reconocimiento censura el recurrente, resulta útil destacar que el juzgador de instancia disminuyó en una tercera parte la pena base, por considerar que en favor del encartado concurre la circunstancia de "escaso grado de escolaridad", y sustenta esta medida en lo que dispone el numeral 8 del artículo 66 del Código Penal (f. 233).

Se llama la atención sobre el hecho de que esta disposición legal faculta al juzgador para reconocer, con el valor de atenuante común, "Cualquier otra circunstancia no preestablecida por la ley, que a juicio del tribunal debe ser apreciada por su analogía con las anteriores o por peculiares condiciones del ambiente". Paralelamente a esta amplia discreción reconocida al juzgador, lo cierto es que el concepto de "escaso grado de escolaridad" sí se encuentra **expresamente** incluido en el catálogo de las atenuantes comunes que trae el

artículo 66 del Código Penal, con el nombre de "supina ignorancia del agente", de donde deviene la improcedencia de su aplicación con base en la facultad discrecional que consagra el numeral 8 del artículo 66 del Código Penal.

En cuanto al reconocimiento de esta atenuante, se advierte que, si bien el sentenciado manifestó no haber recibido educación de ninguna índole, en su declaración indagatoria afirmó ser propietario de un establecimiento de abarrotes de nombre "Chicago", ubicado en el sector de Buenos Aires, corregimiento de Chilibre (f. 19), lo que parece indicar que es capaz de manejar un negocio con fines de lucro. Aunado a esto, se observa que poseía permiso para portar de arma de fuego (f. 76), lo que hace suponer conocimientos en el manejo de ese instrumento letal, y capacidad para comprender las graves consecuencias de su utilización.

Por desestimada la aplicación de la circunstancia de atenuación común prevista en el numeral 6 del artículo 66 del Código Penal, debe descartarse la disminución de la tercera parte de la pena que a tal título fue decretada, por lo que queda a imponer una pena líquida de 9 años de prisión.

En razón de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REFORMA la sentencia del 27 de enero de 1995 proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, en el sentido de CONDENAR a Ng Chiu Ming Chong Shum a la pena de nueva (9) años de prisión y la CONFIRMA en todo lo demás.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SENTENCIA CONDENATORIA APELADA DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A JAVIER CÁCERES GUERRERO, SINDICADO POR DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE MANUEL BARRANTE CASTILLO. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS E. MUÑOZ POPE. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PENAL.

VISTOS:

Mediante sentencia del 12 de septiembre de 1995, el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, declaró penalmente responsable a **JAVIER CÁCERES GUERRERO**, por el delito de homicidio en perjuicio de **MANUEL BARRANTE CASTILLO** y lo condenó a la pena principal de catorce(14) años de prisión y a la accesoria de cinco (5) años de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, que comenzaran a contarse una vez cumplida la pena principal (fs. 342-353).

El fallo en comento fue impugnado al momento de notificarse por el procesado y su abogada la licenciada Matilde A. de Apolayo, miembro del Instituto de Defensoría de Oficio, quien dentro del término de ley sustenta el recurso anunciado.

DISCONFORMIDAD DEL APELANTE

La defensa técnica manifiesta que no se le tomó en consideración a su defendido la confesión oportuna y espontánea que dio desde su primera y única declaración indagatoria, en la cual aceptó el ilícito cometido. Indicando que por ello no hubo necesidad de hacer referencias a otras pruebas. Acota no estar de acuerdo con la consideración del tribunal, en el sentido de que la confesión fue vertida con posterioridad, cuando ya existían en su contra, una diversidad de evidencias probatorias que lo incriminaban. Solicita así, se le reconozca esta atenuante (fs. 367-368).

OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

El licenciado Rolando A. Rodríguez Ch., Fiscal Superior del Segundo Distrito Judicial, al dar respuesta al traslado, estima que la sentencia reclamada es correcta y jurídica, que el tribunal realizó un juicioso y acertado análisis de las probanzas recogidas en el curso de la investigación, en la cual consta que la confesión se dio cuando existían evidencias incriminativas contra su persona y por tanto no puede catalogarse como espontánea dicha confesión (fs. 370-371).

FUNDAMENTO DE LA SALA

Como se observa, se centra la inconformidad en el hecho que no se tomó en consideración la atenuante de la confesión, por lo que la Sala limitará su actuación a tal cuestión.

Sobre el particular, el tribunal de primera instancia, señala:

> "Aunque la defensa técnica haya solicitado que se tomen en cuenta las atenuantes de la confesión y el arrepentimiento, consideramos que, si bien el procesado, al rendir su indagatoria acepta el hecho punible imputado, nuestra Jurisprudencia Nacional, ha mantenido un criterio reiterado de que esta confesión no se puede catalogar como espontánea y oportuna, toda vez que la misma fue vertida con posterioridad, cuando ya existían en su contra una diversidad de evidencias probatorias que lo incriminaban y, en cuanto al arrepentimiento, los actos posteriores que demuestren ese sentimiento, deben ir encaminados a atenuar o disminuir las consecuencias que produjo su acción con respecto a la víctima, pero no vemos a lo largo del proceso muestras fehacientes de esa situación."

Señala en su escrito la defensora, que el Personero Municipal no citó antes a Javier Cáceres Guerrero porque sabía que estaba confeso del hecho, dado que a foja 1 se indica que se tuvo conocimiento del ilícito el 21 de junio en la mañana a través de una llamada telefónica que informó del caso e indicó el nombre del procesado.

Se observa que en la diligencia que inicia el sumario, denominada **cabeza del proceso**, contrario a lo afirmado por el apelante, no se dice que el homicida de Manuel Barrante Castillo esté confeso, sino que se sabía el nombre y que la Policía Técnica Judicial había iniciado la captura del mismo.

Ahora bien, consta los testimonios de Jesús González Godoy (fs. 18-20), Mario Muñoz Arosemena (fs. 21-26), Gregorio Sánchez Mendoza (fs. 78-83), Luis Alberto Arcia Rodríguez (fs.102-108), Edicto Barrante Castillo (fs. 50-22), Cresencio Barrante Castillo (fs. 70-75) y Alcibiades Delgado Rodríguez (fs. 164-168) quienes estuvieron presentes cuando el procesado Cáceres Guerrero hirió con arma blanca al hoy occiso y lo vieron huir del lugar.

También esos testimonios ubican la hora del ilícito entre las 10:30 a 11:30 de la noche del 20 de junio de 1992 y según el Acta Policial de Captura la detención de Cáceres Guerrero se dio a las 6:30 de la mañana del día siguiente (f. 10).

La Sala ha reiterado que **"la confesión espontánea y oportuna es reconocida en los casos en que, de no concurrir aquella situación, es imposible llegar a la verdad, por no existir otros medios o formas de esclarecer los hechos"** (Corte Suprema. Sala de lo Penal. Mayo 12 de 1992).

Partiendo de lo anterior, se observa que Cáceres Guerrero cometió un homicidio doloso ante la presencia de varias personas, que luego se dio a la fuga y que no compareció voluntariamente ante las autoridades, quienes logran capturarlo pasadas seis horas de ocurrido el ilícito. Esto demuestra que no se da la atenuante de la confesión.

Por otra parte, si bien al rendir el procesado su declaración indagatoria, admitió que hirió de muerte a Barrante Castillo, no menos cierto es, que exceptúa que lo hizo porque el hoy occiso lo había amenazado momentos antes con un cuchillo. Versión que, como lo señala el tribunal a-quo, no encuentra respaldo en ninguno de los testimonios allegados al proceso.

No puede aceptarse, por tanto, la reclamación de la defensa en esta oportunidad, toda vez que desde que se produjo el homicidio ya se sabía quién era el responsable del mismo, por lo que no puede tener eficacia jurídica una confesión cuando otros medios probatorios permitían identificar, aunque fuera en forma posterior, al responsable de la infracción penal.

PARTE RESOLUTIVA

En consecuencia la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia apelada.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN

SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN A FAVOR DE AGRIPINA HERRERA DE TORRES, SINDICADA POR EL SUPUESTO DELITO DE TENTATIVA DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE CRISTINA NAVARRO CORRALES. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS E. MUÑOZ POPE. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Vía apelación ingresa a esta corporación de Justicia, el cuadernillo de fianza que contiene el auto de fecha 30 de noviembre de 1995, mediante el cual se deniega la solicitud de libertad caucionada a favor de AGRIPINA HERRERA TORRES, sindicada por un delito contra la vida y la integridad personal en perjuicio de Cristina Navarro.

El licenciado Evangelisto Ábrego Villamonte anunció recurso de apelación y al ser concedido en el efecto correspondiente, permite el examen respectivo.

DISCONFORMIDAD DEL APELANTE

El licenciado Abrego Villamonte, solicita se revoque el auto apelado y conceda el beneficio de excarcelación a que tiene derecho la sra. Herrera de Torres. Afirma se ha demostrado en el expediente que la hoy occisa falleció 6 días después del incidente, con lo que se establece que la supuesta conducta delictiva de su defendida se adecúa al delito de lesiones agravadas con resultado muerte, cuya pena es de tres a cinco años; y por mandato de la ley, es permitido concederle el beneficio de excarcelación, aunado al principio de presunción de inocencia. Señala que no existen evidencias que su defendida tenía la intención dolosa de causar el lamentable deceso; que la sindicada acepta que se encontraba anímicamente nerviosa, lo que es corroborado por un testigo. Además, hay que tomar en cuenta el estado incipiente del sumario y que la sindicada padece de hipertensión arterial (fs. 10-11).

HECHOS

El 1° de noviembre de 1995, en horas de la noche, en la cantina Carta

Vieja, ubicada en la avenida Las Américas, del distrito de la Chorrera, propiedad de Mario Sánchez Núñez; se suscitó una discusión entre la esposa de éste, sra. Agripina Herrera de Torres y la sra. Cristina Navarro, resultando herida esta última, cuando la primera tomó un arma de fuego y le disparó. Seis días después fallece la sra. Navarro en el hospital Santo Tomás a consecuencia de las lesiones sufridas por disparo de arma de fuego.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

El tribunal de primera instancia consideró que se está "ante un acto delictivo que reviste las características de un delito de homicidio doloso, aunque no se ha incorporado el informe de necropsia, toda vez que se ha causado la muerte de una persona en forma violenta, de acuerdo con las declaraciones existentes en el expediente".

Observa la Sala, que consta el certificado de defunción N° 01031 emitido por la Dirección de Estadísticas y Censo de la Contraloría General de la República, en el cual se determina que la causa de muerte de Cristina Navarro Corrales se produjo por **"a. Bronconeumonía B. Herida perforante por proyectil de arma de fuego en el cuello"**.

El apelante se refiere a un golpe que al caer recibió la hoy occisa (f. 10) el cual también es mencionado por el hermano de ésta, Isaac Navarro Corrales quien afirma que a su hermana le dispararon en el cuello **"y al mismo tiempo se cayó y se golpeó la cabeza y que cuyo golpe la tiene delicada o en estado de gravedad "** (f. 34).

A pesar de las aseveraciones indicadas, el certificado en mención no hace alusión a trauma cráneo-encefálico alguno.

Luego entonces, al no contar el expediente con el examen de necropsia, que permita establecer si la herida **con arma de fuego** inferida por Agripina Herrera de Torres a la anatomía de la hoy occisa, por sí sola es mortal; y no se cuente con los resultados del reconocimiento médico-psiquiátrico ordenado mediante oficio N° 2559 del 17 de noviembre de 1995 (fs. 60-61), que determine el estado emocional en que se encontraba la imputada al momento del hecho investigado, lo prudente, es confirmar la decisión del a-quo. Lo que no impide que pueda variar la situación de la imputada **-de allegarse a su favor-** las pruebas aludidas, pues estamos ante resoluciones judiciales que no hacen tránsito a cosa juzgada.

PARTE RESOLUTIVA

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución apelada.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN A FAVOR DE GILBERTO ENRIQUE AROSEMENA RUIZ, POR EL SUPUESTO DELITO DE LESIONES PERSONALES Y TENTATIVA DE HOMICIDIO EN DETRIMENTO DE EDILTA ACEVEDO DE AROSEMENA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El día 22 de enero de 1996, mientras se surtía el trámite correspondiente del recurso de apelación contra la Resolución de 13 de diciembre de 1995, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, bajo la ponencia del Magistrado JOAQUÍN ORTEGA, mediante la cual se niega la solicitud de fianza de excarcelación a favor de **GILBERTO AROSEMENA**, el licenciado **Silvio Guerra Morales**, de la firma forense **GUERRA Y GUERRA ABOGADOS**, presentó ante la Secretaría de esta Sala escrito de desistimiento de su acción.

El recurrente basa su intención de desistir en lo siguiente:

> **"PRIMERO:** Con fecha de 13 de noviembre de 1995 el Segundo Tribunal Superior de Justicia, bajo la ponencia del Magistrado **ANDRÉS ALMENDRAL**, resolvió concederle el beneficio de fianza de excarcelaria a **GILBERTO AROSEMENA** y se fijó el monto de la misma en la suma de CINCO MIL CON 00/100 (B/.5,000.00). Esta resolución fue firmada por la Magistrada ELVIA BATISTA, en la Sala de acuerdo.
>
> **SEGUNDO:** Ignorando la señora CARMEN VEGA, hermana del encartado, la existencia de una solicitud de fianza anterior, solicitó del Segundo Tribunal Superior de Justicia fianza excarcelaria en favor de su hermano **GILBERTO AROSEMENA**, misma que fuera resuelta mediante auto de 13 de diciembre de 1995, negando dicho beneficio al procesado.".

En virtud de lo anterior, y considerando que hubo además de una decisión definitiva del Tribunal de la causa, un desistimiento de la apelación contra la última Resolución, "dada la colisión o antinomia que se produce entre las resoluciones proferidas por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá", la Sala nada tiene que objetar y, en consecuencia, procede admitir el desistimiento; y se ordena el respectivo archivo del expediente.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el desistimiento presentado por el licenciado Silvio Guerra Morales, de la firma forense GUERRA Y GUERRA ABOGADOS dentro del recurso de apelación contra la Resolución de 13 de diciembre de 1995, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, mediante la cual se niega la solicitud de fianza de excarcelación a favor de GILBERTO AROSEMENA; y en razón de esto, ORDENA el CESE del procedimiento y DISPONE el ARCHIVO del expediente.

Notifíquese, Cúmplase y Archívese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN DENTRO DEL PROCESO DE EXTRADICIÓN QUE SE LE SIGUE AL SEÑOR FERNANDO HERNÁNDEZ ARIAS. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Ante la Sala Segunda Penal de la Corte Suprema de Justicia, la firma forense Villalaz y Asociados, ha elevado solicitud de fianza de excarcelación a favor de su mandante **FERNANDO HERNÁNDEZ ARIAS**, detenido por requerimiento del gobierno de los Estados Unidos de Norte América por incurrencia en actos de defraudación fiscal ejecutados en aquel país, sujeto actualmente de extradición solicitada al gobierno panameño lo que dio lugar a que su poderdante promoviera incidente de objeciones contra tal medida.

Un estudio y análisis del expediente levantado en el país en donde se desempeñaba el imputado, deja en claro que su actividad estaba enmarcada en actividades fiscales, tales como no pagar los impuestos por introducción de mercancías u ocultarlas; o, hacer uso de mecanismos que le permitían no cancelarlos.

Los ilícitos cometidos son coincidentes con los que señala de manera taxativa el Titulo Vll, de las Infracciones y Penas, Capítulo I de las Penas, del Código Fiscal referentes a defraudaciones fiscales.

El artículo 2516 del Código Judicial, en torno a la extradición indica, que, "la persona que haya sido detenida en virtud de una solicitud de extradición podrá prestar fianza de excarcelación mientras aquella se resuelva, en los casos en que la ley panameña conceda ese derecho", enunciado que es de incuestionable cumplimiento.

La Sala Penal de esta Corporación, por lo tanto, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, fija en la suma de cinco mil balboas (B/.5,000.00) la fianza a consignarse a favor del ciudadano Fernando Hernández Arias para obtener su libertad condicional.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN A FAVOR DE RONALDO ALEXIS GUEVARA TORRES, SINDICADO POR EL DELITO DE CONCUSIÓN. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado Julio Lu Osorio presentó, ante la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, solicitud para que se le reconozca a Ronaldo Alexis Guevara Torres el beneficio de libertad caucionada. El detenido se encuentra sindicado del delito de extorsión cometido en perjuicio de Saubehi Matair.

Plantea el abogado defensor que, a raíz de la denuncia criminal presentada por Saubehi Matair el día 20 de diciembre de 1995, ante la Policía Técnica Judicial de la provincia de Herrera, se montó un operativo "y mi cliente es citado por el señor **SAUBEHI MATAIR (a) MANUEL**, y cuando mi representado se dirigía a su automóvil, lo llama y le dice que deseaba hablar con él y se sube al vehículo y deja dentro de éste un sobre con una cantidad de dinero y se baja de manera repentina del auto, cuando inmediatamente agentes ... aprehenden a mi apoderado" (f. 2).

Sostiene el licenciado Osorio que "Existe el testimonio del denunciante que mi cliente jamás le pidió dinero ... acepta que el sobre contentivo del dinero, no fue recibido por el sindicado, sino dejado dentro del automóvil de éste ... lo que ratifica que la denuncia se hizo en base a suposiciones subjetivas del denunciante ..." (f. 3). Finalmente, el peticionario indica que en la encuesta penal no existen pruebas "respecto a 'INTIMIDACIÓN O AMENAZAS GRAVES', que se enmarcan en el artículo 187 del Código penal, para calificar la conducta como **EXTORSIÓN** ..." (f. 3).

El examen de la actuación demuestra que la solicitud que se examina fue presentada a la Secretaría de la Sala Penal el 28 de diciembre de 1995 (f. 4 vuelta), cuando el sindicado fungía como Jefe del Departamento de Fiscalizaciones Aduaneras a nivel de las zonas centrales y Azuero (f. 141-142). Sin embargo, a

las sumarias fue incorporado posteriormente el Decreto de Personal número 273, de 29 de diciembre de 1995, suscrito por el Presidente de la República, mediante el cual se "declara insubsistente el nombramiento de **ALEXIS RONALDO GUEVARA TORRES**, Inspector de Aduanas I (Funciones de Jefe del DITA, Zonas Central y Azuero) en la Administración Regional de Aduanas-Veraguas" (f. 143), lo que indica que Guevara Torres ha perdido la calidad funcional que ostentaba, lo que acarrea la pérdida de competencia de la Sala Penal para resolver la solicitud formulada, por lo que el conocimiento debe declinarse en favor de la autoridad a quien corresponda. Como quiera que el hecho punible imputado es el de extorsión, que acarrea una pena mayor de dos años de prisión, corresponde su conocimiento a la autoridad jurisdiccional de la esfera circuital.

En razón de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLINA el conocimiento de la solicitud de fianza de excarcelación propuesta por el licenciado Julio Lu Osorio, ante el Juzgado de Circuito de Herrera, Ramo Penal.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES (fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN A FAVOR DE LUIS ANTONIO NAYA VARGAS, SINDICADO POR EL SUPUESTO DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE ALEJANDRO VÁSQUEZ. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, TREINTA (30) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Procedente del Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, ingresó a la Sala Penal de la Corte Suprema, en grado de apelación, solicitud de fianza excarcelaria interpuesta por el Licdo. Alvaro Muñoz Fuentes en representación de **LUIS ANTONIO NAYA VARGAS**, sindicado por el supuesto delito de homicidio en perjuicio de **ALEJANDRO VÁSQUEZ**.

Se desprende de autos que el 28 de octubre de 1995, aproximadamente a las 5:00 p. m. se encontraban los señores **ALEJANDRO VÁSQUEZ** (occiso), **PAPI DE GRACIA VÁSQUEZ** (hermano del primero), **RAÚL MONTES VARGAS** y el sindicado **NAYA VARGAS** en casa de éste, viendo televisión.

Manifestó el sindicado que trató de matar un gato que le había comido dos gallinas y una perica, pero que el revólver calibre 22 que tenía en la mano se desvió, hiriendo mortalmente al hoy finado -que estaba aproximadamente a tres (3) metros de donde estaba el gato-, siendo que no había enemistad ni hubo discusión entre ellos, por lo que el hecho -según **NAYA VARGAS**- fue un accidente.

En el expediente consta que después del disparo, el sumariado fue a abrazar a **PAPI DE GRACIA**, hermano del desaparecido, y que luego fue a las instalaciones de PETROTERMINALES con el fin de conseguir transporte para trasladar a **VÁSQUEZ** al hospital.

El Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial negó la solicitud de fianza mediante el auto del 30 de noviembre de 1995, por las siguientes razones:

Hubo contradicción en la declaración del procesado (fs. 94-99), en el sentido de que si el gato estaba fuera de la casa y **VÁSQUEZ** se encontraba adentro sentado en una silla, no es posible lo manifestado por el testigo **RAÚL MONTES VARGAS** en lo que se refiere a su hno. **LUIS A. NAYA V.**, mientras que el hoy occiso estaba fuera de la residencia al momento de la comisión del hecho de sangre

(contrario a lo dicho por **NAYA**).

Que el testigo **ONÉSIMO ENRIQUE OROZCO SERRACÍN** dijo estar dentro de la casa viendo la televisión, cuando oyó el tiro, y nunca manifestó la existencia del gato.

PAPI DE GRACIA VÁSQUEZ señaló que el sumariado sacó un revólver del cuarto y le disparó a su hermano sin que éste le dijera nada, agregando que es falso que **NAYA** tenía la intención de matar a un gato.

Expresó el a-quo que se acreditó la existencia material del delito de homicidio contra **ALEJANDRO VÁSQUEZ** con la diligencia de levantamiento de cadáver y el protocolo de necropsia.

No está acreditado en el expediente que el sindicado tuviese la intención de dispararle a un gato, sino está establecida la existencia del animal, y que los testigos coinciden en señalar que el hoy desaparecido estaba dentro de la casa y no afuera; por lo tanto, se estableció que la muerte de **ALEJANDRO VÁSQUEZ** la produjo un disparo del arma disparada por **LUIS ANTONIO NAYA VARGAS**, siendo que las probanzas procesales permiten la calificación del hecho punible como homicidio doloso.

Luego de estudiar detenidamente el expediente, considera esta Corporación de Justicia que, efectivamente, está confirmado que el deceso de **ALEJANDRO VÁSQUEZ** fue producido por una bala disparada por el revólver accionado por **LUIS ANTONIO NAYA VARGAS**, ya que varios testigos y el mismo sindicado lo confirman, así como el protocolo de necropsia, que señala que la muerte fue producida por un proyectil disparado a larga distancia (foja 118 del expediente).

El punto importante en este caso estriba en el elemento doloso que pudiera caber a dicha acción.

Para ello, las declaraciones más importantes se reducen a las del sindicado y los tres testigos que se encontraban viendo televisión con ambos.

En este sentido, **NAYA VARGAS** reconoció que hizo el disparo que ultimó a **VÁSQUEZ**, pero sin intención; manifestó también -en la ampliación de su declaración jurada- (f. 7), que era la primera vez que disparaba un arma de fuego, y que no tiene permiso para portar armas.

El disparo fue hecho a una distancia aproximada de 2 ó 3 mts., versión que coincide con la de los demás testigos -incluyendo al hermano del ofendido-, pese a que lo manifestado en el protocolo de necropsia, es que el disparo fue hecho a larga distancia. (F. 11).

Si tomamos en cuenta el protocolo de necropsia, vemos que es más factible que el sindicado se haya equivocado disparando a larga, que a corta distancia, razón por la que le parece peculiar a esta Corporación de Justicia que estando a una distancia corta -2 ó 3 mts.- el sumariado haya fallado de tal manera que le disparara a **VÁSQUEZ** en la frente -arriba del ojo-, ultimándolo.

El testigo **ONÉSIMO OROZCO SERRACÍN**, manifestó en su declaración jurada (f. 22) que el disparo fue sin intención, señalando que el mismo se produjo en la sala de la casa del sumariado, mientras él veía televisión.

Sin embargo, en su ampliación (f. 87) afirmó que era falso que **JOSÉ NAYA** quisiera matar un gato, ya que no había ninguno, **SERRACÍN** manifestó en su primera declaración que aunque estaba con los demás, él estaba concentrado mirando el programa de televisión, siendo sorprendido por el disparo; por ello, considera la Sala que no es confiable el testimonio, porque **SERRACÍN** asume una postura subjetiva del hecho, en el sentido de que -a su parecer- no hubo motivación para la ejecución del mismo.

El decir, no vio ni el momento anterior a la ejecución del disparo, ni el

ilícito en sí; por tanto, el testimonio no tiene el valor probatorio requerido para justificar un sobreseimiento.

Sobre el particular, **RAÚL MONTES VARGAS** -hermano del sumariado- sostuvo (f. 42 del infolio) que escuchó cuando **ALEJANDRO VÁSQUEZ** le preguntó al sindicado si había matado al gato; a lo que éste le contestó que no, y por ello le sugirió que lo hiciera, saliendo ambos de la casa. Además, dijo que el primero iba adelante de **NAYA VARGAS**, y cuando tenía al gato encañonado, alzo la mano y se le disparó el arma.

Sostiene -f. 44- que el reo estaba saliendo de la casa -caminando- "y de allí el arma se le disparó,"; dijo que el gato estaba en un cerco de animales, era silvestre, aclarando que estaba en un potrero donde se tiene ganado.

Ello contrasta con la declaraciones de **OROZCO SERRACÍN** y de **PAPI DE GRACIA VÁSQUEZ**, quienes manifestaron que el disparo se produjo en la sala de la casa.

NAYA VARGAS dijo en su declaración indagatoria (f. 94) que **VÁSQUEZ** le preguntó por qué no mataba al gato, respondiéndole -él- que eso debía hacer; entonces el gato llegó afuera de la casa "... y ellos estaban adentro ...".

De los elementos probatorios expuestos, se observa que las declaraciones del inculpado y su hermano -**RAÚL MONTES VARGAS**- son formuladas en un mismo sentido, porque ambos sostienen que el hecho fue accidental, así como la existencia del gato; pero -como ya se mencionó- contrastan con las de **OROZCO SERRACÍN** y **PAPI DE GRACIA VÁSQUEZ** en cuanto al lugar.

El vínculo familiar que los une crea la duda de la veracidad de ésta declaración en lo que respecta a la existencia del gato.

Pero observa esta Superioridad que **DE GRACIA VÁSQUEZ** manifestó que el ofensor le dijo al hoy occiso que quería "pegarle un trompón y dejarlo allí mismo", al tiempo que declaró que entre ambos no hubo discusión.

Sería curioso que el sindicado le hablara a la víctima en términos amenazantes sin que hubiera discusión entre ellos, situación que deja en entredicho la veracidad de esa declaración, pero hay que recordar que **ONÉSIMO OROZCO SERRACÍN** estaba viendo televisión, y por ello no pudo darse cuenta si hubo o no, discusión entre los involucrados.

Además, admite que entre **LUIS NAYA** y su hermano no había rivalidad y que aquél, después de realizar el disparo, lo abrazó y lloró con él, actitud que rechazó.

Esa actitud del inculpado luego de dispararle a **VÁSQUEZ**, fue corroborada por los otros testigos que se encontraban con ellos; esa reacción puede revelar el estupor causado por la acción propia del sindicado, no buscada; pero también puede significar un arrepentimiento inmediato del sujeto activo del delito, luego de observar el resultado de su acción.

En resumen, descartando los sentimientos de los testigos por el parentesco que los unía a los sujetos del ilícito, las coincidencias en la falta de intención **LUIS NAYA** de causar la muerte de **ALEJANDRO VÁSQUEZ** no tienen el mérito suficiente para originar el criterio de esta Corporación de Justicia que hay justificación para concederle derecho a fianza al sindicado.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley; CONFIRMA el auto del 11 de diciembre de 1995 emitido por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS

(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA TERCERA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

ENERO 1996

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JORGE ENRIQUE SÁNCHEZ, EN REPRESENTACIÓN DE LUIS ALBERTO MITIL A., PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO DE PERSONAL N° 57 DE 14 DE MARZO DE 1995, DICTADO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TRES (3) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA.

VISTOS:

El licenciado Jorge Enrique Sánchez, actuando en nombre y representación de LUIS ALBERTO MITIL, promovió Recurso de Apelación contra el auto de 3 de agosto de 1995, mediante el cual el Magistrado Sustanciador no admitió la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto de Personal N° 57 de 14 de marzo de 1995, emitido por el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Educación, y para que se haga otras declaraciones.

Una vez anunciada la apelación el Sustanciador la concedió mediante Providencia de 14 de noviembre de 1995, y oportunamente se concedió al recurrente el término de 3 días para que sustentara la alzada y a la contraparte 3 días adicionales para las objeciones de rigor.

Vencidos los términos señalados, según el informe secretarial fechado el 20 de diciembre de 1995 que se lee a fojas 20, ninguna de las partes compareció a hacer valer sus derechos por lo que, al tenor de lo dispuesto en el artículo 1122 del Código Judicial, debe declararse desierto el recurso de apelación promovido.

Por las anteriores consideraciones, el resto de los Magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARAN DESIERTO el recurso de apelación promovido por el licenciado Jorge Enrique Sánchez, contra el auto de 3 de agosto de 1995, mediante el cual el Magistrado Sustanciador no admitió la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, promovida por el apelante para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto de Personal N° 57 de 14 de marzo de 1995, emitido por el Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Educación, y para que se haga otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS

JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA MORGAN Y MORGAN, EN REPRESENTACIÓN DE TECNOLOGÍA APLICADA, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN N° GG-25-95 DE 16 DE AGOSTO DE 1995, EMITIDA POR LA GERENCIA GENERAL DEL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, CINCO (5) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

Dentro de la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción

presentada por la firma forense Morgan y Morgan actuando en representación de la sociedad **TECNOLOGÍA APLICADA, S. A. (TECNASA, S. A.)** ha solicitado previa admisión del presente libelo, y conforme lo establecido en el artículo 73 de la Ley 135 de 1943, la suspensión provisional de los efectos de la resolución N° G. G. 25-95 -contentiva de la resolución administrativa del contrato N° 90021-10-258 de 29 de junio de 1994-, emitida por el Banco Nacional de Panamá, con fundamento en el artículo 73 de la Ley 135 de 1943.

CONSIDERACIONES PREVIAS

Para mayor comprensión de la contienda que se surte, en la cual se incorporó la solicitud preliminar de la suspensión del acto impugnado antes mencionada, estima la Corte que es conveniente efectuar un repaso sucinto de los hechos que dieron origen a la litis, con finalidad de concluir prima facie la procedencia de la petición del demandante y el fundamento que la sustente ante este Tribunal colegiado.

Se debe recordar que únicamente se admite la suspensión del acto administrativo impugnado, en aquellos casos en los cuales el actor comprueba ser titular que un motivo que configure derecho y justa causa que por su inminencia y urgente protección demuestre los daños irreparables, notoriamente graves, con los cuales se vería afectado el petente sino se accede a la medida cautelar solicitada, o en su defecto, señalar el quebrantamiento ostensible del ordenamiento jurídico, cuya causa generatriz sea precisamente el acto impetrado de ilegal, lo cual permita colegir que el actor es poseedor de un Fumus Boni Iuris o apariencia prima facie de buen derecho. No obstante, dichos requisitos inherentes a la admisión, de la respectiva medida cautelar deben ser debidamente acreditados al promoverse esta petición de suspensión, o la misma no será procedente. En otras palabras, se requiere prueba preconstituída que respalde la petición preliminar, ya que no es posible practicar pruebas para constatar lo que se alega.

Ahora bien, primeramente se observa que la solicitud de previo y especial pronunciamiento tiene su génesis en el concurso de precio N° 01-94 de 20 de abril de 1994, efectuado por el Banco Nacional de Panamá para el suministro e instalación de una unidad Data Cartridge que grabara en 36 pistas. En dicho concurso se manifestó que el Banco Nacional de Panamá poseía una arquitectura 370, CPU 43 XX y un sistema operativo IBM MVS-XA, por lo cual la oferta de los proponentes debía ser compatible; y por consiguiente, funcionar y comunicarse con este equipo. Los participantes de dicho concurso fueron las Empresas **TECNASA, S. A., MANAGEMENT QUALITY SERVICES, S. A.** y la **G. B. M. DE PANAMÁ, S. A.**; adjudicándose provisional y definitivamente dicho acto a la sociedad **TECNASA, S. A. (TECNOLOGÍA APLICADA, S. A.)** por ser aparentemente esta propuesta la más ventajosa para los intereses del Banco Nacional de Panamá.

Posteriormente la adjudicación definitiva en comento se concretizó con la firma del contrato N° 90021-10-258 de 29 de junio de 1994 entre el recurrente y la entidad demandada por un monto de B/.80,220.00 cuya finalidad de modernizar y expandir la captación y almacenamiento del procesamiento de datos del sistema computarizado del Banco.

Ahora bien, los equipos ofertados por **TECNASA, S. A.** y aceptados por la entidad autónoma, si bien de acuerdo a los panfletos publicitarios del impugnante son compatibles con la configuración genérica descrita del sistema imperante en el ente bancario, (foja 1), éstos no pudieron comunicarse o conectarse entre sí, y por ende, no funcionaron con los equipos ya existentes. A estos efectos, esgrime el demandante que el motivo básico que provocó esta situación fue la falta de actualización del sistema de datos del Banco Nacional de Panamá, cuya condición específica se desconocía hasta el momento de su instalación; pero sin embargo, la institución demandada alega que la causa a la cual debe atribuirse esta circunstancia de inoperatividad, es al hecho que la recurrente debió informar que el equipo de **TECNASA, S. A.** (memorex Telex 5450E de 36 pistas) era compatible con el sistema del Banco Nacional pero siempre y cuando el mismo tuviese un cierto grado de actualización.

Lo cierto es que los motivos que llevaron a la entidad demandada a resolver administrativamente el contrato N° 90021-10-258 de 29 de junio de 1994, al concluir que indudablemente **TECNASA, S. A.** había incumplido con las contraprestaciones adquiridas mediante la obligación formal prenombrada fueron los siguientes:

1. La falta de comunicación de ambos sistemas, (el ofertado y el existente);

2. la cotización de la empresa G. B. M. de Panamá, para la actualización del nivel de ingeniería del sistema existente en el Banco Nacional de Panamá que ascendió a la suma total de B/.129,601.00; y,

3. La certeza de que el equipo existente en el Banco Nacional de Panamá sólo podía trabajar por su grado de actualización con equipos de 18 pistas (no solicitado) y no con la unidad concursada Data Cartridge de 36 pistas.

LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN

Como se ha expresado en párrafos superiores el requirente solicita la suspensión provisional de los efectos de la resolución administrativa del Contrato N° 90021-10-258 de 29 de junio de 1994, efectuada por el Banco Nacional de Panamá mediante los actos impugnados G. G. 25-95 de 16 de agosto de 1995, G. G. 31-95 de 21 de septiembre de 1995 y N° 09-95-JD de 14 de noviembre de 1995 en perjuicio de la sociedad **TECNASA, S. A. (TECNOLOGÍA APLICADA, S. A.)**, que a su vez acarrea como consecuencia ineludible, la inhabilitación como postor en las contrataciones del Estado por 3 meses, de acuerdo en lo estatuído en artículo 20 literal f del Código Fiscal.

La petición de previo y especial pronunciamiento se fundamenta en los perjuicios económicos que sufriría puesto que alega haber participado en diversas licitaciones y concursos de precios con instituciones del Estado tales como la Corte Suprema de Justicia, la Caja de Seguro Social, el IRHE y el Banco Nacional de Panamá entre las cuales indica haber sido beneficiado con 2 adjudicaciones provisionales y una contratación. Frente a lo expuesto **TECNASA, S. A.** incorpora con el libelo 2 resoluciones que evidencia su participación en dos de los actos públicos prenombrados, solicitando además que esta Corporación a sus costas obtenga las otras debidamente autenticadas de las instituciones supracitadas. Igualmente señala que habrá 5 licitaciones en los cuales no podrá participar, así como que su inhabilitación como postor del Estado les afectará para la renovación del contrato del sistema 888 con el Intel por la suma mensual de B/.7,752.15 y la renovación del contrato de mantenimiento por la suma mensual de B/.3,532.00 que vence en el presente diciembre. Seguidamente expone que tiene pendiente la renovación de los contratos de mantenimiento N° 61-MOP y 44-MOP con el Instituto Tomy Guardia (MOP) por la suma de B/.938.70 y B/.537.00 mensual respectivamente que vencen en enero de 1996 y diciembre del presente año.

CONCLUSIONES DE ESTA SUPERIORIDAD

Una vez examinado el expediente subjúdice, analizando prima facie las constancias probatorias y procesales que reposan en el negocio que nos ocupa, este Tribunal Colegiado considera que no se han verificado los elementos necesarios para acceder a la solicitud de suspensión ya que esta petición requiere el quebrantamiento ostensible del ordenamiento jurídico o perjuicios notoriamente graves de urgente amparo, para que no se produzcan irreparablemente los daños alegados.

Ello es así, dado que si bien en principio se observa la falta de diligencia del Banco Nacional de Panamá en la elaboración del pliego de cargos para la celebración del concurso de precio en mención, al no especificar los modelos que necesitaba para expedir su sistema operativo y de datos, no es menos cierto que, conforme ha quedado plasmado en las resoluciones G. G. 25-95 de 16 de agosto de 1995 (foja 2); N° G. G. 31-95 de 21 de septiembre de 1995 (foja 7 y 8) y, N° 09-95 JD de 14 de noviembre de 1995 (foja 16), suministrados a la Corte por el propio petente, en las cuales se transcriben las obligaciones del recurrente con respecto al concurso de precios en controversia, establecidas en

el pliego de cargos (cual es ley entre las partes), que la recurrente tenía la responsabilidad de suministrar los equipos contratados y de lograr la conexión y comunicación eficiente entre los equipos nuevos y existentes, una vez obtenida la información necesaria y de efectuar las inspecciones indispensables para **evitar** los **riesgos** y contingencias que asumía el demandante en el pliego de cargos que pudieran afectar la cristalización eficaz de su propuesta, sin problemas sobrevinientes e insalvables.

La responsabilidad a la cual hacemos referencia, consistente en asegurar una conexión y comunicación eficiente de los nuevos equipos y los ya existentes, se desprende del pliego de cargos, capítulo I, condiciones generales, punto 5, que establece lo siguiente:

> ... "que es responsabilidad de todo proponente, antes de someter su propuesta, el haber obtenido la información necesaria y suficiente en cuanto a la forma y naturaleza de este acto, y en general, haber obtenido la información necesaria, local o de otro origen en cuanto a los riesgos, contingencias u otras circunstancias que pudiesen en cualquier forma influir o afectar su propuesta, y la sola presentación de la propuesta es señal de que se ha realizado la inspección y examinado toda la documentación requerida para este acto público."

En consecuencia, en esta etapa incipiente del proceso no se percata la Corte prima facie, que el ordenamiento jurídico haya sido conculcado; sin embargo, determinar esta circunstancia requerirá un estudio profundo al momento de resolverse el fondo de la controversia planteada. Aunado a lo expresado, hay que destacar que, de los actos públicos en los cuales la empresa no podrá participar como consecuencia de su inhabilitación como postor del Estado, no se derivan derechos concretos conculcados, ya que esta inhabilitación es una sanción que se impone por 3 meses a quien se le haya resuelto un contrato administrativo, y por el período de 6 meses a quien haya incurrido en reincidencia. Luego entonces, no se puede inferir perjuicios económicos reales ya que aún en el caso que pudieran participar como oferentes, su virtual beneficio constituye una mera espectativa que no configura derecho reclamable, a tenor del artículo 4 del Código Civil. Por otro lado, dicha inhabilitación opera para participar como postor del Estado en aquellos actos públicos que vayan a iniciarse y no en aquellos que estén en marcha, ya que en dichos casos es válido el certificado de postor presentado originalmente con la oferta.

En este orden de ideas, se concluye que el actor no ha comprobado la urgencia notoria de su petición ya que mas bien la inhabilitación a la cual está sujeta la empresa **TECNASA, S. A.** responde a una sanción por el supuesto incumplimiento en el cual incurrió la empresa con el Banco Nacional de Panamá en cuanto a la instalación de los equipos ofertados y, será **TECNASA, S. A.** quien durante el transcurso del presente proceso deberá comprobar lo contrario.

Frente a lo expuesto se colige que la Corte no cuenta con los suficientes elementos de juicio que ameriten la suspensión del acto administrativo impugnado y por consiguiente procede el rechazo de la solicitud del demandante.

En mérito de lo expuesto, los Magistrados que integran la Sala Tercera, Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, con fundamento en la facultad discrecional conferida por el artículo 135 de 1943 NO SUSPENDEN la resolución administrativa del contrato N° 90021-10-258 de 29 de junio de 1994, hecha por el Banco Nacional de Panamá mediante los actos impugnados en este proceso.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA GALINDO, ARIAS Y LÓPEZ, EN REPRESENTACIÓN DE ROYAL REGATTA, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 87-95 DE 31 DE JULIO DE 1995, EMITIDA POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, CINCO (5) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense **Galindo**, **Arias y López**, en representación de **ROYAL REGATTA**, **S. A.** ha presentado escrito de desistimiento de la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción que interpusiera el día 24 de noviembre de 1995, contra la Resolución N° 87-95 de 31 de julio de 1995, emitida por el Ministerio de Vivienda.

El recurrente mediante escrito que corre a foja 17, manifestó básicamente lo siguiente:

> "... respetuosamente comparecemos ante Usted, con fundamento en el artículo 1081 del Código Judicial, a fin de desistir, como en efecto desistimos de la pretensión dentro demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción que presentamos contra la Resolución 87-95 de 31 de julio de 1995, por la cual se ordenó la ocupación del inmueble N° 3-31 ubicado en Avenida A y Calle 4a., Corregimiento de San Felipe, es decir, la Finca N° 3,634, inscrita en el Registro Público al folio 428, tomo 71 de la Sección de Propiedad, Provincia de Panamá, de propiedad de ROYAL REGATTA, S. A., proferida por el Dr. Francisco Sánchez Cárdenas, Ministro de Vivienda y el Vice-Ministro Rogelio E. Paredes Robles, en vista de que el Ministerio de Vivienda desocupó el inmueble en cuestión, razón por la cual solicitamos el archivo del expediente."

Dado que el artículo 66 de la ley 135 de 1943, establece que "en cualquier estado del juicio es admisible por declaración expresa, el desistimiento del recurso contencioso administrativo", y el artículo 1073 del Código Judicial recoge el mismo principio, es perfectamente viable el presente desistimiento.

En consecuencia, la Sala Tercera, Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el desistimiento presentado por la firma Galindo, Arias y López en representación de ROYAL REGATTA, S. A. y ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA TROYANO, VISUETTI Y VILLALAZ, EN REPRESENTACIÓN DE ISAAC DANIEL SERRANO ESPINOSA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 33-94 DE 18 DE MAYO DE 1994, DICTADA POR EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIEZ (10) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma **Troyano, Visuetti y Villalaz**, en nombre y representación de **ISAAC DANIEL SERRANO ESPINOSA**, ha presentado formal solicitud para que se aclare o adicione la Resolución de 5 de diciembre d 1995, la cual ordena la suspensión provisional de los efectos de la Resolución N° 33-94 de 18 de mayo de 1994, emitida por el Contralor de la República.

La parte resolutiva de la Resolución de 5 de diciembre de 1995 contempla lo siguiente:

> "En consecuencia, la Sala Tercera, Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, **ORDENA LA SUSPENSIÓN INMEDIATA** de los efectos de la Resolución N° 33 de 18 de mayo de 1994, emitida por el Contralor General de la República, en lo que se refiere a la inscripción de la Escritura Pública N° 2248 de 25 de abril de 1994, suscrita por la CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL BAYANO por una parte e **ISACC DANIEL SERRANO (DANIEL SERRANO)** por la otra, en relación a los siguientes terrenos: finca 48,088, inscrita al Tomo 1134, Folio 152; finca 639, inscrita al Tomo 15, Folio 28; y finca 490, inscrita al Tomo 12, Folio 95".
>
> El petente fundamenta la aclaración en los siguientes términos:
>
> "Honorables Magistrados, elevamos esta solicitud toda vez, que la resolución antes citada, se limitó a ordenar la inscripción de las fincas contenidas en una de las Escrituras Públicas citadas en nuestra demanda (N° 2284 de 25 de abril de 1994) no obstante, omite hacer referencia a la Escritura Pública N° 7893 de 26 de agosto de 1994 de la Notaría Cuarta del Circuito de Panamá.
>
> Como bien se puede colegir de la Resolución en comento se ordena la inscripción de las fincas N° 48,088, inscrita al Tomo 1134, Folio 152; finca 639 inscrita al tomo 15, folio 28 y Finca 490, inscrita al tomo 12, folio 95, fincas todas estas contenidas en la referida Escritura Pública N° 2284 de 25 de abril de 1994, de la Notaría Segunda del Circuito de Panamá, y reieramos (sic) no hace alusión a la Escritura Pública N° 7893 de 26 de agosto de 1994 de la Notaría Cuarta del Circuito de Panamá."

Frente a lo manifestado por la parte actora en este proceso contencioso administrativo, considera la Sala que le asiste la razón al peticionario, en virtud de que es cierto de que de manera involuntaria se omitió incluir la Escritura Pública N° 7893 de 26 de agosto de 1994; pero cabe aclarar que la parte demandante en ningún momento individualizó la escritura, que hoy pretende se incluya dentro de la parte decisoria de la Resolución antes enunciada (ver foja 57 y 58). Lo que sí es cierto, es que la Escritura Pública N° 7893 de 26 de agosto de 1994 está anexada en el expediente contentivo de este proceso, y no hay inconveniente por parte de este Tribunal Colegiado acceder a la inclusión de este documento público para que le sea alcanzada los efectos de la suspensión decretada.

Por todo lo expuesto, los Magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley ACLARA LA RESOLUCIÓN DE 5 DE DICIEMBRE DE 1995 en el sentido de que se ORDENA LA SUSPENSIÓN INMEDIATA de los efectos de la Resolución N° 33 de 18 de mayo de 1994, emitida por el Contralor de la República, en lo que se refiere también a la inscripción de la Escritura Pública N° 7893 de 26 de agosto de 1994, suscrita por la Corporación para el Desarrollo Integral del Bayano e **ISAAC DANIEL SERRANO ESPINOSA**, en relación a los siguientes terrenos: finca 48,088, inscrita al tomo 1134, folio 152; finca 639, inscrita al Tomo 15, Folio 28; y finca 490, inscrita al Tomo 12, Folio 95.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. ERIC A. HOWARD, EN REPRESENTACIÓN DEL JUEZ QUINTO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, LCDO. ROGELIO G. GÁLVEZ F., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN DE 10 DE JUNIO DE 1994, PROFERIDA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIEZ (10) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **Eric A. Howard**, en representación del licenciado **ROGELIO GÁLVEZ F.**, Juez Quinto de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, ha interpuesto Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución de 10 de junio de 1994, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia y para que se hagan otras declaraciones.

Con la presente acción el recurrente pretende que esta Sala declare la ilegalidad de la Resolución de 10 de junio de 1994, por la cual el Primer Tribunal Superior le sancionó disciplinariamente con multa de veinticinco balboas (B/.25.00) por usurpación de competencia, al haberla ejercitado antes de adquirirla, en razón del amparo de Garantías Constitucionales que promoviese el licenciado Rubén Elías Rodríguez Avila, en representación de la señora **ELIDA SALERNO DE RUCKER**, en el cual mediante la Sentencia N° 62 de 30 de junio de 1993, revocó el auto de llamamiento a juicio de 1° de septiembre de 1992, proferido por el Juez Tercero Municipal, ramo penal, contra la prenombrada señora.

Ello obedece a que considera que no ha incumplido en forma alguna con sus deberes como Juez Quinto de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, toda vez que por mandato legislativo, dicho estrado judicial mantiene un régimen jurídico en cuanto a la recepción de demandas, distinto a los demás Juzgados de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá.

De la acción encausada se le dio traslado a la entidad demandada, quien, en su informe explicativo de conducta que corre a folios 85-87 del expediente, indicó a este Tribunal que la sanción disciplinaria que le fuera impuesta al referido Juez, por haber acogido y decidido sin más trámite, la acción de amparo objeto de la queja, que fuera presentada directamente ante ese juzgado, se dio en virtud de que dicho funcionario infringió el artículo 158 del Código Judicial, en cuanto a las reglas de reparto, toda vez, que el Juzgado de Turno para la fecha era el Juzgado Décimo como se comprobó con la certificación del Coordinador de Jueces de Circuito. De manera que al incurrir en violación de las reglas de reparto el Juez denunciado usurpó competencia, al haber asumido el conocimiento del negocio antes del reparto correspondiente, constituyendo éstas, razones suficientes para que la autoridad nominadora después de un análisis ponderado arribara a la sanción impuesta, como concluye la resolución de 10 de junio de 1994, hoy demandada.

La señora Procuradora de la Administración mediante su Vista Fiscal N° 42 de 26 de enero de 1995, legible a fs. 88-101, solicitó a esta Superioridad denegar las pretensiones del recurrente ya que las apreciaciones vertidas a las normas invocadas resultan erradas, por el hecho de que la prioridad a la que se refiere el artículo 4 de la ley N° 22 de 30 de agosto de 1979, no implica el desconocimiento de las normas de reparto que contiene el Código Judicial, ya que de conformidad con tales normas, los jueces tienen la obligación de remitir los negocios al Juzgado que se encuentre de turno, de tal forma que sea este juzgado y no otro el que distribuya los expedientes entre los jueces que sean competentes

para su conocimiento.

Por tanto, señala la señora Procuradora de la Administración que:

> "no es cierto que se haya pretendido desconocer la prioridad que la Ley le confiere al Juzgado Quinto de Circuito Civil ya que únicamente se le está advirtiendo su obligación de cumplir previamente con el reparto para que, luego de darle cumplimiento al trámite consignado en la Ley, pueda éste ejercer su competencia prioritaria contenida en el artículo 4 bajo estudio.
>
> El hecho que también se le faculte a conocer de otros negocios que se le asignen como consecuencia del reparto general de expedientes (cuya competencia no le esté asignada específicamente a Juzgado alguno), no implica el desconocimiento de los requisitos establecidos en el Código Judicial, mismo que recoge la normativa a utilizar para tales fines."

Cumplidos los trámites legales instituidos para estos procesos la Sala procede a externar las siguientes consideraciones finales.

La parte demandante aduce que se ha infringido el artículo 4 de la Ley 22 de 30 de agosto de 1979, "Por la cual se crean los Juzgados y Agencias del Ministerio en el Área del Canal de Panamá", cuyo texto es el siguiente:

> "Los juzgados mencionados en ésta Ley, se le adjudicarán prioritariamente los asuntos penales y civiles por hechos que ocurran o se originen en los corregimientos de sus respectivas sedes, no obstante también conocerán de los otros asuntos que por reparto le corresponda ..."

Considera la parte actora que dicha disposición legal se ha infringido en forma directa por comisión, habida consideración de que el acto demandado, desconoce la competencia prioritaria que la Ley 22 de 1979, le asigna a los Tribunales creados bajo su egida, entre ellos el Juzgado Quinto de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, de conocer en forma prioritaria de los asuntos civiles por hechos que ocurran o se originen en los corregimientos de sus respectivas sedes. Por lo que se debe concurrir de que dicho estrado judicial es el funcionalmente competente para conocer antes que los otros Tribunales Civiles, de los negocios reseñados en el artículo 4 de la Ley N° 22 de 30 de agosto de 1979. Además de otros asuntos que por reparto le correspondan.

Luego entonces, dice el recurrente que al haber atendido el amparo en forma prioritaria por tratarse del Juzgado Tercero Municipal Penal, el cual se encuentra ubicado exactamente en el mismo edificio del Juzgado Quinto, transgrede en forma directa lo dispuesto en dicha excerta.

Estima la Sala que no le asiste la razón al funcionario judicial demandante, en virtud de que si bien es cierto el artículo 4 de la ley 22 de 1979, le otorga al Juzgado Quinto de Circuito, ramo civil del Primer Distrito Judicial de Panamá, el conocimiento prioritario de los asuntos civiles por hechos que ocurran o se originen en los corregimientos de sus respectivas sedes, además de otros asuntos que por reparto le correspondan, esta competencia debe entenderse para el caso de la jurisdicción civil ordinaria consagrada en los artículos 159, 160 y 161 del Código Judicial, no así para el caso de la demandas de Amparo de Garantías Constitucionales que no constituyen materia civil sino que son de naturaleza constitucional por la relación que guarda con la tutela de derechos y garantías consagradas por la propia constitución, que resultan lesionados por órdenes de hacer o de no hacer expedidas o ejecutadas por servidores públicos.

A pesar de que el conocimiento del mismo por ley, en este caso, es de los Jueces de Circuito del Ramo Civil, de conformidad con los artículos 2607 y 162 del Código Judicial, debe entenderse que la competencia le ha sido atribuida en base a la jerarquía y jurisdicción del funcionario que emitió el acto, no así por

la naturaleza del asunto. Un ejemplo ilustra esta situación a nivel de la Corte Suprema de Justicia, ya que si fuese por materia, la competencia sería de la Sala Civil y no del Pleno de la Corte, como es, en razón de la jerarquía y jurisdicción de los funcionarios que expiden los actos que se impugnan.

Por consiguiente, al no ser esta Institución de Garantías un asunto de naturaleza civil en el caso que nos ocupa, al haberle sido presentado al Juez Quinto de Circuito Civil, un Amparo de Garantías Constitucionales lo procedente era que este funcionario judicial acatara las reglas de reparto establecidas para el conocimiento de dichas demandas, de conformidad con el artículo 158 del Código Judicial y en base al acuerdo establecido entre los jueces de circuito cuya finalidad tal como se desprende la lectura del mismo, es la de equilibrar el número de procesos repartidos para que la distribución del trabajo sea más equitativa.

Para mayor ilustración, el texto del artículo 158 es el siguiente:

> "ARTÍCULO 158. Cuando en un Circuito haya dos o más Jueces que conozcan del mismo ramo, se repartirán los procesos al menos una vez por semana, cualesquiera que sea el número de éstos. Cuando se trate de asuntos de urgencia, se hará la distribución extra necesaria siguiendo las reglas de reparto que señale el acuerdo reglamentario.
>
> En este caso, el Juez de turno se lo adjudicará inmediatamente y lo tendrá en cuenta al efectuar el próximo reparto, para equilibrar el número de procesos repartidos.
>
> Los Jueces interesados adoptarán, mediante acuerdo escrito, las reglas del reparto para que la distribución del trabajo sea equitativa; y si hubiere discrepancia entre ellos la dirimirá el Tribunal Superior respectivo.
>
> Cada Juzgado estará en turno una semana."

Esta normativa jurídica es clara al establecer la obligación por parte de los jueces de que cuando se trate de asuntos de urgencia, como lo sería el caso del amparo de garantías constitucionales, de hacer la distribución necesaria siguiendo las reglas de reparto que señale el acuerdo reglamentario, lo que equivale a remitir previamente el negocio al juzgado que se encuentre de turno, a fin de que sea éste el que se encargue de la adjudicación de los expedientes.

Corroboran lo expresado la certificación expedida por el Juez Primero de lo Civil, Juez Coordinador de los Juzgados de Circuito de Panamá, en la que señala que según el Libro de Registro de Amparos de Garantías Constitucionales que se lleva en los Juzgados de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá que a la fecha en que el Juzgado Quinto recibió y acogió el Amparo en mención, el veinticinco de junio de 1993, se encontraba de turno el Juzgado Décimo de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá. De igual manera, la parte final del primer párrafo del artículo 4 de la ley 22 de 1979, norma que se aduce infringida, que establece claramente, que no obstante la competencia prioritaria del Juzgado Quinto sobre asuntos civiles por hechos que ocurran en los corregimientos de sus sedes, también conocerán de los otros asuntos que por reparto le correspondan.

Por tanto, no prospera el cargo de violación endilgado.

También se estima infringido el artículo 158 del Código Judicial.

La parte actora sostiene que la resolución impugnada vulnera la precitada disposición legal en la modalidad de indebida aplicación de la ley, puesto que ésta pretende definir la situación aplicando el artículo 158 del Código Judicial, cuando el mismo no se amolda a la situación que produjo la queja; sino que la norma jurídica que resolvía la cuestión, era la Ley 22 de 1979.

Aunado a lo anterior sostiene que: "El artículo 158 del Código Judicial,

es una norma que persigue fundamentalmente la distribución equitativa de los negocios, y dicho artículo no señala que un Tribunal se deba privar de conocer inmediatamente de asuntos de urgencia, por el contrario en este sentido, es paladino cuando sentencia de que 'el juez de turno se lo adjudicará inmediatamente y lo tendrá en cuenta al efectuar el próximo reparto'; pero resulta ser, que el Juzgado Quinto no le es aplicable la norma en tapete, en el sentido de que estará en turno una semana, por la sencilla razón de que según la competencia que le asigna la Ley 22 de 1979, mantiene un régimen especial con respecto a los demás Tribunales y conocido es, de que siguiendo la hermenéutica del artículo 14 del Código Civil, los asuntos especiales privan sobre los generales, por lo que resplandece nuevamente que el artículo 158 del Código Judicial no era el aplicable, sino la Ley 22 de 1979."

La Sala disiente del criterio vertido por el actor, respecto de la interpretación del artículo 158 del Código Judicial, ya que la sanción que le fuera impuesta efectivamente, tuvo su asidero en dicha excerta legal. La misma establece claramente que tratándose de asuntos de urgencia, siendo el caso del Amparo de Garantías Constitucionales, y como lo expusimos en líneas anteriores, los jueces tienen la obligación de remitir previamente dicho negocio al juzgado que se encuentre de turno, a fin de que sea este último el encargado de hacer la distribución necesaria, atendiendo a las reglas de reparto establecidas.

La excepción a la que hace alusión el artículo 4 de la ley N° 22 de 1979, únicamente es aplicable, a la competencia prioritaria que tiene el Juzgado Quinto para conocer de asuntos de carácter civil que se originen en los corregimientos de sus respectivas sedes. No así para conocer de otros asuntos que no le hayan sido adjudicados, previo el cumplimiento del trámite de reparto.

De allí entonces que el Juez demandante incurrió en inobservancia de las reglas de reparto a las que alude el artículo 158 del Código Judicial.

Se aduce infringido el artículo 2611 del Código Judicial.

Sobre el concepto de la infracción la parte actora precisó:

> ... "la resolución en comento menciona, de que el Juez Décimo debía 'remitir'el Amparo al Juez Quinto de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, sobre la base del artículo 4 de la Ley 22 de 30 de agosto de 1979, no obstante, el artículo 2611 del Código Judicial **por ninguna parte**, le confiere esa facultad al juzgador, por lo que trasciende la transgresión de la norma citada, en el concepto de violación directa por 'falta de aplicación' u omisión."

La Sala discrepa de las consideraciones vertidas por el recurrente, por razón de que esta norma no le es aplicable al caso subjúdice.

El artículo 2611 del Código Judicial es la norma que va a dar inicio al curso de la demanda una vez repartida. Esta etapa procesal se verifica previo el cumplimiento de los trámites legales exigidos en el Código Judicial, que como hemos visto era el de remitir previamente el negocio al juzgado que estuviera de turno para el correspondiente reparto.

Finalmente, se considera infringido el artículo 240 del Código Judicial, que establece las causales por las cuales los Jueces y Magistrados usurpan competencia. El texto de dicha disposición es el siguiente:

> "ARTÍCULO 240. Los Jueces y Magistrados usurpan competencia:
>
> a. Cuando la ejercen antes de adquirirla o después de perderla o de estar en suspenso;
> b. Cuando conocen o proceden contra resolución ejecutoriada del superior; y
> c. Cuando se toman mayores facultades de las que se les concede en la comisión."

Señala la parte actora que la resolución demandada, viola el precitado artículo en la modalidad de indebida aplicación de la ley, que se produce cuando la resolución da a entender que como el Juzgado no estaba en turno, se usurpó la competencia, ya que no tenía el libro de Amparo en su poder. Razonamiento que no es correcto, porque la competencia de un Tribunal de Justicia emana de la Ley (Art. 233 y 234 Código Judicial y la Ley 22 de 1979), y no de un libro creado por asuntos meramente administrativos.

Discrepamos de tales aseveraciones, ya que la sanción disciplinaria que le fuera impuesta tuvo efectivamente su asidero jurídico en esta disposición. En líneas anteriores sostuvimos que, pese a que la competencia en materia de Amparo de Garantías Constitucionales le está atribuida por ley a los Jueces Civiles, previo a que estos últimos aprehendan el conocimiento del mismo, tienen la obligación de remitirlo al Juzgado que esté en turno, a fin de que sea éste quien haga la distribución necesaria entre los mismos.

Lo contrario sería desconocer las reglas de reparto de los procesos exigidas en el artículo 158 del Código Judicial cuyo fin es el de hacer más equitativa la distribución del trabajo, y, por ende, se incurriría en usurpación de competencia por el hecho de haberla ejercido antes de adquirirla, que es la situación en la que ha incurrido el Juez demandante al haberse adjudicado el conocimiento de un negocio sin estar de turno.

Por las consideraciones expuestas la Sala Tercera, Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, la Resolución disciplinaria de 10 de junio de 1994, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. MIGUEL A. CÁRDENAS, EN REPRESENTACIÓN DE EUMELIA ESTHER VERGARA DE BALLESTEROS, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO DE PERSONAL N° 204 DE 14 DE AGOSTO DE 1995, EMITIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIEZ (10) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

Dentro de la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por el licenciado Miguel Cárdenas actuando en representación de **EUMELIA ESTHER VERGARA DE BALLESTEROS**, para que se declare nulo por ilegal el Decreto de Personal N° 204 de 14 de agosto de 1995, emitido por el Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Educación, y para que se hagan otras declaraciones, se destaca que el actor ha solicitado la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo impugnado. No obstante estima procedente el sustanciador, efectuar un estudio previo del libelo de la Demanda, por motivos de economía procesal.

A estos efectos se observan una serie de defectos formales en los cuales incurrió el demandante al elaborar la demanda en cuestión, que a su vez impiden su admisión por parte del ponente, en representación de la Sala Tercera de lo Contencioso.

Es así como se pone de manifiesto que el escrito en comento no ha sido dirigido al Presidente de esta Sala de la Corte como lo exige el texto del artículo 102 del Código Judicial; no se especifica que el Procurador de la Administración interviene en la presente controversia en defensa del acto impugnado como lo señala el artículo 345 numeral 2 de la misma excerta legal.

Igualmente es preciso puntualizar que la recurrente no comprueba estar amparada por estabilidad, carrera administrativa, ley especial o concurso de mérito que garantice relativamente su cargo en la entidad demandada, ya que no reposa prueba idónea al respecto, en el negocio que nos ocupa. Este requisito es indispensable como lo ha señalado esta Sala en ocasiones similares, en aras de que el proceso instaurado no resulte ineficaz o nugatorio, dado el estatus de discrecionalidad del nombramiento y la remoción del demandante por parte del funcionario nominador. (Cfr. Autos de 24 de enero de 1995, 3 de agosto de 1995, 5, 15 y 19 de septiembre de 1995 y 10 de octubre del mismo año.)

Finalmente se evidencia que la peticionista estima conculcado el artículo 127 de la Ley 47 de 1946 en el concepto de infracción literal del precepto legal, sin especificar expresamente, cual de las modalidades de esta causal, transgrede el acto impugnado. Debe recordarse que la infracción literal de la norma se subdivide en: violación directa por omisión, violación directa por comisión, indebida aplicación e interpretación errónea; incumpliéndose en consecuencia, con el numeral 3 del artículo 43 de la Ley 135 de 1943.

En mérito de lo expuesto, el Magistrado sustanciador que suscribe en representación del resto de la Sala Tercera, Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por el licenciado Miguel Cárdenas actuando en representación de EUMELIA ESTHER VERGARA DE BALLESTEROS. Por motivos de economía Procesal, no se entrará a considerar la solicitud de suspensión.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICDO. EMILIO DE LEÓN LOKEE, EN REPRESENTACIÓN DE DELIA MARÍA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL RESUELTO N° 020 DE 17 DE OCTUBRE DE 1994, EXPEDIDO POR EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN AGROPECUARIA DE PANAMÁ (IDIAP), Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DOCE (12) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Emilio De León Lokee en nombre y representación de DELIA MARÍA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nulo por ilegal el Resuelto N° 020 de 17 de octubre de 1994, expedido por el Director General del Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Panamá (IDIAP), y para que se hagan otras declaraciones.

ARGUMENTOS DE LA PARTE ACTORA

La parte demandante para sustentar su pretensión señala básicamente que mediante Resuelto N° 020 de 17 de octubre de 1994, el Director del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá declaró insubsistente el nombramiento de DELIA MARÍA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ a partir del 18 de octubre de 1994.

Sigue manifestando la parte interesada, que la Ingeniera Jiménez Hernández siempre ha desempeñado sus funciones en el IDIAP con un alto rendimiento técnico, con buenas relaciones con los productores y con extrema dedicación y responsabilidad, entre otras cualidades, por lo que son falsos los cargos de incompetencia técnica.

Además de que no existen motivos presupuestarios que afecten la subsistencia del nombramiento, posición o sueldo de la mencionada funcionaria.

Posteriormente se le solicitó al Director General del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP), que rindiera informe de conducta en relación a la demanda propuesta por la Ingeniera DELIA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ.

INFORME DE CONDUCTA DEL DIRECTOR DEL IDIAP

El Director del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP), por medio de la Nota N° N-274-95 de 14 de junio de 1995 informó que efectivamente declaró insubsistente el nombramiento de la Ingeniera DELIA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, a partir del 21 de octubre de 1994, y que esta destitución se encontraba dentro de los parámetros de la ley, es decir, que el Resuelto impugnado está fundamentado en causales legales de destitución.

De igual manera se le corrió traslado a la Procuradora de la Administración quien mediante Vista N° 340 de 9 de agosto de 1995, se opuso a la pretensión.

CRITERIO DE LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN

La Procuradora de la Administración manifiesta que se ha comprobado la ineficiencia en el cargo por parte de la demandante hasta el momento de la destitución, ya que al evaluarse su gestión, la misma demostró bajo rendimiento en sus tareas, así como la falta de publicaciones científicas requeridas por la Institución. En este orden de ideas, agrega la funcionaria que la declaratoria de insubsistencia no se debió a motivos presupuestarios solamente, sino a la falta de competencia en el cargo de Ingeniero Agrónomo I. Por último, la Procuradora es del criterio de que JIMÉNEZ HERNÁNDEZ no gozaba de estabilidad, dado que la Ley 9 de 20 de junio de 1994 de Carrera Administrativa aún no ha sido implementada.

POSICIÓN DE LA SALA

La Ingeniera DELIA MARÍA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, fue destituida por el Director del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP), bajo las causales de bajo rendimiento técnico, de que era una persona conflictiva con los productores, de poca dedicación e irresponsabilidad en el desarrollo de sus actividades y planeamiento de investigación para el año 1994.

Considera la demandante que el Director de dicha Institución ha violado las siguientes normas: artículo 10 de la Ley 22 de 1961; artículo 16 de la Ley 51 de 1975; y el artículo 18, literal a) del Reglamento Interno de Personal, los cuales serán analizados de manera conjunta por encontrarse muy relacionados entre sí.

El artículo 10 de la Ley 22 de 1961, es del tenor siguiente:

> "ARTÍCULO 10: Los profesionales idóneos al servicio del Estado podrán ser destituidos por razones de incompetencia física, moral o técnica. En cada caso particular, el Consejo Técnico Nacional de Agricultura hará las investigaciones necesarias para establecer la veracidad de los cargos, oyendo a las partes. El Consejo Técnico Nacional de Agricultura decidirá y solicitará lo conducente al Órgano Ejecutivo si se hubiere cometido infracción al presente artículo de esta Ley."

Indica la parte actora que esta disposición ha sido violada dado que no fueron comprobados los cargos de incompetencia técnica utilizados para remover a la ex funcionara, además de que se le desconoció el derecho de que el Consejo

Técnico Nacional de Agricultura investigara la veracidad de los cargos de incompetencia técnica que el acto impugnado formula en su contra,

Frente al argumento expuesto por la afectada, mediante su procurador judicial, queremos señalar lo siguiente: la norma que nos ocupa y que según el demandante ha sido infringida, contempla cierta estabilidad para los profesionales del ramo de la agricultura que laboran para el Estado, ya que debe entenderse que si son competentes física, moral o técnicamente, deben permanecer en sus puesto; de no ser competentes, pueden ser destituidos siempre y cuando se lleven a cabo las investigaciones pertinentes por parte del Consejo Técnico Nacional de Agricultura. Esta última situación no debe considerarse como limitante para que se proceda con el despido de un funcionario que labore en el Instituto de Investigación Agropecuario de Panamá (IDIAP), ya que no se ha comprobado que la Ingeniera DELIA MARÍA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ ingresó al Instituto por medio de concurso de mérito, que es lo que demostraría su competencia, y además le otorgaría estabilidad en el cargo por ser funcionario de carrera. La Ley de Carrera Administrativa es para estos casos la Ley básica, preferente, y especial en materia de estabilidad en la función pública. Tal como se deduce del artículo 300 de la Constitución Nacional que instituye las carreras en los servicios públicos conforme a los principios del sistema de méritos.

MARÍA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ fue nombrada libremente y al no estar su estabilidad sujeta a una ley de carrera administrativa, o de una ley especial en relación a la función pública que ejerce, y no de tipo profesional, totalmente independiente del ejercicio de las funciones públicas como se verifica en el presente caso, por lo que es discrecional de la autoridad superior de la entidad demandada nombrar y remover a sus miembros **(ver sentencia de 11 de octubre de 1994).** En este mismo orden de ideas el Director de dicho Instituto procedió a declarar insubsistente el nombramiento de la señora JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, de acuerdo a las facultades que otorga el artículo 16, literal h) de la Ley 51 de 1975, que también ha sido señalado como violentado por la parte demandante. Para mayor claridad veamos qué dice esta norma en su parte pertinente:

> **"ARTÍCULO 16: Las funciones de la Dirección General son las siguientes:**
> ...
> h. Nombrar. contratar, promover y resolver al personal administrativo y técnico del Instituto, de acuerdo a las disposiciones del Reglamento Interno ..."

Es pertinente agregar, que en todo caso, la estabilidad en el cargo está condicionada a su competencia y responsabilidad en el servicio, y tal como expresáramos en líneas anteriores, reposa en el expediente informe de investigación interna que constituye evidencia que en la prestación de servicios incurrió en conductas no acorde con los propósitos del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP).

Por último en lo que concierne al artículo 18, literal a) del Reglamento Interno de Personal, que establece la estabilidad en el ejercicio del cargo dentro del Instituto, es pertinente aclarar que la estabilidad debe ser contemplada por ley, tal como lo señaláramos en líneas anteriores y no por un Reglamento Interno, que a todas luces resulta inaplicable para favorecer la pretensión de la demandante. En nuestro país, y a manera de excepción, ciertas entidades estatales y gremios disfrutan de los beneficios de la estabilidad, cuando la misma es consagrada mediante una Ley formal; ya si dicha estabilidad es plasmada o reconocida solamente a través del reglamento interno de una institución determinada, la misma no amparará al funcionario lesionado, quien continuará siendo de libre nombramiento o remoción.

Aunado a lo anterior, es evidente que tampoco puede considerarse eficaz que la ley delegue en la facultad reglamentaria del Ejecutivo, la capacidad o la legitimidad de consagrar o no los beneficios de la estabilidad a favor de un determinado grupo de funcionarios públicos (**Ver Sentencia de 31 de diciembre de 1993).**

Todo lo comentado en los párrafos que antecede, nos conduce a concluir que el artículo 10 de la Ley 22 de 1961, artículo 16 de la Ley 51 de 1975 y el artículo 18, literal a) del Reglamento Interno de Personal no han sido conculcados por el Director del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP), por lo que no prosperan los cargos.

Por las consideraciones expuestas, los Magistrados de la Sala Tercera Contencioso Administrativa de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN QUE NO ES ILEGAL el Resuelto N° 020 de 17 de octubre de 1994, expedido por el Director General del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP).

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. CARLOS AYALA, EN REPRESENTACIÓN DE TAMARA RODRÍGUEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO DE PERSONAL N° 187 DE 25 DE JULIO DE 1995, PROFERIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

Dentro de la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción promovida por el licenciado **Carlos Ayala** en representación de **TAMARA RODRÍGUEZ**, para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto de Personal N° 187 de 25 de julio de 1995, emitido por el Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Educación y para que se hagan otras declaraciones, observa el Magistrado Sustanciador que se ha introducido una solicitud previa para la obtención del documento contentivo del acto impugnado debidamente autenticado, así como la certificación del silencio administrativo correspondiente.

No obstante, se evidencia que el actor propone el presente libelo en forma tal que no permite al sustanciador tener los mínimos elementos de juicio para proceder según lo requerido. Ello es así dado que el petente adjunta o incorpora al presente negocio el acto administrativo impugnado sin la constancia de notificación que aunque en fotocopia, le proporcionaría al ponente un indicio en lo concerniente a probabilidad de las fechas de notificación y silencio administrativo y por ende, de que la demanda pudiera haber sido interpuesta conforme a los preceptos legales.

La preocupación de la Corte antes mencionada, se agudiza debido a que el decreto de personal recurrido parece haber sido expedido en julio de 1995, y la presentación de la demanda se verificó el 4 de enero de 1996, (6 meses después), y además, debido a que el recurso de reconsideración supuestamente presentado ante el Ministerio de Educación carece inclusive del sello de recibido, por lo que esta Superioridad no puede presumir su real proposición ante la vía gubernativa.

Frente a lo expuesto no se puede soslayar que, aunque los administrados cuenten con el mecanismo establecido en el artículo 46 de la ley 135 de 1943, éstos deben aportar el mínimo de los elementos de juicio que acrediten prima facie la viabilidad de su petición, y la diligencia de sus gestiones, en aras precisamente de la economía procesal, para que esta Superioridad proceda a considerar la petición instaurada. Es indispensable que el recurso de reconsideración se presente debidamente autenticado o con sello de recibido, ya

que de allí comienza a contabilizarse el silencio administrativo.

Lo anterior lo indicó la reciente jurisprudencia de 1 de junio de 1995 que se anota a renglón seguido:

> "Sin embargo, estima el Sustanciador que el recurrente no ha acreditado debidamente la negativa tácita de la Administración al no pronunciarse sobre el recurso de reconsideración interpuesto en tiempo oportuno, ya que si bien es cierto, y como lo expresamos en párrafos anteriores, consta en el expediente una solicitud hecha en término a la entidad demandada a fin de que certificase si sobre el recurso de reconsideración presentado el día 20 de enero de 1995, había recaído decisión. Ello no es suficiente para acreditar dicha negativa ya que de conformidad con los reiterados dictámenes jurisprudenciales el silencio administrativo debe ser probado, a través de la copia autenticada del memorial contentivo de la solicitud o recurso con fecha de presentación ante la entidad administrativa.
> ...
> Estas certificaciones o constancias constituyen plena prueba para acreditar el silencio administrativo como medio de agotamiento de la vía gubernativa, a los efectos de poder ocurrir en demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, por estar basado su reclamo en un interés particular que se estima violado." (Lo subrayado es de la Corte).

Aun aceptando que la resolución impugnada se notificó a la afectada el 5 de septiembre de 1995, el término para presentar la demanda se vencería el 8 de enero de 1996; sin embargo, se aprecia que el actor solicitó ante el Ministerio de Educación la autenticación del Decreto de Personal recurrido y la certificación de silencio administrativo el 4 de enero de los corrientes, y el mismo día presentó la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción ante esta Corporación de Justicia, sin darle la oportunidad necesaria el ente administrativo de pronunciarse, y evitar de esta manera que se recargue la administración de justicia. Se debe destacar que el artículo 46 de la Ley 135 de 1943 le confiere a todo demandante la posibilidad de que la Corte solicite constancias "cuando el acto no ha sido publicado, o se deniega la expedición de la copia o la certificación sobre su publicación", expresándose en la demanda, "con indicación de la oficina donde se encuentre el original, o del periódico en que se hubiere publicado, a fin de que se solicite" antes de admitir la demanda. Sin embargo, ello conlleva el deber de que el actor realice esfuerzos previos tendientes a obtener las certificaciones y documentos necesarios para que en caso de renuencia de la administración, esta Superioridad le brinde al recurrente dicho apoyo judicial. Lo expresado implica que el actor no puede interponer su solicitud de documento autenticado y certificación de silencio administrativo ante el ente demandado, y el mismo día encausar su demanda ante este Tribunal de Justicia, ya que no se le brinda la oportunidad o el tiempo indispensable al ente gubernativo para proceder a resolver la petición que se le presente. Debe tenerse en cuenta que una vez se configure el silencio administrativo el recurrente cuenta con 2 meses para presentar su petición de documento ante la administración, esperar durante un período de tiempo prudencial la contestación, y posteriormente interponer su demanda ante la Corte; utilizando de ser necesario, el mecanismo del artículo 46 de la Ley 135 de 1943.

Este mismo criterio ha sido sostenido por esta Corporación en el Auto de 18 de diciembre de 1992, tal como se aprecia a continuación para mayor ilustración:

> "En cuanto a la certificación solicitada al Ministerio de Gobierno y Justicia por la firma forense **BERRÍOS Y BERRÍOS**, a través de la cual quedaría fehacientemente probada el silencio administrativo que agotaría la vía gubernativa en este negocio en particular sometido a nuestra consideración, debemos acotar que la misma se gestionó el 24 de junio de 1992 ante la precitada Institución gubernamental, tan solo 2 días antes de la interposición de la corrección de la acción

> de plena jurisdicción ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativa."
> ...
> "A estos efectos, la parte interesada contaba hasta el 27 de julio de 1992 para obtener tanto la certificación del Ministerio de Gobierno y Justicia como para simultáneamente antes de la misma fecha, interponer la demanda de Plena Jurisdicción, ante la Sala Tercera Contencioso Administrativa. No obstante, el recurrente solicitó la mencionada certificación el 24 de junio de 1992 y presentó inmediatamente la corrección del libelo de la demanda el 26 de junio de 1992 sin darle la debida oportunidad al Ministerio de Gobierno y Justicia de contestar dicha petición y de certificar su omisión al resolver el contenido del escrito de 24 de marzo de 1992. Debemos estimar entonces, que **BERRÍOS Y BERRÍOS** no realizó suficientes diligencias en obtener por sus propios medios dicho pronunciamiento pues tenía un (1) mes a su haber para llevar a cabo esta tarea. Por el contrario, si el actor hubiese demostrado haber realizado las suficientes gestiones para recibir dicha certificación y no lo lograse, entonces el Magistrado Ponente en base al artículo 46 de la Ley 135 de 1943, ordenará a la Institución Gubernamental renuente, a compulsar dicho documento probatorio del agotamiento de la vía gubernativa."

Por consiguiente el actor no comprueba fehacientemente el agotamiento de la vía gubernativa, como presupuesto indispensable para ocurrir ante esta jurisdicción de lo Contencioso, en atención a lo preceptuado en el artículo 42 de la Ley 135 de 1943.

Finalmente, la recurrente no comprueba prima facie, estar protegida por la carrera instituida en el Ministerio de Educación a la cual se ingresa por concurso de mérito. Lo anterior se exige para verificar la estabilidad aducida por el recurrente ya que de lo contrario, el cargo del cual fue declarada insubsistente la recurrente correspondía a la categoría de libre nombramiento y remoción; y por consiguiente, el proceso que se realice ante esta Superioridad resultaría innecesario y contrario a la economía procesal. Veamos a renglón seguido el criterio vertido en párrafos superiores tal como se expresó en el reciente auto de 19 de septiembre de 1995:

> "En el ramo de educación se observa que tanto los educadores como administrativos disfrutan del derecho de estabilidad tal como establecen los artículos 127 y siguientes de la ley 47 de 1946, siempre y cuando hayan sido nombrado de acuerdo a las disposiciones del ordenamiento ut supra; el cual a juicio de esta corporación es mediante concurso de mérito, o de lo contrario, los cargos que se ostenten son de libre nombramiento y remoción.
>
> El criterio que se expone ha sido sostenido por esta Sala en recientes autos de cinco (5) de septiembre de 1994, veinticuatro (24) de enero de 1995 y tres (3) de agosto de 1995."

En atención a las deficiencias anotadas, quien sustancia debe negarle curso legal al libelo incoado, a tenor de lo dispuesto en el artículo 31 de la ley 33 de 1946.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador en representación de la Sala Tercera, Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por el licenciado Carlos Ayala en representación de TAMARA RODRÍGUEZ.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. SALVADOR SÁNCHEZ GONZÁLEZ, EN REPRESENTACIÓN DE ÁNGEL VALERO DOMENECH, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 3269 DE 27 DE MAYO DE 1992, EMITIDA POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **Salvador Sánchez González**, en representación de **ÁNGEL VALERO DOMENECH**, ha interpuesto Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción para que se declare nula por ilegal, la Resolución N° 3269 de 27 de mayo de 1992, emitida por la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social, acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

La señora Procuradora de la Administración mediante su Vista Fiscal N° 452 de 26 de octubre de 1995, presentó y sustentó recurso de apelación contra la Providencia de 7 de septiembre de 1995, que **ADMITE** la presente demanda, argumentando que "... el libelo de la acción carece de una de las formalidades sin la cual, no debe ser admitida. Efectivamente, la parte actora no ha designado las partes y sus representantes, tal como lo exige el artículo 43 numeral 1, de la ley 135 de 1943, reformada por la Ley 33 de 1946 ..."

Encontrándose el proceso en este estado, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera proceden a emitir las siguientes consideraciones finales.

Considera este Tribunal de segunda instancia que en efecto, la parte actora no identifica debidamente a las partes y sus representantes, esto es, de las dos partes procesales que van a constituir la relación jurídica en el proceso que genera la demanda correspondiente, en virtud de que no hace mención alguna de las mismas dentro del libelo, tales como las generales del demandante y su apoderado judicial, las generales del demandado, que en este caso es el funcionario público que emitió el acto. Tampoco hace mención de la intervención del Procurador de la Administración, ni el concepto en que interviene, quien, tratándose de una acción de Plena Jurisdicción, actúa en defensa del acto acusado de ilegal, de conformidad con el artículo 348, ordinal 2 del Código Judicial.

Esta situación contraviene lo dispuesto en el ordinal 1° del artículo 43 de la Ley 135 de 1943, reformado por la Ley 33 de 1946, que expresa que toda demanda presentada ante la vía Contencioso Administrativa, contendrá necesariamente, la designación de las partes y sus representantes.

En el presente caso, vemos que el recurrente circunscribe el cumplimiento de esta formalidad legal a lo siguiente:

> "Por este medio yo, **SALVADOR SÁNCHEZ GONZÁLEZ**, varón, panameño, mayor de edad, soltero, con cédula de identidad personal N° 8-251-646, y abogado en ejercicio con domicilio en calle Manuel María Icaza, N° 12, Edificio Grobman, 2do. piso, donde recibo notificaciones, concurro a vuestro distinguido despacho en virtud del Poder otorgado a mi favor por el señor **Ángel Valero Domenech**, varón, panameño, mayor de edad, casado, con Cédula de identidad personal N° N-13-457, y domicilio en Hato Pintado, Corregimiento de Pueblo Nuevo, Ciudad de Panamá, a fin de interponer **RECURSO DE PLENA JURISDICCIÓN** contra las Resoluciones N° 3269 de la Comisión de Prestaciones de la Caja del Seguro Social, del 27 de mayo de 1992, y contra la Resolución N° 9903-94 de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social, del 1ero de diciembre de 1994, por violar estas de forma directa el Artículo 50 del Decreto Ley N° 14 de 1954,

Orgánico de la Caja del Seguro Social."

De lo expuesto, se infiere que el actor lo es el señor **ÁNGEL VALERO DOMENECH**, y su representante el licenciado **Salvador Sánchez González**, pero tal como expusimos anteriormente, no señala ni expresa quien es la parte demandada, ni su representante, quienes deben encontrarse expresamente designadas, ya que no puede presumirse ni considerarse enunciada en el acto administrativo demandado cual es la Resolución N° 3269 de 27 de mayo de 1992, emitida por la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social dado que con este señalamiento el recurrente lo que ha hecho es darle cumplimiento a la exigencia del artículo 29 de la Ley 33 de 1946, que exige individualización del acto impugnado.

Como bien lo señalara la señora Procuradora de la Administración, esta Sala ha sido reiterativa en señalar que los requisitos del artículo 43 de la Ley 135 de 1943, son de imperativo cumplimiento, y por ende, su desconocimiento hace imposible la admisión de la demanda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 de 1946. Al respecto, cfr. Autos de 7 de febrero de 1974, 25 de junio de 1992, 16 de noviembre de 1993 y de 6 de enero de 1995.

También se observa que la demanda tampoco ha sido dirigida al Magistrado Presidente de la Sala Tercera de la Corte Suprema, tal como lo exige el artículo 102 del Código Judicial, que establece:

> "Artículo 102. Las demandas, recursos, peticiones e instancias formuladas ante la Corte Suprema de Justicia y los negocios que hayan de ingresar por alguna razón en ella, deberán dirigirse al Presidente de la Corte si competen al Pleno de ésta o a la Sala de Negocios Generales y a los Presidentes de las Salas Primera, Segunda y Tercera, si se tratare, respectivamente, de negocios civiles, penales, contencioso-administrativos y laborales y se hará la presentación ante el Secretario General o de la Sala correspondiente, quien debe dejar constancia de ese acto."

Por lo expuesto, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera, Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCAN la providencia de 7 de septiembre de 1995, y en consecuencia NO ADMITEN la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, interpuesta por el Licenciado Salvador Sánchez González, en representación de ÁNGEL VALERO DOMENECH.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE TAPIA, LINARES Y ALFARO, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE PLÁSTICOS INTERNACIONALES, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULAS, POR ILEGALES, LA RESOLUCIÓN N° 8547-93-JD, DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1993 Y LA RESOLUCIÓN DE 1° DE JULIO DE 1994, EXPEDIDAS AMBAS POR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense Tapia, Linares y Alfaro, actuando en nombre y representación de PLÁSTICOS INTERNACIONALES, S. A., interpuso ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia demanda contencioso-administrativa de

plena jurisdicción para que se declare nulas, por ilegales, la Resolución N° 8547-93-JD, del 18 de noviembre de 1993 y la Resolución del 1° de julio de 1994, expedidas por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social y para que se haga otras declaraciones.

A través del primero de los actos acusados, la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social aprobó la adquisición de 115,600 docenas de frascos plásticos de 5 dragmas de poliestireno cristal con sus tapas puestas a presión, marca Salvaplastic, con un precio de B/.0.4994 por docena, para un monto total de setenta mil seiscientos diecisiete balboas con 17/100 (B/.70.617.17), incluido el ITBM (5%), amparada en la requisición N° 12532, a favor de la empresa Suplidora Central, S. A. El segundo acto, declaró extemporáneo el recurso de reconsideración interpuesto por la referida firma de abogados contra la Resolución N° 8547-93-JD, del 18 de noviembre de 1993.

LAS NORMAS VIOLADAS Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN

De acuerdo con la firma apoderada de la demandante, los actos acusados violan los artículos 39 y 24 de la Ley N° 3 del 20 de marzo de 1986, que en su contenido expresan lo siguiente:

> "Artículo 39: Los organismos oficiales y semioficiales, las instituciones autónomas y semiautónomas, los municipios, las empresas estatales y demás instituciones públicas y privadas que reciben ayuda económica del Estado o que tengan participación de fondos públicos, están en la obligación de comprar las materias primas, envases, empaques, combustibles, lubricantes, productos terminados y demás artículos producidos en el país en la medida en que cuando los necesiten haya oferta de los mismos y sean de calidad aceptable y precio competitivo, en los términos señalados en el artículo 24 de esta ley."
>
> "Artículo 24: No se permitirá la importación exonerada o en tarifa arancelaria preferencial de maquinaria, equipos, repuestos, materias primas, productos semielaborados, envases, empaques, y demás insumos destinados a la producción para el uso doméstico, cuando los mismos se produzcan en el país en cantidad suficiente, calidad aceptable y precio competitivo.
>
> Para los efectos del presente artículo se considerarán competitivos los precios que no superen en más del porcentaje de su tarifa de protección, el valor CIF de los productos extranjeros similares a los nacionales o sustitutos de éstos."

La firma apoderada de la demandante expresa que estas normas fueron violadas porque la Caja de Seguro Social adjudicó definitivamente una licitación a una empresa que suministra productos extranjeros y sin considerar que su representada no sólo produce en Panamá los frascos de poliestireno en cantidades suficientes y de calidad igual o mejor que los extranjeros, sino que también cumple con el requisito del precio competitivo. Sostiene que el arancel o tarifa de protección de los envases de poliestireno cristal es de 27.5%. Para que la Caja de Seguro Social se encuentre en la obligación de comprar los frascos de poliestireno producidos en el país, es necesario que su precio local no supere en más de un 27.5% el valor CIF de los frascos de poliestireno extranjeros y similares a los nacionales. El valor CIF de las 115,600 docenas de frascos plásticos de 5 dragmas de poliestireno cristal, con sus tapas plásticas puestas a presión, marca SALVAPLASTIC, es de cincuenta y siete mil setecientos treinta balboas con sesenta y cuatro centésimos (B/.57.730.64). El valor de las 115,600 docenas de frascos plásticos de poliestireno cristal de 5 dragmas con sus tapas a presión, de fabriccación nacional, ofrecidos por PLÁSTICOS INTERNACIONALES, S. A. se encuentra dentro del 27.5% establecido en la ley, ya que la misma excede el valor CIF del producto extranjero en sesenta y nueve balboas con seis centavos (B/.69.06), o sea, en menos del 0.5%.

La apoderada de la demandante también estima que se ha violado el artículo

32 del Decreto de Gabinete N° 33 de 3 de mayo de 1985, norma ésta que tiene el contenido siguiente:

> "Artículo 32. Las personas que se consideren agraviadas con la decisión final podrán interponer recurso de reconsideración ante el funcionario o corporación administrativa que expidió la resolución o el de apelación para ante el superior, o ambos, entendiéndose que los mismos serán en el efecto devolutivo. De uno u otro recurso, o de ambos, podrá hacerse uso dentro del término de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de notificación de la expresada resolución ..."

En el concepto de la infracción de la norma transcrita, la apoderada de la demandante expresó que la Caja de Seguro Social violó la anterior norma porque se negó a notificar personalmente a su representada la Resolución N° 8547-93-J. D., que adjudicó definitivamente el renglón N° 1 de la Licitación Pública misma, a pesar de que esta última trató de cumplir en múltiples ocasiones con este requisito formal.

La demandante también considera violado el artículo 29 de la Ley N° 135 de 1943 que establece, que las resoluciones que le ponen término a un negocio o actuación administrativa de carácter nacional deben notificarse personalmente al interesado o a su representante o apoderado, dentro de los cinco días siguientes a su expedición, debiendo expresarse en ellas los recursos que por la vía gubernativa procedan y el término dentro del cual deben interponerse, todo bajo la responsabilidad del funcionario correspondiente. En opinión de la apoderada de la demandante, esta disposición resultó infringida porque ninguna de las resoluciones impugnadas expresa los recursos que por la vía gubernativa proceden ni el término dentro del cual deben interponerse, a pesar de que se trata de resoluciones que ponen término a un negocio o actuación administrativa de carácter nacional. A pesar de que la Caja de Seguro Social tenía la obligación de notificar la Resolución N° 8547-J. D., a todas las personas naturales o jurídicas que participaron en la Licitación N° 29-93 y no sólo a las que se les adjudicó definitivamente cada uno de los renglones correspondientes a dicha licitación, se negó a notificar a PLÁSTICOS INTERNACIONALES, S. A.

El artículo 34 de la Ley N° 135 de 1943, que se refiere al término dentro del cual pueden utilizarse los recursos gubernativos, también está dentro de las normas que se citan como violadas en la demanda. En el concepto de la infracción se expresa que el citado artículo 34 se violó porque la Caja de Seguro Social nunca notificó personalmente la Resolución N° 8547-93-J. D. a PLÁSTICOS INTERNACIONALES, S. A. ni tampoco fijó edicto para suplir dicha notificación, por lo cual no pudo comenzar a correr el término para presentar y sustentar el recurso de reconsideración y menos aún, ha podido transcurrir o vencer dicho término.

Finalmente, la apoderada de la demandante, cita como violado el artículo 32 de la Ley N° 135 de 1943, que establece lo siguiente:

> "Artículo 32. Sin los anteriores requisitos no se tendrá por hecha ninguna notificación, ni producirá efectos legales la respectiva resolución, a menos que la parte interesada, dándose por suficientemente enterada, convenga en ella o utilice en tiempo los recursos legales."

A juicio de la firma forense apoderada de la demandante, la disposición transcrita resultó infringida porque la Caja de Seguro Social nunca notificó personalmente a su representada. En el expediente relativo a la Licitación Pública N° 29-93 no consta notificación alguna a PLÁSTICOS INTERNACIONALES, S. A., por lo cual no pudo comenzar a correr o vencerse el término para presentar y sustentar el recurso de reconsideración contra la Resolución N° 8547-93-J.D. Tal como establece la norma citada, la notificación de la citada Resolución tiene que tomarse como formalmente hecha a partir del momento en que la firma forense Tapia, Linares y Alfaro presentó el libelo contentivo del aludido recurso, ya que ese fue el momento en que la misma se dio por suficientemente enterada y utilizó

el recurso legal pertinente (fs. 7-13).

Mediante Nota S/N° del 2 de noviembre de 1994, la corporación demandada remitió su informe de conducta (35-46), mientras que la Procuradora de la Administración contestó la demanda a través de la Vista N° 96 del 6 de marzo de 1995 (fs. 47-53).

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Las primeras normas que se cita como violadas en la demanda son los artículos 39 y 24 de la ley N° 3 de 1986. De acuerdo con el artículo 36, las instituciones públicas están en la obligación de comprar materias primas, envases, empaques y demás artículos producidos en el país, siempre que, cuando los necesiten, haya oferta de los mismos y sean de calidad aceptable y precio competitivo. Estos precios competitivos, según el citado artículo 24, son aquellos que no superen en más del porcentaje de su tarifa de protección, el valor CIF de los productos extranjeros similares a los nacionales o sustitutos de éstos. Se trata, pues, de normas que tienen como propósito la protección de la actividad productiva de la industria nacional.

Frente a los intereses que pretenden proteger las normas que se citan como violadas, se encuentra el interés público del Estado que, en el caso específico de las adjudicaciones de los actos públicos, se ha querido resguardar mediante el establecimiento de ciertos criterios que también deben seguir las entidades públicas para efectuar la adjudicación de los actos licitatorios.

Ciertamente, el precio ofrecido por los proponentes reviste gran importancia, pues a través del mismo se puede determinar en forma directa e inmediata las ventajas o desventajas económicas que las propuestas representan para el Estado. Por esta razón, la parte final del transcrito artículo 50 del Código Fiscal sujeta la decisión de la adjudicación definitiva de una licitación pública al proponente que ofrezca la mayor calidad al menor precio.

Sin embargo, el precio ofrecido por los proponentes no constituye el único elemento que se debe tomar en consideración para la adjudicación de un acto público, sino que, por el contrario, para resguardar el interés público estatal se ha establecido ciertos criterios que las entidades públicas deben seguir al efectuar las adjudicaciones de los actos licitatorios.

Es así como el numeral 7° del artículo 47 del Código Fiscal, al referirse específicamente a la adjudicación provisional del acto licitatorio, establece que éste se adjudicará provisionalmente "al proponente que haya hecho la propuesta más ventajosa entre las admitidas".

Asimismo, el artículo 50 del mismo Código establece de manera más específica los criterios que la entidad pública respectiva debe seguir al momento de adjudicar una licitación pública en forma definitiva. La parte pertinente de esta disposición es del tenor siguiente:

> **"Artículo 50 ...**
> La adjudicación de la licitación tomará en consideración, para determinar el mayor beneficio para el Estado señalado en la Constitución, **la conveniencia económica de las propuestas** y la capacidad técnica, económica, administrativa y financiera de los proponentes. La decisión final se adoptará para adjudicar la licitación a la propuesta que represente **mayor calidad al menor precio**, según los reglamentos que se dicten al efecto. ..." (Los subrayados son de la Sala).

De lo expuesto se desprende, entonces, que la obligación consagrada en el artículo 36 de la Ley N° 3 de 1986, en concordancia con el artículo 24 de la misma Ley, no tiene un carácter absoluto, sino que las entidades públicas deben ajustarse también a otros criterios de juicio para adjudicar los actos públicos. Podría ocurrir, por ejemplo, que el precio ofertado por uno de los licitantes sea competitivo y que, sin embargo, no represente la oferta de mayor calidad, con lo

cual no existiría para el Estado la obligación de aceptar dicha oferta, a pesar de la competitividad del precio. En otras palabras, el precio competitivo de una de las ofertas hechas en un acto público no determina en forma automática su adjudicación, pues, es indispensable examinar si se cumple con otros requisitos necesarios para su conveniente adjudicación.

En el caso bajo estudio, la empresa Suplidora Central, S. A. no sólo cumplió con la presentación de la oferta más baja, sino que la misma contó con un criterio técnico positivo, tal como se demuestra en el examen hecho por el Departamento de Equipamientos y Normas de la referida institución a las ofertas presentadas por las empresas participantes en la Licitación Pública N° 29-93, y que reposa a foja 88 del expediente administrativo.

Cabe señalar, que la recomendación de la adjudicación definitiva de cada uno de los renglones de la Licitación Pública N° 29-93, hecha por la Comisión Evaluadora de la referida Licitación Pública tuvo como premisa, precisamente, el hecho de que las empresas recomendadas no sólo cumplieron con las especificaciones del pliego de cargos, sino que además, sus ofertas contaban con un criterio técnico positivo y ofrecían el precio más bajo para la Institución (f. 86).

Tal como se observa, para la adjudicación del Renglón N° 1 del aludido acto público se tomó en consideración diversos elementos, entre los que no sólo figuró el precio, sino la calidad y el cumplimiento de las especificaciones del pliego de cargos. A juicio de la Sala, la adjudicación hecha a través del primero de los actos impugnados no viola los artículo 24 y 39 de la Ley N° 3 de 1986, ya que si bien el precio ofrecido por PLÁSTICOS INTERNACIONALES, S. A. era competitivo desde el punto de vista de estas normas, no representaba para la Caja de Seguro Social la oferta más beneficiosa, requerimiento que es esencial para la adjudicación definitiva de los actos públicos, tal como establecen los artículos 47 y 50 del Código Fiscal. De acuerdo con el segundo párrafo de esta última disposición, la decisión final para adjudicar la licitación debe hacerse a la propuesta que represente mayor calidad al menor precio, lo que en el presente caso representaba la oferta de Suplidora Central, S. A.

Por las razones anotadas, la Sala desestima los cargos de violación a los artículos 24 y 39 de la Ley N° 31 de 1986.

En la demanda también se citan como violados los artículos 29 y 32 de la Ley N° 135 de 1943, los cuales guardan relación con la notificación de las resoluciones que ponen término a un negocio o actuación administrativa de carácter nacional. A juicio de la Sala, la infracción de estas disposiciones no se ha producido, pues, la ausencia de la notificación formal de la resolución original, así como la omisión en indicar en ella los recursos que contra la misma procedían y el término en que debían interponerse, quedaron debidamente subsanadas desde el momento en que la demandante, dándose por suficientemente enterada de la existencia del referido acto, utilizó oportunamente el recurso de reconsideración ante la Junta Directiva de dicha institución y recurrió posteriormente ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

Lo anterior es así en virtud de lo dispuesto en el aludido artículo 32, del cual se desprende que aún cuando no se haya observado los requisitos establecidos en los artículos 29 y siguientes de la Ley N° 135 de 1943 para efectuar la notificación de los actos administrativos, ésta se tiene como legalmente hecha si "la parte interesada, dándose por suficientemente enterada, convenga en ella o **utilice en tiempo los recursos legales**".

Finalmente, se citan como infringidos los artículos 32 del Decreto Ejecutivo N° 33 de 1985 y el artículo 34 de la Ley N° 135 de 1943, los cuales guardan relación con el término dentro del cual deben utilizarse los recursos gubernativos que procedan contra los actos administrativos. Aunque la apoderada de la actora no lo explica en forma clara, de la exposición de los cargos se deduce que estas normas fueron violadas porque la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, sin ninguna justificación, declaró extemporáneo el recurso de reconsideración presentado contra la Resolución N° 8547-93-J-D., del 18 de

noviembre de 1994.

Por razones de economía procesal, la Sala estima improcedente el examen de estos dos últimos cargos, toda vez que los mismos se refieren a la supuesta ilegalidad de la resolución que declaró extemporáneo el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución N° 8547-93-J. D., del 1° de julio de 1994, es decir, contra la resolución original.

En las demandas contencioso-administrativas de plena jurisdicción lo que realmente interesa es el examen de la legalidad de los actos que crearon la situación o el estado jurídico que lesiona derechos del demandante, esto es, la legalidad de los actos originales, de acuerdo con lo previsto en la parte final del artículo 43A de la Ley N° 33 de 1946, que releva de la presentación de la demanda contra los actos meramente confirmatorios. En el presente caso, si bien no se trata de un acto de esta naturaleza, es evidente que aún cuando se declare ilegal aquella resolución, la situación jurídica de la demandante no se modificaría en nada, habida cuenta de que los efectos de la resolución original se mantendrían firmes, tal como se vio al examinar los cargos de ilegalidad que se hicieron contra la misma.

Por estos motivos, la Sala considera improcedente el estudio de los cargos de ilegalidad que se hicieron contra la Resolución del 1° de julio de 1994, dictada por la Junta Directiva de la Caja de Seguros Social.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL la Resolución N° 8547-93-J. D., del 18 de noviembre de 1994, dictada por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social y NIEGA el resto de las declaraciones pedidas.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS AYALA, EN REPRESENTACIÓN DE LUISA DE DEGRACIA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA N° 2220-71-95 DE 12 DE ENERO DE 1995, DICTADA POR EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Carlos Ayala, actuando en nombre y representación de **LUISA DE DEGRACIA**, ha promovido demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Nota N° 2220-71-95 de 12 de enero de 1995, dictada por el Director Administrativo del Ministerio de Vivienda.

La parte actora solicita además que se le restituya al cargo que ocupaba en el Ministerio de Vivienda y que se le pague los salarios caídos correspondientes. Por medio del acto impugnado, el Director Administrativo del Ministerio de Vivienda notificó a la señora **LUISA DE DEGRACIA**, que a partir del 16 de enero de 1995, se daban por terminadas sus relaciones laborales con ese Ministerio, fundamentando este hecho en razones de Reorganización Administrativa de la Nueva Administración. La autoridad demandada invocó los artículos 62 y 65 de la Ley 4 del 13 de enero de 1961, artículo 5° y 12 del Decreto de Gabinete N° 137 de 30 de mayo de 1969 y el artículo 629 del Código Administrativo. (fs. 18).

Al admitirse la presente demanda se corrió en traslado al señor Procurador de la Administración quien, mediante la Vista Fiscal N° 322 de 1 de agosto de 1995, solicitó a esta Sala denegar las pretensiones del demandante (fs. 37-41); además, se solicitó al funcionario demandado que rindiera el informe de conducta a que se refiere el artículo 33 de la Ley 33 de 1946, lo que hizo oportunamente (fs. 34-36).

La parte actora estima que el acto administrativo impugnado viola el artículo 197 de la Ley 9 de 20 de junio de 1994, "Por la cual se establece y regula la Carrera Administrativa", y el artículo 629 del Código Administrativo, cuyo texto transcribimos a continuación:

> **Ley N° 9 de 20 de junio de 1994.**
> "Artículo 197. Esta ley deroga en todas sus partes el Decreto de Gabinete N° 1 de 26 de diciembre de 1989, el Decreto de Gabinete N° 20 de 1 de febrero de 1990, el Decreto de Gabinete N° 48 de 20 de febrero de 1990 y todas aquellas normas que le sean contrarias."
>
> **Código Administrativo.**
> "Artículo 629. Corresponde al Presidente de la República, como suprema autoridad administrativa:
> ...
> 3° Dirigir la acción administrativa, nombrando y removiendo a sus agentes, reformando o revocando los actos de estos y dictando todas las providencias necesarias en todos los ramos de la administración.
> ...
> 18° Remover a los empleados de su elección, salvo cuando la Constitución o las leyes dispongan que no son de libre remoción."

En el concepto de la infracción de las normas transcritas el demandante indicó que éstas se han violado porque al promulgarse la Ley N° 9 de 1994 quedaron derogadas tácitamente la Ley N° 4 de 1961 y el Decreto N° 137 de 1969, ambos sobre administración de personal en el sector público, por lo que la destitución de la señora **LUISA DE DEGRACIA** se fundamentó en normas derogadas que no pueden ser aplicadas desde la vigencia de la nueva ley; y porque la señora **LUISA DE DEGRACIA** quien fue nombrada mediante Decreto Ejecutivo firmado por el Presidente de la República y por el Ministro de Vivienda (Órgano Ejecutivo) no fue destituida por la autoridad nominadora, sino por el Director Administrativo de la institución, violando los principios de que un inferior no puede sustituir a un superior sin autorización y de que las cosas se deshacen en la misma forma en que se hacen. (Fs. 7-8).

A estos cargos se opuso el señor Procurador de la Administración expresando que, la señora **LUISA DE DEGRACIA** no estaba amparada por una ley de carrera administrativa, ya que no ingresó al Ministerio de Vivienda por concurso alguno, sino por el sistema de libre nombramiento, por lo que su destitución era potestad discrecional de la autoridad nominadora; y que la nota de destitución fue firmada por una autoridad competente como lo es el Director Administrativo del Ministerio de Vivienda, y además la autoridad demandada aportó con su informe de conducta, copia autenticada del Decreto de Personal N° 18 de 8 de febrero de 1995, mediante el cual el Presidente de la República y el Ministro de Vivienda, ordenan la destitución de la señora **LUISA DE DEGRACIA**, desde el 16 de enero de 1995, tal como lo expresó el Director Administrativo en la nota impugnada. (Fs. 39-40).

Al analizar los cargos expuestos, esta Sala considera que no le asiste razón a la parte actora en virtud de las consideraciones que pasaremos a exponer.

Observa la Sala que, al momento de su destitución, la señora **LUISA DE DEGRACIA** no estaba amparada por una ley que le garantizara un sistema de nombramiento, ascenso, traslado, destitución, cesantía y jubilación de conformidad con los artículos 297 y 300 de la Constitución Nacional. Como lo ha manifestado esta Corporación de Justicia en reiteradas ocasiones, la carrera administrativa fue regulada mediante la Ley N° 11 de 1955, en la que se estableció un régimen de estabilidad para los empleados públicos, que fue desarrollado mediante la Ley N° 4 de 13 de enero de 1961 sobre administración de personal en

el sector público. Después del golpe de Estado del 11 de octubre de 1968, el régimen de estabilidad de la referida Ley 4 fue suspendido por el Decreto de Gabinete N° 137 de 30 de mayo de 1969, que la reformó sustancialmente. También el Decreto Ejecutivo N° 116 de 10 de octubre de 1984, por el cual se desarrollaba y reglamentaba la estabilidad de los servidores públicos, fue derogado por el artículo 3 del Decreto de Gabinete N° 1 de 26 de diciembre de 1989, por su ostensible incompatibilidad con el último párrafo del artículo 300 de la Constitución Política.

Si bien, como lo afirma el recurrente actualmente está vigente la Ley N° 9 de 20 de junio de 1994 que reestablece y regula la Carrera Administrativa y que deroga el Decreto de Gabinete N° 1 de 1989 y todas las normas que le sean contrarias, incluyendo la Ley N° 4 de 1961 y el Decreto de Gabinete N° 137 de 1969, ésta en su artículo 198 dispone, que la "incorporación de los diversos niveles funcionales e instituciones de la administración pública a la carrera administrativa, será progresiva, y se hará mediante acuerdo del Consejo de Gabinete" y en atención al cronograma establecido en esa norma. Como el Ministerio de Vivienda no ha sido incorporado a la Carrera Administrativa, la Sala comparte el criterio de la Procuraduría de la Administración, al afirmar que la señora **LUISA DE DEGRACIA** al momento de su destitución, no estaba amparada por una ley de carrera administrativa, y por tanto, no gozaba de estabilidad en la posición que ocupaba en el Ministerio de Vivienda, pudiendo la autoridad nominadora destituirla a su discreción.

En relación con el cargo de violación del artículo 197 de la Ley N° 9 de 1994, que enuncia las disposiciones derogadas por esta Ley, considera la Sala que no puede ser invocado por la señora **LUISA DE DEGRACIA** como fundamento para alegar estabilidad en el cargo y por tanto, no se ha violado.

En cuanto al cargo de violación del artículo 629 del Código Administrativo, observa la Sala que la nota impugnada en esta demanda fue suscrita por el Director Administrativo del Ministerio de Vivienda el 12 de enero de 1995 y ratificada por la autoridad nominadora al expedir el Decreto de Personal N° 18 de 8 de febrero de 1995, tal como consta a foja 32 del expediente. La nota impugnada fue notificada a la señora **LUISA DE DEGRACIA** el 13 de enero de 1995 (fs. 18), comunicándole que cesaba en sus labores con el Ministerio de Vivienda a partir del 16 de enero de 1995, y desde esa misma fecha rige el Decreto de destitución dictado por la autoridad nominadora. Por tanto, la Sala considera que al expedirse el acto impugnado no se incurrió en abuso ni desvío de poder, y tampoco se ha violado el artículo 629 del Código Administrativo.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, la Nota N° 2220-71-95 de 12 de enero de 1995, dictada por el Director Administrativo del Ministerio de Vivienda, y NIEGA las otras declaraciones pedidas.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE VÁSQUEZ Y VÁSQUEZ, EN REPRESENTACIÓN DE PLASTIC WORLD, INC., PARA QUE SE DECLARE NULA LA RESOLUCIÓN N° 166 DE 11 DE DICIEMBRE DE 1991 DICTADA POR LA DIRECCIÓN DE COMERCIO INTERIOR DEL MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense Vásquez y Vásquez, actuando en nombre y representación de la sociedad **PLASTIC WORLD, INC.**, presentó ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 166 del 11 de diciembre de 1991, expedida por la Dirección General de Comercio Interior del Ministerio de Comercio e Industrias, el acto confirmatorio y para que se haga otras declaraciones.

Mediante la primera de las resoluciones acusadas, la Directora General de Comercio Interior del Ministerio de Comercio e Industrias negó la demanda promovida por PLASTIC WORLD, INC. para obtener la cancelación de los registros de la marca "TRUE VALUE" expedidos a favor COTTER & COMPANY, representados en los certificados N° 047104, 047105, 047106, 047108 y 047137. En la misma resolución se decidió la demanda de reconvención introducida por COTTER & COMPANY ordenando la cancelación de los certificados de registro N° 030753, 030754, y 030758, expedidos originalmente a favor de GIGANTE, S. A., quien posteriormente los cedió a la ahora demandante PLASTIC WORLD, INC. El acto original fue confirmado por el Ministro de Comercio e Industrias a través de la Resolución N° 92, del 23 de septiembre de 1992.

La parte actora estima que los actos acusados violan los artículos 589, 647, 722 (ordinal 3°) y 775 del Código Judicial; el artículo 91 de la Ley N° 32 de 1927; el artículo 1 del Protocolo sobre Registro Interamericano de Marcas de Fábrica, ratificado por Panamá mediante Ley N° 64 de 1934; el artículo 2023 del Código Administrativo y el artículo 15 del Decreto Ejecutivo N° 1 del 3 de marzo de 1939.

La primera disposición que se estima infringida es el artículo 589 del Código Judicial, que es del tenor siguiente:

> "Artículo 589. Las sociedades o corporaciones extranjeras domiciliadas en otro país, con negocios o establecimientos permanentes en Panamá, deberán constituir en el lugar o lugares donde tengan tales negocios, apoderados o agentes con capacidad para representarlas. Para tal efecto otorgarán el respectivo poder ante un Notario u otro funcionario competente con arreglo a las leyes del lugar, en que harán constar acerca de la persona o personas que tengan facultad para representar a la respectiva sociedad o corporación. Dicho documento será protocolizado en una Notaría de Circuito e inscrito en el Registro Público."

En el concepto de la infracción la apoderada del actor indicó que la norma transcrita fue violada porque las resoluciones acusadas desconocen su contenido frente a la documentación por la cual se pretendió acreditar la existencia de COTTER & COMPANY y la personería ad procesum, al no exigírsele su cumplimiento, a pesar de que en autos consta que no está inscrita en Panamá ni tiene apoderado designado.

El artículo 647 del Código Judicial establece lo que sigue:

> "Artículo 647. Las sociedades extranjeras que, según la ley, no requieren licencia para operar en territorio panameño, no necesitan estar inscritas en el Registro Público para comparecer en proceso. No obstante, deberán acreditar su existencia mediante una certificación expedida con arreglo a la ley del país de su domicilio, debidamente autenticada.
>
> Del mismo modo señalado en el párrafo anterior deberá acreditar el demandante la existencia de la sociedad extranjera a quien se pretenda demandar.
>
> El poder otorgado en el extranjero para representar en proceso a la sociedad deberá incluir o estar acompañado de certificación,

conforme a la cual quien actúa por ella está debidamente facultado para dicho acto.

Por el hecho de la autenticación de la autoridad diplomática o consular, se presume que los poderes y certificaciones de que trata este artículo están expedidos conforme a la ley local de su origen, a no ser que parte interesada pruebe lo contrario."

En opinión de la demandante, esta norma ha sido violada porque en las resoluciones acusadas se aceptó como buena la certificación expedida por las autoridades del Estado de Delaware, uno de los cincuenta Estados de los Estados Unidos de América, como si hubiese sido expedida con arreglo a la ley del país de su domicilio, cuando las leyes del país a que se refiere dicha norma es la del Estado Nacional, con personalidad jurídica internacional, que en este caso son los Estados Unidos de América, tal como lo certifica el Ministro de Relaciones Exteriores.

El artículo 775 del Código Judicial, que se cita como violado, establece lo siguiente:

"Artículo 775. Toda ley, Decreto-Ley, decreto de Gabinete, acuerdo, ordenanza, reglamento, resolución, dictamen, informe, fallo, documento o acto de cualquier género, emanado de alguna autoridad o funcionario de cualquier órgano del Estado, o de un Municipio de cualquier entidad autónoma o semiautónoma o descentralizada y publicado en los Anales del Órgano Legislativo, en la Gaceta Oficial, en el Registro Judicial, en el Registro de la Propiedad Industrial, en cualquier recopilación o edición de carácter oficial o de la Universidad Nacional, hará plena prueba en cuanto a la existencia y contenido del documento. Se presumirá que los Jueces tienen conocimientos de los actos o documentos oficiales así publicados y valdrán en demandas, peticiones, alegatos y otras afirmaciones de las partes, sin necesidad de que consten en el proceso. El Juez podrá hacer las averiguaciones que desee para verificar la existencia o contenido de tales actos.

Las partes podrán no obstante, aportar el respectivo documento o acto si así lo desearen.

Exceptúase el caso en que el acto en cuestión sea objeto de la demanda, en el cual se aportará conforme a las normas comunes."

En el concepto de la infracción, la actora manifiesta que esta norma se violó en forma directa por las resoluciones acusadas, ya que ambas desconocieron la existencia y el contenido del Boletín de la Propiedad Industrial, N° 6, del 31 de agosto de 1971 de 1971, en el cual aparece la solicitud de registro N° 51165 para el registro de la marca de fábrica nacional denominada TRUE VALUE a favor de Gigante, S. A., con constancia de los productos que amparaba y la fecha de uso de la marca por parte de la peticionaria, todo lo cual data del mes de enero de 1971. En virtud de este desconocimiento se violó el derecho de preferencia por la antigüedad en el uso que existía a favor de PLASTIC WORLD, INC.

Sostiene el actor, que los actos atacados violan el artículo 91 de la ley N° 32 de 1927, disposición que preceptúa lo siguiente:

"Artículo 91. Las sociedades anónimas extranjeras que actúen dentro de la República y que no hayan cumplido con los requisitos de esta ley no podrán iniciar procedimientos judiciales o de otra clase ante los tribunales o autoridades de la República, pero podrán ser demandadas en toda clase de juicios, ante las autoridades judiciales o administrativas, y además tendrán que pagar una multa hasta de cinco mil balboas que será impuesta por la Secretaría de Hacienda y Tesoro."

En opinión del recurrente, esta disposición fue violada por los actos

atacados al permitirle a COTTER & COMPANY que actúe como demandada y demandante en la jurisdicción administrativa, cuando la misma es una sociedad extranjera que no puede ejercer acciones de ninguna clase en nuestro país por no haber cumplido con los requisitos de dicha ley.

También se considera violado el artículo 1° de la Ley N° 64 de 1934, mediante la cual se aprobó el Protocolo sobre Registro Interamericano de Marcas de Fábrica, cuyo contenido expresa lo siguiente:

> "Artículo 1. Las personas naturales o jurídicas domiciliadas o que posean un establecimiento fabril o comercial o una explotación agrícola en cualquiera de los Estados que hayan ratificado o se hayan adherido al presente Protocolo podrán obtener la protección de sus marcas mediante el registro de las mismas en la Oficina Interamericana de Marcas."

En opinión de la firma Vásquez y Vásquez éste precepto se violó porque las resoluciones acusadas lo aplicaron a pesar de que no estaba vigente en virtud de las sucesivas denuncias hechas por los países ratificantes a partir del 18 de noviembre de 1946 y la oficina creada por dicho Protocolo cerró el 2 de noviembre de 1949.

El artículo 2023 del Código Administrativo, que también se considera infringido, dispone lo siguiente:

> "Artículo 2023. El individuo o compañía que primero haga uso de una marca de fábrica o de comercio, es el único que tiene derecho a adquirir la propiedad de ella. En caso de disputa entre dos o más poseedores de una misma marca la propiedad pertenece al primer poseedor, y si la antigüedad de la posesión fuese una misma, al primero que haya solicitado el registro de la oficina respectiva."

El actor manifiesta que las resoluciones impugnadas infringieron el precepto transcrito al desconocer el derecho preferente de PLASTIC WORLD, INC., quien adquirió de Gigante, S. A., los derechos sobre la marca "True Value", mediante los certificados de registro N° 030753, 030754 y 030758, todos del 30 de marzo de 1983, los cuales eran producto de haberse renovado los mismos. La solicitud e inscripción original data del año 1971, tal como se acredita en el Boletín de la Propiedad Industrial antes citada, hecho que prueba además, según la demandante, que la marca fue usada desde el 1° de enero de 1971 por la sociedad peticionaria (Gigante, S. A.) en la República de Panamá.

La apoderada de la actora considera que los actos acusados violaron el artículo 15 del Decreto Ejecutivo N° 1 de 3 de marzo de 1939, norma que a continuación transcribimos:

> "Artículo 15. La persona natural o jurídica que primero haya hecho uso de una Marca de Fábrica en el país, es la única que tiene derecho a registrar tal Marca de Fábrica como marca nacional, para amparar productos fabricados en el país, aún cuando esa persona esté domiciliada en el exterior.
>
> La persona natural o jurídica que haya registrado una Marca de Fábrica en el exterior, es la única persona que tiene derecho a registrar tal Marca de Fábrica en el país, como marca extranjera."

A juicio de la demandante, los actos acusados violaron la transcrita disposición porque desconocieron el derecho preferente de Gigante, S. A. (quien cedió su derecho a PLASTIC WORLD INC.) sobre el uso exclusivo de la marca "TRUE VALUE", a pesar de que se acreditó el uso de dicha marca por parte Gigante, S. A., desde el año de 1971, mediante la publicación aparecida en el Boletín N° 6, año 1971, de la Dirección de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias.

Finalmente, el apoderado del actor estima que todo lo actuado en el

procedimiento gubernativo está viciado de nulidad insubsanable por la ilegitimidad de la personería de COTTER & COMPANY, con lo cual se violó directamente por omisión el numeral 3° del artículo 722 del Código Judicial.

Mediante Nota DGCI-00-93 del 11 de enero de 1993 la Directora General de Comercio Interior remitió a la Sala su informe de conducta (fs. 39-40), mientras que el entonces Procurador de la Administración contestó la demanda mediante Vista N° 404 de 2 de septiembre de 1993 (fs. 148-160).

Como parte interesada en este negocio intervino COTTER & COMPANY, quien a través de su apoderada judicial se opuso a las pretensiones de la demandante. (Cfr. fs. 128-147).

CONSIDERACIONES DE LA SALA TERCERA

Con relación a la violación del artículo 589 del Código Judicial, la Sala estima que no es aplicable al presente caso, pues el mismo se refiere a sociedades o corporaciones extranjeras domiciliadas en otro país **"con negocios o establecimientos permanentes en Panamá"**, lo que no ocurre en el caso de la sociedad COTTER & COMPANY quien no tiene negocios ni establecimientos permanentes en territorio panameño. De allí, que para acreditar su existencia jurídica no debía cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 589 del Código Judicial, sino con lo dispuesto en el artículo 647 del mismo Código. Por estas razones se desestima el primer cargo.

En cuanto a la alegada violación del artículo 647 del Código Judicial, la Sala estima que no le asiste razón a la demandante. Esta norma dispone que las sociedades extranjeras deben probar su existencia mediante una certificación expedida **"con arreglo a la ley del país de su domicilio, debidamente autenticada"**. La certificación que acredita la existencia de COTTER & COMPANY está debidamente autenticada por el Cónsul General de Panamá en Chicago, Illinois, Estados Unidos de América y, por esta circunstancia, se presume que está expedida conforme a la ley local de su origen, de acuerdo con lo dispuesto en la parte final del artículo 647 del Código Judicial antes citado. Así lo expresó la Sala en el Auto del 31 de julio de 1995, mediante el cual declaró no probado el incidente de nulidad por ilegitimidad de personería promovido por PLASTIC WORLD, INC. contra COTTER & COMPANY, dentro de este mismo negocio (Cfr. Registro Judicial de julio de 1995, págs. 388-391).

En lo que respecta a la violación del artículo 775 del Código Judicial, la Sala estima que ésta tampoco se ha producido. Cuando la norma en mención se refiere a los documentos que han de tener el carácter de plena prueba en cuanto a su existencia y contenido, por el hecho de estar publicadas en la Gaceta Oficial, en el Registro Judicial, en el Registro de la Propiedad Industrial etc., alude específicamente a dictámenes, fallos, documentos o actos de cualquier género **"emanado de alguna autoridad o funcionario de cualquier órgano del Estado, o de un Municipio", etc.** La publicación aparecida en la página 54 del Boletín de la Propiedad Industrial N° 6, año 1971, referente a la marca "TRUE VALUE" constituye simplemente **una solicitud** hecha por Gigante, S. A. para el registro de dicha marca y de ella no se infiere derecho alguno a favor de esa sociedad ni se demuestra tampoco que la marca "TRUE VALUE" fue usada primero por la misma. En el hecho cuarto de la demanda promovida ante el Ministerio de Comercio e Industrias, PLASTIC WORLD, INC. afirma que "A la terminación de la vigencia del Registro de la Marca "TRUE VALUE" hecho en 1973, GIGANTE, S. A. la volvió a registrar en 1983", pero no ha presentado el certificado que se le expidió en 1971. Si bien en el citado Boletín consta que se solicitó el Registro, no se sabe qué suerte corrió esa petición, si fue o no resuelta favorablemente o si caducó.

Con relación a la violación del artículo 91 de la Ley N° 32 de 1927, la Sala coincide con la opinión de la apoderada de COTTER & COMPANY, quien expresó que esta norma sólo se aplica a las sociedades anónimas extranjeras que actúen dentro de la República de Panamá. Como se indicó anteriormente, COTTER & COMPANY no tiene oficinas, establecimientos o negocios en nuestro país, por lo que la norma bajo examen no le es aplicable y, por tanto, no ha podido ser violada.

También se dice violado el artículo 1° de la Ley N° 64 de 1934, en virtud de que fue aplicado por las resoluciones acusadas a pesar de que el mismo no estaba vigente. Al examinar este cargo se hace necesario aclarar que la Ley N° 64 de 1934 no sólo aprobó la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, sino también el Protocolo sobre Registro Interamericano de Marcas de Fábricas y el anexo del Reglamento del mismo, hecho conocido y afirmado por la propia apoderada judicial de la demandante en el escrito de la advertencia de inconstitucionalidad que reposa de foja 41 a 54.

El artículo 1° del aludido Protocolo no ha podido ser violado, puesto que no fue aplicado. Cuando en las resoluciones impugnadas se cita la Ley N° 64 de 1934, se alude a la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial y no al Protocolo sobre Registro Interamericano de Marcas de Fábrica, tal como se infiere de la lectura de estas resoluciones. Por estas razones, la Sala también desestima este cargo.

En la demanda también se considera infringidos el artículo 2023 del Código Administrativo y el artículo 15 del Decreto Ejecutivo N° 1 de 1939, cargos serán examinados conjuntamente por la Sala en virtud de su estrecha vinculación.

Como se indicó en los cargos de violación de estas disposiciones, la demandante las considera infringidas porque las resoluciones acusadas no tomaron en cuenta el uso que la anterior propietaria (Gigante, S. A.), había dado a la marca "TRUE VALUE" desde 1971. La Sala considera que no es correcta esta afirmación, ya que con las copias de los anuncios publicitarios, la demandante no probó que usó dicha marca en los términos que establece el artículo 23 del Decreto Ejecutivo N° 1 de 1939. Esta disposición, al definir lo que se entiende por uso de una marca de fábrica, establece que el mismo no sólo comprende la colocación de los artículos, productos o mercancías amparados por la misma en el mercado nacional o internacional (que es en realidad lo que parece demostrar la demandante), sino también la "**producción, fabricación, elaboración o confección**" de los mismos.

PLASTIC WORLD, INC. probó que registró la marca de fábrica nacional "TRUE VALUE" mediante los certificados de registro N° 030753, N° 030754 y N° 030758 del 30 de marzo de 1983 y COTTER & COMPANY, probó el registro de la misma marca mediante la presentación de los certificados de registro N° 1,165,207, del 18 de agosto de 1981; N° 1,143,140 del 16 de diciembre de 1980; N° 1,164,419 del 11 de agosto de 1981; N° 1,165,206 del 18 de agosto de 1981 y N° 1,131,206 del 26 de febrero de 1980, expedidos en los Estados Unidos de América (fs. 74-85). Del examen de estos documentos se desprende que COTTER & COMPANY probó que su registro de la referida marca de fábrica en los Estados Unidos de América es anterior al que Gigante, S. A. obtuvo en la República de Panamá, esto es, el 30 de marzo de 1983.

El citado artículo 15 del Decreto Ejecutivo N° 1 de 1939, que el propio actor cita como violado en la demanda, establece que la persona natural o jurídica "**que haya registrado una Marca de Fábrica en el exterior, es la única persona que tiene derecho a registrar tal Marca extranjera**". Como COTTER & COMPANY registró la marca "TRUE VALUE" en los Estados Unidos de América con antelación al registro hecho en Panamá por Gigante, S. A., el derecho exclusivo de la primera de registrar dicha marca en nuestro país, es incuestionable.

Cabe agregar, que el derecho de COTTER & COMPANY de registrar en forma exclusiva la marca "TRUE VALUE" en nuestro país, se fundamenta también en el artículo 7 de la Convención General Interamericana de Marcas de Fábrica y de Comercio, aprobada mediante la Ley N° 64 de 1934. Este es el precepto que se aplicó al emitir el acto administrativo impugnado y no el artículo 1° del Protocolo sobre Registro Interamericano de Marcas de Fábrica, tal como afirma la parte actora. Esta norma consagra el derecho de todo propietario de una marca legalmente registrada en uno de los Estados Contratantes, de oponerse al uso, registro o depósito de una marca sustancialmente igual a la suya o susceptible de producir confusión o error en el adquirente o consumidor, probando que la persona que la usa o intenta registrar o depositar, tenía conocimiento de su existencia y uso en cualquiera de los Estados Contratantes. En consecuencia, el

propietario "podrá reclamar para sí el derecho a usar preferente y exclusivamente, o la prioridad para registrar o depositar su marca en el país de que se trate, siempre que llene las formalidades establecidas en la legislación interna" y en dicha Convención.

En el caso bajo examen, Gigante, S. A. tenía conocimiento de la existencia y comercialización de la marca "TRUE VALUE" por parte de COTTER & COMPANY, tanto en el mercado nacional como internacional, desde antes de la fecha en que registró en Panamá la aludida marca (30 de marzo de 1983), tal como lo demuestra el hecho de que ambas empresas celebraron en 1970 un contrato de agencia para la venta de mercancía y suministro de servicios ofrecidos por COTTER & COMPANY, el cual fue protocolizado el 26 de marzo de 1984 (fs. 118-125); así como también, los anuncios de venta de los productos "TRUE VALUE" en el extranjero aportados por la demandante, en uno de los cuales aparece una oferta de estos productos en fecha anterior al 17 de marzo de 1983 (f. 364 del expediente de la demanda de cancelación del Registro N° 030754, Clase 6), es decir, antes de que Gigante, S. A. obtuviera los registros de esa misma marca en Panamá.

Por los anteriores motivos, la Sala concluye en que no se ha producido la infracción del artículo 2023 del Código Administrativo ni del artículo 15 del Decreto Ejecutivo N° 1 del 3 de marzo de 1939.

Finalmente, la apoderada de la actora considera que se ha violado el numeral 3° del artículo 722 del Código Judicial, ya que COTTER & COMPANY carece de legitimación procesal para actuar dentro de este negocio. Sobre el particular, debemos señalar, que este aspecto fue examinado por la Sala en el Auto del 31 de julio de 1995, mediante el cual declaró no probado el incidente de ilegitimidad de personería promovido por PLASTIC WORLD, INC. contra COTTER & COMPANY dentro de este mismo proceso. La parte pertinente de ese fallo y que también sirve de fundamento a la Sala para desestimar el presente cargo, es del tenor siguiente:

> "La persona jurídica COTTER & COMPANY es una sociedad extranjera constituida de acuerdo a las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América y está domiciliada en los Estados Unidos de América. Como sociedad extranjera que no opera ni tiene domicilio en la República de Panamá, tiene que acreditar su existencia de conformidad con lo previsto en la disposición transcrita para hacer valer sus derechos ante los tribunales panameños.
>
> La Sala estima que la certificación expedida por el Secretario de Estado del Estado de Delaware para probar la existencia de dicha sociedad cumple con lo exigido en la citada norma, al igual que el poder otorgado a la firma forense Arias, Fábrega y Fábrega. El referido poder está acompañado de una certificación suscrita por el Vicepresidente de COTTER & COMPANY, en la cual se hace constar que el poderdante, Douglas C. Davidson, está facultado para otorgar poderes a favor de la aludida firma, con relación a la presentación de ciertos juicios de cancelación con el Departamento de la Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industrias de la República de Panamá. Ambos documentos fueron otorgados ante Notario Público y, al igual que la certificación expedida por el Secretario de Estado del Estado de Delaware, están autenticadas por el Cónsul General de Panamá en Chicago, Illinois, Estados Unidos de América, por lo que de acuerdo a la parte final del artículo 647, "**se presume que están expedidos conforme a la ley local de su origen**", presunción ésta que el incidentista no ha logrado desvirtuar." (Registro Judicial de julio de 1995, págs. 388-391).

Las razones anotadas permiten a la Sala concluir que no se han producido las infracciones alegadas por la demandante y sí procede a declararlo.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL la Resolución N° 166, del 11 de diciembre de 1991, expedida por la Directora General de Comercio Interior y NIEGA el resto de las

declaraciones pedidas.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA ARROCHA, BLANDÓN, CASTRO & YOUNG EN REPRESENTACIÓN DE ROGELIO MORENO. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Licenciado **JOSÉ BLANDÓN FIGUEROA**, de la firma forense **ARROCHA, BLANDÓN, CASTRO Y YOUNG**, en representación de **ROGELIO MORENO ORTEGA**, ha interpuesto Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción para que se declara nula, por ilegal, la negativa tácita por silencio administrativo incurrido por el Ministro de Gobierno y Justicia al no contestar el recurso de reconsideración interpuesto contra el Decreto de Personal N° 128 de 3 de abril de 1995, emitido por el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Gobierno y Justicia y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador del caso en examen, mediante auto calendado 30 de octubre de 1995, que reposa a fs. 13-15, decidió **NO ADMITIR** la demanda porque la misma adolece de diversos defectos, tal como se observa a continuación:

> "Al examinar la demanda se observa que la misma adolece de diversos defectos. En primer lugar, observa quien suscribe, que la parte actora dirige equivocadamente su acción contra la negativa tácita por silencio administrativo incurrida por el Ministerio de Gobierno y Justicia, al no contestar el recurso de reconsideración interpuesto contra el Decreto de Personal N° 128 de 3 de abril de 1995, emitido por el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Gobierno y Justicia. Tal como dispone el artículo 29 de la Ley 33 de 1946, no es necesario dirigir la demanda contra los actos confirmatorios, sino que es un requisito sine qua non para la admisibilidad de la misma dirigirla contra el acto administrativo original, que a juicio de la parte actora, es ilegal, situación que a todas luces se desconoce en este caso.
>
> O sea, la petición debía dirigirse contra el Decreto de Personal N° 128 de 3 de abril de 1995, que se consideró negado por el silencio administrativo.
>
> En segundo lugar, al examinar la demanda se observa que la misma no cumple con el requisito establecido en el artículo 44 de la Ley 135 de 1943, debido a que no existe constancia que el acto impugnado se encuentra debidamente notificado.
>
> Esta Sala ha sido constante en mantener el criterio que todo acto administrativo impugnado requiere no sólo su autenticación sino la constancia de la notificación del mismo para demostrar el agotamiento de la vía gubernativa. El libelo de la demanda deberá acompañarse de estas constancias, pues de no ser así, la misma se encontrará deficientemente propuesta. Incluso, estipula el artículo 46 de la Ley 135 de 1943, que, de encontrarse imposibilitado de cumplir con lo establecido en el artículo 44 de la ley en mención, el demandante podrá optar por enunciar las oficinas donde se

encuentra ubicado el original para que sea el Magistrado Sustanciador quien las solicite previamente a la admisión de la demanda. En este caso, no se acreditó la notificación ni se formula la petición expresa a que se refiere el artículo 46 antes mencionado.

En vista que la demanda adolece de varios defectos que hacen imposible su admisión, lo procedente es, pues, no admitirla".

La parte actora al notificarse de tal resolución el 15 de noviembre de 1995, presentó y sustentó formal recurso de apelación contra la misma alegando primeramente que el argumento esencial del Magistrado Sustanciador de que la demanda ha sido enderezada contra el acto confirmatorio consistente en la negativa tácita por silencio administrativo y no contra el acto original, no constituye motivo de inadmisiblidad cuando del texto expreso y del espíritu del recurso se desprende claramente que el mismo va dirigido contra la resolución original y el acto confirmatorio.

En segundo lugar, alega que el articulo 44 de la Ley 135 de 1943, no expresa taxativamente que deba dejarse constancia de la notificación de la resolución impugnada, ya que este requisito se satisface si se hace constar la ejecución del acto impugnado, requisito este que considera haber llenado a cabalidad, con la presentación del Orden del Día debidamente autenticado, en el cual consta que se ha dado de baja o destituido.

La señora Procuradora de la Administración, mediante su vista Fiscal N° 539 de 19 de diciembre de 1995, presentó sus objeciones al recurso de apelación interpuesto contra el Auto de 30 de octubre de 1995, por razón de que el apoderado del demandante omitió cumplir ciertas formalidades indispensables para la admisión de la demanda, señaladas en los artículos 42, 44 y 46 de la Ley 135 de 1943, modificada por la Ley 33 de 1946.

Encontrándose el proceso en este esta, este Tribunal de segunda instancia procede a emitir las siguientes consideraciones finales.

Estima este Tribunal de apelaciones que efectivamente, el demandante no ha comprobado debidamente el agotamiento de la vía gubernativa, pese a que aduce que la misma se produjo en virtud de la negativa tácita de la Administración al no pronunciarse dentro de los dos meses siguientes a la interposición del recurso de reconsideración que interpusiera el día 24 de mayo de 1995, ante el despacho del Distrito de Gobierno y Justicia contra el Decreto Personal N° 128 de 3 de abril de 1995, por el cual se le destituyó de la Posición N° 652, planilla 146 con funciones de Teniente en la Policía Nacional.

Ha sido doctrina constante y reiterada de este Tribunal, que al ser considerado el silencio administrativo un acto presunto proveniente de la administración, al no pronunciarse dentro del término legal estipulado sobre una solicitud o recursos que le han sido presentado, dicha negativa debe ser probada a través del memorial auténtico contentivo del recurso con fecha de presentación ante la entidad gubernativa, previa certificación de que sobre el mismo no ha recaído pronunciamiento.

Inclusive, de no ser posible acompañar tal certificación, el demandante debe solicitarle al Magistrado Sustanciador para que en ejercicio de la potestad que le confiere el artículo 46 de la Ley 135 de 1943, lo solicite, previo trámite de admisión de la demanda. Al respecto cfr. Autos de 6 de noviembre de 1978, 1° de junio de 1995 y 3 de agosto de 1995.

En este caso, observamos que el recurrente no ha acompañado a su libelo, copia debidamente autenticada del memorial contentivo del recurso de reconsideración con sello de recibido, que alega haber interpuesto el día 24 de mayo de 1995, contra el Decreto de Personal N° 128 de 3 de abril de 1995, ante el señor Ministro de Gobierno y Justicia. Acompañando únicamente tal como se aprecia a fojas 6, la solicitud de certificación de la referida negativa.

Esta sola constancia probatoria como lo señalamos anteriormente, no es suficiente para acreditar el agotamiento de vía gubernativa o silencio administrativo ya que impide a esta Sala verificar si la acción está en término o está prescrita según lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 33 de 1946. Máxime cuando el decreto de personal impugnado al parecer, le fue notificado al recurrente el 16 de abril 1995, y no es hasta el 15 de septiembre de 1995, transcurridos 5 meses, en que ocurre ante esta Sala en Demanda Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción.

El incumplimiento de este requisito impide darle curso legal a la presente demanda.

En lo que respecta a que la demanda interpuesta por la citada firma forense, se dirigió contra un acto confirmatorio, consistente en la negativa tácita por silencio administrativo, en que ocurrió el referido funcionario, y no contra el acto original, cual es el Decreto de Personal N° 128 de 3 de abril de 1995. Este Tribunal de alzada estima, que si bien en el petitum de la demanda se omitió solicitar la nulidad del acto original, en la parte inicial de la misma se solicitó "que se declare **ILEGAL**". el resuelto de Personal impugnado, hecho este que de conformidad con lo establecido en el artículo 469 del Código Judicial, viene a subsanar el incumplimiento de este requisito, aunque es censurable que tal petición no se haya hecho de manera, clara, expresa, y ordenada en el petitum de la demanda, tal como lo ordena el numeral 2 del Artículo 28 de la Ley N° 30 de 1946.

El artículo 469 del Código Judicial estable lo siguiente:

> "ARTÍCULO 469: Cualquier error o defecto en la identificación, denominación o calificación de la acción, excepción, pretensión, incidente, o recurso, o del acto, de la relación o del negocio de que se trate, no es óbice para que el Juez acceda a lo pedido de acuerdo con los hechos invocados y la prueba practicada, si la intención de la parte es clara."

En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMAN el Auto de 30 de octubre de 1995, que NO ADMITE la demanda Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción interpuesta por la firma forense ARROCHA, BLANDÓN, CASTRO y YOUNG, en representación de ROGELIO MORENO ORTEGA.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO GENARINO ROSAS EN REPRESENTACIÓN DE ANTONIO GORDÓN LÓPEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO DE PERSONAL N° 138 DE 14 DE MARZO DE 1994, EXPEDIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Genarino Rosas, actuando en nombre y representación de **ANTONIO GORDÓN LÓPEZ** ha promovido demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto de Personal N° 138

de 14 de marzo de 1994, expedido por el Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Educación.

Mediante el acto impugnado se declaró sin efecto el Decreto N° 51 de 16 de junio de 1989, en lo referente al nombramiento del señor **ANTONIO GORDÓN LÓPEZ** en la posición N° 20742, como Educador A-1 de Educación Física Permanente, en la Escuela República de China.

En los hechos de la demanda la parte actora señala que el educador **ANTONIO GORDÓN LÓPEZ** ingresó al ramo de educación, según consta en su hoja de servicio, mediante el Decreto de Personal N° 228 de 17 de septiembre de 1982, nombrado como maestro de 3ra. categoría de educación física en la Escuela República de China (fs. 39 y 50); que el 1 de junio de 1987, de conformidad con el Decreto de Personal N° 136, pasó a ser Educador A-1 interino en la Escuela República de China (fs. 51); que mediante el Decreto N° 51 de 16 de junio de 1989 fue nombrado Educador A-1 Permanente con su correspondiente aumento de sueldo (fs. 52); y que siempre realizó una labor docente dentro del Ministerio de Educación, como lo acredita la documentación que reposa en los archivos de ese Ministerio. (Fs. 12-13).

Admitida la demanda se corrió traslado de la misma al Procurador de la Administración, y se solicitó al Ministro de Educación que rindiera el informe de conducta a que se refiere el artículo 33 de la Ley 33 de 1946. Al rendir su informe mediante la Nota N° DNAJ/104-04 de 10 de enero de 1994, el Ministro de Educación señaló lo siguiente:

> "Teniendo un nombramiento permanente en el Ministerio de Educación, el Instituto Nacional de Deportes con el Resuelto N° 16 de 12 de febrero de 1990, nombra al señor **ANTONIO GORDÓN** como Técnico en Entrenamiento II, permanente, con funciones de Administrador de la Piscina Adán Gordón, tal como se observa en la certificación con fecha 7 de febrero de 1994, que suscribe el ex-Director General señor Armando Canales.
>
> En estas circunstancias, y con fundamento en el artículo 298 de la Constitución Nacional, que señala que los servidores públicos no podrán devengar dos o más salarios pagados por el Estado y el artículo 114 de la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, que establece que no se podrán tener dos cargos permanentes dentro del Ministerio de Educación; se procedió mediante el Decreto de Personal N° 138 de 14 de marzo de 1994, a declarar sin efecto el Decreto N° 51 de 16 de junio de 1989 que nombraba a **ANTONIO GORDÓN** como maestro de Educación Física, permanente, en la Escuela República de China.
>
> Cabe destacar que en la certificación expedida por el Director del Instituto Nacional de Deportes se señala que el señor **GORDÓN** tiene un horario de trabajo de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. y, por otra parte, la certificación que expide la Directora de la Escuela República de China, profesora **VILMA DE SALDAÑA**, se indica que el citado educador tiene un horario puente que cubre 19 horas de clases y 5 horas de preparación de tabla gimnástica o equipos de las diferentes disciplinas, que se extiende desde las 9:10 a. m. (hora de entrada), hasta la 1:50 p. m. (salida), también de lunes a viernes.
>
> Como se observa, el educador **GORDÓN** no puede cumplir con sus dos horarios de trabajo porque se dan en jornadas simultáneas ..." (fs. 39-41).

Acompaña el referido informe de conducta, copia simple de las notas N° 20-94 D. G. de 7 de febrero de 1994 y N° 17-94 D. G. de 3 de febrero de 1994, dirigidas por el Director General del Instituto Nacional de Deportes (INDE) al Ministro de Educación; de una certificación de 4 de febrero de 1994 expedida por la Directora de la Escuela República de China; del Decreto de Personal N° 138 de 14 de marzo de 1994 y del Decreto N° 77 de 13 de junio de 1978 "Por el cual se

establecen condiciones para el desempeño de cargos en el Ramo de Educación." (Fs. 32-38).

El demandante considera que el Decreto de Personal N° 138 de 14 de marzo de 1994 viola los artículos segundo literal b) del Decreto N° 77 de 13 de junio de 1978 y 127 de la Ley 47 de 1946, cuyo texto transcribimos a continuación:

Decreto N° 77 de 13 de junio de 1978.

"ARTÍCULO SEGUNDO: Los funcionarios del Ministerio de Educación que en forma permanente desempeñen los cargos de maestros, profesor, subdirector o director de enseñanza, o atiendan una posición administrativa o técnico-docente, podrán ocupar otra posición dentro del Ramo de Educación, cuando:

a) Esta sea interina y no exceda de quince horas semanales;

b) Su desempeño no implique simultaneidad con su jornada regular de trabajo;

c) No haya aspirantes idóneos disponibles para suplirla;

d) No desempeñen cargos docentes o administrativos en un plantel particular de enseñanza o laboren en la Administración Pública Nacional o Municipal, en Instituciones Autónomas o Semi-Autónomas o en la Empresa Privada."

Ley 47 de 1946.

"Artículo 127. Todo miembro del personal docente o administrativo del ramo de educación, inclusive quienes presten servicio de portería como los porteros, aseadores, mensajeros, etc., que haya sido nombrado o que posteriormente se nombre de acuerdo con las disposiciones presentes a esta Ley, continuará prestando servicios durante todo el tiempo que dure su eficiencia y buena conducta y el término de su licencia, cuando se trate de maestro o profesor.

Los empleados del ramo de educación no podrán ser trasladados a otra escuela o a otro lugar sino en concepto de recompensa, para lo cual debe dársele previo aviso para que den a conocer al Ministerio su conformidad o disconformidad con el mismo, o en los casos previstos en el parágrafo de este artículo, o como sanción por falta cometida, de acuerdo con las disposiciones que en esta Ley se establezcan. Tampoco podrán ser removidos sino mediante el proceso establecido en esta Ley."

Al exponer el concepto de la infracción del artículo segundo literal b) del Decreto N° 77 de 13 de junio de 1978 el recurrente alegó que el Educador **ANTONIO GORDÓN LÓPEZ** no tenía el mismo horario de trabajo en el Ministerio de Educación y en el Instituto Nacional de Deportes (INDE), por lo que no está inhabilitado para seguir ejerciendo los dos cargos, ya que su jornada en el Ministerio de Educación era de 9:10 a. m. a 1:50 p. m. y en el Instituto Nacional de Deportes de 2:30 p. m. a 7:00 p. m. y los sábados de 8:00 a. m. a 12:00 m. Señala además, que el artículo 114 de la Ley 47 de 1946 prohíbe a los empleados desempeñar dos puestos permanentes dentro del Ramo de Educación, pero esta norma no es aplicable al caso, porque el Instituto Nacional de Deportes es un entidad autónoma, con personería jurídica distinta, y no es una dependencia filial o subordinada del Ministerio de Educación.

En cuanto a los cargos de violación comentados, el señor Procurador de la Administración hizo un análisis conjunto de los mismos, señalando, que consta en el expediente, de fojas 32 a 34, que los horarios del educador **ANTONIO GORDÓN LÓPEZ** como Administrador de la Piscina Adán Gordón y como maestro en la Escuela República de China coinciden, quedando plenamente probada la simultaneidad en su jornada de trabajo. En relación a la violación del artículo 127 de la Ley 47 de

1946, que garantiza estabilidad en el cargo a los docentes y administrativos del Ramo de la Educación, considera el señor Procurador que este cargo debe desestimarse porque el señor **GORDÓN** fue destituido con fundamento en el artículo 114 ibidem que prohíbe tener dos (2) cargos permanentes dentro del Ministerio, y con fundamento en el Decreto N° 77 de 13 de junio de 1978 que consagra las condiciones exigidas para desempeñar dichos cargos, las que no fueron cumplidas por el Educador **ANTONIO GORDÓN LÓPEZ**.

Observa la Sala que, en la Nota N° 846-95-D. G. de 4 de septiembre de 1995, certificación expedida por el Instituto Nacional de Deportes en virtud del auto de 16 de agosto de 1995, se detallan los cargos, el período y el horario de trabajo del señor **ANTONIO GORDÓN LÓPEZ** en dicha entidad pública. Consta que laboró de 6 de febrero de 1990 al 1 de mayo de 1992 como Técnico de Entrenamiento sin constancia o registro de su horario de trabajo; como Sub Jefe-Área Canalera de 2 de mayo de 1992 al 18 de agosto de 1993 de 2:00 p. m. a 9:00 p. m. (lunes a viernes y los sábados de 9:00 a. m. a 2:00 p. m.); nuevamente como Técnico de Entrenamiento de 19 de agosto de 1993 al 23 de enero de 1994 de 2:00 p. m. a 7:00 p. m. (lunes a viernes y los sábados de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.); como Administrador de la Piscina Adán Gordón de 24 de enero de 1994 al 20 de marzo de 1994 de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. (lunes a viernes); como Técnico en Entrenamiento de 21 de marzo de 1994 al 31 de mayo de 1994 de 7:00 a. m. a 2:00 p. m. (lunes a viernes); de 1 de junio de 1994 al 3 de julio de 1994 de 7:00 a. m. a 12:00 md (lunes, miércoles y viernes) y de 2:30 p. m. a 7:00 p. m. (martes y jueves) y de 8:00 a. m. a 1:00 p. m. (sábados); de 4 de julio de 1994 al 31 de agosto de 1994 de 7:00 a. m. a 2:00 p. m. (lunes a viernes); y de 1 al 20 de septiembre de 1994, fecha en que se declaró cesante su nombramiento, de 7:00 a. m. a 2:00 p. m. (fs. 88-89).

Por su parte, según la certificación expedida por la Dirección de Personal del Ministerio de Educación, el señor **GORDÓN LÓPEZ** fue nombrado permanente como Educador A-1, educación física, mediante el Decreto N° 51 de 16 de junio de 1989; por motivos personales se le otorgó una licencia sin sueldo por dos años a partir del 2 de abril de 1990; reingresó a su posición permanente a partir del inicio del año escolar 1992 (fs. 54-55); y según una certificación de 9 de febrero de 1994, el educador **ANTONIO GORDÓN LÓPEZ**, labora en la Escuela República de China con horario puente que cubre 19 horas de clases y 5 horas para la preparación de la Tabla Gimnástica o Equipos de las diferentes disciplinas, siendo su hora de entrada a las 9:10 a. m. y la de salida a la 1:50 p. m. (Fs. 8).

Por tanto, consta en autos que el primer nombramiento del señor **GORDÓN LÓPEZ** fue como educador A-1 permanente de educación física en el Ministerio de Educación, y que no fue hasta el 6 de febrero de 1990, que fue nombrado en el Instituto Nacional de Deportes. Durante el período de abril de 1990 a abril de 1992, que comprende dos años lectivos, le fue otorgada al señor **GORDÓN LÓPEZ** una licencia sin sueldo en su puesto permanente en el Ministerio de Educación, hecho que impide que se de el supuesto de la simultaneidad de horarios durante los años lectivos 1990 y 1991. En cuanto al año lectivo 1992, de marzo a mayo no consta registro de su horario en el Instituto Nacional de Deportes, y del 2 de mayo de 1992 al 23 de enero de 1994 consta que su horario de trabajo en dicha entidad fue en horas de la tarde, de 2:00 p. m. en adelante, por lo que no coincide con su horario en la Escuela República de China, que como hemos dicho era de 9:10 a. m. a 1:50 p. m. Sin embargo, del 24 de enero al 14 de marzo de 1994, fecha en que se declaró insubsistente su nombramiento, el educador **GORDÓN LÓPEZ** trabajó como Administrador de la Piscina Adán Gordón con horario de tiempo completo de lunes a viernes de 8:30 a. m. á 4:30 p. m.

Cabe resaltar que durante el año lectivo 1993 se llevó a efecto un paro de educadores, razón por la que fue dictado el Decreto N° 891 de 18 de noviembre de 1993 (G. O. N° 22.426 de 3 de diciembre de 1993), que en su artículo primero modificó el Calendario Escolar 1993 en cuanto al desarrollo de las clases durante el Tercer y Cuarto Bimestre, y señaló como último día de clases el 4 de marzo de 1994. El parágrafo del artículo primero establecía que los educadores que permanecieron atendiendo a todos sus alumnos de acuerdo al Calendario Escolar 1993 y cumpliendo con los planes y programas de estudio, finalizarían sus labores docentes el 11 de diciembre de 1993.

Con el propósito de determinar la fecha en que terminó sus labores docentes del año lectivo 1993 el educador **ANTONIO GORDÓN LÓPEZ**, la Sala mediante el auto de 30 de noviembre de 1995 (fs. 93-94), solicitó a la Directora Nacional de Personal del Ministerio de Educación, un informe sobre si el educador **ANTONIO GORDÓN LÓPEZ** participó del paro de los educadores del año 1993, y de la fecha en que terminó sus labores de ese año lectivo. Y según la Nota DP. DRA. 108-43 de 3 de enero de 1996, suscrita por la Directora Nacional de Personal del Ministerio de Educación, el educador **ANTONIO GORDÓN LÓPEZ** no participó en el paro de los educadores del año 1993, y cesó labores el 28 de febrero de 1994, como Educador A-1 Educación Física, Permanente, en la Escuela República de China.

Por tanto, la Sala observa que del 24 de enero al 14 de marzo de 1994, fecha en que **ANTONIO GORDÓN LÓPEZ** fue destituido de su puesto en el Ministerio de Educación, trabajó en el Instituto Nacional de Deportes, en horario de lunes a viernes de 8:30 a. m. a 4:30 p. m. (fs. 88), y al mismo tiempo se encontraba laborando en horario diurno en la Escuela República de China, ya que no fue hasta el 28 de febrero de 1994 que terminó sus labores docentes (fs.98). Por tanto, a juicio de la Sala, se ha probado la simultaneidad de horarios que prohíbe el artículo 298 de la Constitución Nacional y el artículo primero del Decreto 77 de 13 de junio de 1978 (fs. 37), que dispone lo siguiente:

> **DECRETO 77 DE 13 DE JUNIO DE 1978.**
> **"ARTICULO PRIMERO:** Los miembros del personal de Educación no podrán ejercer ningún oficio, profesión o ocupación que los inhabilite para cumplir satisfactoriamente sus obligaciones regulares; no obstante, podrán servir otra posición en el Ramo, cuando concurran las circunstancias y condiciones establecidas en el Artículo 2° de este Decreto."

El educador **GORDÓN LÓPEZ** fue destituido con fundamento en el artículo 114 de la Ley 47 de 1946 y el Decreto N° 77 de 13 de junio de 1978. Considera la Sala, que la prohibición del artículo 114 de la Ley 47 de 1946, fundamento del acto impugnado, consiste en tener dos (2) cargos permanentes dentro del Ministerio de Educación, y por tanto no es aplicable al caso, porque el educador **GORDÓN LÓPEZ** sólo tenía un cargo permanente en el Ministerio de Educación, y su posición en el Instituto Nacional de Deportes no puede ser considerada permanente, en razón de que actualmente no se ha implementado la carrera administrativa. Además, si bien esta entidad está sujeta a la orientación del Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Educación, el artículo 1 de la Ley N° 16 de 3 de mayo de 1995 la define como una entidad de derecho público con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía en su régimen interno. Igualmente, el Decreto número 144 de 2 de junio de 1970, mediante el cual se creó el Instituto Nacional de Deportes, lo definía como una entidad autónoma con capacidad para organizar su estructura administrativa, administrar su patrimonio y fomentar el incremento de éste. No obstante, se ha probado en el expediente que el educador **GORDÓN LÓPEZ** trabajó en horarios simultáneos inclumpliendo el Decreto N° 77 de 13 de junio de 1978.

En virtud de lo antes expuesto, la Sala considera que no prosperan los cargos de violación de los artículos segundo del Decreto N° 77 de 13 de junio de 1978 y 127 de la Ley 47 de 1946, toda vez que se ha probado la simultaneidad de horarios de trabajo del educador **GORDÓN LÓPEZ** en el Ministerio de Educación y en el Instituto Nacional de Deportes, durante el período del 24 de enero al 28 de febrero de 1994.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, el Decreto de Personal N° 138 de 14 de marzo de 1994, expedido por el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Educación.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO AGAPITO GUERRERO VEGA, EN REPRESENTACIÓN DE CRISTOBALINA PEÑA RODRÍGUEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL EL DECRETO N° 99 DE 11 DE OCTUBRE DE 1994, PROFERIDO POR EL ALCALDE DEL DISTRITO DE COLON, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Agapito Guerrero Vega, actuando en nombre y representación de **CRISTOBALINA PEÑA RODRÍGUEZ**, ha promovido demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto N° 99 de 11 de octubre de 1994, proferido por el Alcalde del Distrito de Colón, por medio del cual se declaró sin efecto el nombramiento de la señora **CRISTOBALINA PEÑA RODRÍGUEZ**, a partir del 16 de octubre de 1994.

La parte actora solicita además que se le restituya al cargo que ocupaba en la Tesorería Municipal de Colón, y se le pague los salarios dejados de percibir desde que se dejó sin efecto su nombramiento, hasta la fecha en que se haga efectivo el reintegro.

Al admitirse la presente demanda se corrió en traslado al señor Procurador de la Administración quien, mediante la Vista Fiscal N° 279 de 4 de julio de 1995, solicitó a esta Sala denegar las pretensiones del demandante (fs. 24-28); además, se solicitó al Alcalde del Distrito de Colón que rindiera el informe de conducta a que se refiere el artículo 33 de la Ley 33 de 1946, y el término que se le concedió con ese fin fue evacuado en rebeldía.

La parte actora estima que el acto administrativo impugnado viola el artículo 4 del Acuerdo Municipal N° 101-40-51 de 8 de julio de 1993, mediante el cual se adicionó el artículo 38-C al Acuerdo N° 101-40-12 de 17 de mayo de 1985, "Por el cual se adopta el Reglamento Interno del Consejo Municipal de Colón", y cuyo texto transcribimos a continuación:

> "**ARTÍCULO 4**: Se adciona el artículo 38-C al Acuerdo 101-40-12 así:
>
> **ARTÍCULO 38-C:** El tesorero del Municipio de Colón tendrá las siguientes atribuciones:
> ...
> 15. Nombrar y destituir el personal subalterno de la Tesorería."

En el concepto de la infracción el demandante indicó que el Acuerdo Municipal comentado está vigente y el mismo consagra como facultad del Tesorero Municipal nombrar y remover el personal de la Tesorería, por lo que el Alcalde no está facultado para dejar sin efecto el nombramiento de la señora **CRISTOBALINA PEÑA RODRÍGUEZ**.

Por su parte, la señora Procuradora de la Administración señaló que no le asiste razón a la parte actora, toda vez que el Alcalde Municipal como máxima autoridad procedió a reestructurar las dependencias municipales, con la finalidad de brindar un mejor servicio a la colectividad; y que, al efectuar la revisión de los servidores municipales lo hizo en cumplimiento de normas legales y reglamentarias vigentes.

El demandante ha aportado entre sus pruebas copia autenticada, el 23 de febrero de 1995, del Decreto de 15 de febrero de 1993, mediante el cual el Tesorero Municipal del Municipio de Colón, José Osvaldo Gordón, nombró a la señora **CRISTOBALINA PEÑA RODRÍGUEZ**, con cédula de identidad personal N° 8-404-

402, en la posición de mensajera, con un salario mensual de B/.247.00; y la copia autenticada del Acuerdo Municipal N° 101-40-51 de 8 de julio de 1993, emitido por el Consejo Municipal de Colón.

Para resolver la Sala debe tomar en consideración que, el artículo 38-C del Acuerdo Municipal 101-40-12 de 17 de mayo de 1985, adicionado por el artículo 4 del Acuerdo Municipal N° 101-40-51 de 8 de julio de 1993, que se invoca como violado, es una copia textual del artículo 57 de la Ley N° 106 de 8 de octubre de 1973 modificada por la Ley N° 52 de 12 de diciembre de 1984 sobre Régimen Municipal, que está vigente. Veamos por qué.

El artículo 57 de la Ley N° 106 de 8 de octubre de 1973, subrogado por el artículo 31 de la Ley N° 52 de 12 de diciembre de 1984, fue modificado por el Decreto N° 21 de 21 de noviembre de 1989, que a su vez fue declarado inconstitucional por el pleno de la Corte Suprema de Justicia el 8 de mayo de 1992. En cuanto a esta situación jurídica la Sala se ha pronunciado manifestado que, al declarar la inconstitucionalidad del Decreto N° 21 de 1989, que subrogaba y suspendía varios artículos de la Ley N° 106 de 1973, operó el fenómeno de la reviviscencia, quedando vigentes las normas con el texto que tenían antes de ser dictado dicho Decreto. Por tanto, si el Decreto N° 21 de 1989 fue declarado inconstitucional el 8 de mayo de 1992 y el acto impugnado fue dictado el 11 de octubre de 1994, ello significa que al momento de declarar sin efecto el nombramiento de la señora **CRISTOBALINA PEÑA RODRÍGUEZ** estaba vigente el artículo 57 numeral 15 de la Ley N° 106 de 1973, texto idéntico al artículo 38-C numeral 15 del Acuerdo 101-40-12 de 17 de mayo de 1985, adicionado por el artículo 4 del Acuerdo N° 101-40-51 de 8 de julio de 1993, que el demandante estima violado.

Por medio del Acuerdo N° 101-40-12 de 17 de mayo de 1985, se adoptó el Reglamento Interno del Consejo Municipal de Colón. La Sala observa que en este caso, la norma que se estima violada, artículo 38-C del Acuerdo N° 101-40-12 de 17 de mayo de 1985, adicionado por el artículo 4 del Acuerdo N° 101-40-51 de 8 de julio de 1993, es idéntica al artículo 57 de la Ley N° 106 de 1973, y por tanto está dentro de los límites de la potestad reglamentaria, tiene plena vigencia y es aplicable al caso. (Cfr. Sentencia de 8 de febrero de 1993 en Demanda de Inconstitucionalidad interpuesta por la Lic. Edisa Flores de De La Rosa en contra de los artículos 1 y 4 del Decreto N° 65 de 3 de marzo de 1990, emitido por el Contralor General de la República).

En sentencia de 24 de agosto de 1993, el Pleno de esta Corporación de Justicia se pronunció analizando un caso similar al que nos ocupa, en los siguientes términos:

> "Un examen del expediente demuestra, que el actor acompañó a la demanda de inconstitucionalidad, en forma de pruebas preconstituídas, que son las únicas que se pueden presentar en este tipo de proceso, ya que éste no tiene fase probatoria, una serie de documentos que demuestran que el señor **EDUARDO ESTRADA** era un funcionario nombrado por el Tesorero Municipal del Distrito de Panamá, y que en ningún momento fue funcionario de los que le corresponde nombrar y separar al Alcalde del Distrito de Panamá.
>
> Así las cosas resulta evidente que la Alcaldesa no tenía entre sus atribuciones constitucionales y legales, el nombramiento del Jefe de Departamento de Contabilidad y pago de la Tesorería Municipal del Distrito de Panamá, ya que el numeral 3 del artículo 240 de la Constitución Nacional, relacionado con el artículo 45, numeral 4 de la Ley 106 de 8 de octubre de 1973, sobre Régimen Municipal, sólo le permite nombrar y remover a los funcionarios públicos municipales cuya designación no corresponda a otra autoridad. El numeral 15 del artículo 57 de la Ley 106 de 1973, establece que los Tesoreros Municipales tienen las atribuciones siguientes: N° 15. Nombrar y destituir al personal subalterno de la Tesorería. En el presente caso se ha demostrado, con las pruebas preconstituídas presentadas al proceso, que el señor **EDUARDO ESTRADA**, era funcionario de la Tesorería Municipal, por lo que resulta ostensible la violación del

> artículo 240 de la Constitución Nacional."(Acción de Inconstitucionalidad interpuesta por el licenciado Manuel Villarrue en representación del licenciado **Eduardo Estrada** en contra del Decreto Alcaldicio N° 32 de 15 de enero de 1993, proferido por la Alcaldía de Panamá, Registro Judicial, agosto de 1993, p. 81)

En el caso que nos ocupa, se ha probado mediante el Decreto que consta a foja 2 del expediente, que la señora **CRISTOBALINA PEÑA RODRÍGUEZ** fue nombrada por el Tesorero Municipal como mensajera de la Tesorería Municipal de Colón, y por tanto, por corresponder su nombramiento al Tesorero Municipal, no es competencia del Alcalde su destitución, y prospera el cargo de violación alegado.

No obstante, en cuanto a la pretensión de la demandante, de que se le pague los salarios caídos desde su destitución hasta su reintegro efectivo, cabe señalar que en reiterados fallos la Sala ha dicho que tratándose de empleados municipales, no existe norma legal que sancione el despido injustificado con el pago de salarios caídos, por lo que no prospera esta pretensión. Así lo expresó textualmente en sentencia de 30 de junio de 1994:

> "La Sala Tercera de la Corte ha reiterado en diversas ocasiones que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 297 de la Constitución Nacional, los derechos de los servidores públicos para que puedan ser reconocidos, deben ser contemplados en una Ley Formal, que los fije, determine y regule.
>
> En consecuencia, el pago de los salarios caídos para que pueda hacerse valer, deber ser reconocido a través de Leyes con carácter general o específico, que otorguen al servidor público tal prerrogativa, por lo que la viabilidad de toda pretensión que en relación a este punto intente hacerse efectiva contra el Estado, sólo prosperará en el caso de que exista una norma con rango de ley formal aplicable de manera directa al caso, que lo haya dispuesto de manera expresa.
>
> De allí que, previo el análisis legislativo de rigor, la Sala Tercera debe señalar que la Ley 106 de 1973, modificada por la Ley 52 de 1984, que regula el Régimen Municipal no contempla disposición alguna que ordene o permita el pago de salarios caídos a los empleados municipales." Demanda Contencioso Administrativa de Interpretación interpuesta por el Lic. Fernando de Mena en representación de la **Alcaldesa del Distrito de Panamá**, Registro Judicial, junio de 1994, p. 152).

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NULO, POR ILEGAL, el Decreto N° 99 de 11 de octubre de 1994, dictado por el Alcalde del Municipio de Colón; y ORDENA se restituya a la señora CRISTOBALINA PEÑA RODRÍGUEZ al cargo de mensajera de la Tesorería Municipal del Municipio de Colón del cual fue destituida por el Decreto anulado; y NIEGA las otras declaraciones pedidas.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL DR. SIMEÓN EMILIO GONZÁLEZ HENRIQUEZ, EN REPRESENTACIÓN DE YODALIS THAMARA AROSEMENA KING, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO DE PERSONAL N° 380 DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 1994, EMITIDO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS

DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Doctor Simeón Emilio González, actuando en nombre y representación de **YODALIS THAMARA AROSEMENA KING**, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto de Personal N° 380 de 12 de septiembre de 1994, emitido por el Presidente de la República por conducto del Ministerio de Hacienda y Tesoro.

La parte actora solicita además que como consecuencia de la declaración de nulidad del acto impugnado, por medio del cual se decretó la insubsistencia del nombramiento de **YODALIS THAMARA AROSEMENA KING** como Secretaria General del Ministerio de Hacienda y Tesoro, sea reintegrada al cargo que ocupaba, y se ordene el pago de los salarios caídos desde la declaratoria de insubsistencia de su nombramiento hasta la fecha en que se haga efectivo el reintegro.

Al admitirse la presente demanda se corrió en traslado a la señora Procuradora de la Administración quien, mediante la Vista Fiscal N° 95 de 6 de marzo de 1995, solicitó a esta Sala denegar las pretensiones de la demandante (fs. 41-62); además se solicitó al funcionario demandado que rindiera el informe de conducta a que se refiere el artículo 33 de la Ley 33 de 1946, lo que hizo oportunamente (fs. 39-40).

El recurrente estima que el acto administrativo impugnado viola los artículos 756, 847 y 849 del Código Administrativo; 47, 52, 53, y 57 al 61 de la Ley N° 4 de 1961; y los artículos 1, y del 43 al 54 del Decreto N° 69 de 1968 (Reglamento Interno del Ministerio de Hacienda y Tesoro).

Al exponer el concepto en que fueron infringidas por el acto impugnado las normas citadas del Código Administrativo el apoderado judicial de la demandante indicó que estas han sido indebidamente aplicadas. El artículo 756 del Código Administrativo dispone que a los empleados nacionales no se les puede imponer deberes sino por leyes, reglamentos del Poder Ejecutivo y por órdenes de sus respectivos superiores; el artículo 847 idem consagra que los empleados públicos deben sujetarse a los reglamentos que dicte la autoridad competente para el buen servicio interior de las respectivas oficinas; y el artículo 849 ibidem preceptúa que sólo en los casos de omisión en el cumplimiento de sus deberes o de retardo o denegación en el Despacho, serán compelidos los empleados administrativos a llenar sus funciones por los respectivos superiores con los apremios legales. A juicio del demandante estas normas han sido violadas porque se pretende aplicar a su representada una disposición jurídica cuyo texto es claro, a una situación de hecho no contemplada en esa disposición, porque el acto impugnado pretende ampararse bajo la figura del "trabajador de confianza" para determinar que es potestativo del Órgano Ejecutivo el nombramiento y remoción de dicha funcionaria. Agrega el demandante, que lo que se pretende es que su representada cumpla con deberes que no están contemplados en las leyes, como pertenecer al mismo partido político, que realice actividades políticas proselitistas dentro de la institución, y que sea en síntesis, "de confianza" en su acepción muy sui géneris del Señor Ministro. (Fs. 25-26)

En cuanto a los cargos de violación de los artículos de la Ley N° 4 de 1961, considera el demandante que han sido violados por interpretación errónea, porque los únicos certificados y estados de carrera que fueron declarados nulos, fueron los expedidos con base al Decreto N° 7 de 1962 y el Decreto de Gabinete N° 137 de 1969, mientras que la señora **YODALIS AROSEMENA KING** gozaba de las garantías y prerrogativas que le otorgaba la Ley N° 4 de 1961 a los funcionarios de carrera, en lo referente al derecho a la estabilidad y a que se le siguiera el procedimiento disciplinario correspondiente.

Finalmente, el apoderado judicial de la demandante invoca como violados directamente, por omisión, los artículos 1 y del 43 al 54 del Decreto N° 69 de

1968 (Reglamento del Ministerio de Hacienda y Tesoro), toda vez que considera que el mismo está vigente en virtud de la sentencia de 13 de marzo de 1991, proferida por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que declaró inconstitucional el Decreto N° 6 de 9 de febrero de 1987 derogatorio del Decreto N° 69 de 1968. Señala la parte actora que para sancionar a los empleados de carrera la autoridad debe remitirse a la ley vigente a la fecha en que se otorgó el certificado de carrera, y a las normas de procedimiento disciplinario consagradas en el Decreto N° 69 de 1968, que son aplicables a todos los funcionarios amparados o no bajo el status de carrera, en virtud del fenómeno de la reviviscencia.

Considera la señora Procuradora de la Administración, que no le asiste razón a la parte actora, porque es un hecho probado que la señora **YODALIS AROSEMENA KING** fue nombrada como funcionaria pública mediante el Decreto N° 95 de 12 de septiembre de 1990, y que a esa fecha no se encontraba amparada por el Régimen de Carrera Administrativa. Señala la señora Procuradora, que a la Carrera Administrativa se ingresa por concurso de méritos y no por un libre nombramiento como en el caso que nos ocupa, donde la señora **YODALIS AROSEMENA KING** perdió su condición de empleada de carrera al separarse de la institución en el año de 1965, y no lo recuperó al hacérsele un nuevo nombramiento en el Ministerio de Hacienda y Tesoro el 12 de septiembre de 1990, en un cargo que no fue ganado por concurso y siendo ésto así, su nombramiento y remoción deben ser considerados discrecionales.

En cuanto al cargo de violación de los artículos del Decreto N° 69 de 1968, derogado por el Decreto N° 6 de 1987 que aprobó el Reglamento Interno del Ministerio de Hacienda y Tesoro, el que a su vez fue declarado inconstitucional mediante sentencia de 13 de marzo de 1991, señala la señora Procuradora de la Administración que con este decreto no opera el fenómeno de la reviviscencia, por tratarse de un decreto y no de una ley; la Sala ha dicho que es una ley derogada por otra ley, la que en todo caso cobra vida y no un decreto el que puede sufrir el fenómeno de la reviviscencia.

Encontrándose el proceso en estado de resolver, a ello proceden los Magistrados de la Sala.

La Sala estima que los artículos 756, 847 y 849 del Código Administrativo no son aplicables al caso y por tanto, no se han violado. Estas normas consagran normas de carácter general en relación con los deberes que deben cumplir los funcionarios públicos, los reglamentos que deben acatar, y los apremios que pueden hacerle sus superiores por su omisión en el cumplimiento de sus deberes. Los motivos expuestos en la Resolución mediante la cual se declaró la insubsistencia del nombramiento de la señora **YODALIS AROSEMENA KING** no se refieren a ninguno de los supuestos contemplados en estas normas y por tanto no son aplicables al caso.

En relación con la violación de las normas de la Ley N° 4 de 1961, consta a foja 49 del expediente administrativo el certificado de empleado de carrera N° 467-64 de 6 de febrero de 1964, expedido por la Presidencia de la República, Dirección General de Planificación y Administración, Departamento de Administración de Personal, a favor de la señora **YODALIS AROSEMENA KING**, en el cargo de Secretaria I del Ministerio de Hacienda y Tesoro. Estos certificados fueron otorgados con fundamento en los artículos 17 al 20 de la Ley N° 4 de 1961, a los empleados que llenaban todos los requisitos establecidos en el artículo 18 de la Ley. En el Capítulo VII de esta Ley, se regulaba lo concerniente a la expiración de funciones, contemplando en el literal e) del artículo 62 la supresión o fusión de empleos, y en el artículo 65 la facultad de la autoridad nominadora para declarar cesante a cualquier empleado por supresión del puesto o falta de fondos. En virtud de esta facultad fue eliminada del Presupuesto de Gastos la posición de la señora **YODALIS AROSEMENA KING**, a partir del 1 de enero de 1965, y así fue notificado a dicha funcionaria mediante nota de 11 de enero de 1965, suscrita por el Vice-Ministro de Hacienda y Tesoro, tal como consta a foja 46 del expediente administrativo.

Después que la señora **YODALIS AROSEMENA KING** cesó en sus funciones en el Ministerio de Hacienda y Tesoro en el año de 1965, la Ley N° 4 de 1961 que

subrogó el Decreto Ley 11 de 1955 manteniendo la carrera administrativa, fue derogada por el Decreto N° 137 de 30 de mayo de 1969, unos meses después del golpe de Estado de 1968. Este Decreto N° 137 estableció un nuevo régimen de nombramiento y remoción de empleados públicos, y mediante su artículo décimo quinto derogó cualesquiera disposiciones legales que le fueran contrarias. Es así que desde 1969, en nuestro país no hubo carrera administrativa, hasta que se promulgó la Ley N° 9 de 20 de junio de 1994, que la establece y regula y que en su artículo 198 dispone que la "incorporación de los diversos niveles funcionales e instituciones de la administración pública a la carrera administrativa, será progresiva, y se hará mediante acuerdo del Consejo de Gabinete ...", hecho que no se ha dado aún.

La señora **YODALIS AROSEMENA KING** ingresó nuevamente a laborar en el Ministerio de Hacienda y Tesoro, mediante el Decreto N° 95 de 12 de septiembre de 1990 y en la fecha en que fue destituida desempeñaba el cargo de Secretaria General, devengando un salario de B/.1,500.00 más gastos de representación por B/.800.00 (fs. 23 y 24 del expediente administrativo).

A juicio de la Sala, no puede alegarse, bajo ninguna circunstancia, que la demandante gozaba de estabilidad en su cargo con base en el nombramiento hecho mediante el Decreto N° 56 de 13 de marzo de 1962 y el certificado de carrera otorgado el 6 de febrero de 1964 con fundamento en la Ley N° 4 de 1961 (fs. 60 a 62 del exp. adm.), porque la señora **YODALIS AROSEMENA KING** cesó en sus funciones el 1 de enero de 1965 (fs. 46), y el nombramiento hecho en el año de 1990 constituye un nuevo acto administrativo que no guarda relación alguna con su primer nombramiento, además no existe continuidad de la relación laboral.

Por tanto, le son aplicables las normas vigentes en la fecha de su nombramiento, cuando no existía carrera administrativa que la amparara. En virtud de este hecho, la señora **YODALIS AROSEMENA** no gozaba de estabilidad en el cargo, la autoridad nominadora estaba investida de facultad discrecional para destituirla, y en autos no hay pruebas de que este acto administrativo se haya emitido con abuso o desvío de poder. Por todo lo expuesto, la Sala considera que deben desestimarse los cargos de violación de los citados artículos de la Ley N° 4 de 1961, por el acto impugnado.

Finalmente, en relación con los cargos de violación de los artículos 1 y 43 al 54 del Decreto N° 69 de 1968 le asiste la razón a la señora Procuradora cuando afirma que la reviviscencia sólo se produce en relación con las leyes, las cuales adquieren vigencia si se declara inconstitucional la ley que las había derogado. La Sala estima que no puede invocarse como violado el Reglamento Interno del Ministerio de Hacienda y Tesoro, dictado mediante Decreto N° 69 de 1968, porque tal como lo señala el artículo 297 de la Constitución Política, sólo la Ley puede regular la materia sobre estabilidad y los principios para los nombramientos y las destituciones con base en la carrera administrativa, y ninguna norma de inferior jerarquía a la Ley, como un reglamento, puede otorgar estos derechos a los funcionarios públicos. Además, el artículo 15 del Código Civil preceptúa que las órdenes y demás actos ejecutivos del Gobierno, expedidos en ejercicio de la potestad reglamentaria no tienen fuerza obligatoria y no deben aplicarse cuando sean contrarios a la Constitución o a las leyes.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, el Decreto de Personal N° 380 de 12 de septiembre de 1994, emitido por el Presidente de la República, por conducto del Ministerio de Hacienda y Tesoro; y NIEGA las otras declaraciones pedidas.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. JORGE LUIS PULIDO RITTER, EN REPRESENTACIÓN DE EDNA BENDIBURG, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO EJECUTIVO N° 419 DE 5 DE OCTUBRE DE 1994, EMITIDA POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Jorge Luis Pulido Ritter, actuando en representación de EDNA BENDIBURG, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción con el objeto que se declare nulo por el ilegal el Decreto de Personal N° 419 de 5 de octubre de 1994, emitido por el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Educación, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

En la demanda se pide que se declare nulo el Decreto de Personal N° 419 de 5 de octubre de 1994, dictado por el Ministro de Educación y mediante el cual se deja sin efecto el Decreto de Personal N° 463 de 21 de julio de 1991 que nombra como Director Administrativo, con la posición 0012-010 a la °señora Edna Bendiburg. Igualmente, se solicita a la Sala la declaratoria de nulidad del acto confirmatorio contenido en la Resolución 77 de 30 de diciembre de 1994 y en la cual se niega el recurso de reconsideración interpuesto por la demandante, y, que, como consecuencia de ello, se restituya a la señora Bendiburg a su cargo y se le paguen los sueldos caídos dejados de percibir y todas las prestaciones acumuladas durante este período.

A juicio del apoderado judicial de la parte actora, el acto que se acusa expedido por el Órgano Ejecutivo por conducto de Ministerio de Educación es nulo, dado que vulnera los artículos 115, 119, 127, 129, 130, 131, 132 y 133 de la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación. Además, considera que se ha violado el artículo 13 de la Ley 23 de 1958, el artículo 6 del Decreto N° 1102 de 1978 del Ministerio de Educación. Adicionalmente, considera que se ha violado el artículo 21 del Resuelto N° 1066 de 1978 del Ministerio de Educación. También, considera que se han violado los artículos 29, 31 y 33 de la Ley 135 de 1943, modificada por la Ley 33 de 1946.

El Ministro de Educación rindió el respectivo informe explicativo de conducta mediante la Nota N° DNAJ/104-108 de 31 de marzo de 1995. En dicha nota el funcionario fundamenta su actuación de la siguiente manera:

> "La señora **EDNA BENDIBURG** fue nombrada en el Ministerio de Educación, mediante el Decreto de Personal Número 463 de 21 de agosto de 1991, como Director Administrativo en la Televisión Educativa Canal Once, devengando un salario de B/.900.00 y por conducto del Decreto de Personal Número 419 de 5 de octubre de 1994, se declara sin efecto el anterior que la nombra.
>
> Examinados los argumentos de la parte demandante en la presente Demanda Contencioso Administrativa, la primera norma que se estima conculcada es el Artículo 127 de la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación ...
>
> Al confrontar la norma transcrita con el expediente administrativo y la hoja de servicio que contiene toda la documentación que sustenta el nombramiento en el Ministerio de Educación, de la demandante, observamos que **EDNA BENDIBURG** no reunía los requisitos profesionales y académicos para obtener y ejercer el cargo de Director Administrativo, en la Televisión Educativa Canal Once, ya que según el Manuel Descriptivo de Cargos en el Ministerio de Educación, es necesario poseer para tal puesto, los siguientes requisitos:

Estudios universitarios completos en Administración o una rama afín, más cinco (5) años de experiencia en trabajos profesionales dentro del área administrativa que incluye supervisión.

El Artículo 127 de la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, en su primera oración, asegura la inamovibilidad de los miembros del personal docente y administrativo del Ramo de Educación, siempre y cuando hayan sido nombrados o que posteriormente se nombren de acuerdo con las disposiciones presentes en la misma Ley ...

EDNA BENDIBURG, de acuerdo a las constancias procesales, no posee título profesional registrado en el Ministerio de Educación ni estudios universitarios completos en Administración o una rama afín, tal como lo exige el Artículo 119 citado y el Manual Descriptivo de Cargos. Por consiguiente, su nombramiento como **DIRECTOR ADMINISTRATIVO** en la Televisión Educativa, Canal Once, se hizo en violación de la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, del Artículo 127 transcrito anteriormente, cuando dispone que el personal docente y administrativo del Ramo de Educación, "**que haya sido nombrado o que posteriormente se nombre, de acuerdo, con las disposiciones prescritas en esta Ley, continuará prestando servicio durante todo el tiempo que dure su eficiencia y buena conducta**". (Sentencia de 7 de marzo de 1961).

En lo que respecta a los Artículos 129, 130, 131, 132 y 133 de la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, Artículo Sexto del Resuelto 1102 de 1978, Artículo 21 del Resuelto 1066 de 3 de agosto de 1970, Artículo 29, 31 y 33 de la Ley 135 de 1943, modificada por la Ley 33 de 1946, que tratan sobre procedimiento a seguir en caso de expediente disciplinario contra algún funcionario docente o administrativo del Ministerio de Educación, que según la parte demandante han sido violentados por el Decreto de Personal Número 419 de 5 de octubre de 1994, debemos acotar que los mismos son inaplicables al presente caso, dado que **EDNA BENDIBURG** no ha sido destituída por razones disciplinarias, sino por motivo de que para el cargo que ocupaba, la misma no poseía los títulos profesionales registrados en el Ministerio de Educación ni Estudios Universitarios completos en Administración o una rama afín, circunstancia ésta que debiera de conducir al Honorable Magistrado Sustanciador, a no aceptar los cargos endilgados.

Por otro lado, tal como dejan ver los párrafos transcritos **EDNA BENDIBURG**, ocupó el cargo de Director Administrativo, en Televisión Educativa, Canal Once del Ministerio de Educación, cargo éste que no forma parte de la carrera docente, ni de ninguna carrera pública, señalada en el Artículo 302 de la Constitución Nacional ...

Los servidores públicos mencionados en los numerales 3 y 5 no gozan de estabilidad en virtud del estatus especial que poseen, caso de **EDNA BENDIBURG.**

Los cargos de Directores y Subdirectores en el Ministerio de Educación, constituyen puestos de colaboración inmediata con el Despacho del señor Ministro, razón por la cual al asumir el cargo de Ministro de Educación, decidí hacer ajustes en el equipo de trabajo que me acompañaría en mi gestión administrativa."

Al corrérsele traslado a la Procuradora de la Administración, ésta contestó la demanda mediante Vista N° 178 de 3 de mayo de 1995 en la que considera que las pretensiones de la parte actora deben ser denegadas, puesto que "no le asiste el derecho."

Evacuados los trámites de ley, la Sala pasa a resolver la presente controversia.

En cuanto a la supuesta violación de los artículos 119 y 127 de la Ley 46 de 1947 observa la Sala que no le asiste la razón a la parte actora, toda vez que, tal como lo señala el Ministro de Educación en su informe de conducta, la señora Bendiburg fue nombrada en el cargo de Director Administrativo en la Televisión Educativa, Canal Once, "en violación de la Ley 47 de 1946 Orgánica de Educación," puesto que, no posee título profesional registrado en el Ministerio de Educación, ni tampoco estudios a nivel universitarios en Administración o una rama afín, lo que significa que, su cargo no se encuentra comprendido dentro de los supuestos contemplados en el mencionado artículo, ya que, no cumple con los requisitos establecidos por ley para ocupar esa plaza. Se aprecia, además, que el Ministro de Educación señala que el cargo específico ocupado por la señora Bendiburg es de "colaboración inmediata con el Despacho del Ministro, razón por la cual al asumir el cargo de Ministro de Educación, decidí hacer ajustes en el equipo de trabajo que me acompañaría en mi gestión administrativa." A este respecto, cabe señalar que la Sala mediante Sentencia de 12 de agosto de 1994 consideró que:

> "... el hecho de que ciertos empleados administrativos gocen de estabilidad en el puesto, situación que limita traslados y despidos, es debido a que los cargos que ocupan han sido conferidos ya sea por medio de concursos, por el tiempo de servicio en la institución, o porque simplemente no son cargos de confianza, con respecto a la gestión del Ministro de Educación." (El subrayado es nuestro).

En el presente caso, resulta palmario el hecho que, la señora Bendiburg fue nombrada como Director Administrativo en la Televisión Educativa, Canal Once, por designación personal del Ministro que ocupaba la cartera de Educación en 1991, y no como producto de un concurso, ni por el tiempo de servicio en la institución, puesto que, no se han presentado pruebas en contrario, por lo que, a todas luces, se colige que el mencionado cargo es uno de los que dispone el Ministro de Educación para nombrar a su personal de confianza, con respecto a la gestión del Ministerio. Se desestima, pues, el presente cargo.

Por último en lo que respecta a la supuesta violación de los artículos 129, 130, 131, 132 y 133 de la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, el artículo 6° del Decreto 1102 de 1978, el artículo 21 del Resuelto N° 1066 de 1978, en los que se hace referencia a la forma en que debe ser enderezado un proceso disciplinario contra un funcionario del ramo de la educación, considera la Sala que no son aplicables al presente caso, dado que la señora Edna Bendiburg, no ha sido destituída por razones disciplinarias, sino porque no cumplía con los requisitos exigidos por ley, para ocupar el cargo que desempeñaba. Adicionalmente, observan los Magistrados que integran la Sala que, ha sido jurisprudencia constante en esta materia, que cuando se trata de un cargo de libre nombramiento y remoción, como lo es el de Director Administrativo en la Televisión Educativa, Canal Once, el Ministro de Educación, goza de la facultad para nombrar a su personal de confianza, que le ayudará en su gestión administrativa. No proceden, pues los cargos alegados por el demandante.

En lo que respecta, a la supuesta violación de los artículos 29, 31 y 32 de la Ley 135 de 1943, modificada por la Ley 33 de 1946, observa la Sala que, de la lectura del expediente, se colige que, la demandante hizo uso oportuno de todos los recursos administrativos, que la ley establece, para agotar la vía gubernativa, por lo que, se desestiman estos cargos.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA que NO ES ILEGAL el acto administrativo contenido en el Decreto Ejecutivo N° 419 de 5 de octubre de 1994, emitido por el Presidente de la República por conducto del Ministerio de Educación, como tampoco lo es su acto confirmatorio.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. MIGUEL GONZÁLEZ, EN REPRESENTACIÓN DE EURIBIADES HERRERA, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO DE GABINETE N° 10 DE 6 DE FEBRERO DE 1995, EMITIDO POR EL MINISTRO DE EDUCACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Miguel González, actuando en representación de EURIBIADES HERRERA, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción con el objeto que se declare nulo por el ilegal el Decreto de Personal N° 10 de 6 de febrero de 1995, emitido por el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Educación, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

En la demanda se pide que se declare nulo el Decreto de Personal N° 10 de 10 de febrero de 1995, dictado por el Ministro de Educación y mediante el cual se deja sin efecto el Decreto de Personal N° 430 de 21 de agosto de 1991 que nombra como Coordinador Artístico del Centro de Arte y Cultura, con la posición 1064-040 al señor Euribiades Herrera; y, que como consecuencia de ello, se ordene el reintegro del mencionado señor, y se le paguen los salarios caídos.

A juicio del apoderado judicial de la parte actora, el acto que se acusa expedido por el Órgano Ejecutivo por conducto de Ministerio de Educación es nulo, dado que vulnera los artículos 127, 133, 137 y 141 de la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación. Así como también, el artículo 752 del Código Administrativo, los artículos 1°, 5° y 6° del Decreto N° 618 de 9 de abril de 1952.

El Ministro de Educación rindió el respectivo informe explicativo de conducta mediante la Nota N° DNAJ/104-314 de 30 de agosto de 1995. En dicha nota el funcionario fundamenta su actuación de la siguiente manera:

> "Como puede observar el Magistrado Sustanciador, la posición de Coordinador Artístico, que ocupaba EURIBIADES HERRERA, no forma parte de la Carrera Docente, ya que no esta contemplada en el escalafón establecido en la Ley 47 de 1979 que regula lo concerniente al escalafón y a la política salarial de los educadores. Por consiguiente, esta posición es considerada de libre nombramiento y remoción de la Administración, ya que no forma parte de la Carrera Pública y, en particular, de la Carrera Docente.
> ...
> La naturaleza del Artículo 127 de la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, es la de garantizar en efecto, al servidor público que ha ingresado a este Ministerio de conformidad con las disposiciones de dicha ley, la permanencia en el puesto durante el tiempo en que dure su eficiencia y buena conducta. La frase 'de acuerdo con las disposiciones presentes a esta Ley', bien interpretada, significa que el ingreso tanto el personal administrativo como docente, deben ser consecuencia de concurso públicos, en igualdad de condiciones entre las personas que así lo deseen, pero de ninguna manera, el solo hecho de ingresar por una designación personal del Titular del Ramo, garantiza la permanencia en el cargo.
>
> El demandante, EURIBIADES HERRERA, no prueba en modo alguno que su ingreso a este Ministerio fue producto de un concurso de méritos, de conformidad con lo que prescribe la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación; todo indica en consecuencia, que se trata de una designación personal del Ministro de Educación para esa fecha. Por

consiguiente, es una posición administrativa que no forma parte de la Carrera Docente o Pública y es en ese sentido, que dicha posición se tiene como de libre nombramiento y remoción, al ser de confianza y colaboración con la máxima autoridad de la administración.

El apoderado de la recurrente considera que la Administración ha violado en forma directa el Artículo 127 de la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, lo cual negamos, por considerar que nuestra actuación, en este caso, está ajustada a lo que prescribe el ordenamiento jurídico. Asimismo, en cuanto a la violación de esta norma, relativa a la estabilidad de los funcionarios del Ramo Educativo, la Administración hace suyas las afirmaciones de la Honorable Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en fallos de 12 de agosto de 1994, en los casos de MOISÉS MARRUGO ACOSTA vs MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y EIRA CASTILLO vs MINISTERIO DE EDUCACIÓN; en fallo de 24 de febrero de 1995, en el caso de JOAQUÍN JUSTAVINO vs MINISTERIO DE EDUCACIÓN, y más recientemente el Fallo de 31 de julio de 1995, en el proceso promovido por DANIEL AUGUSTO VERGARA.

... que el nombramiento de EURIBIADES HERRERA no fue producto de un concurso de méritos y su posición, consecuentemente, es de confianza con respecto a la gestión del Ministro de Educación.

El demandante también considera violentados los Artículos 133, 137, 141 de la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, los cuales aluden al procedimiento a seguir en caso de aplicación de sanciones disciplinarias a un miembro del personal de educación, y por lo tanto no son aplicables al caso presente, por cuanto que la insubsistencia de EURIBIADES HERRERA no se dio como consecuencia de una sanción disciplinaria, sino porque su cargo era de libre nombramiento y remoción, por ser su labor de confianza y colaboración para con el Ministro de Educación.

En cuanto a la violación del Artículo 752 del Código Administrativo que el demandante considera violado por cuanto que la destitución no se hizo por medio de Resolución, el Artículo 136 en concordancia con el Artículo 17 de la Ley 47 de 1946, disponen expresamente que las destituciones corresponden al Órgano Ejecutivo y cuya expresión para estos es el Decreto.
...
Como quiera que la destitución le fue notificada el 9 de febrero de 1995 y se trataba de un acto adoptado por la máxima autoridad de la Administración, no era necesario agotar la vía gubernativa, para acceder a la Jurisdicción Contencioso Administrativa."

Al corrérsele traslado a la Procuradora de la Administración, ésta contestó la demanda mediante Vista N° 397 de 22 de septiembre de 1995 en la que considera que las pretensiones de la parte actora, carecen de sustento, "por estar cimentada sobre una base falsa."

Evacuados los trámites de ley, la Sala pasa a resolver la presente controversia.

En cuanto a la supuesta violación del artículo 127 de la Ley 46 de 1947 observa la Sala que no le asiste la razón a la parte actora, toda vez que, tal como lo señala el Ministro de Educación en su informe de conducta, el señor Herrera ocupaba el cargo de Coordinador Artístico por elección directa del Ministro de Educación de turno, lo que significa que su cargo no se encuentra comprendido dentro de los supuestos contemplados en el mencionado artículo. Se aprecia, además, que el Ministro de Educación señala que el demandante no ha presentado ninguna prueba que demuestre que, en efecto, ocupaba el mencionado cargo, ya que, le fue asignado producto de un concurso de méritos, por lo que dicha posición se considera como de "libre nombramiento y remoción, al ser de confianza y colaboración con la máxima autoridad de la administración." A este respecto, cabe señalar que la Sala mediante Sentencia de 12 de agosto de 1994

consideró que:

> "... el hecho de que ciertos empleados administrativos gocen de estabilidad en el puesto, situación que limita traslados y despidos, es debido a que los cargos que ocupan han sido conferidos ya sea por medio de concursos, por el tiempo de servicio en la institución, o porque simplemente no son cargos de confianza, con respecto a la gestión del Ministro de Educación." (El subrayado es nuestro).

En el presente caso, estamos frente a un funcionario nombrado como Coordinador Artístico en el Centro de Arte y Cultura, por designación personal del Ministro que ocupaba la cartera de Educación en 1991, y no como producto de un concurso, ni por el tiempo de servicio en la institución y tal como lo ha señalado la Sala en varias ocasiones, al no presentarse pruebas en contrario, se colige que el mencionado cargo es uno de los que dispone el Ministro de Educación para nombrar a su personal de confianza, con respecto a la gestión del Ministerio. Se desestima, pues, el presente cargo.

En lo que respecta a la supuesta violación de los artículos 133, 137 y 141 de la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación, en los que se hace referencia al procedimiento a seguir en caso de aplicación de sanciones disciplinarias a un miembro del personal de educación, considera la Sala que no son aplicables al presente caso, dado que el señor Euribiades Herrera, no ha sido destituído por razones disciplinarias, sino porque su cargo era de libre nombramiento y remoción, puesto que el cargo de Coordinador Artístico en el Centro de Arte y Cultura, es una "posición administrativa que no forma parte de la Carrera Docente o Pública," por lo que, es una de las posiciones de las que dispone el Ministro de Educación para nombrar a su personal de confianza, que le ayudará en su gestión administrativa. No proceden, pues los cargos alegados por el demandante.

En este mismo orden de ideas, considera la Sala que no se ha configurado la supuesta violación a los artículos 1°, 5°, 6° del Decreto 618 de 9 de abril de 1952, ya que, la declaratoria de insubsistencia del señor Herrera tiene como fundamento la facultad discrecional del Ministro para realizar los nombramientos de su personal de confianza, que le ayudará a un mejor desempeño de su gestión administrativa. De lo anterior, se colige, que no pueden aplicarse los mencionados artículos al presente caso, puesto que, el cargo de Coordinador Artístico en el Centro de Arte y Cultura, no fue declarado insubsistente como resultado de una sanción disciplinaria, sino más bien, por la facultad del Ministro de remover a los funcionarios de educación que no estén amparados por la estabilidad que les otorga la Carrera Administrativa.

Por otro lado, en cuanto a la supuesta violación del artículo 752 del Código Administrativo, considera la Sala que no le asiste razón a la parte actora, toda vez que, la autoridad nominadora goza por ley de la potestad de declarar insubsistente el nombramiento de un funcionario, que no esté amparado por la Carrera Administrativa, puesto que, se considera que su cargo es de libre nombramiento y remoción. No proceden, pues, los cargos alegados por el demandante.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA que NO ES ILEGAL el acto administrativo contenido en el Decreto de Personal N° 10 de 6 de febrero de 1995, emitido por el Presidente de la República por conducto del Ministerio de Educación, como tampoco lo es su acto confirmatorio.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LCDA. SELENIA CANTO DE RUIZ, EN REPRESENTACIÓN DE GRISELDA ÁVILA JARAMILLO, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL,EL MEMORANDO N° 65 DE 18 DE AGOSTO DE 1994, EMITIDO POR EL DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO DEL ÓRGANO JUDICIAL, LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO AL NO CONTESTAR EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Lcda. Selenia Isabel Canto, actuando en representación de GRISELDA ÁVILA JARAMILLO, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción con el objeto de que se declare nulo por ilegal, el Memorando N° 65 de 18 de agosto de 1994, emitido por el Director de Planificación y Presupuesto del Órgano Judicial y la negativa tácita por silencio administrativo al no contestar el recurso de reconsideración y para que se hagan otras declaraciones.

En el acto impugnado el Director de Planificación y Presupuesto le comunica a la Lcda. Griselda Ávila, que a partir de la fecha de la expedición de dicho memorando, el 18 de agosto de 1994, realice funciones de Analista de Presupuesto II, según el cargo que ocupa.

La apoderada judicial de la parte actora, solicita en el libelo contentivo de la demanda, que se declare que es nulo el acto administrativo comunicado mediante memorando N° 65 de 18 de agosto de 1994, mediante el cual el Director de Planificación y Presupuesto del Órgano Judicial, asignó a su mandante las funciones de "Analista de Presupuesto II" y, además, solicita la declaratoria de nulidad de la negativa tácita por silencio administrativo a la solicitud de reconsideración mediante escrito fechado el 19 de agosto de 1994. Igualmente, la parte demandante solicita que como consecuencia de las declaraciones anteriores, se declare que su representada tiene derecho a que las funciones por ella desempeñadas por ella en el Órgano Judicial, se le clasifiquen como "Planificador II" para todos los efectos legales e inclusive el ajuste de salario al que tiene derecho más las prestaciones económicas derivadas del cargo de Planificador II y a la indemnización de los daños y perjuicios que se le han ocasionado según lo previsto en el artículo 1644 del Capítulo II del Código Civil, por la falta de omisión de parte del Lcdo. Miguel González en perjuicio de su representada.

La parte actora sustenta su pretensión en hechos tales como el que la señora Griselda Jaramillo inició labores en la Dirección de Planificación y Presupuesto del Órgano Judicial, como Analista de Presupuesto II de manera interina a partir del 1° de septiembre de 1993, no obstante que fue nombrada en ese cargo, se desempeñó como Planificador II desde la fecha de su nombramiento según orden del Lic. Miguel González. A lo anterior añade, que el cargo de Planificador II tiene asignado un salario mensual de B/.800.00 mientras que el de Analista de Presupuesto es de B/.600.00. Igualmente, la Lcda. Canto expone en los hechos, que la señora Jaramillo aceptó el ejercicio de funciones asignadas distintas al cargo para el cual fue nombrada debido al compromiso del Lcdo. González de tramitar un cambio de nomenclatura en la posición que desempeñaba, sin embargo, no se verificó ese cambio, y su representada no recibió salarios acorde con las funciones desempeñadas. Sostiene finalmente la Lcda. Canto, que la Dirección de Recursos Humanos del Órgano Judicial, mediante Nota DCJ-270-94 de 20 de julio de 1994, comunicó a la señora Ávila que la Posición N° 1984 sería sometida a concurso en la convocatoria correspondiente al mes de agosto de 1994 y en la cual no pudo participar, a su juicio, por no considerarse en dicho cargo la alternativa de los años de servicio, tal cual se estableció en el resto de los cargos administrativos que salieron en convocatoria de concurso. Afirma la Lcda. Canto, que como consecuencia de las reiteradas denuncias de la Lcda. Ávila a las distintas autoridades del Órgano Judicial, la Directora de Recursos Humanos dispuso la práctica de una inspección a la Dirección de Planificación y Presupuesto. Es en razón de ello, a su juicio, que el Lcdo. Miguel González Sánchez mediante el memorando N° 65 de 18 de agosto de 1994, dispuso que la licenciada Griselda Ávila desempeñaría funciones de Analista de Presupuesto II,

a fin de evitar ser detectado en la anunciada inspección. Finalmente, sostiene que la Lcda. Ávila mediante nota del 19 de agosto de 1994, expuso su disconformidad con relación a la medida adoptada y no obtuvo respuesta en el término de dos meses, por lo que operó el llamado silencio administrativo.

Mediante resolución de 24 de abril de 1994, se admite la demanda que nos ocupa y se corre traslado de la misma, al Director de Planificación y Presupuesto del Órgano Judicial y al Procurador de la Administración.

El Director de Planificación y Presupuesto del Órgano Judicial envió el informe explicativo de conducta N° 1 fechado el 28 de abril de 1995 visible de fojas 88 a 97 del expediente. En dicho informe el Lcdo. González se opone a las pretensiones de la parte demandante y afirma, entre otros aspectos, que dada la nueva restructuración del antiguo Departamento de Presupuesto, llamado actualmente Dirección de Planificación y Presupuesto aprobado mediante el Acuerdo N° 9 de 12 de agosto de 1992, se requería de personal para atender de manera profesional las nuevas de áreas creadas como planificación, presupuesto, estadística y Organización Administrativa. Conjuntamente con lo antes anotado, el Lcdo. González afirma que es aprobado el convenio suscrito por los Estados Unidos de América para el mejoramiento de la Administración de Justicia de Panamá, por lo que fue imperante el nombramiento de personal para cubrir esas funciones. En el proceso de selección de personal, enfatiza el Lcdo. González, se manifestó con claridad que sus nombramientos serían interinamente, pues, la Institución constaba con la Carrera Judicial y serían sus cargos sometidos a concurso. Para los meses de junio y julio de 1993, según el Lcdo. González, surgió la necesidad de presentar el Proyecto de Presupuesto del Órgano Judicial y se requería poner en práctica la nueva estructura, por lo que se logra ejecutar la posición de un "Analista de Presupuesto II", cargó que ocupó la señora Griselda Avila y a quien se le solicitó apoyo en planificación para la preparación de dicho proyecto. Luego, como se había advertido, su cargo fue sometido a concurso por la Dirección de Recursos Humanos, en el que no participó la señora Ávila por no reunir el requisto de licenciatura en las ramas de administración, contabilidad, economía y finanzas. Finalmente, afirma el Lcdo. González, que a raíz de lo anterior, la señora Ávila hizo una solicitud a esa dirección a fin que se certificara todas y cada una las funciones que había realizado desde el 1° de septiembre hasta la fecha de su petición, la cual no fue atendida, pues, a su juicio, es función de la Dirección de Recursos Humanos. Con consecuencia de lo anterior, la señora Avila solicitó a la Dirección de Recursos Humanos una intervención e investigación de la Dirección de Planificación y Presupuesto y alegó anomalías en la administración. Con relación a ello, destaca el Lcdo. González, que la señora adoptó un comportamiento profesional que distaba mucho de su comportamiento inicial, aunado a eso, para lograr sus propósitos, ocupó la totalidad de la jornada laboral para preparar sus acusaciones y utilizó material del Órgano Judicial. Concluye el Lcdo. González, que como consecuencia de lo antes anotado, expide el Memorando N° 65 de 18 de agosto de 1994, en el que le comunica a la señora Avila, "que a partir de la fecha realizará funciones de Analista de Presupuesto II según el cargo que ocupa."

Por su parte, la Procuradora de la Administración, contestó la demanda mediante la Vista Fiscal N° 281 de 5 de julio de 1995 visible de fojas 98 a 106 del expediente y en ella solicita que se deniegue la pretensión de la parte actora.

Evacuados los trámites de ley, la Sala procede a examinar la infracciones que la demandante imputa al acto administrativo cuya declaratoria de nulidad demanda.

Observa la Sala, que la parte sostiene el acto administrativo contenido en el Memorando N° 65 de 18 agosto de 1994, viola el artículo 269 del Código Judicial que hace referencia a la Carrera Judicial, a quienes no forma parte de ella, y, como se ingresa a la misma. A ello añade la parte actora, que el artículo en mención fue reglamentado a su vez, por los artículos 14 y 46 del Acuerdo N° 46 de 1 de septiembre de 1991 cuyo texto es el siguiente:

"ARTÍCULO 14: El sistema de clasificación de cargos se basa en las

funciones y responsabilidades asignadas a los mismos, y no en las cualidades o condiciones de quienes las ocupan."

"ARTÍCULO 45: El sistema de remuneración es el medio a través del cual se determina el salario que le corresponde a cada cargo de acuerdo con las funciones y responsabilidades asignadas, la carga laboral y el lugar donde debe desempeñarlo."

A criterio de la parte actora, el concepto de la infracción en que es violado el artículo 269 del Código Judicial reglamentado por las disposiciones del Acuerdo N° 46 de 27 de septiembre de 1991 antes citadas, es violación directa por comisión. Estima la Lcda. Canto, que la Dirección de Planificación y Presupuesto del Órgano Judicial, "desconoció el derecho a un cargo y a una remuneración que le otorgaban las disposiciones sobre clasificación del funcionario judicial, la cual debe realizarse atendiendo a las funciones, derechos y responsabilidades inherentes al cargo desempeñado."

Una vez realizado el estudio del expediente, la Sala concluye que no le asiste la razón a la parte actora por las razones que exponemos a continuación. Observa la Sala en primer lugar, que la Lcda. Griselda Avila Jaramillo fue nombrada en el Órgano Judicial mediante Acuerdo N° 209 DRH-93 de 18 de agosto de 1993, como Analista de Presupuesto II en la Dirección de Planificación y Presupuesto del Órgano Judicial y en el cual se enfatiza que su nombramiento es "interino". (V. Fs. 53 y 54). En segundo lugar, observa la Sala, que, efectivamente, tal como se colige en autos y como lo acepta el Director de Planificación y Presupuesto del Órgano Judicial en su informe explicativo de conducta que reposa de fojas 88 a 97 del expediente, a la Lcda. Griselda Ávila Jaramillo le fueron asignadas, entre otras funciones inherentes a su cargo, funciones de Planificador II, condición que fue aceptada por ella.

No obstante lo anterior, estima la Sala que los argumentos expuestos por la parte demandante no se ajustan al texto de las disposiciones alegadas como infringidas, por la asignación de otras funciones diferentes a las de su cargo, de la cual fue objeto. Lo anterior es así, pues, si bien es cierto que el artículo 269 del Código Judicial hace referencia a la forma en que se ingresa al régimen de la Carrera Judicial, y, prevé para tal efecto, el cumplimiento de los requisitos exigidos por ley o los reglamentos para ocupar el cargo respectivo en base una clasificación de cargos judiciales en la cual se tomará en cuenta las funciones, responsabilidades y derechos inherentes al cargo, no es menos cierto, que dada la nueva restructuración de la Dirección de Planificación y Presupuesto creada mediante el Acuerdo N° 9 de 12 de agosto de 1992, antiguamente denominada Dirección de Presupuesto, y por razones de tiempo y de índole presupuestaria, se hizo imperante el nombramiento de personal especializado en estas áreas para la elaboración de un plan operativo que sustentara el proyecto de presupuesto. A dichos funcionarios se les aclaró que sus posiciones eventualmente serían sometidas a concurso. Entre los nombramientos efectuados, estuvo el de la Lcda. Griselda Ávila Jaramillo como Analista de Presupuesto II y a la cual se le solicitó desempeñara funciones de Planificador II, condición que ésta aceptó.

El cargo de Analista de Presupuesto II, fue, pues, sometido a concurso conforme a los requisitos previstos en el Manual Descriptivo de Cargos. Los requisitos para el ocupar el cargo de Analista de Presupuesto II y Planificador II son los siguientes:

ANALISTA DE PRESUPUESTO II:

"1. Título Universitario en Administración de Empresas, Administración Pública, Contabilidad, Economía o Finanzas, más de dos (2) años de experiencia con responsabilidad progresiva en trabajos afines o como Analista de Presupuesto I.

2. Conocimiento de habilidades y destreza:

2.1. Buen conocimiento de la teoría, principios y técnicas del

proceso presupuestario, así como las prácticas, reglamentaciones y procedimientos utilizados en la administración presupuestaria en el sector público.

2.2. Algún conocimiento de los principios y prácticas de la contabilidad gubernamental.

2.3 Habilidad para analizar información presupuestaria y formular recomendaciones apropiadas.

2.4 Habilidad para evaluar programas revisar y hacer análisis financiero.

2.5 Habilidad para expresarse en forma clara y precisa, oralmente y por escrito.

2.6 Habilidad para establecer y mantener relaciones efectivas y cordiales con funcionarios de distintos niveles y público en general."

PLANIFICADORA II:

"1. Estudios universitarios completos en Economía, o en una carrera relacionada con las funciones del puesto, más tres (3) años de experiencia con responsabilidad progresiva en trabajos de investigación, análisis o elaboración de planes programas y proyectos.

2. Estudios universitarios parciales, no menores de tres (3) años completos en economía o en una carrera relacionada con las funciones del puesto, más dos (2) años de experiencia con responsabilidad progresiva como Planificador I."

Observa la Sala que en el concurso para optar por el cargo de Planificador II no participó la Lcda. Ávila Jaramillo dado que no cumplía con el requisito que se refiere al "Título Universitario en Administración de Empresas, Administración Pública, Contabilidad, Economía o Finanzas", tal como se evidencia a foja 29 del expediente, donde la propia demandante afirma que está pendiente la sustentación de sus tesis para optar la Licenciatura en Economía. No obstante, si cumplía con lo requisitos necesarios para el concursar en el cargo de Planificador II.

Ahora bien, cabe reiterar, que con el fin de implementar el plan operativo en la nueva restructuración de la Dirección de Planificación y Presupuesto, fue necesario el nombramiento de profesionales en las áreas creadas de manera interina, sin embargo, por razones presupuestarias en ese momento no se logró el nombramiento de todos los cargos, y entre ellos figura el cargo de Planificador II, por ende, no se podía acceder a su solicitud de cambio de nomenclatura por estar ejerciendo, entre otras, dichas funciones.

En virtud de lo antes expuesto, concluye la Sala que lo procedente es, pues, denegar las pretensiones que la parte actora demanda.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL el Memorando N° 65 de 18 de agosto de 1994, emitido por el Director de Planificación y Presupuesto del Órgano Judicial, como tampoco lo es la negativa tácita por silencio administrativo al no contestarse el recurso de reconsideración interpuesto.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA

JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE DE TACHA Y RECUSACIÓN DE PERITOS, INCOADOS POR EL LCDO. JOSÉ MENA BARRÍA DE LEÓN, DENTRO DE LA DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA EN REPRESENTACIÓN DE LA CHIRIQUÍ LAND COMPANY, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 264-92 DE 13 DE OCTUBRE DE 1992, EMITIDA POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, ACTO CONFIRMATORIO PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Lcdo. José Mena Barría De León, ha interpuesto incidente de tacha y recusación de peritos, dentro de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción que interpuso ante esta Sala en representación de la Chiriquí Land Company, para que se declare nula por ilegal, la Resolución N° 264-92 de 13 de octubre de 1992, emitida por la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social, acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

El Lcdo. José Mena Barría De León tacha y recusa, a su juicio, por improcedente a los peritos designados por el Procurador de la Administración en el escrito de designación visible a foja 87 del expediente que expresa:

> "1. Al Doctor Manuel Guerra, Especialista en Infertilidad Masculina, localizable en el Complejo Hospitalario Arnulfo Arias Madrid, Servicio de Urología. (Punto A. a. 1 -a. 4).
>
> 2. Al Licenciado Armando Aguilar, Contador público Autorizado, localizable en el Complejo Hospitalario Metropolitano "Dr. Arnulfo Arias Madrid", quien participará en la diligencia pericial en el Punto B., de las pruebas admitidas."

El incidentista fundamenta su solicitud en los siguientes términos:

> "B.1 Mediante escrito que consta a fojas 87 del proceso principal, el Procurador de la Administración designó al Doctor Manuel Guerra y al Licenciado Armando Aguilar peritos de las pruebas periciales tal como consta del estracto reproducido en el párrafo A.1, de este memorial del Incidente.
>
> B.2 De la designación transcrita consta que ambos peritos son localizables en el Complejo Hospitalario Metropolitano de la Caja de Seguro Social, Doctor Arnulfo Arias Madrid. De este señalamiento se colige que los dos peritos laboraban en dicha institución autónoma, que es una entidad de Derecho Público.
>
> Independientemente de su autonomía de la Caja de Seguro Social integra la estructura del Estado (artículo 281 de la Constitución Política).
>
> B.3 Los profesionales designados como peritos son servidores públicos, es decir, empleados públicos (artículo 294 de la Constitución Política).
>
> B.4 En otras palabras, los profesionales designados por el Procurador de la Administración están impedidos de actuar como peritos ya que en este proceso la Caja de Seguro Social, (léase el Estado) como demandada tiene interés acreditando en el proceso y es parte. Ese interés se proyecta en sus servidores o empleados (Artículos 958, 749 numerales 2 y 13 y 966 del Código Judicial)."

Una vez efectuado el estudio del incidente de tacha y recusación y las disposiciones legales en que se fundamenta el mismo, estima la Sala que no le

asiste la razón al incidentista toda vez que, si bien es cierto que el artículo 958 del Código Judicial prevé que los empleados públicos no podrán actuar como peritos en los casos en que el Estado sea parte o tenga interés, no es menos cierto que el mismo contempla dentro de sus supuestos para que se configure esa imposibilidad, la existencia de un cuerpo de peritos cuyos nombres figurarán en una lista confeccionada por esta Corporación de Justicia, que hasta este momento no se ha confeccionado. En razón de lo anterior, a criterio de la Sala, es necesario, hasta la confección de la lista en mención, disponer de los funcionarios públicos que sean especialistas en las áreas necesarias para la práctica de peritajes cuando el Estado sea parte o tenga interés, como lo es en este caso.

En cuanto al fundamento legal de la recusación alegado por el incidentista contemplado en el artículo 749 numeral 2 en concordancia con lo dispuesto en el artículo 966 del Código Judicial, estima la Sala que no es procedente por las razones antes anotadas.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NIEGA el incidente de tacha y recusación de peritos, incoado por el Lcdo. José Mena Barría de León, dentro de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción que interpuso en representación de la Chiriquí Land Company, para que se declare nula por ilegal, la Resolución N° 264-92 de 13 de octubre de 1992, emitida por la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA SHIRLEY Y DÍAZ, EN REPRESENTACIÓN DE ENGINEERING DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION CORPORATION, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL RESUELTO N° 144 DE 16 DE JUNIO DE 1994, EMITIDO POR EL MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense Shirley y Díaz actuando en representación de la sociedad **ENGINEERING DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION CORPORATION**, ha interpuesto Demanda Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción para que se declara nulo por ilegal el Resuelto N° 144 de 16 de junio de 1994. emitido por el Ministerio de Gobierno y Justicia, acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

LOS HECHOS DE LA CONTROVERSIA:

La contienda que se somete a consideración y decisión de esta Corporación de Justicia tiene su origen en el concurso de precio N° IC-1-93 de 25 de mayo de 1993, celebrado por el Ministerio de Gobierno y Justicia, cuyo objetivo se centraba en la adjudicación de la construcción del Palacio Municipal del Distrito de La Mesa Provincia de Veraguas. La Compañía seleccionada fue la sociedad **ENGINEERING DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION CORPORATION**, cuya propuesta representó el costo más bajo para el Estado. Como consecuencia de lo expresado, el Ministerio de Gobierno y Justicia y la compañía adjudicataria suscribieron el correspondiente contrato de obra N° 464 de 12 de octubre de 1993, para la edificación del proyecto en referencia, en un plazo de 120 días calendarios contados a partir de la orden de proceder. Dicha orden de proceder se verificó inicialmente el 8 de noviembre de 1993". Sin embargo, la compañía constructora

se percató que la estructura en planos no cabía dentro del lote del terreno destinado a albergar dicha construcción, por lo que al poner en conocimiento de esta irregularidad al Ministerio de Gobierno y Justicia, esta entidad procedió a efectuar las gestiones tendientes a eliminar este inconveniente tramitando la consecución de un lote de terreno adyacente, y a señalar el 22 de noviembre de 1993 como nueva fecha para la orden de proceder. Siendo ello así, la obra debió ser terminada y entregada el 21 de marzo de 1994"

No obstante lo expresado, los demandados confrontaron otros problemas sobrevinientes al percatarse en el lote de la construcción, de la existencia de un tanque séptico comunal que era necesario secar rellenar y trasladar para realizar la construcción de las columnas; todo lo cual le ocasionó demoras al demandante. Frente a lo expuesto y como conclusión estiman los representantes judiciales de la parte actora, que los graves problemas inesperadamente encontrados en la construcción de la obra constituyen imprevisiones por falta de estudio previo del terreno, no imputable como carga en su contra. Siendo indispensable que cada uno de dichos problemas en conocimiento del Arquitecto Avilés (Director del Departamento de Ingeniería y Arquitectura del Ministerio de Gobierno y Justicia), y el tiempo empleado en la solución dichos problemas, se computaran para los efectos de alargar el término o plazo de entrega, ya que estos constituyen "casos fortuitos reconocidos por nuestra legislación,"

Se puede apreciar que, 28 días solamente es el período de tiempo alegado por el recurrente como utilizado para solucionar las eventualidades sobrevinientes en la construcción del Palacio Municipal de La Mesa, Provincia Veraguas, y por consiguiente, como aquél período es el que debía entenderse como plazo de extensión para la entrega de 28 obra, tomando en consideración, la Teoría de la imprevisión.

No obstante lo indicado, el Arquitecto Avilés aumentó el período en referencia de 28 a 30 días tal como se observa a foja 37 del negocio de la causa.

De acuerdo a lo señalado, si el Ministerio antes citado, hubiese expresado, formalmente la extensión del plazo de entrega de la obra, **ésta debía entregarse terminada el 18 de abril de 1994**, **de acuerdo a los contratistas** ya que, estos alegan la necesidad de 28 días de extensión por el retraso en la solución del problema causado por el tanque séptico; **y**, **el 20 de abril del mismo año**, ya que la entidad estatal acepta la posibilidad de hasta 30 días de prórroga como plazo de entrega de la obra por la misma circunstancia (fs. 40).

El 16 de junio de 1994, el Ministro de Gobierno y Justicia resolvió administrativamente el Contrato N° 464 de 12 de octubre de 1993 por el supuesto incumplimiento de obligaciones del contratista, y, a ejecutar la fianza 619300128 emitida por la Compañía de Seguros Western Insurance Company Inc. (WICO) Para garantizar el cumplimiento del mencionado contrato) y fina]mente, por motivo de 18 resolución del Contrato Administrativo, remitir copia autenticada de dicha resolución administrativa al Ministerio de Hacienda y Tesoro para que inhabilite como postor a la Compañía demandante.

El contrato administrativo mencionado ut supra fue resuelto 87 días después del plazo original de 21 de marzo y 59 días después de los 28 días alegados retraso por el actor.

ARGUMENTOS DEL IMPUGNANTE

La parte actora esgrime en el escrito de su pretensión, básicamente que al iniciar la Construcción del Palacio Municipal del Distrito de La Mesa se percató de que al elaborar el plano que se entregó para la ejecución de dicha obra "no se hizo una inspección o estudio serio del área, ni una medición del terreno para adecuar el plano al edificio, toda vez que el que se estaba construyendo, conforme a las dimensiones y proyecciones del plano, no cabía en el terreno destinado a dicha construcción"

Ante esta circunstancias el Ministerio de Gobierno y Justicia tramitó la consecución de un lote de terreno adyacente el cual en efecto obtuvo,

trasladándose la fecha original de la orden de Proceder del 8 de noviembre de 1993 al 22 de noviembre del mismo año, por un término o plazo de 120 días.

Aunado a lo expresado, puntualiza el demandante que producto de la falta de estudio del suelo destinado a albergar la obra, el plano entregado para la construcción en controversia no contenía información sobre el tanque séptico que se encontró y al que estaban conectadas las tuberías de aguas negras de casas aledañas, y en el cual debían construirse columnas. Este inconveniente que impedía la construcción del edificio en referencia no pudo ser resuelto hasta los primeros días del mes de febrero ya que la única empresa que se dedica a realizar limpieza de tanques sépticos estuvo disponible a partir del 6 de febrero de 1994 ya que la maquinaria de esta empresa estaba dañada. Sin embargo, añade el actor que tuvo la necesidad de Construir dicho tanque séptico en el lote adyacente al cual tuvo que conectar las tuberías existentes en el tanque que había sido eliminado.

Añade el recurrente que "los hechos imprevistos que provocaron tel pérdida de tiempo se debieron exclusivamente, a la culpa y negligencia del Arquitecto Clemente Avilés, quien no hizo un estudio de suelo, ni contempló en los planos (sic) problemas encontrados ni adecuó el plano al terreno a construirse." Refiriéndose igualmente a que el "Ministro de Gobierno y Justicia no tomó en cuenta que cada uno de los problemas mencionados en los hechos anteriores fue comunicado al Arquitecto Avilés sin que se le diera solución y sin que concediera una prórroga del contrato".

Por consiguiente el petente considera que se han conculcado del artículo 68 numeral ó de Código Fiscal, los artículos 34 d, 990, 1345 y 1347 de Código Civil.

En este orden de ideas el demandante solicita la nulidad de los actos impugados y además, como corolario, que esta Corporación declare que el Contrato Administrativo N° 464 de 12 de octubre de 1993 celebrado con el Estado está vigente y que por tanto, no procede la ejecución de la fianza de cumplimiento N° 619300128 emitida por la compañía de Seguros Western Insurance Company Inc. (WICO), ni la inhabilitación de la actora como postora del Estado, y, que debe permitírsele terminar la obra con todos los privilegios y obligaciones o en su defecto, que se le reconozca el pago de indemnización por los daños y perjuicios incurridos:

INFORME DE CONDUCTO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA

El Ministerio de Gobierno y Justicia en representación de esta entidad estatal expresó el criterio que se reproduce a continuación para mayor ilustración:

> " Que la decisión de este Ministerio de resolver administrativamente el contrato N° 464 de 12 de octubre de 1993, obedeció a que la Compañía Engeenering Developmente and Construction Corporation, incumplió con su obligación principal de Construir el Palacio Municipal de la Mesa, Distrito de La Mesa, Provincia de Veraguas.
>
> Con esta conducta el contratista incurrió en una de las causales de Resolución Administrativa que define la cláusula Décima Cuarta Numeral 6 del Contrato de Obra N° 464 de 12 de octubre de 1993."

POSICIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN

La representante del Ministerio Público contestación de la demanda incoada por la sociedad impugnante se opone a las pretensiones formuladas en dicho escrito ya que constructora incumplió con las esgrime que la empresa obligaciones adquiridas en el contrato N° 464 suscrito el 12 de octubre de 1993 a tenor de lo preceptuado en el artículo 60 del Código Fiscal, afirmando que las normas del Código Civil no son aplicables en el presente caso. Aunado a lo expresado; resalta la precipitada funcionaria que el tanque séptico encontrado no es producto de la naturaleza, sino resultado de una conducta humana. Pone de relieve

la prenombrada funcionaria que tampoco infringe los artículos 1345 y 1347 del Código Civil, en virtud de que las dimensiones del plano no se han alterados y porque el Contrato N° 464 del 12 de octubre de 1993, no obedece a las cualidades personales del contratista, sino a un acto público celebrado legalmente el cual ha sido incumplido.

DECISIÓN DE ESTA SUPERIORIDAD

Encontrándose el proceso en este estado, los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema entran a resolver la contienda planteada.

La primera norma que se estima conculcada es el contenido del artículo 68 numeral 6 del Código Fiscal que establece como causa de resolución de todo contrato administrativo, el incumplimiento del acuerdo celebrado y por ende de las obligaciones y contraprestaciones que se adquieren al suscribir el mismo.

En este Punto se hace indispensable analizar si efectivamente se verificó la causal de incumplimiento del Contrato administrativo que fundamentara la resolución administrativa del mismo.

En atención a lo expuesto, se observa que el actor anota principalmente dos (2)motivos o situaciones que le impidieron la terminación de la obra pactada consistente en la Construcción de Palacio Municipal del Distrito de La Mesa, sin responsabilidad imputable en su contra.

El primero de ellos se refiere a que las dimensiones del edificio diseñado en el plano que se le suministrara para la ejecución de la obra, no cabía en el terreno asignado para dicha finalidad.

Al respecto, el mismo demandante acepta, que el Ministerio de Gobierno y Justicia procedió a obtener un (1) metro de terreno adicional en el lote adyacente, que era lo que hacía falta para que hubiese concordancia y por tanto congruencia entre el diseño del Palacio Municipal y la superficie o perímetro del Inmueble en el cual se llevaría a cabo la obra; y además, el actor reconoce que el Ministerio de Gobierno y Justicia como ente concursante, trasladó la orden de proceder del 8 de noviembre de 1993 al 22 de noviembre del mismo año, tal como se desprende de la lectura del hecho quinto del libelo formalizado por el demandante (foja 14) del memo N° 580-A-ARQ- 94 de 20 de julio de 1994, párrafo Segundo (foja 37) y de la nota N° 486-D-Arq de 10 de noviembre de 1993 (foja 106) que modificó y eliminó la orden de proceder y de 27 de octubre de 1993 N° 460-D-ARQ, que establecía originalmente el 8 de noviembre del mismo año como orden del Proceder y el 22 noviembre del mismo año como nueva fecha de la orden de proceder.

Este cambio de fecha en la orden de proceder se realizó con la finalidad que el atraso provocado no afectaran los 120 días de plazo del actor en la construcción del edificio,:

En consecuencia se observa que este inconveniente no configura justificación válida para sustentar, el incumplimiento sin responsabilidad del contrato administrativo resuelto.

En cuanto al tanque séptico encontrado a 2 metros cincuenta (50) de profundidad, (el cual no se encontraba en el plano suministrado para la construcción de la obra) esta Corporación desea realizar las siguientes acotaciones:

Si bien es cierto se observa que el señor **JORGE BASILIO VACA**, (fontanero que limpió el tanque séptico)y los peritos de la Parte actora, afirman que la obra no podía continuar mientras no se solucionará el problema del tanque séptico comunal a varias conexiones de aguas negras, (cfr. pág. 93-93 y 140 respectivamente), no puede soslayarse el hecho de que, el mismo demandante indica que el retraso causado por dicho tanque séptico era únicamente de 28 días (cfr. pág. 19, hecho duodécimo tercero). El arquitecto **CLEMENTE AVILÉS**, Director de Arquitectura e Ingeniería del Ministerio de Gobierno y Justicia sostuvo que el

mismo atraso es de 30 días como se observa a foja 37, cuarto párrafo del negocio in examine.

Igualmente se desprende del estudio del expediente de la Causa, que la obra en contienda debió haber sido finalizada y entregada el 21 de marzo de 1994, fecha en la cual se cumplían los 120 días que como plazo pactaron las partes para la realización del Edificio consistente en el Palacio Municipal del Distrito de La Mesa Provincia de Veraguas.

Siendo ello así, los 28 días que solicitaban la sociedad demandante vencían el 18 de abril de 1994, todo de lo cual se infiere que de acuerdo al mismo recurrente la obra debió concluirse a más tardar en dicha fecha. No obstante, el Contrato Administrativo fue resuelto el 16 de junio de 1994, es decir 87 días después de la fecha de entrega y 59 días después del 15 de abril de 1994. Lo anterior indica claramente que el Ministerio de Gobierno y Justicia le confirió al actor en prórrogas a partir del 21 de marzo de 1994, tres veces del período de 28 días solicitado, por virtud del retraso causado por el tanque séptico encontrado más 3 días adicionales. Luego entonces el ente demandado le concedió en exceso al impugnante el período requerido adicionalmente para terminar el Palacio Municipal del Distrito de La Mesa.

En este orden de ideas se pone de relieve los siguientes planteamientos:

Aún tomándose como un hecho cierto la imposibilidad de continuar con la obra sino se superaba previamente el problema del tanque séptico encontrados básicamente porque este no se localizaba en el plano suministrado por la Constructora para realizar el edificio (argumento éste que no comparte el Arquitecto Clemente Avilés y los peritos del Ministerio de Gobierno y Justicia) se debe indicar que este argumento tendría validez únicamente hasta el 20 de abril de 1994 ya que Ministerio contratante considera y acepta que el retraso pudiera contabilizarse y concederse hasta por 30 días. Es decir 2 días más de lo señalado por el actor, y al 5 de abril de 1994 la obra solamente estaba avanzada en un 21% de acuerdo al Arquitecto Avilés la obra debía encontrarse avanzada en un 90% aproximadamente (fr. 34). Debe recordarse que el aludido problema del tanque séptico se resolvió durante los primeros días del mes de febrero. En otras palabras el demandante tuvo suficiente tiempo para finalizar la edificación en comento.

Debe entenderse que el tanque séptico encontrado responde a un hecho imprevisto pero perfectamente resistible y solucionable por lo que su hallazgo y retraso de 28 ó 30 días, no constituye fuerza mayor. Debe recordarse que la diferencia básica entre el caso fortuito y la fuerza mayor con respecto a la imprevisión (Teoría de la Imprevisión) es que las primeras son hechos de la naturaleza o el hombre imprevisibles e irresistibles teoría o inevitables respectivamente, sin que medie culpa de quien lo invoque, es decir, que haya actuado deligentemente) mientras que la teoría de la imprevisión se caracteriza por eximir de responsabilidad hechos imprevisibles pero resistibles, que en todo caso, causa una exceso onerosidad para el afectado al ejecutar el contrato, (fuera de su esfera normal) que conforme a los artículos 1161 y 1161b del Código Civil adicionados por la Ley 18 de 31 de julio de 1992, le permiten al afectado pedir la terminación del contrato, la reducción de su prestación o una modificación de los términos que regulan su cumplimiento por razones de equidad; exceptuándose, sin embargo a los contratos aleatorios por SU naturaleza o voluntad de las partes. Esta teoría surgió para atemperar, atomizar o minimizar, los efectos injustos que se derivan de circunstancias imprevisibles pero resistibles que no constituyen caso fortuito. Por lo tanto, el tanque séptico en contrato no constituye el caso fortuito alegado por el impugnante, ni fuerza mayor. hora bien, se torna indispensable destacar, que el nexo de causalidad aducido y fundamentado en la teoría de la imprevisión (relación entre la causa, constituida por el tanque séptico encontrado en el predio de construcción más no señalado en el plano de la construcción, y efecto cual es la imposibilidad de cumplir con el contrato al 21 de marzo de 1994), que por virtud de dicha teoría pudo haber eximido de responsabilidad se interrumpió al no entregar el actor la obra pactada más tardar el 20 de abril de 1994, ya que esta es la fecha que contempla el Ministerio de Gobierno y Justicia por los 30 días de extensión o

prórroga del plazo previamente pactado para la entrega del Palacio Municipal del Distrito de La Mesa, Provincia de Veraguas. Debemos resaltar que el retraso en referencia es calculado por el demandante en 28 días y por el ente demandado en 30 días; es decir que, esta Corporación está tomando el período mayor de tiempo admitido como retraso por las partes en aras de una mayor equidad.

Se estima interrumpido el nexo causal con posterioridad al 20 de abril de 1994, debido a que transcurrieron 57 días antes de su resuelto el Contrato Administrativo, tiempo este no utilizado por el sector para entregar la obra que pacientemente esperaba el Ministerio demandado que se concluyera. En otras palabras, esta Corporación considera que medio culpa por parte del actor en la no entrega de la construcción contratada y consiguiente, se configura la causal de incumplimiento que permitía al Ministerio de Gobierno y Justicia para resolver el Contrato Administrativo en controversia, y además, para inhabilitarlo como postor del Estado y recuperar o hacer efectiva la fianza de cumplimiento como sanción ante el incumplimiento del actor con su contraprestación derivada del Contrato N° 464 de 12 de octubre de 1993.

Por lo expuesto, no procede el cargo de ilegalidad impetrado sobre el artículo 68 del Código Fiscal, ante el claro incumplimiento del demandante en la entrega del edificio del Palacio Municipal del Distrito de La Mesa, Provincia de Veraguas. Este criterio se aplica a la infracción alegada de los artículos 34d, 990 y 1347 del Código Civil al explicarse que no operó caso fortuito a favor del demandante, ni causa ajena a su voluntad.

En lo concerniente a lo transgresión del artículo 1345 del Código Civil se pone de manifiesto que el recurrente alega tener derecho al aumento del precio de la obra esencialmente por haberse alterado los planos de la construcción del Palacio Municipal del Distrito de La Mesa. Sin embargo, se evidencia y colige en el caso sub judice, que el plano original no fue alterado puesto que realmente lo que ocurrió es que las dimensiones del proyecto o edificio a construirse no cabía en el área de terreno destinada para tal es efectos y para subsanar este inconveniente, el Ministerio de Gobierno y Justicia tramitó y obtuvo, un (1) metro adicional del terreno adyacente para que con dicha adición de espacio se corrigiera la incongruencia entre las dimensiones del plano y el terreno asignado para la ejecución de la obra. Este trámite como ya se había indicado provocó que la orden de proceder se trasladara del 8 de noviembre de 1993 al 22 de noviembre de 1993, y el plazo de entrega se cambiara del 7 de marzo de 1994 al 21 de marzo del mismo año. Por lo que evidentemente no se alteró el plano de la construcción, sino que se adecuó el terreno del mencionado plano.

En mérito de lo expuesto, los Magistrados que integran la Sala Tercera Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARAN que NO ES ILEGAL, la resolución administrativa del Contrato Administrativo N° 464 de 12 de octubre de 1993, celebrado entre el Estado y la Compañía ENGINEERING DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION CORPORATION, así como NO ES ILEGAL la ejecución de la fianza N° 61930128, emitida por la Compañía de Seguros WESTER INSURANCE COMPANY INC.(WICO) para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del mencionado contrato, y la remisión de la resoluión que resuelve el Contrato administrativo N° 464 de 12 octubre de 1993 al Ministerio de Hacienda y Tesoro, con la finalidad de que se inhabilite al demandante como postor del Estado por el incumplimiento del Contrato antes mencionado y por lo tanto, el Ministro de Gobierno y Justicia no está obligado a permitirle a ENGINEERIN DEVELOPMENT AND CONSTRUCTION CORPORATION, la Construcción del Palacio Municipal del Distrito de La Mesa, ni está obligado a reconocerle al demandante pago de indemnización por daños y perjuicios incurridos.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. JORGE ENRIQUE SÁNCHEZ, EN REPRESENTACIÓN DE JAIME NELSON CARRANZA, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO EJECUTIVO N° 57 DE 14 DE MARZO DE 1995, EMITIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Jorge Enrique Sánchez, actuando en representación de JAIME NELSON CARRANZA, anunció recurso de apelación contra la Resolución proferida por la Corte Suprema de Justicia-Sala Tercera (Contencioso Administrativa), expedida el 10 de agosto de 1995, mediante la cual no se admite la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, interpuesta con la finalidad que se declare nulo, por ilegal, el Decreto de Personal N° 57 de 14 de marzo de 1995, emitido por el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Educación y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador, mediante proveído de 5 de diciembre de 1995, señaló un término de tres (3) días para que sustentara la apelación. Esta resolución fue notificada mediante el edicto N° 1036 que fue desfijado el 7 de diciembre de 1995.

Como en este caso, se trata de un recurso de apelación contra un auto, se debe declarar desierto el recurso según lo dispuesto en el artículo 1122 del Código Judicial.

En consecuencia, el resto de los Magistrados que integra la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA DESIERTO el recurso de apelación interpuesto por el licenciado Jorge Enrique Sánchez, en representación de Jaime Nelson Carranza, contra la Resolución proferida por la Corte Suprema de Justicia-Sala Tercera (Contencioso Administrativa), expedida el 10 de agosto de 1995, mediante la cual no se admite la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, interpuesta con la finalidad que se declare nulo, por ilegal, el Decreto de Personal N° 57 de 14 de marzo de 1995, emitido por el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Educación y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO GENARINO ROSAS, EN REPRESENTACIÓN DE ALBERTO JAVIER APONTE BARSALLO, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO DE PERSONAL N° 738 DE 21 DE DICIEMBRE DE 1994, EMITIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Genarino Rosas Rosas, actuando en nombre y representación de

ALBERTO JAVIER APONTE BARSALLO, ha promovido demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto de Personal N° 738 de 21 de diciembre de 1994, dictado por el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Educación, acto confirmatorio y para que se haga otras declaraciones.

En la demanda presentada se solicita la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo impugnado, alegando que el señor Alberto Javier Aponte Barsallo ha dejado de percibir un salario de B/.630.00 mensuales y ha quedado excluido de su carrera como docente.

Conforme lo establece el artículo 73 de la Ley 135 de 1943, la medida cautelar de suspensión de los efectos del acto administrativo impugnado , es una facultad discrecional del Pleno de la Sala, si a su juicio, ello es necesario para evitar un perjuicio notoriamente grave.

El ordinal primero del artículo 74 de la Ley 135 de 1943, señala que no habrá lugar a suspensión provisional, en las acciones referentes a cambios, remociones, suspensiones o **retiro en el personal administrativo**, **salvo los casos de empleados nombrados para períodos fijos**.

Como lo que se pide en el presente negocio es la suspensión provisional de los efectos de una acción de personal dictada contra un funcionario que no fue nombrado por un período fijo, la medida cautelar que se solicita no es procedente, y debe negarse con fundamento en el artículo citado.

De consiguiente, el Pleno de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NIEGA la solicitud de suspensión provisional de los efectos del Decreto de Personal N° 738 de 21 de diciembre de 1994, dictado por el Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE ESTUDIO CORPORATIVO TRIBUTARIO, EN REPRESENTACIÓN DE SISTEMAS ESTRUCTURALES MODERNOS, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 4617-93 DE 14 DE MAYO DE 1993, PROFERIDA POR LA SUBDIRECTORA GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense Estudio Corporativo Tributario, actuando en representación de Sistemas Estructurales Modernos, S. A., ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción en la cual solicita que la Sala declare que es nula por ilegal, la Resolución N° 4617-93 de 14 de mayo de 1993, proferida por la Subdirectora General de la Caja de Seguro Social y el acto confirmatorio contenido en la Resolución N° 9792-94 J. D. de 2 de noviembre de 1994 emitida por la Junta Directiva de la misma entidad demandada, y para que se hagan otras declaraciones.

En la demanda se formula pretensión consistente en que se declaren nulos los actos antes mencionados y como consecuencia de ello, se rehaga el Informe de Auditoría de empresas A. E.-N-93-21 que no debe incluir en el cálculo de cuotas de riesgos profesionales por pagar las sumas que reciban los subcontratistas

independientes de la empresa. Igualmente, SISTEMAS ESTRUCTURALES MODERNOS, S. A. solicita que la Caja de Seguro Social reembolse la suma que haya pagado a la fecha por motivo de la resolución acusada y las que la confirman.

En el acto acusado, la Subdiretora de la Caja de Seguro Social sostiene que de confirmadad con lo establecido en el artículo 67 de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social y el artículo 67 de la Constitución Nacional, se procedió a examinar los libros de contabilidad, comprobantes de pago, planillas y demás documentos de la empresa SISTEMAS ESTRUCTURALES MODERNOS, S. A., con número patronal 87-400-2892, y se determinó condenar a dicha empresa a pagar la suma de B/.6,187.44 en concepto de cuotas de seguro social, prima de riesgos profesionales y recargos de ley, sumas dejadas de pagar durante el mes de agosto de 1990 a junio de 1992, más los intereses que se causen hasta la fecha de su cancelación. En resolución N° 6079-94 S. D. G. de 22 de marzo de 1994, la Suddirectora la Caja de Seguro Social absolvió recurso de reconsideración y mantiene en todas sus partes la Resolución N° 4617-93 SUB. D. G. de abril de 1993. Visible de fojas 46 a 49 del expediente administrativo, observa la Sala que figura el informe para la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social, fechado el 7 de julio de 1994 expedido por el Asesor Legal de esa institución, que hace referencia al recursn de apelación incoado por la empresa SISTEMAS ESTRUCTURALES MODERNOS, S. A. En el informe en mención, se señala entre otros aspectos, que los apoderados especiales de la empresa, sustentaron formalmente su recurso de reconsideración con apelación en subsidio en contra de la resolución que se impugna, y lo fundamentaron en la inexistencia de la relación laboral habida entre su representada con los señores José C. Sanjur, Pedro Núñez, Joaquín Loaiza, José Miranda y José Pinto, y que los pagos que se le hicieron fueron en concepto de servicios profesionales. Finalmente, la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social resolvió confirmar las dos anteriores resoluciones mediante Resolución N° 9792-94-J. D. de 2 de noviembre de 1994.

La parte actora estima que se han violado los ordinales b), c) y d) del Artículo 62 del Decreto Ley N° 14 de 27 de agosto de 1954, tal como quedó modificado por el Artículo 46 de la Ley N° 30 de 26 de diciembre de 1991 cuyo texto es el siguiente:

> "ARTÍCULO 62: Para los efectos del Seguro Social privarán las siguientes definiciones:
> ...
> b. Sueldo: La remuneración total, gratificación, bonificación, comisión, participación en beneficios, vacaciones o valor en dinero y en especie, que reciba el trabajador del patrono o empleador o de cualquier persona natural o jurídica como retribución de sus servicios o con ocasión de éstos. Se exceptúan del pago de cuotas de Seguro Social los viáticos, dietas y permisos. También se exceptúan las gratificaciones de navidad o aguinaldos y los gastos de representación mensual, siempre que no excedan a un mes de sueldo. En caso de exceder el mes de salario se gravará solamente el diferencial que exceda al respectivo mes de salario. Igualmente se exceptúan del pago de cuotas de Seguro Social la participación en beneficios que otorque el empleador a sus trabajadores siempre y cuando esta participación beneficie a no menos del setenta por ciento (70%) de los trabajadores de la empresa y no exceda ni sustituya el total del salario anual. Para los efectos del porcentaje establecido en forma precedente, no se considerarán dentro del mismo a los ejecutivos y empleados que sean socios o accionistas del empleador o patrono, si éste fuese persona jurídica, así como a los parientes de los ejecutivos, socios o accionistas, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Si el patrono o empleador fuese una persona natural, excluirá de este porcentaje a los parientes y directivos en los referidos grados de parentesco, a los dueños de la empresa y a los ejecutivos de la misma.
>
> Además, se exceptúan del pago de cuotas de seguro social las sumas que reciba el trabajdor en concepto de indemnización con motivo de

> la terminación de la relación de trabajo, así como las sumas recibidas por los servidores públicos que se acojan a planes de retiro voluntario.
>
> c. Trabajador: Toda persona natural que preste servicios remunerados en dinero o en especie a un patrono o empleador;
>
> d. Patrono o empleador: Toda persona natural o jurídica, de derecho público o privado que use los servicios de un trabajador en virtud de un contrato de trabajo expreso o tácito mediante el pago de un sueldo."

La firma Estudio Corporativo Tributario, S. A., sustenta su pretensión en base en el hecho de que la empresa SISTEMAS ESTRUCTURALES MODERNOS, S. A., es una sociedad panameña que se dedica a la construcción y en su giro comercial, normalmente subcontrata con otras personas y empresas, ciertas etapas o fases en el proceso de construcción, por carecer de los elementos necesarios para realizarlas ella misma. A ello añade, que no existe registro contractual ni contable alguno en los libros o documentación de la empresa que indique que entre los señores JOSÉ C. SANJUR, PEDRO NÚÑEZ, JOAQUÍN LOAIZA, JOSÉ PINTO, subcontratistas de la empresa, exista una relación laboral, pues, nunca tuvieron la intención de ser contratados ni permanente ni temporalmente, por lo que rindieron declaración extrajudicial ante el Juez de Circuito. En cuanto al aspecto económico que relaciona a dichos señores con la empresa, afirma el apoderado judicial de ésta que es "irregular" porque difiere y es variado; es "casual" porque no es habitual; y es "momentáneo" porque se limita a momentos específicos. También sostiene el apoderado judicial de la parte actora, que la empresa no tiene subordinación jurídica sobre dichos subcontratistas, ni los mismos dependen económicamente de la empresa. Finalmente sostiene la firma forense Estudio Corporativo Tributario, que la Caja de Seguro Social no ha aportado en el proceso administrativo, ningún elemento que indicie la existencia de una dependencia económica de los subcontratistas con respecto a la empresa SISTEMAS ESTRUCTURALES MODERNOS, S. A., y añade que ellos ofrecen sus servicios a otras empresas y personas.

En cuanto a las disposiciones violadas y el concepto en que lo han sido, la parte actora estima en cuanto al ordinal b) del artículo 62 de la Ley 14 de 1954 antes citado, que ha sido interpretado erróneamente, pues, éste no estipula el cobro de cuotas de seguro ni riesgos profesionales cuando no existe relación laboral. En cuanto a los ordinales c) y b) del artículo en mención, estima la firma demandante que la violación es directa toda vez que los subcontratistas independientes no son trabajadores según esa definición, ni se puede considerar patrono o empleador a quien no contrata ni expresa ni tácitamente los servicios de una persona natural. A lo anterior añade la firma apoderada judicial de la parte actora, que la Caja de Seguro Social no ha establecido ninguna de la dos calidades ante mencionadas, por lo que mal podría hablarse de dependencia económica si la naturaleza de la operación del subcontratista independiente es "irregular, incierta, variada, casual y momentánea."

La Subdirectora de la Caja de Seguro Social rindió el informe explicativo de conducta mediante nota sin número ni fecha y recibida en la Secretaría de esta Sala el 29 de mayo de 1995. Dicho informe es del tenor siguiente:

> "Del examen realizado se pudo determinar que el patrono en referencia omitió declarar la suma de Veintidós Mil Novecientos Setenta con 66/100 (B/.22,970.66) en concepto de salarios pagados a sus trabajadores y no reportados a la Caja de Seguro Social, clasificados inadecuadamente como honorarios profesionales y otros, originando un alcance a favor de la Institución por la suma de Seis Mil Ciento Ochenta y Siete Balboas con 44/100 (B/.6,187.44) en concepto de cuotas obrero patronales y otros aportes dejados de pagar.
>
> La empresa una vez notificada del alcence en el informe N° DNA N. 92-559 de 4 de septiembre de 1992, presentó objeciones en Nota

recibida el 13 de noviembre de 1992, las cuales fueron atendidas debidamente por el Departamento de Auditoría a Empresas, determinando no aceptar los descargos presentados por el patrono, mediante Nota AE. N. 93-21 de 10 de febrero de 1993. Dicha nota le fue puesta en conocimiento a la empresa, indicándole que su cuenta total recibiría el trámite administrativo de rigor, el cual consistía en la emisión de la Resolución condenatoria correspondiente.

En este estado, la Subdirección General de la Caja de Seguro Social expidió la Resolución N° 4617-93-SUB-D. g. de 28 de abril de 1993, mediante la cual resolvió condenar a la empresa SISTEMAS ESTRUCTURALES MODERNOS, S. A., a pagar la suma de Seis Mil Ciento Ochenta y Siete Balboas con 44/100 (B/.6,187.44) en concepto de seguro social, prima de riesgos profesionales y recargos de Ley, sumas dejadas de pagar durante el período del mes de agosto de 1990 a junio de 1992, más los intereses que se causen hasta la fecha de su cancelación. ...

Tal como se desprende de toda la exposición que antecede, el punto básico de esta impugnación gira alrededor de la determinación del status legal de los señores que aparecen en el alcance, en cuanto se les concibe o no como trabajadores de la empresa SISTEMAS ESTRUCTURALES MODERNOS, S. A., lo que consecuentemente repercute en el fundamento de los actos administrativos impugnados.

Nuestra Junta Directiva adoptó esta determinación en virtud de que las investigaciones efectuadas por el Departamento de Auditoría a Empresas, no demostraron dudas sobre el status de dependientes o independientes de los señores mencionados en el alcance, es decir, sus investigaciones e informes periciales fueron concluyentes, en el sentido de que tales personas tienen la calidad de trabajadores dependientes de la empresa.

Un estudio de las piezas procesales nos llevó al convencimiento que dichas personas sí tienen vinculación obrero patronal con la sociedad recurrente, pues el Departamento de Auditoría a Empresas determinó del examen practicado a la empresa SISTEMAS ESTRUCTURALES MODERNOS, S. A., que "todos esos servicios y retribuciones forman parte del costo de construcción de la empresa y según los registros y documentos examinados durante la auditoría y las pruebas aportadas en la etapa de descargos no advertimos independencia de parte de dicha o que tuviesen organización propia para actuar independientemente tanto económica como jurídicamente."

"Por consiguiente, las sumas percibidas por las personas que aparecen en el alcance es producto de una relación de trabajo, la cual no escapa del ámbito de la aportación prevista en la legislación de Seguridad Social, por cuanto que tales sumas de dinero tienen su génesis en la relación de trabajo que mantenían con la empresa.

Corrobora lo anterior, la hoja de detalle de las omisiones en remuneraciones pagadas y no declaradas, en la cual se observó pagos hechos por la empresa SISTEMAS ESTRUCTURALES MODERNO, S. A., a las personas que aparecen en el alcance, siendo obvio que los mismos dependían económicamente de la demandante, razón suficiente para determinar en caso de duda la relación de trabajo, conforme lo expresado por el Artículo 65 del Código de Trabajo, que a la letra establece:

"ARTÍCULO 65: Existe dependencia económica en cualquiera de los siguientes casos:
...
En caso de duda sobre la existencia de una relación de trabajo, la

> prueba de la dependencia económica determina que se califique como tal la relación existente."
>
> Así las cosas y de acuerdo a lo que dispone el Artículo 2° literal b) de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, en el sentido de que andan sujetos al régimen obligatorio del Seguro Social todos los trabajadores al servicios de personas naturales o jurídicas que operen en el territorio nacional, la Caja determinó que los pagos que efectuó la empresa y que se precisan en la investigación realizada, como servicios profesionales y otros, deben considerarse sueldo, al tenor de lo preceptuado en el literal b) del Artículo 62 de la Ley Orgánica ... En vista de la omisión en el pago de las cuotas y en la declaración de los salarios devengados por sus trabajadores, es de carácter obligatorio para el patrono SISTEMAS ESTRUCTURALES MODERNOS, S. A. al tenor del Artículo 66-A del Decreto Ley N° 14 de 1954, responder del pago de sus cuotas y la de sus trabajores, sin perjuicio de la acciones penales que puedan ejercer la Caja o los asegurados, de acuerdo con las disposiciones del Código Penal."

Observa la Sala, que el asunto se centra en determinar la condición jurídica de los señores JOSÉ C. SANJUR, PEDRO NÚÑEZ, JOAQUÍN LOAIZA, JOSÉ MIRANDA Y JOSÉ PINTO, en lo que concierne a si son catalogados como trabajadores de la empresa SISTEMAS ESTRUCTURALES MODERNOS, S. A.

Analizado el caso que nos ocupa, la Sala concluye que sí existe relación laboral entre los señores antes mencionados y la empresa SISTEMAS ESTRUCTURALES MODERNOS S. A. Lo anterior es así, toda vez que si bien es cierto que dentro del expediente aparecen declaraciones rendidas por ellos ante el Juzgado Segundo de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, en las que expresan su intención de no ser contratados por la empresa ni permanente ni temporalmente, no es menos cierto que a fojas 70 y 71 del expediente, reposa la hoja de detalle de las omisiones en remuneraciones pagadas y no declaradas y en la cual se observa pagos hechos por la empresa SISTEMAS ESTRUCTURALES MODERNOS, S. A. que evidencian no sólo la dependencia económica según lo previsto en el último párrafo del artículo 65 del Código de Trabajo, sino que, igualmente, evidencian la existencia de una subordinación laboral o jurídica al percibir un salario por los servicios prestados, requisitos propios de la relación de trabajo conforme lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 62 del mismo código. Lo anterior lo corrobora el propio apoderado judicial de la parte actora, al sustentar el recurso de reconsideración cuando expresa: "... sus honorarios por servicios siempre son variables tanto en la frecuencia de los pagos como en las cantidades. Así lo demuestran los registros contables de la sociedad. Las cantidades varían de mes a mes y en algunos meses no hay pagos del todo ..." Finalmente, no hay que soslayar el hecho que SISTEMAS ESTRUCTURALES MODERNOS. S. A., no aportó aparte de las declaraciones rendidas ante el Juzgado Segundo de lo Civil del Primer Circuito Judicial por los señores cuyo situación legal aquí se ventila, documento alguno que demuestre fehacientemente que existe independencia de dichos señores con respecto a la empresa para actuar tanto económica como jurídicamente.

En virtud de lo antes expuesto, a juicio de la Sala, lo procedente es, pues no acceder a las pretensiones formuladas por la parte demandante, pues no se violenta de ningún modo lo previsto en los ordinales b) c) y d) del artículo 62 del Decreto Ley N° 14 de 27 de agosto de 1954.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley DECLARA QUE NO ES ILEGAL la Resolución N° 4617-93 de 14 de mayo de 1993, proferida por la Subdirectora General de la Caja de Seguro Social como tampoco lo son los actos confirmatorios.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA

JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ALBERTO LÁZARO RAMOS, EN REPRESENTACIÓN DE LEEMAN EDWARD DAVIS GRAHAM LEEMAN, PARA QUE SE DECLARE NULOS POR ILEGALES, LA RESOLUCIÓN N° 21-95 DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 1995, DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARRENDAMIENTOS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Alberto Lázaro Ramos, actuando en nombre y representación de LEEMAN EDWARD DAVIS GRAHAM LEEMAN, ha interpuesto Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, para que se declare nulos por ilegales, la Resolución N° 76-95 de 17 de agosto de 1995, dictada por la Dirección General de Arrendamientos del Ministerio de Vivienda, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

Al revisar la demanda, para establecer si cumple con los requisitos de ley para su presentación, se observa que en la misma no se ha señalado el concepto de la infracción de los preceptos que se cita como violados por el acto originario impugnado, como lo exige el artículo 28 de la Ley 33 de 1946, que como ha expresado esta Sala en innumerables resoluciones, está íntimamente ligado a los motivos de ilegalidad a que se refiere el artículo 16 de la Ley 33 de 1946, los cuales son: la infracción literal de los preceptos legales, la falta de competencia o de jurisdicción del funcionario o de la entidad que haya dictado el acto administrativo, el quebrantamiento de las formalidades que deben cumplirse y la desviación de poder.

También debió señalarse la forma en que se produjo la infracción de los preceptos legales, ya sea por violación directa, omisión, interpretación errónea o indebida aplicación.

Por tanto, debe declararse inadmisible la presente demanda de conformidad con el artículo 31 de la Ley 33 de 1946.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, propuesta por el licenciado Alberto Lázaro Ramos, en representación de LEEMAN EDWARD DAVIS GRAHAM LEEMAN, para que se declare nulos por ilegales, la Resolución N° 21-95 de 4 de septiembre de 1995, dictada por la DIRECCIÓN GENERAL DE ARRENDAMIENTOS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, los actos confirmatorios y para que se haga otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. LUIS A. STANZIOLA, EN REPRESENTACIÓN DE TRANSMARINE INVESTMENT CORPORATION, S. A. PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 1995, EMITIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

EL Lcdo. Luis A. Stanziola, actuando en representación de Transmarine Investment Corporation, S. A. ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nulo por ilegal, la Resolución de 6 de septiembre de 1995, emitida por el Director General de la Autoridad Portuaria Nacional, y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador procede a examinar la demanda para determinar si la misma cumple con los requisitos necesarios para su admisión.

Observa quien suscribe que la demanda no cumple con el requisito previsto en el numeral 4 del artículo 28 de la Ley 33 de 1946, que requiere que en aquélla se expresen las disposiciones que se estiman violadas y el concepto de la violación, puesto que, el demandante solamente menciona como violados el artículo 41 de la Constitución Nacional, que como se reiterado en innumerables ocasiones la Sala esta facultada para decidir acerca de la ilegalidad de actos administrativos por lo cual, lógicamente, la norma violada debe ser como regla general una disposición legal y no una disposición constitucional; y el artículo 379 del Código Penal, el cual forma parte de una jurisdicción especial que no puede ser analizada dentro de una demanda de esta naturaleza.

Por todo lo antes expuesto, lo procedente es, pues, no admitir la demanda.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador actuando en representación de la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, interpuesta por el Lcdo. Luis A. Stanziola, en representación de Transmarine Investment Corporation, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL DR. ROLANDO MURGAS TORRAZA, EN REPRESENTACIÓN DE ZOILA VICTORIA DE LA ROSA DE KAM, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 3883-93-DNP, DE 15 DE JULIO DE 1993, DICTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Doctor Rolando Murgas Torraza, actuando en representación de ZOILA VICTORIA DE LA ROSA DE KAM, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción con el objeto que se declare nula por ilegal la Resolución N° 3883-93-DNP de 15 de julio de 1993, dictada por el Director General de la Caja de Seguro Social, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

En la demanda se pide que se declare nula la Resolución N° 3883-93-DNP, de 15 de julio de 1993, dictada por el Director General de la Caja de Seguro Social, mediante la cual se resuelve destituir a la señora de Kam del cargo de Técnico en Radiología Médica que desempeñaba en la Policlínica "Carlos N. Brin" de San Francisco. Igualmente, se solicita a la Sala la declaratoria de nulidad del acto confirmatorio contenido en la Resolución 9440-94-J. D., de 7 de julio de 1994 y en la cual se confirma en todas sus partes la Resolución N° 3883-93-DNP del 15

de julio de 1993 y, que, como consecuencia de ello, se restituya a la señora de Kam a su cargo y se le reconozca la antigüedad acumulada para todos los efectos.

A juicio del apoderado judicial de la parte actora, el acto que se acusa expedido por el Director General de la Caja de Seguro Social es nulo, dado que vulnera los artículos 22 ordinal "e" y, el 29 ordinal "c" del Decreto 14 de 1954. Además, considera que se ha violado el artículo 21 ordinal "a", del Reglamento Interno de Personal de la Caja de Seguro Social; en concordancia con el numeral 16 del Cuadro de Aplicación de Sanciones. Adicionalmente, considera que se ha violado el artículo 65 ordinal "e" del Reglamento de Personal de la Caja de Seguro Social.

En cuanto al artículo 22 ordinal "e" del Decreto Ley 14 de 1954, que señala que entre las atribuciones y deberes del Director General están el "nombrar, trasladar y remover a los empleados, determinar sus deberes e imponerles sanciones," estima el apoderado judicial de la parte demandante que se ha violado por indebida aplicación, puesto que "no existen presupuestos para que se aplicase a mi representada la sanción de destitución." En relación al artículo 29 ordinal "c" del Decreto 14 de 1954 en el que se consagra la estabilidad de los profesionales y técnicos de salud, alega la parte demandante que se ha violado de forma directa por omisión, pues la demandante cumple con los requisitos establecidos en este artículo, por lo que, esta norma "resultó absolutamente ignorada."

Adicionalmente, considera la parte demandante que se ha violado por indebida aplicación el artículo 21, ordinal "a" del Reglamento de Personal de la Caja de Seguro Social; en concordancia con el numeral 16 del Cuadro de Aplicación de Sanciones, ya que, al no existir la mencionada alteración a los documentos, la señora De la Rosa de Kam ha cumplido con lo que se establece en éste. La parte actora considera también, que se ha violado por infracción literal el artículo 65, ordinal "e" del Reglamento de Personal de la Caja de Seguro Social, pues la "norma ... permite al Director de la Caja de Seguro Social sancionar con la destitución del cargo en casos de faltas graves debidamente comprobadas que la justifiquen," situación, que según el apoderado judicial de la parte actora, no ocurre en este caso.

El Director General de la Caja de Seguro Social rindió el respectivo informe explicativo de conducta mediante la Nota con fecha 16 de enero de 1995. En dicha nota el funcionario fundamenta su actuación de la siguiente manera:

> "... la destitución se fundamentó en la comprobación por parte de funcionarios de la Dirección Nacional de Personal de la Caja de Seguro Social, de los hechos e irregularidades denunciados por la Comisión Evaluadora de los Concursos de Jefaturas Técnicas y Supervisores Técnicos en Radiología Médica, en nota 642-DGS-92, de 30 de julio de 1992, dirigida al Director Nacional de Servicios y Prestaciones Médicas de la Caja de Seguro Social, y en el Acta N° 6, de 30 de julio de 1992, los cuales aluden a la conducta ilegal de la Lic. ZOILA DE KAM en presentar ante dicha Comisión un certificado expedido a su nombre, que la acreditaba como participante en el Curso de Protección Radiológica dictado bajo los auspicios de la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos de Norteamérica, entre el 15 y 26 de mayo de 1967.
>
> Debe agregarse que esta certificación fue utilizada por la funcionaria sancionada como crédito propio para concursar en una posición de jefatura Técnica en Radiología Médica en la Caja de Seguro Social. Posteriormente, pudo establecerse la no participación de la demandante en dicho curso, y por ende, que el certificado aportado es fraudulento. Al denunciar, tanto la citada Comisión Evaluadora de los Concursos en Radiología Médica, como el Director Nacional de los Servicios y Prestaciones Médicas de la Caja de Seguro Social, las graves faltas atribuidas a la LIC. DE KAM, la Dirección Nacional de Personal procedió a instruir la correspondiente investigación administrativa con el propósito de

> comprobar o descartar las mismas. El resultado de tal investigación aparece plasmado en el Informe ICYS-2747-93 de 25 de mayo de 1993, dirigido al Director General de la Caja de Seguro Social, y suscrito por la Directora Nacional de Personal, la jefa de la Sección de Análisis de Personal, y el Analista a cargo del caso.
>
> ... el Informe de la referencia se permite recomendar al Director General de la Institución la destitución de la Licenciada de Kam por haber presentado como propio un certificado adulterado con el propósito de obtener créditos o puntos adicionales a su favor en un concurso de jefatura de Radiología Médica celebrado en la Caja de Seguro Social en 1992.
>
> Es necesario poner de relieve que la LIC. ZOILA DE LA ROSA DE KAM al serle formulados los cargos ya indicados manifestó en reiteradas ocasiones que si (sic) había participado en el curso especial de PROTECCIÓN RADIOLOGICA, en su condición de estudiante de bachillerato del Instituto José Dolores Moscote, y por ende, se le había expedido el certificado de participación correspondiente ...
>
> Sin embargo, consta en el expediente de la demandante ... el Diploma que le confiere el título de Bachiller en Ciencia, expedido por el Instituto José Dolores Moscote, a favor de ... a los tres (3) días del mes de mayo de 1965. Este documento demuestra de manera concluyente que no es, ni puede ser cierta la afirmación de la demandante ... puesto que ... ya tenía dos (2) años de graduada en el Colegio citado, cuando tuvo lugar el curso de Protección Radiológica, lo cual torna imposible su participación en dicho evento ...
>
> ... mediante Resolución N° 3084-91-DG, el 16 de enero de 1991, el Director General de la Caja de Seguro Social sancionó con quince (15) días de suspensión sin derecho a sueldo a ZOILA DE LA ROSA DE KAM por haber presentado como propio en un concurso de jefatura celebrado en la Caja ... un certificado falsificado relacionado con un curso de Programación supuestamente procedente del Centro de Estudios BYTES, S. A.
>
> En aquella ocasión la LICDA. DE KAM ante la evidencia escrita proveniente del Centro de Estudio y Aplicación de las Computadora BYTE, S. A., en el sentido de que ésta nunca había sido alumna de dicho Centro de Estudios, y por lo tanto, no habían extendido certificado alguno a su nombre, aceptó por escrito que había cometido tal falta, indicando que lo había hecho porque deseaba aportar más créditos a su favor dentro del concurso ..." (Subraya la Sala).

Al corrérsele traslado a la Procuradora de la Administración, ésta contestó mediante Vista N° 88 de 24 de febrero de 1995, en la que, señala que "al demandante no le asiste la razón en sus pretensiones."

Evacuados los trámites de ley, la Sala pasa a resolver la presente controversia.

En cuanto a la supuesta violación del artículo 22, ordinal "e" del Decreto Ley 14 de 1954, observa la Sala, que no le asiste la razón a la parte actora, puesto que, este artículo expresamente faculta al Director General de la Caja de Seguro Social a "remover" a los empleados subalternos de la institución e "imponerles sanciones," si así lo amerita. De lo anterior, se colige que, como existen en el expediente administrativo pruebas que demuestran que la demandante ha reincidido en la comisión de faltas y actuaciones que revelan falta de honestidad, al momento de la presentación de los documentos para los concursos, se desestima este cargo.

Por otro lado, considera la Sala, que no se ha producido la infracción al

artículo 29, ordinal "e" del Decreto Ley 14 de 1954, puesto que si bien es cierto que, este artículo otorga estabilidad en el cargo a los "profesionales y técnicos de la salud al servicio de la Caja de Seguro Social," no es menos cierto que, esa estabilidad, tal como lo señala el artículo 295 de la Constitución Nacional, "está condicionada a su competencia, lealtad y moralidad en el servicio." Es por esta razón, que, la destitución de la señora Zoila de Kam, se fundamentó en la investigación seria y bien documentada, que se llevó a cabo, como consecuencia de la denuncia realizada por la Comisión Evaluadora de los Concursos de Jefatura Técnica y Supervisores Técnicos en Radiología Médica, ya que, al realizar un estudio detallado de los documentos presentados para diferentes concursos, éstos, "revelan nuevamente la falsificación de un documento que atribuye puntaje en este concurso."

Aunado a lo anterior, se aprecia que mientras se realiza la investigación en este caso, se separa a la señora Zoila de Kam para que aporte las pruebas necesarias para la aclaración de los cargos que se le imputan, y se le restituya en el cargo, pero como ésta, no hizo uso de este derecho y además, se pudo corroborar a través de las pruebas que se adjuntaron al expediente administrativo, la reincidencia en la presentación de documentos falsos para participar en diferentes concursos para ocupar puestos de jefatura en la Caja de Seguro Social, se decidió que lo procedente, era su destitución. En este sentido, conviene señalar tal como lo ha hecho esta Sala en diversas ocasiones, que no pueden permitirse, este tipo de actuaciones, en entidades como la Caja de Seguro Social, pues, se hace necesario, que los funcionarios que laboran en esa institución observen una actitud de honradez, lealtad y eficacia. Por ello, se desestima también este cargo.

Es igualmente improcedente la violación relacionada con el artículo 21, ordinal "a" del Decreto Ley 14 de 1954, en concordancia con el numeral 16 del Cuadro de Aplicación de Sanciones, porque tal lo señala el mismo artículo 21 en su ordinal e, es deber de todo servidor de la Caja de Seguro Social "ejecutar el trabajo en forma correcta y honesta," obligación que, no puede cumplirse si la demandante reincide en su conducta fraudulenta, al presentar, al momento de concursar para puestos de jefatura dentro de la Caja de Seguro Social, documentos falsos, por lo que, a todas luces la señora Zoila de Kam, transgrede este principio. Se desestima, pues este cargo.

Finalmente, no coincide la Sala con los cargos que se le endilgan al acto administrativo en relación al artículo 65, ordinal "e" del Reglamento Interno de Personal de la Caja de Seguro Social, puesto que, tal como lo señala el artículo 47, ordinal "e" del mencionado reglamento, se decretará la destitución de un servidor público que incurra en conductas desordenadas e incorrectas que puedan ocasionar perjuicios al funcionamiento o al prestigio de la institución, y como en este caso se ha demostrado, con creces, que la demandante es reincidente en su conducta, se aprecia claramente que, la actuación del Director General de la Caja de Seguro Social no es ilegal.

Es obvio, pues, que la destitución de la demandante, se dio con fundamento en una causa justificada, por lo que, no se aprecia violación alguna de las disposiciones legales mencionadas en la demanda.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, la Resolución N° 3883-93-DNP de 15 de julio de 1993, dictada por el Director General de la Caja de Seguro Social, como no lo es tampoco el acto confirmatorio.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR PEDRESCHI Y PEDRESCHI, EN REPRESENTACIÓN DE APLICACIONES QUÍMICAS, S. A. PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN N° 39 DE 18 DE MARZO DE 1994, DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La sociedad Aplicaciones Químicas, S. A. presentó, por intermedio de sus apoderados judiciales especiales la firma de abogados Predeschi y Predeschi, demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción contra la Directora General de Comercio Interior del Ministerio de Comercio e Industrias a fin de que la Sala declare que son nulas las resoluciones N° 39 de 18 de marzo de 1994 expedida por la funcionaria demandada y N° 38 de 23 de agosto de 1994 dictada por el Ministro y Viceministro de Comercio e Industrias, acto confirmatorio de la primera. Asimismo, la parte demandante solicita que como consecuencia de la declaración de nulidad de los actos administrativos antes mencionados se deberá ordenar la cancelación del Certificado de Registro número 037087 correspondiente a la marca de fábrica "ORTOPÉDICO y Diseño".

La funcionaria demandada rindió informe de conducta mediante nota de 14 de noviembre de 1994. En ese informe en su parte pertinente se señala lo siguiente:

> "de conformidad con las constancias probatorias se resolvió negar la demanda de cancelación, toda vez que la marca **ORTOPÉDICO Y Diseño** registrada desde 1985 a favor de **FABRICA DE COLCHONES SIMONS** conlleva en su conjunto elementos adicionales con su diseño".

Celebrada la audiencia respectiva el día 3 de marzo de 1994, según fuera ordenado mediante providencia de 5 de noviembre de 1994 y evacuadas las pruebas aducidas por las partes, se dictó la resolución impugnada, por la cual, en decisión de primera instancia, se NEGO la demanda de cancelación instaurada por APLICACIONES QUÍMICAS, S. A. y se ordenó el archivo del expediente.

La señora Procuradora de la Administración mediante Vista N° 300 de 17 de julio de 1995 solicitó a la Sala Tercera acceder a las pretensiones de la parte demandante por considerar que la resolución impugnada ha obviado el contenido normativo del literal "d" del artículo 14 del Decreto Ejecutivo N° 1 de 3 de marzo de 1939 "al mantener vigente el registro de un signo marcario que describe "per se" una idea, un concepto íntimamente relacionado con las cualidades del producto que ampara". y añade lo siguiente:

> "... es conocido en Panamá que a los pacientes con dolencias óseas, se le prescribe descansar en colchones de calidad ortopédica. Luego, es claro que la producción o fabricación de colchones, está ligada a que esos productos de confort, además de ser cómodos, sean propios para el tratamiento de las personas que padezcan de tales males óseos. Por tanto, debe cancelarse el registro de dicha marca, que pretende monopolizar el uso de conceptos generales en el mercado de colchones."
> ...
> "Para terminar, puntualizamos que "ortopédico" es un término que se ha generalizado de tal forma que, comúnmente se emplea para describir algo que tiene el objeto de servir al tratamiento de males óseos."

Sostiene la parte demandante que han sido violados los artículos N° 14 acápite "a" y 8 del Decreto Ejecutivo Número 1 de 1939.

Respecto a la violación del artículo 14 del Decreto Ejecutivo N° 1 de 1939, la parte actora señala que se dio por infracción literal "al permitir la subsistencia jurídica del registro de una marca descriptiva de la clase y características del producto que ampara en circunstancias en que dicha norma

prohíbe expresamente el registro de marcas con dicha particularidad" y añade que la infracción se dio igualmente "al interpretar que el mismo sólo era invocable para oponerse al registro de la marca y no invocable cuando se pide la cancelación ignorando, en consecuencia, la ratio del mismo, esto es, el evitar que se registren o permanezcan registradas marcas genéricas."

Atendiendo a la infracción señalada por el demandante, la problemática se encuentra en cuanto a que si la marca de fábrica "ORTOPÉDICO y Diseño" es susceptible de registro, o por el contrario, se debe cancelar por ser un término genérico, denotar cualidad, clase o no contener elementos diferenciadores.

Veamos lo que dicen los peritos.

Por parte de quien registró la marca en cuestión se presentó la perito Elizabeth Serrano Guerra, licenciada en humanidades con Especialización en Español en su dictamen pericial, después de explicar la naturaleza y concepto del vocablo "ORTOPÉDICO", en lo cual coincide con los otros peritos, dictaminó entre otras cosas, que el vocablo "OROTOPÉDICO" es un término de uso popular, no solo para colchones sino también para botas y otros aparatos correctivos, que "en la jerga de la profesión médica se consignan como correctos y de uso común términos como "cama ortopédica", "bandeja ortopédica", "cuello ortopédico" y concluye que el término ortopédico no puede constituir exclusivamente una información sobre clase o calidad de colchones. El segundo peritaje por parte de la empresa, ha sido hecho con referencia a la marca en cuestión y dos angelitos, lo que no es el presente caso, sin embargo la licda. Halman al preguntarle a éste perito lo siguiente: "En la expresión el único colchón ortopédico en Panamá, ¿ortopédico es una marca?", contestó "**en este caso el término ortopédico no puede interpretarse como una marca**"

Por la parte actora se presentó el sr. Jaime Alberto Sosa, quien se refirió de la siguiente manera:

> "En el presente caso, se debate sobre la aplicación de la palabra ortopédico para un colchón. Dicha palabra designa características o calidad especial de este producto, al igual que las palabras KING SIZE, QUEEN, FULL o TRES CUARTOS designan el tamaño del colchón. La expresión ORTOPÉDICO, así como KING SIZE, QUEEN, FULL o TRES CUARTOS, constituyen estándares dentro de la industria de la colchonería."
> ...
> "Por lo tanto, el apoderarse de un atributo que es un estándar dentro de una denominada industria y usarlo como marca le da a esa industria un patrimonio de marca sobre sus competidores. Por ejemplo el auto Volvo es percibido como seguro y ningún otro automóvil lo reta en ese campo. Sería absurdo pensar que Volvo pueda registrar una marca denominada "Seguro" o Mercedes Benz una denominada "Alta Calidad" y no permitir que otras marcas utilicen esos adjetivos o que una fábrica de colchones registre King, Queen, o Sencillo para un colchón; o que un fabricante de baterías registre AA o AAA para sus baterías."

El segundo perito de la parte actora es el Dr. Augusto A. Alvarado Carrasco y a pregunta que se le hiciera con respecto a cuando prescribe un colchón ortopédico o semi-ortopédico si se refiere a una marca o a una calidad de colchones respondió "Se trata de una calidad de colchones que tiene una consistencia firme y que no se deforma fácilmente".

De los peritajes anteriores es claro que todos los peritos están de acuerdo en que el vocablo "ortopédico" es de uso general para identificar aparatos con relación a la compostura de ciertas deformaciones óseas, tales como cama ortopédica, bandeja ortopédica, cuello ortopédico y zapatos ortopédicos. Por lo que debemos adentrarnos en lo que se refiere a la violación del artículo 14 del Decreto 1 de 1939 y el vocablo "ortopédico" es susceptible de registro.

De todo lo anterior, no pueden perderse de vista dos aspectos, por un lado,

si bien existen denominaciones que incluyen nombres genéricos, según vemos en los ejemplos señalados por la parte demandada durante el procedimiento administrativo, tales como: "MAIZENA, AUTO AUXILIO, AUTO SERVICIO, MENTOLADOS" y los señalados por los peritos: "ORTO BAMBI", "ORTO BAMBI", "ORTOPEDIA NACIONAL". Estos ejemplos, indistintamente si son marca de fábrica, de comercio o denominación comercial, no se componen de una sola palabra o término, sino mas bien, términos que, en su conjunto, crean una denominación diferente y distintiva de los que se componen, además, éstas marcas, no prohíben el uso exclusivo del término genérico o palabra que se componen, inclusive en su clasificación internacional. A manera de ejemplo, por tener registrada la marca "AUTO AUXILIO", no por ello se pretenda evitar el uso del término "AUTO" en forma exclusiva y prohibir el uso del mismo a interesados, al igual que la marca "MAIZENA" no es suficiente para impedir el uso general del término "MAÍZ" o en conjunto con otra palabra. De las denominaciones de establecimientos comerciales o de uso publicitario, debemos observar que, igualmente a los ejemplos anteriores, el vocablo "ortopédico" u "ortopedia" es utilizado junto a otra palabra y crean una denominación diferente, el cual es distintivo de cualquier otro.

El otro aspecto que no se debe perder de vista son las declaraciones del perito Sosa, quien señala que se está utilizando el registro del término "ORTOPÉDICO" con el propósito de confundir al público consumidor de que existe un solo colchón ortopédico, por lo tanto un solo colchón con las características recomendadas por los doctores, cuando es un producto que reúne un mínimo de normas técnicas establecidas por la industria dedicada a esta materia.

Lo anterior se deduce también de las pruebas presentadas, pues se destacan los diferentes usos que le da Fabrica de Colchones Simons, S.A, al vocablo "ORTOPÉDICO". El término es utilizado indistintamente y sin el diseño que se trata de registrar para los diferentes tipos de colchones. Así vemos cuando utiliza la frase "El único colchón ortopédico" y de acuerdo al perito, no se está utilizando como marca "ortopédico". Por lo que se deduce que la propia empresa utiliza para describir y distinguir un colchón con características requeridas para el tratamiento o recomendación de los médicos, que no es otra cosa que confirmar el uso genérico de tal vocablo.

De todo lo anteriormente expuesto, la Sala concluye que el vocablo "ORTOPÉDICO", cae dentro de las prohibiciones contempladas en el artículo 14 del Decreto Ejecutivo N° 1 de 1939 puesto que es un vocablo de uso general tanto en el colectivo médico, como en la comunidad. Vocablo utilizado para distinguir un producto de los demás de su clase, cuales son los aparato diseñados para corregir o prevenir deformidades del cuerpo humano, así encontramos que se clasifica a los zapatos con este propósito "zapatos ortopédicos", para distinguir de los zapatos comunes o corrientes. En el caso que nos compete, los fabricantes de colchones, clasifican "colchones ortopédicos" a los colchones con características y cualidades especiales para que el público consumidor pueda distinguirlos de los colchones que no reúnan éstas características y calidades especiales.

Considera la Sala que, de no cancelar el registro del vocablo "ORTOPÉDICO", sin ningún elemento o palabra adicional que lo distinga, permite a quien tenga la propiedad del registro, prohibir a los demás fabricantes el uso de un término comúnmente usado en la colectividad, y consecuentemente, que los diversos fabricantes no utilicen el término correcto para clasificar colchones.

En referencia de la infracción al artículo 8 del Decreto Ejecutivo N° 1 de 1939, cabe señalar que el mismo contempla o trata cuando una persona que quiera hacer uso, explotar, u ostentar una marca de fábrica que esté inscrita o que este en procedimiento de inscripción deberá demostrar tener mejor derecho al respecto. En el presente caso, no se puede aplicar esta norma pues no se trata de alguien que desea utilizar "ortopédico" como marca de fábrica, sino más bien estamos ante la solicitud de cancelación del registro de un término genérico como marca de fábrica, por lo tanto, no se puede exigir que compruebe tener mejor derecho a quien no desee explotar, dar uso u ostentar dicho término como marca.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la

ley, DECLARA que es ilegal y, por lo tanto, nula la Resolución N° 39 de 18 de marzo de 1994 dictada por la Directora de Comercio Interior del Ministerio de Comercio e Industrias; que es igualmente nula por ilegal la Resolución N° 38 de 23 de agosto de 1994 dictada por el Ministro y Viceministro de Comercio e Industrias que confirma la Resolución N° 39; que es fundada en derecho la demanda de cancelación propuesta por APLICIONES QUÍMICAS, S. A. contra "FABRICA DE COLCHONES SIMONS, S. A. y, por lo tanto, CANCELA el registro N° 037087 de 6 de septiembre de 1985 correspondiente a la marca de fabrica "ORTOPÉDICO y Diseño".

Copíese, Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA FIRMA ENDARA Y MARRÉ, EN REPRESENTACIÓN DE AGENCIAS ESCOFFERY, S. A. PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 14 DE 15 DE FEBRERO DE 1993, EXPEDIDA POR EL MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA.

VISTOS:

La firma forense Endara & Marre, como apoderados especiales de **AGENCIAS ESCOFFERY, S. A.** ha interpuesto, ante el resto de la Sala Contencioso Administrativo, Recurso de Apelación contra el Auto de 12 de junio de 1995, que no admite la demanda Contencioso-Administrativo de Nulidad presentada por el recurrente para que sea declarada nula por ilegal la Resolución N° 14 de 15 de febrero de 1993, emitida por el Ministerio de Comercio e Industrias.

Una vez se corrió traslado del negocio a la Procuraduría de la Administración, dicha dependencia mediante Vista visible de fojas 54-59 se opuso al Recurso de Apelación, solicitando **"Se confirmase el Auto por la cual de declaró inadmisible la presente demanda"**.

La resolución apelada se fundamentó en las siguientes consideraciones:
"...
El presente caso tiene su génesis en una solicitud de inscripción de la marca de fabrica **jamonilla**, la cual fue propuesta por la empresa **Tulip Meat Packers** por medio de procurador judicial ante el Director General de Comercio Interior. Este último funcionario de oficio se pronunció al respecto en Resuelto N° 6917 de 29 de diciembre de 1987 negando la inscripción de dicha marca.

Posteriormente, en virtud de recurso de reconsideración del solicitante de la inscripción de la marca, el Director General de Comercio Interior confirmó mediante Resuelto 2519 de 23 de noviembre de 1988, la decisión adoptada por su persona en el primer resuelto. La parte afectada con las decisiones proferidas por la autoridad de primera instancia, propuso el recurso de alzada ante el Ministro de Comercio e Industria, quien por medio de la Resolución 14 de 15 de febrero de 1995, revocó los resueltos aludidos.

Sin embargo, luego de que el Ministro de Comercio e Industria (sic) revocará los resueltos emitidos por el Director General de Comercio Interior,dentro del Término de tres meses, sólo la empresa **Dak Meat Packers Ldt.**, propuso demanda de oposición a la inscripción de la marca de fabrica jamonilla, la cual fue desestimada.

> Dado el recuento de los hechos, claramente se observa que en ningún momento la empresa **AGENCIAS ESCOFFERY, S. A.** se presentó ante el Ministerio de Comercio e Industria (sic) para oponerse a la inscripción de la marca jamonilla, a pesar de que esta entidad gubernamental, en virtud de lo especial del proceso marcario, pone en conocimiento a los interesados en un término no menor de tres meses, de las marcas de fábrica o de comercio, dependiendo del caso, que se pretenden inscribir, precisamente para que los que se sientan afectados con estas solicitudes acudan ante la entidad gubernamental para hacer valer sus derechos y oposiciones.
>
> La demanda contencioso-administrativa de nulidad propuesta por **AGENCIAS ESCOFFERY, S. A.** en el fondo pretende que se surta en esta instancia la oposición que debió hacer valer ante el Director General de Comercio Interior del Ministerio de Comercio e Industria, pretensión ésta no acorde con la finalidad de los procesos que se tramitan en esta Sala Tercera.
>
> El aceptar esta demanda contencioso-administrativa de nulidad, estaríamos, de alguna manera, promoviendo un proceso de oposición de inscripción de marcas de fábrica o de comercio, cualquiera que sea el caso, en la jurisdicción contencioso-administrativa, situación ésta no contemplada en la ley, además de que no tendría sentido los esfuerzos desplegados por el Ministerio de Comercio e Industria para publicar o poner en conocimiento las solicitudes de inscripción de marcas de las personas interesadas. Sería una intromisión, por parte de esta Superioridad, en las facultades legales otorgadas a los funcionarios del Ministerio de Comercio e Industria.
>
> En conclusión, la vía era la acción de plena Jurisdicción después que se surtiera el proceso de oposición en la vía gubernativa. ...". (Fs. 35-37).

El resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, proceden a examinar el recurso de apelación y la demanda, a fin de determinar si la misma cumple con los requisitos necesarios para su admisión.

En el presente caso, considera el resto de los Magistrados que integran la Sala que le asiste la razón a la Procuradora de la Administración, pues, se percibe claramente que, el apoderado judicial de la parte actora incurre en el grave error de confundir la demanda contencioso administrativa de nulidad con la de plena jurisdicción. Ello es así, pues el acto administrativo cuya ilegalidad se cuestiona, es decir, la Resolución N° 14 de 15 de febrero de 1993 expedida por la Dirección Superior, Asesoría Legal, del Ministerio de Comercio e Industrias, en la que se aprueba la inscripción de la marca de fábrica, JAMONILLA, sólo puede ser impugnado por quienes se vean afectados por la inscripción. De lo anterior, se colige que, tal como lo ha señalado esta Sala en innumerables ocasiones, la vía idónea para impugnar resoluciones que lesionen derechos subjetivos o particulares, es una demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción y no una de nulidad.

> "19. LOS RECURSOS DE NULIDAD Y DE PLENA JURISDICCIÓN. SUS DIFERENCIAS CARACTERÍSTICAS.
>
> El recurso de nulidad puede proponerse únicamente contra actos de la administración, tales como Decretos, Resoluciones, Acuerdos y Resoluciones que contemplen situaciones generales. El contencioso de plena jurisdicción puede proponerse contra actos administrativos que afecten o vulneren derechos subjetivos. La "acción popular" puede ejercerla cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera; la de plena jurisdicción pueden proponerla las personas afectadas por el acto. La primera puede ejercitarse en cualquier tiempo; la segunda, sólo dentro de los dos meses siguientes a la

> publicación, notificación o ejecución del acto. En la demanda de anulación sólo cabe pedir la declaratoria de ilegalidad del acto acusado; en la de plena jurisdicción cabe con la declaratoria de ilegalidad pedir, a la vez, las prestaciones que se aspira. La sentencia que le pone fin al recurso de nulidad, se limita a declarar la ilegalidad o legalidad del acto acusado; la sentencia que decide el recurso de plena jurisdicción, llamado también acción privada, declara nulo el acto acusado con la finalidad de restablecer el derecho vulnerado. De todo ello se sigue que el recurso en que se pidió no sólo la ilegalidad del acto, sino también la indemnización o reparación de los daños que el acto ha ocasionado o pueda ocasionar, configura el recurso de plena jurisdicción; "la acción popular", en cambio, está limitada a obtener la declaratoria de ilegalidad del acto, con lo cual se restablece el orden jurídico.
>
> (V. Sentencia de 6 de septiembre de 1961. "Repertorio Jurídico." Año 1961 N° 9 Abril Diciembre,página 621)." (MORGAN, Eduardo Los Recursos Contencioso Administrativos de Nulidad y de Plena Jurisdicción en el Derecho Panameño. talleres Gráficos. Centro de Impresión Educativa. Panamá 1982 p. 290." (FS. 390-R. J. Agosto-1995).

Aunado a lo anterior, se observa que la parte demandante, en este caso, dejó que precluyera el término de tres meses, previsto en el artículo 29 del Decreto Ejecutivo N° 1 de 1939 (Por el que se reglamentan las disposiciones legales vigentes sobre Patentes de Invención, Marcas de Fábrica, Marcas de Comercio y Nombre Comercial), para presentar la oposición al registro de la mencionada marca. Por lo anterior, considera la Sala que no puede accederse a lo solicitado por la parte demandante, toda vez que lo pretendido es promover un proceso de oposición de inscripción de marcas de fábrica, dentro de la jurisdicción contencioso administrativo; situación que a todas luces, resulta no procedente.

En virtud de lo antes expuesto, el resto de la Sala coincide con el criterio expresado en el auto apelado, pues resulta claro que el recurrente no utilizó la vía idónea para atacar la Resolución del Ministerio de Comercio debido a que la misma, en todo caso, es la acción de Plena Jurisdicción, siempre y cuando se hubiera ventilado el respectivo proceso de oposición en la vía gubernativa.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, **CONFIRMA** el Auto de 12 de junio de 1995 mediante el cual no se admite la demanda contencioso administrativa de nulidad propuesta por la firma Endara y Marré en nombre y representación de **AGENCIAS ESCOFFERY, S. A.**

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE PATTON, MORENO & ASVAT PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL AUTO DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 1995, PROFERIDO POR EL FISCAL CUARTO SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA.

VISTOS:

La firma forense PATTON, MORENO & ASVAT, actuando en su propio nombre y representación interpuso ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia demanda contencioso-administrativa de nulidad para que se declare nulo, por ilegal, el Auto del 7 de noviembre de 1994, expedido por el Fiscal Cuarto Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá.

Al resolver sobre la admisibilidad de la demanda, la suscrita Magistrada Sustanciadora estima que la misma no debe admitirse, ya que se interpuso contra un acto de naturaleza judicial y no administrativo. En efecto, mediante la resolución acusada el Fiscal Cuarto Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá ordenó la práctica de una diligencia de allanamiento y registro en las oficinas de la firma forense PATTON, MORENO & ASVAT, ubicadas en la Torre del Hong Kong Bank, así como la práctica de una diligencia de auditoría para verificar los libros de registro contable y documentos pertinentes (fs. 1-2).

Tal como se observa, el acto acusado en el presente caso fue dictado por un agente del Ministerio Público en cumplimiento de las funciones de investigación de los delitos en general señalan los artículos 346 y 353 del Código Judicial y en especial el artículo 2185 idem. De conformidad con diversas disposiciones de la Ley N° 135 de 1943 (v. gr. artículos 23, 26, 28, 42a, 42b, 43a, 43, 54, etc.) sólo son acusables ante la jurisdicción contencioso-administrativa los **"actos administrativos"**, por lo que, al no gozar de esta naturaleza la resolución demandada, la presente acción no debe admitirse.

De consiguiente, la suscrita Magistrada Sustanciadora, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso-administrativa de nulidad interpuesta por la firma forense PATTON, MORENO Y ASVAT contra la Resolución del 7 de noviembre de 1995, expedida por el Fiscal Cuarto Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR LOS LICENCIADOS CELIO GUTIÉRREZ Y FRANCISCO PULICE COSSÚ PARA QUE SE DECLARE NULOS, POR ILEGALES, LOS DECRETOS ALCALDICIOS N° 11 DEL 7 DE JULIO DE 1994 Y N° 12 DEL 12 DE JULIO DE 1994, EXPEDIDOS POR EL ALCALDE DEL DISTRITO DE LA CHORRERA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado CELIO GUTIÉRREZ, actuando en nombre propio, interpuso ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia demanda contencioso-administrativa de nulidad para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto Alcaldicio N° 11 del 7 de julio de 1994, dictado por el Alcalde del Distrito de La Chorrera, por medio del cual se regula el horario de expendio de bebidas alcohólicas en bodegas, cantinas, jorones, bares, discotecas, jardines y similares.

Contra el mismo acto, el licenciado FRANCISCO PULICE COSSU interpuso demanda contencioso-administrativa de nulidad, al igual que contra el Decreto Alcaldicio N° 12 del 12 de julio de 1994, que lo modificó. Mediante Auto del 9 de septiembre de 1994, dicha demanda fue acumulada a la interpuesta por el licenciado CELIO GUTIÉRREZ.

Al encontrarse el negocio en estado de resolver, la Sala estima que en el mismo no es viable un pronunciamiento de fondo, por haberse producido el fenómeno

jurídico conocido como sustracción de materia.

A efectos de ilustrar mejor lo anotado, la Sala estima pertinente transcribir la parte normativa del Decreto Alcaldicio N° 12 de 12 de julio de 1994:

> "ARTÍCULO PRIMERO: Se regula a partir de la fecha, en toda la jurisdicción del Distrito de La Chorrera, el expendio o ventas de bebidas alcohólicas en BODEGAS, CANTINAS, JORONES, BARES, DISCOTECAS, JARDINES Y SIMILARES, se establece un horario de funcionamiento de estos establecimientos comerciales y el cual será así:
>
> BODEGAS Y MINI SUPER: DE LUNES A DOMINGO DE 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche.
>
> **CANTINAS, JARDINES, JORONES, BARES:** DE LUNES A SÁBADO DE 8:00 de la mañana a 12 de la noche.
>
> **DISCOTECAS Y SIMILARES**: DE LUNES A SÁBADO DE 8:00 de la mañana a 12:00 de la noche. DOMINGO: DE 8:00 de la mañana a 8:00 a 8:00 (sic) de la noche.
>
> RESTAURANTES Y PARRILLADAS: DE LUNES A SÁBADO HASTA LAS 12:00 de la noche. DOMINGO: DE 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche.
>
> **PARAGRAFO:** Cuando en los Locales Comerciales se cuente con salas de bailes cuyas estructuras, condiciones sanitarias y de seguridad sean óptimas y se realicen actividades bailables artísticas, culturales y folklóricas, podrán extender su horario hasta las 2:00 a. m., y solamente los días viernes y sábados, previo pago de los impuestos respectivo (sic) por la prolongación de dicha actividad.
>
> **ARTÍCULO SEGUNDO:** El horario establecido en el presente Decreto podrá ser variado a discreción del Despacho Alcaldicio y sólo para los días **FERIADOS, NACIONALES, NAVIDAD, AÑO NUEVO, FIESTAS PATRONALES** en los Corregimientos, **CARNAVALES, FUNDACIÓN DEL DISTRITO, ANIVERSARIO DEL LOCAL COMERCIAL** dedicado a este tipo de actividades, etc.
>
> **ARTÍCULO TERCERO:** Los establecimientos que trata el Artículo Primero del presente Decreto, que contravenga lo dispuesto en el mismo serán sancionados con multa de DOSCIENTOS BALBOAS (B/.200.00) a QUINIENTOS (B/.500.00) convertible en arresto a razón de un día por cada B/.2.00. (DOS BALBOAS) de multa.
>
> **ARTÍCULO CUARTO:** Es competencia exclusiva para conocer las violaciones al presente Decreto y dictar sanciones el SEÑOR ALCALDE.
>
> **ARTÍCULO QUINTO:** Están facultados para detener y conducir ante el funcionario competente a todo expendedor, Administrador, propietario, etc. que infrinja el presente Decreto, los Corregidores Diurno o nocturno de La Chorrera, y los miembros de la Fuerza Pública.
>
> **ARTÍCULO SEXTO:** Derógase el Acápite A y B del Artículo Quinto del Decreto Alcaldicio N° 3 del 13 de febrero de 1990 y el Decreto Alcaldicio N° 10 de 16 de junio de 1994.
>
> Dado en el Despacho del Señor Alcalde del Distrito de La Chorrera, a los siete días del mes de julio de mil novecientos noventa y cuatro." (El texto del artículo 1°, según fue modificado por el Decreto N° 12 del 7 de julio de 1994).

Después de la expedición del cuerpo normativo transcrito, el Alcalde del

Distrito de La Chorrera dictó el Decreto Alcaldicio N° 15 del 30 de septiembre de 1994, el que, según su encabezado "modifica el Decreto Alcaldicio N° 11 del 7 de julio de 1994. Sin embargo, de una simple lectura del aludido Decreto N° 15 se puede concluir en que el mismo, lejos de modificar el Decreto N° 11 de 1994, regula íntegramente las materias y aspectos que éste consagra. En efecto, el artículo primero del Decreto Alcaldicio N° 15 de 1994 establece un nuevo horario para la venta o expendio de bebidas alcohólicas en bodegas, cantinas, jorones, bares, discotecas, restaurantes y parrilladas dentro de la jurisdicción del Distrito de La Chorrera; en el artículo segundo, se otorga al Alcalde de ese distrito la facultad de variar discrecionalmente los horarios establecidos en el artículo primero, durante los días feriados, nacionales, Navidad, año nuevo, fiestas patronales, carnavales, fundación del Distrito o aniversario del local comercial. Asimismo, en el artículo 3° del aludido Decreto N° 15 se establece una sanción idéntica a la consagrada en el artículo 3° del Decreto transcrito y se señala además, que dicha sanción se estimará de acuerdo con la magnitud de la falta y la calidad o no de reincidente del infractor. Finalmente, el artículo 4°, al igual que lo hacen los artículos 4° y 5° del Decreto N° 11 de 1994, otorga competencia al Alcalde de La Chorrera para aplicar las sanciones y facultan a los Corregidores diurnos y Nocturnos, así como a los miembros de la Policía Nacional para que detengan y conduzcan ante el funcionario competente, al expendedor, administrador o propietario del local comercial que infrinja las disposiciones de aquel cuerpo normativo.

Tal como se observa, el Decreto N° 15 del 30 de septiembre de 1994 dictado por el Alcalde del Distrito de La Chorrera reguló en forma expresa e integral cada uno de los aspectos consagrados en el Decreto N° 11 del 7 de julio de 1994, cuyo artículo 1° fue modificado por el Decreto N° 12 de 12 de julio del mismo año. Así lo reconoce la primera autoridad de ese distrito cuando, en el tercer considerando de aquel Decreto, expone lo siguiente:

> "Que la presente materia se encuentra regulada en el Decreto Alcaldicio N° 11 de 7 de Julio de 1994, a su vez modificado por su (sic) Decreto Alcaldicio N° 12 de 12 de Julio de 1994."

De acuerdo con estos planteamientos fácticos, la Sala estima que el Decreto N° 11 demandado no está realmente modificado, como afirma el señor Alcalde de La Chorrera, sino que, al igual que el Decreto N° 12 de 12 de julio de 1994, ha sido derogado en forma tácita por el Decreto N° 15 del 30 de septiembre de 1994, al regular este último las mismas materias que consagraban aquellos dos decretos. Tal razonamiento se fundamenta en la parte final del artículo 36 del Código Civil que consagra como una de las formas de derogación de las leyes (entiéndase ley material), la expedición de **"una ley nueva que regule integramente la materia a que la anterior disposición se refería"**. Ante este hecho, resulta intrascendente y sin ningún valor jurídico, el contenido del artículo 5° del aludido Decreto N° 15 de 1994, mediante el cual se pretendía suspender los efectos del Decreto N° 11 de 1994 que se había derogado.

Por los anteriores motivos, la Sala considera que en el presente caso no es posible emitir un pronunciamiento de fondo al haber desaparecido el objeto procesal de este negocio y haberse producido, en consecuencia, el fenómeno jurídico de la sustracción de materia.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA que en las demandas promovidas por los licenciados CELIO GUTIÉRREZ y FRANCISCO PULICE COSSÚ para que se declare nulos, por ilegales, los Decretos Alcaldicios N° 11 del 7 de julio de 1994 y N° 12 del 12 de julio de 1994, se ha producido el fenómeno jurídico conocido como SUSTRACCIÓN DE MATERIA y SE ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL

Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE BUFETE VALDÉS, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE MINERA REMANCE, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACUERDO MUNICIPAL N° 11 DEL 30 DE OCTUBRE DE 1995, EXPEDIDO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE VERAGUAS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA.

VISTOS:

La firma forense Bufete Valdés, actuando en nombre y representación de MINERA REMANCE, S. A., interpuso ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia demanda contencioso-administrativa de nulidad para que se declare nula, por ilegal, el Acuerdo Municipal N° 11 del 30 de octubre de 1995, expedido por el Consejo Municipal del Distrito de San Francisco de Veraguas.

Con su libelo, la demandante presentó otro escrito en el que solicitó la suspensión provisional de los efectos del acto impugnado, ya que de lo contrario se vería obligada a pagar un impuesto municipal en adición al impuesto que actualmente paga a la Nación. De no suspenderse la ejecución de dicho Acuerdo se produciría un daño a MINERA REMANCE, S. A., no sólo por el pago de un impuesto ilegal, sino también porque se podría ordenar el cierre de la mina mientras no se cancele el aludido impuesto. En opinión de la demandante, el acto impugnado es ostensiblemente ilegal ya los municipios sólo pueden gravar aquello que no ha sido gravado por la Nación y, en el presente caso, los artículos 210 y 211 del Código de Recursos Minerales han gravado con un impuesto considerablemente elevado la actividad de extracción de minerales.

De acuerdo con el artículo 73 de la Ley N° 135 de 1943, la Sala puede suspender provisionalmente los efectos de los actos impugnados si, a su juicio, ello es necesario para evitar un perjuicio notoriamente grave. Conforme ha expresado la jurisprudencia de la Sala, en las acciones de nulidad dicha medida es procedente para evitar violaciones ostensibles al ordenamiento jurídico, al igual que en las acciones relativas al pago de **tributos municipales**, "en los que aspectos muy importantes de su estructura, tales como el hecho generador de la obligación tributaria o la tarifa del impuesto que deben pagar los contribuyentes municipales se encuentran regulados mediante actos administrativos", que sí pueden ser revisados por la Sala (Sent. del **15 de enero de 1992**, Registro Judicial de enero de 1992, págs. 28-32).

En el caso bajo estudio, el artículo 1° del Acuerdo Municipal N° 11 del 30 de octubre de 1995 expedido por el Consejo Municipal del Distrito de San Francisco de la Provincia de Veraguas, grava con un impuesto mensual de seiscientos balboas (B/.600.00) a toda persona natural o jurídica que, "**realice extracción, de minerales metálicos**", mientras que los artículos 2, 3 y 4, establecen obligaciones relativas al pago de dicho impuesto.

Tal como indica la demandante, la actividad de extracción de minerales se encuentra gravada por un impuesto nacional, ya que el artículo 211 del Código de Recursos Minerales, consagra el pago de una regalía aplicable a las concesiones de extracción minerales, entendida ésta, según el artículo 212 del mismo Código, **"como un porcentaje de la producción bruta negociable"**.

Tal como se observa, la actividad de extracción de minerales metálicos ya ha sido objeto de un impuesto nacional, por lo que la imposición de un gravamen municipal a través del acto impugnado, parece infringir ostensiblemente el numeral 6° artículo 21 de la Ley N° 106 del 8 de octubre de 1973, que prohíbe a los Consejos Municipales gravar con impuestos **lo que ya ha sido gravado por la Nación**. Por ello la Sala debe acceder a la medida cautelar solicitada.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **SUSPENDE PROVISIONALMENTE** los efectos del Acuerdo Municipal N° 11 del 30 de octubre de 1995, dictado por el Consejo Municipal del Distrito de San Francisco de la Provincia de Veraguas.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO HÉCTOR CASTILLO RÍOS, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 21, DE 5 DE NOVIEMBRE DE 1991, DICTADA POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Héctor Castillo Ríos, actuando en su propio nombre y representación, ha interpuesto ante esta Sala de la Corte Suprema de Justicia **demanda contencioso administrativa de nulidad** para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 21, de 5 de noviembre de 1991, proferida en Sala de Acuerdo por el Tribunal Electoral.

I. CONTENIDO DEL ACTO IMPUGNADO

Mediante la citada Resolución el Tribunal Electoral adjudicó definitivamente a distintas empresas la Licitación Pública N° 1-91-TE, que convocara dicha institución pública para el suministro, instalación y mantenimiento del sistema de procesamiento de datos para los servicios que brinda el Tribunal Electoral de Panamá.

Según la parte resolutiva del acto administrativo impugnado el renglón o grupo I, que comprende "equipos, programas y entrenamiento para el sistema de cómputo central de la institución", se adjudicó a la sociedad SONITEL, S. A., por la suma de B/.17,964.37 durante 60 meses; el grupo II consistente en "terminales, computadores, personales y sus respectivos programas, para uso de las diferentes direcciones de la institución, distribuidos en todo el país", se adjudicó a la sociedad DATADINÁMICA, S. A., por la suma de B/.7,416.15 mensuales durante 36 meses; el grupo III, que incluye "equipos de comunicación requeridos para interconectar los elementos del grupo I con los del grupo II", a la empresa ELECTRODINÁMICA, S. A., por un costo de B/.3,053.40 mensuales durante 36 meses; y el grupo IV consistente en "impresores requeridos para las computadoras personales del grupo II", fue adjudicado a la empresa SONITEL, S. A. por valor de B/.1,526.25 mensuales durante 36 meses.

El acto administrativo objeto de esta demanda fue modificado por la Resolución de Sala de Acuerdo N° 22 dictada por el Tribunal Electoral el 18 de noviembre de 1991 para **corregir** los montos de las adjudicaciones de los grupos II, III y IV, y autorizar al Magistrado Presidente de la institución licitante para que suscriba en nombre de ésta los respectivos contratos con las empresas favorecidas en la licitación enunciada.

II. NORMAS INVOCADAS COMO VIOLADAS Y EL CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

Según el licenciado CASTILLO RÍOS la Resolución de Sala de Acuerdo N° 21, de 5 de noviembre de 1991, viola los artículos 4, numeral 4°, 50 y 75 del Código

Fiscal y el artículo 25 de la Ley 135 de 1943, Orgánica de lo Contencioso Administrativo.

El artículo 4 del Código Fiscal enumera los dineros que componen el Tesoro Nacional, entre los cuales está, de acuerdo al numeral 4° que se estima violado, el generado del producto de los "**aprovechamientos y los reintegros**". El actor asegura que este precepto ha sido infringido de manera directa por omisión porque el Tribunal Electoral, sin motivo alguno, decidió no aceptar la donación que le propuso la sociedad NCR CORPORATION DE PANAMÁ, S. A. del equipo NCR 9800 - instalado en el Tribunal- que hasta la fecha solo tenía cuatro años de uso y "cuya capacidad puede ser ampliada en condiciones de atender las necesidades de crecimiento de la institución en los próximo (sic) cinco (5) años, siendo necesario una inversión moderada que finalmente redunda en beneficio del Tesoro Nacional"; además de que la entidad que expidió el acto acusado se negó a aceptar en calidad de donación un sistema de NCR 3000 que les permitiría dar los pasos necesarios para encaminarse a un sistema de arquitectura abierta. Afirma el actor que tal negativa obstaculiza e impide que el Tesoro Nacional "... se beneficie de los aprovechamientos y los reintegros de bienes que a título de Donación pudo recibir procurándole en un lapso de cinco (5) años un beneficio o ahorro en concepto de canon de arrendamiento de Dos Millones de Balboas B/.2,078,733.00" (sic) (foja 65 y 66). El demandante al exponer este cargo cita una nota enviada el 6 de enero de 1992 al Jefe del Departamento de Cómputo del Tribunal Electoral por la Dirección de Sistematización de Datos de la Contraloría General de la República, en cuyo texto se afirma que la tecnología obsoleta pero funcional tiene que coexistir con la nueva tecnología, de lo contrario, "las instituciones tendrían que cambiar sus sistemas todos los meses con el consiguiente aumento extraordinario en costos". Esto, a decir del demandante, revela, aún más, la violación de la norma citada del Código Fiscal, porque la negación del Tribunal Electoral de aceptar las mencionadas ofertas de donaciones del equipo computacional que venía funcionando en la institución desde 1987, "sin causalidad ni justificación", producirá una lesión al patrimonio del Tesoro Nacional.

El artículo 50 del Código Fiscal que invoca violado el demandante contiene los criterios que debe tomar en consideración la institución licitante para hacer la adjudicación definitiva. Esto debe hacerse mediante resolución motivada y entre los criterios a seguir para obtener el mayor beneficio a favor del Estado señalado en la Constitución, se debe evaluar la conveniencia económica de las propuestas y la capacidad técnica, económica, administrativa y financiera de los proponentes. A través de dicho procedimiento se pretende adjudicar la licitación a la "propuesta que represente mayor calidad al menor precio, según los reglamentos que se dicten al efecto". También prevé dicha norma el requisito de aprobación o autorización por la autoridad competente para el perfeccionamiento del acto público y el medio de impugnación del cual puede hacer uso en la vía gubernativa el participante que considere que el acto administrativo mediante el cual se adjudica definitivamente una licitación, le ha infligido agravios.

La norma citada ha sido violada de forma directa por omisión, según el demandante, ya que, no obstante ser una obligación emanada de la Ley, se dejó de cumplir con los requisitos técnicos exigidos. Enumera las razones que constituyen la omisión en la aplicación del artículo 50, y afirma que el Comité de Evaluación de las propuestas no entregó al participante NCR el material objeto de evaluación, sino hasta dos días después de iniciada la semana de presentación asignada; que no todos los miembros de la referida Comisión concurrieron los días en que NCR presentó su producto; que la empresa SONITEL, S. A. no solo omitió instalar en el Tribunal Electoral el equipo según exigencias del Pliego de Cargos, sino que invitó al Comité a una exhibición del producto propuesto en las oficinas de la empresa IBM, a la cual concurrieron cada día todos los miembros del Comité, incluso uno de los Magistrados del Tribunal Electoral; afirma que el señor Ferruccio (uno de los miembros de la Comisión por el Tribunal Electoral) se convierte en juez y parte, al tiempo que indispone el producto de NCR y facilita calificaciones de 100% para otras empresas que no obtuvieron dicho puntaje; que a pesar de ser NCR la oferta más baja el Comité Evaluador "adjudicó a un promotor" de productos IBM, sin tomar en cuenta que NCR es fabricante de su producto y que tiene solvencia económica, capacidad técnica, administrativa y financiera, soporte técnico y almacenes de partes y repuestos, siendo así una

verdadera garantía para la entidad licitante; el Tribunal Electoral adjudicó a SONITEL, S. A. los renglones I y IV pero esta empresa entregó un equipo diferente al ofrecido, lo cual viola el debido proceso y origina fueros y privilegios; la empresa IBM no participó en la licitación y según el demandante es mencionada en la parte motiva de la resolución N° 21 como si fuera proponente de su producto; agrega, por último, que el artículo 50 también ha sido conculcado en el concepto de quebrantamiento de las formalidades, porque el Tribunal Electoral no resolvió la "reconsideración implícita" presentada por la empresa NCR contra el "escrito de 14 de noviembre de 1991, sustentando su desacuerdo por la irregularidades en el proceso de evaluación ..." (fojas 71 y 72).

La tercera disposición que el actor estima infringida por la Resolución N° 21, de 5 de noviembre de 1991, es el artículo 29 de Ley 135 de 1943 de manera directa omisión, aunque equivocadamente el demandante se refiere en su escrito al artículo 25 de dicha Ley. La norma cuya violación se invoca establece el requisito de notificación personal al administrado de las resoluciones que ponen término a un negocio o actuación administrativa de carácter nacional, y también preceptúa la obligación de expresar en la enunciada resolución "los recursos que por la vía gubernativa procedan y el término dentro del cual deben interponerse, todo bajo la responsabilidad del funcionario correspondiente".

La violación consiste, según el demandante, en que la resolución atacada no confiere a ninguno de los concursantes los recursos de reconsideración o apelación, lo cual, a juicio del demandante, coloca a los participantes desfavorecidos en "evidente estado de indefensión", atentando contra el debido proceso, la legalidad e imparcialidad y se incurre por ello en el quebrantamiento de las formalidades que deben cumplirse.

Finalmente, el actor aduce la violación el artículo 75 del Código Fiscal, también de manera directa por omisión. Esta excerta legal en literales términos, preceptúa lo siguiente:

> "Artículo 75. Son absolutamente nulos los contratos en que tenga interés la Nación y que se hayan celebrado contraviniendo las disposiciones de este Código.
>
> Cualquier persona podrá demandar ante el Tribunal competente la declaratoria de nulidad de que se trata y el Fiscal respectivo tiene la obligación de hacerlo a requerimiento de persona interesada o del Órgano Ejecutivo".

La transgresión a esta norma la explica el demandante señalando que la Licitación Pública N° 1-91-TE adolece de vicios ya que no se ha cumplido los procedimientos previstos en el Código Fiscal, además que tal como se celebró no representa el mayor y mejor beneficio para el Estado. Agrega que por ser los contratos suscritos entre el Tribunal Electoral y las empresas SONITEL, S. A., DATADINÁMICA, S. A. y ELECTRODINÁMICA, S. A., consecuencia de la Resolución que se impugna, resultan igualmente viciados, porque se han llevado a cabo infringiendo, por omisión, el artículo 75 citado, y al declararse la nulidad de la Resolución N° 21, de 5 de noviembre de 1991, dichos contratos también deben quedar "sin valor jurídico alguno" (foja 73).

La demanda interpuesta se corrió en traslado al señor Procurador de la Administración, quien la contestó mediante su Vista Fiscal N° 472, de 19 de octubre de 1993, oponiéndose a la pretensión del actor. También se requirió un informe explicativo de conducta a la entidad que emitió el acto, en cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 33 de la Ley 33, de 11 de septiembre de 1946, y el mismo fue oportunamente rendido.

III. CONSIDERACIONES Y ANÁLISIS DE LA SALA

Con respecto a la alegada transgresión del numeral 4° del artículo 4 del Código Fiscal no son aceptables las afirmaciones hechas por el actor, porque el Tribunal Electoral no está obligado a aceptar, sin consideración alguna, la donación condicionada del equipo computacional que estaba instalado en la

institución cuya propietaria es la compañía NCR y que le ofreciera esta empresa a la entidad pública, según consta a fojas 129 y 140, en la Nota S/N fechada el 29 de abril de 1991, por medio de la cual NCR a través de su Gerente General comunicaba al Tribunal Electoral su propuesta para el mejoramiento del centro de procesamiento de información de la institución estatal. Dicha donación conforme el texto de la nota señalada estaba "condicionada al pago que adeuda el Tribunal Electoral a NCR por los períodos de 1988-1989 ..." y al pago de la suma de B/.9,781.00 mensuales en concepto de mantenimiento de Hardware y Software. De acuerdo con nuestra legislación civil es necesario el consentimiento tanto del donante como del que recibe la donación, para que se perfeccione el negocio jurídico, esto es, para que surta efectos jurídicos vinculantes entre ambas partes (artículos 944 y 950 del C. Civil). La donación como acto jurídico en principio implica una mera liberalidad del donante por la ausencia de contraprestación, aunque esta característica no es de la esencia porque es posible en nuestro derecho la donación condicional (Arts. 943-947, ibídem). En el presente asunto no se ha producido una lesión al Tesoro Nacional, como afirma el impugnante, ya que el Tribunal Electoral debía considerar la conveniencia de la oferta de donación del equipo computacional propiedad del NCR, lo que efectivamente hizo y su decisión fue acertada al no aceptarla de acuerdo con el testimonio rendido a petición del demandante, por John Palm Sasso quien trabaja en el Tribunal Electoral y, a fojas 202, declaró que la tecnología cerrada del equipo NCR instalado en el Tribunal Electoral de 1988 podía ser habilitada o convertida a tecnología abierta "a un alto costo", el cual hubiera sido mayor que ir a una licitación para adquirir equipos nuevos, que fue lo que se hizo. A fojas 205 aclaró este testigo, al ser repreguntando, que "la donación, era de los equipos que en ese momento tenía el Tribunal Electoral instalado, ... y el costo de mantenimiento tanto de los equipos nuevos como los que ya se tenían serían altísimos cifra mensual como de B/.15,000.00".

Cabe destacar que tanto en la Nota N° 349-MP, enviada por el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral para la fecha, doctor Guillermo Márquez, al señor Contralor de la República, Rubén Darío Carles, datada el 28 de mayo de 1991, se exponen algunas de las razones técnicas por las cuales el Tribunal Electoral necesitaba llevar a cabo una licitación pública. Este documento, ampliamente motivado, que contiene los antecedentes del problema; argumentos que afirman la obsolescencia del equipo de computación con que cuenta la institución, entre ellas la falta de soporte adecuado del software y la justificación para proceder a su cambio, sopesando las alternativas disponibles con el propósito de mejorar su organización y procedimientos (fojas 91 y siguientes).

Con fundamento en los razonamientos vertidos la Sala conceptúa que este cargo no prospera.

En relación con la alegada violación del artículo 50 del Código Fiscal la Sala estima que la Licitación N° 1-91-TE convocada por el Tribunal Electoral y celebrada el 8 de agosto de 1991, ha cumplido con las formalidades ordenadas por la Ley y los reglamentos como uno de los trámites administrativos previos para la contratación con el Estado.

En el proceso reposa el dictamen pormenorizado rendido por la Comisión Evaludadora de las propuestas, que previo análisis de las mismas, entre ellas las ofertas de las sociedades NCR CORPORATION DE PANAMÁ y SONITEL, S. A., recomienda finalmente a la autoridad competente a los participantes que merecen ser favorecidos con las adjudicaciones definitivas de los distintos renglones licitados, con excepción de los grupos V y VI, que fueron declarados desiertos. En dicho informe a juicio de la Sala se analiza todas las propuestas desde el punto de vista técnico y económico, y se da sus recomendaciones tomando en consideración el mayor beneficio para el Estado representado en este caso por el Tribunal Electoral.

A fojas 56 del documento en referencia se expresa que las evaluaciones de la comisión se basaron en los requerimientos técnicos y otros criterios establecidos en el Pliego de Cargos, el Código Fiscal y sus modificaciones, el Decreto de Gabinete N° 45, Decreto Ejecutivo N° 33 y demás disposiciones legales. Las afirmaciones del demandante al exponer el concepto de la violación de esta norma no han sido demostradas, y en autos se evidencia claramente que el procedi-

miento y participación de los postores en la Licitación N° 1-91-TE fue conducido y desarrollado con imparcialidad y apego a las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la materia. Además, como expresa el acto impugnado, a los concursantes se les garantizó la oportunidad que contempla el artículo 50 del Código Fiscal de presentar sus observaciones y aclaraciones contra el dictamen de la Comisión.

La Sala estima que las adjudicaciones definitivas concedidas en base al informe detallado de la Comisión Evaluadora, cumplen el precepto legal del mayor beneficio para el Estado señalado en la Constitución (Art. 263), ya que fueron seguidos los criterios de conveniencia económica de las propuestas; capacidad técnica, económica, administrativa y financiera de los proponentes, y calidad del producto al menor precio.

Por último, el demandante alega que la resolución impugnada, mediante la cual se adjudica definitivamente una licitación, viola el artículo 75 del Código Fiscal que dispone que son absolutamente nulos los contratos en que tenga interés la Nación y que se hayan celebrado contraviniendo las normas fiscales. Este precepto no es aplicable en el presente negocio en el cual no se ha impugnado la legalidad de los contratos celebrados por el Tribunal Electoral en ejecución de la Resolución mediante la cual adjudicó definitivamente la Licitación Pública N° 1-91-TE. Por igual razón no es atendible la petición que hace el demandante en su alegato de que se declare nulos los contratos que no han sido impugnados en la demanda. Tampoco puede la Sala pronunciarse acerca del cumplimiento o incumplimiento de los mencionados contratos. En este proceso en que mediante una acción de contencioso administrativa de nulidad se pidió se declarara nula por ilegal la Resolución de la Sala de Acuerdo del Tribunal Electoral N° 21 de 5 de noviembre de 1991, la Sala debe limitarse a confrontar ese acto administrativo con las normas que se cita como violadas por dicho acto y pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad del acto impugnado, tomando en consideración que la legalidad de los actos administrativos se presume y su ilegalidad debe ser probada por quien ataca el acto.

Por las razones expuestas, se desestima también este cargo de violación.

En cuanto a la aducida violación del artículo 29 de la Ley 135 de 1943 la Sala no comparte la afirmación de que el no señalamiento en la Resolución N° 21, de 5 de noviembre de 1991, de los recursos que proceden en la vía administrativa contra este acto administrativo, colocó en un estado de indefensión a los participantes de la Licitación Pública N° 1-91-TE, ya que los proponentes, incluso los no favorecidos, se notificaron de la enunciada resolución, según consta en el tomo 2 de los antecedentes, y no la impugnaron, entendiéndose que esa conducta omisiva comporta una **aceptación** de la forma como los Magistrados del Tribunal Electoral hicieron la adjudicación definitiva de los diferentes renglones a las compañías comerciales escogidas. Al no impugnar ninguno de los **interesados** la resolución objeto de comentario, ello implica, en opinión de la Sala, conformidad o aquiescencia con lo resuelto en dicho acto administrativo, el cual quedó ejecutoriado y surtió efectos jurídicos después de transcurridos cinco días útiles contados a partir del acto procesal de notificación a los interesados, de acuerdo lo dispone el artículo 21 de la Ley 33 de 1946.

En atención a lo inmediatamente expuesto, la Sala estima que este cargo debe desestimarse.

Expuestas todas las motivaciones anteriores esta Superioridad arriba a la conclusión que los cargos de ilegalidad dirigidos contra la Resolución N° 21, de 5 de noviembre de 1991, no prosperan, y así debe declararlo.

De consiguiente, la Sala Tercera Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL la Resolución de Sala de Acuerdo N° 21, de 5 de noviembre de 1991, dictada por el Tribunal Electoral.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA FIRMA SOUSA, DE SOUSA Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE CARLOS E. PITTY, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA DECISIÓN DE 3 DE AGOSTO DE 1993, DE LA COMISIÓN DE AUTORIZACIÓN PREVIA DE CUOTAS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma de abogados Sousa, De Sousa y Asociados, actuando en nombre y representación de **CARLOS E. PITTY**, ha interpuesto ante esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la decisión de 3 de agosto de 1993, de la Comisión de Autorización Previa de Cuotas del Ministerio de Hacienda y Tesoro, en la parte identificada como Cuadro N1 6, en lo pertinente al permiso de importación de quince (15) cajas de pechuga de pavo sin piel y diez (10) cajas de pechuga de pavo ahumada, otorgado a la empresa Tzanetatos.

Al admitirse la presente demanda se corrió traslado al señor Procurador de la Administración quien, mediante la Vista Fiscal N° 417 de 23 de septiembre de 1994, solicitó a esta Sala denegar las pretensiones del demandante con fundamento en que los productos contemplados en el acto acusado de ilegal, no están sujetos al régimen sanitario de la Ley N° 7 de 30 de marzo de 1993, conforme al numeral 3 del artículo 1, por lo que dichas normas no son aplicables al caso. (Fs. 111)

Además, se solicitó al funcionario demandado que rindiera el informe de conducta a que se refiere el artículo 33 de la Ley 33 de 1946, lo que hizo oportunamente señalando que, del numeral 3 del artículo 1 de la Ley N° 7 de 30 de marzo de 1993 se colige que las pechugas de pavo sin piel y ahumadas no están comprendidas entre los productos avícolas están sujetos al régimen sanitario de dicha Ley. (Fs. 88-90).

También se le corrió traslado a la empresa Tzanetatos, quien a través del escrito que consta de fojas 95 a 100 contestó la demanda contenciosa que nos ocupa, en los siguientes términos:

> "La importación objeto del recurso no está sujeta a la aplicación de la Ley 7 de 1993 al tratarse de carne de pechuga de pavo sin piel y ahumada. Toda carne importada que ha sido objeto del presente proceso fue sujeta en su origen a un proceso de preparación y cocimiento para hacer posible su consumo directo una vez comprado por el cliente en la nevera de cualquier supermercado, abarrotería o establecimiento comercial que disponga de refrigeración. La Ley 7 de 1993 sólo es aplicable a carne de pavo "cruda entera o desmembrada" y expresamente excluye los productos cocidos o precocidos, por lo que no es aplicable la Ley citada al presente caso."

La parte actora estima que el acto administrativo impugnado viola los artículos 1 numeral 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la Ley N° 7 de 30 de marzo de 1993, "Por la cual se establece un Régimen Sanitario para la Importación de Productos Avícolas para el consumo humano, a la República de Panamá", cuyo texto transcribimos a continuación:

> "**Artículo 1**. En esta Ley, los siguientes términos tienen el significado y sentido que se indica a continuación:
> ...

3. Productos avícolas: pollos, gallinas, pavos, patos y cualquier otra ave comestible, crudos, enteros o desmembrados, congelados o refrigerados, empacados o no, ya sea que estén o no acompañados con otros productos, amparados o no, con marcas de fábrica o nombres comerciales, con la exclusión de productos avícolas o alimentos preparados a base de estos, cocidos o precocidos que estén o no congelados o refrigerados, cuya importación seguirá regida por las normas legales vigentes.

...

Artículo 4. Sólo se importará a la República de Panamá, productos avícolas provenientes de los países que para tal efecto hayan sido aprobados por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), siempre y cuando se cumpla con los siguientes requisitos:

1. Que no exista en ese país, enfermedades infecto-contagiosas capaces de afectar la producción nacional, tales como micro-plasma gallisepticum, microplasma sinoveae, coriza infecciosa, aspergilosis, enfermedad de newcastle, bronquitis infecciosa, laringotraqueitis infecciosa, influenza aviar, leucosis linfoide, enfermedad de Marek, hepatitis aviar, anemia infecciosa, síndrome de caída de postura, viruela aviar, encefamielitis aviar, enfermedad de gumboro, artritis vírica, síndrome de mal absorción, tendosinovitis, sinovitis infecciosa, cólera aviar, pullorosis, tifus aviar, salmonella, y todas aquellas otras que de tiempo en tiempo, añada a esta lista el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA);

2. Que ese país cuente con una legislación sanitaria aplicable a la cría, matanza, establecimientos y procesamiento de los productos avícolas que imponga requisitos no inferiores a los establecidos por las leyes y reglamentos de la República de Panamá sobre la materia; y

3. Que ese país preste un trato recíproco a los productos avícolas de origen panameño; es decir, que real y efectivamente, permita la importación de productos avícolas de la República de Panamá.

Artículo 5. Con el fin de promover el libre y justo comercio internacional y las exportaciones de productos avícolas de la República de Panamá, y para dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 3 del Artículo 4 de esta Ley, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y el Ministerio de Salud, sólo aprobarán aquellos países cuyas legislaciones, reglamentaciones y prácticas administrativas, ya sean éstas de carácter arancelario, de cuotas o sanitarias, permitan real y efectivamente, la importación de los productos avícolas de la República de Panamá a esos países. En adición a aquellos documentos y certificaciones que con el objeto de comprobar la antes mencionada reciprocidad requieran las regulaciones que para tal efecto dicten el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) solicitará a las asociaciones de productores avícolas, legalmente constituidas en la República de Panamá, constancia de que a los productores nacionales se les permite, real y efectivamente, exportar productos avícolas al país solicitante.

Artículo 6. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), y el Ministerio de Salud, aprobarán a los países aptos para importar productos avícolas a la República de Panamá, a solicitud de las autoridades sanitarias competentes de estos países, previa comprobación mediante los estudios, inspecciones locales, certificaciones y documentaciones que requieran los reglamentos que para tal efecto dictarán el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y el Ministerio de Salud, de que el país solicitante cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 4 de la presente ley. Las aprobaciones por país deberán renovarse cada dos años y el

> Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y el Ministerio de Salud, podrán en cualquier momento, cancelar la aprobación de un país, si determinan que el mismo no cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 4 de la presente ley.
>
> **Artículo 7**. Sólo se importarán productos avícolas a la República de Panamá, provenientes de aquellos establecimientos extranjeros aprobados por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y el Ministerio de Salud.
>
> **Artículo 8**. El Ministerio de Salud, únicamente aprobará aquellos establecimientos extranjeros que este Ministerio determine, previa inspección del local, sin cumplen con los requisitos de salubridad, higiene y demás, establecidos en las leyes de la República de Panamá y con los reglamentos que a tal efecto expida el Ministerio de Salud, incluyendo la inspección ante y post-mortem de los productos avícolas por veterinarios autorizados por el Ministerio de Salud. La aprobación de que trata el presente artículo deberá renovarse anualmente y podrá ser cancelada en cualquier momento por el Ministerio de Salud, si el Ministerio determina que ese establecimiento no cumple con los requisitos establecidos en la presente ley y las leyes que regulen la materia."

Al exponer el concepto de la infracción de las normas citadas por el acto impugnado el demandante alega que las mismas se han violado porque tanto la pechuga de pavo sin piel, como la pechuga de pavo ahumado, a las que se refiere el acto acusado, son productos avícolas sujetos al Régimen Sanitario prescrito en la Ley N° 7 de 1993; que estos productos provienen de Estados Unidos de América, país que no ha sido aprobado por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario ni por el Ministerio de Salud certificando que cumple con los requisitos del artículo 4 de la Ley 7 de 1993, y respecto al cual las Asociaciones de productores avícolas no han expedido certificación en la que conste que los productores nacionales se les permite real y efectivamente exportar nuestros productos avícolas a dicho país; que tampoco consta que el establecimiento extranjero suplidor de los productos, contaba con la aprobación del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y del Ministerio de Salud al momento de expedirse el acto impugnado, la cual sólo es posible mediante inspección ante y post-mortem llevada a cabo por veterinarios calificados dentro del establecimiento respectivo; y que el cumplimiento y control de estos requisitos debió ser previo a la expedición del acto acusado, y no posterior.

En el caso que nos ocupa se impugnó la Decisión de la Comisión de Autorización Previa de Cuotas del Ministerio de Hacienda y Tesoro de 3 de agosto de 1993, fecha en que ya había entrado en vigencia la Ley N° 7 de 30 de abril de 1993. Nos corresponde entonces precisar si, las normas sanitarias de la Ley N° 7 de 1993 son aplicables a los productos autorizados en el acto impugnado.

En el Resuelto N° 93 de 1 de octubre de 1993, mediante el cual la Comisión de Autorización Previa de Cuotas resolvió el recurso de reconsideración interpuesto por la firma forense Sousa, De Sousa y Asociados en representación de la Asociación Nacional de Avicultores de Panamá -ANAVIP-, y se confirmó en todas sus partes el acto impugnado, se señala dos razones como fundamento del acto impugnado:

> "Que la Comisión de Autorización Previa de Cuotas autorizó la importación de los referidos productos, porque no existían en el país y las empresas que lo solicitaban, lo requerían para su procesamiento industrial.
> ...
> Que las pechugas de pavo deshuesada y ahumadas no forman parte de los productos sujetos al régimen sanitario de la Ley N° 7 de 30 de marzo de 1993." (Fs. 106).

El criterio consistente en que las pechugas de pavo sin piel y ahumadas por estar precocidas están excluídas del régimen sanitario a que se refiere la Ley

N° 7 de 30 de marzo de 1993, en virtud del artículo 1 numeral 3 de esta Ley, fue reiterado por el Ministro de Hacienda y Tesoro al responder el informe de conducta contenido en Nota N° 101-01-409-DMHYT de 26 de mayo de 1994. (Fs. 88-90).

En relación a las 15 cajas de pechuga de pavo sin piel y 10 cajas de pechuga de pavo ahumado (fs. 79), cuya importación autorizó el acto acusado de ilegal, señala la sociedad H. TZANETATOS, INC., empresa solicitante de la autorización de importación que, dichos productos estaban cocidos, ya que "la carne de pavo deshuesada y ahumada no es carne cruda y que para deshuesar y ahumar cualquier tipo de carne se le aplica calor ..." (Fs. 154).

A foja 148 del expediente contencioso la parte actora afirma que, las "pechugas de pavo ahumadas podrían excluírse del régimen sanitario de la Ley 7 de 1993, por tratarse de un producto precocido. **Pero las pechugas de pavo sin piel no pueden sustraerse del régimen sanitario de la Ley 7**." Observa la Sala, que entre los documentos aportados por la parte demandante que van de la foja 1 a la 38, no hay ninguno que pruebe que las pechugas de pavo sin piel importadas no son productos precocidos. Si esto es así, en ausencia de pruebas sobre los hechos que podían motivar su ilegalidad, debe presumirse la legalidad del acto acusado.

En virtud de las consideraciones expuestas, la Sala estima que no se ha violado el artículo 1 numeral 3 de la Ley N° 7 de 1993, y que los artículos 4, 5, 6, 7 y 8 ibidem, no son aplicables al caso, y por tanto tampoco se han violado.

De consiguiente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, la Decisión de 3 de agosto de 1993, proferida por la Comisión de Autorización Previa de Cuotas del Ministerio de Hacienda y Tesoro.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LCDO. DAGOBERTO FRANCO, EN REPRESENTACIÓN PROPIA, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO ALCALDICIO N° 2 DE 7 DE FEBRERO DE 1994, EXPEDIDO POR EL ALCALDE DE SAN MIGUELITO. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **Dagoberto Franco**, en representación propia, ha interpuesto demanda Contencioso Administrativa de Nulidad para que se declare nulo por ilegal, el Decreto Alcaldicio N° 2 de 7 de febrero de 1994, expedido por el Alcalde de San Miguelito, por medio del cual se regula el horario para el expendio de bebidas alcohólicas en bodegas, cantinas, bares y similares en el Distrito de San Miguelito.

El referido Decreto, establece lo siguiente:
"...
ARTÍCULO PRIMERO: Se prohibe a partir de la fecha, en toda la jurisdicción del Distrito de San Miguelito el expendio de bebidas alcohólicas en Bodegas, Cantinas, Bares y Similares de lunes a viernes después de las diez de la noche (10:00 p. m.); los días

sábados después de las once de la noche (11:00 p. m.); y los domingos después de las siete de la noche (7:00 p. m.).

ARTÍCULO SEGUNDO: Se exceptúan de lo anterior los restaurantes y las parrilladas, laborarán todos los días hasta las 12:00 P. M.

ARTÍCULO TERCERO: Los establecimientos que trata el Artículo Primero del presente Decreto que contravengan lo dispuesto en el mismo serán sancionados con cincuenta balboas 00/100 (B/.50.00) de multa la primera vez; con cien balboas 00/100 (B/.100.00) de multa la segunda vez; y la reincidencia acarreará la cancelación de la Licencia para vender bebidas alcohólicas. Parágrafo: Las sanciones de multas podrán ser transformadas por arresto a razón de un (1) día por cada dos balboas con 00/100 (B/.2.00) de multa.

ARTÍCULO CUARTO: Son competentes para conocer las violaciones al presente Decreto el Alcalde, y los Corregidores Diurnos y Nocturnos dentro de sus respectivas jurisdicciones.

ARTÍCULO QUINTO: Están facultados para detener y conducir ante los funcionarios competentes a todo expendedor que infrinja el presente Decreto, los inspectores de la Alcaldía de San Miguelito, la Policía Sanitaria y los miembros de la Fuerza Pública.

ARTÍCULO SEXTO: Este Decreto comenzará a surtir efecto a partir del (8) de febrero de mil novecientos noventa y cuatro (1994)."

Considera el recurrente que el Decreto impugnado, es violatorio de los artículos 1 y 13 de la Ley 55 de 1973, y los artículos 1966 y 1968 del Código Judicial, en virtud de que por razón de la materia que trata en desarrollo de la Ley 55 de 1973, y como parte de la ley que reglamenta, no puede ampliar ni restringir el sentido de esta última, porque ya no se trataría de reglamentar sino de legislar.

En tal sentido, dice el recurrente que el precitado Decreto, incurre en extralimitación al crear una sanción con multas que implícitamente es una pena y que no está contenida en la mencionada Ley 55.

Además de que el Decreto en mención, faculta a los inspectores de la Alcaldía y a los inspectores de Salud a detener y conducir a los infractores de las prohibiciones establecidas en dicho decreto, cuando esta potestad por ley le corresponde a la Fuerza Pública.

De la presente acción se le dio traslado a la entidad demandada, quien, en su informe explicativo de conducta que corre a fojas 20-23, indicó a esta Superioridad que lo que motivó la expedición del Decreto Alcaldicio impugnado, es el alto grado de delincuencia tanto infantil como adulta, que se registra en ese populoso distrito, y de igual forma, los problemas maritales, paterno-filiales y entre vecinos. Situación que es provocada mayormente, por la ingestión de alcohol con las consabidas consecuencias que causan un daño irreparable a la familia, la sociedad y por ende, al país.

Por consiguiente, considera el aludido funcionario que dicho Decreto, no violenta la Constitución ni la ley, porque a través del mismo, sólo se reglamenta una facultad concedida al Alcalde por medio de la Ley 55 de 10 de julio de 1973, en su artículo primero, último párrafo.

El señor Procurador la Administración, mediante su Vista Fiscal 245 de 8 de junio de 1995, solicitó a este Tribunal que en el presente negocio se declare que ha operado el fenómeno jurídico conocido como sustracción de materia.

Cumplidos los trámites legales instituidos para estos procesos, la Sala estima que en el presente negocio no es viable un pronunciamiento de fondo, por haberse producido el fenómeno jurídico conocido como sustracción de materia, en virtud de las siguientes consideraciones.

En primer lugar, posterior a la expedición del Decreto Alcaldicio impugnado, la nueva administración de la Alcaldía de San Miguelito expidió el Decreto Alcaldicio N° 02 de 3 de enero de 1995, "por medio del cual se modifica el Decreto Alcaldicio N° 2 de 7 de febrero de 1994 mediante el cual se fijó el horario para negocios dedicados a la venta de bebidas alcohólicas". Para mayor ilustración, transcribimos a continuación, la parte normativa del Decreto Alcaldicio N° 02 de 3 de enero de 1995, cuya copia autenticada reposa a fs. 50-51 del expediente.

"...

ARTÍCULO PRIMERO: Modificar el ARTÍCULO PRIMERO del Decreto Alcaldicio N° 2 de 7 de febrero de 1994, el cual quedará así:

ARTÍCULO PRIMERO: Los negocios dedicados al expendio y venta de bebidas alcohólicas, tendrán el siguiente horario de cierre al público de la manera que sigue:

BODEGAS Y SIMILARES.

Cierre del negocio: de lunes a viernes a las 10:00 p. m.

Fines de Semana:
Sábado: Cierre del negocio: a las 11:00 p. m.
Domingo: Cierre del negocio: a las 9:00 p. m.

BAR, PARRILLADAS, CANTINAS Y SIMILARES.

Cierre del negocio: de lunes a jueves a las 12 medianoche.

Los viernes deberán cerrar a las 2:00 a. m.

Los sábados deberán cerrar a las 4:00 a. m.

Los domingos deberán cerrar a las 12 medianoche.

ARTÍCULO SEGUNDO: Modificar al ARTÍCULO TERCERO del Decreto Alcaldicio N° 2 de 7 de febrero de 1994, el cual quedará así:

ARTÍCULO TERCERO: Los establecimientos de que trata el Artículo Primero del presente Decreto que contravengan lo dispuesto en materia de horarios serán sancionados con B/.100.00 (cien balboas) la primera vez; B/.200.00 (doscientos balboas) la segunda vez.

Parágrafo: Las sanciones de multas podrán ser sustituidas por arresto a razón de un (1) día por cada B/.2.00 (dos balboas) de multa, que se aplicará al Representante Legal del negocio infractor o su encargado.

ARTÍCULO TERCERO: Este Decreto empezará a regir a partir del tres (3) de enero de mi novecientos noventa y cinco (1995).

Dado en el Distrito de San Miguelito, a los tres (3) días del mes de enero de Mil novecientos noventa y cinco 1995."

De conformidad con lo expuesto, se observa que tanto los artículos primero, segundo y sexto del aludido Decreto N° 2 de 1994, sufrieron modificaciones sustanciales, en virtud de la expedición del nuevo Decreto Alcaldicio al regular este último, la misma materia, razón por la cual no existe objeto para que esta Sala se pronuncie sobre la ilegalidad de los mismos. Esta aseveración tiene su asidero legal en el artículo 36 del Código Civil, que en su parte final, establece como una de las formas de derogación de las leyes "la existencia de una ley nueva que regule íntegramente la materia a que la anterior disposición se refería".

En segundo lugar, en lo concerniente a la infracción del artículo tercero y parágrafo, del Decreto Alcaldicio acusado de ilegal, considera esta

Superioridad que no procede entrar a examinar el cargo aducido, puesto que el mismo fue declarado inconstitucional por el Pleno de esta Corporación de Justicia, mediante Sentencia de 12 de mayo de 1995. La doctrina ha sido enfática al señalar que la declaratoria de inconstitucionalidad con respecto a una ley, norma legal o reglamentaria es el de que produce los efectos de cosa juzgada y elimina la norma o el acto del ordenamiento jurídico.

La referida sentencia en su parte medular sostuvo lo siguiente:

> "Ciertamente, como apunta la opinión de la Vista emanada de la Procuraduría de la Administración, la Ley 55 de 10 de julio de 1973, 'por la cual se regula la Administración, Fiscalización y cobro de varios tributos municipales', en el inciso final del artículo primero, atribuye a los Alcaldes Municipales la facultad de 'fijar los horarios que regirán en los establecimientos de venta al por menor de bebidas alcohólicas', siendo que con base en esa facultad establecida por Ley y por razones de moralidad y salud pública la primera autoridad del Distrito de San Miguelito expidió el acusado Decreto Alcadicio N° 2 de 7 de febrero de 1994, por medio del cual se regula el horario para el expendio de bebidas alcohólicas en Bodegas, Cantinas, Bares y Similares en dicho Distrito Municipal.
>
> Sin embargo, salta a la vista que el Alcalde de San Miguelito en la indicada facultad legal, al expedir el tantas veces aludido Decreto Alcaldicio, objeto de la impugnación constitucional, se excedió en el Artículo 'Tercero y Parágrafo' al establecer como lo hizo delitos y sanciones en violación del artículo 31 de la Constitución Nacional.
>
> En efecto, de la lectura del contenido del acusado Artículo 'Tercero y Parágrafo' se advierte sin la menor duda, que la primera autoridad de Policía de San Miguelito, establece sanción de multa convertible en arresto y cancelación de una licencia comercial 'por vender bebidas alcohólicas', SIN TENER FACULTAD PARA ELLO. De esta manera resulta evidente la violación de la garantía procesal constitucional consagrada por el Artículo 31 de la Carta Política que, como es bien sabido, dispone que sólo serán penados los hechos declarados punibles por 'Ley anterior a su perpetración y exactamente aplicable al acto imputado'. Es decir, corresponde a la Ley prescribir delitos y establecer sanciones.
> ...
> En consecuencia, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, SE ABSTIENE DE PRONUNCIARSE en relación con los Artículos 'Primero, Segundo y Sexto del Decreto Alcaldicio N° 2 de 17 de febrero de 1994, y DECLARA QUE ES INCONSTITUCIONAL el artículo 'Tercero y Parágrafo', del Decreto Alcaldicio N° 2 de 7 de febrero de 1994 dictado por el Alcalde del Distrito Municipal de San Miguelito, y NO SON INCONSTITUCIONALES los artículos 'Segundo, Cuarto y Quinto' de dicho instrumento alcaldicio."

Finalmente, en cuanto a la ilegalidad de los artículos cuarto y quinto, del Decreto Alcaldicio N° 2 de 1994, la Sala estima que no es procedente su confrontación con los artículos 1 y 13 de la Ley 55 de 10 de junio de 1973, ni con los artículos 1966 y 1967 del Código Judicial, ya que al declararse la inconstitucionalidad del artículo tercero y parágrafo que "establecía las sanciones para los negocios dedicados al expendio y venta de bebidas alcohólicas que contravinieran lo dispuesto en materia de horario", el contenido de tales artículos, resulta intrascendente y sin ningún valor jurídico.

Por las razones expuestas, esta Superioridad considera que al haber desaparecido el objeto procesal de este negocio, lo procedente es declarar, que se ha producido el fenómeno jurídico conocido como sustracción de materia.

En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA SUSTRACCIÓN DE MATERIA, dentro de la Demanda Contencioso Administrativa de Nulidad interpuesto por el Lcdo. Dagoberto Franco, en representación propia, para que se declare nulo por ilegal, el Decreto Alcaldicio N° 2 de 7 de febrero de 1994, expedido por el Alcalde de San Miguelito.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE LOS DERECHOS HUMANOS

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PROTECCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RIGOBERTO VERGARA, EN REPRESENTACIÓN DE MARITZA GISELA MONTENEGRO, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 104 DE 30 DE OCTUBRE DE 1995, EMITIDA POR EL DIRECTOR NACIONAL DEL INSTITUTO DE DEFENSORES DE OFICIO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Rigoberto A. Vergara, en nombre y representación de MARITZA GISELA MONTENEGRO, ha promovido demanda contenciosa administrativa de protección a los derechos humanos para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 104 de octubre de 1995, emitida por el Director Nacional del Instituto de Defensoría de Oficio, y para que se hagan otras declaraciones.

La parte actora solicita en su demanda que conforme a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 135 de 1946, se requiera al Director Nacional del Instituto de Defensoría de Oficio autenticada de los siguientes documentos:

"1. La Resolución N° 104 de 30 de octubre de 1995.
2. Resolución N° 04 de 14 de enero de 1995.
3. Carta de renuncia presentada por Maritza Gisela Montenegro al cargo de recepcionista en el Instituto de Defensoría de Oficio el 18 de octubre de 1995".

A foja 7 del presente expediente reposa copia, con sello de recibido fechado el día 4 de enero de 1995 y firmado por "NEYDI", de la solicitud hecha al señor Director General del Instituto de Defensoría de Oficio para que autentique las Resoluciones N° 104 de 30 de octubre de 1995, N° 04 de 14 de enero de 1995 y la carta de renuncia de Maritza Gisela Montenegro en el cargo de Recepcionista en el Instituto de Defensoría de Oficio.

Los artículos 46 y 59 de la Ley 135 de 1943 permiten al Magistrado Sustanciador solicitar, antes de admitir la demanda, y cuando así lo solicite el recurrente con la debida indicación de la oficina correspondiente, copia del acto impugnado o certificación sobre su publicación, en aquellos casos en los cuales el acto no ha sido publicado, o se deniega la expedición de copia o la certificación sobre su publicación, y apremiar al funcionario que se da la orden de con multa entre diez y cien balboas, si no expide y/o autentica las copias, dentro del término que el mismo auto se le señale.

Con fundamento estas disposiciones y en virtud de la falta de respuesta a la mencionada petición se dispone solicitar copia autenticada del acto impugnado con la constancia de su notificación, antes de admitir la presente demanda.

En mérito de lo expuesto, la Magistrada Sustanciadora en representación de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, antes de admitir la demanda contenciosa administrativa de protección de los derechos humanos, promovida para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 104 de 30 de octubre de 1995, emitida por el Director Nacional del Instituto de Defensoría de Oficio, DISPONE solicitar por Secretaría a este funcionario que en el término de cinco (5) días expida y envíe a la Sala copia autenticada de la Resolución N° 104 de 30 de octubre de 1995 expedida por el Director Nacional de Defensoría de Oficio, que es el acto impugnado.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, INTERPUESTO POR LA LICENCIADA LINA VEGA ABAD, EN REPRESENTACIÓN PROPIA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 005-95 DE 30 DE JUNIO DE 1995, EMITIDA POR EL INSTITUTO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES , Y LA ORDEN DE PROCEDER N° DM-78 DE 30 DE JUNIO DE 1995, EMITIDA POR EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. MAGISTRADA PONENTE DE LA APELACIÓN: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La licenciada Lina Vega Abad, actuando en su propio nombre, ha promovido recurso de apelación contra la resolución de 1 de noviembre de 1995, por la cual **no se admite** la demanda contencioso administrativa de protección de los derechos humanos, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 005-95 de 30 de junio de 1995, emitida por el Instituto de Recursos Naturales Renovables, y la Orden de Proceder N° DM-718 de 30 de junio de 1995, emitida por el Ministerio de Obras Públicas.

En dicha resolución, el Magistrado Sustanciador consideró que en la presente acción contenciosa no estamos frente a un derecho humano justiciable. El magistrado sustanciador considera que nuestras leyes en materia de derechos humanos, "tanto a nivel interno como las que se encuentran recogidas en convenciones internacionales sobre derechos humanos que han sido convertidas en leyes de la República, entre las que podemos citar: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y demás, en ninguna de sus disposiciones consagran el derecho ecológico o la protección del medio ambiente como un derecho humano". (fs. 145)

La parte actora considera, en la sustentación de la alzada, que la demanda presentada sí debe ser admitida, ya que en su opinión la protección del medio ambiente es un derecho que sin duda le pertenece al hombre por su condición y dignidad de ser humano. Señala también, que es responsabilidad de los Honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, especialmente de los Magistrados de la Sala Tercera, el ampliar responsablemente y de acuerdo a las más modernas y científicas corrientes en relación a la Teoría de los Derechos Humanos, la lista de derechos protegidos por el Proceso Administrativo de Protección a los Derechos Humanos.

Evacuados los trámites de Ley, el resto de los Magistrados de la proceden a resolver la alzada interpuesta, previas las siguientes consideraciones.

Del examen de los autos se desprende que el recurrente está pidiendo mediante los trámites de un proceso de protección de los derechos humanos que se declare la nulidad de la Resolución N° 005-95 de 30 de junio de 1995, emitida por el Instituto de Recursos Naturales Renovables, y la Orden de Proceder N° DM-718 de 30 de junio de 1995, emitida por el Ministerio de Obras Públicas, porque considera que ambas resoluciones violan sus derechos ecológicos, que son justiciables.

Tanto la Sala Tercera como la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia ha reconocido que los derechos ecológicos o de protección del medio ambiente y de los recursos naturales, son justiciables y ha estimado que están legitimados para impugnar la legalidad de los actos administrativos que los violen tanto las asociaciones que tienen entre sus objetivos la defensa de estos derechos, como "aquellos que tengan no solo un derecho subjetivo en el sentido tradicional sino también un derecho colectivo en el que sí existe relación jurídica entre los titulares o, un derecho difuso" (Resolución fechada 12 de marzo de 1993 mediante la cual se admitió demanda contencioso adminsitrativa de plena jurisdicción promovida por Ancón contra un acto administrativo emitido por INRENARE. Registro Judicial de Marzo de 1993, páginas 92 a 95) (Cfr. Sentencia dictada el 4 de junio de 1994 en el mismo proceso y Resolución fechada el 8 de septiembre de 1995 dictada por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia mediante la cual no admitió el amparo de Garantías Constitucionales promovido por la sociedad Audobon de Panamá contra el Ministro de Obras Públicas, Registro Judicial de Septiembre de 1995, páginas 10 a 13).

Ahora bien, la vía mediante la cual estos derechos difusos pueden ser impugnados ante esta Sala lo determinará los derechos que violen los artículos de la Ley que se citen como violados y la naturaleza de los actos impugnados sin perjuicio de que la Sala corrija de oficio la calificación errada de la acción ejercitada, al tenor de lo establecido en el artículo 469 del Código Judicial.

Sin embargo, a juicio del resto de los Magistrados de la Sala la demanda no es admisible por las razones que a continuación exponen.

La actora estima como violados por los actos impugnados, los artículos 114, 115, 116 y 117 de la Constitución Nacional, cargos de violación cuyo conocimiento no compete a esta Sala, sino a la Sala Plena de esta Corporación. Tal como lo preceptúa el numeral 1 del Artículo 203 de la Constitución Nacional, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia es quien ejerce el control de la **constitucionalidad** en nuestro país.

Además la actora cita como normas violadas por los actos administrativos impugnados "los Convenios Internacionales que en materia de Derechos Humanos ha ratificado la República de Panamá (Carta de Naciones Unidas de Derechos y Deberes Económicos de los Estados; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Convención Americana de Derechos Humanos; Declaración de Río de Janeiro; y Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño), así como la Ley de Vida Silvestre (Ley 24 de 7 de junio de 1995, G. O. 22,801)", leyes todos que en opinión de la demandante han sido violados de manera directa, mediante la infracción literal de los preceptos legales".

Sobre el particular, la Sala ha expresado en anteriores ocasiones lo siguiente:

> "Este Tribunal de Apelación considera que le asiste la razón al Magistrado Sustanciador, quien no admitió la demanda, al detectarle vicios en su parte formal. La demanda presentada hace mención a disposiciones constitucionales que han sido supuestamente infringidas y cuyas violaciones expone, más solo enuncia ciertas normas legales que aduce han sido infringidas, sin explicar en qué concepto se han vulnerado o a cuál de las modalidades de infracciones a la ley se refiere, tal como lo exige la Ley Contencioso Administrativo en el numeral 4° del artículo 43 (Ley 135 de 1943 modificada por la Ley 33 de 1946).

> La Sala Tercera ha reiterado que, en primer lugar, no es competente para conocer de supuestas violaciones a la Constitución Nacional, puesto que ésta es una atribución privativa del Pleno de la Corte Suprema; y en segundo lugar no puede acogerse una demanda en la cual no sean planteados, con especificidad la relación entre el vicio que se imputa al acto impugnado, el concepto de la violación y el motivo de ilegalidad que opera como causal". (Sentencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de 15 de junio de 1992).

Por lo tanto, como la parte demandante consideró en su demanda como violados artículos de la Constitución Nacional y además, las normas legales que considera vulneradas no fueron citadas individualmente, ni se explicó el concepto en que fueron violadas, la Sala considera que la demanda interpuesta por la licenciada Lina Vega Abad, no cumple con los requisitos exigidos por el numeral 4 de la Ley 135 de 1943. Si esto es así no debe dársele curso a la demanda de conformidad con lo preceptuado en el artículo 50 de la Ley 135 de 1943, y la resolución apelada debe ser confirmada por este motivo.

De consiguiente, el resto de los Magistrados de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, CONFIRMAN la resolución 1 de noviembre de 1995, mediante la cual no se admite la demanda contencioso administrativa de Protección de los Derechos Humanos, interpuesta por la licenciada Lina Vega Abad, en representación propia, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 005-95 de 30 de junio de 1995, emitida por el Instituto de Recursos Naturales Renovables, y la Orden de Proceder N° DM-718 de 30 de junio de 1995, emitida por el Ministerio de Obras Públicas.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

IMPEDIMENTO

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EUSEBIO R. MARCHOSKY, EN REPRESENTACIÓN DE ALVIN WEEDEN GAMBOA, PARA QUE SE DECLARE NULOS POR ILEGALES, LOS ARTÍCULOS 1 Y 2 DEL DECRETO EJECUTIVO N° 334 DE 13 DE JULIO DE 1995, EMITIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOCE (12) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA.

VISTOS:

La licenciada Alma Montenegro de Fletcher ha manifestado que está impedida para conocer de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Eusebio R. Marchosky en representación de Alvin Weeden Gamboa, para que se declare nulos por ilegales, los artículos 1 y 2 del Decreto Ejecutivo N° 334 de 13 de julio de 1995, emitido por el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Gobierno y Justicia, y para que se haga otras declaraciones.

En su escrito la licenciada Alma Montenegro de Fletcher expresa:

> "1. Mediante Nota identificada N° 397 D. L. de 27 de marzo del año que decurre, su Excelencia Raúl Montenegro Diviazo, Ministro de Gobierno y Justicia, se sirvió solicitar nuestra opinión jurídica en relación directa con la situación de los Notarios Públicos, concretamente, en cuanto a si están amparados por el régimen de Carrera

> Administrativa y si gozan de inamovilidad en sus cargos por el término para el cual son designados.
>
> 2. En atención a dicha solicitud, y ejerciendo nuestra atribución de Consejera Jurídica de los funcionarios administrativos, emitimos opinión jurídica mediante la comunicación identificada como Consulta N° 58 del 7 de abril de 1995, en el cual dictaminamos sobre el status de los Notarios Públicos Panameños, en los aspectos mencionados. ...
>
> 5. De lo anterior, es evidente que el proceso contencioso administrativo, en el cual nos corresponde intervenir, como Representante de la Administración Pública guarda relación directa con el dictamen jurídico emitido antes de expedirse el acto acusado. Por todo, consideramos que nos encontramos alcanzados por la causal de impedimento contemplada en el numeral 5, del artículo 749 del Código Judicial, tal como lo ha reconocido, reiteradamente, en casos similares, la jurisprudencia de ese Alto Tribunal." (Fs. 141 a 143).

Conforme lo establece el artículo 388 del Código Judicial, son aplicables a los agentes del Ministerio Público las disposiciones sobre impedimentos y recusaciones de los Magistrados y Jueces, y el numeral 5 del artículo 749 del Código Judicial establece literalmente lo siguiente:

> "**Artículo 749**: Ningún Magistrado o Juez podrá conocer de un asunto en el cual esté impedido, son causales de impedimento:
> ...
> 5. Haber intervenido el Juez o Magistrado, su cónyuge o alguno de sus parientes dentro de los grados indicados, en el proceso, como Juez, agente del Ministerio Público, testigo, apoderado, o asesor, o haber dictaminado por escrito respecto de los hechos que dieron origen al mismo. ..."

Como los hechos planteados por la señora Procuradora configuran la causal invocada, el impedimento manifestado debe declararse legal.

Por lo expuesto, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE ES LEGAL EL IMPEDIMENTO manifestado por la licenciada Alma Montenegro de Fletcher, la separa del conocimiento de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Eusebio R. Marchosky, en representación de ALVIN WEEDEN GAMBOA, para que se declare nulos por ilegales, los artículos 1 y 2 del Decreto Ejecutivo N° 334 de 13 de julio de 1995, emitido por el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Gobierno y Justicia, y para que se haga otras declaraciones, y procede a llamar a su suplente, el licenciado José Juan Ceballos Araúz, para que conozca del negocio.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. RAÚL ADAMES FRANCESCHI, EN REPRESENTACIÓN DE JESÚS L. ROSAS, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ARTÍCULO 2 DEL DECRETO EJECUTIVO N° 413 DE 1° DE AGOSTO DE 1995, EMITIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Procuradora de la Administración, licenciada Alma Montenegro de Fletcher, manifestó impedimento para conocer de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Raúl Adames Franceschi, en representación de Jesús L. Rosas, para que se declare nulo, por ilegal, el artículo 2 del Decreto Ejecutivo N° 413 del 1° de agosto de 1995, emitido por el Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Gobierno y Justicia y para que se hagan otras declaraciones.

La Procuradora General de la Administración manifiesta su impedimento en los siguientes términos:

> "1. Mediante Nota identificada N° 397 D. L. fechada veintisiete de marzo del año que mil novecientos noventa y cinco, su Excelencia Raúl Montenegro Diviazo, Ministro de Gobierno y Justicia, nos consultó respecto a la situación de los Notarios Públicos y su presunta estabilidad laboral. Concretamente se nos interrogó si gozaban de inamovilidad a raíz de ser nombrados por un tiempo determinado por la ley.
>
> 2. En atención a esa consulta administrativa, y en cumplimiento de nuestra función pública de servir de Consejero Jurídico de los funcionarios administrativos, emitimos nuestra opinión jurídica mediante la Nota número 58 de siete de abril de mil novecientos noventa y cinco. En esta respuesta jurídica, externamos nuestro parecer jurídico en relación a la pretendida inamovilidad funcional de esos especiales servidores públicos.
>
> 3. Mediante providencia de doce de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, el Honorable Magistrado Sustanciador, Doctor Arturo Hoyos, nos corre traslado del libelo de la demanda contencioso administrativas de plena jurisdicción, presentada por el Licenciado Raúl Adames Franceschi, en representación de JESÚS L. ROSAS, para que se declare la nulidad, por ilegal, del Artículo dos (2) del Decreto Ejecutivo N° 413 de 1° de agosto de 1995, emitido por el ÓRGANO EJECUTIVO, por conducto del Ministerio de Gobierno y Justicia, y para que se hagan otras declaraciones.
>
> 4. De conformidad con los señalado en el Artículo 388 del Código Judicial, "serán aplicable a los agentes del Ministerio Público, las disposiciones sobre impedimentos recusaciones (sic) de los Magistrados y Jueces".
>
> Por su parte, el primer párrafo del Artículo 754 del mismo cuerpo codificado, establece que, "El juez o Magistrado en quien concurra alguna de las causales expresadas en el Artículo 749, debe manifestarse impedido para conocer del proceso dentro de los dos días siguientes del ingreso del expediente a su despacho exponiendo el hecho que constituya la causal ...", y finalmente, el Artículo 749, en su numeral 5 indica lo que transcribimos a seguidas:
> ...
> 5. De lo anterior mencionado, es notorio que en el proceso "IN EXAMINE", en el cual nos corresponde ser abogados defensores de la Administración; guarda relación íntima y directa con el dictamen jurídico emitido con anterioridad respecto al acto administrativo que hoy día es redargüido de nulo, por ilegal. En consecuencia, creemos que nos encontramos incluidos dentro de la causal de impedimento contemplada en el numeral cinco, del Artículo 749 del Código Judicial, tal como lo ha reconocido tantas veces, en casos similares, la jurisprudencia de esa Alta Corporación de Justicia."

La causal invocada por la Procuradora de la Administración consiste en "haber intervenido el Juez o Magistrado, su cónyuge o alguno de sus parientes dentro los grados indicados, en el proceso, como Juez, Agente del Ministerio

Público, testigo, apoderado, o asesor, o no haber dictaminado por escrito respecto de los hechos que dieron origen al mismo".

Los Magistrados que integran la Sala Tercera observan que, tal y como lo expone la Procuradora Montenegro de Fletcher, ella dio respuesta a las interrogantes vertidas por el señor Ministro de Gobierno y Justicia, sobre la misma materia que se debate en esta Sala.

En virtud de lo antes expuesto, la Sala estima que la actuación de la Procuradora Montenegro de Flethcer se ubica dentro de lo establecido en el ordinal 5 del artículo 749 del Código Judicial.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA que es LEGAL el impedimento invocado por la Procuradora de la Administración Alma Montenegro de Fletcher, la separa del conocimiento del negocio interpuesto, y procede a llamar al Procurador Suplente de la Administración para que asuma el conocimiento del mismo.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA MORENO Y FÁBREGA, EN REPRESENTACIÓN DE CONSTRUCTORA URBANA, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA NEGATIVA TÁCITA DEL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, A ACCEDER AL PAGO DE LOS GASTOS INCURRIDOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL ENSANCHE ARRAIJÁN-PUENTE DE LAS AMÉRICAS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Honorable Magistrada Mirtza Angélica Franceschi de Aguilera ha manifestado impedimento para conocer de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por la firma Moreno y Fábrega, en representación de Constructora Urbana, S. A., para que se declare nula por ilegal, la negativa tácita del Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Obras Públicas, a acceder al pago de los gastos incurridos en el Proyecto de construcción para el ensanche Arraiján-Puente de las Américas.

La Magistrada Franceschi de Aguilera fundamenta su impedimento en los siguientes términos:

> "... Pongo en conocimiento de ustedes que estoy impedida para conocer de la presente Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, interpuesta por el firma Moreno y Fábrega, en representación de CONSTRUCTORA URBANA, S. A. para que se declare nula por, la negativa tácita del Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Obras Públicas, a acceder al pago de los gastos incurridos en el Proyecto de Construcción para el ensanche Arraiján-Puente de las Américas, porque antes de ser Magistrada, actúe como apoderada de CONSTRUCTORA URBANA, S. A.
>
> Por consiguiente, solicito a los Honorables Magistrados que se me declare impedida para el conocimiento del presente negocio con lo que preceptúa el artículo 78, ordinal 4to. de la Ley 135 de 1943 ..."

La Magistrada Franceschi de Aguilera fundamenta su impedimento en el numeral 4 del artículo 78 de la Ley 135 de 1943 en conjunto con el numeral 5 del artículo 749 del Código Judicial motivo que es suficiente y que da lugar para separarla del conocimiento del presente negocio.

En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA que es LEGAL el impedimento invocado por la Magistrada MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA y la separa del conocimiento del negocio interpuesto.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO AURELIO ANTONIO ROBLES, EN REPRESENTACIÓN DE AUGUSTO CESAR RODRÍGUEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ARTÍCULO 9 DEL REGLAMENTO DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL ÓRGANO JUDICIAL, APROBADO MEDIANTE ACUERDO N° 9 DE 12 DE AGOSTO DE 1992, POR LA SALA DE NEGOCIOS GENERALES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

Por medio de escrito fechado el 4 de enero de 1995, el Honorable Magistrado Edgardo Molino Mola solicitó que se le separe del conocimiento de la Demanda Contencioso Administrativa de Nulidad, interpuesta por el Lcdo. Aurelio Antonio Robles, en representación de AUGUSTO CESAR RODRÍGUEZ, para que se declare nulo por ilegal, el Artículo 9° del Reglamento de las Áreas Administrativas del Órgano Judicial, aprobado mediante Acuerdo N° 9 de 12 de agosto de 1992, por la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia.

En el escrito de manifestación de impedimento el Magistrado Edgardo Molino Mola expresó:

> "Esta solicitud la fundamento en lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 78 de la Ley 135 de 1943, toda vez que el acto sometido al conocimiento de quien suscribe fue modificado mediante Acuerdo N° 10 de 27 de octubre de 1995 emitido por la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, siendo que para la fecha, integraba dicha Corporación Judicial en calidad de Presidente de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, por lo que participé en la expedición del acto cuya ilegalidad se acusa.
>
> Esta circunstancia, a tenor del texto legal invocado, me impide avocarme al conocimiento de este negocio, pues el mismo contempla como causal de impedimento legal la circunstancia de que el Magistrado llamado a conocer de un proceso Contencioso Administrativo haya dictado o contribuido a dictar el arto sometido a su revisión, situación que se verifica en el caso sub-júdice, tal como se desprende del texto del Acuerdo N° 10 de 1995, cuya copia auténtica adjunto".

El impedimento manifestado por el Magistrado Edgardo Molino Mola configura las causales de impedimento señaladas en el numeral 2 del artículo 78 de la Ley 135 de 1943 del Código de Trabajo, y siendo esto así debe separársele del

conocimiento del negocio, tal como lo solicita.

Por lo antes expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL el impedimento manifestado por el Honorable Magistrado Edgardo Molino Mola, lo separa del conocimiento del negocio y para reemplazarlo designa al Magistrado Rafael González de la Sala Civil, quien le sigue en turno.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SOLICITUD DE IMPEDIMENTO, INCOADO POR EL MAGISTRADO CARLOS M. ARZE, PARA QUE SE LE SEPARE DEL CONOCIMIENTO DEL PROCESO QUE POR POSIBLE LESIÓN PATRIMONIAL LE SIGUE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL A CELSO CARRIZO MEDRANO Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Honorable Magistrado de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, Dr. Carlos Manuel Arze, ha manifestado impedimento para conocer del proceso que por posible lesión patrimonial que le sigue la Dirección de Responsabilidad Patrimonial a Celso Carrizo Medrano, Luis Ernesto Martínez, Marco Carrizo, Deidamia Arjona, Eugenio Alvardo, Gilberto Delgado, Zósimo Guardia Varela y las sociedades empresas Volker Danton, S. A., y Constructora Vía Porras, en el denominado Plan Multiagencial de Proyectos Comunitarios de los Legisladores del período 1984-1989.

El Magistrado Carlos Manuel Arze fundamenta su impedimento en los siguientes términos:

> "... La Resolución de Reparos N° 06-94 de 7 de abril de 1994, dio inicio al proceso, llamado a responder a las personas antes citadas, esto incluyendo al señor Zósimo Guardia Varela, con cédula N° 8-461-424, quien actualmente se desempeña como socio del suscrito en la sociedad civil de abogados ARZE Y GUARDIA, desde el año 1976, por lo cual somos de la opinión que nos encontramos enmarcados dentro de la situación que contempla el numeral 4° del artículo 749 del Código Judicial, el cual a la letra dice:
>
> Artículo 749: Ningún Magistrado o Juez podrá conocer de un asunto en el cual este impedido. Son causales de impedimento:
> ...
> 4. Ser el Juez o Magistrado, su cónyuge o algún pariente de esto dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad, socio de alguna de las partes."
>
> El presente impedimento lo solicitamos, a pesar de que mediante resolución DRP N° 97-94, de 11 de agosto de 19914, los Magistrado en ese momento, de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, ordenaron el levantamiento de las medidas cautelares decretadas en contra del señor Zósimo Guardia Varela, debido a que su participación se limitó únicamente a prestar servicios profesionales como abogado".
>
> El Magistrado hace alusión al numeral 4 del artículo 749 del Código de Judicial para sustentar su impedimento el cual establece que será

causal de impedimento "Ser el Juez o Magistrado, su cónyuge o algún pariente de esto dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad, socio de alguna de las partes."

A juicio de los Magistrados que integran la Sala Tercera, el impedimento invocado por el Magistrado Arze se ubica dentro de la causal antes citada, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de el Decreto de Gabinete de N° 36 de 10 de febrero de 1990, corresponde nombrar como Magistrado sustanciador al Magistrado Suplente designado, para que asuma competencia para decidir sobre el mérito de dicho informe.

En consecuencia, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL el impedimento invocado por el Magistrado Carlos Manuel Arze para asumir competencia para conocer proceso que se le sigue en la Dirección de Responsabilidad Patrimonial a Celso Carrizo Medrano, Luis Ernesto Martínez, Marco Carrizo, Deidamia Arjona, Eugenio Alvardo, Gilberto Delgado, Zósimo Guardia Varela y las sociedades empresas Volker Danton, S. A., y Constructora Vía Porras, en el denominado Plan Multiagencial de Proyectos Comunitarios de los Legisladores del período 1984-1989 y, en base al artículo 2 de el Decreto de Gabinete de N° 36 de 10 de febrero de 1990, llama al Magistrado Suplente, para que asuma competencia para conocer del informe antes mencionado.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE DE NULIDAD, INTERPUESTO POR EL LCDO. RODOLFO AGUILERA FRANCESCHI, EN REPRESENTACIÓN DE LIBRERÍA RUBYL, S. A., DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL-CHIRIQUÍ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Honorable Magistrada Mirtza Angélica Franceschi de Aguilera, ha manifestado impedimento para conocer del incidente de nulidad interpuesto por el licenciado Rodolfo Aguilera Franceschi, en representación de LIBRERÍA RUBYL, S. A., dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue la CAJA DE SEGURO SOCIAL-CHIRIQUÍ.

La Magistrada Franceschi de Aguilera fundamenta su impedimento en los siguientes términos:

"Manifiesto a ustedes que estoy impedida para conocer del incidente de nulidad interpuesto por LIBRERÍA RUBYL, S. A., dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue la Caja de Seguro Social (Chiriquí), porque el licenciado Rodolfo Aguilera Franceschi, apoderado judicial de la empresa ejecutada en este incidente, es mi hijo.

Por consiguiente solicito a los Honorables Magistrados me declaren impedida para conocer de este negocio, de acuerdo con lo que dispone el artículo 749, numeral 5 del Código Judicial."

La Magistrada Franceschi de Aguilera fundamenta su impedimento en el numeral 5 del artículo 749 del Código Judicial, motivo que es suficiente, y que da lugar para separarla del conocimiento del presente negocio.

En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA que es LEGAL el impedimento invocado por la Magistrada MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA, la separa del conocimiento del negocio interpuesto y procede a llamar al Magistrado ROGELIO A. FÁBREGA Z., de la Sala Primera, para que asuma el conocimiento del mismo.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA RAMÍREZ Y CIGARRUISTA, EN REPRESENTACIÓN DE JUAN ÁNGEL CHAVARRÍA GONZÁLEZ, PARA QUE SE DECLAREN NULOS POR ILEGALES, LOS ARTÍCULOS 4 Y 6 DEL DECRETO EJECUTIVO N° 413 DE 1° DE AGOSTO DE 1995, EMITIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Procuradora de la Administración, licenciada **Alma Montenegro de Fletcher**, manifestó impedimento para conocer de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por la firma Ramírez y Cigarruista, en representación de Juan Ángel Chavarría González, para que se declaren nulos, por ilegales, los artículos 4 y 6 del Decreto Ejecutivo N° 413 del 1° de agosto de 1995, emitido por el Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Gobierno y Justicia y para que se hagan otras declaraciones.

La Procuradora General de la Administración manifiesta su impedimento en los siguientes términos:

> "1. Su Excelencia, Raúl Montenegro D., Ministro de Gobierno y Justicia, mediante Nota N° 397 D. L. de 27 de marzo de 1995, solicitó nuestra opinión jurídica, respecto a la situación de los Notarios Públicos, referente a si estaban amparados por el Régimen de Carrera Administrativa, y si eran inamovibles en sus cargos durante el período designado.
>
> 2. Mediante Consulta identificada N°58 de 7 de abril de 1995, emitimos nuestra opinión sobre la estabilidad de los Notarios Públicos Panameños.
>
> 3. El artículo 749 del Código Judicial vigente, en su numeral 5, al referirse a las causales de impedimento indica lo siguiente:
> ...
> El artículo 754 del mismo cuerpo de leyes, señala que: ...
> Por su parte, el artículo 388 del Código Judicial reza así: ...
>
> Evidentemente, que en el presente caso concurren los presupuestos contemplados en los artículos antes citados, ya que el proceso instaurado por el Licenciado JUAN ÁNGEL CHAVARRÍA GONZÁLEZ, en el cual nos corresponde intervenir, como `Representantes de la Administración Pública , guarda relación directa con nuestra opinión jurídica emitida antes de expedirse el acto acusado. Por lo anterior, concurre en nuestra persona la causal de impedimento contemplada en el numeral 5, del artículo 749 del Código Judicial."

La causal invocada por la Procuradora de la Administración consiste en: "haber intervenido el Juez o Magistrado, su cónyuge o alguno de sus parientes dentro los grados indicados, en el proceso, como Juez, Agente del Ministerio Público, testigo, apoderado, o asesor, o no haber dictaminado por escrito respecto de los hechos que dieron origen al mismo."

Los Magistrados que integran la Sala Tercera observan que, tal y como lo expone la Procuradora Montenegro de Fletcher, ella dio respuesta a las interrogantes vertidas por el señor Ministro de Gobierno y Justicia, sobre la misma materia que se debate en esta Sala.

En virtud de lo antes expuesto, la Sala estima que la actuación de la Procuradora Montenegro de Flethcer se ubica dentro de lo establecido en el ordinal 5 del artículo 749 del Código Judicial.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA que es LEGAL el impedimento invocado por la Procuradora de la Administración Alma Montenegro de Fletcher, la separa del conocimiento del negocio interpuesto, y procede a llamar al Procurador Suplente de la Administración para que asuma el conocimiento del mismo.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SOLICITUD DE IMPEDIMENTO, INCOADA POR EL MAGISTRADO OSCAR VARGAS VELARDE, PARA QUE LA SALA LO SEPARE DEL CONOCIMIENTO DEL PROCESO PARA ESTABLECER Y DETERMINAR LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL POR USO DE FONDOS PÚBLICOS PROVENIENTES DEL PROGRAMA MULTIAGENCIAL DE LEGISLADORES, DE PARTE DE LOS LEGISLADORES DEL PERÍODO 1984-1989, SEÑORES EBEN CHÍ Y OTROS, QUE LES SIGUE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL (D. R. P.). MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Lcdo. Oscar Vargas Velarde, Magistrado de la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, ha manifestado impedimento para conocer del proceso para establecer y determinar la responsabilidad patrimonial por el uso de fondos públicos provenientes del programa Multiagencial de Legisladores, de parte de los legisladores del período de 1984-1989, señores Eben Chi Rodríguez, Romelia E. de Pardo, Carlos Barsallo y Alberto Alemán Boyd, del señor Inocencio García Ayala, en su condición de Representante Legal de la sociedad anónima denominada Gabriela, S. A.

El licenciado Vargas Velarde fundamenta el impedimento invocado, en que su esposa, la señora Aura E. Vargas, suscribió el cheque N° 552, visible a foja 28 del expediente, "en función del cargo que desempeñaba en la Dirección General para el Desarrollo de la Comunidad".

Estiman los Magistrados que integran la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, que la causal de impedimento citada por el Lcdo. Velarde se adecua con la establecida en el numeral 1 del artículo 749 del Código Judicial, en concordancia con el artículo 2 del Decreto de Gabinete N° 36 de 10 de febrero de 1990. Por lo que, lo procedente es, pues, declarar legal el impedimento invocado.

En consecuencia la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo,

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE ES LEGAL el impedimento invocado por el Magistrado Oscar Vargas Velarde para conocer del proceso que se lleva a cabo en la Dirección de Responsabilidad Patrimonial para establecer y determinar la responsabilidad patrimonial por el uso de fondos públicos provenientes del Programa Multuagencial de Legisladores, de parte de los legisladores del período de 1984-1989, señores Eben Chi Rodríguez, Romelia E. de Pardo, Carlos Barsallo y Alberto Alemán Boyd, y del señor Inocencio García Ayala, en su condición de representante Legal de la sociedad anónima Gabriela, S. A. y, en base al artículo 2 del Decreto de Gabinete N° 36 de 10 de febrero de 1990, llama al Magistrado Suplente, para que asuma el conocimiento del mismo.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
(fdo.) Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JURISDICCIÓN COACTIVA

EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN INTERPUESTA POR EL LICDO. ISAAC LADRÓN DE GUEVARA ADAMES, EN REPRESENTACIÓN DE ANAYANSI ACOSTA, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL MUNICIPIO DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, CINCO (5) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Isaac Ladrón de Guevara Adames actuando en representación de ANAYANSI ACOSTA ADAMES DE RAMPOLLA, ha promovido excepción de inexistencia de la obligación y prescripción dentro del proceso ejecutivo que por cobro coactivo le sigue el Municipio de Panamá a su poderdante.

ARGUMENTOS DEL EXCEPCIONANTE:

El recurrente expone su posición como se observa a continuación para mayor ilustración:

> "1. En 1986 la Sra. de RAMPOLLA, adquirió la LICENCIA COMERCIAL TIPO B (0B030950), con la finalidad de montar un negocio que jamás se hizo efectivo, es decir, nunca funcionó porque el aspecto económico no se lo permitió;
>
> 2. En aquella ocasión la Sra. de RAMPOLLA, presentó DECLARACIÓN JURADA DE RENTA ESTIMADA, pero posteriormente como el negocio que pretendió montar no fue posible, no volvió a declarar más renta, lo que ignoraba tenía que hacer y el Ministerio de Comercio tampoco se lo advirtió.
>
> 3. Mi representada tampoco anunció cierre de operaciones, las que nunca se dieron, razón por la que el día 24 de agosto de 1995, acudió al Ministerio de Comercio e Industrias, Dirección General de Comercio Interior, Departamento de Licencias, donde canceló POR CIERRE DE OPERACIONES, la Licencia antes mencionada, lo que corresponde a las investigaciones hechas por dicho Departamento de que jamás funcionó el negocio que mi representada intentó poner en función comercial, por lo que no obedece el pago de la suma a que se refiere el Auto de Llamamiento de Pago el cual hoy excepcionamos".

Ante estas circunstancias el actor solicita que la Sala Tercera:

1. Revoque el Auto de 14 de septiembre de 1995 mediante el cual se le impone a la señora ACOSTA el pago de B/.3,318.60 por no haber puesto a funcionar la empresa que pretendió en 1986, por lo que la entidad respectiva la multó con Diez Balboas con Cincuenta Centavos (B/.10.50).

2. Se le exonere de todo pago al Municipio de Panamá.

3. En caso de no accederse a las anteriores peticiones, que se declare la prescripción de pago por 5 años con fundamento en el artículo 96 de la Ley 106 de 1973, en virtud que la proyectada empresa nunca funcionó y en consecuencia, no tuvo inversión ni ingresos.

POSICIÓN DEL MUNICIPIO DE PANAMÁ

La entidad ejecutante en lo concerniente a la excepción de inexistencia de la obligación estima que los planteamientos esgrimidos son falsos "ya que la morosidad que se le intenta cobrar al contribuyente data desde 1989 hasta la fecha y la contribuyente no cumplió con lo estipulado en el artículo 86 de la Ley 106 de 19073 reformada por la Ley 52 de 1984".

En cuanto a la excepción de prescripción el ente distrital señala que "la misma sería desde septiembre de 1990 hacia atrás(sic)"

CRITERIO DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN

La señora Procuradora de la Administración al vertir su concepto con respecto a la contienda que se surte, coincide con los señalamientos puestos de manifiesto por el Juzgado Ejecutor del Municipio de Panamá, en atención a que conforme lo estatuido en el artículo 86 de la Ley 106 de 1973 "es obligación para el contribuyente que cese las operaciones de su empresa notificarlo por escrito al Tesorero Municipal por lo menos con una anticipación de quince (15) días, de lo contrario la omisión de esta obligación no lo eximirá del pago del tributo mientras no se haya realizado". Considerando además, que a tenor del artículo 96 de la precitada excerta legal, están prescritos los impuestos que se causaron antes de septiembre de 1990.

En consecuencia, solicita que se declare parcialmente probada la excepción de prescripción promovida por la incidentista dentro del proceso coactivo antes descrito, adelantado por el Municipio de Panamá en contra de la recurrente.

CONCLUSIONES DE ESTA SUPERIORIDAD

Encontrándose el proceso en este estado, los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte, entran a resolver la controversia incoada.

Sobre el particular se destaca que efectivamente han prescrito los tributos adeudados hasta septiembre de 1990 tal como se colige de lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley 106 de 1976, puesto que la prescripción alegada por la incidentista fue interrumpida el 15 de septiembre de 1995 con la notificación del Auto de 14 de septiembre de 1995, mediante el cual se libró mandamiento de pago ejecutivo en su contra y a favor del Municipio de Panamá por la suma de B/.3,318.60, desglosados de la siguiente forma: B/.2,000.00 en concepto de impuestos y B/.1,318.60 en concepto de recargos. Debe recordarse que en estos procesos de ejecución coa coactiva, el Auto que libra mandamiento de pago equivale a la presentación de la demanda, y su debida notificación interrumpe la prescripción. Similar criterio externó esta Corporación en el Auto de 13 de mayo de 1994 en el cual se puntualizó lo siguiente:

> "... En este punto es importante poner de relieve que esta Sala ya ha determinado con anterioridad mediante auto de 10 de abril de 1992, que en los procesos ejecutivos por cobro coactivo, el auto ejecutivo equivale a la presentación de la demanda, y que su debida notificación o publicación a la que se refiere el artículo 658 del Código Judicial, según el caso, interrumpe la prescripción ...".

Frente a lo expuesto no procede el cobro a la excepcionante de los impuestos que se surtieron con anterioridad a septiembre de 1990 inclusive.

La obligación tributaria cuyo génesis se ubica con posterioridad a la fecha ut supra, debe ser saldada por la recurrente puesto que efectivamente todo contribuyente de acuerdo al texto del artículo 86 de la Ley 106 de 1973, tiene la obligación de notificar por escrito al Tesorero Municipal el cese de sus operaciones 15 días antes de retirarse de la actividad, o de lo contrario, deberá cumplir con el pago de las sumas que se generen y que en consecuencia se adeuden, por la omisión de no comunicar dicho cierre de operaciones a la autoridad destinada para tales efectos.

El desconocimiento de esta carga no constituye un caso de fuerza mayor que lo exima de esta responsabilidad.

En virtud de lo señalado, coincide esta Corporación con el criterio de la Procuraduría de la Administración, máxime cuando el mismo Municipio de Panamá acepta que las sumas adeudadas anteriores a septiembre de 1990 están prescritas.

En mérito de lo expresado, los Magistrados que integran la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARAN PARCIALMENTE PROBADA la excepción de inexistencia de la obligación y prescripción en lo atinente a los tributos municipales adeudados con anterioridad a septiembre de 1990 inclusive, siendo exigible las sumas no saldadas, derivadas de los tributos municipales que se surtieron con posterioridad a esta fecha.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO LUIS HUMBERTO ARIAS CARRILLO, EN REPRESENTACIÓN DE RAFAEL CORNEJO AMORES, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, Y A LA EMPRESA TSACONICA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DOCE (12) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Luis Humberto Arias Carrillo actuando en representación de **RAFAEL CORNEJO AMORES**, ha interpuesto excepción de prescripción dentro del proceso ejecutivo que le sigue el Banco Nacional de Panamá a la empresa **Tsacónica, S. A.**

Cabe anotar que el expediente de cobro coactivo antes descrito fue destruido a raíz de los sucesos acaecidos el 20 de diciembre de 1989, por lo que, bajo estas circunstancias y a petición de los recurrentes, se procedió a efectuar el trámite de reposición del presente negocio que culminó con el Auto N° 72 de 18 de mayo de 1994.

En la resolución judicial en comento, el Magistrado sustanciador estimó que se agotaron todas las gestiones conducentes para la consecución de las piezas procesales indispensables que conformaban el libelo original, cumpliéndose en consecuencia con los requisitos establecidos en la Ley para declarar repuesto el expediente bajo examen.

HECHOS DE LA CONTROVERSIA:

La contienda que se plantea se origina en el contrato de préstamo suscrito entre la empresa **Tsacónica, S. A.** y el Banco Nacional de Panamá por la suma de cuarenta mil balboas (B/.40,000.00), a un plazo de 36 meses, contados a partir de la inscripción de la respectiva escritura pública en el Registro Público. El préstamo en mención fue garantizado con hipoteca sobre bienes muebles y fianza solidaria del señor Rafael Cornejo Amores, cuyo plazo concluyó el 5 de noviembre de 1982, es decir una vez cumplidos los 36 meses por el cual fue pactado el contrato a partir de su inscripción en el Registro Público.

Sobre el particular se destaca que no hay constancias fehacientes que comprueben la fecha en la cual se dio con anterioridad el incumplimiento por falta de pago de los excepcionantes, para el efectos de contabilizar el término de prescripción que se alega desde dicha mora. En consecuencia, se tomará el 5 de noviembre de 1982 como fecha de inicio de los 5 años al que alude el artículo 1650 del Código de Comercio, en lo referente a la extinción del ejercicio de la acción procesal del Banco Nacional de Panamá en contra de **RAFAEL CORNEJO AMORES.**

ARGUMENTOS DEL INCIDENTISTA:

El excepcionante a través de su apoderado especial alegó en el escrito de su pretensión, los argumentos que se observan a continuación, para mayor ilustración:

> "TERCERO: Mediante resolución fechada 1° de julio de 1983, el Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá, Casa Matriz, libró Mandamiento de pago Ejecutor en contra de TSACÓNICA, S. A. y RAFAEL CORNEJO AMORES, por la suma de B/.56,508.43 por capital, intereses y costas; asimismo, decretó embargo sobre los bienes muebles hipotecados.
>
> CUARTO: A partir de la fecha mencionada en el hecho anterior, el juicio se mantuvo inactivo, y no fue sino hasta el día 4 de agosto de 1988, cuando el mismo Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá, decretó embargo sobre la cuota parte que le pertenece a nuestro poderdante, de tres (3) fincas ubicadas en la Provincia de Veraguas.
>
> QUINTO: Desde que se dictó el mandamiento de pago, hasta el día en que se decretó embargo sobre los bienes de nuestro mandante, transcurrió en (sic) tiempo establecido por la ley para que se produjera la prescripción de la acción."

Ante estas circunstancias el actor considera que se ha producido el fenómeno de la prescripción a su favor, y por consiguiente, requiere a este Tribunal de Justicia que se ordene cesar la ejecución que se surte en su contra y que se levante el embargo decretado sobre sus bienes.

CRITERIO DEL SEÑOR PROCURADOR DE LA ADMINISTRACIÓN:

El prenombrado funcionario al vertir su punto de vista con respecto al negocio que se somete a consideración, estima que el actor no ha podido comprobar que se haya producido el fenómeno aducido de la prescripción, y que, en consecuencia, el Banco Nacional de Panamá actuó conforme a las disposiciones legales pertinentes al caso por lo que en atención a lo expresado, solicita que se declare no probada la excepción en referencia.

DECISIÓN DE ESTA SUPERIORIDAD:

Encontrándose el proceso en este estado, los Magistrados que integran la Sala Tercera entran a resolver la contienda incoada.

Sobre el particular cabe destacar que es indispensable que conforme a lo estatuido en el artículo 773 del Código Judicial, las partes prueben "los hechos o datos que constituyen el supuesto de hecho de las normas que le son favorables"; y desafortunadamente en el presente negocio no reposa constancia

alguna que revele que cualesquiera de las formas de interrumpir la prescripción contenidas en el artículo 1649-A del Código de Comercio en concordancia con el artículo 658 del Código Judicial, se produjeron con posterioridad a los 5 años a que se refiere el artículo 1650 del mencionado Código de Comercio.

En el negocio que nos ocupa, era indispensable que el actor se preocupara por suministrar a esta Superioridad los elementos de juicio necesarios para que la ponderación o enjuiciamiento jurídico de las constancias procesales existentes, permitieran estimar como certero o conforme a derecho el criterio vertido por parte del peticionista en el libelo de su pretensión.

El excepcionista únicamente proporcionó a esta Corporación:

1. El escrito de la excepción de prescripción de 14 de noviembre de 1988;

2. Copia del poder fechado 8 de noviembre de 1988;

3. Copia de la providencia de 12 de diciembre de 1988, por la que se acogió la excepción de prescripción ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema;

4. Copia de la Vista N° 30 de 15 de marzo de 1989, por la que el Procurador de la Administración, contesta el traslado.

Aun cuando el excepcionante aportó algunas piezas al expediente destruido al pedir su reposición, las circunstancias de este proceso revelan el virtual abandono del negocio por parte del excepcionante quien no asistió a ninguna de las audiencias fijadas de conformidad con la ley, las que tuvieron que posponerse hasta que finalmente ésta tuvo que, realizarse sin su participación. (F. 25-26)

Como se puede observar, los instrumentos antes mencionados impiden que este Tribunal Colegiado realice una evaluación integral del presente negocio, puesto que se carece de la piezas básicas de la contienda que se surte, para poder deducir claramente que le asiste la razón al incidentista en lo que respecta a los planteamientos que pone de manifiesto.

En vista de lo expresado, no procede acceder a las peticiones efectuadas mediante la presente excepción de prescripción, puesto que no se ha comprobado el supuesto de hecho que lo sustente o fundamente legalmente, tal como igualmente lo sostiene la Procuraduría de la Administración. Se afirma lo anterior debido a que no se constata la inactividad del juicio ejecutivo en el cual no se haya reconocido la presente deuda por parte del deudor o que no se haya notificado el auto ejecutivo de 1 de julio de 1983 como lo establece el artículo 658 del Código Judicial, ya que es de lugar indicar que el fiador sigue la suerte de deudor principal, como garante accesorio de la obligación que se adquirió con el Banco Nacional de Panamá.

Aparte de todo lo anterior, para fundar una decisión en el sentido de declarar no probada la excepción, bastaría indicar: 1) que en el hecho CUARTO de su escrito de excepción, el incidentista reconoce que el Juzgado Ejecutor decretó embargo el 4 de agosto de 1988; y 2) que el escrito de excepción llevó como fecha la del 14 de noviembre de 1988 (f. 6) y que fue acogida el 19 de diciembre de 1988, cuando apenas había transcurrido algunos meses a los efectos de contar el plazo de prescripción. Y el tiempo corrido con anterioridad al 4 de agosto de 1988 no deberá contarse para estos mismos efectos.

En mérito de lo expuesto, los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN NO PROBADA la excepción de prescripción promovida por el licenciado Luis Humberto Arias Carrillo actuando en representación de RAFAEL CORNEJO AMORES.

Notifíquese.

(fdo.) JUAN A. TEJADA MORA

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN DE PAGO, INTERPUESTA POR EL LCDO. DOMINGO CALDERÓN VITERI, EN REPRESENTACIÓN DE OSVALDO LAU CAMPOS, OSVALDO ENRIQUE HERNÁNDEZ, MARCIA JIMÉNEZ DE HERNÁNDEZ Y LUIS ALBERTO DELGADO, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LES SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ A REPRESENTACIONES MÉDICAS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DOCE (12) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **Domingo Calderón Viteri** en nombre y representación de **OSVALDO LAU CAMPOS, OSVALDO ENRIQUE HERNÁNDEZ, MARCIA JIMÉNEZ DE HERNÁNDEZ y LUIS ALBERTO DELGADO,** ha interpuesto excepción de prescripción y de pago dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que les sigue el Banco Nacional de Panamá a Representaciones Médicas, S. A.

ARGUMENTOS DE LA PARTE ACTORA

El incidentista para sustentar el argumento que respalda su pretensión, señala en el libelo que el señor **OSVALDO HERNÁNDEZ DE LEÓN,** dirigió al Juez Ejecutor del Banco Nacional de Panamá solicitándole que suspendiera la ejecución dictada en su contra y además de **CÉSAR ROMERO, OSVALDO LAU CAMPOS, y MARCIA DE HERNÁNDEZ,** la cual es elocuente y no fue tomada en cuenta por esa entidad bancaria. Que dicho proceso por jurisdicción coactiva se lleva a cabo contra la empresa Representaciones Médicas, S. A. en virtud de una obligación que ya fue cancelada por los poderdantes antes descritos, dado que el compromiso que reclama el Banco Nacional fue otorgado en fecha posterior a la liberación de sus garantías personales. Que el gerente del Grupo Corporativo de esa entidad, señor Bohorquez manifestó por escrito que los precitados ejecutados estaban liberados como fiadores, en virtud de la cancelación de la carta de crédito N° 84(1011-12)412. Que el único responsable es el representante legal de la empresa Representaciones Médicas, S. A., quien según el Registro Público es Félix Cáceres.

Además continúa señalando la parte actora, que debe declararse la prescripción extintiva de la acción del Banco Nacional de Panamá contra los señores **OSVALDO LAU CAMPOS, OSVALDO ENRIQUE HERNÁNDEZ, MARCIA JIMÉNEZ DE HERNÁNDEZ y LUIS ALBERTO DELGADO,** ya que ha transcurrido más de trece años entre la firma del contrato de apertura de la línea de crédito y el auto de mandamiento de pago que tiene como fundamento ese mismo contrato.

Posteriormente el Magistrado Sustanciador procedió a correrle traslado al Juez Ejecutor del Banco Nacional para que contestara las excepciones propuestas.

DESCARGOS DEL JUEZ EJECUTOR

Señala el Juez Ejecutor del Banco Nacional de Panamá que mediante Contrato de Línea de Sobregiro de 31 de mayo de 1975, el Banco Nacional de Panamá le otorgó en calidad de préstamo a la sociedad demandada Representaciones Médicas, S. A., la suma de diez mil balboas (B/.10,000.00) garantizados con la fianza solidaria de las siguientes personas Félix Cáceres Romero, **OSVALDO LAU CAMPOS, OSVALDO ENRIQUE HERNÁNDEZ, MARCIA JIMÉNEZ DE HERNÁNDEZ y LUIS ALBERTO DELGADO.** Indica el funcionario, que el 15 de noviembre de 1989, el Banco Nacional de Panamá, inició proceso por cobro coactivo en contra de las personas mencionadas en razón de fianza solidaria ante descrita. También agrega el Juez Ejecutor, mediante su apoderado judicial, que las obligaciones objeto del proceso por cobro coactivo que ha propuesto el Banco Nacional no ha sido cancelada, y además no se ha verificado la prescripción dado que hay suficientes pruebas que demuestran las

gestiones de cobro por parte de esa entidad bancaria.

Por último, que los demandantes no han demostrado el recibo de que han cancelado la deuda.

Luego de que se pusiera en conocimiento al Banco Nacional y/o Juez Ejecutor de las excepciones propuestas por **OSVALDO LAU CAMPOS, OSVALDO ENRIQUE HERNÁNDEZ, MARCIA JIMÉNEZ DE HERNÁNDEZ y LUIS ALBERTO DELGADO**, se le corrió traslado a la Procuradora de la Administración para que emitiera su juicio frente a este caso.

CRITERIO DE LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN

Indica la Procuradora, mediante Vista N° 198 de 16 de mayo de 1995, que se observa de manera evidente que el excepcionante no hace alusión expresa al o a los documentos que prueben el pago efectivo de la obligación dineraria. Es decir, no aparecen comprobantes de pago de los que cronológicamente se pueda inferir el monto de la deuda y los abonos o pagos a ella. Es por esto que no debe admitirse la excepción de pago.

Aunado a lo anterior, señala que en lo referente a la prescripción, se le debe aplicar el mismo criterio arriba expuesto, en virtud de que tampoco se ha aportado la prueba idónea que acredite tal excepción. No especifican los interesados a que clase de prescripción se referían, y además consta la evidencia de que el Banco Nacional de Panamá llevó a cabo gestiones para el cobro de la deuda objeto de este proceso por cobro coactivo.

Encontrándose el proceso en este estado, los Magistrados de la Sala Tercera, entran a resolver la presente controversia.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Este proceso por cobro coactivo, tiene su antecedente inmediato en un contrato de línea de crédito para la apertura y financiamiento de cartas de crédito, celebrado el 31 de marzo de 1975 entre el Gerente General del Banco Nacional de Panamá de aquel entonces y el señor Osvaldo Lau, este último como parte deudora. En este mismo documento los señores Félix Cáceres Romero, **OSVALDO LAU CAMPOS, OSVALDO ENRIQUE HERNÁNDEZ, MARCIA JIMÉNEZ DE HERNÁNDEZ y LUIS ALBERTO DELGADO** se constituyeron fiadores solidarios de todas y cada una de las obligaciones del deudor.

Posteriormente la empresa Representaciones Médicas, S. A. (REMESA) fue reorganizada, y por medio de su nuevo representante legal se le solicitó a la entidad bancaria liberar las garantías personales de los anteriores accionistas (fojas 24 del antecedente). En este mismo orden de ideas algunos de los fiadores solidarios, interesados en la liberación de las garantías, los cuales avalaban la deuda, de igual manera cursaron nota al Banco Nacional para conocer en qué condiciones se encontraban frente a la obligación contraída (ver foja 26 del antecedente), pero no les fue respondidas o aclaradas sus inquietudes.

El ente crediticio, en respuesta a la solicitud de la empresa Representaciones Médicas, S. A. antes mencionada, manifestó lo siguiente:

"Señores
Centro Médico Internacional, S. A.
Ciudad

Ref-Líneas de Crédito
Representaciones Médicas, S.A

Estimados Señores:

Acusamos recibo de su nota de 8 de enero de 1985, por la cual solicitan cambios de garantías a la línea para sobregiros y aperturas y refinanciamiento de las Cartas de Crédito de Representaciones Médicas, S. A. Al respecto, manifestamos que la

relación de ustedes y nuestro cliente se dio por terminada desde la cancelación de la carta de crédito 84(1011-12) 412 la cual fue abierta por instrucciones del Sr. Félix Cáceres también, actual codeudor de la línea.

Los pagarés y aperturas de dicha empresa sólo son garantizados por el Sr. Félix Cáceres actual propietario del 100% de las acciones, a la fecha; ustedes no tienen ninguna responsabilidad.

Agradecemos observar el hecho de que si aceptaron responsabilidades durante 1984 no podíamos suspender la línea sin esperar el vencimiento.

Atentamente,

Gonzalo Bohorquez
Gerente"

De acuerdo a la nota anterior, el Banco Nacional de Panamá de manera no muy clara, hace ver que la relación entre la empresa Representaciones Médicas, S. A. y ese banco se dio por terminada desde el momento que se cancela la carta de crédito 84(1011-12)412 abierta por Félix Cáceres. Sin embargo, se desprende de la misma, que cuando la entidad bancaria contesta que "ustedes no tienen ninguna responsabilidad", no se está refiriendo a los fiadores, sino a la nueva empresa **Centro Médico Internacional, S. A.**, quien obviamente no tiene ninguna responsabilidad.

Lo anterior demuestra que en ningún momento el Banco Nacional de Panamá señaló que había liberado a los fiadores solidarios.

Confirma la conclusión anterior, el hecho de que cuando los encargados en el banco del cobro del crédito que es motivo de esta controversia de jurisdicción coactiva, realizaron las investigaciones correspondientes (ver foja 64 de los antecedentes) salió a relucir que la modificación en la garantía quedó pendiente por los cambios administrativos que en aquel entonces se verificaron en el Banco Nacional de Panamá, inclusive el señor Gonzalo Bohorquez oficial de crédito que atendía este caso, ratificó esta última situación.

Lo cierto es que no hay que perder de vista que el Banco no tramitó a requerimiento los cambios que se solicitaban para liberar a los garantes de la deuda contraída por Representaciones Médicas, S. A., pero no es menos cierto que al no verificarse esos cambios, la deuda subsiste. No está demás aclarar que los préstamos o créditos comerciales otorgados por los bancos u otra entidad análoga descansan en documentos revestidos de la formalidad que la ley le atribuye para que los mismos tengan validez y eficacia (Escritura Pública, Inscripción, etc.), lo que nos conduce a reafirmar que todos los cambios que se les quiera realizar a las condiciones pactadas en esos préstamos o créditos, deben revestir las mismas formalidades que se exigieron para su pacto.

En el caso súb-júdice, por más que los fiadores solidarios hayan presentado documentos en donde ellos consideran que prueban su desvinculación como fiadores solidarios, que no son más que notas, los mismos no tienen el valor para considerar de que están relevados del pago como garantes de la deuda contraída por Representaciones Médicas, S. A.

Los argumentos expuestos en líneas anteriores llevan a concluir a este Tribunal Colegiado, a que en lo referente a la excepción de pago, los ejecutados no han probado que estaban liberados como fiadores, en virtud de la cancelación de la carta de crédito N° 84(1011-12)412, abierta y financiada a favor de Representaciones Médicas, S. A.

Por último en lo atinente a la excepción de prescripción, este incidente no prospera en razón de que la misma fue interrumpida desde el momento en que el deudor aceptaba la deuda contraída con el Banco Nacional, por medio de Nota REF. RM-006/83 de 11 de julio de 1983 **(ver fojas 8 y 9 de el expediente contentivo de**

este proceso y fojas 182 y 183 de los antecedentes).

De acuerdo a lo establecido en el Código de Comercio y en el Código Civil, el reconocimiento de la deuda es una manera de interrumpir la prescripción. Veamos textualmente lo que dicen:

> "ARTÍCULO 1649-A: La prescripción se interrumpirá por la presentación de la demanda, conforme al Código Judicial, por el **reconocimiento de las obligaciones** o por la renovación del documento en que se funde el derecho del acreedor ..." (Lo resaltado es de la Corte)

> "ARTÍCULO 1711: La prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de **reconocimiento de la deuda** por el deudor." (Lo resaltado es de la Corte).

En conclusión la parte ejecutada no ha probado las excepciones de pago y prescripción que enerven las pretensiones del Banco Nacional de Panamá.

Por las anteriores consideraciones los Magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN NO PROBADA las excepciones de pago y prescripción interpuesta por el licenciado Domingo Calderón Viteri en nombre y representación de OSVALDO LAU CAMPOS, OSVALDO ENRIQUE HERNÁNDEZ, MARCIA JIMÉNEZ DE HERNÁNDEZ y LUIS ALBERTO DELGADO.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE DE LEVANTAMIENTO DE SECUESTRO, INTERPUESTO POR LA FIRMA CEDEÑO Y MÉNDEZ, EN REPRESENTACIÓN DE COPRUFIN, S. A., DENTRO DEL PROCESO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL MUNICIPIO DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, QUINCE (15) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Cedeño y Méndez en nombre y representación de COPRUFIN, S. A., ha interpuesto incidente de levantamiento de secuestro dentro del proceso por cobro coactivo que le sigue el Municipio de Panamá a la empresa antes citada.

El Municipio de Panamá, mediante Auto de 8 de marzo de 1995, a través del Juez Ejecutor de la entidad mencionada, decretó formal secuestro sobre títulos, valores, sumas depositadas en cuentas corrientes, de ahorros y semejantes, así como otros valores contenidos en las cajas de seguridad que se encuentran en instituciones bancarias o de crédito públicas o privadas, hasta la concurrencia de B/.33,557.60, en concepto de impuestos municipales.

De inmediato se percata el Magistrado Sustanciador que el presente incidente no debe ser admitido por varias razones.

En primer lugar, el incidentista no aporta las pruebas pertinentes que respalden su petición, tal como lo prevé el artículo 693 del Código Judicial, tercer párrafo. Esta disposición prevé lo siguiente:

> "ARTÍCULO 693. Todo incidente se correrá en traslado a la contraparte por tres días y si hubiere pruebas que practicar, se

concederá para ello un término de ocho días.

Contestado el traslado, cuando el punto sea de puro derecho o terminado el término por el cual se abrió a pruebas el incidente, el Juez lo decidirá dentro del tercer día.

Cuando se pidan pruebas en un incidente, el actor deberá aducirlas en el mismo escrito en que lo promueva y la contraparte, en la contestación al traslado". (Subrayado es nuestro).

En segundo término y no menos importante es que en lo que respecta al argumento expuesto por el demandante, de que no le fue notificada la deuda que mantenía con el Municipio de Panamá, este hecho no es cierto, dado que salta a la vista el documento que acredita la Firma Cedeño & Méndez, apoderados de COPRUFIN, S. A., por medio de la licenciada Irma Lorena Murillo, se notificó el Auto de Mandamiento de Pago de 8 de marzo de 1995, tal y como el propio actor lo adjunta como prueba. Cabe resaltar que la licenciada Murillo firma el incidente de rescisión de secuestro que es objeto de estudio.

Todo lo anterior obliga a este Tribunal Colegiado a no admitir este incidente de levantamiento de secuestro de acuerdo a lo previsto en el artículo 697 del Código Judicial.

Por las anteriores consideraciones, los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITEN el incidente de levantamiento de secuestro propuesto por la firma Cedeño & Méndez en nombre y representación de COPRUFIN, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE DE NULIDAD, INTERPUESTO POR EL LCDO. GILBERTO BÓSQUEZ, EN REPRESENTACIÓN DE OMAR SILLEROS VÁSQUEZ Y OTROS, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL MUNICIPIO DE PANAMÁ, CONTRA EL GRUPO PAPARUCCHI Y/O RESTAURANTE Y PIZZERÍA PAPARUCCHI S, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Gilberto Bósquez, actuando en representación de OMAR SILLEROS VÁSQUEZ Y OTROS, ha presentado incidente de nulidad dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que el Municipio de Panamá le sigue a el Grupo Paparucchi y/o Restaurante y Pizzería Paparucchi s, S. A.

El incidentista fundamenta su solicitud en los siguientes hechos:

"PRIMERO: Que el día 23 de mayo de 1995, mis representados tomaron por medio de Secuestro la Administración de GRUPO PAPARUCCHI y/o RESTAURANTE Y PIZZERÍA PAPARUCCHI S, S. A., interpuesta por el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social.

SEGUNDO: Que en Resolución del Municipio de Panamá de fecha 1° de septiembre de 1995, el Municipio de Panamá, abre Proceso de Cobro Coactivo en contra de GRUPO PAPARUCCHI y/o RESTAURANTE Y PIZZERÍA PAPARUCCHI S, S. A., y Libra Mandamiento de Pago por la Vía Ejecutiva, a favor del Municipio de Panamá.

TERCERO: Que el día 19 de septiembre de 1995, MARITA JINETT BARB DELGADO, Representante Legal de la Empresa GRUPO PAPARUCCHI y/o RESTAURANTE Y PIZZERÍA PAPARUCCHI S, S. A., se Notificó del Auto de Mandamiento de Pago, interpuesto por el Juzgado Ejecutor del Municipio de Panamá.

CUARTO: En vista de que mis Apoderados tienen gran interés en el futuro que corra la entidad Mercantil GRUPO PAPARUCCHI y/o RESTAURANTE Y PIZZERÍA PAPARUCCHI S, S. A., y en vista de que la Representante Legal de dicho local no ha hecho nada al respecto, mis representados en vista de que puede afectarles desfavorablemente, han decidido intervenir como terceros ...

QUINTO: Que dicho Mandamiento de Pago, Notificado a la Representante Legal de GRUPO PAPARUCCHI y/o RESTAURANTE Y PIZZERÍA PAPARUCCHI S, S. A., MARITA BARB, la cual no llegó a ningún tipo de acuerdo a (sic) arreglo de pago con el Municipio de Panamá ...

SEXTO: Que los dineros debidos al Municipio de Panamá, en concepto de Impuestos por GRUPO PAPARUCCHI y/o RESTAURANTE Y PIZZERÍA PAPARUCCHI S, S. A., son adeudados a éste, desde antes de haber tomado posesión de la Administración Judicial instaurada por mis mandantes en el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social.

SÉPTIMO: En vista del hecho descrito en el aparte anterior, y en vista de que el establecimiento se encuentra en una situación de Secuestro por parte de mis representados en el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, el Secuestro instaurado por el Municipio de Panamá, no se pudo hacer efectivo, por lo que el Juez Ejecutor procedió a emitir una Resolución por la cual procedió a Notificar por medio de Edicto publicado en un diario de la localidad a la Administradora Judicial del local, y no a su Representante Legal, MARITA BARB, quien se apersonó primero al Municipio y se procedió a Notificar de dicha resolución."

El representante legal del Municipio de Panamá, se opone al incidente de nulidad basándose en los siguientes hechos:

"PRIMERO: Los incidentistas pretenden intervenir como terceros en el proceso de jurisdicción coactivo (sic) incoado por el Municipio de Panamá, en contra del Grupo Paparucchi, S. A,; sin embargo, el escrito adolece, a nuestro criterio de una serie de fallas, a saber: a. No explica los hechos y el fundamento de derecho en que se apoya para la solicitud y, b. No acompaña las pruebas pertinentes que justifiquen la calidad de tercero; es por ello que consideramos que se debe declarar inprocedente (sic) la intervención.

SEGUNDO: Este despacho ha venido realizando las gestiones pertinentes para lograr que el contribuyente denominado **Grupo Paparucchi, S. A., con número N° 291-0391** cancele la morosidad en concepto de impuestos dejados de pagar.

TERCERO: En este sentido, debo observarle que en el mes de junio de 1995 **el señor Miguel Díaz, con cédula personal 8-501-30**, se apersonó, voluntariamente, al Juzgado Ejecutor del Municipio de Panamá; el mismo informó que la empresa se encontraba secuestrada e intervenida por el Ministerio de Trabajo, advirtiéndosele que independientemente de dicha medida los interventores deberían hacer frente a las obligaciones que la empresa tuviese con el Municipio de Panamá. Por ello, el interesado solicitó que se le permitiera un arreglo de pago, a lo cual se ascedió, (sic) solicitándosele un abono de una tercera parte de lo adeudado, que para esa fecha ascendía a la suma de B/.1,769.30 Balboas y que el mismo fuera formalizado a finales del mes de junio del presente año.

> CUARTO: Durante los meses de junio y julio, se hicieron las gestiones necesarias para lograr la formalización del arreglo, sin embargo el contribuyente se comportó remiso frente a nuestro requerimiento; por tal motivo, en el mes de agosto de 1995 se inició proceso de jurisdicción coactiva en contra de la empresa, con las correspondientes medidas cautelares.
> ...
> SEXTO: A partir del 30 de agosto de 1995 se pretendió notificar a la representante legal del Grupo Paparruchi, S. A., lo cual se logró el 19 de septiembre de 1995 y el día 29 de septiembre de 1995 se le puso en conocimiento a la administradora judicial del auto de mandamiento de pago."

Por su parte, la Procuradora de la Administración contestó el incidente mediante Vista N° 479 de 9 de noviembre de 1995. En ella, señala que "no comparte el criterio que ha expuesto el grupo incidentista, toda vez que no han logrado plasmar claramente -en su escrito- la real pretensión que se desea." Por lo que, solicita a la Sala Tercera que se declare "NO VIABLE" el presente incidente de nulidad.

Del estudio del expediente, coincide la Sala con lo expuesto por la Procuradora de la Administración, puesto que, se aprecia que, lo que pretenden los incidentistas, es intervenir en el proceso como terceros, por lo que, a todas luces se considera, que éstos, no han enderezado su escrito de acuerdo con el procedimiento que establece el artículo 590 y siguientes del Código Judicial.

Igualmente, observa la Sala que, en el escrito del incidente, se señala como causal de nulidad: "la nulidad de la resolución por nulidad," situación que, no se encuentra contemplada en el artículo 722 del Código Judicial, en el que, se establecen específicamente las causales de nulidad de los procesos, por lo que, no puede accederse a lo solicitado por los incidentistas, en esta oportunidad.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE el incidente de nulidad dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que el Municipio de Panamá le sigue a el Grupo Paparucchi y/o Restaurante y Pizzería Paparucchi s, S. A.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA MAYRA PÉREZ CASTILLERO, EN REPRESENTACIÓN DE JALADO, S. A., DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL MUNICIPIO DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La licenciada Mayra Pérez Castillero, actuando en nombre y representación de JALADO, S. A., ha promovido excepción de prescripción, en el Proceso Ejecutivo por Cobro Coactivo que le sigue a su representada el Municipio de Panamá.

La parte actora señala que el **21 de julio de 1995** el Juez Ejecutor del Municipio de Panamá libró mandamiento de pago contra JALADO, S. A., por la suma de B/.5,180.85, en concepto de Impuestos Municipales morosos dejados de percibir

desde el 31 de diciembre de 1988 hasta el 30 de junio de 1995; y solicita que se declare prescrita la acción para el cobro de dichos impuestos causados desde el año 1988 hasta el año de 1990, porque en este período cerró sus operaciones, y para demostrarlo se presentan Declaraciones de Renta de Persona Jurídica sin operaciones ante la Administración Regional de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro correspondiente a los años fiscales 1989, 1990, 1991 y 1992; señalando también que posteriormente el representante legal de la empresa, habilitó su licencia Comercial a servicios Courier, bajo la razón comercial Panacourier.

Agrega también, que su representado reconoció "ante el Juzgado Ejecutor de la Tesorería Municipal del Municipio de Panamá, cuando se apersonó voluntariamente y de buena fe ante dicho despacho el día 2 de junio de 1995; que inició operaciones de forma efectiva a partir del 17 de octubre de 1993. Sin embargo, y a pesar de lo establecido, el funcionario municipal no comunicó con anterioridad la mora, a efectos de establecer la anuencia del contribuyente o en sus defectos utilizar los recursos que tuviera a bien, tampoco se realizó gestión extrajudicial de cobro a efectos de realizar arreglo de pago" (Fs. 15).

Indica que en virtud de lo estipulado en el artículo 96 de la Ley 106 de 1973, las obligaciones resultantes de los impuestos municipales prescriben a los cinco años de haberse causado, por tanto ha prescrito por ministerio de la ley la acción de cobro de los impuestos causados desde el año de 1988 hasta el año de 1990, y solicita que debe modificarse la Resolución de 21 de julio de 1995, por la cual se abre Proceso Ejecutivo por cobro coactivo, en lo referente a la cuantía, para ajustar el monto total adeudado al Municipio y que sólo comprende los años de 1990 a 1995. (Fs. 33).

Admitida la presente excepción de prescripción se corrió en traslado al Juez Ejecutor del Municipio de Panamá y a la señora Procuradora de la Administración, por el término de ley.

La licenciada Doris Peacock, representante judicial del Juzgado Ejecutor del Municipio de Panamá, solicitó a esta Sala que declare la prescripción a partir del año 1988 hasta el mes de mayo de 1990.

Mediante la Vista Fiscal N° 435 de 16 de octubre de 1995, la señora Procuradora de la Administración señaló con relación al pago de los impuestos y recargos producidos de 31 de diciembre de 1988 al 5 de septiembre de 1990, que el cobro de los mismos ha prescrito en relación a lo estipulado en el artículo 96 de la Ley 106 de 1973. Sin embargo, el resto de las obligaciones tributarias que se pretenden cobrar del período comprendido entre el 6 de septiembre de 1990 hasta la fecha de la notificación del auto de mandamiento de pago (5 de septiembre de 1995), no se encuentran prescritas, toda vez que no ha transcurrido el tiempo necesario de cinco años para que opere la prescripción de la obligación.

OPINIÓN DE LA SALA

En el expediente contentivo del proceso ejecutivo se lee a fojas 1 que el Juzgado Ejecutor Municipal reconoce que **JALADO, S. A.**, (contribuyente N° 288-9193) adeuda al Tesoro Municipal del Distrito de Panamá la suma de B/.5,180.85 en concepto de impuestos morosos acreditados en la orden 0001 (renta 11250500) y en la orden 0002 (renta 11254100). Se observa además, que se abrió proceso ejecutivo por cobro coactivo contra **JALADO, S. A.**, y se libró mandamiento de pago por la vía ejecutiva; resolución que fue notificada al representante legal de la empresa el 5 de septiembre de 1995 (fs. 4 y 5 del proceso ejecutivo).

El artículo 96 de la Ley 106 de 1973 sobre Régimen Municipal, preceptúa que las obligaciones resultantes de los impuestos municipales prescriben a los cinco (5) años de haberse causado; el artículo 7 del Código Fiscal establece que en materia de impuestos municipales son aplicables supletoriamente las normas contenidas en dicho Código; y el artículo 738 del Código fiscal señala que el término de prescripción se interrumpe por auto ejecutivo dictado contra el contribuyente.

De conformidad con estos preceptos, la Sala considera que los impuestos municipales adeudados por el contribuyente JALADO, S. A., correspondientes al período comprendido entre 1988 y 1990 han prescrito por el mero transcurso del tiempo. Ahora bien, como el Juzgado Ejecutor del Municipio Capitalino libró mandamiento de pago mediante Auto de 21 de julio de 1995, a partir de esa fecha se interrumpió la prescripción de conformidad con el artículo 738 del Código Fiscal citado aplicable al caso por disponerlo el artículo 7 idem. Por tanto, ha prescrito la acción para cobrar los impuestos causados cinco años antes de dicha fecha, y la excepcionante debe pagar aquellos impuestos municipales que adeuda a partir de 21 de julio de 1990.

En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA PARCIALMENTE PROBADA la excepción de prescripción promovida por JALADO, S. A., y PRESCRITOS los impuestos municipales causados desde diciembre de 1988 hasta el 21 de julio de 1990, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el MUNICIPIO DE PANAMÁ.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXCEPCIÓN DE PAGO PARCIAL, INTERPUESTA POR EL DR. CARLOS EDUARDO RUBIO, EN REPRESENTACIÓN DE AGRÍCOLA Y GANADERA BAYANO, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO A JAIME CEDEÑO Y OTRO. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El doctor **CARLOS EDUARDO RUBIO (q. e. p. d.)** en nombre y representación de **AGRÍCOLA Y GANADERA DEL BAYANO** presentó excepción de pago parcial dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el **BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO A JAIME CEDEÑO y otros.**

FUNDAMENTO DE LA EXCEPCIÓN

Señala el recurrente que la Sociedad **AGRÍCOLA Y GANADERA DEL BAYANO** y el señor Jaime Domingo Cedeño, quien es el representante legal de dicha sociedad, adeudaban al Banco de Desarrollo Agropecuario en septiembre de 1985, la suma de B/.15,392.16 por créditos cedidos por COAGRO al Banco de Desarrollo Agropecuario. Continúa exponiendo el ejecutado que para cancelar dichos créditos, las Sociedades anónimas denominadas Construcciones, Caminos y Desarrollo, S. A. y Constructora las Palmitas, S. A. endosaron en el Ministerio de Vivienda y a favor del Banco de Desarrollo Agropecuario cuentas por igual valor en concepto de contrato 54-P-83 y acuerdo suplementario del mismo.

Además indica que el Ministerio de Vivienda y la Contraloría General de la República procesaron y pagaron dos de las tres cuentas, así: la suma de B/.7,923.96 por cuenta de Constructora Las Palmitas, S. A., mediante cheque N° 123 FV de 10 de marzo de 1987, girado a la orden de Banco de Desarrollo Agropecuario y la suma de B/.5,535.95, también a favor del Banco de Desarrollo Agropecuario, quedando por procesar y pagar la cuenta por B/.8,046.41 la cual está en la actualidad en proceso de pago por la Contraloría General de la República, como vigencia expirada. Que el Banco de Desarrollo Agropecuario no aplicó los dos pagos al crédito, ni ha efectuado gestión alguna para conseguir el pago de la cuenta por B/.8,046.41, lo cual cancelaría la totalidad de la obligación.

Posteriormente se le corrió traslado de la excepción al Banco de Desarrollo Agropecuario.

CONTESTACIÓN DEL BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

Al corrérsele traslado de la excepción de pago al Banco, éste se opuso a la pretensión incoada por **SOCIEDAD AGRÍCOLA Y GANADERA DEL BAYANO, S. A.** y solicitó a este Tribunal se sirviera rechazar de plano por extemporánea la presente excepción de pago parcial.

Los motivos que aduce la entidad bancaria es que los Autos ejecutivos que contienen la orden o mandamiento de pago de las obligaciones que mantiene la **SOCIEDAD AGRÍCOLA Y GANADERA DEL BAYANO, S. A. Y JAIME DOMINGO CEDEÑO,** con el Banco de Desarrollo Agropecuario, por razón de la cesión efectuada a su favor por COAGRO, R. L. y la obligación directa de los demandados con el mismo, fueron notificados a la firma forense Rubio y Rubio, los días 29 de noviembre y 13 de diciembre de 1990. Que el ordenamiento jurídico específicamente el artículo 1706 del Código Judicial prevé que dentro de los ocho (8) días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo, puede proponer el ejecutado las excepciones que le favorezcan.

También solicitó el Banco que se condenara en costas al ejecutado por las gestiones dilatorias que ha llevado a cabo este último.

De igual manera se le corrió traslado al Procurador de la Administración, quien mediante Vista N° 416 de 14 de septiembre de 1993 se opuso a la excepción de pago parcial.

CRITERIO DEL PROCURADOR DE LA ADMINISTRACIÓN

El Procurador de la Administración señaló que el incidentista fue notificado los días 29 de noviembre y 30 de diciembre de 1990, por lo que sólo contaba con ocho (8) días para ejercitar sus excepciones. Que no fue hasta el 6 de abril de 1993, cuando el ejecutado promueve la excepción bajo estudio, lo que hace este incidente extemporáneo. Por último señala, que los conflictos entre abogado y cliente no justifican legalmente la morosidad, por tanto la extemporaneidad debe ser reconocida.

Encontrándose el proceso en este estado los Magistrados de la Sala Tercera entran a resolver la presente controversia.

JUICIO DE LA SALA

De acuerdo al argumento esgrimido por el Gerente Regional de la Zona Panamá del Banco de Desarrollo Agropecuario, el cual es apoyado por el Procurador de la Administración, la excepción de pago parcial que es objeto de estudio debe ser rechazada por haber sido presentada fuera del tiempo estipulado en el artículo 1706 del Código Judicial el cual prevé los siguiente:

> "ARTÍCULO 1706: Dentro de los ocho (8) días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo, puede el ejecutado proponer las excepciones que crea le favorezcan; pero no suspendará la práctica de las diligencias ejectivas, las cuales deben adelantarse hasta poner el proceso en estado de dictar auto de remate, para aguardar la decisión sobre las excepciones que se hayan propuesto".

Sin embargo, pese a que la disposición transcrita establece un tiempo perentorio para proponer las excepciones, el artículo 1710 del mismo Código, propone que en los casos de excepción de pago, esta puede presentarse con posterioridad a los ocho días, pero debe estar acompañado dicho incidente de la prueba documental correspondiente que acredite la pretensión.

Lo conducente en este caso, es verificar si las pruebas documentales que acompaña la excepción de pago parcial acredita la pretensión del ejecutado.

El demandante ha aportado copia de la Nota de 26 de septiembre de 1985 en donde las empresas Construcciones Caminos y Desarrollo, S. A. y Constructora Las Palmitas, S. A. acepte endoso a favor del Banco de Desarrollo Agropecuaria; Nota de 13 de noviembre de 1990 firmada por el licenciado Heriberto Martínez, Director Administrativo del Ministerio de Vivienda; Nota de 11 de diciembre de 1990 firmada por Aura Cedeño, y dirigida al Contralor de la República de aquel entonces y Nota N° D. C. 167-91 de 28 de enero de 1991, firmada por el Contralor General en contestación de la Nota de 11 de diciembre 1990.

La documentación a que hemos hecho referencia y que fue aportada por el ejecutado, no constituye prueba fehaciente de que efectivamente se ha verificado el pago parcial de la deuda contraída por la empresa **SOCIEDAD AGRÍCOLA GANADERA BAYANO, S. A.** y/o **JAIME CEDEÑO**. Esto lo decimos por varias razones:

En primer lugar, las notas arriba mencionada y de las que se desprende que efectivamente las empresas Construcciones Caminos y Desarrollo, S. A. y Constructora Las Palmitas, S. A., sí endosaron a favor del Banco de Desarrollo Agropecuario, cuentas que el Ministerio de Vivienda les adeudaba, en ningún momento hacen referencia a que ese endoso es para pagar cuentas pendientes de **SOCIEDAD AGRÍCOLA GANADERA BAYANO, S. A.** y/o **JAIME CEDEÑO** que adeudan al Banco de Desarrollo Agropecuario (ver fojas 1-5).

En segundo término, y no menos importante, es que el 20 de junio de 1989, el Juzgado Ejecutor del Banco de Desarrollo Agropecuario, dictó Auto en donde libra Mandamiento de Pago por la Vía Ejecutiva (ver foja 48 de los antecedentes) en contra de **SOCIEDAD AGRÍCOLA GANADERA BAYANO, S. A.** y/o **JAIME CEDEÑO** por la suma de B/.15,962.37 en concepto de capital e intereses adeudados a la Federación de Cooperativas Agropecuarias de la República de Panamá, R. L. (COAGRO, R. L.), cuenta ésta cedida por COAGRO al Banco de Desarrollo Agropecuario; en este mismo orden de ideas, al expedirse el Auto de Mandamiento de Pago a que hemos hecho referencia, el representante legal de la empresa **SOCIEDAD AGRÍCOLA GANADERA BAYANO, S. A.**, y/o **JAIME CEDEÑO** celebró un arreglo de pago con el Banco de Desarrollo Agropecuario en el que se comprometía a pagar ciertas sumas de dinero (ver foja 51 de los antecedentes) de esta manera:

> "PRIMERA. Acepta el señor Jaime Cedeño, que adeuda a la Federación de Cooperativas Agropecuarias de la República de Panamá, R. L. (COAGRO) la suma de B/.16,425.53 saldo que mantiene vencido por razón de la obligación que contrajo con dicha Federación (COAGRO, R. L.) y según consta en el Certificado expedido por su Departamento de Contabilidad.
>
> SEGUNDA: Declara el Sr. JAIME CEDEÑO **que se compromete a pagar la referida suma de 16,425.53, mediante el plan de pago siguiente: once (11) pagos de B/.1,000.00 cada uno, todos los 29 de cada mes, a partir del 29 de noviembre de 1989.**"

También existe otro contrato de 23 de abril de 1990, que obra a foja 87 de los antecedentes de esta excepción de pago parcial, en la que la parte deudora reconoce deberle al Banco de Desarrollo Agropecuario la suma de siete mil cuatrocientos sesenta y siete balboas con noventa y seis centésimos (B/.7,467.96) a capital y siete mil cuatrocientos diecisiete balboas (B/.7,417.00) a intereses al 17 de abril de 1990. El señor **JAIME DOMINGO CEDEÑO** convino con el banco acreedor, una vez más, pagar el préstamo a partir del 15 de marzo de 1990 en 17 mensualidades de ochocientos treinta y ocho balboas (B/.838.00) que incluye capital e intereses y una última letra de cuatrocientos quince (B/.415.00), más los intereses que se generen.

El 1° noviembre de 1990, nuevamente el Banco de Desarrollo Agropecuario acogiéndose a la cláusula cuarta del referido contrato que dice: **"CUARTA: El BANCO declara que la morosidad en el pago de una mensualidad le da derecho a EL BANCO para declarar la deuda de plazo vencido y exigible y así lo acepta LA PARTE DEUDORA"**, ordena el secuestro sobre cuentas bancarias, valores, acciones y sobre cualquier otro bien que posea **JAIME DOMINGO CEDEÑO**, hasta la suma de quince mil cuatrocientos setenta y uno con treinta y tres centésimo (B/.15,471.33).

Todo lo anterior le demuestra a esta Superioridad, que en ningún momento la parte ejecutada hizo referencia a pago parcial alguno, lo que confirma el hecho de que la excepción propuesta de pago parcial no ha sido demostrada, pues las pruebas que obran en el expediente contentivo del incidente, como el de los antecedentes, indican todo lo contrario.

Ha sido infructuoso una vez más para la demandante la presentación de esta excepción, ya que no ha sido la única incidencia que a presentado a lo largo de este proceso ejecutivo que ha entablado en su contra el Banco de Desarrollo Agropecuario.

Por las anteriores consideraciones, los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley DECLARAN QUE NO SE HA PROBADO LA EXCEPCIÓN DE PAGO PARCIAL propuesta por el doctor Carlos Eduardo Rubio (q. e. p. d.) en nombre y representación de AGRÍCOLA Y GANADERA DEL BAYANO y/o JAIME DOMINGO CEDEÑO.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS.
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

INCIDENTE DE NULIDAD INTERPUESTO POR EL LICDO. MARCELO DE LEÓN PEÑALBA, EN REPRESENTACIÓN DE JORGE LEÓN DE ELLIS GONZÁLEZ Y NINA DE ELLIS, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE LA CAJA DE AHORROS. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **MARCELO DE LEÓN PEÑALBA**, actuando en representación de **JORGE LEÓN DE ELLIS GONZÁLEZ Y NINA DE ELLIS**, ha interpuesto Incidente de Nulidad dentro del proceso ejecutivo hipotecario con renuncia de trámites, que por cobro coactivo le sigue la **Caja de Ahorros** a los prenombrados.

ARGUMENTOS DE LOS INCIDENTES

Los interesados esgrimen en el escrito de su pretensión, básicamente que la cuantía de la obligación aumentó de la suma de B/.59,968.94 que se debían el 19 de julio de 1995, a la suma de B/.68,854.71 el 20 de septiembre del mismo año. Aunado a que sostienen que las notificaciones tanto del auto que libra mandamiento de pago, como de la resolución que fija fecha para la venta pública del inmueble embargado, se efectuaron en forma incorrecta.

Ante tales circunstancias, los incidentistas solicitan que se declare nulo y viciado el remate que debían efectuarse el 20 de septiembre de 1995 ante el Juzgado Ejecutor de la Caja de Ahorros, por incumplir los preceptos legales.

POSICIÓN DE LA ENTIDAD EJECUTANTE

La Caja de Ahorros debidamente representada por el Licenciado Isidro Antonio Vega Barrios manifiesta al referirse a la controversia encausada, que en el presente caso opera el fenómeno denominado Sustracción de materia, señalando seguidamente al entrar al análisis del fondo de la contienda planteada por el abogado recurrente," que la tramitación surtida en el proceso por cobro coactivo impugnado "se ciñe a lo expuesto por nuestro Código de procedimiento, y el Auto de Remate, que fija fecha de Remate del bien inmueble, para el día 20 de septiembre de 1995 fue debidamente notificado al apoderado judicial de los interesados". Por lo que solicita que se desestime el incidente propuesto, por

carecer de fundamento.

CONTESTACIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN

El representante del Ministerio Público al vertir su criterio con respecto a la demanda incoada, se opone a las peticiones del actor en virtud de que estima que las notificaciones hechas a los deudores se realizaron en estricta aplicación del tenor del artículo 993 del Código Judicial, en concordancia con el artículo 989 de la misma excerta legal, por lo que las mismas son perfectamente válidas. Por otro lado, añade la prenombrada funcionaria, que según la cláusula décima del Contrato de préstamo con garantía hipotecaria y anticrética suscritas entre el ejecutante y el incidentista, la Caja tiene derecho a que se le paguen todos los gastos por razón de dicho contrato, "y a que en cualquier caso en que conforme al mismo se dé (sic) por terminado el plazo de lo adeudado, se le pague, a más (sic) del capital, los intereses hasta la fecha de la cancelación, primas, costas, gastos de cobranzas ..."

DECISIÓN DE ESTA SUPERIORIDAD

Encontrándose el proceso en este estado, los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte entran a resolver la controversia incoada.

Sobre el particular cabe destacar, que el incidente de Nulidad en referencia, ha sido promovido dentro del especial proceso ejecutivo hipotecario con renuncia de trámite, tal como se observa en la cláusula Undécima de la Escritura Pública N° 3826 de 5 de mayo de 1981. En este orden de ideas se colige que no es dable ventilar en el presente litigio el aludido incidente de nulidad, puesto que a propósito del texto del artículo 1768 del Código Judicial, los afectados no pueden interponer más incidentes o excepciones que los de pago o prescripción. Es decir, éstas vías procesales son las únicas que proceden en estas circunstancias.

La situación que se somete a nuestra consideración es de competencia de la justicia ordinaria, la cual mediante proceso sumario determinará los derechos de cada uno de los intervinientes en este litigio, por causa de la venta sin trámites del bien embargado, conforme lo establece el texto del artículo 1772 de la precitada excerta legal. En atención a lo expresado, no es permitido a este Tribunal colegiado acceder a las peticiones del recurrente.

Similar criterio ha sido reiterado por la jurisprudencia de esta Corporación, en los recientes Autos de 7 y 9 de diciembre de 1994.

En mérito de lo expuesto, los Magistrados que integran la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARAN NO VIABLE el Incidente de Nulidad propuesto por el Licenciado Marcelo De León Peñalba en representación de JORGE LEÓN ELLIS GONZÁLEZ Y NINA ELLIS, en contra del remate que debió efectuarse el 20 de septiembre de 1995 ante el Juzgado Ejecutor de la Caja de Ahorros.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE DE RESCISIÓN DE EMBARGO, INTERPUESTO POR LA LICENCIADA VIENA ESPERANZA DE LOS MILAGROS ALONSO A., EN REPRESENTACIÓN DEL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO QUE EL BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO LE SIGUE A CARLOS AUGUSTO GUTIÉRREZ Y ARNULFO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Licenciada **VIENA E. DE LOS MILAGROS ALONSO**, en representación del **BANCO NACIONAL DE PANAMÁ**, ha interpuesto a favor de su representado, incidente de rescisión de embargo, dentro del juicio Ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el **BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO a CARLOS AUGUSTO GUTIÉRREZ Y ARNULFO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ.**

ARGUMENTOS DEL INCIDENTISTA

El incidentista expone las circunstancias que en su opinión le hacen merecedor de un pronunciamiento favorable, en los términos que se aprecian a continuación, para mayor ilustración:

> "**Primero**: El Banco Nacional de Panamá, sucursal Pesé, otorgó a los señores **CARLOS AUGUSTO GUTIÉRREZ CÁRDENA**, portador de la cédula de identidad personal N° 7-38-851 y **ARNULFO GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ**, con cédula N° 6-63-354, un préstamo por la suma de B/.15,000.00 **(QUINCE MIL BALBOAS)**, pagaderos en un término de 5 (cinco) años.
>
> **Segundo**: Lo anotado en el punto anterior, consta en **Escritura Pública N° 966 del 13 de noviembre de 1991**, inscrita en la Sección de Micropelículas (Hipotecas y Anticresis) a la Ficha 102030, Rollo 9823, Imagen 0023.
>
> **Tercero**: Para respaldar el compromiso adquirido, La Parte Deudora constituyó Primera Hipoteca y Anticresis sobre la Finca N° 5692, inscrita al Folio 64, del Tomo 722, de la Sección de la Propiedad, de la Provincia de Herrera, del Registro Público y de propiedad de CARLOS AUGUSTO GUTIÉRREZ CÁRDENAS.
>
> **Cuarto**: En vista de que, La Parte Deudora ha incumplido con el plan de pago acordado, dentro del documento a que se refiere el hecho segundo, el Banco Acreedor ha instaurado **Proceso Ejecutivo Por Cobro Coactivo**, decretando embargo sobre los bienes dados en garantía.
>
> **Quinto**: Mediante auto fechado 26 de noviembre de 1993, el Juzgado Ejecutor del Banco de Desarrollo Agropecuario, Zona de Herrera, decretó **Embargo** a su favor, sobre la Finca N° 5692, inscrita al Folio 64, del Tomo 722, Sección de la Propiedad de la Provincia de Herrera, del Registro Público.
>
> **Sexto**: Mediante Auto N° 24 del 14 de marzo de 1994, el Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá, Área Central, decreta embargo sobre el bien hipotecario que se describe en el hecho tercero.
>
> **Séptimo**: Es obvio entonces, que la finca embargada por el Juzgado Ejecutor del Banco de Desarrollo Agropecuario, Zona de Herrera, fue previamente hipotecada a favor del Banco Nacional de Panamá, Área Central, por lo que se impone el levantamiento del embargo decretado, a fin de que dicha finca sea puesta a órdenes del Juzgado Ejecutor mencionado."

En atención a lo expresado, el actor solicita la rescisión del embargo decretado por el Juzgado Ejecutor del Banco de Desarrollo Agropecuario, Zona de Herrera, mediante Auto fechado 26 de noviembre de 1993, recaído sobre la finca N° 5692, inscrita al folio 64, tomo 722, de la Sección de la Propiedad, Provincia de Herrera del Registro Público.

POSICIÓN DEL BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO

La entidad ejecutante se opuso a las peticiones del actor, esgrimiendo

esencialmente que el documento presentado con la finalidad de comprobar el préstamo otorgado a los incidentistas con garantía hipotecaria y anticrética, no es más que una fotocopia simple. Añade que no consta inventario ni depósito del ganado dado en prenda como parte de la garantía, por lo que estima que no se ha perfeccionado el embargo. Y, finalmente, señala el B. D. A. que el Certificado del registro Público tiene más de 4 meses de expedido, y que el Auto de embargo, data de más de 1 año de emitido.

Frente a lo destacado el ente ejecutante conceptúa que el incidente encausado no cumple con los requerimientos señalados por la Ley para estos trámites.

OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN

La representante del Ministerio Público, consideró improcedente el incidente encausado, "puesto que a pesar de que el Banco Nacional de Panamá ha presentado copia del auto de embargo de los bienes depositados, dictado en (sic) proceso ejecutivo hipotecario seguido en virtud de una hipoteca inscrita con anterioridad a la fecha del secuestro dicha copia no es auténtica, como lo exige tanto el artículo 549, como 1705 del Código Judicial."

Seguidamente, la prenombrada funcionaria advierte que el no haberse presentado el auto de embargo debidamente autenticado es motivo suficiente para que no se haya comprobado la preminencia del embargo del Banco Nacional de Panamá, alegando que en "el futuro debe tenerse en cuenta que la estricta observación de las normas procesales determina la viabilidad de la acción del incidentista"

DECISIÓN DE ESTA SUPERIORIDAD

Encontrándose el proceso en este estado, los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema, entran a resolver la contienda instaurada.

Sobre el particular cabe destacar que este Tribunal Colegiado coincide con el criterio vertido por la Procuraduría de la Administración, en el sentido de que no es viable admitir las pretensiones del actor, debido a que éste incumplió con el presupuesto o requisito de carácter formal que conlleva el suministro al ente jurisdiccional del auto de embargo debidamente autenticado, como lo exige el artículo 1705 del Código Judicial referente al desembargo de los bienes sujetos a esta medida de ejecución por segunda vez. El principio establecido en nuestra legislación procesal es que embargada "alguna cosa en una ejecución, no podrá serlo en otra, y si lo fuere se revocará el segundo embargo."

Al examinar dicho Auto de embargo se percata inmediatamente la Sala que el mismo cuenta con la certificación efectuada por la Secretaria y Juez Ejecutor del Banco Nacional de Panamá que exige el mismo Artículo 1705 del Código Judicial, consistente en la expresión al pie del auto de embargo, de la fecha de la inscripción de la hipoteca en que se base el juicio ejecutivo, la fecha del auto de embargo, y por último, en la certificación de que dicho embargo está vigente; sin embargo, el mismo Auto de embargo no es más que una copia simple, no autenticada.

Esta Sala ha mencionado con anterioridad, que todo documento que se proporcione como medio probatorio debe presentarse en original o estar previamente autenticado, ya que de lo contrario, los mismos no brindarán certeza en cuanto a su fondo y forma, de conformidad con los artículos 844 y 860 del Código Judicial.

Dada las consideraciones puestas de relieve, no procede acceder a las peticiones del incidentista.

En mérito de lo expuesto, los Magistrados que integran la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARAN NO PROBADO, el incidente de rescisión de embargo propuesto por la Licenciada VIENA ALONSO,

actuando en representación del BANCO NACIONAL DE PANAMÁ.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE APELACIÓN, INTERPUESTO POR LE FIRMA MORENO Y FÁBREGA EN REPRESENTACIÓN DE POSTENLOSA, S. A., DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Moreno y Fábrega, actuando en representación de POSTENLOSA, S. A., ha presentado recurso de apelación dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue la Caja de Seguro Social.

La firma Moreno y Fábrega solicita a la Sala mediante escrito fechado el 3 de agosto de 1995, se deje sin efecto la resolución sin número de 9 de mayo de 1995 en la que la Caja de Seguro Social libra mandamiento de pago por la vía ejecutiva en contra de su representada por la suma de B/.127,116.61. La firma recurrente fundamenta su solicitud en los siguientes términos:

> "PRIMERO: La Caja de Seguro Social promovió demanda por cobro coactivo por jurisdicción coactiva en contra de la sociedad anónima denominada POSTENLOSA, S. A., representada por Adolfo Quelquejue, mediante auto ejecutivo, sin número y de fecha 9 de mayo de 1995.
>
> SEGUNDO: El auto que libra mandamiento de pago en contra de POSTENLOSA, S. A., fue notificado al representante legal de la empresa el día 12 de julio de 1995 a las 4:00 p. m., por cuantía de B/.127.116.61.
>
> TERCERO: Mediante demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción propuesta por POSTENLOSA, S. A. en contra de la Caja de Seguro Social y en trámite en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, se ha impugnado tanto la resolución 4847-93-SUB-D. G. de 7 de junio de 1993 que condenaba a pagar a nuestra representada la suma de B/.87.292.87 sumas dejadas de pagar durante el período de enero de 1989 a junio de 1992 más los intereses hasta la fecha de la cancelación, por concepto de cuotas del Seguro Social, prima de riesgos profesionales y recargos de ley, así como las resoluciones 537-94- SUB-D. G. del 12 de enero de 1994 y 9989 J. D. de 22 de diciembre de 1994. CUARTO: La resolución impugnada decreta ejecución por B/.127,116.61 lo cual excede la suma original a la cual fue condenada Postenlosa, conforme a la resolución de la Caja de Seguro Social, que como consta, está impugnada."

Por su parte, la Procuradora de la Administración mediante la Vista Fiscal N° 334 de 8 de agosto de 1995, se opone a la pretensión de la parte actora, pues, a su criterio, no se acredita en autos las pruebas que la sustentan. A juicio de la Procuradora de la Administración, cuando se emitió el Auto Ejecutivo que condena a pagar a POSTENLOSA, S. A., la suma de B/.127,116.61, había trascurrido cierto tiempo desde que se dictó la resolución N° 4847-93-SUB-D. G. de 7 de junio de 1993 que condena a pagar a POSTENLOSA, S. A. la suma de B/.87,292.87 en concepto de cuotas de seguro social, prima de riesgos profesionales y recargos de Ley y las sumas dejadas de pagar durante el período comprendido del mes de enero de 1989 a julio de 1992, razón por la cual a esa fecha ya se habían

acumulado los intereses. A lo anterior añade, que no existe constancia dentro del expediente de la interposición de la demanda contencioso administrativa que alega la parte actora y, en caso de que así fuera, la interposición de la misma no tiene consecuencia en el juicio ejecutivo que nos ocupa, a no ser que se suspendieran los efectos del acto por parte de esta Corporación de Justicia. Finalmente, la Procuradora de la Administración afirma que el apelante debió probar los hechos que alega según lo que dispone el artículo 773 del Código Judicial.

Del estudio del expediente, la Sala estima que le asiste la razón a la parte actora, toda vez que, efectivamente, está en trámite en la Sala Tercera desde el 19 abril de 1995, la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción propuesta por POSTENLOSA, S. A., en contra de la Caja de Seguro Social a la que hace referencia la parte actora en el recurso de apelación que nos ocupa. En dicha demanda se impugna la Resolución N° 4847-93-Sub-D. G. de 7 de junio de 1993, que condena a POSTENLOSA, S. A. la suma de B/.87,292.87 por sumas dejadas de pagar durante el período de enero de 1989 a junio de 1992 más los intereses hasta la fecha de la cancelación, por concepto de cuotas del Seguro Social, prima de riesgos profesionales y recargos de ley y, además, se solicita la suspensión del acto tal como se observa a foja 20 del expediente. Dentro del expediente, se evidencia que el auto que libra mandamiento de pago en contra de POSTENLOSA, S. A. fue notificado al representante legal de la empresa el día 12 de julio de 1995 a las 4:00 p. m. por la suma de B/.127.116.61, es decir, fue posterior a la demanda interpuesta. Igualmente consta a fojas 48 y 49 que en resolución expedida por esta Sala el 9 de agosto de 1995, se suspendieron los efectos de la Resolución N° 4847-93- SUB. D. G. de 7 de junio de 1993 a solicitud de la parte actora dentro de la demanda contencioso administrativa, a fin de evitar un perjuicio grave a la empresa a causa de los recargos e intereses que pudieran aplicarse, tal como sucedió con el auto de 9 de mayo de 1995 que libró mandamiento por un monto de B/.127,116.61.

En virtud de lo antes expuesto, lo procedente es, pues, acceder a la pretensión de la parte actora.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA el auto de 9 de mayo de 1995 expedido por el Juez Ejecutor de la Caja de Seguro Social dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que la Caja de Seguro Social le sigue a POSTENLOSA, S. A., y en el cual se condena a pagar a dicha empresa la suma de B/.127,116,61.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXCEPCIÓN DE INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, PRESCRIPCIÓN Y FALSEDAD DE LA OBLIGACIÓN QUE SE DEMANDA, INTERPUESTA POR EL LCDO. EDGAR VARGAS T. EN REPRESENTACIÓN DE ERIC ELMER PÉREZ RODRÍGUEZ DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Licdo. Edgar Omar Vargas Tristán ha presentado excepción de inexistencia de la obligación, prescripción y falsedad de la obligación que se adeuda, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Banco de Desarrollo Agropecuario a ERIC PÉREZ R.

En el escrito respectivo se sostiene lo siguiente:

"...

SEGUNDO:Que el título Ejecutivo que presta mérito Ejecutivo para tal Ejecución lo constituyó un supuesto alcance Definitivo expedido por el señor JAVIER BERROCAL, en calidad de Administrador Judicial de la Federación de Cooperativas Agropecuarias de Panamá, COAGRO, R. L., basado según Referencia a Letra de Cambio N° 2628 expedida el 15 de diciembre de 1980. Indicamos al Tribunal que este Título carece de veracidad ya que nuestro representado jamás firmó y aceptó Letra de cambio a favor de la Federación de Cooperativas Agropecuarias de Panamá, COAGRO, R. L. por obligación alguna con dicha empresa. Por tanto el documento en que se hace constar la obligación que se demanda no posee las características y elementos que en definitiva debe conducir a la Ejecución Forzosa de la obligación que se demanda, ya que no contiene el recaudo jurisdiccional de Autoridad Legítima y materialmente no documenta una obligación de prestación definitiva, líquida, vencida y Exigible Legalmente; ante lo preceptuado por nuestro ordenamiento legal, en el artículo 1803 numeral 3 del Código Judicial que establece lo siguiente:

ARTÍCULO 1803: Prestan mérito Ejecutivo:

...

3. Los alcances líquidos definitivos deducidos contra los responsables por la Oficina encargada de Examinar y Fenecer dichos Estados de Cuenta. Acompañado en todo caso del documento público o privado legalmente constituido del la obligación por la cual se deducen. (El subrayado es nuestro).

Es por ello que solicitamos al Tribunal en atención a lo que establece el artículo 1712 inciso final del Código judicial en virtud de el INCIDENTE DE EXCEPCIONES presentado se decrete de Oficio la Solicitud de la Prueba Documental que constituye la Letra de Cambio N° 2628 que debió constar dentro del proceso por Cobro Coactivo Incoado por el BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO en contra de nuestro representado señor ERIC ELMER PÉREZ RODRÍGUEZ; como interventores de la Federación de Cooperativas Agropecuarias de Panamá, COAGRO, R. L. y de existir dicho Documento o Letra de Cambio alegamos Excepción de Prescripción de la Acción de Acuerdo a lo preceptuado en el artículo 679 numeral 12 del Código Judicial en virtud de que la supuesta Letra de Cambio fue emitida el día 15 de diciembre de 1980, transcurriendo más de (13) años a la fecha de la emisión."

En oposición al incidente interpuesto por el lic. Vargas Tristán, el Banco de Desarrollo Agropecuario señaló lo siguiente:

"...

SEGUNDO: ...

El señor **Eric E. Pérez R.**, se registró como deudor de **COAGRO, R. L.**, el día 30 de abril de 1979, a través de la emisión de dos letras de cambio, distinguidas con la numeración 1101 por B/.2,030.00, confeccionada el 30 de julio de 1978, y la letra 1102 por B/.1,333.87 emitida el 15 de octubre de 1978, haciendo un total de B/.3,363.87, el cual se le refinanció, por la cantidad de B/.2,692.58, a través de la letra 2628, confeccionada el 15 de diciembre de 1980, quedando un saldo por B/.671.29, el cual fue cancelada el 14 de noviembre de 1980, según el recibo 20620, sobre los B/.2,692.58 refinanciados, se le cargaron en concepto de intereses la cantidad de B/.463.69, lo que a la fecha se traduce en un saldo moroso de B/.3,156.27; lo que permite colegir que el saldo actual que mantiene el Sr. Pérez, es el resultado del arrastre moroso que siempre ha mantenido dicho señor, lo que constituye automáticamente una obligación líquida y exigible, por cuanto que el saldo pendiente actual, lo constituye los refinanciamientos a que hemos hecho alusión, puesto que las letras 1101 y 1102 fueron descontadas, por lo tanto esta deuda está por cobrar, se alimenta y

> tiene sus raíces fincadas en los saldos pendientes a que hemos hecho referencia, los cuales aportaremos con la aportación del Registro Contable pertinente, debidamente autenticado. Por lo tanto, para puntualizar en este punto quiero afirmar categóricamente que la deuda que mantiene actualmente el sr. Pérez, se basa fundamentalmente en un arrastre crediticio, que fue avalado por los respectivos refinanciamientos y no la letra de cambio **2628** como se quiere hacer ver."

El Procurador de la Administración en ese entonces, el lic. Donatilo Ballesteros considera que las excepciones invocadas por el incidentista no se han producido y por lo tanto prohija el criterio del Banco de Desarrollo Agropecuario. Sin embargo cabe agregar que el Procurador basó su opinión en que el incidentista le adeudaba al Banco de Desarrollo Agropecuario por refinanciamiento que el propio banco le había otorgado, cosa que no es cierto, pues tanto el crédito inicial como el refinanciamiento lo hizo COAGRO. Por esto no podemos concordar con el Procurador.

Considera la Sala importante observar que el incidentista alega que "jamás firmó y aceptó Letra de Cambio a favor de la Federación de Cooperativas Agropecuarias de Panamá, COAGRO, R. L. por obligación alguna con dicha empresa" y, en vista de no existir tal documento, no reúne los requisitos de ser una obligación definitiva, líquida, vencida y exigible. Y transcribe el artículo 1803, numeral 3 del Código Judicial que señala que prestan mérito ejecutivo un documento se debe adjuntar a la demanda.

Al considerar el señalamiento del incidentista, la Sala observa que efectivamente no existe documento alguno que acredite la existencia de la letra identificada como número 2628.

A este respecto, el Banco de Desarrollo Agropecuario explicó que los archivos microfilmados de COAGRO, R. L. fueron consumidos como consecuencia de un fuego. Para demostrar la existencia de la obligación, hace una relación contable y señala que el sr. Eric Pérez R. se convirtió en deudor mediante la emisión de dos letras de cambio, ambas confeccionadas el 30 de abril de 1979, las cuales por morosidad fueron refinanciadas por la suma de B/.2,692.58 más los intereses, refinanciamiento que se hizo a través de la letra N° 2628 confeccionada el 14 de noviembre de 1980 a lo cual se le sumó intereses por el orden de B/.463.69. Sin embargo, añade la institución, la deuda que se le cobra es el saldo pendiente de las dos primeras letras y no la letra de cambio N° 2628.

La Sala observa que, por un lado el incidentista alega que el cobro tiene su origen en la letra N° 2628 y ésta no ha sido firmada por el, por lo tanto alega que no existe documento que acredite el cobro de la deuda. Por el otro lado, el Banco de Desarrollo Agropecuario señala que no se está cobrando la susodicha letra, sino más bien saldos morosos que incluyen intereses vencidos.

Considera la Sala que al analizar la situación encuentra que si bien es cierto que es un saldo moroso la suma que se intenta cobrar, es igualmente cierto que esta suma se adeuda porque no ha sido cancelada la letra N° 2628, pues así lo señalan las pruebas aportadas por la institución, visibles a fojas 1 y 17 del expediente administrativo. Esto lo confirma la Resolución con fecha de 25 de julio de 1994 en la cual se indica lo siguiente:

> **"PRIMERO**: Adicionar a este proceso como en efecto lo hace, los documentos que sustentan la existencia de la deuda objeta de la medida cautelar de Secuestro; y que para los efectos probatorios son: Estado de Cuenta de Fecha 20 de enero de 1989 a foja 0001 y Alcance Definitivo al 15 de junio de 1994; visible a foja 0037."

Al ver el estado de cuenta de 20 de enero de 1989 y el alcance definitivo, ambos documentos indican que el saldo moroso que allí aparece es reflejo de la letra N° 2628 y los intereses. Cabe agregar que si bien la letra N° 2628 fue emitida para refinanciar los saldos morosos de las dos primeras letras se debe entender entonces que estas son canceladas y nace una obligación nueva y

totalmente distinta.

En otro orden de ideas, cabe señalar que el Banco de Desarrollo Agropecuario no puede darle el mismo valor a los estados de cuenta y alcances definitivos de COAGRO que a los emitidos por el Banco como institución pública, pues estamos ante documentos privados, que han sido emitidos por COAGRO que es una persona jurídica de derecho privado y no una entidad estatal.

A este respecto se debe observar lo señalado en el artículo 1803 ordinales 2 y 6, del Código Judicial sobre documentos públicos y privados que prestan mérito ejecutivo

El numeral 2 del artículo 1803 del Código Judicial, que es del tenor siguiente:

"ARTÍCULO 1803: Prestan mérito ejecutivo:
...
2: las copias de los reconocimientos y estados de cuenta a cargo de los deudores por créditos a favor del Tesoro Nacional, de los Municipios, de las instituciones autónomas, semiautónomas y demás entidades públicas del Estado;

3: Documentos privados reconocidos por el deudor ante entidades públicas del Estado a las cuales la ley atribuye el ejercicio del cobro coactivo."

Este artículo es claro, por lo tanto, el estado de cuenta y alcance de situación de COAGRO que reposa a foja 1 Y 14 del expediente administrativo, al no ser un estado de cuenta por créditos a favor del Tesoro Nacional u otra entidad pública del Estado, así como tampoco existe un documento privado reconocido por el deudor, no presta mérito ejecutivo suficiente para librar mandamiento de pago conforme a la ley.

Cabe señalar que así como no se presentó la letra N° 2628, tampoco fueron presentadas las dos primeras letras que originaron la deuda.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA PROBADA la excepción de inexistencia de la obligación e inexistencia del título, interpuesta por el Licdo. Edgar Omar Vargas Tristán, en representación de Eric Elmer Pérez Rodríguez dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Banco de Desarrollo Agropecuario a Eric Elmer Pérez Rodríguez y por lo tanto deja sin efecto la acción de secuestro sobre la finca N° 13,101 de propiedad del sr. Eric Elmer Pérez Rodríguez y ORDENA al Registro Público cancelar la anotación correspondiente.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TERCERÍA COADYUVANTE, INTERPUESTA POR LA LCDA. IVIS LINETTE BOTELLO, EN REPRESENTACIÓN DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, CASA MATRIZ, A CENTRO DE INFORMÁTICA APLICADA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La licenciada Ivis Linette Botello, actuando en representación de la Caja de Seguro Social, ha presentado tercería coadyuvante dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo propuesto por el Banco Nacional de Panamá, Casa Matriz, a Centro de Informática Aplicada, S. A.

El tercerista fundamenta su petición en los hechos que se transcriben a continuación:

> "PRIMERO: CENTRO DE INFORMÁTICA APLICADA, S. A., está inscrito como patrono en la Caja de Seguro Social, según consta en los registros de esta Institución.
>
> SEGUNDO: CENTRO DE INFORMÁTICA APLICADA, S. A., está inscrito como patrono número 87-821-0365.
>
> TERCERO: Desde su inscripción este patrono se obligo a pagar las cuotas obrero patronales tal como lo señala el Artículo 66A del Decreto Ley número 14 del 27 de agosto de 1954, que constituye la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social.
>
> CUARTO: Este patrono ha incumplido la obligación contraída al omitir el pago de las cotizaciones ordenadas por la Ley.
>
> QUINTO: **CENTRO DE INFORMÁTICA APLICADA, S. A., adeuda a la Caja** de Seguro Social la suma de B/.9,451.06, en concepto de cuotas obrero patronales y otros descuentos de Ley, más costas, gastos e intereses legales.
>
> SEXTO: El Juzgado Ejecutor del Banco Nacional De Panamá-Casa Matriz, ha señalado el día 21 de septiembre de 1995, como fecha para el Remate de los bienes embargados en este juicio.
>
> SÉPTIMO: La Caja de Seguro Social goza de preferencia respecto de cualesquiera otros acreedores, en relación con los créditos por aportes obrero patronales y otros recargos legales, tal como lo señala el Artículo 77 del Decreto Ley número 14 del 27 de agosto de 1954, Orgánico de esta Institución."

El suscrito Magistrado Sustanciador corrió traslado de la tercería al Juez Ejecutor del Banco Nacional de Panamá y a la Procuradora de la Administración.

El Banco Nacional de Panamá, contestó mediante su apoderado judicial especial, licenciado Carlos Bieberach, en la que señala como cuestión previa que:

> "1. La Tercería Coadyuvante presentada por el apoderado de la Caja de Seguro Social, debe rechazarse por extemporánea, ya que la misma se presentó en el Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá, el día 21 de septiembre de 1995, fecha señalada para celebrar el remate de los bienes.
> ...
> 4. De conformidad con los artículos 1737 y 1744 del Código Judicial, con la adjudicación provisional, la trasmisión (sic) de los bienes muebles a favor del Banco es irrevocable, y se constituye a su favor un título de dominio.
>
> 5. La resolución de la Corte Suprema de Justicia-Sala Contencioso Administrativo (sic) de fecha 12 de octubre de 1995, por medio de la cual se admite la tercería coadyuvante de la Caja de Seguro Social y se ordena suspender el pago, se notificó al Banco Nacional de Panamá el día 17 de octubre pasado."

Mediante Vista Fiscal N° 472 de 8 de noviembre de 1995, el Procurador de la Administración, Suplente, contestó la tercería coadyuvante y solicitó que se declarase probada la misma.

Evacuados los trámites de ley, la Sala procede a resolver la presente controversia, previa las siguientes consideraciones.

Del estudio del expediente, observa la Sala que, el Juez Ejecutor del Banco Nacional-Casa Matriz, señaló el día 21 de septiembre de 1995, como la fecha en que debían rematarse los bienes dados en garantía por la empresa Centro de Informática Aplicada, S. A. Igualmente, se aprecia que, en efecto, la Caja de Seguro Social, presenta tercería coadyuvante ese mismo día, con el objeto que se le pague la suma de nueve mil cuatrocientos cincuenta y un balboas con seis centésimos (B/.9,451.06) en concepto de cuotas obrero patronales y otros descuentos de ley, que le adeuda la empresa ejecutada en este caso.

En este caso, la Caja de Seguro Social, ha presentado con su demanda, la Certificación de Deuda, expedida por la Dirección de Ingresos, que acredita la deuda, en concepto de cuotas obrero patronales, que tiene el Centro de Informática Aplicada, S. A., con esa entidad y que, presta mérito ejecutivo. Aunado a ello, es menester señalar que, dicho crédito tiene la categoría de privilegiado, tal como lo dispone el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social.

Cabe señalar, que la pretensión del tercerista ha sido presentada en tiempo oportuno, toda vez que, tal como lo señala el número literal 2 del artículo 1794 "puede intentarse la tercería coadyuvante mientras no se haya hecho el pago al acreedor," y como en este caso, no se han presentado pruebas que demuestren de manera fehaciente, lo contrario, y como se fundamenta además, en documentos que prestan mérito ejecutivo, a la luz, de lo que establece el número literal 2 del artículo 1803 del Código Judicial, esta Sala, considera la petición del tercería es perfectamente viable.

De todo lo anterior, se colige que, el derecho de la Caja de Seguro Social de recurrir como tercero coadyuvante en el presente proceso ejecutivo por cobro coactivo, está debidamente acreditado, por lo que, lo procedente es, declarar probada la presente tercería.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA PROBADA la tercería coadyuvante interpuesta por la licenciada Ivis Linette Botello, en representación de la Caja de Seguro Social, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo propuesto por el Banco Nacional de Panamá, Casa Matriz, a Centro de Informática Aplicada, S. A. y ORDENA que se le pague al tercerista la suma que se le adeuda en el orden de prelación que la ley señala.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXCEPCIONES INTERPUESTAS POR EL LICDO JULIO CÉSAR MORALES EN REPRESENTACIÓN DE IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S. A., DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL MUNICIPIO DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Julio César Morales Saénz (q.e.p.d.) actuando en representación de **IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA**, ha interpuesto escrito de excepción de petición o de ejecución antes de tiempo, de prescripción del impuesto y de los recargos, de cobro de suma mayor a la debida, de inexistencia de la obligación

y finalmente de fallo de inconstitucionalidad y que por virtud de esta última excepción, se declare sustracción de materia u otra disposición que conlleve la devolución al incidentista de las cauciones consignadas y las sumas pagadas mensualmente en concepto del gravamen impuesto declarado inconstitucional. Igualmente se observa que el incidentista Shirley y Díaz, en reemplazo del difunto licenciado Morales, con posterioridad a todas estas gestiones, interpone escrito de desistimiento de las excepciones presentadas en atención a la Sentencia del Pleno de esta Corporación de Justicia de 12 de mayo de 1995, mediante la cual se declaró inconstitucional la Resolución N° 1268 de 26 de mayo de 1986; solicitud a la que se opuso el Juez ejecutor del Municipio de Panamá.

FUNDAMENTO DE LAS EXCEPCIONES

En el escrito del excepcionante se observa que enuncia las primeras cuatro excepciones mencionadas en el párrafo anterior y separadamente en escrito posterior el actor propone la excepción de inconstitucionalidad sobre la deuda que intenta cobrarle el Municipio de Panamá. Sin embargo, se percata la Sala que de las cuatro primeras excepciones solamente dos han sido explicadas concretamente por el incidentista, así como la última de ellas presentada por separado. Ahora bien, de la lectura de la primera excepción podría inferirse el contenido de las otras dos excepciones que expresamente no fueron desarrolladas en puntos separados.

La primera de las excepciones sustentadas por el excepcionante se refiere a la omisión en el cumplimiento del artículo 41 de la Constitución Nacional, debido a que el Tesorero Municipal no atendió la solicitud escrita de eliminar o restar la suma total de B/.57,008.00 de la supuesta morosidad y recargos causado por el impuesto encajado en la expresión, "Otras Actividades Lucrativas". El monto sujeto a disminución correspondía a los totales correspondientes de los años comprendidos entre 1980 y 1985, los cuales en opinión de la afectada estaban prescritos. Sobre esta circunstancia hubo desacuerdo entre los funcionarios municipales y la línea aérea ejecutada, ya que la misma acepta que en una reunión que sostuvieran ambas partes se convino en que la Tesorería Municipal prepararía su cuenta, y que la aereolínea Iberia opondría la excepción de prescripción. Seguidamente expone el actor que el 15 de septiembre de 1994 "se cumplieron dos meses de que el escrito de prescripción fue presentado, y nada está resuelto sobre él. No obstante, el 29 de agosto ppdo., la Juez Ejecutora Municipal del Distrito de Panamá RECONOCIÓ la suma de B/.87,471.00 en concepto de impuestos morosos a cargo de IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S. A. y abrió Proceso por Cobro Coactivo contra ésta por dicha suma. Se venció el mes que el artículo 41 de la Constitución Política concede al funcionario para resolver la petición y, sin haber dado al petente oportunidad de agotar el término para proceder ante el silencio de la administración, propuso el Proceso de Cobro Coactivo de la obligación. Este cobro judicial constituye petición o ejecución antes de tiempo."

Aunado a lo expresado, el incidentista destaca que "el Consejo Municipal del Distrito de Panamá, mediante Acuerdo N° 11 de 20 de abril de 1990, decretó que el impuesto municipal `que grava a las líneas aéreas dentro del renglón de `OTRAS ACTIVIDADES LUCRATIVAS será efectivo el 1° de enero de 1987 y ordenó al Tesorero Municipal `eliminar todos los recibos, cargos, intereses y recargos hechos a las líneas aéreas en ese concepto correspondiente al período anterior al 1° de enero de 1987." Por lo que concluye el excepcionante que mal puede el precitado funcionario cobrar dichas sumas de dinero, ya que inclusive, los recibos de la deuda resultante hasta el mes de mayo de 1988 fue declarada ilegal por parte de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sentencia de 17 de julio de 1991. Debemos recordar, que dentro del contenido de esta explicación el incidentista enmarca igualmente las excepciones de prescripción y de cobro de una suma mayor a la realmente debida.

Con respecto a la excepción de inexistencia de la obligación, por declaración expresa hecha por el señor Tesorero Municipal del Distrito de Panamá, se aprecia que el actor subraya que dentro de la certificación de 19 de junio de 1991 que acompaña el señor Tesorero Municipal dentro del libelo fechado el 24 de junio de 1991 ante la Sala Tercera de la Corte Suprema, que este funcionario efectuó las siguientes afirmaciones: "Que los <u>únicos cargos</u> cuentas o recibos que

contra IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S. A., existen en los libros y registros de esta Tesorería Municipal por el gravamen Municipal denominado `OTRAS ACTIVIDADES LUCRATIVAS comenzaron a calcularse a partir del 1 de enero de 1987, a razón de CUATROCIENTOS (B/.400.00) por mes."

Frente a lo expuesto resalta el actor que la Tesorería Municipal aspira a cobrar por jurisdicción coactiva, impuestos y recargos sobre sumas prescritas e incobrables.

Finalmente con relación a la excepción de inconstitucionalidad, la Sala estima que dicho escrito corresponde más bien a una petición de sustracción de materia realizada por el excepcionante con fundamento en el fallo de inconstitucionalidad de 12 de mayo de 1995, legible a fojas 52 a la 55 del expediente bajo estudio. En dicha sentencia, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia consideró que la **Nota N° 1268 de 26 de mayo de 1986**, emitida por el Tesorero Municipal del Distrito de Panamá, **conculcaba el artículo 48 de la Constitución Nacional** puesto que "Nadie está obligado a pagar contribuciones ni impuesto, que no estuvieren legalmente establecidos y cuya cobranza no se hiciere en la forma prescrita por las Leyes." En opinión de la Corte dicho acto no se ajustaba a los preceptos legales ya que como orden o requerimiento de pago debió ser expedida con arreglo a un acuerdo o resolución del Consejo Municipal. El petente indica que dado que se ha declarado contrario a la Carta Magna "el cobro del impuesto comunicado por el Tesorero Municipal mediante la Nota 1268 de 26 de mayo de 1986, ... un pronunciamiento sobre la legalidad del cobro no tiene objeto, operándose por tanto Sustracción de Materia." En consecuencia el incidentista reclama la devolución de lo consignado en concepto de este impuesto.

Retomándose el párrafo inicial de este acápite se debe aclarar, que este Tribunal Colegiado ha considerado que el escrito de excepción de inconstitucionalidad no es más que una petición de sustracción de materia con fundamento en el fallo de inconstitucionalidad antes mencionado, en atención a lo estatuído en los artículos 201 numeral 4 y 467 primer párrafo del Código Judicial, que permiten al Juez darle el curso debido a los escritos presentados cuando estos sean denominados erróneamente por el interesado, siempre y cuando del mismo se desprenda claramente la finalidad que éste persigue, tal como acontence en el caso subjúdice.

Por otro lado es de lugar resaltar, que en las ejecuciones comunes el artículo 1706 del Código Judicial solamente concede 8 días para proponer las excepciones que a bien tenga el ejecutado para tratar de enervar las pretensiones del ejecutante. Ahora bien, en lo que respecta a la excepción de pago, el ejecutado tiene la oportunidad procesal de interponerla aun con posterioridad a los 8 días en comento, si a su vez presenta conjuntamente la prueba documental que la sustente o acredite, tal como lo preceptúa el artículo 1710 del Código Judicial.

Igualmente se debe recordar a la parte actora, que no es viable promover una excepción dentro de la o las presentadas inicialmente, y que toda excepción que se desee y pueda presentar, debe ser encausada a través del funcionario que expidió la resolución que se intenta dejar sin efecto, y que en el caso específico de los procesos por jurisdicción coactiva sería ante el Juez Ejecutor de la entidad ejecutante, y no ante la Secretaría Administrativa de la Corte Suprema de Justicia que únicamente ventilará su proceso desde que dicha excepción le sea remitida. Ello está establecido en el artículo 1804 del precitado Código Judicial.

CRITERIO DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN

El Representante del Ministerio Público se opuso a las pretensiones del excepcionante en atención a que estima que no es viable el reconocimiento de la prescripción de los impuestos que se surtieron de 1980 a 1985 con contra Iberia, Líneas Aéreas de España, ya que el Municipio de Panamá ha sido constante en el cobro de este tributo a la aereolínea.

Por otro lado agrega la prenombra entidad, que los impuestos eliminados por

el Acuerdo N° 11 de abril de 1990, que corresponden a al período comprendido entre el 1 de noviembre de 1980 y el 31 de diciembre de 1986, permanecen vigentes, en virtud de que el fallo de 27 de diciembre de 1993 proferido por la Sala Tercera de esta Superioridad lo declaró nulo por ilegal.

Igualmente alega el señor Procurador de la Administración que el petente no ha comprobado que existe error en el débito a la Compañía Iberia en las fechas aludidas.

En lo concerniente a la excepción de petición o de ejecución antes de tiempo la Procuraduría observa básicamente que el escrito de solicitud de la declaratoria de prescripción de impuestos no es un medio contemplado en el Código Judicial para suspender los procesos por cobro coactivo, y que además, el Tesorero Municipal carece de competencia o facultades legales para reconocer la prescripción sobre sumas de dinero adeudadas en concepto de impuestos, ya que esta función esta reservada al Alcalde o al Consejo Municipal, en atención al artículo 95 de la Ley 106 de 1973.

En lo atinente a la excepción de inexistencia de la obligación la Procuraduría de la Administración acepta los dos primeros hechos, negando seguidamente el tercero y el cuarto oponiéndose por ende a las reclamaciones planteadas por el incidentista a través de la presente contienda.

Cabe resaltar que tanto de la petición de sustracción de materia como del desistimiento presentado por el actor, la Procuraduría de la Administración no se pronunció; no manifestando en consecuencia, su opinión al respecto.

POSICIÓN DEL MUNICIPIO DE PANAMÁ

La entidad ejecutante se opone a las peticiones expuesta por el actor aduciendo que en lo que respecta la excepción de petición o ejecución antes de tiempo, debe tenerse presente que los impuestos estaban atrasados en su pago y por lo tanto, eran exigibles y cobrables; que la solicitud de declaratoria de prescripción no es un modo de suspender el proceso por cobro coactivo, y, que el Tesorero Municipal como agente recaudador y pagador carece de facultades legales para conocer y decidir dichas solicitudes de prescripción de impuestos.

Seguidamente niega que haya operado prescripción a favor de la compañía incidentista, dado que "los tributos municipales morosos comprendidos entre Noviembre de 1980 a la fecha, ... entraron a regir desde el 26 de abril de 1991, fecha en que se hizo la notificación correspondiente, de la **Resolución N° 19 de 1989, dictada por la Junta Calificadora Municipal, que confirmó en todas sus partes la nota N° 1268 de 1986 que estableció estos tributos.**" Por lo que de acuerdo al **párrafo primero del artículo 87 y el artículo 91 de la Ley N° 106 de 1973**, "es la notificación de 26 de abril de 1991 de la **Resolución N° 19 de 1989**, expedida por la **Junta Calificadora, la que marca el inicio del término prescriptivo, pues la misma resuelve confirmando en todas sus partes la nota N° 1268.**"

Al referirse a la excepción de cobro de una suma superior a la debida aclara el Municipio de Panamá que el mismo actor en su escrito de 21 de septiembre de 1994 dirigido a esta Superioridad, aporta las pruebas en las cuales se basa el cobro de los impuestos morosos.

A continuación y en atención a la excepción de inexistencia de la obligación el ente ejecutante insiste que la obligación tributaria de Iberia, líneas Aéreas de España, existe y se funda en la Nota 1268 de 25 de mayo de 1986, que estableció el gravamen a este contribuyente, y cuya legalidad fue declarada mediante fallo de 25 de marzo de 1994, expedido por este Tribunal Colegiado. Agrega el actor que como el Acuerdo N° 11 de 20 de abril de 1990 fue declarado ilegal por sus efectos retroactivos, el mismo existió **pero no surtió efectos ya que no fue publicado en la Gaceta Oficial.**

Finalmente, al referirse el Municipio de Panamá a la petición de desistimiento promovido por la empresa excepcionante, consideró que la Sala

Tercera debía pronunciarse sobre la excepción de inconstitucionalidad presentada, que a juicio de esta Corporación de Justicia, no es más que una petición de sustracción de materia, tal como ya se ha expresado, oponiéndose en consecuencia a la solicitud de desistimiento presentada, el ente municipal.

CONCLUSIONES DE ESTA SUPERIORIDAD

Encontrándose el proceso en este estado, los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte entran a resolver la contienda planteada.

Es importante establecer en primer lugar que no es dable acceder a la petición de desistimiento presentada por el incidentista, en virtud de que el Municipio de Panamá no se mostró conforme con dicha solicitud; ya que más bien por el contrario, solicitó que la Corte se pronunciara con respecto a la petición de sustracción de materia interpuesta, que se fundamenta en el fallo de inconstitucionalidad de 12 de mayo de 1995 en el cual se resolvió que la Nota N° 1268 de 26 de mayo de 1986 es contraria al tenor del artículo 48 de la Constitución Nacional. A estos efectos, el artículo 1080 del Código Judicial es claro al preceptuar que carecerá de eficacia el desistimiento objetado que haya sido presentado después de que se haya notificado la demanda (auto Ejecutivo en los negocios por cobro coactivo; cfr. Auto de 13 de mayo de 1994 y 10 de abril de 1992) y que por consiguiente, deberá continuar el trámite del proceso. En este caso en particular lo procedente es resolver la contienda que se somete a decisión de esta Corporación.

Frente a lo señalado, procede seguidamente analizar la petición de sustracción de materia.

Al respecto se destaca que el impuesto en disputa es **establecido** por la Nota 1268 de 26 de mayo de 1986, proferida por el Tesorero Municipal del Distrito de Panamá, desde el 1 de noviembre de 1980, dentro del renglón de Otras Actividades lucrativas, por un monto mensual de B/.400.00.

Seguidamente, el Acuerdo N° 11 de 20 de abril de 1990 expedido por el Consejo Municipal de la misma área geográfica, resolvió que dicho impuesto sería efectivo a partir del 1 de enero de 1987 y que por lo tanto, se ordenaba al Tesorero Municipal antes mencionado, eliminar todos los recibos, cargos, intereses y recargos atribuidos a las aereolíneas en estos conceptos con anterioridad precisamente al 1 de enero de 1987.

Ahora bien el Acuerdo N° 11 de 20 de abril de 1990 fue declarado ilegal por la Sentencia de 27 de diciembre de 1993 emitida por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en atención la carga impositiva impuesta era de carácter retroactivo, e inobservaba la capacidad contributiva del individuo, quebrantándose la proporcionalidad de las cargas impositivas. Por otro lado señala la Corte en la Sentencia en comento, que el Acuerdo Municipal N° 11 de 1990 no fue publicado en la Gaceta Oficial como lo exige el artículo 39 de la Ley 106 de 1973 para que el mismo tenga efectos legales y sea de forzoso cumplimiento, o de lo contrario sus disposiciones no pueden ponerse en vigor.

Sobre el particular es indispensable resaltar que la simple declaratoria de nulidad, es decir, las que se decretan dentro de las demandas Contencioso Administrativo de Nulidad sobre actos generales producen solamente efectos ex-nunc (hacia el futuro), más no ex-tunc (hacia el pasado), por lo que sus consecuencias no se retrotraen al período o tiempo anterior a la publicación de la declaratoria de nulidad.

Como precisamente los efectos de la declaratoria de nulidad emitida sobre actos generales son para el futuro, es procedente revisar únicamente la real existencia y validez del Acuerdo N° 11 en mención, como medio a través del cual se eliminaron a favor de Iberia, líneas Aéreas de España, las cargas tributarias correspondientes al período anterior al 1 de enero de 1987.

En este orden de ideas se reitera tal como lo expresa la Sentencia de inconstitucionalidad de 12 de mayo de 1995, el Auto de 14 de junio de 1995 y la

reciente Sentencia de 18 de mayo de 1995, que un fenómeno es la existencia jurídica de un acto administrativo y otro es su validez jurídica. En el caso particular del Acuerdo N° 11 de 1990 se puntualiza que el mismo tuvo existencia jurídica más no validez, obligatoriedad o exigibilidad jurídica puesto que nunca fue publicado en la Gaceta Oficial. La existencia jurídica depende de la sanción del un acuerdo municipal determinado, pero su validez jurídica depende de su promulgación, es decir, de que se cumpla con el requisito indispensable de la publicidad que exige concretamente el artículo 39 de la Ley 106 de 1973.

Este mismo criterio fue sostenido en el prenombrado Auto de 14 de junio de 1995 con respecto precisamente al **Acuerdo N° 11 de 1991**, el cual decidió la excepción extintiva de prescripción, interpuesta por el Lcdo. **José E. Ehrman**, en representación de **VARIG AIRLINES**, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le seguía el Municipio de Panamá, tal como ciertamente se aprecia a continuación para mayor ilustración:

> "En este orden de ideas, se ilustra que **el Acuerdo N° 11 de 20 de abril de 1990** tuvo existencia desde que fue sancionado por el alcalde del Municipio de Panamá el mismo 20 de abril de 1990, más sin embargo, no tuvo efectos exigibles puesto que no se surtió la publicación de dicho acuerdo en la Gaceta Oficial, tal como lo puso de manifiesto la sentencia de 27 de diciembre de 1993 de esta Sala de la Corte; careciendo en consecuencia el referido acuerdo de validez jurídica. La obligatoriedad de la publicación en la Gaceta Oficial del acuerdo que se emita en materia de impuestos lo preceptúa el segundo párrafo del texto del artículo 39 de la Ley 106 de 1973.

Este criterio nos conduce a la conclusión indubitable que al existir pero no tener obligatoriedad jurídica el Acuerdo N° 11 de 20 de abril de 1990, que los impuestos municipales sujetos a exención, nunca fueron eliminados por el Consejo Municipal del Distrito de Panamá validamente. Por lo que continuaba la vigencia íntegra de la Nota N° 1268 de 26 de mayo de 1986. Cabe destacar que la certificación de deuda exigible, legible a foja 104 y 105 del expediente adelantado por el Juzgado ejecutor del Municipio de Panamá, fue extendida tomando como parámetro el Acuerdo N° 11 de 20 de abril de 1990, y por ello excluye las cantidades adeudadas correspondiente a los períodos anteriores al 1 de enero de 1987.

Ahora bien, la Nota N° 1268 de 26 de mayo de 1986 en la cual se estableció el impuesto municipal a pagar dentro del renglón denominado, `Otras Actividades Lucrativas , emitidas por el Tesorero Municipal del Distrito de Panamá, **tal como lo acepta expresamente esta entidad ejecutante a foja 36 de su escrito de oposición a las excepciones promovidas, fue declarada inconstitucional por la Sentencia de 12 de mayo de 1995** debido a que llevaba ínsita una orden o requerimiento de pago de impuesto que no se expidió con arreglo a un acuerdo o resolución expedida por el Consejo Municipal, contraviniendo en consecuencia el artículo 48 de la Constitución Nacional, puesto que, el cobro de los impuesto no se realizaría con arreglo a la Ley.

De lo señalado se infiere que el fundamento de la ejecución por cobro coactivo adelantada por el Juzgado Ejecutor del Municipio de Panamá, cual es la referida Nota 1268 de 26 de mayo de 1986 ha desaparecido del mundo jurídico por lo que la misma no puede ser invocada para continuar la ejecución contra la sociedad Iberia, Líneas Aéreas de España.

Debe recordarse que en nuestro país la inconstitucionalidad y la derogación tienen en común en que cesan la vigencia de la ley o de una norma hacia el futuro. Mas sin embargo, ambas figuras hacen cesar la validez de la ley o la norma, mediante mecanismos distintos.

Al declararse inconstitucional la Nota N° 1268 de 26 de mayo de 1986 mediante la sentencia de 12 de mayo de 1995 proferida por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la hace inaplicable en la presente ejecución a pesar de que la mismo estaba vigente al momento en que se inició el proceso por cobro coactivo

por parte del Juzgado Ejecutor del Municipio de Panamá. La inconstitucionalidad produce como efecto inmediato la nulidad de la ley, norma legal o reglamentaria u objeto del proceso constitucional que se declare contrario a los preceptos consagrados en la Carta Magna.

La Doctrina ha señalado al respecto que: "Las sentencias que declaran la inconstitucionalidad y pronuncian la anulación consecuente de la norma o actos impugnados, producen cosa juzgada y eliminan la norma o el acto del ordenamiento. Es decir, la sentencia estimatoria de la acción tiene efectos abrogativos y erga omnes hacia el futuro, pues la norma o acto declarados inconstitucionales desaparecen del ordenamiento jurídico, tal y como si hubieran sido derogados". (HERNÁNDEZ VALLE, Rubén; la Tutela de los Derechos Fundamentales; Editorial Juricentro; San José, Costa Rica, l990 págs 218 y 219).

En sentencia de 8 de junio de 1992 esta Sala sostuvo:

> "... La norma inconstitucional es nula y no puede ser aplicada por el juez, aunque estuviese vigente al momento en que se produjo el hecho cuyos efectos ahora se determinan: en este caso el despido y la legalidad o ilegalidad del mismo. La norma inconstitucional carece de ultraactividad por ser nula con efectos generales. Por esta razón, Hans Kelsen sostenía que una norma derogada puede ser objeto del control de constitucionalidad".

De lo anterior se desprende claramente que no puede continuar la aplicabilidad de la Nota N° 1268 de 26 de mayo de 1986. Este criterio fue sostenido igualmente en la Sentencia de 3 de septiembre de 1992. Por lo tanto, ha desaparecido el objeto procesal sujeto a contienda en la presente ejecución, cual es el cobro de los impuestos municipales establecidos en la Nota 1268 de 26 de mayo de 1986 declarada inconstitucional por la Sentencia de 12 de mayo de 1995.

Ante estas circunstancias, es evidente que se ha producido el fenómeno de la Sustracción de materia tal como lo indica el petente.

En mérito de lo expuesto, los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN que se ha producido el fenómeno de la SUSTRACCIÓN DE MATERIA. En consecuencia se ORDENA la devolución de lo consignado a IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE DE NULIDAD, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO ABDIEL GONZÁLEZ EN REPRESENTACIÓN DE OSCAR MARTÍNEZ DÍAZ, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE LA CAJA DE AHORROS CONTRA CARLOS AUGUSTO CASTILLO MADRID Y ELODIA YIZETH ABADIA DE CASTILLO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Abdiel González Acosta, en representación de **ORLANDO MARTÍNEZ**, ha promovido incidente de nulidad del remate judicial de la finca N° 53546, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue la Caja de Ahorros a Carlos Augusto Castillo Madrid y Elodia Yiseth Abadia de Castillo.

El incidentista ha fundamentado su solicitud en los siguientes hechos:

"PRIMERO: Dentro del petitorio promovido en el sentido de que se deje sin efecto y valor alguno el remate llevado a cabo el 30 de agosto de 1995 sobre la finca 53546, de propiedad de los ejecutados CARLOS AUGUSTO CASTILLO MADRID y ELODIA YISETH ABADIA DE CASTILLO, procede que la caución consignada por nuestro patrocinado ORLANDO MARTÍNEZ DÍAZ, consistente en Títulos Prestacionales por la cantidad de B/.4,882.28, por no ser lo suficientemente valedera en atención al Artículo 559 del Código Judicial de aplicación complementaria dentro de estos procesos ejecutivos que por jurisdicción coactiva lleva a efecto la Caja de Ahorros en atención a la Ley Orgánica que rige la institución, se impone la DEVOLUCIÓN Y ENTREGA de los Títulos en cuestión a su propietario y también representado por el suscrito, CARLOS MARÍA MALTINTI, que en fecha anterior solicita igualmente la nulidad de la actuación impugnada mediante esta gestión.

SEGUNDO: Nos permitimos manifestarle al Juez Ejecutor que ORLANDO MARTÍNEZ DÍAZ se ratifica de nuestra petición original, colaborando como tal en los hechos y consideraciones que se han esgrimido en procura de la nulidad del remate sobre la finca N° 53546." (Fs. 2-3).

El artículo 721 del Código Judicial dispone que los actos procesales no podrán anularse por causas distintas de las consagradas taxativamente en la Ley y el Juez deberá rechazar de plano el incidente que no se funde en tales causales.

En el caso en estudio el incidente de nulidad del embargo promovido no se fundamenta en ninguna de las causales de nulidad de los procesos en general numeradas en el artículo 722 idem, ni en ninguna de las causales de nulidad de los procesos ejecutivos, señaladas en el artículo 727 ibidem. Es decir que estamos frente a un incidente manifiestamente improcedente que debe rechazarse de plano en cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 697 y 721 del Código Judicial.

En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RECHAZA DE PLANO, el incidente de nulidad del Remate de la finca N° 53546, promovido dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue la Caja de Ahorros a Carlos Augusto Castillo Madrid y Elodia Yiseth Abadia de Castillo.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LCDO. CÉSAR DÍAZ, EN REPRESENTACIÓN DEL I. R. H. E., CONTRA EL AUTO DE 29 DE AGOSTO DE 1994, EMITIDO POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: EDUARDO A. JIMÉNEZ VS I. R. H. E. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, CUATRO (4) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO (1995).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (LABORAL).

VISTOS:

El licdo. Cesar E. Díaz E., quien actúa en representación del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE), ha presentado recurso de casación laboral contra el auto expedido por el Tribunal Superior de Trabajo el 29 de agosto de 1995, dentro del proceso laboral promovido por Eduardo A. Jiménez contra su representado.

Observa la Sala que el presente recurso de casación laboral se interpone contra un auto dictado por el Tribunal Superior de Trabajo el 29 de agosto de 1995 que confirma el auto del Juzgado Tercero de Trabajo de la primera sección, en el cual se declara debidamente ejecutoriada la sentencia del Tribunal Superior de Trabajo de 23 de noviembre de 1994.

Los procesos de Ejecución de Sentencia se encuentran dentro del Capítulo IV del Título Séptimo del Libro Cuarto de Procedimiento del código de Trabajo, en el cual el artículo 899 dispone lo siguiente:

> "Contra las resoluciones dictadas en los procedimientos a que se refiere este capítulo sólo puede interponerse el recurso de apelación, sujeto a las condiciones previstas en este Código."

Este artículo es claro y señala que contra las resoluciones dictadas en los procedimientos de ejecución de sentencia, únicamente se puede interponer el recurso de apelación, por lo que, al no incluir otro recurso esta norma, se debe entender que excluye el recurso de casación laboral pretendido por el actor.

Por lo tanto, es evidente que el recurso de casación en este caso debe ser rechazado de plano de conformidad con lo dispuesto en el artículo 898 del Código de Trabajo, pues nos encontramos ante una resolución dictada en un proceso de ejecución, en el cual únicamente se admite el recurso de apelación.

En consecuencia, la Sala Tercera (LABORAL) de la Corte Suprema, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RECHAZA DE PLANO el recurso de casación presentado por el Licdo. César E. Díaz E., dentro del proceso laboral promovido por Eduardo A. Jiménez contra el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE).

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL INTERPUESTO POR EL LCDO. JORGE LUIS LOMBARDO, EN REPRESENTACIÓN DE MANUEL JORGE GAVRILIDIS, CONTRA LA SENTENCIA DE 26 DE OCTUBRE DE 1995, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: MANUEL JORGE GAVRILIDIS -VS- PENSIÓN MARÍA ISABEL Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (LABORAL).

VISTOS:

El licdo. Jorge Luis Lombardo ha presentado recurso de casación laboral contra la sentencia de 26 de octubre de 1995 dictada por el Tribunal Superior de Trabajo dentro del proceso laboral promovido por su representado, el señor Manuel Jorge Gavrilidis, contra la sociedad denominada María Isabel, S. A. (Pensión María Isabel) Pensión Rosita y Pensión Nacional.

Se trata de un proceso en el cual el demandante reclama prestaciones laborales no pagadas, tales como vacaciones, prima de antigüedad, domingos y días de fiesta nacional trabajados y no pagados y devolución de sumas descontadas y

no acreditadas. El juzgador de primera instancia condenó a la parte demandada al pago de B/.38,569.21 en concepto de vacaciones, décimo tercer mes y prima de antigüedad y el Tribunal Superior de Trabajo modificó la sentencia y condenó al solidariamente de la prima de antigüedad por la suma de B/.2,312.64 y absolvió de todas las demás prestaciones.

El presente recurso tiene como finalidad que la Sala Tercera case la resolución impugnada y revoque la parte que absuelve a las demandadas de pagar las vacaciones al recurrente.

Según el recurrente se han infringidos los artículos 735, 737 y 59 del Código de Trabajo.

Respecto a los cargos endilgados a los artículos 735 y 737 del Código de Trabajo, esta Corporación de Justicia en reiteradas ocasiones ha señalado que sólo procede su estudio cuando han sido formulados en relación con una norma de carácter sustancial o material que consagre un derecho a favor del trabajador.

En el presente recurso, los cargos endilgados a los artículos 735 y 737 del Código de Trabajo van acompañados de una infracción a una norma sustancial, cual es el artículo 59 del Código de Trabajo. Así señala el recurrente de la siguiente manera: "Al haber incurrido el Tribunal Superior de Trabajo en las dos omisiones anteriormente expuestas (artículos 735 y 737) ha privado con ello también al trabajador de disfrutar de un derecho adquirido tal como lo reconoció la Sentencia de primera instancia". Por lo tanto, considera esta Sala que debe entrar en el estudio de los cargos señalados a la sentencia impugnada.

Con respecto a la infracción al artículo 735 del Código de trabajo, el recurrente señala que ha sido violado directamente "por omisión por cuanto que las empresas demandadas alegaron a su favor la excepción de pago de las vacaciones ... ni las pruebas aportadas por la parte demandada, ni las pruebas pedidas de oficio por el Tribunal Superior de Trabajo son demostrativas de la excepción de pago". Agrega además que el pago tampoco constituye un hecho notorio ni está amparado por una presunción de derecho y por lo tanto, para que el Tribunal Superior de Trabajo declarara probada la excepción de pago, requería de alguna prueba, la cual no fue presentada.

Sobre la infracción al artículo 737 señaló lo siguiente:

> "El fallo impugnado entró a presumir el pago de todas las vacaciones sin que constara en autos prueba alguna que acreditara dicho pago en los tres últimos años de la relación laboral, es decir, 1990, 1989 y 1988. En consecuencia consideramos que el estudio a la infracción señalada se debe hacer respecto a este cargo."
> ...
> "Irónicamente en el presente caso ocurre todo lo contrario a lo que dice el Artículo 737, ordinal 8°, es decir, que sin que se haya demostrado el pago de la remuneración de vacaciones de los tres últimos años, el Tribunal ha presumido que están pagadas todas las anteriores."
> ...
> "En síntesis, si el fallo impugnado hubiese aplicado el artículo 737, ordinal 8° del Código de Trabajo en la presente controversia, no hubiese acogido la EXCEPCIÓN DE PAGO puesto que a falta de demostración del pago de vacaciones en el tiempo posterior quedaba vedada la presunción de pago del tiempo anterior"
>
> "Los cargos endilgadas a los artículos arriba citados se estudiarán conjuntamente por estar íntimamente relacionados entre sí, pues tratan de que no existe demostración del pago de la remuneración de las vacaciones."
>
> "No concordamos con la posición del recurrente, puesto que, en este caso, el Tribunal Superior de Trabajo, después de hacer un análisis mes a mes de la relación de trabajo durante los años de 1987, 1988,

> 1989, y 1990 (ver fojas 9 a 13 de la sentencia) entre el demandante y las demandadas, concluyó que no es muy cierto que "durante el término de existencia de la relación laboral no se reconoció ... el pago de vacaciones y décimo tercer mes".

Además de lo anterior, el Tribunal Superior de Trabajo consideró igualmente que los tres negocios demandados los administraba el recurrente y eran competidores entre ellos, deslealtad supuesta que fue tolerada durante once años, además de que en uno de ellos existe ánimo de dueño de parte del trabajador, la demanda no fue a título personal; que las declaraciones de los testigos están de acuerdo que toda la dirección y confección de la planilla era responsabilidad del señor Gavrilidis, y por ende, éste tenía la responsabilidad en cuanto al uso y goce de sus propias vacaciones, así como las pruebas del pago y disfrute de las mismas. También el Tribunal Superior de Trabajo consideró que, como consecuencia del fuego que consumió documentos de la empresa, no existen las pruebas del disfrute de las vacaciones y este hecho era conocido por el recurrente. También señaló que se aportó un cheque con fecha de 1987 como prueba del pago de las vacaciones en ese año.

Lo anteriormente expuesto nos lleva a la conclusión que el Tribunal Superior de Trabajo emitió su decisión en base a pruebas que reposan en el expediente, pruebas que fueron apreciadas según las reglas de la sana crítica y no como pretende hacer ver el recurrente que, a pesar de no existir prueba específica que demostrara el pago de las vacaciones, el Tribunal Superior de Trabajo emitió su decisión según la presunción que dispone el artículo 737 del Código de Trabajo.

En conclusión, sí fueron presentadas diferentes pruebas, tales como documentos, declaración de parte, testimonios de terceros, informes, indicios y otros elementos que llevaron a la formación y convicción del Tribunal Superior de Trabajo a emitir la sentencia aquí impugnada en base a las reglas de la sana crítica.

Cabe agregar, que en el presente recurso no se ventila la apreciación que le diera el juzgador a las pruebas, y en caso de ser así, se requeriría una demostración fehaciente de esta infracción a las reglas de la sana crítica y explicar en forma concreta cómo se violaron las reglas de la lógica o de la experiencia al evaluar una prueba documental u otra de las arriba mencionadas. Por esto, no prosperan los cargos aquí examinados, ni tampoco la infracción al artículo 59 por las razones anteriormente expuestas.

En consecuencia, la Sala Tercera (LABORAL) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 26 de octubre de 1995, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo dentro del proceso laboral entablado por MANUEL JORGE GAVRILIDIS P. contra MARÍA ISABEL, S. A. (PENSIÓN MARÍA ISABEL), PENSIÓN NACIONAL Y PENSIÓN ROSITA.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICDO. GUSTAVO ADOLFO RUSSO, EN REPRESENTACIÓN DE MANUEL DE JESÚS QUINTERO CONTRA LA SENTENCIA DE 31 DE OCTUBRE DE 1995, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: ALFREDO CASTILLO -VS- MANUEL DE JESÚS QUINTERO Y/O FINCA SANTA CRUZ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (LABORAL).

VISTOS:

El licdo. Gustavo Adolfo Russo Ross, actuando en representación de Manuel de Jesús Quintero y/o Finca Santa Cruz, S. A., ha presentado recurso de casación laboral contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Trabajo de fecha 31 de octubre de 1995, dentro del proceso promovido por Alfredo Castillo contra su representado.

En el recurso se pide a la Sala que case la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Trabajo, de fecha 28 de diciembre de 1994, y que a su vez declare justificado el despido y por lo tanto absuelva a la empresa de la demanda impetrada en su contra.

El abogado de la parte contraria se opuso al presente recurso por considerarlo improcedente.

Observa la Sala que estamos en presencia de una demanda que se origina como consecuencia de un despido injustificado, las cuales, según dispone el artículo 218 del Código de Trabajo, se interponen ante las Juntas de Conciliación y Decisión o donde no funcionen éstas, en los Tribunales de Trabajo.

En reiteradas ocasiones, la Sala Tercera ha señalado que las demandas que se inicien en las Juntas de Conciliación y Decisión no admiten ulterior recurso y que la sentencia del Tribunal Superior de Trabajo es definitiva.

Sin embargo, por no funcionar una Junta en el área, la demanda se interpuso en el Tribunal de Trabajo de la Quinta Sección. Corresponde entonces sí la Sala Tercera debe admitir o no el presente recurso por no haberse iniciado la demanda ante el tribunal citado, por no existir una Junta de Conciliación y Decisión en el área, veamos.

El artículo 8 de la Ley 1 de 1986 permite apelar ante el Tribunal Superior de Trabajo contra las sentencias de las Juntas de Conciliación y decisión que excedan de dos balboas (B/.2,000.00), "o cuando el monto de las prestaciones e indemnizaciones que se deban pagar en sustitución del reintegro, incluyendo los salarios vencidos, exceda de dicha suma".

Encontramos entonces que, adicional al artículo 914 del Código de Trabajo, son dos los casos previstos en el artículo 8 de la ley 1 de 1986 que permite apelar las resoluciones de primera instancia, a) contra las sentencias de las Juntas y b) cuando el monto que se deba pagar en sustitución del reintegro exceda de dos mil balboas (B/.2,000.00).

De los dos casos señalados, ya vimos que no estamos ante una sentencia de las Juntas de Conciliación y Decisión a pesar de que el presente negocio es competencia de ellas. En cuanto al segundo caso, debemos ver si la presente demanda allí se enmarca.

Para saber cuándo estamos ante una sustitución del reintegro, nos debemos dirigir al artículo 219 del Código de Trabajo, el cual señala "la Junta o el Juez correspondiente podrá ordenar, de oficio o a solicitud del empleador, en sustitución del reintegro solicitado, que se pague la indemnización con un recargo del 25%".

En el presente caso, el trabajador solicitó al Tribunal de primera instancia que la empresa fuera condenada a reintegrarlo, y así resolvió el juzgador. Por lo que, en caso de que el empleador opte en sustitución del reintegro, el pago como señala el artículo 219 del Código de Trabajo, y siendo la suma a pagar mayor de dos mil Balboas (B/.2,000.00), el presente negocio es recurrible ante el Tribunal Superior de Trabajo y se enmarcaría dentro de lo que dispone el artículo 8° de la Ley 1 de 1986.

Si bien, la Ley 8ª de 1986 permite apelar ante el Tribunal Superior de Trabajo las decisiones de las Juntas de Conciliación y Decisión y los casos en que la suma apagar en sustitución del reintegro sea mayor de dos mil balboas,

encontramos que el Parágrafo del mismo artículo dispone lo siguiente:

> "Las Decisiones del Tribunal Superior de Trabajo en los casos previstos en la presente disposición tienen carácter definitivo, no admiten ulterior recurso y producen efecto de cosa juzgada" Este parágrafo es claro y no admite discusión, y al no distinguir a qué recurso se refiere esta norma, se debe entender que incluye el recurso de casación laboral pretendido por el actor.

En mérito de lo anteriormente señalado, es evidente que se debe declarar improcedente el recurso de casación,de conformidad al articulo 8 de la Ley 1 de 17 de marzo de 1986. Pues nos encontramos ante una sentencia que resuelve un conflicto en el cual el monto de las prestaciones e indemnizaciones, más los salarios caídos que se deba pagaren sustitución del reintegro es mayor de dos mil balboas,resolución que una vez apelada y resuelta por el Tribunal Superior de Trabajo, tiene carácter definitivo, no admite ulterior recurso y produce efecto de cosa juzgada.

En consecuencia, la Sala Tercera (LABORAL) de la Corte Suprema, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RECHAZA DE PLANO el recurso de casación presentado por el Licdo. Gustavo Adolfo Russo Ros, dentro del proceso laboral promovido por ALFREDO CASTILLO contra MANUEL DE JESÚS QUINTERO Y/O FINCA SANTA CRUZ.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL DOCTOR CARLOS DEL CID, EN REPRESENTACIÓN DE FERMÍN ALBERTO LARA, CONTRA LA SENTENCIA DE 2 DE JUNIO DE 1995, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: FERMÍN ALBERTO LARA -VS- CARINTHIA, S. A. (FINCA FLORENTINA). MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA-LABORAL.

VISTOS:

El doctor Carlos Del Cid, en representación de Fermín Alberto Lara, interpuso recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Trabajo fechada el 2 de junio de 1995, mediante la cual modificó la sentencia N° 1 de 4 de enero de 1995, dictada por el Juzgado Tercero de Trabajo de la Tercera Sección dentro del proceso laboral FERMÍN ALBERTO LARA -vs- CARINTHIA, S. A. (FINCA FLORENTINA); condenó a la empresa a pagar a favor del trabajador la suma de B/.3,464.56, desglosados de la siguiente manera: B/.2,979.46 en concepto de 22 semanas de prima de antigüedad, B/.485.10 en concepto de vacaciones proporcionales, y B/.500.00 de los emolumentos de la perito; absolvió a la empresa del pago de las demás prestaciones reclamadas; y señaló las costas en el 15% del total de la condena, para ambas instancias.

En el referido proceso laboral, la parte actora pretende que se condene a Carinthia, S. A., a pagarle la suma de B/.11,544.80 en concepto de prima de antigüedad, comisiones dejadas de pagar, diferencia de vacaciones y partidas del décimo tercer mes mal pagadas, salarios dejados de pagar, vacaciones, décimo tercer mes y descuentos ilegales, más costas y gastos del juicio con motivo de la renuncia justificada del trabajador por la disminución de su salario y funciones, y por la omisión en el cálculo de las comisiones anuales para efectos del pago de las vacaciones y décimo tercer mes.

El juez de primera instancia, al resolver favorablemente la solicitud del demandante, señaló que el informe presentado por la perito Felícita de Rojas, basado en los libros y documentos de Carinthia, S. A., acreditó que el trabajador inició labores en Finca Florentina en abril de 1968, sin contrato escrito de trabajo, en el cargo de administrador hasta el 4 de marzo de 1991, con salario de B/.555.00 mensuales, más B/.1,000.00 anuales de comisión por venta de café, las cuales no se le pagaron a partir de 1987.

Según el juez a-quo, consta en dicho informe que el 3 de junio de 1987 la empresa prestó al trabajador B/.4,000.00 mediante el cheque N° A7372, préstamo que sería pagado con descuentos mensuales de B/.100.00 y con el dinero de dos comisiones de café de los años de 1987 y 1988, sin que exista constancia del pago de estas en los respectivos períodos, ni de que se imputaran al pago del préstamo; consta también que el detalle mensual del salario del demandante no señala qué es salario ordinario, extraordinario y comisión, sino que los certificados reportan estas sumas como salario ordinario, sin considerarse para el cálculo del décimo tercer mes y el pago de las cuotas obrero patronales; a juicio de este juzgador consta además, que la empresa descontó del salario de la primera y segunda quincena de octubre de 1990, los días 16, 18, 23, 25 y 30, y de la primera y segunda de diciembre de 1990, los días 7 y 11, en los cuales el trabajador no concurrió a sus labores, a pesar de que su inasistencia estaba debidamente justificada por certificaciones de la autoridad de Trabajo.

A juicio del tribunal de primera instancia también quedó acreditado que el trabajador sí tenía vacaciones vencidas, ya que las últimas pagadas fueron por B/.507.82, según el cheque N° 571 y el talonario de la Caja de Seguro Social del 10 de junio de 1992, las correspondientes al 1 de marzo de 1989 hasta abril de 1990; que en virtud de certificación de la Caja de Seguro Social consta el pago de la partida del décimo tercer mes de abril de 1991, y también consta que en el año de 1988 la empresa estableció la práctica irregular de hacer un sólo cheque a nombre de la trabajadora Oglenis de Gómez, incluyendo los salarios de Fermín A. Lara, Oglenis de Gómez y Paredes Sanjur, en ese detalle se establece que correspondía al 70% de la planilla quincenal, por lo que la empresa redujo el salario del trabajador y dejó de pagarle una parte en los meses de junio, julio y agosto de 1988, aceptando este hecho en el acta de comparecencia de 14 de enero de 1991 y comprometiéndose a efectuar el ajuste de los meses indicados, sin que conste que haya cumplido.

La sentencia de primera instancia indicó que el trabajador laboró continuamente en la empresa por más de 10 años, y no consta que al finalizar la relación laboral hubiese recibido el pago del derecho establecido en el artículo 224 del Código de Trabajo (fs. 205 a 206 del expediente del proceso laboral).

El Juez a-quo condenó a Carinthia, S. A. al pago de B/.11,129.03 en concepto de prestaciones laborales demandadas correspondientes a B/.4,000.00 por comisiones dejadas de pagar, B/.482.41 de vacaciones proporcionales del 1 de junio de 1990 a marzo de 1991, B/.504.41 de salarios dejados de pagar por desmejoramiento salarial en los meses de junio, julio y agosto de 1988, B/.157.12 de deducciones ilegales por ausencias justificadas, B/.2,499.90 de vacaciones y décimo tercer mes dejados de pagar por no tomar en cuenta las comisiones anuales y B/.3,485.19 de Prima de Antigüedad.

Posteriormente el Tribunal Superior de Trabajo resolvió el recurso de apelación presentado por la parte demandada y modificó la decisión de primera instancia, en los términos expresados con fundamento en las siguientes razones:

> "Las pruebas documentales presentadas por el demandante visibles a fojas 110 a 125, en su gran mayoría copias sin autenticar, no permiten establecer que efectivamente (sic) que las partes en el proceso adicionalmente al pago del salario hubieran convenido el pago de comisiones.
> ...
> A juicio de esta Superioridad, el dictamen pericial rendido por la Lic. Felícita B. de Rojas, no permite establecer que efectivamente durante los años 1987 a 1991 el trabajador hubiera generado

> comisiones y que las mismas no hubieran sido pagadas por la empresa, ya que no basta que al trabajador se le hubieran pagado comisiones con anterioridad, sino que debe establecerse de dónde provienen las generadas en los años posteriores.
> ...
> Este Tribunal debe señalar que la justificación de las ausencias por parte del trabajador no obliga a la empresa a pagar el tiempo no trabajado, sino que establece que el trabajador se ausentó por causa justa y dicha ausencia no debe tomarse en consideración para tomar medidas disciplinarias contra él. ... En consecuencia no podemos considerar tales descuentos como ilegales.
> ...
> Por otro lado de acuerdo con la Certificación expedida por la Caja de Seguro Social, durante los meses de junio recibió un salario de B/.978.95, B/.309.62 y B/.427.02, lo cual no es extraño si observamos que a lo largo de los años el salario del trabajador ha fluctuado." (Fs. 5 y 6 del proceso laboral).

El casacionista estima que la decisión del Tribunal Superior de Trabajo, viola los artículos 69, 197, 214, 223, 224, 535 y 225 del Código de Trabajo.

En cuanto a la violación del artículo 69 del Código de Trabajo, considera que se produjo en forma directa porque correspondía al Tribunal Superior de Trabajo aplicarlo en virtud de que la diligencia pericial comprobó que no existía contrato de trabajo escrito. Señala que por el contrario, en vez de presumir ciertos los hechos y circunstancias alegados por el trabajador en cuanto al salario base mensual de B/.555.00 y las comisiones anuales de B/.1,000.00, asumió que existía contrato escrito y dedujo consecuencias favorables para la empresa, en detrimento del derecho del trabajador a recibir más dinero en concepto de vacaciones y décimo tercer mes.

Manifiesta el representante judicial del trabajador que la sentencia del Tribunal Superior de Trabajo violó en forma directa, por falta de aplicación, el artículo 197 del Código de Trabajo, porque en el proceso laboral se probó que la empresa modificó unilateralmente las condiciones de trabajo del demandante al quitarle la llave de la casa en la que se hospedaba cerca del área de trabajo, al expedir un sólo cheque para el pago de la planilla quincenal en la que se le redujo el salario mensual, al quitarle las comisiones anuales y restarle funciones propias de un administrador; lo cual llevó al trabajador a finalizar la relación de trabajo por justa causa o por despido indirecto, por lo que la empresa debía pagar la indemnización por servicios continuos durante 22 años de servicios prestados.

Considera el recurrente que se violó el artículo 214 del Código de Trabajo en forma directa, por falta de aplicación, ya que en vez de notificarle al trabajador por escrito la fecha y causas de la terminación de la relación de trabajo, le quitó la llave de la casa que le había suministrado para que se hospedara y estuviera cerca del área de trabajo, le eliminó las comisiones anuales por volumen de ventas de café, le rebajó su salario mensual al expedir un sólo cheque para el pago de toda la planilla quincenal; por lo cual la empresa despidió indirectamente al trabajador, con la obligación de pagar todas sus prestaciones laborales computadas con base en la historia laboral acreditada en las planillas de la Caja de Seguro Social y en los cheques pagados por la empresa.

Expresa el casacionista que se violó en forma directa, por falta de aplicación, los numerales 1, 3, 8, y 12 del artículo 223 del Código de Trabajo, porque el trabajador sufrió engaño de la empresa cuando le modificó sus condiciones de trabajo unilateralmente sin aviso previo ni comunicación escrita, al quitarle la llave de la casa sin considerar las largas distancias bajo las inclemencias del tiempo que debía atravesar para llegar a su trabajo con el riesgo de contraer enfermedades y la consiguiente inseguridad para su integridad física; al expedir un sólo cheque para el pago de la planilla quincenal, quitarle las comisiones anuales y no pagarle puntualmente los días de ausencia justificadas, vacaciones y décimo tercer mes proporcionales a que tiene derecho,

además de no cumplir con el pago de todas las prestaciones laborales a que tiene derecho el trabajador, a pesar de que las exigió constantemente a través de citaciones al Ministerio de Trabajo y Bienestar Social.

El recurrente estima que el artículo 224 del Código Laboral ha sido violado por la sentencia de segunda instancia, por indebida aplicación, ya que en la misma se admitió que el trabajador tiene derecho al pago de la prima de antigüedad ajustado a 22 semanas, pero sin considerar los pagos por comisiones anuales de B/.1,000.00, que por ley forman parte del salario normal del trabajador, calculándola en B/.2,979.46, cuando en realidad correspondía a B/.3,485.19.

Considera también que se violó de manera directa, por inobservancia, el artículo 535 del Código de Trabajo, el cual permite al juez condenar por pretensiones distintas de las pedidas, cuando se trate de salario mínimo, salario básico, vacaciones, declaraciones o condenas sustitutivas que según la ley, correspondan por las expresamente pedidas en la demanda, siempre que los hechos o declaraciones se hayan discutido y estén probados en el proceso. En el concepto del demandante, sí quedó debidamente debatido y comprobado que los hechos y circunstancias alegados por el trabajador le dan derecho a terminar la relación laboral por causas imputables a la empresa, y a pesar de ello no se le reconoció las prestaciones que debe recibir por esta causa.

Finalmente, el casacionista considera que se ha violado, de manera directa por falta de aplicación, el artículo 225 del Código de Trabajo, porque el juez de segunda instancia, al inobservar el principio jurídico de ultrapetita, no reconoció al trabajador la indemnización correspondiente al período anterior a la vigencia del Código de 1972 y posterior a este Código.

Esta Sala de Casación Laboral desestima los cargos de violación de los artículos 197, 214, 223, 225 y 535 del Código de Trabajo, porque la renuncia justificada y la indemnización a la que tiene derecho el trabajador no es asunto controvertido en este proceso laboral, sino que ha sido objeto de un proceso ante la Junta de Conciliación y Decisión N° 10 con sede en David, Chiriquí, dentro del cual dictó la Sentencia N° 33 de 31 de diciembre de 1991, en la cual condenó a Carinthia, S. A. (Finca Florentina), al pago de B/.7,108.11 en concepto de indemnización por renuncia justificada.

El casacionista alega que el fallo impugnado viola el artículo 69 del Código de Trabajo, norma jurídica de carácter procesal que contiene una presunción iuris tantum que obliga al juzgador, ante la ausencia de contrato escrito de trabajo, a tener como ciertos los hechos y circunstancias alegados por el trabajador que debían constar en dicho contrato.

La Sala ha expresado que, como regla general, no pueden invocarse en recursos de casación laboral normas de procedimiento, pero que, si alguna de estas normas incide directamente en el derecho sustancial, puede ser invocada en el recurso de casación laboral. En el negocio en estudio no se da este supuesto porque el demandado reconoció que pagaba comisiones al demandante (Cfr. foja 192), y fue con base en este hecho y otras razones que esa prestación le fue negada en segunda instancia. Por tanto, este cargo no prospera.

El cargo de violación del artículo 224 del Código de Trabajo por la sentencia de 2 de junio de 1995, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo, no prospera porque en dicho fallo se condena a pagar la prima de antigüedad al trabajador, y si las comisiones por la venta de café no fueron tomadas en cuenta es porque el tribunal ad-quem no consideró que debían pagarse como parte del salario. Como al recurrir ante esta Sala el casacionista no invoca como violada por la sentencia de segunda instancia **ninguna norma sustantiva relativa a la obligación del empleador de pagar las comisiones reclamadas** la Sala no puede pronunciarse sobre ese punto, decisión que necesariamente debía anteceder al examen del cargo de violación del artículo 224 del Código de Trabajo.

Por consiguiente, la Sala Tercera de lo Laboral de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la

ley, NO CASA la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Trabajo el 2 de junio de 1995, dentro del proceso laboral interpuesto por FERMÍN ALBERTO LARA -vs- CARINTHIA, S. A. (FINCA FLORENTINA).

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTA POR EL LCDO. NELSON CARREYÓ, EN REPRESENTACIÓN DE JOSÉ MORENO, CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 9 DE OCTUBRE DE 1995, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: JOSÉ MORENO VS SISTEMAS DE INYECCIÓN, S. A. Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (LABORAL).

VISTOS:

El Lcdo. Nelson Carreyó, actuando en representación de JOSÉ MORENO, ha presentado recurso de casación laboral contra la sentencia de 9 de octubre de 1995, emitida por el Tribunal Superior de Trabajo, dentro del proceso laboral promovido por su representado contra SISTEMA DE INYECCIÓN Y OTROS.

Encontrándose el negocio en estado de decidir, la Sala observa que se ha presentado escrito de desistimiento por lo que procede a determinar su admisibilidad.

En virtud de que el apoderado judica lo anterior, y, dado que el artículo 66 de la Ley 135 de 1943, señala que se puede desistir en cualquier estado del proceso siempre que medie facultad expresa para ello, procede la Sala a no admitir el desistimiento interpuesto.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el desistimiento presentado por el Lcdo. Nelson Carreyó, en representación de JOSÉ MORENO, contra la sentencia de 9 de octubre de 1995, emitida por el Tribunal Superior de Trabajo, dentro del Proceso Laboral: JOSÉ MORENO -vs- SISTEMA DE INYECCIÓN, S. A. y otros.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LCDO. PABLO R. HERNÁNDEZ LASSO, EN REPRESENTACIÓN DE GLORIA JANFAN, CONTRA LA SENTENCIA DE 15 DE DICIEMBRE DE 1995, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: GLORIA JANFAN VS MAXIM S ZONA LIBRE, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (LABORAL).

VISTOS:

El licenciado Pablo R. Hernández, actuando en nombre y representación de la sra. Gloria Janfan, ha presentado recurso de casación laboral contra la

sentencia de 15 de diciembre de 1995 dictada por el Tribunal Superior de Trabajo dentro del proceso laboral promovido por su representada contra Maxim s Zona Libre, S. A.

Se trata de un proceso laboral en el cual el demandante solicita sea declarada nula la carta de renuncia por ella presentada a la empresa demandada y por lo tanto se condene al demandado a reintegrarla a sus labores habituales con el respectivo pago de los salarios caídos hasta que se haga efectivo el reintegro solicitado.

En el recurso se señalan infringido el artículo 1° del Decreto Ejecutivo N° 14 de 1990.

Advierte la Sala que en cuanto a la infracción del artículo citado, el recurrente señala ha sido violado por falta de aplicación pues el Tribunal Superior de Trabajo, en el fallo impugnado, para nada ha considerado la prueba testimonial ni las declaraciones de las testigos y del propio Representante Legal y añade "Sin embargo se limita a reproducir las mismas motivaciones del juez de la instancia".

Referente al cargo endilgado, si bien la Sala ha dicho en reiteradas ocasiones que el recurso de casación en materia laboral no es una tercera instancia y que sólo procede para corregir errores "in iudicando" en que haya incurrido el Tribunal Superior de Trabajo, igualmente ha señalado que en cuanto a la evaluación de las pruebas si fue errónea, debe demostrarse de que manera y en qué forma incide directa y determinante en infracciones a normas sustanciales o materiales.

Veamos lo que motivó el fallo impugnado por parte del Tribunal Superior de trabajo, el cual es del tenor siguiente:

> "Lo que está claro para el Tribunal, y en esta forma lo analizó el Juez primario, es que la trabajadora renunció para evitar un despido deshonroso. Las reacciones y el comportamiento así lo determina, a mas de que tenía oportunidad , en el Ministerio de Trabajo, exponer sobre la supuesta amenaza.
>
> Consideramos que el Juez ponderó de manera adecuada las pruebas presentadas, por tanto, debemos confirmar la Sentencia por compartir la opinión de que la demandante GLORIA JANFAN no logró probar, fehacientemente, que le asistiera el derecho."

No concordamos con el recurrente pues, como hemos visto, el Tribunal Superior de Trabajo sÍ valoró las pruebas como lo indica al corroborar la valoración qué le diera el juez de primera instancia a las pruebas.

Por otro lado, el recurrente no señaló de que manera las pruebas supuestamente no valoradas, -las declaraciones de los testigos y del representante legal- evidenciaban la presión o amenaza por parte de la empresa hacia el trabajador para que presentara la renuncia y de esta manera demostrar que la falta de valoración a las pruebas aducidas influían directamente en la aplicación de las normas sustanciales o materiales del derecho laboral.

Por lo anteriormente expuesto consideramos que se debe negar el presente recurso.

En consecuencia, la Sala Tercera (LABORAL), de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA el recurso de casación laboral presentado por el licenciado Pablo Hernández L. contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Trabajo el 15 de diciembre de 1995 dentro del proceso laboral entablado por GLORIA JANFAN contra MAXIM S ZONA LIBRE.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA

(fdo.) JANINA SMALL

Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES

ENERO 1996

EJECUCIÓN DE SENTENCIA EXTRANJERA

EUGENIO ALEJANDRO ANTHINEY FERRER O EUGENIO ALEJANDRO ANTHONY FERRER, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE DIVORCIO PROFERIDO POR EL TRIBUNAL MUNICIPAL POPULAR DE LA HABANA, CUBA, EN VIRTUD DE LA CUAL SE DISOLVIÓ EL MATRIMONIO QUE LO UNÍA CON LOURDES CARIDAD PRIETO VALDÉS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, OCHO (8) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

EUGENIO ALEJANDRO ANTHINEY FERRER o EUGENIO ALEJANDRO ANTHONY FERRER, solicita se declare ejecutable en Panamá, la sentencia proferida por el Tribunal Municipal Popular de la Habana, Cuba, mediante la cual se disuelve el vínculo matrimonial que lo unía con la señora LOURDES CARIDAD PRIETO VALDEZ.

De acuerdo con el numeral 2 del artículo 101 de nuestro Código de Procedimiento, corresponde a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, examinar y declarar si las resoluciones judiciales pronunciadas por Tribunales extranjeros pueden ser ejecutadas en nuestro país.

De acuerdo al trámite para estos negocios, se corrió traslado al Señor Procurador General de la Nación, para que emitiera concepto, quién a través de la Vista N° 43 de 11 de diciembre de 1995 consideró lo siguiente:

> "El estudio de la documentación aportada por el recurrente pone de manifiesto que la presente solicitud de reconocimiento y ejecución de sentencia extranjera adolece de uno de los requisitos necesarios para que pueda ser reconocida en nuestro país una sentencia proveniente de tribunal extranjero. Dichos requisitos están señalados en el artículo 1409 del Código Judicial. Nos referimos al numeral 4 del artículo en mención, el cual establece textualmente, como requerimiento de procedibilidad, "que la copia de la sentencia sea auténtica." Y señala a continuación que "se entiende por sentencia la decisión que decide la pretensión". (El subrayado es nuestro)."
>
> "A foja 5 del expediente, se observa que aparece un documento denominado "certificación de sentencia de divorcio" el cual únicamente certifica que contra la sentencia que decretó el divorcio no cabe recurso alguno. Además, certifica el reconocimiento de la patria potestad de los hijos a ambos padres, el acuerdo de visitas y la división de la comunidad de bienes". (Cfr. f. 5).
>
> "La aludida exigencia procesal del artículo 1409 del Código Judicial es fundamental ya que, el procedimiento de exequátur tiene entre sus presupuestos fundamentales otro requisito: "que la sentencia no haya sido dictada en rebeldía, es decir, "que la demanda haya sido personalmente notificada al demandado dentro del tribunal de la causa". (Cfr. artículo 1409 del Código Judicial, numeral 2). Resulta evidente para la comprobación de este último requisito la necesidad que se aporte la sentencia que se pretende reconocer y ejecutar en Panamá; y no una simple certificación sobre la existencia de dicha sentencia, de la cual no es posible verificar el mencionado aspecto procesal".
>
> "Como corolario de los anteriores razonamientos, esta Procuraduría considera que debe concedérsele al peticionario el término judicial señalado por la Ley, con el fin que pueda subsanar la omisión que dejamos puntualizada; aportando copia de la sentencia que decidió el referido proceso de divorcio".

Devuelto el negocio al Despacho del Magistrado Sustanciador se procede a resolver, previas las siguientes consideraciones:

La Sala al ponderar, la documentación aportada por la parte interesada con la opinión vertida por el señor Procurador en su Vista Fiscal, coincide con este último en el sentido que la solicitud presentada por la parte interesada en la que se gestiona la ejecución de la sentencia proferida por el Tribunal Municipal Popular de la Habana, Cuba, sea reconocida y ejecutada en Panamá, no debe ser declarada ejecutable en virtud que la misma no reúne los requisitos formales y procedimentales exigidos por nuestra ley positiva y adjetiva aplicable a estos expedientes, como lo es el Código Judicial en los artículos 1409 y concordantes.

Esta Superioridad sustenta lo esgrimido en líneas anteriores de acuerdo a las siguientes apreciaciones: Que aún cuando la sentencia aportada como prueba por la parte interesada, está debidamente autenticada tanto por la autoridad que la emitió, así como por la autoridad consular panameña acreditada en el territorio de la República Cubana, la misma no presenta la diligencia de notificación de la parte demandada, requisito éste, que es imprescindible para que se declare ejecutable en Panamá una sentencia extranjera, en virtud que dicha omisión establece diáfanamente que el proceso se ha llevado a cabo en rebeldía, y esta situación atenta contra la naturaleza jurídica de la figura del exequátur.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador, en SALA UNITARIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONCEDE al peticionario, el término de cuarenta y cinco (45) días para que subsane la omisión señalada, al tenor de las disposiciones procesales vigentes sobre esta materia.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

FRANCISCO ANTONIO ROZAS ARISTY, SOLICITA LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EXTRANJERA DICTADA EN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN. DISTRITO NACIONAL, CAPITAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, QUINCE (15) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

FRANCISCO ANTONIO ROZAS ARISTY, mediante apoderado especial, solicita a la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, el reconocimiento y ejecución de la sentencia de divorcio dictada en la Cámara de lo Civil, Comercio y del Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito judicial de San Cristóbal mediante la cual se disuelve el vínculo matrimonial entre el peticionario y la señora ADELA JOAQUINA NICOSIA ARANGO.

El apoderado especial del peticionario, Licenciado Ernesto Castillo Almengor, fundamentó su solicitud entre otras cosas en los siguientes hechos:

> "**Primero**: Que los señores FRANCISCO ANTONIO ROZAS ARISTY y ADELA JOAQUINA NICOSIA ARANGO, CONTRAJERON MATRIMONIO EL 7 DE DICIEMBRE DE 1968, ocurrió en España, según Certificado de matrimonio expedida por la Dirección General del Registro Civil.
>
> **Segundo**: Que mi representado como la señora ADELA JOAQUINA NICOSIA ARANGO, inscribieron su matrimonio en Panamá, el Registro Civil y se encuentra inscrito a Tomo N° 4 de Matrimonios en el extranjero, asiento 692, tal como consta en el Certificado de Matrimonio.
>
> **Tercero**: Que según Sentencia Civil N° 647, de la Cámara de lo Civil, Comercial y del Trabajo del Juzgado de primera instancia del Distrito Judicial de San Cristóbal, se admita el divorcio entre los

cónyuges FRANCISCO ANTONIO ROZAS ARISTY Y ADELA JOAQUINA NICOSIA ARANGO, se ordena la notificación de la presente sentencia de 3 fojas útiles y vueltas debidamente autenticada y legalizada, tanto en la República Dominicana como en la República de Panamá.

Cuarto: Que según sentencia Civil N° 647, de la Cámara de lo Civil, Comercial y del Trabajo del Juzgado de Primera instancia del distrito judicial de San Cristóbal, se admite el divorcio entre los cónyuges FRANCISCO ANTONIO ROZAS ARISTY Y ADELA JOAQUINA NICOSIA ARANGO, se ordena la notificación de la presente sentencia constante de 3 fojas útiles y vueltas debidamente autenticada y legalizada, tanto en la República dominicana como en la República de Panamá.

Quinto: El día 1° de junio de 1994, según de 1994, según el acta N° 70-94, se notifica la sentencia de divorcio de la señora ADELA JOAQUINA NICOSIA ARANGO, constante de 3 fojas útiles y vueltas debidamente autenticadas y legalizadas, tanto en la república Dominicana como en Panamá.

Sexto: El día 11 de noviembre de 1994, se certificó ante la Oficina del Estado Civil del Municipio del Pronunciamiento de Divorcio, decretado entre los esposos FRANCISCO ANTONIO ROZAS ARISTY y la señora ADELA JOAQUINA NICOSIA ARANGO, Inscrito en el libro de Registro de Divorcio N° 76, Folios del 195 al 196, bajo el Acta N° 6390, según sentencia 647 del 30 de mayo de 1994, dictado por el Magistrado Juez de Primera Instancia Judicial, constante de 1 foja y vuelta útil debidamente autenticado en la República Dominicana y en Panamá.

SÉPTIMO: Que ésta sentencia pronunciada por Tribunales Extranjeros ha sido dictada a consecuencia del ejercicio de una pretensión personal y ha sido notificada a la demandada dentro de la jurisdicción el tribunal de la causa, obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido esa lícita en Panamá, por la cual pedimos el reconocimiento y ejecución de la Sentencia Extranjera."

El apoderado presentó como prueba el certificado de Matrimonio donde consta el vínculo matrimonial entre el peticionario y la señora Adela Nicosia Arango, copia autenticada de la certificación donde aparece inscrito el Divorcio entre las partes.

Admitida la solicitud presentada ante esta Corporación, se corrió traslado al señor Procurador General de la Nación, quien en su vista N° 23 de 3 de agosto de 1995 señala que sentencia en estudio ha cumplido con los requisitos con respecto a que la misma fue dictada a consecuencia del ejercicio de una pretensión personal. Sin embargo, con respecto al ordinal segundo del artículo 1409 del Código Judicial, se presenta la figura de la rebeldía, en virtud que dentro de los documentos aportados no se presenta la diligencia de notificación de la parte demandada, requisito imprescindible para declarar el reconocimiento y ejecución de una sentencia extranjera.

Ante la omisión señalada se le otorgó al peticionario el término extraordinario de 45 días para aportar la prueba requerida.

El día 11 de octubre del año en curso el apoderado judicial presentó dentro del término otorgado por la Sala, un documento denominado "ratificación de la notificación de sentencia de divorcio", proferida por un Alguacil Ordinario del Juzgado de Paz Especial de Tránsito en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, visible de fojas 29 a 33 del cuadernillo.

Se corrió nuevamente traslado al Procurador General de la Nación, quien en esta ocasión mediante la Vista N° 42 de 5 de diciembre de 1995, emitió el siguiente concepto:

"... Esta Procuraduría, considera que las pruebas aportadas en esta

> oportunidad al expediente no subsanan la omisión procesal que impide el reconocimiento y ejecución de esta sentencia ya que, dichos elementos probatorios demuestran que la demanda no fue notificada, personalmente, a la demandada, tal como exige nuestra legislación procesal en materia de exequátur.
>
> Nuestro señalamiento se hace más evidente, al apreciar el documento del tribunal dominicano denominado "RATIFICACIÓN NOTIFICACIÓN SENTENCIA DIVORCIO".

Dicho documento es transcrito textualmente por la Procuraduría y sobre el cual el señor Procurador se manifiesta en los siguientes términos:

> "Se observa de manera diáfana, que en el acto del funcionario judicial dominicano se actuó conforme a la legislación procesal de ese país, la cual permite notificar por edicto, tanto la demanda como la sentencia, en un determinado número de oficinas públicas cuando por ausencia del demandado no puedan ser notificadas dichas resoluciones personalmente. En el caso que nos ocupa, ambas resoluciones, la demanda y la sentencia, fueron notificadas mediante este procedimiento y en el último acto del alguacil de aquel país se evidencia que el demandante tenía conocimiento que la parte demandada residía en la Ciudad de Panamá.
>
> En consecuencia, el proceso fue dictado en rebeldía y tal omisión, luego de proferida la sentencia, es insubsanable e impide conceder el exequátur; al no proporcionarle el tribunal de la causa a la demanda el derecho de defensa, elemento cosustancial del debido proceso legal. Nuestra ley sólo permite el reconocimiento y ejecución de una sentencia extranjera dictada en rebeldía cuando el propio demandado rebelde también solicite su ejecución de una sentencia extranjera dictada en rebeldía cuando el propio demandado rebelde también solicite su ejecución en nuestro país.
>
> Además de ello, llama poderosamente la atención a este despacho que habiéndose celebrado el matrimonio del señor ROZAS y la señora NICOSIA en España e inscrito en nuestro país, el recurrente acuda a presentar la demanda de divorcio en la República Dominicana cuando ambos cónyuges residen en Panamá, según se desprende de la documentación extranjera aportada.
>
> Por las razones que anteceden, solicitamos que no se acceda a la petición de reconocimiento y ejecución de la sentencia objeto de este exequátur, pues, al participar únicamente el demandante en la solicitud de exequátur y haberse dictado la resolución en rebeldía, se ocasiona el desconocimiento de nuestro ordenamiento procesal en esta materia".

De esta manera, la Sala al analizar la opinión vertida por el señor Procurador General de la Nación en cuanto a la de la sentencia que ahora nos ocupa, coincide plenamente con la misma, una vez que al observar detalladamente cada una de las piezas procesales y sustantivas que obran en el expediente y que se aportan como caudal probatorio de tal petitum, se comprueba con claridad meridiana que el documento aportado por el apoderado del peticionario no cumple con lo dispuesto en el artículo 1409, ordinal 2 del Código Judicial.

La figura de la rebeldía se entiende para los efectos del artículo citado, el caso en que la demanda no haya sido personalmente notificada al demandado, dentro de la jurisdicción del Tribunal de la causa.

Es oportuno señalar que el anterior precepto legal postula la defensa de la persona involucrada en el proceso de divorcio con las máximas garantías de imparcialidad. Del estudio del expediente se observa que en ningún momento la parte demandada tuvo domicilio en la República Dominicana, ni siquiera al momento de iniciar el proceso de divorcio. A foja 29 se comprueba que el demandante tenía

conocimiento que la demandada residía en la República de Panamá.

La diligencia realizada por el alguacil dominicano no subsanó la rebeldía a que alude la resolución de esta Sala de fecha 18 de agosto de 1995, máxime porque ambas resoluciones, tanto la demanda como la propia sentencia fueron notificadas mediante edicto y aún cuanto este procedimiento está previsto por el Código Civil Dominicano, la legislación panameña contempla la notificación personal a la parte demandada y no al consulado General de la República de Panamá, la Secretaría de Relaciones exteriores y demás oficinas gubernamentales dominicanas pues se produce la total indefensión.

De conformidad con lo anterior, la Sala de Negocios Generales no está obligada a ejecutar una sentencia extranjera que condena al cumplimiento de una obligación que no cumplió con uno de los requisitos mínimos establecidos para homologación de las sentencias extranjeras, en virtud de que al reconocer tal sentencia, se estaría aceptando la disolución de un vínculo donde no fueron respetadas las garantías mínimas del contradictorio, máxime, cuando este requisito es de fundamental y decisiva importancia en las sentencias sobre cuestiones de familia, especialmente, las relacionadas a procesos de divorcio, las cuales dan lugar a serias controversias entre las partes.

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO EJECUTABLE en la República de Panamá, la sentencia de divorcio proferida por la Cámara de lo Civil, Comercial y del Trabajo del Juzgado de Primera instancia del Distrito Judicial de San cristóbal, República Dominicana, mediante la cual se declaró disuelto el vínculo matrimonial entre los señores FRANCISCO ROZAS ARISTY Y ADELA JOAQUINA NICOSIA ARANGO.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MIGUEL ÁNGEL PRESTAN A. O MIGUEL PRESTAN, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE DIVORCIO DICTADA POR TRIBUNAL COMPETENTE DEL ESTADO DE NUEVA JERSEY, DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, MEDIANTE LA CUAL SE DECRETÓ LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL QUE UNÍA A MIGUEL ÁNGEL PRESTAN A. Y LELIS EDITH MONTENEGRO SERRANO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

MIGUEL ÁNGEL PRESTAN, ha presentado ante esta Sala Cuarta de la Corte Suprema a través de sus apoderados especiales, la firma forense ARAUZ & ARAUZ, solicitud para que sea reconocida en la República de Panamá, la sentencia de divorcio proferida por Tribunal competente del estado de Nueva Jersey, de los Estados Unidos de Norteamérica, fechada el día 7 de diciembre de 1992, mediante la cual se declara disuelto el vínculo matrimonial que unía a éste con la señora LELIS PRESTAN.

Los apoderados especiales fundamentan su solicitud en base a los siguientes hechos:

> **"PRIMERO**: El señor MIGUEL ÁNGEL PRESTAN ARCIENAGAS y la señora LELIS EDITH MONTENEGRO SERRANO, contrajeron matrimonio civil el veintiuno (21) de septiembre de mil novecientos setentinueve (1979), ente el juzgado Primero Municipal de la ciudad de David, Provincia de Chiriquí.

SEGUNDO: Que mediante pronunciamiento calendado el siete (7) de diciembre de 1992 emitido por la Corte Suprema de New Jersey, Condado de Essex, División de la Parte Familiar de la Corte, Estados Unidos de Norteamérica, se decretó el divorcio de Miguel Ángel Prestan A. o Miguel Prestan y Lelis Edith Montenegro Serrano o Lelis Prestan.

TERCERO: Para que la sentencia de divorcio dictada por el Tribunal extranjero surta sus efectos en la República de Panamá, debe ser inscrita en el Registro Civil, tras haberse satisfecho el pronunciamiento señalado en los artículos 1409 y 1410 del Código Judicial".

Los apoderados especiales adjuntaron a la solicitud de ejecución de sentencia de divorcio, el Certificado de Matrimonio expedido por la Dirección General de Registro Civil; copia autentica de la sentencia de divorcio y su respectiva traducción al idioma español de la referida sentencia por interprete público.

Admitida la solicitud presentada ente esta Corporación, se corrió traslado al señor Procurador, quien en su vista N° 1 de fecha 4 de enero de 1996, señala lo siguiente:

"Que la sentencia cuyo reconocimiento y ejecución en Panamá se pretende -descrita en líneas anteriores- fue dictada como colofón del ejercicio de una pretensión personal".

"La obligación que entraña el negocio jurídico a que accede el pronunciamiento judicial que nos ocupa es lícita en Panamá".

"Se observa que la copia de la sentencia es auténtica y está traducida al idioma español"

"Configurándose los presupuestos que estructura la ley según la relación precedente es indiscutiblemente que la sentencia -cuyo reconocimiento y ejecución se solicita- cumple los requisitos del ordenamiento legal, razón por la cual somos partidarios de que se acceda a la pretensión que origina este negocio".

Observa la Sala, en cuanto ala licitud de la sentencia que nos ocupa, que efectivamente, la misma es conforme a lo establecido en el artículo 1409 del Código Judicial, ya que, dicha sentencia fue dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal, no fue proferida en rebeldía, está debidamente autenticada por las autoridades consulares correspondientes, además se encuentra traducida a nuestro idioma oficial, requisitos éstos necesarios para que se declare su ejecutabilidad en la República.

Por lo antes expuesto, y en cumplimiento con lo establecido en los artículos 1409 y 1410 del Código Judicial, procede la Sala a declarar ejecutable la sentencia.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA EJECUTABLE en la República de Panamá la sentencia de divorcio dictada por la Corte Suprema de New Jersey, Condado de Essex, División de la Parte Familiar de la Corte, Estados Unidos de américa, mediante la cual se declara disuelto el vínculo matrimonial existente entre MIGUEL PRESTAN y LELIS PRESTAN y AUTORIZA a la dirección del registro civil para que realice las anotaciones respectivas en su libro de divorcio en los términos de la presente resolución.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.

Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

AIDA MARITZA FON DE DESORMEAUX, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EXTRANJERA PROFERIDA POR LA DECIMOCUARTA CORTE JUDICIAL DISTRITAL DEL ESTADO DE LOUSIANA QUE ORDENA LA ADOPCIÓN DE EDRICH ELÍAS ECHEVERS FONG. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

El licenciado Javier Ordinola Bernal, en nombre y representación de la señora **AIDA MARITZA FONG DE DESORMEAUX**, ha presentado ante la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, la solicitud de reconocimiento y ejecución en Panamá de la resolución dictada por la Decimocuarta Corte Judicial Distrital del Estado de Lousiana, que ordena la adopción de Edrich Elías Echevers Fong, nacido en Panamá el 15 de octubre de 1974.

El licenciado Ordinola, apoderado especial de la petente fundamenta su petitorio en el siguiente hecho:

> "**PRIMERO:** Solicitamos se reconozca la sentencia descrita y en virtud de ello se ordene la inscripción de la adopción en la Dirección General del Registro Civil de Panamá."

De esa manera, el negocio en estudio le fue corrido en traslado al Procurador General de la Nación, a fin que este funcionario en nombre del Estado panameño emitiera concepto sobre la viabilidad o no de la referida solicitud, tal como lo ordena el artículo 1410 del Código Judicial. Y su opinión se vierte en la Vista Fiscal N° 41 de 27 de noviembre de 1995, cuya parte medular es la siguiente:

> "El examen de la documentación aportada, soporte de la presente solicitud, pone de manifiesto que la sentencia cuyo reconocimiento y ejecución se solicita, ha sido consecuencia del ejercicio de una pretensión personal".
>
> "La obligación para cuyo cumplimiento es lícita según el ordenamiento jurídico-positivo de la República de Panamá".
>
> "La copia de la sentencia incorporada a los autos es auténtica".
>
> "Dicho acto jurisdiccional ... ordena, juzga y sentencia que el niño conocido a los peticionarios como EDRICH ELÍAS ECHEVERS FONG, sea para siempre para todo intento y propósito legal el hijo de los peticionarios JOHN AMBREY DESORMEAUX y AIDA MARITZA FONG DESORMEAUX ..."
>
> "Concurren los requisitos que la norma contenida en el artículo 1409 del Código Judicial, exige para adjudicarle reconocimiento y ejecución a las sentencias pronunciadas por tribunales extranjeros, realidad jurídica que se troca en un imperativo que nos impele a mostrarnos partidarios porque se acceda a la presente solicitud".

La Sala cree prudente puntualizar los siguientes aspectos:

PRIMERO: El sentido del artículo 1409 del Código Judicial es diáfano al estatuir que en el evento que no exista Tratado Especial con el Estado en el cual se haya pronunciado la sentencia o el auto destinado a lograr su ejecutabilidad, ésta podrá ser ejecutada en Panamá, con lo que se entiende que cuando no existe algún tratado al respecto, se aplica el trámite contemplado en el Código Judicial, cuyo carácter vendría a ser supletorio ante la ausencia de un tratado

sobre la materia.

SEGUNDO: Las sentencias extranjeras según el jurista CAPPELLETTI, tienen distintos efectos y ellos son: a) probatorio, b) imperativo, y c) ejecutivo.

En cuanto al efecto probatorio, es el que somete o da a la sentencia un carácter de prueba, no siendo necesario en este supuesto el trámite del exequátur; ello en virtud que, ese determinado tipo de sentencias son utilizadas en el extranjero solo para comprobar un hecho específico. En cambio, las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada y aquellas que deciden una pretensión, con eficacia imperativa y ejecutiva, sí requieren del trámite de exequátur, ya que éstas son de naturaleza vinculante y obligatoria.

Se observa a foja 5 del expediente, copia autenticada de la parte resolutiva de la sentencia de 17 de diciembre de 1986, en la que claramente se expresa que "el niño conocido a los peticionarios como EDRICH ELÍAS ECHEVERS FONG, sea para siempre para todo intento y propósito legal el hijo de los Peticionarios, John Ambrey Desormeaux y Aida Maritza Fong Desormeaux, a la extensión como si el niño le hubiera nacido fruto del matrimonio de los Peticionarios".

"Además se Ordena, Juzga y Sentencia que el nombre del niño sea cambiado de EDRICH ELÍAS ECHEVERS FONG al de EDRICH ELÍAS FONG DESORMEAUX, y por este medio se le ordena al Departamento de Salud y Recursos Humanos de Louisana a efectuar los cambios apropiados en su historial".

La Sala coincide plenamente con la opinión del señor Procurador General de la Nación.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de ley, ORDENA que la presente resolución tenga eficacia en la República de Panamá en los términos previstos por el artículo 1409 y concordantes del Código Judicial, ya que su contenido no viola los principios generales que regulan la adopción en general, ni el orden público interno, ni nuestra soberanía jurídica.

Se AUTORIZA a la Dirección del Registro Civil para que realice las anotaciones respectivas en el libro correspondiente en los términos de la presente resolución.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

VIOLETA VALENCIA MENA, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EXTRANJERA PROFERIDA POR EL JUEZ DE CIRCUITO, DEL CONDADO DE HENDRY, ESTADO DE LA FLORIDA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, DICTADA EN EL JUICIO DE DIVORCIO DE ROY E. BURGESS JR. CONTRA VIOLETA V. BURGES. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

VIOLETA VALENCIA MENA, ha presentado mediante apoderado judicial, ante la Sala Cuarta de la Corte Suprema, solicitud para que sea reconocida en la República de Panamá, la sentencia de divorcio proferida por el Tribunal de Circuito del Vigésimo Circuito del Condado Hendry, Florida, Estados Unidos de América, por medio de la cual se decreta la disolución del vínculo matrimonial

que la unía al señor ROY E. BURGESS Jr.

La licenciada Jewell R. Willock C., apoderada judicial de la parte, fundamenta su solicitud en base a los siguientes hechos:

> "PRIMERO: Que el día 29 de agosto de 1988 la Sra. VIOLETA VALENCIA MENA y el Sr. ROY E. BURGESS Jr., contrajeron matrimonio civil en la República de Panamá.
>
> SEGUNDO: El matrimonio descrito en el hecho primero aparece inscrito al tomo 234 de matrimonios de la provincia de Panamá, Asiento 374.
>
> TERCERO: El Sr. ROY E. BURGESS Jr. presentó Demanda de Divorcio contra su esposa Sra. VIOLETA VALENCIA MENA ante el Tribunal de Circuito del Vigésimo Circuito Judicial en y por el Condado de Hendry, Estado de la Florida, Estados Unidos de Norteamérica, contra la Sra. VIOLETA VALENCIA MENA.
>
> CUARTO: La Sra. VIOLETA VALENCIA MENA fue legalmente citada y no concurrió a la audiencia de ese juicio que se celebró el 1 de Julio de 1988 en el referido Juzgado.
>
> QUINTO: Después de celebrada la audiencia el juez decretó el divorcio de los esposos Sr. ROY E. BURGESS Jr. y la Sra. VIOLETA VALENCIA MENA.
>
> SEXTO: La demandada Sra. VIOLETA VALENCIA MENA, fue notificada legalmente por el Tribunal del Circuito del Vigésimo Circuito Judicial en y por el condado de Henry, Estado de la Florida de los Estados Unidos de Norteamérica, por medio del correo regular de los Estados unidos de Norteamérica, el 3 de julio de 1988".

La peticionaria adjuntó a la solicitud de ejecución de sentencia de divorcio, copia autenticada de la misma debidamente traducida al español por intérprete público autorizado, e igualmente presentó el certificado de matrimonio emitido por la Dirección General del Registro Civil de Panamá, el cual hace constar la existencia del vínculo matrimonial vigente en la República contraído con el señor ROY E. BURGESS Jr.

Admitida la solicitud presentada ante esta Corporación, se corrió traslado al señor Procurador, quien en su Vista N° 4 de 5 de enero de 1996 es del criterio que resulta procedente a acceder a la solicitud de exequátur en virtud que la misma cumple con la totalidad de los requisitos exigidos por ley.

Observa la Sala, en cuanto a la licitud de la sentencia que nos ocupa, que efectivamente, la misma es conforme a lo establecido en el artículo 1409 del Código Judicial, ya que, dicha sentencia fue dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal, no fue proferida en rebeldía, está debidamente autenticada por las autoridades consulares correspondientes como también se encuentra traducida a nuestro idioma oficial, requisitos éstos necesarios para que se declare su ejecutabilidad en la República.

En consecuencia, la Corte Suprema, Sala de Negocios Generales, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA EJECUTABLE en la República de Panamá la sentencia de divorcio proferida por el Tribunal de Circuito del Vigésimo Circuito Judicial en y por el condado de Hendry, Florida, Estados Unidos, Estados Unidos de América, mediante la cual se declaró disuelto el vínculo matrimonial existente entre VIOLETA VALENCIA MENA y el señor ROY E. BURGESS Jr. y Autoriza a la Dirección del Registro Civil para que realice las anotaciones respectivas en su libro de divorcio en los términos de la presente resolución.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ.
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JAVIER PARIENTE TEJADA, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE DIVORCIO EMITIDA POR EL JUZGADO VIGÉSIMO CUARTO DE LO CIVIL DE GUAYAQUIL, PROVINCIA DE GUAYAS, REPÚBLICA DE ECUADOR DE FECHA 29 DE JUNIO DE 1993, MEDIANTE LA CUAL SE DECRETÓ LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL QUE UNÍA A JAVIER PARIENTE TEJADA Y JACKELINE BOWEN RAMÍREZ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

JAVIER PARIENTE TEJADA, a través de su apoderado judicial **GUZMÁN, SAMUDIO Y ASOCIADOS**, ha presentado ante esta Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, solicitud para que sea reconocida en la República de Panamá la Sentencia de Divorcio emitida por el Juzgado Vigésimo Cuarto de lo Civil de Guayaquil, Provincia de Guayas, República de Ecuador, el día 29 de junio de 1993, mediante la cual se declara disuelto el vínculo matrimonial por mutuo consentimiento de **JAVIER PARIENTE TEJADA Y JACKELINE BOWEN RAMÍREZ.**

El peticionario fundamenta su solicitud en los siguientes hechos:

"**PRIMERO: JAVIER PARIENTE TEJADA Y JACKELINE BOWEN RAMÍREZ** contrajeron matrimonio el día 4 de octubre de 1988, en la Ciudad de Guayaquil, República de Ecuador.

SEGUNDO: Que dicho matrimonio se encuentra inscrito en el Tomo 10 Asiento 910 de Matrimonios en el extranjero del Registro Civil de Panamá.

TERCERO: Mediante Sentencia de 29 de junio de 1993, el Juzgado Vigésimo Cuarto de lo Civil de Guayaquil, decretó la disolución del vínculo matrimonial por mutuo consentimiento de JAVIER PARIENTE TEJADA Y JACKELINE BOWEN RAMÍREZ, resolución judicial que quedó en firme el día 12 de julio de 1993".

ANTECEDENTES DEL CASO

La referida solicitud se fundamenta en el hecho que existe una resolución judicial de fecha 29 de junio de 1993, emitida por el Juzgado Vigésimo Cuarto de lo Civil de Guayaquil, República de Ecuador, que decreta el divorcio entre JAVIER PARIENTE TEJADA Y JACKELINE BOWEN RAMÍREZ.

Los documentos presentados por el licenciado Aurelio Guzmán Muñoz, han sido aportados con la autenticación correspondiente por parte del Cónsul de Panamá en Guayaquil, República de Ecuador, así como la acreditación del mismo realizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, ambas son visibles a foja 5, reverso, del expediente.

En la sentencia de divorcio se señala como causal de divorcio el "mutuo consentimiento entre las partes".

OPINIÓN DEL PROCURADOR

Conforme a lo dispuesto en el artículo 1410 del Código Judicial, se le corrió traslado del presente negocio al Procurador General de la Nación para que emitiera concepto.

El Procurador General de la Nación en Vista N° 2 de 4 de enero de 1996, visible de foja 13 a foja 15 del expediente, señalo lo siguiente:

"La sentencia dictada por el Juez Vigésimo Cuarto de lo Civil de Guayaquil, previa aceptación de la demanda, la declara con lugar y, por consiguiente, "terminado por divorcio por mutuo consentimiento, el matrimonio civil que contrajeron Javier Pariente Tejada y Jackeline Bowen Ramírez el 4 de febrero de 1988." (foja 8 y vuelta)."

"No cabe duda que el pronunciamiento jurisdiccional cuyo reconocimiento y ejecución se solicita accede al ejercicio de una pretensión personal."

"También es indudable que la sentencia, cuyo reconocimiento y ejecución se pretende, no colisiona, por su licitud, con el ordenamiento jurídico panameño."

"La copia de la sentencia que decidió el negocio jurídico subyacente, materia del presente análisis, es **auténtica**, puesto que la misma, luego de su protocolización, se sujetó a certificación del Cónsul General de Panamá en Guayaquil, Ecuador. (Foja 9).

Luego, se pone de manifiesto que concurren los requisitos que el precitado artículo 1409 exige para adjudicarle reconocimiento y ejecución a las sentencias pronunciadas por tribunales extranjeros."

"Consecuentemente, conceptuamos que debe accederse a la presente solicitud."

DECISIÓN DE LA SALA

Cumplido con el procedimiento establecido en el Código Judicial panameño para la homologación de sentencias extranjeras, la Sala Cuarta de Negocios Generales pasa a conocer la solicitud presentada con la finalidad de examinar si la sentencia extranjera dictada por Juez Vigésimo Cuarto de lo Civil de Guayaquil de fecha 29 de junio de 1993 cumple con los requisitos de forma y de fondo exigidos por nuestra legislación.

Es necesario precisar que, de conformidad con el numeral 2 del artículo 2 del artículo 101 del Código Judicial es facultad de la Sala examinar las resoluciones judiciales pronunciadas en país extranjero.

Se observa que la sentencia examinada cumple con los requisitos señalados en el artículo 1409 del Código Judicial, ya que la misma fue dictada en ejercicio de un pretensión personal. Por otra parte, del cuadernillo se desprende que ambos contrayentes estaban en conocimiento del proceso y de la propia sentencia de divorcio, por lo cual no se presenta la figura de la rebeldía.

En cuanto a la licitud de la obligación para la cual ha de procederse, la causal de divorcio invocada por las partes involucradas es "el mutuo consentimiento", la cual está contemplada en el Código de la Familia en el Capítulo VII, Sección Del Divorcio, Artículo 212, numeral 10, que textualmente señala:

"Artículo 212: Son causales de divorcio:
...
10. El mutuo consentimiento de los cónyuges siempre que cumplan los siguientes requisitos:

1. Que los cónyuges sean mayores de edad;
2. Que el matrimonio tenga como mínimo dos años de celebrado; y
3. Que las partes ratifiquen su solicitud de divorcio transcurridos dos meses desde la presentación de la demanda de divorcio y antes de seis (6) meses de la citada presentación".

Del artículo anterior se desprende que la presente solicitud no violenta el orden público interno, ya que ambos cónyuges eran mayores de edad al momento

de celebrarse el matrimonio. De igual forma el matrimonio tenía más de dos años de haberse celebrado, esto se desprende de la diferencia entre la fecha de matrimonio, que es el 4 de octubre de 1988 y la fecha de divorcio que es el 29 de junio de 1993. A foja 8 del expediente se observa que **"aceptada la demanda al trámite del divorcio por mutuo consentimiento, se advirtió que vencido el plazo de dos meses a solicitud de ambos cónyuges se los convocaría a audiencia de conciliación que establece el Art. 106 del Código Civil. Vencido dicho plazo y a solicitud conjunta se los convocó a audiencia de conciliación, la que se cumplió en el despacho del Juzgado el 26 de febrero de 1993"**, cumpliendo de esta forma los requisitos establecidos en el artículo 212, numeral 10 del Código de la Familia. (Las negritas son de la Sala).

En consecuencia, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA EJECUTABLE en la República de Panamá la sentencia de divorcio emitida por el Juzgado Vigésimo Cuarto de lo Civil de Guayaquil, Provincia de Guayas, República de Ecuador de fecha 29 de junio de 1993, mediante la cual se decretó la disolución del vínculo matrimonial que unía a JAVIER PARIENTE TEJADA Y A JACKELINE BOWEN RAMÍREZ.

SE AUTORIZA a la dirección de Registro Civil para que realice las anotaciones respectivas en su libro de divorcio en los términos de la presente resolución.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMALIA ASTRID VÁSQUEZ DE HERNÁNDEZ, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO DE LAS SENTENCIAS EXTRANJERAS: SENTENCIA CIVIL N° 4969 DE 5 DE DICIEMBRE DE 1990, DICTADA POR LA CÁMARA CIVIL Y COMERCIAL Y DE TRABAJO DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE SANTIAGO, REPÚBLICA DOMINICANA Y LA SENTENCIA DE FECHA 20 DE FEBRERO DE 1991, DICTADA POR EL SECRETARIO DEL JUZGADO DE PAZ DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO REPÚBLICA DOMINICANA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, TREINTA (30) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

AMALIA ASTRID VÁSQUEZ DE HERNÁNDEZ, a través de su apoderada especial MELISSA VÁSQUEZ DÍAZ, ha presentado ante esta Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, solicitud para que sea reconocida en la República de Panamá las Sentencias Civil N° 4969 del 5 de diciembre de 1990, dictada en la ciudad de Santiago, Municipio y Provincia de Santiago, República Dominicana, por la Cámara Civil y Comercial y de Trabajo de la Primera Circunscripción del Juzgado de Primera instancia del Distrito Judicial de Santiago y la Resolución fechada 20 de febrero de 1991, dictada por el Secretario de Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción del Municipio de Santiago, República Dominicana, mediante la cual se declara interdictos de la administración de su persona y bienes los señores VIRGILIO AUGUSTO VÁSQUEZ SÁNCHEZ y MARÍA DEL ROCÍO GUMERCINDA VÁSQUEZ.

El peticionario fundamenta su solicitud en los siguientes hechos:

"PRIMERO: Que la sentencia N° 4969 anteriormente descrita, declara interdictos de la administración de su persona y bienes a los señores VIRGILIO AUGUSTO VÁSQUEZ SÁNCHEZ, con cédula de identidad personal #8-86-878 y MARÍA DEL ROCÍO GUMERCINDA VÁSQUEZ, con cédula

de identidad personal #8-469-493

SEGUNDO: Que la resolución fechada 20 de febrero de 1991 nombra como TUTORA de los señores VIRGILIO AUGUSTO VÁSQUEZ SÁNCHEZ, con cédula de identidad personal #8-86-878 y MARÍA DEL ROCÍO GUMERCINDA VÁSQUEZ, con cédula de identidad personal #8-469-493 declarados interdictos mediante sentencia descrita anteriormente, a la hermana AMALIA ASTRID VÁSQUEZ DE HERNÁNDEZ, con cédula de identidad personal N° 8-97-57.

TERCERO: Que ambas sentencias anteriormente descritas son copias originales y se encuentran debidamente autenticadas por ante (sic) la Procuraduría General de la República Dominicana, Secretaría de estado de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, por el Consulado de Panamá en la República Dominicana y ante el ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá.

CUARTO: Que nuestra solicitud es lícita, ya que la tutela de interdictos se encuentra regulada en los artículos 408 y 409 del Código de la Familia.

QUINTO: Que según resolución N° D. D. A. L. M. 5394 del 19 de enero de 1994, emitida por el departamento de Asesoría Legal de la Caja del seguro Social, es requisito indispensable el reconocimiento y ejecutividad ante los tribunales panameños competentes de las sentencias antes descritas, ambas dictadas en la República Dominicana, para que esta institución proceda al reintegro de la pensión de sobreviviente por invalidez que asistía al señor VIRGILIO A. VÁSQUEZ SÁNCHEZ desde 1974 y que le fuera suspendida arbitrariamente desde 1990".

Conforme a los hechos expuestos la petente solicita sean reconocidas en la República de Panamá las sentencias mediante las cuales se declaran, en primer lugar, interdictos a los señores a los señores VIRGILIO AUGUSTO VÁSQUEZ SÁNCHEZ y MARÍA DEL ROCÍO GUMERCINDA VÁSQUEZ, ambos con Esquizofrenia Crónica; y en segundo lugar, sentencia mediante la cual se nombra a la señora AMALIA ASTRID VÁSQUEZ DE HERNÁNDEZ, hermana de ambos interdictos, como TUTORA de los mismos.

La solicitud se presente a efectos que ambas sentencias sean reconocidas y ejecutadas en la República de Panamá, con el objeto que la petente tenga legitimidad para actuar en representación de ambos enfermos mentales, frente a la Caja del Seguro Social en la República de Panamá.

De acuerdo al numeral 2 del artículo 101 de nuestro Código de procedimiento, corresponde a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, examinar y declarar si las resoluciones judiciales pronunciadas por Tribunales extranjeros pueden ser ejecutadas en nuestro país.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 1409 se corrió traslado al señor Procurador General de la Nación, quién en vista N° 16 de 9 de junio de 1995, consideró lo siguiente:

"La solicitante presenta copia autenticada de la sentencia N° 4969 de 5 de diciembre de 21990 mediante la cual se declaran interdictos a Virgilio y María del Rosario Vásquez Sánchez; la misma está autenticada por la autoridad consular panameña correspondiente y por el Ministerio de Relaciones Exteriores, sin embargo, no nos hemos podido percatar que la resolución en la que se nombra como tutora de los interdictos, no está autenticada por el cónsul panameño en República Dominicana y lo que sí está autenticado son los certificados médicos que certifican que el señor Vásquez Sánchez sufre de enfermedad mental que lo hace incapaz."

Por todas estas consideraciones, esta Procuraduría estima que debe declararse ejecutable la sentencia N° 4969 de 5 de diciembre de

> 1990, mediante la cual se declaran interdictos a los señores VIRGILIO AUGUSTO VÁSQUEZ SÁNCHEZ Y A MARÍA DEL ROCÍO GUMERCINDA VÁSQUEZ SÁNCHEZ y concederle a la petente el término de cuarenta y cinco (45) para que se subsane el error señalado en cuanto a la resolución que nombre como tutora de los hermanos Vásquez Sánchez, a la señora AMALIA VÁSQUEZ DE HERNÁNDEZ.

La Sala, de acuerdo con la opinión vertida por el Procurador General de la Nación, concedió a la petente en Sala Unitaria, el término de 45 días a partir de la notificación, para que aportara autenticación del cónsul de Panamá en la República Dominicana y de igual forma la acreditación de éste último, por el Ministerio de Relaciones de la República de Panamá.

De acuerdo al trámite para estos negocios, y una vez incorporado al expediente el documento solicitado a los peticionarios, nuevamente se corrió traslado al señor Procurador General de la Nación, para que emitiera concepto, quién a través de la Vista Fiscal número 3 de 4 de enero de 1996 establece lo siguiente:

> "La apoderada especial de la peticionaria trajo a los autos el documento requerido relativo a las autenticación aludida, por lo cual debe reputarse subsanada la omisión señalada y cumplidas las exigencias legales para que se atienda favorablemente y de forma integral la pretensión de reconocimiento y ejecución de las sentencias extranjeras, materia de este proceso."

Devuelto el expediente a esta Superioridad, el Magistrado Sustanciador al estudiar el presente caso, considera que se ha subsanado la omisión indicada a los peticionarios.

Las sentencias in exámine cumplen con los requisitos señalados en el artículo 1409 del Código Judicial. Ambas sentencias fueron dictadas a consecuencia de una pretensión personal, no existió controversia entre las partes, por lo que no se presenta la figura de la rebeldía.

En cuanto a la licitud de la obligación que contempla el numeral 3 del artículo 1409 del Código Judicial, la interdicción está regulada en nuestra legislación en la SECCIÓN II, DE LA TUTELA DE LOS RETARDADOS MENTALES PROFUNDOS Y ENFERMOS MENTALES, artículo 404 y siguientes y en la SECCIÓN III DE LA TUTELA DE LOS INTERDICTOS, artículo 408 y siguientes del Código de la Familia, por lo que ambas sentencias cumplen con este requisito. Por último, las sentencias sujetas al presente trámite luego de las omisiones señaladas, cumplen con las autenticaciones requeridas.

En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA EJECUTABLE la Sentencia Civil N° 4969 de 5 de diciembre de 1990, dictada por la Cámara Civil y Comercial y de Trabajo de la primera Circunscripción del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, República Dominicana y la Sentencia de fecha 20 de febrero de 1991, dictada por el secretario del Juzgado de Paz de la Primera Circunscripción del Municipio de Santiago, República Dominicana.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ.

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXHORTOS

EXHORTO DE NOTIFICACIÓN LIBRADO POR EL TRIBUNAL DE DISTRITO DE ZURICH, SUIZA EN LA DEMANDA CIVIL INTERPUESTA POR NALIN INDUSTRIES SND BHD EN UNA LIQUIDACIÓN

CONTRA BEHR, INC. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, ONCE (11) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

El Departamento de Consular y Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha remitido a este despacho el cuaderno contentivo del exhorto librado por el Tribunal de Distrito de Zurich, Suiza, dentro de la demanda civil de notificación interpuesta por la NALIN INDUSTRIES SDN BHD en liquidación contra la compañía BERH, INC., a fin que se notifique a la sociedad demandada de la decisión de fecha 13 de septiembre de 1995 tomada por dicha Superioridad. La dirección de la sociedad BERH, INC., aparece indicada como Edificio Igra, Calle Aquilino de la Guardia 8, apartado 850-1, ciudad de Panamá, República de Panamá.

Entre los antecedentes del exhorto se cuentan que el día 16 de septiembre de 1994 se interpuso la demanda civil, en la cual se solicita el bloqueo de la cuenta bancaria N° 810,002/94. Simultáneamente, bajo apercibimiento de dos procesos ya pendientes en la denominada High Court de la República de Singapur sobre la misma pretensión entre las mismas partes, la demandante presentó petición de sobreseimiento del proceso en Suiza.

El Tribunal resolvió conforme a la legislación suiza, ya que con anterioridad se interpuso una demanda sobre el mismo objeto, entre las mismas partes en el extranjero y se espera que el que el tribunal extranjero, dicte sentencia que se reconozca en Suiza. Por lo tanto el tribunal suizo ordenó, en decisión de 13 de septiembre de 1995, la suspensión del proceso hasta que se disponga un sentencia ejecutoria de la High Court de Singapur. Los antecedentes antes mencionados se encuentran a foja 9 del expediente.

A foja 10 del expediente, se insta a la demandada a que en **un plazo de 20 días a partir de la notificación de este mandamiento, nombre un destinatario de notificaciones en Suiza.**

La parte afectada puede presentar un recurso en contra de el punto N° 1 de la resolución dictada por el tribunal de Distrito De Zurich, Suiza, en un plazo de 10 días a partir de la notificación. Estas consideraciones están expuestas en los puntos 2, 3, 4, visibles a foja 10 del presente expediente.

Por tanto el objetivo del presente exhorto es lograr la notificación de la resolución de 13 de septiembre de 1995 de la sociedad BEHR, INC., con domicilio antes descrito.

La documentación procedente del Tribunal del Distrito de Zurich 2ª Sección, aparece en su versión del idioma alemán y a continuación la traducción correspondiente al idioma español, y se puede apreciar que la documentación aportada contiene el sello de la Apostilla. Por lo tanto, al llevar a cabo el estudio del exhorto se puede apreciar, que por razón del contenido de la legislación que regula esta materia en Panamá lo siguiente:

a) Que entre las Repúblicas de Panamá y Suiza no existe Convención que regule la materia de exhortos o cartas rogatorias.

b) Que a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, en cumplimiento de las atribuciones que le asigna el artículo 101, numeral 3 del Código judicial, le corresponde el conocimiento de estos asuntos para el cumplimiento y diligenciamiento en nuestro país.

c) Que en los casos en donde no existe una Convención entre los Estados, en acatamiento de las normas de Derecho Internacional, se aplica el principio de reciprocidad para los fines de una mejor cooperación procesal internacional.

d) Que cuando en el diligenciamiento de los exhortos o cartas rogatorias se realiza por la vía de la reciprocidad, es necesario que los documentos

remitidos se encuentren debidamente autenticados por autoridad consular panameña acreditada en el país requiriente, que no sean violatorios del orden público interno, y que estén debidamente traducidos al idioma español, por lo que en relación a la autenticidad de los documentos, esto se puede cumplir de la siguiente manera: Por la incorporación del sello de la apostilla, cuya finalidad es la supresión del trámite y proceso de legalización, y cuyo propósito real se sitúa en la celeridad del tráfico y de los actos o documentos públicos extendidos por Estados extranjeros para producir efectos en el territorio de otro Estado, y sólo en el caso de los países que han ratificado la Convención Americana en materia de exhortos, basta con la tramitación del exhorto por la vía diplomática.

En el caso que nos ocupa, la Sala observa que el exhorto que se expide en el Tribunal de Distrito de Zurich, 2ª Sección, cumple con el requisito de la traducción de los documentos que sustentan lo pedido, así como con el de la autenticación del referido exhorto al contener el sello de la apostilla, el cual es un requisito al que nos hemos referido con anterioridad en el desarrollo de la presente resolución.

Por lo expuesto, es permisible darle curso al exhorto librado por el Tribunal de Distrito de Zurich 2ª Sección, para la notificación de la decisión del 13 de septiembre de 1995, en la cual se ordena la suspensión del proceso hasta que se disponga de sentencia ejecutoria en la High Court de Singapur, y se concede un plazo de 10 días a partir de la notificación, para presentar recurso en contra del punto 1 de esta resolución dirigida al Alto Tribunal del Cantón Zurich, Sala de lo Civil I, 8023 Zurich, Suiza.

Ahora bien, la Sala hace la salvedad, que lo pedido en el exhorto que se examina en esta oportunidad, no vulnera nuestro ordenamiento jurídico interno, por lo que cabe darle la cooperación a las autoridades suizas tendiente a contribuir con el proceso aludido.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA VIABLE la el exhorto librado por el Tribunal del Distrito de Zurich, 2ª Sección de Zurich, Suiza, dentro de demanda promovida por NALIN INDUSTRIES SDN BHD contra BERH, INC., a fin que se notifique a la citada sociedad de la decisión de 13 de septiembre de 1995 en la cual se ordena la suspensión del proceso y ORDENA que por Secretaría de la Sala Cuarta se hagan las notificaciones de rigor atendiendo para este respecto las normas procesales vigentes en nuestro ordenamiento jurídico interno y aplicable a esta materia.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TRIBUNAL DE INSTANCIA

RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA LICDA. LUCILA ANGÉLICA SAMUDIO BATISTA, ANTE LA COMISIÓN DE PERSONAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 59-95 DE FECHA DE VEINTINUEVE (29) DE AGOSTO DE 1995. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Ingresó a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, el recurso de apelación, propuesto por el licenciado Anselmo Guerra

Morales en representación de la licenciada Lucila Samudio B., en contra de la decisión contenida en la Resolución N° 59-95 de 29 de agosto de 1995, la cual resuelve el concurso N° 231 (mixto) posición (1986) para el cargo de Trabajador Social I del Instituto de Defensoría de Oficio.

Los puntos más relevantes en los que se apoya el Apoderado Judicial de la recurrente, se pueden resumir de la siguiente manera:

> "TERCERO: Es así, como no podemos compartir el criterio de la Comisión de Personal al establecer un puntaje de ejecutorias y gestiones dentro de su trabajo diario produce un puntaje que no fue evaluada por dicha Comisión Revisoria (sic).
>
> ... De lo anterior, podemos observar el valor asignado a dichos seminarios fue reducido a la mitad en cada uno, tal como puede ser observado en los documentos (seminarios) que reposan en los archivos de la Comisión.
>
> Pero nuestra oposición, nace de una realidad que la comisión de personal no ha valorado, y la cual es el papel social que juega el Instituto de Defensoría de Oficio en la comunidad, no sólo representando penalmente a los procesados en los negocios penales, sino en la nueva jurisdicción de Menor y Familia, a la cual también se ve avocado la referida institución en conjunto con todo su equipo de trabajo, inclusive la Trabajadoras Sociales, quienes representan la avanzada dentro de los procesos que son abordados por la Institución ..."
>
> ... Así las cosas, observamos que es la función del Trabajador Social es un intermediario entre el Abogado Defensor y sus patrocinados, para ello tendrá que cumplir un programa establecido de asesoramientos y evaluación de campo que será de gran utilidad a la defensa en los casos penales y de guía social para los procesos ventilados en la esfera civil (pensión alimenticia, guarda y crianza, reglamentación de visita, divorcio) y otros que al no poder ser atendidos, se le confiere el asesoramiento respectivo.
>
> "Petición: Requerimos, que la Comisión de Personal, estudie el Recurso de con Apelación en Subsidio y acepto (sic) otorgar el puntaje correcto a los Seminarios que fueron mal evaluados por dicho Tribunal".

Una vez transcrita la parte esencial del recurso, esta Sala pasa a conocer el recurso de apelación, a fin de determinar si existen o no elementos que justifiquen una modificación en la resolución recurrida.

Con relación a lo argumentado por el recurrente en el hecho tercero del escrito, esta Sala es de la opinión, que no es posible asignarle una puntuación mayor a los Seminarios presentados en este recurso en atención al Cuadro de Evaluación que establece que "los seminarios o cursos sólo se computarán cuando sean sobre temas jurídicos y acumulen un mínimo de cuarenta (40) horas". Adicional a esta norma de manera supletoria se encuentra el Acta N° 1 de la Comisión de Personal, Ramo Penal de Panamá del 28 de enero de 1992 que estableció lo siguiente:

Seminarios Aplicables al cargo sin horas	0.50
Seminarios Relacionados al cargo sin horas	0.25
Seminarios Aplicables al cargo con 40 horas	1.00
Seminarios Relacionados al cargo con 40 horas	0.50

De esta manera, resulta palmario el hecho que la Licenciada Samudio B. no aportó Seminarios aplicables al cargo en concurso, en función que para ocuparlo no se requiere ser Licenciado en Derecho y Ciencias Políticas sino licenciatura en Trabajo Social y al examinar cada uno de los Seminarios en los que se encuentra disconforme con la puntuación obtenida, esta Superioridad advierte que

todos versan sobre temas jurídicos los cuales son una materia relacionada con el cargo que ocupa, pero de ninguna manera exactamente aplicables, de este modo; cabe entonces anotar que, mal puede la Comisión brindarle puntuación superior a la conferida, en virtud que no aportó Seminarios aplicables al cargo en convocatoria, por lo que de hacerlo incurriría entonces en atribuciones no asignadas a ésta; criterio éste que en fallos anteriores esta Sala ha establecido como sano y correcto y que está destinado a lograr la integridad procesal y formal de los concursos de Carrera Judicial, de allí que por razones de instrucción didáctica pasemos a transcribir el extracto de alguno de los resueltos jurisprudenciales emitidos por la Sala, sobre el particular:

> "En resolución de 6 de septiembre de 1995, en caso del Licenciado Roy Antonio Arosemena Calvo contra la Resolución 037-95, 039-95 y 041-95 del 20 de febrero de 1995, emitida por la Comisión de Personal del Primer Distrito Judicial de Panamá, la Sala expresó:
>
> Continuando con el orden de ideas establecidos para resolver el presente recurso, la Sala manifiesta con toda suficiencia que, efectivamente las Comisiones de Personal y el propio Departamento de Carrera Judicial, tienen autonomía para establecer los sistemas de trabajo que van utilizar en la resolución de los diferentes concursos que ellos mismos convocan. Por tanto, al observar el aparte que guarda relación con los sistemas de valoración y puntuación con los que cuentan estas dependencias, esta Magistratura solo agrega que, efectivamente cada uno de los sistemas y métodos de valoración desarrollados por todos los estamentos que componen la Carrera Judicial, están dando los resultados y los frutos esperados por el Órgano Judicial en sentido general. Aunado a todo lo anteriormente expuesto este Despacho Superior considera que, tales sistemas han venido a darle pulcritud y celeridad al manejo de cada uno de los certámenes jurídicos-académicos-intelectuales y técnicos, que a diario realiza la Dirección de Carrera Judicial y que está acompañada en esa labor por cada una de las Comisiones de Personal que el Concurso determine.
>
> Por lo tanto, la documentación presentada por el recurrente fue debidamente revisada y valorada por la Comisión respectiva, y como resultado de dicha revisión se le asignaron los puntos a los que tenía derecho, sin restarle, ni sumarle más de lo debido y lo establecido por la propias normas que regulan esta materia.

En cuanto al reparo manifestado en la petición del presente escrito, esta Superioridad señala que coincide de forma plena con lo esgrimido por la Dirección de Recursos Humanos en su opinión sobre el caso y que está visible a foja 65 del presente cuadernillo que analizamos cuando manifiesta que **"la función que realiza el Trabajador Social del Instituto de Defensoría de Oficio, cargo objeto del Concurso, de acuerdo al Manual Descriptivo de Clases de Puestos del Instituto antes citado, consiste en que realiza trabajo de nivel profesional de dificultad considerable en la atención de situaciones enmarcadas dentro de la unidad individuo-familia, grupo y comunidad, aplicando la metodología propia del trabajo social en programas de bienestar social y relaciones humanas e interviniendo en trabajos de investigación sobre situaciones o problemas que afectan sectores de población. Al analizar los seminarios a que hace alusión el apoderado judicial, los mismos versan sobre temas jurídicos los cuales no pueden ser considerados como materias aplicables al momento de la evaluación ya que el cargo objeto del Concurso N° 231 es de Trabajador Social; siendo consideradas como materia aplicables aquellos seminarios que incidan directamente con las materias objeto del cargo puesto a Concurso".**

Los seminarios considerados por el letrado como incorrectamente evaluados son de contenido y profundidad jurídica, motivo por el cual se le valoró como "materia relacionada"; toda vez que la función del Trabajador Social y su campo de acción es totalmente distinto al de un Abogado"; ya que de lo contrario sería conceder beneficio al funcionario por el sólo hecho de ser el *Trabajador Social*

un intermediario entre el Abogado Defensor y sus patrocinados en el Instituto de Defensoría de Oficio, lo que desvirtuaría la naturaleza jurídica y administrativa que intrínsecamente contiene la carrera judicial en cada una de las normas que la regulan, tanto a nivel sustantivo como adjetivo y, que además permite a todos los concursantes gozar del principio de equidad que debe privar en los concursos y que sólo dependerá indefectiblemente, del grado de preparación académica y demás documentos que los aspirantes aporten para acumular la mayor cantidad de puntos a su favor; por ende todas aquellas personas que aspiran a dicho cargo, aún el que lo ocupa, por el tiempo y de la manera que fuere, debe ajustarse y cumplir con lo exigido, por lo que se desestima este cargo.

Una vez efectuado el análisis de los documentos aportados resulta evidente que dicha documentación se aportó acreditándose la capacidad del concursante de acuerdo a los requerimientos exigidos en el concurso del cargo de Trabajador Social I del Instituto de Defensoría de Oficio, observándose que la evaluación es correcta de forma tal que el recurrente, alcanzó el puntaje de 27.92, puntos suficientes que le permiten figurar en la lista de elegibles del citado concurso; reitera esta Alta Magistratura en torno a los documentos en mención no observa esta Sala razón alguna para modificar la puntuación obtenida en virtud que no se presentó ninguna prueba, reparo o argumento que determine que el puntaje no fue valorado correctamente de acuerdo a los reglamentos vigentes sobre la materia.

Aunado a lo anteriormente manifestado, esta Magistratura desea anotar que la valoración de los concursantes se efectúa en base a hechos objetivos, efectivamente documentados.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA EN TODAS SUS PARTES la Resolución N° 59-95 de 29 de agosto de 1995 emitida por la Comisión de Personal del Primer Distrito Judicial, Ramo Penal, la cual decidió la lista de los Seleccionables y no Seleccionables para el Aviso N° 231-95 (Mixto) posición (1986) de Trabajador Social I del Instituto de Defensoría de Oficio y ORDENA una vez notificadas las partes involucradas en el presente negocio, se devuelva el expediente a la Secretaría de la Comisión de Personal para que se le otorguen los ulteriores trámites procesales aplicables a esta materia.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN CON APELACIÓN EN SUBSIDIO INTERPUESTO POR TEÓFILO SAMUDIO ESTRIBÍ, CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 182-95 DE FECHA TRES (3) DE AGOSTO DE 1995, EMITIDA POR LA COMISIÓN DE PERSONAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ, RAMO CIVIL. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Ingresa a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia el cuaderno contentivo del recurso de apelación interpuesto por el licenciado Ricardo E. Lezcano C. en representación del señor Teófilo Samudio Estribí, en contra de la decisión contenida en la Resolución 182-95 de fecha 3 de agosto de 1995, emitida por la Comisión de Personal del Primer Distrito Judicial de Panamá, Ramo de lo Civil.

Los hechos más importantes en los cuales fundamente el recurso son los siguientes:

"1. En la Resolución se decide la posición 1870, de ARCHIVISTA II del Departamento de Archivos del Órgano Judicial, sometidas a concurso interno, mediante sendo aviso numerado 176-95.
...
3. Mi representado lleva laborado en la misma posición, desde que se abrieron las oficinas de archivo del Tercer Distrito Judicial, es decir desde el primero (1°) de julio de 1994, en virtud del contrato firmado con AID por tres meses y medio (3 1/2 meses), que se cumplieron el quince (15) de octubre de 1994, su posición fue asumida por el Órgano Judicial, en virtud de contrato por seis meses, renovado el 15 de abril de 1995.

4. Mi representado presentó pruebas de haber terminado su Escuela Secundaria, con el Título de Bachiller en Comercio, lo que lo acredita para la posición en concurso.

5. Mi representado presentó pruebas de haber trabajado en labores de oficina por más de once (11) años, mediante constancia acreditada en carta de trabajo expedida por la Sra. Estrella de Esquivel, propietaria del establecimiento comercial denominado "Representaciones y Creatividades". Con dicha prueba mi representado cumplió con el segundo requisito del concurso, es decir, experiencia en labores de oficina.

7. Los informes mensuales, preparados por mi representado, dan fe de su capacidad y debida diligencia en el desempeño de sus funciones. Mil setecientos treinta y cuatro (1,734) bultos de expedientes etiquetados y nueve mil ochocientos cincuenta y nueve (9,859) tarjetas confeccionadas y archivadas, todos sin error, son buena marca para demostrar su experiencia."

En base a los hechos expuestos anteriormente, el recurrente solicita se reconsidere el ingreso a la Carrera Judicial en el cargo de ARCHIVISTA II DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVOS DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL, al señor Teófilo Samudio Estribí.

La Sala observa en primer Lugar, que el recurso contra la Resolución N° 182-95 que resuelve el concurso mixto para la posición 1871 de ARCHIVISTA II DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVOS DEL ÓRGANO JUDICIAL. Sin embargo, la resolución que ha debido recurrir es la N° 183-95 que resuelve el concurso interno, para la posición 1870 de ARCHIVISTA II DEL DEPARTAMENTO DE ARCHIVOS DEL ÓRGANO JUDICIAL. En todo caso, como la intención del recurrente es clara la Sala Cuarta de Negocios Generales atiende la solicitud del Licenciado Ricardo Lezcano.

En el hecho tercero el recurrente afirma que ha laborado en la Institución desde que se abrieron las oficinas de la AID en las oficinas de archivo del Tercer Distrito Judicial y su contrato fue renovado el 15 de abril de 1995, al asumir la posición el Órgano Judicial. Sin embargo, el recurrente no ha aportado el documento alguno que acredite la experiencia laboral dentro del Órgano Judicial, la Sala ha manifestado en reiteradas ocasiones que el documento idóneo para acreditar la experiencia laboral en el Órgano Judicial es la Carta de Trabajo expedida por Carrera Judicial.

En resolución de fecha 14 de agosto de 1995, dictada por la Sala de Negocios Generales en el Recurso interpuesto por DELSA LÓPEZ en contra de la resolución N° 21-95 dictada por la Comisión de Personal del Primer Distrito Judicial, Ramo Penal de Panamá, esta Magistratura opinó en cuanto a la certificación de experiencia laboral expedida por Carrera Judicial dentro del Órgano Judicial lo siguiente:

"... el documento idóneo para comprobar el tiempo laborado en el Órgano Judicial es la certificación que expide Carrera Judicial, ya que consta en dicha certificación los siguientes datos:

1. El cargo que ocupa al momento del concurso,

2. Que efectivamente labora en la Institución al momento de celebrarse el concurso.
3. El tiempo laborado, para los efectos del puntaje a ser valorados en concurso".

Por los hechos expuestos anteriormente, la Sala desestima el hecho tercero del recurso de apelación.

Al recurrente le fue correctamente valorado el nivel académico puesto que se le acreditaron 4 puntos. Con esto se demuestra que el señor Teófilo Samudio cumplió con uno de los requisitos del concurso para la posición de Archivista II del Órgano Judicial. Sin embargo, cumplir con los requisitos mínimos para participar en un concurso del Órgano Judicial no es suficiente para ingresar a la lista de los elegibles del concurso, ya que es necesario que el concursante presente la mayor cantidad de documentos que acrediten su experiencia y capacidad. Por lo tanto la Sala desestima el hecho cuarto del recurso de apelación.

En cuanto al hecho quinto del recurso de apelación, el recurrente afirma haber aportado pruebas de haber realizado labores de oficina por más de once (11) años y acreditó dicha prueba presentando carta de trabajo expedida por la señora Estrella de Estribí. Sin embargo, la Sala se muestra de acuerdo con el dictamen de la Comisión de Personal que se fundamenta en un dictamen de la comisión de Personal en acta N° 05-94 de 2 de junio de 1994, en la cual se establece como requisito principal que la Carta de Trabajo tenga membrete de la Compañía que la expide y para la cual se ha laborado o en su defecto que sean aportado las fichas de la Caja de Seguro Social o los talonarios de cheques de pago.

La Carta de Trabajo aportada por el recurrente carece de los requisitos antes mencionados para ser valorados por esta Magistratura. Por consiguiente la Sala desestima este cargo.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA en todas sus partes la Resolución N° 183-95 de fecha tres (3) de agosto de 1995 proferida por la Comisión de Personal del Primer Distrito Judicial, Ramo Civil, mediante el cual se determinó la lista de los seleccionables y no seleccionables del concurso 176-95 (Interno), posición 1870 de Archivista II del Departamento de Archivo del Órgano Judicial y ORDENA que una vez notificadas las partes involucradas en el presente negocio, se devuelve el mismo a la Secretaría de la Comisión de Personal para que se le otorguen los ulteriores trámites procesales aplicables a la materia.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

REPÚBLICA DE PANAMÁ

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE NEGOCIOS GENERALES

ACUERDO N° 6
DE 15 DE ENERO DEL AÑO DE 1996

En la Ciudad de Panamá, a los quince (15) días del mes de enero de mil novecientos noventa y seis (1996), se reunió la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia.

Abierto el Acto, el Magistrado Presidente, Doctor **ARTURO HOYOS**, hizo uso de la palabra a fin de manifestar que el motivo de la reunión era considerar la modificación de la estructura orgánica del área administrativa del Órgano Judicial, en miras de crear la **OFICINA DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS CONTRARIAS A LA ÉTICA JUDICIAL (OPCEJ).**

Sometida entonces, la propuesta presentada por el **Dr. ARTURO HOYOS**, en su calidad de **PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**, ésta recibió el voto unánime de los señores magistrados de la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, y en consecuencia se acordó aprobar la modificación del Acuerdo N° 9 de 12 de agosto de 1992, a través del cual se regula el Reglamento de Estructuración Administrativa del Órgano Judicial, en miras a crear la citada oficina. La modificación sería la siguiente:

ARTÍCULO 1: El artículo 1 del Acuerdo N° 9 de 12 de agosto de 1992, quedaría así:

> Artículo 1: Las instancias responsables de los servicios de apoyo administrativo del Órgano Judicial estarán a cargo de la secretaría administrativa, la dirección de auditoría interna, la dirección de informática, la dirección de la escuela judicial, la oficina de prevención de conductas contrarias a la ética judicial, las direcciones, departamentos, secciones y unidades adscritas a la secretaría administrativa y las dependencias que establezca la Ley y los reglamentos.

ARTÍCULO 2: Se adiciona el artículo 10-A, al Acuerdo N° 9 de 12 de agosto de 1992, cuyo tenor es el siguiente:

> Artículo 10-A: A fin de darle seguimiento al curso que siguen los diversos procedimientos administrativos por falta a la ética judicial que se tramiten en todos los tribunales del país, se crea la **OFICINA DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS CONTRATIAS A LA ÉTICA JUDICIAL (OPCEJ)**, responsable ante la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia.

ARTÍCULO 3: Se adiciona el artículo 10-B, al Acuerdo N° 9 de 12 de agosto de 1992, cuyo tenor es el siguiente:

> Artículo 10-B: Para desempeñar el cargo de Jefe de la Oficina de Prevención de Conductas Contraria a la ética judicial (OPCEJ), se requiere:
>
> a. Ser de nacionalidad panameña.
> b. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
> c. Ser graduado en Derecho.
> d. Tener certificado de Idoneidad expedido por la Corte Suprema de Justicia, y
> e. Las demás que exija el reglamento de carrera judicial.

ARTÍCULO 4: Se adiciona el artículo 10-C, al Acuerdo N° 9 de 12 de agosto de 1992, cuyo tenor es el siguiente:

Articulo 10-C: Esta oficina asumirá las siguientes funciones:

10-C.1. Darle seguimiento a todos y cada uno de los procedimiento administrativos que por falta a la ética judicial se tramiten en todos los tribunales del país.

10-C.2. Servir de organismo asesor sobre la correcta aplicación de las normas reguladoras del procedimiento administrativo que por falta a la ética judicial prevé el Código Judicial.

10-C.3. Procesar los informes periódicos que reciba de las instancias judiciales que se encuentran tramitando procesos administrativos por faltas a la ética judicial.

10-C.4. Levantar las estadísticas correspondientes sobre los procesos administrativos por faltas a la ética judicial entrados y salidos en los diferentes tribunales del país, como el contenido de sus fallos y su efectiva ejecución.

10-C.5. Reportar periódicamente al Presidente de la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia, el desarrollo y resultado de los procesos que contra la ética judicial se instauren en los diversos tribunales del país, en miras a que éste pueda coordinar las diversas acciones a ejecutar respecto a la prevención y educación en materia de ética judicial.

10-C.6. Informar al Presidente de la Sala de Negocios Generales, sobre cualquier conducta contraria a la ética judicial que llegue a conocimiento de la oficina, a fin de que el Presidente proceda según lo previsto en el Código Judicial, y

10-C.7. Cualquier otra función que le asigne el Presidente de la Sala Cuarta en relación a la ética judicial, respetando las atribuciones que el Código Judicial y la jurisprudencia constitucional del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, señalan en esta materia.

ARTÍCULO 5: El presente acuerdo entrará a regir a partir de su promulgación en el Registro Judicial y en la Gaceta Oficial.

Y no habiendo más nada que tratar, se dio por terminado el presente acto.

(fdo.) ARTURO HOYOS
Presidente de la Corte Suprema de Justicia

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
Presidente de la Sala
Primera de la Civil

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
Presidente de la Sala
Segunda de lo Penal

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACUERDO N° 137

De 28 de diciembre de 1995
Por medio del cual se nombra a las personas que formarán la lista de Jurados de Conciencia para el próximo período de 1996

En la ciudad de David, siendo las ocho -8:00- de la mañana de hoy, jueves veintiocho -28- de diciembre de mil novecientos noventa y cinco -1995-, se reunieron en Sala de Acuerdo, los Magistrados que integran el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, licenciado Salvador Domínguez Barrios, licenciado Asunción Castillo, licenciado Luis Mario Carrasco; y, la Secretaria del Tribunal, Licenciada Madeline Arabel Miranda Ortíz.

Abierto el acto, el Magistrado Presidente, licenciado Salvador Domínguez Barrios, manifestó que el objeto de la reunión era el de proceder al escogimiento de las personas que integrarán el cuerpo de jurados de conciencia para el próximo período de 1996, de conformidad con el artículo 2328 del Código Judicial.

Seguidamente se procedió a considerar el procedimiento a seguir para la conformación de la lista de jurados, con el fin de renovar la lista actual.

Como paso inicial se remitieron notas a las diferentes oficinas públicas y privadas de esta ciudad, a objeto de que suministrarán un listado del personal que en ellas laboran y que residen en el perímetro de la ciudad, a fin de reemplazar las que han sido eliminadas.

Asimismo, se eliminó de la lista de 1995, a aquellas personas que no residen en el área de la ciudad, a las de difícil localización y a las fallecidas, así como a las que en éstas ya no laboran. Agotado el traslado a los Fiscales Primero y Segundo Superior, y no habiendo objeciones a la misma, como resultado de la selección la lista de jurados de conciencia en orden alfabético para el año 1996, es la siguiente:

-A-

1.	ÁBREGO, BLADIMIR	CERV. BARU	4-132-500
2.	ÁBREGO, RENÉ	MORAZAN	
3.	ACOSTA, BELISARIO	ROMERO	4-160-502
4.	ACOSTA D., BERNARDO	AUTO CENTRO	8-237-1164
5.	ACOSTA, CARLOS ENRIQUE	BUDGET	4-745-351
6.	ACOSTA, CARLOS M.	UNIV. TEC.	4-128-1939
7.	ACOSTA, IDELIS Y.	DIR. TRABAJO	4-201-948
8.	ACOSTA R., JORGE W.	EMP. DE LEÓN	4-33-8368
9.	ACOSTA, JOSÉ ANTONIO	GUERRA Y CÍA	4-148-672
10.	ACOSTA, JULIO	MARTÍN ALBA	4-142-1110
11.	ACOSTA, LUIS	DIST. DEL NORTE	4-171-1731
12.	ACOSTA, MANUEL	DIGEDECOM	4-103-1930
13.	ACOSTA, NEFTALÍ	UNIV. TEC.	4-180-165
14.	ACOSTA, NERY (DE)	BCO. NAL.	4-132-454
15.	ACOSTA, STALIN	CONSA-UNACHI	4-125-1912
16.	ACUÑA, RODRIGO A.	EMP. DE LEÓN	4-232-95
17.	ADAMES, ALVARO	MIDA	4-132-2412
18.	AGUDO, DENILKA	RODELAG	4-179-859
19.	AGUILAR, AQUILES	UNACHI	4-71-268
20.	AGUILAR, DANIEL	MIDA-GANADERA	4-103-1926
21.	AGUILAR, DELMIRA	UNIV. TEC.	4-221-629
22.	AGUILAR G., MANUEL	EMP. DE LEÓN	4-136-1797
23.	AGUILAR, NIXIA (DE)	ESC. DOLEGUITA	
24.	AGUILAR, RAFAEL	UNACHI	4-66-172
25.	AGUILAR, ROSA (DE)	GOBERNACIÓN	4-157-820
26.	AGUIRRE R., ERICK	COLPAN	4-157-248
27.	AGUIRRE, RAÚL GONZALO	CERV. BARU	4-146-2284

28.	AISPURÚA, CARMEN	UNIV. TEC.	4-210-858
29.	AISPURÚA, IVÁN	BCO. NAL.	4-150-398
30.	AISPURÚA, MAYRA (DE)	MORAZAN	4-72-916
31.	AISPURÚA, OMAR	UNIV. TEC.	4-139-2492
32.	AISPURÚA, RUBIELA (DE)	BCO. NAL.	6-46-494
33.	AISPURÚA, YENMY	AGROQUIMICAS INT.	4-110-846
34.	ALANIS, ALBA ROSA	DIST. CH. UNIDA	4-124-2081
35.	ALBARRACIN, EVILA MA.	MAT. OSORIO	4-225-740
36.	ALEMÁN, EDMUNDO	UNIV. TEC.	E-6-423
37.	ALI, MAUREEM E. DE	FINANCIERA EL SOL	4-146-176
38.	ALLARD, EDILIA D.	LIB. REGIONAL	4-146-2438
39.	ALMENGOR, ALGIS	MORAZAN	4-91-564
40.	ALMENGOR, EINAR	HOSP. CHIRIQUÍ	4-227-418
41.	ALMENGOR, MARTÍN	COLPAN	4-154-732
42.	ALMENGOR, MILTON	M. O. P.	4-113-884
43.	ALMENGOR, MIREIRA	IRHE	4-120-1287
44.	ALMENGOR Z., RAMIRO	RODELAG	4-143-517
45.	ALMENGOR, ROGER	DIST. DEL NORTE	4-91-927
46.	ALMILLATEGUI, ILKA DE	MIVI	
47.	ALVARADO, ANETH	CERV. DEL BARU	4-206-769
48.	ALVARADO, AZAEL	AUTO CENTRO	4-161-950
49.	ALVARADO, CHRISTINE (DE)	UNACHI	E-4-1581
50.	ALVARADO, EBERTO	I. D. A. A. N.	4-101-1249
51.	ALVARADO, FRANCISCO	EDUCACIÓN	
52.	ALVARADO, GUIOMAR (DE)	VILA HERMANOS	4-72-405
53.	ALVARADO, KATINSKA (DE)	BCO. GENERAL	4-153-726
54.	ALVARADO, MARTHA	UNACHI	4-59-346
55.	ÁLVAREZ U., ANTONIO	A. S. S. A.	
56.	ÁLVAREZ, DORA	DIR. TRABAJO	4-125-2702
57.	ÁLVAREZ, EUCLIDES	DIR. TRABAJO	4-104-1401
58.	ÁLVAREZ, JUAN ALBERTO	NAT MÉNDEZ	4-268-002
59.	ÁLVAREZ, MARÍA ELENA	COM. E IND.	7-91-1129
60.	ÁLVAREZ, NIVIA	IRHE	4-145-947
61.	ÁLVAREZ, OSVALDO	TERMOPLÁSTICA	4-97-2194
62.	ANDERSON, GRACIELA DEL C.	BIPAN	4-217-763
63.	ANGUIZOLA, CARMEN (DE)	UNACHI	8-131-9174
64.	ANGUIZOLA, MARKELA (DE)	CAJA DE AHORROS	4-177-129
65.	ANZOLA M., ANDRÉS E.	UNIV. DEL ISTMO	8-107-174
66.	APARICIO, ANA TERESA	UNACHI (TARDE)	4-139-883
67.	APARICIO, CARLOS	MARTÍN ALBA	4-232-96
68.	APARICIO, ELIZABETH (DE)	UNACHI	4-196-867
69.	APARICIO, EYDA	ADMON-USMA	4-72458
70.	APARICIO, LUIS	TERMOPLÁSTICA	4-196-778
71.	APARICIO, MARITZA E.	IRHE	4-118-611
72.	APARICIO, MIGUEL	AUTO ACC. DAVID	4-227-532
73.	APARICIO, ROBERTO	BCO. GENERAL	4-246-509
74.	ARAGÓN, EDUARDO	TERMOPLÁSTICA	8-223-2289
75.	ARAÚZ, ABDIEL E.	TAGARÓPULOS	4-132-400
76.	ARAÚZ, AIXA DE	ERA, S. A.	4-146-179
77.	ARAÚZ, ALBA ELIZABETH	LIB. REGIONAL	4-240-514
78.	ARAÚZ, AURA G. (DE)	F. O. C.	
79.	ARAÚZ, BOLÍVAR	MORAZAN	4-58-694
80.	ARAÚZ, CLEMENTE	ESC. LOMA COLORADA	
81.	ARAÚZ, DAVID	IMPORT. LAS PERLAS	4-173-973
82.	ARAÚZ, EFIGENIO	DIR. TRABAJO	4-53-390
83.	ARAÚZ, ESTEBAN	UNIV. TEC.	4-142-1083
84.	ARAÚZ, ERASMO	UNIV. TEC.	
85.	ARAÚZ, FRANCISCA M. (DE)	A. S. S. A.	4-108-515
86.	ARAÚZ, GINEARLE	IMPORT. LAS PERLAS	4-138-238
87.	ARAÚZ, GUILLERMO	EMP. DE LEÓN	4-142-1246
88.	ARAÚZ, JUAN A.	MARTÍN ALBA	4-124-334
89.	ARAÚZ, LAILA	DIGEDECOM	4-217-574
90.	ARAÚZ, LEIDA	COL. N. SRA. ANG.	
91.	ARAÚZ, LUCRECIA DE	CAJA DE AHORROS	4-96-1380
92.	ARAÚZ, MAGALY	GRUPO BAMBINA	1-27-1629

93.	ARAÚZ, MANUEL	M. O. P.	4-139-893
94.	ARAÚZ, MARÍA E. (DE)	UNIV. TEC.	4-210-891
95.	ARAÚZ, NORMA (DE)	MORAZAN	8-138-631
96.	ARAÚZ, REINA (DE)	ESC. DOLEGUITA	
97.	ARAÚZ, ROBERTO	COOP. ECASESO	4-175-860
98.	ARAYA, FÁTIMA	UNACHI	8-265-690
99.	ARENA, JULIO CÉSAR	DIR. TRABAJO	
100.	ARMUELLES, MIRNA (DE)	INST. DAVID	
101.	AROSEMENA, ENRIQUE	EMP. DE LEÓN	4-137-421
102.	AROSEMENA, GALO A.	MIDA-REFORMA	4-138-1068
103.	AROSEMENA, MARINA DE	MIPPE	
104.	ARRACEDA P., GLADYS M.	LIB. REGIONAL	4-164-303
105.	ARRACERA P., ELÍAS	EDIT. CHIRIQUÍ	4-210-541
106.	ARROCHA, CLOTILDE	UNACHI	8-203-1634
107.	ATENCIO, ANAYANSI	CAJA DE AHORROS	4-84-825
108.	ATENCIO, ELIZABETH	DIST. DEL NORTE-USMA	4-108-868
109.	ATENCIO B., OVIDIO	LIB. REGIONAL	4-103-1895
110.	ÁVILA SÁNCHEZ, ELOY E.	LIB. REGIONAL	4-71-617
111.	ÁVILA, JOSÉ DE LA ROSA	CERV. DEL BARU	4-285-512
112.	AVILES, ORIEL	B. D. A.	4-142-1129
113.	AVILES, RÓGER	UNACHI	4-102-1103
114.	AYALA, PEDRO	FINANC. EL SOL	4-206-787
115.	AYALA, TERESA	UNACHI	4-207-864

-B-

116.	BALI S., MILIXA E.	MOT. DEL BARU	4-119-2096
117.	BARRANCO, ANA M.	BCO. GENERAL	8-343-392
118.	BARRAZA, GRACIELA	MORAZAN	4-204-137
119.	BARRAZA, ROSA G.	MUNICIPIO	4-88-472
120.	BARRERA A., DIOMEDES E.	CACECHI	4-225-91
121.	BARRÍA, EYDA JUDITH	ADMON-UNACHI	4-136-1275
122.	BARRÍA, RICARDO	UNIV. TEC.	4-137-2297
123.	BARRÍA, SANDRA (DE)	BCO. NACIONAL	7-85-1882
124.	BARRIOS, MARÍA C.	EDIT. CHIRIQUÍ	4-84-184
125.	BARRIOS, OMAR ENRIQUE	B U D G E T	4-158-559
126.	BARROSO P., ABDIEL E.	MIVI	4-119-1694
127.	BARROSO, MAGDA DE	IRHE	4-96-2336
128.	BARSALLO, AURA	CHASE MANHATTAN	8-366-168
129.	BARSALLO, OMAIRA I.	ADMON-UNACHI	9-149-844
130.	BATISTA, DIDIO	RODELAG	9-102-2770
131.	BATISTA M., DIÓGENES	CHASE	4-72-198
132.	BATISTA, ORLANDO	DIST. DEL NORTE	4-110-988
133.	BATISTA M., SOBEIDA	CACECHI	4-194-207
134.	BAULES, JUDITH	HOSP. CHIRIQUÍ	4-219-883
135.	BEITIA, CECILIA G. DE	UNIV. TEC.	4-133-61
136.	BEITIA, EMÉRITA	EDUCACIÓN	4-118-650
137.	BEITIA, OLGA MARIBEL	LIB. REGIONAL	4-230-698
138.	BEITIA, RAQUEL J. (DE)	EDUCACIÓN	4-122-2657
139.	BEITIA, ROSA	HOSP. CHIRIQUÍ	4-191-29
140.	BEITIA, LUIS E.	ADMÓN-UNACHI	4-154-259
141.	BEJERANO, SANDRA	I. P. T.	
142.	BENÍTEZ B., IMELDA E.	BRENES Y ASOC.	8-166-853
143.	BETHANCOURT, AIDA DE	F. ICAZA Y CÍA.	4-137-1742
144.	BETHANCOURT, ROCÍO	IRHE	4-125-2793
145.	BIANCO, MARICELA DE	BCO. NACIONAL	4-139-297
146.	BOLAÑOS, ANALIDA	A. S. S. A.	4-198-23
147.	BONAGAS, ETELVINA (DE)	UNACHI	
148.	BONAGAS, MAYRA	B. D. A.	4-120-2085
149.	BONAGAS, MITZELA	ESC. SAN CRIST.	
150.	BONILLA, AURISTELA	UNACHI	4-123-840
151.	BONILLA, DIMAS	ROMERO	4-145-191
152.	BONILLA, MYRNA Z.	LIB. REGIONAL	4-72-765
153.	BONILLA, NÉSTOR RAÚL	CACECHI, R. L.	4-255-368
154.	BOUCHE, LUIS EDUARDO	AVE. CENTENARIO	

155.	BRANDA CASTILLO, OTILIO	MAT. MONTERO	4-219-581
156.	BRAVO, ANA C. (DE)	BCO. GENERAL	4-138-1317
157.	BRAVO, OSCAR	MORAZAN	7-46-58
158.	BRISEÑO, CORANDINO	TERMOPLÁSTICA	4-82-771
159.	BRUÑA O., ISABEL MARÍA	EDIT. CHIRIQUÍ	4-700-1019
160.	BURKE, CARMEN	UNACHI	6-47-1218

-C-

161.	CABALLERO, ADOLFO	EDUCACIÓN	
162.	CABALLERO, ADRIANO	CERV. DEL BARU	4-224-77
163.	CABALLERO, ANAYANSI	TERMOPLÁSTICA	4-263-409
164.	CABALLERO, ARCENIO	COL. NUES. SRA. ANG.	4-64-956
165.	CABALLERO, VELKIS	IMPORT.LAS PERLAS	4-278-356
166.	CABALLERO, DENIS (DE)	CENT. AGRIC-ROMERO	
167.	CABALLERO, DIONISIO	CAJA DE AHORROS	4-76-925
168.	CABALLERO, EDISA	DIGEDECOM	4-110-494
169.	CABALLERO, EDNA	MARTÍN ALBA	4-142-1263
170.	CABALLERO, ELEUTERIO	MORAZAN	
171.	CABALLERO, ENRIQUE	CERV. BARU	4-75-980
172.	CABALLERO V., ERNESTINA	EDIT. CHIRIQUÍ	4-95-161
173.	CABALLERO, EVELIO	DIST. DEL NORTE	4-281-464
174.	CABALLERO, FRANCISCA DE	IRHE	1-15-900
175.	CABALLERO, GABRIELA	UNIV. TEC.	
176.	CABALLERO, GLORIA (DE)	MOT. DEL BARU	4-148-628
177.	CABALLERO, HUMBERTO	UNIV. TEC.	4-136-2290
178.	CABALLERO, JOSÉ	CAJA DE AHORROS	4-138-2312
179.	CABALLERO, JULIO C.	CERV. BARU	
180.	CABALLERO, KATIA	COOP. ECASESO	4-133-2691
181.	CABALLERO, MARVIN	ACERO CHIRIQUÍ	4-140-625
182.	CABALLERO, MIRIAM	DIR. TRABAJO	4-100-251
183.	CABALLERO, PEDRO	UNACHI	4-123-2487
184.	CABALLERO, RAQUEL B. DE	REPUESTOS DELTA	
185.	CABALLERO, RIPSI	UNIV. TEC.	4-215-71
186.	CABALLERO, ROBERTO	CHASE MANHATTAN	4-95-925
187.	CABALLERO, ROSA ELENA	UNACHI	8-274-350
188.	CÁCERES, ALCIBÍADES	EDIT. CHIRIQUÍ	4-136-1320
189.	CÁCERES, CRISTELA MIVI		
190.	CÁCERES, FÁTIMA (DE)	MIDA-INTER.	4-125-183
191.	CÁCERES M., LUIS J.	ASESA	4-257-524
192.	CALVO, RUBÉN	COCA-COLA	4-72-121
193.	CAMACHO C., CARLOS L.	AUTO CENTRO	4-112-898
194.	CAMARENA, OSCAR	CERV. BARU	1-16-550
195.	CAMARENA B., ROSALINDA	BRENES Y ASOC.	4-271-418
196.	CAMARGO, DIÓGENES	EDUCACIÓN	4-120-2321
197.	CAMARGO, ESMITH	UNACHI	4-120-2581
198.	CAMARGO, MARIANA (DE)	UNACHI	8-141-484
199.	CAMBRA, EVA MA. (DE)	ADMON-UNACHI	2-98-2288
200.	CAMPAÑA CALVO, CÉSAR	COM. E IND.	8-94-863
201.	CAMPAÑA, MIDIAM DE	IRHE	4-95-371
202.	CAMPAÑA, SARITA P.	ADMÓN-UNACHI	4-142-1663
203.	CAMPOS M., EVARISTO	CARDOZE & LINDO	4-276-107
204.	CANDANEDO, ARIEL	GUERRA Y CÍA	4-157-803
205.	CANDANEDO, GILBERTO	AUTOMUNDO LADA	4-176-747
206.	CANDANEDO G., NURIA L.	BRENES Y ASOC.	4-273-412
207.	CANO, DULIA	GUERRA Y CÍA	4-188-595
208.	CAPARROSO, ÁNGEL	MORAZAN	4-94-844
209.	CAPARROSO, CECILIA	MORAZAN	4-106-924
210.	CAPARROSO, JACKELINE	LIB. REGIONAL	4-137-595
211.	CARRASCO, CÉSAR	EDUCACIÓN	
212.	CARREÑO, ARGELIS DE	IRHE	4-142-2681
213.	CARREÑO, HERAIDO	UNACHI	4-121-2013
214.	CARRERA, ARLETY	INST. DAVID	
215.	CARRERA, EMMA E.	CACECHI	8-378-777
216.	CARRERA, MARLENY DE	LIB. REGIONAL	4-181-969

217.	CARRERA, NADIA	COL. NUES. SRA. ANG.	1-19-664
218.	CARRILO, DANIEL	UNACHI	8-419-188
219.	CASCANTE, ABDIEL A.	GOBERNACIÓN	4-176-628
220.	CASCANTE, MELVA C. (DE)	LIB. REGIONAL	4-136-2108
221.	CASÍS, LORENA	COLPAN	4-190-748
222.	CASTILLO, ABDIEL	F. ICAZA Y CÍA.	4-281-907
223.	CASTILLO, ADELA	LIB. REGIONAL	4-217-101
224.	CASTILLO, ALCIBÍADES	EDUCACIÓN	4-90-92
225.	CASTILLO V., AMADOR	GOBERNACIÓN	4-146-2039
226.	CASTILLO, AURELIO	DIR. PROV. CH.	4-105-229
227.	CASTILLO, CARLOS	REPUESTOS DELTA	4-137-1838
228.	CASTILLO, CECILIA DE	UNACHI	4-120-918
229.	CASTILLO, CÉSAR E.	AUTO CENTRO	4-139-22
230.	CASTILLO, CLOTILDE DE	UNACHI	8-132-247
231.	CASTILLO, DAMARIS (DE)	INST. DAVID	
232.	CASTILLO, DEMESIO	CERV. BARU	4-104-1717
233.	CASTILLO, DIEGO	F. O. C.	4-119-2692
234.	CASTILLO, DIONEL	ACERO CHIRIQUÍ	
235.	CASTILLO, EDANELIS	DIST. DEL NORTE	4-136-2050
236.	CASTILLO, EDITH (DE)	MORAZAN	4-84-744
237.	CASTILLO, EDWIN	W. H. DOEL	4-151-64
238.	CASTILLO, ELIÉCER	EDUCACIÓN	
239.	CASTILLO, ENRIQUE	DIST. DEL NORTE	4-212-45
240.	CASTILLO, EVA H. DE	UNIV. TEC.	4-116-1939
241.	CASTILLO CH., GABRIEL	AUTO CENTRO	4-236-777
242.	CASTILLO, GUMERCINDO	MUNICIPIO	
243.	CASTILLO, HERADIO	UNACHI	4-165-744
244.	CASTILLO, JOSÉ A.	MIVI	
245.	CASTILLO, LETICIA C.	MOT. DEL BARU	
246.	CASTILLO, LOURDES DE	IRHE	4-126-1148
247.	CASTILLO, LUIS A.	MITSUMOTOR	4-91-439
248.	CASTILLO, MARY DE	COOP. ECASESO	4-167-476
249.	CASTILLO, MELQUIADES	CAJA DE AHORROS	4-146-175
250.	CASTILLO, MOISÉS	UNACHI	
251.	CASTILLO, NICOLÁS	ADMON-USMA	
252.	CASTILLO, RODRIGO	UNACHI	4-59-279
253.	CASTILLO, RUBÉN G.	AUTO ACC. DAVID	4-137-2559
254.	CASTILLO, SILVANA DE	CERV. BARU	4-125-533
255.	CASTILLO, TOMÁS	DIGEDECOM	4-118-2203
256.	CASTILLO, VEXI (DE)	BCO. NACIONAL	2-89-1274
257.	CASTILLO, VÍCTOR	AGROQUIMICAS INT.	4-229-303
258.	CASTILLO, VILMA	MIN. TRABAJO	4-95-610
259.	CASTILLO, YOVANY A.	MARTÍN ALBA	
260.	CASTRELLÓN, EDWIN	DIGEDECOM	4-142-1385
261.	CASTRO, BELGIS	UNACHI	7-79-362
262.	CASTRO, ZORAYA	HOSP. CHIRIQUÍ	4-203-982
263.	CEDEÑO, ALEJANDRO	CERV. DEL BARU	
264.	CEDEÑO, BÉLGICA	DIGEDECOM	8-112-873
265.	CEDEÑO, FELICIA	P. CICLO FRANCIA	4-70-664
266.	CEDEÑO, LISSI GRETEL	DIR. DE TRABAJO	8-235-53
267.	CEDEÑO, ROBERTO	BMW-EUROPARTES CH.	4-142-2040
268.	CEDEÑO, TERESA	MORAZAN	4-102-2101
269.	CERRUD, AMILCAR	A. S. S. A.	4-101-1485
270.	CERRUD, ANEL	CHASE MANHATTAN	4-112-795
271.	CERRUD, ONILDA	ADMON-USMA	4-1110-877
272.	CIANCA, EDUARDO	REPUESTOS DELTA	4-142-324
273.	COCHERÁN, VICENTA DE	IRHE	4-79-912
274.	COHEN, DONNA B. (DE)	A. S. S. A.	4-128-1168
275.	COLBERG S., RHETT G.	GRUPO SILABA	4-192-213
276.	COLÓN, BLANCA	IRHE	4-110-440
277.	CONCEPCIÓN, ITZA	MIVI	
278.	CONCEPCIÓN, YESSENIA	DIR. TRABAJO	4-146-2741
279.	CONTRERAS, BERNARDO	FINANCIERA EL SOL	4-201-149
280.	CONTRERAS, CORALIA DE	DIST. DEL NORTE	4-101-2186
281.	CONTRERAS, ELÍAS	CERV. DEL BARU	4-72-777

282.	CONTRERAS, ELIZABETH DE	LIB. REGIONAL	4-108-592
283.	CONTRERAS, ELVIS	CERV. DEL BARU	4-138-2208
284.	CONTRERAS, ISABEL DE	DIR. TRABAJO	4-68-706
285.	CONTRERAS, ONELIA	MIN. TRABAJO	4-124-781
286.	CONTRERAS, ROBERTO L.	COLABANCO	4-120-1105
287.	CÓRDOBA, CÉSAR	U S M A	8-106-97
288.	CÓRDOBA, EDWIN E.	MOT. DEL BARU	4-146-306
289.	CÓRDOBA, ERICK	GUERRA Y CÍA	4-145-39
290.	CÓRDOBA, MARCELINO	COLPAN	4-243-574
291.	CÓRDOBA, RUBIELA	BCO. NACIONAL	6-46-494
292.	CORELLA, ANTOLINO	MIN. TRABAJO	4-121-2138
293.	CORIAT, CAROLA	UNACHI	4-109-334
294.	CORONADO, IRIS ISCELA	UNIV. TEC.	8-205-1451
295.	CORRALES, RICARDO	IMPORT. LAS PERLAS	4-248-694
296.	CORREA, EIBAR	TERMOPLÁSTICA	4-136-1216
297.	CORREA, REINA	INST. DAVID	8-192-433
298.	CORREDOR, CARLOS	UNACHI	4-72-992
299.	CORTEZ, MILVIA E.	HOSP. CHIRIQUÍ	4-150-852
300.	CORTEZ, RITA	BCO. NACIONAL	4-142-926
301.	CORTEZ, ROSA (DE)	B. D. A.	
302.	CRUZ, VIELKA	BCO. NAL.	4-116-1687
303.	CUBILLA, FAUSTO	COLPAN	4-138-1064
304.	CUBILLA, GLADYS DE	ROMERO	4-103-584
305.	CUBILLA, LORENA	COL. NUES. SRA. ANG.	4-220-600
306.	CUMBRERA, IRIS (DE)	UNACHI	8-143-624

-CH-

307.	CHACÓN, RUBIELA	CACECHI	4-186-457
308.	CHANIS, ELÍAS	INST. DAVID	8-166-239
309.	CHANIS, MABEL DE	MORAZAN	4-103-478
310.	CHAVARRÍA, ALVARO	BCO. NACIONAL	4-87-199
311.	CHAVARRÍA, ENEIDA	U. LATINA	4-148-664
312.	CHAVARRÍA, ENRIQUE	UNACHI	4-191-284
313.	CHÁVEZ, YESSICA L.	BIPAN	4-248-647
314.	CHOY, NELFANY (DE)	UNACHI	4-125-923

-D-

315.	DEAGO, CARLOS	IMPORT. LAS PERLAS	4-268-623
316.	DE ARCO, ADA C. (DE)	BCO. EXTERIOR	4-168-598
317.	DE ARCO, MIRTHA	P. CICLO DAVID	
318.	DE GRACIA, ELIXA (DE)	UNACHI	4-145-111
319.	DE GRACIA, GONZALO	MORAZAN	
320.	DE GRACIA, JORGE LUIS	EDUCACIÓN	
321.	DE GRACIA, LEILA (DE)	EDUCACIÓN	
322.	DE GRACIA, MAYRON O.	BMW EUROPARTES CH.	4-181-872
323.	DE GRACIA, MILENA	MARTÍN ALBA	
324.	DE GRACIA R., NEHIL	BRENES Y ASOC.	4-256-930
325.	DE GRACIA, NIDYA	COL. NUESTRA SRA. A.	4-136-2753
326.	DE LEÓN, ALEXIS	COLPAN	4-138-2039
327.	DE LEÓN, LILY (DE)	ESC. SAN CRISTÓBAL	
328.	DE LEÓN, NILO	CITIBANK	
329.	DE LEÓN, YARDELIS	IMPORT.LAS PERLAS	4-727-1468
330.	DEL CID, ALMA	UNIV. LATINA	4-92-207
331.	DEL CID, JOSÉ CAMILO	MAT. OSORIO	
332.	DEL CID, MARÍA ELENA	COOP. ECASESO	4-141-4659
333.	DEL CID, ROCÍO	TAGARÓPULOS	4-277-622
334.	DELGADO, ANA CECILIA	BIPAN	4-255-938
335.	DELGADO, DORILA (DE)	UNACHI	4-95-716
336.	DELGADO, EDGAR	TERMOPLÁSTICA	4-169-186
337.	DELGADO, LIDIA	MORAZAN	4-93-228
338.	DELGADO, ROBERTO	PANAMOTOR	4-103-753
339.	DEL VALLE, XENIA S.	COL. NUES. SRA. ANG.	4-106-413
340.	DE ROUX, MELVA (DE)	UNIV. TEC.	4-165-871

341.	DE ROUX, MICELA P.	EMP. DE LEÓN	1-25-2041
342.	DE SANTIAGO, BEAUTY DE	ADMON-UNACHI	
343.	DÍAZ, AURA (DE)	ADMON-UNACHI	4-108-315
344.	DÍAZ, MARÍA	FINANC. EL SOL	4-159-349
345.	DÍAZ C., MARIO	ELÉCTRICO CABALLERO	4-721-198
346.	DÍAZ, OTILIO	CERV. DEL BARU	4-189-112
347.	DIEZ, ESPERANZA	UNIV. LATINA	4-155-1324
348.	DIEZ, TELVIA (DE)	UNACHI	
349.	DIEZ, TOMÁS	UNACHI	
350.	DOMÍNGUEZ, ARTURO	UNACHI	3-61-788
351.	DOMÍNGUEZ, GISSELLE H.	MIPPE	
352.	DONALDS, ENRIQUE	COL. NUES. SRA. ÁNG.	3-75-856
353.	DONALDS, ESTHER (DE)	MIVI	
354.	DONOSO, TATIANA (DE)	UNIV. TEC.	N-18-349

-E-

355.	ECHEVERRÍA, NELLY DE	IRHE	4-108-899
356.	ESCOBAR, FRANCISCO	BCO. NACIONAL	8-421-747
357.	ESCUDE, RUTH (DE)	A. S. S. A.	4-139-1831
358.	EHRMAN, JOSÉ	B. D. A.	
359.	ESPINOZA, BERTHA	HOSP. CHIRIQUÍ	4-219-803
360.	ESPINOSA, ILEANA	CACECHI	4-25-903
361.	ESPINOSA, ILUMINADA	IRHE	4-124-120
362.	ESPINOSA, TRINIDAD DE	MORAZAN	4-117-414
363.	ESPINOZA, ROSA	IMPORT. LAS PERLAS	4-138-1345
364.	ESPINOZA, YADIRA	P. CICLO V. LORENZO	
365.	ESQUIVEL, ANA ELIDA	LIB. REGIONAL	4-271-598
366.	ESQUIVEL, IDIS (DE)	UNACHI	
367.	ESQUIVEL, DAYSI M. DE	I. P. T. (DIURNO)	
368.	ESQUIVEL, ITZEL	INST. DAVID	4-88-44
369.	ESQUIVEL, INÉS	MIVI	
370.	ESQUIVEL, LUTZIA	U. S. M. A.	4-113-390
371.	ESQUIVEL, ROBERTO	U. S. M. A.	4-141-179
372.	ESTEVEZ, BENITO	MUEB. CENTRAL	
373.	ESTRADA, JUAN	ESC. LASSONDE	
374.	ESTRIBÍ, VICTORIA DE	M. O. P.	
375.	EVANS C., RAFAEL	EMP. DE LEÓN	4-213-438

-F-

376.	FANOVICH, GLORIA DE	MOT. DEL BARU	4-103-573
377.	FRAGO M., SANTIAGO	GRUPO SILABA	4-292-75
378.	FLORES, AGUSTÍN	GUERRA Y CÍA	4-123-2294
379.	FLORES, ANA Mª DE	F. ICAZA Y CÍA.	8-236-576
380.	FLORES, DIMAS	EDUCACIÓN	4-103-2575
381.	FLORES, OFELIA	EDUCACIÓN	4-86-67
382.	FONSECA, GREGORIO	ADMÓN-UNACHI	4-65-612
383.	FOSSATTI, LUCINIA DE	EDUCACIÓN	
384.	FOSSATY, RUBIELA	MIN. TRABAJO	4-234-870
385.	FRAGO, SANTIAGO	ACERO CHIRIQUÍ	4-75-453
386.	FRANCESCHI, FRANCIA DE	INST. DAVID	4-82-303
387.	FRANCESCHI, GIONELA	ERA, S. A.	4-219-95
388.	FRANCESCHI, IRIS C. DE	BUDGET	4-138-1369
389.	FRANCESCHI, SUSANA DE	EDUCACIÓN	4-58-78
390.	FUENTES, NADIA DE	MINI	
391.	FUENTES, NIXIA	DIGEDECOM	4-90-702
392.	FUENTES, RUBÉN	BCO. NAL.	4-95-152
393.	FUENTES, WILMAR	BCO. NAL.	

-G-

394.	GAITÁN, MARIBEL	EDUCACIÓN	4-239-234
395.	GAITÁN, ROSA S. DE	BRENES Y ASOC.	4-101-703
396.	GÁLVEZ, CÉSAR	INST. DAVID	

397.	GÁLVEZ M., MARÍA DE	EDUCACIÓN	4-68-172
398.	GALLARDO, ALICIA	CAJA DE AHORROS	4-155-1710
399.	GALLARDO, JOSÉ A.	EDUCACIÓN	4-101-2382
400.	GALLARDO, SERGIO	COL. NUES. SRA. ANG.	4-197-867
401.	GALLARDO, XIOMARA (DE)	UNIV. TEC.	1-16-206
402.	GARCÍA, ANDERSON	I. R. H. E.	7-74-92
403.	GARCÍA, CARLOS	I. P. T.	9-801-339
404.	GARCÍA, ENILDA DE	M. MILAGROSA	
405.	GARCÍA, NÉSTOR	A. S. S. A.	
406.	GARCÍA Q., RODRIGO	PALIC	
407.	GARCÍA, SUSANA	UNIV. TECNOLÓGICA	4-294-1914
408.	GARCÍA, VÍCTOR	MIN. TRABAJO	4-294-2423
409.	GARCÍA, VIELKA	BANCO DEL ISTMO	4-212-243
410.	GIOVANI, NELSON	CITIBANK	4-96-646
411.	GÓMEZ, ADOLFO I.	RICARDO PÉREZ	
412.	GÓMEZ, ANDY	U. S.M. A.	
413.	GÓMEZ, ÁNGEL ABDIEL	UNACHI	
414.	GÓMEZ, CARLOS	I. D. A. A. N.	
415.	GÓMEZ M., CECILIA	UNIV. TEC.	4-120-641
416.	GÓMEZ R., CRISPÍN	EDIT. CHIRIQUÍ	9-60-577
417.	GÓMEZ, EIDIM NODIER	AUTOMUNDO LADA	4-179-722
418.	GÓMEZ, ESMERALDO	CERV. DEL BARU	4-77-598
419.	GÓMEZ, FILDER E.	UNIV. TEC.	4-157-478
420.	GÓMEZ, FILIBERTO	UNACHI	4-84-814
421.	GÓMEZ, MARIO	MIDA-PLANIF.	
422.	GÓMEZ, MIGUEL	COCA-COLA	
423.	GÓMEZ, OTILIA	EDUCACIÓN	
424.	GONZÁLEZ, ALFREDO	DIST. DEL NORTE	4-238-219
425.	GONZÁLEZ DE M., ÁNGEL	UNACHI	8-139-347
426.	GONZÁLEZ, ARMANDO L.	MIN. TRABAJO	4-164-240
427.	GONZÁLEZ, AURELIO	GUERRA Y CÍA	4-204-162
428.	GONZÁLEZ, BELSY	BCO. GENERAL	4-98-931
429.	GONZÁLEZ, BERTA	UNACHI	
430.	GONZÁLEZ, CIRILA	B. D. A.	
431.	GONZÁLEZ, CORALIA	TOCHISA	
432.	GONZÁLEZ, DIOSELINA DE	ROMERO CENTRAL	4-107-999
433.	GONZÁLEZ, EDITH DE	MARTIN ALBA	
434.	GONZÁLEZ Z., EDUARDO	BCO. NACIONAL	4-101-2149
435.	GONZÁLEZ, ELIZABETH DE	BCO. NACIONAL	4-242-173
436.	GONZÁLEZ D., ENEMESIO	MUEB. PARÍS	
437.	GONZÁLEZ, ERICK	TERMOPLÁSTICA	4-108-844
438.	GONZÁLEZ, EVANGELINA	RODELAG	
439.	GONZÁLEZ, GLADYS	MITSUMOTOR	4-70-599
440.	GONZÁLEZ, GLADYS DE	ROMERO	4-88-304
441.	GONZÁLEZ, GREGORIO	UNIV. TEC.	
442.	GONZÁLEZ F., GUILLERMO	PLÁSTICOS LEÓN	
443.	GONZÁLEZ, IRIA G. (DE)	TOCHISA	4-105-260
444.	GONZÁLEZ, JOAQUÍN	CONSA-EDUCACIÓN	2-78-1358
445.	GONZÁLEZ B., JORGE A.	LIB. REGIONAL	4-184-988
446.	GONZÁLEZ, JORGE LUIS	MOT. DEL BARU	
447.	GONZÁLEZ, JOSÉ	F. O. C.	
448.	GONZÁLEZ, LIDIA	LIB. REGIONAL	4-113-335
449.	GONZÁLEZ, LUCINIO	EDUCACIÓN	
450.	GONZÁLEZ, LUIS	GRUPO BAMBINA	4-46-682
451.	GONZÁLEZ, LUIS FERNANDO	DIR. TRABAJO	
452.	GONZÁLEZ, MAIELA	MIVI	
453.	GONZÁLEZ, MARÍA	FINANC. EL SOL	4-179-442
454.	GONZÁLEZ, MARÍA E. DE	PROV. DEL BARU	
455.	GONZÁLEZ, MARIBEL	BCO. GENERAL	2-82-194
456.	GONZÁLEZ, MARITZA	UNACHI	4-126-722
457.	GONZÁLEZ, MARITZA	DIGEDECOM	9-178-157
458.	GONZÁLEZ, MARLENYS	CAJA DE AHORROS	4-223-95
459.	GONZÁLEZ, MARTA (DE)	MARTIN ALBA	
460.	GONZÁLEZ, MITZI	ASESA	4-191-021
461.	GONZÁLEZ, OLGA (DE)	DIST. DEL NORTE	4-98-2163

462.	GONZÁLEZ, OLIVIA	FINANCIERA EL SOL	4-160-692
463.	GONZÁLEZ G., PABLO E.	O T E I M A	4-142-1261
464.	GONZÁLEZ, PEDRO	UNACHI	4-128-1245
465.	GONZÁLEZ, REGINO	CACECHI	4-165-803
466.	GONZÁLEZ, ROLANDO E.	AUTO ACC. DAVID	4-257-077
467.	GONZÁLEZ, ROSARINA	EDUCACIÓN	
468.	GONZÁLEZ, SIELKA IVETH	RIEGOS CHIRICANOS	1-37-448
469.	GONZÁLEZ, TELMO	A. S. S. A.	
470.	GONZÁLEZ, VALEZCA	FINANC. EL SOL	1-31-285
471.	GONZÁLEZ, ZENÓN	MIPPE	
472.	GRANADOS, GLORIA	BAVARIAN MOTORS	
473.	GRIMAS, GLADYS	CONSA	4-100-1138
474.	GUERRA S., ABDIEL	UNIV. TEC.	4-137-278
475.	GUERRA, ANA MARÍA	AUTOMUNDO LADA	4-128-1070
476.	GUERRA, BELKYS	MARTIN ALBA	4-276-561
477.	GUERRA, CARMEN B. DE	ROMERO	
478.	GUERRA, DAYSI (DE)	MORAZAN	
479.	GUERRA, DIOMEDES	ROMERO	4-164-345
480.	GUERRA, EDWIN	UNACHI	
481.	GUERRA, ELGA	COOP. ECASESO	4-287-455
482.	GUERRA, ELIZABETH	MARTIN ALBA	
483.	GUERRA, ELSA	UNACHI	
484.	GUERRA, FALCONERY	DIGEDECOM	
485.	GUERRA, FELÍCITO	ACERO CHIRIQUÍ	4-102-1597
486.	GUERRA, HÉCTOR	FOC, MORAZAN-EDUC.	4-132-1557
487.	GUERRA, MARÍA LUISA	ADMON-U. TEC.	9-107-2777
488.	GUERRA, MIGUEL	B. D. A.	
489.	GUERRA, NUBIA	DIST. CH. UNIDA	4-168-548
490.	GUERRA, PEDRO	LAS MONJAS O UNACHI	
491.	GUERRA, PLINIO	CERV. DEL BARU	4-203-83
492.	GUERRA, RUTH	MORAZAN	4-101-1585
493.	GUERRA F., SANTANA	UNACHI	4-138-1310
494.	GUEVARA, ROBERTO	UNACHI	4-118-2274
495.	GUEVARA, VIELKA (DE)	UNACHI	
496.	GUILBAUTH, INGRID	LIB. REGIONAL	8-428-34
497.	GUILLÉN, MARCO TULIO	UNACHI	8-442-291
498.	GUILLÉN, SHIRLEY	BCO. NAL.	4-104-1458
499.	GURUCHAGA, VIRGILIO	MORAZAN	4-100-1262
500.	GUTIÉRREZ, ABDIEL	EMP. DE LEÓN	4-138-1273
501.	GUTIÉRREZ, AMABELIS DE	HNOS. PINZÓN	
502.	GUTIÉRREZ, IMELDA	LIB. REGIONAL	4-90-282
503.	GUTIÉRREZ, MARCELINA	MAT. OSORIO	
504.	GUTIÉRREZ, SONNY	ASESA	4-171-856
505.	GRANADOS, ARKEL	GRUPO BAMBINA	PE-11-63

-H-

506.	HENRÍQUEZ, LEILA	I. P. T.	
507.	HENRÍQUEZ, LUIS	PALIC	
508.	HERNÁNDEZ, ABDIEL	DIST. DEL NORTE	4-164-505
509.	HERNÁNDEZ, ANDRÉS	MOT. DEL BARU	4-104-2518
510.	HERNÁNDEZ, ISABEL M. DE	EDIT. CHIRIQUÍ	4-106-610
511.	HERNÁNDEZ, GREGORIO	MOT. DEL BARU	8-375-914
512.	HERNÁNDEZ, IRIS	EDIT. CHIRIQUÍ	
513.	HERNÁNDEZ, LUISA P.	DE EDUCACIÓN	
514.	HERNÁNDEZ, MANUEL S.	MAT.OSORIO	
515.	HERNÁNDEZ, MARINA	LIB. REGIONAL	4-121-1609
516.	HERNÁNDEZ, RAÚL ERNESTO	EDIT. CHIRIQUÍ	4-200-414
517.	HERNÁNDEZ, ROBERTO	MOT. DEL BARU	4-58-604
518.	HERRERA, ITZA C.	MIDA-AEROP.	4-717-717
519.	HERRERA, MANUEL	TERMOPLÁSTICA	4-117-099
520.	HERRERA, MARÍA Y. DE	UNACHI	4-88-491
521.	HERRERA, OSCAR	UNIV. TEC.	1-14-677
522.	HERRERA, ROMUALDA DE	EDUCACIÓN	4-97-469
523.	HERRERA, ROSA DENIS DE	MIDA-AEROP.	4-111-669

524.	HERRERA, ROSEMARY DE	UNIV. TEC	4-138-1154
525.	HIDALGO, EVA DE	IRHE	4-101-235
526.	HISLOP, FRANKLIN	UNIV. TEC.	4-140-696
527.	HISLOP, GABRIELA DE	UNIV. TEC.	4-161-375
528.	HORNA, BENIGNO	VILA HERMANOS	4-109-780
529.	HORNA, MARTÍN	BCO. DEL ISTMO	4-149-533

-I-

530.	IBARRA, ABDIEL E.	BCO. NACIONAL	4-142-1343
531.	IBARRA, FRANCIA	LIB. REGIONAL	4-254-65
532.	IBARRA M., GLADYS	MORAZAN O CONSA	4-75-765
533.	IGLESIAS, CARLOS	UNACHI	3-71-005
534.	IGLESIAS, MARÍA F. DE	UNACHI	4-132-1109

-J-

535.	JAÉN, ARISTIDES	UNACHI	4-224-409
536.	JAÉN, CARMEN DE	F. O. C.	
537.	JAÉN, CIRO	CHASE MANHATTAN	4-68-654
538.	JAÉN, DARLIN S.	CACECHI	4-116-1108
539.	JAÉN, RODERICO A.	CACECHI	8-326-515
540.	JARAMILLO, IRIS N.	CAJA DE AHORROS	4-137-353
541.	JARAMILLO V., JORGE	NIVARDO JARAMILLO	
542.	JARAMILLO, LEILA ITZEL	DIR. TRABAJO	4-143-710
543.	JARAMILLO P., LEYLA	MIN. TRABAJO	4-143-71O
544.	JIMÉNEZ, ALEXIS	UNACHI	7-52-900
545.	JIMÉNEZ, CARMEN A. DE	MED. MILAGROSA	4-91-394
546.	JIMÉNEZ, JAIME	AUTO CENTRO	2-56-506
547.	JIMÉNEZ, JULIO	IMPORT. LAS PERLAS	
548.	JIMÉNEZ, MARIANELA C.	AUTO CENTRO	4-235-855
549.	JIMÉNEZ, PATRICIA	FINANCIERA EL SOL	4-234-743
550.	JIMÉNEZ, SIBELYS	DIGEDECOM	4-122-180
551.	JONES, JORGE LUIS	CERV. DEL BARU	4-285-512
552.	JORDAN, ANTONINO	COL. N. SRA. ANG.	4-219-636
553.	JORDAN, REXNEL	CERV. DEL BARU	4-211-633
554.	JOVANÉ, HILDA G. (DE)	MED. MILAGROSA	
555.	JOVANÉ, MARGARITA	IRHE	8-155-457
556.	JUÁREZ, ILVIN	ESC. JOSÉ MA. ROY	
557.	JURADO, AMAEL	MOT. DEL BARU	4-153-403
558.	JURADO TROYA, FIDEL	EMP. DE LEÓN	4-125-1273
559.	JURADO, LILFANA M. DE	CAJA DE AHORROS	8-176-263
560.	JURADO, RUFINO	EMP. DE LEÓN	4-735-338
561.	JUSTAVINO S., ALBIN Y.	EDIT. CHIRIQUÍ	4-171-73
562.	JUSTAVINO, ECCEL DE	IRHE	4-158-303
563.	JUSTAVINO, MIRNA	WH DOEL	4-712-2220
564.	JUSTINIANI, ENILDA	TERMOPLÁSTICA	4-209-636

-L-

565.	LANDERO, ARLETTYS	MIN. TRABAJO	8-232-162
566.	LARA, GABRIEL	DIGEDECOM	4-119-920
567.	LARA, JOSÉ	MUNICIPIO	
568.	LARA, MARÍA C. (DE)	COL. NUESTRA SRA. A.	
569.	LARA, MARIO	M I D A	4-72-327
570.	LAU, FEDERICO	UNIV. TEC.	3-74-2185
571.	LAY, OMAYRA (DE)	UNACHI	4-75-454
572.	LEDEZMA, BELKIS Q. DE	GRUPO BAMBINA	4-225-532
573.	LEDEZMA, HÉCTOR	MORAZAN	4-85-497
574.	LEDEZMA R., MAYELÍN	MAT. MONTERO, S. A.	4-235-283
575.	LEIVA, JULIO ALBERTO	MIDA	4-82-758
576.	LESCURE P., LORENA L.	AUTO ACC. DAVID	4-227-932
577.	LEZCANO, CECILIA	I. P. T.	
578.	LEZCANO C., EDUARDO	MIN. DE TRABAJO	4-129-1967

579.	LEZCANO, IDALIA (DE)	MOT. DEL BARU	
580.	LEZCANO, IDALIDES	UNACHI	
581.	LEZCANO, JOSÉ GIL	CERV. BARU	
582.	LEZCANO, JOSÉ	MIDA-AEROP.	4-120-73
583.	LEZCANO, JUAN	COOP. ECASESO	
584.	LEZCANO, JUAN E.	MUNICIPIO	4-126-2011
585.	LEZCANO, JULIO	CECECHI	4-231-814
586.	LEZCANO, MARÍA C.DE	EDUCACIÓN	
587.	LEZCANO, MIRTA DE	GRUPO BAMBINA	2-58-687
588.	LEZCANO, OLMEDO	I. P. T.	4-79-935
589.	LEZCANO, QUERUBE V. DE	AUTO CENTRO	4-237-856
590.	LINARES, ROBERTO	ERA, S. A.	4-138-1336
591.	LIZONDRO, FIDELINA DE	MED. MILAGROSA	
592.	LIZONDRO, HARMODIO	BCO. GENERAL	4-183-533
593.	LIZONDRO, ILIANA G. DE	EDIT. CHIRIQUÍ	4-272-120
594.	LOO M., RODERICK D.	MAT. OSORIO	4-137-568
595.	LÓPEZ, ANA CECILIA	UNACHI	
596.	LÓPEZ, ARLETHYS (DE)	DIR. TRABAJO	
597.	LÓPEZ, DIMAS A.	BCO. NAL.	4-116-2237
598.	LÓPEZ, HERMINIO	MUEB. EUROPEA	
599.	LÓPEZ, MEIVIS (DE)	U. S. M. A.	4-45-973
600.	LÓPEZ VARGAS, RAFAEL	I. S. A.	
601.	LOZANO, ESTHER (DE)	MARTIN ALBA	1-22-1524

-M-

602.	MADRID, AMBROSIO	TALLER MADRID	4-91-351
603.	MADRID, ANDY	F. O. C.	
604.	MADRID, DELVA DE	AUTO CENTRO	4-76-170
605.	MADRID, FRANCISCO	EDIT. CHIRIQUÍ	
606.	MADRID, JORGE	F. RODRÍGUEZ	4-166-128
607.	MADRID, NEISA DE	CEDULACIÓN	4-106-581
608.	MADRID, OSCAR	MOT. DEL BARU	4-135-2503
609.	MALKA, NEOLA (DE)	MORAZAN	4-97-1332
610.	MARRONE, ANDREA C.	AMWAY-DAVID	
611.	MARQUÍNEZ, RÉGULO	CERV. CHIRICANA	4-91-767
612.	MARTEZ B., ELOY	CARDOZE & LINDO	4-152-88
613.	MARTEZ, REINA DE	M. O. P.	4-118-691
614.	MARTIN JR., ADRIÁN	COCA-COLA	6-53-855
615.	MARTÍNEZ, AGUSTÍN A.	EDUCACIÓN	
616.	MARTÍNEZ, ALCIBÍADES	MOT. DEL BARU	4-137-1961
617.	MARTÍNEZ, ALVARO	PABLO EMILIO (TARDE)	4-97-2566
618.	MARTÍNEZ, ANA LEILA	COLPAN	4-178-215
619.	MARTÍNEZ Z., CECILIO	EMP. DE LEÓN	4-204-233
620.	MARTÍNEZ, DENIS	INST. DAVID	
621.	MARTÍNEZ, FERNANDO	CERV. BARU	4-126-716
622.	MARTÍNEZ, GLADYS (DE)	MORAZAN	
623.	MARTÍNEZ, JOSÉ M.	DIST. DEL NORTE	4-266-878
624.	MARTÍNEZ, JOSÉ	MITSUMOTOR	4-228-184
625.	MARTÍNEZ, JUAN DE DIOS	ESC. LASSONDE	
626.	MARTÍNEZ, LUIS	F. O. C.	
627.	MARTÍNEZ, LUZMILA DE	RODELAG DAVID	4-153-548
628.	MARTÍNEZ, MABEL	ACERO CHIRIQUÍ	
629.	MARTÍNEZ, MELVIN	TERMOPLÁSTICA	4-84-242
630.	MARTÍNEZ, RODRIGO	UNACHI	
631.	MARTÍNEZ, RODRIGO	MORAZAN	
632.	MARTÍNEZ, YOLANDA	EDUCACIÓN	
633.	MARTINIS, REGINA DE	HOSP. CHIRIQUÍ	4-106-905
634.	MARQUÍNEZ, ALBERTO	VILA HERMANOS	4-123-2747
635.	MATOS, MAYDA (DE)	UNIV. TEC.	4-142-1669
636.	MATUS M., ALEX	UNIV. TEC.	4-126-752
637.	MATUS, ILEANA (DE)	UNIV. TEC.	4-126-47
638.	MATUS, RICARDO	EDUCACIÓN	4-130-546
639.	MAYORGA C., LESLIE O.	CARDOZE & LINDO	4-147-1
640.	MEDIANERO, GENARINA	P. CICLO DAVID	

641.	MEDINA, ALVARO H.	WH DOEL	4-239-214
642.	MEDINA, JOSÉ MARÍA	ELECTRICO CABALLERO	7-69-2151
643.	MEDRANO, MARÍA	MORAZAN	8-149-513
644.	MELENDEZ M., CARLOS	INDE	
645.	MELENDEZ, MIRNA M.	CACECHI	4-133-262
646.	MELENDEZ, VÍCTOR	MOT. DEL BARU	4-85-923
647.	MÉNDEZ, DENYS	ADMON-UNACHI	4-137-1114
648.	MÉNDEZ, RAFAEL	TERMOPLÁSTICA	4-173-515
649.	MÉNDEZ, ROSA NELLY	UNACHI	4-125-915
650.	MENDOZA, EMILIO	CERV. CHIRICANA	4-118-860
651.	MENDOZA, RODOLFO	UNACHI	8-360-285
652.	MENESES, JOSÉ LUIS	RIEGOS CHIRICANOS	2-126-798
653.	MILLAN, MARÍA E.	UNIV. TEC.	4-228-446
654.	MIRANDA, AMAVELIS DE	GRUPO SILVABA	4-103-1554
655.	MIRANDA V., AURISTELA	BCO. EXTERIOR	4-148-130
656.	MIRANDA, BLANCA R.	MUNICIPIO	
657.	MIRANDA I., CECILIA	EDIT. CHIRIQUÍ	4-95-572
658.	MIRANDA, CECILIA DE	I. R. H. E.	4-101-1461
659.	MIRANDA, DEMETRIO	UNACHI	
660.	MIRANDA, ELSY	ADMON-UNACHI	4-195-510
661.	MIRANDA S., EMIGDIO E.	EDIT. CHIRIQUÍ	4-132-2635
662.	MIRANDA M., FLORENCIA	APRO, S. A.	
663.	MIRANDA, FRANKLIN	AUTO ACC. DE DAVID	4-153-572
664.	MIRANDA, GLAYTER	EDUCACIÓN	4-105-320
665.	MIRANDA, GILBERTO	DIST. DEL NORTE	4-105-310
666.	MIRANDA, JORGE	BCO. NACIONAL	4-138-1365
667.	MIRANDA R., JUAN	EDIT. CHIRIQUÍ	4-96-1849
668.	MIRANDA, LOURDES	BCO. NAL.	4-184-50
669.	MIRANDA, MARÍA C. DE	COL. N. SRA. ANG.	4-118-456
670.	MIRANDA, RAMÓN	MARTIN ALBA	
671.	MIRANDA, ROSA DE	INST. DAVID	
672.	MIRANDA, ROSA E.	DIR. TRABAJO	4-104-1401
673.	MIRANDA, VIELKA	CERV. DEL BARU	4-215-69
674.	MIRANDA, VIELKA DE	CAJA DE AHORROS	4-148-983
675.	MIRANDA, YANETH	AUTOMUNDO	4-259-179
676.	MIRANDA, YIRA ITZEL	F. O. C.	4-81-419
677.	MIRANDA, YOLANDA	ADMON-UNACHI	4-82-227
678.	MOJICA, PABLO E.	CACECHI	4-145-707
679.	MOJICA B., RAFAEL	CARDOZE & LINDO	9-163-809
680.	MONROY, RICARDO	F. RODRÍGUEZ	4-104-2441
681.	MONTEMAYOR, JAVIER	AGROQUIMICAS INT.	4-132-529
682.	MONTENEGRO, ARIEL	TERMOPLÁSTICA	4-180-92
683.	MONTENEGRO, CARLOS	LIB. REGIONAL	4-701-884
684.	MONTENEGRO, CARLOS	DIST. DEL NORTE	4-276-735
685.	MONTENEGRO, CELSA	ADMON-UNACHI	4-287-10
686.	MONTENEGRO, CLARA	LIB. REGIONAL	4-78-871
687.	MONTENEGRO, EMMA	CAJA DE AHORROS	4-104-854
688.	MONTENEGRO, ENILDA DE	M. O. P.	4-106-448
689.	MONTENEGRO, FULVIA MA.	ADMON-UNACHI	
690.	MONTENEGRO, MANUEL S.	CERV. BARU	
691.	MONTENEGRO, MARÍA	LIB. REGIONAL	4-142-2556
692.	MONTENEGRO, MAYRA DE	MOT. DEL BARU	
693.	MONTENEGRO, MOISÉS	MITSUMOTOR	4-142-1818
694.	MONTENEGRO, ROSA DE	UNIV. TEC.	
695.	MONTENEGRO, RUFINA DE	M. O. P.	
696.	MONTENEGRO, XENIA	FINANCIERA EL SOL	4-294-1719
697.	MONTERO, BRISEIDA E.	MAT. MONTERO, S. A.	4-154-661
698.	MONTERO C., DAYSI	BCO. EXTERIOR	4-123-430
699.	MONTERO, DORIS	DIST. DEL NORTE	4-224-319
700.	MONTERO, JAVIER	CERV. CHIRICANA	4-92-965
701.	MONTERO, JOSÉ	I. D. A. A. N.	4-128-1867
702.	MONTERO, JOSÉ ABEL	BCO. EXTERIOR	
703.	MONTERO, JUAN	EDUCACIÓN	4-138-113
704.	MONTERO C., MIRTHA I.	MAT. MONTERO	4-215-436
705.	MONTERO, ROCÍO	MIVI	

706.	MONTERO, SHEILA O. DE	ESC. LASSONDE	
707.	MONTEZUMA, ORLANDO E.	AUTO CENTRO	4-294-1348
708.	MONTIEL, HILDA A.	BRENES Y ASOC.	E-4-1023
709.	MONTILLA, ARMANDO	HOSP. CHIRIQUÍ	4-191-495
710.	MORA, ROBERTO	UNACHI	
711.	MORALES, AMPARO	ADMON-UNACHI	
712.	MORALES, ARIEL	RODELAG	
713.	MORALES, CLEMENTE	UNACHI	4-176-131
714.	MORALES P., CONCEPCIÓN	DIST. CH. UNIDA	
715.	MORALES, DARÍO	CERV. BARU	
716.	MORALES, DEIDA	F. ICAZA Y CÍA.	4-250-194
717.	MORALES, FELICIA	MORAZAN	
718.	MORALES, IDALIDES	COL. NUESTRA. SRA. A.	4-294-903
719.	MORALES, ISABEL	MORAZAN	
720.	MORALES, ISOLDA DE	F. O. C.	
721.	MORALES, JAIME	CERV. CHIRICANA	
722.	MORALES, JOSÉ	U. LATINA	
723.	MORALES, JOSUÉ	UNACHI	4-84-636
724.	MORALES, MARIANELA DE	BCO. NACIONAL	4-101-2409
725.	MORALES, MELVA	MORAZAN	4-95-853
726.	MORALES, MIRIAM	EDUCACIÓN	
727.	MORALES C., OSCAR	METALURGIA MIRANDA	
728.	MORALES, ROSA E.	UNACHI	8-274-350
729.	MORALES, VIVIANA	UNACHI	4-145-90
730.	MORAN, DORIS	UNACHI	4-139-2531
731.	MORENO, CARLOS	MIVI-USMA	4-72-471
732.	MORENO, CARMEN (DE)	F. O. C.	
733.	MORENO, ESTELA R.	ESC. LASSONDE	
734.	MORENO, GLADYS	EDUCACIÓN	
735.	MORENO, HÉCTOR	COOP. ECASESO	4-276-959
736.	MORENO, HUGUETTE DE	COOP. ECASESO	4-173-814
737.	MORENO R., JOSÉ M.	COOP. ECASESO	4-89-286
738.	MORENO, MARÍA	CACECHI	4-102-1862
739.	MORENO, MIREYA (DE)	I. P. T.	4-88-56
740.	MORENO, NÉSTOR MANUEL	MOT. DEL BARU	
741.	MORENO, SHEILA C.	MORAZAN	4-68-900
742.	MORENO, TOMÁS A.	HOSP. CHIRIQUÍ	4-153-721
743.	MORHAIM, FIALEYLI (DE)	MORAZAN	4-118-2148
744.	MOW, ONELIA C. (DE)	DIR. TRABAJO	4-124-781
745.	MULINO D., JOSÉ	CITIBANK	4-120-2637
746.	MUÑOZ, AGRIPINA	INST. DAVID	
747.	MUÑOZ, ANDREA J. DE	GOBERNACIÓN	4-109-398
748.	MUÑOZ, ESTELA	UNIV. TEC.	8-229-844
749.	MUÑOZ, LILIA	UNIV. TEC.	4-191-642
750.	MURGAS, ANDRÉS	UNIV .TEC.	4-194-972
751.	MURGAS, INDALECIA	ESC. NVO. VEDADO	4-103-253
752.	MURGAS, NELLYS	UNIV. TEC.	4-160-409
753.	MURILLO, CÉSAR	BUDGET	4-724-314

-N-

754.	NAVARRO, EDILMA (DE)	RODELAG	4-152-645
755.	NAVARRO, MARCIAL	EDIT. CHIRIQUÍ	
756.	NG, EDILSA (DE)	UNACHI	4-124-1991
757.	NÚÑEZ, ANA	TERMOPLÁSTICA	4-171-124
758.	NÚÑEZ, MILIXA	DIGEDECOM	4-182-789
759.	NÚÑEZ, OMAR	I. P. T.	

-O-

760.	OBERTO, JUAN A.	MOT. DEL BARU	4-196-392
761.	OLAVE, EIVAR	U. S. M. A.	4-104-1446
762.	OLAYA, GLADYS (DE)	DIST. CH. UNIDA	4-102-2511
763.	OLAYA, PEDRO	DIST. CH. UNIDA	4-92-314
764.	OLIVARES, IRIS DE	COL. NTRA. SRA. ANG.	8-94-534

765.	OLIVARES, MANUEL S.	CERV. BARU	4-173-461
766.	OLIVO, MARISOL C. DE	CITIBANK	4-149-437
767.	ORTEGA, ABDIEL	B.D.A.	4-181-375
768.	ORTEGA, ÁNGEL	UNACHI	4-119-1730
769.	ORTEGA T., DANIEL	MORAZAN	9-124-2143
770.	ORTEGA, DIÓGENES	EDUCACIÓN	4-125-476
771.	ORTEGA, ELSIE (DE)	CHASE MANHATTAN	4-121-194
772.	ORTEGA M., GLORIA	EDUCACIÓN	
773.	ORTEGA, LIDALIA	MIVI	4-126-1757
774.	ORTEGA, ODALYS	REPUESTOS DELTA	4-714-472
775.	ORTEGA, YANETH	CERV. DEL BARU	4-133-2732
776.	ORTIZ, DENIS J. (DE)	BCO. NAL.	4-138-2449
777.	ORTIZ, ELISEO	MARTIN ALBA	4-230-327
778.	ORTIZ, EMILSA (DE)	INST. DAVID	
779.	ORTIZ, FRANKLIN	I.P.T. O EDUC.	
780.	ORTIZ, IRIS M. (DE)	UNIV. TEC.	4-177-478
781.	ORTIZ, LURIS CIELO	DIR. TRABAJO	9-122-976
782.	ORTIZ, MITZELA	B.D.A.	4-171-724
783.	ORTIZ, OLMEDO	PETROTERMINAL	4-116-2002
784.	ORTIZ, RODRIGO	CERV. DEL BARU	4-164-154
785.	ORTIZ, RUBÉN DARÍO	AUTO CENTRO	4-265-763
786.	ORTIZ, VENANCIO	CERV. BARU	4-181-348
787.	OSORIO, HÉCTOR	UNACHI	
788.	OSORIO, IVÁN	MAT. OSORIO	4-74-702
789.	OTERO, MANUEL	MUEB. PANAMÁ	

-P-

790.	PADILLA, CIELO	BCO. GENERAL	8-204-52
791.	PALACIOS, ANDRÉS	DIGEDECOM	
792.	PALACIOS, AUGUSTO	U. S. M. A.	
793.	PALACIOS, AURA M. DE	ADMON-USMA	
794.	PALACIOS, AURISTELA	NUEVO VEDADO	
795.	PALACIOS, ENEYDA DE	ADMON-USMA	
796.	PALACIOS, JUAN RAMÓN	COL. NTRA. SRA. ANG.	4-139-1248
797.	PALACIOS, NEDYS DE	UNACHI	
798.	PALMA, GABRIELA H. DE	EDIT. CHIRIQUÍ	4-137-250
799.	PALMA, GILMA DE	EDUCACIÓN	
800.	PALMA, GISELA	IRHE	4-146-2352
801.	PARADA, YOLANDA G.DE	AUTO ACC. DAVID	8-125-791
802.	PASCO, CÁNDIDA E. DE	DIR. TRABAJO	
803.	PATIÑO, JORGE	I. P. T.	
804.	PATIÑO, PATROCINIO	DIST. CH. UNIDA	
805.	PAZ, EDILMA	ROMERO	8-231-588
806.	PEARSON, BENAR	DIST. DEL NORTE	4-255-327
807.	PEÑA, ELISEO	EDUCACIÓN	
808.	PEÑA, SUSANA	LIB. REGIONAL	4-700-51
809.	PERÉN, ARISTIDES	UNIV. TEC.	4-139-1673
810.	PÉREZ, DANIS A.	EDUCACIÓN	
811.	PÉREZ R., FRANCISCO	AUTO ACC. DAVID	4-139-473
812.	PÉREZ, JOSÉ DEL C.	DIGEDECOM	4-116-287
813.	PÉREZ P., LIZBETH	LIB. REGIONAL	4-166-387
814.	PÉREZ, LUIS	CERV. DEL BARU	
815.	PÉREZ, MARITZA (DE)	RODELAG	4-119-1674
816.	PÉREZ, NORA ITZEL	UNIV. TEC.	4-136-184
817.	PÉREZ, RAMÓN	F. O. C.	
818.	PIMENTEL M., ELADIO	AUTO CENTRO	4-205-569
819.	PINEDA, DOMINGO	INST. DAVID	
820.	PINEDA, MIGUEL	MARTIN ALBA	4-127-1049
821.	PINEDA, OLÍVER ALEXIS	APRO, S. A.	
822.	PINILLA, ALEJANDRO	DIR. TRABAJO	
823.	PINILLA M., HEYDI A.	EDIT. CHIRIQUÍ	4-272-799
824.	PINZÓN, ANDRÉS	SUPERMERC. PINZÓN	
825.	PINZÓN, CARLOS	MOT. DEL BARU	
826.	PINZÓN, CARMEN M.	CAJA DE AHORROS	

827.	PINZÓN, DORIS A.	CACECHI	9-132-356
828.	PINZÓN, ELSA	AUTOMUNDO	8-266-596
829.	PINZÓN, JOSÉ A.	HERMANOS PINZÓN	
830.	PINZÓN, OSCAR	ADMON-UNACHI	2-85-1070
831.	PINZÓN, RICARDO	TERMOPLÁSTICA	4-139-1927
832.	PINZÓN, ROGELIO	I.D.A.A.N.	
833.	PITTY, AMÉRICA	COL. NTRA. SRA. ANG.	4-126-1737
834.	PITTI, ANDREA	ADMON-USMA	
835.	PITTI, BOLÍVAR	UNACHI	8-100-864
836.	PITTI, EDITA	ADMON-USMA	
837.	PITTI, FÁTIMA A.	U. S. M. A.	
838.	PITTY, HILDA	UNACHI	4-85-467
839.	PITTI, JOSÉ	DIST. CH. UNIDA	
840.	PITTY C., LUIS A.	CACECHI	4-141-914
841.	PITTI, MARÍA E.	ESC. NVO. VEDADO	
842.	PITTI, MARIO LUIS	UNACHI	
843.	PITTI M., PATRICIA	ERA, S. A.	4-287-131
844.	PITTI, RAFAEL	PROV. DEL BARU	
845.	PITTI, RAMIRO	ERA, S. A.	4-266-900
846.	PITTY M., RAÚL A.	AUTO CENTRO	4-142-582
847.	PITTY, RICARDO	MITSUMOTOR	4-105-410
848.	PITTY, XIOMARA DE	IRHE	4-116-584
849.	PITTI, YONEL	ERA, S. A.	4-262-72
850.	POLANCO, MARCIAL	ADMON-UNACHI	
851.	PONCE, ANA TERESA	I.P.T.	
852.	PONCE, MARLENYS DE	ESC. NVO. VEDADO	
853.	PONCE, THELMA	MIVI	
854.	PONTE, EGBERTO	MOT. DEL BARU	
855.	PONTE, MIRIAM	ESC. LASSONDE	
856.	POTES, ADRIANA (DE)	UNACHI	
857.	PRADO, PEDRO	COOP. ECASESO	4-153-485
858.	PRIETO, ITZEL	A.S.S.A.	

-Q-

859.	QUIEL C., ÁNGEL	BCO. NAL.	4-116-629
860.	QUIEL M., CARLOS	LIB. REGIONAL	4-117-636
861.	QUIEL, DENIS	I.P.T.	4-97-2104
862.	QUIEL, JOSÉ H.	F. ICAZA Y CÍA.	4-225-891
863.	QUIEL, JOSÉ M.	I.R.H.E.	4-94-868
864.	QUIEL, JUAN B.	UNIV. TEC.	4-152-720
865.	QUIEL, MANUEL	INST. DAVID	4-119-817
866.	QUIEL, RUBÉN	I.P.T.	
867.	QUIEL, VENTURA	P. CICLO DAVID	4-100-1700
868.	QUINTANA, LOANA I.	CAJA DE AHORROS	4-153-560
869.	QUINTANILLA, YANETH E.	AUTOMUNDO	4-231-499
870.	QUINTERO, ALEX	CERV. DEL BARU	4-706-692
871.	QUINTERO, ALFREDO	MUNICIPIO	4-69-470
872.	QUINTERO, AMED	TERMOPLÁSTICA	4-225-960
873.	QUINTERO, CLARA	COL. NTRA. SRA. ANG.	9-192-234
874.	QUINTERO, DALLYS	MORAZAN	4-94-794
875.	QUINTERO, EDILBERTO	I. P. T.	4-81-554
876.	QUINTERO, EDGAR A.	CACECHI	4-108-810
877.	QUINTERO, EFRAÍN	F. O. C.	
878.	QUINTERO, EVA N. DE	UNIV. TEC.	4-46-69
879.	QUINTERO, FLORISELVA	MORAZAN	
880.	QUINTERO, IGNACIO	USMA O UNACHI	4-68-852
881.	QUINTERO, JORGE I.	MAT. OSORIO	4-173-770
882.	QUINTERO, JULIA	EDUCACIÓN	4-116-880
883.	QUINTERO S., MILVA DE	MIN. TRABAJO	8-213-2642
884.	QUINTERO, NELSON	COOP. ECASESO	4-124-2532
885.	QUINTERO, NIVIA	IRHE	4-112-504
886.	QUINTERO, NORIS DE	MIN. TRABAJO	8-220-339
887.	QUINTERO, RAMÓN	REPUESTOS DELTA	4-197-7539
888.	QUINTERO, RUBIELA DE	UNIV. TEC.	4-210-397

889.	QUINTERO, YOLANDA	EDUCACIÓN	4-111-737
890.	QUIROS, JORGE	MIPPE	
891.	QUIROS, LUZ V. DE	INST. DAVID	
892.	QUIROZ, NUMY J.	B. D. A.	4-96-1909
893.	QUIROZ, OSCAR J.	MUNICIPIO	4-114-769
894.	QUIROS, WALKIRIA A. DE	F. O. C.	

-R-

895.	RAMALLI, PAOLA	U. S. M. A.	4-142-197
896.	RAMÍREZ P., OVIDIO	ELECTRICO CABALLERO	4-205-570
897.	RAMÓN, FRANCISCO	UNACHI	7-35-116
898.	RAMOS A., ROLANDO	BUDGET	4-134-2686
899.	RANDOLPH, ORIEL J.	TAGARÓPULOS	4-146-440
900.	RANGEL T., IRVING	DIST. CH. UNIDA	4-116-748
901.	REIF TORRES, TOMÁS	BRENES Y ASOC.	3-93-42
902.	RENGIFO, FRANKLIN	COL. NTRA. SRA. ANG.	9-125-411
903.	REQUENA, CARMEN DE	UNACHI	4-142-2467
904.	REQUENA, HÉCTOR	UNACHI	4-101-2704
905.	REQUENA, JOSÉ A.	DIST. DEL NORTE	4-238-714
906.	REQUENA, MARVIS DE	ASESA	4-228-48
907.	RESTREPO, EDGAR	LIB. REGIONAL	4-141-201
908.	REYES, FRANKLIN	MORAZAN	4-109-593
909.	RIASCO K., JAVIER A.	CACECHI	1-39-12
910.	RICHARDS, INDIRA	MIVI	
911.	RICOY M., IRIS E.	CACECHI	9-159-832
912.	RINCÓN, CINTYA	LIB. REGIONAL	4-257-80
913.	RINCÓN, ELIA DE	INST. DAVID	4-99-1894
914.	RINCÓN, ITZEL DE	INST. DAVID	
915.	RÍOS, ARTURO	UNACHI	4-211-25
916.	RÍOS, BERNARDINA	F. O. C.	
917.	RÍOS, BLANCA	UNACHI	4-118-1102
918.	RÍOS, CARLOS	ADMON-UNACHI	4-128-407
919.	RÍOS R., DALLYS	MORAZAN	4-101-160
920.	RÍOS, DENIS	UNIV. TEC.	4-138-249
921.	RÍOS, EIRA	ADMON-UNACHI	4-119-661
922.	RÍOS, ELISEO	EDUCACIÓN	
923.	RÍOS, ELVA	AUTO ACC. DAVID	1-44-79
924.	RÍOS, ESTHER M.	MORAZAN	4-173-64
925.	RÍOS, FRANCISCO	IMPORT. LAS PERLAS	4-178-548
926.	RÍOS, GISELA S., DE	O T E I M A	
927.	RÍOS, IRIS	F. O. C.	4-103-1418
928.	RÍOS, ITZA	IRHE	4-126-1855
929.	RÍOS, JOSÉ M.	CAJA DE AHORROS	8-361-281
930.	RÍOS, MANUEL A.	TAGARÓPULOS	4-261-820
931.	RÍOS, MARCOS	TERMOPLÁSTICA	4-143-429
932.	RÍOS, MARÍA E.	LIB. REGIONAL	4-132-2300
933.	RÍOS, OMAR ALEXIS	AUTO CENTRO	4-221-686
934.	RÍOS, ROBERTO	EDIF. GARRIDO	4-110-882
935.	RIVERA, BOLÍVAR	M. O. P.	4-72-682
936.	RIVERA, IDA N. (DE)	MORAZAN	
937.	RIVERA, ISAAC A.	GRUPO SILABA	4-132-265
938.	RIVERA, JORGE E.	MAT. MONTERO N° 3	4-230-358
939.	RIVERA A., JOSÉ	APRO, S. A.	4-90-400
940.	RIVERA, LUZMILA	RICARDO PÉREZ	4-74-749
941.	RIVERA, MIGUEL	UNACHI	N-18-733
942.	RIVERA, RUBÉN DARÍO	AUTO CENTRO	4-215-494
943.	RIVERA, ORYS S. DE	COLABANCO	4-132-125
944.	RODRÍGUEZ, ALMA	MIN. TRABAJO	4-162-78
945.	RODRÍGUEZ, ANA CLARA DE	INST. DAVID	
946.	RODRÍGUEZ, ÁNGELA DE	MORAZAN	8-92-678
947.	RODRÍGUEZ, AURA	U. S. M. A.	2-79-1313
948.	RODRÍGUEZ C., CARLOS	COM. E IND.	4-102-1812
949.	RODRÍGUEZ, DAYRA (DE)	UNACHI	4-701-1792
950.	RODRÍGUEZ, EDICTA	UNIV. TEC.	4-294-906

951.	RODRÍGUEZ, EDITH M.	MIVI	4-120-2664
952.	RODRÍGUEZ, GIL BLAS	MIDA-AEROP.	4-69-89
953.	RODRÍGUEZ, IXA (DE)	B.D.A.	4-101-961
954.	RODRÍGUEZ D., JAQUELINE	EMP. DE LEÓN	4-219-765
955.	RODRÍGUEZ, JOSÉ E.	MUNICIPIO	4-19-841
956.	RODRÍGUEZ, JOSÉ LUIS	MIN. TRABAJO	4-173-942
957.	RODRÍGUEZ, JOSÉ MANUEL	BCO. NAL.	8-105-176
958.	RODRÍGUEZ, KENNY	DIST. DEL NORTE	4-117-261
959.	RODRÍGUEZ, MARÍA J. DE	UNACHI O MORAZAN	4-88-231
960.	RODRÍGUEZ, MARITZA	COOP. ECASESO	4-195-178
961.	RODRÍGUEZ D., MARTHA C.	LIB. REGIONAL	8-427-61
962.	RODRÍGUEZ, ODALYS DE	ADMON-USMA	4-124-144
963.	RODRÍGUEZ, ONELIA J.	MORAZAN	4-104-1169
964.	RODRÍGUEZ S., OTONIEL	CARDOZE & LINDO	4-221-480
965.	RODRÍGUEZ, PASCUAL	MARTIN ALBA	4-142-1121
966.	RODRÍGUEZ, RAMÓN	TAGARÓPULOS	4-89-933
967.	RODRÍGUEZ M., RAY RAÚL	CACECHI	4-194-602
968.	RODRÍGUEZ, RODY	VILA HERMANOS	4-118-1282
969.	RODRÍGUEZ, ROSMERY	LLANTAS CHIRIQUÍ	8-305-415
970.	RODRÍGUEZ, SERAFÍN	CARDOZE & LINDO	4-264-526
971.	RODRÍGUEZ, SHIRLEY C. DE	BCO. EXTERIOR	4-94-441
972.	RODRÍGUEZ, TATIANA	U. S. M. A.	E-4-1938
973.	RODRÍGUEZ, TOMAS	U. S. M. A.	
974.	RODRÍGUEZ, VELKIS DE	RODELAG	4-195-856
975.	ROJAS R., ALFONSO	MOT. DEL BARU	4-98-2457
976.	ROJAS, GRASSE	EDUCACIÓN	
977.	ROJAS J., JOSÉ DEL C.	EDUCACIÓN	
978.	ROJAS, NITZIA	F. O. C.	
979.	ROJAS, SIDIA E.	DIGEDECOM	4-225-629
980.	ROMERO, DHARMA I.	BCO. EXTERIOR	4-109-235
981.	ROMERO, GISELA	M. O. P.	
982.	ROMERO, JOSÉ LUIS	CERV. DEL BARU	4-75-580
983.	ROMERO, JULIO A.	HOSP. CHIRIQUÍ	8-226-721
984.	ROS, MANUEL	MIDA-AEROP.	4-51-377
985.	ROSS, BRISEIDA DE	M. O. P.	
986.	ROSAS V., CARLOS O.	MIPPE	4-221-635
987.	ROSAS L., DORA	BCO. ISTMO	4-215-770
988.	ROSAS A., KAREN	COL. NTRA. SRA. ANG.	8-334-931
989.	ROVIRA, MARÍA E. DE	ESC. NVO. VEDADO	
990.	ROVIRA, SUSANA R.	EDIT. CHIRIQUÍ	4-250-866
991.	RUBIO, AGRIPINA	UNIV. TEC.	
992.	RUEDA V., ANGELA A.	GRUPO SILABA	4-256-790
993.	RUEDAS, CARMEN	DIGEDECOM	4-125-58
994.	RUEDAS, FREDY	COOP. ECASESO	8-399-802
995.	RUEDAS, RUTH R.	EDUCACIÓN	8-246-629
996.	RUIZ PINZÓN, CARLOS	UNIV. TEC.	8-442-183
997.	RUIZ M., MARÍA L.	BRENES Y ASOC.	4-137-2294
998.	RUIZ, VIELKA S. DE	COM. E IND.	
999.	RUIZ, XIOMARA DE	UNIV. TEC.	4-125-2716
1000.	RUJANO, JUAN	EDIT. CHIRIQUÍ	9-49-177
1001.	RUSSO, CARMEN (DE)	COL. NTRA. SRA. ANG.	8-151-681

-S-

1002.	SAAVEDRA, ABDIEL	UNIV. TEC.	4-139-629
1003.	SAAVEDRA, GONZALO	DIST. CH. UNIDA	4-74-375
1004.	SAGEL, AGUSTÍN	B. D. A.	4-103-2141
1005.	SAGEL, LETICIA DEL C.	MIDA.-DIVULG.	8-230-534
1006.	SALAZAR, ELIÉCER	AUTO CENTRO	4-268-66
1007.	SALDAÑA, ELBA	MORAZAN	4-103-2068
1008.	SALDAÑA, EMIGDIO	TOCHISA	
1009.	SALDAÑA, ESTHER M.	MIDA-SAN. VEGETAL	4-70-324
1010.	SALDAÑA, FRANCISCA DE	ESC. LASSONDE	
1011.	SALDAÑA, GERARDO	MIDA	4-104-929
1012.	SALDAÑA, HARLEY	DIST. DEL NORTE	4-30-607

1013. SALDAÑA, HEIDIS M.	LIB. REGIONAL	4-212-244
1014. SALDAÑA, LISBANIA DE	HOSP. CHIRIQUÍ	4-185-52
1015. SALDAÑA, LUIS	DIST. CH. UNIDA	4-99-20
1016. SALDAÑA, LUDOVINA	MORAZAN	4-102-573
1017. SALDAÑA, OVIDIO	UNACHI	4-99-924
1018. SALDAÑA, RENÉ	BCO. NACIONAL	4-122-1309
1019. SALDAÑA, SIOMY	AUTOMUNDO	4-165-810
1020. SAM R., FELIPE A.	LIB. REGIONAL	4-213-1004
1021. SAM, IDA E.	BCO. NAL.	4-99-2198
1022. SAMANIEGO, AURISTEL DE	EDUCACIÓN	4-97-2332
1023. SAMANIEGO, TOMÁS G.	EDUCACIÓN	4-108-869
1024. SAMUDIO, ANA CECILIA	MOT. DEL BARU	
1025. SAMUDIO, CARMEN LUZ	MOTOROLA	4-191-281
1026. SAMUDIO, CÉSAR	UNACHI	
1027. SAMUDIO, DAVID	COOP. ECASESO	4-183-50
1028. SAMUDIO, DELITZA	ADMON-UNACHI	4-140-767
1029. SAMUDIO, EDITH	F. O. C.	4-70-258
1030. SAMUDIO, ELIZABETH	MED. MILAGROSA	
1031. SAMUDIO P., LIZADIA G.	CARDOZE & LINDO	4-146-417
1032. SAMUDIO, MAGDA DE	CACECHI	4-114-302
1033. SAMUDIO D., MIGDALIA	EDIT. CHIRIQUÍ	4-139-1480
1034. SAMUDIO, MIGUEL	ADMON-UNACHI	4-169-265
1035. SAMUDIO, OCTAVIO	TERMOPLÁSTICA	4-177-61
1036. SAMUDIO, OSVALDO	EDIT. CHIRIQUÍ	4-148-965
1037. SAMUDIO, VIRGINIA DE	HOSP. CHIRIQUÍ	4-161-320
1038. SMITS, JOYCE	MIDA-REFORMA	1-15-558
1039. SÁNCHEZ, BETTY DE	ADMON-UNACHI	4-117-2381
1040. SÁNCHEZ, CÉSAR	UNIV. TEC.	1-197-652
1041. SÁNCHEZ, CORINA	DIR. TRABAJO	4-253-61
1042. SÁNCHEZ, EBYS	GRUPO BAMBINA	8-745-614
1043. SÁNCHEZ, FLOR	ADMON-UNACHI	4-294-699
1044. SÁNCHEZ, GABRIEL	CERV. CHIRICANA	
1045. SÁNCHEZ, JOSÉ	U. S. M. A.	
1046. SÁNCHEZ, JOSÉ I.	EDUCACIÓN	
1047. SÁNCHEZ, JUAN JOSÉ	MIDA	4-125-851
1048. SÁNCHEZ, LORENZO	ADMON-USMA	
1049. SÁNCHEZ, LUIS	CARDOZE & LINDO	4-187-385
1050. SÁNCHEZ, MARÍA	I. P. T.	
1051. SÁNCHEZ, MARIANA	MUNICIPIO	8-229-1541
1052. SÁNCHEZ, MARLYN I.	AUTO CENTRO	1-36-629
1053. SÁNCHEZ V., NORIEL A.	AUTO ACC. DAVID	4-213-818
1054. SÁNCHEZ M., ROBERTO	SWIFT & COMPANY	4-147-387
1055. SÁNCHEZ J., RODRIGO	DIR. TRABAJO	
1056. SÁNCHEZ F., SILVIO	EDIT. CHIRIQUÍ	4-100-2063
1057. SANG, MIRGIA T.	CAJA DE AHORROS	4-138-2277
1058. SANJUR, CELSO	MIN. TRABAJO	4-218-28
1059. SANJUR M., ILEANA	EDUCACIÓN	4-104-260
1060. SANJUR, LAURA	MUNICIPIO	
1061. SANJUR, LUIS	BCO. NACIONAL	4-258-492
1062. SANJUR, ROSITA	UNACHI	4-217-424
1063. SANJUR, TERESA R. DE	COL. NTRA. SRA. ANG.	4-71-206
1064. SANTAMARÍA, ARGELIA DE	UNACHI	8-186-5
1065. SANTAMARÍA, DANIS	MOT. DEL BARU	
1066. SANTAMARÍA, FRANKLIN	EDUCACIÓN	
1067. SANTAMARÍA, MARÍA	EDUCACIÓN	4-138-1113
1068. SANTAMARÍA, MILDRED	RODELAG	
1069. SANTAMARÍA, OMAYRA DE	UNACHI	
1070. SANTAMARÍA, SIXTA	BRENES Y ASOC.	4-119-1562
1071. SANTAMARÍA, ULVIA	ESC. SAN MATEO	
1072. SANTAMARÍA, VALDEMAR	TAGARÓPULOS	4-208-506
1073. SANTIAGO L., MIGUEL	EDIT. CHIRIQUÍ	4-81-519
1074. SANTOS, AGAPITO	UNIV. TEC.	4-125-1317
1075. SARMIENTO, ASTERIA DE	MORAZAN	
1076. SARMIENTO, NATIVIDAD	AGROQUIMICAS INT.	2-115-977
1077. SARMIENTO, NORBERTO	MORAZAN	

1078. SAUCEDO, MAGALYS	MIDA-AEROP.	
1079. SERRACÍN C., ABEL	COLPAN	4-175-296
1080. SERRACÍN, ISABEL	JOSÉ MA. ROY	
1081. SERRACÍN M., JUAN	LIB. REGIONAL	
1082. SERRACÍN, NORMA	COL. NTRA. SRA. ANG.	4-91-985
1083. SERRACÍN, ROLANDO	COL. NTRA. SRA. ANG.	4-261-773
1084. SERRANO, ANA E. H. DE	CORREOS	
1085. SERRANO, BERTA	COOP. ECASESO	4-121-823
1086. SERRANO, DANIEL	A. S. S. A.	
1087. SERRANO, ERICK	VILA HERMANOS	
1088. SERRANO, FLORENCIO	WH DOEL	
1089. SERRANO, JUAN	MIDA-SAN. VEGETAL	
1090. SERRANO, KAREN	CACECHI	4-265-410
1091. SERRANO, MARIO ALCIDES	CERV. BARU	
1092. SERRANO, RODRIGO	UNACHI	
1093. SERRANO, RICARDO E.	REPUESTOS DELTA	8-449-661
1094. SERRANO, RUBÉN	FINANCIERA EL SOL.	4-257-950
1095. SERRANO, SILVIA MA.	ASESA	4-139-932
1096. SERRANO, VÍCTOR A.	DIST. CH. UNIDA	
1097. SEVILLA, MANUEL	UNACHI	4-116-2024
1098. SHIWANOV, RAY	MORAZAN	
1099. SILVERA, CARLOS	CERV. DEL BARU	4-202-466
1100. SILVERA, MARIBEL S. DE	SWIFT & COMPANY	4-139-2045
1101. SMITH, ROLANDO	EDUCACIÓN	3-75-505
1102. SOBENIS, CARLOS J.	MUNICIPIO	
1103. SOSA, CARLOS	RODELAG	
1004. STAFF, ESTELVINA G. DE	CACECHI	4-150-691
1105. STAFF, PEDRO	GUERRA Y CÍA	4-207-14
1106. SUAREZ, ROSEMARY DE	F. RODRÍGUEZ	

-T-

1107. TAPAGE, LYDIA	UNACHI	8-137-171
1108. TAPIA, JOSÉ A.	F. ICAZA Y CÍA.	4-141-488
1109. TAYLOR, ALFREDO	BCO. NACIONAL	4-190-763
1110. TELLO G., DALYS E. DE	BRENES Y ASOC.	4-208-441
1111. TELLO, RUBÉN	CERV. BARU	4-104-1062
1112. TEM, MARCOS	UNACHI	8-333-748
1113. TEM, YOLANDA DE	MORAZAN	8-118-39
1114. TERÁN, FULVIO	BCO. NACIONAL	4-110-806
1115. TERRADO, MARIANELA DE	HOSP. CHIRIQUÍ	4-184-36
1116. TORRES, ABDEL	RIEGOS CHIRICANOS	9-124-582
1117. TORRES, ANA E.	AGROQUIMICAS INT.	4-147-2082
1118. TORRES, BETILDA DE	U. LATINA	2-61-361
1119. TORRES C., DACMAR	COL. NTRA. SRA. ANG.	
1120. TORRES, DAYSI	UNACHI	4-105-849
1121. TORRES P., DOMINGO	MAT. MONTERO	4-704-1717
1122. TORRES, HERLINDA	CAJA DE AHORROS	4-94-6
1123. TORRES, LEIDYS	UNACHI	4-79-877
1124. TORRES, PEDRO	TERMOPLÁSTICA	4-205-182
1125. TORRES, RÓGER	CACECHI	4-101-1006
1126. TRISTAN, GUADALUPE	BCO. NACIONAL	9-79-1574
1127. TROYA, CARLOS EFRAÍN	CAJA DE AHORROS	
1128. TROYA, NORIELA DE	OTEIMA	

-U-

1129. URETA, JORGE	UNIV. TEC.	4-138-2374
1130. URIBE, CARLOS	FAB. PARAGUAS	
1131. URIETA, RUBÉN D.	INT. SEGUROS	
1132. URRIOLA, FRANCISCO	HOSP. CHIRIQUÍ	
1133. URRIOLA, VÍCTOR MANUEL	M. O. P.	4-45-562

-V-

1134.	VALDERRAMA, OSCAR	U. S. M. A.	8-425-981
1135.	VALDÉS, AGUSTÍN	TERMOPLÁSTICA	4-101-1978
1136.	VALDÉS, ELCIA DE	LIB. REGIONAL	4-141-18
1137.	VALDÉS, EMIR N.	COLPAN	4-267-331
1138.	VALDÉS, FABIO	RICARDO PÉREZ	4-71-279
1139.	VALDÉS, JOSÉ	DIST. CH. UNIDA	4-84-76
1140.	VALDÉS C., JOSÉ EDGAR	AUTO CENTRO	4-166-822
1141.	VALDÉS, LEONEL	CERV. BARU	4-108-616
1142.	VALDÉS, LILIA DE	ASESA	4-122-1292
1143.	VALDÉS, MAYANIS	UNACHI	4-138-1281
1144.	VALDÉS, OMAR	UNACHI	4-184-319
1145.	VALDÉS, VÍCTOR AQUILINO	BUDGET	4-148-399
1146.	VALLE B., ALBER MAR	EMP. DE LEÓN	4-279-570
1147.	VALLE, ALEX	ROMERO	4-108-146
1148.	VANEGAS, DALLYS DE	MORAZAN	4-97-2393
1149.	VANEGAS, FERNANDO	FINANC. EL SOL	4-287-719
1150.	VANEGAS, MARIXENIA DE	EDIT. CHIRIQUÍ	4-88-502
1151.	VARGAS, ÁNGEL	F. RODRÍGUEZ	4-230-58
1152.	VARGAS, VÍCTOR	U. LATINA	4-106-282
1153.	VARGAS, JANETH	COOP. ECASESO	4-166-296
1154.	VÁSQUEZ C., CARLOS A.	MAT. OSORIO	4-142-1673
1155.	VÁSQUEZ, ERNESTO	GUERRA Y CÍA	4-113-173
1156.	VÁSQUEZ, FRANCISCO A.	APEDE	4-234-213
1157.	VÁSQUEZ, MARICRUZ HOSP.	CHIRIQUÍ	
1158.	VEGA M., ANARELYS	CEDULACIÓN	4-120-391
1159.	VEGA, ANEL	GUERRA Y CÍA	4-185-998
1160.	VEGA, ARACELLY	UNACHI	4-101-1036
1161.	VEGA, AUDEMIA (DE)	UNACHI	7-46-779
1162.	VEGA, EDDA LIN	U. LATINA	4-155-1934
1163.	VEGA, FILIBERTO	DIST. DEL NORTE	4-225-349
1164.	VEGA, GILBERTO	MORAZAN	
1165.	VEGA, JORGE LUIS	BUDGET	4-700-599
1166.	VEGA R., MARITZA	UNACHI	4-183-888
1167.	VEGA, NIVIA DE	BCO. NACIONAL	4-82-222
1168.	VEGA, OMAIRA	F. ICAZA Y CÍA	4-212-717
1169.	VEGA, ROGELIO	UNACHI	4-69-597
1170.	VELÁSQUEZ M., JORGE	LIB. REGIONAL	4-263-953
1171.	VELÁSQUEZ, RENÉ	COL. NTRA.SRA. ANG.	4-153-423
1172.	VERGARA, DORIS	UNACHI	7-70-2520
1173.	VIDELA, EDUARDO	UNACHI	N-16-486
1174.	VIGIL, ARISTIDES	CHASE MANHATTAN	4-253-316
1175.	VILLALAZ, JOSÉ ALEXIS	EDUCACIÓN	
1176.	VILLAMONTE, EDNA R.	ADMON-UNACHI	9-124-1905
1177.	VILLAMONTE, EDUARDO	RODELAG	4-184-16
1178.	VILLARREAL, ALBINIO	UNIV. TEC.	4-104-648
1179.	VILLARREAL, ALFONSO	INST. DAVID	4-95-81
1180.	VILLARREAL, ANTONINO	FINANC. EL SOL	4-221-1345
1181.	VILLARREAL, DALMA DE	U. S. M. A.	4-96-2739
1182.	VILLARREAL, DIOMIDIO	GUERRA Y CÍA	4-175-240
1183.	VILLARREAL, HERBERTO	USMA O P. CORSEN	4-71-548
1184.	VILLARREAL, RENÉ	I. P. T.	
1185.	VILLARREAL, ROSA IRIS	UNACHI	4-120-10
1186.	VILLAVICENCIO, MARÍA	UNACHI	4-106-901

-W-

1187.	WATCHER, ANAYANSI	MIDA	8-501-970
1188.	WATSON, ASCANIO	DON ENRIQUE	
1189.	WILLA, MERCEDES	CHASE MANHATTAN	4-258-493
1190.	WILLIAMS, ALBERTO	MORAZAN	
1191.	WING, IRIS (DE)	RICARDO PÉREZ	
1192.	WING, JAIME A.	AUTO PART. CH.	4-68-773
1193.	WING V., JOAQUÍN A.	COM. E IND.	
1194.	WITTGREEN, NORIDYS DE	BRENES Y ASOC.	4-198-968

-Y-

1195. YANGUEZ, JAIME	INST. DAVID	
1196. YANGUEZ, NILDA R.	UNIV. TEC.	4-120-5

-Z-

1197. ZAPATA, JOSÉ	ADMON-USMA	4-80-212
1198. ZARATE, ALFREDO	UNIV. TEC.	PE-6-957
1199. ZELAYA, MIRIAM (DE)	ADMON-UNACHI	4-102-1878
1200. ZELEDON, KATHIA	ADMON-USMA	PE-5-339

ASÍ TERMINÓ EL ACTO Y PARA CONSTANCIA SE FIRMA.

(FDO) LICDO. SALVADOR DOMÍNGUEZ B.
Magistrado Presidente

(FDO) LICDO. ASUNCIÓN CASTILLO
Magistrado Vicepresidente

(FDO) LICDO. LUIS MARIO CARRASCO
Magistrado Vocal

(FDO) LICDA. MADELINE ARABEL MIRANDA ORTIZ
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SALA DE ACUERDO
TRIBUNAL SUPERIOR DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL
LISTADO DE JURADOS DE CONCIENCIA
19 de diciembre de 1995

Siendo las diez de la mañana (10:00 a. m.) del día de hoy, diecinueve (19) de diciembre de mil novecientos noventa y cinco (1995), el **DR. DULIO O. ARROCHA A.**, Presidente del Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, con sede en la ciudad de Las Tablas, Provincia de Los Santos, convocó al **PLENO**, compuesto por los Magistrados **MANUEL BATISTA S. y CESAR H. MORCILLO R.**, Suplente del Magistrado **ROBERTO GONZÁLEZ R.**, para formar oficialmente la lista de personas compuestas por funcionarios públicos de la ciudad de Chitré, Provincia de Herrera, del Distrito de Los Santos y de la ciudad de Las Tablas y sus alrededores, en la Provincia de Los Santos, de esta circunscripción judicial, que reúnen los requisitos necesarios para desempeñar el cargo de Jurados de Conciencia para el año 1996.

Previo el traslado a la Honorable Fiscal Superior por el término de ley, se procedió en Sala de Acuerdo a revisar la mencionada lista que consta de 1665 personas y ordenada en estricto orden alfabético. Después de un examen minucioso del proyecto, acordaron por unanimidad adoptarlo y remitirlo a la Gaceta Oficial y el Registro Judicial, para su publicación.

A continuación a la lista oficial de Jurados de Conciencia:

N°	NOMBRE	INSTITUCION
	-A-	
1.	ÁBREGO B., MARIANITA	INST. C. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS
2.	ABULILA, MERCEDES B. DE	INTEL, LAS TABLAS
3.	EVEDO DENIA DE	MIVI, LAS TABLAS
4.	ACEVEDO, FREDESVINDA	P. CICLO SEC., GUARARÉ
5.	ACEVEDO, LUCINDA DE	B. D. A., LAS TABLAS
6.	ACEVEDO, MARIA	C. M. M. T. R., LAS TABLAS
7.	ACEVEDO, MARITZA	CORREOS, LAS TABLAS
8.	ACEVEDO, SIMON	ESC. N. VILLALAZ, LOS SANTOS
9.	ACEVEDO, SUNILDA	SEGURO SOCIAL, LAS TABLAS
10.	AFU, ANA	INTEL, CHITRÉ
11.	AFU, CORINA	B. D. A., CHITRÉ
12.	AGUILAR, CAMILO	I. P. T. A., LOS SANTOS
13.	AGUILAR S., DAMASO E.	CAJA DE AHORROS, CHITRÉ

14. AGUILAR, EDUARDO	ALCALDÍA, CHITRÉ
15. AGUILAR, MONICA	COLEG. JOSÉ DANIEL CRESPO, CHITRÉ
16. AGUILAR, OSCAR	INTEL, CHITRÉ
17. AGUIRRE, RAQUEL	CONTRALORÍA, CHITRÉ
18. AIZPRUA, CESAR	COLEG. JOSÉ DANIEL CRESPO, CHITRÉ
19. ALMANZA, EVELIA P. DE	SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
20. ALMENGOR, ILKA	COLEG. JOSÉ DANIEL CRESPO, CHITRÉ
21. ALONSO, BRIGIDO	B. D. A., LAS TABLAS
22. ALONSO, FELIX	M. O. P., CHITRÉ
23. ALINSO, IVETTE	ESC. H. P. TELLO, CHITRÉ
24. ALONSO, MARIA	INTEL, CHITRÉ
25. ALVARADO, JOSÉ MARÍA	BANCO NACIONAL, CHITRÉ
26. ALVARADO, LUIS	IRHE, CHITRÉ
27. ALVÁREZ, SALOMÓN LUIS	INGRESOS (INSP.), CHITRÉ
28. AMAYA, ETILCIA C. DE	D. PROR. DE EDUC., CHITRÉ
29. AMORES, DEYBIS	MIDA, LAS TABLAS
30. ANDRADE, WALKIRIA	INST. C. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS
31. ANGULO, CATALINA	CONTRALORÍA, CHITRÉ
32. ANGULO, LUIS A.	B. D. A., LAS TABLAS
33. APARICIO, ANALIDA	MIDA, CHITRÉ
34. APARICIO, DARINEL	ESC. TOMÁS HERRERA, CHITRÉ
35. APARICIO, EVANGELISTA	INGRESOS, CHITRÉ
36. APARICIO, HERLINDA S. DE	SEGURO SOCIAL, LAS TABLAS
37. APARICIO, NATIVIDAD	ORG. ELECTORAL, CHITRÉ
38. APARICIO, NORMA	ESC. TOMÁS HERRERA, CHITRÉ
39. APARICIO, OLMEDO	D. PROV. DE EDUCACIÓN, LAS TABLAS
40. APARICIO, TEMISTOCLES	INTEL, LAS TABLAS
41. APARICIO, ZOBEIDA	ESC. TOMÁS HERRERA, CHITRÉ
42. ARABA, MIREYA	C. M. M. T. R., LAS TABLAS
43. ARAUZ, GALO	INGRESOS, CHITRÉ
44. ARAUZ, GLADYS R. DE	CAJA DE AHORROS, CHITRÉ
45. ARAUZ, MERCEDES DE	ESC. TOMÁS HERRERA, CHITRÉ
46. ARAUZ, VICTOR	MIDA, CHITRÉ
47. ARCIA, YORBALINDA DE	ESC. J. T. DEL BUSTO, CHITRÉ
48. ARCIA, YULISSA	MIVI, CHITRÉ
49. ARENAS, EDUARDO	C. M. M. T. R., LAS TABLAS
50. ARJONA, AGRIPINA DE	ORGANIZACION ELECTORAL, CHITRÉ
51. ARJONA, ALBERTO	D. PROV. DE EDUCACIÓN, CHITRÉ
52. ARJONA M., ALFREDO	SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
53. ARJONA, DIOGENES	MIDA, CHITRÉ
54. ARJONA, JOSÉ A.	INST. C. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS
55. ARJONA V., RAMÓN A.	CEDULACIÓN, CHITRÉ
56. AROSEMENA, BERTA	MIDA, LAS TABLAS
57. AROSEMENA, DENNIS DE	INST. C. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS
58. AROSEMENA, DEYANIRA	ESC. NICANOR VILLALAZ, LOS SANTOS
59. AROSEMENA, EUSTORGIO	IPTA, LOS SANTOS
60. ARRIVILLAGA M., EDITH	CAJA DE SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
61. ARROCHA, AMARILIS V. DE	ESC. P. PORRAS, LAS TABLAS
62. ARROYO, ARLEYDIS	IFARHU, CHITRÉ
63. ARRUE, DAIRA M. DE	COLEG. SAN FCO. DE ASIS, LAS TABLAS
64. ARRUE, DIOMEDES	D. PROV. DE EDUCACIÓN, LAS TABLAS
65. ATENCIO, ROGELIO	D. PROV. DE EDUCACIÓN, CHITRÉ
66. AVILA, ANGELA CALDERON DE	ALCALDÍA, CHITRÉ
67. AVILA, HÉCTOR	IPTA, LOS SANTOS
68. AVILA, MARIA	C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
69. AVILA, MARIA ELENA DE	ALCALDÍA, CHITRÉ
70. AYALA, NIDIA R. DE	C. M. M. T. R., LAS TABLAS

-B-

71. BALBOZA Y., DILCIA	MICI, CHITRÉ
72. BALLEJOS, NANCY R.	INTEL, LAS TABLAS
73. BALLESTEROS, ARIS	ESC. P. PORRAS, LAS TABLAS
74. BALLESTEROS, ERIC	MIDA, LAS TABLAS
75. BALLESTEROS, RICAURTE	ALCALDÍA, CHITRÉ

76.	BANDA, MISAEL	D. PROV. DE EDUCACIÓN, CHITRÉ
77.	BARAHONA, ADAN	ESC. JUANA VERNAZA, GUARARÉ
78.	BARAHONA, AURORA DE	P. CICLO SEC. GUARARÉ
79.	BARAHONA, BLASINIA DE	C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
80.	BARAHONA, JOAQUIN	IDAAN, CHITRÉ
81.	BARAHONA, OMAR	C. M. M. T. R., LAS TABLAS
82.	BARAHONA, PEDRO	SEGURO SOCIAL, LAS TABLAS
83.	BARBA, RAMIRO V.	INTEL, LAS TABLAS
84.	BARBOZA, BERTILIA	MIVI, CHITRÉ
85.	BARSALLO, ENRIQUE	C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
86.	BARRAGAN, MAXIMINO	MIDA, CHITRÉ
87.	BARRAGAN, REYNALDO	B. D. A., CHITRÉ
88.	BARRAGAN, ROBIN	ALCALDÍA, CHITRÉ
89.	BARRAGAN, LAURA	CONTRALORÍA, CHITRÉ
90.	BARRERA, ARIEL	MIDA, CHITRÉ
91.	BARRERA, ITZEL DE	INST. C. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS
92.	BARRERA, JOSÉ FEDERICO	B. D. A, CHITRÉ
93.	BARRIA, AIDEE	INTEL, CHITRÉ
94.	BARRIA, ISIDRO	INTEL, CHITRÉ
95.	BARRIA, LEONARDO	IPTA., LOS SANTOS
96.	BARRIA, ZENAIDA DE	CONTRALORÍA, CHITRÉ
97.	BARRIOS, ANANIAS	BANCO NACIONAL, LAS TABLAS
98.	BARRIOS B., ANGEL A.	CATASTRO, LAS TABLAS
99.	BARRIOS, ARCELIA G. DE	MICI, LAS TABLAS
100.	BARRIOS, AURA V. DE	ESC. CLAUIDIO VÁSQUEZ, LAS TABLAS
101.	BARRIOS, AURELIO	C. M. M. T. R., LAS TABLAS
102.	BARRIOS, CILA P. DE	ESC. MELQUISIDEC VÁSQUEZ, STO. DOMINGO, LAS TABLAS
103.	BARRIOS, ERODIDA M. DE	MIDA, LAS TABLAS
104.	BARRIOS, GINA	INST. C. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS
105.	BARRIOS, HAIDEE	ESC. P. PORRAS, LAS TABLAS
106.	BARRIOS, HORTENCIA	IPACOOP, LAS TABLAS
107.	BARRIOS, ILSA	C. M. M. T. R., LAS TABLAS
108.	BARRIOS, ISRRAEL	SEGURO SOCIAL, LAS TABLAS
109.	BARRIOS, JORGE E.	D. PROV. DE EDUCACIÓN, CHITRÉ
110.	BARRIOS, JOSÉ ANTONIO	SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
111.	BARRIOS, JOSÉ FELIX	MIDA, LAS TABLAS
112.	BARRIOS, LEOVIGILDA V. DE	SEGURO SOCIAL, LAS TABLAS
113.	BARRIOS, MARCELINO	INTEL, LAS TABLAS
114.	BARRIOS, NICOMEDES	MICI, LAS TABLAS
115.	BARRIOS, NILSA DE	MIN. DE TRABAJO, LAS TABLAS
116.	BARRIOS, VICTOR	IPTA, LOS SANTOS
117.	BARRIOS, ZONY	MIVI, CHITRÉ
118.	BATISTA CARMEN T. DE	MIVI, CHITRÉ
119.	BATISTA, CARMINA	ESC. TOMÁS HERRERA, CHITRÉ
120.	BATISTA, EDISTIO	C. M. M. T. R., LAS TABLAS
121.	BATISTA, EDUARDO	INGRESOS, CHITRÉ
122.	BATISTA, ELIAS	ESC. PRESIDENTE PORRAS, LAS TABLAS
123.	BATISTA, EURI	MIDA, LAS TABLAS
124.	BATISTA, GLORIA M. DE	INTEL, LAS TABLAS
125.	BATISTA, HÉCTOR	BANCO NACIONAL, CHITRÉ
126.	BATISTA, JUANA DE	CORREOS, LAS TABLAS
127.	BATISTA, LUIS A.	INGRESOS, LAS TABLAS
128.	BATISTA, MARITZA DE	ESC. P. PORRAS, LAS TABLAS
129.	BATISTA, MARTHA DE	MIDA, CHITRÉ
130.	BATISTA, MITZILA M. DE	SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
131.	BATISTA, MIGUEL	INGRESOS, LAS TABLAS
132.	BATISTA, RAQUEL DE	ESC. P. PORRAS, LAS TABLAS
133.	BATISTA, RENAUL	ESC. N. VILLALAZ, LOS SANTOS
134.	BATISTA, TELMA DE	ESC. TOMÁS HERRERA, CHITRÉ
135.	BATISTA, TEODULO	C. M. M. T. R., LAS TABLAS
136.	BATISTA, VIVIAN M.	ALCALDÍA, CHITRÉ
137.	BATISTA C., ZULEIKA	COLEG. SAN FCO. DE ASIS, LAS TABLAS
138.	BAULE, ARGELIA DE	ESC. J. T. DEL BUSTO, CHITRÉ
139.	BAULE, MARILIN	IDAAN, CHITRÉ
140.	BAULE, MERCEDES	MICI, CHITRÉ

141. BAZAN, MIGUEL	INST. C. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS
142. BENAVIDES, DELYS P. DE	SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
143. BENAVIDES DORINDO	DIGEDECOM, LAS TABLAS
144. BENAVIDES, EVELIA DE	IPTA, LOS SANTOS
145. BERDIALES, RUBEN	IFARHU, LAS TABLAS
146. BERMUDES, AGUEDA	ESC. H. P. TELLO, CHITRÉ
147. BERNAL, ALEXIS	IPTA, LOS SANTOS
148. BERNAL, CARMEN DE	IPTA, LOS SANTOS
149. BERNAL, INES DE	INTEL, CHITRÉ
150. BERNAL, MARIELA U. DE	SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
151. BERNAL, MANUEL	ESC. N. VILLALAS, LOS SANTOS
152. BERNAL, ROSA	ESC. J. T. DEL BUSTO, CHITRÉ
153. BERNAL, RIBIEL	MIDA, LAS TABLAS
154. BERROCAL, CARMEN DORITA	ORG. ELECTORAL, CHITRÉ
155. BERROCAL, TERESA DEL C.	CEDULACIÓN, CHITRÉ
156. BEST, CESAR A.	IFARHU, LAS TABLAS
157. BINGAHM, REINA A. DE	DIGEDECOM, LAS TABLAS
158. BONILLA, FELIX	IPTA, LOS SANTOS
159. BORRERO, DANIA S. DE	SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
160. BOSQUEZ, OSMEL	SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
161. BOTELLO, GENARINA	C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
162. BRAVO, FLORINDA M.	SEGURO SOCIAL, LAS TABLAS
163. BRAVO, ZORAIDA DE	CORREOS, LAS TABLAS
164. BRITO, MIGUEL	C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
165. BROCE, EMÉRITA	C. M. M. T. R., LAS TABLAS
166. BROCE, FERNAN	INTEL, LAS TABLAS
167. BROCE C., RAFAEL A.	SEGURO SOCIAL, LAS TABLAS
168. BULTRON, BERNA DE	P. CICLO SEC. GUARARÉ
169. BURGOS, AIXA	ESC. H. PÉREZ TELLO, CHITRÉ
170. BURGOS, AZAEL	C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
171. BURGOS, EDGARDO	ESC. TOMÁS HERRERA, CHITRÉ
172. BURGOS, EDUARDO	IRHE, CHITRÉ
173. BURGOS, ERIC	D. PROV. DE EDUACION, CHITRÉ
174. BURGOS, GLORIA E.	SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
175. BURGOS, REINA DE	C. J. DE CRESPO, CHITRÉ
176. BUSTAMANTE, CLEMENTINA DE	SEGURO SOCIAL, LAS TABLAS
177. BUSTAMANTE, ENELIA	C. M. M. T. R., LAS TABLAS
178. BUSTAMANTE, FRANCISCO A.	MIDA, CHITRÉ
179. BUSTAMANTE, HÉCTOR	INTEL, LAS TABLAS
180. BUSTAMANTE, NORATA DE	C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
181. BUSTAMANTE, NORMAN	P. CICLO SEC., GUARARÉ
182. BUSTAMANTE, RITA DE	ESC. JUANA VERNAZA, GUARARÉ
183. BUSTAVINO, GLADYS	DIGEDECOM, CHITRÉ

-C-

184. CABALLERO, CESAR	C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
185. CABALLERO, JUANA E. DE	SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
186. CARRERA, RUBEN	C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
187. CAICEDO, RODOLFO	INST. C. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS
188. CALDERON, AIDA	INTEL, CHITRÉ
189. CALDERON, RODOLFO	MOP, CHITRÉ
190. CALDERON, ANGELA DE	INTEL, CHITRÉ
191. CALDERON, EMÉRITA	IFARHU, CHITRÉ
192. CALDERON, GUILLERMO	ALCALDÍA, CHITRÉ
193. CALDERON, IRMA DE	IFARHU, CHITRÉ
194. CALDERON, JOSÉ I.	MIVI, CHITRÉ
195. CALDERON, MARISEL M. DE	CAJA DE AHORROS, CHITRÉ
196. CALDERON, ROSARIO S. DE	C. M. M. T. R., LAS TABLAS
197. CALDERON, URIEL ALBERTO	SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
198. CALVO ALGIS A.	INTEL, LAS TABLAS
199. CALVO, PLENIS DOMINGO	SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
200. CAMARENA, DIOGENES	ALCALDÍA, LAS TABLAS
201. CAMAÑO, GUILLERMO	MIDA, CHITRÉ
202. CAMARGO, RAMIRO	IPACOOP, LAS TABLAS

203. CAMPOS, ANTONIO	IPTA, LOS SANTOS
204. CAMPOS, MAYRA	D. PROV. DE EDUCACION, CHITRÉ
205. CAMPOS, PAULA	ESC. N. VILLALAZ, LOS SANTOS
206. CAMPOS, RICARDO	INST. C. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS
207. CANO, ARISTIDES	CAJA DE AHORROS, LAS TABLAS
208. CANO, FRANCISCA DE	INTEL, LAS TABLAS
209. CANO, GINA V. DE	SEGURO SOCIAL, LAS TABLAS
210. CANTO, MARIA DE LA C.	MIN. DE TRABAJO, CHITRÉ
211. CARDENAS, AGAPITO	C. M. M. T. R., LAS TABLAS
212. CARDENAS Z., CESAR A.	CATASTRO, LAS TABLAS
213. CARDENAS, EDILIA	C. M. M. T. R., LAS TABLAS
214. CARDENAS, FRANCY	B. D. A., LAS TABLAS
215. CARDENAS, IRIS	P. CICLO SEC. DE GUARARÉ
216. CARDENAS, JESUS	MIVI, LOS SANTOS
217. CARDENAS, JORGE	INGRESOS, CHITRÉ
218. CARDENAS, MELQUIADES	B. D. A., LAS TABLAS
219. CARDENAS, NAZARTEH G. DE	SEGURO SOCIAL, LAS TABLAS
220. CARDENAS, SATURNINA DE	C. M. M. T. R., LAS TABLAS
221. CARDENAS, SONIA DE	C. M. M. T. R., LAS TABLAS
222. CARDENAS, VICENTE	IRHE, CHITRÉ
223. CARDENAS, VIELKA DE	C. M. M. T. R., LAS TABLAS
224. CARIDE, ALLISON	IDAAN, CHITRÉ
225. CARIDE, ARIEL	SEGURO SOCIAL, LAS TABLAS
226. CARRASCO ESTEBAN	CAJA DE AHORROS, LAS TABLAS
227. CARRASCO, ESTHER O.	C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
228. CARRASCO, JACINTO S.	REGISTRO CIVIL, LAS TABLAS
229. CARRASCO, MARIELA DE	C. M. M. T. R., LAS TABLAS
230. CARRION, NORIS DE	MIDA, CHITRÉ
231. CARVAJAL, UBALDINA DE	IDAAN, CHITRÉ
232. CASAS, ITZEL	CORREOS Y TELEGRAFOS, CHITRÉ
233. CASSINO, DOMINGO	IDAAN, CHITRÉ
234. CASSINO, ELIZABTHE DE	INTEL, CHITRÉ
235. CASTAÑEDA, JUAN B.	ALCALDÍA, CHITRÉ
236. CASTAÑEDA S., NINFA R.	SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
237. CASTILLERO, CECILIA U. DE	D. PROV. DE EDUCACIÓN, LAS TABLAS
238. CASTILLERO, DENIS G. DE	BANCO NACIONAL, CHITRÉ
239. CASTILLERO, JOSÉ	D. PROV. DE EDUACIÓN, LAS TABLAS
240. CASTILLERO, LOURDES DE	ESC. J. T. DEL BUSTO, CHITRÉ
241. CASTILLERO, MARIANELA	INTEL, CHITRÉ
242. CASTILLERO, MAXI DARINEL	MIDA, LAS TABLAS
243. CASTILLERO, NILKA S. DE	C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
244. CASTILLERO, NILSA DE	INST. C. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS
245. CASTILLERO, OSVALDO	C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
246. CASTILLO, ALEXIS Y. DE	C. M. M. T. R., LAS TABLAS
247. CASTILLO, ANA CECILIA	MIVI, CHITRÉ
248. CASTILLO, ANIBAL	INST. C. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS
249. CASTILLO, ARGELIA	INTEL, CHITRÉ
250. CASTILLO, AURORA DE	CORREOS, CHITRÉ
251. CASTILLO H., BOLIVAR	IDAAN, LAS TABLAS
252. CASTILLO D., BREDIO A.	COOP. G. B. DE DUCASA, LAS TABLAS
253. CASTILLO, CARMEN C. DE	CONTRALORÍA, CHITRÉ
254. CASTILLO, DENIS M. S. DE	C. SAN FCO. DE ASIS, LAS TABLAS
255. CASTILLO, DILCIA	INST. C. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS
256. CASTILLO B., EDISON A.	CATASTRO, CHITRÉ
257. CASTILLO, EDUARDO	INTEL, LAS TABLAS
258. CASTILLO, EDWIN	P. C. SEC., DE GUARARÉ
259. CASTILLO M., EMILIO E.	CATASTRO, CHITRÉ
260. CASTILLO, GRACIELA	INST. C. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS
261. CASTILLO, ERIC E.	INST. C. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS
262. CASTILLO, IDA F. DE	MIDA, LAS TABLAS
263. CASTILLO, JAVIER	IDAAN, CHITRÉ
264. CASTILLO, JESUS	ESC. N. VILLALAZ, LOS SANTOS
265. CASTILLO, JORGE	INST. C. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS
266. CASTILLO, JORGE I.	BANCO NACIONAL, CHITRÉ
267. CASTILLO, JOSÉ DE LA C.	IPTA, LOS SANTOS

268. CASTILLO, JULIA	IPTA, LOS SANTOS
269. CASTILLO, LETICIA DE	P. C. SEC., GUARARÉ
270. CASTILLO, MANUEL	ALCALDÍA, CHITRÉ
271. CASTILLO, MOISES	IPTA, LOS SANTOS
272. CASTILLO, NELVA U. DE	ESC. NICANOR VILLALAZ, LOS SANTOS
273. CASTILLO, NILKA V. DE	INTEL, LAS TABLAS
274. CASTILLO, NITZA (P. AD.)	C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
275. CASTILLO, ODILDA	MICI, LAS TABLAS
276. CASTILLO, IVIDIO	MIDA, LAS TABLAS
277. CASTILLO, ROMELIA	INST. C. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS
278. CASTILLO, VICTOR	MIDA, CHITRÉ
279. CASTILLO, VICTORINO	C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
280. CASTILLO, VIELKA DE	IPTA, LOS SANTOS
281. CASTILLO V., SOBEIDA	REGISTRO CIVIL, LAS TABLAS
282. CASTRO, ANTONIA B. DE	IPTA, LOS SANTOS
283. CASTRO, BAUDILIO	ESC. H. PÉREZ TELLO, CHITRÉ
284. CASTRO, DELFINA DE	ESC. NICANOR VILLLALAZ, LOS SANTOS
285. CASTRO, DOLORES	M. O. P., LAS TABLAS
286. CASTRO, EUSEBIO	M. O. P., LAS TABLAS
287. CASTRO, JILMA	ESC. H. PÉREZ TELLO, CHITRÉ
288. CASTRO, MARIELA	MIVI, CHITRÉ
289. CASTRO, SEGUNDO EMILIO	P. C. SEC DE GUARARÉ
290. CAUSADÍAS, CENIA S. DE	ALCALDÍA, LAS TABLAS
291. CEBALLOS M., PORFIRIO J.	CATASTRO, CHITRÉ
292. CEDEÑO E., ALFONSO	MIN. DE TRABAJO, LAS TABLAS
293. CEDEÑO, ALICIA B. DE	C. M. M. T. R., LAS TABLAS
294. CEDEÑO, ALFREDO A.	MIDA, CHITRÉ
295. CEDEÑO, CARLOS	MIDA, CHITRÉ
296. CEDEÑO B., CARMEN MARIA	GOBERNACIÓN, LAS TABLAS
297. CEDEÑO, CARMEN	IDAAN, CHITRÉ
298. CEDEÑO, CASTALIA	M. O. P., LAS TABLAS
299. CEDEÑO, CLELIA E. DE	IPTA, LOS SANTOS
300. CEDEÑO, DOMICIANO	CORREOS, LAS TABLAS
301. CEDEÑO, ELIAS	SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
302. CEDEÑO, EDWIN A.	CAJA DE AHORROS, CHITRÉ
303. CEDEÑO, EMELDA S. DE	INTEL, CHITRÉ
304. CEDEÑO, EMELINA DE	INTEL, CHITRÉ
305. CEDEÑO, EZEQUIEL	MICI, CHITRÉ
306. CEDEÑO, GRACIELA	ESC. H. PÉREZ TELLO, CHITRÉ
307. CEDEÑO, GRISELDA	SEGUROS SOCIAL, LAS TABLAS
308. CEDEÑO, HERACLIO	INST. C. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS
309. CEDEÑO, HERASTO OLMEDO	B. D. A., CHITRÉ
310. CEDEÑO, IDALIA M. B. DE	REGISTRO CIVIL, CHITRÉ
311. CEDEÑO, IDALIDES	D. PROV. DE EDUCACIÓN, CHITRÉ
312. CEDEÑO, ISIDRO	C. M. M. T. R., LAS TABLAS
313. CEDEÑO, IVAN	IDAAN, CHITRÉ
314. CEDEÑO, B. JORGE L.	CONTRALORÍA, CHITRÉ
315. CEDEÑO, JOSÉ M.	MIDA, CHITRÉ
316. CEDEÑO, JOSÉ DE LOS S.	MIDA, CHITRÉ
317. CEDEÑO, JOSÉ T.	ALCALDÍA, CHITRÉ
318. CEDEÑO, JUAN ANTONIO	IPTA., LOS SANTOS
319. CEDEÑO, LUIS G.	INGRESOS, CHITRÉ
320. CEDEÑO, LUIS SANTIAGO	ORG. ELECTORAL, LAS TABLAS
321. CEDEÑO, MAIRA DE	ESC. H. PÉREZ TELLO, CHITRÉ
322. CEDEÑO, MANUEL	IRHE, CHITRÉ
323. CEDEÑO, MIDAS DE	IPTA, LOS SANTOS
324. CEDEÑO, MINERVA DE	INTEL, CHITRÉ
325. CEDEÑO, NEREYDA DE	INTEL, CHITRÉ
326. CEDEÑO, NIDIA C. DE	INGRESOS, LAS TABLAS
327. CEDEÑO, OLGA J. DE	ORG. ELECTORAL, LAS TABLAS
328. CEDEÑO, RAMÓN A.	IRHE, CHITRÉ
329. CEDEÑO B., REYNALDO E.	COOP. GLADYS B. DE DUCASA, LAS TABLAS
330. CEDEÑO, RICARDO	MIVI, LAS TABLAS
331. CEDEÑO RUTILIO	IDAAN, CHITRÉ
332. CEDEÑO, SAMUEL	COOP. EDUC. SANTEÑO, LAS TABLAS

333. CEDEÑO, SEGUNDA DE	ESC. CLAUDIO VÁSQUEZ, LAS TABLAS
334. CEDEÑO, VICTOR	IDAAN, CHITRÉ
335. CEDEÑO, Q., VIODELDA	MICI, CHITRÉ
336. CEDEÑO, YADIRA ELIZABETH	ALCALDÍA MPAL., LAS TABLAS
337. CEDEÑO, YARIZA P. DE	IPACOOP, LAS TABLAS
338. CEDEÑO, YENI MARIA	P. CICLO ESC. DE GUARARÉ
339. CEDEÑO, ZORAIDA DE	CONTRALORÍA, CHITRÉ
340. CENTELLA, EYRA DE	MICI, CHITRÉ
341. CENTELLA, LAURA	C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
342. CENTELLA, LIBRADA G. DE	SEGURO SOCIAL (AD), CHITRÉ
343. CENTELLA, LUIS A.	MIVI, CHITRÉ
344. CENTELLA, MANUEL	IDAAN, CHITRÉ
345. CENTELLA, ODALYS	INTEL, CHITRÉ
346. CERVANTES CH., RIGOBERTO	CEDULACIÓN, CHITRÉ
347. CERRUD, XENIA	CAJA DE AHORROS, LAS TABLAS
348. CESPEDES, ACELA DE	B. D. A., LAS TABLAS
349. CIANCA, LUZ A.	MIDA, CHITRÉ
350. CIGARRUISTA, ANDRES	MIDA, LAS TABLAS
351. CIGARRUISTA, EMELDA DE	MIDA, CHITRÉ
352. CIGARRUISTA, EVENOR U.	IRHE, CHITRÉ
353. CIGARRUISTA, LEOVIGILDO	ESC. N. VILLALAZ, LOS SANTOS
354. CIGARRUISTA, MARISIN DE	IFARHU, CHITRÉ
355. CIGARRUISTA, MIGUEL	MIDA, CHITRÉ
356. CIGARRUISTA, MILVIA	IPTA, LOS SANTOS
357. CIGARRUISTA, PRISCILA J.	REGISTRO CIVIL, CHITRÉ
358. CIGARRUISTA, ROSA C. DE	GOBERNACIÓN, CHITRÉ
359. COCCIO, BALDOMERA	SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
360. COHEN, ROBERTO	MIDA, LAS TABLAS
361. COHEN, ROBERTO E.	SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
362. COLOMA, JULIO C.	MIDA, CHITRÉ
363. COLLADO, CESAR	M. O. P., CHITRÉ
364. COLLADO, DORA	SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
365. COLLADO, ELVIRA O. DE	IPTA, LOS SANTOS
366. COLLADO, FRANCIA E.	SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
367. COLLADO, MAURREN	MIVI, CHITRÉ
368. COLLADO, TANIA	IDAAN, CHITRÉ
369. COMBE, DIGNA	ESC. PRESIDENTE PORRAS, LAS TABLAS
370. COMBE, TULIO	D. PROV. DE EDUCACIÓN, LAS TABLAS
371. CONCEPCION, FELICITA G. DE	MIDA, LAS TABLAS
372. CONCEPCION G., OVIDIO A.	SEGURO SOCIAL, LAS TABLAS
373. CONCEPCION, RODRIGO	ESC. CLAUDIO VÁSQUEZ, LAS TABLAS
374. CONCEPCION H., VICTOR M.	ALCALDÍA MPAL. LAS TABLAS
375. CÓRDOBA, BENIGNO	MIDA, LAS TABLAS
376. CÓRDOBA, BENIGNO	B. D. A., LAS TABLAS
377. CÓRDOBA, BENILDA	P. CICLO SEC. DE GUARARÉ
378. CÓRDOBA, CARLOS	MIVI, LAS TABLAS
379. CÓRDOBA, DALVYS H. DE	ESC. MELQUISEDEC VÁSQUEZ, STO. DOMINGO
380. CÓRDOBA, DEYSI DE	BANCO NACIONAL, LAS TABLAS
381. CÓRDOBA, GLADYS A.	C. M. M. T. R. (P.AD.), LAS TABLAS
382. CÓRDOBA, HORACIO A.	INTEL, LAS TABLAS
383. CÓRDOBA, JEANETTE	DIGEDECOM, LAS TABLAS
384. CÓRDOBA, LYDA DE	INST. C. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS
385. CÓRDOBA, OREYDA P. DE	SEGURO SOCIAL, LAS TABLAS
386. CÓRDOBA, LUIS H.	P. CICLO SEC. DE GUARARÉ
387. CÓRDOBA, MAYDEE	INST. C. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS
388. CÓRDOBA, MELQUIADES	MIDA, LAS TABLAS
389. DORDOBA, MELQUIADES	B. D. A., LAS TABLAS
390. CÓRDOBA, RAFAEL	IPTA, LOS SANTOS
391. CÓRDOBA, RAMÓN AUGUSTO	CATASTRO, CHITRÉ
392. CÓRDOBA, WILFREDO A.	BANCO NAL, LAS TABLAS
393. CÓRDOBA, XIOMARA	COOP. GLADYS B. DE DUCASA, LAS TABLAS
394. CORNEJO, ILKA DE	ESC. JUAN T. DEL BUSTO, CHITRÉ
395. CORNEJO, JOSÉ	ESC. JUAN T. DEL BUSTO, CHITRÉ
396. CORNEJO, OLMEDO	M. O. P., CHITRÉ
397. CORTES, CESAR (INSP.)	INGRESOS, CHITRÉ

398. CORTES C., DILSA — INTEL, LAS TABLAS
399. CORTEZ, GLADYS — MIVI, LAS TABLAS
400. CORTEZ, SANTIAGO — MIDA, LAS TABLAS
401. CORRALES, CARLOS A. — B. D. A, CHITRÉ
402. CORRALES GLADYS — D. PROV. DE EDUCACIÓN, CHITRÉ
403. CORRALES, UBALDINA — ESC. TOMÁS HERRERA, CHITRÉ
404. CORREA, GERMAN (INSP.) — INGRESOS, CHITRÉ
405. CORREA, GLADYS PÉREZ DE — SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
406. CORREA, HÉCTOR — CONTRALORÍA, CHITRÉ
407. CORREA, HILARIO — IPTA, LOS SANTOS
408. CORREA, JUAN B. — MIDA, CHITRÉ
409. CORREA, ORIS YADIRA V. DE — ALCALDÍA, CHITRÉ
410. CORRO, ALINA DE — INGRESOS, CHITRÉ
411. CORRO, BETZY DE — ESC. TOMÁS HERRERA, CHITRÉ
412. CORRO, CARMEN C. — IRHE, CHITRÉ
413. CORRO R., DARLIN — ALCALDÍA, CHITRÉ
414. CORRO, ELDA — ESC. H. PÉREZ TELLO, CHITRÉ
415. CORRO M., JOSÉ MANUEL — SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
416. CORRO, MARITZA — IDAAN, CHITRÉ
417. CORRO, MARITZA DE — INTEL, CHITRÉ
418. CORRO, MARTA DE — D. PROV. DE EDUCACIÓN, CHITRÉ
419. CORRO, ROCKY — IDAAN, CHITRÉ
420. CORRO, VIELKA JUDITH — SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
421. CORRO, VILMA DE — MIDA, CHITRÉ
422. COUTSOUMBOS, JOSÉ — D. PROV. DE EDUCACIÓN, CHITRÉ
423. CONTSOUMBOS, LESBIA DE — ESC. H. PÉREZ TELLO, CHITRÉ
424. CORTEZ, ANA ZENAIDA — IPTA, LOS SANTOS
425. CORTEZ, DILSA — INTEL, LAS TABLAS
426. CRESPO, BELKIS — D. PROV. DE EDUCACIÓN, LOS SANTOS
427. CRESPO, JULIA — INST. C. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS
428. CRUZ G., SIXTO — GOBERNACIÓN, LAS TABLAS
429. CUBILLA, MARIA DE — SEGURO SOCIAL, LAS TABLAS
430. CUERVO, LORENZO — D. PROV. DE EDUCACIÓN, LAS TABLAS
431. CUETO, CARLOS — IPTA, LOS SANTOS
432. CUMBRERA, MARIA E. R. DE — CEDULACIÓN, CHITRÉ
433. CUSSATTI, DORA S. DE — SEGUROS SOCIAL, CHITRÉ
434. CHACON, MARIA DE LOS S. — MIDA, CHITRÉ
435. CHACON, MARIELA — MIDA, LAS TABLAS
436. CHACON, MIGDALIA — C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
437. CHAN, DIANA JULIA — SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
438. CHANIS, ELENA C. DE — ESC. P. PORRAS, LAS TABLAS
439. CHANIS, DEYANIRA — B. D. A., CHITRÉ
440. CHAVEZ, DAMARIS — INTEL, LAS TABLAS
441. CHAVEZ, FLORENCIA DE — C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
442. CHAVEZ, JULIAN — B. D. A., CHITRÉ
443. CHAVEZ, LUIS — ESC. TOMÁS HERRERA, CHITRÉ
444. CHAVEZ, PACIFICO — C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
445. CHAVEZ, SONIA — INTEL, CHITRÉ
446. CHENG, HUMBERTO — C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
447. CHEPOTE, HUMBERTO — IFARHU, CHITRÉ
448. CHONG, MIGUEL — IDAAN, CHITRÉ
449. CHOW, BORIS — C. J. D. CRESPO, CHITRÉ

-D-

450. DAVILA, NEREIDA — IFARHU, CHITRÉ
451. DEAGO, DENIS — MIVI, CHITRÉ
452. DECEREGA, DARIS A. — C. M. M. T. R., LAS TABLAS
453. DE FRIAS, FAUSTINA DE — ESC. N. VILLALAZ, LOS SANTOS
454. DE GRACIA, ANGELA DE — ESC. P. PORRAS, LAS TABLAS
455. DE GRACIA, DEYRA DE — INGRESOS, CHITRÉ
456. DE GRACIA, EVA — MICI, LAS TABLAS
457. DE GRACIA, MARISOL — SEGURO SOCIAL, LAS TABLAS
458. DE GRACIA, RUBIELA — CORREOS, CHITRÉ
459. DE GRAIA G., RUBIELA L. — SEGURO SOCIAL, LAS TABLAS

460. DE GRACIA, SILVIA	ESC. JUAN T. DEL BUSTO, CHITRÉ
461. DE LA CRUZ, ANA DE	ESC. NICANOR VILLALAZ, LOS SANTOS
462. DE LA CRUZ, GLADYS DE	SEGURO SOCIAL, LAS TABLAS
463. DE LA CRUZ, MIGUEL	M. O. P., CHITRÉ
464. DEL CID, NOEL	C. SAN FCO. DE ASIS, LAS TABALAS
465. DE LEÓN, ALGIS	MIDA, LAS TABLAS
466. DE LEÓN, AURIS DE	INST. C. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS
467. DE LEÓN, DEYANIRA DE	ESC. NICANOR VILLALAZ, LOS SANTOS
468. DE LEÓN, DARIO	MIDA, CHITRÉ
469. DE LEÓN, DILSA DE	ESC. P. PORRAS, LAS TABLAS
470. DE LEÓN, DORIS MORENO DE	SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
471. DE LEÓN, ELADIO	INST. C. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS
472. DE LEÓN, GLADYS V. DE	SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
473. DE LEÓN, GLENDA RIOS DE	GOBERNACIÓN, CHITRÉ
474. DE LEÓN, HELLYS R.	ESC. TOMÁS HERRERA, CHITRÉ
475. DE LEÓN, JEREMIAS	MICI, CHITRÉ
476. DE LEÓN, MARIELA	C. M. M. T. R., LAS TABLAS
477. DE LEÓN, NERYS P.	MIVI, CHITRÉ
478. DE LEÓN, NIDIA DE	INTEL, LAS TABLAS
479. DE LEÓN, LIDIA DE	INTEL, LAS TABLAS
480. DE LEÓN, NITZIA	M. O. P., LAS TABLAS
481. DE LEÓN, OVIDIO J.	INTEL, LAS TABLAS
482. DE LEÓN, PEDRO	B. D. A., LAS TABLAS
483. DE LEÓN, RUFINO E.	D. PROV. DE EDUCACIÓN, LAS TABLAS
484. DE LEÓN M., VITALINA	ALCALDÍA MPAL., GUARARÉ
485. DELGADO, ABIGAIL M. DE	ALCALDÍA, LAS TABLAS
486. DELGADO, AGUSTIN	DIGEDECOM, LAS TABLAS
487. DELGADO, ANAYANSI G. DE	C. M. M. T. R., LAS TABLAS
488. DELGADO, ARGELIS	ESC. P. PORRAS, LAS TABLAS
489. DELGADO, DIANA C.	SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
490. DELGADO, DIDIO	ESC. M. VÁSQUEZ, STO. DOMINGO
491. DELGADO, EDWIN	D. PROV. DE EDUCACIÓN, LAS TABLAS
492. DELGADO C., ENRIQUE	MICI, CHITRÉ
493. DELGADO, EUSEBIO	CONTRALORÍA, CHITRÉ
494. DELGADO, HÉCTOR R.	SEGURO SOCIAL, LAS TABLAS
495. DELGADO, HUMBERTO	C. M. M. T. R., LAS TABLAS
496. DELGADO, JORGE	CONTRALORÍA, CHITRÉ
497. DELGADO, JOSÉ M.	INTEL, LAS TABLAS
498. DELGADO, LAURA Y. C. DE	GOBERNACIÓN, CHITRÉ
499. DELGADO, LEONIDAS DE	CONTRALORÍA, CHITRÉ
500. DELGADO, LILIA DE	INGRESOS, LAS TABLAS
501. DELGADO, MANUEL	SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
502. DELGADO, MARIA DE	ESC. JUANA VERNAZA, GUARARÉ
503. DELGADO, NORIS DE	INGRESOS, CHITRÉ
504. DELGADO, VIELKA	M. M. T. R., LAS TABLAS
505. DÍAZ, ALEXIS	IFARHU, CHITRÉ
506. DÍAZ, AMADO	M. O. P., CHITRÉ
507. DÍAZ S., ANTONIO	B. D. A., LAS TABLAS
508. DÍAZ, BERTILDA DE	C. M. M. T. R., LAS TABLAS
509. DÍAZ, CARLOS	MIDA, LAS TABLAS
510. DÍAZ, CARLOS ARIEL	P. CICLO SEC. DE GUARARÉ
511. DÍAZ, DILVA DE	INTEL, CHITRÉ
512. DÍAZ V., DIDIA DE	ESC. C. VÁSQUEZ, LAS TABLAS
513. DÍAZ V., DILSA	SEGURO SOCIAL, LAS TABLAS
514. DÍAZ, DORIS	INTEL, CHITRÉ
515. DÍAZ, DORIS E.	ESC. H. P. TELLO, CHITRÉ
516. DÍAZ, EDUARDO	C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
517. DÍAZ, ELIZABETH	ESC. T. HERRERA, CHITRÉ
518. DÍAZ, FRANCISCO M.	ALCALDÍA, CHITRÉ
519. DÍAZ, FEDILBERTO	INST. C. S. DE VILLAREAL, LOS SANTOS
520. DÍAZ, GLADYS E.	P. CICLO SEC. DE GUARARÉ
521. DÍAZ, GRACIELA	INST. C. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS
522. DÍAZ, ISERNITH M. DE	C. SAN FCO. DE ASIS, LAS TABLAS
523. DÍAZ, JORGE	INTEL, LAS TABLAS
524. DÍAZ, JORGE	MIDA., LAS TABLAS

525. DÍAZ A., JOSEFA M.	INGRESOS, LAS TABLAS
526. DÍAZ, JUAN A.	D. PROV. DE EDUCACIÓN, CHITRÉ
527. DÍAZ, LADY DE	ESC. H. PÉREZ TELLO, CHITRÉ
528. DÍAZ, LESBIA L.	ESC. P. PORRAS, LAS TABLAS
529. DÍAZ C., LUIS A.	B. D. A., LAS TABLAS
530. DÍAZ, MARIA G. DE	M. I. V. I., LAS TABLAS
531. DÍAZ, MARJORIE DE	ALCALDÍA, CHITRÉ
532. DÍAZ, MARILU SAAVEDRA DE	BANCO NAL., CHITRÉ
533. DÍAZ, MARTHA V. DE	M. I. C. I., CHITRÉ
534. DÍAZ, MIRIAN DE	BANCO NACIONAL, LAS TABLAS
535. DÍAZ, NAIDA	SEGURO SOCIAL, LAS TABLAS
536. DÍAZ, NILSA	INTEL, LAS TABLAS
537. DÍAZ, OLIVIA G. DE	IPTA, LOS SANTOS
538. DÍAZ, OMAIRA	ESC. NICANOR VILLALAZ, LOS SANTOS
539. DÍAZ F., OSIRIS I.	ALCALDÍA, CHITRÉ
540. DÍAZ, OVIDIO	INTEL, LAS TABLAS
541. DÍAZ, PEDRO	IFARHU, CHITRÉ
542. DÍAZ, PEDRA DE	ESC. H. PÉREZ TELLO, CHITRÉ
543. DÍAZ, ROSA S. DE	IPTA, LOS SANTOS
544. DÍAZ, ROSAURA	MIDA, LAS TABLAS
545. DÍAZ, RAÚL	IPTA, LOS SANTOS
546. DÍAZ S., VIANKA E.	C. SAN FCO. DE ASIS, LAS TABLAS
547. DÍAZ, YINIVA	ESC. JUANA VERNAZA, GUARARÉ
548. DÍAZ, ZAIRA	ESC. HIPOLITO PÉREZ TELLO, CHITRÉ
549. DOMÍNGUEZ, AMARYS DE	C. M. M. T. R., LAS TABLAS
550. DOMÍNGUEZ, ANGELA	INGRESOS, LAS TABLAS
551. DOMÍNGUEZ G., ARISTIDES E.	CATASTRO, LAS TABLAS
552. DOMÍNGUEZ, BIENVENIDA E.	COOP. GLADYS B. DE DUCASA, LAS TABLAS
553. DOMÍNGUEZ, CECILIA DE	C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
554. DOMÍNGUEZ, CECILIA R. DE	ALCALDÍA, CHITRÉ
555. DOMÍNGUEZ, DALIDA C. DE	INTEL, LAS TABLAS
556. DOMÍNGUEZ, EDISA DE	ESC. P. PORRAS, LAS TABLAS
557. DOMÍNGUEZ, ELIA Z. DE	ESC. JUANA VERNAZA, GUARARÉ
558. DOMÍNGUEZ, ELIO E.	IPACOOP, LAS TABLAS
559. DOMÍNGUEZ, ENEIDA D. DE	C. M. M. T. R. (P. AD.), LAS TABLAS
560. DOMÍNGUEZ, ERNESTO	ESC. P. PORRAS, LAS TABLAS
561. DOMÍNGUEZ, FANNY DE	ESC. NICANOR VILLALAZ, LOS SANTOS
562. DOMÍNGUEZ, FELICIA DE	P. CICLO SEC. DE GUARARÉ
563. DOMÍNGUEZ B., FERNANDO	C. SAN FCO. DE ASIS, LAS TABLAS
564. DOMÍNGUEZ, GERARDINO	C. M. M. T. R., LAS TABLAS
565. DOMÍNGUEZ, GLADYS DE	ESC. JUAN T. DEL BUSTO, CHITRÉ
566. DOMÍNGUEZ, HORACIO	D. PROV. DE EDUCACIÓN, LAS TABLAS
567. DOMÍNGUEZ, LELYS	C. M. M. T. R., LAS TABLAS
568. DOMÍNGUEZ, LEYLA DE	MIDA, LAS TABLAS
569. DOMÍNGUEZ, LILIA G. DE	D. PROV. DE EDUCUACIÓN, LAS TABLAS
570. DOMÍNGUEZ, MARLENE DE	GOBERNACIÓN, LAS TABLAS
571. DOMÍNGUEZ, MERCEDES R. DE	SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
572. DOMÍNGUEZ, MIREYA C. DE	D. PROV. DE EDUCUACIÓN, LAS TABLAS
573. DOMÍNGUEZ, NERY B. DE	ESC. M. VÁSQUEZ, STO. DOMINGO
574. DOMÍNGUEZ, NIDIA P. DE	C. M. M. T. R., LAS TABLAS
575. DOMÍNGUEZ, NILDA	CAJA DE AHORROS, CHITRÉ
576. DOMÍNGUEZ, NORIS J. DE	ESC. CLAUDIO VÁSQUEZ, LAS TABLAS
577. DOMÍNGUEZ, RICAURTE	ESC. NICANOR VILLALAZ, LOS SANTOS
578. DOMÍNGUEZ, SERGIO	MIDA, LAS TABLAS
579. DOMÍNGUEZ, THELMA DE	ESC. H. PÉREZ TELLO,CHITRÉ
580. DOMÍNGUEZ, RAMIRO	INST. C. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS
581. DOMÍNGUEZ, VIODELDA DE	ESC. P. PORRAS, LAS TABLAS
582. DONADO S., DOLMA D.	SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
583. DONOSO, DENIS	ESC. TOMÁS HERRERA, CHITRÉ
584. DONOSO, RAÚL	INST. C. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS
585. DONOSO, YOLANDA	C. M. M. T. R., LAS TABLAS
586. DUCASA, FANNY	C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
587. DUCASA, MANUEL	M. O. P., LAS TABLAS
588. DUCREUX, MARIA DE J.	ORG. ELECTORAL, CHITRÉ
589. DUEÑAS, JUDITH	INGRESOS, CHITRÉ

590. DURAN, ELIA I. DE — MIVI, LAS TABLAS
591. DURAN, LUIS — CONTRALORÍA, LAS TABLAS
592. DURAN, ROSA — MICI, CHITRÉ
593. DUTARY, LUIS C. — C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
594. DUTARY, MARIA A. DE — CAJA DE AHORROS, CHITRÉ

-E-

595. ESCALONA, BEATRIZ — IPTA, LOS SANTOS
596. ESCALONA, CLAUDIO — IRHE, CHITRÉ
597. ESCALONA, JULIA M. DE — IPTA, LOS SANTOS
598. ESCALONA, MARIANELA DE — SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
599. ESCALONA, VIRGILIO — INST. C. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS
600. ESCOBAR, EGLY O. DE — SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
601. ESCOBAR, HÉCTOR — ALCALDÍA, CHITRÉ
602. ESCOBAR, MAXIMINO — C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
603. ESCOBAR, MILCIADES — INGRESOS, CHITRÉ
604. ESCOBAR, MOISES — D. PROV. DE EDUCACIÓN, CHITRÉ
605. ESCOBAR, YENIS — INGRESOS, CHITRÉ
606. ESCOBAR, ZENAIDA C. DE — BANCO NACIONAL, CHITRÉ
607. ESCUDERO, JUANA J. DE — INTEL, CHITRÉ
608. ESCUDERO, MARIA ELENA — CORREOS, CHITRÉ
609. ESPINO, ALEIKA — ESC. JUANA VERNAZA, GUARARÉ
610. ESPINO, ALEX — P. CICLO SEC. DE GUARARÉ
611. ESPINO, ARCENIA — IDAAN, LAS TABLAS
612. ESPINO, CELIA DEL C. — ESC. CLAUDIO VÁSQUEZ, LAS TABLAS
613. ESPINO, DOMINGO — B. D. A, LAS TABLAS
614. ESPINO, DORIS V. DE — D. PROV. DE EDUCACIÓN, LAS TABLAS
615. ESPINO, EDWIN — INTEL, LAS TABLAS
616. ESPINO, ELEUCADIO — IPTA, LOS SANTOS
617. ESPINO, EMILIO — MIDA, LAS TABLAS
618. ESPINO, ETZEL DE — B. D. A., LAS TABLAS
619. ESPOINO, FRANCISCO — ESC. CLAUDIO VÁSQUEZ, LAS TABLAS
620. ESPINO, GARYS — INS. C. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS
621. ESPINO, GIOCONDA G. DE — SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
622. ESPINO, GUILLERMO — MIDA, LAS TABLAS
623. ESPINO, HERMES A. — ALCALDÍA, LAS TABLAS
624. ESPINO, LIGIA DE — INTEL, CHITRÉ
625. ESPINO, LUIS R. — INGRESOS, LAS TABLAS
626. ESPINO P., MARCO — INGRESOS, LAS TABLAS
627. ESPINO, MARISOL — C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
628. ESPINO, NUVIA — IRHE, LAS TABLAS
629. ESPINO, PETTINA DE — B. D. A, LAS TABLAS
630. ESPINO, ROSARIO DE — ESC. CLAUDIO VÁSQUEZ, LAS TABLAS
631. ESPINO, RUTH M. — B. D. A., LAS TABLAS
632. ESPINO, SALVADOR — INTEL, LAS TABLAS
633. ESPINO R., VIODELDA — AUDITORIA, LAS TABLAS
634. ESPINO, XIOMARA DE — INST. C. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS
635. ESPINOSA, ESILDA V. DE — C. M. M. T. R., LAS TABLAS
636. ESPINOSA, FRANCISCO J. — REGULACION DE PRECIOS, CHITRÉ
637. ESPINOSA, IVAN OMAR — MIVI, CHITRÉ
638. ESPINOSA, RICARDO — IPACOOP, LAS TABLAS
639. ESPINOSA V., ROY NELSON — CEDULACIÓN, LAS TABLAS
640. ESPINOSA, VALENTIN — IFARHU, LAS TABLAS
641. ESPITIA, MERCEDES DE — INST. C. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS
642. EYSSERIC, SEBASTIÁN — BANCO NACIONAL, CHITRÉ

-F-

643. FAJARDO, ALFREDO — INST. C. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS
644. FLACK, MIRNA M. DE — SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
645. FALCON, EDGAR N. — B. D. A., LAS TABLAS
646. FALCON, MERCEDES DE — P. CICLO SEC. DE GUARARÉ
647. FALCON, ROSARIO C. DE — MIDA, LAS TABLAS
648. FALCONETT, CARMEN DE — MIVI, LAS TABLAS

649. FALCONETT, MARIA E. DE — IPACOOP, LAS TABLAS
650. FERNANDEZ, ALCIDES — INTEL, LAS TABLAS
651. FERNANDEZ, DAMARIS — C. J. D CRESPO, CHITRÉ
652. FERNANDEZ, EYRA DE — INST. C. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS
653. FERNANDEZ, GLORIA — C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
654. FERNANDEZ, LUZ DE — INGRESOS, CHITRÉ
655. FERNANDEZ, LUZ V. DE — ORG. ELECTORAL, CHITRÉ
656. FERNANDEZ, MIGUEL — INST. C. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS
657. FIGUEREIDO, ADRIANA DE — ESC. J. T. DEL BUSTO, CHITRÉ
658. FIGUEROA, EMILIA — C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
659. FLORES M., BIENEVENIDA — ORG. ELECTORAL, CHITRÉ
660. FLORES, CARLA DE — ALCALDÍA, CHITRÉ
661. FLORES, EDUARDO — C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
662. FLORES, HERLINDA DE — SERGURO SOCIAL, CHITRÉ
663. FLORES, JOSÉ DEL C. — MINIS. DE TRABAJO, CHITRÉ
664. FLORES, LUIS — ESC. H. PÉREZ TELLO, CHITRÉ
665. FLORES, MARITZA — C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
666. FOTHY, MARIA G. — MIDA, CHITRÉ
667. FRANCO BATISTA, REYNELDA — CEDULACIÓN , LAS TABLAS
668. FRANCO, MIRNA DE — INST. C. S. DE V. LOS SANTOS.
669. FRIAS, DIANA — INTEL, LAS TABLAS
670. FRIAS, DIOSALINDA — IDDAN, CHITRÉ
671. FRIAS, MAGALI — IFARHU, LAS TABLAS
672. FRIAS, NIDIA — INTEL, LAS TABLAS
673. FRIAS, NORKIS D. — SEGURO SOCIAL, LAS TABLAS
674. FRIAS, RAMÓN — IPTA, LOS SANTOS
675. FRIAS, ZUNILDA G. DE — IFARHU, LAS TABLAS
676. FUENTES, ROGELIO — IPTA, LOS SANTOS
677. FUNG C., GILBERTO — MIVI, CHITRÉ
678. FUNG, ISABEL DE — IRHE, CHITRÉ

-G-

679. GAEZ, RITA S. DE — CEDULACIÓN , LAS TABLAS
680. GÁLVEZ, JUAN A. — IRHE, CHITRÉ
681. GÁLVEZ, MARIO — IFARHU, LAS TABLAS
682. GÁLVEZ, NORMA DE — CONTRALORÍA, CHITRÉ
683. GÁLVEZ, REGIS — C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
684. GALLARDO, ADILIO — SEG. SOCIAL, LAS TABLAS
685. GALLARDO, ITALINA — TESORERIA, LAS TABLAS
686. GALLARDO, NELLY DE — C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
687. GALLARDO, NORA DE — INGRESOS, CHITRÉ
688. GALLARDO, SANDRA A. — C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
689. GAMETH, ZOBEIDA DE — C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
690. GARCÍA, ALFRED — C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
691. GARCÍA, ARIEL — D. PROV. DE EDUC. LAS TABLAS
692. GARCÍA, CARLOS — SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
693. GARCÍA, CLOTILDE — P. CICLO SEC., GUARARÉ,
694. GARCÍA, DIDIMO A. — P. CICLO SEC., GUARARÉ
695. GARCÍA, DOMINGO — M. O. P, LAS TABLAS
696. GARCÍA, FRANCISCO — MIVI, CHITRÉ
697. GARCÍA, GERMAN — ESC. H. P. TELLO, CHITRÉ
698. GARCÍA, GONZALO — D. PROV. DE EDUC. LAS TABLAS
699. GARCÍA, JOSÉ — ESC. H. PEREZ TELLO, CHITRÉ
700. GARCÍA, JOSÉ A. — IDAAN, LAS TABLAS
701. GARCÍA, JOAQUIN — INTEL, LAS TABLAS
702. GARCÍA, LILLY S. DE — ORG. ELECTORAL, CHITRÉ
703. GARCÍA, LUIS — IDAAN, CHITRÉ
704. GARCÍA, MANUEL (P. AD.) — C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
705. GARCÍA S., MARGARITO — COOP. G. B. DE D. LAS TABLAS
706. GARCÍA, MARIA — C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
707. GARCÍA, MARIA — ESC. H. PEREZ TELLO, CHITRÉ
708. GARCÍA, MARTHA DE — ESC. N. VILLALAZ, LOS SANTOS
709. GARCÍA, NIDIA DE — CORREOS, CHITRÉ
710. GARCÍA, NILSA DE — INTEL, CHITRÉ

711. GARCÍA, ORLANDO RAÚL	CAJA DE AHORROS, CHITRÉ
712. GARCÍA. OLGA A. M. DE	GOBERNACIÓN, CHITRÉ
713. GARCÍA B., RAMIRO	IPACOOP, LAS TABLAS
714. GARCÍA, TEODORO	MIVI, LOS SANTOS
715. GARCÍA. VICTOR	INTEL, LAS TABLAS
716. GARCÍA S., ZELIBETH Z.	ALCALDÍA, CHITRÉ
717. GARIBALDI, GETULIO	IPTA, LOS SANTOS
718. GARRIDO, CESAR	INST. C. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS
719. GARRIDO, JOSÉ	ESC. TOMÁS HERRERA, CHTRE
720. GARRIDO, LUZMILDA	INTEL, CHITRÉ
721. GARRIDO, MARIELA DE	ESC. TOMAS HERRERA, CHITRÉ
722. GARRIDO, ORLANDO	IPACOOP, LAS TABLAS
723. GAUBECA, ISRAEL	MICI, LAS TABLAS
724. GEORGE, ANA DEL C. DE	SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
725. GIL, NORMA DE	INS. C. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS
726. GIRON, ANGEL MARIA	IPTA, LOS SANTOS
727. GIRON, FLORENCIA	MIDA, CHITRÉ
728. GIRON, JUAN ANTONIO	SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
729. GIRON, MARCELINO	BANCO NACIONAL, CHITRÉ
730. GIRON, XIOMARA DE	INTEL, CHITRÉ
731. GÓMEZ, ALBERTO	IPTA, LOS SANTOS
732. GÓMEZ, ALMA	INTEL, CHITRÉ
733. GÓMEZ, DALYS V. DE	IPTA, LOS SANTOS
734. GÓMEZ, IDALIDES DE	ESC. CLAUDIO VÁSQUEZ, LAS TABLAS
735. GÓMEZ, JAIME	C. M. M. T. R., LAS TABLAS
736. GONZÁLEZ, ABUDEMIA DE	SEGURO SOCIAL, LAS TABLAS
737. GONZÁLEZ, AGUSTIN	INS. C. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS
738. GONZÁLEZ, AGUSTINA	C. M. M. T. R., LAS TABLAS
739. GONZÁLEZ, ALBERTO	SEGURO SOCIAL, LAS TABLAS
740. GONZÁLEZ, ALBERTO	M. O. P., LAS TABLAS
741. GONZÁLEZ G., ALCIBIADES	MIVI, LAS TABLAS
742. GONZÁLEZ, ANA M.	SEGURO SOCIAL, LAS TABLAS
743. GONZÁLEZ, BOLIVAR	C. JOSÉ DANIEL CRESPO, DE CHITRÉ
744. GONZÁLEZ, BRAULIA DE	ESC. JUN. T. D. B., CHITRÉ
745. GONZÁLEZ, BRICEIDA P. DE	SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
746. GONZÁLEZ, CAMILO	IDAAN, CHITRÉ
747. GONZÁLEZ, CAMILO F.	C. M. M. T. R., LAS TABLAS
748. GONZÁLEZ, CATALINO	TESORERIA MPAL., LAS TABLAS
749. GONZÁLEZ, CECILIA	MIVI, CHITRÉ
750. GONZÁLEZ, CLORINDA	D. PROV. DE EDUC. CHITRÉ
751. GONZÁLEZ, DALYS	IPTA, LOS SANTOS
752. GONZÁLEZ, DARIS H. DE	ESC. CLAUDIO VÁSQUEZ, LAS TABLAS
753. GONZÁLEZ, DENIS (P. AD.)	C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
754. GONZÁLEZ, DIONIS	INTEL, LAS TABLAS
755. GONZÁLEZ, EDIS	MIDA, CHITRÉ
756. GONZÁLEZ, EDITA	CORREOS, CHITRÉ
757. GONZÁLEZ, EDWIN	IFARHU, CHITRÉ
758. GONZÁLEZ, ELDA	SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
759. GONZÁLEZ, ELINETH	SEGURO SOCIAL, LAS TABLAS
760. GONZÁLEZ, ELSA B. DE	SEGURO SOCIAL, LAS TABLAS
761. GONZÁLEZ ELSA M.	D. PROV. EDUC. LAS TABLAS
762. GONZÁLEZ, EMÉRITA	DIGEDECOM, LAS TABLAS
763. GONZÁLEZ, ENEIDA	INTEL, LAS TABLAS
764. GONZÁLEZ, ESTELA T. DE	SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
765. GONZÁLEZ, FANY B. DE	INGRESO, LAS TABLAS
766. GONZÁLEZ, FERNANDO	IPTA, LOS SANTOS
767. GONZÁLEZ, FRANCISCO	C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
768. GONZÁLEZ S., GLORYBEL	CAJA DE AHORROS, CHITRÉ
769. GONZÁLEZ, JACINTO	ESC. PRESIDENTE PORRAS, LAS TABLAS
770. GONZÁLEZ, JONNY	C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
771. GONZÁLEZ, LETICIA J. DE	D. PROV. DE EDUC., LAS TABLAS
772. GONZÁLEZ, LIDIA O.	INTEL, CHITRÉ
773. GONZÁLEZ, LUIS FELIPE	MIDA, CHITRÉ
774. GONZÁLEZ, LURIS DE	ESC. NICANOR VILLALAZ, LOS SANTOS.
775. GONZÁLEZ, MARIA	CAJA DE AHORROS, LAS TABLAS

776. GONZÁLEZ, MARCOS — D. PROV. DE EDUC., CHITRÉ
777. GONZÁLEZ, MARITZA DE — C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
778. GONZÁLEZ, MARITZA — INST. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS.
779. GONZÁLEZ, MIRNA ROSA — REG. DE PRECIOS , CHITRÉ
780. GONZÁLEZ, NENSIN DE — IFARHU, CHITRÉ
781. GONZÁLEZ, NIDIA — ESC. H. P. TELLO, CHITRÉ
782. GONZÁLEZ, OLINDA — SEGURO SOCIAL CHITRÉ
783. GONZÁLEZ, PACIFICO — C. M. M. T. R., LAS TABLAS
784. GONZÁLEZ, RAMÓN — M. O. P., CHITRÉ
785. GONZÁLEZ, REYES — IFARHU, CHITRÉ
786. GONZÁLEZ, ROBIN — ORG. ELECTORAL, CHITRÉ
787. GONZÁLEZ, RUBY — INTEL, LAS TABLAS
788. GONZÁLEZ, TANIA DE — ESC. NICANOR VILLALAZ, LOS SANTOS
789. GONZÁLEZ, TEMISTOCLES — INGRESOS, LAS TABLAS
790. GONZÁLEZ, TORIBIO — INST. C. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS
791. GONZÁLEZ, VITELIO — C. M. M. T. R. LAS TABLAS
792. GONZÁLEZ G., YADIRA J. — C. S. FCO. DE ASIS, LAS TABLAS
793. GONZÁLEZ, YERITZA — ALCALDÍA, GUARARÉ
794. GONZÁLEZ, YESSENIA — CORREOS Y TELEGRAFOS, CHITRÉ
795. GONZÁLEZ, YOLANDA A. — MINISTERIO DE TRABAJO, CHITRÉ
796. GONZÁLEZ, ZAIDA C. DE — ORG. ELECT. CHITRÉ
797. GOVEA, ANTONIA — INTEL, CHITRÉ
798. GOVEA, LILIBETH G. DE — SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
799. GRIMALDO, GUILLERMO — INTEL, LAS TABLAS
800. GUERRA, EZEQUIEL — MIDA, CHITRÉ
801. GUERRA, EVELIA — CORREOS, CHITRÉ
802. GUERRERO, LINDA J. — IPTA, LOS SANTOS
803. GUEVARA, CESAR — INGRESOS, CHITRÉ
804. GUEVARA, MARIXENIA DE — D. P. DE EDUC., LAS TABLAS
805. GUEVARA, SACRAMENTO — MIDA, CHITRÉ
806. GUILLEN, EVERARDO — INGRESOS, CHITRÉ
807. GUILLEN, OLEGARIO — D. PROV. DE EDUC., CHITRÉ
808. GUILLEN, SANTOS — INGRESOS, CHITRÉ
809. GUIZADO, NESTOR — MIDA, CHITRÉ
810. GUTIERREZ, AMINTA — IPTA, LOS SANTOS
811. GUTIERREZ, CARMEN I. DE — SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
812. GUTIERREZ, CARMEN — INTEL, CHITRÉ
813. GUTIERREZ, DALYS DE — ESC. N. VILLALAZ, LOS SANTOS.
814. GUTIERREZ, GLORISABEL — CORREOS, LAS TABLAS
815. GUTIERREZ, GRISELDA — DIGEDECOM, CHITRÉ
816. GUTIERREZ, NARCISA — IPTA, LOS SANTOS
817. GUTIERREZ, NORMIS C. DE — ALCALDÍA, LAS TABLAS
818. GUTIERREZ, SANTOS — IPTA, LOS SANTOS
819. GUTIERREZ, XIOMARA — INGRESOS, CHITRÉ

-H-

820. HENRIQUEZ, AGUSTINA DE — ESC. N. VILLALAZ, LOS SANTOS
821. HENRIQUEZ, ISABEL — INST. C. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS
822. HENRIQUEZ R., JOSÉ MANUEL — SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
823. HENRIQUEZ, JUAN M. — MIDA, CHITRÉ
824. HERNANDEZ, CEFERINO — P. C. SEC., GUARARÉ
825. HERNANDEZ V., DALYS — SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
826. HERNANDEZ, DANILO J. — P. C. SEC., GUARARÉ
827. HERNANDEZ, MARA DEL C. — GOBERNACIÓN, CHITRÉ
828. HERNANDEZ, PRAXEDES — IDDAN, CHITRÉ
829. HERNANDEZ, ROBERTO — INTEL, LAS TABLAS
830. HERRERA, AMADO DE J. — INTEL, LAS TABLAS
831. HERRERA, BALBINO — INTEL, LAS TABLAS
832. HERRERA, BRUNILDA DE — MIVI, LAS TABLAS
833. HERRERA, CARLOS A. — CORREOS, LAS TABLAS
834. HERRERA, CESAR — BANCO NACIONAL, LAS TABLAS
835. HERRERA, CEFERINO — C. M. M. T. R. LAS TABLAS
836. HERRERA, DALYS DE — C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
837. HERRERA, DIOMILIA DE — MICI, LAS TABLAS

838. HERRERA, DOMINGO — ESC, JUANA VERNAZA, GUARARÉ
839. HERRERA, EDELIS S. DE — ESC. P. PORRAS, LAS TABLAS
840. HERRERA, EDILBERTO ISAAC — ESC. C. VÁSQUEZ, LAS TABLAS
841. HERRERA, EDITH A. DE — C. M. M. T. R., LAS TABLAS
842. HERRERA, ELIA DE — C. SAN FCO. DE ASIS, LAS TABLAS
843. HERRERA, EPIFANIO — INGRESOS, CHITRÉ
844. HERRERA, HENRY — MIVI, LAS TABLAS
845. HERRERA, ESILDA H. DE — INGRESOS, LAS TABLAS
846. HERRERA, GLADYS — CAJA DE AHORROS, LAS TABLAS
847. HERRERA, GLADYS — INST. C. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS
848. HERRERA, GALDYS B. DE — REGISTRO CIVIL, LAS TABLAS
849. HERRERA, JOSÉ — C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
850. HERRERA, JUAN — MIVI, LAS TABLAS
851. HERRERA, JUVENAL — M. O. P. LAS TABLAS
852. HERRERA, LENIS C. DE — ESC. CLAUDIO VÁSQUEZ, LAS TABLAS
853. HERRERA, LEONEL — INTEL, CHITRÉ
854. HERRERA, LEYSI — MIDA, LAS TABLAS
855. HERRERA, LUIS — IPTA, LOS SANTOS
856. HERRERA, LUZMILA A. — ESC. CLAUDIO VÁSQUEZ, LAS TABLAS
857. HERRERA, NORIS A. — SEGURO SOCIAL, LAS TABLAS
858. HERRERA, MARINA G. DE — C. M. M. T. R., LAS TABLAS
859. HERRERA S., OMAR — ESC. P. PORRAS, LAS TABLAS
860. HERRERA, OMAR — D. PROV. EDUC., LAS TABLAS
861. HERRERA C., OSIRIS F. — INTEL, LAS TABLAS
862. HERRERA, RAFAEL — ESC. CLAUDIO VASQUEZ, LAS TABLAS
863. HERRERA, RITELA A. D. — C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
864. HERRERA, ROGELIO — C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
865. HERRERA, RUBIELA DE — DIGEDECOM, LAS TABLAS
866. HERRERA, SERGIO — ESC. CLAUDIO VÁSQUEZ, LAS TABLAS
867. HERRERA, SILVERIO — CONTRALORÍA, CHITRÉ
868. HUERTA, DIGNA M. DE — MIDA, CHITRÉ
869. HUERTAS, EMELDA ROSA — REGULACIÓN DE PRECIOS, CHITRÉ
870. HUERTA, HUMBERTO — C. J. D. CRESPO, CHITRÉ

-I-

871. IBARRA, MARTIZA B. DE — C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
872. INDUNI, CESAR — IRHE, CHITRÉ
873. IGUALADA, DORA — INST. C. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS
874. ITURRALDE, GLENYS B. DE — C. M. M. T. R., LAS TABLAS
875. ITURRALDE, OMAR E. — C. SAN FCO. DE ASIS, LAS TABLAS
876. ITURRALDE, RICARDO — MIVI, LAS TABLAS

-J-

877. JAÉN, AGUSTIN — ESC. M. VÁSQUEZ (STO. DOMINGO), LAS TABLAS
878. JAÉN, AIXA — C. M. M. T. R., LAS TABLAS
879. JAÉN, ANTONIO — CORREOS, LAS TABLAS
880. JAÉN, AURA C. DE — INTEL, LAS TABLAS
881. JAÉN, CARLOS — IRHE, LAS TABLAS
882. JAÉN E., CARLOS — B. D. A., LAS TABLAS
883. JAÉN, CARMEN V. DE — C. M. M. T. R., LAS TABLAS
884. JAÉN, CARMEN A. V. DE — ESC. C. VÁSQUEZ, LAS TABLAS
885. JAÉN, CELIA J. DE — B. D. A., LAS TABLAS
886. JAÉN, CESAR — C. M. M. T. R., LAS TABLAS
887. JAÉN, DELIA H. DE — ESC. M. VÁSQUEZ, SANTO DOMINGO
888. JAÉN Z., DOMINGO — INTEL, LAS TABLAS
889. JAÉN, EDILIO — D. PROV. DE EDUC., LAS TABLAS
890. JAÉN S. EDITH E. — C. SAN FCO. DE ASIS, LAS TABLAS
891. JAÉN, EDUARDO — M. O. P., LAS TABLAS
892. JAÉN, ELQUIS E. — INTEL, LAS TABLAS
893. JAÉN, ERIC E. — ESC. P. PORRAS, LAS TABLAS
894. JAÉN, ERUS — CORREOS Y TELÉGRAFOS, CHITRÉ
895. JAÉN C., EUCLIDES — CATASTRO, LAS TABLAS
896. JAÉN, EUGENIO — MIDA, LAS TABLAS

897. JAÉN, EUSTORGIO — CORREOS, LAS TABLAS
898. JAÉN, GLORIA — INST. C. S. DE V.ILLARREAL, LOS SANTOS
899. JAÉN, GLORIA C. DE — MIVI, LAS TABLAS
900. JAÉN, GRISSELLY — DIGEDECOM, LAS TABLAS
901. JAÉN M., JORGE L. — MIVI, LAS TABLAS
902. JAÉN, LEONARDO — ESC. CLAUDIO VÁSQUEZ, LAS TABLAS
903. JAÉN, LUIS ARTURO — IPTA, LOS SANTOS
904. JAÉN, MARIA J. DE — ESC. CLAUDIO VÁSQUEZ, LAS TABLAS
905. JAÉN, MARITZA — ESC P. PORRAS, LAS TABLAS
906. JAÉN, NEREIDA D. DE — ESC. JUANA VERNAZA, GUARARÉ
907. JAÉN, NICOMEDES — ESC. P. PORRAS, LAS TABLAS
908. JAÉN, OSCAR — MICI, LAS TABLAS
909. JAÉN, ROBERTO — INST. C. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS
910. JAÉN C., WILLIAMS A. — MINISTERIO DE TRABAJO, LAS TABLAS
911. JARAMILLO, ROSA E. — MIDA, CHITRÉ
912. JIMÉNEZ, BLANCA DE — DIGEDECOM, LAS TABLAS
913. JIMÉNEZ, ENEIDA DE — INS. C. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS
914. JIMÉNEZ, IRIS J. — D. PROV. DE EDIC., CHITRÉ
915. JIMÉNEZ, MARCELA DE — MIN. DE TRABAJO, CHITRÉ
916. JIMÉNEZ, MARIO O. — ESC. CLAUDIO VÁSQUEZ, LAS TABLAS
917. JORDÁN, SEBASTIÁN — INS. C. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS
918. JUÁREZ, BARY — MIDA, LAS TABLAS
919. JUÁREZ, ELIS DE — ESC. NICANOR VILLALAZ, LOS SANTOS
920. JUÁREZ, HORACIO A. — C. SAN FCO. DE ASIS, LAS TABLAS
921. JUÁREZ, LAUREANO — CORREOS, LAS TABLAS
922. JUÁREZ G., ROBERTO — CEDULACIÓN, LAS TABLAS
923. JULIAO, HÉCTOR — INGRESOS, CHITRÉ
924. JULIAO, ULISES — MIDA, CHITRÉ
925. JULIO, VICTOR — IDAAN, CHITRÉ

-K-

926. KAA, BREDIO — MIDA, CHITRÉ
927. KAA, CARLOS ALBERTO — IPTA, LOS SANTOS
928. KAA, DIANA — ESC. NICANOR VILLALAZ, LOS SANTOS

-L-

929. LAM, CARLOS — P. CICLO SEC., GUARARÉ
930. LEDEZMA, MIRIAM DE — ESC. NICANOR VILLALAZ, LOS SANTOS
931. LEGUIZAMO, CARLOS — MIVI, LOS SANTOS
932. LEVERONE, NILKA — ESC. NICANOR VILLALAZ, LOS SANTOS
933. LIMA, MILTON — ESC. NICANOR VILLALAZ, LOS SANTOS
934. LOMBARDO, MARITZA — INTEL, CHITRÉ
935. LÓPEZ, AMARILID O. DE — C. M. M. T. R., LAS TABLAS
936. LÓPEZ, DELSA DEL C. — ESC. JUANA VERNAZA, GUARARÉ
937. LÓPEZ, DENIA — IFARHU, CHITRÉ
938. LÓPEZ, ENRIQUE A. — ESC. JUANA VERNAZA, GUARARÉ
939. LÓPEZ, ERIBERTO — IRHE, CHITRÉ
940. LÓPEZ, FEDERICO — MIDA, CHITRÉ
941. LÓPEZ, JUAN AMADO — ORG. ELECTORAL, CHITRÉ
942. LÓPEZ, MARIA IRENE — IRHE, LAS TABLAS
943. LUCERO, JORGE — IDAAN, CHITRÉ
944. LUCERO, JOSÉ ISRRAEL — IPTA, LOS SANTOS
945. LUCERO, ROBERTO E. — SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
946. LUGO, DEBORA L. DE — ESC. H. PEREZ TEELO, CHITRÉ
947. LUGO, ARMANDO — INST. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS
948. LUGO, OLGA E. — DIREC. PROV. EDUC., CHITRÉ
949. LUNA, ELISEO — MICI, LAS TABLAS
950. LUNA, EMERIC R. DE — SEGURO SOCIAL, LAS TABLAS

-M-

951. MADARIAGA, CELINDA DE — C. M. M. T. R., LAS TABLAS
952. MADRIGALES, GUILLERMINA — ESC. H. PEREZ TELLO, CHITRÉ

953.	MADRIGALES, LEOPOLDO	MIDA, CHITRÉ
954.	MAGAN, BELLA DE	C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
955.	MAGALLÓN, MIRIAM	IPTA., LOS SANTOS
956.	MARCIAGA, MIRTHA DE	C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
957.	MARCIAGA, YASMINA	INGRESOS, CHITRÉ
958.	MARIN, ENCARNACION DE	ORG. ELECTORAL, CHITRÉ
959.	MARIN, MARIA	INS. C. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS.
960.	MARQUEZ, BODDY R.	MIDA, CHITRÉ
961.	MARQUINEZ, MIRIAM	IFARHU, CHITRÉ
962.	MARTÍNEZ I. CRISTOBAL B.	C. J. DANIEL CRESPO, CHITRÉ
963.	MARTÍNEZ, DALVIS	INGRESOS, CHITRÉ
964.	MARTÍNEZ, IDALIDES DE	INTEL, CHITRÉ
965.	MARTÍNEZ, JORGE	B. D. A., LAS TABLAS
966.	MARTÍNEZ, LUIS	INTEL, LAS TABLAS
967.	MARTÍNEZ, LUZ ALEYDA	D. PROV. EDUC. LAS TABLAS
968.	MARTÍNEZ, MAGALY	MICI, CHITRÉ
969.	MARTÍNEZ, MARTHA DE	MIDA, CHITRÉ
970.	MARTÍNEZ, RAMÓN	C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
971.	MARTÍNEZ C., SAMUEL	MIDA, CHITRÉ
972.	MATA, ANA ESPINO DE	C. SAN FCO. DE ASIS, LAS TABLAS
973.	MATA, CLEYLA DE	ESC. TOMÁS HERRERA, CHITRÉ
974.	MATA, LUIS ANTONIO	B. D. A., CHITRÉ
975.	MEDINA, ANA L. DÍAZ DE	CAJA DE AHOROS, CHITRÉ
976.	MEDINA B., BOLIVAR	MICI, LAS TABLAS
977.	MEDINA, DELSIS N.,	INGRESOS, LAS TABLAS
978.	MEDINA, GRIMALDO	BANCO NACIONAL, LAS TABLAS
979.	MEDINA, IRENE A. DE	ESC. JUANA VERNAZA, GUARARÉ
980.	MEDINA, MARLYN M. DE	C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
981.	MEDINA, RODOLFO	SEGURO SOCIAL, LAS TABLAS
982.	MEDINA, ROGELIO	MIVI, LAS TABLAS
983.	MEJIA, CRISTOBAL	C. M. M. T. R., LAS TABLAS
984.	MELENDEZ, FRANCISCO	C. SAN FCO. DE ASIS, LAS TABLAS
985.	MELGAR, ALGIS D.	MICI, LAS TABLAS
986.	MELGAR, CANDIDA ROSA	REGISTRO CIVIL, CHITRÉ
987.	MELGAR, MARIA C.	D. PROV. DE EDUC., LAS TABLAS
988.	MELGAR, MILCIADES	CEDULACIÓN, CHITRÉ
989.	MELGAR, RIGOBERTO	CORREOS, LAS TABLAS
990.	MENDIETA, INA DE	INTEL, LAS TABLAS
991.	MENDIETA, MARIA DE	ESC. HIPOLITO PEREZ TELLO, CHITRÉ
992.	MENDIETA, MARTHA M.	MIDA, CHITRÉ
993.	MENDIETA, MITZI M.	COOP. GLADYS B. DE DUCASA, LAS TABLAS
994.	MENDIETA, VICTORIA	IPTA, LOS SANTOS
995.	MENDOZA B., ALBERTO	CEDULACIÓN, CHITRÉ
996.	MENDOZA, AMADA DE	ESC. H. PEREZ TELLO, CHITRÉ
997.	MENDOZA, ANA D. DE	D. PROV. EDUC. LAS TABLAS
998.	MENDOZA, CARLOS	INST. C. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS.
999.	MENDOZA, DALIA D. DE	IRHE, CHITRÉ
1000.	MENDOZA, GUADALUPE DE	INST. C. S. D. VILLARREAL, LOS SANTOS
1001.	MENDOZA, JOSÉ I.	MIDA, CHITRÉ
1002.	MENDOZA, JOSÉ ISRAEL	GOBERNACIÓN, CHITRÉ
1003.	MENDOZA, JULIO CESAR	ALCALDÍA , CHITRÉ
1004.	MENDOZA, LESBIA DE	ESC. J. T. DEL BUSTO, CHITRÉ
1005.	MENDOZA R., LILIA C.	CEDULACIÓN, CHITRÉ
1006.	MENDOZA P., MANUEL M.	ORG. ELECTORAL, LAS TABLAS
1007.	MENDOZA, MAYRA DE	IPTA, LOS SANTOS
1008.	MENDOZA, MIRNA	INTEL, CHITRÉ
1009.	MENDOZA, NILDA	ALCALDÍA, CHITRÉ
1010.	MENDOZA, SIMEON	C. M. M. T. R., LAS TABLAS
1011.	MENDOZA, ZENAIDA A. DE	C. M. M. T. R., LAS TABLAS
1012.	MENDOZA, ZENIA	IPTA, LOS SANTOS
1013.	MENESES, NUBIA DE	INTEL, CHITRÉ
1014.	MILORD, MIRLAN DE	C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
1015.	MIRANDA, HIDALGO	INST. C. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS.
1016.	MITRE, MARCELINO	IFARHU, CHITRÉ
1017.	MOLINA, CARMEN	INTEL, CHITRÉ

1018. MOLINA, LUZ V. DE	SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
1019. MOLINA, NORA	INTEL, CHITRÉ
1020. MONTENEGRO, CARMEN	SEGURO SOCIAL, LAS TABLAS
1021. MONTENEGRO, IDILIO	ESC. C. VÁSQUEZ, LAS TABLAS
1022. MONTENEGRO, ITURBIDES	SEGURO SOCIAL, LAS TABLAS
1023. MONTENEGRO, MARTIZA DE	INTEL, CHITRÉ
1024. MONTENEGRO, MIGUEL	ALCALDÍA, LAS TABLAS
1025. MONTENEGRO, RAÚL	MIVI, LAS TABLAS
1026. MONTENEGRO C., RENÉ	IPACOOP, LAS TABLAS
1027. MONTILLA, ARNULFO	C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
1028. MORA G., DORA A.	ALCALDIA, LAS TABLAS
1029. MORA, ILKA DE	C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
1030. MORA, LEONIDAS CH. DE	GOBERNACIÓN, LAS TABLAS
1031. MORALES, HÉCTOR	INTEL, CHITRÉ
1032. MORALES, JUANA DE	C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
1033. MORALES, MARCEL	IFARHU, CHITRÉ
1034. MORALES, MARISOL	C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
1035. MORALES, MIRLA M. DE	REG. DE PRECIOS, CHITRÉ
1036. MORALES, NATIVIDAD DE	I. C. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS
1037. MORAN, VIELKA DE	C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
1038. MORCILLO, ABEL	P. CICLO SEC. GUARARÉ
1039. MORENO, ANA ROSA	IRHE, CHITRÉ
1040. MORENO, ANELIS MAGALIS	ORG. ELECTORAL, LAS TABLAS
1041. MORENO, CRISTINA	INST. C. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS.
1042. MORENO, DILSA DE	INST. C. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS.
1043. MORENO, DIOGENES E.	MIDA, CHITRÉ
1044. MORENO, EDILBERTO	MIDA, CHITRÉ
1045. MORENO, ELVIA R.	D. PROV. EDUC. CHITRÉ
1046. MORENO FRIAS, EFIGENIA	ORG. ELECTORAL, LAS TABLAS
1047. MORENO, GLADYS DE LEÓN DE	IPTA, LOS SANTOS
1048. MORENO, GRACIELA M. DE	SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
1049. MORENO, JACKELINE	M. O. P., LAS TABLAS
1050. MORENO, JOSÉ I.	IRHE, LAS TABLAS
1051. MORENO, JUANA I.	INTEL, CHITRÉ
1052. MORENO, JUSTO	IPTA., LOS SANTOS
1053. MORENO, MARIA	C. M. M. T. R., LAS TABLAS
1054. MORENO M., MARIA C.	ORG. ELECTORAL, CHITRÉ
1055. MORENO, MEDARDO	M. O. P., LAS TABLAS
1056. MORENO, SOLDIMARA	CEDULACIÓN, CHITRÉ
1057. MOSCOSO C., BERGIS E.	MIVI, LAS TABLAS
1058. MOSCOSO, EVER	INTEL, LAS TABLAS
1059. MOSQUERA, CARLOS	MIVI, CHITRÉ
1060. MOSQUERA, JAIME (INSP.)	INGRESOS, CHITRÉ
1061. MUDARRA, CARLOS	IPTA., LOS SANTOS
1062. MUDARRA, CARMEN	ESC. H. PEREZ TELLO, CHITRÉ
1063. MUDARRA, YOLANDA	SEGURO SOCIAL, LAS TABLAS
1064. MUÑOZ C., ANTOLEANO	SEGURO SOCIAL, LAS TABLAS
1065. MUÑOZ, DALYS	IFARHU, LAS TABLAS
1066. MUÑOZ, ENRIQUE	C. M. M. T. R., LAS TABLAS
1067. MUÑOZ, FAUSTIN	MICI, LAS TABLAS
1068. MUÑOZ, GISELA J.	C. SAN FCO. DE ASIS, LAS TABLAS
1069. MUÑOZ, LILA	CORREOS, CHITRÉ
1070. MUÑOZ, SONIA DEL C.	CORREOS, LAS TABLAS
1071. MUÑOZ, TOMÁS	C. M. M. T. R., LAS TABLAS
1072. MUÑOZ, VICTOR	D. PROV. EDUC. LAS TABLAS
1073. MURILLO, ELEUTERIO	INTEL, CHITRÉ

-N-

1074. NAVARRO, CONCEPCION	IPTA, LOS SANTOS
1075. NAVARRO, MARISOL C. DE	SEGURO SOCIAL, LAS TABLAS
1076. NAVARRO, NILSA J.	REGISTRO CIVIL, CHITRÉ
1077. NICOLAS, DAYSI DE	M. O. P., LAS TABLAS
1078. NICOSIA, RAÚL ENRIQUE	INTEL, LAS TABLAS
1079. NIETO, DALILA DE	ESC. H. PEREZ TELLO, CHITRÉ

1080. NIETO, FIDEL ANTONIO	SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
1081. NIETO, JULIO	MIDA, CHITRÉ
1082. NORATO, GLADYS DE	MIDA, CHITRÉ
1083. NORATO M., JORGE LUIS	SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
1084. NORATO, VIODELDA J. DE	IRHE, CHITRÉ
1085. NORIEGA, ARINDA DE	ESC. T. HERRERA, CHITRÉ
1086. NORIEGA, CARMEN JUDITH	REGULACION DE PRECIOS, CHITRÉ
1087. NORIEGA, MARTA	ESC. T. HERRERA, CHITRÉ
1088. NORIEGA, OMAIRA	CONTRALORÍA, CHITRÉ
1089. NUÑEZ, CARMEN F. DE	BANCO NACIONAL, LAS TABLAS
1090. NUÑEZ, ELTA MARIA	D. PROV. DE EDUC. CHITRÉ
1091. NUÑEZ, ISABEL M. DE	C. M. M. T. R., LAS TABLAS
1092. NUÑEZ, JUDITH DE	INTEL, LAS TABLAS
1093. NUÑEZ, RICARDO	IPTA, LOS SANTOS
1094. OCHOA G., OFELINA	INGRESOS, CHITRÉ
1095. OLAVE, ARACELLYS	INTEL, CHITRÉ
1096. OLAVE, LUCIA C. DE	SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
1097. ORO, RIGOBERTO	MIDA, CHITRÉ
1098. ORTEGA, ANA	IPTA, LOS SAMTOS
1099. ORTEGA, BERNARDINA DE	SEGURO SOCIAL, LAS TABLAS
1100. ORTEGA, EDITH A. DE	CATASTRO, CHITRÉ
1101. ORTEGA, DOMINGO OMAR	C. SAN FCO. DE ASIS, LAS TABLAS
1102. ORTEGA, XIOMARA	MIDA, CHITRÉ
1103. ORTIZ, CARLOS	IPTA, LOS SANTOS
1104. ORTIZ B., ROBUSTIANO	COOP. GLAYS B. DE DUCASA
1105. ORTIZ, RUBIELA	SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
1106. OSORIO, CESAR	MIDA, CHITRÉ
1107. OSORIO, CLARISA	C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
1108. OSORIO, EYRA B. DE	INTEL, LAS TABLAS
1109. OSORIO, GILBERTO	ESC. TOMÁS HERRERA, CHITRÉ
1110. OSORIO, GILDA	CORREOS, CHITRÉ
1111. OSORIO, HÉCTOR J.	B. D. A., CHITRÉ
1112. OSORIO, HÉCTOR MANUEL	B. D. A., CHITRÉ
1113. OSORIO ILUMINADA DE	C. M. M. T. T. R., LAS TABLAS
1114. OSORIO, IRWIN	IDAAN, CHITRÉ
1115. OSORIO, ISMAEL	BANCO NACIONAL, CHITRÉ
1116. OSORIO, JOSÉ E.	C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
1117. OSORIO B., JOSÉ A.	CAJA DE AHORROS, CHITRÉ
1118. OSORIO D., LISBETH H.	REGISTRO CIVIL, CHITRÉ
1119. OSORIO, LUIS Q.	CORREOS, CHITRÉ
1120. OSORIO, LUISA DE	C. M. M. T. R., LAS TABLAS
1121. OSORIO, LUZ MARIA	ESC. H. PEREZ TELLO,CHITRÉ
1122. OSORIO, NERY DE	D. PROV. DE EDUC., CHITRÉ
1123. OSORIO, ODERAY	ESC. H. PEREZ TELLO, CHITRÉ
1124. OSORIO, ROGELIO	IDAAN, CHITRÉ

-P-

1125. PALACIOS, ALBALYRA	INST. C. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS
1126. PALMA, CLELIA DE	PRIMER CICLO SEC., GUARARÉ
1127. PALMA, JORGE MANUEL	D. PROV. EDUC., CHITRÉ
1128. PALMA, MANUEL	IPTA, LOS SANTOS
1129. PALMA, MERCEDES Z. DE	C. M. M. T. R., LAS TABLAS
1130. PALOMINO, EDILMA DE	ESC. JUANA VERNAZA, GUARARÉ
1131. PAZ, CORITA M. DE	MIDA, CHITRÉ
1132. PEARSALL, DORIS V. DE	IRHE, CHITRÉ
1133. PECERO, ALICIA	IPTA, LOS SANTOS
1134. PEÑA, FRANCISCO	INTEL, LAS TABLAS
1135. PEÑA, LIBORIO	INTEL, CHITRÉ
1136. PERALTA, ARGENIDA	BANCO NACIONAL, LAS TABLAS
1137. PERALTA, HORACIO	CORREOS, CHITRÉ
1138. PERALTA, ISAMEL	C. SAN FCO. DE ASIS, LAS TABLAS
1139. PERALTA, JORGE	IFARHU, LAS TABLAS
1140. PERALTA, MERCEDES B. DE	D. PROV. EDUC. CHITRÉ
1141. PERALTA, PORFIRIO	INTEL, CHITRÉ

1142. PERALTA, ROBERTO A.	C. SAN FCO. DE ASIS, LAS TABLAS
1143. PERALTA, VICTOR	MIVI, CHITRÉ
1144. PERALTA, VICTOR	SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
1145. PEREA O., HEYLIS	ALCALDÍA, CHITRÉ
1146. PEREIRA, CARMEN	MIDA, CHITRÉ
1147. PEREIRA, JUSTO	IPTA, LOS SANTOS
1148. PEREIRA, GUSTAVO	MIDA, CHITRÉ
1149. PÉREZ, ANAYANSI	MIDA, CHITRÉ
1150. PÉREZ, ANDREA	ESC. H. PEREZ TELLO, CHITRÉ
1151. PÉREZ, AZAEL	MIDA, LAS TABLAS
1152. PÉREZ, BRUNILDA	C. M. M. T. R., LAS TABLAS
1153. PÉREZ, CARLOS ARIEL	SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
1154. PÉREZ, CARMEN JULIA DE	ESC. H. PEREZ TELLO, CHITRÉ
1155. PÉREZ, CEFERINA DE	INST. C. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS
1156. PÉREZ V., DALYS M.	BANCO NACIONAL, LAS TABLAS
1157. PÉREZ, DENIS V. DE	CONTRALORÍA, CHITRÉ
1158. PÉREZ, EDILMA	ESC. H. PEREZ TELLO, CHITRÉ
1159. PÉREZ, EDILMA P. DE	SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
1160. PÉREZ, EIRA DE	INGRESOS, CHITRÉ
1161. PÉREZ, GLADYS	D. PROV. EDUC. CHITRÉ
1162. PÉREZ A., ITZEL D.	CATASTRO, LAS TABLAS
1163. PÉREZ, JOSÉ DE LA R.	INGRESOS, CHITRÉ
1164. PÉREZ, JUAN M.	INST. C. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS
1165. PÉREZ P., LILIA	D. PROV. EDUC. LAS TABLAS
1166. PÉREZ, LUIS A.	IDAAN, CHITRÉ
1167. PÉREZ, MANUEL	C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
1168. PÉREZ, MANUEL	IPTA, LOS SANTOS
1169. PÉREZ, MANUEL	MIDA, LAS TABLAS
1170 PÉREZ S., MARIA DEL C.	SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
1171. PÉREZ, MARITZA	ESC. H. PÉREZ TELLO, CHITRÉ
1172. PÉREZ, MIREYA	INTEL, CHITRÉ
1173. PÉREZ, NIDIA V. DE	CONTRALORÍA, CHITRÉ
1174. PÉREZ, ODERAY DE	C. JOSÉ DANIEL CRESPO, CHITRÉ
1175. PÉREZ B., RICAURTER	IPACOOP, LAS TABLAS
1176. PÉREZ, ONORALDO	ESC. NICANOR VILLALAZ, LOS SANTOS
1177. PÉREZ, RIGOBERTO	CEDULACIÓN, CHITRÉ
1178. PÉREZ, VICTOR M.	B. D. A., CHITRÉ
1179. PÉREZ, ZENAIDA	ESC. JUAN. T. DEL BUSTO, CHITRÉ
1180. PIMENTEL, ANA ELIDA	SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
1181. PIMENTEL, DORIS DE	IFARHU, CHITRÉ
1182. PIMENTEL, FELIX	MIDA, CHITRÉ
1183. PIMENTEL, JUAN	MIDA, CHITRÉ
1184. PIMENTEL, NELVA E. DE	TRIBUNAL ELECTORAL, LOS SANTOS
1185. PIMENTEL, TEMISTOCLES	IFARHU, CHITRÉ
1186. PINILLA, LIDIA	IPTA, LOS SANTOS
1187. PINILLA, MARTINA	MIDA, CHITRÉ
1188. PINILLA, DE LEÓN NERY E.	MIVI, CHITRÉ
1189. PINILLA, RICARDO	IDAAN, CHITRÉ
1190. PINEL, NATALIO	SEGURO SOCIAL, LAS TABLAS
1191. PINTO, ELVIA M.	ESC. NICANOR VILLALAZ, LOS SANTOS
1192. PINZON, ANTONIO	D. PROV. DE EDUCACIÓN, LAS TABLAS
1193. PINZON, DIDIA DE	ESC. JUANA VERNAZA, GUARARÉ
1194. PINZON , MARIA DE	C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
1195. PINZON, YOLANDA DE	IPTA, LOS SANTOS
1196. PITTI, LILIA DE	ESC. TOMAS HERRERA, CHITRÉ
1197. PITTI, ORLANDO	C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
1198. POLANCO, ENRIQUE	MIDA, LAS TABLAS
1199. POLO, D0RIS	D. PROV. EDUC., CHITRÉ
1200. POLO, JOSÉ NICANOR	DIGEDECOM, CHITRÉ
1201. POLO, MARIA S. DE	REGULACION DE PRECIOS, CHITRÉ
1202. POLO, OMAR	MIDA, CHITRÉ
1203. POLO, RICHARD	CAJA DE AHORROS, CHITRÉ
1204. POSAN, JACOB	MIDA, CHITRÉ
1205. POVEDA, ABEL R.	SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
1206. POVEDA, CALIXTO	INST. C. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS

1207. POVEDA, CARMEN R. DE	CATASTRO, CHITRÉ
1208. POVEDA, DIEGO	MOP., CHITRÉ
1209. POVEDA, JOSÉ	D. PROV. DE EDUC., CHITRÉ
1210. PRADO R., ELENA	CORREOS, LAS TABLAS
1211, PRADO, RAMONA DE	DIGEDECOM, LAS TABLAS
1212. PRIMOLA, PUBLIO	INST. C. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS
1213. QUEZADA, ARIETTE	INST. C. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS
1214. QUEZADA, FRANCISCO	ESC. H. P. TELLO, CHITRÉ
1215, QUINTERO, ADDA	C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
1216. QUINTERO, ALCIBIADES	IPACOOP, LAS TABLAS
1217. QUINTERO B., ANA M.	CATASTRO, LAS TABLAS
1218. QUINTERO, ARGELINA DE	ESC. CLAUDIO VÁSQUEZ, LAS TABLAS
1219. QUINTERO, BALBINO	C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
1220. QUINTERO, BLANCA DE	ESC. JUANA VERNAZA, GUARARÉ
1221. QUINTERO, BOLIVAR	IPTA, LOS SANTOS
1222. QUINTERO, CELMIRA DE	CEDULACIÓN, CHITRÉ
1223. QUINTERO, FRANCISCO	SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
1224. QUINTERO, ILVIA C. DE	REGISTRO CIVIL, CHITRÉ
1225. QUINTERO, HÉCTOR	INST. C. S. DE V. LOS SANTOS
1226. QUINTERO, JOSÉ	MIN. DE TRABAJO, CHITRÉ
1227. QUINTERO, JOSÉ C.	MIN. DE TRABAJO, CHITRÉ
1228. QUINTERO M., JOSÉ M.	INTEL, LAS TABLAS
1229. QUINTERO, MABEL	IPTA, LOS SANTOS
1230. QUINTERO, MANUEL	C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
1231. QUINTERO, MARINA DE	MIVI, CHITRÉ
1232. QUINTERO, MARIA DE	INST. C. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS
1233. QUINTERO, NURIS	MIVI, LAS TABLAS
1234. QUINTERO, SORAYA DE	IRHE, LAS TABLAS
1235. QUINTERO, ELVIA DE	ALCALDÍA, CHITRÉ
1236. QUINZADA, LUIS C.	IDAAN, CHITRÉ
1237. QUINZADA, MIGUEL	IPTA, LOS SANTOS
1238. QUIROZ, ELIZONDO	M. O. P., LAS TABLAS
1239. RAMIREZ, ALICIA	MIDA, CHITRÉ
1240. RAMIREZ, NOEMI B. DE	D. PROV. DE EDUC. LAS TABLAS
1241. RAMIREZ, SIMONA D. DE	SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
1242. RAMOS M., AURA E.	CEDULACIÓN CHITRÉ
1243. RAMOS, CARMELA	ESC. J. VERNAZA, GUARARÉ
1244. RAMOS, FLORENCIA DE	ESC. N. VLAZ, LOS SANTOS
1245. RAMOS, GILMA	MIVI, CHITRÉ
1246. RAMOS, JORGE	MIDA, CHITRÉ
1247. REYES, AIDA R. DE	D. PROV. DE EDUC. LAS TABLAS
1248. REYES, CLEMENTINA DE	ESC. P. PORRAS, LAS TABLAS
1249. RIOS L., AUGUSTO A.	SEGURO SOCIAL CHITRÉ
1250. RIOS, CARMEN DE	IDAAN, CHITRÉ
1251. RIOS, DAMARIS	MIVI, CHITRÉ
1252. RIOS, DIGNA DE	ESC. J. T. DEL BUSTO, CHITRÉ
1253. RIOS, ELDA DE	ESC. J. T. DE. BUSTO, CHITRÉ
1254. RIOS, GISELA DE	INTEL, CHITRÉ
1255. RIOS, GLADYS	ESC. N. VILLALAZ, LOS SANTOS
1256. RIOS, ILSA	CONTRALORÍA, CHITRÉ
1257. RIOS, ISABEL	C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
1258. RIOS M. JOSÉ F.	M. DE TRABAJO, CHITRÉ
1259 RIOS, JOSEFA M. DE	SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
1260. RIOS, MARIA E. DE	MIDA, CHITRÉ
1261. RIOS, MARGARITA	INST. C. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS
1262. RIOS, MAYRA DE	M. O. P., LAS TABLAS
1263. RIOS, NILKA	C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
1264. RIOS, NORAIDA DE	IFARHU, CHITRÉ
1265. RIOS, OMAIRA	D. PROV. DE EDUC. CHITRÉ
1266. RIOS R. SERGIO	B. D. A., CHITRÉ
1267. RIVALINEIRA, SILVIA	I. R. H. E., CHITRÉ
1268. RIVERA, ARACELIS	C. M. M. T. R., LAS TABLAS
1269. RIVERA, BENIGNO	MIVI, LAS TABLAS
1270. RIVERA, JORGE A.	MIDA, CHITRÉ
1271. RIVERA, JULIA	INST. C. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS

1272. RIVERA, ISAIAS	ESC. T. HERRERA, CHITRÉ
1273. RIVERA, ZENAIDA DE	CORREOS, CHITRÉ
1274. ROBLES, ILDEMARO	IPTA., LOS SANTOS
1275. ROBLES, LURYS	INTEL, LAS TABLAS
1276. ROBLES, MIGUEL	C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
1277. ROCA, LUIS CARLOS	MICI, CHITRÉ
1278. RODRIGUEZ S., ALBIS O.	CEDULACIÓN, CHITRÉ
1279. RODRIGUEZ, ALCIDES	CEDULACIÓN, CHITRÉ
1280. RODRIGUEZ, ANGEL SANTOS	MIVI, CHITRÉ
1281. RODRIGUEZ, ARGELIA DE	C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
1282. RODRIGUEZ, BEATRIZ	IDAAN, CHITRÉ
1283. RODRIBUEZ, BERNARDO	BANCO NACIONAL, LAS TABLAS
1284. RODRIGUEZ, CARMEN E.	D. PROV. DE ED. CHITRÉ
1285. RODRIGUEZ, CESAR B.	P. C. SEC. DE GUARARÉ
1286. RODRIGUEZ, CECILIA	C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
1287. RODRIGUEZ, CECILIO	MIDA, CHITRÉ
1288. RODRIGUEZ, CELINA DE	SEGURO SOCIAL, LAS TABLAS
1289. RODRIGUEZ, DALILA	INTEL, CHITRÉ
1290. RODRIGUEZ, DIGNA DE	MICI, CHITRÉ
1291. RODRIGUEZ, DORIS DE	MIDA, CHITRÉ
1292. RODRIGUEZ, EDWIN	ALCALDÍA, CHITRÉ
1293. RODRIGUEZ, ELBA	INTEL, CHITRÉ
1294. RODRIGUEZ, ELBA	MIDA, CHITRÉ
1295. RODRIGUEZ, ELDA DE	ESC. H. P. TELLO, CHITRÉ
1296. RODRIGUEZ, ELIA DE	C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
1297. RODRIGUEZ, GABRIEL	ESC. T. HERRERA, CHITRÉ
1298. RODRIGUEZ, GERARDINO	TESORERIA, LAS TABLAS
1299. RODRIGUEZ, GLADYS C.	INTEL, CHITRÉ
1300. RODRIGUEZ, GUILLERMO	C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
1301. RODRIGUEZ, HÉCTOR	C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
1302. RODRIGUEZ, HÉCTOR	IDAAN, CHITRÉ
1303. RODRIGUEZ, ISAIAS	ALCALDÍA, CHITRÉ
1304. RODRIGUEZ, JOSÉ A.	ESC. N. VILLALAZ, LOS SANTOS
1305. RODRIGUEZ, JOSÉ BENITO	MIDA, CHITRÉ
1306. RODRIGUEZ, JULIA R. DE	INTEL, CHITRÉ
1307. RODRIGUEZ, KENIA	MICI, CHITRÉ
1308. RODRIGUEZ, KENIA DE	INTEL, CHITRÉ
1309. RODRIGUEZ S., LENIS A.	COOP. G . B. DE DUCASA, LAS TABLAS
1310. RODRIGUEZ, LESVIA B.	REGISTRO CIVIL, CHITRÉ
1311. RODRIGUEZ, LIBRADA DE	REGISTRO CIVIL, CHITRÉ
1312. RODRIGUEZ, LUZ G.	C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
1313. RODRIGUEZ, LUZMILA DE	INTEL, CHITRÉ
1314. RODRIGUEZ, MANUEL	M. O. P., CHITRÉ
1315. RODRIGUEZ, MARGOT DE	INST. C. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS
1316. RODRIGUEZ, MARIA DE	ESC. H. P. TELLO, CHITRÉ
1317. RODRIGUEZ, MARIANELA	INTEL, CHITRÉ
1318. RODRIGUEZ, MARILUZ DE	SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
1319. RODRIGUEZ, MAXIMINO	INTEL, LAS TABLAS
1320. RODRIGUEZ, MIGDALIA	SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
1321. RODRIGUEZ, MIGUEL	IRHE, CHITRÉ
1322. RODRIGUEZ, NIDIA DE	INTEL, CHITRÉ
1323. RODRIGUEZ, NIDIA	CONTRALORÍA, CHITRÉ
1324. RODRIGUEZ, NIMIA C. DE	ESC. C. VÁSQUEZ, LAS TABLAS
1325. RODRIGUEZ, O. PEDRO	IPACOOP, LAS TABLAS
1326. RODRIGUEZ, PEDRO	MIDA, CHITRÉ
1327. RODRIGUEZ, PEDRO PABLO	SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
1328. RODRIGUEZ, PRISCILLA S. DE	SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
1329. RODRIGUEZ, RAMIRO	MIVI, LOS SANTOS
1330. RODRIGUEZ, RAÚL A.	CAJA DE AHORROS, CHITRÉ
1331. RODRIGUEZ, RODRIGO	M. O. P., CHITRÉ
1332. RODRIGUEZ, ROSEMARY	MIDA, LAS TABLAS
1333. RODRIGUEZ R., ROSMERY	INGRESOS, LAS TABLAS
1334. RODRIGUEZ, ROSINA DE	IDAAN, CHITRÉ
1335. RODRIGUEZ, SAMUEL A.	MICI, CHITRÉ
1336. RODRIGUEZ, TEODOLINDA DE	SEGURO SOCIAL, CHITRÉ

1337. RODRIGUEZ, VITERBO	BANCO NACIONAL, CHITRÉ
1338. RODRIGUEZ, YOLANDA DE	D. PROV. DE ED. CHITRÉ
1339. ROMERO, KERIMA A. DE	MIDA, CHITRÉ
1340. ROVIRA, JOSÉ DOMINGO	CATASTRO, LAS TABLAS
1341. RUBATINO, GLADYS	ORG. ELECTORAL, CHITRÉ
1342. RUILOBA, ROSI MARLENE	MIDA, LAS TABLAS
1343. RUIZ, AQUILINO	IDAAN, LAS TABLAS
1344. RUIZ, ARGELIS	ESC. N. VILLALAZ, LOS SANTOS
1345. RUIZ, ETILVIA	IDAAN, CHITRÉ
1346. RUIZ, FULVIA G. DE	SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
1347. RUIZ, JUAN ANTONIO	SEGURO SOCIAL CHITRÉ
1348. RUIZ, LILIANA C. DE	ALCALDÍA, CHITRÉ
1349. RUIZ, LOURDES	IPTA, LOS SANTOS
1350. RUIZ, MANUEL	MIDA, CHITRÉ
1351. RUIZ, NELLYS DE	CORREOS, CHITRÉ
1352. RUIZ, ROBERTO	IDAAN, CHITRÉ
1353. RUIZ, TERESA	IPTA, LOS SANTOS
1354. RUIZ, VIRGINIA M. DE	IPTA, LOS SANTOS

-S-

1355. SAAVEDRA, DAMARIS DE	REGISTRO CIVIL, LAS TABLAS
1356. SAAVEDRA, DANIEL	INGRESOS, CHITRÉ
1357. SAAVEDRA, DELFINA M. DE	C. M. M. T. R., LAS TABLAS
1358. SAAVEDRA, DENSIL S.	MIDA, LAS TABLAS
1359. SAAVEDRA, ERNESTO	ESC. N. VILLALAZ, LOS SANTOS
1360. SAAVEDRA, ESPERANZA DE	C. SAN FCO. DE ASIS, LAS TABLAS
1361. SAAVEDRA, GENARO	ESC. H. P. TELLO, CHITRÉ
1362. SAAVEDRA, GRISELDA DE	ESC. T. HERRERA, CHITRÉ
1363. SAAVEDRA R., JUAN DE DIOS	SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
1364. SAAVEDRA, JULIA E. DE	ESC. J. VERNAZA, GUARARÉ
1365. SAAVERA, LOIRA DE	ESC. TOMÁS, HERRERA, CHITRÉ
1366. SAAVEDRA, NESTOR	ESC. H. PEREZ TELLO, CHITRÉ
1367. SAAVEDRA, ROSA DE	MIDA, CHITRÉ
1368. SAENZ D., AGUSTIN	B. D. A., CHITRÉ
1369. SAEZ, ALBERTO	MIVI, LOS SANTOS
1370. SAEZ, ALICIA	IPTA, LOS SANTOS
1371. SAEZ, BELKIS DE	ESC. H. PEREZ TELLO, CHITRÉ
1372. SAEZ, CRISTINA DE	SEGURO SOCIAL, LAS TABLAS
1373. SAEZ, JUAN	SEGURO SOCIAL, LAS TABLAS
1374. SAEZ, MARIA V. DE	ESC. NICANOR VILLALAZ, LOS SANTOS
1375. SAEZ R., MARISIN I.	CEDULACIÓN, LAS TABLAS
1376. SAEZ, MARTA DÍAZ DE	SEGURO SOCIAL, LAS TABLAS
1377. SALADO, FLORENTINO	ESC. NICANOR VILLALAZ, LOS SANTOS
1378. SALADO, BENITO	IPTA, LOS SANTOS
1379. SALADO, ROGELIO	INST. C. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS
1380. SALAS, AQUILINO	INST. C. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS
1381. SALAS, BENILDA M. DE	IRHE, CHITRÉ
1382. SALERNO, BRENDA S. DE	AUDITORIA, CHITRÉ
1383. SALERNO, DIANA DE	CORREOS, CHITRÉ
1384. SALERNO, HUMBERTO	MIDA, CHITRÉ
1385. DALERNO, PRADY DE	C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
1386. SAMANIEGO, AMARILIS	MIVI, LOS SANTOS
1387. SAMANIEGO, ANA DE	INTEL, LAS TABLAS
1388. SAMANIEGO, ANTONIO	MIDA, CHITRÉ
1389. SAMANIEGO, ELIZABETH	ESC. NICANOR VILLALAZ, LOS SANTOS
1390. SAMANIEGO, EMILIO	C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
1391. SAMANIEGO, FERNANDO	INTEL, LAS TABLAS
1392. SAMANIEGO, ISABEL	C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
1393. SAMANIEGO, JORGE ARIEL	MIDA, CHITRÉ
1394. SAMANIEGO, JULIA	MIDA, CHITRÉ
1395. SAMANIEGO, LILIBETH	ESC. H. PEREZ TELLO, CHITRÉ
1396. SAMANIEGO V., LUZ HAYDEE	CAJA DE AHORROS, CHITRÉ
1397. SAMANIEGO, MARIELA	SEGURO SOCIAL, LAS TABLAS
1398. SAMANIEGO, MIGDALIA	C. EDC. SANTEÑO, LAS TABLAS

1399. SAMANIEGO, MISAEL	INTEL, CHITRÉ
1400. SAMANIEGO, ROBERTO	INST. C. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS
1401. SAMANIEGO, ROBERTO	B. D. A., LAS TABLAS
1402. SAMANIEGO, VICTOR	INTEL, LAS TABLAS
1403. SAMANIEGO, YOLANDA DE	ALCALDÍA, CHITRÉ
1404. SAMUDIO, GLORIA DE	C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
1405. SAMUDIO, MIREYA DE	C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
1406. SANCHEZ, BRICEIDA DE	CORREOS, LAS TABLAS
1407. SANCHEZ, CARLOS	INST. C. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS
1408. SANCHEZ, CRISTOBALINA R. DE	SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
1409. SANCHEZ, DARIS DE	ALCALDÍA, GUARARÉ
1410. SANCHEZ, ELIZABETH DE	IDAAN, CHITRÉ
1411. SANCHEZ, ELVIA D. DE	C. M. M. T. R., LAS TABLAS
1412. SANCHEZ, ELVIRA V. DE	CAJA DE AHORROS, LAS TABLAS
1413, SANCHEZ, JOSÉ DEL C.	C. SAN FCO. DE ASIS, LAS TABLAS
1414. SANCHEZ, LELVIS	IPTA, LOS SANTOS
1415. SANCHEZ, MIGDALIA DE	MIVI, LAS TABLAS
1416. SANCHEZ, NORIS E.	INGRESOS, LAS TABLAS
1417. SANCHEZ, LILIA	ESC. J. T. DEL BUSTOS, CHITRÉ
1418. SANCHEZ, REINA	D. P. DE EDUC., LAS TABLAS
1419. SANCHEZ, RUFINA DE	ESC. TOMAS, HERRERA, CHITRÉ
1420. SANCHEZ, RUFINO	INTEL, LAS TABLAS
1421. SANCHEZ, VICTOR	INTEL, CHITRÉ
1422. SANCHEZ ZOILA	M. O. P., LAS TABLAS
1423. SANDOVAL, EVIDELHA	ESC. J. T. DEL BUSTO, CHITRÉ
1424. SANDOVAL, FATIMA DE	ESC. H. P. TELLO, CHITRÉ
1425. SANDOVAL, GISELA E.	SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
1426. SANDOVAL, HIPOLITO	CORREOS, CHITRÉ
1427. SANDOBAL B., JORGE A.	ORG. ELECTORAL CHITRÉ
1428. SANDOVAL, MIGDALIA DE	IPTA, LOS SANTOS
1429. SANDOVAL, NINFA	SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
1430. SANDOVAL, NORMA	INTEL, CHITRÉ
1431. SANDOVAL, RICAURTE	INST. C. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS
1432. SANDOVAL, ROBERTO	INTEL, LAS TABLAS
1433. SAMTAMA V., ANGELA	SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
1434. SATURNO, MIRKA	ESC. TOMÁS HERRERA, CHITRÉ
1435. SAUCEDO, MALENA	IPTA, LOS SANTOS
1436. SAUCEDO, MARILIN	INST. C. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS
1437. SAUCEDO, MAXIMINO	IPTA., LOS SANTOS
1438. SAUCEDO, NEMESIO	INST. C. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS
1439. SERRANO, ABEL	INTEL, CHITRÉ
1440. SILVA, HÉCTOR	MIDA, CHITRÉ
1441. SINCLAIR, SADIA	IDAAN, CHITRÉ
1442. SMITH, ARQUIMEDES	IPTA, LOS SANTOS
1443. SMITH, MILTON	P. CICLO SEC., GUARARÉ
1444. SMITH, YINA Y.	ALCALDÍA, GUARARÉ
1445. SOBENIS, MARCIAL	D. PROV. DE EDUC. CHITRÉ
1446. SOLANILLA, LOURDES S. DE	ORG. ELECTORAL, CHITRÉ
1447. SOLIS, ALCIBIADES	IPTA, LOS SANTOS
1448. SOLIS, ANA LURIS V. DE	C. SAN FCO. DE ASIS, LAS TABLAS
1449. SOLIS, ANGEL	CONTRALORÍA, CHITRÉ
1450. SOLIS, BERTA DE	IPTA, LOS SANTOS
1451. SOLIS, CARMEM	IDAAN, CHITRÉ
1452. SOLIS, CARMEN	ESC. NICANOR VILLALAZ, LOS SANTOS
1453. SOLIS, CARMEN J. DE	C. M. M. T. R., LAS TABLAS
1454. SOLIS, CECIBEL DEL C.	GOBERNACIÓN, LAS TABLAS
1455. SOLIS, CECILIO	IPTA, LOS SANTOS
1456. SOLIS, ELIZABETH DE	B. D. A., LAS TABLAS
1457. SOLIS, EUDOCIA N. DE	ESC. CLAUDIO VÁSQUEZ, LAS TABLAS
1458. SOLIS, EUPLINIO	C. M. M. T. R., LAS TABLAS
1459. SOLIS R. FRANKLIN A.	C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
1460. SOLIS A. HERLINA	MIDA, CHITRÉ
1461. SOLIS, JOSÉ I.	INTEL, LAS TABLAS
1462. SOLIS, JUAN C.	IDAAN, CHITRÉ
1463. SOLIS, LESBIA F. DE	ESC. CLAUDIO VÁSQUEZ, LAS TABLAS

1464. SOLIS, MARTHA	C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
1465. SOLIS, MARTA DE	P. CICLO SEC. DE GUARARÉ
1466. SOLIS, OCTAVIO E.	B. D. A,. CHITRÉ
1467. SOLIS G., RICAURTE V.	SEGURO SOCIAL, LAS TABLAS
1468. SOLIS, TIRSO	MIDA, CHITRÉ
1469. SOLIS, VICTOR RAÚL	REG. CIVIL, LAS TABLAS
1470. SOLIS, XIOMARA J. DE	MICI, LAS TABLAS
1471. SOLIS, ZENITH	C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
1472. SORIANO, ALEXIS	MIVI, LAS TABLAS
1473. SORIANO, ANGELA	ESC. J. T. DEL BUSTO, CHITRÉ
1474. SORIANO, JUAN PABLO	MIDA, LAS TABLAS
1475. SORIANO, MANUEL	MIDA, LAS TABLAS
1476. SORIANO C., RAFAEL F.	C. S. FCO. DE ASIS, LAS TABLAS
1477. SORIANO, VILMA E. V. DE	COOP. EDUC. SANTEÑO, LAS TABLAS
1478. SORIANO, YARIELA	C. SAN FCO. DE ASIS, LAS TABLAS
1479. SOTO MORENO, CARLOS E.	CAJA SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
1480. SUCRE, GLORIA DE	ESC. TOMÁS HERRERA, CHITRÉ
1481. SUCRE, REINA I.	MIDA, CHITRÉ
1482. TAMAYO, CECILIA DE	INTEL, CHITRÉ
1483. TEJADA, CLIMACO	INTEL, LAS TABLAS
1484. TEJADA D., FRANKLIN A.	INTEL, LAS TABLAS
1485. TEJADA, JAVIER	CORREOS, CHITRÉ
1486. TEJADA R., JORGE L.	IFARHU, CHITRÉ
1487. TEJADA, NILDA M. DE	IPTA, LOS SANTOS
1488. TEJADA, PLINIO A.	INTEL, LAS TABLAS
1489. TEJADA, RENÉ	C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
1490. TELLO, DALLIS	IDAAN, CHITRÉ
1491. TELLO, ENELDA M.	M. DE TRABAJO, CHITRÉ
1492. TELLO, ETELVINA DE	IFARHU, CHITRÉ
1493. TELLO, GRISELDA G. DE	SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
1494. TELLO, JOSÉ	C. M. M. T. R., LAS TABLAS
1495. TELLO B. RAFAEL	B. D. A., CHITRÉ
1496. TELLO, ROLANDO	M. DE TRABAJO, CHITRÉ
1497. TELLO, ROSINA B. DE	MIDA, CHITRÉ
1498. TELLO, VICTOR VIDAL	B. D. A., CHITRÉ
1499. TERRIENTE, PETRA	IFARHU, LAS TABLAS
1500. TORRES, APOLINAR	ESC. NICANOR VILLALAZ, LOS SANTOS
1501. TORRES, LUZMILA	INTEL, CHITRÉ
1502. TORRES, RAMÓN	MIDA, CHITRÉ
1503. TORRES, TALIA	INST. C. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS
1504. TREJOS, OMAYRA S. DE	SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
1505. TREJOS, ROGER	MICI, CHITRÉ
1506. TROYA, GLADYS DE	C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
1507. TRUJILLO, VICTOR	MICI, LAS TABLAS
1508. ULLOA, ADELAIDA	ESC. TOMÁS HERRERA, CHITRÉ
1509. ULLOA, RSA E. C. DE	SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
1510. UREÑA, ABEL	D. PROV. EDUC., LAS TABLAS
1511. UREÑA, ALCIDES	IPTA., LOS SANTOS
1512. UREÑA, ALGIS	B. D. A., LAS TABLAS
1513. UREÑA, CECILIA DE	BANCO NACIONAL, LAS TABLAS
1514. UREÑA, EDWIN	ESC. CLAUDIO VÁSQUEZ, LAS TABLAS
1515. UREÑA, EVELYN DE	INST. C. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS
1516. UREÑA, MANUEL	ESC. H. PEREZ TELLO, CHITRÉ
1517. URRIOLA, CORALIA	ESC. TOMÁS HERRERA, CHITRÉ
1518. URRIOLA, ELSIE J. DE	C. M. M. T. R., LAS TABLAS
1519. URRIOLA, LIBRADA	ESC. P. PORRAS, LAS TABLAS

-V-

1520. VACA, MARITZA DE	ESC. NICANOR VILLALAZ, LOS SANTOS
1521. VALDES, GLADYS DE	M. O. P, LAS TABLAS
1522. VALDEZ, GLORIA S. DE	ORG. ELECTORAL, CHITRÉ
1523. VALDEZ, RAÚL	C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
1524. VALDEZ M., LUIS A.	REGISTRO CIVIL, CHITRÉ
1525. VALDEZ, MERCEDES	D. PROV. DE EDUC., LAS TABLAS

1526. VALDEZ, MARIA — C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
1527. VARGAS L. ADRIAN — MIDA, LAS TABLAS
1528. VARGAS, ALEX — MIDA, LAS TABLAS
1529. VARGAS H., AHMED G. — TRIB. ELECTORAL, LAS TABLAS
1530. VARGAS, ANALIO — INTEL, LAS TABLAS
1531. VARGAS, AQUILINA U. DE — CEDULACIÓN, CHITRÉ
1532. VARGAS, CANDIDA — IPTA, LOS SANTOS
1533. VARGAS, FERMINA — SEGURO SOCIAL, LAS TABLAS
1534. VARGAS, JOSÉ FELIX — P. C. SEC. DE GUARARÉ
1535. VARGAS, LILIA DE — D. PROV. DE EDUC., LAS TABLAS
1536. VARGAS, MARLITT P. DE — BANCO NACIONAL, LAS TABLAS
1537. VARGAS, MIGDALIA I. — SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
1538. VARGAS E., MIGUEL — DIGEDECOM, LAS TABLAS
1539. VARGAS, ALBIN — MIDA, LAS TABLAS
1540. VÁSQUEZ, DALMA — MIDA, LAS TABLAS
1541. VÁSQUEZ, DAMARIS — ESC, P. PORRAS, LAS TABLAS
1542. VÁSQUEZ, DAVID — ESC. TOMÁS HERRERA, CHITRÉ
1543. VÁSQUEZ G., DIVO CELY — IFARHU, LAS TABLAS
1544. VÁSQUEZ, ETERILDA DE — C. SAN FCO. DE ASÍS, LAS TABLAS
1545. VÁSQUEZ B., GONZALO — SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
1546. VÁSQUEZ, GUIDO F. — C. M. M. T. R., LAS TABLAS
1547. VÁSQUEZ, IRENE — M. O. P., LAS TABLAS
1548. VÁSQUEZ, SONIA — ESC. NICANOR VILLALAZ, LOS SANTOS
1549. VÁSQUEZ, VICTOR H. — C. M. M. T. R., LAS TABLAS
1550. VEGA, BELGICA A. DE — ESC. JUANA VERNAZA, GUARARÉ
1551. VEGA, BERTILDA — MICI, CHITRÉ
1552. VEGA, ELIA DE — ESC. NICANOR VILLALAZ, LOS SANTOS
1553. VEGA, ESILDA — INST. C. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS.
1554. VEGA, FANY — IDAAN, CHITRÉ
1555. VEGA, HÉCTOR — D. PROV. DE EDUC., CHITRÉ
1556. VEGA, HILDA — C. M. M. M. T. R., LAS TABLAS
1557. VEGA, JOSÉ DE LA L. — ALCALDÍA, CHITRÉ
1558. VEGA, JUAN — C. M. M. T. R., LAS TABLAS
1559. VEGA C., MARIA BELEN — ALCALDÍA, CHITRÉ
1560. VEGA, MARIA DEL C. — INTEL, LAS TABLAS
1561. VEGA, MICAELA — INTEL, CHITRÉ
1562. VEGA P., VIODELDA DE — ESC. JUAN. T. DEL BUSTO, CHITRÉ
1563. VEGA, ZOBEIDA — ESC. NICANOR VILLALAZ, LOS SANTOS
1564. VEGERANO, ERNESTINA — CONTRALORÍA, CHITRÉ
1565. VELARDE, DARIA DE — CORREOS, CHITRÉ
1566. VELARDE, LUS GRACIELA DE — REGISTRO CIVIL, CHITRÉ
1567. VELASCO, JUANA — P. CICLO SECUNDARIO, GUARARÉ
1568. VELASCO, NELLY — ESC. P. PORRAS, LAS TABLAS
1569. VELASCO, TOMÁS — INTEL, LAS TABLAS
1570. VELASQUEZ, ARQUIMEDES — ESC. NICANOR VILLALAZ, LOS SANTOS
1571. VERA, GLORIA DE — INST. C. S. DE VILLALAZ, LOS SANTOS
1572. VERA, MAXIMINA DE — C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
1573. VERGARA, ALCIBIADES — ESC. JUANA VERNAZA, GUARARÉ
1574. VERGARA, ALEJANDRO — MIDA, LAS TABLAS
1575. VERGARA, ALEX — C. M. M. T. R., LAS TABLAS
1576. VERGARA, ANA JULIA — P. C. SEC. DE GUARARÉ
1577. VERGARA, ARGELIS DE — IRHE, LAS TABLAS
1578. VERGARA, ASTEVIA — C. M. M. T. R., LAS TABLAS
1579. VERGARA, CARLOS — ESC. JUANA VERNAZA, GUARARÉ
1580. VERGARA, DAISY DE — ESC. H. P. TELLO, CHITRÉ
1581. VERGARA C., DALYS E. — TRIB. ELECTORAL, LAS TABLAS
1582. VERGARA, DARINEL — ESC. CLAUDIO, VÁSQUEZ, LAS TABLAS
1583. VERGARA, DIDIA M. DE — GOBERNACIÓN, LAS TABLAS
1584. VERGARA, DILSA DE — INGRESOS, LAS TABLAS
1585. VERGARA DIMAS A. — GOBERNACIÓN, LAS TABLAS
1586. VERGARA, DIONISIO — ESC. P. PORRAS, L. TABLAS
1587. VERGARA, DORIS M. — CORREOS, LAS TABLAS
1588. VERGARA, EDGARDO — IDAAN, LAS TABLAS
1589. VERGARA, EDDWAR — INTEL, LAS TABLAS
1590. VERGARA, EMILIO — MIVI, LAS TABLAS

1591. VERGARA, ERNESTO	MIDA, LAS TABLAS
1592. VERGARA, EUCLIDES	IPTA, LOS SANTOS
1593. VERGARA, GRACIELA	INTEL, LAS TABLAS
1594. VERGARA, HERNAN	COOP. EDUC. SANTEÑO, LAS TABLAS
1595. VERGARA M., HORACIO A.	INTEL, LAS TABLAS
1596. VERGARA, IRMA DE	C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
1597. VERGARA, JORGE ALBERTO	SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
1598. VERGARA, JUAN	C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
1599. VERGARA, LIBRADA	IPTA, LOS SANTOS
1600. VERGARA, MARIA E. DE	CAJA DE AHORROS, CHITRÉ
1601. VERGARA, MAXIMINO	IPACOOP, LAS TABLAS
1602. VERGARA, MIRIN DE	B. D. A., LAS TABLAS
1603. VERGARA, NEYLA	ALCALDÍA, LAS TABLAS
1604. VERGARA, PAULA	ESC. P. PORRAS, LAS TABLAS
1605. VERGARA, RAMIRO	SEGURO SOCIAL, LAS TABLAS
1606. VERGARA, REINALDO	B. D. A., LAS TABLAS
1607. VERGARA, RITA DE	ESC. JUANA VERNAZA, GUARARÉ
1608. VERGARA, SONIA E. DE	ORG. ELECTORAL, LAS TABLAS
1609. VERGARA, VIODELDA	IPTA, LOS SANTOS
1610. VIANE, MARISOL	IPTA, LOS SANTOS
1611. VUDAL P., HÉCTOR A.	MIN. DE TRABAJO, LAS TABLAS
1612. VILLALAZ, AIDA	C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
1613. VILLALAZ, CARLOS A.	GOBERNACIÓN, CHITRÉ
1614. VILLALAZ, DALYS O. DE	C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
1615. VILLALAZ, DIANA	IFARHU, CHITRÉ
1616. VILLALAZ A., ELIAS	B. D. A., CHITRÉ
1617. VILLALAZ, EUCLIDES	MIDA, CHITRÉ
1618. VILLALAZ, GILBERTO	MIVI, CHITRÉ
1619. VILLALBA, AURA E.	C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
1620. VILLALOBOS, ANA DE	INTEL, CHITRÉ
1621. VILLALOBOS, JOSÉ F.	INGRESOS, LAS TABLAS
1622. VILLARREAL, AMARILIN DE	CONTRALORÍA, CHITRÉ
1623. VILLARREAL, ANA M. DE	ESC. JUANA VERNAZA, GUARARÉ
1624. VILLARREAL, BELGICA	IPACOOP, LAS TABLAS
1625. VILLARREAL, CARLOS	CORREOS, CHITRÉ
1626. VILLARREAL, DALYS DE	C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
1627. VILLARREAL, DONALDO	C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
1628. VILLARREAL, ELIECER	ORG. ELECTORAL, LOS SANTOS.
1629. VILLARREAL, EZEQUIEL	C. M. M. T. R., LAS TABLAS
1630. VILLARREAL, FABIO	IPTA., LOS SANTOS
1631. VILLARREAL, FELICIA DE	ESC. H. P. TELLO, CHITRÉ
1632. VILLARREAL, FERMINA	D. PROV. DE EDUC., CHITRÉ
1633. VILLARREAL, FRANCISCO	SEGURO SOCIAL, LAS TABLAS
1634. VILLARREAL, FULVIA DE	ESC. NICANOR VILLALAZ, LOS SANTOS.
1635. VILLARREAL, GERMAN	INTEL, CHITRÉ
1636. VILLARREAL, GLORIA	INST. C. S. DE VILLARREAL, LOS SANTOS
1637. VILLARREAL, HÉCTOR	C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
1638. VILLARREAL, HÉCTOR	MIVI, CHITRÉ
1639. VILLARREAL, HERIBERTO	IPTA, LOS SANTOS
1640. VILLARREAL, JULIO	M. O. P., LAS TABLAS
1641. VILLARREAL, LEIDYS	IPTA, LOS SANTOS
1642. VILLARREAL, LUIS	IPTA, LOS SANTOS
1643. VILLARREAL, MARGARITA DE	ESC. H. PEREZ TELLO, CHITRÉ
1644. VILLARREAL, MARIA DE	INTEL, LAS TABLAS
1645. VILLARREAL, MARIA DEL C.	GOBERNACIÓN, LAS TABLAS
1646. VILLARREAL, MIRIAM	C. J. D. CRESPO, CHITRÉ
1647. VILLARREAL, MIXI	MIDA, CHITRÉ
1648. VILLARREAL, NORIS	MIDA, LAS TABLAS
1649. VILLARREAL, ROSA DE	ESC. TOMÁS HERRERA CHITRÉ
1650. VILLARREAL, REYNALDO H.	MIDA, CHITRÉ
1651. VILLARREAL, SALVADORA DE	C. M. M. T. R., LAS TABLAS
1652. VILLARREAL, VIELKA DE	ESC. TOMÁS HERRERA, CHITRÉ
1653. VINDA, ABDIEL	P. CICLO SECUNDARIO, GUARARÉ
1654. WALTERS, CARLOS	I. P. T. A., LOS SANTOS
1655. YANGUEZ, SEBASTIÁN	INTEL, CHITRÉ

1656. YAÑEZ, MIGUEL	C. M. M. T. R., LAS TABLAS
1657. YEE M., CARLOS E.	INGRESOS, LAS TABLAS

-Z-

1658. ZAMBRANO, AGUSTIN	CORREOS, LAS TABLAS
1659. ZAMBRANO R., ELENA	SEGURO SOCIAL, CHITRÉ
1660. ZAMBRANO, GABRIEL	ESC. M. VQUEZ, SANTO DOMINGO
1661. ZAMBRANO, KENIA H. DE	ESC. M. VQUEZ, SANTO DOMINGO
1662. ZAPATA, OMAR	IPACOOP, LAS TABLAS
1663. ZARZAVILLA, DIMAS	IPACOOP, LAS TABLAS
1664. ZARZAVILLA, HERMENEGILDO	COL. SAN FCO. DE ASIS, LAS TABLAS
1665. ZARZAVILLA, PEDRO	INTEL, LAS TABLAS

En consecuencia, el Tribunal Superior, declaró electos como miembros del Jurado de Conciencia a los ciudadanos que componen la lista anterior, para el período que comprende el año mil novecientos noventa y seis (1996). No siendo otro el objeto de la reunión, se dio por terminada y se procedió a firmar el Acuerdo para su vigencia.

(fdo.) DULIO O. ARROCHA A.
Presidente

(fdo.) MANUEL BATISTA S.
Vicepresidente

(fdo.) CESAR H. MORCILLO R.
Suplente

(fdo.) DELSA I. VEGA DE HERRERA
Secretaria

FE DE ERRATA

Publicamos seguidamente dos (2) resoluciones del presente mes que no fueron incorporadas, en el lugar que les corresponde dentro del Registro Judicial, por lo que solicitamos disculpas.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR LA FIRMA ARIAS, ALEMÁN Y MORA, EN REPRESENTACIÓN DE ASTILLEROS BRASWELL INTERNATIONAL, S. A., CONTRA LA SENTENCIA DE 24 DE MAYO DE 1995, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: HENRY KOURANY -VS- ASTILLEROS BRASWELL INTERNATIONAL, S. A. Y/O ASTILLEROS BALBOA, S. A. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA LABORAL.

VISTOS:

El licenciado Alejandro Watson, en representación de Henry Kourany, ha presentado escrito por medio del cual solicita aclaración de la Sentencia de 9 de noviembre de 1995, mediante la cual la Sala Tercera-Laboral de la Corte Suprema de Justicia no casó la Sentencia de 24 de mayo de 1995, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo dentro del proceso laboral promovido por **HENRY KOURANY** contra **ASTILLEROS BRASWELL INTERNATIONAL, S. A. y/o ASTILLEROS BALBOA, S. A.** En su escrito el apoderado judicial de Henry Kourany pide que se fije las costas de segunda instancia y las consecuentes del recurso de casación, y que se condene a la empresa demandada al pago de la jornada extraordinaria solicitada, con los respectivos recargos de ley (artículos 169 y 170 del Código de Trabajo).

El apoderado judicial del demandante manifiesta en su solicitud que la Sala Tercera (Laboral) de la Corte Suprema de Justicia, omitió la necesaria condena en costas, tal cual lo exige el artículo 890 del Código de Trabajo, y al igual que el Tribunal Superior de Trabajo, tampoco fijó las costas de segunda instancia. Solicitó además, que en base al artículo 931, en concordancia con el artículo 535 del Código de Trabajo, se condene a la empresa demandada al pago de la jornada extraordinaria por la suma de US$2,912.68, solicitada al juez de primera instancia, quien negó dicha condena, y a los Tribunales Superior de Trabajo y de Casación, quienes no se pronunciaron al respecto.

Por otra parte el apoderado de la parte demandada manifestó que es improcedente la condena en costas porque en Sentencia de 24 de mayo de 1995, el Tribunal Superior de Trabajo decidió mantener las costas en el veinte por ciento (20%) para ambas instancias, por lo cual no se puede revisar tal resolución a través de una aclaración de sentencia. En relación con este punto citó al Doctor Jorge Fábrega, quien en su obra "Derecho Procesal de Trabajo" expresó que la Corte ha resuelto que un fallo suyo que no casa el de segunda instancia no es susceptible de aclaración.

También alegó que acceder a lo solicitado por la parte demandante en relación al pago de jornadas extraordinarias sería una revisión de aspectos discutidos, revisados y desestimados en la primera y segunda instancia, y a los cuales se refirió la Sala en la sentencia cuya aclaración se solicita de la siguiente manera: "el casacionista invoca supuestos errores en la estimación de las pruebas incurridas por el juzgador de segunda instancia, cuestión que no es permitida en el recurso de casación laboral porque al hacer uso de este medio extraordinario de impugnación sólo es posible esgrimir errores in iudicando o de fondo y no errores in procedendo o de forma, de acuerdo a lo que establece el artículo 928 del Código Laboral y así lo ha dicho reiterada jurisprudencia de esta Corporación de Justicia."

La presente solicitud de aclaración de sentencia no puede resolverse favorablemente, en acatamiento a lo preceptuado en los artículos 909 y 977 del Código de Trabajo, aplicables en casación en forma supletoria tal como lo expresó

este Tribunal de Casación Laboral en resolución de 26 de octubre de 1990 (Registro Judicial de octubre de 1990, pág. 298), ya que no existe ninguna norma legal que de manera expresa se refiera a ello en casación. Los artículos 909 y 977 del Código de Trabajo son del tenor siguiente:

> "Artículo 909. Se establecen los siguientes recursos:
> ...
> Sin perjuicio de lo anterior, los autos y sentencias de segunda instancia admiten aclaración cuando la parte resolutiva sea contradictoria o ambigua, siempre **y cuando se trate de autos o sentencias que hayan revocado o reformado los de primera instancia**, o de autos y sentencias de única instancia."
>
> "Artículo 977. La sentencia de segunda instancia sólo admite recurso de casación, con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo IV, del Título VIII, de este Libro. Admite también aclaración de los puntos obscuros de la parte resolutiva, ampliación o modificación de frutos, réditos, perjuicios o costas, **cuando revoque la sentencia de primera instancia**." (Acentúa la Sala).

De lo expuesto se concluye que, aplicadas supletoriamente, estas normas no permiten que se aclare la sentencia de casación de 9 de noviembre de 1995, en virtud de que la misma no casó, o sea que no reformó ni revocó la sentencia dictada el 24 de mayo de 1995 por el Tribunal Superior de Trabajo.

Por consiguiente, la Sala Tercera-Laboral de la Corte Suprema de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NIEGA la solicitud de aclaración de sentencia presentada por el licenciado Alejandro Watson en representación de HENRY KOURANY.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE ICAZA, GONZÁLEZ-RUIZ & ALEMÁN, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE IMPORTADORA DE PLOMERÍA, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 213-4059 DEL 1° DE NOVIEMBRE DE 1993, DICTADA POR EL ADMINISTRADOR REGIONAL DE INGRESOS DE LA PROVINCIA DE PANAMÁ, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA.

VISTOS:

La firma forense Icaza, González-Ruiz & Alemán, actuando en nombre y representación de IMPORTADORA DE PLOMERÍA, S. A. interpuso ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción para que se declare nulas, por ilegales, la Resolución N° 213-4860 del 21 de diciembre de 1993, en la parte relativa al rubro **"gastos de representación"**, expedida por la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá, los actos confirmatorios y para que se haga otras declaraciones.

De acuerdo con los hechos de la demanda, la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá examinó las declaraciones de rentas hechas por IMPORTADORA DE PLOMERÍA, S. A. correspondientes a los años de 1990 y 1991 y, como consecuencia de dicha revisión, dictó la Resolución N° 213-4059 del 1° de noviembre de 1993, en la cual objetó la deducibilidad de la suma de treinta y seis mil balboas (B/.36.000.00) en concepto de "gastos de representación", con

fundamento en el artículo 5 de la Ley N° 31 del 30 de diciembre de 1991, que adiciona los literales a y b del artículo 698 del Código Fiscal, y señaló las sumas adicionales que en concepto de impuesto
sobre la renta debe pagar Importadora de Plomería, S. A. a favor del Tesoro Nacional.

DISPOSICIONES VIOLADAS Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN

En la demanda se cita como infringidos los artículos 40 y 5 de la Ley N° 31 del 30 de diciembre de 1991. El citado artículo 40 establece que dicha Ley "comenzará a regir a partir del 31 de diciembre de 1991" y, en opinión de la demandante, resultó violado porque la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá aplicó retroactivamente sus disposiciones, a pesar de que el legislador no le dio tal carácter a estas normas, con excepción del artículo 7 de la misma Ley.

Con relación al artículo 5, esta norma es del contenido siguiente:

"Artículo 5. Se adiciona al artículo 698 del Código Fiscal, lo siguiente:

Artículo 698.
...
No obstante, el contribuyente no podrá deducir las siguientes partidas sino en el período fiscal en que efectivamente las pague:

a) En el caso de que el contribuyente sea persona jurídica, los gastos deducibles en que incurra frente a sus directores, dignatarios, ejecutivos y accionistas o frente a los cónyuges o parientes de tales personas dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, o frente a otras personas jurídicas subsidiarias del contribuyente o afiliadas a éste.

b). ...
Las normas contenidas en el párrafo segundo y siguientes de este artículo no son aplicables en el caso de que los contribuyentes a que ellas se refieren sigan el mismo sistema habitual de contabilidad y registren las partidas de que se trate en el mismo período fiscal."

En el concepto de la infracción la apoderada de la demandante expresa que, al expedir la liquidación adicional en contra de su representada, la Administración Regional de Ingresos de Panamá pretende aplicar el artículo 5 de la Ley N° 31 de 1991 a una situación que se dio con anterioridad a la entrada en vigencia de dicha Ley. Si bien el gasto de representación deducido por IMPORTADORA DE PLOMERÍA, S. A., en su declaración de renta de 1991, fue producto de asientos de diario registrados en los libros del contribuyente el día 31 de diciembre de 1991, no implica que fue una decisión tomada en esa fecha.

La Administración Regional de Ingresos pretende justificar su posición sosteniendo la tesis de que en el caso de un período fiscal normal de un contribuyente, la obligación tributaria nace el último día del año calendario y, por lo tanto, la ley aplicable es la vigente en el momento del nacimiento de la obligación tributaria. En consecuencia, la Ley N° 31 de 1991, en base a su artículo 40, rige a partir del 31 de diciembre de 1991, precisamente el último día del período fiscal.

En la demanda también se menciona como violado el artículo 698 del Código Fiscal, antes de ser adicionado por el artículo 5 de la Ley N° 31 de 1991, que expresaba lo siguiente:

"Artículo 698: Cuando por cualquier causa el contribuyente deje de deducir gastos correspondientes a un (1) año gravable, éstos no podrán deducirse de la renta de ningún año posterior. Se exceptúan los gastos que por su propia naturaleza no fueran determinables con

exactitud en el año en que debieron ser deducidos. En este caso, el gasto puede ser deducido únicamente en el año en que se determine el monto exacto del mismo."

A juicio de la demandante, la violación de la norma transcrita se dio porque la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá, al expedir la resolución impugnada, pretende aplicar el texto del artículo 698 del Código Fiscal tal y como fue adicionado y modificado por el artículo 5 de la Ley N° 31 de 1991, a una situación que se dio con anterioridad a la entrada en vigencia de la mencionada Ley. La entidad demandada debe aplicar el texto anterior del artículo 698 del Código Fiscal, por tratarse de una situación que se dio con anterioridad a la entrada en vigencia de la mencionada Ley N° 31 de 1991.

Mediante Nota N° 213-L-970 del 13 de diciembre de 1994, la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá remitió su informe de conducta (fs. 47-53), mientras que la Procuradora de la Administración Suplente contestó la demanda mediante la Vista N° 25 de 19 de enero de 1995 (fs. 54-68). Resulta interesante citar, a manera de ilustración, la parte pertinente de la aludida Vista Fiscal, en la cual se aprecian algunas de las razones expuestas ante la Asamblea Legislativa por el Dr. Mario Galindo, en su calidad de ex-Ministro de Hacienda y Tesoro, que justificaban la modificación del artículo 698 del Código Fiscal:

"El gasto deducible es un concepto que se maneja en Derecho Fiscal y representa las sumas que un contribuyente puede detraer o restar de su renta gravable, de su renta bruta, para llegar entonces a la renta gravable, a la cual se le aplica el impuesto. Son simple y llanamente sumas que el contribuyente puede, entonces, restar, deducir, detraer de su renta bruta para llegar al concepto de renta gravable la que entonces termina gravada con el impuesto de que se trate ...

Hay dos Sistemas de Contabilidad, un Sistema de Caja en el que los contribuyentes declaran como ingresos lo que realmente reciben, lo que le entra físicamente en la Caja y gastos deducibles a aquellos que pagan, aquellos que realmente erogan lo que sale de la Caja. Ese Sistema de Contabilidad que se llama de Caja es perfectamente legítimo. Hay otro Sistema de Contabilidad que le denominan acumulado o devengado, y es el que le permite al contribuyente hacer deducciones en concepto de gastos deducibles cuando ha contraído la obligación de pagar, pero sin que haga efectivamente el pago. Vamos a ver un ejemplo. Yo soy un contribuyente que tengo tomado en arrendamiento un local donde tengo un negocio. Si yo tengo el Sistema de Contabilidad de Caja, yo nada más que puedo deducir los alquileres cuando, real y verdaderamente, los pague. Me puedo retraer en el pago de la renta, digamos, dos o tres meses; pero ya no puedo deducirlos, aunque debo los alquileres, no los puedo deducir; porque mi Sistema de Contabilidad es de Caja y solamente deduzco los alquileres cuando realmente los pague. Ese es el Sistema de Caja.

En el Sistema de Devengado, yo puedo deducir el alquiler cuando tengo que deducir el alquiler cuando tengo que hacer el pago, aunque no lo haga; cuando he incurrido en la obligación de pagar, aunque no pague. Esa es la diferencia entre los dos sistemas. Qué hemos descubierto en el Ministerio de Hacienda? Que, por ejemplo, un contribuyente tiene el Sistema de Contabilidad de Devengado, o sea, deduce el gasto, aunque, de hecho, no haga erogación. Entonces, se crean situaciones en las que el contribuyente A tiene el Sistema de Devengado y se ha obligado a pagarle una suma al contribuyente a que pertenece al mismo grupo. Vamos a decir, incluso, para seguir con el ejemplo de locales en arrendamiento, que el contribuyente B es dueño de un local; se lo da en arrendamiento A, el contribuyente A incurre en la obligación de pagarle ese alquiler, porque va incurriendo

mensualmente en la obligación de pagar, aunque no la pague. Entonces, ese contribuyente arrendatario del local deduce el gasto que representa para él el pago de arrendamiento. Lo deduce en el momento en que incurre de pagar aunque no pague. Qué ocurre con el contribuyente dueño del local? Ese tiene un Sistema de Contabilidad distinto, tiene el Sistema de Caja, y él no declara Renta gravable, sino cuando realmente le pagan el alquiler. Y de esa manera, este sistema significa para los contribuyentes que forman parte de un mismo grupo, el que uno crea un gasto deducible, y de esa manera merma el monto de su renta gravable. Y el otro contribuyente, como no recibe el pago del alquiler, no declara y también de esa manera merma el monto de sus ingresos. Y por ese Sistema se produce, yo quiero calificarlo más de elusión fiscal y no de evasión fiscal; y esta norma lo que pretende es cerrar esa brecha." (Fs. 10-12).

CONSIDERACIONES DE LA SALA TERCERA

Al resolver el fondo de la presente controversia, la Sala estima que le asiste la razón a la demandante. En efecto, al resolver la acción de inconstitucionalidad interpuesta por los abogados Jorge Hernán Rubio, Ricardo Alberto Eskildsen y otros, contra el artículo 7 de la Ley N° 31 del 30 de diciembre de 1991, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia tuvo la oportunidad de referirse al problema de la aplicación de las tarifas establecidas en dicha norma al período fiscal de 1991 para el cálculo y pago del impuesto sobre la renta. En esa oportunidad, dicha Corporación de Justicia dictó la Sentencia del 25 de septiembre de 1992 en la cual concluyó, que la aplicación de las tarifas a que se refería el citado artículo 7 al período fiscal de 1991, implicaba ciertamente dar efectos retroactivo a esa disposición. Pero veamos para mayor ilustración, la parte pertinente de ese fallo:

"... el problema se plantea frente a dos aspectos: En primer lugar, si la disposición legal, que es de orden público, cumple con el mandato constitucional en el cual es obligante, para producir efectos retroactivo, consignarlo en la misma ley; en segundo lugar, en caso de considerarse que no existe expresamente la retroactividad, si efectivamente esta ley, que entró en vigencia el 31 de diciembre de 1991, es aplicable a la renta gravable que se extiende del 1° de enero al 31 de diciembre de 1991, por efectos retroactivos, o si, por el contrario, su vigencia se inicia el 31 de diciembre de 1991 y el cobro de la tarifa allí señalada se realiza en función de que el impuesto de renta se produce al finalizar el año, esto es, a las doce de la noche de ese día 31 de diciembre, por lo que nada tiene que ver con la retroactividad.

El texto de la norma expresamente establece "las personas jurídicas pagarán por su renta neta gravable del año fiscal de 1991 ...". De su redacción pudiera surgir la duda si el legislador le da a esta norma el carácter retroactivo a que se refiere el artículo 43 de la carta fundamental. La verdad es que le legislador le está dando carácter retroactivo a esta disposición, ya que no, en otra forma, pudiera entenderse la transcripción anterior que ordena a las personas jurídicas pagar su renta gravable del año fiscal de 1991, de acuerdo con la tarifa allí establecida. Como anteriormente se ha expresado, la retroactividad no es más que la aplicación de la norma a hechos pasados cuando ella no existía y, por lo tanto, si en la disposición atacada se ordena que se aplique al año fiscal de 1991 sin distinción, se cumple con el mandato del artículo 43 constitucional cuando expresa que tendrá efecto o vigencia sobre una situación que se inicia el 1° de enero y termina el 31 de diciembre de 1991.

La norma atacada como inconstitucional, por infractora del artículo 43 de la Constitución Política de la República, tal como sostiene la demandante, no lo es por las razones valiosas que exponen el señor Procurador General de la Nación y el Dr. Mario J. Galindo H., sino

porque se está frente a una norma de orden público en donde se expresa su alcance al año fiscal de 1991."

De acuerdo con la interpretación del Pleno de la Corte, la aplicación del artículo 7 de la Ley N° 31 de 1991 a todo el período fiscal de 1991 implica darle efectos retroactivos a esa disposición, por cuanto viene a regular situaciones jurídicas ocurridas con anterioridad a su vigencia.

En el presente caso, no cabe duda de que la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá también aplicó retroactivamente el artículo 5 de la Ley N° 31 del 31 de diciembre de 1991, al fundamentar las resoluciones acusadas en dicha norma y expedir, en consecuencia, una liquidación adicional contra IMPORTADORA DE PLOMERÍA, S. A., en la cual se objeta la deducibilidad de la suma de treinta y seis mil balboas (B/.36.000.00) en concepto de gastos de representación, correspondientes al período fiscal de 1991.

La norma en comento fue aplicada a todo el período fiscal de 1991, a pesar de que la misma no dispuso expresamente que tendría efectos retroactivos y de que el artículo 40 de la Ley N° 31 de 1991, claramente establece que entraría a regir a partir del 31 de diciembre de ese mismo año. Tal como afirma la demandante, el artículo 5 en cita se ha aplicado a una situación ocurrida con anterioridad a su vigencia, es decir, a los pagos del impuesto sobre la renta relativos al período corriente de 1991, hechos en base a la declaración estimatoria a la que se refiere el tercer párrafo del artículo 310 del Código Fiscal.

Por los mismos motivos, la Sala estima que se ha violado el artículo 40 de la Ley N° 31 de 1991 y, en cuanto al contenido del artículo 698 del Código Fiscal antes de ser modificado por la precitada Ley, resultó infringido en forma directa por omisión, al no aplicarse su texto para decidir si eran o no deducibles las sumas objetadas por la entidad demandada mediante la Resolución N° 213-4059 del 1° de noviembre de 1993.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECLARA QUE SON ILEGALES la Resolución N° 213-4860 del 21 de diciembre de 1993, en lo relativo al rubro "gastos de representación", expedida por la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Panamá y los actos confirmatorios en lo que concierne al mismo rubro y en consecuencia es un gasto deducible de la renta declarada de 1991, por IMPORTADORA DE PLOMERÍA, S. A., la partida objetada en la Resolución declarada ilegal bajo el rubro "gastos de representación".

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=